CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1998

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

LICDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK
PRESIDENTE

DR. ELIGIO A. SALAS — LICDO. JOSÉ A. TROYANO

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

DR. FABIÁN A. ECHEVERS
PRESIDENTE

LICDO. HUMBERTO A. COLLADO T.
SUPLENTE ENCARGADO — LICDA. GRACIELA J. DIXON C.

LICDO. MARIANO E. HERRERA E.
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA — DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK — DR. FABIÁN A. ECHEVERS

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

ÍNDICE

ÍNDICE I

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALCIDES PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE ROLANDO ESPINO VERGARA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RUBÉN MONCADA LUNA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARCOS JUSTINE FERNÁNDEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° AV-156 DE 24 DE JULIO DE 1997, EXPEDIDO POR EL JUZGADO NOVENO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . . 3

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA FUENTES Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ABATTOIR DE AGUADULCE, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 3 DE FEBRERO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 8

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE COLORANTES Y QUÍMICOS, S. A. (COLORQUIM), CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-1 DE 3 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 1. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 10

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE BERNABÉ TALLA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO PJ-17-98, EMITIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 17. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 10

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA ENDARA & MARRÉ EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD K MART INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LA RESOLUCIÓN S/N DE 10 DE FEBRERO DE 1998, EXPEDIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 12

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SILVIO GUERRA MORALES, EN REPRESENTACIÓN DEL DOCTOR JOSÉ RIGOBERTO ACEVEDO CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 31 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR EL PLENO DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 16

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICDO. LUIS A. MORENO EN REPRESENTACIÓN DE HOSPITAL CENTRO MÉDICO CARIBE, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 3 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9 DE LA PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 17

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO DAMASO DÍAZ D., EN REPRESENTACIÓN DE MARCO L. DÍAZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE

TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 20

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA WATSON & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE DESARROLLO GOLF CORONADO, S. A. CONTRA LAS ORDENES DE HACER Y NO HACER EMITIDAS POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA MEDIANTE NOTA N° 496-D.L., DE 19 DE MARZO DE 1998 Y EL RESUELTO N° 104-R-54- DE 8 DE ABRIL DE 1998. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 23

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE RAQUEL RAFAELA AROSEMENA BEITÍA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 49-DTLO. DE 10 FEBRERO DE 1998, DICTADA POR LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 24

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROBERTO LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ I. FUENTES, ALEX SAAVEDRA Y WILLIAMS A. QUIROZ CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL EDICTO #29 EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, MEDIANTE EL CUAL NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA #15-DGT-53-98, DE 2 DE MARZO DE 1998. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 24

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR LA FIRMA FORENSE AROSEMENA Y AROSEMENA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DEL 19 DE FEBRERO DE 1998, EXPEDIDA POR EL JUZGADO PRIMERO SECCIONAL DE MENORES DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 29

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE SERGEI PLOTNIKOFF DE LA GUARDIA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 16 DE ENERO DE 1998, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 31

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA PATTON, MORENO & ASVAT, EN REPRESENTACIÓN DE GOLD MILLS DE PANAMÁ, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 628 DE 23 DE OCTUBRE DE 1997, EMITIDO POR LA JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 33

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. RODOLFO ALBERTO NAVARRO VEGA, EN REPRESENTACIÓN DE OSMAN ALEXIS HERNÁNDEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 19 DE DICIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 37

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. JOSÉ DOMINGO PRESCILLA, EN REPRESENTACIÓN DE URCINIO CISNERO RODRÍGUEZ, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° 10 DE 3 DE ABRIL DE 1998, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 8, CON SEDE EN AGUADULCE. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 38

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, EN REPRESENTACIÓN DE FERNANDO JAEN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 33/DRTPC/97, DE LA DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE COCLÉ, Y LA RESOLUCIÓN CONFIRMATORIA N° DM-04/98, DE 28 DE ENERO DE 1998, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y

BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 39

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS BARRANCOS & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ARCE AVÍCOLA, S. A., CONTRA DE LA SENTENCIA N° 129-JHD-13-98 DE 30 DE ENERO DE 1998 PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 13. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 40

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICDA. MICHELLE I. DUEÑAS, EN REPRESENTACIÓN DE HORACIO FRANCISCO ARAÚZ ORTIZ, NEDELCA GISELA ARAÚZ ORTIZ, JUAN FRANCISCO ARAÚZ ORTIZ Y ELSSIE EMMY ORTIZ DE ARAÚZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 42

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, CONTRA LA ORDEN EXPEDIDA POR LA JUEZ DECIMOQUINTA DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 44

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA LIZA MARIE JAEN, EN REPRESENTACIÓN DE JOSEFA HAYDEE TREJOS DE JUSTINIANI, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-4 DEL 13 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 4 (PROCESO LABORAL: CENTRO MÉDICO GENERAL VS. ALEX MUÑOZ.) MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 46

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ GREGORIO DELGADO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 16 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 48

RECURSO DE HABEAS CORPUS 50

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN JOSÉ RUEDA LINARES CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 50

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICTOR HILARIO CHALES CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . . 51

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES ROGER LÓPEZ, SATURNINO VÁSQUEZ, ADALBERTO CASAS Y JUAN CARLOS LLERENA CONTRA EL FISCAL CUARTO DE CIRCUITO DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 51

HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDILTRUDIS VALDESPINO LEZCANO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 52

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ENRIQUE DÍAZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . . 54

HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ASUNCIÓN SILVA RUDAS CONTRA LA FISCAL CUARTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

(1998). 55

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA ARQUIMEDES CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 57

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARIEL JESÚS YORIS SEGURA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 58

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARTÍN CAICEDO MARTÍNEZ A FAVOR DE CONCEPCIÓN OLIVARDÍA ROMERO CONTRA LA FISCAL QUINTA DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 59

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE RIASCOS RUÍZ CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 61

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO MANUEL BROWN ROSE CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . . 61

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO BOLAÑOS CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE PANAMÁ, MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . . 63

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO CASTILLO Y YUMA ALVALDO CASTILLO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 65

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ABEL CEDEÑO ESPINOZA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 66

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS MEQUECHO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 68

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORIEL FUENTES MONTENEGRO, JAIME RUIZ VARELA Y HÉCTOR SALAZAR VARELA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . . 68

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS OMAR APONTE CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 69

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GUIDO ALBERTO OROZCO VILLARRETA CONTRA LA HONORABLE MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON, SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 71

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 74

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LAURENCIO JAVIER DE GRACIA CONTRA LA FISCAL

PRIMERA DE CIRCUITO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 78

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTÓBAL A. CAÑIZALES M. CONTRA LA FISCAL PRIMERA DELEGADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 80

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALDO MANUEL VERGARA L. CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 84

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARGARITA JUDITH SANTANA CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO PENAL DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 85

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SEBASTIÁN ALEXIS MOJICA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 86

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS LOJA, AMERALDO CAMPOS Y NESTOR GUZMÁN CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 89

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HUMBERTO BALOY BADILLO CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 89

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO MARTÍNEZ H. CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 91

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALDO MANUEL VERGARA LÓPEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 91

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NICANOR PALACIO AGUILAR CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 92

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ENRIQUE RAMOS HERRERA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 93

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS DE JULIO CÉSAR AGUILAR DÍAZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . . 94

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARMANDO AGUILERA OJOS CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 95

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUVENCIO CASTILLO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 97

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO MILLER FRANCIS CONTRA EL DIRECTOR DE

LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 99

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO JORGE NAVARRO DELGADO CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 100

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR EDWIN H. LEÓN RODRÍGUEZ A FAVOR DE VIVIANA CECILIA FEIJO FLORES CONTRA LA FISCAL OCTAVA DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 101

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HUGO ALBERTO BARNETT SÁNCHEZ CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 101

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS POR EL LICENCIADO GERARDO CARRILLO A FAVOR DE RICARDO ALFREDO PETERS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 102

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADO A FAVOR DE CÉSAR AUGUSTO ROSAS EN CONTRA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 103

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YESSICA MEDINA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 104

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ILSA MORENO R. DE SÁNCHEZ CONTRA EL JUEZ SÉPTIMO DE CIRCUITO PENAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 106

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PORFIRIO PITTÍ BINS CONTRA LA FISCAL DE DROGAS DELEGADA DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 107

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CÉSAR ELÍAS PÉREZ CONTRA LA JUEZ SECCIONAL DE MENORES DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 109

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO ESQUIVEL CONTRA FISCAL DE CIRCUITO DE LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 111

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR MANUEL SANTOS CHANG Y JOHNNY SANTOS CHANG CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 112

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO A. SALVADOR CORNEJO CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 113

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCO A. PÉREZ NAVALO, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

. 115

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS CARLOS VALENCIA REID CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 117

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALBERTO ABADI BETESH CONTRA EL AGENTE DE INSTRUCCIÓN DELEGADO, ADSCRITO A LA FISCALÍA AUXILIAR. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 118

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER CEDEÑO AMADOR CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 120

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FABIO BLANDO PALACIOS CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 122

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GAMALIER GARCÍA VALENCIA, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 122

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS A. ATENCIO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 123

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GLADYS ALVAREZ DE ORTEGA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 124

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN MARTÍN BÓSQUEZ V. CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 126

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO CERRUD CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 128

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFREDO FEDERICO HOLT CONTRA EL FISCAL TERCERO DE CIRCUITO DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 129

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BERNARDO SÁNCHEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 131

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA A FAVOR DE LUIS CARLOS CHANDLER MIRANDA EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 133

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERMIN LEONIDAS MOJICA GARCÍA CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 133

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HUMBERTO BALOY BADILLO CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A.

TROYANO. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 135

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NATALIO JIMÉNEZ LASSO Y JAZMÍN CÉSPEDES CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 136

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANITA MAE KING DE BRYAN CONTRA LA JUEZ PRIMERA DE CIRCUITO PENAL DE SAN MIGUELITO, MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 138

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORMELIS TRUJILLO GONZÁLEZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DEL CIRCUITO DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 139

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YAZMINA YANET DOWMAN GÓMEZ CONTRA LA FISCAL ESPECIAL DE CIRCUITO CON SEDE EN ANCÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 141

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ENRIQUE ROY JIMÉNEZ TORRES CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 143

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ESTELA DEVIA CANO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 146

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 147

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. HÉCTOR CASTILLO RÍOS, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 7-DGT-53-95 DE 23 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 147

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL SEÑOR ART TIK FUNG CONTRA EL ARTÍCULO 24 DEL DECRETO DE GABINETE N° 109 DE 7 DE MAYO DE 1970. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 153

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO N° 297 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1997, PROMOVIDA POR EL FISCAL TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, CONTRA EL LICENCIADO SIDNEY SITTÓN URETA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 154

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO N° 194 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997, PROMOVIDA DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INSTAURADO POR EL LICENCIADO ADALIDES BATISTA, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR HERNANDO MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO N° 213-DRH, DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1997, EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 155

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO SIDNEY SITTON URETA, CONTRA LOS ARTÍCULOS 2309, 2310, 2311 Y 2313 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SALOMÓN HOMSANY ABADI Y OTROS. MAGISTRADA

PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 155

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO POR ÁLVARO GABRIEL GORMAZ TYPALDOS CONTRA LOS ARTÍCULOS 33, 34 Y 96 DE LA LEY #59 DE 29 DE JULIO DE 1996 POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS ENTIDADES ASEGURADORAS, ADMINISTRADORAS DE EMPRESAS Y CORREDORES O AJUSTADORES DE SEGUROS Y LA PROFESIÓN DE CORREDOR O PRODUCTOR DE SEGUROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 158

TRIBUNAL DE INSTANCIA 159

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ABILIO ROLANDO RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUCIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 3337 DE 31 DE OCTUBRE DE 1997, DICTADO POR EL JUEZ TERCERO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . 159

DENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO ROLANDO VILLALAZ CONTRA EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL Y LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 161

DEMANDA DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. SALVADOR SÁNCHEZ JORQUIERA EN REPRESENTACIÓN DE REFINERÍA PANAMÁ, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° PJ-9 DE 29 DE AGOSTO DE 1997 DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 165

INCIDENTE DE DESACATO DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE HELADOS LA ITALIANA, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA CARTA DE 4 DE FEBRERO DE 1998, EMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CARNAVAL DE PANAMÁ SALSA '98. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 166

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE HELADOS LA ITALIANA, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA CARTA DE 4 DE FEBRERO DE 1998, EMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CARNAVAL DE PANAMÁ SALSA '98. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . 167

QUEJA FORMULADA POR EL DOCTOR JOSÉ RIGOBERTO ACEVEDO C., JUEZ DÉCIMO TERCERO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, CONTRA LOS MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 168

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LCDO. FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE ABRAHAM DAVID MIZRACHI, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 20 DE FEBRERO DE 1998, PROFERIDO POR LOS MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 169

QUERELLA DE DESACATO PRESENTADA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 170

INCIDENTE DESACATO INTERPUESTO POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR HELADOS LA ITALIANA, S. A. CONTRA EL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO DEL COMUNICADO PROFERIDO POR LA JUNTA DEL CARNAVAL PANAMÁ SALSA 98. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 171

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR FABREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE HELADOS LA ITALIANA, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA CARTA DE 4 DE FEBRERO DE 1998, EMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CARNAVAL DE PANAMÁ SALSA 98. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 172

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALFONSO CRUZ KAY CONTRA LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTINUEVE, (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 172

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 174

ACLARACIÓN DE SENTENCIA 175

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) Y AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) LE SIGUE A AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 175

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL RECURRE EN CASACIÓN EN LA ACCIÓN DE SECUESTRO QUE LE SIGUE A BERASVAS, S. A. Y ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 176

APELACIONES 177

APELACIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. ELISEO NAVARRO CONTRA EL AUTO DEL 17 DE JULIO DE 1996, PROFERIDO POR EL REGISTRO PÚBLICO, POR LA CUAL SE NIEGA LA INSCRIPCIÓN DEL ASIENTO 7138 TOMO 247 DEL DIARIO POR LA CUAL SE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2503 DEL 3 DE MAYO DE 1996, DE LA NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, POR LA CUAL LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN CONDOMINIOS CORONADO (APRUCC) Y LA EMPRESA BIENES Y RAÍCES QUIJANO, S. A. CELEBRAN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA ASOCIACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 177

OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1996 DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCIÓN NÚMERO 3312 DEL TOMO 251 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 179

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 181

MOCHON Y METTOLA (SOCIEDAD DE HECHO) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A TOCHISA ZONA LIBRE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 181

ALFREDO MARCIAGA Y ARCADIA NÚÑEZ DE MARCIAGA RECURREN EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR ALFREDO MARCIAGA Y ARCADIA NÚÑEZ DE MARCIAGA CONTRA JOSÉ ANTONIO ESPINOZA CORDOVA Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 183

CLUB PACIFICO DE PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL LAUDO ARBITRAL QUE LE SIGUE A LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CINCO (5) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 183

BANCO GENERAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE MARDEN TORRIJOS HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 186

BILLITAL TRADING INC. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A ALFRED NICKBARTE Y HENRI SIMOND CLAUDE O SIMON CLAU HENRI. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 189

LEONCIO ELÍAS CASTILLO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE LE SIGUE A RAQUEL VALDES DE HERDON. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 194

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) Y AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) LE SIGUE A AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 198

CELEDONIO MONCAYO QUIRÓS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE REINHILDE MONSBERGER DE MONCAYO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 202

JOSÉ CENOBIO ARJONA, NAYLPA, S. A., VASE, S. A. ROMULO ARROCHA Y ODOARDO VÁSQUEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE JOSÉ CENOBIO ARJONA LE SIGUE A NAYLPA, S. A. VASE, S. A., ROMULO ARROCHA Y ODOARDO VÁSQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 202

JOSÉ MANUEL VARELA CLEMENT Y LUIS EDUARDO VARELA CLEMENT; ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE JOSÉ MANUEL VARELA CLEMENT Y EDUARDO VARELA CLEMENT LE SIGUE A FRANCES MOYER Y ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 205

MARIBEL GISELA ACEVEDO DE PASCUAL RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JUAN ALBERTO PASCUAL (M. P.). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 214

VIVECA MARISA HERRERA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ABELARDO ALFONSO JIMÉNEZ BOLAÑOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 224

VIOLA JEAN BRASSFIELD MORENO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LA NACIÓN (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 228

JOSUÉ LEVY LEVY RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A DESARROLLO VIZCAYA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . 231

GORDON DREXEL GRAHAM RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FINCA MARA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 233

WESTERN INSURANCE COMPANY INC. (WICO) Y ASEGURADORA ANCÓN, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A STERLING METRO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 238

FREDERICK FÉLIX SZYMANSKI RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A MIREYA CRUZ ESCARTÍN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 240

GERMÁN ENRIQUE REY URIBE RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE SIMULACIÓN PROMOVIDA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INTERPUESTO POR BANCO CAFETERO (PANAMÁ), S. A. CONTRA PANAMÁ PICTURE INC. (PANAPICTURE) Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 243

EMMA EVIANA ATONAIDAN BOBADILLA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE ELVIA ESPINO DE SANAD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 246

HILDA AURA BARAHONA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN A TÍTULO NACIONAL QUE LE SIGUE SAMUEL BARAHONA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 250

RUBÉN ANTONIO NORIEGA BARRÍA, PABLO NORIEGA BARRÍA, BRISEIDA MAREO NORIEGA BARRÍA, YOLANDA NORIEGA BARRÍA Y ÁNGELA NORIEGA BARRÍA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUEN A DÍDIMO NORIEGA BARRÍA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 258

OSCAR ANTONIO NAVARRO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 259

EL PANAMÁ REAL INVESTMENT CORP. RECURRE EN CASACIÓN EN LA MEDIDA CONSERVATORIA O DE PROTECCIÓN EN GENERAL QUE LE SIGUE A INMOBILIARIA GARZA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 265

RICARDO A. BLANCO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A REPUESTOS DRAGÓN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . . 266

JOSÉ DEL CARMEN SÁNCHEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS DEL USAID PANAMÁ, R. L. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 267

CONSUELO QUINTERO VÁSQUEZ DE ANGUIZOLA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE LE SIGUE ARABELLA EMMA ANGUIZOLA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 272

MARITA BARB DELGADO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MICHAEL BEIERTZ Y DIANA GIOVANA DÍAZ DE BEIERTZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 275

ENRIQUE GUEVARA BARBA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE A CLEMENTINA GOVEA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 276

PANAMEÑA DE CURTIDOS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO TOTAL PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR PANAMEÑA DE CURTIDOS CONTRA ALDO BERNARDINI, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 279

INVERSIONES DECASAL, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BLANCA DE CHASTAIN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 280

CECILIA INOCENCIA FLORES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SALA DE BELLEZA "BABY O ", S. A. Y/0 ETILVIA B. DE MOLINA Y/O MARTA B. MOLINA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 280

ISHAK BHIKU RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JAIME PENEDO MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 281

RECURSO DE HECHO 282

ENDARA & MARRE INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° AL/641/98 DEL 2 DE ABRIL DE 1998 DICTADA POR EL REGISTRO PÚBLICO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 282

TRIBUNAL DE INSTANCIA 284

MARITA BARB DELGADO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MICHAEL BEIERTZ Y DIANA GIOVANA DÍAZ DE BEIERTZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 284

HOTELERA EL PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE RICARDO A. LANDERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 286

AIDA CASTILLO VDA. DE SÁNCHEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A LA SUCESIÓN INTESTADA DE EUSTACIO CHICHACO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 287

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 295

AUTO APELADO 296

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD SEGUIDO A BALDOMIR KRISAJ A FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE LAS SOCIEDADES KREPORT INVESTMENT INC. Y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 296

SOLICITUD DE APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DISTINTA A LA DETENCIÓN PREVENTIVA, A FAVOR EMILIO ELIADES OLIVA LINARES, PROCESADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . . 297

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA FISCALÍA CUARTA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA DEVOLVER EL REVOLVER MARCA SMITH AND WESSON, QUE PERTENECE A ELÍAS MANUEL RIVERA MEDINA, ABSUELTO DEL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO PERJUICIO DE DAVID BONILLA BELTRÁN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 298

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 299

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ABRE CAUSA CRIMINAL CONTRA RICAUTE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO COMETIDO EN PERJUICIO DE FERNANDO FRANCO RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 299

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ABRE CAUSA PENAL CONTRA VICENTE WORREL BLIS, SINDICADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE ELVIS ALBERTO BONILLA HERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 301

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 302

SE ADMITE RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LUIS CARLOS VEGA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 303

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE JOSÉ HUMBERTO SOLÍS CIGARRUISTA Y RICARDO ALEXIS SOLÍS, SINDICADOS POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 303

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MANUEL CASTILLO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 304

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ELÍAS MANUEL ZORRILLA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LIBERTAD Y EL PUDOR SEXUAL EN PERJUICIO DE MIRIAM DEL CARMEN VALDÉS GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 305

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR LA FISCALÍA PRIMERA ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL QUE ABSUELVE A ELIZABETH CÓRDOBA POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 306

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A FAUSTO CAICEDO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 310

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DEMETRIO MUDARRA MENDOZA, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 313

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FELIPE CAMARGO, NIVALDO MADRIÑÁN APONTE, LUIS ANTONIO CÓRDOBA MORALES, LUCINO MIRANDA MORENO, ARCENIO ODA ALAÍN, ALFONSO MADRID Y OTROS, POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, EN PERJUICIO DE EDUARDO SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 315

PROCESO SEGUIDO A EDUARDO ALVAREZ SOLÍS, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE GERTRUDIS HERNÁNDEZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON CATÓN. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 320

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JACINTO OJO O JACINTO GONZÁLEZ, MAXIMINO GONZÁLEZ Y FELIPE DE JESÚS OJO, SINDICADOS POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL EN PERJUICIO DE PAULA GONZÁLEZ VALDÉS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 321

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO JORGE RODOLFO VERGARA ATENCIO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 323

SE ADMITE RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A CÉSAR ANEL PÉREZ MAGALLÓN POR DELITO DE HURTO DE AUTOMÓVIL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 324

PROCESO SEGUIDO A RODOLFO NELSON PÉREZ CASTILLERO Y WEN WEI YAU MAN WAY QIU, POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, EN PERJUICIO DE EULIHADES MUÑOZ DÍAZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 325

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A YAHIA MARMOUD ABDEL HAMID AMAENI. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 326

IMPEDIMENTO 326

EL MAGISTRADO HUMBERTO COLLADO SOLICITA SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ELIÉCER GARRIDO CORTEZ, JOSÉ ISABEL GARRIDO MORENO Y CARLOS ISAAC GARRIDO CORTEZ, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 326

SUMARIO CONTENTIVO DE LA DENUNCIA PENAL FORMULADA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, CONTRA LA LICENCIADA AIDELENA PEREIRA VELIZ, MAGISTRADA DEL TERCER TRIBUNAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 327

CALIFICACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO COLLADO, EN EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE YAHIA MARMOUD ABDEL HAMID ALMAENI. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 328

EL MAGISTRADO HUMBERTO A. COLLADO T. SOLICITA SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR EL LICENCIADO JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1996, PROFERIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 328

AUTO APELADO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA BINDO FRÍAS ARCIA POR EL DELITO GENÉRICO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE SIMÓN BOLÍVAR BARRERA BARBA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 329

QUERELLA 330

QUERELLA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL BUSH RÍOS, CONTRA CARLOS ICAZA, DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS, POR DELITO CONTRA EL HONOR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 330

PROCESO SEGUIDO A ANDRÉS ALMENDRAL, PROMOVIDA POR EL SEÑOR JOSUÉ LEVY LEVY. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 331

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 335

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR ABRAHAM CARLOS MORÓN, SANCIONADO POR DELITO DE ROBO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 335

RECURSO DE HECHO 337

RECURSO DE HECHO PROPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOSA C., DENTRO DEL INCIDENTE DE CONTROVERSIA INTERPUESTO POR NICOLÁS HUMBERTO LOMBARDO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 337

RECURSO DE REVISIÓN 338

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE HENRY LUIS BALTAZAR CABALLERO, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 338

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR NICOLÁS CAMARGO QUINTERO, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDUARDO WELLINGTON. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 339

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR ABELINO MARCEL SANTOS BEJARANO, SANCIONADO POR EL DELITO DE ROBO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . . 339

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR MARLON MARTÍNEZ L., SANCIONADO POR DELITO DE ROBO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 340

RECURSO DE REVISIÓN EN FAVOR DE ROSA TULIA MARTÍNEZ DE PARRADO, CONDENADO POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 341

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR GERARDO DOBARRO BELART, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA SALUD. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 342

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR SILVIO MOSQUERA LEUDO, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. (1998). 343

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JOSÉ DE LA CRUZ GARCÍA, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 344

RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR ÁNGEL MAZA SALAZAR, SANCIONADO POR DELITO DE HURTO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 345

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR LUIS ALTAMIRANO DELGADO, SANCIONADO A PENA DE PRISIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 346

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JOSÉ FÉLIX CASTILLO, SANCIONADO A PENA DE

PRISIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 347

LUIS OSCAR JARAMILLO RANGEL SOLICITA SE REVISE LA SENTENCIA QUE LO CONDENA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 349

RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR CARMEN ALEYDA DE LOS SANTOS ESCULTA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A HUMBERTO ELÍAS DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 349

SENTENCIA APELADA 350

PROCESO SEGUIDO A GERARDO DE LA ROSA POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RICARDO ADOLFO WELCH. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 350

PROCESO SEGUIDO A ALBERTO SITTÓN VEGA POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MILAGROS DEL CARMEN AYALA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 352

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSÉ BELADINO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, JESÚS MARÍA ZULETA BEDOYA Y JORGE ELIÉCER BERNAL GUZMÁN, SINDICADOS POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MANUEL VÁSQUEZ LÓPEZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 354

NEGOCIO PENAL SEGUIDO A RUFINO CEDEÑO SANJUR Y ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y ROBO COMETIDO EN PERJUICIO DE GUILLERMO CABALLERO SALDAÑA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 358

PROCESO SEGUIDO A JOSÉ ANTONIO JULIO MORALES POR EL HOMICIDIO DE SU HIJO, JOSÉ ANTONIO JULIO MOLINA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . . . 361

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RICARDO ARTURO GONZÁLEZ, EDGAR ASUNCIÓN ATENCIO GUTIÉRREZ Y NEREYDA YANETH ARAUZ CASASOLA, SINDICADOS POR DELITO DE HOMICIDIO Y ROBO EN PERJUICIO DE JOSÉ TORRES NEWBALD. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 363

PROCESO SEGUIDO A MIGUEL ÁNGEL GÓNDOLA GALVÁN, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO A RUFINA PÉREZ, PACIFICO GONZÁLEZ Y HERIBERTO GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998) 367

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN 369

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE ANTONIO JESÚS HOQUEE, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 369

FIANZA DE EXCARCELACIÓN SOLICITADA A FAVOR DE MELVIN ANTONIO SHIRLEY CUTHBERT SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE JORGE SEYMORE HAMILTON MENCHACA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 1998). 371

SOLICITUD DE FIANZA A FAVOR DE RUBÉN WALTERS POLO SINDICADO POR TENTATIVA DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO

(25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 373

TRIBUNAL DE INSTANCIA 375

DENUNCIA PRESENTADA POR MILTON VARGAS JURADO CONTRA NODIER JARAMILLO Y RICARDO NAVARRO JURADO, MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 375

SUMARIAS INSTRUIDAS CONTRA LUIS RAFAEL DE JANON SÁNCHEZ, LUCIANO CONTRERAS VARGAS E IVÁN AUGUSTO HARRIS YURGAQUI POR SUPUESTO DELITO CONTRA EL HONOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PERJUICIO DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 376

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD EN EL PROCESO SEGUIDO A BALDOMIR KRIZAJ A FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE LAS SOCIEDADES KREPORT INVESTMENTS INC. Y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 377

SUMARIAS SEGUIDAS A KATHIA LORENA GARCÍA VARELA Y EDUARDO BENITEZ ISTURAIN DIRECTORA Y SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR POR SUPUESTOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SEGÚN DENUNCIA INTERPUESTA POR MILTON VARGAS JURADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 378

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE HENRY LUIS BALTAZAR CABALLERO, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 378

SUMARIO CONTENTIVO DE LA DENUNCIA PENAL FORMULADA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, CONTRA LA LICENCIADA AIDELENA PEREIRA VELIZ, MAGISTRADA DEL TERCER TRIBUNAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 379

RECURSO DE HECHO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A BALDOMIR KRIZAJ Y A EDITH CALVERA DE KRIZAJ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 382

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 384

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 385

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CORPORACIÓN DE ASESORES JURÍDICOS, EN REPRESENTACIÓN DE ÁLVARO FABIÁN MIRANDA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 32 DE 6 DE JUNIO DE 1997, EMITIDA POR EL FISCAL TERCERO DEL CIRCUITO DE COLÓN (ÁREA DE CRISTÓBAL), ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 385

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDILSA FLORES DE DE LA ROSA EN REPRESENTACIÓN DE NICACIA GARDIN BRACHO, FELICIANO BENEDI GARDIN Y CANDELARIA TUD GARDIN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 09-96 DE 5 DE FEBRERO DE 1996, EXPEDIDA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 385

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PEREIRA Y PEREIRA EN REPRESENTACIÓN DE DORIS ENEIDA ROMERO O. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DRP N° 298-95 DE 26 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 386

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BERNAL & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO A. ESPINOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DE 26 DE JUNIO DE 1997, EXPEDIDA POR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 393

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAMÓN QUINTO ZAMBRANO, EN REPRESENTACIÓN DE VILMA DE CEBALLOS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 40-98 DE 12 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 394

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ENDARA & MARRE EN REPRESENTACIÓN DE EULALIO BORDONES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N DE 14 DE FEBRERO DE 1998, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 394

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JUAN F. CORRO, EN REPRESENTACIÓN DE ROGELIO AUGUSTO CORRO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° DHR-555 DE 31 DE JUNIO DE 1997, EXPEDIDA POR LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 395

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LCDA. ALMA L. CORTÉS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ABDIEL CORTÉS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL N° 1784-96 DE 18 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 396

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO ELÍAS PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE JAIME RUIZ MADRID, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 15 DE OCTUBRE DE 1992, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN; LA SENTENCIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 400

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS E. CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE EUSTACIO VALDÉS RUBIO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD PARA EL PERÍODO 1997-2000, DEL 17 DE JUNIO DE 1997, SUSCRITO POR EL JURADO DE ELECCIÓN DE DECANA DE DICHA FACULTAD. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

(1998). 401

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SOFÍA J. COHEN EN REPRESENTACIÓN DE JAIME FÁBREGA QUELQUEJEU, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° AR-OR-04-317 DE 14 DE ABRIL DE 1997, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS, ZONA ORIENTAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, Y LA RESOLUCIÓN N° 704-04 23 DE 14 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 404

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. ROLANDO VILLALAZ EN REPRESENTACIÓN DE LUIS CARLOS CÓRDOBA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 05974 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA MINISTRA DE SALUD, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 405

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LCDA. MAGDA O. CEBALLOS, EN REPRESENTACIÓN DE BALBINO MACÍAS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1,099 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 410

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL AIZPURÚA EN REPRESENTACIÓN DE CHIRIQUÍ LAND COMPANY, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-74 DE 13 DE ENERO DE 1997, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 413

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. EDWIN ALBERTO MEDINA, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO BAZÁN ORTIZ PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 419

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BERNAL & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO ENRIQUE NÚÑEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1997, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 422

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA V. DE AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ALCIBIADES NELSON SOLÍS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO ALCALDICIO N° 874 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADO POR LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 424

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE CONSORCIO DE JURISTAS, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SERGIO ARIEL RUIZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO DE PERSONAL N° 536 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 426

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ J. RIVERA EN REPRESENTACIÓN DE LA CHIRIQUÍ LAND COMPANY PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-953 DE 4 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS (PROV. DE PANAMÁ), LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 427

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. LUIS DE LEÓN ARIAS, EN REPRESENTACIÓN DE MÚSICA Y VIDEO, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 805 DE 14 DE AGOSTO DE 1997, DICTADA POR LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 433

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ELISA GNAZZO MALÁN, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO LOGIL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 34 V. F. DE 19 DE JUNIO DE 1996, EMITIDA POR EL TESORERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 434

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TOMÁS PÉREZ ROMERO, EN REPRESENTACIÓN DE ANÍBAL CHERY OCALAGAN, RICARDO GRIMALDO Y MARTÍN CAICEDO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3 DE 27 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 437

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL BUFETE GARIBALDI Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE PUBLITRÉS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 94 DICTADO EL 18 DE FEBRERO DE 1998 POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 438

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EUGENIO CARRILLO GOMILA GOMILA EN REPRESENTACIÓN DE CELLULAR VISIÓN, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL RESUELTO N° 553 DE 13 DE DICIEMBRE DE 1996 EXPEDIDO POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 439

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL QUIRÓS, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA MARBABO, S. A. Y TRANSPORTE Y EQUIPO BARRERA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 886-97 D.G. DE 8 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 440

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO CARRASCO, EN REPRESENTACIÓN DE ORLANDO AVILA BRAVO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN LA REUNIÓN N° 35-97 DE 20 DE AGOSTO DE 1997, Y CONTENIDA EN LA NOTA N° 1057/97 SGP DE 26 DE AGOSTO DE 1997. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 441

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL

LICENCIADO JOSÉ BLANDÓN, EN REPRESENTACIÓN DE CADENA RADIAL CONTINENTE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4233 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL TESORERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 1998). 443

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL BENNETT, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTANTINO TAQUIS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 7673-95 D. G. DE 29 DE MARZO DE 1995, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 444

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TOMÁS VEGA CADENA EN REPRESENTACIÓN DE REFORESTADORA MADRID, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DN-030-96 DE 3 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 445

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA DÍAZ & ZAPPI, EN REPRESENTACIÓN DE RAMÓN E. HOWE, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGALES LAS RESOLUCIONES N° 96-01-04-01-1-R DE 5 DE FEBRERO DE 1996 Y LA N° 96-01-04-06-185-6 DE 20 DE MAYO DE 1996 DICTADAS POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 446

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MIRANDA Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE JORGE HORACIO LAURENCENA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LAS RESOLUCIONES N° 213-054, 213-055 Y 213-056 DE 17 DE ENERO DE 1994 DICTADAS POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS, PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 449

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PEREIRA & PEREIRA, EN REPRESENTACIÓN DE PROPACO, S. A., PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA NOTA N° 060/95-AL DE 13 DE DICIEMBRE DE 1995, SUSCRITO POR EL VICEMINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 457

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TILE Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE NICOLÁS JUAN LIAKOPULOS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-6220 DE 11 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 460

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BERNAL & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO ENRIQUE NÚÑEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1997, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 463

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. CECILIA PORRAS EN REPRESENTACIÓN DE BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD. (SUCURSAL DE PANAMÁ), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 213-1874 DE 2 DE JUNIO DE 1995, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR

REGIONAL DE INGRESOS, (PROVINCIA DE PANAMÁ) LOS ACTOS CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 464

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TOMÁS VEGA CADENA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD REFORESTADORA MADRID, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DN-031-96, DEL 3 DE MAYO DE 1996, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 468

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR HUMBERTO RICORD, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS MERLANO, DIANA CEDEÑO, OSCAR REMÓN, JAVIER BERROA, JORGE MORÁN, ARTURO ORTEGA Y JUAN TEJADA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS, AL NO CONTESTAR SUS SOLICITUDES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 469

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE BRODY, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 214-04-0058 DE 14 DE FEBRERO DE 1996, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 470

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR EN REPRESENTACIÓN DE HILDA GIRAUD, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 14-D.G.T. 53-98 DE 17 DE FEBRERO DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 476

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RUBIO, ALVAREZ, SOLÍS & ÁBREGO EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSIONES MAC MAC, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 19-96 DE 26 DE FEBRERO DE 1996 DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, EL ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 477

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA PEZZOTI & PEZZOTTI, EN REPRESENTACIÓN DE ARMANDO F. PELLA PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 15,114-97 J. D. DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1997, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 481

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE, ARIAS, CASTRO Y REYES, EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO EXTERIOR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 485

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE PROMOCIONES MÉDICAS, S. A. (PROMED, S. A.), PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1949-97-D. G., DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1997, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, AL IGUAL QUE LA RESOLUCIÓN CONFIRMATORIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE:

LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 486

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 487

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FELIPE RANGEL EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL NUMERAL 4 DE LA LEY 40 DE 26 DE JUNIO DE 1996, Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN LAS NOTAS 68-97 DE 15 DE ENERO DE 1997, N° DN DE 1581-96 DE 28 DE OCTUBRE DE 1996 Y FCF Y C 1138-96 DE 8 DE JULIO DE 1996 DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 487

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO PEDRO PEREIRA, EN REPRESENTACIÓN DE QUIMIFAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA NOTA N° 302-01-24 DE 23 DE ENERO DE 1998, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA Y GASTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 488

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA LUQUE, CORONELL Y LAM, EN REPRESENTACIÓN DE UTRACOLPA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO MINISTERIAL N° 397 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1993 Y EL N° 153 DE 31 DE MAYO DE 1994. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 489

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMIDIO MANZANE, EN REPRESENTACIÓN DE MARIO AUGUSTO MEDINA, EFRAÍN DE LEÓN, ENELDA ROSALES Y EZEQUIEL RIVERA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL EL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO EJECUTIVO N° 56 DE 2 DE ABRIL DE 1997, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 493

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OLMEDO ARROCHA, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° P. ADM. 002-97 DE 4 DE JUNIO DE 1997, EXPEDIDA POR LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 497

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL A. BERNAL, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 501

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL ANTONIO BERNAL, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS BATRES Y OMAR LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 1 DE 9 DE MAYO DE 1997, DICTADO POR JURADO DE ELECCIÓN PARA DECANO Y VICE-DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 503

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA GUERRA Y GUERRA EN REPRESENTACIÓN DE UTRACOLPA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES N° 31 Y N° 31-1 AMBAS DICTADAS EL 20 DE ABRIL DE 1995, POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 508

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. CARMELO GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL PUNTO N° 4 DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO EN SU SESIÓN 02-97 CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 1997, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 509

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. DIONISIO SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO MUNICIPAL N° 159 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 514

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RENÁN CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE ARNOLDO AQUILES READ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 15,699-98-J. D. DE 15 DE FEBRERO DE 1998, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 516

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIDACIO IBARRA SÁNCHEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, EL REGLAMENTO N° 4-97 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1997, DICTADO POR EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO Y EL ACUERDO N° 6-98 DE 20 DE FEBRERO DE 1998, DICTADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EXTRAORDINARIO, AMBOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 517

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BENEDICTO DE LEÓN FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ Y OTROS GRANOS BÁSICOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO Y EL SEÑOR ALBERTO DE LEÓN, EL CUAL CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 6672, DEL 25 DE JULIO DE 1994, DE LA NOTARÍA CUARTA DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 520

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OLMEDO ARROCHA, EN REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDESA MUNICIPAL DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACUERDO N° 50 DE 6 DE MAYO DE 1997, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 522

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OLMEDO ARROCHA EN REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 11 DE 3 DE FEBRERO DE 1998, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 528

PROCESO CONTENCIOSO DE LOS DERECHOS HUMANOS 530

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTO POR LA FIRMA MONCADA ABOGADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS HUMBERTO QUINTERO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 1997, Y LA RESOLUCIÓN DE 27 DE AGOSTO DE 1997, AMBAS EXPEDIDAS POR EL VICE-MINISTRO DE VIVIENDA Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ACCIÓN PARA AREAS REVERTIDAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 530

IMPEDIMENTO 531

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL A. BERNAL, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO DE ELECCIÓN DEL MAGISTRADO ARTURO HOYOS, COMO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DE 1997, POR EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). (IMPEDIMENTO) 531

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL E. COLLINS, EN REPRESENTACIÓN DE MARIO R. MARCUCCI, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL AVISO DE CONVOCATORIA N° 090 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1995, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ÓRGANO JUDICIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 28-96 DE 16 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL, DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 532

JURISDICCIÓN COACTIVA 533

TERCERÍA COADYUVANTE INTERPUESTA POR LA LICENCIADA CYNTHIA REBECCA PINEL, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A PANAMERICAN CONSULTANTS, S. A., RICARDO ZUBIETA REYES Y PATRICIA PAZ MEDINA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 533

TERCERÍA COADYUVANTE INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAMÓN DEL RÍO MONG, EN SU PROPIO NOMBRE, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A PEDRO BRIN MARTÍNEZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 536

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN Y DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL MORALES, EN REPRESENTACIÓN DE ROBINSON REYES, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, LE SIGUE A ROBINSON REYES, JUANA DE REYES Y ALEJANDRO REYES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 538

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA LORENA BRENES, EN REPRESENTACIÓN DE ANDRÉS MUÑOZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ LE SIGUE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 541

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA PAN CARIBE, S. A. Y ÁLVARO CABAL, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LES SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 544

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 545

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE CAMILO OLMEDO, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE FEBRERO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JORGE DENIS -VS- CAMILO OLMEDO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 545

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JULIO ANTONIO CANDANEDO EN REPRESENTACIÓN DE PANADERÍA HERMANOS ORTEGA, CONTRA LA

SENTENCIA DE 10 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ARCENIO ORTEGA RÍOS -VS- PANADERÍA HERMANOS ORTEGA Y MANUEL DIMAS ORTEGA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 546

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SANTANA GONZÁLEZ ATENCIO EN REPRESENTACIÓN DE SANTA LIBRADA, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 3 DE ABRIL DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO LABORAL: IRMA YADIRA RÍOS -VS- SANTA LIBRADA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). . 547

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS BONILLA G., EN REPRESENTACIÓN DE AGUSTÍN GARCÍA, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: AGUSTÍN GARCÍA -VS- RIDEL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 548

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA EN REPRESENTACIÓN DE PATRICK M. DE VANDEUL, CONTRA LA SENTENCIA DE 20 DE ABRIL DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: PATRICK M. DE VANDEUL -VS- BANCO CONFEDERADO DE AMÉRICA LATINA, S. A. (COLABANCO). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 548

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR LA FIRMA TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE CERVECERÍA CHIRICANA, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 23 DE DICIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CERVECERÍA CHIRICANA, S. A. -VS- CERVECERÍA CHIRICANA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 549

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON, EN REPRESENTACIÓN DE CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE ABRIL DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MARIO ADOLFO VLIEG -VS- CENTRO MEDIO DEL CARIBE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 554

TRIBUNAL DE INSTANCIA 556

PROCESO SUMARIO PROPUESTO POR ALVARO MUÑOZ FUENTES EN CONTRA DE RODRIGO AROSEMENA DE ROUX, DECLINADO A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 1998, DICTADO POR LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 556

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ELIODORO F. HERNÁNDEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 765 DE 27 DE OCTUBRE DE 1993, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 557

INCIDENTE DE DESACATO INTERPUESTO POR EL DOCTOR MIGUEL ANTONIO BERNAL, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA EL PROFESOR DENIS JAVIER CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL GRAN JURADO DE ELECCIÓN DE RECTOR (A) DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR INCUMPLIMIENTO DEL AUTO DE 19 DE MAYO DE 1997, DICTADO POR LOS MAGISTRADOS DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 559

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN EN REPRESENTACIÓN DE SOCIEDAD COCLÉ AGRÍCOLA, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 001-95 DE 12 DE ENERO DE 1995 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 561

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE REPARACIÓN DIRECTA, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY & DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE PACIFIC LARVAL CENTRE INC., PARA QUE SE CONDENE AL ESTADO PANAMEÑO AL PAGO DE B/.7,000.00, EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR LA ACCIÓN INCURRIDA POR EL INSPECTOR PABLO ALVARADO DEL DEPARTAMENTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, AL IMPEDIR LA SALIDA DE UN EMBARQUE DE 42 CAJAS DE NAUPLIOS O LARVAS DE CAMARONES VIVOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 562

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO IVÁN TEJEIRA EN REPRESENTACIÓN DE TARGIDIO A. BERNAL PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° DN-005-95 DE 31 DE ENERO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 566

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 568

CARTA ROGATORIA 569

CARTA ROGATORIA SIN NÚMERO FECHADA 22 DE OCTUBRE DE 1997, PROCEDENTE DE LA FISCALÍA 73 SECCIONAL DE LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE SANTA FE DE BOGOTÁ, LIBRADA EN EL PROCESO 2857798 CONTRA MILTON BAEZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 569

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO CONTRA LOS SEÑORES GELMUT GOTWALD, HAGEN RAIMUND SCHARZE HANS-PETER SCHILLINGS Y JURGEN MICHAEL HACKSTEIN POR ESTAFA Y DEMÁS DELITOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998) 570

ASISTENCIA JUDICIAL LIBRADA POR LA EMBAJADA DE ESTOCOLMO SUECIA PROCEDENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LITUANIA DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES QUE SE EFECTÚAN EN LA CAUSA PENAL N° 20-1-278-96. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 572

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL LIBRADA POR LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL DE FLORENCIA, DENTRO DEL JUICIO SUMARIO QUE SE ADELANTA POR EL DELITO DE CALUMNIA Y ABUSO DE OFICIO EN CONTRA DE NANO ARMANDO, NANO THIERRY, GENGARELLI PAOLO, Y PACI DANIELE. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 573

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 575

LUZ STELLA RODRÍGUEZ SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE DIVORCIO EMITIDA POR LA CORTE SUPERIOR DEL ESTADO DE ARIZONA EN EL JUICIO DE LUZ STELLA RODRÍGUEZ CONTRA MISIL JOHN WHELIHAN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 575

TERRY LEE SCOTT, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997 EN LA CORTE DEL CIRCUITO DEL CONDADO DE COFFE, ALABAMA ENTERPRISE DIVISIÓN, QUE DECLARE DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA a NELLY PATRICIA ACOSTA AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998) 577

IDALIA C. GUTIÉRREZ O IDALIA DEL CARMEN ACOSTA ORTEGA SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE DE DISTRITO DEL 11TH CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE, ESTADO DE FLORIDA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 1990. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 578

EXHORTOS 579

EXHORTO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA JUAN CARLOS CARPIO AGUILAR POR EL SUPUESTO DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE HEROÍNA EN PERJUICIO DE LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 579

EXHORTO LIBRADO POR EL FISCAL DELEGADO CON SEDE EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, COLOMBIA DONDE SOLICITAN CERTIFICACIÓN RESPECTO SI EN DICHO TERRITORIO, SE JUZGA O HA JUZGADO POR EL DELITO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, A INTEGRANTES DEL CARTEL DE LA COSTA ATLÁNTICA COLOMBIANA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 580

EXHORTO REFERENTE A LA CAUSA PENAL 95-001021-392-PE CONTRA HEINER CARVAJAL GONZÁLEZ Y OTRO EN EL SUPUESTO DELITO DE DAÑO A LA FE PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 582

TRIBUNAL DE INSTANCIA 583

FÉLIX MANUEL ROSARIO BRUJAN, INTERPONE DENUNCIA CONTRA EL LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA, POR FALTA A LA ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). 583

ACUERDOS 586

ACUERDO NÚMERO 201 586

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

MAYO 1998

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ALCIDES PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE ROLANDO ESPINO VERGARA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Alcides Peña, actuando en representación de **ROLANDO ESPINO VERGARA**, ha interpuesto demanda de amparo de garantías constitucionales en contra de la orden de hacer contenida en la Resolución de 30 de septiembre de 1997, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

El Pleno pasa a examinar la demanda a fin de determinar si se dan los presupuestos procesales necesarios para que aquélla pueda ser admitida.

A juicio del Pleno, la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2610 del Código Judicial, que requiere que en aquélla se haga mención expresa de la orden impugnada, el nombre del servidor público, funcionario, institución o corporación que la impartió, los hechos en que se funda su pretensión y que se expresen las garantías fundamentales que se estiman infringidas y el concepto de la violación. El Pleno observa que el apoderado judicial de la parte actora no indica el concepto de la violación. Para cumplir con este requisito se requiere que el demandante enuncie formalmente cuál es el concepto de la violación, es decir, la infracción de las garantía fundamentales que puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación.

Por otro lado, el Pleno de esta Corporación observa que el acto impugnado lo constituye una resolución expedida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 30 de septiembre de 1997, es decir, que entre la orden impugnada y la acción de amparo existe un lapso de 6 meses, por lo que no se dan las condiciones de gravedad e inminencia del daño que representa la orden impugnada, para requerir de una revocación inmediata.

Efectivamente, el amparista pretende enervar una resolución dictada hace 6 meses lo cual no es procedente por los reiterados pronunciamientos de la Corte que señalan que la acción de amparo, según lo estipula el artículo 2606 del Código Judicial, persigue revocar una orden que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere de una revocación inmediata. Esto quiere decir que el elemento fundamental del amparo es la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado. La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual, no pasado u ocurrido hace mucho tiempo. Igualmente, la Corte ha definido el término inminente que quiere decir que amenaza o está para suceder prontamente, y lo antónimo de inminente es remoto, lejano, como ocurre en el presente caso, en que la orden carece de actualidad, de inminencia, y por tanto, falta el elemento de urgencia que requiere una revocación inmediata.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licenciado Alcides Peña en representación de Rolando Espino Vergara contra el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RUBÉN MONCADA LUNA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARCOS JUSTINE FERNÁNDEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° AV-156 DE 24 DE JULIO DE 1997, EXPEDIDO POR EL JUZGADO NOVENO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce este Máximo Tribunal de Justicia, de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado RUBÉN MONCADA LUNA, actuando en su calidad de apoderado judicial de **PEDRO MARCOS JUSTINE FERNÁNDEZ**, contra la Resolución N° AV-156 de 24 de julio de 1997, dictada por el **Juzgado Noveno de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial.**

ANTECEDENTES DEL CASO

Consta en autos que la controversia que nos ocupa se inicia a raíz de la expedición, por el Juzgado Noveno de Circuito Penal de Panamá, de la resolución de 24 de julio de 1997, mediante la cual se decretó el Comiso de cuentas, bienes y valores del señor PEDRO MARCOS JUSTINE FERNÁNDEZ, que habían sido retenidos por el Ministerio Público dentro de la causa penal que se ventilaba en su contra en el referido Juzgado. Dicho proceso penal se había declarado previamente extinguido, en virtud de que el señor **JUSTINE FERNÁNDEZ** había sido beneficiado con indulto presidencial mediante Decreto Ejecutivo N° 476 de 7 de septiembre de 1995.

El auto que dispuso el comiso pese a la extinción del proceso penal, fue objeto de alzada ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, magistratura que confirmó en todas sus partes la resolución apelada, mediante resolución de 21 de octubre de 1997.

Seguidamente, la parte afectada presentó ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, acción extraordinaria de Amparo de Garantías Constitucionales contra el auto que ordenó el Comiso. Dicha Magistratura, al entrar a conocer de la acción de Amparo, decidió su inadmisión mediante pronunciamiento de 17 de noviembre de 1997, al considerar que contra la resolución judicial atacada no se habían agotado todos los mecanismos procesales de impugnación, puesto que quedaba pendiente de interposición el recurso extraordinario de Casación Penal, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2435 numeral 2 del Código Judicial.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia al conocer de la admisibilidad del Amparo en grado de apelación, consideró que le asistía razón al demandante, en el sentido de que el auto de comiso expedido no era susceptible de ser atacado por vía extraordinaria de Casación Penal, y que por ende, la Acción Constitucional subjetiva debía ser admitida.

Así, en resolución de 29 de diciembre de 1997, este Máximo Tribunal de Justicia en lo medular indicó:

> "la resolución judicial principalmente acusada a través de Amparo, es el auto que dispone el Comiso, que se encuentra excluido del catálogo dispositivo del artículo 2435 del Código Judicial, que detalla qué tipo de autos penales son susceptibles de ser recurridos mediante Casación Penal en el fondo. La situación sería distinta si el Comiso de bienes se hubiese ordenado dentro del mismo auto que extinguió el proceso por indulto, y se estuvieran ventilando aspectos relativos al referido indulto, en cuyo caso la resolución judicial quedaría comprendida dentro del numeral 2° del artículo

> 2435 del Código Judicial. Pero en este caso, el comiso se ordena en una resolución independiente a la que declara extinguido el proceso por indulto, y mucho tiempo después.
>
> En estas circunstancias, la Corte constata que el amparista, efectivamente, utilizó los recursos de ley previstos para impugnar el auto acusado, cumpliendo de esta forma con los requerimientos contenidos en el artículo 2606 del Código Judicial ..." (el subrayado es nuestro).

El Primer Tribunal Superior de Justicia, atendiendo a la resolución expedida por la Corte Suprema, admitió el Amparo de Garantías y procedió a su sustanciación, resolviendo la pretensión de fondo del amparista, mediante sentencia de 27 de enero de 1998, que denegó el Amparo de Garantías Constitucionales.

LA SENTENCIA APELADA

La sentencia de 27 de enero del año que decurre, deniega el Amparo propuesto en beneficio de PEDRO MARCOS JUSTINE FERNÁNDEZ, al considerar que no resulta vulnerado el debido proceso legal con la expedición del auto comisatorio de bienes.

El Tribunal A-quo arriba a la citada conclusión, al manifestarse enteramente conforme con el juicio de valor externado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia al conocer de la apelación presentada contra el auto de comiso, instancia judicial que señaló que si bien es cierto el Órgano Ejecutivo benefició con un indulto al señor JUSTINE, extinguiéndose la acción penal, esa extinción no alcanza ni el comiso de los instrumentos con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él provengan, ni la responsabilidad civil derivada del mismo, tal como lo consagra el artículo 101 del Código Penal.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA

La Corte Suprema, una vez realizada una cuidadosa disquisición de los hechos controvertidos, es de la opinión que le asiste razón al Tribunal de primera instancia, en el sentido de que la garantía instrumental del debido proceso no ha resultado violentada en el negocio de marras, por las razones que a continuación se precisan:

I. En cuanto a la procedencia de la medida de Comiso.

La disconformidad básica del recurrente contra el auto de Comiso dictado por el Juez Noveno de Circuito Penal, estriba en que tal resolución judicial resulta violatoria del artículo 32 de la Constitución Nacional, puesto que mal puede aplicarse una pena accesoria (Comiso) al señor JUSTINE, cuando el proceso penal que se le seguía, se declaró extinguido por indulto.

La tesis esbozada carece de soporte jurídico, al ser confrontada con el texto del artículo 101 del Código Penal, que de manera clara dispone:

> "Artículo 101. La extinción de la acción penal y de la pena no impide el comiso de los instrumentos con que se cometió el hecho punible y de los efectos que de él provengan ni la responsabilidad civil derivada del mismo".

Resulta imperativo indicar que tanto la amnistía como el indulto se encuentra concebidos en la doctrina y en el ordenamiento penal panameño (art. 91 del Código Penal), como una de las formas de extinción de la acción penal y de la pena.

Causas extintivas de la acción penal son aquellas situaciones que se presentan después de perpetrado un hecho delictivo pero antes de dictarse sentencia condenatoria, y que impiden el ejercicio de la potestad punitiva del Estado.

El Comiso por su parte, está contenido en el artículo 55 del Código Penal, y se concibe como una pena de naturaleza accesoria, consistente en la pérdida y adjudicación al Estado de los instrumentos con los que hubiese cometido el hecho punible (instrumental sceleris) y de los efectos que provengan de éste (producta sceleris), salvo los que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho.

Si bien en este caso no llegó a producirse declaración de responsabilidad penal del señor JUSTINE en relación al delito de Peculado que se le imputaba, puesto que quedaron extinguidas tanto la acción penal y la pena del delito con la concesión del indulto, subsiste la facultad legalmente conferida al juzgador para ordenar el Comiso de sus bienes, tal como se desprende del texto del artículo 101 del Código Penal.

Recientemente, esta Máxima Corporación Judicial tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, por razón de una demanda de inconstitucionalidad presentada contra un auto de comiso de bienes expedido por un juez penal de la esfera municipal, pese a que se había previamente declarado la extinción de la acción penal, al haber operado el fenómeno de la prescripción.

Así la Corte, en sentencia de 31 de octubre de 1997, en las partes medulares y más pertinente de la resolución señaló:

> "Se trasluce de lo esbozado, que la actuación de la juzgadora que ordenó el Comiso de los bienes de la señora TASSON no contraviene texto constitucional alguno ...
>
> Al quedar prescrita la acción, se produce la extinción de la acción penal, lo que sin embargo permite que se adopten medidas accesorias como el Comiso de los bienes de la persona en este caso sumariada, conforme al texto del artículo 101 en relación con el artículo 103 del Código Penal.
>
> Debemos concluir, que la legislación procesal y penal es en este sentido clara, y la parte actora no le ha imputado vicio de inconstitucionalidad alguna a la norma que permite el Comiso de bienes, aún en el caso en que no se haya declarado la responsabilidad penal.
>
> Por otra parte, retomando el principio que encierra el artículo 32 de la Constitución Nacional, tal como ha sido interpretado y reconocido por esta Superioridad, la "estricta legalidad procesal", implica que la administración de justicia debe ejercitarse conforme a los trámites establecidos en la Ley.
>
> El legajo contentivo del proceso adelantado por la Juez Cuarta Municipal, Ramo Penal, permite a este Tribunal inferir que dicho proceso se adelantó en debida forma, y que la actuación del Juzgador, a excepción de lo tocante a la finca No. 876 que pertenece a MARCELA TASSON y a MARITZA TASSON, se enmarcó dentro de las facultades legales conferidas por la ley, que le permite, con base a su ejercicio jurisdiccional, ordenar el Comiso de bienes en casos en que se haya extinguido la acción penal, si así lo considera justificado".

Los razonamientos anteriores encuentra cabida en el negocio que nos ocupa, por cuanto la Corte ya ha definido el debido proceso penal como un principio que encierra la "estricta legalidad procesal", lo que implica que la administración de justicia debe ejercitarse conforme a los trámites establecidos en la Ley, y es precisamente la condición objetiva, más específicamente el Código Penal, en su artículo 101, lo que permite la aplicación del Comiso de bienes, aún en situaciones excepcionales como lo son cuando ha operado la extinción de la acción penal y de la pena, siempre que el juzgador lo considere justificado.

II. En cuanto a posibilidad de un doble juzgamiento.

El Pleno advierte igualmente, que el amparista hace referencia a un proceso

que se le seguía al señor PEDRO MARCOS JUSTINE en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República (DRP), en que se habían cautelado y posteriormente descautelado algunos bienes; destacando que el auto impugnado comisa todos los bienes, incluso los que estaban a disposición de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, vulnerándose el debido proceso legal.

El Tribunal estima que no debe perderse de vista que se trata de dos jurisdicciones distintas, que se complementan entre sí pero no se excluyen, por tener propósitos distintos y tutelar bienes y valores diferentes. Sobre el particular es consultable la sentencia de Amparo de Garantías Constitucionales del Pleno de la Corte calendada 22 de mayo de 1991, que aclara la circunstancia de que por ventilarse dos procesos, uno en la jurisdicción patrimonial y otro en la jurisdicción penal "no puede conducir a un doble juzgamiento, pues el tipo de responsabilidad que se puede atribuir al demandante es distinto".

En este caso, la decisión de la DRP de descautelar algunos de los bienes cautelados al señor JUSTINE, está encuadrada en el ámbito de la jurisdicción patrimonial; mientras que la decisión del Comiso atacada en el Amparo, se encuentra atada al ámbito de la jurisdicción penal.

No se configura por ende, el llamado doble juzgamiento, siendo que los efectos de una decisión en el ámbito patrimonial o de una decisión en el ámbito penal no necesariamente trascienden a la otra, aunque sí pueden ser tomadas en cuenta.

A este punto conviene citar que igual posición mantiene la DRP en su fallo de ... en el sentido de la ausencia del doble juzgamiento en casos como éste.

En resumen, el hecho de que DRP descautelara algunos de los bienes, no impide que la jurisdicción penal los Comisara, si consideraba que tal medida se justificaba.

En cuanto a tal justificación, se puede apreciar que en el negocio que nos atañe la misma quedó consignada en el propio auto N° AV-156 de 24 de julio de 1997, donde se señala que el juzgado noveno penal de circuito había llamado a juicio a PEDRO MARCOS JUSTINE FERNÁNDEZ por supuesto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título X del Libro II del Código Penal, es decir por delito genérico "De las diferentes formas de Peculado", al haberse reunido los requisitos para emitir auto encausatorio, con la comprobación del hecho punible y la acreditación de los medios probatorios del delito. Sin embargo, posteriormente debió declararse la extinción de la acción penal, en virtud del indulto concedido en septiembre de 1995.

Evidentemente, en concepto del juzgador, se justificaba la adopción de la medida de Comiso, y a ello se procedió, de conforme con lo previsto en el artículo 101 del Código Penal.

III. Procedencia del Comiso sobre los bienes de PEDRO MARCOS JUSTINE FERNÁNDEZ.

Cierto es que el auto de Comiso no distingue ni individualiza por qué ciertos bienes son Comisados por considerase que proceden del delito; tampoco atañe al Tribunal de Amparo examinar cada uno de los bienes comisados y decidir cuáles son instrumental sceleris o producta sceleris.

Esta actividad correspondía sin duda alguna al juzgador penal al momento de dictar el auto de Comiso, siempre que la parte afectada, que intervino en el incidente de petición de Comiso, solicitara al Tribunal de la causa la desafectación de los bienes, probando que los mismos no tenían relación alguna con el ilícito por el cual se le había llamado a juicio.

Sin embargo, nada se dice en el escrito de oposición al incidente con relación a este punto. El apoderado legal del señor JUSTINE se limita a solicitar que se rechace el incidente presentado por improcedente y por considerar que se había equivocado la escogencia de la vía judicial. (Cfr. fojas 9-17 del cuaderno contentivo del incidente).

Recientemente, con ocasión de la comentada demanda de inconstitucionalidad presentada por la señora MARCELA TASSON contra la resolución judicial que ordenaba el Comiso de algunos de sus bienes, el Pleno de la Corte declaró que éste no era inconstitucional, pero excluyó del Comiso un bien inmueble cuya propiedad compartía la señora TASSON con otra persona, y que había adquirido previo a la fecha en que se le imputaba la comisión del delito. Esta circunstancia había quedado claramente acreditada en el expediente, gracias a la actividad probatoria de la afectada, que demostró que el bien comisado no podía conectarse de manera alguna, con el delito que se le imputaba.

La misma oportunidad procesal tuvo el afectado en este caso, quien en su lugar se concretó a solicitar que se desestimara el "incidente" alegando, entre otros puntos, que las normas que regentan la materia no permitían que extinguido el proceso penal por indulto, se entablara un llamado "incidente" para peticionar el Comiso.

IV. La viabilidad jurídica del "incidente" de Comiso.

Cabe examinar en este punto, los dos últimos argumentos del amparista para que se conceda la acción propuesta:

a) la marcada posterioridad con que se dictó el Comiso, lo que -según alega- constituye una violación al debido proceso; y

b) la utilización de la figura del incidente para dictar la orden de comiso, lo que -según alega- resulta totalmente improcedente.

Esta Máxima Corporación de Justicia debe anotar que aunque en efecto resulta peculiar que el auto de Comiso se haya dictado con tanta posterioridad a la sentencia que extinguió el proceso penal por razón del indulto, un examen más amplio de la situación que se presentó en este negocio permite concluir que esta anomalía no es imputable enteramente al juzgador, como quedará expuesto próximamente, y lo que es más importante: no ha representado violación al debido proceso en perjuicio del señor JUSTINE.

En efecto, pese a que el Comiso es muy posterior a la sentencia (lo que no resulta lo más preferible o lógico), no se omitió ningún trámite esencial en la expedición del auto en mención, y se le garantizaron al afectado todas las oportunidades de defensa, el derecho a ser oído y a oponerse al Comiso. En consecuencia, la dilación en la orden no viola las garantías instrumentales del debido proceso, tantas veces delimitadas por jurisprudencia de la Corte Suprema.

V. Extemporaneidad del decreto de Comiso.

Es apropiado a este punto analizar la posición del amparista en el sentido de que el "Incidente" era extemporáneo porque existe un término legalmente establecido para decretar el Comiso con base en el artículo 2413 del Código Judicial, norma que establece que "La sentencia condenatoria contendrá la fijación de las penas", y siendo que el Comiso está definido como una pena de naturaleza accesoria, debió declararse en la sentencia, y no posteriormente con el incidente.

Reiteramos que la causa penal seguida a PEDRO MARCOS JUSTINE FERNÁNDEZ no concluyó con la expedición de una sentencia condenatoria, sino con la extinción del proceso por haberse beneficiado al encausado con Indulto; por lo que el supuesto contenido en el artículo 2413 no es aplicable a este caso; ello sin perjuicio de que el artículo 101 del Código Penal tampoco prevé término para ordenar el Comiso.

Finalmente, en cuanto al argumento de que se violó el debido proceso al darse curso a un incidente, cuando el proceso principal había fenecido, consideramos que del mismo texto de la solicitud de comiso se desprende que el Ministerio Público utilizó la figura del "incidente" como un medio procesal para presentar la solicitud de comiso.

La terminología utilizada evidentemente no es la más feliz, al no tratarse

de un incidente propiamente tal, sino de una petición; la propia naturaleza procesal del incidente y sus condicionamientos legales, nos revelan que la petición del Ministerio Público no era un incidente, sino una solicitud, al percatarse de que los bienes cautelados en el proceso a JUSTINE habían quedado en una situación jurídicamente incierta e indefinida, luego de producido el Indulto y la extinción de la acción penal.

No consta que siquiera la parte afectada por el Comiso hubiese solicitado en su oportunidad al Tribunal la descautelación de los bienes de PEDRO MARCOS JUSTINE FERNÁNDEZ.

Esta Corporación Judicial conceptúa que el juzgador penal, una vez advertido de esta anomalía por el Ministerio Público, le dio trámite a la solicitud por éste presentada, para posteriormente entrar a decidir la suerte de los bienes cautelados. Oportunidad procesal la que el amparista pudo haber aprovechado para tratar de probar que los bienes -o algunos de ellos- tenían un origen legítimo, en cuyo caso el Juez de instancia pudo haber dilucidado ese extremo.

No consideramos que tal actuación viole el debido proceso, máxime cuando la propia ley establece que en los casos en que por error se denomine impropiamente una solicitud o recurso, pero el juez pueda inferir del escrito lo realmente requerido, debe imprimirle curso legal.

Finalmente, con el criterio de que el Comiso como figura punitiva sólo debe alcanzar aquellos instrumentos con los que se hubiese cometido el hecho punible y de los efectos que provengan de éste, el comiso de bienes decretado por el Juez Noveno deberá entenderse comprensivo únicamente de aquellos bienes que comprobadamente fueron utilizados en la comisión del delito o sean producto de éste, excluyendo los que fueran preexistentes a la comisión del hecho, y aquellos cuyo título de propiedad pertenezcan a un tercero ajeno al caso.

A este efecto la Corte debe subrayar, que la acreditación de tales circunstancias debe realizarse a través de las vías procesales idóneas para ventilar estas circunstancias de carácter probatorio y fáctico, siendo que el Amparo, por su naturaleza constitucional especial, está reservado para la tutela y reparación de violaciones directas a los derechos constitucionales infringidos, y no para deslindar cuestiones de índole probatorio ligados al proceso de donde emerge el Amparo.

Sin perjuicio de lo anterior la Corte debe añadir que se encontraría igualmente impedida de realizar la determinación de cuáles bienes deben o no quedar excluidos del Comiso, puesto que la demanda de Amparo no planteó esta disyuntiva, y esta Corporación Judicial ha sostenido que en materia de amparo:

> "rige predominantemente el principio dispositivo o de justicia rogada. Según este principio las partes fijan el objeto del proceso, de manera tal que se limitan las facultades del tribunal. De allí que el juzgador conoce sólo lo que las partes someten a su decisión y, por ello, debe fallar de conformidad con lo preestablecido en la demanda". (Sentencia de 22 de abril de 1994).

Por último, si el asunto de los bienes comisados hubiese podido ser deslindado en Amparo, y así lo hubiera solicitado la parte, tampoco se aportaron los elementos de probanza necesarios para resolver ese extremo, y es de recordar que en las acciones de amparo las pruebas son preconstituidas:

> "deben acompañarse con la demanda ya que en este proceso sólo se practican pruebas en forma excepcional, y lo es cuando el funcionario o corporación demandadas no atendieron la orden que se les haya comunicado o no cumplieron dentro del término legal; sólo entonces se procederá por el Tribunal a practicar las pruebas que considere conducentes para aclarar los hechos, de acuerdo con el artículo 2614 del Código Judicial, y esto en la primera instancia, si ocurre el supuesto contemplado en la norma transcrita". (Sentencia de 28 de febrero de 1992).

En estas circunstancias, la Corte concluye que el artículo 32 de la Constitución Nacional no ha resultado infringido en perjuicio del señor PEDRO MARCOS JUSTINE FERNÁNDEZ, y que al no existir vicio en la sentencia de 27 de enero de 1998 expedida por el Primer Tribunal de Justicia que denegó la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, procede en derecho su confirmación.

En consecuencia la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES, la sentencia de 27 de enero de 1998 expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA FUENTES Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ABATTOIR DE AGUADULCE, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 3 DE FEBRERO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense FUENTES Y ASOCIADOS, en ejercicio de los poderes especiales otorgados por **ABATTOIR DE AGUADULCE, S. A.**, ha presentado ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de garantía constitucionales contra la orden de hacer dictada por el **Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial**, contenida en el fallo de 3 de febrero de 1998 dictado en el proceso laboral por despido injustificado seguido por Fabio Elías Villarreal contra la empresa que representa.

Manifiesta el accionante que la orden de hacer que impugna consiste en que el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, al conocer en apelación la decisión de la Junta de Conciliación y Decisión N° 8 en el proceso laboral por despido injustificado ya citado, declaró la nulidad de lo actuado a partir de foja 15 del expediente por falta de competencia y ordenó la remisión del expediente a la Dirección Regional de Trabajo de la provincia de Coclé, como tribunal competente.

Considera así, que tal decisión viola directamente el artículo 32 de la Constitución Nacional.

Corresponde a esta colegiatura verificar si la acción presentada cumple con los requisitos para su admisión y pueda darse viabilidad jurídica a la demanda.

Al verificar los requisitos formales del libelo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2609 y 2610 del Código Judicial, se advierte que el demandante actúa debidamente legitimado por un poder especial para interponer esta acción constitucional; que contiene los requisitos comunes a toda demanda; que se menciona expresamente la supuesta orden impugnada; el nombre del tribunal judicial que la impartió; los hechos en que se fundamenta la pretensión; las garantías fundamentales que se dicen infringidas y el concepto en que lo han sido.

Se adjunta además, copia autenticada de la resolución de 3 febrero expedida

por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial que se impugna con esta acción.

Sin embargo, se advierte que la parte actora pretende que con la acción presentada, se juzguen nuevamente los hechos que dieron como resultado la declaratoria de nulidad del proceso laboral a partir de la foja 15 del expediente por falta de competencia; pretendiéndose con ello convertir a este Tribunal Constitucional en una tercera instancia.

La parte demandante cita como infringido el artículo 32 de la Constitución Nacional, que consagra la garantía fundamental del debido proceso. Sobre la misma, esta corporación de justicia en reiterada jurisprudencia ha manifestado que es una garantía de naturaleza instrumental "en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la Ley e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas, de tal manera, que las personas puedan defender efectivamente sus derechos" (Sentencia de 22 de febrero de 1990).

El artículo 940 del Código de Trabajo faculta al juzgador de segunda instancia al saneamiento del proceso laboral, permitiendo así a las partes la oportunidad de ejercitar todos los derechos y garantías del debido proceso durante la reposición del mismo.

La resolución judicial impugnada no contiene una orden de hacer según lo preceptuado en el primer inciso del artículo 2606 del Código Judicial. Lo que se advierte cuando se pretende -con la presente acción- es impedir que un Tribunal de Justicia ejerza su función jurisdiccional de decidir los casos sometidos a su consideración; lo cual sí sería violatorio del debido proceso.

Por tanto, no es posible dar curso jurídico a esta acción, por ser manifiestamente improcedente (art. 2611 del Código Judicial).

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías fundamentales interpuesto por la firma forense FUENTES Y ASOCIADOS en representación de ABATTOIR DE AGUADULCE, S. A.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA M.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROBERTO ENRIQUE FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE COLORANTES Y QUÍMICOS, S. A. (COLORQUIM), CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-1 DE 3 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 1. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La sociedad **OLORANTES Y QUÍMICOS, S. A. (COLORQUIM)** a través de apoderado judicial ha propuesto amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer expedida por la **JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 1**, mediante sentencia PJ-1 de 3 de marzo de 1998.

La sentencia en mención fue dictada dentro de un proceso jurisdiccional iniciado por AGUSTINA BARSALLO contra COLORANTES Y QUÍMICOS, S. A.

Al revisar el libelo contentivo de la acción se percata la Corte de que lo que persigue el amparista no es un medio a una situación de infracción de garantías constitucionales, sino la revisión del fondo de la controversia que fue desatada mediante la aludida sentencia PJ-1 de 3 de marzo de 1998. Así se desprende entre otras cosas, de los argumentos utilizados por el amparista en el sentido de que la aludida decisión jurisdiccional resulta injusta al obligar a su mandante a pagar salarios por servicios que no le fueron prestados y por considerar erróneamente que la relación de trabajo existente entre COLORANTES Y QUÍMICOS, S. A. y AGUSTINA BARSALLO terminó por despido y no por mutuo acuerdo.

El amparo de garantías constitucionales no ha sido establecido con el propósito de servir como un grado o instancia adicional en los procesos judiciales, sino exclusivamente como un mecanismo para enderezar situaciones de infracción de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República. De esto se sigue que la acción propuesta por COLORANTES Y QUÍMICOS, S. A. no puede ser admitida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por el licenciado ROBERTO ENRIQUE FUENTES, en representación de COLORANTES Y QUÍMICOS, S. A. (COLORQUIM), contra la orden de hacer contenida en la sentencia PJ-1 de 3 de marzo de 1998, dictada por la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 1.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR, EN REPRESENTACIÓN DE BERNABÉ TALLA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO PJ-17-98, EMITIDO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 17. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDUARDO RÍOS MOLINAR actuado en nombre y representación de **BERNABÉ TALLA**, ha interpuesto demanda de Amparo de Garantías Constitucionales contra el Auto N° PJ-17-98 emitido por la **Junta de Conciliación y Decisión N° 17** a fin de que la misma sea revocada, por considerar que contiene una orden de no hacer que viola las garantías individuales contenidas en el artículo 32 de la Constitución.

El demandante expone que la resolución del 3 de febrero de 1998, contra la cual dirige su acción de amparo de garantías constitucionales, contiene una orden de no hacer que viola las garantías fundamentales de su cliente al no cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 7 de 1975, por lo que solicita que la

misma sea revocada por infringir el debido proceso.

En virtud de ello, se advierte que el acto violatorio de las garantías constitucionales alegado lo constituye, según la opinión del demandante, la no notificación de acuerdo a los procedimientos establecidos en el artículo 10 de la Ley 7 de 1975, agravada mediante la emisión de una resolución que contraviene de manera directa lo señalado por la ley en materia de notificación en los casos en que una de las partes no asista a la audiencia.

ANÁLISIS DEL PLENO

Nos corresponde decidir sobre la admisibilidad de la demanda de amparo de garantías constitucionales, por lo que esta corporación pasa a examinar si cumple con los requisitos contemplados en los artículos 2610 concordante con el artículo 654; al igual que con los artículos 2606 y 2607, todos del Código Judicial.

En primer lugar, si bien la acción se dirige contra una resolución emitida por funcionario con mando y jurisdicción en más de una provincia, por lo que se cumple con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2607 del Código Judicial, además de reunir los requisitos contemplados en el artículo 2610 de la misma excerta legal, observamos sin embargo que la resolución que se acusa no cumple con las reglas contenidas en el artículo 2606 numeral 2 del mismo cuerpo de normas, es decir, que se ha empleado la vía del amparo sin haberse agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial atacada, toda vez que, como claramente lo señala el Código de Trabajo, en su artículo 889, el incidente de nulidad es el medio idóneo para solicitar la nulidad de las notificaciones realizadas de manera distinta a la establecida en dicho Código.

A juicio de esta superioridad, las razones expresadas serían suficientes para no admitir la demanda de amparo de garantías constitucionales.

En este sentido, en reiterada jurisprudencia la Corte ha expresado su criterio, así, en sentencia de 19 de noviembre de 1996, manifestó lo siguiente:

> "las decisiones judiciales, si bien constituyen órdenes explícitas o implícitas, la interposición de la acción de amparo resulta inoperante cuando las mismas son dadas en virtud de las leyes que regulan los procesos y, por lo tanto, no procede como medio de impugnación de actos procedimentales violatorios o no de disposiciones legales contentivas de derechos de rango legal, toda vez que las leyes procesales atribuyen competencia y proveen los medios legales aplicables para corregir los errores de cualquier clase en que incurran los jueces para su aplicación".

En efecto, la pretensión del amparista va dirigida contra la legalidad o ilegalidad del Auto PJ-17-98 de 3 de febrero de 1998, emitido por la Junta de Conciliación y Decisión N° 17, que ordena notificar personalmente al demandado ausente en proceso ventilado ante dicha corporación, lo cual contradice la finalidad o propósitos del amparo cuyo remedio debe dirigirse a invalidar una orden de hacer o de no hacer que afecta de manera directa al demandante, y que además no existan otras vías jurisdiccionales ante las cuales recurrir con la finalidad de obtener el remedio reclamado.

DECISIÓN DEL PLENO

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado EDUARDO RÍOS MOLINAR en representación de BERNABÉ TALLA.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA ENDARA & MARRÉ EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD K MART INTERNATIONAL CORPORATION CONTRA LA RESOLUCIÓN S/N DE 10 DE FEBRERO DE 1998, EXPEDIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Endara & Marré, actuando en nombre y representación de la sociedad **K-MART INTERNATIONAL GARMENT CORPORATION** interpuso acción de amparo de garantías constitucionales contra la resolución S/N de 10 de febrero de 1998, emitida por el **Primer Tribunal Superior de Justicia**, por la cual se inhibió de conocer el recurso de hecho presentado por dicha Sociedad, aduciendo que dicha resolución violó el principio del debido proceso contemplado en el artículo 32 de la Constitución Nacional.

La resolución impugnada fue dictada dentro del proceso ordinario de mayor cuantía que la Sociedad K MART CORPORATION instauró contra la Sociedad amparista.

La actora del presente amparo fundamenta su acción en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: El 30 de mayo de 1994, esto es, con anterioridad a la expedición y puesta en vigencia de la Ley 29 de 1 de febrero de 1996, la sociedad KMART CORPORATION mediante apoderados especiales, presentó una demanda ordinaria de mayor cuantía en contra de nuestra representada K-MART INTERNATIONAL GARMENT CORPORATION, la cual quedó radicada en el Juzgado Segundo de Circuito Civil.
>
> SEGUNDO: Dentro del referido juicio propuesto por KMART CORPORATION, se le solicitó al Juez Segundo de Circuito Civil, la práctica de MEDIDAS CONSERVATORIAS O DE PROTECCIÓN, medidas estas que fueron negadas por el referido Juez, mediante Auto N° 645 de 9 de febrero de 1995.
>
> TERCERO: Los apoderados de la sociedad KMART CORPORATION inconformes con la negativa contenida en el Auto N° 645, promovieron recurso de apelación para ante el Primer Tribunal Superior, el cual decidió, sin audiencia del demandado K-MART INTERNATIONAL GARMENT CORPORATION, revocar el Auto N° 645 de 9 de febrero de 1995, y posteriormente como consecuencia de ello el Juzgado Segundo del Circuito, Ramo Civil, expidió el Auto N° 1010 de 6 de mayo de 1995, en que se decretan medidas cautelares a favor de KMART CORPORATION y en contra de K-MART INTERNATIONAL GARMENT CORPORATION.
>
> CUARTO: En tal virtud y como quiera que el articulo (sic) 521 del Código Judicial, que contiene disposiciones especiales en materia de medidas cautelares, dispone en su numeral 10° que: Las resoluciones que decreten las medidas cautelares admiten apelación, interpusimos recurso de apelación en contra del Auto N° 1010 en representación de la sociedad K-MART INTERNATIONAL GARMENT CORPORATION, apelación ésta que fue concedida por el Juez Segundo del Circuito el 14 de julio de 1997, y remitida al Primer Tribunal Superior de Justicia, para que se surtiera la alzada.
>
> QUINTO: El Magistrado Sustanciador del Primer Tribunal Superior, en Sala Unitaria, considerando implícitamente la competencia especial

a que se refiere la Ley 29 de 1996, ordenó remitir el negocio al Tercer Tribunal Superior de Justicia, a fin de que conociera de la apelación anunciada en contra del Auto N° 1010 de 6 de mayo de 1995, emitido por el Juez Segundo del Circuito, Ramo Civil.

SEXTO: El Tercer Tribunal Superior de Justicia en primer termino (sic) acogió el conocimiento de la apelación aludida al fijar términos para sustentar o presentar alegatos, los cuales fueron aprovechados por las dos partes, las cuales presentaron sus alegatos respectivos dentro de los términos concedidos. Sin embargo, la Magistrada Sustanciadora del Tercer Tribunal Superior de Justicia, mediante proveído de mero obedecimiento dictado el día 30 de septiembre de 1997, decretó la nulidad de lo actuado a fojas 76-77, al igual que anuló la providencia que abrió el termino (sic) de alegato y ordenó remitir el expediente "a la primera instancia para que, previa las reglas de reparto, el Juez A Quo prosiga el curso normal del proceso.

SÉPTIMO: El Tercer Tribunal Superior de Justicia, al decretar la nulidad de lo actuado, no se fundamentó en ninguna de las causales previstas en el artículo 685 del Código Judicial, sino que consideró que no era recurrible en apelación el Auto N° 1010 de 6 de mayo de 1995, emitido por el Juez Segundo de Circuito, ramo civil, dado que había sido emitido en cumplimiento de la orden expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia. Además, el Tercer Tribunal Superior de Justicia al anular lo actuado en grado de apelación mediante la Resolución de 30 de septiembre de 1997, expresó, entre otras cosas, que se pretende incitar a que adquiera competencia esta instancia jurisdiccional, de igual jerarquía al Primer Tribunal Superior de Justicia, a fin de que se pronuncie nuevamente sobre un tema ya abordado por esta ultima (sic), en virtud de la competencia transitoria que ostentaba para conocer de este tipo de materias, desconociendo que la apelación conocida con anterioridad por el Primer Tribunal Superior de Justicia fue interpuesta por la demandante KMART CORPORATION en contra de la resolución que rechazaba la concesión de medidas cautelares, con fundamento en el artículo 521, numeral 10, del Código Judicial.

OCTAVO: Devuelto el expediente al Juzgado Segundo del Circuito, este tribunal acatando lo dispuesto por el Tercer Tribunal Superior de Justicia, mediante Auto N° 2676 de 25 de noviembre de 1997, procedió a negar la apelación interpuesta contra el Auto N° 1010 de 6 de mayo de 1997.

NOVENO: Comoquiera que las medidas cautelares decretadas son recurribles en apelación al tenor de lo dispuesto en el artículo 521, numeral 10, del Código Judicial, y que la negativa de la concesión del recurso de apelación contenida en el Auto N° 2676 de 25 de noviembre de 1997, impide ejercer el derecho de defensa a nuestra representada, interpusimos recurso de hecho para ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, tribunal competente para conocer de las apelaciones interpuestas en contra de la resoluciones expedidas por el Juzgado Segundo del Circuito, Ramo Civil dentro de un juicio ordinario de mayor cuantía.

DÉCIMO: El Recurso de Hecho a que se hace referencia en el punto anterior fue presentado oportunamente, esto es, dentro de los tres días siguientes al retiro de las copias requeridas para interponerlo, las cuales fueron requeridas dentro de los dos días siguientes a la notificación del auto que niega el recurso de apelación, tal como lo exigen los artículos 1137 y 1139 del Código Judicial.

DÉCIMO PRIMERO: No obstante, el Primer Tribunal Superior de Justicia, sin entrar a analizar los extremos que conforman el recurso de hecho presentado en contra del Auto N° 2676 de 25 de

> noviembre de 1997, expedido por el Juez Segundo del Circuito, Ramo Civil, se declara inhibido para conocer del negocio en comento, pretextando supuesta incompetencia originada en el hecho de que con anterioridad, el Primer Tribunal Superior de Justicia, en Sala Unitaria, mediante resolución fechada el 2 de septiembre de 1997, declaró que este negocio debía ser conocido por el Tercer Tribunal Superior de Justicia y mas (sic) aún porque el Tercer Tribunal Superior de Justicia asumió el conocimiento del proceso por medio de resolución fechada 12 de septiembre de 1997, mediante la cual se fijaron los términos para sustentar la apelación y presentar los alegatos de la parte opositora, argumento éste que desconoce el hecho de que el Tercer Tribunal Superior de Justicia, mediante Resolución de 30 de septiembre de 1997, decretó la nulidad de todo lo actuado en grado de apelación, a propósito del negocio bajo estudio. Por lo tanto, se inhibió de conocer el recurso de hecho sin señalar a quién corresponde la competencia.
>
> DÉCIMO SEGUNDO: Se mantiene de esta manera una medidas cautelar que impide a nuestro mandante la utilización de su nombre debidamente inscrito en el Registro Público, violentando de esta manera el principio de legalidad de los actos administrativos y la fe pública registral, causando graves perjuicios de tipo económico y moral".

Luego de ser admitida la acción, se libró la Nota S-G-P-424-98 de 18 de marzo pasado, en que se le anunció al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Superior de Justicia la admisión del presente amparo, y se le solicitó el envío de la actuación o en su defecto, un informe de los hechos materia de la acción, enviando dicho Tribunal el cuadernillo contentivo del recurso de hecho interpuesto por la amparista.

Del cúmulo de hechos expuestos por el actor, se desprende una confusión de Jurisdicción por parte de los Funcionarios Juzgadores, así como errores en el procedimiento, tanto de la parte demandada como de aquellos, sin dejar de considerar que el objetivo de la presente acción constitucional es el reconocimiento y concesión del derecho reconocido en la Carta Magna a favor del actor, quien considera que se le ha violado.

Dentro de este marco de referencia, se observa que la demandante K-MART CORPORATION solicitó al Juez Segundo de Circuito Civil la práctica de "medidas conservatorias o de protección", que fueron negadas por dicho Funcionario mediante el auto N° 645 de 9 de febrero de 1995, lo que provocó su recurso de apelación.

Dicha apelación fue admitida y concedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, razón por la que, al dictar el Juez Segundo de Circuito Civil el auto N° 1010 de 6 de mayo de 1995, en que se decretaron -ejecutando el fallo de alzada- las medidas cautelares anteriormente negadas, y fundándose en el numeral 10° del artículo 521 del Código Judicial -que señala que las resoluciones que decretan medidas cautelares son susceptibles de recurso de apelación sin la suspensión de la medida- la contra parte, K-MART INTERNATIONAL GARMENT CORPORATION, interpuso recurso de apelación contra este auto N° 1010 de 6 de mayo de 1995, que ejecutaba las medidas cautelares ordenadas en apelación.

Este segundo recurso de apelación fue admitido por el Juez Segundo de Circuito Civil de Panamá, quien lo remitió al Primer Tribunal Superior de Justicia, cuyo Magistrado Sustanciador, mediante resolución en Sala Unitaria, ordenó remitir el caso al Tercer Tribunal Superior de Justicia, por considerar que los artículos 141 y 143 de la Ley N° 29 de 1° de febrero de 1996 le otorgaba competencia privativa para conocer este caso.

Entonces, el Tercer Tribunal Superior acogió el conocimiento del caso, fijando los términos para que las partes sustentaran sus alegatos; pero la Magistrada Sustanciadora del Tercer Tribunal Superior en el proveído de mero obedecimiento del 30 de septiembre de 1997 anuló los trámites realizados por dicho Tribunal y ordenó remitir el expediente a primera instancia para que continuara con su trámite normal.

Señaló dicho proveído que el recurso en comento pretendía que esa autoridad -Tercer Tribunal Superior-, que es de igual jerarquía que el Primer Tribunal Superior, adquiriera la competencia del caso y se pronunciara nuevamente sobre un tema ya abordado por el Primer Tribunal, por razón de la competencia transitoria que tenía.

También estimó el proveído en comento que al no contener el Auto N° 1010 del Juez Segundo de Circuito -que ejecutaba la concesión de la medida cautelar otorgada por el Primer Tribunal Superior- ninguna decisión distinta del cumplimiento de lo resuelto por el Primer Tribunal Superior de Justicia, no se debió conceder la apelación, porque "produciría un desfase jurídico", haciendo notar que se podría revocar la decisión apelada, que a su vez cumplía otra decisión de segunda instancia.

Luego entonces, en obedecimiento a ese proveído de 30 de septiembre de 1997 del Tercer Tribunal Superior de Justicia, el Juez Segundo de Circuito de lo Civil negó el recurso de apelación de K-MART INTERNATIONAL GARMENT CORPORATION, mediante auto 2627 de 25 de noviembre de 1997.

En este estado, la amparista interpuso el recurso de hecho ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, contra la negativa de ese recurso de apelación, es decir, contra el precitado auto 2627 emitido por el Juez Segundo de Circuito.

Acusa la amparista al Primer Tribunal Superior de Justicia de que, sin contemplar el contenido del recurso de hecho, se declaró inhibido de conocer el negocio por considerarse incompetente, considerando que ya ese Tribunal en Sala Unitaria -en resolución del 2 de septiembre de 1997- había declinado la competencia en el Tercer Tribunal Superior de Justicia, toda vez que éste asumió el conocimiento del proceso mediante resolución calendada 12 de septiembre de 1997 -en la que también se fijó términos para sustentar el recurso de apelación y su oposición-, pese a que dicho Tribunal declaró nula la tramitación referente al recurso de apelación anteriormente interpuesto.

Por ello, consideran los representantes de la sociedad K-MART INTERNATIONAL GARMENT CORPORATION que el Primer Tribunal Superior de Justicia "se inhibió de conocer el recurso de hecho sin señalar a quién corresponde la competencia".

Pues bien, es el parecer de esta Corporación de Justicia que le asiste la razón al amparista.

La actuación del Tercer Tribunal Superior de Justicia salvaguardó el debido proceso al reconocer, después de asumir la declinatoria de competencia del Primer Tribunal Superior de Justicia, que era nula la acogida del segundo recurso de apelación contra la misma decisión tomada por el Juez Segundo de Circuito de lo Civil, ya planteado extensamente con anterioridad.

Pero este no es el argumento fundamental para establecer la competencia del Primer Tribunal Superior de Justicia para conocer el recurso de hecho.

Consideró el Primer Tribunal Superior en el auto contra el cual se acciona, que la Ley N° 29 de 1° de febrero de 1996 -que creó el Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá- le confiere en los artículos 141 y 143 competencia privativa al Tercer Tribunal Superior para conocer las apelaciones contra las sentencias o autos dictadas en primera instancia por los Juzgados de Circuito.

Pero no le asiste la razón a este Tribunal porque el artículo 246 de dicha Ley N° 29 de 1996 -atinente a su entrada en vigencia y efectos en el tiempo- estableció en su segundo párrafo, que:

> "Artículo 246. Entrada en vigencia y efectos en el tiempo. ... Esta Ley sólo se aplicará a los hechos, actos, sucesos o situaciones jurídicas o de hecho contemplados en ella, que se realicen u ocurran con posterioridad a su entrada en vigencia".

De la norma parcialmente transcrita se deduce, a contrario sensu, que a los

actos contemplados en dicha Ley ocurridos antes de su entrada en vigencia, no le serán aplicables la misma; el proceso llevado a cabo en el Juzgado Segundo de Circuito Civil de Panamá data de antes del 1° de febrero de 1996, es decir, del 30 de mayo de 1994 cuando K-MART CORPORATION interpuso demanda ordinaria contra K-MART INTERNATIONAL GARMENT CORPORATION; en consecuencia, el Primer Tribunal Superior de Justicia mantiene la competencia para conocer el recurso de hecho.

Lo anterior también viene sustentado en el artículo 229 del Código Judicial, que es del siguiente tenor:

> "ARTÍCULO 229. La jurisdicción y la competencia se determinará por la ley que rija al proponerse la demanda.
>
> Por lo tanto, si la nueva Ley varía la jurisdicción o la competencia, solo será aplicable a los procesos que se promuevan con posterioridad a su vigencia".

Por lo tanto y como ya se dijo, el Primer Tribunal Superior de Justicia debió conocer el recurso de hecho presentado, y no inhibirse por falta de competencia, como lo hizo.

Por lo tanto, se ha infringido el debido proceso que le asiste a K-MART INTERNATIONAL GARMENT CORPORATION.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por firma forense Marré & Asociados en representación de la Sociedad K-MART INTERNATIONAL GARMENT CORPORATION; en consecuencia, REVOCA el Auto S/N de 10 de febrero de 1998, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, y ORDENA que conozca el recurso de hecho interpuesto contra el auto N° 2676 de 25 de noviembre de 1997, emitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ A TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SILVIO GUERRA MORALES, EN REPRESENTACIÓN DEL DOCTOR JOSÉ RIGOBERTO ACEVEDO CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 31 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR EL PLENO DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **JOSÉ RIGOBERTO ACEVEDO**, por conducto de su procurador judicial, licenciado SILVIO GUERRA MORALES, ha promovido acción constitucional de amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer contenida en la resolución sin fecha de 31 de marzo de 1998, proferida por el **SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL**, en cuya virtud se mantiene la evaluación del desempeño de cargo de Juez del Circuito, desestimando la reconsideración promovida contra el mencionado acto administrativo.

Corresponde en la presente etapa procesal determinar si la acción constitucional intentada cumple con los presupuestos que, para su admisibilidd,

prevén el Código Judicial y la doctrina que ha establecido este Pleno.

Como es sabido, el denominado recurso de amparo de garantías constitucionales es un proceso constitucional que tiende a restablecer la lesión que, como consecuencia de un acto de autoridad contentivo de una orden de hacer o de no hacer, es decir, un mandato imperativo que impone una determinada conducta o abstención, resultare violatorio de los derechos fundamentales del proponente, consignados en la Constitución Política. Es, pues, un remedio constitucional contra actos lesivos de derechos fundamentales de una persona.

Este Pleno, en un número plural de decisiones en torno a la admisibilidad de las demandas que dan inicio a este proceso constitucional, se ha pronunciado sobre la inadmisibilidad de la impugnación de actos meramente confirmatorios, toda vez que los actos susceptibles de impugnación son los actos originarios. Dichos requerimientos básicos de admisibilidad de las demandas de amparo de garantías constitucionales no han quedado satisfechos, luego de un análisis de la demanda de amparo promovida, como se pasará a destacar.

En primer lugar, la acción constitucional que ocupa a este Pleno va dirigida contra un acto de autoridad mediante el cual resuelve mantener, en todas sus partes, una evaluación que previamente había realizado al desempeño del amparista para determinar su ingreso o no a la Carrera Judicial, por la autoridad acusada. Salta a la vista que el acto impugnado es un acto administrativo confirmatorio del acto administrativo de evaluación del desempeño del ex-servidor judicial.

Desde otra perspectiva, ha tenido ocasión de señalar este Pleno que la orden que posibilita la acción constitucional de amparo de garantías constitucionales es la orden originaria, en este caso contentiva de la evaluación del rendimiento del amparista, y no un acto administrativo dictado durante un procedimiento de evaluación de desempeño de los servidores judiciales aspirantes a ingresar a la Carrera Judicial.

Es esta decisión originaria dictada como consecuencia de un medio de impugnación utilizado por quien tiene interés legítimo, la que podría lesionar derechos fundamentales del amparista, a menos que la resolución que accede a la decisión de un recurso previsto en el ordenamiento jurídico revoque en todas sus partes y, por ello, reemplace la decisión, acto administrativo de reemplazo que es el que habría que enjuiciar para determinar si es violatorio de un derecho fundamental consignado en la Constitución Política, extremo que no es el que caracteriza al acto impugnado, sino todo lo contrario, una decisión que se limita a confirmar la decisión que no ha satisfecho al amparista. Así lo ha sentado este Pleno en un número plural de ocasiones, bastando al efecto citar las sentencias de 8 de mayo de 1996, 12 de diciembre de 1993 y 12 de julio de 1994, por citar unas pocas decisiones de este Pleno sobre la materia.

De otra parte, la decisión cuya reconsideración se solicitó y la reconsideración misma constituyen actos administrativos relativos a la administración de personal de lo servidores judiciales, de la denominada vía gubernativa, cuyo agotamiento constituye parte de los presupuestos procesales para interponer la acción contencioso-administrativa que corresponda, sea de nulidad o de plena jurisdicción, preferencia a la cual debe acudir el afectado en lugar del amparo de garantías constitucionales, como tiene sentado este Pleno, también en un número plural de ocasiones, como por ejemplo las sentencias de 24 de agosto de 1994, de 8 de mayo de 1992, de 27 de enero de 1993 y la de 24 de septiembre de 1994. Además, desde la posición de la tutela judicial efectiva del afectado, resulta más apropiado la discusión de la decisión en sede contencioso-administrativa, que no constituye un proceso sumario, como lo es el de amparo de garantías constitucionales, sino por el contrario, un proceso pleno en el cual pueden hacer uso de todos los medios de defensa y de aportación de pruebas que considere apropiadas para acreditar la lesión que el acto administrativo le ha causado.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por el licenciado SILVIO GUERRA MORALES,

en representación del doctor JOSÉ RIGOBERTO ACEVEDO, contra la orden de no hacer contenida en la resolución s/n de 31 de marzo de 1998, dictada por el Pleno del SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICDO. LUIS A. MORENO EN REPRESENTACIÓN DE HOSPITAL CENTRO MÉDICO CARIBE, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 3 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9 DE LA PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Luis A. Moreno H., apoderado especial de la señora **DALYS RODRÍGUEZ M.**, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la resolución proferida por la **Junta de Conciliación y Decisión N° 9**, el 3 de marzo de 1998, dentro del proceso laboral instaurado por el señor JOSÉ MERCEDES BROWN contra CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.

Cumplidos los trámites correspondientes, el Magistrado Sustanciador acogió la presente acción constitucional y, en consecuencia, solicitó la actuación correspondiente o, en su defecto, un informe sobre los hechos materia de la misma, ordenando la suspensión de la orden impugnada durante la tramitación del recurso.

La Junta de Conciliación y Decisión N° 9 remitió junto con el Oficio N° 52-98 de 2 de abril de 1998, el expediente que contiene el proceso laboral instaurado por el señor JOSÉ MERCEDES BROWN contra CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.

El amparo se encuentra pendiente de decisión, a lo que se procede, previas las siguientes consideraciones.

La parte recurrente fundamenta su acción en los siguientes hechos:

1) El señor José MERCEDES BROWN instauró demanda laboral por despido injustificado contra CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A. ante la Junta de Conciliación y Decisión N° 9.

2) La sociedad demandada compareció al proceso mediante su apoderado judicial.

3) La señora DALYS RODRÍGUEZ no figuró como parte demandada en ese proceso, ni es ni ha sido nunca directora o dignataria de CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.

4) La Junta de Conciliación y Decisión N° 9 ordenó el reintegro del señor JOSÉ MERCEDES BROWN.

5) No obstante lo anterior, la Licenciada DALYS RODRÍGUEZ fue notificada de la resolución que se ataca mediante esta acción de amparo, en la cual se le impone a CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., sanción pecuniaria por supuesto

desacato y por esta razón pende en su contra la posibilidad de ser arrestada.

6) Esta orden no ha sido notificada al apoderado judicial ni al representante legal de CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.

La recurrente en amparo sostiene que como consecuencia de lo anteriormente señalado, la orden contenida en la resolución dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 9 de 3 de marzo de 1998, viola la garantía del debido proceso que se encuentra consagrada en el artículo 32 de la Constitución Nacional.

La orden demandada se encuentra contenida en la parte resolutiva de la resolución proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 9 de 3 de marzo de 1998, que es del tenor siguiente:

> "Por las anteriores consideraciones, la JUNTA DE CONCILIACION Y DECISION NÚMERO NUEVE (9). COLON, R.P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. DECRETA SANCIÓN PECUNIARIA a la empresa o quien ostenta el cargo de representación de CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., concediendo plazo de dos (2) días hábiles, a partir de su notificación, para que el empleador demandado cumpla con la orden de reintegro; al pago de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/4,750.00) en concepto de Salarios Caídos desde la fecha de despido hasta un máximo de 5 meses; al pago de quince porciento (sic) (15%) de Costas de ambas instancias; inclusive se adiciona por cada día de renuencia o resistencia, al pago de CUARENTA Y TRES BALBOAS CON OCHENTA Y CINCO CENTESIMOS (B/.43.85) equivalente al salario por día de labores, y que rige desde el día martes tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), con la ADVERTENCIA que transcurrido este plazo, la multa será de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00) diarios, por cada día de labores en que debe estar el demandante en su puesto, y por renuencia del empleador se hace imposible.
>
> La Junta aclara que la sanción pecuniaria es independiente de las otras condenas contenida en la Sentencia y que la misma podrá ser graduadas compulsivamente y progresivamente a discreción de la misma.
>
> La Junta inclusive ADVIERTE a la demandada que la sanción pecuniaria ordenada en esta resolución, podrá ser sustituída (sic) por el arresto del empleador, conforme al artículo 220 del Código de Trabajo, y de ser así, la sanción pecuniaria se computará desde el momento en que vence los dos (2) días que habla esta resolución, hasta la fecha anterior en que se arresta al empleador.
>
> La Junta reserva el Derecho de tomar otras acciones tendientes a que su Sentencia y la Ley de la República sea cumplida, dentro del proceso laboral promovido por JOSÉ MERCEDES BROWN". (F. 4).

El análisis de las constancias procesales revela que la señora DALYS RODRÍGUEZ fue designada administradora judicial dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) contra CENTRO DEL MÉDICO DEL CARIBE, S. A., mediante resolución dictada por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Colón, Ramo Civil, el 2 de enero de 1996, consultable a foja 18.

Igualmente, de foja 20 a 23 aparece la diligencia de entrega de la administración judicial a la señora Rodríguez, en la que el administrador anterior "hace formal entrega de las instalaciones y Administración del Centro" y también de sus libros de contabilidad.

El artículo 535 del Código Judicial establece las obligaciones que tiene el administrador judicial, en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 535. Los secuestres de establecimientos, empresas o

> haciendas de cualquier clase tienen, además de las obligaciones generales de los depositarios, las especiales de no interrumpir las labores del establecimiento o hacienda; cuidar de la conservación y de todas las exigencias, llevar razón puntual y diaria de todos los ingresos y egresos; procurar seguir el sistema administración vigente; impedir todo desorden; colocar el producto líquido en un banco de la localidad, deducidos los gastos de producción, y dar cuenta y razón del cargo mediante informe general una vez al mes y en detalle cuando aquél termina y siempre que se le pida. El secuestre o interventor en este caso será el administrador del establecimiento o hacienda; pero puede conservar al propietario como empleado o asesor para que no sufra perjuicio el negocio".

La norma transcrita pone de manifiesto que al administrador judicial le corresponde el manejo del establecimiento secuestrado o intervenido, entendiéndose que dentro de éste tiene a su cargo los trabajadores de dicha empresa.

En el caso que nos ocupa, la resolución que se impugna impone una sanción pecuniaria contra "la empresa o quien ostenta el cargo de representación de CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.", advirtiendo que en caso de renuencia podrá ser sustituida por el arresto del empleador, en vista de que no se ha hecho efectivo el reintegro del trabajador JOSÉ MERCEDES BROWN, con fundamento en el artículo 220 del Código de Trabajo.

La orden no se dirige, entonces, contra la señora DALYS RODRÍGUEZ sino contra la empresa. Pero ésta, como administradora de ese establecimiento, es quien debe cumplir con el reintegro del señor JOSÉ MERCEDES BROWN, que se ordenó en sentencia que se encuentra ejecutoriada, luego de surtidas las dos instancias de un proceso laboral en el que compareció y se defendió CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., por medio de su representante legal.

Consecuentemente, debe negarse la presente acción constitucional, porque la orden impugnada no viola la garantía fundamental del debido proceso, consagrada en el artículo 32 de la Constitución Nacional.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la señora DALYS RODRÍGUEZ, contra la orden de hacer contenida en la resolución dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 9, el 3 de marzo de 1998.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO DAMASO DÍAZ D., EN REPRESENTACIÓN DE MARCO L. DÍAZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Dámaso Díaz D., actuando en representación de **MARCO L. DIAZ,**

ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en el Auto de fecha 20 de noviembre de 1997, proferido por el **Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.**

En dicha demanda se formula pretensión consistente en que la Corte Suprema de Justicia revoque la orden expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial en la que previa revocatoria del Auto N° 83-CJD-13-97 de 11 de agosto de 1997, emitido por la Junta de Conciliación N° 13, ordena el levantamiento del secuestro y decreta la nulidad de todas las actuaciones a partir del Auto N° 73 de 25 de junio de 1997, de la Junta de Conciliación y Decisión N° 13 y ordena que se devuelva el expediente a su lugar de origen para que se cumplan con las disposiciones legales pertinentes, dentro del proceso instaurado por Marcos L. Díaz.

El apoderado judicial de la parte demandante alega que se ha violado de manera directa el artículo 32 de la Constitución Nacional, que consagra la garantía del debido proceso, puesto que el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial "resolvió un Recurso de Apelación de la parte demandada, dentro de un trámite que se ventila inoída parte, o sea, con audiencia solamente del accionante, tal como lo dispone el ordinal 1 del artículo 696, del Código de Trabajo, actuación del Tribunal Superior de Trabajo que lesiona totalmente los derechos de nuestro representado, al dejarlo completamente desamparado sobre las resultas del juicio". Añade que el Tribunal Superior de Trabajo debió examinar si la resolución procesal adolecía de algún defecto o vicio que de no ser saneado produciría un fallo inhibitorio, o la nulidad del proceso, sin embargo -desconociendo la figura jurídica del saneamiento contemplada en el artículo 578 del Código de Trabajo- actúa en contravención de la precitada excerta legal revocando el Auto apelado y ordenando el levantamiento del secuestro, violando el debido proceso y lesionando los legítimos derechos que sobre las resultas del juicio tiene el trabajador por la reclamación de las prestaciones laborales que por ley le corresponde.

Observa el Pleno que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, resuelve en segunda instancia, la solicitud de secuestro interpuesta por el apoderado judicial de Marcos A. Díaz contra la empresa Dames & Moore, Inc.

El Pleno de esta Corporación pasa a resolver la presente controversia.

Se trata, pues, de un proceso laboral que se inicia en las Juntas de Conciliación, cuando el trabajador Marcos L. Díaz solicita acción formal de secuestro sobre los bienes muebles de la empresa DAMES & MOORE, INC. y dineros hasta la concurrencia de cuarenta y seis mil seis balboas con noventa y dos centésimos (B/.46,006.92). La Junta de Conciliación y Decisión N° 13 decreta el secuestro solicitado mediante Auto N° 83-JCD-13-97 de 11 de agosto de 1997. El mismo es apelado ante el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial quien mediante Auto expedido el 20 de noviembre de 1997, previa revocatoria del auto apelado y el levantamiento del secuestro ordenado, decreta la nulidad de todas las actuaciones y ordena que se devuelva el expediente a su lugar de origen para que cumpla con las disposiciones legales correspondientes, al considerar que la Junta de Conciliación y Decisión carecía de competencia para ordenar el secuestro solicitado.

En relación a la competencia el Pleno estima que las Juntas de Conciliación y Decisión están plenamente facultadas para conocer de la solicitud de secuestro interpuesta por el trabajador por cuanto el artículo 1° de la Ley N° 7 de 1975 por medio de la cual se crean las Juntas de Conciliación y Decisión es claro al establecer que las mismas tienen competencia privativa para conocer de aquellas demandas por despido injustificado, de las demandas interpuestas por los trabajadores domésticos, y de cualquier demanda mediante las cuales se reclamen cualesquiera prestaciones con una cuantía hasta de mil quinientos balboas (B/.1,500.00). El primer numeral se refiere al tipo de proceso (despido injustificado), el segundo en atención al tipo de trabajador (empleados domésticos) y el último en relación a la cuantía(B/. 1,500.00). De manera tal que, en los procesos de despido injustificado no hay límite en relación a la cuantía reclamada por lo que la Junta de Conciliación y Decisión N° 13 tiene competencia para conocer de la solicitud de secuestro interpuesta por el

trabajador, si bien el artículo 14 de la Ley N° 7 de 1975 les faculta para comisionar a los Jueces Seccionales de Trabajo para la práctica de cualesquiera medidas cautelares (incluyendo el secuestro), de lo cual resulta palmario el hecho de que si pueden delegar la ejecución de dichas medidas cautelares, también puede entonces ejecutarlas la misma junta. Y es que el artículo 697 del Código de Trabajo es claro al instaurar la figura del secuestro en cualquier proceso para evitar que el mismo sea ilusorio en sus efectos y que la parte demandada trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe los bienes muebles o inmuebles que posea.

En este mismo orden de ideas tenemos que el artículo 16 de la Ley N° 7 de 1975 concede a las Juntas de Conciliación y Decisión las mismas facultades que el Código de Trabajo y disposiciones complementarias se atribuyen a los Jueces Seccionales de Trabajo, quienes igualmente están facultados para conocer de las solicitudes de secuestro interpuestas por el trabajador. De lo anterior se colige que si efectivamente, la Junta de Conciliación y Decisión es competente para conocer de la solicitud antes aludida también lo es el Tribunal Superior de Trabajo para aprehender el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por la empresa demandada.

Efectivamente, la Junta de Conciliación y Decisión N° 13, según la actuación que corre de fojas 1 a 48 de los antecedentes que acompañan el expediente principal, admitió, decretó y llevó a cabo una acción de secuestro sobre los bienes y dineros de la empresa DAMES & MOORE, INC. para lo cual estaba plenamente facultada según lo dispuesto en los artículos 1, 14 y 16 de la Ley N° 7 de 1975 antes comentados. Sin embargo, el amparista señala que se ha violado el debido proceso por cuanto la medida cautelar del secuestro debe practicarse inoída parte, es decir, sin audiencia del demandado por lo que -a su juicio- el único que puede apelar al auto de secuestro es la parte accionante o sea la que interpone la acción de secuestro.

Es necesario, pues, tener presente que la acción de amparo que nos ocupa gira en torno a la orden de hacer expedida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial mediante auto de 20 de noviembre de 1997, dictado en grado de apelación, dentro de la acción de secuestro decretada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 9, visible a fojas 57 a 61 de los antecedentes. De manera que el objeto de examen en el proceso de amparo constitucional que conoce el Pleno de la Corte debe centrarse, precisamente, en la referida orden acusada de conformidad con el libelo de la accionante.

Resulta entonces imprescindible analizar el aspecto siguiente: si como hemos señalado con anterioridad, la Junta de Conciliación y Decisión tiene competencia para conocer de las acciones de secuestro, de igual modo tiene competencia el Tribunal Superior de Trabajo para conocer el recurso de apelación concedido por la Junta de Conciliación y Decisión N° 13, máxime cuando el artículo 914 del Código de Trabajo es claro al señalar que "el recurso de apelación procede contra resoluciones dictadas en primera instancia y sólo cuando se trate de casos expresamente previstos en la ley". Dicho artículo fue adicionado por el artículo 10 en relación con el artículo 8 de la Ley N° 1 de 1986 al disponer que el Recurso de Apelación puede interponerse contra las sentencias dictadas por las Juntas de Conciliación y Decisión en los procesos cuya cuantía exceda de dos mil balboas (B/.2,000.00), o cuando el monto de las prestaciones e indemnizaciones que se deban pagar en sustitución del reintegro, incluyendo los salarios vencidos, exceda de dicha suma ante el Tribunal Superior de Trabajo. Por otro lado, no es correcto la afirmado por el amparista por cuanto si bien es cierto que el numeral 1° del artículo 696 señala que las medidas cautelares se tramitan sin audiencia del demandado, también es cierto que el numeral 7 de esa misma norma señala que las resoluciones que decretan o rechacen las medidas cautelares admiten apelación, por ende, el Tribunal Superior de Trabajo no infringió el debido proceso por el hecho de haber conocido la apelación interpuesta.

Ahora bien, el Pleno observa que en ningún momento el accionante reclamó o se opuso a la concesión del recurso de apelación interpuesto por la empresa secuestrada, a pesar de que se le concedió la oportunidad procesal para hacerlo, pues no presentó alegato alguno dentro del término fijado por el Tribunal

Superior de Trabajo. De igual forma, si bien es cierto que las medidas cautelares, entre ellas el secuestro son inicialmente inoída parte, una vez la parte secuestrada tiene conocimiento del secuestro ejecutado en su contra, la misma tiene todas las oportunidades procesales de defenderse como efectivamente lo hizo a través del recurso de apelación interpuesto lo que en ningún momento sitúa al secuestrante en estado de indefensión.

Por otro lado, esta Corporación estima que en el presente caso no era procedente por parte del Tribunal Superior de Trabajo la aplicación del artículo 578 del Código de Trabajo que tiene que ver con la figura del saneamiento, pues dicha norma es clara al señalar que "inmediatamente después de vencido el término de traslado de la contestación de la demanda, el Juez examinará si la relación procesal adolece de algún defecto o vicio que, de no ser saneado, producirá un fallo inhibitorio, o la nulidad de proceso" y en el presente caso el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial conoce el proceso en grado de apelación lo cual no se identifica con la situación arriba descrita.

En todo caso, el amparista señala como infringido el artículo 32 de la Constitución Nacional relativo al debido proceso, sin embargo, el Pleno observa que la parte actora fue debidamente representada a lo largo de todo el proceso laboral por cuanto fue ésta quien presentó la petición de secuestro, se le corrió traslado del recurso de apelación interpuesto por la parte afectada por la medida cautelar dándosele oportunidad procesal para oponerse a dicha apelación y no lo hizo.

Sin embargo, el Pleno estima que el Tribunal Superior de Trabajo incurre en un evidente error de interpretación al considerar que las Juntas de Conciliación y Decisión carecen de competencia para decretar el secuestro solicitado lo cual a su juicio se constituía en un causal de nulidad, en base al cual decide revocar el auto apelado, ordenar el levantamiento del secuestro, decretar la nulidad de todas las actuaciones a partir del Auto 73-JCD-13-97 y disponer la devolución del expediente a su lugar de origen, mediante sentencia impugnada. Dado que las Juntas de Conciliación y Decisión tienen efectivamente competencia para conocer y ejecutar medidas cautelares, el Pleno considera que se ha violado el debido proceso al decretar el levantamiento del secuestro ordenado y dejar al trabajador en evidente indefensión.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por el Licenciado Dámaso Díaz D. en representación de Marco L. Díaz contra la orden de hacer dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial y REVOCA la orden de hacer dictada por dicho Tribunal mediante Auto de 20 de noviembre de 1997 el cual previa revocatoria del Auto N° 83-CDJ-13-97 de 11 de agosto de 1997 emitido por la Junta de Conciliación y Decisión N° 13, ordena el levantamiento del secuestro, decreta la nulidad de todas las actuaciones a partir del Auto N° 73 de 25 de junio de 1997 y ordena la devolución del expediente a su lugar de origen para que se cumplan con las disposiciones legales pertinentes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA A.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA WATSON & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE DESARROLLO GOLF CORONADO, S. A. CONTRA LAS ORDENES DE HACER Y NO HACER EMITIDAS POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA MEDIANTE NOTA N° 496-D.L., DE 19 DE MARZO DE 1998 Y EL RESUELTO N° 104-R-54- DE 8 DE ABRIL DE 1998. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma de abogados WATSON & ASOCIADOS en su condición de apoderada legal de **DESARROLLO GOLF CORONADO S. A.** ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra las órdenes de hacer y de no hacer contenidas en la "Nota N° 496- D.L., de 19 de marzo de 1998, y su acto confirmatorio mediante resuelto # 104-R-54 de 8 de abril de 1998" proferidas por el **Ministro de Gobierno y Justicia.**

Esta Superioridad procede al examen de la demanda de amparo, a fin de determinar si cumple con los requisitos legales que hacen viable su admisión.

Vemos que el amparista menciona como órdenes impugnadas las contenidas en dos documentos, dictados por el Ministro de Gobierno y Justicia: una Nota de 19 de marzo de 1998 y un resuelto que confirma la misma, de fecha 8 de abril de 1998.

El amparista alega que las mencionadas órdenes "fueron recurridas mediante los medios y trámites ordinarios previstos en la Ley para su impugnación (a través del recurso de reconsideración, con lo cual se agotó la vía ordinaria en la esfera administrativa)". Sin embargo, sólo ha aportado copia autenticada de la Nota N° 496- D.L. de 19 de marzo de 1998, que consta a fojas 4-5, mas no del resuelto de 8 de abril de 1998 que, según expresa, la confirmó al decidirse recurso de reconsideración.

Este señalamiento se hace porque es preciso acreditar el agotamiento de la vía gubernativa, como presupuesto fundamental para la admisión de la acción de amparo contra un acto administrativo. Y, conforme a reiterada jurisprudencia, se entiende agotada la vía cuando se han utilizado los recursos de reconsideración, apelación y, en última instancia, el contencioso-administrativo de Plena Jurisdicción.

Además, cabe resaltar que cuando se interpone un recurso de amparo es necesario preconstituir la prueba, algo que no ha sido cumplido en el caso de la demanda presentada. Esta omisión en que ha incurrido el amparista también le impide al tribunal de amparo examinar con el mejor criterio la posible violación constitucional.

Conforme a las consideraciones expuestas no es procedente acoger la presente acción de amparo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por DESARROLLO GOLF CORONADO, S. A. contra las órdenes emitidas por el Ministro de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA AROSEMENA Y AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE RAQUEL RAFAELA AROSEMENA BEITÍA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 49-DTLO. DE 10 FEBRERO DE 1998, DICTADA POR LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO.

PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Arosemena y Arosemena, actuando en su condición de apoderada especial de la señora **RAQUEL RAFAELA AROSEMENA BEITÍA**, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 49-DTLO, dictada por la **Alcaldía del Distrito de Panamá, el 10 de febrero de 1998.**

La resolución impugnada resolvió sancionar a la señora CONCEPCIÓN DE AROSEMENA con una multa de cincuenta balboas (B/.50.00), por haber violado el Acuerdo Municipal N° 116 de 9 de julio de 1996 y, además, ordenó demoler, a sus costas, el muro construido fuera de la línea de propiedad, en inmueble ubicado en el Corregimiento de San Francisco, Calle 68, Urbanización Carrasquilla.

La presente acción constitucional se encuentra pendiente de resolver sobre su admisibilidad, a lo cual se procede, previas las siguientes consideraciones.

En primer lugar, al analizar el contenido del libelo del amparo se observa que no se ha incluido el concepto de la infracción de las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el ordinal 4 del artículo 2610 del Código Judicial.

En segundo lugar, la orden de hacer consiste en una resolución proferida por la Alcaldía de Panamá, acto administrativo susceptible de impugnación mediante los recursos de reconsideración y de apelación en subsidio.

Aún cuando la recurrente en amparo no era parte en el proceso administrativo dentro del cual fue dictada la resolución atacada, como interesada en los resultados del mismo pudo acreditar su interés legítimo ante la autoridad correspondiente y hacer uso de los recursos ordinarios que concede la ley.

Consecuentemente, al no haber agotado los medios ordinarios de impugnación como lo exige tanto la ley como la jurisprudencia de esta corporación judicial, el presente amparo resulta manifiestamente improcedente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2606 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la firma forense Arosemena y Arosemena, en representación de la señora RAQUEL RAFAELA AROSEMENA BEITÍA, contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 49 DTLO, dictada por la Alcaldía del Distrito de Panamá, el 10 de febrero de 1998.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ROBERTO LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ I. FUENTES, ALEX SAAVEDRA Y WILLIAMS A. QUIROZ CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL EDICTO #29 EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, MEDIANTE EL CUAL NOTIFICÓ LA RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA #15-DGT-53-98, DE 2 DE MARZO DE 1998. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ROBERTO RAÚL LÓPEZ V., en representación de los señores **JOSÉ I. FUENTES, ALEX SAAVEDRA y WILLIAM A. QUIROZ,** ha promovido ante la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en el Edicto #29, emitido por el **DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO.**

Admitida la acción constitucional, el Magistrado Sustanciador, mediante providencia de 31 de marzo de 1998 (f. 41), solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación a esta Superioridad, o, en su defecto, un informe acerca de los hechos que han originado la presente acción, dentro del término de dos (2) horas contadas a partir del recibo de la nota en su Despacho.

Consta a foja 43 la Nota #112-SJ-98 de fecha 2 de abril de 1998 remitida por el licenciado SANTIAGO SANFORD, en su condición de DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, adjuntando a la misma el expediente contentivo de 491 fojas útiles.

LA ORDEN IMPUGNADA

La orden de hacer impugnada consiste en la notificación contenida en el Edicto #29, sin fecha, emitido por el DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, que es del tenor siguiente:

"Edicto N° 29
LA SUSCRITA SECRETARIA JUDICIAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO EN USO
DE SUS FACULTADES LEGALES

HACE SABER:

Que en el proceso laboral habido entre JOSÉ FUENTES, ALEX SAAVEDRA, WILLIAM QUIROZ y OTROS en contra de las empresas CONSTRUCTORA, S. A., LIGHT GACE MANUFACTURING, S. A., CORPORACIÓN INGENIERÍA AMADO, S. A., FIBRAS Y URETANOS, S. A., URBANIZACIÓN SOSONATE, S. A., CENTRO COMERCIAL MILLA OCHO, S. A., PROMOCIONES Y VENTA MILLA OCHO, S. A., INDUSTRIAS METALÚRGICAS DE PANAMÁ, S. A., CAMILO JOSÉ AMADO, ILEANA VARELA DE AMADO Y MELISSA AMADO VARELA se ha dictado RESOLUCIÓN N° DGT-53-98 del 2 de marzo de 1998 que dice así:

"En consecuencia, el suscrito Director General de Trabajo, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ABSOLVER a las empresas CONSTRUCTORA A (sic), S. A., LIGTHT GACE MANUFACTURING, S. A., FIBRAS Y URETANOS, S. A., CORPORACIÓN INGENIERIA METALURGICAS, S. A., MAQUINARIAS Y EQUIPOS, S. A., da la solicitud impetrada por JOSÉ FUENTES, ALEX SAAVEDRA, WILLIAM QUIROZ y OTROS por incumplimiento del Artículo 215 del Código de Trabajo.

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR que no existe relación de trabajo entre los actores del presente proceso laboral con los señores CAMILO JOSÉ AMADO D'OSSORIO, ILIANA VARELA DE AMADO, MELISSA AMADO, ni con la (sic) empresas INMOBILIARIA C. A., S. A.; URBANIZACION SONSONATE, S. A.; PROMOCIONES Y VENTAS MILLA OCHO, S. A. Y CENTRO COMERCIAL MILLA OCHO, S. A.

ARTÍCULO SEGUNDO (sic): LEVANTAR el SECUESTRO decretado sobre los bienes muebles e inmuebles decretado por la Junta de Conciliación y Decisión Número siete (7) a través de esta instancia Jurisdiccional.

Se fijan los honorarios de la Licenciada Cuba A. Nelson de

Villarreal en B/.100.00 (Cien Balboas con 00/100).

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 96, 213 acápite C, 215, 736, 749, 750 y siguientes, 764, 781 y siguientes y Ley 53 de 28 de agosto de 1975.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

(Fdo.) SANTIAGO SANFORD U.
Director General de Trabajo

Y PARA QUE SIRVA DE FORMAL NOTIFICACION SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN LOS ESTRATOS DE ESTE TRIBUNAL HOY TRES (3) DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998) SIENDO LAS NUEVE DE LA MAÑANA (9:00 A. M.) POR EL TERMINO DE VEINTICUATRO (24) HORAS.

CARMEN QUIROZ
Secretaria Judicial

VENCIDO EL TERMINO DE SU FIJACION SE DESFIJA EL PRESENTE EDICTO HOY CUATRO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO SIENDO LAS NUEVE DE LA MAÑANA.

CARMEN QUIROZ S.
Secretaria Judicia". (Fs. 488-489).

HECHOS QUE FUNDAMENTAL LA PRETENSION

El accionante fundamenta la acción constitucional mediante escrito que corre de foja 18 a 38 del expediente principal, en la que, en lo medular, señala:

1. Las empresas demandadas CONSTRUCTORA, S. A.; LIGHT GACE MANUFACTURING, S. A.; CORPORACION INGENIERIA AMADO, S. A.; MAQUINARIAS Y EQUIPOS MODERNOS, S. A.; URBANIZACION SONSONATE, S. A.; INGENIERIA AMADO, S. A.; FIBRAS Y URETANOS, S. A.; INMOBILIARIA C.A, S. A.; INDUSTRIAS METALURGICAS DE PANAMA, S. A.; PROMOCIONES Y VENTAS MILLA OCHO, S. A.; CENTRO COMERCIAL MILLA OCHO, S. A., son empleadores de "sesenta (60) cabezas de familia", manteniendo dichas empresas un crédito moroso con la Caja de Seguro Social, en concepto de cuotas obrero-patronal; así como también existe morosidad con los créditos personales de sus trabajadores (préstamos hipotecarios, casas comerciales) e incumplimiento de la Convención Colectiva.

2. Los dueños de las empresas demandadas suscribieron un contrato de compraventa el día 8 de marzo de 1994 sobre todas las fincas en donde se encuentran dichas empresas. Posteriormente suscribieron un contrato de arrendamiento con la empresa INDUSTRIAS METALURGICAS DE PANAMA, S. A., cuyo contrato fue incumplido por ambas partes.

3. El 21 de mayo de 1996, la Caja de Seguro Social intervino a las empresas morosas y mediante la jurisdicción coactiva designó un administrador judicial. En esa misma fecha, los señores CAMILO JOSE AMADO D'ORAZIO, ILEANA VARELA DE AMADO y MELISSA AMADO, abandonaron la administración que ejercían.

4. El 5 de junio de 1996, los 60 trabajadores de las empresas, presentaron solicitud de secuestro contra las mismas, ante la DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, así como la acción principal presentada el 17 de julio de 1996, en la que se adujo violación del artículo 215 del Código de Trabajo.

5. La acción de secuestro se enderezó contra las empresas CONSTRUCTORA, S. A.; LIGHT GACE MANUFACTURING, S. A.; CORPORACION INGENIERIA AMADO, S. A.; MAQUINARIAS Y EQUIPOS MODERNOS, S. A.; URBANIZACION SONSONATE, S. A.; INGENIERIA AMADO, S. A.; FIBRAS URETANOS, S. A.; INMOBILIARIA C.A., S. A.; INDUSTRIAS METALURGICAS DE PANAMÁ, S. A.; PROMOCIONES Y VENTA MILLA OCHO, S. A. y CENTRO COMERCIAL MILLA OCHO, S. A.; así como los señores CAMILO JOSE AMADO D'ORAZIO, ILEANA VARELA DE AMADO y MELISSA AMADO VARELA, por la cuantía de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS BALBOAS CON VEINTITRÉS CENTÉSIMOS

(B/.678,023.23), en concepto de prestaciones laborales y derechos adquiridos.

6. El 4 de febrero de 1998 se verificó la audiencia laboral, compareciendo los abogados BRAULIO CARRERA, en representación de INMOBILIARIA C. A, S. A.; URBANIZACION SONSONATE, S. A.; CENTRO COMERCIAL MILLA OCHO, S. A. y PROMOCIONES Y VENTAS MILLA OCHO, S. A.; la licenciada CUBA NELSON DE VILLARREAL, en carácter de abogada de oficio de las empresas INDUSTRIAS METALURGICAS DE PANAMA, S. A., INGENIERÍA AMADO, S. A. y OTRAS, y el accionante que representa los intereses de los trabajadores. En este hecho se hace la salvedad que no ocurrieron al acto de la audiencia los apoderados judiciales de los señores CAMILO AMADO D'ORAZIO, ILEANA VARELA DE AMADO y MELISSA AMADO.

7. Se señala en el hecho octavo de libelo, que la DIRECCION GENERAL DE TRABAJO profirió la Resolución N° 15-DGT-53-98 de fecha 2 de marzo de 1998, sin que se resolviera la solicitud de parte formulada el 23 de enero de 1998, con la cual se perseguía esclarecer hechos de importancia en el proceso laboral.

8. En el hecho noveno, expresa el accionante que, de acuerdo al informe de notificación personal que reposa en el expediente, el notificador se apersonó a sus oficinas y no logró notificarle en virtud de que se encontraba fuera del despacho.

9. Seguidamente indica que fueron notificados personalmente los licenciados BRAULIO CARRERA el día 3 de marzo a las 10:40 a. m.; al licenciado ALEJANDRO WATSON, a las 10:45 a. m. y al licenciado JERONIMO MEJIA a las 10:50 a. m. de la misma fecha.

10. En el hecho décimo primero, señala que el día 4 de marzo se notificó personalmente a la licenciada CUBA NELSON DE VILLARREAL a las 8:40 a. m., en los estrados de la DIRECCION GENERAL DE TRABAJO. En esta misma fecha indicada que, de acuerdo al informe secretarial de notificación personal, se apersonó el notificador a las oficinas del accionante quien no se encontraba. A renglón seguido manifiesta que el licenciado PERALTA fue notificado personalmente a las 3:00 p. m. en el referido despacho.

11. Argüye el recurrente que el día 12 de marzo de 1998, a las 9:30 a. m., se apersonó a la Secretaría Judicial de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, a objeto de indagar sobre el resultado de la audiencia laboral celebrada el 4 de febrero del año en curso, y se le informó que "en virtud del edicto No. 29, sin fecha, fijado el día 3 de marzo de 1998 a las 9:00 a. m. por 24 horas y desfijado el 4 de marzo de 1998 a las 9:00 a. m., la resolución No. 15-DGT-53-98, estaba debidamente notificada, impidiéndome presentar o anunciar mi alzada ante la adversa resolución".

12. Estima el accionante que la existencia del edicto N° 29, da lugar a que los términos corran "paritariamente" para todas las partes, por lo que considera que es imposible notificar personalmente a tres (3) abogados el día 3 de marzo de 1998, fecha ésta en que supuestamente fue fijado el aludido edicto. En cuanto a la notificación personal de los dos (2) abogados en los estrados del tribunal, se requería en este caso la emisión de una providencia por la cual se ordenaba la diligencia de notificación y al fijarse el edicto, una copia del éste debía adjuntarse al expediente principal, por lo que resulta imposible, de acuerdo al criterio del accionante, hacer las notificaciones de manera personal.

13. Seguidamente (hecho décimo cuarto), indica que el procedimiento de notificación utilizado por la DIRECCION GENERAL DE TRABAJO; es violatorio de la garantía constitucional del debido proceso.

14. Considera, además, que es ilegal la notificación, por cuanto existen dos (2) mecanismos antagónicos como lo son la notificación personal y por edicto en las mismas fechas. Sostiene también que el referido edicto no tiene fecha de emisión y no existe dentro del expediente providencia o resolución que ordene la emisión y fijación del mismo a efecto de realizar las notificaciones respectivas. Estima, además, que el referido edicto sólo ha tenido validez para unas de las partes, no así para la parte desfavorecida con la resolución. Concluye el accionante que la aplicación del edicto impugnado deja en total indefensión

jurídica a sus representados.

Como disposiciones infringidas, se señalan los artículos 32 y 20 de la Constitución Nacional; y los artículos 12 de la Ley N° 53 de 28 de agosto de 1975; artículo 877 y 888 del Código de Trabajo.

RESUMEN DEL INFORME RENDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO

Observa el Pleno, de foja 43 a 46 del expediente principal, la Nota N° 112-SJ-98 de fecha 2 de abril de 1998, dirigida por el DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO.

En primer lugar, se refiere al secuestro promovido por los demandantes el día 5 de junio de 1996, contra las empresas CONSTRUCTORA, S. A. LIGHT GACE MANUFACTURING, S. A., CORPORACION INGENIERIA AMADO, S. A., FIBRAS Y URETANOS, S. A., URBANIZACION SOSONATE, S. A., CENTRO COMERCIAL MILLA OCHO, S. A., PROMOCIONES Y VENTA MILLA OCHO, S. A., INDUSTRIAS METALURGICAS DE PANAMA, S. A., CAMILO JOSE AMADO, ILEANA VARELA DE AMADO Y MELISSA AMADO VARELA, aplicándose la medida cautelar mediante Auto N° PJ-7 de 10 de junio de 1996.

El 17 de julio de 1996 se presentó la demanda laboral, siendo corregida el 28 de octubre de 1996, constituyendo la principal causa de la misma, el incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo.

El 7 de noviembre de 1996, los demandantes solicitan la inclusión en la medida de secuestro, además de las empresas señaladas anteriormente, que se proceda contra INGENIERIA AMADO, S. A.; INMOBILIARIA C. A., S. A.; URBANIZACION SOSONATE, S. A. y CENTRO COMERCIAL MILLA OCHO, S. A. hasta la concurrencia de la suma de SEISCIENTOS SETENTA OCHO MIL TREINTA Y DOS BALBOAS CON VEINTITRES CENTÉSIMOS (B/.678,032.23), siendo notificado a la parte interesada el 29 de agosto de 1997.

En el punto 7 del referido informe se expresa que el 4 de diciembre de 1997 la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO dictó el Auto N° 196-DGT-97, "en virtud de que a esta fecha se hacía evidente de que la cautelar no era necesaria en virtud de que los secuestres habían perdido el interés en la misma y que no era cierto que concurrieran las circunstancias excepcionales descritas en el Artículo 1° De la Ley 1a De 17 de marzo de 1986 ...", procediéndose a ordenar el levantamiento del secuestro, siendo notificado del referido auto al licenciado ROBERTO LÓPEZ, el día 10 de diciembre de 1997, a las 2:05 p. m., siendo apelado dicho auto por el apoderado judicial de la parte demandante. Surtida la alzada, el MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL, mediante auto de 19 de marzo de 1998, confirmó el auto apelado.

Advierte también el señor DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, que el día 4 de febrero de 1998 se celebró la audiencia, con la presencia de todas las partes dentro del proceso laboral. A continuación se señala que dicho despacho profirió la Resolución N° 15-DGT-53-98, mediante la cual, se absuelve a todos los demandados dentro del proceso laboral, ordenándose el levantamiento del secuestro decretado contra los bienes de propiedad de los demandados.

Finalmente se aprecia en el comentado informe que, a foja 488 del expediente que contiene el proceso laboral, reposa el Edicto N° 29 de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, el cual fue fijado el 3 de marzo de 1998 a las 9:00 a. m. por el término de 24 horas y se desfijó el 4 de marzo a las 9:00 de la mañana, siendo notificado al tenor de lo pautado en el artículo 12, numeral 3° de la Ley N° 53 de 28 de agoto de 1975.

POSICIÓN DEL PLENO

Como ha quedado ya señalado, la infracción constitucional se ubica en la violación al artículo 32, que regula el debido proceso en las actuaciones jurisdiccionales y administrativas, y el artículo 2° que se refiere a la igualdad de todos frente a la ley. Adicionalmente se invocan como violadas disposiciones del Código de Trabajo, lo que no corresponde analizar en este proceso constitucional.

El proceso al cual accede la acción constitucional intentada es uno de aquellos que le corresponde tramitar al MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL, con arreglo a la Ley N° 53 de 28 de agosto de 1975. En dichos procesos, la decisión en primera instancia debe ser notificada por vía edictal, salvo que entre la finalización de la audiencia y la expedición de la sentencia, haya transcurrido más de un mes, como señala, a texto expreso, el numeral 3° del artículo 12, de la mencionada ley, supuesto de hecho que no ha ocurrido de conformidad con las constancias procesales. En la presente encuesta se fijó edicto para notificar a la parte demandada, luego de haberse procedido a intentar su notificación personal, de la misma manera que se había hecho con respecto a las sociedades demandadas, como se acredita en el informe visible a fojas 490 y 491 del expediente contentivo del proceso laboral. Es evidente que la sentencia de primera instancia debía ser notificada por vía edictal, con arreglo al ordinal 3° del artículo 12 de la Ley N° 53 de 1975, al no haberse producido el supuesto de hecho en cuya virtud la notificación resulta obligante. De otra parte, es evidente que cualquier parte en un proceso puede notificarse personalmente de una resolución que le afecte, aún cuando la notificación sea por medio de edicto en los estrados del tribunal, siendo así que este mecanismo de notificación resulta más inmediato frente a la parte afectada por la sentencia, y puede, a partir de ese momento, utilizar los medios de impugnación que el ordenamiento jurídico tiene previstos, en este caso, el recurso de apelación, dentro de termino. Es obvio que si la sentencia le fue notificada a la parte demandante por vía edictal, ello fue debido a que así lo estipula la ley que gobierna este tipo de procesos laborales, y, naturalmente, una vez desfijado el edicto de notificación, quedaba al alcance de la parte demandante, dentro de término, la utilización de los medios de impugnación previstos en el instrumento jurídico que regula estos procesos, y, además, porque la autoridad administrativa acusada intentó la notificación personal, siendo infructuosos sus resultados.

De lo expuesto, salta a la vista que no ha habido infracción al artículo 32 de la Constitución, por cuanto la autoridad administrativa notificó la sentencia a la parte demandante en la forma prevista en la ley, y tampoco al artículo 20, que prohíbe el establecimiento de privilegios, por cuanto a ambas partes de intentó notificar de la misma manera, es decir, por vía personal, siendo la imposibilidad de realizarse la notificación atribuible a la parte demandante, a quien afectaba adversamente la decisión administrativa, y la cual, de haber impugnado el acto de notificación dentro de término, pudo haber obtenido una revisión de la actuación procesal, cosa que no hizo.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CONCEDE el amparo de garantías constitucionales interpuesto por el licenciado ROBERTO LÓPEZ en representación de JOSÉ I. FUENTES, ALEX SAAVEDRA y WILLIAMS A. QUIROZ contra la orden de hacer contenida en el Edicto N° 29 emitido por el DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, mediante el cual notificó la resolución de primera instancia N° 15-DGT-53-98 de 2 de marzo de 1998.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDA POR LA FIRMA FORENSE AROSEMENA Y AROSEMENA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DEL 19 DE FEBRERO DE 1998, EXPEDIDA POR EL JUZGADO PRIMERO SECCIONAL DE MENORES DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Arosemena y Arosemena, en representación del señor **MANUEL SALVADOR RODRÍGUEZ PÉREZ**, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia N° 2 A. G.-T, del 23 de marzo de 1998, por medio de la cual el **Tribunal Superior de Menores** negó la acción de amparo de garantías constitucionales promovida contra la orden de hacer contenida en la Resolución del 19 de febrero de 1998, expedida por el Juzgado Primero Seccional de Menores de Panamá, dictada dentro del Proceso de Protección por supuesto maltrato, incoado por la señora Amie Lurie Centella de Rodríguez contra el amparista y a favor de sus menores hijos Amie Lurie y Manuel Salvador Rodríguez Centella.

Según la firma de abogados apoderada del actor, la orden impugnada viola el principio del debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política, ya que a través de ella la Juez Primera Seccional de Menores de Panamá dispuso la continuación de una audiencia dentro del mencionado proceso seguido contra su representado, a pesar de que éste fue sobreseido provisionalmente por la misma causa por la Juez Décima Segunda del Circuito de Panamá, Ramo Penal.

Sobre este punto, la parte pertinente de la sentencia que niega el amparo sostiene lo siguiente:

> "Por otro lado, el amparista presentó como prueba de un "segundo juzgamiento" la providencia dictada por la Juez Primera Seccional de Menores de Panamá, fechada 19 de enero del año en curso por la cual se fija como fecha para la celebración de una audiencia dentro del proceso de protección que se lleva a cabo en dicho Tribunal en favor de los niños RODRÍGUEZ CENTELLA; en relación a ésto, esta Superioridad debe recordarle al amparista que el Proceso de Protección constituye una causa independiente a la Acción Penal puesto que en aquélla el interés que se persigue es garantizar el mejor bienestar de los niños, y con una decisión lograr salvaguardar las condiciones físicas, emocionales y mentales de éstos y su óptimo desarrollo; mientras que la segunda persigue un hecho ilícito para lograr una sanción penal.
>
> El haber obtenido un resultado de carácter provisional en la esfera del proceso penal, que si bien los hechos denunciados e investigados penalmente guardan relación con las condiciones y el ambiente familiar de los niños, esto no significa que, para el proceso de protección que se lleva a cabo a favor de los menores RODRÍGUEZ CENTELLA, la juzgadora de la causa deba dejar de pronunciarse sobre las medidas que está obligada a tomar en atención al interés Superior de los niños, asegurando los trámites procesales que establece la ley". (F. 39).

En concepto del Pleno de la Corte, no existen razones para variar la decisión adoptada en primera instancia, porque los dos procesos a los cuales alude el amparista para sustentar la existencia de un doble juzgamiento son sustancialmente distintos. El primero de ellos, en el que se encausó al señor MANUEL SALVADOR RODRÍGUEZ PÉREZ por el supuesto delito contra el pudor y la libertad sexual en perjuicio de sus dos menores hijos, concluyó con Resolución del 14 de marzo de 1996, a través de la cual la Juez Décima Segunda del Circuito de Panamá, Ramo Penal, sobreseyó provisionalmente al imputado. Dicha resolución fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia por medio de la Resolución fechada 21 de agosto de 1996 (Cfr. fs. 465-482 y 493-499 de los antecedentes). El segundo negocio, dentro del cual se dictó la orden impugnada, es un Proceso de Protección por supuesto maltrato sustanciado por el Juzgado Primero Seccional de Menores del Circuito Judicial de Panamá a favor de los menores Amie Lurie y Manuel Salvador Rodríguez Centella.

En concepto del Pleno de la Corte, no existe duda de que los mencionados procesos tienen una naturaleza sustancialmente distinta, aun cuando ambos giren en torno a los mismos hechos. En el primer caso, se está ante un negocio de carácter penal, cuyo objeto era deducir si existía responsabilidad penal por

parte del señor MANUEL SALVADOR RODRÍGUEZ PÉREZ, por la supuesta infracción de los preceptos del Código Penal relativos al Pudor y a la Libertad Sexual. En el segundo caso, de lo que se trata es de determinar o establecer las medidas de protección más adecuadas para los menores Amie Lurie y Manuel Salvador por el supuesto maltrato que los mismos sufren, aunque los actos en que consiste dicho maltrato no constituyan delito, todo lo cual encuentra fundamento en los artículos 820, 821 y 754 del Código de la Familia.

Como se sostiene en la sentencia apelada, el hecho de que el señor MANUEL SALVADOR RODRÍGUEZ PÉREZ haya sido beneficiado con el referido sobreseimiento provisional, en modo alguno inhibe al Juzgado Primero Seccional de Menores de Panamá para conocer e investigar los supuestos maltratos de que podrían ser víctimas los menores Amie Lurie y Manuel Salvador, sobretodo, cuando el artículo 754 del Código de la Familia le otorga competencia en estos casos. De acuerdo con el citado precepto, los Jueces Seccionales de Menores tienen competencia para conocer de todos los casos de menores que se encuentren en circunstancias especialmente difíciles (entre ellos, los menores maltratados) (numeral 1); al igual que para atender las quejas o denuncias que se formulen sobre actos que pongan en peligro la salud o el desarrollo físico o moral del menor, adoptando las medidas necesarias para hacer cesar dichas actuaciones (numeral 2) y para adoptar las medidas tutelares necesarias para la protección de los menores (numeral 3).

Como los dos procesos a los cuales alude el amparista son de distinta naturaleza, mal podría existir el doble juzgamiento que se alega en la demanda de amparo, por lo cual procede confirmar la sentencia apelada.

De consiguiente, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia N° 2 A. G.-T, del 23 de marzo de 1998, expedida por el Tribunal Superior de Menores.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE SERGEI PLOTNIKOFF DE LA GUARDIA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN S/N DE 16 DE ENERO DE 1998, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Pitty y Asociados, a nombre del señor SERGEI PLOTNIKOFF DE LA GUARDIA, representante legal de la empresa **PLOTO, S. A.** interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución S/N° del 16 de enero de 1998, expedida por el **Director General de Trabajo**, a través de la cual se hizo entrega del pliego de peticiones presentado por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y se le concedió un término de cinco días hábiles para dar contestación al mismo.

Los artículos 32 y 17 de la Constitución Política son los preceptos que se cita como violados. Según la apoderada judicial de la amparista, el principio constitucional del debido proceso, reconocido y tutelado por la primera de estas normas se violó, por omisión, debido a que el funcionario demandado ordenó correr traslado del pliego de peticiones presentado por el SUNTRACS contra la amparista, sin comprobar el cumplimiento de los requisitos enumerados en el artículo 427 del

Código de Trabajo. En síntesis, la referida infracción se dio por las siguientes razones:

1. No se comprobó si el nombre de la empresa requerida era el correcto, con lo cual se corrió el traslado a una persona jurídica denominada PLOTOSA, S. A., que es distinta de la amparista, cuyo nombre es PLOTO, S. A. (PLOTOSA).

2. No se comprobó la fecha del documento firmado por los trabajadores que apoyan el pliego, ni si las firmas de éstos eran verdaderas y si realmente esos trabajadores laboran para PLOTO, S. A.

3. No se requirió el certificado del Registro Público de la empresa contra la cual se dirigía el pliego, a fin de demostrar su nombre correcto, su representación legal y su legitimidad pasiva.

4. Tampoco se comprobó lo referente al número de trabajadores que laboran en la empresa requerida y de los que se computarían para declarar legal la huelga, si la hubiere, tal como dispone el numeral 5° de la norma en cita.

Mediante Nota N° 200-DGT-98, del 21 de abril de 1998, el Director General de Trabajo remitió a la Secretaría General de esta Corporación Judicial, las actuaciones surtidas en el expediente que contiene la solicitud hecha por el SUNTRACS (f. 101).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Antes de entrar en las consideraciones de fondo, el Pleno de la Corte estima necesario señalar que, en oportunidades anteriores, esta Corporación de Justicia se ha pronunciado en torno a la problemática constitucional sometida ahora a su conocimiento. En Sentencia del 17 de mayo de 1996, el Pleno resolvió de manera favorable a los demandantes, las acciones de amparo de garantías constitucionales propuestas por Top Real State Inc. y Servicios de Administración, S. A., contra las órdenes de hacer dictadas por el Director General de Trabajo, a través de las cuales se estaba obligando a estas empresas a celebrar una conciliación para la negociación de una convención colectiva con un sindicato al cual no pertenecían sus trabajadores (SUNTRACS), cuya naturaleza era distinta a las actividades que realizaban estas empresas y a pesar de que un número plural de los trabajadores que supuestamente apoyaban el pliego, no laboraban para ninguna de las empresas emplazadas. El fallo citado sostiene, además, que el artículo 435 del Código de Trabajo (que ordena al Director Regional o General de Trabajo correr traslado el pliego dentro de los dos días siguientes a su presentación), no puede interpretarse de manera aislada, sino que el citado funcionario debe comprobar la veracidad del contenido del pliego de peticiones, para lo cual debe utilizar los medios que tiene a su alcance. Por ello, sostuvo el Pleno, que para asegurar las garantías constitucionales de unos y otros, es necesario, cada vez que se dé inicio al trámite de un pliego de peticiones en el Ministerio de Trabajo, que se adopten las medidas que impidan, por un lado, la vulneración de los derechos de los trabajadores y, por otro, la comisión de abusos que puedan perjudicar el interés de las empresas (Cfr. Registro Judicial de mayo de 1996, pág. 16-20).

En el presente caso, estima el Pleno que la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política ha sido violada en la medida en que el Director General de Trabajo omitió verificar el fiel cumplimiento de cada uno de los requisitos que señala el artículo 427 del Código de Trabajo, con relación al pliego de peticiones.

Lo anterior es así, fundamentalmente, porque el citado funcionario no comprobó, antes de correr traslado del pliego respectivo, si los diez (10) trabajadores que firmaron el documento de apoyo al mismo, que por cierto, carece de fecha, laboraban efectivamente para la empresa PLOTO, S. A. Dicha omisión por parte del funcionario demandado se comprueba plenamente con el examen de la planilla mensual de cuotas, aportes e impuesto sobre la renta de la Caja de Seguro Social de la empresa PLOTO, S. A., correspondiente al mes de enero de 1998 (Cfr. fs. 17-28), en la que no aparece el nombre de ninguna de las personas que firmaron la lista de apoyo al mencionado pliego.

Del hecho anotado se desprende, como corolario, que el Director General de Trabajo ha corrido traslado de un pliego de peticiones presentado por personas que no son trabajadores de la empresa requerida, obligándola, por tanto, a negociar una convención colectiva con quienes carecen de legitimación activa para solicitar dicha negociación. Este hecho, precisamente, materializa una clara infracción de la garantía constitucional del debido proceso, pues, de acuerdo con el artículo 401 del Código de Trabajo, los empleadores sólo están obligados a celebrar una convención colectiva con las personas que le presten sus servicios en calidad de trabajadores. De allí, la trascendental importancia que reviste la verificación del cumplimiento comentado requisito (consagrado en el numeral 2 del artículo 428 del Código de Trabajo), dado que su omisión, como en el presente caso, podría llevar a la Dirección General de Trabajo a dar traslado erróneamente de un pliego de peticiones que no cuenta con el respaldo de quienes laboran para la empresa requerida y que mal podrían, por tanto, iniciar el procedimiento de conciliación.

Debe señalarse, en el mismo sentido, que en el expediente contentivo del pliego de peticiones no aparece probado si los referidos trabajadores son miembros del SUNTRACS, de lo cual se infiere, como sostiene la amparista, que se está obligando a la empresa PLOTO, S. A. a negociar una convención colectiva con personas que, además de no ser sus trabajadores, no se sabe si están afiliados al sindicato que promovió la conciliación, como exige el precitado artículo 401 del Código de Trabajo. De allí, que el SUNTRACS también carece de legitimación activa para solicitar la negociación de una convención colectiva a nombre de personas o trabajadores que no son miembros del mismo.

En este punto es importante recordar, que el procedimiento de conciliación regulado por los artículos 432 y siguientes del Código de Trabajo, constituye un conjunto sucesivo e ininterrumpido de actos, en los cuales el empleador no sólo está obligado a contestar el pliego (art. 436), sino también a asistir a las reuniones a las que sea citado por el funcionario conciliador, so pena de incurrir en abandono de la conciliación de no hacerlo (art. 438). Inclusive, el artículo 446 del Código de Trabajo prevé la posibilidad de que, vencido el plazo de quince (15) días desde que se notificó el pliego de peticiones (salvo que ambas partes y con la anuencia del conciliador convengan una prórroga hasta por dos veces), empiece a correr el plazo de veinte días (art. 490) de que disponen los trabajadores para la declaratoria de huelga.

Todas estas anotaciones resaltan aún más la necesidad de que el Director General de Trabajo compruebe la veracidad de la información que aparece en el pliego de peticiones antes de correrlo en traslado a la empresa requerida, a fin de evitar situaciones lamentables como las advertidas en este caso, constitutivas de claras violaciones de las garantías fundamentales de los empleadores. Como contrapartida de esta obligación del citado funcionario, está la obligación del sindicato o del grupo de trabajadores que presenta el pliego, de aportar la documentación pertinente para probar los presupuestos procesales necesarios (como los anotados) para dar inicio al procedimiento de conciliación. Puede afirmarse, incluso, que la comprobación oportuna y adecuada de estos requisitos por parte de los trabajadores redunda, a fin de cuentas, en su propio beneficio, en razón del trámite expedito que podría darse a la solicitud de conciliación por ellos presentada.

En adición a lo expuesto, el Pleno estima que el pliego de peticiones presentado por el SUNTRACS tampoco cumple con la indicación correcta del número de trabajadores que laboran para PLOTO, S. A., ni mucho menos, con la indicación exacta de cuántos de estos trabajadores deben computarse para determinar la legalidad de la huelga, en caso de que ésta se diera, tal como ordena el numeral 5° del artículo 427 del Código de Trabajo. Este hecho, que es a su vez consecuencia de la omisión del funcionario demandado de verificar si los trabajadores que presentaron el pliego laboraban para PLOTO, S. A., se comprueba también con el examen de la mencionada planilla de la Caja de Seguro Social en la que consta el número de trabajadores de la empresa PLOTO, S. A. para el mes de enero de 1998.

En lo que concierne a la supuesta infracción del artículo 32 constitucional en que incurrió el Director General de Trabajo al no solicitar el certificado del

Registro Público para comprobar el nombre correcto de la empresa, el Pleno estima que no le asiste razón a la apoderada judicial de la amparista, puesto que este documento no está dentro de aquéllos que deben aportar los trabajadores junto con el pliego de peticiones y que enumera el artículo 428 del Código de Trabajo.

La alegada infracción del artículo 17 de la Constitución Política debe ser descartada por el Pleno, pues, en innumerables precedentes esta Corporación de Justicia ha señalado que el mismo es un precepto de orden programático, por lo cual no es susceptible de ser violado.

Por las anteriores consideraciones, el Pleno estima que debe acceder a la pretensión de la amparista y revocar la orden de hacer impugnada.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo solicitado por la firma forense Pitty y Asociados, en representación del señor SERGEI PLOTNIKOFF DE LA GUARDIA, representante legal de la empresa PLOTO, S. A. y, en consecuencia, REVOCA la Resolución S/N° del 16 de enero de 1998, expedida por el Director General de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA PATTON, MORENO & ASVAT, EN REPRESENTACIÓN DE GOLD MILLS DE PANAMÁ, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 628 DE 23 DE OCTUBRE DE 1997, EMITIDO POR LA JUEZ OCTAVO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES, actuando en nombre y representación de **MARÍA TERESA GARCÍA SANTIAGO DE REYES** -Juez Octava del Primer Circuito Judicial de Panamá-, ha interpuesto recurso de Apelación contra la resolución de 3 de abril de 1998, dictada por el **Primer Tribunal Superior de Justicia**, que resolvió CONCEDER el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la empresa **GOLD MILLS DE PANAMÁ, S. A.** contra el Auto N° 628 de 23 de octubre de 1997, proferido por la Juez apelante.

En la resolución apelada se hace una exposición de las pretensiones del amparista en los siguientes términos:

La empresa amparista sostiene que el Auto impugnado violó los artículos 29, 32, 43, 31 y 17 de la Constitución, debido a que autorizó la práctica de diligencias probatorias por parte de la Comisión de Libre Comercio y Asuntos del Consumidor (CLICAC) solicitadas por ésta dentro del proceso por prácticas monopolísticas seguido en su contra, con lo cual ha de producírsele graves e inminentes perjuicios.

Las diligencias autorizadas consistían en la práctica de un allanamiento en las oficinas de GOLD MILLS DE PANAMÁ, S. A., para el registro y examen de los archivos o documentos fechados desde 1995 hasta el día de la diligencia. Se indica que los funcionarios de la CLICAC inspeccionaron todo el local, la

totalidad de los archivos, toda la correspondencia, incluyendo el correo electrónico, banco de datos y demás documentos privados. Se afirma que tales medidas ocasionaron graves y evidentes perjuicios, pues se suspendió la labor del personal de gerencia el día en que se realizó la diligencia (27 de octubre de 1997).

La violación de las normas constitucionales se ubica en que la orden contenida en el auto rebasó el ámbito de aplicación en el tiempo de la Ley 29 de 1996, ya que no se podía autorizar el examen de la documentación que tuviera fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley, es decir, antes del 3 de noviembre de 1996 y, además, en que la diligencia se practicó sin la participación de ninguna autoridad judicial.

El Tribunal Superior expresa que comparte parcialmente la impugnación constitucional que se hace contra el auto N° 628 de 23 de octubre de 1997. En ese sentido, hizo referencia a ciertas normas de la Ley N° 29 de 1 de febrero de 1996, entre ellas al artículo 103 (num.11) que crea la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor y le asigna, entre sus funciones, la atribución de "recabar documentos, tomar testimonio y obtener otros elementos probatorios de instituciones públicas o privadas"; además, citó lo dispuesto por el artículo 141 (num.4), que crea el Juzgado Octavo del Primer Circuito Judicial, con competencia privativa para **"conceder autorizaciones a la comisión para que practique diligencias probatorias, exámenes de documentos privados de empresas, allanamientos y cualquier otra medida que esta solicite en el curso de una investigación administrativa o para el aseguramiento de pruebas"** (énfasis de la Corte).

Con base en lo preceptuado por los artículos citados, consideró que no es aceptable el argumento de que la diligencia debe practicarse con participación del Tribunal, pues a los funcionarios de la CLICAC se les atribuye la facultad de recabar pruebas directamente, previa autorización del juzgado que conoce del caso.

Sin embargo, el tribunal de amparo si considera convincente el argumento que cuestiona la aplicación en forma retroactiva de la Ley N° 29 de 1996, al haberse ordenado el examen, en la empresa agraviada, de documentos con fecha correspondiente a los años 1995-1996, anteriores a la entrada en vigencia de la ley. Sobre este aspecto sostiene lo siguiente:

> "... Las normas antimonopolísticas, contenidas en el Título 1 de la Ley 29 de 1996, entraron en vigencia el 3 de noviembre de 1996. El proceso que por prácticas monopolísticas se sustancia en contra de la empresa GOLD MILLS DE PANAMÁ, S. A. se encuentra en su etapa preliminar administrativa ante la CLICAC, tendiente a confirmar los indicios existentes de que junto con las empresas han estado incurriendo en prácticas monopolísticas absolutas. El auto impugnado al permitir que se investigaran los documentos correspondientes a los períodos de 1995-1996 ha violado el contenido del artículo 31 y 43 del Estado Fundamental(sic), porque el mismo sólo podía autorizar a la CLICAC para que revisara determinados documentos y no la generalidad de los documentos de la empresa investigada, para los períodos anteriores a la entrada en vigencia de las normas antimonopolísticas de la Ley 29 en referencia, de manera que el examen de todo documento que refleje prácticas monopolísticas antes del 3 de noviembre de 1996, es violatorio de la garantías constitucional consagrada en los artículos 31 y 43 de la Constitución Nacional, que consagra el principio de irretroactividad y de la legalidad de los hechos punibles". (Fs.56)

Por su parte la Juez-apelante, por intermedio de su apoderado judicial, discrepa del criterio previamente citado, expresado por el sentenciador para fundamentar la concesión del amparo.

En ese orden de ideas, se argumenta que cuando se ordena el examen de documentación anterior a la entrada en vigencia de una ley "no queda claramente

establecido que se ha aplicado esa ley violentando el Principio de Irretroactividad ni el de Legalidad". Y esto es así, porque el acto de autorizar el acopio de esa documentación no entraña, "ni la interrupción de un derecho adquirido por la parte supuestamente afectada con dicha decisión, ni se equivale(sic) con la derivación de consecuencias gravosas por dicha parte".

Se sostiene que el juez tiene el derecho, además de la facultad y el deber, de hacerse de toda información que le permita llegar a una decisión conforme a la verdad material. Por tanto, que se haya dispuesto que se tenga conocimiento de todas las actividades previas a la situación controvertida, no puede interpretarse como vulneración de las garantías establecidas en la Constitución a favor de los asociados. Estima el recurrente que: "Sólo si el Juez decidiera en el fondo la causa apreciando pruebas que evidencian hechos anteriores al ilícito que se discute, pudiera hablarse de aplicación efectiva con carácter retroactivo y menoscabo de supuestos derechos adquiridos ...". (fs.63 y 64)

El apelante no acepta la violación que se acusa del artículo 31 de la Constitución, pues indica que "no vemos o no sabemos en dónde reside el carácter punitivo de la Resolución que se impugnó por la vía del Amparo de Garantías Constitucionales y el A-quo acoge como válida".

La Corte procede a decidir lo de lugar, previas las siguientes consideraciones:

Como se puede apreciar, en la acción de amparo propuesta se solicitó a los Magistrados:

> "... revoquen la resolución identificada como Auto N° 628 de 23 de Octubre de 1997, proferida por el Juzgado Octavo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.
> Asimismo solicitamos al Tribunal Constitucional que ordene tanto al funcionario demandado como a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del **Consumidor a que devuelvan a la empresa toda aquella documentación privada cuya ocupación excede a los límites expresamente autorizados** por la Constitución y la Ley". (Fs.2) (Énfasis de la Corte).

De acuerdo con las motivaciones del fallo apelado se entiende que el amparo fue concedido respecto a la última solicitud, previamente transcrita.

Veamos, entonces, el contenido de la normas constitucionales que el tribunal de amparo estimó vulneradas por la orden de hacer objeto de amparo:

> "Artículo 43.
> Las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese. En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada".

> "Artículo 31.
> Sólo serán penados los hechos declarados punibles por Ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado".

A juicio de la Corte, resulta conveniente citar el artículo 246 de la Ley N°29 de 1996, promulgada el 3 de febrero de 1996 (G.O. N° 22,966), que dice lo siguiente:

> "Artículo 246. Entrada en vigencia y efectos en el tiempo. Esta ley entrará en vigencia transcurridos noventa (90) días a partir de su promulgación, salvo las normas contenidas en el título I, las cuales entrarán a regir en nueve (9) meses contados a partir de su promulgación. Esta Ley sólo se aplicará a los hechos, actos sucesos o situaciones jurídicas o de hecho contemplados en ella, que se realicen u ocurran con posterioridad a su entrada en vigencia".

En primer lugar, la Corte debe señalar que el artículo 31 de la

Constitución Nacional no resulta pertinente al caso que nos ocupa, pues el mismo alude a la pena en relación a hechos punibles y no a faltas administrativas, como parece interpretarlo el amparista y parece considerarlo así el tribunal de amparo. Por tanto, al no referirse a la materia controvertida, no será tomado en cuenta.

Hecho el análisis de lo expuesto por las partes en este proceso de amparo y de lo decidido en el fallo apelado, el Pleno de la Corte concluye que el auto impugnado no vulnera el artículo 43 de la Carta Fundamental, que consagra el principio de la no retroactividad de los efectos de las leyes. Es así, ya que, en cuanto a la resolución dictada por el Juzgado Octavo del Circuito en el proceso, la Ley 29 de 1 de febrero de 1996 se está aplicando a hechos o situaciones acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia, o sea, a las prácticas monopolísticas absolutas en que se presume han incurrido varias empresas, tal como esas prácticas se encuentran definidas en el artículo 11 de la citada ley. Fue en virtud de esos hechos que la CLICAC gestionó la autorización respectiva para practicar las diligencias probatorias solicitadas, según se lo permite el artículo 103, numeral 11 de la Ley 29 de 1996, en concordancia con el artículo 141, numeral 7 de la misma legislación.

A juicio de esta Corporación, la exhibición y obtención de copias de diversos documentos que van de los años 1995 a 1997, tienen como finalidad verificar la existencia del acuerdo monopolístico investigado, a los fines de establecer si actualmente se obra o no al margen de la ley, tal como se explica en la respectiva solicitud que va de fojas 5-8 del cuaderno antecedente. El hecho de que la juez demandada haya permitido a la CLICAC obtener algunas pruebas con fecha anterior a la entrada en vigencia de la ley no implica, de ninguna manera, que ésta se esté aplicando en forma retroactiva, pues la orden emitida se dio para recabar pruebas que datan de fechas anteriores a su entrada en vigencia pero que pudieran tener incidencia o ser útiles para demostrar hechos que están ocurriendo en el presente. En otras palabras, no se trata de aplicar la nueva legislación a hechos que acontecieron en el pasado, si no de juzgar hechos del presente a la luz que puedan arrojar sobre ellos hechos que ocurrieron en el pasado.

Lo que pueda llegar a demostrarse a través de un medio de prueba no se debe confundir con el efecto retroactivo con que puede llegar a ser aplicada una ley y mucho menos con la protección constitucional que consagra el artículo 43 de la Constitución, pues lo que la norma tutela es la imposibilidad de aplicar los efectos de una ley a situaciones jurídicas ocurridas y consumadas cuando la misma no estaba vigente. Esta garantía constitucional en nada contradice que una situación (cualquiera que sea, que se esté produciendo en el presente) pueda llegar a comprobarse a través de la prueba de hechos que se consumaron en el pasado. Por supuesto, si se pretendieran aplicar las sanciones contempladas en la ley, ahora en vigencia, a hechos que acontecieron antes de que entrase en vigor la legislación, se podría hablar, entonces con propiedad, de que a un instrumento legal se le están dando efectos retroactivos. Pero no es ese el supuesto que analizamos. En el caso subjúdice se trata de establecer el valor que puedan llegar a tener ciertas pruebas para lograr el mejor juzgamiento de una conducta que acontece después de que una ley ha entrado en vigencia.

En este orden de ideas, vemos que el artículo 246 de la Ley 29, previamente transcrito, es claro en definir su entrada en vigencia y sus efectos en el tiempo, en cuanto a los "hechos, actos, sucesos o situaciones jurídicas o de hecho" contempladas en ella, respecto a los cuales sólo se aplicará después de su entrada en vigencia; precepto que no ha sido transgredido en ningún momento por el auto que ordenó la práctica probatoria, pues el mismo se dictó, respetando el tiempo y el marco legal, con el propósito de juzgar una conducta ocurrida con posterioridad a la vigencia de la ley que ha sido invocada.

Por tanto, la Corte debe reconocer que la resolución emitida por la Juez Octava de Circuito no conculca ningún precepto de la Constitución Nacional, por lo que no era procedente la concesión del amparo de garantías.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución de 3

de abril de 1998, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, y, en su lugar NIEGA el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la empresa GOLD MILLS DE PANAMÁ, S. A. contra el Auto N° 628 de 23 de octubre de 1997 proferido por el Juez Octavo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS A. CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. RODOLFO ALBERTO NAVARRO VEGA, EN REPRESENTACIÓN DE OSMAN ALEXIS HERNÁNDEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 19 DE DICIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado RODOLFO ALBERTO NAVARRO VEGA, apoderado especial del señor **OSMAN ALEXIS HERNÁNDEZ**, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la resolución proferida por el **Segundo Tribunal Superior de Justicia**, el 19 de diciembre de 1997.

Dicha resolución reformó auto dictado por el Juzgado Segundo del Tercer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, el 9 de septiembre de 1997, que reemplazó la pena de prisión impuesta al recurrente en amparo, por la comisión del delito de lesiones personales en perjuicio del señor BORIS RODRÍGUEZ.

El apoderado judicial del recurrente alega que la resolución judicial que contiene la orden atacada debe ser revocada, ya que fue dictada como consecuencia de una acusación particular presentada extemporáneamente por el señor RODRÍGUEZ, sin que se le permitiera a su representado el derecho a la defensa, violando las garantías constitucionales consagradas en los artículos 22 y 32 de nuestra Carta Magna.

Antes de decidir sobre la admisibilidad de la presente acción constitucional, la Corte advierte lo siguiente:

1) El señor OSMAN HERNÁNDEZ fue declarado responsable criminalmente y condenado a la pena de dos (2) años de prisión y accesoriamente se le inhabilitó para ejercer funciones públicas por el término de un año una vez cumplida la pena principal, como reo del delito de lesiones personales en perjuicio del señor BORIS RODRÍGUEZ, mediante sentencia N° 78 de 23 de julio de 1997, dictada por el Juzgado Segundo del Tercer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal. (Fs. 6 a 9).

2) El apoderado judicial del señor OSMAN HERNÁNDEZ interpuso escrito ante ese juzgado, solicitando el reemplazo de la pena de prisión, con fundamento en los artículos 82 del Código Penal y 2398 del Código Judicial. El Juzgado Segundo dictó auto A. V. N° 245 de 9 de septiembre de 1997, por medio del cual reemplazó la pena de dos (2) años de prisión por la de cincuenta (50) días-multa, a razón de diez balboas por cada día-multa, haciendo un total de quinientos balboas (B/.500.00). (Fs. 8 y 9).

3) El señor BORIS RODRÍGUEZ le otorgó poder al Licenciado Joaquín Ortega para que interpusiera en su nombre acusación particular contra el recurrente en

amparo y en virtud de dicha representación legal, el Licenciado Ortega apeló, dentro del término correspondiente, la decisión que le concedió al señor OSMAN HERNÁNDEZ el reemplazo de la pena de prisión. (Fs. 12 a 15).

4) Al resolver dicha apelación, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dictó resolución fechada 19 de diciembre de 1997, por medio de la cual modificó la decisión del Juzgado Segundo, en el sentido de que fijó la cuantía en trescientos cincuenta (350) días-multa, a razón de diez balboas (B/.10.00) diarios, lo que totaliza la suma de tres mil quinientos balboas (B/.3,500.00). (Fs. 1 a 5).

Resulta evidente, entonces, que la orden atacada fue dictada luego de que concluyera, con sentencia condenatoria, un proceso penal dentro del cual el recurrente en amparo fue debidamente representado por su abogado defensor, por lo que se desestima el argumento de que fue proferida sin que se le permitiera "el derecho a la defensa".

Por otra parte, de lo anteriormente expuesto y de los propios hechos que fundamentan el presente amparo, se colige que los cargos que se le imputan a la resolución atacada pertenecen al plano de la legalidad, y por otra parte, al referirse al concepto de la violación, hace igualmente referencia a disposiciones legales, sin indicar en que consiste la infracción que alega de las normas constitucionales, razón por la cual esta acción resulta manifiestamente improcedente y no debe admitirse, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2611 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el apoderado especial del señor OSMAN ALEXIS HERNÁNDEZ, contra la orden contenida en la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el 19 de diciembre de 1997.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. JOSÉ DOMINGO PRESCILLA, EN REPRESENTACIÓN DE URCINIO CISNERO RODRÍGUEZ, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° 10 DE 3 DE ABRIL DE 1998, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 8, CON SEDE EN AGUADULCE. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado José Domingo Prescilla, en representación del señor **URCINIO CISNERO RODRÍGUEZ**, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden contenida en la Sentencia N° 10 AJCD-98 de 3 de abril de 1998, por medio de la cual la **Junta de Conciliación y Decisión N° 8** declaró justificado el despido del señor CISNERO RODRÍGUEZ y absolvió a JARDÍN MOCAMBO, S. A. de las pretensiones del recurrente, dentro del proceso laboral instaurado por él contra dicha empresa.

El estudio de los hechos que fundamentan la presente acción constitucional revela que los motivos por los cuales se impugna la sentencia, no pertenecen al

ámbito constitucional. Así, el punto medular se encuentra en el hecho cuarto en el que se expresa lo siguiente:

> "CUARTO: **Que al valorar las pruebas la Junta de Conciliación N° 8,** no analizó que a mi representado en ningún momento se le había comunicado por escrito el despido, la carta que contenía tal comunicación fue presentada por la empleadora ante la Dirección Regional de Trabajo de la Provincia de Coclé y nos enteramos de esta situación (que la nota de despido existía) en el acto de la audiencia, **sin embargo la Junta juzgadora cuando valoró la prueba o sea la carta de despido que remitiera la demandada a la mencionada Dirección Regional de trabajo concluyó que la carta de despido no viola el artículo 214 de** (sic) **Código de Trabajo.**" (F. 5) (Énfasis del Pleno).

El hecho transcrito pone de manifiesto que la inconformidad del recurrente en amparo guarda relación con la valoración que realizó la Junta de Conciliación de un documento aportado al proceso, es decir, se refiere a supuestas violaciones que pertenecen al plano de la legalidad; situación que se confirma al analizar el concepto de las infracciones de las disposiciones constitucionales, donde se sostiene que "el despido es ilegal, por no cumplir el empleador con lo que le impone el art. 214 del Código de Trabajo".

Como ha señalado esta corporación judicial en numerosas ocasiones anteriores, la acción de amparo de garantías constitucionales es un recurso extraordinario, que tiene como propósito reparar violaciones directas a los derechos fundamentales que consagra nuestra Carta Magna.

Cuando el acto atacado es una decisión jurisdiccional, como en el presente caso, no es tarea de la Corte pronunciarse sobre la valoración realizada por el juzgador de las pruebas aportadas al proceso, como si se tratara de una instancia más de ese proceso. Por tanto, la presente demanda debe ser rechazada, por improcedente, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2611 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantías fundamentales interpuesto por el apoderado judicial del señor URCINIO CISNERO RODRÍGUEZ, contra la orden contenida en la Sentencia N° 10 AJCD-98 de 3 de abril de 1998, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 8.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, EN REPRESENTACIÓN DE FERNANDO JAEN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 33/DRTPC/97, DE LA DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA PROVINCIA DE COCLÉ, Y LA RESOLUCIÓN CONFIRMATORIA N° DM-04/98, DE 28 DE ENERO DE 1998, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Bernardino González Jr., actuando en representación de **GRACIELA DE NIETO**, Directora Regional de Trabajo de la Provincia de Coclé, ha presentado recurso de apelación ante esta Corporación, contra la Resolución de 25 de marzo de 1998 dictada por el **Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial** mediante la cual se concede el Amparo de Garantías Constitucionales presentado por el Licenciado Lorenzo Marquínez Bolaños en representación del señor Fernando Jaén y en consecuencia se revoca la Resolución N° 33/DRTPC/97 de 13 de octubre de 1997 emitida por la Directora Regional de Trabajo de la Provincia de Coclé por medio de la cual se condena al señor Fernando Jaén al pago de la suma de B/.10,670.25 en concepto de diferencia de salario mínimo a favor de Rubén Castillo incluyendo las diferencias producidas en concepto de vacaciones y décimo tercer mes.

La parte demandante promovió proceso de amparo de garantías constitucionales ante el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, alegando como infringido el artículo 32 de la Constitución Política y lo fundamentó en el hecho que se violentó el derecho de contradicción que dicha norma consagra pues en audiencia de 15 de julio de 1997 la Dirección Regional de Trabajo de Coclé la juzgadora practicó primero la contraprueba de la parte demandante antes que las pruebas que aquélla estaba supuestamente destinada a desvirtuar, se verificó una inspección judicial debidamente decretada pero terminada la inspección no se levantó el acta correspondiente y la sentencia se declara "inevacuable". Aunado a lo anterior, el demandante consideró que la resolución impugnada recae parcialmente sobre materias (vacaciones, decimotercer mes) respecto de las cuales la Dirección Regional de Trabajo carece de competencia. Por último, señala, la Resolución N° DM-04/98 de 28 de enero de 1998, expedida por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral que confirma la orden impugnada, se motiva en la falsa consideración de que la parte demandada no había sustentado la alzada y por ello que juzgador de segunda instancia no estaba en capacidad de conocer las razones que motivaron su inconformidad.

El artículo 32 de la Constitución Nacional hace referencia a la garantía constitucional, que ninguna persona puede ser juzgada, "sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

El Primer Tribunal Superior de Justicia, basó su decisión de conceder el amparo de garantías constitucionales promovido por el Licenciado Lorenzo Marquínez contra la Directora Regional de Trabajo de la Provincia de Coclé y el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, debido a que, a juicio de dicho tribunal, la funcionaria carecía de competencia para condenar mediante resolución en concepto de prestaciones referentes a vacaciones y decimotercer mes.

El Pleno de esta Corporación, comparte los razonamientos expuestos por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, puesto que, si bien el numeral 2 del artículo 1° de la Ley N° 53 de 1975 faculta a la Dirección Regional de Trabajo para conocer de demandas relativas a la determinación del salario mínimo legal o convencional aplicable, con o sin el reclamo de la diferencia adeudada -si la hubiere- independientemente de la cuantía, la ley antes mencionada no le concede competencia para pronunciarse en relación a prestaciones laborales tales como vacaciones y decimotercer mes. Por otro lado, si bien de la efectiva declaración de una diferencia salarial se deriva -necesariamente- una diferencia en torno a las vacaciones y decimotercer mes, dichas prestaciones deben ser reclamadas ante las instancias competentes para conocer este tipo de reclamaciones, pues no puede la Dirección Regional de Trabajo adscribirse una competencia que no le corresponde.

Todo lo anteriormente expuesto, aunado a las irregularidades verificadas en torno a la práctica de pruebas y contrapruebas y a la inspección judicial decretada, efectuada (si bien no se levantó el acta correspondiente) y posteriormente declarada inevacuada por la Directora Regional de Trabajo de la Provincia de Coclé, nos lleva a la consideración de que en el presente proceso no se han cumplido con los trámites legales pertinentes por lo que se ha violado la garantía procesal del debido proceso. Lo procedente es, pues, confirmar la resolución apelada.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 25 de marzo de 1998 expedida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial mediante la cual se concede el Amparo de Garantías Constitucionales presentado por el Licenciado Lorenzo Marquínez B. en representación de Fernando Jaén.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS BARRANCOS & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ARCE AVÍCOLA, S. A., CONTRA DE LA SENTENCIA N° 129-JHD-13-98 DE 30 DE ENERO DE 1998 PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 13. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense BARRANCOS Y ASOCIADOS, actuando en su calidad de apoderada judicial de la sociedad **ARCE AVÍCOLA, S. A.**, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Sentencia N° 129-JHD-13-98 de 30 de enero de 1998 expedida por la **Junta de Conciliación y Decisión N° 13**.

La referida resolución judicial ha declarado injustificado el despido del trabajador DAVID GUERRA, ordenando su reintegro, y condenando a la empresa ARCE AVÍCOLA, S. A. al pago de B/.624.00 en concepto de salarios caídos, cuantía que no permite la utilización del recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo.

Las razones invocadas por el amparista para fundamentar la supuesta conculcación de las garantías constitucionales a la empresa ARCE AVÍCOLA, S. A., se centran de manera medular en el argumento de que el despido del trabajador GUERRA es justificado, siendo que un estudio del caudal probatorio, así como de los hechos acreditados en el proceso, evidencian que la sanción de destitución se produjo con base en una causa legal que permite la imposición de la misma. Estima la parte actora que esta última actuación vulnera la garantía constitucional del debido proceso legal, así como el artículo 70 de la Constitución Nacional.

I. ANTECEDENTES

Acogida la demanda, en vías de que el Tribunal contara con todos los elementos necesarios para examinar la actuación demandada, se allega el expediente contentivo del proceso laboral DAVID GUERRA -vs- ARCE AVÍCOLA, S. A. Consta en autos que la controversia gira en torno al despido del trabajador GUERRA por presuntamente haber incurrido en una conducta injuriosa contra sus compañeros y la empresa.

La Junta de Conciliación N° 13, mediante sentencia de 13 de enero de 1998 examinó la pretensión del trabajador de ser reintegrado a su puesto de trabajo, y las pruebas presentadas por las partes, arribando a la conclusión de que el despido del trabajador GUERRA era injustificado. (Cfr. fojas 33-36 del expediente).

Esta decisión se explica con detalle en la sentencia referida, cuando la Junta de Conciliación y Decisión N° 13, en un examen exhaustivo de las

situaciones que convergen en el expediente señaló que:

> "La acción efectuada por el trabajador es un acto más que de violencia o amenaza, es un acto de grosería o malacrianza por parte del trabajador DAVID GUERRA al recibir un llamado de atención que le estaba efectuando la empresa a través de memorándum. La empresa en tal caso debió emitir una sanción disciplinaria leve, que fuera proporcional a su actuar y no aplicar la sanción máxima que es el despido".

II. DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE AMPARO

Esta Superioridad, una vez examinadas las circunstancias que acontecen en el negocio debe externar lo siguiente:

Fue necesario examinar de manera integral tanto los antecedentes remitidos, como los argumentos del amparista, para concluir que en este negocio el punto materia de conflicto no son las normas constitucionales cuya violación se alega (artículos 32 y 70), dado que no se plantea el desconocimiento o pretermisión de un trámite o formalidad esencial del proceso laboral, y por otro lado, la Corte ya ha señalado que si bien el artículo 70 de la Constitución Nacional constituye la piedra angular del principio de la estabilidad laboral, dicha norma contiene un principio general de reserva legal dirigido al legislador, por lo que el juzgador laboral, cuando resuelve una controversia de este orden, no puede vulnerarlo (sentencias de 10 de julio de 1984 y de 26 de mayo de 1986 entre otras).

Evidentemente, esta acción ha sido formulada con el fin de enervar el juicio apreciativo externado por la Junta de Conciliación y Decisión que al conocer del Proceso Laboral incoado por el trabajador DAVID GUERRA, declaró injustificado el despido con fundamento en un estudio de las constancias procesales existentes según las reglas de la sana crítica, del que concluyó que no se había incurrido en una conducta de tal magnitud que permitiera la aplicación de la medida de destitución con causa justificada con base al artículo 213 acápite A, numeral 2° del Código de Trabajo.

Así, la Junta de Conciliación en su examen probatorio señaló que las dos declaraciones aportadas por la empresa para probar que se había incurrido en la causal de destitución resultaron no idóneas para probar tal extremo, siendo que uno de los testigos señaló no haber visto al trabajador incurrir en ofensa o amenaza alguna, y el otro indicó haber escuchado ciertos comentarios del señor GUERRA, pero que no habían sido dirigidos a ninguna persona en específico. (Cfr. foja 35 del cuaderno laboral).

La Corte Suprema ha sido enfática al indicar que la finalidad de las acciones de Amparo no es la de erigirse en una tercera instancia que valore el juicio crítico externado por un tribunal jurisdiccional en lo relativo a la evaluación y valoración probatoria, dado que el debate de fondo de aquella materia es ajena a la acción de Amparo, por no tener la categoría de cuestión constitucional.

El Amparo, como acción independiente, tiende a reparar violaciones directas a los derechos constitucionales infringidos, razón por la cual no puede convertirse en una instancia adicional para valorar circunstancias propias de la apreciación del Juzgador al ponderar las pruebas y elementos que se allegaron al proceso, y que fueron evaluadas conforme a la sana razón y al conocimiento experimental de las situaciones que rodeaban el negocio.

A la Corte no le es dable en consecuencia, contrariar por vía extraordinaria del Amparo de Garantías Constitucionales la evaluación objetiva de las pruebas efectuada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 13, y dado que éste era el punto medular invocado, la acción presentada, pese a que inicialmente fue admitida en aplicación del principio in dubio pro libertate, no puede recibir una decisión de mérito.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrandojusticia en nombre

de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma forense BARRANCOS Y ASOCIADOS, actuando en su calidad de apoderada judicial de la sociedad ARCE AVÍCOLA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA LICDA. MICHELLE I. DUEÑAS, EN REPRESENTACIÓN DE HORACIO FRANCISCO ARAÚZ ORTIZ, NEDELCA GISELA ARAÚZ ORTIZ, JUAN FRANCISCO ARAÚZ ORTIZ Y ELSSIE EMMY ORTIZ DE ARAÚZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada MICHELLE I. DUEÑAS, actuando en su calidad de apoderada judicial de **HORACIO FRANCISCO ARAÚZ ORTIZ**, **NEDELCA GISELA ARAÚZ ORTIZ**, **JUAN FRANCISCO ARAÚZ ORTIZ Y ELSSIE EMMY ORTIZ DE ARAÚZ**, ha presentado Acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la resolución de 27 de septiembre de 1996, dictada por el **Tribunal Superior de Familia**.

La resolución judicial impugnada revocó un auto de 27 de marzo de 1996 expedido por el Juzgado Tercero Seccional de Familia, y en su lugar ordenó al Tribunal de la causa continuar con la tramitación del proceso de impugnación de paternidad propuesto por el señor HORACIO ARAÚZ QUEVEDO contra OLEGARIO VALDERRAMA GONZÁLEZ.

Procede esta Superioridad al examen del libelo presentado, en vías de determinar si cumple con las condiciones de admisibilidad establecidos en el Código Judicial y en la jurisprudencia de este Máximo Tribunal de Justicia.

La Corte advierte en principio que la demanda de Amparo ha sido debidamente formulada, pues cumple con los requisitos establecidos por el artículo 2610 del Código Judicial. Sin embargo, es imperativo dilucidar si estamos o no en presencia de una orden de hacer que represente un daño grave e inminente que requiera de una revocación inmediata, lo que constituye otro condicionamiento de admisibilidad, tal y como lo ha venido reiterando esta Superioridad.

El tercer párrafo del artículo 2606 consagra uno de los presupuestos procesales que marcan la característica más propia del Amparo de Garantías Constitucionales a los efectos de su admisibilidad: que las órdenes atacadas representan un daño de tal gravedad e inminencia, que requieren de su inmediata revocación. De allí que la Corte viene examinando este extremo con particular interés, al ser confrontada con la interposición de estas acciones de tutela constitucional subjetiva.

Ya la Corte ha señalado que el concepto de inminencia refleja la calidad de algo que amenaza o está para suceder prontamente. Por su parte, gravedad supone una importancia extrema. Analizados estos conceptos en el contexto del artículo 2606, se desprende que solamente son susceptibles de atacarse a través de la vía procesal de Amparo aquellas órdenes que cumpliendo con los otros requisitos exigidos, representan un daño cercano, sobreviviente, no un daño

remoto o que ya hubiese surtido sus efectos.

Consta en autos que la supuesta orden impugnada en este caso, recae en una sentencia expedida por un tribunal jurisdiccional, que una vez analizada la controversia jurídica relativa a si debía continuarse un proceso de impugnación de paternidad o no, resolvió ordenar la continuación del mismo.

La referida resolución está calendada 27 de septiembre de 1996, siendo notificada a las partes interesadas en los meses de septiembre y octubre de 1996, tal como se aprecia al anverso del folio 20 del expediente. Ello palmariamente evidencia que se trata de una resolución con carácter jurisdiccional expedida aproximadamente hace un año y ocho meses, por lo que no parece traslucir en manera alguna la existencia de un daño grave y mucho menos inminente que pudiese afectar a los amparistas. Cabe acotar que a estos últimos tampoco está dirigida la supuesta orden de hacer por ellos impugnada.

En otro orden de ideas, el impulso procesal que ordena el Tribunal Superior de Familia en el caso de la impugnación de paternidad presentada por HORACIO ARAÚZ se apoya en un cuidadoso examen del litigio, en cumplimiento de su función jurisdiccional de administrar justicia. Es así que los argumentos de los amparistas están encaminados a objetar el juicio de valor externado por el Tribunal en conocimiento de la causa, más que alegar alguna violación directa que se produzca a la Constitución Nacional.

En este sentido debe esta Superioridad reiterar, que la determinación y calificación legal de aspectos controvertidos en el proceso no pueden ser dirimidos dentro de la Acción de Amparo de Garantías; no es la finalidad de estas acciones la de erigirse en una tercera instancia para valorar el juicio crítico externado por un tribunal jurisdiccional.

Todas las circunstancias mencionadas previenen a la Corte de declarar afirmativamente la admisibilidad de la acción propuesta, al hacerse evidente la improcedencia de la misma.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrandojusticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la licenciada MICHELLE I. DUEÑAS, actuando en su calidad de apoderada judicial de HORACIO FRANCISCO ARAÚZ ORTIZ, NEDELCA GISELA ARAÚZ ORTIZ, JUAN FRANCISCO ARAÚZ ORTIZ Y ELSSIE EMMY ORTIZ DE ARAÚZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, CONTRA LA ORDEN EXPEDIDA POR LA JUEZ DECIMOQUINTA DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce este Máximo Tribunal de Justicia, de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado ROGELIO CRUZ RÍOS, en su calidad de apoderado judicial de **JOSÉ CASTRILLÓN HENAO**, contra la orden dictada por la **Juez Decimoquinta de Circuito Penal del Primer Circuito**

Judicial de Panamá.

I. ANTECEDENTES

Según se advierte en principio, recientemente la Corte Suprema de Justicia en Pleno, ha tenido conocimiento en grado de apelación, de otra acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada contra la misma orden de hacer impugnada, expedida por la misma funcionaria, y que versa sobre el mismo objeto. En la actualidad circula un proyecto de resolución judicial que resuelve dicha pretensión.

Según consta en autos, esta es la tercera acción de Amparo presentada en este caso, siendo que ya el Primer Tribunal Superior de Justicia ha inadmitido la acción en tres oportunidades a saber: mediante resolución de 17 de abril de 1998; resolución de 20 de abril de 1998 y finalmente mediante resolución de 29 de abril de 1998, cuya apelación se ventila en esta oportunidad.

La orden de hacer impugnada por el Amparista en todas las acciones consiste en lo dispuesto el día 14 de abril de 1998, cuando la Juez Decimoquinta de circuito penal resolvió el inicio de la Audiencia Preliminar del señor CASTRILLÓN HENAO a las 10:10 de la mañana, hora en que el defensor técnico del señor HENAO se había retirado del recinto judicial. El apoderado judicial de CASTRILLÓN HENAO ha señalado que lo decidido por la Juez demandada al iniciar la audiencia sin que él estuviese presente, ha resultado en una violación a las garantías procesales del imputado.

La parte afectada presentó ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, acción extraordinaria de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden que dispuso la celebración de la audiencia preliminar en estas condiciones, demanda que, como ha quedado expuesto no fue admitida por el referido Tribunal mediante resoluciones de 17 y de 20 de abril de 1998.

II. LA RESOLUCIÓN APELADA

Nos corresponde examinar el tercer pronunciamiento externado por El Tribunal A-quo en este caso (resolución de 29 de abril de 1998), misma que niega la admisión de la demanda arguyendo que contra la actuación judicial atacada mediante vía de amparo, no se habían agotado todos los mecanismos procesales de impugnación, puesto que la supuesta orden podía ser ventilada a través de la jurisdicción penal ordinaria, en el mismo acto de audiencia, mediante incidente de previo y especial pronunciamiento, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2281 del Código Judicial.

III. ARGUMENTOS DEL APELANTE

El apoderado judicial del amparista en su escrito de apelación, reitera básicamente que la acción presentada debía ser admitida, dado que la orden atacada no es susceptible de ser impugnada a través del incidente de previo y especial pronunciamiento contemplado en el artículo 2274 del Código Judicial, puesto que este mecanismo está reservado sólo para situaciones específicas detalladas en la citada norma, dentro de las que no se encuentra la circunstancia planteada por el amparista.

IV. DECISIÓN DEL TRIBUNAL AD-QUEM

Esta Máxima Corporación de Justicia se ve precisada a reiterar los conceptos adelantados en fecha reciente, al conocer de la apelación instaurada contra otra resolución del Primer Tribunal Superior de Justicia que negó, con base en las mismas razones en que se apoya la resolución apelada, la admisión a la Acción de Amparo de Garantías a favor de JOSÉ CASTRILLÓN HENAO.

Así, el Pleno de la Corte ha señalado que el incidente de previo y especial pronunciamiento no es el mecanismo idóneo para impugnar lo resuelto por la juzgadora penal en este caso, siendo que el artículo 2274 del Código Judicial relativo a la presentación de estas incidencias, se encuentra contenido dentro de las disposiciones procesales aplicables a la audiencia penal de fondo en la

etapa plenaria del proceso, y los reserva para ventilar materias específicas, como se desprende del propio texto legal en comento (falta de competencia, agotamiento de legitimación para actuar, etc.), entre las que no se encuentra el punto controvertido en este negocio, razón por la cual dicho incidente resultaría improcedente para resolver el asunto planteado por el amparista.

La Corte destacó sin embargo, que si lo que pretende atacar el defensor técnico del señor CASTRILLÓN HENAO es la supuesta falta de asistencia legal o representación del imputado en el acto de audiencia preliminar, como en efecto parece traslucir de los argumentos presentados en el libelo de demanda, aún quedaba abierta la posibilidad de impugnar la actuación de la funcionaria judicial a través de la solicitud de nulidad, conforme a lo previsto en el artículo 2298 del Código Judicial, que sí representa un mecanismo adecuado para resolver el punto controvertido, y que por ende debió ser agotado en cumplimiento de lo previsto en el artículo 2606 del Código Judicial.

Finalmente esta Superioridad consideró que existe incluso una razón más fundamental para negarle viabilidad a la acción de Amparo presentada, y ello tiene que ver con la naturaleza de la pretensión del amparista y la extemporaneidad con que se presenta la misma.

En efecto, al quedar claramente establecido que el acto demandado por el letrado CRUZ RÍOS, es la orden expedida por la Juez Decimoquinta de Circuito Penal de Panamá de "dar inicio" a la audiencia preliminar contra JOSÉ CASTRILLÓN HENAO el día 14 de abril de 1988", se desprende que este acto procesal se llevó a cabo el día referido y en los subsiguientes, con la participación incluso del propio licenciado ROGELIO CRUZ.

La acción de Amparo de Garantías Constitucionales, por la especialidad de la materia que tutela, está diseñada para reparar violaciones directas a la Constitución, principalmente cuando se trata de actos que por su gravedad e inminencia requieren su revocación inmediata. Así lo ha venido señalando esta Superioridad en numerosas oportunidades, subrayando;

1. que es elemento fundamental del Amparo la urgencia en la protección del derecho constitucional que se estima conculcado; y 2. que la inminencia del daño se refiere a que el perjuicio sea actual, no pasado u ocurrido y que exista una amenaza concreta de afectación, que está para suceder prontamente.

Es un hecho de conocimiento público que la Audiencia Preliminar de JOSÉ CASTRILLÓN HENAO se inició el día programado (14 de abril de 1998); que en el acto de audiencia de ese día se le asignó un abogado defensor al imputado puesto que el letrado CRUZ RÍOS había abandonado el recinto, y que la Audiencia continuó en los días siguientes con la participación del licenciado RÍOS en su calidad de defensor de JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, lo que también evidencia que el defensor técnico, al comparecer al estrado judicial en los días subsiguientes y tomar participación en el acto, convalidó las actuaciones realizadas al iniciarse la Audiencia Preliminar.

Palmariamente se desprende en consecuencia, que en este caso no existe un perjuicio "inminente" que se origina por la existencia de una orden que "amenace por cumplirse". La orden ya ha sido ejecutada y cumplida, así como la Audiencia Preliminar concluida en su totalidad. Por otra parte, no existe en este caso una orden concreta que pueda ser revocada, puesto que no es posible retrotraer lo decidido por la juzgadora al momento de "iniciar" la Audiencia Preliminar el 14 de abril de 1998, acto procesal que se realizó en un período de varios días, y que como repetimos ha concluido, contando con la presencia del defensor del imputado JOSÉ CASTRILLÓN HENAO.

Finalmente, este Máximo Tribunal de Justicia no puede obviar la excesiva actividad litigiosa adelantada por el procurador judicial del señor CASTRILLÓN HENAO en este caso. El Primer Tribunal Superior de Justicia ya ha decidido en tres oportunidades en el curso de quince días, la no admisión de tres Acciones de Amparo presentadas contra la misma orden, en las que se han invocado los mismos argumentos jurídicos para negarle viabilidad a dichas acciones.

El Pleno de la Corte por su parte, recibe por segunda vez en grado de apelación, en un reducidísmo lapso de tiempo y antes de que pudiera firmarse la resolución judicial que decidía la primera, el conocimiento de esta Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, que como ha quedado visto versa idénticamente sobre los mismos hechos, las mismas partes, el mismo objeto y la misma pretensión que las anteriormente presentadas. Ello denota un exceso en la gestión del licenciado CRUZ RÍOS, a quien se le hace la advertencia que de continuar en este patrón de actividad será sancionado ejemplarmente por abuso de gestión.

Esta Superioridad se ve precisada en estas circunstancias, y conforme a la jurisprudencia reiterada por este Tribunal, a señalar que la Acción de Amparo de Garantías efectivamente no debe ser admitida, y procede a confirmar, aunque por razones distintas, la resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 29 de abril de 1998, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA LICENCIADA LIZA MARIE JAEN, EN REPRESENTACIÓN DE JOSEFA HAYDEE TREJOS DE JUSTINIANI, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA PJ-4 DEL 13 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 4 (PROCESO LABORAL: CENTRO MÉDICO GENERAL VS. ALEX MUÑOZ.) MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada LIZZA MARIE JAEN, en ejercicio del poder que le ha conferido JOSEFA HAYDEE TREJOS VIUDA DE JUSTINIANI, como representante legal de **CENTRO MÉDICO GENERAL, S. A.**, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Orden de Hacer contenida en la Sentencia PJ-4 del 13 de marzo de 1998 dictada por la **Junta de Conciliación y Decisión N° 4.**

Se procedió al examen del escrito contentivo de la acción presentada, a fin de determinar si cumple con los requisitos legales que hacen viable su admisión.

El examen del libelo de la demanda de amparo, que corre de fojas 5-13, revela que cumple las formalidades que exige la ley, por lo que se procedió a su admisión.

Los hechos que se establecen como fundamento de este amparo plantean que se presentó demanda por despido injustificado, lo cual no fue aceptado por el empleador demandado. Alega éste que trató de probar el hecho con pruebas testimoniales y documentales, pero que el tribunal las desestimó, sin llegar a examinar el mérito de las mismas, incumpliendo la obligación que señala el artículo 732 del Código de Trabajo.

De las normas constitucionales citadas como infringidas sólo resulta procedente, para efectos de la acción de amparo, el artículo 32, pues, como se ha señalado en otros casos, las otras disposiciones (art. 17 y 18) son de

carácter programático y no viables para fundamentar esta acción.

En este sentido, en cuanto al artículo 32 de la Constitución, el amparista señala que la sentencia violó el debido proceso, "dejando en un estado de indefensión a nuestro representado, ya que se condenó en base a hechos no probados".

En la sentencia impugnada, que corre de fojas 2-3, se expresa que la parte demandada -representada por la licenciada Jaén- "presentó su material probatorio documental y testimonial" y, que consta en el acta de audiencia "que se agotaron los traslados de pruebas que la ley contempla". Sin embargo, una vez finalizada la etapa de presentación y traslado de pruebas, el tribunal "de forma unánime" resolvió que no era necesario practicar los dos testimonios aportados por la licenciada Jaén, "por considerar que con lo ya aportado el tribunal estaba ilustrado a cabalidad".

Así, la Junta de Conciliación demandada efectuó la ponderación del material probatorio expresando las siguientes consideraciones:

> "...
> Con la prueba T-1 que aportara el demandante, queda claro que la empresa nunca negó la existencia de la relación laboral, con el Sr. Muñoz, lo que manifestó fue que se trataba de una relación por servicios profesionales, hecho que no pudo sustentar con pruebas tal y como establece el Código de Trabajo. Es más hasta manifestó que la demandada le alquilaba un espacio en la clínica al Dr. Muñoz, situación que al igual que la primera no ha sido probada.
>
> Nuestro Código de Trabajo es muy claro cuando desarrolla el tema de la carga de la prueba, en su artículo 735.
>
> La empresa aportó al expediente una serie de documentos que además de ser inconducentes no cumplen con ninguno de los requisitos que nuestra ley laboral impone para que alcanzara (sic.) una calidad de plena prueba. Hay que decir que las pruebas E-1, E-2,E-3 y E-4 no tienen por ningún lado el nombre de la empresa demandada, además de que son documentos que no tienen ninguna firma responsable, ni establecen por quién fueron confeccionados. La prueba E-5 es una declaración jurada que no guarda relación con el proceso, al darle lectura se llega a constatar que la persona firmante de la misma dejó de laborar para dicha clínica en fecha muy anterior a la fecha de entrada que el hoy demandante ha establecido como fecha de inicio de labores, fecha que además tampoco fue discutida por la demandada, lo establecido en la en prueba E-5 no se puede inferir que haya sido la situación laboral del trabajador demandado Sr. Alex Muñoz.
>
> Todos los hechos de la demanda fueron negados en su momento por la abogada de la empresa; pero esta en ningún momento de la audiencia aportó documentación alguna con calidad probatoria que demostrara el por qué de la falsedad de tales alegaciones. ..." (Fs. 2 vta. hasta fs. 3).

El propio enjuiciamiento efectuado por la Junta, en cuanto a las pruebas documentales aportadas por la demandada, calificándolas de inconducentes, desdice lo argumentado en el sentido de que era innecesario tomar la declaración de los testigos aducidos por la empresa. No se practicó la prueba testimonial que se adujo en término legal y el tribunal -la Junta- no dio una convincente explicación para respaldar su decisión de dejar de hacerlo.

La Junta de Conciliación, en la parte motiva del fallo dice que la empresa nunca negó la relación laboral. Sin embargo, en el expediente (antecedente) se observa que en el Acta de la Conciliación se dice:

> "TERCERO: La representación de la empresa manifiesta que no existe la obligación de pagar prestaciones y derechos adquiridos porque la relación entre el doctor ALEX V. MUÑOZ y la clínica es o era como

servicio profesional". (Fs. 4 vlt.- antecedente).

Igualmente, en el Acta de Audiencia, al proceder la demandada a contestar los hechos de la demanda, expresó:

"PRIMERO: ES FALSO, EL DR. ALEX M. NO LABORABA PARA LA DEMANDADA, EL ARRENDABA UN CUBICULO. ..." (Fs. 11- antecedente).

Evidentemente no es cierto que la empresa demandada nunca hubiese negado la existencia de la relación laboral, pues, como acabamos de anotar, si lo hizo. Entonces, se estaba frente a un hecho que quedaba sujeto a prueba.

A juicio del Pleno, los testigos de la parte demandada debieron ser escuchados, a fin de poder establecer si había o no contrato de trabajo. Pero se rechazó la práctica de esta prueba, sin una clara justificación, dejando a la parte demandada sin defensa.

En reiterada jurisprudencia, el Pleno de esta Corporación ha dicho, en lo que respecta al tema de las pruebas dentro de un proceso, que la utilización de la acción de amparo de garantías constitucionales está limitada al hecho de que se conculque el derecho de una de las partes a aducirlas, a practicarlas y a contradecirlas dentro del término legal, y no a cuestionar la apreciación y calificación que realiza el juzgador de tales elementos. (Cfr.Fallo de 30 de diciembre de 1996, R.J. fs.31-32).

En este sentido resulta claro que, en este caso, se ha violado el cumplimiento del debido proceso, en relación al derecho de presentar pruebas, practicarlas y contradecirlas que le asistía a la parte demandada, por no haberse permitido que comparecieran sus testigos a declarar, con lo cual se coartó su derecho de defensa.

En relación a lo expuesto, la Corte ordena a la Junta de Conciliación y Decisión que subsane las anomalías cometidas, previamente mencionadas.

En consecuencia,LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la empresa CENTRO MÉDICO GENERAL, S. A. y, REVOCA la Sentencia PJ-4 dictada por la JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 4.

Notifíquese, Devuélvase y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ GREGORIO DELGADO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 16 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo Ríos Molinar, actuando en nombre y representación de **JOSÉ GREGORIO DELGADO**, ha interpuesto demanda de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de Hacer contenida en la Resolución de 16 de octubre de 1996, dictada por el **Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito**

Judicial.

Mediante la acción presentada, la demandante solicita que la resolución contra la cual se interpone el amparo, sea revocada en todas sus partes y sea declarada la nulidad de lo actuado, por violatoria de garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional, específicamente la Garantía del Debido Proceso.

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

El licenciado Eduardo E. Ríos Molinar expone que la resolución de 16 de octubre de 1996, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, viola las garantías constitucionales de su cliente, al no cumplir con lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Nacional que consagra la garantía del debido proceso.

Manifiesta que ello es así, pues, la orden impugnada admitió y aprobó el desistimiento del recurso de apelación, habiendo precluído la oportunidad para ejercer esta acción, ya que la misma se presentó después de que el recurso fuera admitido, estando el expediente dentro del término de la ley para que se dictara la sentencia de fondo. También señala que el desistimiento del recurso de apelación, debió ser conocido por la instancia en la que se interpone el recurso, es decir, por la Junta de Conciliación y Decisión N° 7.

ANÁLISIS DEL PLENO

El Pleno de esta Corporación pasa a resolver la presente controversia.

Se trata de un proceso laboral que se inicia en las Juntas de Conciliación y Decisión, cuando el trabajador José Gregorio Delgado solicita que se le indemnice por despido injustificado por la suma de cuatro mil trescientos veinte balboas (B/.4,320.00), en demanda interpuesta el 22 de julio de 1994, visible a fojas 1 y 2 del expediente anexo.

Consta de fojas 48 a 51 del expediente anexo, la sentencia PJ-7 de 3 de septiembre de 1996, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 7, que declara probada la excepción de inexistencia de la relación laboral entre las partes y, en consecuencia, absuelve a la Asociación de Empleados de la Contraloría de los cargos incoados en su contra por José Gregorio Delgado.

El Pleno observa que la Junta de Conciliación y Decisión N° 7, por medio del Auto PJ-7 de 24 de septiembre de 1996, concede el recurso de apelación y ordena el envío del expediente al Tribunal Superior de Trabajo para los fines correspondientes.

En razón de lo anterior, el Tribunal Superior de Trabajo, mediante edicto de notificación N° 1066 (f. 56) fijado el 4 de octubre de 1996 y desfijado el 7 de octubre de 1996, concede cuatro días para que, en los dos primeros, alegue el apelante, si desea, y en los dos días subsiguientes lo haga el opositor.

Por otro lado, reposa a foja 57 del expediente anexo, escrito de desistimiento de la apelación presentado por el apoderado judicial de José Gregorio Delgado, el cual fue recibido en el Tribunal Superior de Trabajo el 10 de octubre de 1996.

Aunado a lo anterior, el Tribunal Superior de Trabajo, mediante providencia de 10 de octubre de 1996, pone de conocimiento del apoderado de la parte demandada el desistimiento del recurso de apelación, a fin de que en los tres días siguientes a su notificación, se manifieste al respecto, de conformidad a lo que dispone el artículo 942 del Código de Trabajo.

Por su parte, el apoderado judicial de la parte demandada, licenciado Hermes Rodríguez Aguilar, se notificó de lo anterior el 10 de octubre de 1996 y señaló que renunciaba al término.

En este sentido, el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito

Judicial, mediante auto de 16 de octubre de 1996, aprueba el desistimiento presentado por el apoderado judicial de la parte actora y ordena la devolución del negocio judicial a la Junta de Conciliación y Decisión N° 7, para que archive el expediente.

De lo anteriormente expuesto, concluye el Pleno que el presente recurso de amparo no prospera, puesto que no se ha producido la violación del debido proceso, consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional, dado que la resolución de 16 de octubre de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial aplica correctamente los artículos 941, 942 y 944 del Código de Trabajo, referentes al desistimiento del actor.

Ello es así, pues se observa claramente que no precluyó el término para la presentación del desistimiento de la apelación, toda vez que el artículo 942 del Código de Trabajo establece que el mismo puede presentarse en cualquier estado del proceso, siempre y cuando el demandante lo presente después de que le fuera notificado el traslado de la demanda, con la conformidad del demandado para que el actor pueda desistir, y con anterioridad a la sentencia.

Por otro lado, cabe señalar que como el desistimiento del recurso de apelación fue recibido en el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial, el mismo era competente para conocer del mismo, contrario a lo señalado por el recurrente.

PARTE RESOLUTIVA

En consideración a lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA la demanda de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de Hacer contenida en la resolución 16 de octubre de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) FABIÁN A ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN JOSÉ RUEDA LINARES CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. RAMIRO FONSECA PALACIOS ha presentado a favor de **JUAN JOSÉ RUEDA LINARES**, acción de habeas corpus contra el **Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionado con Drogas.**

La acción fue interpuesta inicialmente ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el cual en sentencia de 13 de abril de 1998, decidió inhibirse del conocimiento de dicha acción por que la remitió a esta Superioridad para que se resuelva lo que en derecho corresponda.

Encontrándose en estado de resolver la acción de habeas corpus presentada,

se observa a foja 10 expediente que el día 17 de abril de 1998, el Lcdo. Ramiro Fonseca Palacios presentó escrito mediante el cual desiste de la acción interpuesta.

Dado que el artículo 1073 del Código Judicial le otorga el derecho para desistir expresa o tácitamente del incidente, recurso o la demanda que haya interpuesto una persona, es perfectamente viable el desistimiento de la acción de habeas corpus.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus presentada a favor de JOSÉ RUEDA LINARES contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VICTOR HILARIO CHALES CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Luis A. González ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **VICTOR MANUEL HILARIO CHALES** y contra el **Director General de la Policía Técnica Judicial**.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director General de la Policía Técnica Judicial quien, por medio del oficio N° A.L.-0255-98 de 15 de abril de 1998, informó lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor VICTOR HILARIO CHALES.
>
> 2. No tienen razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes a el prenombrado VICTOR HILARIO CHALES.

Del informe presentado por el Director General de la Policía Técnica Judicial, se infiere que el señor VICTOR HILARIO CHALES no se encuentra detenido, por lo que debe procederse con lo dispuesto en el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en vista de que no existe fundamento legal para continuar con los trámites de la acción de habeas corpus promovida por el señor Luis A. González, a favor de VICTOR HILARIO CHALES y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES ROGER LÓPEZ, SATURNINO VÁSQUEZ, ADALBERTO CASAS Y JUAN CARLOS LLERENA CONTRA EL FISCAL CUARTO DE CIRCUITO DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Aurelio Guzmán Muñoz ha presentado recurso de apelación contra la resolución de 15 de diciembre de 1997 emitida por el **Segundo Tribunal Superior de Justicia** mediante la cual se declaró legal la detención preventiva de la cual son objeto los señores **Roger López**, **Saturnino Vásquez**, **Adalberto Casas y Juan Carlos Llerena**.

Encontrándose en estado de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el licenciado Aurelio Guzmán Muñoz presentó, el día 31 de marzo de 1998, escrito mediante el cual desiste del recurso propuesto. Dado que el artículo 1073 del Código Judicial le otorga el derecho para desistir expresa o tácitamente del incidente, recurso o la demanda que haya interpuesto una persona, es perfectamente viable el desistimiento del mencionado recurso de apelación.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el Lcdo. Aurelio Guzmán M.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDILTRUDIS VALDESPINO LEZCANO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **EDILTRUDIS VALDESPINO** ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus a su favor, contra el **Fiscal Segundo Especial en Delitos Relacionados con Drogas**, por considerar que la privación de libertad que sufre, es ilegal.

Una vez acogida la acción se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por el señor Fiscal de Drogas mediante oficio N° FD-T1419-98, en el cual señala que la medida cautelar personal de detención preventiva del señor Valdespino fue dispuesta por ese despacho mediante providencia razonada de 15 de diciembre de 1997, toda vez que investigaciones

adelantadas revelan que es parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

ANTECEDENTES

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en la instrucción sumarial remitida por el Ministerio Público, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al señor VALDESPINO se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva, o si por el contrario, ésta se ajusta enteramente a las exigencias legales correspondientes.

La encuesta penal que mantiene privado de libertad al ciudadano VALDESPINO se origina a raíz de la detención de los señores de nacionalidad colombiana RAFAEL PÉREZ RIVERA y AGUSTÍN SINISTERRA por parte de autoridades de la Policía Metropolitana el día 13 de diciembre de 1993, en el área de la vía Juan Pablo Segundo. Este hecho se produjo en momentos en que se detectó a los prenombrados trasladando de manera sospechosa una caja que resultó contener 30 paquetes de polvo blanco identificados como la droga COCAÍNA, y en el interior de los vehículos que conducían estos señores fueron encontrados otros 54 paquetes contentivos igualmente de la droga COCAÍNA.

Al ser sometidos a requisa los señores PÉREZ y SINISTERRA, se encontró en poder de este último, un recibo de alquiler de un apartamento en el área residencial El Carmen a nombre de EDILTRUDIS VALDESPINO. Según se relata en el informe policial, al ser cuestionado sobre la residencia en mención, el señor SINISTERRA se tornó visiblemente nervioso y ofreció una fuerte suma de dinero a las autoridades de policía, que haría llegar a través de su abogado o de la señora "ELSI", puesto que según indicó, su vida y la de sus familiares correría peligro si se detectaba que en la casa alquilada por EDILTRUDIS VALDESPINO se encontraba una gran cantidad de sustancias ilícitas.

Se ordenó de inmediato el allanamiento a la residencia ubicada en el Carmen, donde se encontró a MARÍA ELSI MANYOMA DE MURILLO ciudadana colombiana que dijo que no vivía en dicha residencia, sino en el Chorrillo y que sólo se encontraba en dicha casa desempeñando funciones domésticas. Cabe destacar sin embargo, que en el inmueble fueron encontrados documentos a nombre de la señora MANYOMA que evidencian en principio, que ésta efectivamente reside en el apartamento allanado.

Por otro lado, AGUSTÍN SINISTERRA ofreció dinero a las autoridades a cambio de que no se investigara el apartamento en El Carmen, dinero que podía ser entregado por la señora ELSI, lo que permite inferir que puede tratarse de MARÍA ELSI MANYOMA, y que ambos se encontraban relacionados con el hecho punible investigado.

Dentro de la vivienda allanada se incautaron más de 115 paquetes contentivos de polvo blanco, que se presumió COCAÍNA, además de otros instrumentos utilizados en la preparación de embalajes de drogas, tales como bolsas plásticas, frascos con vaselina, cinta adhesiva y cajas vacías.

En vista de que MARÍA ELSI MANYOMA dijo residir en El Chorrillo, se procedió a allanar la casa cuyas referencias había ofrecido; en ella también se incautaron varios envoltorios plásticos contentivos de polvo blanco que se presumió COCAÍNA, así una pesa calibrada en gramos. Si bien al momento del allanamiento nadie se encontraba dentro de la residencia, la estufa de la casa estaba encendida al momento en que arribaron las autoridades de Policía, y afuera de la vivienda se encontraba el ciudadano EDILTRUDIS VALDESPINO, quien fue aprehendido en el acto, siendo que éste aparece como el arrendatario del apartamento en El Carmen donde se encontró gran cantidad de sustancias ilícitas.

Finalmente se deja expuesto, que al ser sometidos a indagatoria, el señor VALDESPINO niega conocer a PÉREZ y a SINISTERRA, aunque acepta conocer a MARÍA ELSI MANYOMA, y manifiesta que alquiló el apartamento en El Carmen sólo para hacerle un favor a la señora MANYOMA, ya que ésta no podía alquilarlo por su condición de extranjera.

Los hechos relatados sirvieron de base a las autoridades de drogas para iniciar la instrucción sumaria y disponer la detención preventiva en escrutinio, al encontrarse frente a la posible comisión de un delito contra la salud pública relacionado con drogas, donde concurren una serie de elementos que comprometen la participación, entre otros, del señor VALDESPINO.

Pese a ello, el proponente de la acción de habeas corpus arguye ante este Tribunal que no existen elementos que le vinculen a la droga incautada, puesto que no reside en el apartamento ubicado en El Carmen, en su poder no se ha encontrado sustancia ilícita alguna, y no conoce a los dos sujetos colombianos PÉREZ y SINISTERRA en cuyo poder sí se encontraron narcóticos.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En concepto de esta Superioridad, y contrario a lo expresado por el imputado VALDESPINO, su presunta participación en el hecho punible investigado se desprende de una serie de circunstancias que hasta el momento le vinculan con el ilícito.

Así, al momento en que se produce la captura de PÉREZ Y SINISTERRA quienes transportaban una gran cantidad de la sustancia identificada como COCAÍNA, en poder de SINISTERRA se encuentra un recibo de alquiler de un bien inmueble a nombre de EDILTRUDIS VALDESPINO. Se ha podido determinar, y así también lo acepta el imputado, que es el arrendatario legal de dicho inmueble, donde se encontró otra gran cantidad de sustancias ilícitas.

Finalmente, conforme a la dirección proporcionada por la señora MARÍA ELSI MANYOMA, se produce el allanamiento de una residencia en el sector de El Chorrillo, que permite la captura de EDILTRUDIS VALDESPINO.

El sindicado ha señalado al rendir indagatoria, que desconoce la procedencia de la droga incautada, y que su única relación con los demás implicados se dio en el caso de la señora MANYOMA, por quien alquiló el apartamento en El Carmen y reitera que no conocía a los señores PÉREZ y SINISTERRA.

Sin embargo, la instrucción sumarial ha revelado que en el apartamento de El Carmen fue encontrada gran cantidad de información que relaciona a EDILTRUDIS VALDESPINO con los señores RAFAEL PÉREZ, AGUSTÍN SINISTERRA y ELSI MANYOMA, lo cual contradice lo que estas personas han señalado en sus indagatorias.

Por otra parte se ha determinado plenamente que EDILTRUDIS VALDESPINO alquiló en su nombre, dos aparatos de telefonía celular que fueron encontrados en poder del señor RAFAEL PÉREZ, persona a quien supuestamente no conoce.

Estos hechos indiciarios, tal y como lo señala la Fiscalía de Drogas, parecen revelar la existencia de una organización criminal dedicada al trasiego de sustancias ilícitas, en las que EDILTRUDIS VALDESPINO participa presuntamente como facilitador de los medios de operación de la organización, contratando el alquiler de la residencia donde se encontraban sustancias ilícitas y que servía para la preparación del embalaje de la droga, así como de sofisticados aparatos de comunicación para los otros integrantes de la banda y el alquiler de vehículos para la movilización de los mismos.

Cabe destacar, que la cantidad de sustancia ilícita aprehendida en el operativo fue sometido a la prueba pericial del Laboratorio Técnico Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, arrojando resultados positivos para la determinación de la sustancia ilícita, en una cantidad que asciende a 208,930.00 gramos de COCAÍNA, y 1,860.00 gramos de COCAÍNA BAZUCO, según consta en la pericia visible a folio 209 del cuaderno sumarial.

Por ende, habida cuenta los elementos probatorios que hasta el momento pesan en su contra, esta Superioridad estima que se encuentra justificada la medida cautelar personal aplicada a EDILTRUDIS VALDESPINO, dado que su supuesta vinculación con el hecho delictivo se apoya en elementos objetivos y subjetivos que se detallan en el expediente.

Por otra parte, la medida cautelar fue decretada por autoridad competente, en tiempo oportuno, y cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales contenidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial establecidos para decretarla.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de EDILTRUDIS VALDESPINO.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ENRIQUE DÍAZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO presentó ante esta Superioridad, acción de Habeas Corpus a favor del señor **JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO** contra el **Director de la Policía Técnica Judicial**, por considerar que la privación de libertad que sufre, es ilegal.

Una vez librado el mandamiento de habeas corpus respectivo, el mismo fue contestado por la autoridad demandada mediante Memorial AL-0253-98 visible a foja 5 del libelo, en el que se informa que ese Despacho no ha ordenado la detención preventiva de JORGE DÍAZ PANEZO, y que el citado ciudadano no se encuentra filiado a sus órdenes ni bajo su custodia.

Como se colige de lo expuesto, en la actualidad la persona en cuyo favor se ha promovido la acción de habeas corpus no se encuentra privada de su libertad corporal, por lo que carece de objeto continuar con este procedimiento.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE DE PROCEDIMIENTO en el presente negocio y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ASUNCIÓN SILVA RUDAS CONTRA LA FISCAL CUARTA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce este Máximo Tribunal de Justicia, de la acción de Habeas Corpus propuesta por el BUFETE VALLARINO Y ASOCIADOS en favor de **JOSÉ ASUNCIÓN SILVA RUDAS**, contra la **Fiscal Cuarta de Circuito del Primer Circuito Judicial.**

ANTECEDENTES

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, al conocer en primera instancia de la acción propuesta, decidió mediante resolución de 27 de marzo de 1998, declarar legal la orden de detención preventiva expedida en principio por la Fiscalía Auxiliar de la República y mantenida por la autoridad demandada, al considerar que de las piezas de instrucción aportadas se desprende que la medida cautelar ha cumplido con las formalidades correspondientes.

Según se desprende de la narrativa de hechos contenida en el cuaderno sumarial, la detención preventiva del señor SILVA obedeció a que se encuentra sindicado por el presunto delito de hurto de automóvil. La acreditación del hecho punible se encuentra corroborado con la denuncia suscrita por el señor JAVIER LÓPEZ, quien puso en conocimiento de las autoridades la sustracción de su vehículo marca TOYOTA TERCEL, que se encontraba estacionado en el lugar donde reside en el corregimiento de Betania, hecho acaecido en horas de la madrugada del día 24 de noviembre de 1997.

Los indicios que vinculan al señor SILVA con el hecho punible investigado emergen de la diligencia de allanamiento realizada a la vivienda del señor JOSÉ ASUNCIÓN SILVA en el corregimiento de Juan Díaz, lugar en que fue encontrado casi totalmente desmantelado, el bien objeto de la causa.

En adición a ello, reposan en la instrucción sumarial, las declaraciones ofrecidas por DAMARIS MARISOL BEECH, concubina del sindicado (fs. 33-35) y de CARLOS BLACKMAN (fs. 38-42), quienes directamente han señalado a JOSÉ ASUNCIÓN SILVA como la persona responsable del hurto y desmantelamiento del automóvil.

Así, según narra DAMARIS BEECH, los señores CESAR MARÍN, CRISTIAN WILLIAMS, un sujeto apodado MONO BLANCO, y su esposo JOSÉ SILVA RUDAS son responsables del hurto del automóvil propiedad del señor JAVIER LÓPEZ, quienes los llevaron a casa de JOSÉ SILVA RUDAS con el fin de que éste lo desmembrara, y utilizara sus piezas para ser colocadas en otro auto. Estas afirmaciones las realiza la señora BEECH de manera voluntaria bajo juramento, señalando que fue su propio esposo, JOSÉ SILVA, quien le comentara en detalle estos hechos.

Una vez comprobada la circunstancia de que el vehículo encontrado en el allanamiento efectivamente pertenecía en propiedad al señor LÓPEZ, siendo el que se había reportado como hurtado, se inicia la instrucción sumarial que condujo eventualmente a la expedición de orden de detención preventiva, medida cautelar objetada por la defensa técnica de la prenombrada a través de la presentación de la acción de habeas corpus.

Al fundamentar la acción de habeas corpus se señaló por una parte, que no existían elementos probatorios que vincularan a JOSÉ ASUNCIÓN SILVA con el delito investigado, delito que además tenía contemplada pena mínima de prisión que no alcanzaba los dos años, razón por la cual la medida aplicada devenía ilegal.

Por su parte el Tribunal A-quo, en la resolución judicial de 27 de marzo de 1998, declaró legal la orden de detención preventiva de JOSÉ ASUNCIÓN SILVA, indicando que reposan en el expediente sumarial elementos que apuntan hacia la vinculación del encartado con el hecho punible, y en vista de que conforme a la reforma introducida en el Código Penal por la Ley 53 de 1995, el artículo 184-A del citado cuerpo legal aumenta la pena para los delitos de hurto de automóvil, estableciendo una penalidad de tres (3) a seis (6) años de prisión, y de cinco (5) a diez (10) años si el hecho es perpetrado por dos o más personas.

FUNDAMENTO DE LA ALZADA

El proponente de la acción de habeas corpus al sustentar el recurso de alzada, básicamente ha manifestado que su disconformidad con la sentencia del A-quo radica en que dentro de la instrucción sumarial "no existe propiamente sumariado debidamente vinculado a la ejecución del hecho punible", por lo que a su juicio, la orden de detención no cumple con los requisitos contenidos en las normas legales que regentan la materia.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

El Tribunal ad-quem, una vez atendidos los argumentos del recurrente, procede al análisis tanto de la actuación del Tribunal a-quo como de las constancias sumariales, en vías de determinar si le asiste razón al apelante en el sentido de que la detención preventiva ordenada sobre el señor JOSÉ ASUNCIÓN SILVA se ha producido con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para decretarla.

Esta Superioridad advierte que la detención preventiva dispuesta en este caso, obedece primeramente a que en la vivienda allanada por las autoridades policiales, en la que reside el señor SILVA, fue detectado el automóvil hurtado a JAVIER LÓPEZ.

Por otra parte, el señor CARLOS BLACKMAN (sobrino de JOSÉ SILVA), y la propia concubina de JOSÉ ASUNCIÓN SILVA ha declarado que éste le había confesado que es parte de un grupo de personas dedicadas al hurto y desmantelamiento de automóviles, con el aparente propósito de abastecer de piezas a otros vehículos. La referida señora BEECH ha proporcionado incluso los nombres de las otras personas involucradas en el hecho, algunas de la cuales ya han sido detenidas.

Por ende, los elementos objetivos y subjetivos que vinculan a JOSÉ ASUNCIÓN SILVA con la presunta comisión del hecho punible tipificado en el artículo 184-A del Código Penal quedan en evidencia dentro de la instrucción sumarial que se adelanta, y permite la aplicación de la medida de detención preventiva.

Finalmente es de resaltar que hasta la fecha, no ha podido hacerse efectiva la orden de privación de libertad de JOSÉ SILVA, siendo que se encuentra evadido de la justicia, lo cual le ha imposibilitado rendir indagatoria y presentar sus descargos, pero lo que también constituye una conducta indiciaria que opera en su contra, al haberse sustraido de la investigación criminal, pese a tener conocimiento de que es sujeto de una investigación sumaria y de que existe en su contra una orden de detención preventiva.

Contrario a lo que sugiere el apoderado legal del encartado, corresponderá al juzgador de la causa en la fase plenaria, la determinación del grado de participación o responsabilidad que le cabe a JOSÉ ASUNCIÓN SILVA en la comisión del delito, circunstancia que no compete determinar al Tribunal de Habeas Corpus, constreñido al examen de la legitimidad formal de la medida de detención preventiva.

A este efecto se ha podido constatar, que la medida cautelar personal fue dispuesta por orden de autoridad competente, en resolución debidamente motivada, con el detalle de los elementos de convicción que vinculan al sindicado con el hecho punible investigado, y dentro del término de ley, razón por la cual se ajusta enteramente a lo dispuesto en los artículo 2148 y 2159 del Código Judicial, y amerita la confirmación de la sentencia apelada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES, la resolución de 27 de marzo de 1998 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que DECLARÓ LEGAL la orden de detención preventiva del señor JOSÉ ASUNCIÓN SILVA RUDAS.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MEJIA ARQUIMEDES CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **CARLOS ALBERTO MEJIA ARQUIMEDES** contra el **Fiscal Auxiliar de la República**.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el agente de instrucción demandado contestó en los siguientes términos:

> "1- Esta agencia de instrucción del Ministerio Público, no ha ordenado la detención preventiva del señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARQUIMEDES.
>
> 2- No existen motivos o fundamento de hecho y de derecho para ello.
>
> 3- No tenemos bajo custodia u órdenes a la referida persona". (Fs.6).

La Corte ha podido verificar que, previo a la presentación de esta acción, el mismo abogado presentó una demanda de habeas corpus similar a favor de una pluralidad de personas, entre las que figuraba CARLOS ALBERTO MEJIA ARQUIMEDES, pero contra la Agente Delegada a la Fiscalía Auxiliar o la Fiscalía Auxiliar, bajo la entrada N° 213-98. El informe del Fiscal Auxiliar, fue igual al que nos ocupa, al señalar no haber ordenado la detención preventiva ni tener bajo sus órdenes a los favorecidos con la acción.

En el citado pronunciamiento el Pleno de la Corte aclaró que había conocido de ese caso particular porque el Segundo Tribunal declinó competencia a la Corte para aprehender su conocimiento, en atención a que la Agente Delegada, con jurisdicción en una sola provincia, está adscrita a la Fiscalía Auxiliar que tiene jurisdicción en toda la República. Sin embargo, la Corte dijo que en los casos en que la orden de detención fuere emitida por la Agente Especial adscrita a la Fiscalía Auxiliar, la competencia corresponde al Segundo Tribunal, conforme lo señala el artículo 2602 del Código Judicial.

Como consecuencia de ello la Corte se inhibió de pronunciarse y declinó la competencia respecto a la orden de detención girada por la Agente Especial de la Fiscalía Auxiliar contra CARLOS ALBERTO MEJIA ARQUIMEDES, entre otros.

Por tanto, debido a que esta Corporación ha considerado la situación jurídica del favorecido con esta acción, reconociendo que no existe una orden de detención emitida por el Fiscal Auxiliar y declinando la competencia en cuanto al conocimiento de la decretada por la Agente Especial adscrita a tal Fiscalía, lo procedente es declarar la sustracción de materia y el cese del procedimiento de este habeas corpus.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA y ORDENA EL CESE del procedimiento del habeas corpus propuesto a favor de CARLOS ALBERTO MEJIA ARQUIMEDES contra el Fiscal Auxiliar de la República. Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARIEL JESÚS YORIS SEGURA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado CARLOS RANGEL CASTILLO ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **ARIEL JESÚS YORIS SEGURA** contra el **Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.**

El proponente de este habeas corpus solicita que se declare ilegal la detención preventiva de Ariel Yoris Segura, pues éste aceptó que la droga que le fue encontrada en su poder era de su propiedad y para su consumo. No obstante, alega que el Fiscal mantiene la detención "so pretexto de supuestos informes policiales de que el mismo no es sólo consumidor, sino que el mismo vende".

Librado el mandamiento de habeas corpus, la autoridad acusada contestó en los siguientes términos:

"...
A.- La orden de detención de ARIEL DE JESÚS JORY SEGURA, fue decretada mediante providencia de fecha veintitrés (23) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998)., por este despacho.

B.- Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de ARIEL DE JESÚS JORY SEGURA, se reflejan en que el día 23 de marzo, se recibió llamada telefónica en la Zona de Policía de San Miguelito y manifestaban que en el sector de San José, parte trasera de la iglesia católica se encontraba un sujeto de contextura delgada, tez morena y que vestía camiseta blanca, pantalón corto rojo y el cual se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas.

Por lo que de inmediato procedieron en el vehículo asignado al Sub-DIIP, al llegar al lugar visualizamos al sujeto con las mismas descripciones, por lo que procedieron a darle la voz de alto e identificándose como miembros de la policía, al realizarle el registro de rigor el Sargento Bermúdez le encontró en el bolsillo derecho del pantalón parte delantera un cartucho de material plástico de colores y con el logo de "CAMPESTRE" y al ser verificado contenía en su interior la cantidad de nueve (9) envoltorios de papel aluminio conteniendo un polvo blanco que se presume sea droga COCAINA y en otro cartucho plástico mantenía la cantidad de B/.15.00 balboas. El ciudadano responde al nombre de Ariel De Jesús Jory Segura.

Al ser indagado el señor Jory Segura, manifestó que él se encontraba en el portal de la casa de sus tía, y que cuando el vio la ronda se puso nervioso tiró y que él consume droga Pichi desde hace un año.

B.- El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva se consagra en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.-

C.- El joven ARIEL DE JESÚS JORY SEGURA, se encuentra recluido en la Instalaciones de la Policía Técnica Judicial, ubicadas en el

Edificio Avesa, a órdenes de este Despacho y a partir de este momento es puesto a órdenes de ese Augusto Tribunal, mediante Oficio # 1366 de esta misma fecha.

Adjunto a la presente le remitimos copias debidamente autenticadas de las sumarias constantes de veintidós (22) fojas útiles.

De los Honorables Magistrados,

(fdo.) LICDO. ROSENDO MIRANDA
FISCAL ESPECIAL EN DELITOS
RELACIONADOS CON DROGAS".
... (Fs. 5 y 6)

Para acreditar el hecho punible y la vinculación del proponente de esta acción a tal ilícito, se ha constatado en las sumarias que se instruyen, el informe de novedad de los agentes de la Policía (Fs.2-3) donde se detalla que el día de los hechos recibieron una llamada telefónica informándoles que en el sector de San José (parte trasera de la iglesia católica) estaba un sujeto moreno, delgado, con camiseta blanca y pantalón rojo, dedicado a la venta de sustancias ilícitas. Al llegar al lugar, visualizaron a la persona descrita, quien resultó ser ARIEL JESÚS JORYS SEGURA, y al ser revisado se le encontró en un bolsillo de su pantalón un cartucho plástico con nueve (9) envoltorios de papel aluminio conteniendo polvo blanco, presumiblemente cocaína; en otro cartucho plástico mantenía la cantidad de B/.15.00 balboas en efectivo.

Posteriormente, en la diligencia de prueba de campo se determinó que la sustancia encontrada era cocaína (pág. 6).

Así tenemos que contra el imputado existe la denuncia sobre la actividad de venta de droga a la que se dedicaba. Además, figura la droga que se le ocupó, en una cantidad que excede a la que se considera para consumo y, también se toma en cuenta el dinero que se le encontró en otra bolsa plástica, por la suma de quince dólares, desglosados en un billete de diez dólares y cinco billetes de un dólar.

Aunque la investigación es aún incipiente, las circunstancias anotadas constituyen indicios graves contra ARIEL JESÚS YORYS SEGURA para justificar la medida de detención preventiva decretada en su contra, pues obviamente resulta acreditado que no nos encontramos ante el tipo penal de posesión simple, sino ante la posesión agravada, sin perjuicio de que posteriormente se demuestre la comisión de una figura delictual distinta a la señalada.

Con base en lo expuesto, a juicio de Corte la detención preventiva es legal, pues se procede por un delito que tiene señalada pena mínima superior a los dos años de prisión y, la respectiva orden fue decretada por medio de diligencia, donde se expresa el hecho imputado y los elementos probatorios allegados para su comprobación y los que figuran contra el imputado, conforme lo exigen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Consecuentemente,LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de ARIEL JESÚS JORIS SEGURA y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARTÍN CAICEDO MARTÍNEZ A FAVOR DE CONCEPCIÓN OLIVARDÍA ROMERO CONTRA LA FISCAL QUINTA DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Al Pleno de la Corte ha ingresado, en grado de apelación, demanda de habeas corpus presentada por el licenciado Martín Caicedo Martínez a favor de **Concepción Olivardía Romero**, contra la **Fiscal Quinta de Circuito de Panamá**. Olivardía se encuentra recluido en el Sistema Carcelario de la Policía Técnica Judicial, por la supuesta comisión de delito contra el patrimonio.

La alzada se dirige contra fallo de 3 de marzo de 1998 dictado por el Segundo Tribunal Superior, que declaró legal la orden de detención atacada.

ANTECEDENTES DEL CASO

El 1° de septiembre de 1997 Jaime Enrique Rozette González presentó denuncia ante la Policía Técnica Judicial, en el sentido de que el automóvil Toyota, modelo Tercel, color blanco, año 1997, con número de motor N° 2E-2958039 y chasis N° EL50-0037979, fue hurtado en el estacionamiento del Edificio Nazareth, Corregimiento de San Francisco. El denunciante labora en la empresa "NATIONAL CAR RENTAL" y explicó que el vehículo se encuentra registrado a nombre de SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S. A., lo que acreditó documentalmente.

El 28 de septiembre del mismo año, agentes de la Policía Nacional localizaron el automóvil con tres sujetos en su interior. Durante la operación de captura fueron detenidos Carlos Almanza y Concepción Olivardía, mientras que el tercer sujeto se dio a la fuga.

En el informe de conducta la autoridad demandada indica que en el vehículo fue encontrado el registro de dominio de un automóvil con motor N° 2E-2958700 y chasis N° EL500038151, correspondiente a un automóvil de propiedad de la empresa "BUDGET RENT A CAR" que fuera vendido como pérdida total (fs. 28-30, antecedentes).

En informe de novedad los Cabos 1° 6612 Luis Zapata y Cabo 2° 12752 Orlando Sánchez manifiestan que, al inspeccionar el vehículo robado hallaron "un cartucho plástico debajo del asiento del pasajero que en su interior contiene (2) armas de fuego, una pistola cal. 380, marca Modea, serie #E 49718 Z, un proveedor con (15) municiones sin detonar, ambas armas no mantienen permiso ...". Tanto Olivardía como Almanza negaron la propiedad del cartucho y aseguraron que le pertenece a "Héctor", quien lo abandonó en el automóvil al momento de darse a la fuga (f. 13, antecedentes).

DECISIÓN DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR

El a-quo declaró legal la detención de Concepción Olivardía por considerar que, "si bien la investigación aún no ha podido determinar la supuesta autoría del hurto del vehículo, tampoco el detenido Olivardía ha dado una explicación sensata del porqué (sic) estaba dentro del carro como pasajero". A ello agregan el hecho de que las declaraciones del imputado no concuerdan con las de los agentes de policía, quienes afirman que el otro detenido, Almanza de la Rosa, era quien conducía el vehículo, mientras que ambos detenidos aseguran que el conductor era el sujeto llamado "Héctor", quien se dio a la fuga. De otra parte, según el a-quo el propio Olivardía huyó hacia la residencia 120, de la cual no salió hasta cuando las unidades de policía le advirtieron que "buscarían otra autoridad para sacarlo de la residencia" (f. 16, cuaderno de habeas corpus).

Valga indicar que el Tribunal Superior coincide con el agente de instrucción, en el sentido de que el delito investigado es de los que tienen pena mínima superior a los dos años de prisión, por lo que cabe la medida acusada.

DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA

Estima este Tribunal de habeas corpus que, si bien en la encuesta penal no figura prueba concluyente en el sentido de que Concepción Olivardía hubiere participado en el hurto del vehículo, las circunstancias de presencia y oportunidad constituyen prueba indiciaria de su vinculación con el delito que se investiga. Ello, aunado a que la pena aplicable es de 3 a 6 años de prisión, sustenta la aplicación de la medida cautelar impuesta.

Por las razones anteriores, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ENRIQUE RIASCOS RUÍZ CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha llegado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia una nueva acción de habeas corpus presentada por **Luis Enrique Riascos Ruíz**, en su propio nombre, contra el **Segundo Tribunal Superior de Justicia**. Esta iniciativa procesal tiene por objeto que se dictamine nuevamente sobre la legalidad de la detención preventiva que lo mantiene recluido en la Cárcel El Renacer, acusado del delito de homicidio cometido en perjuicio de Gilberto Rentería Angulo.

Por acogida la acción constitucional subjetiva, se libró mandamiento de habeas corpus, de conformidad con lo que establecen los artículos 2576 y 2577 del Código Judicial. El funcionario acusado, mediante oficio N° 56-A. C. de 13 de febrero de 1998, informa que la orden de detención preventiva fue dictada por el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial, mediante resolución de 11 de agosto de 1995 (fs. 14-15, cuaderno de habeas corpus).

El informe alerta sobre el hecho de que anteriormente, mediante sentencia del Pleno de la Corte Suprema de 13 de septiembre de 1996, se declaró legal la orden de privación de libertad del activador procesal.

De conformidad con el principio de relatividad de la cosa juzgada en materia de habeas corpus, la Corte reconoce la viabilidad de reexaminar las medidas cautelares personales, siempre y cuando se acredite la existencia de nuevos elementos de convicción con eficacia para variar el status procesal del afectado. Esta regla de carácter procesal resulta de una interpretación a contrario sensu del artículo 2595 del Código Judicial.

En ese sentido, el examen que ahora se hace da cuenta de que hasta el momento no se comprueba ninguna variación en la situación procesal del accionante, no han sido incorporadas a la actuación pruebas que modifiquen el factor probatorio antes evaluado, todo lo cual conduce a que esta nueva iniciativa carezca de mérito suficiente para justificar una variación de la decisión ya proferida en esta materia por este tribunal colegiado.

Por las consideraciones anteriores, el PLENO de la CORTE SUPREMA,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de Luis Enrique Riascos Ruíz y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Sub Secretaria General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO MANUEL BROWN ROSE CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Por medio de Oficio N° 773-S de dieciocho (18) de febrero de 1998, procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia, se recibió en la Secretaria General de esta Corporación de Justicia la acción de habeas corpus a favor del señor **EDUARDO MANUEL BROWN ROSE** contra el **Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá**, que mediante sentencia de siete (7) de enero de 1994 lo condenó a la pena de setenta (70) meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual período, por el delito de Violación Carnal en perjuicio de Vielka Yamileth Barsallo Santamaría.

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

Manifiesta el señor EDUARDO MANUEL BROWN ROSE, mediante manuscrito remitido desde la Cárcel Pública de San Felipe, que dicho proceso se encuentra prescrito, según el numeral tres del artículo 93 del Código Penal el cual señala que el proceso prescribe después de 6 años de cometido el delito, dicho proceso data del 18 de marzo de 1991 hasta el 12 de noviembre de 1997. (fs.1 y 2).

SUSTANCIACIÓN

Con providencia de 19 de febrero del 1998, se libra mandamiento de habeas corpus en contra de la Directora Nacional de Corrección, que mediante Nota N° 626-DNC.al de 26 de febrero del año en curso, rinde el siguiente informe:

> "A. La suscrita en calidad de Directora Nacional de Corrección no ha impartido orden de detención ni en forma escrita, ni verbal en contra del señor BROWN ROSE;
>
> B. No podemos hacer referencia a los motivos o fundamentos de hecho o de derecho porque no lo hemos ordenado;
>
> C. El señor BROWN ROSE, se encuentra recluido en la Cárcel Pública de San Felipe, a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, condenado a la pena de setenta (70) meses de prisión por el delito de Violación Carnal en perjuicio de Yamileth Barsallo Santamaría, según sentencia del Juzgado Octavo de Circuito del Primer Distrito Judicial de Panamá proferida el día siete de enero de 1994. Esta sentencia fue puesta en ejecución el día 12 de noviembre de 1997, por lo que cumplirá las dos terceras partes de la pena impuesta el día 2 de octubre de 2001 y la totalidad de la pena el día 12 de septiembre del 2003.

> Cabe añadir que el prenombrado fue condenado por segunda ocasión por el Juzgado Noveno de Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia N° SC-24 el día 9 de mayo de 1995 a cumplir la pena de dieciséis meses de prisión como responsable del delito contra la Fe Pública (Falsedad de Documentos), pena esta que le fue suspendida por el término de dos años". (Fs. 6-7).

Igualmente la Directora Nacional de Corrección remite los Cuadros Estadísticos Judiciales y copias debidamente autenticadas de las sentencias N° SC-24 de nueve (9) de mayo de 1995 (Delito de Falsedad de Documentos) y de siete (7) de enero de 1994 (Delito de Violación Carnal).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

Según lo normado en el párrafo primero del artículo 97 del Código Penal, que se refiere a la prescripción de la acción penal y de la pena, expresa lo siguiente:

> "Artículo 97. La pena privativa de libertad impuesta por sentencia ejecutoriada prescribe en un término igual al doble de la pena señalada en la sentencia sin que exceda de 25 años."

Se observa de la copia autenticada de la sentencia de siete (7) de enero de 1994, que EDUARDO BROWN ROSE fue condenado a cumplir la pena de 70 meses de prisión por el delito de Violación Carnal (fs. 20-14). Dicha pena quedó debidamente ejecutoriada en junio de 1994 (f.19), por lo que de conformidad con la norma anteriormente citada, la sentencia prescribe en un término igual al doble de la pena señalada, en tal caso estaríamos hablando de once (11) años y ocho (8) meses, situación que no se ha dado, porque hasta el momento solo han transcurrido aproximadamente cuatro años de ejecutoriada la sentencia.

Luego de examinar el informe rendido por la autoridad demandada, al igual que la copia autenticada de la sentencia condenatoria de siete (7) de enero de 1994, contrario a lo señalado por el accionante, observa el Pleno que no existe la alegada prescripción de la pena. Por tanto, el señor EDUARDO MANUEL BROWN ROSE, deberá cumplir la pena que le fue impuesta.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de EDUARDO MANUEL BROWN ROSE.

Por lo que se dispone, sea puesto nuevamente a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO BOLAÑOS CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE PANAMÁ, MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución de 31 de marzo de 1998 el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, DECLARÓ LEGAL la detención preventiva del señor **LUIS ALBERTO BOLAÑOS**, impartida por la **Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá** (fs.8-12).

La decisión jurisdiccional en comento fue impugnada por el licenciado Lorenzo De Gracia M.; y por concedido el recurso en el efecto suspensivo, permite a esta superioridad examinar la actuación.

HECHOS

El 31 de enero de este año, la señora Lourdes Vega, Gerente de Turno de la aerolínea Copa, denunció ante la Policía Técnica Judicial del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que en horas de la madrugada de ese día fueron encontrados por el señor Valentín Rodríguez tres bultos por el área de las correas ubicada donde baja el equipaje al pasar por los rayos X. Al ser revisados cada bulto contenía cincuenta unidades de relojes marca Zeiko y Citizen, con una cuantía aproximada de siete mil quinientos balboas (B/.7,500.00).

La mencionada mercancía fue sustraída de la maleta del señor Arnoldo Chanchava, quien viajó en el vuelo 410 de la compañía Taca.

FUNDAMENTO DEL APELANTE

El licenciado De Gracia sostiene que es ilegal la detención del señor Luis Alberto Bolaños, al señalar que existe una ley especial y posterior que debe ser aplicada a favor del reo, o sea, conceder la medida cautelar personal liberatoria con fundamento en el artículo 2147, 2147 F y 2148 del Código Judicial, a contrario sensu, concordantes con el artículo 183, numeral 3° del Código Penal.

Explica así, que se hurtó la maleta de un viajero y posteriormente se violentó la misma para sustraerle el contenido. Que no se forzó, saltó, penetró o violentó algo, para hurtarse el equipaje de un viajero. Y que el delito de hurto se materializó desde el preciso instante en que se tomó la maleta y era obvio romper o violentar la maleta del viajero para concretizar el hurto. Por tanto, no se trata del delito de hurto con penetración (fs.14-16).

FUNDAMENTO DEL PLENO

Corresponde examinar la resolución impugnada a fin de establecer si la detención preventiva que sufre el señor Luis Alberto Bolaños se ajusta a las normas constitucionales y legales existentes.

Se tiene así, que el Tribunal A Quo consideró satisfechos los presupuestos legales exigidos por los artículos 2090 ordinal 8 y 2073 del Código Judicial, que requieren que tanto la propiedad y preexistencia de los bienes objeto del delito como el mismo sean demostrados en la investigación. En ese sentido señaló que la preexistencia y propiedad de los relojes sustraídos se comprueba con las pruebas documentales consistentes en la factura de compra de los relojes y el registro de pasajeros. Y que con los testimonios de Valentín Rodríguez Pérez, Roger Barría Cochez, Alexander Arauz De Gracia, Rahamffis Del Pino quedó demostrado el hecho punible.

Ahora bien, el apelante no impugna la vinculación del señor Luis Alberto Bolaños con el hecho punible investigado, sino su calificación provisional.

Sin embargo, cabe resaltar que existen medios probatorios que vinculan al señor Bolaños en el ilícito que se investiga.

Consta en la denuncia presentada por la señora Lourdes Vega, que el señor Bolaños al igual que los señores Alexander Ruiz y Miguel Ríos eran los responsables del área donde fueron encontrados los objetos sustraídos del equipaje del señor Arnoldo Chanchava (f.4).

Por otra parte el joven Roger Barría Cochez, afirma que aproximadamente a las cinco de la mañana vio a Luis Bolaños y Miguel Ríos -compañeros de trabajo-

que sacaban un bulto de una maleta y lo colocaron debajo de la correa.

Ahora bien, los delitos contra el Patrimonio -que tienen gran incidencia en nuestro país-, se encuentran agrupados en el Título IV del Libro II del Código Penal patrio.

El Capítulo I se refiere al delito de hurto y comprende cinco artículos. El primero -artículo 181- describe el hurto simple en tanto los restantes -artículos 182, 183, 184 y 184 A - describen los distintos tipos de hurtos calificados.

El Tribunal A Quo estimó que se está ante la modalidad de hurto calificado contemplada en el artículo 184 ordinal 3 del Código Penal, cuya sanción es de 30 meses a 6 años de prisión. Llega a esa conclusión de la siguiente manera:

> "La conducta reprochable consiste en el apoderamiento arbitrario de bienes ajenos, rompiendo o forzando obstáculos establecidos para proteger la propiedad, porque el testigo VALENTÍN RODRÍGUEZ FLORES explica que al revisar la maleta donde estaban los paquetes con los relojes, de propiedad del pasajero CHACHAVAT, éste explicó que el zipper estaba roto aunque no habían violado el candado ..." (F. 10).

Se entiende así, que por el hecho de que "el zipper estaba roto" el Tribunal A Quo subsumió el ilícito cometido de manera provisoria en el numeral 3 del artículo 184 del Código Penal (aunque erróneamente se escribió numeral 4 (f.10), en el apartado de las disposiciones legales aplicadas se indica que es el numeral 3°).

Este tipo se refiere al uso de violencia sobre las cosas y requiere que el autor para cometer el delito o para transportar la cosa sustraída, la destruye, rompe o fuerza obstáculos de cualquier naturaleza establecidos para proteger a la persona o a la propiedad. Se trata de los casos en que hay fractura -hurto con fractura-, no siendo indispensable, para los fines de este numeral que la misma se dé en el lugar donde se encuentra la cosa sustraída.

Sin embargo, no compartimos el criterio del Tribunal A Quo, porque el hurto calificado consagrado en el artículo 183, que establece un intervalo penal de 20 a 50 meses de prisión, de manera específica se refiere al hurto cuando "sea de dinero u objetos pertenecientes a los viajeros, en cualquier especie de vehículos, de tierra, agua o aire, o en las estaciones o salas de espera de empresas de transporte público".

Al referirse la norma al viajero debe entenderse que es aquella persona que hace un recorrido largo, sea de un país a otro o de un lugar a otro dentro del mismo país. Por otra parte, es elemento esencial para que proceda la agravante del tipo aludido, que el dinero u objeto sustraído se de en el transcurso del viaje o en estaciones o salas de espera de la empresa de transporte público.

Como lo señala el penalista colombiano Luis Fernando Tocora, "Aquí lo que fundamenta la agravante es el aprovechamiento de las circunstancias azarosas de los viajes, y el mayor daño que suele producírsele a quien lo hace, por la separación de su sede donde puede sortear mejor la situación" (Derecho Penal Especial. Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, El Patrimonio Económico, La Libertad y el Pudor Sexual. pág. 89. Ediciones Librería del Profesional. 1991. Bogotá-Colombia).

Se advierte así, que los elementos de esta modalidad de hurto agravado se adecúan al cuadro fáctico presentado en esta investigación, y no así al hurto con fractura.

Lo que se constata con las pruebas allegadas, donde se desprende que el sujeto pasivo en la acción típica investigada lo es una persona que iba a realizar un viaje hacia Guatemala -señor Arnoldo Chanchava- según declaración de Valentín Rodríguez Pérez (pág.2), y que ya había entregado su equipaje a la empresa -aerolínea Taca- que lo transportaría (f.9).

Teniendo claro lo expuesto, se debe recordar que el principio de interpretación de la Ley Penal adoptado por nuestro código punitivo para resolver el problema del concurso aparente de tipos penales (aparente porque en realidad, sólo un tipo es aplicable) es el principio de especialidad -lex specialis derogat legi generali-; consagrado en el último párrafo del artículo 4 que dice: "Cuando varias leyes o disposiciones de este Código sancionen el mismo hecho, la disposición especial prevalecerá sobre la general".

Principio que no se puede obviar al momento de resolver la legalidad o ilegalidad de una detención preventiva, donde es innegable el valor procesal del fenómeno de la tipicidad, toda vez que uno de los aspectos que se debe tomar en consideración para decretar la detención preventiva -medida cautelar más severa-, lo es que el delito cometido tenga señalada pena mínima de dos años de prisión (art. 2148 del Código Judicial).

Siendo así y sujetándonos al ordenamiento penal existente, provisionalmente se subsume el actuar del detenido señor Luis Alberto Bolaños en el tipo penal contemplado en el artículo 183 numeral 3, cuya pena mínima es menor de dos años de prisión. Por tanto, la detención que actualmente sufre no tiene fundamento legal.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo apelado, DECLARA ILEGAL la detención preventiva y ORDENA LA LIBERTAD INMEDIATA de LUIS ALBERTO BOLAÑOS de no tener otra causa pendiente en su contra.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA M.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ALBERTO CASTILLO Y YUMA ALVALDO CASTILLO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Deen Rodríguez, quien interpuso acción de habeas corpus a favor de **YUMA ALVALDO CASTILLO** y **JOSÉ ALBERTO CASTILLO**, contra el **Director Nacional de Migración y Naturalización**, en escrito presentado ante la Secretaría de la Corte Suprema comunica que desiste de la acción constitucional interpuesta.

En relación con esa manifestación, en numerosas ocasiones ha sostenido esta Corporación que en materia de habeas corpus es factible el desistimiento siempre y cuando quien lo manifieste sea el detenido, su defensor o la persona que interpuso la acción.

Como quiera que en el presente negocio la expresión de desistimiento proviene del abogado de los detenidos, el Pleno nada tiene que objetar y, en consecuencia, procede admitir el desistimiento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento presentado por

el licenciado Miguel Deen Rodríguez, dentro de la acción de habeas corpus interpuesta en favor de YUMA ALVALDO CASTILLO y JOSÉ ALBERTO CASTILLO, contra el Director Nacional de Migración y Naturalización; en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ABEL CEDEÑO ESPINOZA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Luis Esquivel interpuso acción de habeas corpus a favor del señor **CARLOS ABEL CEDEÑO ESPINOZA**, quien se encuentra detenido a órdenes de la **Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas**, por la supuesta comisión de delito contra la salud pública.

Acogida la presente acción constitucional, se libró de inmediato mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio FD-T-1513-98 de 14 de abril de 1998, en los siguientes términos:

> "A. La orden de detención preventiva del ciudadano CARLOS ABEL CEDEÑO ESPINOZA, fue decretada por este despacho el 24 de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), por su presunta vinculación con un delito Contra La salud Pública, relacionado con Drogas.
>
> B. El fundamento de hecho para ordenar la detención preventiva del ciudadano CARLOS ABEL CEDEÑO ESPINOZA, se origina en virtud de los señalamiento (sic) que hace en su contra el ciudadano LUIS ALBERTO BLANDON PARDO, de haber sido la persona apodada "TACHO", quien le comprara un paquete con drogas por la suma de mil quinientos dólares, de los cuales entregó mil dólares ($1000.00), quedando pendiente el pago de los quinientos dólares ($500.00) restantes. Es menester establecer que el ciudadano LUIS ALBERTO BLANDO PRADO (sic) fue detenido mediante diligencia de allanamiento practicada por el señor Juez Nocturno de Policía del Distrito de San Miguelito el día 23 de marzo de 1998, en la diligencia judicial le fueron descubiertos al señor BLANDON PARDO, la cantidad de veintisiete (27) envoltorios de un material plástico contentivos de un polvo blanco, presunta droga COCAINA.
>
> Este señor BLANDON PARDO, resultó ser miembro activo de la Policía Nacional, y desde un inicio de la investigación adujo que entre él y su compañero de labores JAVIER CEDEÑO AMADOR, al encontrarse de ronda en el sector de Don Bosco para el día 22 de marzo, detuvieron a un ciudadano que portaba una bolsa de tela color verde, que en su interior mantenía dos (2) paquetes de regular tamaño contentivos de presunta droga COCAINA, disponiendo ambos agentes quedarse con la evidencia, dejando en libertad al ciudadano que la portaba. Posteriormente el agente BLANDON PARDO, se pone en contacto con un sujeto apodado "TACHO", en la parrillada "Don Pipe" de San Isidro, con quien conviene en venderle uno de los paquetes por la suma de

mil quinientos balboas ($1500.00).

Milita de fojas 22 a 29, las declaraciones de indagatoria y jurada rendidas ante este despacho, por el ciudadano LUIS ALBERTO BLANDON PARDO, donde refiere los detalles del hallazgo de la droga y cómo vende al ciudadano CARLOS ABEL CEDEÑO ESPINOZA uno de los paquetes con drogas.

Posteriormente es detenido el otro agente policial JAVIER CEDEÑO, quien entrega la suma de cuatrocientos diez Balboas ($ 410.00), producto de la transacción de drogas anotada anteriormente, y el mismo se acogió al beneficio que le confiere el artículo 22 de nuestra Constitución.

Este despacho da inicio a la investigación de los hechos por estar frente a la posible comisión de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, relacionado con drogas, efectuándosele al contenido de las veintisiete (27) bolsitas plástica (sic) transparentes incautadas al señor LUIS BLANDON PARDO, una prueba de campo, la que arrojo (sic) resultados positivos para el reactivo que determina la droga conocida como COCAINA (fs. 43)". (Fs. 5 y 6).

Del análisis del informe transcrito y del expediente que contiene las sumarias que se adelantan en este caso, por la supuesta comisión de delito contra la salud pública, se colige que la detención preventiva del señor CARLOS ABEL CEDEÑO ESPINOZA cumple con los requisitos que exigen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En primer lugar, se observa que fue dictada por autoridad competente, mediante resolución de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de 24 de marzo de 1998, consultable de fojas 44 a 47 del expediente principal.

En segundo lugar, como elemento probatorio allegado al proceso para la comprobación del hecho punible se cuenta con la diligencia de prueba de campo, con resultado positivo (f. 43), practicada sobre las veintisiete bolsitas de plástico transparente que contenían polvo blanco, que le fueran incautadas al señor LUIS ALBERTO BLANDÓN PARDO.

En tercer lugar, como prueba que vincula al señor CARLOS ABEL CEDEÑO ESPINOZA con el delito que se investiga consta el señalamiento directo que le hace el señor LUIS ALBERTO BLANDÓN PARDO, al rendir declaración indagatoria consultable de fojas 22 a 28 del expediente principal, de la cual se ratifica a foja 29 de ese mismo cuaderno. En ella señala que el beneficiario de la presente acción constitucional fue la persona que le compró un paquete de cocaína por la suma de mil quinientos balboas, de los cuales recibió mil balboas.

Al momento de la captura del señor BLANDON PARDO se le incautó la suma de trescientos ochenta balboas y a su compañero JAVIER CEDEÑO, cuatrocientos diez balboas.

Por último, por la cantidad de sustancia ilícita incautada se presume que la misma tenía como propósito su suministro en venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal, lo cual constituye un delito que tiene prevista pena mínima de prisión superior a dos años, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal.

Consecuentemente, esta corporación judicial considera que existen, hasta el momento, elementos probatorios que vinculan al señor CEDEÑO ESPINOZA con el delito por el cual se le investiga, razón por la cual debe mantenérsele detenido preventivamente.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor CARLOS ABEL CEDEÑO ESPINOZA y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Primero Especializado en Delitos

Relacionados con Drogas.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS MEQUECHO CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Deen Rodríguez promovió el 29 de abril del presente año, acción de habeas corpus a favor de **LUIS MEQUECHO** y contra el **Director Nacional de Migración.**

Posteriormente, el día 30 de abril de 1998, el licenciado Miguel Deen Rodríguez desistió de la acción de habeas corpus promovida mediante escrito presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse al desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Miguel Deen Rodríguez dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de LUIS MEQUECHO contra el Director Nacional de Migración y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORIEL FUENTES MONTENEGRO, JAIME RUIZ VARELA Y HÉCTOR SALAZAR VARELA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Luis Fuentes Montenegro promovió el 31 de marzo del presente año, acción de habeas corpus a favor de **ORIEL FUENTES MONTENEGRO**, **JAIME RUÍZ**

VARELA y HÉCTOR SALAZAR VARELA y contra el **Director de la Policía Nacional**.

Posteriormente, el día 20 de abril de 1998, el licenciado Luis Fuentes Montenegro desistió de la acción de habeas corpus promovida mediante escrito presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse al desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Luis Fuentes Montenegro dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de ORIEL FUENTES MONTENEGRO, HÉCTOR SALAZAR VARELA y JAIME RUÍZ VARELA contra el Director de la Policía Nacional y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS OMAR APONTE CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El joven **CARLOS OMAR APONTE**, en su propio nombre, ha promovido acción de habeas corpus a su favor y contra el **Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial**.

La parte actora alega en su escrito de habeas corpus, que existen contradicciones en las declaraciones de las personas que lo vinculan al ilícito investigado y, por tanto, bajo el principio de que "la duda favorece al reo" debe concedérsele su libertad.

Acogido el presente negocio se libró mandamiento de habeas corpus correspondiente contra el Tribunal demandado y mediante el Oficio N° 456, de 16 de marzo de 1998, el Presidente de esa Corporación rindió informe en los siguientes términos:

> "Primero: No es cierto que este tribunal haya ordenado la detención preventiva de Carlos Omar Aponte (a) Coco Aponte, la misma fue decreta por la Fiscalía Primera Superior de este Distrito Judicial.
>
> Segundo: Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho en que se basó la aplicación de esta medida se plasman en la diligencia expedida por la Agencia del Ministerio Público antes mencionada, fechada 29 de julio de 1997, legible a fojas 293 a 295 del expediente principal.
>
> Tercero: Dicho detenido actualmente se encuentra a órdenes del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, pero en este momento

> se están impartiendo las instrucciones necesarias a fin de que el mismo sea filiado a órdenes de esa alta Corporación de Justicia ...
>
> Cabe señalar que por vía de la resolución 24 de diciembre de 1997 (fs. 400-410), esta sede jurisdiccional decidió abrir causa criminal en contra de Carlos Omar Aponte (a) Coco Aponte por considerarlo presunto infractor de las normas legales contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II de Código Penal y del Capítulo II, Título IV de la misma excerta legal, en vista de que se consideraron satisfechos los elementos enunciados en el artículo 2222 del Código Judicial; es decir, la plena prueba de la existencia del hecho punible y graves indicios de responsabilidad en contra del prenombrado". (Fs. 17-18).

De fojas 176 a 179 del sumario se lee la providencia dictada el 9 de febrero de 1997, por el señor Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual ordena la detención preventiva de CARLOS OMAR APONTE (A) COCO APONTE como presunto infractor de las normas que configuran los delitos contra la Vida y la Integridad Personal y contra el Patrimonio, en perjuicio de Young Yuk Si.

Para resolver sobre la legalidad de la orden de detención impugnada, el Pleno de la Corte Suprema debe determinar si la misma ha sido emitida de conformidad con lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y las normas constitucionales que garantizan la libertad personal. Los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial disponen, respectivamente, que sólo se podrá decretar la detención preventiva, previo cumplimiento de las formalidades legales, cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, y mediante diligencia escrita dictada por el funcionario competente, quien deberá expresar el hecho imputado, los elementos probatorios recabados para la comprobación del hecho punible y aquellos que figuran en el proceso contra las personas cuya detención se ordena.

De fojas 277 a 283 del sumario se lee el Protocolo de Necropsia N° 76-14-125 practicado al occiso Young Yuk Si mediante el cual se acredita plenamente la existencia del delito investigado contra la Vida y la Integridad Personal en perjuicio de Young Yuk Si, tipificado en el Capítulo Primero, Título I, del Libro Segundo del Código Penal, sancionado con pena de prisión superior a los 2 años, por lo que la detención preventiva decretada en contra de CARLOS OMAR APONTE alias "COCO APONTE" y mantenida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, no viola en forma alguna el artículo 2148 del Código Judicial.

El imputado CARLOS OMAR APONTE, al rendir declaración indagatoria, niega los hechos que se le imputan y afirma que el día de autos se encontraba en su casa acompañado de su mujer Xiomara Almengor.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial mediante el Auto de 24 de diciembre de 1997, abre causa criminal contra CARLOS OMAR APONTE por los delitos contra la Vida y la Integridad Personal y contra el Patrimonio con fundamento en las siguientes razones:

> "...
> Así las cosas, estima esta corporación que en efecto las constancias de autos prueba la muerte violenta del señor Young Yuk Si por una acción de hombre, tal como lo establece la diligencia de inspección ocular, reconocimiento y traslado de un cadáver (fs. 3-6); el informe de necropsia practicado por el doctor Hugo A. Moreno sobre el cadáver (fs. 3-6); el informe de necropsia practicado por el doctor Hugo A. Moreno sobre el cadáver del afortunado Youn Yuk Si (fs. 277-281) y el certificado de defunción expedido por la Dirección de Registro Civil (f. 312).
>
> En lo que respecta al delito contra el patrimonio figura en el expediente las declaraciones de las personas que señalan que uno de los sujetos se dirigió hacia la caja de la abarrotería después de producirse el disparo que ocasionó la muerte a Young Yuk Si.

> Igualmente la declaración jurada de Young Jin Ding (fs. 38-40) indica que en la caja había alrededor de 100 balboas.
> ...
> En cuanto a Carlos Omar Aponte (a) Coco Aponte, figura la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos en la cual la testigo reconocedora Idaira Marizol González le señaló como el sujeto que acompañaba al hombre que disparó contra Young Yuk Si causándole la muerte. Además de este señalamiento consta en autos las declaraciones juradas de Juan De Dios Pittí Navarro (fs. 155-157) y Sonia Isabeal Jované de Pittí (fs. 158-160) quienes lo señalan como uno de los sujetos que participó en los hechos violentos perpetrados el 13 de junio de 1997 en la abarrotería La Estrella".

Como la realidad procesal expresada en la resolución transcrita no ha cambiado, la comisión de los delitos ha sido probada, y los elementos probatorios examinados vinculan a CARLOS OMAR APONTE alias "COCO APONTE", con la comisión de dichos delitos, a juicio del Pleno, la orden de detención preventiva decretada en su contra no viola las normas constitucionales que garantizan la libertad ambulatoria y se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de CARLOS OMAR APONTE, alias "COCO APONTE", dictada mediante providencia el 29 de julio de 1997, y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GUIDO ALBERTO OROZCO VILLARRETA CONTRA LA HONORABLE MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON, SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ RAMIRO FONSECA presentó ante esta Superioridad, acción de habeas corpus a favor de **GUIDO ALBERTO OROZCO VILLARRETA**, contra la Honorable Magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema, **GRACIELA J. DIXON**, por considerar que la privación de libertad que sufre su patrocinado, es ilegal.

Cabe señalar que la acción que nos ocupa fue originalmente dirigida al Segundo Tribunal Superior de Justicia, instancia judicial que decidió, mediante resolución de 27 de febrero de 1998, abstenerse de conocer de la acción presentada, toda vez que el proceso que por delito contra la salud pública se le siguió al señor GUIDO OROZCO se encuentra en la actualidad en la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del recurso de Casación Penal interpuesto contra la sentencia condenatoria expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Enderezado el libramiento de habeas corpus contra la autoridad a cuyas órdenes se encuentra el detenido OROZCO VILLARRETA, el mismo fue contestado por la Honorable Magistrada DIXON mediante memorial de 16 de marzo de los corrientes, en la que se informó a esta Superioridad en lo medular lo siguiente:

> "El señor GUIDO ALBERTO OROZCO VILLARRETA se encuentra a nuestras órdenes debido a que el proceso a que se refiere el habeas corpus nos fue repartido el 16 de octubre de 1997 en razón de un recurso de casación propuesto por el licenciado JOSÉ RAMIRO FONSECA contra la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de 24 de junio de 1997, que declara culpable a su representado señor GUIDO ALBERTO OROZCO VILLARRETA, por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas en la modalidad de intentar sacar drogas (cocaína) en tránsito con destino a otro país, dejando sin efecto la sentencia absolutoria dictada a su favor y lo condena a la pena de doce (12) años de prisión y lo inhabilita para el ejercicio de funciones públicas a partir del cumplimiento de la pena privativa de libertad. El recurso de casación aludido fue admitido el 18 de noviembre de 1997.
>
> En la actualidad existe un proyecto en lectura en este despacho, cuyo ponente es el Honorable Magistrado FABIÁN A. ECHEVERS que resuelve un recurso de reconsideración contra la resolución que deniega la solicitud de sustitución de medida de detención preventiva por otra medida cautelar menos severa formulada a favor del señor GUIDO ALBERTO OROZCO VILLARRETA".

ANTECEDENTES

Es pertinente advertir que con anterioridad a la presente acción de habeas corpus, ante el Pleno de la Corte Suprema se presentaron otras dos acciones de esta misma naturaleza procesal por parte del letrado FONSECA, en las que de manera similar se solicitaba la declaratoria de ilegalidad de la detención preventiva de su patrocinado GUIDO OROZCO. En ambos casos, se desistió de las mismas en momentos en que se encontraba en fase de lectura el proyecto de resolución judicial que decidía la acción encausada.

Sin embargo, la Sala Segunda de la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse recientemente en torno a la solicitud de sustitución de medida cautelar de detención preventiva del señor GUIDO OROZCO, por alguna otra de las contenidas en el artículo 2147B del Código Judicial, fundamentando su petición en la reforma introducida al articulo 2147 de la misma excerta por la Ley 43 de 1997.

Cabe acotar que todas las acciones de habeas corpus presentadas a favor de OROZCO VILLARRETA, así como la solicitud de sustitución de medida cautelar, se sustentan bajo el mismo fundamento jurídico: que la ley 43 de 1997 ha establecido que cuando en primera instancia se declare la inocencia de un sindicado, éste deberá ser puesto en libertad, con independencia de los recursos impugnativos que se presenten contra la sentencia absolutoria.

A continuación se reproduce el texto reformado del articulo 2147, mismo que preceptúa lo siguiente:

> "Si la sentencia fuese absolutoria, la apelación no impedirá que el reo sea puesto inmediatamente en libertad. Sin embargo, en el caso de imputados por narcotráfico o delitos conexos, el juez sustituirá la detención preventiva por otra medida cautelar que garantice la presencia del imputado en el juicio".

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS

La parte recurrente arguye en lo medular, que OROZCO VILLARRETA fue absuelto en primera instancia por delito contra la salud pública mediante sentencia absolutoria de 16 de diciembre de 1996; posteriormente es condenado en segunda instancia por el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante sentencia de 24 de junio de 1997, y aunque en la actualidad reposa en la Sala Segunda de la Corte Suprema un recurso de Casación Penal contra la sentencia condenatoria expedida en segunda instancia, lo pertinente es que en aplicación del texto de la Ley 43 de 1997 se otorgue inmediata libertad al señor GUIDO OROZCO, o en su defecto, una medida sustitutiva a la detención preventiva.

EXAMEN DEL TRIBUNAL

Como ha quedado consignado, el Pleno de la Corte no tuvo oportunidad de emitir un pronunciamiento de mérito en las dos ocasiones previas en que se presentaran las acciones de tutela de la libertad corporal.

Sin embargo, la Sala Penal de la Corte sí tuvo oportunidad de examinar la solicitud de sustitución de medida cautelar esgrimida bajo el mismo razonamiento jurídico en que se sustenta la acción de habeas corpus, denegando la petición encausada.

Las partes más relevantes de la sentencia de 11 de febrero de 1998 expedida por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema en que se decide negativamente tal solicitud, se reproducen a continuación por su importancia y conducencia para los efectos de decidir la acción de habeas corpus:

> "Esta causa pone de manifiesto una especial situación procesal, cual es la de que ambas sentencias, la absolutoria de primera instancia y la condenatoria de segunda instancia, tienen los efectos suspendidos en virtud de los recursos interpuestos, por lo que, desde el punto de vista de la técnica procesal, no se puede sostener la prevalencia de ninguna de ellas.
>
> Así las cosas, sólo la vigencia de los principios rectores del proceso penal permite deslindar la cuestión planteada, debiendo imperar generalmente en estos casos la interpretación que resulte más favorable al imputado, criterio expresamente reconocido por el artículo 43 de la Constitución Nacional: `En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aun cuando hubiese sentencia ejecutoriada'. Favorabilidad y favor libertatis son principios del derecho penal común que deben ser defendidos y preservados, por lo que los conceptos de oportunidad, conveniencia, razón de Estado y otros supuestamente justificados por el "derecho especial de drogas", que amenaza con subvertir los basamentos de la ciencia del derecho penal, deben ser crítica y meticulosamente ponderados.
>
> No se puede desconocer que las nuevas modalidades de la actividad delictiva han impuesto la necesidad de adoptar algunas medidas procesales de excepción, como lo es precisamente el temperamento o distinción que la norma reformada (a.2147) hace en relación con el narcotráfico y delitos conexos. Así, el artículo 2147B del Código Judicial deja librado a la discreción judicial la aplicación de las medidas que afectan la libertad personal del imputado según "el grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto" (inciso primero), debiendo proporcionarla "a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado" (inciso segundo). Inclusive extiende la facultad del juzgador hasta decretar la detención preventiva "cuando todas las otras medidas cautelars resultaren inadecuadas" (inciso tercero).
>
> No hay duda de que en el "caso concreto" que ahora llega a conocimiento de la Sala, habida cuenta de la naturaleza del delito (tráfico de drogas), de la importancia del hecho delictivo (sancionado con 12 años de prisión) y de la personalidad del imputado, en los términos de la casuística que desarrolla el artículo 2147C se plantean claras "exigencias inaplazables ... relacionadas con situaciones concretas de peligro" (ordinal a) de que "el imputado se de a la fuga" (ordinal b), todo lo cual impone al juez el deber de evaluar "la efectividad de cada una" de las medidas susceptibles de ser aplicadas, procedimiento que, en este caso, hace francamente inconveniente la sustitución de la medida de detención preventiva vigente, desde la perspectiva de una eficaz política criminal".
>
> Esta Corporación Judicial, al avocarse a la decisión del negocio, comparte

íntegramente los conceptos previamente citados, siendo que tal como atinadamente el Tribunal penal señalara, en la actualidad no se puede sostener la prevalencia de ninguna de las dos sentencias dictadas en el proceso que por Tráfico Internacional de Drogas se le ha seguido al sindicado GUIDO OROZCO VILLARRETA, por cuanto tanto los efectos de la sentencia absolutoria de primera instancia, como la condenatoria de segunda instancia han quedado suspendidos, en virtud de los recursos interpuestos.

De ello se desprende que la libertad del detenido no puede en este caso operar de manera automática como pretende el recurrente, haciéndose necesaria una evaluación de la situación del señor OROZCO VILLARRETA en vías de determinar la conveniencia de que en su caso se aplique una medida cautelar distinta a la detención preventiva. Entre los factores que se han tomado en cuenta para tal ponderación se encuentran: la naturaleza del delito imputado, la personalidad del sindicado, las garantías de su comparecencia al proceso, etc.

La cuidadosa apreciación efectuada por la Sala Penal, que este Tribunal comparte, revela la inconveniencia de otorgar una medida sustitutiva a la detención preventiva en este caso, por las razones que claramente se dejaron consignadas en la sentencia de 11 de febrero de 1998, circunstancia que irremisiblemente le niega viabilidad jurídica a la pretensión del recurrente.

Finalmente, y una vez deslindado el punto medular del negocio, esta Superioridad no puede soslayar la incesante gestión adelantada por el licenciado JOSÉ RAMIRO FONSECA en este caso. Prueba de ello lo constituyen las otras dos acciones de habeas corpus presentadas a fines de diciembre de 1997 y en el mes de enero de 1998 ante el Pleno de la Corte, para luego desistir de ellas sin razón aparente.

De igual manera se observa que el licenciado FONSECA presentó en el mes de febrero de 1998 esta acción de habeas corpus ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, siendo que para esa fecha tenía pleno conocimiento de que desde el mes de octubre de 1997 el detenido se encuentra a órdenes de la Sala Penal de la Corte Suprema, a raíz del recurso de Casación Penal presentado por él mismo.

En adición a lo anterior, el licenciado JOSÉ RAMIRO FONSECA ha presentado solicitud de sustitución de medida cautelar ante la Sala Penal de la Corte que le fue decidida en forma negativa, y contra la cual también presentó recurso de reconsideración. En la actualidad, conforme al informe presentado por la honorable Magistrada DIXON, se encuentra en fase de lectura el proyecto que decide la reconsideración presentada.

Lo anterior hace imperativo que se le indique al letrado, que su actividad procesal dentro del caso del señor OROZCO VILLARRETA se ha caracterizado por la presentación reiterada y sucesiva de acciones que ponen en ejecución el mecanismo de defensa y tutela de la libertad corporal de un ciudadano, para posteriormente desistir de ellas sin mayor justificación, y presentarlas nuevamente a los pocos días. De continuar en este patrón de actividad procesal podría acarrearle la sanción ejemplar que, por abuso de gestión, el Tribunal está conminado a imponer en situaciones como ésta.

Dado que la competencia del Tribunal de Habeas Corpus está circunscrita al examen formal de la detención preventiva, que en este caso se ha dispuesto cumpliendo con los requisitos constitucionales y legales establecidos a fin de decretarla, el Pleno arriba a la conclusión de que la privación de libertad que sufre GUIDO OROZCO VILLARRETA es legal, y así procede a declararlo de seguido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de GUIDO OROZCO VILLARRETA, y ordena que sea puesto nuevamente a órdenes de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS H. CUESTAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado Euldarin Asprilla C., de la firma forense Asprilla y Asociados, contra el **FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS**, a favor de **GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN**, detenida en el Centro Femenino de Rehabilitación, por delito contra la Salud Pública.

Acogida la expresada acción constitucional se libró el mandamiento correspondiente contra el funcionario demandado, Licenciado ROSENDO MIRANDA, el que por Oficio N° FD-T-1515-98 de 14 de abril de 1998 (fs. 7 a 9), rinde el siguiente informe:

> "A. La orden de detención preventiva de la ciudadana GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN, fue decretada por este despacho el 2 de enero de mil novecientos noventa y ocho (1998), por su presunta vinculación con un delito Contra La Salud Pública, relacionado con Drogas (fs. 22-24).
>
> B. El fundamento de hecho para ordenar la detención preventiva de GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN, tiene su origen el día 30 de diciembre del año próximo pasado, cuando unidades policiales de la Zona de San Miguelito, en recorrido vehicular son informados que en el sector de las 500, próximo al Super Mercado Victorianos de ese distrito, se encontraban tres (3) ciudadanos, entre ellos había una mujer, los cuales se encontraban vendiendo sustancias ilícitas, la que ocultaban en un pequeño muro donde permanecían sentados. Adicional, les informaron que los ciudadanos ee (sic) movilizaban en un auto Toyota con placa 511994, perteneciente a uno de ellos.
>
> Con tal información proceden los agentes al lugar, logrando ubicar a los ciudadanos que respondieron a los nombres de GLORYSEL ANDERSON DE ROMA (SIC), ROGELIO FERNANDEZ ECHEVERS y un menor de edad que mantenía dinero en efectivo por la suma de ciento nueve Balboas con sesenta y cinco centavos ($109.65), y la señora GLORYSEL DE ROMAN, portaba la suma de cuarenta y cuatro Balboas con cuatro centavos ($44.04).
>
> En esos momentos los agentes del orden público, proceden a verificar el lugar, detectando en la parte posterior del muro donde fueron encontrados sentados los sujetos, una botella plástica contentiva de veintinueve (29) pedacitos de una sustancias (sic) sólida color crema que presumieron era droga PIEDRA. En esos instante (sic) el sujeto que respondió al nombre de ROGELIO FERNANDEZ ECHEVERS, procede a darse a la fuga y en la huida se lleva el billete de cien Balboas ($100.00), que logra quitarle al menor de edad, sin poder ser capturado el mismo, procediendo las unidades con la conducción de la ciudadana GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN y del menor de edad a la estación policial de Santa Marta, en donde le son encontradoas (sic) en poder de la sumariada dos (2) fotos del ciudadano ROGELIO FERNANDEZ ECHEVERS, quien en su huida, dejo (sic) su auto Toyota

Tercel con sus llaves.

Este despacho da inicio a la investigación de los hechos por estar frente a la posible comisión de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, relacionado con drogas, efectuándosele a los veintinueve (29) trozitos de color cremoso, la prueba de campo, la que arrojo (sic) resultados positivos para el reactivo que determina la droga conocida como COCAINA (CRACK) (fs. 7).

De lo anotado, se observa la comisión de un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, relacionado con drogas. Operan en contra de la ciudadana GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN, el informe policial visible a fojas 2 y 3 del sumario; las declaraciones juradas de los agentes policiales EZEQUIEL PEÑUELA (Fs. 35-37); SERAFIN TORRES ACEVEDDO (SIC) (Fs. 38-40) y de SILVIA NEREIDA MELA ABREGO, quienes participan de la detención de los ciudadanos, y explican como (sic) recibieron la información que las tres (3) personas se dedicaban a la venta de drogas en el lugar, dando positivo el hallazgo de estas, así como dinero en efectivo en poder de los ciudadanos, y el hecho de haberse dado a la fuga el ciudadano ROGELIO FERNANDEZ ECHEVERS.

Por parte de la sumariada, tenemos que al rendir indagatoria, niega el cargo que se le imputa, alegando que el vehículo es propiedad de ROGELIO FERNANDEZ ECHEVERS, el cual es su novio, y que el mismo se dio a la fuga por encontrarse en Libertad bajo fianza. Igualmente aportó un comprobante del sistema Clave del Citibank, por un retiro de cincuenta Balboas ($50.00) (fs. 11-21).

El laboratorio Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, nos remite el resultado del análisis de las sustancias, las cuales dieron positivas para COCAINA (CRACK), con un peso total de 5.26 gramos (fs. 70).

El fundamento de derecho para ordenar y mantener la detención preventiva de la ciudadana GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. ..." (Fs. 7-8).

Adjunto al informe consta copia autenticada del respectivo sumario.

El recurrente en la parte medular de su escrito plantea lo siguiente:

"A. En ningún momento tal como lo señala (sic) los propios agentes captores, mi representada trató de evadir a los policías (sic) que la capturaron, ni mucho menos existe señalamiento directo alguno que la señalen (sic) como vendedora o traficante de droga, ni mucho menos como consumidora.

B. Se ha podido comprobar que mi representada es una mujer trabajadora, madre y padre de tres (3) hijos, a quienes con su esfuerzo de su trabajo así como de lo que gana de su libreta mantiene a los mismos.

C. En estricto derecho no existen elementos probatorios para respaldar la detención preventiva que pesa sobre GLORYSEL ANDERSON, tal como lo establece el artículo 2159 del Código Judicial en su numeral 3, cuando indica que deben existir elementos probatorios contra la persona cuya detención se ordena. Se desprende pues, que de las piezas procesales que adornan el presente cuaderno penal no existen, allanamiento, agente encubierto, dinero marcado, señalamiento directo que determinen que la joven ANDERSON haya estado vendiendo substancia ilícita, amén de las múltiples cooperaciones que la misma ha hecho en dar con la localización de la persona que salió corriendo al momento de la detención.

D. A la joven ANDERSON se le encontró en su poder dos (2)

> fotografías del Señor ECHEVERS y la misma explica el tipo de relación que mantenía con él, sin que esto la haga responsable de la conducta del mismo, ya que nuestro ordenamiento jurídico no castiga por andar con una persona que infringe la ley, es quien la infringe quien debe pagar las consecuencias de su infracción" (fs. 3-4).

Conforme a los antecedentes que se tiene a la vista y específicamente del informe policial que aparece a fojas 2 y 3 del expediente, cuando los agentes PIÑUELA, TORRES y MELA se encontraban de ronda, recibieron una llamada por radio, donde se les informaba que en sector de las 500, cerca del Super Mercado Victoriano tres ciudadanos, entre ellos una mujer, se dedicaban a la venta de droga, la que mantenían introducida en un pequeño muro, utilizando para el transporte de la droga u vehículo Toyota Tercel de color verde.

Con esa información, se dirigieron al lugar especificado, donde localizaron a un menor que dijo llamarse ALEXIS ALEJANDRO FERNANDEZ BERNAL de 15 años de edad, a ROGELIO FERNANDEZ ECHEVERS y a GLORYSEL DE ROMAN, encontrando en la parte posterior del muro un envase de material plástico de color blanco con tapadera de color verde que contenía en su interior la cantidad de "veintinueve pedacito (sic) de una sustancia cremosa la cual se presume sea droga (piedra) y en ese preciso momento en que se encontró la evidencia el ciudadano ECHEVERS se dio en precipitada fuga entre la casa adyacente y el Super Mercado".

Cabe señalar que al momento en que los agentes llegaron al lugar, le solicitaron a la señora de ROMAN que les entregara lo que tenía, pudiendo establecerse que portaba la cantidad de B/.44.04 mientras que el menor ALEXIS tenía la suma de B/.109.65 que los agentes, pese a que no pudo explicar su procedencia, se lo regresaron y cuando nuevamente se lo solicitaron, el menor les informó que "el billete de cien balboas se lo había quitado ECHEVERS y solamente le había dejado la cantidad de nueve balboas con sesenta y cinco centavos".

La sustancia ilícita localizada en la parte posterior del muro resultó positiva para la determinación de cocaína (crack) con un peso de 5.26 gramos.

Al rendir indagatoria, la señora GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN manifestó que para el 30 de diciembre de 1997 se encontraba en el área los 500, en San Miguelito cerca del Super Mercado, conversando con el señor ROGELIO FERNANDEZ, cuando llegaron agentes del orden público y varios jóvenes que allí se encontraban salieron corriendo, procediendo ella a buscar su identificación, comenzando los agentes a hacerle preguntas, diciéndole que sacara todo lo que tenía en el bolso, "y allí me encontró dinero, yo le expliqué al agente que yo venía de retirar un dinero del cajero de un banco y le enseñé un recibo correspondiente indicando la fecha y la hora, el cual le entrego a usted señor Fiscal como prueba de la procedencia del dinero que se me encontró al momento de mi detención. Después de ir al cajero fui al Burger King y compré un sandwies (sic) y luego acudí a la cita con el señor ROGELIO FERNANDEZ", de quien afirma es su novio, observando que los agentes de policía procedieron a revisar "toda el área y aproximadamente a unos cuatro metros entre unas piedras encontraron un frasquito de plástico y dentro del cual había droga, yo no sé a quién le puede pertenecer eso".

Negó la indagada dedicarse a la venta o al consumo de drogas y a pregunta del funcionario instructor expresó que desde hace tres años trabajaba en la Autoridad Portuaria como secretaria recepcionista, con sueldo de B/.300.00 mensuales y además tenía una libreta de la Lotería Nacional y ahorro por descuento directo, afirmaciones éstas que se comprueban con la documentación que aparece a fojas 18, 19, 21, 52, 53, 54 y 55 de los antecedentes.

De acuerdo con lo expuesto en la resolución en que se decretó la detención preventiva de GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN (f. 23) y de conformidad con los motivos que se expresan en la contestación del habeas corpus (f. 7 y ss.) las razones que fundamentan la detención preventiva de la imputada "son los señalamientos que le hacen los agentes captores y la información que previamente indicaba que se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas" así como "el dinero en efectivo en poder de los ciudadanos y el hecho de haberse dado a la fuga ROGELIO FERNANDEZ ECHEVERS".

Ni en el informe pericial de fojas 2 y 3 ni en las declaraciones de los agentes EZEQUIEL PIÑUELA (f. 35 del expediente), SEFARIN TORRES (f. 38) y SILVIA NEREYDA MELA ABREGO (f. 41) se le hace cargo concreto a la señora GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN. Ninguna de estas unidades indica haber observado a la imputada tratando de vender o vendiendo droga, ninguna afirma que a su persona se le encontró droga todos manifiestan que no opuso resistencia a su aprehensión y siempre negó ser la propietaria de la sustancia encontrada y el hecho que se hubiera recibido una información de que tres personas se encontraban vendiendo droga en el lugar al que llegó la policía y se localizara droga en el muro, no necesariamente debe llevar a la conclusión que GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN era una de las personas que se dedicaba a la venta de drogas, cuando no existen otros elementos serios de credibilidad que nos lleven a tener como cierta la veracidad de toda la información proporcionada.

También se indica como fundamento de la detención el hecho de haberse "encontrado dinero en poder de los ciudadanos" y al respecto, en lo referente a la suma de dinero que mantenía en su cartera la señora GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN se tiene que, tal como se encuentra acreditado en autos (f. 21) minutos antes de su aprehensión, a las 21:48 (10:48 p. m.) del 30 de diciembre de 1997 sacó la suma de B/.50.00 del sistema Clave del Citibank, N. A. Por tanto, la acreditación de esta afirmación, que la imputada expresó desde el momento de su aprehensión, justifica que tuviera ese dinero en su bolso y nunca podría utilizarse ese argumento como un indicio en su contra como tampoco fundamentar su detención en el hecho "de haberse dado a la fuga el ciudadano ROGELIO FERNANDO ECHEVERS", conducta negativa que en modo alguno puede extenderse contra la beneficiaria con este habeas corpus que, según lo declarado por los agentes captores, no opuso resistencia alguna a su aprehensión y ha dado, como se aprecia en su indagatoria, amplia información al funcionario instructor acerca de los lugares en donde puede ser localizado ROGELIO FERNANDEZ ECHEVERS.

El artículo 2147-A del Código Judicial establece que "Nadie será sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra". En tales circunstancias, advierte la Corte que no existen elementos suficientes, fuera de toda duda, que vinculen a la señora ANDERSON DE ROMAN con el delito investigado, por lo que la falta de elementos probatorios se traduce en una detención ilegal, según lo establecido por el numeral 3 del artículo 2159 del Código Judicial.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva decretada contra GLORYSEL ANDERSON DE ROMAN; y por consiguiente, ORDENA que sea puesta en inmediata libertad, siempre y cuando no tenga otra causa pendiente por la cual deba permanecer detenida.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LAURENCIO JAVIER DE GRACIA CONTRA LA FISCAL PRIMERA DE CIRCUITO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante resolución de 18 de marzo de este año, el Segundo Tribunal

Superior de Justicia DECLARÓ LEGAL la orden de detención preventiva de **LAURENCIO JAVIER DE GRACIA.**

Esa decisión jurisdiccional fue apelada por el licenciado Melvis A. Ramos R., y al ser concedido el recurso anunciado en el efecto suspensivo permite a esta superioridad conocer la alzada.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

Estima el licenciado Ramos que el Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró legal la detención de su defendido sin dar, a su juicio, ni un sólo ápice de contenido jurídico a su resolución; toda vez que al resolver la acción presentada ni siquiera calificó provisionalmente el tipo penal, lo que permitiría determinar si el mismo admite o no detención preventiva.

Señalan así, que los mencionados Magistrados sustentan la referida resolución en apreciaciones meramente subjetivas y en posibles hechos que aún están por demostrar en el proceso, lo que viola el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.

Tampoco comparte el criterio del Tribunal A-quo de considerar que la medida cautelar aplicada es legal, por el hecho que Laurencio Javier De Gracia no ha concurrido hasta el momento a rendir sus descargos ante el agente de instrucción. Estima el apelante que ello sería no reconocerle a su representado el derecho a interponer figuras reconocidas en nuestro derecho, como la fianza para no ser detenido y el habeas corpus preventivo, los que en esencia tratan de evitar que se someta a una persona a prisión cuando tiene la oportunidad de garantizar su participación en el proceso, prestando fianza de cárcel segura o evitando que se ejecute una medida arbitraria de detención preventiva, cuando el hecho que se investiga no lo amerita.

Por otra parte, sostiene que dictar una orden de arresto en contra de un proceso sin haber oído siquiera sus descargos y verificar si el delito en cuestión así lo permite, perjudica no solo la investigación sino, también, impide que el investigado ejerza su derecho a defensa.

Por lo que sería llamarse engaño señalar que lo correcto es que el sujeto que sabe existe una orden de captura en su contra, se presente ante la autoridad para que se ejecute la misma, sin antes buscar el medio legal que disuelva esa orden.

Por lo expuesto, solicita se revoque la resolución apelada y se declare ilegal la orden de detención dictada contra su cliente Laurencio Javier De Gracia. (fs.12-14).

ANÁLISIS DEL PLENO

De las copias autenticadas del expediente principal se advierte que la presente investigación penal trata de las lesiones personales con arma de fuego que sufrieran los jóvenes Yodaris Yaribeth Moreno López y Edwin Alvarado Jiménez, en horas de la madrugada del domingo 25 de enero del presente año, en el sector N° 2 de Samaria, Distrito de San Miguelito.

Con respecto al examen médico legal practicado el 2 de febrero pasado a la joven Moreno López, el doctor Eric Aguirre, Médico Forense, concluyó que las lesiones no pusieron en peligro la vida de los lesionados y le otorgó una incapacidad provisional de cuarenta y cinco (45) días a partir del incidente a Yodaris Yaribeth Moreno (fs. 11), mientras que a Edwin Alvarado Jiménez la doctora Mercedes R. de Lasso, luego de examinar sus lesiones -con tres días de evolución-, le otorgó incapacidad de quince (15) días a partir del día del incidente.

En sus respectivas declaraciones juradas, los jóvenes, víctimas de tales agresiones físicas, afirman que las lesiones les fueron producidas por un sujeto apodado "NIÑO" cuyo apellido es De Gracia (fs. 8-10 y 13-15), quien comenzó a disparar luego de tomar el arma calibre 38 que llevaba Oscar David Cossio Pineda.

Lo anterior es demostrativo que nos encontramos ante una conducta reprochable que ha sido tipificada por nuestro legislador en el Título I del Libro II del Código Penal de los delitos contra la vida y la integridad personal; y que vinculado a esa acción dolosa se encuentra Javier De Gracia (a) "Niño".

El tribunal a-quo como fundamento de su decisión sostiene en lo medular lo siguiente:

> "Si bien es cierto que las lesiones acreditadas en las sumarias hasta el momento, no revisten o refieren mayor gravedad (fs. 11 y 15), no se puede soslayar el hecho de que todavía no se cuenta con la incapacidad definitiva de EDWIN ALVARADO JIMÉNEZ, quien es la persona que resultó herida de mayor gravedad, a tal punto que se refiere, incluso, que todavía tiene un proyectil alojado en el abdomen, de los disparos por DE GRACIA.
>
> No está demás anotar que en vez de aclarar su situación, el beneficiario de la presente demanda de habeas corpus ha procurado, hasta el momento, sustraerse a la acción de la justicia, refugiándose, según se indica, en el interior de la República, supuestamente en la provincia de Chiriquí" (f.9).

Con respecto a lo manifestado en el último párrafo, transcrito, es importante señalar que al momento de aplicar una medida cautelar personal se debe considerar "la pena prevista por la ley para cada delito, no así la continuación, reincidencia o circunstancias del mismo".

Por otro lado, es importante resaltar que de las piezas del expediente, en especial las declaraciones de Yodaris Yaribeth Moreno López, Edwin Alvarado Jiménez, ambos lesionados a consecuencia de los disparos realizados por JAVIER DE GRACIA (a) "NIÑO"; además de las declaraciones indagatorias rendidas por Oscar David Cossio Pineda y Rigo Antonio Brands Alvarez, surgen señalamientos directos contra el beneficiario de la acción de habeas corpus, en el sentido de que fue la persona que disparó a los ofendidos Yodaris Moreno y Edwin Alvarado.

En tal sentido, si bien nuestro código punitivo consagra en el Capítulo II del Título I del Libro Segundo diferentes tipos de lesiones atendiendo al resultado (leves, graves, gravísimas) y al aspecto subjetivo (dolosas, arts. 135, 138 y 140; y culposas, art. 139), y le aplica diferentes penalidades respecto de cada una de dichas lesiones según la mayor o menor gravedad del resultado producido, en lo relativo a la medida cautelar aplicable, en el caso que nos ocupa, es menester observar el contenido del artículo 2147-C, que en su literal "C" señala lo siguiente:

> "Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas y otros medios de violencia personal".

En el caso sub-júdice, se advierte que la motivación del tribunal a-quo para declarar legal la orden de detención contra LAURENCIO JAVIER DE GRACIA fue que no consta la incapacidad definitiva de Alvarado Jiménez, aún cuando fue evaluado por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público tres días después de haber sido lesionado.

No obstante, si bien el Oficio N° 81-2518 donde consta la apreciación médico legal de las heridas que le fueron proferidas a Edwin Alvarado no indica la magnitud de la gravedad de las mismas (fs. 15), existen otros elementos como las declaraciones y señalamientos directos que le formulan Cossio Pineda, Brands Alvarez y los propios lesionados, que ilustran a cerca de la personalidad de DE GRACIA (a) "NIÑO".

Por tanto, aún cuando de manera provisional pareciera que nos encontramos ante el tipo penal contemplado en el artículo 136 cuya pena de prisión es de 1 a 3 años, siendo que el artículo 2147-C en su literal "C" permite aplicar las medidas cautelares tomando en cuenta además de circunstancias especiales que pudieran haber en el caso bajo análisis, la personalidad del imputado, y la

existencia o no de peligro concreto de que cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal, esta Corte considera que la orden impartida se encuentra plenamente fundamentada en la ley.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el fallo apelado, y DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva proferida contra LAURENCIO JAVIER DE GRACIA.

Notifíquese, y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTÓBAL A. CAÑIZALES M. CONTRA LA FISCAL PRIMERA DELEGADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha ingresado la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado DARIO MAREAS CARRILLO a favor del ciudadano **CRISTÓBAL A. CAÑIZALEZ MONTOTO**, Alcalde del Distrito de Arraiján, contra la **Fiscal Primera Delegada de la Procuraduría General de la Nación.**

Sostiene el recurrente que con la orden de detención impugnada se ha vulnerado las garantías individuales del señor CAÑIZALEZ por no "sustanciarse el debido proceso, aplicando un procedimiento diferente al ordenado por la ley", violentando el artículo 22 constitucional y el numeral 3° del artículo 2566 del Código Judicial; que se han desconocido los artículos 47 y 49 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973 sobre el Régimen Municipal, donde se indica que los Alcaldes electos popularmente sólo podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por Jueces de Circuito de Ramo Penal en su respectiva jurisdicción, previo juicio; que no existe prueba sumaria y que se ha omitido oír a la autoridad denunciada, incumpliendo con el principio de "bona-fide" que debe caracterizar al Ministerio Público.

Librado el mandamiento que exige la ley, la funcionaria acusada remitió a esta Superioridad su informe de conducta, en el cual indicó que, en efecto, esa agencia del Ministerio Público ordenó mediante Resolución de 30 de marzo de este año la detención del señor CRISTÓBAL CAÑIZALEZ, a quien se investiga por los delitos de peculado y concusión, denunciados por el licenciado ALBERTO MEJÍA DEL ROSARIO y respecto a los fundamentos de hecho y de derecho manifestó que:

> "... uno de los delitos imputados al señor CAÑIZALEZ, lo es el delito de PECULADO, el cual prevé una pena mínima de dos años de prisión razón por la cual es perfectamente aplicable la medida cautelar personal de detención preventiva, esto sin mencionar que debido a la personalidad del imputado y la forma como ocurrieron los hechos denunciados y la golpiza de la cual fuera objeto el ofendido en este proceso se denota la peligrosidad del mismo, adicionado a que debido al cargo por él ostentado el señor CAÑIZALEZ, podría ser un peligro evidente para la desaparición de las pruebas en su contra.

> Entre los principales medios probatorios que acreditan tanto el hecho punible como la vinculación del sindicado tenemos que constan la declaración del ofendido en esta encuesta el señor AGUSTIN GONZALEZ, el recibo sin número que afirma el ofendido que firmara el señor CAÑIZALEZ, copia autenticada de varias sumarias en las cuales bajo los señores OSVALDO TORRES, ARACELIS JIMENEZ y ROMANA LOPEZ por intermedio del licenciado ALBERTO MEJIA denuncian al señor CAÑIZALES, por hechos similares a los investigados en este sumario.
>
> De igual forma consta un Informe de Auditoría efectuado por los auditores GEONIS BORRERO e ITZEL VASQUEZ, el cual es debidamente ratificado y en el que se exponen las irregularidades encontradas en el Municipio de Arraiján señalando al señor Alcalde como responsable de estos actos.
>
> Consta la declaración de la señora ROGELIA CRUZ DE CAÑIZALEZ, ex-funcionaria de la Alcaldía de Arraiján donde en la cual (sic) explica como llegaban muchas personas y para sacar permisos con el señor CAÑIZALEZ, y entregándole el dinero a éste.
>
> Asimismo, constan otra serie de declaraciones sin embargo mencionar las mismas sería redundar en lo que ya está escrito en la resolución judicial que dispone la detención preventiva del señor CRISTOBAL CAÑIZALEZ, por lo cual, no entraremos a ahondar en tales aspectos.".

Respecto a las alegaciones del licenciado MORICE CARRILLO, la Fiscal manifestó lo siguiente:

> "... creemos pertinente señalar que las mismas parten de una premisa errada y por tanto aterrizan en conclusiones alejadas de la realidad respecto al sentido y aplicación de los artículos 47 y 49 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973.
>
> Decimos lo anterior, por cuanto dichas normas claramente se refieren a la separación de un Alcalde electo por infracciones administrativas, y no se refieren en ningún momento a la necesidad de solicitar autorización alguna para ordenar la detención preventiva o la suspensión temporal a un Alcalde electo por la comisión de un delito previsto en nuestro ordenamiento penal.
>
> De allí que esta sea una norma meramente administrativa y no de carácter procesal penal, así la misma se refiere a que un Alcalde Electo, será suspendido de su cargo por 30 días, y esto lo subrayamos cuando se negare a cumplir la Constitución, leyes de la República, etc, no estableciendo la norma por ningún lado que tal suspensión por treinta días sea por la comisión de un delito, y mucho menos menciona por ningún lado la detención preventiva.
>
> Nuestro procedimiento penal, establece mecanismos para la expedición de una orden detención (sic) preventiva y es más expone claramente que cuando a un servidor público se le ordena su detención se debe ordenar la separación del cargo, encontrándose tales disposiciones en el libro III del Código Judicial y no en la Ley 106 de 1073 (sic) (ver artículos 2160 y 2470 del Código Judicial)
>
> Por otro lado, respecto a la falta de prueba sumaria dentro de la presente investigación y que alega el impugnante es preciso advertir que sólo se requiere de prueba sumaria al tenor de lo normado en el artículo 2471 del Código Judicial en los delitos de Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos o por Abuso de Autoridad.".

Conforme a la copia autenticada de los antecedentes, se advierte que el presente sumario tuvo su origen en la denuncia presentada por el licenciado ALBERTO MEJÍA DEL ROSARIO, en nombre y representación del señor AGUSTÍN GONZÁLEZ contra el Alcalde del Distrito de Arraiján, señor CRISTÓBAL CAÑIZALEZ, por los supuestos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, abuso de

autoridad y extralimitación de funciones. En ese escrito sostiene el denunciante que el señor AGUSTÍN GONZÁLEZ es el propietario de la Parrillada y Bar Los Parientes, ubicada en Calle 2da. Cerro Silvestre, Arraiján y que para que se le extendiera el permiso de funcionamiento de dicho negocio el Alcalde CAÑIZALEZ le exigió el pago de B/.1,500.00, suma que canceló el día 16 de agosto de 1996; que a petición del señor GONZÁLEZ el Alcalde le extendió un recibo de pago que no tiene el membrete ni el sello de la Alcaldía pero la firma fue autenticada por el Notario Cuarto del Circuito de Panamá y tres (3) días después fue dictada la resolución que autorizaba al señor GONZÁLEZ para el funcionamiento de su negocio.

Acogida la denuncia presentada y al iniciarse el trámite correspondiente, en virtud de información proporcionada al funcionario instructor por la Secretaría de la Fiscalía Auxiliar, mediante Resolución de 11 de diciembre de 1997 se dispuso incorporar al sumario copias autenticadas de los procesos penales que, por delito similar al denunciado por AGUSTÍN ODON GONZÁLEZ BATISTA, también habían presentado en contra del señor CRISTÓBAL CAÑIZALEZ los ciudadanos OSVALDO MANUEL TORRES CASTRO, ARACELYS JIMÉNEZ DE SUGASTI y RAMONA LÓPEZ DE BATISTA. En todos estos casos, al igual que el denunciado por GONZÁLEZ BATISTA, se acusaba al Alcalde CAÑIZALEZ de haber exigido el pago de una determinada suma de dinero, para su provecho personal, para conceder el permiso correspondiente a la operación de una determinada actividad comercial.

Una vez que la Fiscalía Auxiliar realizó las diligencias iniciales de la investigación, al advertir que presuntamente se había afectado intereses del Estado, remitió a la Procuraduría General de la Nación las sumarias respectivas, quien dispuso enviarlas a la Fiscalía Primera Delegada para que prosiguiera con las diligencias del caso.

En ese orden, la Fiscal Delegada, en conocimiento de que la Contraloría General de la República estaba realizando una investigación en relación con las supuestas irregularidades cometidas por el Alcalde de Arraiján, CRISTÓBAL CAÑIZALEZ, solicitó a ese despacho que se le remitiera copia debidamente autenticada del resultado de esa investigación, efectuada por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Contraloría y en ese informe, que consta de foja 142-232, efectuado por los auditores GEONIS BORRERO e ITZEL VÁSQUEZ y del que se ratifican a foja 239, llegan a dos conclusiones, del tenor siguiente:

> "1. Que sí se expedían permisos para actividades varias en el Despacho del Alcalde, sin que por ellos ingresara ningún dinero al Municipio de Arraiján. Siendo supuestamente responsables de este hecho, la señora, ROGELIA CRUZ DE CAÑIZALES, quien a pesar de haber denunciado estos cobros, que aduce haber entregado al Alcalde, aparece firmando estos recibos. Además se hace responsable al Alcalde, Cristóbal Cañizalez, por tener entre sus atribuciones, el vigilar las labores en las oficinas municipales, para que se cumplan leal y fielmente los deberes encomendados.
>
> 2. Que los montos que aparecen en los recibos suministrados por los denunciantes, los cuales ascienden a B/.2,900.00 (Dos mil novecientos balboas) no fueron depositados en cuentas del Municipio de Arraiján. Además los documentos utilizados no son los oficiales para recaudar los ingresos municipales.".

Conforme a este informe de la Contraloría y de acuerdo con otras pruebas que se encuentran en los antecedentes se imputa al Alcalde CAÑIZALEZ, por una parte el hecho de cobros indebidos que exigía como condición previa para el otorgamiento de permisos de operación solicitados por los denunciantes AGUSTÍN ODON GONZÁLES BATISTA, RAMONA L. DE BATISTA, OSVALDO MANUEL TORRES CASTRO y ARACELYS JIMÉNEZ DE SUGASTI y de otro modo, el hecho del cobro que se hacía en la Alcaldía por la expedición de permisos para actividades varias, tales como bailes, bautizos, cumpleaños, fiestas familiares y que debiendo entrar al tesoro municipal, lo retenía para su provecho personal el Alcalde CRISTÓBAL CAÑIZALEZ, tal como se desprende de varios testimonios existentes en este proceso que dan cuenta que, al solicitarse un permiso en la Alcaldía para una actividad, la señora ISAURA GONZÁLES, Secretaria de la Alcaldía, se dirigía a la también funcionaria municipal ROGELIA CRUZ DE CAÑIZALEZ, a fin de que confeccionara el

permiso respectivo, luego aquella servidora le colocaba los sellos correspondientes y recibía el dinero, que entregaba al Alcalde CAÑIZALEZ.

En ese orden, en el Informe de la Contraloría, en relación a las pruebas efectuadas a los recibos de ingresos del Departamento de Tesorería, se indica lo siguiente:

> "Con relación a los permisos de actividades varias se efectuó una prueba de auditoría que consistió en confrontar los permisos emitidos versus los recibos de ingresos expedidos por Tesorería en el período comprendido del 1 de febrero al 31 de agosto de 1997.
>
> Producto de esta prueba se pudo evidenciar que de los 188 permisos seleccionados para la evaluación 95 no pagaron ningún impuesto en el Departamento de Tesorería, o sea un 51% de los permisos. Cabe mencionar que dichos permisos fluctúan entre los B/5.00 y B/25.00 cada uno. (Anexo N° 12)".

Y a foja 65 del Informe se manifiesta:

> "En cuanto a los recibos sin numeración ni membrete del Municipio de Arraiján, que manifiestan los denunciantes correponden a sumas de dinero pagadas para la expedición de permisos de operaciones, se examinaron en el Departamento de Tesorería los recibos de ingresos de los días 17 y 18 de octubre de 1995, 30 y 31 de enero de 1996, 4 y 5 de marzo de 1996 y 16 y 19 de agosto de 1996 a fin de comprobar si los montos ingresaron al Municipio. No obstante, en ninguna de esas fechas aparecen recibos de ingresos por dichas sumas, por lo que los montos que muestran los recibos, suma que asciende a B/2,900.00, no ingresaron a las arcas municipales".

En la presente investigación se encuentra el testimonio rendido por ROGELIA CRUZ DE CAÑIZALES (fs. 252-254 y 251-260), ex-funcionaria de la Alcaldía y quien explica la forma en que se expedía y cobraba la suma correspondiente al pago de los permisos por actividades varias, señalando que el dinero finalmente lo recibía el Alcalde sin que entrara a la Tesorería Municipal y esas afirmaciones se encuentran avaladas en el proceso con los testimonios de JULIETA VALENCIA TELLO, AURA RAQUEL SERRANO, NARCISA GISELA GORDÓN y ALBA ROSA RODRÍGUEZ, a fojas 264, 267, 270 y 273 respectivamente. Se trata de sumas de dinero que eran cobradas en razón de los permisos que debían extenderse y que se pagaban irregularmente en la Alcaldía cuando el pago debió haberse hecho en la Tesorería Municipal, dando cuenta las personas arriba citadas que el Alcalde CAÑIZALEZ se quedaba con ese dinero, situación anómala que también encuentra soporte en el Informe que rindieran los auditores de la Contraloría cuando, como ya se ha transcrito, al efectuarse una confrontación entre los permisos emitidos con los recibos de ingresos expedidos por la Tesorería en el período correspondiente al 1° de febrero al 31 de agosto de 1997 donde "se pudo evidenciar que de 288 permisos seleccionados para la evaluación 95 no pagaron ningún impuesto en el Departamento de Tesorería o sea un 51% de los permisos" como tampoco ingresó a las arcas municipales la suma de B/.2,900.00 que según los denunciantes antes nombrados tuvieron que pagar al Alcalde con la finalidad de que les extendiera autorización para operar el negocio que pretendían.

Si bien es cierto que el Alcalde CAÑIZALEZ, al ser indagado negó toda participación en los hechos que se le imputan, señalando que la encargada de recaudar y depositar en la Tesorería los dineros provenientes de los impuestos era la señora ROGELIA CRUZ DE CAÑIZALEZ, atribuyendo las acusaciones presentadas en su contra a que "todas estas personas que han venido a declarar, la mayoría han sido destituídas de la Institución y han cogido un revanchismo político contra mi persona", lo cierto es que esa prueba testimonial coincide en muchos aspectos con las irregularidades y hechos que se destacan en el Informe presentado por la Dirección de Investigaciones Especiales de la Contraloría General de la República, en donde se concluye la presentación de ese documento afirmando "que las pruebas documentales y testimoniales que se incluyen en este Informe, evidencian irregularidades que están tipificadas en el Código Penal y conllevan una posible lesión patrimonial".

Por otro lado, en cuanto a lo alegado por el accionante en el sentido de que, conforme con los artículos 47 y 49 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, sobre Régimen Municipal, los Alcaldes electos popularmente sólo podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por Jueces de Circuito de Ramo Penal en su respectiva jurisdicción previo juicio, observa esta Corporación que tales disposiciones se refieren a aquellos casos en que los Alcaldes "... sin justa causa, se negaren a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, los acuerdos municipales, los decretos y órdenes del Ejecutivo y las Resoluciones de los Tribunales de Justicia ordinaria y administrativa ...", y no a aquellos casos en que el Alcalde está siendo investigado por autoridad competente por la posible comisión de un delito común; y acerca del cuestionamiento que se hace en cuanto a la inexistencia de la prueba sumaria para iniciar la investigación, basta decir que los hechos que motivaron el levantamiento de estas sumarias no requiere del acompañamiento de esa prueba con la denuncia, pues no se trata de delitos contemplados específicamente en los artículos 2468 y 2471 del Código Judicial).

En la acción de habeas corpus corresponde al tribunal evaluar si la orden de detención cumple con los requisitos y elementos formales que a tal efecto indican la Constitución y el Código Judicial, esto es, que la orden emane de autoridad competente, que contenga fundamentos de hecho y de derecho, que se trate de delito con pena mínima de dos años o que haya flagrancia, que esté comprobada la comisión del hecho punible y que exista una vinculación del sujeto con el ilícito investigado.

En este caso, la orden de detención contra CRISTÓBAL CAÑIZALEZ aparece de fojas 276 a 288 del cuaderno principal y se observa que la misma cumple con las formalidades legales a que hacemos referencia, todo lo cual, unido a la existencia de elementos probatorios que vinculan al Alcalde CAÑIZALEZ con los hechos investigados, permiten estimar como legal la medida cautelar pronunciada en su contra.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra CRISTÓBAL CAÑIZALEZ y en consecuencia, ORDENA sea filiado nuevamente en el Centro Penitenciario respectivo, a órdenes de la Fiscalía Primera Delegada de la Procuraduría General de la Nación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALDO MANUEL VERGARA L. CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El ciudadano ROBERTO OSCAR GREY, promovió acción de habeas corpus a favor de **ALDO MANUEL VERGARA LÓPEZ** contra la **DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN**, cuyo memorial fue recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el 29 de abril de 1998.

Surtido el reparto de rigor, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento contra el funcionario acusado, mediante providencia de 30 de abril del año en curso. Encontrándose en esa fase la acción constitucional, se recibió escrito de

desistimiento, visible a foja 12 del expediente, cuyo tenor es el siguiente:

"HONORABLES MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Yo, ROBERTO GREY, varón, panameño, mayor de edad, desisto del Recurso de Habeas Corpus interpuesto a favor de Aldo Manuel Vergara López y en contra de la Dirección Nacional de Corrección, y solicito desgloce de las pruebas aportadas.

Panamá, 30 de abril de 1998.

(Fdo.)
ROBERTO GREY
3-60-357". (F. 12).

Ante tal manifestación y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1073 del Código Judicial. estima el PLENO que es perfectamente legal el desistimiento de la acción incoada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA EL DESISTIMIENTO de la acción de habeas corpus promovida a favor del señor ALDO MANUEL VERGARA LÓPEZ contra la DIRECTORA GENERAL DE CORRECCIÓN.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARGARITA JUDITH SANTANA CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO PENAL DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante Oficio N° 1392-S de 16 de abril de 1998, el Secretario Encargado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, remitió a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, la acción de habeas corpus a favor de **MARGARITA JUDITH TUÑÓN SANTANA**, sindicada por el delito contra la Salud Pública, adjuntando con el expediente principal un cuadernillo contentivo de las sumarias que se le siguen de 91 fojas útiles.

Surtidos los trámites de reparto, ha ingresado el negocio para resolver, pese a no haberse sustentado la apelación anunciada a foja 18 del expediente principal, por lo que se resolverá el mismo de acuerdo a las constancias contenidas en el expediente principal.

Mediante resolución de fecha 24 de marzo de 1998, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, declaró legal la detención preventiva de la señora MARGARITA JUDITH TUÑÓN SANTANA, ordenada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Al examinar el expediente advierte esta Superioridad que la presente encuesta penal se inicia con la información obtenida en la Zona de Policía de San Miguelito, Sub Dirección de Información e Investigación Policial, de que en el Sector de Pan de Azúcar, en la residencia distinguida con el N° 192, la cual tiene varios cuartos de alquileres, se vende y distribuye sustancia ilícita.

En el informe de vigilancia visible a foja 4-5 del expediente, se lee que a la referida residencia llegan varios sujetos con aspecto de consumidores de drogas, siendo atendidos por MARGARITA y un joven de apodo "CALITO", quien posee un arma calibre 38.

La diligencia de allanamiento del inmueble antes descrito, fue ordenada por la señora Corregidora del Corregimiento Victoriano Lorenzo. En el Informe de Novedad de 2 de octubre de 1997 se hace constar que con la participación de la señora Corregidora y de los agentes MIGUEL AGUILAR, FLORENCIO GUERRA, JUAN PARDO, TEODORO LONDOÑO, SERAFÍN SALINA y LUIS VEGA, se procedió al allanamiento de la vivienda antes descrita, en donde se encontraban los señores MARÍA JOVITA SANTANA RUIZ, JOVITO MARIO TUÑÓN SANTANA y JUAN GIL RODRÍGUEZ. Al proceder a la revisión del cuarto de JOVITO TUÑÓN, encontraron en la gaveta de la cama una arma de fuego marca Smith & Wesson, con un cargador de 5 municiones sin detonar. En la misma gaveta se encontró una caja de municiones calibre 9mm, marca Winchester, conteniendo 36 proyectiles, haciéndose responsable de las mismas el señor JUAN GIL RODRÍGUEZ. Al procederse al registro de la última recámara, la misma se encontraba con candado, por lo que la señora MARÍA JOVITA SANTANA dió autorización para que se abriera, indicando que se trataba de la recámara de su nieta MARGARITA JUDITH TUÑÓN SANTANA, encontrándose en el interior de la misma un cartuchito plástico con 46 carrizos plásticos transparentes que contienen en su interior unas sustancia en polvo de color blanco que se presume sea droga. Además, se incautó una cartera que en su interior tenía siete (7) billetes de DIEZ BALBOAS (B/.10.00); diecisiete (17) billetes de CINCO BALBOAS (B/.5.00) y dos (2) billetes de UN BALBOAS (B/.1.00) lo que hace un total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE BALBOAS (B/157.00). Además, un carnet de identidad de MARGARITA TUÑÓN S. y tres (3) municiones calibre 38 sin detonar.

Realizada la prueba de campo sobre la sustancia incautada, se determinó que la misma es la droga conocida como "COCAÍNA" (f. 23).

Iniciada la investigación, en base al informe de novedad de 2 de octubre de 1997, al que hiciéramos alusión anteriormente, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, dispuso recibir indagatoria a los señores MARGARITA JUDITH TUÑÓN SANTANA y LUIS CARLOS BETHANCOURT, quien es el concubino de la primera nombrada.

En la declaración indagatoria rendida por la señora TUÑÓN SANTANA, la misma acepta ser consumidora de droga desde hace más de un año, y acepta ser la propietaria de la sustancia ilícita encontrada en el inmueble allanado, negando a su vez, que se dedique a la venta de la misma. Pero, resulta evidente que la forma en que se encontraba empaquetada la droga, esto es, en cuarente y seis (46) carrizos, presuponen la finalidad delictiva de dicha sustancia en la distribución y tráfico de la misma.

El Pleno comparte el criterio vertido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de que existen méritos suficientes para la detención de la beneficiada con esta acción constitucional. Aclara, a su vez, esta Superioridad que, pese la negativa de la sindicada de ser vendedora de la sustancia ilícita, la cantidad incautada, es decir, 6,88 gramos (f. 74), excede la medida posológica que para consumo personal establece el Instituto de Medicina Legal, en el cuadro que nos permitimos transcribir y que consta a foja 75 del expediente.

> "La dósis vía oral que produce efectos es de 0.2 a 0.4 gramos.
>
> La dósis media que produce efectos de cocaína es de 0.2 a 0.3 gramos.
>
> La dósis por inhalación que produce efectos es de 0.3 a 0.5 gramos.
>
> En los adictos la dosis por ingestión es de 1 a 1.5 gramos". (F. 75).

Además de ello, el exámen practicado a la sindicada por el Instituto de Medicina Legal, Psiquitría Forense, visible a foja 78, demuestra que la señora

MARGARITA JUDITH TUÑÓN SANTANA no tiene dependencia física o psíquica a la droga.

Sin lugar a dudas, en el presente negocio se ha dado cumplimiento a las exigencias establecidas en los artículo 2148 y 2159 del Código Judicial, en virtud de que se trata de un delito cuya pena mínima es de dos años de prisión, la orden fue dictada por la autoridad competente (fs. 38-42); los informes fueron ratificados por los agentes que participaron en la diligencia de allanamiento (fs. 56 a 63, inclusive); los elementos probatorios y la aceptación por parte de la sindicada de su participación con el ilícito investigado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 24 de marzo de 1998, dentro de la acción de habeas corpus interpuesta a favor de MARGARITA JUDITH TUÑÓN SANTANA.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SEBASTIÁN ALEXIS MOJICA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el señor NELSON ARANGO, a favor de **SEBASTIÁN ALEXIS MOJICA CORTEZ**, contra el **Jefe de Policía del Área "A" de San Felipe**.

Acogida la acción en el Juzgado 1° Municipal del Ramo Penal, mediante informe secretarial se pudo conocer que MOJICA CORTEZ se encontraba a órdenes de la Policía Técnica Judicial, por lo cual la Juez se inhibió de conocer de la acción y la remitió al Pleno de la Corte Suprema.

Recibida la acción constitucional en el despacho del ponente, se procedió a librar mandamiento de rigor contra el Director de la Policía Técnica Judicial, quien, mediante Oficio N° A. L-0233-98 de 1° de abril de 1998, negó haber ordenado la detención preventiva de SEBASTIÁN ALEXIS MOJICA y explicó que el mismo se encontraba bajo su custodia pero a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República.

Enderezada la acción hacia este último funcionario, informó mediante Oficio N° 4354 de 13 de abril de 1998, lo siguiente:

> "a) Sí, es cierto que este Despacho ordenó la detención preventiva del señor SEBASTIAN ALEXIS MOJICA, mediante resolución calendada primero (1°) de abril de 1998.
>
> b) Gervancia Micaela Blis Meneses, ante el Centro de Recepción de Denuncias de la Policía Técnica Judicial, suscribió formal denuncia por el delito de Lesiones Personales en perjuicio de su hijo Silverio McGregor Worrel Bliss, hecho ocurrido para la fecha del veintidós (22) de febrero del año en curso en horas de la tarde.
>
> Narra la denunciante, que para la fecha antes citada, dejó a su hijo

> en los estacionamientos del edificio 23, San Miguel, calle Higinio Dólar, apartamento No. 11, lugar donde ella vive, en compañía de unos amigos. Señala que observó cuando seis (6) muchachos de una banda 'TOCA Y MUERE' comenzaron a disparar, logrando una de las balas impactar en la anatomía de su hijo Silverio, ocasionándoles diversas heridas por las cuales se mantuvo hospitalizado por espacio de treinta (30) días, acreditándose éste hecho con la certificación médico legal, expedida por el Instituto de Medicina Legal, mediante oficio N° 82-4485 de 10 de marzo de 1998, en el cual se señala: 'herida de proyectil de arma de fuego en el abdomen. Se realizó laparatomía y se encontró perforación del estómago, lesión hepática, perforación de la cabeza del páncreas', otorgándosele una Incapacidad Provisional de cuarenta y cinco (45) días a partír del día del incidente. Al rendir declaración el afectado, corroboró lo señalado por la denunciante y agregó que al percatarse de las detonaciones que se realizaban detrás de él, se volteó, pudiendo observar a los sujetos apodados 'Chancito', 'Manríquez', 'FLACO', 'ALEX', 'JAHIR' Y 'COLON', quienes estaban disparando, mencionando algunos de sus nombres como: SEBASTIAN ALEXIS CORTEZ (A) 'CHANCITO', GUILLERMO ALEXANDER (A) 'ALEX', HERNANDO SEALEY CAMPO (A) 'COLON', ANDERSON BOSSIL SAMUEL (A) 'FLACO'.
>
> Por tales motivos, esta Agencia del Ministerio Público, consideró que las conductas realizadas por uno de los sujetos, en esta ocasión SEBATIAN ALEXIS MOJICA CORTEZ (sic), quien según el ofendido realizó detonaciones que ocasionaran las heridas, por las cuales se mantuvo hospitalizado, reuniéndose así los presupuestos establecidos en los artículos 2147-B, literal (e), 2148 y 2159 del Código Judicial.".

Finalmente manifestó el Fiscal Auxiliar no tener bajo sus órdenes al prenombrado MOJICA CORTEZ, toda vez que el mismo fue puesto a órdenes de la Fiscalía Tercera Superior de Panamá en donde se continúa la instrucción del sumario.

Nuevamente se enderezó la acción interpuesta, ésta vez contra la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, licenciada CECILIA LÓPEZ, quien mediante oficio 958 de 16 de abril de 1998 explica que fue la Fiscalía Auxiliar de la República la que ordenó la detención preventiva de SEBASTIÁN ALEXIS MOJICA CORTEZ con fundamento en los artículos 2147-B (e), 2148 y 2159 del Código Judicial; que tiene bajo sus órdenes a MOJICA CORTEZ toda vez que mediante providencia de 13 de abril de 1998 mantuvo la detención en los parámetros de la ordenada por el Fiscal Auxiliar.

Antes de resolver la controversia sometida al conocimiento del Pleno es necesario examinar algunos detalles de las sumarias seguidas a SEBASTIÁN ALEXIS MOJICA CORTEZ.

Mediante denuncia suscrita el pasado 19 de marzo de 1998 por la señora GERVANCIA MICAELA BLISS MENESES, madre de SILVERIO MCGREGOR WORRELL BLISS, se informó a las autoridades de la comisión de un delito de lesiones personales en perjuicio de éste último cuando se encontraba en los estacionamientos del Edificio 23 de la calle Higinio Durán ubicado en San Miguel el día 22 de febrero de 1998 en horas de la tarde. Informó la denunciante que quienes le provocaron las heridas a su hijo fueron algunos miembros de la banda "TOCA Y MUERE" entre quienes mencionó a MANRIQUEZ, FLACO, YAHIR, ALEX, CHANCITO y COLÓN, que abrieron fuego contra todas las personas que se encontraban en el sitio en ese momento entre quienes se cuentan su hija EDUVIGES WORREL, un joven apodado MENEA, AQUILINO y EDWIN (a) "Con pollo".

A foja 4 del expediente principal reposa la Certificación del Instituto de Medicina Legal, suscrita por el doctor AQUILES ESPINO, en donde se deja constancia de que SILVERIO MCGREGOR WORRELL BLISS presentaba a la fecha del examen: "Herida por proyectil de arma de fuego en el abdomen. Se realizó laparatomía y se encontró perforación del estómago, lesión hepática, perforación de la cabeza del páncreas." señalándosele una Incapacidad Provisional de 45 días a partir del día del incidente.

Por su parte la víctima, SILVERIO MCGREGOR WORRELL BLISS, al rendir declaración jurada (fs. 11-14) narró que el día de los hechos se encontraba en el estacionamiento del edificio donde vive su madre conversando con unos amigos cuando de repente escuchó disparos detrás de él y al voltearse pudo ver a SEBASTIÁN ALEXIS MOJICA CORTEZ (A) "CHANCITO", GUILLERMO ALEXANDER (A) "ALEX", HERNANDO SEALEY CAMPO (A) "COLON", JAIR FELIPE SMITH, ANDERSON BOSSILL SAMUEL (A) "FLACO" y un tal "MANRIQUEZ" que estaban disparando hacia él, por lo que se tiró al piso pero resultó herido en el estómago. Agregó ignorar el motivo por el cual estas personas lo agredieron y señaló que pertenecen a una banda llamada los "TOCA Y MUERE" que "se creen dueños de la calle".

Al rendir declaración indagatoria, SEBASTIÁN ALEXIS MOJICA CORTEZ (fs. 33-34) negó conocer al ofendido así como toda participación en el ilícito investigado e indicó que en el día y hora en que ocurrieron los hechos se encontraba vendiendo cerveza con una señora llamada "ELENA" en la Vía España.

Mediante resolución de 1° de abril de 1998 la Fiscalía Auxiliar de la República dispuso ordenar la detención preventiva de SEBASTIÁN ALEXIS MOJICA CORTEZ por considerar que contra él pesan las declaraciones del propio agraviado y las de testigos presenciales que lo señalan como una de las personas que hirió a SILVERIO MCGREGOR WORRELL BLISS y que la gravedad de las lesiones provocadas evidencia que éstas iban dirigidas a dar fin con su vida.

Por su parte la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá al asumir el conocimiento de las sumarias mediante resolución de 13 de abril de 1998, dispuso mantener la detención preventiva de SEBASTIÁN ALEXIS MOJICA CORTEZ, sindicado por el delito de Tentativa de Homicidio (ver foja 40 del expediente principal).

Con vista de los antecedentes expuestos, el Pleno advierte que la medida cautelar de detención preventiva que padece el beneficiario de la presente acción de habeas corpus resulta ilegal, ya que no se han reunido las exigencias básicas de ley para su procedencia.

Es jurisprudencia reiterada de esta Corporación que el delito de homicidio simple en grado de tentativa no permite la detención preventiva de los imputados, toda vez que de conformidad con el artículo 131 en relación con el artículo 60 del Código Penal vigente, el intervalo mínimo de la pena para ese delito es de veinte (20) meses, monto punitivo inferior al previsto en el artículo 2148 del Código Judicial, en el cual se fundamenta la medida cautelar de detención preventiva.

Sin embargo, atendiendo a las circunstancias violentas en que se desarrolló el hecho investigado y a las pruebas existentes contra MOJICA CORTEZ, se estima prudente reemplazar la medida cautelar impuesta por las señaladas en los literales a), b) y c) del artículo 2147-B del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARA ILEGAL la detención preventiva de SEBASTIÁN ALEXIS MOJICA CORTEZ, y en consecuencia, ORDENA que sea puesto inmediatamente en libertad, de no existir otra causa pendiente por la cual deba permanecer detenido; y

SEGUNDO: REEMPLAZA la medida cautelar de detención preventiva por las enumeradas en los literales a), b) y c) del artículo 2147-B del Código Judicial de la siguiente manera: se PROHÍBE al imputado abandonar el territorio nacional sin autorización judicial; se OBLIGA al sindicado a presentarse ante la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, todos los lunes de cada semana a las 8:00 a. m. y; se le OBLIGA a residir en la casa ubicada en el Corregimiento de Calidonia, San Miguel, Calle P. Edificio 9, apartamento 9 y no ausentarse del Distrito Capital sin autorización judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS LOJA, AMERALDO CAMPOS Y NESTOR GUZMÁN CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Deen Rodríguez, quien interpuso acción de habeas corpus a favor de **LUIS LOJA**, **AMERALDO CAMPOS** y **NESTOR GUZMÁN**, contra el **Director Nacional de Migración y Naturalización**, en escrito presentado ante la Secretaría de la Corte Suprema comunica que desiste de la acción constitucional interpuesta (f. 4).

En relación con esa manifestación, en numerosas ocasiones ha sostenido esta Corporación que en materia de habeas corpus es factible el desistimiento siempre y cuando quien lo manifieste sea el detenido, su defensor o la persona que interpuso la acción.

Como quiera que en el presente negocio la expresión de desistimiento proviene del abogado de los detenidos, el Pleno nada tiene que objetar y, en consecuencia, procede admitir el desistimiento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento presentado por el licenciado Miguel Deenb Rodríguez, dentro de la acción de habeas corpus interpuesta en favor de LUIS LOJA, AMERALDO CAMPOS y NESTOR GUZMÁN, contra el Director Nacional de Migración y Naturalización; en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HUMBERTO BALOY BADILLO CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **HUMBERTO BALOY BADILLO**, quien se encuentra detenido preventivamente por la supuesta comisión de delito contra la vida e integridad personal, ha interpuesto en su propio nombre, acción de habeas corpus contra el **Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá**.

Acogido el recurso, se libró de inmediato mandamiento de habeas corpus

contra el funcionario de instrucción acusado, quien respondió mediante oficio consultable de fojas 6 a 8, en el que informa lo siguiente:

> "1. No es cierto que esta Agencia del Ministerio Público dictó la orden de detención contra el ciudadano HUMBERTO BALOY BADILLO, ya que la misma fue elaborada y suscrita por el Fiscal Auxiliar de la República, mediante resolución fechada 10 de septiembre de 1997 y a través de providencia calendada 12 de septiembre de 1997, se mantiene dicha detención.
>
> 2. Los motivos o fundamentos de hecho se centran en los siguientes:
>
> `Pues bien, al analizar las distintas piezas procesales incorporadas al sumario, observamos que conducta antijurídica que describe el Capítulo I, Título I del Libro Segundo del Código Penal, de los delitos CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL, se encuentra acreditada en debida forma, de acuerdo a lo que establece el artículo 2073 del Código Judicial, con la diligencia de Reconocimiento y Levantamiento de un Cadáver, en la cual se establece el fallecimiento de una persona la cual corresponde a YUI CHENG CHAN y se describen las heridas que ésta presenta en su anatomía. Conducta antijurídica en la cual se ha atentado contra la vida de un ser humano resultando la muerte de una persona, a la cual nuestro ordenamiento jurídico le asigna una penalidad mínima mayor de los dos años de prisión que trata el artículo 2148 del Código Judicial para decretar la detención preventiva del encartado, siendo este tipo de medida cautelar proporcional a la naturaleza del hecho punible.
>
> En cuanto al aspecto vinculatorio de HUMBERTO BALOY BADILLO al delito que se investiga, observamos que existen graves indicios de su responsabilidad, toda vez que fue capturado por unidades de la Policía al rededor (sic) de una hora después del hecho y cerca del lugar en donde ocurrió, vociferando que le había disparado a un "chino" por no haberle cambiado unas cervezas, el cual es conducido por unidades de la Policía Nacional que lo detiene, y cuyas características concuerdan con las que brindó el testigo ANTONIO DE SEDAS en su declaración jurada. Situación de tiempo y lugar que establecen los indicios graves de relación al ilícito investigado . (Fs. 57 y 58)".

El señor HUMBERTO BALOY BADILLO sostiene que la detención que sufre es ilegal, ya que no existe clara vinculación con el delito por el cual se le investiga, razón por la cual solicita a esta corporación judicial que ordene su libertad.

Al respecto, es preciso señalar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió otra acción de habeas corpus a favor del señor BALOY BADILLO, mediante sentencia fechada 27 de enero de 1998, consultable a fojas 207 a 210 del expediente principal. En esa ocasión, la Corte declaró legal la detención preventiva del beneficiario de la presente acción constitucional, por considerar que dicha medida cautelar cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

La lectura de las constancias procesales pone de manifiesto que la situación del señor BALOY BADILLO no ha variado desde el momento en que se decidió el primer habeas corpus al que se hizo referencia. Como ha manifestado esta corporación judicial en innumerables ocasiones, la valoración de los elementos probatorios de fondo es tarea del funcionario de instrucción y del juez de la causa y, consecuentemente, este tribunal no tiene competencia para evaluarlos en esta clase de acción.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor HUMBERTO BALOY BADILLO y ORDENA que sea puesto, nuevamente, a órdenes de la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial

de Panamá.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO MARTÍNEZ H. CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Rito Torres Guevara ha interpuesto acción de habeas corpus preventivo a favor de **EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ** y contra el **Director de la Policía Técnica Judicial**.

Recibido el negocio por esta Corporación de Justicia, se libró el mandamiento de habeas corpus correspondiente y se requirió al funcionario demandado, que informara si había ordenado la detención de EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o a órdenes de otra autoridad.

El Director de la Policía Técnica Judicial, Alejandro Moncada, contestó el mandamiento de habeas corpus librado, mediante Oficio A. L.-0286-98 de 6 de mayo de 1998, en el cual informó lo siguiente:

"1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.

2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.

3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al prenombrado EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ". (F. 8).

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que debe ordenarse el cese de este procedimiento de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial, ya que se trata de una acción de habeas corpus preventivo y no existe orden de privación de libertad girada contra el señor EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ni ha sido detenido.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del presente proceso de habeas corpus promovido a favor de EDUARDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALDO MANUEL VERGARA LÓPEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLEMO.

VISTOS:

Ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia presentó el señor ROBERTO OSCAR GREY, en representación del señor **ALDO MANUEL VERGARA LÓPEZ** acción de habeas corpus contra el **FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.**

Admitida la acción, se libró el correspondiente mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, la que, en Oficio N° 5324 de 5 de mayo de 1998, respondió lo que se transcribe:

> "1. No es cierto que hayamos ordenado la Detención Preventiva de ALDO MANUEL VERGARA LÓPEZ.
>
> 2. En base a la respuesta anterior, no hemos establecido los motivos de hecho ni de derecho.
>
> 3. El expediente seguido contra el favorecido en esta acción por el delito CONTRA EL PATRIMONIO, fue remitido a la Fiscalía Tercera de Circuito del Primer Circuito Judicial, mediante oficio N° 5197 de 2 de mayo de 1998".

El informe transcrito pone de relieve que el prenombrado VERGARA LÓPEZ se haya a órdenes de una autoridad con mando y jurisdicción en una provincia, de lo que resulta que el Pleno de la Corte no es el competente para conocer de la actuaciones de estos funcionarios, por estarle reservado el conocimiento de los mismos, según lo pauta el artículo 2602 del Código Judicial, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.

En razón de lo que se deja expuesto, debe la Corte en Pleno declinar el conocimiento de la presente acción constitucional en favor del Segundo Tribunal Superior de Justicia y remitirle sin dilación alguna los autos, conforme lo ordena el artículo 2588 del Texto Procesal.

Por todo lo expuesto la Corte Suprema, Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de la acción de habeas corpus interpuesta a favor del señor ALDO MANUEL VERGARA LÓPEZ, en favor del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NICANOR PALACIO AGUILAR CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **NICANOR PALACIO AGUILAR** ha interpuesto ante el Pleno de esta

Corporación de Justicia acción de habeas corpus a su favor, contra el **Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas**, por lo que procedió el sustanciador de la presente acción constitucional a librar el correspondiente mandamiento de habeas corpus.

Mediante oficio N° FD-T-1792-1998, de fecha 6 de mayo de 1998 contestó la autoridad requerida el mandamiento de habeas corpus en los términos que a continuación se dejan transcrito:

> "En atención al Libramiento de Habeas Corpus girado a favor de NICANOR PALACIO AGUILAR, informo a usted que en esta Agencia del Ministerio Público se le instruyó un sumario al señor NICANOR PALACIO AGUILAR por el delito contra la Salud Pública, distinguido con la entrada 393-97, el cual fue remitido al juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, en turno mediante el Oficio 1250 del 2 de abril de 1998".

Por hallarse el señor NICANOR PALACIO a órdenes de una autoridad con mando y jurisdicción en una provincia, tal como lo hace constar el informe anterior, carece el Pleno de la Corte de competencia para conocer de la presente acción de habeas corpus, por lo que debe declinar la competencia en favor de los Tribunales Superiores de Justicia, quienes son, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2602 del Código Judicial, los entes judiciales competentes para conocer de ella.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA en el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, para conocer de la acción de habeas corpus a favor del señor NICANOR PALACIO AGUILAR.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS A. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ENRIQUE RAMOS HERRERA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO ha interpuesto acción de Habeas Corpus a favor de **JORGE ENRIQUE RAMOS HERRERA** contra la "supuesta orden de detención emitida por el **Director de la Policía Nacional**".

Alega el accionante que su representado fue detenido por la Policía de Parque Lefevre y fue llevado a las instalaciones de dicho lugar a órdenes del DIIP. Posteriormente, fue trasladado al DIIP de Ancón para investigaciones. Así, solicita a esta Corporación que pida al Director de la Policía Nacional la documentación que fundamenta la detención, supuestamente fue ordenada por éste en forma verbal.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada se envió el informe que a continuación se transcribe:

> "...
> A. No es cierto que haya ordenado la detención del recurrente ni por

escrito ni verbalmente.

B. Queda explicado en el literal anterior.

C. No tengo bajo mi custodia, ni a mis órdenes a la persona que se ha mandado a presentar y tampoco ha sido transferido a alguna otra entidad. ..." (Fs. 5).

Vemos que el Director de la Policía niega haber ordenado la detención del favorecido con esta acción, al igual que el hecho de mantenerlo bajo su custodia o haberlo transferido a otra entidad.

Por tanto, no existe mérito para continuar el procedimiento de habeas corpus y debe finalizar.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA el CESE del procedimiento de habeas corpus a favor de JORGE ENRIQUE RAMOS HERRERA y ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS DE JULIO CÉSAR AGUILAR DÍAZ CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Eduardo Enrique Aguilar Díaz ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **Julio César Aguilar Díaz** y contra el **Director de la Policía Técnica Judicial**.

El recurso se admitió y se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial, quien oportunamente rindió un informe en el que señaló que no había ordenado la detención del señor Julio César Aguilar Díaz y que tampoco está bajo su custodia ni a sus órdenes, pero que el mismo fue puesto a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, mediante oficio N° DIC-0261-98 de 18 de marzo de 1998. Debido a esta circunstancia, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas quien, por medio del Oficio N° FD-O-207-208-98 de 26 de marzo de 1998, informó lo siguiente:

"PRIMERO: Este Despacho no ha ordenado la detención preventiva del señor AGUILAR.

SEGUNDO: El prenombrado fue conducido a estas oficinas por la División de Investigaciones Criminales de la Policía Técnica Judicial, para que rindiese declaración jurada, dentro de las sumarias que se adelantan por la evasión del señor RICARDO DÍAZ GONZÁLEZ. En virtud de lo anterior, no se ha ordenado su reclusión en ningún centro carcelario, ni lo tenemos bajo nuestra custodia". (F. 6).

Del informe anterior se colige que el señor Julio César Aguilar Díaz no ha

sido detenido, ni existen motivos o fundamentos legales para su detención, por lo que lo procedente es ordenar el cese del procedimiento, tal como lo dispone el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en vista de que no existe fundamento legal para continuar con los trámites de la acción de habeas corpus interpuesta a favor de Julio César Aguilar Díaz y, por lo tanto, DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARMANDO AGUILERA OJOS CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos M. Herrera Morán ha presentado acción de habeas corpus a favor de **ARMANDO AGUILERA OJOS** y contra el licenciado Andrés Almendral, Magistrado del **Segundo Tribunal Superior de Justicia.**

FUNDAMENTO DE LA DEMANDA

Afirma el accionante que el señor Armando Aguilera se le mantiene actualmente detenido por el hecho que se le instruye un doble proceso penal en el Juzgado Quinto del que ya fue sentenciado por el Juzgado Décimo Quinto de Circuito de lo Penal, en donde fue absuelto su patrocinado.

Explica así, que mediante sentencia N° 67 de 19 de agosto de 1997, el Juzgado Décimo Quinto del Circuito de Panamá de lo Penal, ordenó la absolución del señor Aguilera Ojos, con motivo del allanamiento practicado el 6 de febrero de 1996, en el apartamento número 33 ubicado en el Corregimiento de Santa Ana, calle 17, edificio Hortensia, lugar donde se produjo un hallazgo de drogas.

Decisión que señala fue apelada por la Fiscalía de Drogas, argumentando que debe ser condenado el procesado Aguilera Ojos, previa revocatoria de la sentencia.

Que al solicitar al Juez A-Quo una medida cautelar distinta a la detención preventiva con base a lo preceptuado en la Ley N° 43 de 24 de noviembre de 1997, le fue concedida hasta que se surta la alzada.

Por otra parte indica, que al percatarse el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal de Panamá, que el proceso penal que se estaba dirimiendo en su despacho era por el mismo hecho que atendió el Juzgado Décimo Quinto Penal, en resolución N° 240 fechada 18 de septiembre de 1997, decidió la nulidad de todo lo actuado, ya que el doble juzgamiento transgrede el Principio constitucional "Non Bis In Idem", el cual -en su opinión- fue violentado desde el inicio de las investigaciones preliminares por la Fiscalía Primera de Drogas.

Y siendo que el proceso en comento se encuentra en grado de apelación, solicita a este Pleno se decrete la nulidad de todo lo actuado y sea puesto en inmediata libertad su representado, tal como lo pidió el tribunal de Primera

Instancia en auto N° 240 del 18 de septiembre de 1997. Acompaña copias autenticas de las resoluciones citadas (fs.15-17).

SUSTANCIACIÓN

Al librarse mandamiento de Habeas Corpus en contra del funcionario acusado (f.19), se tiene que en Oficio N° 100-A.C. de 15 de abril de este año, el licenciado Andrés Almendral, Magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, responde en los siguientes términos:

> A) No es cierto que haya ordenado la detención del señor Aguilera Ojo.
>
> B) Según los registros internos que se llevan en Secretaría, son dos procesos penales relacionados con este detenido, que fueron adjudicados a nuestra ponencia en función de alzadas en trámite al Segundo Tribunal Superior de Justicia y provienen de los Juzgados Quinto del Circuito de lo Penal, y Décimo Quinto del Circuito de lo Penal, ambos del Primer Circuito Judicial de Panamá. En los dos procesos la impugnación obedece a la iniciativa del señor Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y de las actuaciones principales se derivan los motivos de hecho y de derecho que justificaron la aplicación de la medida cautelar personal cuestionada en la presente acción de **habeas corpus**. Aprovechó la oportunidad para señalar con todo respeto que en mi condición de Magistrado Ponente elaboré los proyectos de resolución de segunda instancia, en los que se definen, todos los puntos divergentes que expone el apelante, incluso, los relacionados con la detención preventiva de su patrocinado, pero como se comprenderá, estas son decisiones que se toman colegiadamente, de manera que al momento de rendir este informe los proyectos estaban siendo estudiados por las Honorables Magistradas que conforman la Sala.
>
> C) No me consta que al señor AGUILERA OJO haya sido puesto bajo mis órdenes, pero lo que si es exacto es que desde el 4 de diciembre de 1996 y 17 de abril de 1997 se le puso a órdenes del despacho de primera instancia (fs.127 y 196), sin que desde esa fecha conste variación alguna" (fs.20-21).

FUNDAMENTO DEL PLENO

Luego de examinar los dos expedientes principales de los procesos seguidos al señor Armando Aguilera Ojo, se advierte lo siguiente:

Que dentro del expediente judicial seguido al señor Aguilera Ojos, por delito relacionado con droga, se inicio con el oficio N° 75 de 26 de enero de 1996 mediante el cual el licenciado Markel Iván Mora Bonilla, Secretario de la Agencia Regional de las provincias de Herrera y Los Santos, solicitó al Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas de la provincia de Panamá se dispusiera la pertinente para que fuera investigado un sujeto de nombre Armando con residencia en un multifamiliar ubicado frente al estadio de Santa Rita quien fue señalado por el señor Eliseo Vega Benavides en declaración indagatoria ante esa agencia de instrucción, como la persona que le suministró cinco paquetes y un envoltorio mas pequeño contentivos de drogas (fs.1-2).

El Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Sentencia N° 67 de 19 de agosto de 1997 lo absolvió (fs.203-212), decisión que fue impugnada por la representación fiscal y surtida la alzada, tiene conocimiento el Segundo Tribunal Superior de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Andrés Almendral.

También se constata que le fue sustituida la detención preventiva al señor Aguilera Ojos, por otra menos severa, por medio de auto N° 328 de fecha 10 de diciembre de 1997 (f.244-245).

En tanto, el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito

Judicial de Panamá, en Auto vVario N° 240 del 18 de septiembre de 1997, declaró nulo todo el proceso seguido por delito relacionado con droga al señor Armando Alberto Aguilera Ojo.

En este caso, la resolución motivada por el funcionario de instrucción para recibirle declaración indagatoria al señor Aguilera Ojos claramente indica que la investigación contra éste se inició a consecuencia de lo manifestado por el señor Eliseo Vega Benavides (a) "Cheo" (f.5052). Además, las primeras 42 fojas del expediente se refieren a las investigaciones llevadas a cabo en la provincia de Los Santos contra los señores Eliseo Vega Benavides y Pablo E. Soriano.

Ahora bien, como basamento a su decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado, el Juzgado Quinto de Circuito señaló que en el caso sometido a su consideración se instauró y se siguió otro proceso, a pesar de la existencia previa de un sumario que contaba con las mismas partes y sobre el mismo hecho. Tomando en consideración la prohibición del doble juzgamiento contemplada en el artículo 32 constitucional y el artículo 2 del Código Penal (fs. 221-223).

Al respecto, el artículo 2566 del Código Judicial en su numeral dos señala que la privación de libertad de una persona es un acto sin fundamento legal si se le intenta juzgar más de una vez por la misma falta o delito.

En base a esto, en el caso ventilado en el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal, el juzgador declaró nulo lo actuado precisamente para evitar el doble juzgamiento.

Tal decisión fue apelada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. Correspondiéndole conocer el recurso al Magistrado Andrés Almendral.

Pretende el licenciado Herrera Morán con la acción de habeas corpus interpuesta, que este Pleno decrete nulo lo actuado y que su defendido sea puesto en inmediata libertad. No obstante, la petición de nulidad a que se refiere el accionante es materia que debe resolver el Tribunal Superior y por eso es que se le adjudicó el negocio al Magistrado Andrés Almendral, a quien le corresponde sustanciarlo. Por consiguiente, esa situación procesal escapa de los mecanismos de la presente demanda formulada.

Se advierte sin embargo, que el auto emitido por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, al declarar nulo lo actuado, obvió ordenar la inmediata libertad del señor Aguilera Ojo, disponiendo solo el archivo previo registro de su salida (f.224). En tal sentido, no se observa oficio o nota que ordene la libertad del señor Aguilera Ojo.

Esa pretermisión procesal, mantiene la privación de la libertad del señor Aguilera Ojo, lo que resulta irregular.

Por lo expuesto, se infiere que el señor Aguilera Ojo está detenido provisionalmente contra las disposiciones constitucionales y legales que rigen esta medida cautelar.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de ARMANDO AGUILERA OJOS proferida dentro de la causa penal que se le sigue en el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá; y se ORDENA su inmediata libertad de no tener otra causa pendiente en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ ANDRÉS TROYANO

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUVENCIO CASTILLO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada MICAELA MORALES MIRANDA ha presentado ante el Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia, acción de habeas corpus a favor del señor **JUVENCIO CASTILLO** contra el **Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial** por considerar que la detención preventiva que sufre, es ilegal.

Una vez acogida la acción se libró el mandamiento de habeas corpus respectivo, mismo que fue contestado por la autoridad demandada mediante oficio N° 311 de 13 de abril de 1998, señalando en lo medular que el ciudadano JUVENCIO CASTILLO se mantiene detenido en virtud de que pesa en su contra, la imputación del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de CÉSAR ARJONA.

Cabe señalar que la detención preventiva fue ordenada en principio por la Fiscal Segunda de Circuito de Chiriquí, en resolución motivada que corre a fojas 27-29 de las sumarias, y que ha sido mantenida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, al calificar provisionalmente la conducta que se le imputa al señor CASTILLO, como el delito genérico de homicidio, en grado de tentativa.

El recurrente considera que la detención preventiva que sufre el señor JUVENCIO CASTILLO es ilegal, por cuanto si la conducta típica que se le puede atribuir al referido señor es la de homicidio en grado de tentativa, la sanción punitiva mínima aplicable no alcanza los dos años de prisión.

EXAMEN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA

A JUVENCIO CASTILLO se le han formulado cargos por ser la persona que en horas de la tarde del día 18 de febrero de 1998, en el restaurante CIRY ubicado en la provincia de Chiriquí, agredió con un instrumento de hierro o palanca que se utiliza para soltar tuercas de neumáticos de vehículos a motor, la cabeza del señor CÉSAR ARJONA SANTAMARÍA.

Las lesiones sufridas por el señor ARJONA merecieron su hospitalización en estado grave, siendo asistido por ventilación mecánica y con un tratamiento endema cerebral, debido a lesiones severas que pusieran su vida en peligro (Trauma cráneo encefálico, hematoma epidural agudo, fractura deprimida de calota parietal temporal izquierdo) y que continúa en riesgo.

Los testigos presenciales del hecho han sido coincidentes al señalar que JUVENCIO CASTILLO agredió con la llamada "pipa" de hierro al señor ARJONA, propinándole de dos a tres golpes directamente en la cabeza, en momentos en que éste se encontraba desprevenido y sin que tuviese forma de defenderse, y que una vez agredido le dijo a su víctima que yacía en el suelo desangrándose: "Eso es para que respete a los hombres" (f. 15 del sumario).

De igual forma se ha indicado que las razones que motivaron la violenta agresión, fueron los celos de JUVENCIO CASTILLO hacia su víctima, en virtud de la amistad existente entre la dueña del Restaurante CIRY (señora Cirila de León), lugar en que se produjo el hecho de sangre, y el señor ARJONA. (cfr. fojas 7-9, 10-11, 13-16, 17-19 del sumario contentivo de las declaraciones de los testigos presenciales).

Al conocer de la apelación contra la concesión de fianza para no ser detenido solicitada por la apoderada del señor JUVENCIO CASTILLO, al Tribunal

Superior del Tercer Distrito Judicial ha señalado que el objeto contundente utilizado en la agresión es un medio idóneo para causar la muerte o por lo menos graves daños a la integridad física de CÉSAR ARJONA, calificando el delito de manera provisional como delito genérico de homicidio en grado de tentativa.

Si bien al principio el señor CASTILLO se dio a la fuga, fue posteriormente capturado por autoridades policiales, y en su declaración indagatoria aceptó ser el causante de la agresión sufrida por CÉSAR ARJONA, pero manifiesta que actuó en defensa propia, siendo que el señor ARJONA se le había acercado con un machete, y había tratado de agredirle primero.

Tal declaración contrasta con la ofrecida por ERIC QUIEL y por ROSARIO DE LEÓN, quienes señalan que el señor ARJONA se encontraba almorzando en el Restaurante CIRY, del cual es cliente fijo, cuando arribó al lugar el señor JUVENCIO CASTILLO, quien permaneció en su auto aparentemente increpando a CÉSAR ARJONA, y el momento en que éste pasó cerca suyo, le propinó varios golpes en la cabeza con el instrumento de hierro, para luego darse a la fuga.

En ningún momento los testigos han indicado haber visto arma alguna en poder de la víctima, o que ésta tratara de agredir a JUVENCIO CASTILLO. Por el Contrario, en sus declaraciones se acredita que quien tenía una actitud agresiva y provocadora era el señor CASTILLO, y las personas que auxiliaron a CÉSAR ARJONA para llevarlo al Hospital no dan cuenta de que en poder de éste se encontrara el machete a que hizo alusión JUVENCIO CASTILLO.

En estas circunstancias, esta Superioridad concluye que la vinculación objetiva y subjetiva del imputado con el hecho punible ha quedado debidamente acreditada, por lo que el juzgador está legalmente facultado para aplicar la medida cautelar personal que considere pertinente, atendiendo a la naturaleza del delito.

En cuanto al argumento esgrimido por la apoderada judicial del favorecido por esta acción de habeas corpus, en el sentido de que, siendo que el delito que se imputa a su representado es el de homicidio en grado de tentativa, la pena mínima aplicable no permite que se le imponga al señor JUVENCIO CASTILLO, la medida cautelar personal de detención preventiva, este Máximo Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de señalar con anterioridad (sentencias de 13 de marzo de 1998: Habeas Corpus a favor de RODGER MARTÍN CARLES MATOS contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia; Sentencia de 9 de enero de 1998: Habeas Corpus a favor ABDY ANDRÉS PERALTA contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia; y sentencia de 17 de enero de 1997 Habeas Corpus a favor de REYNALDO JAIRO ACOSTA contra la Juez Tercera de Circuito Penal), que el elemento de tentativa debe considerarse dentro del proceso penal que se le sigue al imputado, pues no es el proceso especial de habeas corpus la vía procesal en que se puede entrar a considerar el grado de participación, ejecución o consumación de un hecho punible.

Por otra parte el Tribunal no puede soslayar las circunstancias especiales que reviste la conducta del imputado, siendo que la gravedad de la agresión propinada añade condiciones de peligrosidad al mismo, condición que también puede ser tomada en cuenta al momento de ordenarse la detención preventiva, conforme al texto del artículo 2147-C acápite c) del Código Judicial.

El punto determinante en esta etapa, es que al señor CASTILLO se le imputa la comisión del delito genérico de homicidio (aunque en grado de tentativa), que tiene establecida para sus autores pena de cinco a doce años, razón por la cual la detención preventiva se ajusta a derecho, al haber sido decretada por autoridad competente, en resolución motivada, y conforme a lo establecido en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Cabe acotar que ya se han tomado las medidas judiciales pertinentes (cfr. foja 8 del cuaderno de habeas corpus) para allegar a la instrucción sumarial, las copias firmadas de algunas diligencias que fueron aportadas en copias al carbón, y que por ende no revisten la rúbrica del funcionario que las expidió.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre

de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva ordenada sobre JUVENCIO CASTILLO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO MILLER FRANCIS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Nemesio Fajardo Angulo ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **Gilberto Miller Francis** y contra el **Director de la Policia Técnica Judicial**.

Acogido el recurso se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director de la Policía Técnica Judicial, quien rindió oportunamente un informe en el que señaló que no había ordenado la detención preventiva de Gilberto Miller Francis y que tampoco está bajo su custodia ni a sus órdenes, pero que el mismo fue puesto a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. Debido a esta situación, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas quien, mediante el Oficio N° FD-O-225-98 de 30 de marzo de 1998, informó lo siguiente:

> "PRIMERO: Este Despacho no ha ordenado la detención preventiva del señor AGUILAR.
>
> SEGUNDO: La División de Delitos contra la Vida e Integridad Personal, de la Policía Técnica Judicial, remitió a este Despacho copias autenticadas de unas investigaciones que adelantan, donde el mismo aparece reseñado. Sin embargo, el señor AGUILAR no ha sido filiado ni puesto a órdenes de esta fiscalía". (F. 7).

No obstante, cabe señalar que la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por medio del Oficio N° FD-T-1501, aclaró el oficio transcrito, ya que señala que la persona a favor de la cual se había presentado mandamiento de habeas corpus es de apellido Miller Francis y no Aguilar. De igual forma el mismo reitera que esa agencia de instrucción no ha ordenado la detención Director de la Policía Técnica preventiva del señor Miller Francis.

De todo lo anterior se infiere que el señor Gilberto Miller Francis ha recuperado su libertad, pues contra el no existe orden de detención preventiva, el Pleno de esta Corporación considera que debe procederse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en vista de que no existe fundamento legal para continuar con los trámites de la acción de habeas corpus presentado por el licenciado Nemesio Fajardo Angulo a favor de Gilberto Miller Francis y, por lo tanto, DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERNANDO JORGE NAVARRO DELGADO CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema conoce de acción de habeas corpus presentada por **Fernando Jorge Navarro Delgado**, en su propio nombre, contra el **Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial**.

Por admitida la iniciativa constitucional, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien contestó mediante oficio N° 203-SF de 8 de mayo de 1998, donde afirma que no ordenó la detención y que el accionante no se encuentra bajo sus órdenes, sino "bajo la responsabilidad del Juzgado Sexto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, ya que este Tribunal Superior sólo se limitó a confirmar la resolución del Juez de primera instancia calendada 23 de enero 1998 (sic), razón por la que no es posible filiar al imputado bajo responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia".

De lo anterior se infiere que la Corte Suprema carece de competencia originaria para conocer este asunto, puesto que el imputado se encuentra a órdenes del Juzgado Sexto de Circuito. Por acreditada tal circunstancia y en virtud de que en nuestro sistema de justicia existe una organización vertical de la jurisdicción en materia de derechos fundamentales, corresponde declinar competencia ante el superior jerárquico de la autoridad circuital acusada.

En virtud de lo anterior, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA el conocimiento de este negocio ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR EDWIN H. LEÓN RODRÍGUEZ A FAVOR DE VIVIANA CECILIA FEIJO FLORES CONTRA LA FISCAL OCTAVA DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte acción de habeas

corpus presentada por el licenciado Edwin H. León Rodríguez a favor de **Viviana Cecilia Feijo Flores** y contra la **Fiscal Octava de Circuito de Panamá.** Feijo Flores se encuentra recluida en las instalaciones del Centro Femenino de Rehabilitación, imputada de delito contra el patrimonio, cometido en perjuicio de Maiseth Castroverde Peñaloza.

La alzada se dirige contra sentencia de 2 de abril de 1998, emitida por el Segundo Tribunal Superior, y en la cual se declaró legal la detención. Considera el a-quo que contra la detenida "constan graves indicios de responsabilidad penal, porque el testimonio del miembro de la Policía Nacional Euribiades Echeverría ... constata que era la responsable del vehículo donde llevaron a cabo el hecho punible, al igual que los documentos de arrendamiento ..., además el marido de ésta, señor René Efraín Salsa Rivadeneira fue reconocido por la denunciante como uno de los partícipes del hecho punible ..., por tanto aun cuando ella no fue reconocida, esa situación en nada demerita la prueba indiciaria existente en su contra". (F. 11, cuaderno de habeas corpus).

Observa la Corte que el documento de arrendamiento del vehículo Daewoo, color vino, placa N° 133366, utilizado para perpetrar el hecho delictivo, revela que Viviana Feijo no era la única persona autorizada para conducirlo sino también René Salsa Rivadeneira, quien figura en el contrato como primer conductor y como responsable del vehículo (f. 234, antecedente).

De otra parte, consideramos que el hecho de que René Salsa -de quien se dice mantiene relación marital con Feijo-, haya sido reconocido por la víctima como uno de los asaltantes, no es suficiente evidencia para establecer que Feijo tuviera participación en el hecho punible.

Por último, el elemento probatorio más relevante que a este respecto comunica la investigación consiste en el hecho de que la propia víctima, en ampliación de la denuncia, aseguró que Feijo "no era la misma mujer" que le robó el día 5 de enero del presente año (f. 118, antecedentes), aserto que quedó reafirmado en la diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos llevada a cabo, cuando la denunciante Castroverde no reconoció a la sindicada como una de las personas que cometió el ilícito (f. 211, antecedentes).

Todo lo anterior nos lleva a concluir que hasta este momento de la actividad procesal no existen graves indicios que fundamenten la medida aplicada.

Por las razones que anteceden, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 2 de abril de 1998, dictada por el Segundo Tribunal Superior, que declara legal la detención de Viviana Cecilia Feijo Flores, y ORDENA que la detenida sea puesta inmediatamente en libertad, si no hay en su contra otra causa pendiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HUGO ALBERTO BARNETT SÁNCHEZ CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema conoce de acción de habeas corpus presentada

en su propio nombre por **Hugo Alberto Barnett Sánchez**, contra la **Directora Nacional de Corrección**. El recurrente cumple condena en el Centro Penal La Joyita, por la comisión de delito de lesiones personales.

Una vez admitida la iniciativa constitucional se libró mandamiento de habeas corpus, el cual fue atendido por la autoridad demandada mediante Nota 1318-DNC. al. El informe de conducta da cuenta de que la Directora Nacional de Corrección no emitió la orden de detención contra Barnett, pero admite que se encuentra detenido a sus órdenes, cumpliendo pena de 3 años de prisión por delito de lesiones personales, en virtud de sentencia condenatoria de 25 de marzo de 1994, proferida por el Juzgado Undécimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El accionante alega que al momento en que fue detenido ya se había producido el fenómeno de la prescripción de la acción penal, pues habían transcurrido 5 años y 7 meses contados a partir de la fecha de la comisión del ilícito.

La lectura del expediente permite conocer que el delito se consumó el 31 de marzo de 1992 y el auto de llamamiento a juicio tiene fecha de 3 de junio de 1993 (fs. 65-69 vuelta, antecedente). Barnett Sánchez fue juzgado en ausencia y condenado mediante sentencia de 25 de marzo de 1994 a la pena de tres años de prisión (fs. 91-96, antecedente), la cual cumple a partir del 6 de junio de 1997, fecha en que fue aprehendido.

La prescripción de la acción penal en esta causa empezó a correr desde el día de la consumación del ilícito y fue interrumpida por el auto encausatorio, para comenzar a correr nuevamente (arts. 94 y 95, C. P.). Por haber sufrido la víctima una incapacidad funcional permanente (f. 24, antecedente) la pena aplicable era de 2 a 4 años de prisión (art. 137, C. P.), a la que corresponde un plazo de prescripción de 6 años (art. 93, numeral 3, C. P.).

Se comprueba entonces que a partir de la consumación del delito hasta el pronunciamiento del auto de proceder sólo transcurrieron 14 meses, y desde ese momento hasta que se emitió la sentencia condenatoria transcurrieron menos de 10 meses, por lo que hay que concluir que durante el proceso no ocurrió el evento alegado.

Es importante destacar que al momento de la captura de Barnett Sánchez la acción penal ya se encontraba extinguida, en virtud de la ejecutoria de la sentencia que le impuso la pena de prisión que actualmente cumple, para darle paso a otra figura procesal igualmente sometida a plazo, como lo es la prescripción de la pena.

Por las razones que anteceden, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de Hugo Alberto Barnett Sánchez, y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Directora Nacional de Corrección.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS POR EL LICENCIADO GERARDO CARRILLO A FAVOR DE RICARDO ALFREDO PETERS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Gerardo Carrillo presentó acción de habeas corpus en favor de **Ricardo Alfredo Peters** y contra la **Policía Técnica Judicial**, con fundamento en que Peters fue detenido por agentes de la Policía Nacional por cargos de delito contra el patrimonio, "en concreto el conocido PAQUETAZO, que no es mas que una Estafa, sancionada con prisión que oscila entre los seis (6) meses y dos (2) años".

Al contestar el mandamiento de habeas corpus, el Director General de la Policía Técnica Judicial informó que el detenido se encontraba en La Joya, a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República. Por librado un nuevo mandamiento de habeas corpus a cargo de esta última autoridad, se conoció que Peters fue beneficiado con una medida cautelar distinta de la detención preventiva, concretamente de la que trata el literal b) del artículo 2147-B del Código Judicial, consistente en "el deber de presentarse periódicamente ante una autoridad pública" (f. 7, cuaderno de habeas corpus), y que su caso fue enviado a la Fiscalía Décimo Tercera del Primer Circuito Judicial, por lo que queda establecido que el beneficiario de esta acción no se encuentra privado de su libertad.

En consecuencia, corresponde aplicar el artículo 2572 del Código Judicial, a lo que se procede. De esta forma, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA EL CESE DEL PROCEDIMIENTO en esta causa.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADO A FAVOR DE CÉSAR AUGUSTO ROSAS EN CONTRA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante el Pleno de la Corte se ha presentado acción de habeas corpus a favor de **César Augusto Rosas** y contra el **Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial**. Según se afirma, Rosas fue detenido "por haberse involucrado en una riña familiar y a la fecha los protagonistas de esta riña gozan de libertad bajo fianza y el señor CÉSAR AUGUSTO ROSAS, aún sigue detenido sin tener nada que ver con este problema" (f. 1).

La autoridad acusada rindió informe de conducta con fecha 13 de mayo de 1998, posterior a la presentación de esta acción de habeas corpus, en el que informa que no ordenó la detención de Rosas y que "tuvo conocimiento del hecho, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Fiscal del Circuito de los Santos, contra el auto de fecha de 10 de mayo de 1998, que resuelve la solicitud de FIANZA EXCARCELARIA, y en el cual se DECLARÓ ILEGAL su detención y ORDENA su inmediata libertad" (fs. 5 y 6); que en virtud de lo anterior revocó el auto apelado y favoreció a Rosas con el beneficio de fianza excarcelaria. Según el mismo informe, el Juzgado Segundo del Circuito de los Santos comunicó que a Rosas se le mantenía detenido a pesar de haber consignado la fianza excarcelaria, lo

que dió lugar a la presentación de una primera acción de habeas corpus a su favor, la que fue resuelta por el Juzgado declarando ilegal la detención y ordenando la inmediata libertad de Rosas, resolución que fue cumplida mediante boleta de excarcelación de fecha 12 de mayo de 1998.

Por acreditada esta circunstancia, es pertinente la aplicación del mandato contenido en el artículo 2572 del Código Judicial, a lo que se procede.

De esta manera la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en esta causa.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YESSICA MEDINA CONTRA EL FISCAL PRIMERO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha ingresado la acción de habeas corpus interpuesta por el Defensor de Oficio, licenciado GUILLERMO RÍOS VALDÉS a favor de **YESSICA MEDINA**, contra el **Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas**.

Librado el mandamiento que exige la ley, el funcionario acusado remitió su informe de conducta en el cual indicó:

> "A. La orden de detención preventiva de la ciudadana YESSICA MEDINA, fue decretada por este despacho el once (11) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1998), por su presunta vinculación con un delito Contra la salud Pública, relacionado con drogas.
>
> B. El fundamento de hecho para ordenar la detención preventiva de la ciudadana YESSICA MEDINA, tiene su origen cuando unidades de la Policía del Area "A" de San Felipe, acompañados con la corregidora del Chorrillo, reciben información que indicaba el cuarto N° 14 de la barraca GOODYEAR, del barrio de Santa Ana, como lugar donde se dedicaban al expendio de sustancias prohibidas.
>
> Proceden los agentes policiales a fin de practicar diligencia de allanamiento al inmueble mencionado, al proceder a desenroscar un foco de color rojo, encuentran en su interior la cantidad de veintitrés (23) sustancias sólidas color crema, presunta droga.
>
> ... efectuándosele a las sustancias incautadas, una prueba de campo, la que arrojo resultados positivos para el reactivo que determina la droga conocida como CRACK (COCAINA). (fs. 12)
>
> ... Operan en contra de la sindicada: el señalamiento que efectúan las unidades policiales por medio del informe (fs. 4), la orden y diligencia de allanamiento emitidas por la corregidora del Chorrillo (fs. 5), el hallazgo de las sustancias ilícitas, con resultados

preliminares de la droga COCAINA en su modalidad de PIEDRA (crack).

Al ser indagada YESSICA MEDINA, acepto (sic) dedicarse a la venta de las sustancias ilícitas, justificando necesidades económica, y estar esperando un hijo, aduciendo que el propietario de la sustancias es un sujeto de nombre BETO.

Por otro lado, este despacho confirma el estado de gestación de la sindicada y por ello mediante oficio N° FD-O-229-98 fechado 31 de marzo de 1998, remite copias autenticadas del sumario al Juzgado Primero de Circuito de lo penal, con la finalidad de someter a consideración del señor Juez Primero, la viabilidad o no de una medida cautelar distinta a la detención preventiva a favor de YESSICA MEDINA, por su especial condición, (sic) (fs. 31)". (Fs. 5-6).

La investigación que motiva el presente habeas corpus, de la que dan cuenta las copias remitidas con la contestación de la acción constitucional interpuesta, tuvo su origen el día 6 de marzo de 1998 cuando el Corregidor del Chorrillo -en atención a informaciones recibidas en su despacho- ordenó una diligencia de allanamiento en el cuarto N° 14 de la barraca GOODYEAR ubicada en San Felipe, residencia de la señora YESSICA MEDINA, quien al momento de practicarse lo ordenado informó que dentro de un foco de color rojo enroscado en una roseta se encontraba la sustancia ilícita (f. 1) que resultó ser veintitrés (23) sustancias sólidas de color cremoso presumiblemente droga (crack).

Indagada sobre la sustancia ilícita encontrada, YESSICA MEDINA (fs. 17-21) aceptó dedicarse a la venta de drogas pero dijo que era la primera vez y que lo hizo por apuros económicos pues ya tiene un hijo de cinco (5) años y está esperando otro; dijo que la droga pertenece a un sujeto llamado BETO y negó consumir sustancias ilícitas.

A fin de determinar la veracidad del estado de gestación de la imputada, la Fiscalía envió un oficio al Instituto de Medicina Legal y por respuesta se recibió el Oficio 83-5814 en el cual se ordena la práctica de un ultrasonido pélvico para determinar el embarazo y edad gestacional.

El ultrasonido ordenado por el Instituto de Medicina Legal fue practicado en el Hospital Santo Tomás y a foja 28 reposa el Informe Radiológico suscrito por la Doctora Lillian Wing de Mislov, en donde se indica:

"El útero está aumentado de tamaño y ocupado por saco gestacional con producto único el cual presenta buena actividad cardíaca y de extremidades sin malformaciones prominentes. La longitud cráneo cola del producto es de 63 mm que corresponde a 12 semanas 6 días. ...".

Advierte el Pleno que a pesar de que la medida de detención preventiva resulta adecuada en materia de drogas, la sindicada YESSICA MEDINA, como se desprende del Informe Médico transcrito, se encuentra amparada por la excluyente contenida en el artículo 2147-D del Código Judicial, que dice:

"... Salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia, no se decretará la detención preventiva cuando la persona imputada sea una mujer embarazada, o que amamante a su propia prole, o una persona que se encuentre en grave estado de salud o que haya cumplido los sesenta y cinco años de edad ...". (Lo subrayado es de la Corte).

La Corte estima que en el caso de la joven MEDINA no existen exigencias cautelares de excepcional relevancia, toda vez que las circunstancias que rodean al hecho delictivo que se le imputa no son de una gravedad tal que exijan indefectiblemente la aplicación de la medida impuesta.

Sin embargo, en aras de garantizar la concurrencia de la sindicada al proceso que se le instruye se considera necesario imponerle las medidas cautelares contempladas en los literales a), b) y c) del artículo 2147-B del

Código Judicial.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARA LEGAL la detención preventiva de YESSICA MEDINA, y la SUSTITUYE por las medidas cautelares enumeradas en los literales a), b) y c) del artículo 2147-B del Código Judicial de la siguiente manera: se PROHIBÍ a la imputada abandonar el territorio nacional sin autorización judicial; se OBLIGA a la sindicada a presentarse ante la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas cada quince días y; se OBLIGA a la imputada a residir en la casa ubicada en el Corregimiento de San Felipe, Avenida Ancón, Barraca Good Year, cuarto N° 14 y no ausentarse del distrito capital sin autorización judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ILSA MORENO R. DE SÁNCHEZ CONTRA EL JUEZ SÉPTIMO DE CIRCUITO PENAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el cuadernillo contentivo de la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado JAIME A. PADILLA GONZÁLEZ a favor de **ILSA RANGEL DE SÁNCHEZ**, contra el **Juez Séptimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá**.

La resolución recurrida es la fechada quince (15) de abril de 1998, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró legales las medidas cautelaras impuestas a ILSA RANGEL DE SÁNCHEZ, mediante resolución de 17 de febrero de 1998, ordenadas por el Juez Séptimo de Circuito, dada su vinculación con el delito de peculado, contemplado en el Capítulo I, Título X del Libro II del Código Penal en perjuicio de la Alcaldía de Panamá, Centro Turístico "Mi Pueblito". En su parte pertinente dicha resolución indica:

> "Analizadas las principales piezas incorporadas al sumario, considera este Tribunal que en efecto nos encontramos frente a un delito Contra La Administración Pública, específicamente "Peculado", el cual dependiendo de la manera como fuese ejecutado conlleva distintas penalidades, siendo la más grave la estipulada en el artículo 322 del Código Penal que contempla una pena mínima de 2 años de prisión.
>
> Al respecto considera este Tribunal que es prudente la medida adoptada por el a-quo ya que, si bien es cierto no se ha tipificado la conducta desplegada por la procesada, el objeto de la aplicación de medidas cautelaras como la impuesta en este sumario, es que la procesada goce de una libertad ambulatoria restringida hasta tanto no se tipifique correctamente la conducta desplegada por ésta.
>
> Debemos recordar que el propósito de las medidas cautelaras es que el sindicado se mantenga vinculado al negocio y permitir que el tribunal, en un plazo relativamente breve, se percate del

incumplimiento". (Fs. 12-13).

En su escrito de sustentación el recurrente expresó que, en base al principio de estricta legalidad, las medidas cautelaras se imponen únicamente de conformidad con el artículo 2147-C, literales a), b) y c), los que no son aplicables al caso en estudio; que este sumario ya fue instruido, se calificó en la audiencia preliminar y se encuentra en espera de fijación de fecha para la celebración de la audiencia ordinaria, por lo que no es necesario ordenar medidas cautelaras que mantengan a la sindicada vinculada al proceso; que su defendida ha demostrado colaboración desde que tuvo conocimiento del peculado culposo y es la más preocupada en demostrar su inocencia, pues jamás ha tenido problemas con la justicia; que es ama de casa, profesional y a quien por causas no dilucidadas se le trata de inculpar en un peculado por la irrisoria suma de B/.1,394.49; que si bien a su defendida se le está investigando por un delito de peculado genérico, una lectura de los hechos demuestra que estamos ante un típico peculado culposo que tiene señalada una penalidad de 1 a 3 años. Finalmente afirma que existe una lesión innecesaria a la libertad ambulatoria de su defendida; que no se ubica dentro de los parámetros de aquellas personas que requieren la aplicación de medidas cautelaras al tenor del artículo 2147-D del Código Judicial.

Conforme a las constancias procesales que fueron remitidas con el cuaderno de habeas corpus, se observa que ILSA MORENO R. DE SÁNCHEZ se encuentra sindicada por un delito contra la Administración Pública, específicamente de peculado genérico, ante el Juzgado Séptimo de Circuito Penal de Panamá, en razón de la desaparición de la suma de B/.1,394.49 de propiedad del Restaurante "Mi Pueblito" del Municipio de Panamá, donde la imputada laboraba como administradora. Por ese hecho, el Juzgado Séptimo de Circuito, en auto de 17 de febrero último, abrió causa criminal contra ILSA RANGEL MORENO DE SÁNCHEZ y LEYLA ESTHER LOVELL JONES por el delito de peculado y en esa misma resolución le aplicó a ambas encartadas, como medidas cautelaras, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización previa del despacho y el deber de presentarse los días 30 de cada mes ante el Tribunal.

Uno de los propósitos que concurren para la imposición de medidas cautelaras lo constituye garantizar la comparecencia de los imputados en todas las fases del proceso en que sea necesario, y si bien el recurrente en este caso indica que no existen "exigencias inaplazables relativas a las investigaciones" que justifiquen las medidas impuestas, aprecia el Pleno que éste proceso, donde se encuentra vinculada la beneficiaria con esta acción constitucional, no ha terminado, encontrándose pendiente de la realización de la audiencia correspondiente, situación legal que un sentido de prudencia aconseja mantener, más en un caso como este, en donde se procede por el delito genérico de peculado y es posible en una de sus modalidades, que se disponga la más grave de las medidas cautelaras existentes en nuestro sistema jurídico.

El artículo 2147-A del Código Judicial señala que "... Nadie será sometido a medidas cautelaras si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra ..." y de acuerdo con el tribunal del conocimiento contra la señora DE SÁNCHEZ, como se expresa y analiza en el auto encausatorio, existe mérito suficiente para llamarla a responder en juicio criminal como presunta infractora de las normas contenidas en el Capítulo, Título y Libro del Código Penal, que regula el delito de peculado, conclusión que motiva al juzgador, en lugar de imponer o decretar otras medidas cautelaras, la imposición a la señora DE SÁNCHEZ de aquellas previstas en los numerales a) y b) del artículo 2147-B del Código Judicial, las que seguramente estimó proporcionadas a la naturaleza del hecho atribuido y a las circunstancias en que se produjo el mismo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución fechada quince (15) de abril de 1998, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró legales las medidas cautelaras impuestas a ILSA RANGEL DE SÁNCHEZ, mediante resolución de 17 de febrero de 1998 por el Juez Séptimo de Circuito del Ramo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PORFIRIO PITTÍ BINS CONTRA LA FISCAL DE DROGAS DELEGADA DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación, en grado de apelación, la Sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 3 de abril de 1998, dentro de la acción de habeas corpus promovida por el licenciado José Ramiro Fonseca Palacios, en representación de **PORFIRIO PITTÍ BINS**, contra la **Fiscal de Drogas Delegada de la Provincia de Chiriquí.**

En la demanda de habeas corpus interpuesta ante el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el apoderado judicial del detenido PITTÍ BINS alega que la detención preventiva de su representado es ilegal porque fue decretada en vista de que supuestamente se le encontró al requisarlo, dentro de una cartera, seis (6) carrizos de un polvo blanco que presumió era droga y ésta no ha sido pesada por las autoridades policiales. Según él, es lógico pensar que la droga contenida en los seis carrizos incautados no alcanza un peso que indique intención de traficarla y el examen de laboratorio practicado a PORFIRIO PITTÍ BINS, al momento de su detención, indicó que había consumido cocaína. Por tanto, el delito de posesión droga que podría imputársele a su representado, no admite detención preventiva porque está sancionado con la pena mínima un año de prisión.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial resolvió en primera instancia esta acción y declaró legal la detención de PORFIRIO PITTÍ BINS, motivando su sentencia en los siguientes términos:

> En vías de resolver se observa, que ya este tribunal colegiado en sentencia penal del 17 de marzo de 1998 tuvo que pronunciarse sobre la legalidad de la detención de Pittí Bins y en esa oportunidad se decretó, la legalidad de la medida cautelar sobre la base de las siguientes consideraciones:
>
> "En el estudio de las sumarias que adelantan en contra de PORFIRIO PITTÍ BINS y ABEL ANTONIO MORALES PÉREZ, como presuntos infractores de las normas penales que sancionan los delitos contra la salud pública, evidencian que en el desarrollo de la aprehensión de PORFIRIO PITTÍ BINS surge **la figura de la flagrancia**. (la negrita es nuestra)
>
> Esta aseveración se fundamenta en el contenido del informe suscrito por el Cabo Segundo Isidoro Cedeño (f. 2), el cual fue ratificado mediante la declaración jurada del agente policial tal como se observa a fojas 20-22.
>
> El artículo 2148 del Código Judicial se (sic) claro al preceptuar las dos circunstancias que permiten decretar la detención preventiva de algún sujeto, indicando que los delitos penados con una sanción superior a los dos años de prisión y aquellos casos en que los delincuentes son sorprendidos en flagrancia; es decir, realizando el hecho punible, admiten la aplicación de la detención preventiva como medida cautelar personal".

"A fojas 23 a la 24 se lee la diligencia emitida por la Fiscalía de Drogas de la Provincia de Chiriquí, fechada 13 de marzo de 1998, en la cual se satisfacen los elementos enunciados en el artículo 2159 del Código Judicial, a fin de decretar la detención preventiva de PORFIRIO PITTÍ BINS.

En esta diligencia se menciona el hecho punible; es decir, el delito contra la salud pública. Los elementos que aparecen en el sumario para comprobar la conducta ilícita se observan a foja 8 el informe preliminar de prueba de campo que indicó que la sustancia incautada es la droga ilícita conocida como cocaína. Igualmente, se han incorporado a la investigación elementos probatorios en contra de PORFIRIO PITTÍ BINS, como lo es el informe de aprehensión suscrito por el Cabo Segundo Isidoro Cedeño y su posterior declaración jurada.

Así las cosas, estima la colegiatura que hasta este momento de la investigación se han observado las normas legales pertinentes a fin de decretar la detención preventiva de PORFIRIO PITTÍ BINS conforme a derecho y así se declara".

Obseva el tribunal que con posterioridad a la decisión externada y arribada transcrita, no se ha incorporado ningún elemento probatorio adicional al expediente salvo los resultados de laboratorio practicados sobre una muestra de orina de Porfirio Pittí Bins recogida el día 13 de marzo de 1998 y que dio resultado positivo por cocaína.

Así las cosas, no puede sino concluirse que la situación procesal de Pittí no ha sufrido mejora y dado la conducta investigada se perfila como la de pasar sustancias ilícitas, se debe mantener el criterio original en cuanto a la legalidad de la detención acusada. ..."

En su declaración indagatoria, PORFIRIO PITTÍ BINS afirma que en ningún momento ha portado drogas y que no las consume (fs. 11-15). Sin embargo, reposa en el sumario el informe y la declaración jurada del Cabo 2º Isidoro Cedeño, diligencias en las que narra que el día 13 de marzo de 1998, estando de servicio en la Feria Internacional de David, provincia de Chiriquí, le incautó a PORFIRIO PITTÍ BINS una carterita de color negra en la que portaba seis (6) envoltorios plásticos llenos de un polvo blanco que presumió era cocaína, y un billete de veinte (B/.20.00) balboas. (Fs. 2-20-22).

A foja 8 del sumario se lee la Diligencia de Prueba de Campo Premiliminar practicada por la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, Agencia de Chiriquí, a la sustancia incautada, mediante la cual se determinó que ésta es COCAÍNA.

Los hechos investigados vinculan claramente al detenido con el delito de posesión de drogas, tipificado en el primer párrafo del artículo 260 del Código Penal, y sancionado con prisión de 1 a 3 años y de 50 a 250 días multa. Lo anterior es así porque al momento de ser detenido tenía en su poder seis (6) carrizos plásticos transparentes contentivos de cocaína con un peso de 0.60 gramos (f. 27 del cuadernillo de habeas corpus), cantidad que no sobrepasa el límite que establece el Instituto de Medicina Legal para una dosis de consumo mínima en los adictos. Además, el examen de Toxicología que se le practicó al señor PORFIRIO PITTÍ BINS, revela que el día 13 de marzo de 1998, había consumido cocaína (f. 34). Por otra parte, no se han allegado al sumario pruebas de las que pueda inferirse que la droga incautada estaba destinada a la venta.

Ante los elementos de prueba examinados, a juicio del Pleno de esta Corporación de Justicia, nos encontramos frente a un delito de simple posesión de droga, aun cuando ésta estuviese dividida en seis dosis, sancionado con prisión cuyo mínimo es de un año, y si ésto es así, la orden de detención examinada infringe el artículo 2148 del Código Judicial el cual establece que se podrá decretar la detención preventiva, previo cumplimiento de las formalidades

previstas en la ley procesal, cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión.

En reiterados fallos el Pleno de esta Corporación de Justicia ha expresado que es legal la detención de una persona sorprendida en flagrante delito, pero que al ponderar la autoridad competente la actuación para determinar si debe mantener esta medida cautelar, ésta debe revocarse en aquellos casos en que, como el que nos ocupa, el delito investigado está sancionado con prisión cuyo mínimo es de un año.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la sentencia dictada el 3 de abril de 1998 por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, DECLARA ILEGAL la detención del señor PORFIRIO PITTÍ BINS, ordenada por la Fiscal de Drogas de Chiriquí mediante diligencia fechada el 13 de marzo de 1998, y ORDENA su libertad si no existe orden de detención en su contra por otra causa.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CÉSAR ELÍAS PÉREZ CONTRA LA JUEZ SECCIONAL DE MENORES DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta Corporación de Justicia la Resolución N° 3 H. C.-C DE 3 de abril de 1998, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES, en la acción de habeas corpus interpuesta a favor del menor **CÉSAR ELÍAS PÉREZ GONZÁLEZ** y cuyo internamiento fue ordenado por la **JUEZ SECCIONAL DE MENORES DE SAN MIGUELITO**.

El accionante argumenta que el funcionario que dictó la orden de internamiento del menor carece de competencia, en virtud de que el caso que se le sigue al menor, por la supuesta comisión de hurto, ocurrió en Juan Díaz. Además, sostiene que el menor fue detenido sin que mediara una orden judicial, al ser conducido por la parte afectada a las instalaciones de la POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL DE SAN MIGUELITO y fuera puesto posteriormente a órdenes de la JUEZ DE MENORES DE SAN MIGUELITO.

El Pleno al entrar a revisar el texto de la resolución impugnada, puede constatar que la legalidad del internamiento ordenado contra el menor CÉSAR ELÍAS PÉREZ GONZÁLEZ, tiene como sustento el acto infractor de hurto calificado en perjuicio del señor LEONEL ARTURO MURILLO ARRIETA, quien interpuso una denuncia vinculando al referido menor con la comisión del ilícito.

En los antecedentes remitidos y la documentación adjunta al cuaderno contentivo de esta acción, aparece la denuncia que consta a foja 4-5, formulada por el señor LEONEL ARTURO MURILLO ARRIETA quien manifiesta que es propietario del bus Marca International, con carrocería Blue Bird, matrícula 168242, cupo 8B-459, motor N° 1HHVLPUXN3GHA38073, color rojo, azul y blanco, de la ruta Torrijos Carter-Tumba Muerto, cuya propiedad y preexistencia de lo denunciado, acreditó en el acto de la denuncia. Al referirse cómo ocurrieron los hechos, señala lo siguiente: Que el sábado 28 de marzo de 1998, a las diez de la noche dejó

estacionado el bus en la estación de gasolina Delta, ubicada en Los Andes N° 2, dejando la llave puesta, como es lo acostumbrado, para que el conductor lo retire y empiece a laborar. Que en la madrugada del día 29, fue notificado telefónicamente por el lavador del bus que el mismo había sido retirado por una persona que le había indicado que estaba autorizado por "MURRILLO Y EDUARDO", procediendo entonces, a la búsqueda, logrando visualizar el bus con rumbo a Pedregal y como al carro le faltaba diesel, el conductor entró a la estación delta de San Pedro. Posteriormente lo ubicaron al final de San Fernando en donde fue estacionado, dándose a la fuga un señor de apodo "CUCO". Señala también que a dicho señor le acompañaba CÉSAR ELÍAS PÉREZ GONZÁLEZ, quien fue capturado al encontrarse dentro del bus. Indica además, que al bus le habían quitado las copas, los neones, los transformadores y los dos mofles. Más adelante (f. 6) en la ampliación de la denuncia, el denunciante declara que golpeó con un bate al denunciado, llevándolo al Hospital Santo Tomás para que lo atendieran, procediendo a entregar a dicho menor ante a la Policía Técnica Judicial de la Agencia de San Miguelito.

El JUZGADO SECCIONAL DE MENORES DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN MIGUELITO, acogió la denuncia mediante resolución de fecha 30 de marzo del año en curso (f. 9), designándose al Licenciado MARZO A. GARIBALDO del Instituto de Defensoría de San Miguelito, como apoderado legal del menor y se ordena la comparecencia del mismo así como la realización de los estudios y evaluaciones pertinentes.

Observa el Pleno la declaración rendida por el menor CÉSAR ELÍAS PÉREZ GONZÁLEZ (fs. 12-13), quien manifiesta que en la madrugada del día de los hechos, se encontraba hablando con un muchacho que trabaja en el "Extra" y al abordar un bus de ruta, que era manejado por una persona que él conoce y que identifica con el apodo "CUCO", éste le manifestó que había "cojido" dicho vehículo en la bomba de Los Andes y llevaba los "mofles", copas, neón y transformador en el bus para venderlo en Pedregal. Que los objetos hurtados los llevó "CUCO" a una casa donde venden drogas ubicada en Pedregal, cerca de la piquera de los buses y señala que él no tiene ninguna vinculación con el ilícito.

El JUZGADO SECCIONAL DE MENORES DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, dictó la Resolución N° 1389-98. J. S. M. de 30 de marzo de 1998, por la cual ORDENA el internamiento del menor CÉSAR ELÍAS PÉREZ GONZÁLEZ, teniendo como elemento fáctico las evaluaciones realizadas, hasta el momento, al menor, tal como se colige a fojas 14-15. De igual forma, la juzgadora tomó en cuenta los elementos probatorios existentes en autos, tales como: la denuncia presentada por el señor LEONEL A. MURILLO ARRIETA, propietario del vehículo hurtado, donde se deja claramente plasmado cómo ocurrieron los hechos, así como la participación del menor.

En cuanto a la competencia del juzgador que impartió la orden de internamiento del menor CÉSAR ELÍAS PÉREZ GONZÁLEZ, se debió a que el ilícito fue cometido en el Distrito de San Miguelito, Corregimiento de Belisario Porras, Barriada Los Andes N° 2, en la Estación de Combustible Delta. Ello se corrobora en el informativo rendido por el referido menor, quien acepta que fue capturado dentro del bus que fuere hurtado, ya que al abordarlo, el conductor que señala con el apodo "CUCO", así se le había manifestado. Posterior a ello, describe las piezas que le fueron sustraídas al bus e inclusive, manifiesta que acompañó al conductor hasta Pedregal donde fueron vendidas las mismas.

En consecuencia, esta Superioridad no comparte el criterio vertido por el recurrente en cuanto a que no es competente la funcionaria que impartió la orden de internamiento del menor, por el contrario, está plenamente demostrado en autos que la JUEZ SECCIONAL DE MENORES de San Miguelito, le corresponde conocer del caso debido a que el supuesto delito de hurto fue cometido en esa jurisdicción.

Concluye el Pleno que, a pesar del estado incipiente en que se encuentra la investigación, existen suficientes elementos que vinculan al menor con la presunta comisión del delito de hurto calificado, por lo que debe mantenerse su internamiento, hasta tanto el juzgador confronte con los demás elementos que la ley obliga practicar, lo que determinará la participación o no del beneficiado con esta acción constitucional con el delito investigado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO ESQUIVEL CONTRA FISCAL DE CIRCUITO DE LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL ha remitido a esta Superioridad, en grado de apelación, la acción de habeas corpus propuesta por **FRANCISCO ESQUIVEL GUTIÉRREZ**, mediante apoderado judicial, contra el **FISCAL DEL CIRCUITO DE LOS SANTOS**, por ser éste el funcionario que dictó la orden de detención preventiva en su contra, por el supuesto delito de asalto a mano armada, en perjuicio de JOSÉ GARCÍA y cuya detención fuera declarada legal por el Tribunal Superior, mediante resolución de fecha 4 de marzo de 1998 (fs. 10-13).

Por anunciado el recurso dentro del término de ley, procede la Corte a resolver lo que en derecho corresponde, previa la verificación de que la medida cautelar de carácter personal que se impugna, cumple con lo ordenado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial en concordancia con el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Panamá.

ANTECEDENTES DEL CASO

El día 24 de febrero de 1998, el señor JOSÉ ENRIQUE GARCÍA SANTAMARÍA presentó denuncia por robo, ante la Policía Técnica Judicial de la Provincia de Los Santos. Relata el denunciante que el hecho delictivo ocurrió como a las cuatro y treinta y cinco de la madrugada de ese día, cuando se dirigía hacia Santa Marta, Las Tablas, se le acercó un taxi Hyundai, Accent, color vino claro, con placa 5514. Que del vehículo se bajaron tres (3) sujetos, quienes lo tumbaron y le dijeron que era un asalto. Más adelante señala que:

> "Ellos me quitaron la sortija y el collar también el dinero acostado en el suelo, me pateaban y me pegaban, en la espalda presentó (sic) el golpe que me dieron con la puerta y en el cuello rastro de la herida de rasguños (se hace constar que el afectado presneta hematoma en el lado izquierdo de la espalda, parte inferior, y aruñazos en el cuello), uno de los sujetos me tenía un cuchillo en el estómago y otro me decía que no hiciera nada que si no me tiraba, por lo que creo que tenía una pistola o arma de fuego ..." (f. 3).

Adiciona el denunciante que, a pesar de la posición en que encontraba (acostado), pudo observar bien el carro y que "uno de los que se bajaron tenía sandalias de cuero color chocolate oscuro".

DECISIÓN DE LA CORTE

La Fiscalía del Circuito de Los Santos, decretó la detención de FRANCISCO ESQUIVEL GUTIÉRREZ, mediante providencia de fecha 27 de febrero de 1998 (fs. 42-

43) y dicha diligencia reúne los presupuestos requeridos por ley. Así, se indica que el hecho imputado lo constituye el delito Contra el Patrimonio, específicamente, robo, el cual tiene una pena mínima de 5 años, tal como lo preceptúa el artículo 186 del Código Penal.

En cuanto a los elementos allegados a la comprobación de la existencia del hecho punible, se encuentra probada la propiedad de preexistencia de lo robado, con las dos (2) declaraciones juradas rendidas por los señores HIPÓLITO TERCERO CÓRDOBA VERGARA (fs. 7-8) y EVERTILDO ELIÉCER AMAYA FRÍAS (fs. 9-10). Así como también la comprobación de las lesiones producidas al denunciante con motivo de la comisión del hecho punible, que le fuera practicado mediante examen médico legal por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, visible a foja 46.

Aprecia el Pleno, en la incipiente investigación, que los elementos comprobatorios que figuran en el proceso y que vinculan a ESQUIVEL GUTIÉRREZ con el ilícito investigado, lo constituyen la denuncia (fs. 1-4) en la cual se describe el vehículo Hyundai con Placa 5514, el cual era operado por el sindicado, y su descripción del sujeto que usaba "sandalias de cuero color chocolate". Además, el informe de la Zona de Policía de Los Santos en donde se hace constar que el beneficiado con esta acción constitucional estaba hospedado en el Corregimiento de la Tiza, en la residencia del Sargento PACÍFICO CÁRDENAS, quien manifestó que a su sobrino le acompañaban 2 sujetos y una dama, versión ésta que se corrobora en las declaraciones rendidas por las señoras MARIELKA LAM LÓPEZ (f. 50) y ELIZABETH ESPINO GUTIÉRREZ (f. 60).

Como quiera que la orden de detención dictada contra FRANCISCO ESQUIVEL GUTIÉRREZ cumple con lo preceptuado por los artículos 1148 y 1159 del Código Judicial, debe mantenerse la medida cautelar aplicada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 4 de marzo de 1998.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR MANUEL SANTOS CHANG Y JOHNNY SANTOS CHANG CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado FELICIANO BATISTA ha presentado ante esta Superioridad, acción de Habeas Corpus a favor de los señores **OSCAR MANUEL SANTOS CHANG Y JOHNNY SANTOS CHANG** contra el **Director de la Policía Nacional**, por considerar que la privación de libertad que sufren, es ilegal.

Una vez librado el mandamiento de habeas corpus respectivo, el mismo fue contestado por la autoridad demandada mediante Memorial DAL-0888-98, en el cual señala que no tiene bajo su custodia ni a sus órdenes a las personas en cuyo favor se ha presentado la acción de habeas corpus, siendo que éstas se encuentran a órdenes de la Corregiduría de Juan Díaz, donde fueron trasladadas para ventilar

denuncia interpuesta en su contra por la señora María Elena Real Candanedo.

El Pleno de la Corte advierte en este punto, que conforme al informe rendido por la autoridad demandada, los favorecidos por la acción se encuentran en la actualidad a órdenes de una autoridad administrativa de policía con jurisdicción parcial en un distrito.

En atención a ello, procede enviar el recurso de Habeas Corpus presentado al Tribunal competente para conocer de la acción, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 4° del artículo 2602 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en el Juzgado Municipal del Ramo Penal en Turno, la acción de Habeas Corpus presentada a favor de los señores OSCAR MANUEL SANTOS CHANG y JOHNNY SANTOS CHANG.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO A. SALVADOR CORNEJO CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Corresponde resolver la acción de Habeas Corpus correctivo presentada por el señor Carlos Benavides Palacios a favor del señor **EDUARDO A. SALVADOR CORNEJO** contra la **Directora Nacional de Corrección**.

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

Expone el accionante que el señor Eduardo A. Salvador Cornejo, enjuiciado por el genérico delito de homicidio en perjuicio de Jonathan Zúñiga, se le determinó trasladarlo a la Isla Penal de Coiba, lo cual resulta improcedente, ya que el delito se ejecuta en la Ciudad de Panamá y, además, en el presente no ha sido juzgado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, "encontrándose el documento con el oficio de la Juez en estudio a fin de determinar si existe la consecuencia legal para proceder con el enjuiciamiento y fijar fecha de audiencia" (f.1).

SUSTANCIACIÓN

Mediante providencia de 1 de abril de este año, se acogió la presente demanda y al dársele el impulso procesal correspondiente, la funcionaria acusada, licenciada Marta Stanziola de Rincón, Directora Nacional de Corrección, responde al mandamiento de habeas corpus en los siguientes términos:

> "A. La suscrita en calidad de Directora Nacional de Corrección no ha impartido orden de detención de ninguna naturaleza en contra del señor Salvador Cornejo.
>
> B. No podemos hacer referencia a los motivos o fundamentos de hecho o de derecho porque no lo hemos ordenado.
>
> C. El señor Salvador Cornejo, se encuentra registrado bajo el nombre

de Cornejo Caballero, Salvador Omar o Cornejo Rivera, José Eduardo, ingresó al Centro Penitenciario La Joyita el día 14 de diciembre de 1996, lugar donde se encuentra actualmente a órdenes de la Fiscalía Cuarta Superior, sindicado por el delito de Homicidio en perjuicio de Jonathan Javier real zúñiga, mediante oficio N° 2547 del 29 de agosto de 1997 fue puesto a órdenes del segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial" (f.5).

Como consecuencia de lo anterior, se libró nuevo mandamiento de habeas corpus contra el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial quien, mediante el Oficio N° 106-A.C. de 21 de abril de 1998, rindió el siguiente informe:

"A) No es cierto que haya ordenado la detención del señor CORNEJO.

B) Según los registros internos que se llevan en Secretaría, en la actualidad se conoce de un sumario seguido contra dicha persona y otra, por el delito de homicidio en perjuicio de quien en vida se llamara JOJJAN XAVIER REALPE ZÚÑIGA, y en el cual se está disponiendo de esta misma fecha una ampliación por la Sala respectiva. Los motivos o fundamento de hecho y de derecho de su detención se derivan de lo acordado por la instrucción del sumario, específicamente por lo expuesto por la Fiscalía Auxiliar de la república en su providencia del 11 de diciembre de 1996 (fs. 128)

C. A partir de este momento estamos girando nota al Centro Penitenciario La Joyita para que el detenido quede bajo vuestras órdenes" (fs. 7 y 8).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

La autoridad demandada envió el sumario seguido al señor Eduardo A. Salvador Cornejo por el delito de homicidio en perjuicio de Jojjan Xavier Realpe Zúñiga, el cual consta de 478 fojas.

Al examinar el mismo, el Pleno se percata que contrario a lo manifestado por el accionante, el señor Cornejo se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario La Joyita, toda vez que de los informes de la Directora Nacional de Corrección y del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, transcritos anteriormente, se desprende que el mismo se encuentra cumpliendo detención preventiva en el Centro Penitenciario la Joyita, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2153 del Código Judicial que establece lo siguiente:

"Artículo 2153: La detención preventiva a que se refiere el artículo anterior, debe cumplirse en la respectiva cárcel de la provincia donde se cometió el delito, y en su defecto, en la cárcel del distrito correspondiente. En consecuencia, ningún imputado, preventivamente detenido, podrá ser trasladado a cárceles distintas de la sede del Tribunal que conoce de sus casos ..."

Este artículo señala que la detención preventiva debe cumplirse en la respectiva cárcel de la provincia donde se cometió el delito, situación que se cumple en este caso, ya que el delito fue cometido en la provincia de Panamá. Por otro lado, cabe señalar que no consta en el expediente documento alguno que ordene el traslado del señor Cornejo a la Isla Penal de Coiba o a otro centro carcelario distinto.

Vale la pena señalar que la detención preventiva de la cual es objeto el señor Eduardo A. Salvador Cornejo fue decretada por la Fiscalía Auxiliar de la República, mediante providencia de 11 de diciembre de 1996 (f.128), cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de EDUARDO A. SALVADOR CORNEJO.

Se dispone poner al imputado nuevamente a órdenes de la autoridad demandada.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCO A. PÉREZ NAVALO, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Corresponde resolver la acción de Habeas Corpus presentada por el señor **MARCO ANTONIO PEREA NAVALO** a su favor y contra el **Director General de la Policía Técnica Judicial**.

FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN

Expone el accionante que todos los trámites efectuados por la Policía Técnica Judicial para su detención, por un caso de "robo", son ilegales, pues, la supuesta persona afectada hace una denuncia contra un tal Marco A. Pérez y no contra su persona. Por otro parte, manifiesta que se hizo un reconocimiento en el cual se llamó a Marco Pérez Navarro y al que fue obligado a asistir sin la asistencia de un abogado.

SUSTANCIACIÓN

Mediante providencia de 28 de abril de este año, se acogió la presente demanda y al dársele el impulso procesal correspondiente, el funcionario acusado, licenciado Alejandro Moncada, Director General de la Policía Técnica Judicial, responde al mandamiento de habeas corpus en los siguientes términos:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor MARCO ANTONIO PEREA NAVALO.
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al prenombrado MARCO ANTONIO PEREA NAVALO. No obstante, tenemos conocimiento que el mismo se encuentra en La Joyita a órdenes de la Fiscalía IV Superior por Delito contra la Vida e Integridad Personal y del Juzgado V de Circuito de Panamá, Ramo Penal, por delito contra el Patrimonio". (F. 5).

Como consecuencia de lo anterior, se libró nuevo mandamiento de habeas corpus contra la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante el Oficio N° 1052 de 1 de mayo de 1998, rindió el siguiente informe:

> "PRIMERO: Este Despacho no ordenó la detención en contra de MARCO A. PEREA NAVALO, la misma fue ordenada por la Fiscalía Auxiliar de la República mediante providencia de fecha diecinueve (19) de junio de 1997, visible a fojas 135 a 138.

SEGUNDO: Habiéndose demostrado en debida forma el hecho punible a través del Protocolo de Necropsia N° N/75-26-404, documento que aparece visible de fojas 183 a 187 y en donde el galeno forense, estableció como Causa precisa de la Muerte de REYNALDO ELÍAS PÉREZ ORTEGA: "LUXO FRACTURA CERVICAL, hecho punible que también se demostró a través de las fotografías (fs. 189 a 194) donde aprecia el cuerpo inerte de la víctima.

En cuanto a los motivos de hecho que llevaron a la Fiscalía Auxiliar de la República ordenar la detención preventiva del imputado de MARCO A. PEREA NAVALO, quien se encuentra vinculado con el delito de HOMICIDIO cometido en detrimento de REYNALDO PÉREZ ORTEGA, se cuenta con el hecho de que fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional, momentos en que el prenombrado en compañía del menor de edad de nombre SERAFÍN GARCÍA, viajaban en un auto Mitsubishi, color negro, vehículo identificado como propiedad del hoy occiso, toda vez que dicho auto fue reconocido posteriormente por la ciudadana BERTA ALICIA ORTEGA DE PÉREZ y EDGARDO PÉREZ ORTEGA, madre y hermano del finado respectivamente, es así como se genera de tal circunstancia fáctica, un claro indicio que guarda relación directa con el Homicidio de PÉREZ ORTEGA, ya que el día de su desaparición éste, según testigo conducía su vehículo mistubishi (sic) que en aquel momento era de color rojo y no así negro como le fue encontrado al hoy encartado, quien al momento de su indagatoria, negó el hecho de que dicho vehículo le pertenecía, declaración ésta, que se contradice frente a lo declarado por el menor SERAFÍN GARCÍA, quien por su parte indicó que MARCOS (a) MOMOY, lo fue a buscar a su casa en un vehículo Mitsubishi color negro y que posteriormente se lo dio para que lo condujera hasta que fueron detenidos.

De igual manera se logró obtener en la investigación que el hoy imputado conocía al hoy occiso, ya que según declaración del señor MARTÍN ETTRICK ZAPATA, hace referencia a un hecho ocurrido con anterioridad sobre un presumible delito de robo que se cometiera por parte del sindicado MARCOS PEREA NAVALOS en perjuicio de REYNALDO PÉREZ ORTEGA.

Hemos de agregar que este Despacho Superior, logró traer al expediente la declaración del menor SERAFÍN GARCÍA CRUZ (fs. 313-318) que dio a conocer la forma en que MARCO PEREA NAVALO además de tener el vehículo de propiedad del hoy occiso REYNALDO PÉREZ ORTEGA, surgiendo de esta manera elementos que incriminan la conducta del sindicado y se torna su responsabilidad criminal en el delito que se le imputa hasta esta fase de la instructiva. También hace referencia dicho testigo a cuál es la verdadera identidad del sindicado. De la argumentación que ha expuesto el testigo y de las Causas de Muerte que aparecen reflejadas en el Protocolo de Necropsia se acercan categóricamente a la forma en que le fue referida por parte de PEREA NAVALO a cual (sic) pudo haber sido la acción violenta ejercida en contra de la víctima.

Además de los elementos de hecho que plasmara en la providencia de 19 de junio de 1997 la Fiscalía Auxiliar de la República fundamentó legalmente la detención en contra de MARCO PEREA NAVALO en base al contenido del artículo 2148 del Código Judicial, donde además se desarrollaron en dicha providencia los parámetros del artículo 2159 del mismo cuerpo legal que determinan los requisitos para ordenarse la detención preventiva.

TERCERO: Dicho imputado se encuentra a orden y disposición de este Despacho, pero a través del Oficio 1051 de esta misma fecha y dirigido al Director de la Cárcel La Joya, el detenido está siendo puesto a órdenes y disposición de vuestra superioridad" (fs.7-9).

CONSIDERACIONES DEL PLENO

La autoridad demandada envió copias autenticadas del sumario seguido al señor Marco A. Perea Návalo (a) Momoy por el delito de homicidio en perjuicio de Reynaldo Elías Pérez Ortega, el cual consta de 332 fojas.

Al examinar el mismo, el Pleno se percata que al señor Marcos Antonio Perea Návalo se le vincula con el delito de homicidio cometido en detrimento de Reynaldo Pérez Ortega. Ello es así, puesto que el señor Perea Navalo fue aprehendido por unidades de las Policía Nacional, en compañía de un menor de edad de nombre Serafín García, cuando ambos viajaban en un auto Mitsubishi de color negro, el cual fue identificado por Berta Alicia Ortega de Pérez y Edgardo Pérez Ortega como propiedad de Reynaldo Pérez Ortega.

De acuerdo con declaraciones de algunos testigos, el señor Pérez Ortega fue visto por última vez conduciendo dicho vehículo el día en que desapareció.

Cabe señalar que Perea Návalo negó que el vehículo le perteneciera, mientras que por su parte en la declaración rendida por Serafín García, éste señaló que Marcos Perea Návalos lo fue a buscar a su casa en un taxi de marca Mitsubishi de color negro, dándoselo posteriormente para que lo condujera hasta que fueron detenidos (fs. 109-11 y 249-252).

Por otro lado, consta de fojas 313 a 318 de las sumarias la ampliación de la declaración de Serafín Cruz en la que reitera lo señalado anteriormente y, además señala que una vez que fueron liberados después de ser detenidos por investigación con respecto a lo del vehículo, Marcos Antonio Perea Návalos (a) Mamoy le contó que le había pagado al dueño del carro para dar algunas vueltas y que le había dado varias cervezas y drogas, llevándolo luego a un lugar solitario donde, aprovechando que éste estaba bastante ebrio, le dio tres palazos en la cabeza y lo abandonó.

También manifiesta que Perea Návalos le dijo que debía decir que él había robado dicho vehículo al señor ISMAEL RÓMULO BETHANCOURT DIAZ y que si aparecía el muerto, dijera que él lo había matado porque de lo contrario lo iba a buscar para matarlo.

Vale la pena señalar que consta, de fojas 183 a 187 de las sumarias, el Protocolo de Necropsia donde se indica que la muerte de Reynaldo Elías Pérez Ortega probablemente ocurrió debido a la luxo-fractura cervical.

Por otro lado, se observa que la detención preventiva de la cual es objeto el señor Marcos A. Perea Návalos fue decretada por la Fiscalía Auxiliar de la República, mediante providencia de 19 de junio de 1997 (f.135-138), cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de MARCOS A. PEREA NAVALOS.

Se dispone poner al imputado nuevamente a órdenes de la autoridad demandada.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS CARLOS VALENCIA REID CONTRA EL FISCAL

SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

LUIS CARLOS VALENCIA REID ha interpuesto a su favor acción de Habeas Corpus contra el **FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS.**

Librado el mandamiento de habeas corpus, el funcionario acusado respondió en los siguientes términos:

> "...
> A. La orden de detención preventiva del ciudadano LUIS CARLOS VALENCIA REID, fue decretada por este despacho el 2 de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).
>
> B. El fundamento de hecho para ordenar la detención preventiva de los(sic) LUIS CARLOS VALENCIA REID, tiene origen a partir del día 24 de abril de 1997, cuando unidades de la Policía Nacional del Area "A" San Felipe, al encontrarse de recorrido por Avenida Ancón, zaguán de Barrio Lindo, visualizaron a un sujeto, el cual, al notar la presencia policial se da a la fuga, al darle persecución se percatan que el mismo se introduce en uno de los baños comunales y al abrir la puerta lo encuentra mojado, y al efectuarle el registro le encuentran en su poder la cantidad de veinticinco (25) sustancias compactas de color crema, presunta droga CRACK.
>
> Este despacho da inicio a la investigación de los hechos por estar frente a la posible comisión de un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, relacionado con drogas efectuándosele a las sustancias una prueba de campo, la que arrojó resultados positivos para el reactivo que determina la droga conocida como PIEDRA (fs.7).
>
> De lo anotado, se observa la comisión de un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, relacionado con drogas. Operan en contra del sindicado: el informe de novedad policial (fs.2); la declaración jurada del agente JOSÉ DE LA ROSA CARRASCO MURILLO, quien se afirma y ratifica del informe policial, (fs.32-35); el análisis de los veinticinco (25) fragmentos dio resultados positivos para la droga COCAINA (CRACK), con un peso total de 1.76 gramos.
>
> Al ser indagado el sindicado, LUIS CARLOS VALENCIA REID, quien al ser detenido presentó una cédula de identidad a nombre de sus hermano gemelo ERNESTO FERNANDO REID VALENCIA, negó el cargo que se le imputa, alegando que el frasco con las sustancias ilícitas fue descubrieron(sic) por los policías lejos de él, y que los policías sabían que eso le pertenecía a un tal "BEBY PACHA". (Fs. 11-17).
> ..." (Fs. 4-5).

Con el informe transcrito el agente del Ministerio Público envió el cuaderno antecedente mediante el cual se realiza la investigación contra el proponente de esta acción por la comisión de Delito contra la Salud Pública. En el mismo se han podido verificar la distintas piezas procesales que se detallan en el oficio remitido como vinculantes al delito investigado, tales como: el informe de novedad de los agentes captores relativo a la evidencia que se encontró en poder del imputado; la diligencia de prueba de campo que resultó positiva para la determinación de 25 piedras de crack; y la resolución debidamente motivada, dictada por el funcionario competente que ordena la detención preventiva (fs.18-19).

En tal sentido, vemos que la aludida resolución cumple con los presupuestos que determinan los artículo 2148 y 2159 del Código Judicial, requeridos para la procedencia de la medida cautelar decretada.

Consecuentemente,la Corte Suprema,PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de LUIS CARLOS VALENCIA REID y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON G.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DIAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALBERTO ABADI BETESH CONTRA EL AGENTE DE INSTRUCCIÓN DELEGADO, ADSCRITO A LA FISCALÍA AUXILIAR. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA ha interpuesto recurso de Apelación contra la resolución de 15 de abril de 1998, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que declaró legales las órdenes restrictivas de libertad impartidas contra **ALBERTO ABADI BTESH**.

Señala el apelante que las órdenes de restricción de libertad que motivan el presente recurso son:

1- Resolución de 2 de julio de 1997 proferida por el AGENTE DE INSTRUCCIÓN DELEGADO de la **Fiscalía Auxiliar de la República** que dispuso:

"Decretar el impedimento de salida del Territorio Nacional, de los señores Alberto Abadi Btesh, con cédula de identidad personal 8-726-1007 y Joan Manuel Guevara con cédula de identidad personal N° 8-718-843, como en efecto así lo decreta". (Fs. 67).

2- Orden de aprehensión verbal proferida supuestamente por el funcionario de Instrucción Delegado, cuyo intento de ejecución consta en informe de 2 de julio de 1997 (folio 104).

3- Orden del funcionario de Instrucción Delegado de 2 de julio de 1997, donde se ordena localizar y aprehender a Alberto Abadi y su intento de ejecución que quedó consignado en diligencia de la misma fecha.

4- Orden de detención proferida por el Fiscal Auxiliar de la República, de 4 de julio de 1997, que dispuso:

"...
DISPONE: Ordenar la DETENCIÓN PREVENTIVA de ALBERTO ERZA ABADI BTESH y JOAN MANUEL GUEVARA RODRÍGUEZ (no aprehendidos). ..."

Posteriormente, el apelante solicita a la Corte que haga una serie de declaraciones en torno a la falta de idoneidad del Agente de Instrucción Delegado para emitir decisiones jurisdiccionales, a fin de que se considere que, al emitir las órdenes de restricción de la libertad de ABADI BTESH, actuó extralimitándose en sus funciones. Todo esto con el propósito final de que el Pleno examine las citadas órdenes de impedimento de salida y de detención preventiva libradas contra Alberto Abadi Btesh, proferidas por el Agente de Instrucción Delegado y el Fiscal Auxiliar de la República, respectivamente. (Cfr. folios 67,68 y 70 del escrito de apelación).

Por su parte, al resolver el habeas corpus, el Segundo Tribunal Superior expresa que la figura del Agente de Instrucción Delegado nace en virtud de resolución N°9 de 7 de agosto de 1995, dictada por el Procurador General de la Nación en virtud de la facultad que le otorga el artículo 328 del Código Judicial para "crear nuevas agencias de instrucción, así como para introducir cambios en su organización administrativa", y sobre el particular concluye que "mal pueden tener visos de ilegal las actuaciones de este funcionario, pues se amparan en la ley, en tanto que la competencia asignada a éstos es de una provincia" (fs. 63).

Finalmente se expresa en el fallo impugnado que los funcionarios acusados, además de tener competencia legal, fundamentan sus órdenes en que el hecho imputado, de violación carnal, tiene pena de prisión superior a dos años, lo cual permite que se decrete la detención preventiva y en el cumplimiento de las exigencias del artículo 2159 del Código Judicial, tal como se sostuvo en la sentencia de 26 de enero de 1998 que emitió esa Sala, declarando legal la detención de Alberto Abadi Btesh, ante la existencia de un cúmulo de pruebas que lo vinculan al hecho investigado.

Sin mayor esfuerzo, el Pleno de la Corte ha podido apreciar que lo que cuestiona el impugnante son las órdenes de restricción de salida del país y la de detención preventiva, fechadas 2 y 4 de julio de 1997, dictadas, la primera, por la Agencia de Instrucción Delegada de la Fiscalía Auxiliar y, la segunda, por la Fiscalía Auxiliar.

Como indicó el Segundo Tribunal Superior, con anterioridad se emitió un pronunciamiento sobre la legalidad de las mismas órdenes (sentencia de 26 de enero de 1998) y, al igual que en el presente caso, tal decisión fue apelada ante esta Superioridad, lo que motivó su respectiva confirmación mediante sentencia del Pleno calendada 3 de marzo de 1998, en la que se consignó un extenso análisis sobre los graves indicios que vinculan a Alberto Abadi Btesh a la comisión del delito de Violación Carnal en perjuicio de la menor ANDREA DEL CARMEN VILLALAZ y la procedencia de la orden de impedimento de salida del país contra el mismo, aunque se advirtió que desconoció tal impedimento, pues existen constancias de que se encuentra fuera del país.

Resulta claro que se está tratando de someter nuevamente al conocimiento de la Corte un asunto sobre el cual ya existe un pronunciamiento, por lo que se produce el fenómeno jurídico de la sustracción de materia y en ese sentido debe emitirse la decisión del caso, puesto que previamente se habían declarado legales las órdenes restrictivas impartidas contra Alberto Abadi Btesh, tanto por el Segundo Tribunal como por la Corte, por lo que no es viable dictar una resolución sobre el mismo tema.

En tal sentido, cabe agregar que, luego del examen de las sumarias se comprueba que no existen nuevos elementos probatorios allegados al expediente, desde la última decisión del Pleno.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Resolución de 15 de abril de 1998, dictada por el Segundo Tribunal Superior, y en su lugar, DECLARA que se ha producido el fenómeno de SUSTRACCIÓN DE MATERIA y ORDENA el CESE del procedimiento del habeas corpus propuesto a favor de ALBERTO ABADI BTESH y el Archivo del expediente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS A. CERVANTES DÍAZ
(Con Salvamento de Voto)
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) CARLOS A. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO LUIS CERVANTES DÍAZ

Aunque estoy de acuerdo con la parte motiva del fallo que antecede, tratándose de una materia tan delicada como el habeas corpus, creo que debo dejar sentado que los fallos que se dictan en esta materia no causan estado, no tienen ejecutoria y por tanto, en cualquier tiempo puede promoverse otro recurso sobre la misma materia. Y en ello parece convenir el fallo cuando en el penúltimo fallo expresa que "no existen nuevos elementos probatorios allegados al expediente desde la última decisión del pleno".

Por ello considera que la parte resolutiva debió ser la de revocar la resolución del Tribunal Superior se hizo y en su lugar declarar no viable el habeas corpus por la razón expuesta en el párrafo en referencia. Por ello, salvo mi voto en los términos expresados.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER CEDEÑO AMADOR CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Elisímaco Barrios Barrios ha presentado, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus a favor de Javier Cedeño Amador, contra el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas. En la actualidad el detenido se encuentra recluido en las instalaciones de la Policía Nacional.

El activador procesal considera que la medida cautelar aplicada a su representado es contraria a Derecho, por vulnerar garantías de naturaleza penal consagradas en la Constitución y la ley (fs. 1-4, cuaderno de habeas corpus).

Librado el mandamiento de rigor, el funcionario acusado informa que decretó la medida mediante resolución de 24 de marzo del año en curso.

BREVE HISTORIA DE LOS HECHOS

De conformidad con los antecedentes, la Policía Nacional con sede en el Distrito de San Miguelito recibió una llamada telefónica anónima para denunciar que en la residencia N° 2-103, ocupada por Ceferino Sánchez, ubicada en el "Sector Apache N° 2" del Valle de San Isidro, se encontraban unos individuos empaquetando droga, y que uno de ellos era un policía activo que trabaja en esa misma área. El Juez Nocturno de Policía practicó un allanamiento del lugar, encontrando en el cuarto ocupado por Luis Alberto Blandón Pardo, agente de la Policía Nacional N° de posición 17859, destacado en la Zona de San Miguelito, Grupo B, varios envoltorios de cocaína en un maletín verde en un total de 27 bolsas y una bolsa vacía, un celular, un cuchillo, dos municiones de escopeta 12 y dos municiones vivas calibre 38 (f. 5, antecedentes).

El imputado Blandón Pardo narra que obtuvo los estupefacientes el 22 de marzo de 1998, mientras se encontraba de ronda en Don Bosco (sector de Calle Turín) con su compañero JAVIER CEDEÑO AMADOR; que durante su recorrido visualizaron a un sujeto en actitud sospechosa a quien durante la requisa le encontraron, en una bolsa de tela verde, dos paquetes de regular contentivos de un polvo blanco que presumieron droga, decidiendo quedarse con la droga y dejar en libertad al capturado (f. 24, antecedentes).

La evidencia aprehendida -consistente 22 bolsitas plásticas y 5 sobrecitos plásticos con un polvo blanco en su interior- fue sometida a la prueba de campo, resultando positiva para la determinación de cocaína (f. 43, antecedentes).

DECISIÓN DE LA CORTE

El delito por el cual se investiga a Cedeño Amador es el de tráfico ilícito de drogas, que lleva aparejada pena mínima superior a los dos años de prisión, de conformidad con el ordenamiento penal vigente.

Como elemento probatorio allegado a las sumarias para la comprobación del hecho punible se tiene la diligencia de allanamiento que da cuenta del decomiso de la sustancia ilícita (f. 5, antecedentes).

Con relación a la prueba de la vinculación subjetiva de Javier Cedeño Amador con el delito, pesan sobre él las graves incriminaciones que le hace su compañero de ronda en la diligencia de declaración indagatoria, la que fuera ratificada posteriormente mediante declaración jurada (f. 29, antecedentes), y su participación relevante en la negociación de la droga con un sujeto que responde al apodo de "TACHO":

> "... hago constar que todo lo que hice fue en compañía de mi compañero el Agente Javier Cedeño, entonces TACHO nos recogió a los dos en un taxi en el lugar acordado y solamente le entregó mil dólares ($1,000.00) a mi compañero y yo le entregué un solo paquete contentivo de la droga ..." (f. 25, antecedentes, subraya la Corte).

La orden de detención preventiva fue decretada por autoridad competente, mediante resolución de 24 de marzo del año en curso, en la que se indican tanto el hecho imputado como los elementos probatorios allegados para comprobar la comisión del hecho punible y la vinculación subjetiva del imputado (fs. 44-47, antecedentes), por lo que se encuentran presentes los presupuestos exigidos por la ley para ordenar la detención provisional que se acusa.

Por las anteriores razones, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada, mediante resolución de 24 de marzo de 1998, por el Fiscal Primero Especializado en Delitos Relacionados con Drogas contra Javier Cedeño Amador.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FABIO BLANDO PALACIOS CONTRA LA DIRECTORA NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Angélica Bermúdez Rodríguez presentó acción de habeas corpus en favor de **Fabio Blando Palacios** y contra la **Directora Nacional de Corrección** quien, al contestar el mandamiento de habeas corpus, informó que el detenido "ya se encuentra cumpliendo pena de doce (12) meses de prisión impuesta por el Juzgado de Circuito Penal de La Chorrera, por lesiones personales" (f. 5).

Se afirma la ilegalidad de la medida privativa de la libertad porque el Juzgado Segundo del Tercer Circuito Judicial negó solicitud de suspensión condicional de la pena o, en su defecto, su conversión en días multa, a pesar de que el detenido "llena los requisitos contemplados en el Artículo 78 del Código

Penal; asimismo los presupuestos del artículo 84 del mencionado Código".

Como se aprecia, lo que se propone a la consideración del Pleno de la Corte con la acción presentada no es materia a ser resuelta en vía constitucional. Por su naturaleza, la pretensión debe ser postulada al auxilio de otros mecanismos procesales, en sede de la justicia ordinaria.

Por las razones indicadas, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de habeas corpus presentada por Angélica Bermúdez Rodríguez.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO FÁBREGA ZARAK (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GAMALIER GARCÍA VALENCIA, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Rangel Castillo ha interpuesto acción de habeas corpus preventivo a favor de **Gamalier García Valencia** y contra el **Director Nacional de Migración y Naturalización**.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director Nacional de Migración y Naturalización quien, mediante la Nota N° DNMYN-140/98 de 5 de mayo de 1998, rindió el siguiente informe:

"a) No es cierto que se haya ordenado la detención de GAMALIER GARCÍA VALENCIA, de nacionalidad Colombiana.

b) Como no existe orden de detención en contra del señor GAMALIER GARCÍA VALENCIA, de nacionalidad Colombiana, no se presentan fundamentos de hecho ni de derecho.

c) Así como no se ha ordenado la detención del señor GAMALIER GARCÍA VALENCIA, de nacionalidad Colombiana, tampoco se le mantiene en custodia". (F. 24).

Del informe transcrito se infiere con claridad que el señor Gamalier García Valencia no ha sido detenido, ni existen motivos o fundamentos legales para su detención, por lo que lo procedente es ordenar el cese del procedimiento, tal como lo dispone el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en vista de que no existe fundamento legal para continuar con los trámites de la acción de habeas corpus interpuesta a favor de GAMALIER GARCÍA VALENCIA y, por lo tanto, DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS A. ATENCIO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus preventivo interpuesta por el licenciado Rito Torres Guevara a favor de **CARLOS A. ATENCIO** contra el **Director de la Policía Técnica Judicial**, para que no sea detenido "según (sic) Denuncia interpuesta ante la Policía (sic) Técnica (sic) Judicial en el Centro de Recepción de Denuncias, promovida por la Honorable Alcaldesa Sra. Omaira Correa Delgado y sus Asesores entre ellos el Señor OLMEDO ARROCHA OSORIO" (f. 4).

Librado el mandamiento de habeas corpus, el Director de la Policía Técnica Judicial, Licenciado ALEJANDRO MONCADA, rindió su informe de conducta mediante oficio N° A. L. 0292-98 de 7 de mayo de 1998, en los siguientes términos:

"1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor CARLOS A. ATENCIO.

2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.

3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al prenombrado CARLOS A. ATENCIO" (f. 8).

En el libelo de habeas corpus, el licenciado Rito Torres Guevara señala que interpone la presente acción, para que su representado no sea detenido en virtud de "... Denuncia interpuesta ante la Policía (sic) Técnica (sic) Judicial en el Centro de Recepción de Denuncias, promovida por la Honorable Alcaldesa Sra. Omaira Correa Delgado y sus Asesores entre ellos el Señor OLMEDO ARROCHA OSORIO, constituyendo ello una falsa denuncia y simulación de hecho punible contra mi persona en franca violación a lo dispuesto en el artículo 351 y s. s. del Código Penal, y lo que es peor, que se ha dado prominencia publicitaria en periodico (sic) de la localidad, como es el del caso publicitado (sic) el Lunes 27 de Abril de 1998, en la Prensa pag. (sic) 28-B en Portada Especial, en franca violación al artículo 2099 A, del Código Judicial y a fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia del 30 de abril de 1991 en cuanto a la reserva del Debido Proceso y de la Presunción de Inocencia, y al violentarse la misma se constituye en Delito de Calumnia" (fs. 4-5).

Para resolver la presente acción constitucional, resulta oportuno realizar ciertas consideraciones referentes a este tema en particular.

El artículo 23 de la Constitución Nacional, tomado literalmente, describe al habeas corpus como una acción reparadora, concepto éste aceptado por la doctrina, y que procede cuando la persona ya ha sido físicamente privada de su libertad corporal. No obstante, la jurisprudencia de la Corte ha estimado que, puesto que el espíritu de esta norma es proteger y ampliar las garantías fundamentales de los asociados, no sólo es procedente el habeas corpus reparador, sino también el conocido en la doctrina como "preventivo", el cual puede ser ejercido como mecanismo para evitar que la detención se concretice, cuando exista una orden en ese sentido. Es decir que la persona que tenga conocimiento, por cualquier medio de que en su contra se ha proferido una orden de detención puede interponer un recurso de habeas corpus preventivo. Por lo tanto, si bien es cierto que CARLOS A. ATENCIO ha presentado acción de habeas corpus en momentos en que no se ha limitado físicamente su libertad corporal, en el presente caso

no es procedente la presentación de un habeas corpus preventivo propiamente tal, toda vez que no existe una orden de detención contra el accionante, sino que en todo caso existe el temor por parte de éste de que en virtud de una denuncia existente en su contra, la cual tacha de falsa y violatoria de sus derechos, se profiera con posterioridad una orden de detención. No obstante, cabe señalar que pese a la existencia de una denuncia contra CARLOS A. ATENCIO, mediante la cual se inicia la acción penal en su contra, no se le ha instruido proceso penal alguno, por lo que mal podría decirse que se le han violado sus derechos a la libertad individual, y en cuanto a la publicidad que se le ha dado a la supuesta falsa denuncia, no es un asunto que pueda ventilarse mediante la presente acción constitucional, pues pareciera ser un caso del ámbito penal.

CARLOS A. ATENCIO goza de libertad corporal y no se ha ordenado su detención, como lo confirma el informe de conducta del Director de la P. T. J., consecuentemente sería infructuoso iniciar un procedimiento de habeas corpus, pues no obra contra el accionante orden de detención preventiva ni se le ha privado de su libertad ambulatoria en ningún momento. Procede entonces, declarar no viable la presente acción constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de habeas corpus preventivo interpuesta por el licenciado Rito Torres Guevara a favor de CARLOS A. ATENCIO contra el Director de la Policía Técnica Judicial y, por consiguiente, DISPONE EL ARCHIVO del expediente.

Notifíquese, Cúmplase y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GLADYS ALVAREZ DE ORTEGA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Narciso Herrera Grau interpuso acción de Habeas Corpus a favor de la Sra. **GLADYS NOEMÍ ALVAREZ DE ORTEGA**, detenida preventivamente en el Centro Preventivo de Rehabilitación, por la presunta comisión de Delito contra la Fe Pública, contra el **Fiscal Auxiliar de la República**.

Recibido el libelo, se libró de inmediato el mandamiento de Habeas Corpus contra el funcionario demandado, quien lo contestó en tiempo oportuno.

Del extenso Informe producido por el señor Fiscal Auxiliar, podemos extraer la información atinente al presente caso:

A) Dicho funcionario emitió la orden de detención preventiva contra GLADYS DE ORTEGA mediante resolución escrita de 14 de marzo del año que decurre;

B) Una llamada anónima a la División de Delitos contra la Fe Pública de la Policía Técnica Judicial originó la instrucción sumarial por razón de un individuo que laboraba en un taller en Juan Díaz, de nombre "Luis", quien poseía una cédula de identidad personal falsificada, la cual había adquirido por medio de personas que residían en la casa N° 23 de Villa Inés, en Juan Díaz, en conexión con los ocupantes de la vivienda N° 9 de la Barriada Roberto Velázquez, de Pedregal.

De la diligencia de allanamiento y registro realizada en ambas viviendas por funcionarios de dicha Fiscalía, se supo que la Sra GLADYS DE ORTEGA -quien es funcionaria de la Dirección de Cedulación- reside con su esposo -JOSÉ ORTEGA- e hijos en la primera de las casas allanadas, mientras que en la segunda vive la Sra. EUFEMIA SERRANO.

En la residencia de esta última se encontró documentación comprometedora para la Sra. SERRANO, consistente en tarjetas base de la Dirección de Cedulación llenas y en blanco, fotografías tamaño carnet con fondo amarillo, positivos de cédula, certificaciones de nacimiento, documentos en blanco con membrete de la Fiscalía Auxiliar de la República, copias de la firma del Fiscal Auxiliar de la República, copias de permiso para portar armas de fuego, logos a colores de la Policía Técnica Judicial, copias de formatos de licencias de conducir y otros.

Continuó diciendo el Funcionario Instructor que se evidenció la actitud dolosa de esta última, al intentar esconder y probablemente destruir parte de los documentos incautados, situación esta advertida a tiempo por los agentes allanadores, quienes señalaron en el Acta de alllanamiento y registro que la susodicha señora SERRANO "había introducido en una bolsa parte de los documentos, y la mantenía pegada a su cuerpo dentro de la falda".

Al preguntársele la procedencia de esa documentación, dijo que no le pertenecía, sino que el Sr. JOSÉ ORTEGA -esposo de la beneficiaria de esta acción- fue quien los llevó allí.

Señala el Sr. Fiscal, que dentro la mencionada documentación se encontraba la tarjeta base con la que se hizo la cédula de LUIS ADÁN MONTERROSA HERNÁNDEZ, que trabajaba en el taller de mecánica ubicado en el sector de Juan Díaz, donde la llamada anónima que originó la investigación indicó que trabajaba un mecánico con cédula de identidad personal falsa. Este último, al ser indagado, reveló que la cédula se le había conseguido un Sr. ORTEGA -esposo de la beneficiaria de la acción-, que le cobró B/.400.00.

En posterior Diligencia de Inspección Ocular, peritos de la Dirección de Cedulación afirmaron que parte de la documentación incautada era original de esa Institución, y parte era falsa.

Al ser indagada GLADYS DE ORTEGA, negó la participación en los hechos alegando que, aunque tiene acceso a la documentación por ser quien pone a firmar a los ciudadanos, no puede sustraerlas; también dijo que su esposo trabajó con un abogado, pero ahora estaba laborando en un taller de mecánica.

Sostiene el Funcionario Colaborador que "En contra de la recurrente GLADYS DE ORTEGA, gravitan indicios que la vinculan de manera directa como sujeto activo dentro de los delitos Contra la fe Pública y la Seguridad Colectiva" toda vez que la detenida tiene acceso directo a la documentación de la Dirección donde trabaja; que, como su esposo JOSÉ ORTEGA no labora en el Tribunal Electoral, no pudo obtener directamente las tarjetas; que por todo lo anterior, es lógico inducir que su esposa GLADYS, quien sí tiene acceso al material, fue quien le proporcionó las tarjetas base que se incautaron en el ya citado allanamiento; y que, se ha acreditado la participación de una pluralidad de personas que se han vinculado en el trasiego de cédulas falsas, dentro de las que se encuentra la detenida GLADYS DE ORTEGA.

Además, fundó el Licdo. Carlos Augusto Herrera la orden de detención que emitió, en los artículo 2148, 2159 y 2160 del Código Judicial.

Finalmente, afirmó no tener bajo su custodia a la detenida, ya que fue filiada mediante oficio N° 3412 de 17 de marzo de 1998, a órdenes de la Fiscal Novena de Circuito de Panamá, por encontrarse el expediente en ese despacho.

En vista de esta última aseveración, advierte esta Corporación de Justicia que no le corresponde la competencia para conocer el presente caso, ya que en virtud del artículo 2602 del Código Judicial, la misma le corresponde al Segundo Tribunal de Justicia, y por lo tanto, solo cabe declinar la competencia.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA la competencia para conocer el presente negocio en el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Cópiese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN MARTÍN BÓSQUEZ V. CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **JUAN MARTÍN BÓSQUEZ VÁSQUEZ**, detenido en el Centro Penitenciario El Renacer por la presunta comisión de Delitos contra la Administración Pública (Peculado), contra la Fe Pública (Falsificación de Moneda y Otros Valores) y contra la Seguridad Colectiva (Asociación Ilícita para Delinquir), promovió en su propio nombre acción de Habeas Corpus contra el **Fiscal Segundo Delegado de la Procuraduría General de la Nación**, para que se declare la ilegalidad de la detención preventiva a la que está sometido.

El actor fundamentó su pretensión, principalmente, en los siguientes hechos:

Que el funcionario demandado "amaña con tortuguismo judicial" el proceso, al infringir el artículo 2060 del Código Procedimental, que señala que el sumario debe perfeccionarse en el término máximo de cuatro -4- meses; también violenta (a su juicio) el artículo 2061, por cuanto que el funcionario instructor debe "remitir el expediente en el estado en que se encuentre" al Juez o Tribunal competente.

En consecuencia, el Fiscal Segundo Delegado ha retenido el expediente -a su juicio- por veinticuatro -24- meses, demorando en veinte -20- meses de exceso el presente caso.

También alega el sindicado que dentro de este caso, se abrió otro proceso -que se inició en la Fiscalía en mención-, que ahora se encuentra en el Juzgado Noveno de Circuito de Panamá, Ramo Penal; este segundo proceso lo mantuvo el Funcionario demandado (según afirma BÓSQUEZ VÁSQUEZ) por más de veinte -20- meses, violando también las normas en comento.

Opina que ambos procesos no han podido acumularse según lo normado en los artículo 709 y 2091 del Código Judicial, por no permitirlo el Fiscal Segundo Delegado.

Solicita el petente que se ordene al Funcionario demandado que transfiera el expediente al Juez o Funcionario competente para su reparto y sustanciación, y que el Juez Noveno pueda acumular los procesos.

Luego de recibida la petición, se libró inmediatamente el mandamiento de rigor, que fue resuelto por el Fiscal Segundo Delegado de la Procuraduría General de la Nación, quien afirmó:

A) Que ese despacho no ordenó la detención preventiva de BÓSQUEZ, sino que

fue ordenada por el Fiscal Auxiliar de la República mediante resolución de 10 de febrero de 1996, por estar vinculado a una banda dedicada a sustraer billetes de lotería para borrarle el sello de devolución y cambiarlos nuevamente, produciendo una lesión patrimonial al Estado, calculada por peritos en la suma de B/.142,000.00;

B) Que los fundamentos de hecho y derecho están expuestos mencionada resolución.

Que durante el desarrollo de las sumarias el despacho demandado se percató del incremento alarmante de la cuantía inicial por la que se presentó la denuncia, por obra de las acciones ilegales cometidas por un número plural de funcionarios de la Lotería Nacional involucrados en la comisión de dicho ilícito en combinación con particulares, que cambiaban los billetes de Lotería alterados; por ello, es el parecer del señor Fiscal Delegado que la lesión patrimonial infringida al Estado por estos hechos, supera los B/.142,000.00, ya que esa suma fue establecida durante un período determinado de la investigación, que no cubre la totalidad de los períodos laborados por todos los funcionarios involucrados.

C) Que el detenido está bajo sus órdenes -Fiscal Segundo Delegado de la Procuraduría General de la Nación- y es puesto a órdenes del Pleno de la Corte Suprema.

Aclaró el representante del Ministerio Público, que la única razón por la que ha mantenido en su poder el expediente el tiempo aducido por el actor, se debe a las irregularidades que a diario se descubren en el desarrollo del sumario, ya que han descubierto que se han sustraído y alterados más billetes de Lotería, y se siguen descubriendo más, y en todos los casos se ha seguido el mismo procedimiento, y aparece involucrado el Sr. JUAN MARTÍN BÓSQUEZ; enfatiza su obligación de continuar investigando en la medida que aparecen más involucrados, y que dicha investigación está cerca de su fin.

Luego de examinar el cuadernillo detenidamente, considera esta Corporación de Justicia que no le asiste la razón al Sr. BÓSQUEZ, por varias razones:

En primer lugar, consideró el detenido que el Fiscal Delegado de la Procuraduría General de la Nación "ha amañado" el expediente, por tenerlo en su despacho por 24 meses, violentando -a su juicio- los artículos 2060 y 2061 del Código Judicial; y en segundo lugar, arguyó que no ha podido acumularse este expediente con otro iniciado en la misma Fiscalía Delegada, y que se encuentra actualmente en el Juzgado Noveno de Circuito Penal de Panamá.

Es el criterio del Pleno, que los argumentos esbozados por el petente no son idóneos para la naturaleza de la acción que nos ocupa; el tiempo en exceso que haya estado el expediente en el despacho del Funcionario Instructor, así como la imposibilidad de acumulación con otro expediente sobre los mismos hechos, son circunstancias procesales que nada tienen que ver con la legalidad de la detención preventiva; tampoco la imposibilidad de acumular los procesos que se encuentran en la Fiscalía Delegada y en el Juzgado Noveno de Circuito Penal, son motivos para ventilar la legalidad de la detención preventiva de una persona; lo son, los elementos exigidos en el artículo 2159 del Código Judicial, atinentes al hecho imputado, los elementos comprobatorios de la comisión del hecho punible, y los elementos vinculantes contra el detenido.

Es el criterio del Pleno que, pese a que el Sr. BÓSQUEZ titula su escrito como recurso de Habeas Corpus, su contenido dista mucho de constituirlo; más bien parece una queja contra la mora practicada por el Fiscal Segundo Delegado de la Procuraduría General de la Nación, y como tal debe ser tramitado.

En consecuencia, es decisión de la Corte declarar la no viabilidad de la acción, y remitir el cuadernillo al Procurador General de la Nación para que disponga lo más conveniente para tratar de agilizar el presente caso.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de Habeas Corpus promovida por el Sr. JUAN MARTÍNEZ BÓSQUEZ VÁSQUEZ, y REMITE el

expediente al Procurador General de la Nación para que disponga lo más conveniente para la agilización del presente caso.

Cópiese y Remítase.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO CERRUD CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Carrillo Gomila ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del señor **GILBERTO CERRUD**, quien se encuentra detenido a órdenes de la **Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas**, por la supuesta comisión de delito contra la salud pública.

Acogido el recurso, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento contra la autoridad demandada quien, mediante Oficio N° FD-O-226-98 de 27 de marzo de 1998, informó lo siguiente:

> "PRIMERO: Sí es cierto que este Despacho ordenó la detención preventiva del señor GILBERTO CERRUD, mediante resolución motivada, de fecha 23 de marzo del año en curso.
>
> SEGUNDO: Los fundamentos de hecho que inspiraron dicha decisión tienen sus inicios mediante Diligencia de Allanamiento realizada por el Corregidor de Pacora con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Area "E" de Tocumen, en el Sector 3 Rubén Darío Paredes casa 48, ya que se tenía información de que en esa residencia mantenían armas de fuego, las cuales ocultaban en una palmera.
>
> Los hechos se inician, cuando las referidas unidades, avalados por el Corregidor de Pacora, efectúan un allanamiento en el lugar anteriormente descrito, donde se encontraba el encartado, a continuación se procedió a trasladarse a la parte de atrás de la residencia en donde se le ordenó a una unidad de Policía para que subiera a una palma a un costado de la casa. En esta palma se encontró un cartucho blanco plástico que en su interior contiene una bolsita plástica transparente que tenía un polvo blanco que se presumió fuera droga (Cocaína). También había un envoltorio de papel de aluminio el cual contiene una hierba seca la cual se presumió fuera droga (Marihuana). Se encontraron además en el cartucho blanco transparente veinte (20) fragmentos de una sustancia de color cremoso sólido que se presumió fuera droga. En poder del sumariado se encontró la suma de seiscientos noventa y nueve dólares ($699.00) fraccionados de la siguiente forma; trescientos cuatro (304) dólares en billetes de un (1) dólar, cinco (5) billetes de veinte (20) dólares, siete (7) billetes de diez (10) dólares y cuarenta y cinco (45) billetes de cinco (5) dólares. Se encuentra también un celular digital Blosck modelo #2160pz código 05010112BF y una batería para celular.
>
> A las sustancias incautadas se le efectuó la prueba de campo y la

misma arrojó coloración positiva para el reactivo que determina las drogas conocidas como COCAINA y MARIHUANA". (Fs. 10 y 11).

El informe transcrito y el expediente que contiene las sumarias que se adelantan contra el señor GILBERTO CERRUD, ponen de manifiesto que la detención preventiva que sufre, no tiene vicios de ilegalidad.

En primer lugar, a fojas 44 y 45 del cuaderno principal se encuentra la resolución proferida por la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas el 23 de marzo de 1998, por medio de la cual se ordenó la detención preventiva del beneficiario de la presente acción.

En segundo lugar, según se desprende del acta levantada en la diligencia de allanamiento practicada en la residencia del señor CERRUD el 17 de marzo de 1998, ubicada en el Corregimiento de Pacora, Sector 3, Rubén Darío Paredes, Casa N° 48, se encontró en una palma que está en la parte trasera de dicha residencia, un cartucho plástico que contenía veinte (20) fragmentos de una sustancia sólida color crema, que se presumió fuera la droga conocida como "piedra"; un sobrecito de plástico transparente con polvo blanco que se presumió fuera cocaína y un envoltorio de papel aluminio con hierba seca que se presumió fuera marihuana. (F. 6 del expediente principal).

Al efectuarse la diligencia de prueba de campo, las muestras resultaron positivas al reactivo que determina las drogas conocidas como cocaína y marihuana. (F. 33 del cuaderno principal).

Igualmente, en poder del señor GILBERTO CERRUD se encontró la suma de seiscientos noventa y nueve balboas (B/.699.00), fraccionados en trescientos cuatro (304) billetes de un balboa; cuarenta y cinco (45) billetes de cinco balboas; siete (7) billetes de diez balboas y cinco (5) billetes de veinte balboas, al igual que un teléfono celular marca Nokia y una batería para el mismo.

Si bien el imputado alega que esa suma de dinero se la suministró su padre en calidad de préstamo para que obtuviera su licencia de conducir, la existencia de una gran cantidad de billetes de un balboa resulta sospechosa y constituye un indicio en su contra.

Por último, cabe señalar que de acuerdo con el informe suscrito por el señor Manuel Ramos, Sargento Segundo de la Sub Dirección de Información e Investigación Policial del Área "E" Tocumen, consultable a fojas 7 y 8 del expediente principal, el señor CERRUD se hizo responsable de las sustancias ilícitas incautadas e, incluso, le ofreció la suma de mil balboas para que lo dejara en libertad.

De todo lo anteriormente expuesto se concluye que, hasta el momento, existen suficientes elementos probatorios que vinculan al señor GILBERTO CERRUD con el delito que se le imputa, el cual tiene prevista pena mínima de prisión superior a los dos años. Consecuentemente, la detención preventiva es legal, en vista de que fue ordenada por autoridad competente y en concordancia con las exigencias de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por tanto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor GILBERTO CERRUD y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFREDO FEDERICO HOLT CONTRA EL FISCAL TERCERO DE CIRCUITO DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos M. Herrera Morán, actuando en representación de **Alfredo Federico Holt Clarke**, ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 16 de abril de 1998, mediante la cual se declara legal la detención preventiva del señor Alfredo Federico Holt Clarke.

Se trata de un proceso iniciado mediante denuncia formal presentada por la ciudadana Aracely de Hamilton, en la cual manifiesta que el día 12 de enero de 1998 le hurtaron un sinnúmero de prendas valoradas en aproximadamente B/. 270,000.00 y B/.18,600.00 en dinero en efectivo, los cuales reposaban en una "caja fuerte" que se encontraba empotrada en su cuarto. Los funcionarios de la Policía Técnica Judicial lograron aprehender a varios sujetos sospechosos de haber cometido o participado en dicho ilícito, entre ellos, al señor Darío Daniel Del Río quien al rendir indagatoria manifestó quienes eran las personas que planearon y cometieron el hurto en la residencia de la familia Hamilton, declarando la participación del señor Holt C. como el taxista que les ayudó a transportar la caja fuerte (ver fojas 81 a 84).

Se interpone un recurso de habeas corpus ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por considerar que la detención del señor Alfredo Federico Holt Clarke es ilegal por cuanto la misma está fundamentada en su vinculación al proceso por el hecho de ser el propietario del taxi en que se transportaron los bienes hurtados, a pesar de que los testimonios de las personas autoras del ilícito señalan que o participó en la ejecución del hecho, pero que se le entregaron algunas prendas por el transporte. El representante legal del señor Holt Clarke señala que lo antes expuesto lo ubica como cómplice secundario y como autor del delito de aprovechamiento de cosa proveniente de delito, lo cual tiene una penalidad mínima que no admite la detención preventiva.

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial consideró legal la detención preventiva del señor Holt Clarke por cuanto, en su opinión, hay constancia suficiente en el expediente para ordenar dicha detención pues no hay duda alguna de que se cometió un hurto en el que varios sujetos fueron autores del mismo, quienes se valieron de un medio de transporte (propiedad del señor Holt Clarke) para retirar la caja fuerte de la residencia de la familia Hamilton, pues no pudieron abrir la misma en el lugar de los hechos. En base a lo anterior, el Tribunal Superior consideró que si bien la situación jurídica del señor Holt Clarke puede cambiar en el transcurso de la investigación, se ha comprobado que la participación de éste fue de vital importancia ya que transportó el bien a sabiendas del ilícito que se cometía, y además, participó directamente de la destrucción de la caja fuerte para tomar unas joyas a cambio del trabajo realizado, por lo que el Tribunal estimó que sí bien el señor Holt no se introdujo al inmueble afectado, si participó directamente en el hecho ya que transportó los bienes, ayudó a destruir los obstáculos que protegían las joyas y tomó para sí una gran cantidad de éstas. Dado que el hurto con fractura tiene una pena mínima que supera los dos años de prisión el Tribunal Superior, estima que procede la medida cautelar personal objetada.

El Pleno de la Corte, al examinar los argumentos expuestos por el apoderado judicial del señor Holt Clarke, considera que no le asiste la razón al señalar que es ilegal la privación de la libertad corporal del imputado por cuanto está plenamente acreditado el señalamiento del señor Holt Clarke como uno de los partícipes en el hurto con fractura sobre bienes y dineros en la residencia de la familia Hamilton. El delito que se le imputa al señor Holt Clarke se enmarca dentro de lo estipulado en el artículo 184, numeral 3, que señala que "si el autor, para cometer el hecho o para transportar la cosa sustraída, destruye,

rompe o fuerza obstáculos de cualquier naturaleza establecidos para proteger a la persona o a la propiedad ..." la sanción será de 30 meses a 6 años de prisión, lo cual permite que se le aplique la medida cautelar de la detención preventiva.

En este sentido, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia apoya el criterio vertido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en la resolución apelada, cuando señala que contra el sindicado ALFREDO FEDERICO HOLT CLARKE constan en el expediente la denuncia de la señora Aracely Victoria de Hamilton (fs. 9-10) ; el informe de la diligencia de allanamiento de la residencia N° 50 del sector de monte fresco, las Lajas, donde reside uno de los involucrados en el ilícito- el señor Luis Leonardo Arosemena Choy (gallo)- y donde se encontraron varias joyas relacionadas con el hurto. Igualmente, el allanamiento de la residencia s/n propiedad del ciudadano Carlos Uribe, también involucrado en el ilícito, en la cual se recuperó un reloj hurtado en la residencia de la familia Hamilton y el allanamiento a la residencia N° 34 propiedad de la señora Clenia Militza Andreve Salazar, en la cual también se encontró parte de las joyas hurtadas (ver fojas 46 a 48); la declaración jurada rendida por Darío Daniel del Río Dances (fs. 470-471); la declaración jurada rendida por Arnold Santiago Viquez Jiménez (fs. 42-45); la declaración de Julio César Ortega Córdoba (fs. 298-302); la declaración de David Isaac Uribe Dances (fs. 303-310 y fs 472-474), entre otras, en las cuales se señala al señor Holt Clarke como el taxista que transportó en su vehículo la caja fuerte sustraída de la residencia de la familia Hamilton. También ha sido señalado en las declaraciones como uno de los sujetos que ayudó a abrir la caja fuerte a la fuerza y que el mismo no cobró en efectivo por transportar la caja fuerte, sino que se le entregaron parte de las joyas encontradas al abrir la caja fuerte.

Se observa igualmente la existencia de una orden de detención expedida el 16 de marzo de 1998 por autoridad competente como lo es el Fiscal Tercero Del Circuito Judicial de Colón, área del corregimiento de Cristóbal, en la cual se ordena la detención preventiva de Alfredo Holt Clarke por considerar que existen elementos probatorios suficientes para la comprobación del hecho punible y la vinculación del señor Holt Clarke en la comisión del delito de hurto agravado, el cual conlleva pena mínima superior a los dos años (fs. 499 503).

De todo lo anteriormente expuesto se colige que al señor Alfredo Holt Clarke se le sigue un proceso por la comisión de conducta tipificada como delito en nuestro Código Penal, en base a un debido proceso y con orden de detención escrita expedida por autoridad competente. Igualmente se observa que las pruebas, indagatorias y declaraciones que constan en el expediente constituyen indicios suficientes para vincularlo a los hechos que tipifican el delito de hurto calificado que tiene pena de prisión de 30 meses a 6 años. Por ello en la detención preventiva del señor Holt Clarke no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva y, por lo tanto, es procedente declarar legal dicha detención.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia expedida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial fechada el 16 de abril de 1998, que declara LEGAL la detención del señor ALFREDO FEDERICO HOLT CLARKE y, por lo tanto, dispone que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Tercero del Circuito de Colón.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BERNARDO SÁNCHEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada Conny Ruíz, actuando en representación del Señor Bernardo Sánchez, ha presentado recurso de habeas corpus contra la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, dicho funcionario contestó, mediante Oficio N° FD-T-1676-98 de 29 de abril de 1998, lo siguiente:

> "A. Si es cierto que se ordenó la detención del ciudadano BERNARDO ANTONIO SÁNCHEZ MARCELINO, la misma fue emitida en forma escrita y decretada por el Fiscal Primero de Drogas mediante Resolución de siete (7) de abril de 1998.
>
> El fundamento de hecho, se tiene cuando el día cinco (5) de abril de 1998, agentes de la Policía Nacional, al señor BERNARDO SÁNCHEZ MARCELINO, en momentos en que trataba de sacar del maletero del vehículo marca Transam, color rojo, matrícula N° 436838, la cantidad de tres (3) sacos, que en su interior guardaba varios bultos, envueltos con cinta adhesiva, contentivos de un polvo de color blanco, que se presumía en esos momentos fuera la droga COCAINA. Previo a esto, las unidades mediante retén ubicado frente a la Sub-Estación de Gorgona, solicitaron a éste ciudadano detener su vehículo, lo cual no hizo caso alguno y se dio a la fuga.
>
> Al ser verificado el contenido de dichos sacos, se constató presencia de sesenta y un (61), paquetes de regular tamaño y seis (6) paquetes pequeños, forrados en cinta adhesiva, contentivos de un polvo blanco que al ser sometido a la prueba de campo, arrojó resultados positivos a la droga COCAINA.
>
> Cabe señalar, que el mismo día de los acontecimientos el Personero Municipal de Chame, realiza diligencia de allanamiento en una residencia ubicada en el sector de Las Palmas, Nueva Gorgona, detectando siete (7) bultos forrados con plástico color negro y cinta adhesiva. Al verificar el contenido de dichos bultos se encontraron seis (6) cilindros de fotocopiadora marca Tasco; y un (1) saco de hilo, todos contentivos de un polvo blanco. También se halló una (1) maleta color negro, marca maximilian y una (1) maleta de color verde marca Sansonite.
>
> Todas estas maletas presentaban doble fondo, en el cual se detectó un polvo blanco que, al ser sometido a la prueba de campo arrojando resultados positivos para la determinación de la droga COCAINA. Asimismo, se encontró en el mismo lugar, dieciocho (18) paquetes de regular tamaño con la misma sustancia, algunos de los cuales presentan un logo similar al que se detectó en los paquetes con droga incautadas al señor BERNARDO SÁNCHEZ.
>
> A folio cinco (5) y seis (6) del sumario se observa la diligencia de Prueba de Campo, dando resultados positivo a la COCAINA.
>
> El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva del señor BERNARDO ANTONIO SÁNCHEZ MARCELINO se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
>
> En la actualidad el señor BERNARDO SANCHEZ se encuentra filiado a este Despacho, pero, está recluido en las instalaciones de la Policía Nacional de San Felipe, a espera de ser remitido a un Centro

Carcelario correspondiente. Y partir de este momento estará a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia".

Se trata de un proceso iniciado de oficio por delito contra la salud pública, por cuanto al señor BERNARDO ANTONIO SÁNCHEZ MARCELINO se le imputa el supuesto delito contra la salud pública relacionado con drogas. El recurrente considera que la detención preventiva de la cual es objeto es ilegal por cuanto se basa en presunciones y sospechas en donde no existe relación de causalidad entre el delito y la persona a quien se le imputa, pues consideran que existen fundadas dudas sobre la participación o conocimiento que podía haber tenido el señor Sánchez con el ilícito en cuestión por lo que a su juicio se le debe aplicar el principio in dubio pro reo, es decir que en la duda se debe favorecer al reo.

Consta en el expediente contentivo de las sumarias las declaraciones juradas suscritas por el cabo segundo Rogelio Alexis Rodríguez Reyes (fs. 9-12) y José Audilio Jaramillo Quiróz- Inspector Jefe de la Policía Técnica Judicial de la Agencia de Chame (fs. 13-15); el informe de novedad expedido por el Sargento 2° 5810 José Gil Ibarra, de servicio policial motorizado (fs. 18); el informe de novedad del Cabo 2° 16185 Dimas De Gracia, de servicio en la sub-estación de Policía de Gorgona (fs 19-20); el informe del Sargento 1° 5092 Irene González G., Asistente de Información e Investigación Policial-Zona de Policía de Panamá Oeste (fs 21-23). Todas estas declaraciones e informes coinciden en que la detención del señor Bernardo Sánchez se produce al momento en que a éste se le da la orden de detenerse en un retén, pero este se da a la fuga y cuando las unidades de la policía técnica judicial le dan alcance se encontraba intentando botar unos bultos contentivos de una sustancia que se presumía era cocaína.

También consta, a foja 140 del expediente, el informe de laboratorio que certifica que, efectivamente, la sustancia incautada es la droga conocida como COCAINA en la cantidad de 103,436.51 gramos.

Por otro lado, la Corte observa una orden de detención escrita, visible a fojas 27 a 29 del expediente contentivo de las sumarias, expedida por la Fiscalía Segunda de Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá mediante la resolución fechada el 6 de abril de 1998.

Finalmente, el Pleno de esta Corporación considera que los informes de novedad y el informe de laboratorio, aunado a las declaraciones indagatorias rendidas por Rogelio Alexis Rodríguez Reyes y José Audilio Jaramillo Quiróz, constituyen elementos probatorios suficientes para vincular al señor BERNARDO SANCHEZ con los hechos a él imputados. Lo anterior, aunado al hecho de que fue detenido in fraganti, pues la droga fue encontrada en el maletero del auto que él guiaba en el momento de la detención, justifica la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva decretada por la Fiscalía Segunda de Circuito del Tercer Circuito Judicial de Panamá, por cuanto el artículo 2148 del Código Judicial es claro al señalar que sólo procede por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor BERNARDO SANCHEZ y, por lo tanto, DISPONE que sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PRESENTADA A FAVOR DE LUIS CARLOS CHANDLER MIRANDA EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte conoce de acción de habeas corpus presentada a favor de **Luis Carlos Chandler Miranda**, quien, según se afirma, se encuentra recluido en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial, agencia de San Miguelito, a órdenes de la **Fiscalía Auxiliar de la República**, acusado por la supuesta comisión de delito contra el patrimonio, específicamente robo.

Librado el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada, mediante oficio N° 6168 de 21 de mayo del año en curso, manifestó no haber decretado la detención de Chandler ni tenerlo bajo sus órdenes. Agrega esta autoridad en su informe de conducta que en esa fecha llegó a su despacho sumario por delito contra el patrimonio en perjuicio de la empresa Productos Toledano, luego de lo cual se realizó una diligencia de reconocimiento en la que participó Chandler, quien no fue reconocido. En virtud de lo anterior y mediante oficio N° 6153 de 21 de mayo de 1998, se dejó sin efecto su aprehensión.

Por acreditada esta circunstancia, es pertinente la aplicación del mandato del artículo 2572 del Código Judicial, a lo que se procede.

De esta manera el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en esta causa.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FERMIN LEONIDAS MOJICA GARCÍA CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Juan Paulino Rodríguez ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del señor **FERMIN LEONIDAS MOJICA GARCÍA**, quien se encuentra detenido preventivamente a órdenes del **Segundo Tribunal Superior de Justicia**, por la supuesta comisión de delito contra la vida y la integridad personal de los señores RAÚL ALBERTO ARGUELLES BONILLA y MARTÍN ALBERTO COLE SANTOS.

El recurrente sostiene que la detención preventiva del señor MOJICA GARCÍA es ilegal, en vista de que el Tribunal Superior no ha tomado en consideración "la penalidad que pudiera caberle al sindicado frente a un delito en grado de tentativa, como es el caso que nos ocupa." (F. 8).

Acogido el recurso constitucional, se libró de inmediato mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio N°

125-A.C. de 13 de mayo de 1998, lo siguiente:

> "A) Es cierto que la detención actual del recurrente obedece a la decisión adoptada en el auto del 12 de febrero del año en curso, en que bajo la ponencia del Suscrito, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dispuso la apertura de causa criminal contra el justiciable por infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título I, del Libro II del Código Penal, en concordancia con el Capítulo VI, Título II del Libro I del mismo Código, o sea, por el delito genérico de Homicidio en Grado de Tentativa en perjuicio de Raúl Alberto Arguelles Bonilla; y por infractor del Capítulo II, Título I, del Libro II del Código Penal, es decir, por el delito genérico de Lesiones Personales en detrimento de Martín Alberto Cole Santos, tal como se aprecia de fojas 194 a 202 de la actuación principal.
>
> B) Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho aparecen en la resolución enunciada en el epígrafe anterior. Es necesario agregar que a juicio del Tribunal, el comportamiento de MOJICA GARCÍA se subsume en un ilícito que no permite la concesión de la libertad hasta tanto no se termine el proceso, y en este sentido las consideraciones elaboradas por la Fiscalía Tercera Superior en su negativa de sustitución de la detención preventiva, adoptada el 17 de diciembre de 1996, concurren acertadamente (fs. 94)". (Fs. 12-13).

El estudio de las constancias procesales pone de manifiesto que la presente acción constitucional guarda relación con el sumario que se inició con la denuncia presentada por el señor RAÚL ALBERTO ARGUELLES BONILLA contra el beneficiario del presente habeas corpus, ante la Policía Técnica Judicial de San Miguelito el 7 de junio de 1996. (Fs. 1 y 2 del expediente principal) En ella señala que el 31 de marzo de 1996 fueron agredidos con arma de fuego, el señor MARTÍN ALBERTO COLE SANTOS y su persona, por el denunciado.

Como consecuencia de estos hechos, la Fiscalía Auxiliar de la República ordenó la detención preventiva del señor FERMIN LEONIDAS MOJICA GARCÍA, mediante resolución fechada 25 de julio de 1996, consultable de fojas 23 a 25 del expediente principal, donde se establecen los fundamentos de hecho y de derecho para su imposición.

Esta medida cautelar personal fue mantenida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el auto de llamamiento a juicio fechado 12 de febrero de 1998, visible de fojas 194 a 202 de ese mismo expediente, en el que se le abre causa criminal al señor MOJICA MARÍN por el delito genérico de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de RAÚL ALBERTO ARGUELLES BONILLA y por el delito genérico de lesiones personales en detrimento de MARTÍN ALBERTO COLE SANTOS.

De lo anteriormente expuesto se colige que se encuentran acreditados en el proceso los hechos punibles que se le imputan al beneficiario del habeas corpus y también su vinculación en la comisión de los mismos.

No obstante, la Corte observa que los delitos por los cuales se le sigue causa criminal al señor MOJICA MARÍN son, el de lesiones personales, que tiene prevista pena mínima de prisión de un (1) año y el de homicidio en grado de tentativa, la cual constituye una figura autónoma contemplada en el artículo 44 del Código Penal, en los siguientes términos:

> "ARTÍCULO 44. Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un hecho punible por actos idóneos encaminados a su consumación y que no se produce por causas independientes del agente".

El artículo 131 del Código Penal sanciona el delito de homicidio con prisión de cinco (5) a doce (12) años. Por su parte, el artículo 60 de ese mismo Código dispone que en los casos de tentativa de delito se disminuirá a un tercio la pena prevista para el delito correspondiente. En el presente caso, la pena mínima de prisión sería de un (1) año y ocho (8) meses.

Consecuentemente, la privación de libertad del señor MOJICA MARÍN es ilegal, porque no se ajusta a lo que dispone el artículo 2148 del Código Judicial, ya que los delitos por los cuales se encuentra detenido preventivamente, no tienen pena mínima de prisión de dos años.

Ahora bien, en vista de la gravedad de los hechos ilícitos que se le imputan al señor MOJICA MARÍN, lo procedente es sustituir la detención preventiva por las medidas cautelares personales descritas en los literales a y b del artículo 2147-B del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva del señor FERMIN LEONIDAS MOJICA MARÍN; ORDENA que sea puesto inmediatamente en libertad, si no existe otra causa pendiente en su contra; y le IMPONE las siguientes medidas cautelares personales: a) La prohibición de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial y b) El deber de presentarse cada quince (15) días ante la autoridad competente. Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DIAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HUMBERTO BALOY BADILLO CONTRA EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **HUMBERTO BALOY BADILLO** ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor, contra el **Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá**.

El señor BALOY BADILLO, quien se encuentra detenido preventivamente por la supuesta comisión de delito contra la vida e integridad personal del señor YUI CHENG CHAN, alega que la privación de libertad que sufre es ilegal, porque no se le han garantizado sus derechos fundamentales y, además, porque no existen elementos que lo vinculen con el ilícito que se le imputa.

Acogido el recurso constitucional, se libró inmediatamente mandamiento de habeas corpus contra el funcionario acusado, quien respondió mediante Oficio fechado 19 de mayo de 1998, consultable de fojas 6 a 8, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la detención preventiva del beneficiario de la presente acción. Además, señaló que "El sumariado HUMBERTO BALOY BADILLO, se encuentra a órdenes de esa alta corporación de justicia, ya que mediante oficio N° 961 de 17 de abril del año en curso, esta representación social contestó la Acción de Habeas Corpus, interpuesta por las mismas partes, en contra del Fiscal Cuarto Superior" y "envió copia debidamente autenticada del cuaderno penal a ese cuerpo colegiado".

Efectivamente, esta corporación judicial resolvió anteriormente dos acciones de habeas corpus a favor del señor HUMBERTO BALOY BADILLO la primera, mediante sentencia de 27 de enero de 1998 y la segunda, mediante sentencia de 12 de mayo de 1998.

En ambas ocasiones la Corte concluyó que la detención preventiva del mencionado señor era legal, porque había sido ordenada mediante resolución motivada, dictada por autoridad competente; que existían elementos probatorios

que lo vinculaban con el hecho punible que se investiga, el cual tiene prevista pena de prisión mínima superior a dos años, es decir, que cumplía con los requisitos exigidos en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

El análisis de las constancias procesales revela que la situación jurídica del imputado no ha variado desde el momento en que se decidió la última acción de habeas corpus interpuesta a su favor. Consecuentemente y en vista de que no existen nuevos elementos que valorar, debe declararse legal la privación de libertad que sufre el señor BALOY BADILLO.

Por tanto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor HUMBERTO BALOY BADILLO y ORDENA que sea puesto, nuevamente, a órdenes de la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NATALIO JIMÉNEZ LASSO Y JAZMÍN CÉSPEDES CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Alcides Peña ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **Natalio Jiménez Lasso y Jazmín Céspedes**, contra el **Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas**.

Acogido el recurso se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas quien, mediante Oficio N° FD-T-1436-98 de 17 de abril de 1998, rindió el siguiente informe:

> "1- Sí es cierto que se ordenó la detención de los ciudadanos NATALIO JIMÉNEZ LASSO y JAZMÍN CÉSPEDES, la misma fue emitida en forma escrita y decretada por el Fiscal Primero de Drogas, mediante la resolución de dieciocho (18) de marzo de 1998.
>
> El Fundamento de Hecho, se tiene cuando el día quince (15) de febrero de 1998, la Personera Municipal del Distrito de Balboa, con apoyo de unidades de la Policía Nacional de San Miguel, realizaron diligencia de allanamiento en la residencia ubicada en la comunidad de Pedro González, en dicha residencia se encontraban NATALIO JIMÉNEZ LASSO y YAZMIN (sic) CÉSPEDES. En esta residencia se logró ocupar debajo de unas piedras situadas en la base de la puerta de la casa, un (1) cartucho plástico con una sustancia que se presumía fuera MARIHUANA; un (1) pequeño paquete con una sustancia blanca presumiblemente a COCAINA; y un (1) envoltorio con una sustancia compacta, que se presume sea COCAINA.
>
> Cabe resaltar, que ya con anterioridad se tenía información a través de las unidades del Servicio Marítimo, que el ciudadano NATALIO JIMÉNEZ, se dedicaba a la venta de drogas.
>
> A las sustancias incautadas se le (sic) realizaron la respectiva

prueba de campo, dando positivo a las drogas COCAINA y MARIHUANA.

Al ser cuestionados los señores NATALIO JIMÉNEZ JIMÉNEZ LASSO y JAZMÍN CÉSPEDES, ambos niegan tener vinculación con las sustancias ilícitas ocupadas en su inmueble.

El fundamento de derecho para ordenar la detención preventiva de los señores NATALIO JIMÉNEZ LASSO y JAZMÍN CÉSPEDES se encuentra consagrado en los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En la actualidad NATALIO JIMÉNEZ LASSO y JAZMÍN CÉSPEDES se encuentra (sic) filiada a este Despacho. Y (sic) partir de este momento, estarán a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante oficio N° 1437 de 20 de abril de 1998".

El licenciado Alcides Peña sostiene que la detención preventiva de Natalio Jiménez Lasso y Jazmín Céspedes es ilegal, ya que las sustancias ilícitas fueron encontradas fuera de la residencia que ambos ocupaban y, por lo tanto, no eran de su propiedad.

El Pleno observa a fojas 8 y 9 de las sumarias la providencia de 16 de febrero de 1998, mediante la cual la Personería Municipal del Distrito de Balboa, San Miguel, ordena la detención preventiva de Natalio Jiménez Lasso y Jazmín Céspedes. Igualmente consta a fojas 19 y 20 de las sumarias la providencia de 19 de febrero de 1998, dictada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por medio de la cual se mantiene la detención preventiva de los mismos.

El presente proceso se inicia a raíz de informes recibidos del Servicio Marítimo Nacional que señalaban que Natalio Jiménez tenía en su residencia sustancias ilícitas para su venta y distribución.

Se observa de fojas 4 a 5 de las sumarias la diligencia de allanamiento con fecha de 15 de febrero de 1998, suscrita por la Personera Municipal del Distrito de Balboa, efectuada en la residencia de Natalio Jiménez Lasso, ubicada en la comunidad Pedro González, en la que se destaca que fueron recibidos por el señor Jiménez, quien se encontraba en compañía de Jazmín Céspedes y un bebé. Manifiesta que en el interior de la residencia no se encontró ningún tipo de sustancia ilícita, pero que en el exterior de la misma, al lado de la puerta de entrada y debajo de unas piedras, se encontró un cartucho plástico con un envoltorio de una sustancia, presumiblemente marihuana, un paquete pequeño con una sustancia blanca que se presume sea cocaína y otro envoltorio con una sustancia compacta que se presume sea la droga conocida como piedra.

De fojas 23 a 26 de las sumarias consta la declaración indagatoria rendida por Natalio Jiménez Lasso, quien señala que las unidades de policía le informaron que habían encontrado unas sustancias ilícitas y que las mismas no se las habían mostrado. También niega que las sustancias ilícitas encontradas fueran de su propiedad y que tampoco consume drogas.

El Pleno observa de fojas 27 a 30 de las sumarias la declaración indagatoria rendida por Jazmín Céspedes, en la que manifiesta que desconoce a quién le pertenece, las sustancias ilícitas encontradas, las cuales nunca les fueron mostradas y que tampoco consume drogas.

Igualmente consta, a foja 10 del expediente, el informe de laboratorio que certifica que las muestras incautadas resultaron positivas para la determinación de COCAINA en la cantidad de 26.08 gramos, de COCAINA (CRACK) en la cantidad de 4.99 gramos y de MARIHUANA, en la cantidad de 1.16 gramos.

Del estudio de las sumarias, el Pleno estima que la diligencia de allanamiento y el informe de laboratorio, constituyen indicios suficientes que vinculan a los señores Natalio Jiménez Lasso y Jazmín Céspedes con los hechos que se les imputa.

En virtud de lo antes expuesto, el Pleno de esta Corporación estima que la

detención preventiva de los señores Natalio Jiménez Lasso y Jazmín Céspedes, no ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que lo procedente es declarar legal la detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de los señores Natalio Jiménez Lasso y Jazmín Céspedes y, por tanto, dispone que los detenidos sean puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANITA MAE KING DE BRYAN CONTRA LA JUEZ PRIMERA DE CIRCUITO PENAL DE SAN MIGUELITO, MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edwin H. León Rodríguez ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de 30 de abril de 1998, dictada por el **Segundo Tribunal Superior de Justicia**, que declaró legal la detención preventiva de la cual es objeto la señora **Anita Mae King de Bryan**.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró legal la detención de Anita Mae King de Bryan, puesto que la cantidad de droga encontrada en su residencia es de 1,84 gramos de cocaína, el hallazgo de dinero, los informes de inteligencia y de comisión son elementos probatorios que demuestran la vinculación de la señora King con los hechos que se le imputan.

No obstante, el Pleno observa a foja 16 del cuaderno de habeas corpus el informe secretarial de 13 de mayo de 1998 que señala que el 13 de agosto de 1997, se presentó acción de habeas corpus similar a favor de Anita Mae King de Bryan contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas. La referida causa constitucional fue resuelta por este Tribunal, mediante resolución de 4 de septiembre de 1997, declarándose legal la detención de la señora Anita Mae King de Bryan, pues se consideró que los informes de inteligencia y de comisión, la diligencia de allanamiento y el examen de laboratorio son indicios suficientes que la vinculan con los hechos que se le imputan.

Cabe señalar que el artículo 2595 del Código Judicial establece el principio de la relatividad de la cosa juzgada en materia de habeas corpus:

> "Artículo 2595. Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandato de Habeas Corpus,no podrá ser detenido nuevamente por los mismos hechos o motivos, salvo que se presenten nuevos elementos probatorios que así lo ameriten".

Esta Corporación ha señalado en distintas ocasiones que es viable revisar el proceso de habeas corpus que ha finalizado con una sentencia declarativa de la detención de un imputado, siempre y cuando se invoquen nuevos elementos probatorios que ameriten modificar la situación procesal del detenido.

En el presente caso, el Pleno observa que no se han presentado nuevas

pruebas que modifiquen el status del detenido, lo que conduce a que esta nueva acción de habeas corpus carezca de mérito suficiente para justificar un nuevo examen de la situación del detenido, por lo que debe mantenerse la medida cautelar aplicada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia de 30 de abril de 1998, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención preventiva de la cual es objeto la señora Anita Mae King de Bryan y ORDENA que la detenida sea puesta nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORMELIS TRUJILLO GONZÁLEZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DEL CIRCUITO DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce este Máximo Tribunal de Justicia, de la acción de Habeas Corpus propuesta en favor de **ORMELIS TRUJILLO GONZÁLEZ**, contra el **Fiscal Segundo de Circuito de San Miguelito.**

LA RESOLUCIÓN APELADA

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, al conocer en primera instancia de la acción propuesta decidió, mediante resolución de 2 de abril de 1998, declarar legal la orden de detención preventiva expedida en principio por la Fiscalía Auxiliar de la República, y mantenida por el Fiscal Segundo de San Miguelito, toda vez que en concepto del Tribunal existen suficientes elementos para mantener la medida aplicada.

Esta se dispuso dentro del sumario que se instruye por delito contra el pudor y la libertad sexual en perjuicio de la joven SOBEIDA MACHUCA SANADI.

En efecto, en la sentencia objeto de alzada, el Tribunal A-quo señaló que, si bien la investigación sumaria se inició por razón de la denuncia que interpusiera la joven menor de edad SOBEIDA MACHUCA, por supuesto intento de violación carnal,

> "... el relato de los testigos presenciales de lo ocurrido, afectados también al mismo tiempo, se desprende, hasta el momento, que no estamos únicamente ante lo que pudiera ser tentativa de abuso sexual, sino que primeramente los sujetos, entre los que se encuentra ORMELLIS TRUJILLO, invadieron en horas de la madrugada la vivienda en que descansaba SOBEIDA MACHUCA en compañía de su concubino BERNARDO DOGIRAMA, su cuñado JORGE y su hijo de cuatro años de edad, solicitándoles primero dinero, luego golpeándolos y finalmente tratando de abusar sexualmente de SOBEIDA, todo ello en medio de golpes (incluso se habla de un palazo), y hasta llegaron los sujetos a poner un cuchillo en el cuello al niño, al despertarse éste.

Podríamos estar hablando entonces de invasión de domicilio, intento de robo, lesiones, tentativa de violación carnal, hasta el momento, lo que configura un concurso ideal de delitos que no admite en este instante medida cautelar distinta a la adoptada por el Ministerio Público".

ARGUMENTOS DEL APELANTE

El recurrente considera que la detención preventiva que sufre el señor ORMELIS TRUJILLO es ilegal, por cuanto si la conducta típica que se le puede atribuir al referido señor es la de abuso sexual en grado de tentativa, la sanción punitiva mínima aplicable, no alcanza los dos años de prisión.

EXAMEN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA

A ORMELIS TRUJILLO GONZÁLEZ se le han formulado cargos por ser la persona que en horas de la madrugada del día 2 de diciembre de 1997, penetró en compañía de otras dos personas a la casa N° 258 Sector N° 4 de Samaria, vivienda en que habita la joven SOBEIDA MACHUCA, en compañía de su concubino, su cuñado y su pequeño hijo de cuatro años. Los habitantes de la casa fueron agredidos a golpes y también con arma blanca, amenazados, se les exigió dinero, e intentaron abusar sexualmente de la joven SOBEIDA MACHUCA quien al momento de los hechos era menor de edad y se encontraba en estado avanzado de gestación.

Según consta en la investigación sumaria, los jóvenes realizaron avances sexuales explícitos sobre la joven MACHUCA, (tocamiento de senos, intentaron quitarle el pijama que vestía, e incluso uno de los jóvenes ya se había desabotonado y bajado la cremallera de su pantalón), mientras que otro sujetaba una toalla en la cabeza del concubino de la señora MACHUCA y le propinaba una herida con cuchillo en el hombro, tratando de evitar que éste obstaculizara el abuso sexual que, alegadamente, pretendían realizar sobre su concubina.

Según se narra en la denuncia y en las deposiciones de los otros testigos, los asaltantes se incitaban unos a otros a fin de tener acceso carnal con la ofendida.

Además de los golpes, incluso con pala que les propinaron a los moradores de la casa, los agresores amenazaban constantemente a sus víctimas, incluyendo al menor de cuatro años, a quien le colocaron un cuchillo en el cuello para mantenerlo callado.

En la confusión del momento, la joven MACHUCA logró salir de la casa y solicitar ayuda a una vecina, con lo que eventualmente se logró evitar la consumación del abuso sexual, y auxiliar a su concubino, cuñado e hijo, quienes estaban en la vivienda a merced de los agresores.

El único de los asaltantes que logró ser detenido inmediatamente en el acto, fue ORMELIS TRUJILLO, quien según relatan las víctimas, les ofreció incluso dinero para que le permitieran escapar sin ser denunciado a las autoridades. Posteriormente se logró la captura del otro sujeto, que responde al nombre de JUAN RODRÍGUEZ, y quien se resistió al arresto con machete que tenía en su poder. (Fs. 43-44 del sumario).

Cabe destacar que tanto la señora MACHUCA como los otros afectados por el hecho detallado, han señalado que en la actualidad se encuentran amenazados de muerte tanto por los agresores, como por los familiares de éstos, como consecuencia de haber presentado la denuncia penal; denuncia que incluso, aparentemente por temor, han intentado retirar.

Las lesiones sufridas con arma blanca por el concubino de la señora MACHUCA, en el hombro y mano, merecieron una incapacidad de cinco días, mientras que la señora SOBEIDA MACHUCA debió ser examinada al quejarse de dolor en la parte baja del vientre, donde supuestamente uno de los agresores se apoyó con el pie.

Si bien en su declaración indagatoria el señor TRUJILLO GONZÁLEZ acepta

haber penetrado en la vivienda de SOBEIDA MACHUCA, señala que no intentó abusar sexualmente de ella; que en todo momento permaneció aparte de los otros dos sujetos que le acompañaron, y que tenía el entendimiento nublado por el licor excesivamente consumido ese día.

Tal declaración contrasta con la ofrecida por SOBEIDA MACHUCA, BERNARDO DOJIRAMA y JORGE MENGUISAMA, quienes señalan que el señor TRUJILLO participó activamente en toda la agresión propinada a su familia, incluyendo el intento de abuso sexual.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL AD-QUEM

En estas circunstancias, esta Superioridad concluye que la vinculación objetiva y subjetiva del imputado con el hecho punible ha quedado acreditada, tratándose en este caso de un hecho que incluye la violenta entrada en el domicilio de la familia MACHUCA-DOJIRAMA, golpes, amenazas, intento de abuso sexual y de robo, agresión con arma blanca, entre otros, tal como precisara el Segundo Tribunal Superior de Justicia. Por ello, el agente instructor está legalmente facultado para aplicar la medida cautelar personal que considere pertinente, atendiendo a la naturaleza del delito.

Cabe añadir en este punto que, dada la violencia con la que se cometió el hecho, el sujeto detenido también presenta condiciones de peligrosidad, factor que debe ser tomado en cuenta por el Tribunal, y que permite la aplicación de esta medida cautelar, a tenor de lo previsto en el artículo 2147-C acápite c) del Código Judicial.

Finalmente, en cuanto al argumento esgrimido por el apoderado judicial del favorecido por esta acción de habeas corpus, en el sentido de que, siendo que el delito que principalmente se imputa a su representado es el de abuso sexual en grado de tentativa, la pena mínima aplicable no permite que se le imponga la medida cautelar personal de detención preventiva, este Máximo Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de señalar con anterioridad que el elemento de tentativa debe considerarse dentro del proceso penal que se le sigue al imputado, pues no es el proceso especial de habeas corpus la vía procesal en que se puede entrar a considerar el grado de participación, ejecución o consumación de un hecho punible.

El punto determinante en esta etapa, es que al señor TRUJILLO se le imputa, entre otros hechos, la comisión del delito genérico de violación carnal en grado de tentativa, que tiene establecida para sus autores pena de tres a seis años, razón por la cual la detención preventiva se ajusta a derecho, al haber sido decretada por autoridad competente, en resolución motivada, y conforme a lo establecido en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 2 de abril de 1998 que DECLARO LEGAL la detención preventiva de ORMELIS TRUJILLO GONZÁLEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YAZMINA YANET DOWMAN GÓMEZ CONTRA LA FISCAL ESPECIAL DE CIRCUITO CON SEDE EN ANCÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado RAMIRO FONSECA PALACIOS ha presentado recurso de Apelación contra la Resolución de 18 de marzo de 1998, dictada por el **Segundo Tribunal Superior de Justicia**, que declaró legal la detención preventiva de **YAZMINA YANETH DOWMAN GÓMEZ.**

Sostiene el apelante que la resolución impugnada se fundamenta en que contra su mandante existe el indicio de presencia en el lugar de los hechos, toda vez que fue detenida con tres sujetos (Media Luna, Colombianito y Mono Loco) que eran buscados por las autoridades de policía, por haberse evadido del Penal de la Isla de Naos; y, a pesar de esto, la prenombrada YAZMINA DOWMAN no denunció a las autoridades competentes que los mismos se encontraban en una vivienda ubicada cerca de la vía Ricardo J. Alfaro.

Alega que, aunque su cliente fue detenida junto a esos tres sujetos, "esa coyuntura no la ubica como autora o partícipe del delito de Evasión", pues en autos no se encuentra demostrada su participación en tal delito, que es el único de los endilgados que admite la detención preventiva. El tipo penal que sirvió de base legal al Tribunal para declarar legal el presidio es una conducta que se encuadra en el artículo 363 del Código Penal, o sea, dentro del delito de Encubrimiento. Este delito y el delito de Asociación Ilícita, que también se le imputa, tienen pena mínima de un año de prisión, por lo que debe ser declarada ilegal la detención preventiva que sufre su defendida, ya que no existen constancias que la involucren como autora o partícipe del delito de Evasión.

Por otra parte en el fallo impugnado se expresan las siguientes consideraciones:

"...

FUNDAMENTO LEGALES

Revelan los autos que en diligencia de allanamiento llevada a cabo el día 15 de diciembre de 1996, por la Fiscalía Auxiliar de la República, en la Casa N° 34 ubicada en Altos de Santa María, se encontraba la señora Yazmina Yanet Dowman Gómez en compañía de los evadidos José María Infansón (a) Media Luna, Nelsón Gálvez y Nelsón Torres, siendo conocedora de la situación de los evadidos.

Al rendir indagatoria, el señor José María Infansón Castro manifestó que a Yazmina Dowman la conoce desde que eran pequeños, además de que también fue su novia.

Yazmina Yanet Dowman Gómez, al ser indagada, indicó que fue detenida el domingo 15 de diciembre de 1996, Altos de Santa María en la casa donde encontraron a Infansón y a los señores Nelson Gálvez y Nelson Torres. Dowman Gómez señaló conocer a Infansón desde que tenía diez años y haber sostenido un noviazgo con él. Agregó además la indagada que fue a visitarlo una o dos semanas antes de que Infanzón se evadiera.

El Tribunal de habeas corpus ya había analizado en una oportunidad anterior el presente expediente al pronunciarse precisamente, sobre acción de habeas corpus presentada a favor de Yazmina Yanet Gómez, mediante resolución con fecha de 12 de diciembre de 1997, en la cual consideró esta Superioridad, que la indicada Dowman Gómez, se encuentra involucrada en los hechos en razón de que fue detenida en la residencia ubicada en Altos de Santa María en compañía de otros implicados, quienes se mantenían prófugos y evadidos, y conociendo la imputada esta situación, obvió el hecho de denunciarlo a las autoridades correspondientes (fs.1406).

De allí que, la situación de la sindicada no ha variado a la fecha y es por ello, que estima la Sala que debe procederse a la declaratoria de legalidad de detención preventiva decretada contra Yazmina Yanet Dowman Gómez, ya que existen indicios de modo, tiempo

y lugar contra Dowman Gómez como infractora de los delitos genéricos contra la administración pública (evasión y encubrimiento) y contra la seguridad colectiva (asociación ilícita para delinquir). ...". (Fs. 15, 16 y 17).

A juicio de la Corte, la decisión de declarar legal la detención de la ciudadana YAZMINA DOWMAN y los fundamentos expresados al efecto por el sentenciador no son acertados, pues, si bien hasta el momento su conducta se enmarca en los delitos genérico contra la administración de justicia (que incluye el de evasión y encubrimiento) y contra la seguridad colectiva (asociación ilícita para delinquir), los mismos no conllevan pena mínima superior a los dos años de prisión, presupuesto necesario para ordenar tal medida cautelar.

En efecto, como argumenta el apelante en defensa de su cliente, no se justifica relacionarla con la evasión de los reclusos por el hecho de que ella hubiera tenido una estrecha relación con JOSÉ MARÍA INFANSON (a) Media Luna y porque hubiera reconocido en su indagatoria que tenía contacto con él, pues lo había visitado poco tiempo antes de que se evadiera.

Nuestro Código Penal (Título XI, Capítulo VI) se refiere a los Delitos Contra la Administración de Justicia, entre los que se establecen los denominados de Evasión y Quebrantamiento de Sanciones, estableciendo cinco tipos penales (arts. 365 al 369), todos con pena mínima inferior a los dos años de prisión.

Por tanto, aún cuando la conducta de la señora Dowman Gómez llegara a subsumirse en el referido tipo penal, con modalidad agravada, no se llegaría a cumplir el presupuesto del artículo 2148 del Código (de la pena mínima de dos años de prisión), pues la respectiva sanción sería de 6 meses a dos años de prisión si se facilita la ayuda para la evasión con violencia y de 6 a 15 meses de prisión, si no se utiliza la violencia.

Respecto al delito de encubrimiento, aunque el fallo impugnado exprese que la señora Dowman Gómez se encuentre relacionada al mismo porque fue "detenida en la residencia ubicada en Altos de Santa María en compañía de otros implicados, quienes se mantenían prófugos y evadidos, y conociendo la imputada esta situación, obvió el hecho de denunciarlo a las autoridades correspondientes", hay que destacar que este delito también tiene pena mínima inferior a los dos años de prisión, por lo que no es procedente declarar la detención preventiva con fundamento en tal conducta (Cfr. art. 365 C. Penal).

Finalmente, el delito de Asociación Ilícita, tipificado en el artículo 242 del Código Penal, consiste en que "tres o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos", lo que motivará una sanción "con prisión de 1 a 3 años de prisión".

Para la comisión de este delito, atendiendo al sujeto activo (plurisubjetivo) se exige necesariamente la presencia de tres o más personas (Resolución de 4 de Octubre de 1993, Sala Penal de la Corte). También requiere el concierto previo para delinquir, pues la norma contiene un dolo específico , al señalar "con el propósito de cometer delitos", es decir, delitos indeterminados ya que de lo contrario se trataría de casos de participación criminal.

En tal sentido, en el fallo apelado no se mencionan pruebas que demuestren que tal delito fue cometido y que en el mismo esté involucrada la favorecida con esta acción; así mismo, tampoco surgen estos elementos demostrativos de las sumarias que se instruyen.

Aunado a lo expuesto, como en el caso de los otros delitos examinados, en este último no se establece una sanción mínima de prisión de dos años o más.

En mérito de estas consideraciones, la medida de detención preventiva decretada contra la prenombrada Yazmina Dowman es ilegal, pues no cumple con lo preceptuado por el artículo 2148 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Resolución de 18 de marzo de 1998, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y en su lugar,DECLARA ILEGAL la detención preventiva de YAZMINA YANET DOWMAN GÓMEZ y ORDENA que sea puesta en libertad si no existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ENRIQUE ROY JIMÉNEZ TORRES CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante la resolución de 17 de abril de 1998, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, declaró legal la detención preventiva del señor **Enrique Roy Jiménez Torres**, decretada por la Fiscalía Auxiliar de la República, quien se encuentra a órdenes del **Fiscal Primero de Circuito de Panamá** (fs. 16 a 19).

Esta decisión ha sido apelada por el apoderado judicial del imputado, licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, y el recurso ha sido concedido en efecto suspensivo, por lo que esta Superioridad procede a resolverlo.

FUNDAMENTO DEL APELANTE

El licenciado Carrillo Gomila sustenta su apelación señalando que el Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró legal la detención de Enrique Roy Jiménez Torres, porque según la investigación colaboró con los involucrados en el asalto y riña para que abandonaran la escena de los hechos, transportándolos en su vehículo.

Indicó el apelante que a criterio del Tribunal su representado prestó "un auxilio a la persona que delinque para asegurar su provecho", motivo suficiente para privarlo de su libertad. El licenciado Carrillo Gomila rechaza dicho fundamento señalando que los supuestos cargos de encubrimiento no le fueron notificados ni eran el sustento de la detención preventiva. Agrega además que según el artículo 363 del Código Penal, ese cargo tiene señalada pena mínima de un año de prisión.

El apoderado judicial del señor Jiménez Torres manifiesta que la detención de su representado se fundamenta en los señalamientos directos de Beatriz Murillo y del señor Torres, quienes sin embargo, al ampliar sus declaraciones coinciden con la de José Orlando Medina Chavarría, en cuanto a que Enrique Jiménez Torres no tuvo que ver en el robo de las prendas de Beatriz Murillo (fs. 21 a 26).

ANÁLISIS DEL PLENO

La Fiscalía Auxiliar de la República de Panamá dispuso, con fundamento en el artículo 2115 del Código Judicial, llamar a rendir declaración indagatoria a Radames Forero Córdoba y Enrique Jiménez Torres, por considerar que las declaraciones de testigos presenciales del hecho coinciden con la denuncia de robo a mano armada presentada por Beatriz Murillo (fs. 132 y 133).

Las declaraciones juradas antes mencionadas se refieren específicamente a las de Roberto Torres, Carlos Torres y Yessenia Boxill Samuels, quienes eran

acompañantes el día de los hechos de la denunciante (fs. 13-14, 15-16 y 27-28 del expediente del proceso penal).

En la denuncia de robo a mano armada presentada por Beatriz Murillo el martes 24 de febrero de 1998 ante la Policía Técnica Judicial, ésta expresó lo siguiente:

> "Cuando nos encontrábamos en EL BAR DISCOTEQUE LA ATLANTIDA fuimos atacados por cinco sujetos los cuales nos sacaron armas de fuego y me robaron a mi mis joyas. En el momento en que se dió el hecho ellos brincaron hacia nosotros y el sujeto que conocemos con el apodo de RADAMES me quitó mis joyas, mientras que el que se llama ROY JIMÉNEZ me apuntaba con un arma de fuego en la cabeza, el que se llama RICKY, LOCOAME y FULO PARRIS, comenzaron a atacar a los otros compañeros que andaban con nosotros. Luego mi esposo fue a buscar a Francisco y lo golpeó en la nariz, y los otros le tiraban jarras y botellas a mis compañeros. Luego de eso salieron corriendo y se montaron en el carro de ROY JIMÉNEZ, el cual es un Mitsubichi Lancer del año, color plateado y se fueron (f. 2 del expediente del proceso penal).

Por su parte, Roberto Antonio Torres Coma, quien señaló estar unido a la denunciante, rindió declaración jurada el 3 de marzo de 1998, en la que relató quiénes y cómo robaron a su esposa en la Discoteca Atlántida:

> "... los sujetos FULO PARRIS, RICKY, RADAMES Y ROY, LOCO AMEHD, comenzaron a despojarle las prendas, el beeper, mientras en ese momento yo me encontraba peleando con RADAMES y mis otros dos hermanos se encontraban en la misma situación, no importándole que mi hermano FRANCISCO es Policía, después de esto relucieron un arma tipo (9 milímetros), se montaron en el carro que es de uno de los sujetos de nombre ROY JIMÉNEZ, ..." (f. 13 del expediente del proceso penal).

Con fundamento en los anteriores señalamientos la Fiscalía Auxiliar de la República, mediante providencia de 10 de marzo de 1998 (fs. 140 y 141), ordenó la detención preventiva de Enrique Jiménez Torres y Radames Forero Córdoba, como supuestos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Libro II, Título IV, Capítulo II del Código Penal, relativo al delito de robo, que tiene señalado pena de prisión de 4 a 6 años y de 5 a 7 años en caso de robo agravado.

A fojas 187 se encuentra Oficio N° 1130 de 27 de marzo de 1998, mediante el cual la Fiscalía Primera del Primer Circuito Judicial de Panamá solicita a la Fiscalía Cuarta Superior del Distrito Judicial de Panamá, copia autenticada del proceso penal por el homicidio de Giniva Correa Melo (q. e. p. d.), al que también se vincula a Enrique Jiménez Torres y en el que rindieron declaraciones juradas Nancy Raquel Moreno Lindo y Perla Florencia Davis Murrel.

En el referido proceso penal las declarantes dijeron conocer a Enrique Jiménez Torres (Roy), que no se suscitó ningún robo el 24 de febrero de 1998 en la Discoteca Atlántida, sino una riña y que "Roy" sólo intentó separar la pelea de los hermanos Carlos, Roberto y Francisco Torres con Riki, recibiendo un golpe de uno de los hermanos Torres, por lo que quedó involucrado en la pelea y fue desalojado de la discoteca con todos los demás por agentes de seguridad, por lo que se retiró en su carro con Radames (fs. 159 a 172 del expediente del proceso penal).

En declaración jurada de José Orlando Medina Chavarría, gerente administrativo de la Discoteca Atlántida, éste indicó que el día en cuestión se dió una pelea entre un joven llamado Radamés y otro sujeto, quienes fueron desalojados de la discoteca, y aseguró que a la denunciante no llegaron a robarle, hecho que le consta porque él mismo bajó con los involucrados hasta la puerta de la discoteca (fs. 121 a 123 del expediente del proceso penal).

Finalmente, considera esta Superioridad trascendental transcribir lo pertinente de la ampliación de la denuncia de la señora Beatriz Murillo y de la

declaración de Roberto Antonio Torres Coma, ambas rendidas ante el Despacho de la Fiscalía Primera Municipal del Distrito de Panamá el 23 de marzo de 1998, en las que expresaron respectivamente lo siguiente:

> BEATRIZ MURILLO "PREGUNTADA:
> Diga la denunciante por qué en su denuncia suscrita el día martes 24 de febrero de 1998, usted manifestara que el señor ROY JIMÉNEZ le apuntaba con un arma de fuego en la cabeza. (SE DEJA CONSTANCIA DE QUE SE LE MUESTRA LA FOJA #2 DEL EXPEDIENTE).
>
> CONTESTÓ:
> Debe ser que al momento de tomarse la declaración el joven se confundió, yo le manifesté que estábamos bailando, se puso en un lado RICKY a bailar con una muchacha y fulo PARRIS en otro lado, me tenían como rodeada y atrás de mi estaba RADAMES con otro muchacho, entonces RICKY comenzó con una empujadera con el Papá de mi hijo y allí se formó la pelea, con él y el hermano de él que se llama CARLOS TORRES. Cuando yo iba a correr a buscar al otro hermano que se llama FRANCISCO TORRES, nunca llegué a verlo porque en ese momento fue que RADAMES me estaba apuntando con un arma y me arrancó el bipper que yo tenía en el pecho para que no se me callera y los dos collares, las dos pulseras que tenía y la sortija que tenía una piedra rosada y otra que tenía forma de culebra y tenía una piedra azul" (f. 175 del expediente del proceso penal).
>
> ROBERTO ANTONIO TORRES COMA "PREGUNTADO:
> Diga el declarante a qué se debe su presencia hoy en este Despacho?
>
> CONTESTÓ:
> A ampliar la declaración para que quede claro que no fue ROY el que le tenía el arma puesta en la cabeza de BEATRIZ MURILLO, sino RADAMES. ... yo me voltié y tenían a BEATRIZ, eran FULO PARRIS, RADAMES y RICKY. RADAMES le apuntaba con el arma en la cabeza y los otros dos le estaban quitando las prendas y le tiré la jarra de cerveza y se fomentó la pelea. En ese momento ROY, estaba parado lejos con una muchacha, el no sabía nada, cuando él vió lo que estaba sucediendo, él se los llevó ya que ellos estaban juntos pero él no sabía nada de lo que estaba pasando, es decir de que RADAMES apuntó con el arma a mi mujer, cuando bajamos nosotros le empezamos a decir que 'QUÉ PASÓ CON LAS PRENDAS'..." (f. 178 del expediente del proceso penal).

En el presente caso las principales declaraciones que vinculan al imputado al delito de robo a mano armada fueron las originalmente rendidas por la víctima denunciante Beatriz Murillo, y por el señor Roberto Antonio Torres, que posteriormente fueron desechadas por los propios acusadores en las ampliaciones de denuncia y de declaración antes transcritas. En consecuencia, como en el expediente no se observa ningún otro elemento que vincule al imputado a la comisión del delito de robo a mano armada en perjuicio de Beatriz Murillo, debe decretarse ilegal la detención preventiva dictada en su contra como supuesto infractor de las normas penales que tipifican el delito de robo.

En segundo lugar, observa esta Superioridad que el Segundo Tribunal Superior, al resolver el recurso de habeas corpus, también consideró que aunque fue aclarado que Enrique Roy Jiménez Torres no participó en el ilícito calificado por el Ministerio Público como infractor de las disposiciones legales contenidas dentro del Libro II, Título IV, Capítulo II del Código Penal, sí consta en autos que "JIMÉNEZ TORRES aún a pesar que fue puesto en conocimiento de lo que acababa de suceder (el atraco), procedió a transportar a los señalados como autores del ilícito en su vehículo, situación en la que coinciden los testigos presenciales del incidente.", y que "puede colegirse que el tal 'ROY' brindó su colaboración para que los involucrados en el asalto y riña abandonaran la escena de los hechos, lo que ubica en este instante sumarial como la persona que presta un auxilio a la persona que delinque para asegurar su provecho ..." (f. 18 y 19).

El Tribunal de habeas corpus de primera instancia ha considerado legal la

detención preventiva de Enrique Jiménez Torres, pero no con fundamento en el delito de robo sino en base a un hecho delictivo distinto al que se le acusa en la orden de detención, situación que no es jurídicamente aceptable para mantener la misma, ya que es indispensable determinar con exactitud el tipo delictivo atribuido al imputado con el fin de establecer si es de aquellos delitos que por la pena que contemplan, admiten la medida cautelar de privación de la libertad de la manera y con las formalidades que prescribe nuestro Código Judicial.

Como ha quedado demostrado en las investigaciones, no existe suficiente mérito para vincular al recurrente a la comisión del delito de robo y de considerarse, como lo hizo el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que la conducta está tipificada en el artículo 363 del Código Penal, no estaríamos frente a un delito por el cual pueda decretarse detención preventiva, puesto que la pena de prisión en este último caso es de 1 a 2 años.

En relación a esto último, conviene reiterar que no puede privarse de su libertad a una persona por una causa distinta a la que se le imputa en la resolución que ordena esta medida preventiva, puesto que tal como se explicó la misma procede en tanto el delito sea de aquellos que contemple pena mínima de prisión de dos años, y además, porque mantener a una persona detenida por motivo distinto al que se la ha comunicado es contrario a las garantías constituciones consagradas a su favor.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo apelado y DECLARA ILEGAL la detención preventiva y ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD de ENRIQUE ROY JIMÉNEZ TORRES de no tener otra causa pendiente en su contra.

Notifíquese, y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) YANIXZA Y. DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ESTELA DEVIA CANO CONTRA EL FISCAL SEGUNDO ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Batista Guerra, promovió el día 27 de marzo del presente año, acción de habeas corpus a favor de **ESTELA DEVIA CANO** y contra el **Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.**

Mediante auto dictado el 27 de marzo se libró el mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado que en el término de la Ley, rindiera un informe sobre las causas de la detención. El primero de abril de 1998 se recibió el informe requerido, al cual se adjuntó los TOMOS I, II y VI del sumario y tres cuadernillos de cuentas de BANCOMER, además, del Oficio N° FD-T-1305 que manifestaba que por lo voluminoso del expediente posteriormente se remitirían los otros tomos.

La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia recibe el 22 de abril de 1998, mediante Oficio N° FD-T-1629, copias debidamente autenticadas de los TOMOS III, IV y V del sumario con la respectiva observación de que oportunamente

se enviarían el resto de los tomos que conforman el expediente.

Una vez más, por instrucciones de la Magistrada Sustanciadora se solicitó a la Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas que remitiera el resto de los tomos del sumario seguido a ESTELA DEVIA CANO a fin de resolver la acción de habeas corpus interpuesta a su favor.

La Fiscalía Segunda Especializada en Delitos Relacionados con Drogas remite el 30 de abril de 1998 el Tomo VII, y el 1 de mayo del mismo año el Tomo VII A, además del informe N° 5R-JPA-G-97 de la Policía Nacional del Ecuador acompañado de tres anexos concernientes a la investigación que se le sigue a los miembros de la familia Rivera, vinculados a ESTELA DEVIA CANO.

Estando el proyecto en lectura, el licenciado Miguel Batista Guerra desistió de la acción de habeas corpus promovida mediante escrito fechado 27 de mayo de 1998, que fue presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse al desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Miguel Ángel Guerra dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor de ESTELA DEVIA CANO contra el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. HÉCTOR CASTILLO RÍOS, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 7-DGT-53-95 DE 23 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado **HÉCTOR CASTILLO RÍOS**, actuando en su propio nombre, ha interpuesto ante el Pleno de esta Corporación de Justicia, demanda de inconstitucionalidad para que con audiencia del Señor Procurador General de la Nación o de la Procuradora de la Administración, se declare que es inconstitucional la **Resolución N° 7-DGT-53-95 de fecha 23 de mayo de 1995, dictada por el Director General de Trabajo.**

De acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 2554 del Código Judicial, la demanda fue corrida en traslado al señor Procurador General de la Nación a fin de que emitiera concepto, lo que hizo a través de la Vista N° 10 de

27 de febrero de 1996.

Posteriormente, se fijó en lista el negocio por el término de diez (10) días para que cualquier interesado presentara argumentos por escrito, término que fue aprovechado por el demandante quien presentó alegatos visibles de fojas 39 a 43 del expediente.

Corresponde ahora determinar si como lo acusa el demandante, existe violación de las normas constitucionales a que se refiere la demanda o de alguna otra disposición constitucional, al expedirse la Resolución impugnada, previa las siguientes consideraciones.

LA PRETENSIÓN

El demandante solicita se declare la inconstitucionalidad de la Resolución N° 7-DGT-53-95 de fecha 23 de mayo de 1995 dictada por la Dirección General de Trabajo, cuya parte resolutiva es del siguiente tenor:

> "ARTÍCULO PRIMERO: CONDENAR a la empresa GAMBOTTI PÉREZ, S. A., al pago de SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS BALBOAS CON QUINCE CENTÉSIMOS (/76,976.15) en concepto de diferencia de salario mínimo según Decreto N° 3 de 4 de marzo de 1980, y los correspondientes ajustes en vacaciones y décimo tercer mes dejados de pagar a los trabajadores demandantes de acuerdo a la forma que se detalla:
>
> | NOMBRE | TOTAL |
> |---|---|
> | RICARDO DANVERS ... | B/16,015.94 |
> | CARMEN BANNISTER ... | 33,084.43 |
> | MARITZA LESBIA DE ARIZA ... | 27,875.78 |
> | TOTAL ... | B/.76,976.15 |
>
> ARTÍCULO SEGUNDO: CONDENAR a la empresa GAMBOTTI PÉREZ, S. A., al pago de los recargos e intereses contemplados en los Artículos 169 y 170 del Código de Trabajo.
>
> Las costas se fijan en el 15% del total de la condena".

Como fundamento de su petición, el recurrente se sustenta en los siguientes hechos:

> PRIMERO: LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, por medio de su RESOLUCIÓN N° 7-DGT-53-95, ordenó a la empresa GAMBOTTI y PÉREZ, S. A. hacer el "pago de Setenta y Seis Mil Novecientos Setenta y Seis Balboas con Quince Centésimos (B/.76,976.15) en concepto de diferencia de salario mínimo según Decreto N° 3 de 4 de marzo de 1980, y los correspondientes ajustes en vacaciones y décimo tercer mes dejados de pagar a los trabajadores demandantes"; y el "pago de los recargos e intereses contemplados en los artículos 169 y 170 del Código de Trabajo" y quince (15%) por ciento del total del pago en concepto de costas.
>
> SEGUNDO: El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, a la fecha de la Resolución N° 7-DGT-53-95, 23 de mayo de 1995, no había hecho "la clasificación de ramas de actividades o profesiones mediante la cual se definiría cuáles empresas resultarían afectadas con el pago del presente salario mínimo", según lo previene el ARTÍCULO SEGUNDO del Decreto N° 3 de 4 de Marzo de 1980, por cuanto la Sección de Recolección de Ropa fuera del Centro de Trabajo de Negocio de LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA de GAMBOTTI y PÉREZ, S. A., no aparece al 23 de mayo de 1995, afectada "con el pago del presente salario mínimo", a que se refiere el Decreto N° 3 de 4 de marzo de 1980.
>
> TERCERO: El Ministro de Trabajo y Bienestar Social, resolvió

confirmar en todas sus partes la Resolución N° 7-DGT-53-95 de 23 de marzo de 1995, proferida por la Dirección General de Trabajo; no obstante que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. (sic) a la fecha de esta confirmación. (sic) no tiene hecha ninguna clasificación de ramas de actividad o de secciones de negocios, que hubiese clasificado a la sección de recolección de ropa (fuera del centro de trabajo) del negocio de PLANCHADO y LAVADO de ROPA, dentro de "la clasificación de ramas de actividades ... afectadas con el pago del presente salario mínimo" a que se refiere el mencionado Decreto N° 3 de 4 de marzo de 1980.

CUARTO: En el lapso de 15 años que se comprende entre la fecha 4 de marzo de 1980 en que fue expedido el Decreto N° 3, y el 23 de mayo de 1995, en que el Director General de Trabajo dictó la RESOLUCIÓN N° 7-DGT-53-95, <sólo el Ministro Jorge Rubén Rosas en 1992,> promovió la creación del ANTEPROYECTO de DECRETO (acto propio del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social) que reglamentaría el DECRETO N° 3 de 4 de marzo de 1980, VÉASE folios 74, 75, 76 del expediente, administrativo, siendo obvio que a la fecha de la demanda del señor RICARDO DANVERS y Otros, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, no había cumplido el mandato legal, de hacer la clasificación de ramas de actividades o profesiones afectadas con el pago del presente salario mínimo según lo ordenado por el Artículo Segundo del Decreto N° 3 de 4 de marzo de 1980, en que se incluyera la Sección de Recolección de Ropa antes indicada y que sí hubiere amparado por esa razón, la expedición de un acto como el acto acusado.

QUINTO: Por la orden impugnada, la Dirección General de Trabajo resolvió condenar a la Empresa a pagar a los demandantes B/.76,976.15, más, recargos intereses y costas fijadas en el 15% del total de la condena, para lo cual reputó clasificada a GAMBOTTI Y PÉREZ, S. A. y como afectada con el pago del salario mínimo de B/.2.90 en una "clasificación" que aún no ha hecho el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social".

Como disposiciones constitucionales infringidas y el concepto en que lo han sido, el Licenciado Héctor Castillo R. expresa lo siguiente:

"La Resolución N° 7-DGT-53-95 de 23 de mayo de 1995, violó el artículo 62 de la Constitución, por razones de fondo y que establece:

ARTÍCULO 62. "La Ley establecerá la manera de ajustar periódicamente el salario o sueldo mínimo del trabajador, con el fin de cubrir las necesidades normales de su familia, mejorar su nivel de vida, según las condiciones particulares de cada región y de cada actividad económica; podrá determinar asimismo el método para fijar salario o sueldo mínimo por profesión u oficio".

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN:

El Acto acusado de inconstitucionalidad infringe la norma citada por violación directa por comisión, al desconocer derechos claros establecidos en su texto; porque precisamente al haber establecido la Ley la manera de ajustar periódicamente el salario o sueldo mínimo del trabajador, por medio de Decretos del Órgano Ejecutivo, atendiendo a la recomendación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo y existiendo el método para fijarlo por profesión u oficio, resulta evidente la violación indicada cuando la dirección general de Trabajo, se desborda más allá del marco bien delimitado que se observa en el Decreto No.3 de 4 de marzo de 1980, que no le permite considerar afectada por dicho Decreto, aquellas secciones o ramas de actividad no clasificadas al momento de su expedición, lo cual hace que el acto acusado sea contrario a la superior norma constitucional del artículo 62 antes citado.

En pocas palabras el acto acusado desconoce el mandato constitucional al crear su propio método en el momento de su origen o expedición para así, arbitrariamente extender los efectos del Decreto antes señalados a un oficio no clasificado por el Ministerio de Trabajo de la manera prevista en ese Decreto N° 3 de 4 de marzo de 1980, como requisito esencial previo que le permita a las personas conocer las normas jurídicas que regulan las actividades a las que se dedican o van a dedicarse.
La Resolución N° 7-DGT-53-95 violó el artículo 32 de la Constitución por razones de forma que establece textualmente:

ARTÍCULO 32. Nadie será Juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa Penal, Policiva o disciplinaría.

CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN:

El acto acusado infringió directamente por comisión el artículo 32 antes citado, al no cumplir el trámite legal de exponer razonadamente el examen de un elemento básico probatorio y el mérito (sic) que le correspondía cual es, el anteproyecto de decreto <ACTO Propio> elaborado (sic) por (el Ministro de Trabajo Jorge Rubén Rosas en 1992) el Ministerio de Trabajo, desconociendo ese derecho a la prueba y que le imponía (sic) el deber a la Dirección General de Trabajo de examinarla racionalmente con arreglo a las normas de la lógica y la experiencia, lo cual, le permitió aplicar una parte del Decreto N° 3 de 4 de marzo de 1980, que estaba excluida de esa aplicación al no haber hecho el Ministerio de Trabajo la Clasificación ordenada por el referido Decreto N° 3 de 4 de marzo de 1980.
Cual es el efecto de haber conculcado el derecho a la prueba (Anteproyecto de Decreto antes indicado)". (Fs. 15 y 16).

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Al contestar el traslado de la demanda, el Señor Procurador General de la Nación vierte su opinión mediante la Vista N° 10 de 27 de enero de 1996, concluyendo "que de la presente iniciativa constitucional no surge la violación de los artículos 62 y 32 de nuestra Ley Fundamental." y que en consecuencia "la Resolución N° 7-DGT-de 23 de mayo de 1995 no es inconstitucional".

En lo medular y con respecto a la violación del artículo 62 de la Constitución, el Representante del Ministerio Público presenta el siguiente argumento:

"Afirma el demandante que la actividad a que se dedica la empresa que representa no se encuentra clasificada por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social para que sea afectada por el pago del salario mínimo establecido como exige el artículo segundo del decreto en cuestión. Asimismo, considera que la autoridad que conoció el presente caso, el Director General de Trabajo, se extralimitó en su actividad decisoria, pues "arbitrariamente" extendió los efectos del decreto en mención al no estar el oficio de los trabajadores del negocio de lavandería; expresamente clasificado dentro de las ramas de actividades o profesiones afectadas con el pago del referido salario mínimo.

El aludido señalamiento, a nuestro juicio no comprueba la violación del artículo 62 de la Constitución por cuanto éste se limita, como hemos visto, únicamente a establecer el derecho que tienen los trabajadores a que les sea mejorado periódicamente el salario mínimo, mediante los instrumentos legales antes mencionados.

El hecho que las autoridades del Ministerio de Trabajo no hayan realizado la clasificación de las distintas clases de actividades o

profesiones que deban devengar el susodicho salario mínimo no es motivo suficiente para demandar por inconstitucional la resolución jurisdiccional, cuyo estudio nos ocupa.

Para la demostración de un vicio de inconstitucionalidad se requiere la existencia de una contradicción manifiesta entre el texto de la disposición constitucional y el acto de autoridad. Ello no ocurre en esta oportunidad. Por tanto, al no constituir los procesos constitucionales una tercera instancia, en la cual se pueda ejercer el control de los posibles errores de la actividad jurisdiccional, no puede la Corte efectuar la revisión de la omisión legal antes señalada." (Fs. 29 y 30).

Con respecto a la violación endilgada al artículo 32 constitucional, para rebatir las argumentaciones del demandante, el señor Procurador manifiesta:

"Por otra parte, vistas las argumentaciones expuestas con relación al artículo 32 constitucional, que establece el principio del debido proceso legal, esta Procuraduría considera que tampoco se produce la alegada violación ya que, el principio constitucional del debido proceso legal contiene garantías que permitan asegurar el derecho de defensa de las partes sometidas a un juicio o proceso. Entre este elenco de garantías figuran: el derecho de las partes a ser oídas por un tribunal competente, independiente y predeterminado por la Ley; el derecho de aportar pruebas y contrapruebas lícitas relativas al objeto de la causa o proceso; la facultad para hacer uso de los medios de impugnación que establece la Ley contra las resoluciones judiciales proferidas y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa.

El análisis de la resolución demandada no revela que el juzgador de la causa haya pretermitido algún trámite procesal, considerado esencial por la ley, que haya dejado en indefensión a la parte que presenta la presente acción de inconstitucionalidad.

El demandante expresa que "el acto acusado infringió directamente por comisión el artículo 32 antes citado al no cumplir el trámite legal de exponer razonadamente el examen de un elemento básico probatorio ... con arreglo a las normas de la lógica y de la experiencia". (Subraya esta Procuraduría).

Observa este despacho, que tanto el demandante como el demandado hicieron uso de las oportunidades establecidas por la ley procesal laboral para sustentar sus respectivas posiciones mediante la presentación de las pruebas que a bien tuvieron a considerar y ambos objetaron las de la contraparte, según se desprende de la parte motiva de la resolución cuestionada por ser supuestamente inconstitucional. Además, en el presente proceso se verificó en dos instancias por lo que la parte perjudicada con la decisión del juzgador a quo pudo plantear al juez de alzada su inconformidad con la mencionada resolución". (Fs. 30 y 31).

CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DE LA CORTE

De un análisis a la Resolución N° 7-DGT-53-95 de fecha 23 de mayo de 1995, dictada en proceso laboral llevado a cabo en la Dirección General de Trabajo y en la que se condena a la empresa GAMBOTTI PÉREZ, S. A., al pago de la suma de B/.76,976.15, en concepto de diferencia de salario mínimo, se observa que la misma tiene como fundamento el Decreto Ejecutivo N° 3 de 4 de marzo de 1980, el cual, para mayor claridad, transcribimos a continuación:

DECRETO N° 3
(de 4 de marzo de 1980)

Por el que se fija el salario mínimo en las actividades canaleras relacionadas con el uso, manejo, funcionamiento, mantenimiento,

protección o defensa del Canal de Panamá.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Fíjase un salario mínimo de dos balboas con noventa centésimos (B/.2.90) por hora para los trabajadores de empresas privadas empleados en actividades comerciales canaleras o sea, aquellas que consisten en la transferencia o venta de bienes o prestación de servicios a personas de derecho público o privado, dedicadas temporal o permanentemente al uso, manejo, funcionamiento, mantenimiento, protección o defensa del Canal de Panamá, al igual que las ramas de actividad o secciones de los negocios cuyo objeto comercial depende de la transferencia o venta de tales bienes o prestación de servicios.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social hará la clasificación de ramas de actividades o profesiones afectadas con el pago del presente salario mínimo.

ARTÍCULO TERCERO: Se deroga el Decreto N° 52 del 28 de septiembre de 1979.

ARTÍCULO CUARTO: Este Decreto comenzará a regir a partir de su promulgación.

Dado en la ciudad de Panamá a los 4 días del mes de marzo de mil novecientos ochenta (1980).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE".

El demandante alega en resumen, que el Decreto N° 3 de 4 de marzo de 1980 fue aplicado por la Dirección General de Trabajo sin que a la fecha de su aplicación, el Ministerio de Trabajo hubiese hecho la clasificación de ramas de actividades afectadas con el pago del nuevo salario mínimo de B/.2.90 por hora, tal como se ordenaba en el ARTÍCULO SEGUNDO de dicho decreto.

Agrega que esta actuación de la Dirección General de Trabajo, desconoce claros derechos establecidos en el artículo 62 de la Constitución ya que éste deja a la Ley la manera de ajustar el salario mínimo atendiendo para ello a la clasificación previa por secciones o ramas de actividad que debe realizar el Órgano Ejecutivo, las cuales al momento de la aplicación del Decreto N° 3 de 1980, no existían, lo que hace que el acto acusado sea contrario a la norma constitucional citada.

Pues bien, el Pleno al analizar el artículo 62 de la Constitución observa que primordialmente se trata de una norma cuya finalidad es la de asegurar al trabajador la obtención de un salario mínimo acorde que coadyuve a cubrir sus necesidades normales y de su familia, para mejorar su nivel de vida en el orden material, moral y cultural, como también lo señala el artículo 172 del Código de Trabajo.

Como bien apunta el máximo exponente del Ministerio Público en su Vista, no se vislumbra incongruencia alguna entre la Resolución demandada y el artículo 62 de la Constitución ya que la referida resolución ha sido dictada siguiendo los principios que conllevan el asegurar, con su respectivo ajuste, el salario mínimo a que tiene derecho el trabajador, en este caso al trabajador que labora en el área canalera, que como es sabido, se trata de una región con condiciones muy particulares, sobre la cual se realizó un ajuste al salario mínimo tal como lo permite y autoriza el artículo 62 de la Carta Fundamental.

Es de observar por otro lado, que la Resolución impugnada tiene como fundamento el Decreto Ejecutivo N° 3 de 4 de marzo de 1980, Decreto este que ha sido dictado en desarrollo del artículo 172 y otros del Código de Trabajo y que dicen relación con el salario mínimo y la forma en que este derecho se debe hacer efectivo en favor del trabajador. De allí que en todo caso, la confrontación

debería ser de la norma reglamentaria aplicada (Decreto N° 3) con el fin de determinar la legalidad o no de la Resolución impugnada, pero esto, como es sabido, es materia que escapa del ámbito de competencia del Pleno como Tribunal Constitucional.

En cuanto a la violación del artículo 32 de la Constitución que alega el demandante, el Pleno observa que no existe la supuesta infracción de la norma constitucional ya que en el proceso llevado a cabo e iniciado en la Dirección General de Trabajo, la empresa demandada hizo uso de los derechos y trámites legales correspondientes, resultando un fallo favorable al trabajador en ambas instancias, fallo que fue dictado por autoridad competente y conforme a los trámites legales.

En términos generales, considera el recurrente que el acto acusado no expuso razonadamente el examen a un elemento básico probatorio, desconociéndose el mérito que le correspondía, lo cual permitió aplicar en parte el Decreto N° 3 de 4 de marzo de 1980.

A este respecto es importante reiterar lo expuesto tantas veces por esta Corporación en cuanto a que la acción otorgada por el artículo 203, numeral 1, de la Constitución política, pretende la guarda de la integridad de esta Constitución sin entrar, mediante esta acción, a resolver situaciones particulares que en nada afectan el control constitucional, ya que esta acción no puede convertirse en otra instancia del proceso.

Por las razones anteriormente expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la Resolución N° 7-DGT-53-95 de 23 de mayo de 1995, dictada por el Director General de Trabajo.

Cópiese, Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL SEÑOR ART TIK FUNG CONTRA EL ARTÍCULO 24 DEL DECRETO DE GABINETE N° 109 DE 7 DE MAYO DE 1970. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Art Tik Fung, actuando en su propio nombre, en su calidad de Representante Legal de la empresa **Hong Kong Internacional, S. A.** ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad contra el **artículo 24 del Decreto de Gabinete N° 109 del 7 de mayo de 1970**, dentro del escrito interpuesto por el señor Art Tik Fung ante el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá y la Coordinadora de la Comisión de Apelaciones elevó la consulta respectiva.

Se procede entonces a examinar la advertencia de inconstitucionalidad, a fin de verificar si cumple con los requisitos formales exigidos para este tipo de demanda.

A juicio del Pleno, la advertencia de inconstitucionalidad que nos ocupa no cumple con las formalidades contenidas en el artículo 2551 del Código Judicial, según el cual la misma debe cumplir con los requisitos comunes a toda

demanda. En primer lugar, el demandante omite señalar la parte actora, lo que se demanda y los hechos de la demanda, incumpliendo con lo estipulado en la norma antes citada, en concordancia con el artículo 654 del Código Judicial. Por otro lado, el escrito contentivo de la demanda tampoco cumple con los numerales 1 y 2 del artículo 2551 antes mencionado que exigen la transcripción literal de la disposición, norma o acto acusados de inconstitucionales y la indicación de las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas y el concepto de la infracción. Ello es así por cuanto la parte actora, si bien menciona las disposiciones constitucionales que se estiman infringidas conjuntamente con una breve explicación de las infracciones alegadas, no indica el concepto de la infracción.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad presentada por Art Tik Fung contra el artículo 24 del Decreto de Gabinete N° 109 de 7 de mayo de 1970.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.,
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO N° 297 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1997, PROMOVIDA POR EL FISCAL TERCERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, CONTRA EL LICENCIADO SIDNEY SITTÓN URETA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDUARDO ULLOA, **Fiscal Tercero del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá**, formuló ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia advertencia de inconstitucionalidad del **Decreto N° 297 del 22 de diciembre de 1997, expedido por el señor Presidente de la República**, con la participación del señor Ministro de Gobierno y Justicia, por medio del cual se le otorgó indultó a varias personas, entre ellas, al licenciado Sidney Sittón Ureta.

En reiteradas ocasiones el Pleno de la Corte ha sostenido que contra los Decretos del Órgano Ejecutivo mediante los cuales se otorga un indulto no cabe advertencia de inconstitucionalidad, pues, de acuerdo con el numeral 1° del artículo 203 de la Constitución Política, este mecanismo de control constitucional sólo procede contra disposiciones legales o reglamentarias aplicables al caso. En el presente negocio, no cabe duda de que el Decreto impugnado no es una disposición legal o reglamentaria, sino un acto dictado por el Órgano Ejecutivo en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 179 de la Constitución Política. Cabe señalar que, en los fallos del 18 de noviembre de 1996 y 29 de mayo de 1997, mediante los cuales no se admitieron sendas advertencias de inconstitucionalidad promovidas contra el Decreto Ejecutivo N° 476 del 9 de septiembre de 1995 (que otorgaba indultos), el Pleno hizo una distinción entre el Reglamento y un acto administrativo, indicando que, mientras el primero forma parte del ordenamiento jurídico, el segundo, se produce en el seno del ordenamiento jurídico y en cumplimiento de éste.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Pleno debe señalarle al actor que el escrito contentivo de la precitada advertencia adolece de ciertos defectos

formales que harían imposible su admisión. De acuerdo con el artículo 2551 del Código Judicial, los escritos en que se formulan advertencias de inconstitucionalidad no sólo deben cumplir con los requisitos que este mismo precepto enumera, sino también con los requisitos comunes a toda demanda y con los señalados en el artículo 2552 del precitado Código para las demandas de inconstitucionalidad.

En el presente caso, el libelo presentado por el licenciado ULLOA no cumple con algunos de los requisitos que estas normas enumeran, pues, no señala los hechos en que se sustenta la pretensión constitucional, no transcribe el Decreto acusado, ni explica de forma clara y detallada el concepto de la infracción del precepto constitucional que se considera violado.

Ante todas estas circunstancias el Pleno debe inadmitir la aludida advertencia de inconstitucionalidad.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad promovida por el licenciado EDUARDO ULLOA, Fiscal Tercero del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, contra el Decreto N° 297 del 22 de diciembre de 1997, expedido por el señor Presidente de la República con la participación del señor Ministro de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO N° 194 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997, PROMOVIDA DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INSTAURADO POR EL LICENCIADO ADALIDES BATISTA, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR HERNANDO MORALES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO N° 213-DRH, DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1997, EXPEDIDO POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Adalides Batista, en representación del señor **HERNANDO MORALES**, formuló ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia advertencia de inconstitucionalidad del **Decreto N° 194, del 16 de septiembre de 1997, expedido por la Contraloría General de la República**.

Al examinar el escrito contentivo de la precitada advertencia, el Pleno observa que en el mismo se incurre en una serie de defectos formales que hacen imposible su admisión. Conforme ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia, los escritos en que se formulan advertencias de inconstitucionalidad deben cumplir no sólo con los requisitos comunes a toda demanda, sino también con los señalados en los artículos 2551 y 2552 del Código Judicial para las demandas de inconstitucionalidad (Cfr. fallos del 5 de septiembre de 1997 y 19 de enero de 1998).

En el presente caso, el libelo del licenciado Batista presenta los siguientes defectos u omisiones:

1. No se dirige al Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia,

como ordena el artículo 102 del Código Judicial;

2. No se señala los hechos en que se sustenta la pretensión constitucional;

3. No se transcribe el Decreto acusado;

4. No se explica de forma clara y detallada el concepto de la infracción del precepto constitucional que se cita como violado;

5. No se aporta copia autenticada del acto impugnado, ni se indica el número y fecha de la Gaceta Oficial en que fue publicado;

Ante estas circunstancias y, con fundamento en el último párrafo del artículo 2552 del Código Judicial, el Pleno debe inadmitir la aludida advertencia de inconstitucionalidad.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la advertencia de inconstitucionalidad del Decreto N° 194, del 16 de septiembre de 1997, expedido por la Contraloría General de la República, formulada por el licenciado Adalides Batista, en representación del señor HERNANDO MORALES.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO SIDNEY SITTON URETA, CONTRA LOS ARTÍCULOS 2309, 2310, 2311 Y 2313 DEL CÓDIGO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SALOMÓN HOMSANY ABADI Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Sidney Sitton Ureta, apoderado judicial de **Salomón Homsany Abadi**, contra quien se sigue un proceso penal en el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado en perjuicio de **Banco Nacional de Panamá**, formuló ante ese tribunal advertencia de inconstitucionalidad contra los **artículos 2309, 2310, 2312 y 2313 del Código Judicial**, porque a su juicio infringen los artículos 22 y 32 de la Constitución Política de la República y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En los hechos segundo y tercero de su libelo el advirtiente señala, entre otras cosas, que en el presente proceso las disposiciones demandadas adolecen de inconstitucionalidad toda vez que "permiten la continuidad del proceso penal aún cuando el procesado no se encuentre detenido y puesto a órdenes de la autoridad competente permitiendo estas disposiciones el emplazamiento por edicto y el juicio en rebeldía (f. 1)

Más adelante, el letrado expresa "que las disposiciones legales que se han aplicado y están aplicando son violatorias de la Constitución Política de Panamá ..." (f. 2) (Subraya la Corte).

Remitida al Pleno de la Corte Suprema la advertencia por el Señor Juez

Cuarto del Primer Circuito de Panamá, Ramo Penal, ésta fue admitida en Sala Unitaria por el Magistrado Sustanciador, quien expresó en esa ocasión lo siguiente:

> "La Sala observa que las normas cuya inconstitucionalidad se advierte en esta ocasión, ya fueron aplicadas en el proceso correspondiente. Toda vez que el señor Homsany fue emplazado por edicto y declarado reo rebelde, lo que justifique que no se admita esta advertencia, pero no deja de reconocer que serán tomadas en cuenta a la hora de decidir, ya que el Juzgado deberá contestar, antes de dictar sentencia de primera instancia, que el procesado fue notificado del enjuiciamiento o emplazado por edicto en los términos consagrados por las normas acusadas de infringir la Constitución, por lo que deberán ser aplicadas nuevamente en dicho proceso.
>
> Siendo esta la realidad subjudice, no cabe duda que debe admitirse a trámite esta advertencia de inconstitucionalidad. (F.16-17).

La acción constitucional siguió su trámite procesal y correspondió en turno al Señor Procurador General de la Nación, quien al emitir concepto expresó que la presente advertencia de inconstitucionalidad debe declararse no viable porque las disposiciones legales impugnadas ya fueron aplicadas en el proceso correspondiente (f.22-23).

Para decidir considera el Pleno conveniente transcribir el numeral 1 del artículo 203 constitucional y el numeral del artículo 2545 del Código Judicial pertinentes en esta materia:

> "Artículo 203. La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:
>
> 1. La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona.
>
> Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará en curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.
>
> Las partes sólo podrán formular tales advertencias una sola vez por instancia.
>
> "2545. Al pleno de la Corte Suprema de Justicia le corresponderá privativamente conocer y decidir de manera definitiva y en una sola instancia:
>
> ...
> 2. De las consultas que de oficio o por la advertencia de parte interesada, de acuerdo con el artículo 203 de la Constitución eleve ante ella cualquiera autoridad o funcionario que, al impartir justicia en un caso concreto, estime que la disposición o disposiciones aplicables pueden ser inconstitucionales por razones de fondo o de forma; y," ... (Subraya la Corte).

El sentido del texto constitucional y legal es claro, y así lo ha entendido la Corte en innumerables ocasiones, que para que proceda la advertencia de inconstitucionalidad de una o más disposiciones legales o reglamentarias es necesario que no hayan sido todavía aplicadas al caso subjudice, o dicho de otro modo que conserven todavía la potencialidad de su aplicación.

Si ya hubiese sido aplicada no tendría razón de advertirse este mecanismo concreto de control constitucional.

Tampoco procederá la advertencia si las normas legales o reglamentarias advertidas hubiesen sido ya objeto de pronunciamiento por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En el negocio que nos ocupa es necesario entonces comprobar estos extremos para decidir sobre la viabilidad de la presente acción de constitucionalidad.

Al revisar el voluminoso proceso penal seguido a Salomón Homsany Abadi y otros, observa el Pleno lo siguiente:

1. El 27 de octubre de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, previa revocatoria de la resolución judicial de primera instancia, abrió causa criminal contra Salomón Homsany Abadi y otras personas por los delitos de Asociación ilícita para delinquir y peculado doloso en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (f. 10,741-10,770).

2. Al ignorarse el paradero de los encausados, Salomón Homsany Abadi y otros fueron emplazados mediante edicto que se publicó durante tres días (8, 9 y 10 de noviembre de 1995) en un medio de comunicación social de cobertura nacional (diario "Panamá América") (f. 10,800-10,806).

3. El 30 de mayo de 1996, Farida Homsany Abadi, madre de Salomón Homsany Abadi, otorgó poder especial al licenciado Sidney Sitton Ureta para que asumiera la defensa técnica de su hijo dentro del presente proceso penal (f. 11,027, vts.).

Es evidente entonces que las normas impugnadas como inconstitucionales fueron ya aplicadas en el proceso, por lo que debe declararse la no viabilidad de la presente acción de inconstitucionalidad.

En otro orden de ideas, de acuerdo a jurisprudencia de esta Superioridad, esta vía indirecta o incidental de constitucionalidad está reservada exclusivamente para el control de normas legales o reglamentarias que tengan la virtualidad de ser aplicables en la solución de la pretensión procesal de origen, o normas que consagran derechos subjetivos o imponen obligaciones. (Sentencia del Pleno de 30 de diciembre de 1996)

No hacen parte de estas categorías normativas los artículos 2309, 2310, 2311, 2312 y 2313 del Código Judicial que, por su naturaleza adjetiva, conciernen más bien la ritualidad procesal porque regulan etapas procesales, en este caso la constitución de las partes a la fase plenaria del proceso penal.

Estas normas, como las de organización de los tribunales, las que fijan jurisdicción o competencia, las que establecen términos y traslados, las que regulan la conducción del proceso, las de ejecución de sentencias, las favorables al reo y las que no decidan la causa, no son susceptibles de consulta o advertencia de inconstitucionalidad.

Solamente lo son las que virtualmente son aplicables para la decisión de la causa; de otro modo se quebrantaría la previsión constitucional tendiente a evitar la paralización del proceso al reconocerle a los litigantes la potestad de dilatarlo mediante la utilización de esta prerrogativa particular.

Por las anteriores consideraciones, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE, la consulta formulada sobre la inconstitucionalidad de los artículos 2309, 2310, 2311, 2312 y 2313 del Código Judicial, dentro del proceso penal seguido a Salomón Homsany Abadi y otros promovida por el licenciado Sidney Sitton Ureta.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) YANIXSA Y. DE DÍAZ
Secretaria General, Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADO POR ÁLVARO GABRIEL GORMAZ TYPALDOS CONTRA LOS ARTÍCULOS 33, 34 Y 96 DE LA LEY #59 DE 29 DE JULIO DE 1996 POR EL CUAL SE REGLAMENTAN LAS ENTIDADES ASEGURADORAS, ADMINISTRADORAS DE EMPRESAS Y CORREDORES O AJUSTADORES DE SEGUROS Y LA PROFESIÓN DE CORREDOR O PRODUCTOR DE SEGUROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **ÁLVARO GABRIEL GORMAZ TYPALDOS**, actuando en su propio nombre, ha demandado la inconstitucionalidad de los artículos **33, 34, 37 y 96 de la Ley N° 59, de 29 de julio de 1996**, "por la cual se reglamentan las entidades aseguradoras, administradoras de empresas y corredores o ajustadores de seguros; y la profesión o productor de seguros", por haber, en su apreciación, infringido el artículo 40 de la Constitución, referido a las profesiones liberales y su protección constitucional, y el artículo 96 de la misma Ley, por vulnerar, a su juicio, el artículo 43 de la Constitución Política, referente al principio de irretroactividad de las leyes.

Corresponde al Pleno pronunciarse sobre su admisibilidad, para lo que debe confrontar los requisitos que, para la estructuración de los libelos contentivos de demandas de inconstitucionalidad, tiene previsto el artículo 2551, si se adjuntan las copias de los instrumentos legales en referencia en la forma prevista por el artículo 2552 del Estatuto Procesal, y si se ajusta la demanda a la doctrina que, sobre la admisibilidad de demandas de inconstitucionalidad, que integra el principio del bloque de la constitucionalidad, ha sentado este Pleno.

En primer término, se aprecia que la demanda de inconstitucionalidad incumple el artículo 2551, por dos motivos, a saber, no se consignan los hechos que sustenten la pretensión constitucional intentada, en relación con el artículo 654 del Código Judicial; y, además, no ha cumplido el requisito de señalar el concepto de la infracción de los artículos 40 y 43 de la Constitución Política.

Sobre este último aspecto, ha señalado en otras ocasiones en Pleno, en qué forma se satisface este requerimiento procesal. Así, ha conceptuado que para que se entienda cumplido el requisito contenido en el numeral 2° del artículo 2551 del Estatuto Procesal, ha indicado este Pleno (sentencias de 20 de mayo de 1996, de 6 de febrero de 1991 y de 12 de enero de 1994, entre otras) es necesario que se indique, en la demanda que contiene la pretensión de inconstitucionalidad, no solamente la disposición constitucional que estima el actor que ha vulnerado el acto impugnado, sino ha de contener, además, una explicación de la forma, manera o especie de cometerse la violación constitucional denunciada, es decir, en enjuiciamiento lógico jurídico que pueda llevar a conocimiento del Pleno, el alcance y la extensión de la violación constitucional denunciada. No se cumple, naturalmente, mediante alegaciones retóricas o haciendo referencia a aspectos fácticos, sino, como se dijo, en una argumentación lógico-jurídica de la norma impugnada a la luz de los principios que se encuentran en la base de los enunciados jurídicos contenidos en las disposiciones constitucionales.

En igual sentido se pronunció en el fallo de 10 de octubre de 1996, citado por el fallo de 25 de octubre de 1996:

> "Ha dicho el Pleno que, para cumplir con el requisito de expresar el concepto de la infracción, se debe explicar aen forma detallada y

> lógica las razones o motivos en que se fundamentan las infracciones al ordenamiento jurídico constitucional, de modo que se ilustre acerca de las violaciones que se alega. En otras palabras, se requiere que auien advierte la inconstitucionalidad de una norma no sólo enuncie formalmente cual es el concepto de la violación, sino que dé una explicación pormenorizada del mismo, que permita examinar el fondo de la violación que se alega".
>
> En otra ocasión, en el fallo de 25 de octubre de 1996 reiteró:
>
> "Ha dicho el Pleno que, para cumplir con el requisito de expresar el concepto de la infracción, se debe explicar en forma detallada y lógica las razones o motivos en que se fundamentan las infracciones al ordenamiento jurídico. En otras palabras, se requiere que quien advierta la inconstitucionalidad de una norma no sólo enuncie formalmente cuál es el concpto de la violación, sino que dé una explicación pormenorizada del mismo, que permita examinar el fondo de la violación que se alega".

En adición a lo anteriormente señalado, se adjuntan dos folletos contentivos el primero de la Ley cuya inconstitucionalidad parcial se demanda, y también otra publicación del ente regulador de las empresas aseguradoras, reaseguradoras y de corretaje de seguro, que no ha sido objeto de la pretensión constitucional. El Pleno es consciente del contenido del artículo 889 del Código Judicial (si bien con respecto a la ley adjunta, no se indica que sea una publicación oficial), pero estima que el artículo 2552, por ser posterior y especial de estos procesos constitucionales, ha de ser de aplicación preferente, con lo que hubiese bastado adjuntar la Gaceta Oficial en que se cumplió con el requisito constitucional de la promulgación del instrumento legal cuestionado o limitarse a señalar en qué Gaceta Oficial se produjo la mencionada promulgación o, si fuese el caso, las razones por las cuales no pudo obtener la copia autenticada del instrumento legal censurado para que el Tribunal lo requiriese de oficio.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por ÁLVARO GABRIEL GORMAZ TYPALDOS contra los artículos 33, 34, 37 y 96 de la Ley N° 59 de 29 de julio de 1996, por la cual se reglamentan las entidades aseguradoras, administradoras de empresas y corredores o ajustadores de seguros y la profesión de corredor o productor de seguros.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ABILIO ROLANDO RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUCIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 3337 DE 31 DE OCTUBRE DE 1997, DICTADO POR EL JUEZ TERCERO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **ABILIO ROLANDO RODRÍGUEZ BUSTAMANTE** ha solicitado aclaración de la sentencia de 19 de marzo de 1998, dictada por esta Máxima Corporación de Justicia en virtud del Amparo de Garantías Constitucionales presentado contra el Auto N° 3337 de 31 de octubre de 1997.

La referida sentencia fue dictada por el Pleno de la Corte, al conocer en grado de apelación de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado RODRÍGUEZ en representación de LUCIO SANCHEZ, y en la misma se decidió Confirmar la resolución de primera instancia expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia que declaró Sustracción de materia en este caso.

Según se desprende del escrito presentado por el demandante, éste solicita al Tribunal la aclaración de puntos que corresponden a la parte motiva de la sentencia, lo que evidentemente hace improcedente esta petición, conforme a lo previsto en el artículo 986 del Código Judicial, norma que de manera expresa establece lo siguiente:

> "La sentencia no puede revocarse ni reformarse por el Juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse o aclararse, de oficio, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a solicitud de parte hecha dentro del mismo término.
>
> También puede el Juez que dictó una sentencia aclarar las frases obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los términos fijados en la primera parte de este artículo.
>
> Toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en que se haya incurrido en su parte resolutiva, en un error pura y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible y reformable en cualquier tiempo por el Juez respectivo, de oficio o a solicitud de parte, pero sólo en cuanto al error cometido".

A tenor del texto legal precitado, la aclaración de sentencia está dirigida a que el juzgador dilucide frases oscuras o de doble sentido contenidas en la parte resolutiva de la misma; mientras que en el negocio sub-júdice se observa que la petición del apoderado judicial está encaminada a que se ventilen aspectos y expresiones contenidas en la parte motiva, tanto de la sentencia de Amparo expedida por el Juez A-quo como por el Ad-quem.

Esta circunstancia impide darle curso legal a la solicitud de aclaración, particularmente porque la parte resolutiva de la sentencia de 19 de marzo de 1998 es perfectamente clara al disponer:

> "En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes, la resolución de 6 de febrero de 1998 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial".

Por las razones expuestas, lo procedente es rechazar la petición presentada por el licenciado RODRÍGUEZ.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la solicitud de aclaración de la sentencia de 19 de marzo de 1998, presentada por el licenciado ABILIO ROLANDO RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, en su calidad de apoderado judicial de LUCIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO ROLANDO VILLALAZ CONTRA EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL Y LOS DIRECTORES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Rolando Villalaz Guerra, como Presidente y Representante legal del **CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCORRO JURÍDICO DE PANAMÁ**, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, "DENUNCIA CRIMINAL para que se investigara la posible comisión por acción u omisión, del o de los actos delictivos que se hubieran producido desde el mes de Octubre de 1997, cuando la **Policía Nacional** asumió y mantiene el control, tanto del Centro Penitenciario de Coiba como del resto de las cárceles que existen en el país, ya que pudiera haberse incurrido en alguna de las conductas típicas descritas en los Títulos I, capítulos I y II; X, capítulos III y IV; y XI, capítulos IV Y VI, del Libro II del Código Penal."

El letrado fundamentó su denuncia, en los siguientes hechos que a continuación se transcriben.

> "Primero: Que mediante Resuelto N° 264 de 9 de septiembre de 1992, el Ministerio de Gobierno y Justicia estableció que la Dirección Nacional de Corrección es el responsable de la suprema dirección, administración y supervisión de todas las instituciones penales de la República.
>
> Segundo: Que mediante el Resuelto Ministerial N° 264 se reglamentaron las actividades de los Centros Penitenciarios y se definió la obligación legal de atender a los internos de dichos Centros, estableciendose (sic) normas respecto a los derechos y obligaciones de los mismos, las cuales deben ser cumplidas por las autoridades respectivas.
>
> Tercero: Que sin haberse derogado ni modificado el Resuelto N° 264 de 9 de septiembre de 1992,a partir del mes de Octubre de 1997, a través de una medida de hecho, se le confirió al Director de la Policía Nacional, el control de todos los centros penitenciarios del país, desconociendose (sic) así el régimen administrativo y legal existente.
>
> Cuarto: Que desde el mes de Octubre de 1997, a través de diversas denuncias hechas por familiares de los detenidos y de diversas organizaciones de Derechos Humanos, se ha podido conocer que la población penitenciaria en distintos puntos del país, ha sido víctima de vejámenes y de diversas medidas degradantes en su condición de seres humanos, al igual que es evidente el progresivo deterioro y falta de adecuado mantenimiento de las instalaciones físicas donde estan (sic) ubicados dichos Centros y la escasez y baja calidad de la dotación alimenticia que se les suministra es motivo de permanente queja, siendo esporádica la atención en materia de salud que éstos reciben, todo lo cual ha agravado los problemas del sistema penitenciario en todo el país.
>
> Quinto: Que estando las cárceles bajo el control de la Policía Nacional, el pasado 13 de enero de 1998 se conoció a través de los medios de comunicación social,de la fuga de cuatro (4) detenidos que

responden a los nombres de Julio Robledo Moya, Jorge Adalberto Chérigo, Santamaría Sorrilla y Julio César De León,quienes se encontraban en el campamento "El María", ubicado en el Centro Penitenciario de la Isla de Coiba, muy cerca del Campamento de "Playa Blanca", desconociendose (sic) hasta la fecha el paradero de estas personas.

Sexto: Que el 30 de enero de 1998,los medios de comunicación dieron a conocer la noticia de la muerte de cuatro (4) reos en Coiba, un desaparecido y otro herido,siendo el escenario de esos acontecimientos el sector denominado Playa Brava.

Séptimo: Que los días 30 y 31 de enero de 1998 se dio a conocer el nombre de JOSEPH NÚÑEZ como la persona muerta con herida blanca en la Isla de Coiba, indicandose (sic) que cinco (5) internos se habían evadido del Campamento de Río Amarillo.

Octavo: Que las primeras informaciones que se dieron a conocer sobre los internos de Coiba que habían sido decapitados, indicó que éstos iban hacia Playa Hermosa donde fueron atacados y llevados hasta Playa Brava, mencionandose (sic) los nombres de Rafael Córdoba, Walter Gudiño Mosquera, Ricardo Alexander Howard y Francisco Javier Villarreal.

Noveno: Que segun (sic) información que dió a los medios de comunicación,la señora Esther Chaverra de González, madre de Rafael Córdoba, las autoridades de policía de Santiago,en la provincia de Veraguas, no le hicieron caso a una Nota de la Dirección de Corrección, donde se advertía del peligro que representaba enviar a Córdoba a Coiba,ya que éste debía comparecer ante un Juez para asistir a una audiencia el 2 de febrero del presente año.

Décimo: Que el señor Desiderio Hernández, tío de Walter Murillo uno de los reos asesinados,declaró a los medios en su condición de policía jubilado, que "en Coiba los presos están como animales y hay una guerra sin cuartel".

Undécimo: Que posteriormente en los primeros días de febrero los medios de comunicación señalaron que los nombres de los asesinados en Coiba eran Ricardo Howard, Marcos Cobos, Alex Gudiño y Rafael Córdoba.

Duodécimo: Que el Informe de la Procuraduría General de la Nación publicado en los medios de comunicación, el 3 de febrero de 1998 reveló que los nombres de los detenidos que murieron en Coiba eran Rafael Córdoba, Francisco Javier Villarreal, Walter Murillo, Ananías Abdiel Joseph Muñoz y Ricardo Powell.

Décimo Tercero: Que un Informe de Medicina Legal publicado en los medios de comunicación posteriormente, reveló detalles de la forma como murieron Ricardo Powell, Walter Murillo y Rafael Córdoba, quienes se encontraban con vida en los momentos que fueron ultimados con machetes y hachas.

Décimo Cuarto: Que el Jefe del Penal o Centro Penitenciario ubicado en la Isla de Coiba es actualmente el Sub-Comisionado Porfirio Velázquez, quien dentro de la organización jerárquica de esa institución,recibe órdenes del Director General de la Policía Nacional, sr. José Luis Sosa.

Décimo Quinto: Que en las informaciones dadas a los medios de comunicación se dan contradicciones con relación a los nombres de los reos asesinados, ya que inicialmente se mencionó un tal "Joseph Núñez" que despues (sic) se da a conocer que es Ananías Abdiel Joseph Muñoz; igual confusión ocurre con Ricardo Powell, quien primero se mencionó que era Ricardo Howard y en el caso de Walter

Murillo,se dijo primero que se trataba de Walter Gudiño y luego se dió el nombre de Alex Gudiño.

Décimo Sexto: Que de acuerdo a las informaciones que se conocen en la actualidad,el control y el uso de armas,como son los casos de hachas y machetes en los Centros Penitenciarios del país, lo lleva la Policía Nacional,entidad que en cada Centro Penitenciario establece los criterios por los cuales le suministra un arma a un detenido y la forma cómo vigilan que le de un uso correcto.

Décimo Séptimo: Que las versiones que se tienen de la forma como se separan los detenidos no solo en el Centro Penitenciario de Coiba, sino en otras cárceles del pais (sic), revela que no se siguen criterios científicos ni resocializadores, sino que se ubican los mismos en campamentos o galeras, por la banda o pandilla a que pertenecen.

Décimo Octavo: Que mediante Decreto Ejecutivo N° 212 del 13 de septiembre de 1996 se estableció y desarrolló el funcionamiento del Consejo Técnico y las Juntas Técnicas de establecimientos penitenciarios,normativa que se encuentra vigente en estos momentos.

Décimo Noveno: Que a pesar de estar vigente el Decreto Ejecutivo N° 212 de 13 de septiembre de 1996,el contenido del mismo viene siendo ignorado desde el mes de octubre de 1997 cuando se le dió el control de las cárceles a la Policía Nacional, ya que existe el Consejo Técnico de establecimientos penitenciarios,el cual como órgano asesor de la Dirección Nacional de Corrección, debe servir para organizar y orientar la admisión,clasificación y ubicación de los detenidos y sancionados y entre sus funciones tiene, la de supervisar el cumplimiento de todos los programas y actividades penitenciarias.

Vigésimo: Que el Decreto Ejecutivo N° 212 de 13 de septiembre de 1996 antes mencionado, dispone que en cada establecimiento penitenciario del pais (sic) debe haber una Junta Técnica, la cual debe estar integrada por un abogado, un psicólogo y trabajador social, además del jefe de seguridad y el Director del establecimiento, prescripción legal que no se cumple actualmente debido al control absoluto que tiene la Policía Nacional.

Vigésimo Primero: Que en base a las consideraciones anteriores, solicitamos con el debido respeto, que se inicie una investigación, ya que las informaciones que existen,hacen presumir que desde el momento en que la Policía Nacional tomó el control de los Centros Penitenciarios del país, con la anuencia del Ministerio de Gobierno y Justicia, se pueden haber dado por parte de algunos servidores públicos, alguna de las conductas tipificadas en los Títulos I, capítulo I y II, el III, capítulos I y II, el X, capítulos III y IV y el XI, capítulos IV y V, Libro II del Código Penal de la República de Panamá".

Acompañó el denunciante su libelo con copias simples del Resuelto N° 264 de 9 de septiembre de 1992 del Ministerio de Gobierno y Justicia, por el cual se reglamentaron las actividades de los Centros Penitenciarios; del Decreto Ejecutivo N° 212 de 13 de septiembre de 1996, por el que se estableció y desarrolló el funcionamiento del Consejo Técnico y las Juntas Técnicas de establecimientos penitenciarios, se reglamenta el Programa de Permisos de Salidas Laborales, de estudio, especiales y se adoptan otras medidas; y varias ediciones de diversos diarios de circulación nacional donde aparecieron informaciones referentes a los hechos que fundamentan su denuncia. (Panamá-América, Crítica Libre y El Siglo).

Luego, de dársele entrada a la denuncia, el señor Procurado General de la Nación, previo el envío del expediente a esta Colegiatura para su calificación, emitió su Vista N° 4 de 6 de marzo de 1998, en la que señala que, pese a los

documentos presentados por el denunciante, "... este despacho observa que dichos elementos de convicción son inconsistentes e incapaces de comprobar delito alguno, y menos los que el letrado irroga a los denunciados".

Consideró el Jefe del Ministerio Público que la esencia de la denuncia estriba en la pretensión de investigar a los funcionarios mencionados por lo sucedido en la Isla Penal de Coiba, donde fallecieron varios reclusos, y otros resultaron heridos.

También apuntó que los hechos denunciados ya están siendo investigados "exhaustivamente" por parte del Ministerio Público desde que los mismos se suscitaron.

Ello revela -a juicio del Colaborador- la verdadera intención del denunciante, cual es "desacreditar a las autoridades nacionales y poner en entredicho los esfuerzos y la labor ingente que desarrollan en la búsqueda de mecanismo óptimos que permitan establecer, en este caso, un sistema seguro de resocialización".

Consideró también que los argumentos expuestos por el Licdo. Villalaz Guerra pueden configurar delitos contra las autoridades denunciadas, al "denunciar supuestos hechos punibles a sabiendas de que éstos no se han cometido".

De ello deviene el criterio de la Procuraduría General de la Nación, de la necesidad de que se declare "falsa y temeraria la acción del denunciante" para cimentar el respeto a las autoridades, pues todas están expuestas al "acoso" de personas que para buscar notoriedad pública, exponen hechos y situaciones falsas para desprestigiar y entorpecer el trabajo de los funcionarios.

Pues bien, esta Corporación de Justicia debe señalar lo siguiente:

Este Pleno no puede conocer la denuncia presentada, toda vez que, como bien lo apuntó el Procurador General de la Nación, estos hechos ya están siendo investigados.

El denunciante pretende que se inicie una investigación sobre los lamentables hechos acaecidos en la Isla Penal de Coiba a principios de enero pasado, ya que -según él- las informaciones recabadas "hacen presumir que desde el momento en que la Policía Nacional tomó control de los Centros Penitenciarios del pais (sic), con la anuencia del Ministerio de Gobierno y Justicia, se pueden haber dado por parte de algunos servidores públicos, alguna de las conductas tipificadas en ... del Código Penal de la República de Panamá".

Empero, el señor Procurador en su Vista, señala atinadamente que "Sin embargo, el denunciante olvidó que dichos hechos son objeto de investigación exhaustiva, por parte del Ministerio Público desde el mismo momento de su ocurrencia".

En efecto, es del conocimiento público que esa Institución de Instrucción está llevando a cabo una investigación sobre los hechos que fundamentan la denuncia, la cual se encuentra en desarrollo.

Esta aseveración del Funcionario Instructor tiene su fundamento legal en los artículos 1973 y 1974 del Código Judicial; el primero establece lo siguiente:

> "ARTÍCULO 1973. Por un solo hecho se seguirá un solo proceso aunque sean varios los autores o partícipes. En la misma forma se procederá aun cuando los hechos punibles sean varios y exista continuidad o conexión".

La norma es clara al establecer que por un solo hecho se instruirá un solo proceso; por lo tanto, al encontrarse en investigación los hechos señalados por el actor, no tiene cabida iniciar una nueva encuesta, ya que contrariaría el principio establecido en esta norma. Y la misma incluye a varios autores o partícipes, o varios hechos punibles en conexión.

Así es que, de lo que resulte de la investigación en marcha, deberá mantenerse un solo sumario.

En complemento de lo anterior, el artículo 1974 de la misma excerta, señala que:

> "ARTÍCULO 1974. Los procesos que se sigan en contravención a lo dispuesto en los artículos precedentes son nulos y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso, civil y criminalmente".

Esta norma refuerza la anterior, estableciendo la nulidad de los procesos que se aparten de lo regulado en la norma anterior, e incluso funda la responsabilidad de los funcionarios que hayan intervenido en los mismos.

Por lo tanto, no cabe ordenar una nueva investigación por unos hechos que se están investigando actualmente, porque de hacerlo, ese nuevo sumario adolecería de nulidad, y acarrearía sanción para esta Colegiatura; por ello, el denunciante deberá estar atento al desarrollo de la misma, y de ser de su interés, tener una participación activa en las sumarias para coadyuvar a perfeccionar la investigación, en la forma y previo el cumplimiento de los requisitos que la ley exige para ello.

Es el criterio del Pleno, que todos los hechos expuestos en la denuncia que nos ocupa deben ser objeto de investigación por parte del Funcionario Instructor encargado de la misma.

El Procurador General de la Nación solicitó que "se declare falsa y temeraria la acción del denunciante, como medio de salvaguardar el respeto a las autoridades, ..."; también solicitó su archivo, así como un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal.

Concluye esta Corporación de Justicia que lo que cabe es inhibirse de conocer la presente investigación y ordenar el archivo del expediente, toda vez que los hechos denunciados son actualmente objeto de investigación.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE de conocer las presentes sumarias, y REMITE el presente expediente a la Procuraduría General de la Nación, para que lo envíe al Funcionario Instructor que está a cargo de la investigación, al que hace alusión el Procurador General de la Nación en su Vista N° 4 de 6 de marzo de 1998.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. SALVADOR SÁNCHEZ JORQUIERA EN REPRESENTACIÓN DE REFINERÍA PANAMÁ, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA N° PJ-9 DE 29 DE AGOSTO DE 1997 DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 9. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Arias, Fábrega & Fábrega, en su condición de apoderada judicial de REFINERÍA PANAMÁ, S. A., ha presentado solicitud de aclaración de la sentencia proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el 1° de abril de 1998. Dicha resolución concedió parcialmente el amparo de garantías constitucionales interpuesto por **REFINERÍA PANAMÁ, S. A.**, contra la sentencia PJ-9 de 29 de agosto de 1997, proferida por la **Junta de Conciliación y Decisión N° 9**, dentro del proceso laboral instaurado por el señor **JUAN CARLOS ESCAPA** contra la sociedad recurrente en amparo.

La aclaración de la sentencia se solicita "en relación con la base que debe servir para calcular los salarios caídos que deben ser pagados al señor JUAN CARLOS ESCAPA".

El artículo 986 del Código Judicial se refiere a la facultad que tiene el juzgador para aclarar y corregir las resoluciones, en los siguientes términos:

> "ARTÍCULO 986. La sentencia no puede revocarse ni reformarse por el Juez que la pronuncie, en cuanto a lo principal; pero en cuanto a frutos, intereses, daños y perjuicios y costas, puede completarse, modificarse o aclararse, de oficio, dentro de los tres días siguientes a su notificación o a solicitud de parte hecha dentro del mismo.
>
> También puede el Juez que dictó una sentencia aclarar las frases obscuras o de doble sentido, en la parte resolutiva, lo cual puede hacerse dentro de los términos fijados en la primera parte de este artículo.
>
> Toda decisión judicial, sea de la clase que fuere, en que se haya incurrido, en su parte resolutiva, en un error pura y manifiestamente aritmético o de escritura o de cita, es corregible y reformable en cualquier tiempo pero sólo en cuanto al error cometido".

Aun cuando la apoderada judicial de REFINERÍA PANAMÁ, S. A. sostiene que la aclaración se fundamenta en que existe un error aritmético en la parte resolutiva de la sentencia, el texto de la solicitud pone de manifiesto que la misma se refiere a las consideraciones en que se fundamenta la sentencia, por lo que resulta manifiestamente improcedente, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo 986 del Código Judicial.

En consecuencia, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO, por improcedente, el escrito de aclaración de sentencia presentado por la firma forense Arias, Fábrega & Fábrega, en representación de REFINERÍA PANAMÁ, S. A.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE DESACATO DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE HELADOS LA ITALIANA, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA CARTA DE 4 DE FEBRERO DE 1998, EMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CARNAVAL DE PANAMÁ SALSA '98. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En el incidente de desacato interpuesto por la firma Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino, dentro de la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta contra la orden de no hacer contenida en la carta de 4 de febrero de 1998, emitida por el Presidente de la Junta de Carnaval de Panamá Salsa '98, el **Magistrado Juan A. Tejada Mora**, ha solicitado se le separe del conocimiento del presente negocio, en base a la argumentación transcrita a continuación:

> "Soy socio de la firma ICAZA, GONZALES RUIZ Y ALEMAN, la que presta servicios legales permanentes a la Compañía NESTLÉ, S. A., parte interesada en las resultas del negocio, y de quien se recibe una iguala mensual desde hace muchos años.
>
> De esta clase de antiguas relaciones surgen por razones naturales, dudas sobre la imparcialidad del abogado que por circunstancias especiales llega a la magistratura y debe conocer del pleito en que su cliente es parte directamente interesada. Por ello, el artículo 749 numeral 2° del Código Judicial, justamente ha previsto esta situación como causal de impedimento".

El hecho invocado por el Honorable Magistrado Juan A. Tejada Mora, no es causal de impedimento. De conformidad con el artículo 2619 del Código Judicial, norma que es especialmente aplicable en las acciones de amparo de garantías constitucionales, sólo son causales de impedimento del magistrado que conoce de la causa, el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de alguna de las partes o de sus apoderados o su participación en la expedición del acto impugnado.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL, el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Juan A. Tejada Mora, en el incidente de desacato presentado por la firma Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino en representación de HELADOS LA ITALIANA, S. A., dentro de la demanda de amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer contenida en la carta de 4 de febrero de 1998, emitida por el Presidente de la Junta de Carnaval de Panamá Salsa '98.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE HELADOS LA ITALIANA, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA CARTA DE 4 DE FEBRERO DE 1998, EMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CARNAVAL DE PANAMÁ SALSA '98. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro de la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino, en representación de HELADOS LA ITALIANA, S. A., contra la orden de no hacer contenida en la carta de 4 de febrero de 1998, emitida por el Presidente de la Junta de Carnaval de Panamá Salsa '98, el **Magistrado Juan A. Tejada Mora**, ha solicitado se le separe del

conocimiento del presente negocio, en base a la argumentación transcrita a continuación:

> "Soy socio de la firma ICAZA, GONZALES RUIZ Y ALEMAN, la que presta servicios legales permanentes a la Compañía NESTLÉ, S. A., parte interesada en las resultas del negocio, y de quien se recibe una iguala mensual desde hace muchos años.
>
> De esta clase de antiguas relaciones surgen por razones naturales, dudas sobre la imparcialidad del abogado que por circunstancias especiales llega a la magistratura y debe conocer del pleito en que su cliente es parte directamente interesada. Por ello, el artículo 749 numeral 2° del Código Judicial, justamente ha previsto esta situación como causal de impedimento".

El hecho invocado por el Honorable Magistrado Juan A. Tejada Mora, no es causal de impedimento. De conformidad con el artículo 2619 del Código Judicial, norma que es especialmente aplicable en las acciones de amparo de garantías constitucionales, sólo son causales de impedimento del magistrado que conoce de la causa, el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de alguna de las partes o de sus apoderados o su participación en la expedición del acto impugnado.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL, el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Juan A. Tejada Mora, en la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino en representación de HELADOS LA ITALIANA, S. A., contra la orden de no hacer contenida en la carta de 4 de febrero de 1998, emitida por el Presidente de la Junta de Carnaval de Panamá Salsa '98.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA FORMULADA POR EL DOCTOR JOSÉ RIGOBERTO ACEVEDO C., JUEZ DÉCIMO TERCERO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, CONTRA LOS MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El doctor **RIGOBERTO ACEVEDO C.**, en su propio nombre y representación ha interpuesto, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, queja contra los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, **WILFREDO SÁENZ; JOAQUÍN ORTEGA; ANDRÉS ALMENDRAL; ELVIA BATISTA y MIRTA VANEGAS DE PAZMIÑO.**

Una atenta lectura del escrito contentivo de la queja, ilustra al Pleno que la queja formulada tiene su génesis en la evaluación realizada al doctor RIGOBERTO ACEVEDO C., por parte de los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, durante el período probatorio en que se había desempeñado como JUEZ DÉCIMO TERCERO DE CIRCUITO DE LO PENAL, para poder ingresar a la Carrera Judicial.

Advierte, además el Pleno, que el quejoso argumenta que se ha violentado

el artículo 199 del Código Judicial, debido a que se le evaluó en la estadística de morosidad en una escala del 1 al 10 con el puntaje de 4, cuando no existe tal morosidad. Indica a continuación (hecho segundo), que se ha violentado el artículo 200, numeral 1 de la citada excerta legal, por comisión, por parte de los Magistrados WILFREDO SÁENZ y JOAQUÍN ORTEGA, al actuar los mismos con dolo y el resto de los magistrados por omisión. Seguidamente indica que el dolo se observa en toda la evaluación que se le hiciera, poniendo como ejemplo la sección de conocimiento de la cual señala que es profesor de Maestría en materia penal, siendo evaluado con 4 puntos. Otro renglón que señala es el de "cuido y seguridad de los útiles de oficina", en el cual se le evaluó con un puntaje de 2, sin que se justificara la pérdida, deterioro o malversación del equipo de oficina.

Por último aprecia el Pleno que el quejoso arguye que no se le ha dado una valoración justa e imparcial, considerando que existe un "revanchismo personal", con motivo de una queja fundada que había formulado contra los Magistrados del Segundo Tribunal y de la cual desistiera "en aras de no erosionar el sistema judicial" (f. 2).

Corresponde al Pleno, en la fase procedimental en la que se encuentra, determinar si la queja ha de ser admitida, para lo que resultará necesario que se confronte el escrito que la contiene con los requisitos que exige el artículo 287 del Código Judicial, y, con carácter supletorio, los artículos 242 y 243 del mismo Código, así como con la doctrina que ha sentado este Pleno sobre la materia.

En primer término aprecia el Pleno que el proponente de la queja no ha cumplido con los requisitos formales exigidos, toda vez que, no presenta la prueba de la existencia del ilícito que denuncia ("con los datos que, con el carácter de ciertos, hubieren llegado a su conocimiento") ni tampoco la queja reviste la forma de una exposición planteada en la forma de una declaración jurada ("por queja bajo juramento"), como exige el artículo 287 del Código Judicial.

Observa en efecto el Pleno, que sobre los puntos a que hace referencia el quejoso, en los párrafos que anteceden, no se ha presentado prueba preconstituída de la falta o del ilícito denunciado, o siquiera un principio de prueba del hecho denunciado que, a juicio del acusador, es violatorio de la ley, contra servidores judiciales que son integrantes del SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, como la doctrina de este Pleno lo ha exigido en sentencias anteriores, entre otras, las que se mencionarán mas adelante, principio de prueba o prueba preconstituída que se hacía particularmente necesaria, tomando en cuenta la gravísima falta que le imputa a los miembros del SEGUNDO TRIBUNAL DE JUSTICIA, DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, que ha sido ampliamente debatida por el proponente de esta queja por los medios de comunicación social, mecanismo naturalmente inidóneo para promover las correcciones disciplinarias de Jueces o Magistrados, por actos que, en el ejercicio de sus funciones, se encuentren tipificados en los artículos 199 y 200 del Código Judicial, y que incide en el principio de independencia judicial de jueces y magistrados por las decisiones que emitan, y que sólo pueden ser revisadas por los superiores jerárquicos a través de la utilización de los medios de impugnación establecidos en el ordenamiento jurídico-procesal, manifestación ésta del principio de independencia judicial antes mencionado, que este Pleno respalda y respaldará en todo momento, sin excepciones.

El que este problema haya merecido la atención de la comunidad convierte en muy lamentable, por lo tanto, la circunstancia que no hayan sido aportadas las pruebas que acreditasen la verdad de los hechos en que se ha fundamentado esta acción.

Así, este Pleno ha sentado lo que se transcribe:

> "... En reiteradas ocasiones ha indicado la Corte que para poder admitir cualquier queja formulada contra un funcionario judicial, es indispensable acompañar con ella un principio de prueba. En el caso en estudio, el quejoso relata una serie de incidentes que dice le han ocurrido con la Juez, respecto a la celebración de la audiencia

en un caso de esa jurisdicción, en donde él es parte. Sin embargo, no aporta ninguna prueba referente a la situación que plantea. Ello sería suficiente para desestimar la queja ..." (Sentencia de 29 de junio de 1994, Reg. Jud. Junio, 1994, pág. 72).

En igual sentido se han pronunciado las sentencias de 29 de diciembre de 1995, y de 18 de junio de 1996, cuyos ejemplos podrían incrementarse, pero que, a efectos de señalar cual ha sido la posición de este Pleno, bastan las citadas y parcialmente reproducidas.

Se observa, por lo tanto, que en esta queja no concurren los presupuestos y requisitos básicos que la ley establece para proceder a enjuiciar la conducta del los servidores judiciales denunciados, razón por la que no resulta viable proceder con su tramitación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la queja disciplinaria propuesta por el Doctor JOSÉ RIGOBERTO ACEVEDO C. contra los Magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LCDO. FRANCISCO ESPINOSA CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE ABRAHAM DAVID MIZRACHI, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 20 DE FEBRERO DE 1998, PROFERIDO POR LOS MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, ha presentado escrito, mediante el cual solicita que se le expidan copias autenticadas del recurso de amparo de garantías constitucionales propuesto por **ABRAHAM DAVID MIZRACHI**, contra la orden de hacer contenida en el auto de 20 de febrero de 1998, proferida por el **Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá**.

Observa el Suscrito que la resolución contra la cual se presentó el amparo de garantías constitucionales fue dictada dentro de proceso instruido con motivo de la acusación particular promovida por el licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, en nombre y representación de RUBÉN LEVY contra ABRAHAM DAVID MIZRACHI, por los delitos de falsificación documentaria y usurpación de funciones públicas.

Por lo tanto, si bien el licenciado Carrillo Gomila no es parte en la acción constitucional cuya copias solicita, estima el Suscrito que se trata de una solicitud conducente, con fundamento en el artículo 490, numeral 7°, del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Ponente, en Sala Unitaria, ORDENA que las copias descritas en líneas anteriores, sean compulsadas por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, por gestión directa y a costas del solicitante.

Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA DE DESACATO PRESENTADA POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Rogelio Cruz, en representación de **JOSÉ CASTRILLÓN HENAO**, ha promovido querella contra el **Director General de la Policía Nacional** dentro del proceso penal que se le sigue en el Juzgado Décimoquinto de Circuito por delito contra la salud pública.

El querellante al exponer los hechos en los cuales fundamenta su querella, manifiesta que la Resolución de 12 de febrero de 1998, de la señora Juez Décimoquinta de Circuito, ordenó el traslado del detenido JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, al Hospital Santo Tomás; y que el Director de la Policía Nacional para inhibir los efectos y en consecuencia el cumplimiento del Auto N° 21 de 12 de febrero de 1998, remitió la Nota N° DGPN-046-98 al respectivo Tribunal, la cual expresa que el día 23 de marzo de 1998 llamaría al Hospital para ver cuando podía llevarse a cabo el traslado ordenado. Agrega que la orden dictada no tiene plazo de cumplimiento por lo que el Director de la Policía Nacional debió cumplirla inmediatamente.

En este proceso el querellante acusa al Director de la Policía Nacional de incumplimiento respecto de la orden dictada por el Tribunal de la causa. Al respecto, cabe observar que nuestro ordenamiento jurídico le otorga facultades disciplinarias a los Jueces cuando en el artículo 202 del Código Judicial prevé:

> "Artículo 202. Los Magistrados y Jueces tendrán las siguientes facultades disciplinarias:
>
> 1. Sancionar con multa de diez balboas (B/.10.00) a cincuenta balboas (B/.50.00) a sus subalternos, a los demás empleados públicos y a los particulares que no cumplan o demoren sin causa justificada, las órdenes que dichas autoridades les impartan en ejercicio de sus funciones e imponer las demás multas que autoriza este Código ..."

Aunado a lo anterior, el desacato ante los Tribunales es regulado por el artículo 1956 del Código Judicial, que en lo pertinente expresa:

> "Artículo 1956. En materia civil son culpables de desacato:
>
> ...
> 9. En general, los que durante el curso de un proceso o de cualquier actuación judicial o después de terminados, ejecuten hechos que contravengan directamente lo ordenado en resolución judicial ejecutoriada; y los que habiendo recibido orden de hacer cosa o de ejecutar algún hecho, rehusen sin causa legal obedecer al Juez".

Las disposiciones transcritas otorgan claramente a los Jueces facultades para sancionar disciplinariamente a todo servidor público, que incumpla las órdenes impuestas dentro de un proceso.

El presente negocio penal se rige por las normas antes citadas, según lo normado en los artículos 1971 y 2285 de la excerta legal in comento, que

establecen la supletoriedad de las normas civiles en los procesos penales y en los conflictos de competencia que carezcan de regulación expresa. Siendo ésto así, la Juez Décimoquinta de Circuito es la autoridad competente para resolver la querella de desacato promovida contra el Director de la Policía Nacional, a pesar de que éste es un funcionario con mando y jurisdicción en todo el territorio nacional.

En virtud de lo estipulado en el artículo 704 del Código Judicial, se procede a remitir la petición formulada de declarar en desacato al Director de la Policía Nacional al Tribunal de la causa, quien no podrá declararse incompetente a tenor de lo preceptuado en el artículo 705 de la mismo texto legal.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se INHIBE de conocer el presente negocio y DECLINA en el Juzgado Décimoquinto de Circuito el conocimiento de la querella promovida por el licenciado Rogelio Cruz, en representación de JOSÉ CASTRILLÓN HENAO y contra el Director de la Policía Nacional.

Notifíquese y Remítase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DESACATO INTERPUESTO POR LA FIRMA FÁBREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO DENTRO DEL AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR HELADOS LA ITALIANA, S. A. CONTRA EL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO DEL COMUNICADO PROFERIDO POR LA JUNTA DEL CARNAVAL PANAMÁ SALSA 98. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En el incidente de desacato interpuesto por la firma Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino, dentro de la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta contra la orden de no hacer contenida en la carta de 4 de febrero de 1998, emitida por el Presidente de la Junta de Carnaval de Panamá Salsa '98, el **Magistrado Edgardo Molino Mola**, ha solicitado se le separe del conocimiento del presente negocio, en base a la argumentación transcrita a continuación:

> "El Licenciado EDUARDO MOLINO MADURO, quien funge como socio de la firma promotora del amparo que nos ocupa, es mi sobrino, por lo que se encuentra en relación a mi persona en el tercer grado de consanguinidad, circunstancia prevista en el artículo 2619 del Código Judicial como causal de impedimento".

El hecho invocado por el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola, no es causal de impedimento. De conformidad con el artículo 2619 del Código Judicial, norma que es especialmente aplicable en las acciones de amparo de garantías constitucionales, sólo son causales de impedimento del magistrado que conoce de la causa, el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de alguna de las partes o de sus apoderados o su participación en la expedición del acto impugnado.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL, el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola, en el

incidente de desacato presentado por la firma Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino en representación de HELADOS LA ITALIANA, S. A., dentro de la demanda de amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer contenida en la carta de 4 de febrero de 1998, emitida por el Presidente de la Junta de Carnaval de Panamá Salsa '98.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR FABREGA, BARSALLO, MOLINO Y MULINO, EN REPRESENTACIÓN DE HELADOS LA ITALIANA, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA CARTA DE 4 DE FEBRERO DE 1998, EMITIDA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CARNAVAL DE PANAMÁ SALSA 98. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro de la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la firma Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino, en representación de HELADOS LA ITALIANA, S. A., contra la orden de no hacer contenida en la carta de 4 de febrero de 1998, emitida por el Presidente de la Junta de Carnaval de Panamá Salsa '98, el **Magistrado Edgardo Molino Mola**, ha solicitado se le separe del conocimiento del presente negocio, en base a la argumentación transcrita a continuación:

> "El Licenciado EDUARDO MOLINO MADURO, quien funge como socio de la firma promotora del amparo que nos ocupa, es mi sobrino, por lo que se encuentra en relación a mi persona en el tercer grado de consanguinidad, circunstancia prevista en el artículo 2619 del Código Judicial como causal de impedimento".

El hecho invocado por el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola, no es causal de impedimento. De conformidad con el artículo 2619 del Código Judicial, norma que es especialmente aplicable en las acciones de amparo de garantías constitucionales, sólo son causales de impedimento del magistrado que conoce de la causa, el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de alguna de las partes o de sus apoderados o su participación en la expedición del acto impugnado.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL, el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola, en la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por Fábrega, Barsallo, Molino y Mulino en representación de HELADOS LA ITALIANA, S. A., contra la orden de no hacer contenida en la carta de 4 de febrero de 1998, emitida por el Presidente de la Junta de Carnaval de Panamá Salsa '98.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALFONSO CRUZ KAY CONTRA LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTINUEVE, (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Durante el trámite de lectura de la acción de Habeas Corpus interpuesta por CARLOS ALFONSO CRUZ KAY en su propio nombre, contra la Sala Segunda de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, a cuyas órdenes está detenido actualmente, en virtud de recurso de casación interpuesto en su favor, contra la sentencia de 31 de diciembre de 1996 emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que, al reformar el fallo del Juez Décimo Tercero de Circuito Penal de Panamá, mantuvo la condena de 4 años de prisión, pero como reo en calidad de cómplice secundario, del delito de Tráfico Internacional de Drogas, el **Magistrado Humberto Collado** se ha manifestado impedido para conocer el presente Habeas Corpus.

A continuación, la explicación del Magistrado Collado:

> "Aún cuando no expedí la orden de detención que motiva el presente habeas corpus ni encontrarme dentro de los grados de consanguinidad o de afinidad a los que se refiere el artículo 2601 del Código Judicial, consta en esta acción constitucional que me correspondió, en mi caráctaer de Magistrado Sustanciador del recurso de casación interpuesto en el proceso al que se refiere esta demanda constitucional, contestar el habeas corpus propuesto dirigido contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. (Ver foja 6).
>
> En esas condiciones, dadas las circunstancias que expreso, estimo prudente formular esta manifestación de impedimento para conocer de la presente acción constitucional".

Considera el Pleno que la manifestación de impedimento está debidamente acreditada, ya que la norma citada por el Magistrado Collado reconoce situación similar la cual podría hacerse extensiva a la situación por él invocada para declararse impedido; la norma reza de la siguiente manera:

> "ARTÍCULO 2601. En los negocios de Habeas Corpus no podrán promoverse incidentes de ninguna clase. Tampoco procede ninguna recusación y los jueces y magistrados solo deben manifestarse impedidos cuando sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de algunas de las partes; o cuando hubiersen expedido la orden o conocido del proceso de primera instancia. ..."

Como la situación expuesta por el Magistrado Collado se adecúa extensivamente a la norma por él invocada, considera este Pleno que debe declarar legal el impedimento formulado.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento formulado por el Magistrado Huberto Collado; en consecuencia, llama al Suplente que corresponda, para que conozca el caso.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) GRACIELA J. DIXON C. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

MAYO 1998

ACLARACIÓN DE SENTENCIA

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) Y AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) LE SIGUE A AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RUBÉN ELÍAS RODRÍGUEZ AVILA en su condición de apoderado especial de **AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A.**, parte demandada en el proceso instaurado por **CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL**, ha presentado escrito de solicitud de corrección y aclaración de la sentencia de 7 de mayo de 1998, dictada por esta Sala de la Corte.

En primer lugar, se solicita la corrección de la sentencia en cuanto a las costas.

Sobre el particular se alega que esta Corporación CASÓ el fallo del Primer Tribunal Superior de Justicia y, en su lugar, CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia de 31 de enero de 1996, dictada por el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá (visible a fojas 112), que resolvió:

> "1° Condenar a la demandada al pago de B/.25,000.00 más los intereses pactados al 9% anual por mora.
>
> 2° Condenar al pago de costas por B/.5,000.00".

A juicio de la Sala, al solicitante le asiste razón sobre este punto, pues, en efecto, de conformidad con lo normado por el artículo 1063 del Código Judicial en procesos como el presente, donde actúa como parte "el Estado, los municipios, la entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas", no se condenará en costas a ninguna de las partes.

En consecuencia, esta Corporación incurrió en el error de mantener la condena en costas impuesta por el a-quo, al actuar como tribunal de instancia luego de casar el fallo del ad-quem, por lo que ha de proceder a reformar la parte pertinente de la aludida sentencia.

Como segundo aspecto se pide que se aclare la razón por la cual se dejaron de resolver las excepciones de "Nulidad del contrato por falta de consentimiento" y "Nulidad y/o falsedad de la obligación por falta de objeto", pues en la sentencia de primera instancia infirmada por la Corte se pretermite el cumplimiento de esa exigencia legal.

En este punto la Sala debe reiterar que la aclaración, modificación o complementación de sentencia no procede en cuanto a lo principal, sino en cuanto a los intereses, frutos, daños y perjuicios y costas. Igualmente es corregible o reformable su parte resolutiva, en cualquier tiempo, respecto a errores aritméticos de escritura o de cita (arts. 986 y 987 del C. J.).

La aclaración que finalmente solicita el demandado no se enmarca en los supuestos establecidos por la ley, que limitan la posible corrección o complementación del fallo a puntos muy precisos de la parte resolutiva. Sin embargo, la Sala procede a transcribir parte del fallo proferido (que consta de fojas 281 a 289) donde se hizo referencia a las excepciones que se dicen no resueltas. Veamos:

> "... Un examen detenido del informe pericial no revela, como pretende el casacionista, que el contrato haya carecido de objeto y, por ende, de uno de los requisitos esenciales, en cuya ausencia se produce la nulidad absoluta del contrato. Lo que informan los peritos en esa diligencia es algo diferente. El peritaje versó sobre el valor económico y la utilidad asignados por ellos a la cosa dada

> en venta a través del contrato, que no es una materia asimilable a la supuesta carencia de objeto o a la inexistencia absoluta de éste dentro del contrato". (Fs. 283).

En cuanto al alegado vicio de falta de consentimiento se dejó dicho en la sentencia:

> "... Lo sostenido por el recurrente queda al nivel de una mera interpretación subjetiva elaborada por la parte demandada, la cual, fuera de acomodar a sus intereses, no es realmente comprobable en autos, ya sea que se analice el alegato de conclusión, ya sea que, los testimonios rendidos por los señores ROBERTO EDUARDO CORDOBES CARDOZE, JOSÉ AGUSTÍN ARANGO Y GENARINO ROSAS, con cuyas declaraciones infructuosamente, en la primera y en la segunda instancia del proceso, trató la parte demandada de demostrar el vicio de nulidad del cual se ha acusado al contrato". (Fs. 286).

De lo expuesto se infiere que no es viable reformar o enmendar la sentencia en cuanto al tema de la excepciones propuestas en el proceso, mas sí procede su modificación respecto a las costas impuestas erróneamente.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACLARA la parte resolutiva de la sentencia de 7 de mayo de 1998, dictada por esta Corporación, dentro del proceso ordinario que CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) le sigue a AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A., que quedará así: CASA la sentencia de fecha 30 de enero de 1997, dictada por el Primer Tribunal Superior y en su lugar REFORMA la sentencia de primera instancia dictada el 31 de enero de 1996, por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de NO CONDENAR en COSTAS al demandado, por la calidad de una de las partes, y la CONFIRMA en todo lo demás.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL RECURRE EN CASACIÓN EN LA ACCIÓN DE SECUESTRO QUE LE SIGUE A BERASVAS, S. A. Y ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ DOMINGO FAJARDO, en representación de **BERASVAS, S. A. y ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI**, solicita aclaración de sentencia dictada el 27 de abril de 1998, por esta Corporación, dentro de la acción de secuestro promovida por el **BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.**

En el respectivo escrito se establece lo siguiente:

> "...
> La presente solicitud de aclaración es en virtud, de que al confirmarse el auto 377 dictado por el Juez Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, de fecha 7 de febrero de 1996, no se establece o manifiesta si es el Banco Hipotecario Nacional o el investido ciudadano Plutarco Antonio Castillo Pérez, quien sufrague los perjuicios que han ocasionado con la medida cautelar de secuestro vigente desde el 7 de febrero de 1996, por la suma B/.4,311.793.60; en el caso de que sean vencidos en el proceso

principal y se puedan resarcir los daños y perjuicios como lo señala el numeral 6 del artículo 521 del Código Judicial como finalidad de la caución exigida por el mismo, que por calidad de las partes su Honorable despacho a examinado en la resolución que se pide aclarar.

La presente solicitud tiene como objeto darle seguridad a mis mandantes dentro del presente proceso, a fin de saber hacia donde enrumbar en su momento oportuno las acciones que sean necesarias. ..." (Fs. 120).

La Corte, luego de analizar el escrito antes citado, considera que no procede la aclaración toda vez que lo que pretende el secuestrado que se aclare es una situación relativa a un suceso futuro e incierto, que consiste en que se señale contra quién se pudiera interponer una demanda por daños y perjuicios derivados del secuestro, en caso de que el proceso principal le sea favorable al solicitante.

Como ya lo tiene ilustrado la Sala de Casación Civil, los artículos 986 y 987 del Código Judicial señalan los casos en que puede complementarse, modificarse o aclararse una sentencia y ninguno de ellos, ciertamente, autoriza a aclarar la decisión de esta Sala en cuanto a lo señalado por el apoderado de la parte secuestrada.

Por las razones expuestas, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la aclaración solicitada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ. A. TROYANO (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIONES

APELACIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. ELISEO NAVARRO CONTRA EL AUTO DEL 17 DE JULIO DE 1996, PROFERIDO POR EL REGISTRO PÚBLICO, POR LA CUAL SE NIEGA LA INSCRIPCIÓN DEL ASIENTO 7138 TOMO 247 DEL DIARIO POR LA CUAL SE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2503 DEL 3 DE MAYO DE 1996, DE LA NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, POR LA CUAL LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN CONDOMINIOS CORONADO (APRUCC) Y LA EMPRESA BIENES Y RAÍCES QUIJANO, S. A. CELEBRAN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA ASOCIACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado ELISEO NAVARRO interpuso recurso de apelación contra auto proferido por la **Dirección General del Registro Público**, el 17 de julio de 1996, mediante el cual se negó la inscripción de la Escritura Pública N° 2503 de 3 de mayo de 1996 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá, por la cual se protocoliza "CONTRATO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PREDIOS DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACIÓN CONDOMINIOS DE CORONADO", de fecha 26 de abril de 1996.

De acuerdo con lo que establece el numeral 2 del artículo 94 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Civil conocer de las apelaciones contra las resoluciones dictadas por el Registro Público, por lo que se procede a resolver el presente negocio, previas las siguientes consideraciones.

El auto impugnado es del tenor siguiente:

> "El contenido de este documento consiste en un Contrato Privado entre la asociación de propietarios de la Urbanización Condominios Coronado y la empresa Raíces (sic) Quijano, S. A., para la administración de los predios de la propiedad de la Asociación el cual no es materia de inscripción.
>
> Por los motivos expuestos se NIEGA su inscripción. Fundamento Legal: Artículo 1764 y 1795 del Código Civil y artículo 47 del Decreto 9 de 1920". (F. 8).

Por su parte, el recurrente sostiene que el documento cuya inscripción se solicita consiste en un contrato de administración, específicamente un mandato mercantil, que afecta tanto bienes inmuebles como de otra naturaleza, por lo que considera que es susceptible de inscripción en el Registro Público, en atención a lo dispuesto en el Código de Comercio.

Como consecuencia de esta negativa, el recurrente considera que el Registrador violó por comisión los artículos 47 del Decreto N° 9 de 1920, 1764 y 1795 del Código Civil y por omisión el numeral 7 del artículo 57 del Código de Comercio.

La lectura del documento cuya inscripción fue negada por el Registro Público, pone de manifiesto que se trata de un contrato para la administración de los predios de la Asociación de Propietarios de la Urbanización Condominios Coronado, celebrado entre esta asociación y la sociedad Bienes Raíces Quijano, S. A. En ese documento se señala el término de duración del contrato, se describen cuáles son las facultades que se le otorgan a la compañía administradora y la suma de dinero que la Asociación se compromete a pagarle mensualmente a la administradora por sus servicios.

A pesar de que el recurrente alega que se trata de un mandato mercantil, porque es remunerado y una de las partes es una sociedad anónima, la Sala estima que le asiste razón al Registrador cuando afirma que se trata de un contrato privado, es decir, de un mandato civil. Ello se desprende de la naturaleza de las facultades que se le otorgan a la empresa Bienes Raíces Quijano, S. A., descritas anteriormente, las cuales se refieren a actos de mera administración, que corresponden a la definición de esta figura en el Código Civil.

En cuanto al hecho de que se trata de un mandato remunerado y que, consecuentemente, esto lo convierte en mercantil, el artículo 1402 del Código Civil señala que el mandato se supone gratuito, a falta de pacto en contrario, pero, "si el mandatario tiene por ocupación el desempeño de servicios de la especie a que se refiere el mandato, se presume la obligación de retribuirlo", de lo cual se colige que la retribución no es una característica exclusiva del mandato mercantil.

Ahora bien, en cuanto al punto de que la administradora es una sociedad anónima y que por ello los actos que realiza en nombre de la Asociación son mercantiles, el numeral 22 del artículo 2 del Código de Comercio señala que serán considerados actos de comercio todos los que se refieren al tráfico mercantil, reputándose como tales, "las sociedades y asociaciones en participación cuando tienen por objeto una operación comercial", de donde se desprende que la naturaleza de los actos que realiza es la que determina la clase de contrato de que se trata.

El Doctor DULIO ARROYO CAMACHO en su obra "Contratos Civiles" (Tomo II, Editorial Universitaria, Panamá, 1974, págs. 210-211) corrobora lo anteriormente expuesto, cuando se refiere a la diferencia entre el mandato civil y el mandato mercantil, en los siguientes términos:

> "Para clasificar el mandato en civil o mercantil nuestra legislación atiende al objeto del mismo, ya que el art. 2° ord. 8° del C. de comercio dice que son actos de comercio el mandato en general y la comisión cuando tiene por objeto una operación comercial . ...
>
> El mandato es civil cuando tiene por objeto un acto exclusivamente

civil, aún cuando el mandatario sea comerciante.

> Resulta así que la diferencia entre el mandato civil y el mercantil no radica en nuestro Derecho: a) en la gratuidad, puesto que ambos pueden ser remunerados; b) en la actividad profesional del mandante y el mandatario, pues éstos pueden ser o no comerciantes; c) ni en la representación, ya que ambos son naturalmente representativos, y, por tanto, puede el mandatario actuar en representación del mandante o en su propio nombre (art. 1408 del C. C.) incluso el comisionista (art. 643 del C. de comercio). La diferencia hay que buscarla únicamente en el objeto, en la finalidad del mandato, que será mercantil cuando tenga por objeto la realización de una o varias operaciones comerciales, y civil, cuando su finalidad sea la realización de un acto civil".

Por último, es preciso señalar que el artículo 1776 del Código Civil contiene una lista taxativa de los documentos que se inscribirán en la sección de personas del Registro Público, entre los cuales se encuentran los poderes generales, los poderes especiales cuando confieran facultad para celebrar algún contrato sujeto a la formalidad del Registro, a no ser que se inserte el poder especial en la escritura que otorgue el mandatario y los poderes generales para pleitos; categorías a las cuales no corresponde el contrato de administración que nos ocupa.

Consecuentemente, la Sala debe confirmar el auto impugnado, porque se ajusta a derecho.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto proferido por la Dirección General del Registro Público, 17 de julio de 1996, por medio del cual se niega la inscripción de la Escritura Pública N° 2503 de 3 de mayo de 1996 de la Notaría Novena del Circuito de Panamá, por la cual la Asociación de Propietarios de la Urbanización Condominios Coronado y la empresa Bienes Raíces Quijano, S. A., celebran contrato de administración sobre los predios de dicha asociación.

Cópiese, Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1996 DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO, RELACIONADO CON EL ASIENTO DE INSCRIPCIÓN NÚMERO 3312 DEL TOMO 251 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO presentó recurso de apelación contra el auto proferido por la **Dirección General del Registro Público** el 12 de diciembre de 1996, por medio del cual se niega la inscripción de la Escritura Pública N° 7955 de 8 de noviembre de 1996, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, mediante la cual el recurrente, actuando como Apoderado General del señor **JERRY LEE HARVEY**, deja sin efecto una revocatoria y revoca un poder general.

La resolución apelada expresa lo siguiente:

> "REGISTRO PÚBLICO: Panamá, doce de diciembre de mil novecientos noventa y seis. Asiento 3312 Tomo 251.

Al presente documento se le hace la siguiente observación:

Se trata de la Escritura Pública #7955 de 8 de noviembre de 1996, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, por la cual el Licenciado Omar Elías Solano Aparicio, Apoderado General del señor Jerry Lee Harvey deja sin efecto una revocatoria y revoca un Poder General.

Pero es el caso que por medio del Asiento 8454 del Tomo 250 del Diario, ingresa la Escritura Pública #7891 de 18 de octubre de 1996, de la Notaría Duodécima de Panamá, por la cual el señor Jerry Lee Harvey revoca cualquier y todos los poderes al señor Omar Elías Solano Aparicio y por Asiento 9144 del Tomo 251 del Diario, ingresa la Escritura Pública #8788 de 27 de noviembre de 1996 de la Notaría Duodécima por la cual se protocoliza una adición a la Escritura 7891 otorgada en la Notaría Duodécima el 18 de octubre de 1996. Ambos Asientos el 8454 del Tomo 250 y el 9144 Tomo 251 fueron inscritos a la Ficha C-8376, C-7512 y C-7163 al Rollo 3427, Imágenes 2, 14 y 26 de la Sección de Micropelículas (Común) el día 3 de diciembre de 1996. Por tal razón el Poder otorgado al señor Omar Elías Solano Aparicio, quedó revocado y por tal motivo se NIEGA la inscripción del Asiento 3312 del Tomo 251 arriba citado". (Fs. 3 vta. y 4).

Por su parte, el recurrente sostiene que la Dirección General del Registro Público actuó en forma ilegal, ya que al momento en que ingresó el documento al cual se le negó su inscripción, "no se había inscrito ningún instrumento público en que se hubiese revocado el Poder General que se le había conferido, mediante la Escritura Pública Número 5453 del 11 de junio de 1992 otorgada ante la Notaría Décima del Circuito de Panamá, lo que autorizaba al Licenciado SOLANO para, en ejercicio de las facultades concedidas, revocar cualquier poder que apareciera como otorgado por JERRY LEE HARVEY y dejar sin efecto cualquier acto que afectara o desconociera el Poder General vigente". (F. 23).

De lo anteriormente expresado y de las constancias procesales se colige lo siguiente:

1) Que el señor JERRY LEE HARVEY le otorgó poder general al señor OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO, mediante Escritura Pública N° 5453 de 11 de junio de 1992 de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, la cual fue debidamente inscrita en el Registro Público a Ficha C-008376, Rollo 2195, Imagen 15, el 22 de junio de 1992.

2) Dicho poder fue revocado por el señor JERRY LEE HARVEY mediante Escritura Pública N° 7891 de 18 de octubre de 1996 de la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, adicionada por la Escritura Pública N° 8788 de 27 de noviembre de 1996, otorgada por esa misma Notaría.

3) El recurrente pretende dejar sin efecto esta revocatoria de su propio poder fechada 18 de octubre de 1996, ejerciendo la facultad que ya le ha sido revocada al momento de presentar el documento impugnado por el Registro Público, mediante las escrituras señaladas anteriormente, las cuales quedaron debidamente inscritas desde el 3 de diciembre de 1996, a las Fichas C-8376, C-7512 y C-7163, del Rollo 3427, Imágenes 2, 14 y 26 de la Sección de Micropelículas (Común) del Registro Público.

Es preciso señalar que el poder es un acto jurídico unilateral por medio del cual el poderdante le concede al apoderado la facultad de representarlo y, como tal, puede ser revocado por su otorgante en cualquier momento; revocatoria que surte efectos inmediatos entre las partes.

El requisito de su inscripción en el Registro Público no es constitutivo, sino que cumple funciones probatorias y de publicidad frente a terceros, como se desprende del artículo 1753 del Código Civil, al señalar que el Registro Público tiene como objeto "establecer de modo fehaciente todo lo relativo ... a todas las representaciones legales", otorgando "mayores garantías de autenticidad y seguridad a los documentos, títulos o actos que deben registrarse".

En este sentido, es pertinente el criterio expuesto por el Doctor Dulio Arroyo Camacho en su obra "Contratos Civiles" (Tomo II, Editorial Universitaria, 1974, pág. 243) cuando se refiere a la diferencia entre la revocación del poder y la revocación del mandato:

> "Ch. La revocación del poder. Conviene distinguir la revocación del contrato de mandato, de la revocación del poder de representación, figuras que, como vimos, nuestra legislación suele confundir e identificar. Basta observar que mientras que el art. 1753, en su ord. 3°, habla de la inscripción de mandatos generales, el art. 1776, que desarrolla dicha norma, habla de poderes. Y es que, como vimos, la doctrina distingue el mandato (contrato) del poder de representación (acto jurídico unilateral), y también el mandato representativo del no representativo. El mandato mira la relación interna entre mandante y mandatario; el poder de representación la externa, esto es, la actuación del representante frente a terceros en nombre del representado; el primero autoriza al mandatario para que gestione negocios del mandante; el segundo le otorga la potestad para que asuma su representación; el mandato una vez perfecto obliga al mandatario a ejecutar el mandato; en la representación el representante no resulta obligado, sino autorizado, dado que el poder es una potestad que el poderdante le confiere al apoderado para que actúe en su nombre. La revocación del mandato tiene por objeto ponerle término al contrato; retirarle al mandatario la facultad de gestionar negocios del mandante; la revocación del poder tiene por objeto retirar al apoderado la potestad que se le había conferido de representar al poderdante".

Ahora bien, el artículo 1776 del Código Civil establece que se inscribirá en la sección de personas del Registro Público, "todo poder general" y el 1786 de ese mismo Código, que las inscripciones que consten en el Registro de Personas se cancelarán total o parcialmente en virtud de documento público o auténtico en que conste legalmente que ha cesado o se han modificado las facultades administrativas objeto de la inscripción.

El poderdante, señor JERRY LEE HARVEY, cumplió con lo anteriormente expuesto, al inscribir la escritura pública donde se le revocaba el poder general que le había otorgado al señor OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO, por lo que la Sala concluye que debe confirmar la decisión de la Dirección General del Registro Público, porque se ajusta a derecho.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto proferido por el Registro Público el 12 de diciembre de 1996, por medio del cual se niega la inscripción de la Escritura Pública N° 7955 de 8 de noviembre de 1996, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, ingresada bajo el Asiento N° 3312 del Tomo 251 del Diario.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

MOCHON Y METTOLA (SOCIEDAD DE HECHO) RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A TOCHISA ZONA LIBRE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense CASTRO & CASTRO, en su condición de apoderada especial de **MOCHON Y METTOLA SOCIEDAD DE HECHO**, demandantes en el proceso ordinario que le siguen a **TOCHISA ZONA LIBRE, S. A.**, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia de 3 de diciembre de 1997, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Verificado el reparto del negocio, se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, lo cual sólo fue hecho por el recurrente (fs. 207-208).

Al revisar el recurso de casación, de conformidad con los presupuestos que determina el artículo 1165 del Código Judicial, se observa que, si bien la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley y el recurso ha sido interpuesto en tiempo, el escrito de formalización adolece de graves defectos que lo tornan improcedente. Veamos:

La causal invocada es la "infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de "INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE NORMA DE DERECHO, lo cual ha influido substancialmente en lo dispositivo de la Sentencia enunciada".

Los motivos que se establecen como fundamento de la causal expresan lo siguiente:

> "PRIMERO: La Sentencia que por este medio se recurre, señaló que: "No obstante lo anterior, también es cierto que el artículo 1 de la Ley 6 de 25 de junio de 1990, por la cual se aprueba el referido Convenio, expresamente excluye del mencionado Convenio los documentos administrativos relacionados directamente con una operación comercial o aduanera. Es decir que esos documentos no están exentos de cumplir con la exigencia de legalización establecida en el artículo 864 del Código Judicial para los documentos públicos extranjeros. Y es del caso que el documento que reposa a fojas 34 es un documentos público extranjero expedido por una autoridad administrativa aduanera como lo es la Aduana de Mendoza y además está relacionado directamente con una operación comercial".
>
> SEGUNDO: La Sentencia citada también interpretó erróneamente el citado artículo 1° de la Ley 6 de 25 de junio de 1990, con cual negó validez probatoria al documento que demostraba la pérdida de las ocho motos que es la génesis de la controversia, al señalar que: "En resumen, si la única prueba presentada por la parte demandante para acreditar el faltante de las 8 motos es un documento que carece de validez probatoria y, por el contrario, la demandada si demostró con la Declaración de Movimiento Aduanero que entregó para su embarque los 22 bultos con 44 motos, esta Superioridad tiene que concluir que la actora no ha acreditado la obligación reclamada, y, por ende, procede revocar la sentencia apelada y, en su lugar, absolver a la demandada de las pretensiones de la actora.
>
> TERCERO: Que en la Sentencia recurrida, el Tribunal Superior interpretó erróneamente la norma de derecho, artículo 1° de la Ley 6 de 1990, al concluir que el documento que demuestra el faltante de las motos, y que consta a foja 34 del expediente, es una prueba inválida al tenor de lo que establece la misma ley, aduciendo que dicho documento fue expedido por una autoridad aduanera y que a dichos documentos no se le aplica el Convenio de la Apostilla".

Como se puede apreciar, en gran parte de los motivos se incurre en el error de citar parte de la sentencia impugnada, lo cual no es procedente, pues el contenido de éstos debe limitarse a la mención del obligante cargo de injuricidad siempre en congruencia con la causal que los antecede.

Precisamente, en el referido aspecto de la congruencia se observa el otro defecto que acusa los motivos, ya que, aunque la causal invocada es la de interpretación errónea, esta se hace consistir en que la sentencia "negó validez

probatoria al documento que demostraba la pérdida de las ocho motos que es la génesis de la controversia, ...".

La misma situación se percibe en el concepto de infracción de las normas de derecho (del art.1 de la Ley 6 de 15 de junio de 1990), donde se dice que la sentencia interpretó erróneamente la norma "toda vez que ha ignorado de manera absoluta que el documento a fojas 34 fue debidamente autenticado ....".

Esta situación evidencia que dentro de una sola causal se están involucrando dos causales a la vez. Ello es inadmisible de acuerdo a la técnica de este medio extraordinario de impugnación. Y precisamente, en relación a la causal formalmente invocada y a la que se desprende de los otros apartados del recurso (sobre pruebas), la ley establece la aludida prohibición al expresar:

> "ARTÍCULO 1154.
> ...
> En la causal de violación directa y en la de interpretación errónea, no puede invocarse errores de hecho o de derecho en cuanto a la prueba. ..."

Como se tiene dicho, el casacionista, sin atender lo normado por la disposición del Código Judicial previamente citada, dentro de la causal de interpretación errónea, no Sólo invocó el error de hecho sobre la prueba, sino que básicamente fundamentó el recurso en dicho cargo probatorio. Por tanto, el recurso no es viable, ya que la Corte no puede considerar causales no invocadas formalmente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación propuesto por MONCHON Y METTOLA contra la sentencia de 3 de diciembre de 1997, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las obligantes costas, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ALFREDO MARCIAGA Y ARCADIA NÚÑEZ DE MARCIAGA RECURREN EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR ALFREDO MARCIAGA Y ARCADIA NÚÑEZ DE MARCIAGA CONTRA JOSÉ ANTONIO ESPINOZA CORDOVA Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

BOTELLO, APARICIO Y ASOCIADOS, apoderados judiciales de los señores **ALFREDO MARCIAGA Y ARCADIA NÚÑEZ DE MARCIAGA**, recurren en casación contra la resolución del 11 de febrero de 1998, proferida por el **PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ**, en relación con el incidente de excepción de cosa juzgada introducido por JOSÉ ANTONIO ESPINOZA CÓRDOBA y OTROS, dentro del proceso ordinario propuesto por ALFREDO MARCIAGA Y ARCADIA NÚÑEZ DE MARCIAGA contra JOSÉ ANTONIO ESPINOZA CÓRDOBA y OTROS.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del mismo, término que sólo aprovechó el recurrente, tal como se lee a foja 106.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Judicial, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 del mismo.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo, además el recurso procede por razón de la cuantía y la resolución que se impugna es objeto del recurso.

El recurrente presenta una sola causal: "Infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de aplicación indebida, la cual ha influido sustancialmente en la parte dispositiva del fallo". La causal está invocada correctamente y de acuerdo a lo exigido por nuestro Código Judicial.

Con respecto a los motivos y a la citación de las normas de derecho con su debida explicación, la Sala considera que los mismos reúnen, de manera general, los requisitos establecidos por la ley.

Por la razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por ALFREDO MARCIAGA Y ARCADIA NÚÑEZ DE MARCIAGA mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CLUB PACIFICO DE PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL LAUDO ARBITRAL QUE LE SIGUE A LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CINCO (5) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense MORGAN & MORGAN, en su calidad de apoderados especiales de **CLUB PACIFICO DE PANAMÁ, S. A.**, ha interpuesto recurso de casación contra el laudo arbitral de fecha 22 de octubre de 1997, proferido por el Tribunal de Arbitraje dentro del proceso arbitral promovido por su representada contra la Nación.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que ambas aprovecharon según se observa de fojas 55 a 57 (opositor) y de fojas 58 a 59 (recurrente).

Corresponde a esta Sala determinar si en este caso se cumplen los presupuestos que exige el artículo 1165 del Código Judicial para acoger el recurso.

1- La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, pues se trata de un laudo arbitral dictado por un árbitro, como lo establece el artículo 1151 del Código Judicial.

2- El recurso ha sido interpuesto en tiempo.

3- La causal expresada es de las señaladas por el artículo 1151, numeral 2 ibídem.

4- Si bien el recurso presenta todos los requisitos que establece el

artículo 1160 ídem., los mismos no son congruentes con la causal invocada. Veamos:

La "CAUSAL INVOCADA" consiste en que "EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE RESOLVIÓ SOBRE PUNTO NO SOMETIDO A SU DECISIÓN (NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 1151 DEL CÓDIGO JUDICIAL)".

En los motivos, que deben fundamentar la citada causal, se expresa lo siguiente:

"...
PRIMERO: Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 4 de la artículo 195 de la Constitución Política de la República de Panamá, CLUB PACIFICO DE PANAMÁ, S. A. y LA NACIÓN, celebraron convenio de Arbitraje, de fecha 17 de abril de 1997, en virtud del cual convinieron en someter a la decisión de un Tribunal de Arbitraje, "los reclamos que LA EMPRESA -entiéndase -Club Pacífico de Panamá, S. A. formuló contra LA NACIÓN, recogidos en la demanda ordinaria promovida por LA EMPRESA y radicada en el Juzgado Quinto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá y los expresados en las comunicaciones dirigidas al Ministro de Comercio e Industrias, de fecha 10 de agosto de 1992 y al Vice-Presidente de la República, de fecha 21 de enero de 1993", para lo cual quedó expresamente y específicamente facultado el Tribunal de Arbitraje.

SEGUNDO: Pese a estar expresa y específicamente facultado para conocer y resolver las reclamaciones formuladas por CLUB PACIFICO DE PANAMÁ, S. A. contra LA NACIÓN, por ser la voluntad lícita de las partes que éste fuera el mecanismo procesal de resolverlas, el Tribunal de Arbitraje señaló entre sus conclusiones fundamentales, reiterando conceptos externados párrafos atrás del mismo laudo, que: "SI LA EMPRESA FUE FORZADA POR ACTOS O HECHOS DE LA AUTORIDAD EN AGOSTO DE 1988, QUE SON LOS QUE VIENEN A DAR BASE A LAS CONTROVERSIAS QUE NOS OCUPAN, DEBIÓ HABER ACUDIDO FORMALMENTE A LA VÍA GUBERNATIVA Y SI ESTA LE FUERA ADVERSA, POSTERIORMENTE A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA", consideración ésta que constituyó co-fundamento y objeto de la decisión, como expresamente lo dice el Tribunal al fallar "en mérito de las anteriores consideraciones", entre ellas la que se deja transcrita.

TERCERO: De lo antes expuesto, resulta que la decisión denegatoria del Tribunal de Arbitraje contempla un punto que no estaba sometido al juzgamiento de ese Tribunal, pues como en ella se resuelven de manera omnicompresiva todos los puntos examinados por el Arbitro Unico y se dicta en mérito y se resuelve sobre consideraciones que incluyen la expuesta en el segundo motivo de este recurso, queda comprendido entre los mismos el relativo a la pretendida impropiedad de la vía escogida para resolver las reclamaciones formuladas pro CLUB PACIFICO DE PANAMÁ, S. A. contra LA NACIÓN, lo cual no estaba sometido a consideración y pronunciamiento por el Tribunal.

CUARTO: El fallo impugnado resulta, por tanto, violatorio de normas procesales trascendentales, pues el punto analizado en el argumento transcrito en el motivo segundo, del cual se deduce falta de competencia del Tribunal de Arbitraje para conocer y resolver las demandas formuladas por CLUB PACIFICO DE PANAMÁ, S. A. contra LA NACIÓN, era un punto que no estaba sometido al juzgamiento de dicho Tribunal, pues esa competencia y la capacidad del Arbitro Unico para tomar una decisión de fondo sobre el mérito sustancial de esas reclamaciones quedaron expresa y específicamente establecidas en el Convenio Arbitral, autorizado y firmado con arreglo a la Constitución y la Ley, convenio que dejó excluida cualquier otra forma o fórmula de solución del conflicto que no fuera el procedimiento arbitral y cuya validez jurídica no fue nunca cuestionada, impugnada o declarada en acto jurídico formal. ...".

(Fs. 42, 43 y 44).

La causal alegada, -que se han resuelto puntos no sometidos a su decisión (art. 1151 C. J.)-, es análoga a la contemplada en el artículo 1155, ordinal 7, literal a) del Código Judicial, -se resuelve sobre punto que no ha sido objeto de controversia-, respecto a la cual la doctrina y la jurisprudencia han reiterado que "no puede hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuestión subjudice de manera distinta a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o en que no haya decidido de acuerdo con los puntos de vista expuestos por ellos". En este sentido, también dice la jurisprudencia: "La causal extra-petita no es viable para impugnar una resolución que negó las declaraciones pedidas por el demandante. Dicha sentencia resolvió sobre los puntos de la demanda" (9 de julio de 1962, Carrera vs. Carrera) (Cfr. FÁBREGA P., Jorge. CASACIÓN, 1995, pp. 197-198).

Es así que, al analizarse los motivos del recurso, se observan graves contradicciones en relación a la causal invocada. En primer lugar, aunque se enuncia como causal el haberse resuelto puntos no sometidos a la decisión arbitral, de los motivos, que deben fundamentarla, se desprende otra, consistente en que se dejaron de resolver los puntos objeto de la controversia (o sean, las pretensiones).

Aún cuando se considerase la causal enunciada, sin que importara el hecho de que se alude a otra al mismo tiempo, la misma tampoco sería viable porque el casacionista reconoce en las manifestaciones de su escrito que el tribunal de arbitraje si emitió una decisión de fondo, lo único que en forma desfavorable a sus pretensiones, circunstancia de hecho que no respalda la causal que ha sido empleada.

En efecto, acepta el casacionista en su escrito que, en esa parte motiva, el laudo ponderó las reclamaciones del demandante, en particular las relacionadas con los actos de autoridad que adujo como desconocedores de sus derechos. A juicio del Arbitro Unico la demandante debió acudir, en busca de reparación, a las autoridades e instancias correspondientes; algo que no hizo, por lo cual en el arbitraje le fue denegada esa pretensión, absolviéndose a la demandada. Esa conducta no implica que el árbitro haya resuelto sobre un punto no sometido a su decisión, como asegura el recurrente. Está claro, en cambio, todo lo contrario. Se resolvió sobre la materia acerca de la cual se debía proferir la sentencia; eso si, en contra de lo pretendido por una de las partes, en este caso la parte demandante

Por tanto, la causal no se encuentra debidamente estructurada. Los motivos no son congruentes con la causal. Esta realidad torna ininteligible el recurso.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación propuesto por CLUB PACIFICO DE PANAMÁ, S. A. contra el laudo arbitral de 22 de octubre de 1997, dictado dentro del proceso arbitral seguido contra LA NACIÓN.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS con 00/100 (B/.75.00)

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ. A. TROYANO (fdo.) GRACIELA J. DIXON C.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO GENERAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE MARDEN TORRIJOS HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el juicio ordinario de mayor cuantía propuesto por **MARDEN TORRIJOS HERRERA** contra **BANCO GENERAL, S. A.**, el apoderado judicial de la parte demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada el 15 de febrero de 1996 por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

La Sala ordenó, en su momento, la corrección de las dos causales de fondo originalmente invocadas por el recurrente y, una vez dado aquel paso, declaró la admisibilidad del recurso en cuanto a la primera causal propuesta por la censura. Una vez completados los trámites y las ritualidades previstas para estos casos se procederá al examen de la pretensión que se demanda.

La causal de fondo admitida fue la de infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de aplicación indebida de la norma de derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En el apartado del recurso correspondiente a los motivos, se le imputa al fallo impugnado haber identificado equivocadamente el documento que obra a fojas 133 del expediente, bajo el título de "DOCUMENTO DE PRÉSTAMO A REQUERIMIENTO", como un contrato de préstamo, aplicándole en forma indebida las disposiciones legales que regulan ese tipo de contrato, cuando lo cierto es que el mencionado constituye un documento negociable (un pagaré), en virtud del cual sólo resultaba obligado el señor MARDEN TORRIJOS HERRERA, sin obligación alguna del BANCO GENERAL, S. A.

Como no se tuvo en cuenta que del llamado DOCUMENTO DE PRÉSTAMO A REQUERIMIENTO no emanan obligaciones recíprocas para las partes, el fallo lo declaró "resuelto unilateralmente en base a la facultad resolutoria, siendo esto último lo que erróneamente hizo el tribunal de la alzada", asegura literalmente el casacionista.

Como normas de derecho que se acusan de violadas por la sentencia, tenemos las siguientes del Código Civil:

> "Artículo 1431: Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra, o alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o dinero u otra cosa fungible, con condición de volver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo.
> El comodato es esencialmente gratuito.
> El simple préstamo puede ser gratuito o con pacto de pagar interés".

A juicio de la censura, la infracción deviene de haber sido aplicada indebidamente dicha disposición, pues la misma establece el carácter real del contrato de préstamo, lo que implica que para su perfeccionamiento se requiere la entrega de la cosa objeto del mismo, o sea, del dinero u otra cosa fungible.

Se aduce que, como quiera que el DOCUMENTO DE PRÉSTAMO A REQUERIMIENTO de fojas 133 no es un contrato de préstamo, el Tribunal Superior se equivocó al determinar en la sentencia, con base en el artículo que se deja citado, que el préstamo por la suma de B/.45,000.00 solicitado por el señor MARDEN TORRIJOS HERRERA al BANCO GENERAL, S. A. no fue recibido por el prestatario, y que por esa razón no se habría perfeccionado el contrato de préstamo correspondiente.

> "Artículo 1009: La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe".

Según la censura, como lo que se declaró resuelto por el fallo no tiene en verdad el carácter de un contrato de préstamo, siendo en realidad un pagaré, producto de un acto unilateral, cuando la sentencia aplicó el artículo 1009 del Código Civil lo hizo erróneamente, pues esta norma sólo "es aplicable a los contratos bilaterales o sinalagmáticos, es decir aquellos de los cuales surgen obligaciones recíprocas".

Si se examina el recurso de casación interpuesto y se pone debida atención a la tesis central esgrimida por la censura, se arribará necesariamente a la conclusión de que el yerro que se le atribuye al fallo se contrae al cargo de que no siendo lo debatido en juicio las obligaciones y derechos surgidos para las partes de un contrato de préstamo, mal podía el Tribunal Superior aplicar las disposiciones legales que regulan esta clase de contrato, cuando de lo que se trataba era de un acto unilateral del demandante representado por un documento negociable (un pagaré), del cual no podían surgir obligaciones recíprocas para las partes.

El Tribunal Superior y también la Juez Cuarta del Circuito de Panamá, en primera instancia, dictaron, en efecto, sendas sentencias partiendo del criterio de que entre demandante y demandado se celebró un contrato de préstamo de dinero con garantía prendaria, cuya resolución cabía en virtud de que ese negocio jurídico no se perfeccionó por la falta de entrega del objeto (el dinero) al prestatario por parte del banco demandado.

Ahora bien, aún cuando en el recurso de casación la parte demandada asegura que se aplicaron indebidamente las disposiciones legales que regulan el contrato de préstamo a un pagaré que se identifica con uno de los documentos que obran como piezas probatorias en el expediente (el visible a fojas 133), no es posible dejar de advertir que componen una pluralidad, dentro del proceso, los elementos que acreditan que el negocio jurídico celebrado entre MARDEN TORRIJOS HERRERA y BANCO GENERAL, S. A. es un contrato de préstamo con garantía prendaria. Ese hecho se encuentra expresamente aceptado por el banco en la contestación de la demanda y está, además, sobradamente demostrado con las pruebas que la propia parte demandada aportó en el juicio. Ejemplo de lo anterior lo constituye el documento de fojas 131 (SOLICITUD DE PRÉSTAMO PRENDARIO) y el de fojas 134 en donde se dice textualmente:

> "Con el fin de garantizar el pago de la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.45,000.00) que ustedes me han concedido en forma de préstamo, por este medio les pignoro el depósito a Plazo Fijo N° 05-122-40668-00 por la cantidad de CINCUENTA MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.50,000.00) . ..." (Subraya de la Sala).

En opinión de la Sala, está fuera de toda discusión que entre las partes de este juicio se celebró un contrato de préstamo de dinero con garantía prendaria y así mismo, también, que la controversia y la litis desde el principio han girado en torno al problema de si efectivamente el prestamista, o sea, la parte demandada, le hizo o no entrega al prestatario de la cosa objeto del contrato: B/.45,000.00.

Tratar, a estas alturas, de trasladar el debate jurídico que ha tenido lugar a lo que aisladamente pudiese representar el documento que reposa a fojas 133 del expediente, en un esfuerzo para demostrar que sólo hubo una obligación unilateral adquirida por MARDEN TORRIJOS HERRERA frente al banco mediante lo que el recurrente asegura es un documento negociable, no es más que pretender sacar de contexto la discusión desarrollada a lo largo de este juicio. La de fojas 133, a parte de no ser otra cosa que una prueba aislada dentro del conjunto de las empleadas por las partes, lleva en sí misma una leyenda que revela con claridad en donde reside su causa, anulándole de paso toda la autonomía e independencia que como un supuesto pagaré pretende asignarle en casación la parte demandada. En el documento que se quiere hacer pasar como un simple pagaré se dice expresamente: "GARANTIZA PRÉSTAMO #05-040-40818-01 A/N MARDEN TORRIJOS HERRERA POR B/.45,000.00 FECHA DE VENCIMIENTO 5 DE FEBRERO DE 1995". Esa particularidad y el propósito del llamado Documento de Préstamo a Requerimiento de fojas 133 estuvieron definidos por lo expresado en la contestación de la demanda por el propio BANCO GENERAL, S. A., haciendo constar que: "Con el solo objeto de documentar el contrato de préstamo en referencia, ... el señor MARDEN TORRIJOS HERRERA expidió un documento denominado `DOCUMENTO DE PRÉSTAMO A REQUERIMIENTO', fechado 5 de febrero de 1991". (Subraya la Sala).

Afirmar, en los términos en que lo hace la censura, que las normas del Código Civil que regulan las obligaciones recíprocas y el contrato de préstamo en particular fueran aplicadas indebidamente, dado que las aplicables eran las

atinentes a los documentos negociables, carece por completo de fundamento y la Sala no tiene otra elección que considerar infundada la causal esgrimida contra la sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia que desató este proceso en segunda instancia.

Por lo expuesto, la Corte Suprema Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia de 15 de febrero de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el proceso ordinario propuesto por MARDEN TORRIJOS HERRERA contra BANCO GENERAL, S. A.

Las costas de casación se fijan en la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00).

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO

(Con Salvamento de voto)

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JOSÉ A. TROYANO

Con todo respeto, por este medio manifiesto estar en desacuerdo con la Resolución de la Sala y que en su parte resolutiva decide no casar la sentencia de 15 de febrero de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el proceso ordinario propuesto por MARDEN TORRIJOS HERRERA contra el BANCO GENERAL, S. A.

A continuación expongo las razones en que fundamento mi desacuerdo con la Resolución antes referida.

Tanto la sentencia de Primera Instancia como la del Tribunal Superior que la confirma, parten del supuesto de que el documento básico (pagaré) de la presente controversia es un contrato de préstamo y que como tal no se perfeccionó por cuanto que la cosa objeto del mismo (B/.50.000.00) no fue recibida por el prestatario demandante y como consecuencia de ello, es decir, de que la demandada (Banco) no cumplió con su obligación de entrega, se procede a declarar Resuelto el supuesto contrato de préstamo.

De un análisis efectuado al referido contrato de préstamo (fs.133), se puede concluir, a nuestro entender, que el mismo no constituye un contrato de préstamo sino un Pagaré que en todo caso, debe regirse por las disposiciones atinentes a los documentos negociables contenidas en la Ley 52 de 13 de mayo de 1917, aún cuando el documento en análisis venga titulado como "DOCUMENTO DE PRÉSTAMO A REQUERIMIENTO" ya que, a lo que hay que atender es a su contenido e intención de la parte que lo firmó.

En este sentido, no queda duda que la redacción y forma del documento, es congruente y se ajusta a la definición de Pagaré contenida en el artículo 184 y a otras disposiciones sobre documentos negociables contenidas en la Ley 52 de 1917.

En adición a lo anterior, observamos del caudal probatorio que la transacción bancaria realizada que originó el presente litigio, se llevó a cabo dentro de parámetros aceptables que los usos y costumbres reflejan en las actividades bancarias cuando se trata de un cliente en el que los bancos depositan su confianza para agilizar sus transacciones, sin que por ello sea contrario a derecho ejecutar ciertos actos sujetos a ser documentados con posterioridad, como aparentemente ocurrió en el presente caso en el que además, la suma debida al banco fue cedida por el deudor a un tercero (Dora Vega), obligándose el deudor a través del pagaré, a pagarlo a requerimiento. Esta fórmula es común y completamente legal dentro de las transacciones bancarias, por lo que sostener que un contrato de préstamo (no el pagaré), no se perfecciona por el hecho de que es un tercero quien recibe la cosa, equivale a negar la figura jurídica de la cesión y a frenar e imposibilitar la celebración y agilización de este tipo de transacciones, lo que sería contraproducente para un Centro Bancario

como el que tenemos en nuestro país. Igual circunstancia se nos presentaría de aceptarse que un pagaré es un contrato, desconociéndose sus características propia de documento negociable para quedar regido por las disposiciones relativas a los Contratos.

Por otra parte, nos llama la atención la incongruencia que se presenta cuando el demandante en su demanda (Hecho Primero), afirma haber celebrado un contrato de préstamo y ser prestatario del Banco, pero sin embargo en la declaración rendida por él (f.146), se contradice notablemente al declarar que es fiador de un préstamo que hacía su hija Dora Torrijos de Ellis, cuando la realidad es otra, ya que toda la documentación de la transacción está a nombre del demandante sin participación alguna de la hija.

También nos llama la atención en el presente proceso, lo relacionado con la inexistente o nula participación de la señora DORA ESTHER VEGA, cesionaria o beneficiaria, de acuerdo a documentación presentada, del préstamo realizado por el señor TORRIJOS. Ninguna de las partes se preocupó porque la referida señora compareciera a aclarar su participación en la transacción, lo que dió origen a que los peritos llegaran a la conclusión presuntiva de que la suma de dinero recibida mediante cheque por la señora DORA VEGA, era producto de otra transacción distinta realizada con el Banco, a pesar de que el monto de la suma coincide con el monto del préstamo del señor TORRIJOS,transacción bancaria que debió ser probada por el demandante.

A nuestro entender, el demandante no tiene razón en su reclamación, pues es claro que la suma de dinero producto del préstamo fue cedida por el prestatario y recibida por la señora DORA VEGA, perfeccionándose de esta manera el contrato de préstamo cuyo pago fue garantizado con el pagaré firmado por el demandante y con la garantía prendaria recaída en el plazo fijo de su propiedad, compromisos estos que fueron adquiridos el día 5 de febrero de 1991 para garantizar la obligación de resarcir el préstamo previamente adquirido, tal como se desprende de la lectura de ambos documentos (pagaré y prenda), contrario a lo que sostiene la sentencia del Primer Tribunal Superior. (F. 268).

Por las razones anteriores, respetuosamente, SALVO MI VOTO.

Fecha ut-supra.

(fdo.)JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BILLITAL TRADING INC. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A ALFRED NICKBARTE Y HENRI SIMOND CLAUDE O SIMON CLAU HENRI. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la resolución expedida por el **PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,** el 28 de agosto de 1997, dentro del proceso ordinario declarativo de mayor cuantía que le sigue la sociedad anónima denominada **BILLITAL TRADING INC.**, a los señores **ALFRED NICKBARTE y HENRY SIMOND CLAUDE Ó SIMOND CLAU HENRY**, interpuso la demandante recurso de casación.

El recurso se mandó a corregir y hechas las correcciones del caso, fue admitido por la Sala, mediante resolución de 17 de febrero de 1998. Seguidamente, se les concedió a las partes la oportunidad para que alegaran en cuanto al fondo, oportunidad que sólo aprovechó la parte recurrente. Cumplidas las fases procesales antes descritas, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el fondo del recurso, a lo que accede, previas las consideraciones siguientes.

ANTECEDENTES DEL CASO

El presente caso se inicia con la demanda que, en representación de la sociedad anónima BILLITAL TRADING INC., interpusiera la firma MORGAN Y MORGAN contra los señores ALFRED NICKBARTE y HENRY SIMOND CLAUDE ó SIMON CLAU HENRY quien es la misma persona, para que se condenara solidariamente a los demandados al pago de DIEZ MIL BALBOAS en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la demandante, más las costas y los gastos del proceso.

El hecho alrededor del cual gira la presente causa, es el incumplimiento por parte de ALFRED NICKBARTE, del contrato de arrendamiento que, en calidad de arrendatario, suscribiera con BILLITAL TRADING INC. En razón de dicho contrato BILLITAL TRADING INC., daba en arrendamiento a ALFRED NICKBARTE, el Pent-House 29 del Edificio Torre Pacific Hill, ubicado en Dos Mares, Corregimiento de Bethania, en la ciudad de Panamá (f. 27).

Por su parte ALFRED NICKBARTE, quedaba obligado, en principio a devolver el inmueble arrendado en las mismas condiciones que le fue entregado, salvo el deterioro normal del uso y el tiempo. Pero, además, quedaba sujeto, en el supuesto de decidir dar por terminado el contrato de arrendamiento, a avisar con una anticipación no inferior a los 30 días calendarios y por escrito a BILLITAL TRADING INC. De incumplir con esta última responsabilidad, quedaba el arrendatario obligado a entregar a BILLITAL TRADING INC. el depósito de arrendamiento (cláusula décima del contrato de arrendamiento).

El señor NICKBARTE, no obstante lo estipulado en el contrato de arrendamiento, abandonó el apartamento arrendado sin dar el aviso previo a la demandante, dejando, además el inmueble arrendado en pésimas condiciones, según lo manifiesta la demandante.

El proceso quedó radicado en el JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL y el mismo hubo de surtirse con DEFENSORA DE AUSENTE en representación de los demandados, nombrado por el Juzgado, según lo dispone el artículo 1002 del Código Judicial, por desconocerse el paradero de los mismos y pese a emplazárseles por edicto, no se logró que comparecieran.

Concluidas las etapas procesales previas a la solución de la litis, profirió el JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, su decisión, en Sentencia N° 2 de 3 de enero de 1997, en virtud de la cual se reconoce que el arrendatario, ALFRED NICKBARTE había incumplido con su obligación contractual, al abandonar el bien inmueble arrendado sin dar aviso previo a la arrendadora. No obstante, absuelve a los demandados del pago de los daños y perjuicios ocasionados al inmueble, reclamados por la parte actora en el proceso, por considerar que los mismos no habían sido probados.

No conforme con dicha sentencia, la representación judicial de la parte demandante anunció y formalizó, oportunamente, recurso de apelación contra dicha sentencia. En el escrito de alzada se le censura al fallo del ad-quem el haber estimado que los daños ocasionados por el señor ALFRED NICKBARTE al apartamento que BILLITAL TRADING INC. le había arrendado, no fueron debidamente probados por la demandante, desconociendo con ello, según la recurrente, una serie de elementos indiciaros y pruebas testimoniales aportadas por la demandante que acreditan tales hechos.

A través de la resolución expedida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, el 28 de agosto de 1997, se resolvió el recurso de apelación propuesto, confirmándose en todo la resolución recurrida. Por no estar tampoco conforme con lo resuelto, promovió BILLITAL TRADING INC., contra esta decisión, el recurso de casación que, ahora, se sustancia.

RECURSO DE CASACIÓN

El recurso de casación es en el fondo y en el mismo se invoca una sola causal, la cual es "Infracción de normas sustantivas de derecho, en concepto de violación directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

La causal invocada se sustenta en cuatro motivos, los cuales se permite esta Sala reproducir:

> "PRIMERO: La resolución recurrida, respecto a la responsabilidad contractual de Alfred Nickbarte, erró jurídicamente, ya que, al haberse reconocido en el proceso que el señor Alfred Nickbarte incumplió la obligación que contrajo en la cláusula duodécima del contrato de arrendamiento que celebró con la sociedad BILLITAL TRADING INC. y que consistía en devolver el apartamento arrendado en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el deterioro normal causado por el uso y el tiempo, debió igualmente reconocerse en la resolución recurrida que el mencionado señor ALFRED NICKBARTE, por razón de ese incumplimiento, quedaba sujeto según la Ley, a la obligación de indemnizar a BILLITAL TRADING INC., todos los daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción de sus obligaciones contractuales.
>
> SEGUNDO: La resolución recurrida, también con respecto a la responsabilidad contractual de ALFRED NICKBARTE, incurrió en yerro jurídico al no advertir, ni tomar en cuenta que la culpa grave, equivalente al dolo, con que claramente actuó el obligado contractualmente, señor ALFRED NICKBARTE, cuando, sin previo aviso a BILLITAL TRADING INC. e incumpliendo el contrato de arrentamiento que celebró con esta sociedad, aprovechó los días de Semana Santa para abandonar subrepticiamente el apartamento arrendado, es una conducta que acarrea responsabilidad civil y la consiguiente obligación de indemnizar los daños y perjuicios por ella causados.
>
> TERCERO: Igualmente, la resolución recurrida incurrió en yerro jurídico al no advertir ni tomar en cuenta que la evidente conducta dolosa del mencionado ALFRED NICKBARTE, consistente en el hecho de que este último, para incumplir el contrato aludido y para sustraerse de los efectos legales de ese incumplimiento, por un lado contrató en su nombre a la compañía de mudanzas BALBOA INTERNATIONAL (BISA) y por otro lado, maliciosamente instruyó a HENRI SIMOND CLAUDE para que desalojara todos los bienes que se encontraban en el apartamento y los despositara en la empresa ALMACENAJES, bajo el nombre del citado HENRI SIMOND CLAUDE, es una causal de responsabilidad frente a BILLITAL TRADING INC., la cual se extiende a indemnizar todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
>
> b) MOTIVOS CON RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE SIMOND CLAU HENRI o HENRI SIMON CLAUDE:
>
> PRIMERO: Apesar de que en el proceso se evidenció claramente que HENRI SIMOND CLAUDE accedió por conducta dolosa, a desalojar subrepticiamente aprovechando la Semana Santa, los bienes de ALFRED NICKBARTE que se encontraban en el apartamento arrendado y a depositar dichos bienes en la empresa Almacenajes, maliciosamente a nombre suyo, para ayudar al señor Alfred Nickbarte a evadir el cumplimiento de sus obligaciones frente a BILLITAL TRADING INC., y a sustraerse de los efectos y consecuencias legales de ese incumplimiento, en el fallo recurrido se incurre en el error de omitir la declaración de responsabilidad civil y la obligación de indemnizar, congruentes con el reconocimiento de esa conducta extracontractual, que origina la responsabilidad consiguiente". (Fs. 277-278).

Como normas probablemente infringidas por el fallo del a-quo, se citan en el recurso de casación los artículos 986 y 992 del Código Civil, respecto a la responsabilidad contractual del señor ALFRED NICKBARTE, y el artículo 1644, del mismo cuerpo legal, en cuanto a la responsabilidad extracontractual del señor HENRY SIMOND CLAUDE ó SIMOND CLAUDE HENRY.

CRITERIO DE LA CORTE

En los motivos, según aprecia la Corte, los cargos de injuricidad contra la sentencia recurrida han sido estructurados de forma individual, respondiendo así a la corrección ordenada por la Corte. Los primeros tres motivos, recogen los cargos de injuricidad alegados en relación a la responsabilidad del señor ALFRED NICKBARTE, mientras que respecto a la responsabilidad del señor SIMOD CLAU HENRY ó HENRY SIMON CLAUDE, se formula un sólo motivo. Veamos en detalle cada uno de esos cargos de injuricidad.

En torno a la responsabilidad del señor NICKBARTE, asegura el casacionista que el Tribunal de alzada, al reconocer que NICBARTE incumplió con su obligación de devolver el apartamento a él arrendado en las mismas condiciones que le había sido entregado, salvo el deterioro normal por el uso y el tiempo, y no condenarlo al consecuente pago de la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios ocasionados a la arrendadora BILLITAL TRADING INC., como consecuencia del incumplimiento de esa responsabilidad, incurrió en una infracción de carácter legal.

Luego de una pormenorizada lectura de la resolución impugnada, llega esta Sala a la conclusión de que la aseveración que hace la recurrente en este motivo carece de fundamento, puesto que dicha sentencia en ninguna de sus partes reconoce que NICKBARTE le ocasionó al apartamento que le había sido arrendado por BILLITAL TRADING INC., un deterioro más allá del normalmente producido por el uso y el tiempo. Lo anterior, lo deja de manifiesto el Tribunal en el extracto de la sentencia impugnada que, para mejor ilustración, se transcribe:

> "Sin embargo, el rubro relativo a los daños y perjuicios, que señala el recurrente fueron dejados de lado por el fallo impugnado, no presentan mayor comprobación que la declaración rendida por la señora DAYRA DE ROJAS (fs. 56-57), quien manifiesta ser la administradora del inmueble arrendado, sin ofrecer documentación que sustente tal cargo.
>
> Esta testigo, calificó los daños ocasionados al inmueble, ocupado por el arrendatario, en una suma alrededor de B/.3,500.00 (fs. 57), cantidad que, puede ser comprobada mediante la prueba testimonial, según se infiere del artículo 1103 del Código Civil, tal como fue modificado por la Ley 18 de 1992, siendo que la relación entre las partes es de carácter contractual; no obstante, por sí sola no ofrece convicción suficiente (art. 905 C. J.), si tomamos en cuenta que no existen otras constancias probatorias, como: periciales o de inspección, que demuestren las condiciones en que quedó el inmueble ocupado por el arrendatario ALFRED NICKBARTE".

El texto del fallo es claro, el a-quo no reconoció ni pudo reconocer los daños y perjuicios que alega la recurrente le ocasionó NICKBARTE, porque los mismos no fueron acreditados de forma suficiente, por lo que mal podía acceder a la condena solicitada.

Desde otra perspectiva, se aprecia en lo expuesto, que la disyuntiva jurídica parece, más bien ubicarse en la valoración probatoria que hizo el ad-quem de los medios probatorios allegados al proceso destinados a demostrar los daños y perjuicios alegados, según lo percibe la Corte. Sin embargo, por configurar una causal distinta a la invocada al formalizar el recurso, está la Corte impedida de analizarla por prohibírselo así, el artículo 1180 del Código Judicial.

En el segundo motivo el cargo de injuricidad que formula el recurrente contra la sentencia de segunda instancia consiste en que, el abandono por parte del señor ALFRED NICKBARTE del apartamento a él arrendado, aprovechando los días de Semana Santa, sin dar el aviso previo a la arrendadora, demuestra una conducta dolosa por parte del mismo. Para el recurrente, la mala fe con que obró NICKBARTE al abandonar el inmueble arrendado sin el previo aviso correspondiente, pone de relieve la existencia de los daños ocasionados al inmueble arrendado, pues de otra forma no se explica la manera intempestiva como abandonó el inmueble que le

fue arrendado sin dar aviso previo a la arrendadora, así como su intención de substraerse a la responsabilidad que le sobrevenía por el incumplimiento de ese deber y ello, sostiene la parte recurrente, acarrea la responsabilidad civil de responder por los daños y perjuicios ocasionados.

La mala fe o dolo al que se refiere el recurrente está previsto en el artículo 992 del Código Civil, en virtud del cual "en caso de dolo, responderá el deudor de todos los daños que conocidamente -expresión esta que a juicio del jurista español Manuel Albaladejo, debe entenderse como probadamente (Comentarios al Código Civil y Compilaciones Florales, Tomo XV, Editoriales de Derecho Reunidas, pág. 751)- se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación".

Ya la Sala, en reciente fallo de 20 de abril de 1998, ha tenido la oportunidad de referirse a la responsabilidad contratual, manifestando en esa ocasión:

> "... Como es sabido, la doctrina señala que el incumplimiento voluntario de los contratos acarrea siempre responsabilidad, que se traduce en la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por dicho incumplimiento, salvo los casos de exclusión de la responsabilidad que no resulta de aplicación en este proceso. Dicho incumplimiento puede deberse a culpa o negligencia o dolo en el cumplimiento del mismo. Si se da este último supuesto, en los contratos mediando dolo recibe una agravación del alcance de la indemnización en comparación con el caso de culpa o negligencia, en el sentido de que, frente al segundo, se responde por los daños que hubiesen sido previsibles al momento de constituírse la obligación, en tanto que en caso de dolo se ha de responder por los perjuicios que conocidamente se desprendan del incumplimiento (artículo 992 del Código Civil) ...". (Sentencia de 20 de abril de 1998; f. 10).

El dolo previsto por el legislador en el precepto sustantivo al que se hace referencia, constituye una agravante de la responsabilidad para la parte que incumpla lo pactado.

Por otro lado, cabe destacar que el dolo, a diferencia de lo que ocurre con la culpa, no se presume, sino que debe probarse, correspondiendo la carga de la prueba a quien lo alega. De no probarse el dolo que se alega, la decisión contenida en la sentencia impugnada no podría sufrir alteración alguna.

En el supuesto de hecho que analiza la Sala, la parte recurrente afirma que el señor NICKBARTE incurrió en actuación dolosa en el cumplimiento de su obligación, sin embargo, no lo acredita, y siendo que la causal que se invoca mediante este recurso no es probatoria, no puede la Corte por imposición legal, entrar a juzgar la evaluación probatoria del a-quo en cuanto a si hubo dolo o no, por parte del señor NICKBARTE, en el cumplimiento de su obligación.

De igual forma, el presupuesto inherente a los daños y perjuicios que asegura haber sufrido el recurrente, adolece de una deficiencia probatoria, como lo ha dicho el Tribunal Superior en el fallo respectivo, arriba citado.

En cuanto al cargo de injuricidad instituido en el tercer motivo, consistente en atribuir una conducta dolosa al señor ALFRED NICKBARTE, ya no por haber abandonado subrepticiamente el inmueble que en calidad de arrendatario ocupaba, sino en contratar en nombre propio a la compañía de mudanzas BALBOA INTERNATIONAL (BISA) e instruir maliciosamente al señor HENRY SIMOND CLAUDE, para que desalojara los bienes que se encontraban en el apartamento y los depositara en la empresa ALMACENAJES, a nombre de este último, se aprecia que respecto de este motivo se presenta idéntica situación a los anteriores motivos, pues el recurrente pretende reclamar sobre la base de una supuesta acción dolosa, daños y perjuicios cometidos a la propiedad inmueble que en carácter de arrendamiento, le había dado a ALFRED NICKBARTE, acción dolosa y daños que se afirma se causaron, pero que no se han acreditado. Tal situación de ilegalidad que acusa el casacionista, no puede ser examinado por la Corte con fundamento en la causal mencionada dado que el presupuesto básico normativo para acceder a la indemnización que solicita, no se configura, en razón de que no se probaron los

daños alegados. En consecuencia, no procede admitir tampoco, este cargo de injuridad.

En cuanto a la responsabilidad del señor HENRY SIMOND CLAUDE, se invoca un motivo. El vicio de ilegalidad que se hace en el aludido motivo consiste en señalar que el Tribunal Superior desatendió el tenor de lo normado en cuanto a la responsabilidad extracontractual, toda vez que a pesar de la manera dolosa con que procedió HENRI SIMOND CLAUDE, cuando ayudó a ALFRED NICKBARTE a desalojar los bienes de éste del apartamento arrendado y a depositarlo a nombre propio en una empresa de almacenajes, para ayudar a NICKBARTE a substraerse de los efectos legales de su incumplimiento, el Tribunal de alzada lo eximió de responder, solidariamente, por los daños que le ocasionaron.

Al decidir en tal sentido y no aplicar lo pautado en el artículo 1644 de la ley sustantiva, incurrió el a-quo en violación a dicho precepto legal por omisión. El texto de la norma es el siguiente:

> "Artículo 1644. El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
>
> Si la acción u omisión fuere imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causado".

Lo dicho respecto a la responsabilidad de NICKBARTE, también vale para la responsabilidad del señor HENRY SIMOND CLAUDE. Primeramente el supuesto del dolo exigido en la norma sustantiva, citada como infringida, no ha sido acreditado por la parte recurrente. Por otra parte, la condición de los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de una infracción extracontractual, tampoco aparecen acreditados en el proceso, por lo que no tendría cabida la afirmación de quien recurre, en el sentido de que el juez de instancia superior yerró al inaplicar el artículo 1644 de la legislación Civil. La Sala en jurisprudencia reiterada, tal como lo destaca en el siguiente extracto de la sentencia de 5 de mayo de 1992, lo ha dejado de manifiesto:

> "Lo que se deja expuesto, expresado en otros términos significa que la obligación de reparar el daño causado a otro, o de las personas por quienes se deben responder, interviniendo culpa o negligencia, que se origina de la preceptiva del artículo 1644 del Código Civil y su concordante el artículo 1645, indemnizando los perjuicios causados, es indispensable que se acredite la existencia real de estos perjuicios, como lo han sostenido por lo demás, la jurisprudencia de la Corte reiterada". (Jurisprudencia Civil al Día, Jaime J. Jované, pág. 586.).

Resulta, pues, imposible el reconocimiento por esta Superioridad del vicio de ilegalidad acusado por el recurrente, por las razones que se han dejado expuestas, correspondiéndole, en consecuencia, la desestimación de este cargo de ilegalidad.

Como corolario de lo que viene dicho, reitera la Sala la falta de sustento fáctico en los argumentos esgrimidos por el recurrente en el presente recurso, por lo que a falta de ellos, debe la Sala mantener intangible la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior en la presente causa y en consecuencia desatender la solicitud del casacionista de casar la sentencia impugnada mediante el presente recurso.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA el 28 de agosto de 1997, contra la cual interpuso el recurso de casación BILLITAL TRADING INC., por intermedio de apoderado legal.

Las obligantes costas a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LEONCIO ELÍAS CASTILLO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE LE SIGUE A RAQUEL VALDES DE HERDON. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JORGE JAÉN CASTILLO, en su condición de apoderado judicial de **LEONCIO ELÍAS CASTILLO**, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio que le sigue a **RAQUEL VALDES DE HERDON**, formalizó recurso de casación contra la sentencia de 1° de julio de 1996 dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Recibido el expediente se le dio el trámite que establece el Código de Procedimiento Civil, ordenando la Sala la corrección del recurso. Al cumplir el casacionista con lo ordenado, fue admitido mediante resolución de 23 de enero de 1998. Dentro del término concedido de seis días para que las partes alegaran en cuanto al fondo, los tres primeros días fueron aprovechados por el recurrente (fs. 269-272), y el opositor presentó su escrito visible de fojas 273 a 276, por lo que se encuentra el presente recurso en estado de resolver y a ello procede la Sala, previo un breve recuento de los antecedentes que dieron origen a este recurso extraordinario.

ANTECEDENTES

El señor LEONCIO ELÍAS CASTILLO formuló proceso ordinario de prescripción extraordinaria de dominio contra la señora RAQUEL VALDES DE HERDON, el cual quedó radicado en el Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá. a fin de que se le adjudique la Finca N° 44.682, inscrita al folio 330, tomo 1062, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, de propiedad de RAQUEL VALDES DE HERDON, cuyas generales y paradero juró desconocer, solicitando en el libelo, su emplazamiento.

Dentro del término de la publicación del edicto, la demandada, RAQUEL VALDES DE HERDON dio contestación a la demanda, a través de la firma forense MOLINA Y MOLINA (fs. 11-13), aceptando los dos primeros hechos y negando los otros tres restantes. En el hecho tercero expresa que no le asiste derecho al demandante, quien tiene domicilio en Chepo y que la referida finca fue utilizada y usufructuada por militares de la fenecida fuerza de defensa hasta el año 1989. Además, que el referido inmueble ha pertenecido a la familia de su representada por más de 58 años y que la misma ha puesto en conocimiento de las autoridades de policía cada vez que personas ajenas han pretendido invadir la finca.

Concluida la fase procesal inherente al presente negocio, el JUZGADO SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ profirió la sentencia N° 68 de 6 de septiembre de 1994, por la cual declara que ha operado la prescripción adquisitiva de dominio en favor de LEONCIO ELÍAS CASTILLO, sobre un globo de terreno de 89 hectáreas 535 metros cuadrados con 72 decímetros cuadrados, que forma parte de la Finca N° 44,682, inscrita al folio 330, tomo 1062, de la Sección de Propiedad, provincia de Panamá, siendo apelada dicha resolución por la parte demandada.

Surtida la alzada, el Primer Tribunal Superior de Justicia REVOCO la sentencia antes anotada y es contra esta resolución que se ha formulado recurso de casación, en el fondo; por ello, procede la Sala al conocimiento del mismo.

CONTENIDO DEL RECURSO

La primera causal invocada es "Infracción de las normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Los motivos que sustentan esta causal, acusan al tribunal que no le atribuyó valor a la prueba obrante de fojas 55 a 56 del expediente, consistente en la inspección ocular realizada sobre el inmueble motivo de litigio. Señala también que si bien es cierto la sentencia impugnada hace referencia a la citada inspección, pero, en el sentido de considerar el juzgador "que procesalmente las pruebas de la actora no tengan valor jurídico, sino que, como elemento de convicción para el juzgador que ha de evaluarlas, las de la demandada contradicen los testimonios que presentó la actora" (f. 254), estima el casacionista que tal afirmación por parte del juzgador ponen en evidencia que la supuesta contradicción es en cuanto a las pruebas testimoniales, no así la prueba pericial (inspección ocular), considerando que la misma no puede ser desvirtuada mediante pruebas testimoniales inconducentes.

De otra parte, señala en las disposiciones infringidas que el artículo 770 del Código Judicial ha sido violado por omisión, dado que el juzgador no hizo uso del sistema de la sana crítica, al no atribuirle la eficacia probatoria señalada por ley a la inspección judicial. Cita también como infringido, por omisión, el artículo 1668 del Código Civil, dado que con la prueba pericial se demostró que ha operado la prescripción adquisitiva de dominio por parte de su representado, en virtud de que el mismo cumplió con las condiciones que para ese efecto exige la ley. En parecidas circunstancias también se refiere a la violación del artículo 1696 de la citada excerta legal.

En sentido contrario, los apoderados judiciales de la parte demandante, en escrito que corre de fojas 273 a 276, (concretándonos a mencionar en cuanto a esta primera causal) sostienen que, efectivamente el Tribunal Superior determinó, en base a la sana crítica, que a la inspección judicial no se le podía asignar valor probatorio, por las razones que allí expresa, por ejemplo: que la referida diligencia no determinaba cuál era el área del inmueble, sus linderos, así como el recorrido efectuado en el mismo. Además, sostiene el opositor que se encontraron contradiciones entre lo fallado por el juzgador de primera instancia y lo que dice el informe o certificación expedido por Reforma Agraria, Sección de Chepo.

POSICIÓN DE LA CORTE

Observa la Sala que el cargo que se le atribuye al fallo cuestionado, lo constituye el error de derecho en la valoración del informe judicial, en base a que el mismo no había sido valorado bajo el criterio de la sana crítica que preceptúa el ordenamiento jurídico (artículo 770 del Código Judicial), sosteniendo, además, que con dicha diligencia se probaba la posesión ejercida por el demandado sobre el inmueble antes mencionado, por el tiempo que prescribe la ley.

La comentada diligencia judicial le fue comisionada al Juez Municipal del Distrito de Chepo, por el juzgado de primera instancia, en virtud de que el inmueble se encuentra en ese lugar y, una vez diligenciado, fue devuelto al tribunal de origen mediante Nota N° H/356 de 24 de mayo de 1993 (f. 74).

En primer lugar, las fojas señaladas por el accionista (55-56), sobre la existencia del dictamen pericial, se refieren más bien a la instalación de los peritos, tanto el designado por el tribunal como el de la actora, una vez que éstos realizaron el recorrido en el inmueble. Más adelante, es decir, de fojas 58 a 61, es que se aprecia el informe requerido.

De la lectura del peritaje, se colige que, los señores peritos detallan los siembros encontrados así: Maíz en aproximadamente 15 hectáreas; arroz en 10 hectáreas aproximadamente; también los otros rubros de ñame, plátano, yuca, cañas, tomate, culantro, ají y achiote, especificando la cantidad de mata de cada una de ellos (f. 59). De igual forma, se detallan los árboles frutales,

consistentes los mismos en: naranja, limones, mangos, nance, papayos, pipas, pixbae, granadilla, mamey, anón y aguacate. En cuanto a los animales domésticos encontrados, señalan los siguientes: gallinas, patos, perros, gatos y caballos.

Se aprecia también a foja 60 del comentado informe la existencia de 20 a 25 hectáreas destinados a la siembra de pasto utilizado en el pastoreo vacuno, existiendo la cantidad de quince (15) reses. Por último, se incluye en el inventario, una casa de madera con techo de zinc y piso de tierra, asignándole un valor de MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.1,500.00); un rancho con un jorón y dos jorones para almacenar productos agrícolas. Se adjuntó a este informe, una serie de fotografías que corren de fojas 62 a 73 del expediente. Es sobre esta prueba pericial que el casacionista ataca al fallo de segunda instancia, al considerar que con ella se ha demostrado que ha operado la prescripción de dominio a su favor.

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 1668 del Código Civil señala expresamente que se adquiere por prescripción el dominio y derechos reales, de conformidad con las condiciones determinadas por ley, de la siguiente forma:

1. Por prescripción ordinaria para lo cual se necesita poseer la cosa con buena fe y justo título (art. 1678 del C. C.) y;

2. Por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, cuya posesión debe ejercerse de manera ininterrumpida durante 15 años, sin necesidad de título ni de buena fe y sin distinción entre presentes y ausentes (artículo 1696 C. C.).

Como premisa, es facultad de la Sala determinar, si efecivamente se ha dado cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 1696 antes indicado, ya que estamos en presencia de un proceso de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio.

Al analizar el informe pericial, cuyo error de valoración censura el casacionista y a cuyo contenido y descripción ya hicimos alusión con anterioridad, se observa que dicho informe no contiene elementos comprobatorios de que el prescribiente haya ejercido la posesión con ánimo de dueño por 15 años, como lo exige la ley. Por el contrario, dicho informe se refiere a los siembros existentes, y las cantidades de hectáreas utilizadas en los mismos, pero, no determina las edades aproximadas de los mismos, a objeto de poder establecer el tiempo en que el prescribiente haya ejercido los derechos de dueño que reclama. Por otra parte, no hay constancia en el expediente que dichos peritos hubieren sido preguntados ni repreguntados en la fase procesal respectiva con relación al informe rendido.

El tribunal de la causa sí apreció la diligencia cuestionada contrastándola con las declaraciones rendidas por los testigos aducidos por el casacionista y consideró que ninguno de ellos determinaron con precisión la ocupación de la totalidad de la finca por el señor LEONCIO ELÍAS CASTILLO. En la que se aprecia una cantidad sustancialmente menor ocupada por LEONCIO ELÍAS CASTILLO en comparación con el tamaño de la finca. Además, la sentencia impugnada se refiere a una certificación expedida por el Jefe Regional de Reforma Agraria en la que se hace constar que a petición del señor LEONCIO ELÍAS CASTILLO se hizo una inspección al terreno ubicado en la localidad de la Loma de Corpus Cristi, Corregimiento de Las Margaritas, Distrito de Chepo, el cual tiene una superficie de 40 hectáreas.

Es importante resaltar que el prescribiente está solicitando, en el presente proceso, la adjudicación de la totalidad de la Finca N° 44,682 y de conformidad con la certificación expedida por el Registro Público (f. 4 vuelta), la misma tiene una superficie de 89 hectáreas 535 metros cuadrados con 72 decímetros cuadrados y, de acuerdo a las constancias en autos, no ha probado la usucapión.

Como primera disposición infringida, señala el casacionista el artículo 770 que ha sido violado en forma directa, al no valorar el juzgador las pruebas, según la regla de la sana crítica.

En cuanto a la facultad que le otorga el artículo 770 al juzgador,ha dicho el procesalista panameño doctor JORGE FÁBREGA PONCE:

> "El Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendiente a asegurar el más certero y eficaz razonamiento (Fundamentos del Derecho Civil)".
> Jorge Fábrega P., "ESTUDIOS PROCESALES, Tomo II, p. 933.

La obligación de aplicar el sistema de la sana crítica no significa que las partes están relevadas de aportar al proceso los elementos procesales destinados a la convicción del juzgador, los cuales permitirán a éste fallar ajustándose a la verdad de los hechos, ni que el juzgador le dé valoración sólo a una prueba, desechando las demás. Es precisamente lo que no hizo el juzgador y que ha sido mal interpretado por el casacionista, en el sentido de que considera que el fallo se basó únicamente en las pruebas testimoniales y no así en el dictamen pericial. En ese sentido, el juzgador acertadamente falló que dicha prueba no justifica la posesión ininterrumpida y pacífica sobre el globo de terreno cuya prescripción adquisitiva de dominio solicita, pues, con las pruebas aportadas por el mismo prescribiente, esto es, con los testimonios aducidos y la certificación aportada en el período de contrapruebas que fuere expedido por el Jefe Regional de Reforma Agraria, es que el juzgador determinó que no le asiste el derecho al prescribiente, contrastando la inspección judicial con auxilio de peritos, así como otras pruebas aportadas válidamente al proceso. De otra parte, los testigos no son concordantes en la cantidad de terreno poseído por el demandante y más aún, la inspección realizada por Reforma Agraria, cuya certificación de la medida superficiaria no se ajusta a la inscrita en el REGISTRO PÚBLICO. En ninguna parte de la inspección judicial se acreditó el tiempo ni la naturaleza ininterrumpida o no de la posesión.

Por otro lado, vale la pena destacar los otros medios probatorios en que se basó la sentencia, consistentes en las declaraciones aportadas por la parte demandada, cuyos testimonios, además de desvirtuar la supuesta usucapión del prescribiente, coinciden en que dichas tierras fueron utilizadas por miembros de las fenecidas Fuerzas de Defensa hasta el año 1989 y, posteriormente fue invadido dicho inmueble por precaristas. Significa ello, que no se ha cumplido con otro de los requisitos esenciales para que se de la prescripción extraordinaria de adquisición de dominio sobre el bien inmueble, esto es, por su posesión no interrumpida durante quince (15) años.

Es decir, de las pruebas valoradas no se desprende la ocupación de la totalidad de la finca que se pretende prescribir, ni que la ocupación haya sido en forma ininterrumpida.

En la obra "Caducidad, prescripción extintiva y usucapión" de JOSÉ PUIG BRUTAU, p. 24, señala:

> "Por consiguiente, en la prescripción extraordinaria, a cambio de extremar la duración del plazo, no se exigen los demás requisitos, que tratándose de inmuebles son la buena fe, el justo título y la distinción entre años transcurridos entre presentes o entre ausentes. Sin embargo, la prescripción extraordinaria no dispensa de los demás requisitos, como es la posesión en concepto de dueño (sentencia de 19 de noviembre de 1910).
>
> (PUIG BRUTAU, JOSE. "Caducidad, prescripción extintiva y usucapión"; tercera edición actualizada y ampliada, Barcelona-España, 1996; pág. 24).

La Sala no accede a las pretensiones del recurrente para que se case la sentencia de segunda instancia, en virtud de que no prosperan los cargos de injuricidad alegados por el casacionista en la primera causal.

La segunda causal invocada por el recurrente, error de hecho en la existencia de la prueba, está fundamentada en dos (2) motivos. El primero de ellos señala que el tribunal desconoció e ignoró un medio probatorio aportado en el proceso. En el segundo motivo indica que la prueba desconocida lo es el dictamen pericial rendido por los peritos DONADO PAREDES y OLMEDO CÓRDOBA nombrados por el tribunal y la parte actora, respectivamente.

Ahora bien, dicha prueba fue valorada por la sentencia recurrida, como se demostró del examen de la causal anterior, que era la de error de derecho en la valoración de la misma prueba, lo que al mismo tiempo no puede fundamentar una causal que la contraríe, como lo es la causal de error de hecho en la existencia de la prueba que presupone que la prueba no ha sido valorada por el tribunal.

En consecuencia, la Sala Civil de la Corte comparte el criterio del sentenciador colegiado, y considera que el cargo no prospera, por lo que esta segunda causal de fondo tampoco está justificada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 1° de julio de 1996, proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio propuesto por LEONCIO ELÍAS CASTILLO contra RAQUEL VALDES DE HERDON.

Las obligantes costas de casación se tasan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) Y AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) LE SIGUE A AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso ordinario de mayor cuantía que **CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA)** le sigue a **AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A.** los apoderados de ambas partes han promovido el recurso extraordinario de casación con el objeto de impugnar la sentencia dictada en esta causa el 30 de enero de 1997, mediante la cual se modificó la proferida por el juzgador de primer grado el 31 de enero de 1996.

La Sala admitió los dos recursos y una vez surtidos los trámites previos cábele entrar a la solución de la encuesta, paso al cual de inmediato se procede.

Recurso de la parte demandada.

Se ha invocado como causal la infracción de las normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

La censura le atribuye a la sentencia no haber apreciado ni valorado el informe del peritaje ni su diligencia de entrega (consultables de fojas 70 a 81 del expediente), demostrativas de la falta de objeto del contrato; la prueba documental visible a foja 30 que, en su opinión, evidencia la simulación y la amenaza grave e injusta que indujo a la firma del contrato cuya nulidad se solicita; y la confesión de simulación de la obligación hecha por la parte

demandante en el alegato de conclusión de primera instancia (fs.87).

Enuncia el recurrente que, de haberse apreciado las mencionadas pruebas, se habría declarado probada la excepción de nulidad del contrato por falta de objeto, así como la denegación de la pretensión formulada por COFINA en este juicio.

Como normas legales infringidas por la sentencia se citan las siguientes:

Del Código Judicial se señala el artículo 769 en lo atinente a la omisión del tribunal en apreciar el informe pericial, a través del cual supuestamente se demostró la absoluta inexistencia de objeto del contrato celebrado entre las partes y que hubo simulación para contratar. Se dice, así mismo, que la norma no fue observada al producirse ausencia de valoración de un documento enviado por COFINA a la demandante, donde se le amenazaba con presentar el caso ante la Dirección de Recuperación Patrimonial (DRP) de la Contraloría General de la República, hecho indicativo de que el contrato utilizado en este juicio es producto de la simulación, logrado bajo presión injusta, fuera de carecer por completo de objeto. Por último se acusa al fallo de violar la norma por haber hecho abstracción de la confesión atribuída a la parte actora, mediante la cual ésta acepta como cierto que empleó el trámite de un contrato simulado para ajustar un precio de una transacción diferente, como consta a foja 87 del expediente.

Adicionalmente se le endilga a la sentencia la infracción del artículo 882 del Código Judicial encargado de definir los términos en que acontece el fenómeno de la confesión judicial, afirmándose que ésta se produjo en el proceso sin que fuese tomada en cuenta por el tribunal, quien de haberlo hecho se hubiese visto obligado a admitir que, a instancias de COFINA, se simuló la venta de unos moldes de griferías totalmente destruidos e inservibles, con la finalidad de justificar un contrato cuyo propósito era ajustar el precio de otro celebrado años atrás entre las partes.

En lo que atañe al Código Civil se denuncia la infracción del artículo 1112 (requisitos de validez de los contratos), porque el contrato carecía de objeto cierto y, en consecuencia, también de causa. Se cita, por último, el artículo 1141 del Código Civil, aduciéndose que se imponía la declaratoria de nulidad absoluta del contrato por faltar "algunas de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia".

Planteado el recurso en esos términos es imperativo proceder al estudio cuidadoso de los medios de prueba que la censura ha indicado como no tomados en consideración por la sentencia; en primer lugar, para establecer si, en efecto, el juzgador no los tuvo en cuenta y, luego, para verificar en qué medida esas probanzas, eficazmente, tienen peso y valor en el sentido de que su exclusión incidió ciertamente en la conclusión a que arribó el juzgador en su sentencia.

Tenemos que el primero de esos medios probatorios es el informe pericial al que, por sí solo, el recurrente le asigna la virtualidad de demostrar la inexistencia absoluta del objeto del contrato. Un examen detenido del informe pericial no revela, como pretende el casacionista, que el contrato haya carecido de objeto y, por ende, de uno de los requisitos esenciales, en cuya ausencia se produce la nulidad absoluta del contrato. Lo que informan los peritos en esa diligencia es algo diferente. El peritaje versó sobre el valor económico y la utilidad asignados por ellos a la cosa dada en venta a través del contrato, que no es una materia asimilable a la supuesta carencia de objeto o a la inexistencia absoluta de éste dentro del contrato.

En principio, no se debe olvidar que pueden ser objeto de un contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres. Las cosas que se dieron en venta y que para el comprador constituyeron el objeto del contrato -los moldes de grifería- no sólo existían, sino que podían también ser lícitamente comprados o vendidos por quienes celebraron el contrato. No es aceptable la tesis sostenida por la parte demandada de que el peritaje ha demostrado que la cosa vendida no existiese o haya faltado y tampoco el peritaje es prueba de que el contrato haya carecido de causa, si entendemos por esta última la prestación que cada una de

las partes está obligada a cumplir como resultado del acuerdo de voluntades. Es bien sabido que la causa de la obligación del vendedor está representada por su obligación de entregar la cosa vendida y la del comprador por su obligación de pagar el precio que se haya pactado.

Es más, del peritaje practicado no es siquiera dable desprender que le faltase a la cosa dada en venta alguno de los requisitos exigibles para la validez de la cosa vendida: que ésta sea comerciable o lícita; que sea real o posible; que sea determinada o determinable; y que no le pertenezca al comprador.

No es posible probar, mediante el peritaje practicado, la inexistencia del objeto del contrato, factor que convierte en irrelevante el cargo con que persigue el casacionista fulminar a la sentencia. Que en el fallo no se hubiese hecho alusión expresa al contenido del peritaje en nada ha podido influir respecto a lo dispositivo de la sentencia proferida.

En relación con la segunda pieza probatoria identificada en los motivos del recurso como no valorada por el tribunal, o sea, la consultable a foja 38 del expediente, y con la cual, según denuncia la censura, se evidencia la simulación del contrato celebrado, al igual que la amenaza grave e injusta que obligó a la demandada a firmarlo, viciándose de esa forma el consentimiento y ocasionándose la nulidad del acuerdo de voluntades, el cargo se desvanece y se desvirtúa mediante una simple lectura de aquella parte de la sentencia que a continuación de transcribe:

> "En cuanto a la carta que reposa a fojas 38, advertimos que, en primer lugar la misma no está dirigida al señor Hermann Uribe Peralta sino al Licenciado Rogelio Fábrega de AGUA Y GAS y AQUAGAS; y, además si bien en la misma se concede un plazo de cinco días para que realice un ajuste a un precio de venta y se dice que de no hacerse se remitirá el caso a la Dirección de Recuperación Patrimonial, tal amenaza no era injusta o contraria a derecho, si tomamos en cuenta que, según la declaración del Licenciado Antonio Bolívar Cisneros, Gerente de COFINA en la fecha del contrato, en el contrato original celebrado entre las partes no se habían incluido los moldes para grifería y no obstante los mismos estaban en poder de la demandada. Es decir, que según dicha declaración la demandada tenía en su poder bienes de una entidad del Estado sin que se le hubiesen vendido y sin que hubiese pagado por ellos. Es decir, que la declaración del señor Antonio Bolívar lejos de acreditar la intimidación, aclara que la carta de fojas 38 no constituía una amenaza injusta o contraria a derecho" (pág. 192).

La prueba no sólo fue objeto de consideración expresa; además, y por añadidura, fue sometida a una exhaustiva, acertada y correcta valoración.

Réstanos analizar el tercer cargo formulado en el recurso. Es aquel referido a la inadvertencia cometida por el tribunal de la "confesión simulada de la obligación", que la censura le imputa a la demandante y con la cual dícese aceptado que el contrato se celebró "para cubrir o ajustar una supuesta deuda anterior"; hecho indicador del vicio de nulidad alegado por la parte demandada.

La pretendida confesión es ubicada por el casacionista a la altura de la foja 87 del expediente; una de las páginas que contienen el alegato de conclusión presentado por el apoderado de la parte actora en primera instancia, ante el Juez Cuarto del Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil.

Como el recurrente no precisa los términos exactos en que supuestamente se produjo la "confesión", la Sala se ha tomado el trabajo de leer el contenido de la página citada. Allí se explican los antecedentes y las motivaciones que llevaron a las partes a concertar el contrato, pero en cuanto a la simulación denunciada por la censura nada puede deducirse de ese escrito. Lo sostenido por el recurrente queda al nivel de una mera interpretación subjetiva elaborada por la parte demandada, la cual, fuera de acomodar a sus intereses, no es realmente comprobable en autos, ya sea que se analice el alegato de conclusión, ya sea que, como lo cumplió el Tribunal Superior, se analicen los testimonios rendidos por

los señores ROBERTO EDUARDO CORDOBES CARDOZE, JOSÉ AGUSTÍN ARANGO Y GENARINO ROSAS, con cuyas declaraciones infructuosamente, en la primera y en la segunda instancia del proceso, trató la parte demandada de demostrar el vicio de nulidad del cual se ha acusado al contrato.

No prospera por no ser apta la causal empleada por la parte demandada y, por lo tanto, no se casa la sentencia censurada.

Recurso de la parte demandante.

El recurso interpuesto por COFINA es en el fondo y se estructura a partir de la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa.

El casacionista explica su inconformidad con la sentencia precisando que el Primer Tribunal Superior de Justicia incurrió en la violación directa del artículo 993 del Código Civil (la mora del deudor en las obligaciones que impliquen pago de dinero da lugar a la indemnización de daños y perjuicios consistente en los intereses convenidos) cuando, a pesar de condenar a la parte demandada a pagarle la obligación por importe de B/.25.000.00 en concepto de precio de la compra venta, modificó el fallo del juez a-quo eliminándole la condena en cuanto al pago de los intereses pactados que habían sido reconocidos en la sentencia de primera instancia.

Sobre el particular se impone observar lo que se dejó plasmado en las sentencias de primer y de segundo grado respecto a esta materia.

La negativa del Tribunal Superior es el resultado del razonamiento que se basa en que, si bien es cierto que en el contrato se pactaron intereses al nueve por ciento (9%), el juez a-quo no estableció la cantidad líquida de la condena en ese concepto, delegando esa tarea en la Secretaría del Tribunal, a quien se le encargó de efectuar ese cálculo. A juicio del Tribunal Superior la condena de intereses debe hacerse en la sentencia y no dejarse al arbitrio del Secretario del Tribunal. Explica el Tribunal Superior que el Secretario lo único que se encuentra autorizado a calcular, conforme el artículo 1056 del Código Judicial, son las costas, y deduce que, como la sentencia dictada en primera instancia no fue apelada por la parte actora, no le está permitido a esa Colegiatura liquidar los intereses a pagar por la parte demandada, en virtud de la aplicación del principio de la "reformatio in pejus", de suerte tal que decidió, entonces, eliminar la condena de intereses que fue declarada en la sentencia de primera instancia.

Realmente, no le es posible a la Sala entender el confuso razonamiento elaborado por el Tribunal Superior para eximir a la demandada del pago de los intereses pactados. Más claro y explícito no pudo ser el juez de la causa, cuando en la parte resolutiva de la sentencia dictada dijo de manera textual lo siguiente:

> "En mérito de lo expuesto, el suscrito JUEZ SUPLENTE CUARTO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONDENA a la sociedad anónima AQUAGAS DE PANAMÁ, S. A. al pago de la suma de VEINTICINCO MIL BALBOAS (B/.25,000.99) más los intereses pactados del (9%) anual causados en concepto de mora, en favor de LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA)" (fs. 112).

Fuera de que es contrario al sentido común responsabilizar a la parte actora de no haber apelado una sentencia que le concedía todo lo pedido y derivar de ese hecho la aplicación de la regla "reformatio in pejus", tampoco es verdad que el juez del conocimiento haya delegado en el Secretario del Juzgado la fijación de los intereses para que los liquidara a su arbitrio, como deja entrever el fallo atacado. El juzgador de primera instancia condenó a la parte demandada a pagar los intereses que lícitamente se pactaron, fijándolos como correspondía en el nueve por ciento (9%). El Secretario, como es elemental, se encargaría simplemente de establecer, conforme al tiempo transcurrido desde la mora y al capital adeudado, el monto de esos intereses; suma que no era

materialmente posible fijar en la sentencia.

La actuación del Tribunal Superior violó, a todas luces, lo establecido en el artículo 993 del Código Civil y como consecuencia de la injuricidad cometida la Sala se ve precisada a casar la resolución atacada y a dictar sentencia de reemplazo en los términos que a continuación se exponen.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de fecha 30 de enero de 1997, dictada por el Tribunal Superior y en su lugar CONFIRMA la sentencia de primera instancia dictada el 31 de enero de 1996, por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CELEDONIO MONCAYO QUIRÓS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE REINHILDE MONSBERGER DE MONCAYO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de 14 de abril de 1998 (visible de fojas 562-564), esta Sala de la Corte ordenó la corrección del recurso de casación propuesto por el licenciado Bolívar Dávalos Moncayo, apoderado judicial de **CELEDONIO SEGUNDO MONCAYO QUIRÓS**, contra la sentencia de 15 de septiembre de 1997 dictada por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de divorcio que le sigue **REINHILDE MONSBERGER DE MONCAYO.**

Se procede, entonces, al examen del nuevo escrito de casación, que consta a fojas 566-568, en atención a las deficiencias que fueron señaladas por la Corte en la aludida resolución, para determinar si fueron debidamente enmendadas.

En primer lugar, vemos que la causal no fue corregida apropiadamente, pues en lugar de subsanar el error indicado, consistente en completar los términos en que se había enunciado la causal, lo que hizo el recurrente fue introducir parte de otra causal probatoria, pues ahora se establece como causal la "INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO POR ERROR DE **HECHO** SOBRE LA **APRECIACIÓN** DE LA PRUEBA LO CUAL HA INFLUIDO SUSTANCIALMENTE EN LO DISPOSITIVO DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA" (énfasis y subrayado de la Sala).

Resulta evidente que se están invocando las dos causales probatorias al mismo tiempo, lo cual es totalmente improcedente.

En el primer motivo, si se hizo la corrección ordenada pues se hace referencia a una prueba no valorada (declaraciones testimoniales).

Sin embargo, en el tercer apartado del recurso, al igual que el primero, no se cumple con lo ordenado por la Sala en cuanto a la corrección requerida, pues se le indicó al casacionista que expresara el respectivo concepto de la infracción de los artículos 769, 770 del Código Judicial y 114 del Código Civil; pero lo que se hizo fue eliminar del recurso los artículos 769 y 114 e introducir un precepto que no había sido mencionado en el escrito inicial de casación.

La referida situación es inadmisible conforme a la técnica de este recurso, ya que, cuando se ordena la corrección, el recurrente debe limitarse a modificar lo señalado por la Sala, sobre todo, en el apartado dedicado al enunciado de las

normas de derecho, donde no es permisible que el recurrente en esa fase elimine o introduzca diversas disposiciones a su antojo. En ese sentido, lo que agrava aún más el presente caso es que fue suprimido el obligante precepto de carácter sustantivo que, insustituiblemente tendría que fundamentar el supuesto del yerro probatorio.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por CELEDONIO MONCAYO QUIRÓS contra la sentencia de 15 de septiembre de 1997, dictada por el Tribunal Superior de Familia, dentro del proceso de divorcio que le sigue REINHILDE MONSBERGER DE MONCAYO.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretarial

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSÉ CENOBIO ARJONA, NAYLPA, S. A., VASE, S. A. ROMULO ARROCHA Y ODOARDO VÁSQUEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE JOSÉ CENOBIO ARJONA LE SIGUE A NAYLPA, S. A. VASE, S. A., ROMULO ARROCHA Y ODOARDO VÁSQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso ordinario protagonizado por JOSÉ CENOBIO ARJONA (demandante) y NAYLPA, S. A., VASE, S. A., ROMULO ARROCHA y ODOARDO VÁSQUEZ (demandados), tanto el apoderado judicial de la parte actora como el de VASE, S. A. y de ODOARDO VÁSQUEZ, han acudido a la Corte empleando el recurso extraordinario de casación. Ambos recurrentes lo han hecho para impugnar la resolución de 22 de agosto de 1997 dictada en segunda instancia por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Mediante la sentencia se reformó la dictada en primer grado, proferida por el Juez Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial quien condenó a VASE, S. A. y/o ODOARDO VÁSQUEZ a pagarle a JOSÉ CENOBIO ARJONA la suma de B/.3,500.00 y negó la demanda propuesta contra los otros dos demandados. El Primer Tribunal Superior de Justicia modificó el fallo anterior en el sentido de condenar adicionalmente a VASE, S. A. y a ODOARDO VÁSQUEZ a pagar intereses legales por un monto de B/.1,260.00 y lo confirmó en todo lo demás.

Recurso de la parte demandante.

Este recurso se propone fundado en la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En el primero de los motivos en que vienen formulados los cargos de injuricidad atribuidos al fallo, se expone que el tribunal pasó por alto la prueba documental visible a foja 80 del expediente, descrita como una nota del Banco General donde se informa que el cheque de gerencia N° 255125 que guarda relación con los documentos que constan a fojas 35, 36 y 37, fue depositado en una cuenta del The Chase Manhattan Bank. Se menciona igualmente otra nota del Banco General obrante a foja 84 que informa que el cheque fue endosado y depositado en la cuenta N° 76611306899. Añade la no valoración de otra nota que reposa a foja 89 donde The Chase Manhattan Bank informa que la última cuenta pertenece a ORLANDO E. DE VICENTE CEDEÑO o ENRIQUE DE VICENTE CEDEÑO y a la esposa de éste, de quien se dice es el cuñado del demandado ODOARDO VÁSQUEZ. Considera el recurrente que si se hubiesen tomado en cuenta esas pruebas, relacionándolas entre sí, se hubiese tenido que aceptar que existe solidaridad

obligacional entre todos los demandados para con la parte actora.

El segundo motivo se fundamenta en que el tribunal no tomó en cuenta la prueba documental que corre de fojas 343 a 715 del expediente, relativa a los documentos en donde consta "la serie de denuncias y acusaciones criminales presentadas y tramitadas en contra de ODOARDO VÁSQUEZ por el delito de estafa, lo que indica que es costumbre; pero que demuestra la conducta dolosa del demandado de no cumplir el supuesto (sic) contrato y quedarse con el dinero abonado por el demandante". (fs.842)

De los anteriores cargos extrae el casacionista la conclusión de que, en virtud del error probatorio, no se le aplicaron a todos los deudores demandados las normas de derecho que correspondían, a fin de que respondiesen por estar solidariamente obligados a pagar daños y perjuicios e intereses.

Se señalan como violados los artículos 769 del Código Judicial y 1027, 986, 991 y 992 del Código Civil.

Como se aprecia, la inconformidad planteada frente a la sentencia está sencillamente reducida a que en ninguna de las dos instancias del proceso se condenó a todos los sujetos contra los cuales se interpuso la demanda. En efecto, la sentencia censurada condenó únicamente a ODOARDO VÁSQUEZ y a VASE, S. A. a pagar, en favor de JOSÉ CENOBIO ARJONA, las sumas de dinero reclamadas.

Las razones que el Tribunal Superior adujo para adoptar su decisión y no conceder todo lo peticionado por la parte actora quedaron expuestas en los siguientes términos:

> "... esta Superioridad comparte, parcialmente, el criterio de los recurrentes demandados, ya que no consta en todo el proceso, prueba alguna que acredite, fehacientemente, que entre la empresa Naylpa, S. A., su representante legal Rómulo Arrocha, y la empresa Vase, S. A. , y su representante legal Odoardo Vásquez se haya realizado alguna cesión referente al Contrato de Promesa de Compra venta, suscrito entre Naylpa, S. A., y el demandante José Cenobio Arjona". (Fs. 788).
>
> Más adelante agrega:
>
> "Con respecto al argumento de la representación judicial de la parte actora, lamentablemente, debe esta Superioridad, por la escasez de pruebas en primera instancia, y por lo abundante e inconducentes de las aportadas en segunda instancia, desestimar sus exigencias. Nótese, pues, que en este proceso no se acreditó la cesión del contrato, ni que el pago se haya hecho a la representación del contratante Naylpa, S. A., es decir, que la llamada diputación para el pago a nombre de algún representante, entre otros, convencional no se probó". (Fs. 789).

No obstante, con el propósito de esclarecer este punto de la controversia, la Sala se detendrá en el examen de los documentos señalados en el primer motivo del recurso bajo el cargo de no haber sido tomados en consideración por la sentencia.

El examen de las piezas que reposan a fojas 80, 84 y 89 no proporciona ningún elemento en capacidad de demostrar la supuesta solidaridad obligacional de NAYLPA, S. A. o de ROMULO ARROCHA respecto a la obligación que se demanda. En esos documentos no se hace ninguna referencia a hechos que siquiera indiciariamente relacionen a la persona jurídica o a la persona natural, que en este proceso resultaron absueltos, con las pretensiones que en su contra demandó la parte actora. Con esas pruebas se acredita que VÁSQUEZ, representante legal de VASE, S. A., recibió el pago de B/.3,500.00 que hizo ARJONA, pero no que el primero lo hubiese transferido a NAYLPA, S. A. o a su representante legal ARROCHA. Lo cierto es que no existe razón alguna para concederle aptitud al cargo como ha sido formulado en casación.

En cuanto a la denuncia contenida en el segundo motivo del recurso, baste con dejar indicado que se trata de un abundante y exagerado número de documentos en donde se acumulan las denuncias y procesos criminales que han sido interpuestos contra el señor ODOARDO VÁSQUEZ. El recurrente en ningún momento se tomó el trabajo de explicar cómo, mediante dichos documentos, se llegaba a establecer la responsabilidad solidaria que podía haberle cabido a los demandados NAYLPA, S.A y a ROMULO ARROCHA, a resultas del pago indebido que hiciera la parte actora y que recibió el señor ODOARDO VÁSQUEZ. Al igual que lo fueron para el Tribunal Superior, para la Sala tales documentos son por completo impertinentes e inconducentes a los propósitos de probar la responsabilidad solidaria de ROMULO ARROCHA y de NAYLPA, S. A.

No existe, a juicio de esta Sala de casación, justificación jurídica para acoger el recurso interpuesto por la parte demandante y se pasa de inmediato a decidir el propuesto por los demandados.

Recurso de casación de los demandados.

En representación de los demandados ODOARDO VÁSQUEZ y VASE, S. A. se propone casación en el fondo a partir de la causal de infracción de normas sustantivas de derecho, por violación directa de la norma sustantiva de derecho, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Tres son los motivos en que se han expuesto los cargos. Se afirma en ellos que la condena mantenida por el fallo de segunda instancia responsabiliza a VÁSQUEZ y a VASE, S. A. de una relación contractual de la que no son partes. Se sostiene que la relación contractual generadora de la obligación juzgada fue de única y exclusiva responsabilidad de la demandada NAYLPA, S. A., quien resultó exonerada por el fallo. Esto ha provocado la infracción directa de los artículos 1105 y 1108 del Código Civil (del contrato y sus efectos); y del artículo 19 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas.

La responsabilidad de los recurrentes VÁSQUEZ y VASE, S. A., así como la absolución de la empresa NAYLPA, S. A. y de su representante legal ROMULO ARROCHA, la dedujo el Tribunal Superior de las pruebas que militan en el proceso. Sobre el particular, en la sentencia se tuvo el cuidado de aclarar que "consta de manera indiscutible que ODOARDO VÁSQUEZ, en representación de la empresa VASE, S. A., cobró indebidamente y de mala fe la suma cierta de dinero que por error le entregó el demandante JOSÉ CENOBIO ARJONA" (fs.788). Para extraer dicha conclusión el Tribunal se fundó en la prueba documental visible en la foja 35 que no fue tachada ni objetada, y en la evidente mala fe con que actuaron ambos recurrentes, quienes, para ser consecuentes con su tesis de que no se encontraban vinculados por una relación contractual con el demandante, no tenían porqué haber aceptado el pago que recibieron indebidamente.

En el presente caso, el Tribunal Superior simplemente se limitó a aplicar lo dispuesto en los artículos 1637 del Código Civil: "Cuando se recibe alguna cosa que no había derecho a cobrar, y que por error ha sido debidamente entregada surge la obligación de restituirla"; y así mismo le dio cumplimiento a lo consignado en el artículo 1638 de ese cuerpo legal, pues como correspondía, habiendo mediado mala fe de parte de quienes recibieron indebidamente el dinero, los condenó a su devolución y al pago de los intereses legales.

Por último, en cuanto a la supuesta responsabilidad alegada contra los otros demandados, comparte la Sala en todo lo sostenido por el Tribunal Superior en su sentencia: "en este proceso no se acreditó la cesión del contrato, ni que el pago se haya hecho a la representación del contratante NAYLPA, S. A." (fs.789); de allí que no cabe reconocerle validez jurídica a las razones aducidas para impugnar el fallo desde ese punto de vista.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 22 de agosto de 1997, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario que JOSÉ CENOBIO ARJONA le sigue a NAYLPA, S. A., VASE, S. A., ROMULO ARROCHA y ODOARDO VÁSQUEZ.

Las costas de cada recurrente se compensan por las del otro.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSÉ MANUEL VARELA CLEMENT Y LUIS EDUARDO VARELA CLEMENT; ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE JOSÉ MANUEL VARELA CLEMENT Y EDUARDO VARELA CLEMENT LE SIGUE A FRANCES MOYER Y ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante sentencia de 20 de agosto de 1996, dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, se ADICIONO a la parte resolutiva de la Sentencia N° 241 de fecha 4 de octubre de 1995, proferida por el JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, en el sentido de ABSOLVER a FRANCES MOYER de la demanda principal y CONFIRMO en todo lo demás.

Es contra esta sentencia que tanto la firma forense SUCRE, ARIAS, CASTRO & REYES, en calidad de apoderados judiciales de los señores **JOSÉ MANUEL VARELA CLEMENT y LUIS EDUARDO VARELA CLEMENT** han promovido recurso de casación, como la firma forense ALFARO, FERRER, RAMÍREZ & ALEMÁN, apoderados judiciales de **FRANCES MOYER y ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ.**

Una vez recibido el expediente contentivo del recurso extraordinario, esta Superioridad, en resolución dictada el 1° de agosto de 1997, ordenó la corrección de los recursos formulados por ambas partes. En cuanto al recurso de casación formulado por la parte demandante, se le hicieron los siguientes señalamientos: En la primera causal probatoria. debía indicar con precisión la prueba que no se tomó en cuenta, a objeto de permitir al tribunal de casación, valorar del mérito de la censura. En cuanto a la segunda causal correspondiente a la infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa, la cual apoyó en dos motivos. En el primero de ellos, que la sentencia recurrida interpretó mal el contrato; en tanto que en el segundo motivo expresaba que el tribunal de segunda instancia no tomó en cuenta que el contratista debía devolver el inmueble arrendado en las mismas condiciones que le fuere entregado. Con respecto a lo anterior, esta Sala le indicó que en el primer motivo se censuraba la actuación del juzgador, en el sentido de que se le dió una incorrecta interpretación al contrato, advirtiéndose que toda interpretación tiende a reconstruir el concreto pensamiento y voluntad de las partes que lo hayan suscrito, así como las declaraciones realizadas en la regulación de intereses patrimoniales en que consiste todo contrato. En consecuencia, debía indicarse en la corrección ordenada, en qué consistió la defectuosa interpretación del contrato y si dicha interpretación guarda relación con la intención de las partes contratantes o con el sentido de las declaraciones contenidas en el contrato.

En cuanto al recurso de casación formulado por la parte demandada, estimó la Sala que el casacionista debía manifestar al tribunal cómo la voluntad concreta contenida en el programa de regulación de intereses patrimoniales en que consiste todo contrato, ha sido desatendida por el fallo impugnado, al negarle el alcance y sentido que la cláusula respectiva presenta.

Dentro del término que consagra la ley, para la presentación del recurso corregido, ambas partes cumplieron con lo ordenado, por lo que, procedió la Sala a admitir el recurso de casación, mediante resolución de 21 de enero de 1998 (fs.

1082).

ANTECEDENTES

Los señores JOSÉ M. VARELA y LUIS E. VARELA C., promovieron proceso ordinario contra FRANCES MOYER y ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, a objeto de que fueran condenados solidariamiente a pagar a los demandantes la suma de cien mil balboas o por tasación pericial, en concepto de daños y perjuicios, más intereses, costas y gastos del proceso. Los elementos fácticos que sirvieron de base para la pretensión, obedeció a un contrato de arrendamiento con opción de compra, suscrito orginalmente entre CATALINA I. LEWIS y SABINE G. LEWIS, en calidad de propietarias del inmueble distinguido con el N° 11.791, inscrito al folio 498, tomo 341 de la provincia de Panamá, el cual debía ser utilizado para fines de docencia. La referida finca fue adquirida por los demandantes por medio de sucesión testamentaria.

El JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, donde quedó radicado el proceso, dió traslado a los demandados, siendo representados los mismos, por la firma forense ALFARO, FERRER, RAMÍREZ & ALEMÁN quienes dieron contestación a la misma (fs. 37-43), negando las pretensiones de la parte demandante.

Los apoderados judiciales de la parte demandada, presentaron demanda de reconvención, tal como se aprecia en el escrito que corre de fojas 99 a 103 del expediente, dándosele traslado de conformidad al procedimiento civil, a los demandados en reconvención, quienes negaron las pretensiones del actor.

Concluida las fases pertinentes al proceso ordinario, el juzgado de primera instancia dictó la Sentencia N° 241, de fecha 4 de octubre de 1995, (fs. 791-805), por la cual ABSUELVE a los demandados de las pretensiones del actor, condenando a estos últimos al pago de costas. En cuanto a la demanda de reconvención, en la comentada sentencia se ABSUELVE a los señores JOSÉ MANUEL y LUIS E. VARELA CLEMENT de la cuantía perseguida por la reconvencionista por la inversión realizada por la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ sobre el inmueble anteriormente descrito, condenándole en costas, siendo apelada dicha resolución por ambas partes del proceso.

Surtida la alzada y previo el reparto de rigor, el Magistrado Sustanciador ordenó la apertura a prueba del presente negocio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1264 y 1265 del Código Judicial.

Una vez cumplidas las formalidades procesales, el Tribunal Superior realizó un análisis del origen del proceso incoado por los señores VARELA, quienes plantearon su pretensión en que la relación contractual fue suscrita entre las antiguas propietarias del inmueble, señoras CATALINA y SABINE LEWIS y la señora FRANCES MOYER y el referido inmueble sería utilizado por la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ. Los demandantes manifestaron que ambas partes acordaron que, para los efectos de "realizar cambios al edificio construido sobre la referida finca se requería de la autorización previa y escrita de CATALINA Y SABINE LEWIS y/o CARLOS A. MENDOZA", y que ninguno de ellos dió autorización para realizar mejoras en el inmueble.

La sentencia también se refirió a lo sustentado por los apoderados judiciales de la parte demandante, en el sentido de que, una vez que sus representados adquirieron por vía de sucesión testamentaria el inmueble en referencia, la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, mediante comunicación escrita, pusieron en conocimiento del señor JOSÉ MANUEL VARELA, la intención de dar por terminado el contrato de arrendamiento, a partir del 31 de enero de 1993. Se aduce, además, que sobre el inmueble en litigio "se le hicieron cambios estructurales significativos que lo desmejoran y desfiguran", aportando al proceso documentos públicos y privados, testimonios, inspección ocular, con asocio de peritos y prueba de informes.

Con respecto a actividad procesal inherente a la parte demandada, señalaron que no existía la violación contractual alegada por los demandantes, debido a que la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ no efectuó ningún cambio estructural del

inmueble al que se refiere la cláusula séptima del contrato suscrito por las partes, dejando plasmado, más bien, que la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, se vió en la necesidad de hacer reparaciones; y tales modificaciones eran de conocimiento de las propietarias del inmueble. Además, indicaron que durante la vigencia del contrato de arrendamiento, las propietarias de la finca así como el representante legal de ellas, doctor CARLOS A. MENDOZA, no objetaron ni desautorizaron los trabajos realizados en el inmueble, por tanto, tales actos dieron muestras inequívocas de la aprobación tácita de los mismos.

El Tribunal Superior se refirió al escrito de sustentación del recurso de apelación formulado por los apoderados judiciales de la parte actora, en el sentido de que éstos criticaron la sentencia dictada por el juzgador de primera instancia, al considerarse en el denominado "ANÁLISIS DEL TRIBUNAL", que se afirman situaciones totalmente alejadas de la realidad, tal es el caso que dicha sentencia consideró que las propietarias del inmueble motivo de litigio, "prestaron su aprobación tácita a las transformaciones que se le hicieron al bien inmueble, hoy propiedad de sus mandantes, ...", pues con ello simplemente se demuestra que la sentencia de primer grado dejó de lado o no tomó en consideración la declaración del doctor CARLOS A. MENDOZA, visible a foja 536, quien negó categóricamente haber dado su aprobación a las mejoras realizadas por el arrendador. Por otra parte, sostuvo el apelante que la sentencia de primera instancia, al considerar que las demandadas al realizar las reparaciones en virtud de que el inmueble se encontraba en estado de abandono por más de 8 años, tales reparaciones sólo ascendieron a la suma de TRES MIL SEISCIENTOS BALBOAS (B/.3,600.00), estimando que los otros gastos se refieren a cambios o estructuras que, sin autorización de los propietarios realizó, la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, siendo reclamados mediante la demanda de reconvención que se le sigue a los señores VARELA.

En cuanto a la apelación que interpusiera la firma forense ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, apoderados judiciales de la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ y FRANCES MOYER, advierte el Tribunal Superior que los mismos presentaron dos escritos. En el primero de ellos (fs. 867-872), atacan la sentencia de primera instancia, específicamente en lo atinente a la demanda de reconvención en que la referida sentencia releva de la obligación de pago a los señores VARELA, con respecto a las mejoras efectuadas por la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, pese a que se acreditó la efectiva realización de mejoras, incurriendo ésta en desembolsos económicos en beneficio del mejoramiento sustancial del inmueble arrendado.

En el otro escrito se persigue la confirmación de la sentencia con respecto a la demanda principal, cuyos argunentos se aprecian a foja 887-907 del expediente.

Adicional a ello, los apoderados judiciales de los demandados, además de avalar las razones de derecho que sirvieron de base a la resolución para desestimar las pretensiones del actor, referente a la demanda principal, llama la atención del juzgador en el sentido de que se omitió absolver a la señora FRANCES MOYER en la parte resolutiva de la alegada sentencia, por lo que solicita la reforma correspondiente, es decir, que de igual forma que se hizo con la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, se absuelva también a FRANCES MOYER de los cargos formulados por los señores JOSÉ M. VARELA CLEMENT y LUIS E. VARELA CLEMENT.

Una vez analizados los escritos presentados por las partes en conflicto, el Tribunal Superior fue del criterio que, en primer lugar, se debió dispensar importancia al contenido jurídico de la cláusula séptima del contrato de arrendamiento con opción de compra.

Ciñéndose al contenido de la cláusula séptima del contrato en mención, estimó el tribunal de segunda instancia que, si bien las antiguas propietarias del inmueble permitieron la posiblidad de que la arrendataria pudiese hacer cambios estructurales, con el propósito de que el mismo fuese utilizado para fines docentes, (cláusula sexta del contrato), y que las mismas no afectaran la estructura, o sea, las mejoras construidas, en este caso el edificio donde funciona el colegio, estima el tribunal que tales mejoras tendrían lugar si

hubiesen sido autorizadas por las propietarias originales o por doctor CARLOS A. MENDOZA, lo que no se hizo, por ninguno de ello. Al efecto, señalan las fojas 536 a 538 correspondiente a la declaración del doctor MENDOZA, quien niega haber dado tal autorización.

Con respecto a lo anterior, estimó el tribunal de segunda instancia que los argumentos esbozados por la juzgadora de primera instancia, no tenía sustento o se "desvanecen", al considerar en la sentencia aludida que se había consentido tácitamente en las remodelaciones ejecutadas por el demandado, debido a que tal afirmación no resulta factible, de conformidad con lo pactado en la cláusula séptima ya mencionada. Adiciona el tribunal que la redacción del llamado "ANÁLISIS DEL TRIBUNAL", refiriéndose a la sentencia de primera instancia, "se debió en gran medida, a que sólo tomó en consideración el contenido de la primera parte de la cláusula séptima del contrato" (f. 931).

Consideró el Tribunal que el error de interpretación del contrato por parte de la juzgadora primaria, no constituye razón legal, para que prospere la revocatoria del fallo, tal como lo ha solicitado la parte demandante. Realmente la pretensión de ellos, de acuerdo al criterio del Tribunal Superior, no se debe exclusivamente al hecho de haberse realizado mejoras, sin el consentimiento o autorización previa de las personas que ya se han mencionado, sino que la firma SUCRE, ARIAS, CASTRO & REYES, alegan, además, que las remodelaciones efectuadas en el edificio que forma parte del inmueble arrendado, fue objeto de cambios estructurales significativos "que lo desmejoran y desfiguran". Por tanto, los demandantes consideran que incurrirán en gastos por la suma de SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA BALBOAS (B/.68.770.00), para dejar el edificio en las condiciones que se encontraba al momento de celebrarse el contrato de arrendamiento.

Seguidamente el Tribunal Superior expresó que del estudio de la práctica de Inspección Judicial ordenada por la Juez de primera instancia, se desprende que los peritos de la parte actora, Ingenierios NICANOR YAU RIVERA y SALVADOR STANZIOLA, consideraron que las remodelaciones efectuadas "desmejoran el inmueble" (fs. 243-244), en tanto que los peritos de la parte demandada, Ingeniero JORGE CONTRERAS GONZÁLEZ y JUAN RAÚL DICAZ G. de M., en el informe que corre a fojas 541-550, arriban a la conclusión que, desde el punto de vista técnico, los cambios realizados por la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, en el inmueble, no tienen la categoría de "modificaciones estructurales", indicándose en dicho informe que "estos cambios son en todo caso, modificaciones arquitectónicas que no han desmejorado el inmueble".

En base al principio de la sana crítica en la valoración de la prueba, consideró el tribunal de segunda instancia, al momento de valorar la prueba pericial, que el informe rendido por los ingenieros JORGE CONTRERAS GONZÁLEZ y JUAN RAÚL DÍAZ G. de M., tienen mayor valor probatorio que el suministrado por los Ingenieros NICANOR YAU RIVERA y SALVADOR STANZIOLA, al estimar que el informe rendido por los primeros nombrados, además de contar con un mejor análisis científico, los referidos peritos adjuntaron al informe fotografías de las remodelaciones efectuadas en el edificio.

Como consecuencia de lo anterior, el tribunal estimó que no se había afectado la estructura del inmueble, entendiéndose que con las remodelaciones efectuadas únicamente se perseguía utilizar el edificio para los fines docentes, señalada en la cláusula sexta del contrato.

Concluye el tribunal que no procede la indemnización perseguida por los demandantes, señores JOSÉ M. VARELA CLEMENT y LUIS E. VARELA CLEMENT, en la demanda principal, así como tampoco prospera la pretensión de los reconvencionistas, dado que, de acuerdo a la "controversial cláusula séptima", corrían por cuenta de la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ, la realización de las aludidas remodelaciones.

Seguidamente sostiene el tribunal que, con referencia a la apelación formulada por los apoderados judiciales de la señora FRANCES MOYER, cuya finalidad era de que se le incluya en la parte resolutiva de la sentencia, mediante la cual se absolvió a la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMÁ en la demanda

principal, ello resulta innecesario, ya que al darse la sentencia absolutoria, no procede decidir las excepciones, ya que la finalidad de la excepción es destruir la pretensión.

Cumplida la fase procesal, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, profirió la resolución de fecha 20 de agosto de 1996, en la cual ADICIONA a la parte resolutiva de la Sentencia N° 241, de 4 de octubre de 1995, dictada por el JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, con el propósito de ABSOLVER a la señora FRANCES MOYER de la demanda principal, confirmándola en todo lo demás.

Le corresponde a la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, el conocimiento del recurso de casación, promovido por las partes en el proceso, contra la resolución de segunda instancia, dado que se ha admitido el presente recurso, como lo manifestáramos con anterioridad, y a ello se procede.

Como ya ha quedado señalado, contra la sentencia de segundo grado en este proceso ordinario, se ha promovido recurso extraordinario de casación por ambas partes, disconformes con la sentencia recurrida. Conviene, por lo tanto, analizar cada uno de los recursos, en forma separada.

RECURSO DE LA PARTE DEMANDANTE

El recurso es en el fondo, y se apoya en dos causales, una probatoria, la de error de hecho en la existencia de la prueba y la otra, violación directa de las normas sustantivas de derecho. Corresponde analizarlas en forma separada y en el orden que han sido planteadas.

La primera causal, infracción de una norma sustantiva de derecho en concepto de error de hecho en la existencia de la prueba se apoya en tres motivos, que conviene reproducir.

> "PRIMERO: A pesar de que en autos consta la aceptación de los demandados (contestación a los hechos TERCERO (fs. 39-47), SÉPTIMO (fs. 40-48), y hechos CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO de la demanda de Reconvención (fs. 102 y 103); el acta de Inspección Judicial levantada por el Juzgado Segundo de Circuito del Primer Circuito Judicial (fs. 208 y 208 vuelta); los informes periciales de FRANCISCO SERRUD VAZ y VIRGILIO OLIVARDIA PINZON (fs. 210 a 212); JORGE CONTRERAS GONZALEZ y JUAN RAUL DIAZ G. De M. (Fs. 217 a 226, 246 a 251, 422 a 424, 425 a 427, 580 a 582), y ALFREDO QUINTANA y MANUEL CUPAS (fs. 237 y 46 a 470); que demuestran los cambios hechos al inmueble, que lo dejan en situación muy diferente al estado que tenía cuando los arrendatarios lo recibieron, el Primer Tribunal ignora totalmente las pruebas mencionadas y por lo tanto releva a los demandados de la responsabilidad de entregar al inmueble en las condiciones en que lo recibieron.
>
> SEGUNDO: A pesar de que en autos consta el hecho de que el bien dado en arrendamiento se devolvió en situación deplorable que lo hace inutilizable en tales condiciones (ver acta de Inspección fojas 208 y 208 vuelta) y peritajes (fs. 210, 217, 237, 243, 246, 422, 466, 541 y 580) amen de la confesión de los demandados al contestar la demanda y contrademanda (fs. 39, 40, 47, 48, 102 y 103) el Primer Tribunal, ignorando tales pruebas injusta e ilegalmente absolvió a los demandados del pago de daños y perjuicios.
>
> TERCERO: A pesar de que a los autos se hicieron llegar los peritajes rendidos por los Contadores Públicos Autorizados FRANCISCO SERRUD VAZ y VIRGILIO OLIVARDIA PINZON (fs. 210 a 212), al igual que el rendido por los Ingenieros NICANOR YAU u SALVADOR STANZIOLA (fs. 243 a 244), que cuantifican los daños y perjuicios sufridos por los arrendadores, el Primer Tribunal Superior, ignorando tales pruebas, injusta e ilegalmente exonera a los demandados de toda responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados con los cambios introducidos al inmueble arrendado" (f. 1065-1066).

Los cargos que el casacionista le atribuye a la sentencia recurrida ha vulnerado, en su apreciación el artículo 769 del Código Judicial, así como los artículos 1313 del Código civil, y la Ley 93 de 1973, artículo 32, numeral 7°, las últimas dos disposiciones que consisten en normas sustanciales de derecho violadas, en apreciación del recurrente, como consecuencia del valor probatorio.

Señala el casacionista en esta primera causal, por una parte, que la sentencia recurrida no tomó en cuenta la confesión que se encuentra en determinados hechos de la contestación de la demanda (hechos 3° y 7°) y los hechos contenidos en la demanda de reconvención promovida por la parte demandada (hechos 4°, 5°, 6°, y 7°). Salta a la vista, de la lectura de los hechos 3° y 7° de la contestación de la demanda por la parte demandada, que ésta se limita a negar las afirmaciones de la demanda, señalando, en ambos hechos, que la naturaleza de las mejoras realizadas escapaban a la condición de cambios estructurales, en tanto que los hechos afirmados por la demandada-reconvencionista arriba consignados, se limitan a expresar la condición desastrosa en que se encontraba el bien arrendado, cuando fue ocupado por la demandada, en virtud del contrato de arrendamiento ya señalado. No resulta superfluo que esta Sala analice la supuesta naturaleza de la confesión que ostentan los hechos afirmados en una demanda o en su contestación, a la luz de lo previsto por el artículo 769 del Código Judicial. Estima la Sala que, mas que una confesión en sentido propio, se trata de la desaparición de la carga de la prueba sobre un hecho afirmado por una parte, a la luz de lo previsto por el artículo 773, cuyo segundo párrafo releva de prueba los hechos afirmados por una parte, y también cuando sean claramente reconocidos quedan relevados de probanzas, como señala el último párrafo del citado artículo.

Como es sabido, la causal que ocupa a la Sala se produce, como ha sostenido reiteradamente jurisprudencia de esta Sala, cuando el juzgador ignora una prueba que obra en el expediente válidamente aportada, o cuando reconoce como existente una prueba que no consta en el proceso. Es decir, para que se configure en forma adecuada esta causal, es menester que el yerro del tribunal lo sea por omisión, es decir, por no entrar a analizar una prueba que existe en el proceso o valorar una que no existe válidamente aportada. (Véase JORGE FÁBREGA P., "Casación Civil", Panamá, 1995, pág. 136.). Estima, no obstante, que no se ha dado tal infracción, y ello por cuanto las pruebas que se alegan no fueron analizadas por el tribunal fueron debidamente valoradas, como se acredita mediante la lectura de la ponencia de la sentencia recurrida. Así, se expresa:

> "A tal respecto, el Tribunal, luego del estudio correspondiente advierte, que la Juez de la causa, atendiendo solicitud que en el período probatorio le formularon ambas partes del proceso dispuso la práctica de inspección judicial al inmueble materia de la presente controversia, obteniéndose puntos de vista distintos de los peritos que intervinieron, pues, mientras que para los ingenieros NICANOR YAU RIVERA y SALVADOR ESTANZIOLA (peritos de la parte actora) las remodelaciones efectuadas al edificio construido sobre la finca No. 11,791 "desmejoraron el inmueble" (ver fojas 243-244), los peritos nombrados a instancia de las demandadas, Ingenieros JORGE CONTRERAS GONZALEZ y JUAN RAUL DIAZ G. De M., en el informe que corre a fojas 541-550 arriban a la conclusión de que "Desde el punto de vista técnico los cambios realizados por la Escuela Internacional de Panamá en el mencionado inmueble no tienen la categoría de modificaciones estructurales. Estos cambios son en todo caso, modificaciones arquitectónicas que no han desmejorado el inmueble".
> ...
> Conforme a las premisas consignadas y en cumplimiento de la regla de la sana crítica racional, esta Corporación Judicial ha de señalar que el informe rendido por los peritos, Ingenieros JORGE CONTRERAS GONZALEZ y JUAN RAUL DIAZ G. De M., tiene mayor valor probatorio, que el suministrado por los Ingenieros NICANOR YAU RIVERA y SALVADOR ESTANZIOLA, ya que, siendo todos ellos profesionales de la ingeniería y por tanto expertos en la materia a tratar, resulta evidente que en el primero de los informes señalado se cuenta no sólo con un mejor análisis de orden científico, sino que, además, los peritos en cuestión tuvieron el cuidado de adherir a su informe

> fotografías de las remodelaciones efectuadas al edificio que fueron utilizadas como datos en la elaboración del mismo y respaldan lo que allí se expresa. Agrega el Tribunal en este sentido, que los elementos probatorios traidos por los señores JOSE M. VARELA CLEMENT y LUIS E. VARELA CLEMENT a esta segunda instancia no le restan valor a la prueba pericial comentada.
>
> Al haberse demostrado que, contrario a lo que alegan los demandantes, las remodelaciones que la arrendataria efectuó en el edificio construido sobre la finca No. 11,791 no afectaron la estructura del mismo, debe entenderse que con tales remodelaciones se perseguía únicamente utilizar el edificio en cuestión "para los fines docentes" señalados en la cláusula sexta del contrato, por lo que se concluye que no procede la indemnización que persiguen los señores JOSE M. VARELA CLEMENT y LUIS E. VARELA CLEMENT en la demanda principal, pero, esta Superioridad deja apuntado, además, que tampoco prospera la pretensión de la demanda reconvencionista, ya que conforme a la controversial cláusula séptima corrían por cuenta suya la realización de las aludidas remodelaciones ...". (Fs. 932 a 934).

Es claro, por lo tanto, que al fundamentar esta primera causal en una de las denominadas probatorias, escogió mal la causal invocada, puesto que, al haber sido valoradas las pruebas de inspección judicial, y de peritajes, es evidente que, de haberse producido un error de juicio a cargo del tribunal, ha debido de ser por haber errado en la actividad jurisdiccional de valoración de la prueba, causal ajena a la que se fundamentó el recurrente.

Se desestima la primera causal de la parte demandante.

La segunda causal utilizada por la parte demandante es la de infracción de una norma sustantiva de derecho, en concepto de violación directa.

Los cargos que se le formulan a la sentencia en esta causal están expuestos de la siguiente forma:

> "PRIMERO: La sentencia recurrida interpretó mal el contrato de ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA, celebrado entre las partes, el cual exigía autorización PREVIA Y ESCRITA para hacer cambios en el local arrendado, al interpretar la frase "CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL LOCAL", utilizada en la cláusula SÉPTIMA, en un sentido técnico, cuando las partes, personas amantes del buen castellano, la utilizaron en su acepción castiza que se refiere al "Orden y distribución de las partes" del edificio. Razón por la cual cometió el error de exonerar a los demandados de la obligación de entregar el inmueble en las condiciones en que lo habían recibido. Dicho contrato aparece a fojas 8, a fojas 279 y a fojas 343.
>
> SEGUNDO: La sentencia recurrida al dar una interpretación errada a la intención de las partes al celebrar el contrato y exonerar injustamente a los demandados de los cargos de la demanda, dejó de aplicar claras disposiciones sustantivas que obligan a los arrendatarios a entregar el bien arrendado en las mismas condiciones en que lo recibieron, o indemnizar al arrendatario de los perjuicios que le causaron" (fs. 1068-1069).

La sentencia recurrida, por razón de los yerros denunciados, ha vulnerado, en apreciación del recurrente, los artículos 976, 986 y 1.313 del Código Civil, así como la Ley 93 de 1973, sobre arrendamientos. La parte recurrente, aún a pesar de que en los motivos señala como cargo a la sentencia un error en la interpretación contractual, no señala en la porción que corresponde a las disposiciones violadas y la explicación de la misma, no señala disposición alguna que se refiera a las reglas que, sobre interpretación de los contratos, tiene diseñado nuestro Código Civil, lo que resulta a todas luces necesario para que la Sala pueda ponderar el yerro interpretativo en que haya podido incurrir la sentencia recurrida.

En síntesis, como ha quedado recogido en la transcripción de los motivos, el recurrente censura la resolución jurisdiccional, en razón de que ha interpretado de manera errónea las cláusulas contractuales y, como su consecuencia, la violado en ordenamiento jurídico. Concretamente, se señala que el error de juicio consistió en desconocer que la cláusula reproducida condicionaba la realización de reformas estructurales a la aquiescencia de los propietarios o su apoderado, quienes manifiestan nunca haber dado dicho consentimiento que tenía, además, que ser previo y por escrito.

Para mejor ilustración se procede a transcribir la cláusula séptima:

> "SEPTIMO: Declaran LAS ARRENDADORAS que al bien inmueble al igual que a las mejoras, se le podrán hacer cambios estructurales que no afecten el edificio para los fines a los cuales ha sido arrendado. Estos cambios correrán por cuenta de EL ARRENDATARIO y requerirán de la autorización previa y escrita de CATALINA y SABINE LEWIS y/o CARLOS A. MENDOZA. Así lo acepta EL ARRENDATARIO". (F. 8).

En la misma se aprecia, como quedó acreditado en la reproducción anterior, que los fundamentos para la decisión del juzgador se ubican en la valoración de las pruebas periciales, que acreditaron que no se habían dado los cambios estructurales en las mejoras realizadas, analizando según las reglas de la sana crítica dichas pruebas periciales. Resulta, por lo dicho, que la sentencia recurrida interpretó en forma adecuada la cláusula contractual, atendiendo el canon interpretativo contenido en el artículo 1.132 de nuestro Código Civil, toda vez que, tanto el tenor literal de la cláusula que analiza esta sentencia, como la intención de las partes era que cualquier cambio en la estructura del edificio arrendado requería el consentimiento previo y por escrito de la propietaria, por lo que tal forma de aquiescencia no podía ser reemplazada por otro tipo de situaciones jurídicas, como por ejemplo lo podrían ser, porque fueron alegados, los actos consentidos. No ocurre así, por lo demás, con las reparaciones que no recayesen sobre la estructura del edificio, que las partes acordaron que podía realizarla, a su costo, el arrendatario. De allí a que todo el esfuerzo probatorio desplegado por las partes, se centró en determinar si las mejoras que había realizado el arrendatario habían sido consentidas en la forma prevista en el contrato, es decir, previa a su realización, en forma expresa, y por escrito, con lo que la sentencia recurrida arribó a la conclusión, separándose en este aspecto de la sentencia de primer grado, que no se había realizado el supuesto de hecho previsto por la regla contractual analizada, es decir, no existían reformas estructurales que eran las únicas que estaban sujetas, en cuanto a su realización, al consentimiento del arrendador y no así, se repite, la realización de mejoras que no revistiesen tal característica, como se desprende de la cláusula cuarta del contrato, que se transcribe:

> "CUARTO: Correrán por cuenta de EL ARRENDATARIO, las reparaciones del bien inmueble dado en arrendamiento". (F. 7).

Al no haberse, en apreciación de la Sala, violado las obligaciones voluntariamente asumidas, que constituyen la principal fuente de obligaciones en el Derecho de Contratos, con arreglo al artículo 976 del Código Civil, ni tampoco haberse producido una infracción contractual de las que sanciona el artículo 986 del mismo cuerpo legal, es evidente concluir que no se ha producido la lesión al ordenamiento jurídico denunciado.

Las otras disposiciones sustanciales que se alegan vulneradas son los preceptos contenidos en el artículo 1.313 del Código civil, artículos 32, numeral 7° y 33 de la Ley 93 de 1973. Conviene analizar conjuntamente los artículos 1.313 del Código civil, y artículo 32, numeral 7° de la Ley 93, de 1973, por contener idénticas regulaciones, y se refieren a la obligación de los arrendadores de devolver el bien arrendado en las mismas condiciones en que los encontró, salvo el deterioro causado por el uso normal o el transcurso del tiempo. Es evidente que para apreciar si se cumplió con la obligación antedicha, resulta necesario que se acredite, por los medios probatorios idóneos, las condiciones en que se recibía el inmueble, así como las condiciones en las que se devolvió. Comoquiera que tales probanzas no fueron denunciadas en la causal esgrimida, que es de violación directa y no de las denominadas causales probatorias, a la Sala le

resulta imposible analizar si, con arreglo a las probanzas que constan en el proceso, se acreditaron las condiciones en que se recibió el inmueble, así como las condiciones en las cuales se entregó al finalizar el contrato de arriendo, condiciones éstas que la parte demandada ha definido como desastrosas, sin que sea factible a la Sala, como queda dicho, entrar a ponderar tal afirmación.

La infracción al artículo 33 de la Ley 93 de 1973 tiene contenido similar al de la cláusula 7ª, ya analizada, pues el principio contenido en la citada cláusula calificó las mejoras que requerían la apreciación del consentimiento del arrendador, restricción que es factible realizar en base a que dicha disposición no es de orden público o interés social y puede ser variada por voluntad de las partes contratantes.

De lo señalado anteriormente se desprende que si no hubo violación contractual, no ha podido vulnerarse la disposición del Código Civil que prevé la sanción por dicho incumplimiento, el artículo 986 del referido cuerpo legal.

Se desestima la causal segunda invocada por la parte demandante.

RECURSO DE LA PARTE DEMANDADA

Como también ha quedado dicho, la parte demandada también recurrió contra la sentencia en referencia, en lo que respecta a las declaraciones relacionadas con sus pretensiones planteadas en la demanda de reconvención, es decir, que la sentencia le reconociese el derecho de reembolso de las sumas que había invertido en reparaciones. La causal utilizada, única en que se apoyó la demandada, es en el fondo y con infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de violación directa. Como fundamento de la causal, se señalan como cargos a la sentencia recurrida los que se permite transcribir la Sala:

> "PRIMERO: Para exonerar a los demandantes VARELA de la obligación legal que tienen de reembolsar a la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMA, los gastos en que ésta incurrió para preservar la finca 11,791 objeto del contrato de arrendamiento suscrito entre ambas partes, la sentencia recurrida, al confirmar la negativa a la demanda de reconvención propuesta, sentó el criterio de que, según el contrato de arrendamiento, estos gastos corrían por cuenta de la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMA, siendo que ello no fue pactado, con lo cual infrigió la regla legal de interpretación que establece que si los términos de un contrato son claros, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
>
> SEGUNDO: La sentencia atacada denegó la demanda de reconvención que promovió la ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMA contra los demandantes VARELA sosteniendo que a los gastos de preservación que hizo nuestra representada en la finca 11,791 le eran aplicables lo estipulado en la cláusula séptima del contrato de arrendamiento suscrito por las partes el 22 de julio de 1987 instituida para regular la situación de los acondicionamientos del inmueble para fines docentes, criterio éste que desconoció el canon legal hermenéutico que dispone que al interpretar un contrato no deben entenderse comprendidos casos diferentes de aquéllos sobre los cuales los interesados se propusieron contratar.
>
> TERCERO: Las anteriores infracciones incidieron sustancialmente en la parte dispositiva de la sentencia recurrida". (Fs. 1073-1974).

Se estiman por el recurrente violados los artículos 1132 y 1134 del Código Civil, ambos referentes a la interpretación de los contratos.

La Sala, en su momento, desestimó también la pretensión de la reconvencionista, señalando que "tampoco prospera la pretensión de la demandada reconvencionista, ya que conforme a la controversial cláusula 7ª corrían por cuenta suya la realización de las aludidas remodelaciones." (foja 934).

La Sala concuerda con la conclusión a que arriba el PRIMER TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA, si bien lo matiza en el sentido de que la regulación de intereses contractuales, en punto a que parte contractual le correspondía los costos de tales remodelaciones, y que las partes acordaron que fuese el arrendatario, lo que parece lógico toda vez que era quien iba a utilizar el bien arrendado para el fin que le fue otorgado en arrendamiento, viene claramente pactado en la cláusula cuarta del contrato, que conviene volver a reproducir:

> "CUARTO: Correrán por cuenta de EL ARRENTARIO, las reparaciones del bien inmueble dado en arrendamiento". (F. 7).

Es evidente que una obligación similar recae sobre el arrendatario por imperio de la cláusula séptima, que el Tribunal Superior califica de controversial, pero dicha obligación se refiere, en apreciación de la Sala, a los cambios estructurales, que son el objeto de la regulación contractual en la citada cláusula.

En punto a la interpretación contractual, el civilista español LUIS DIEZ-PICAZO ha analizado la interpretación del contrato, derivada de la letra del mismo, sosteniendo:

> "El punto de partida de toda actividad interpretativa debe ser la letra, cuando el contrato haya quedado redactado por escrito. En los contratos verbales, la interpretación deberá ir precedida de una tarea probatoria, de fijación de las declaraciones. Una vez llevada a cabo, las declaraciones pueden asimilarse a la <letra>.
>
> La letra es el punto de partida de la interpretación y puede ser también el punto de llegada. El art. 1.281 ordena que se esté al <sentido literal>, cuando los términos sean claros y no dejen duda sobre la intención. Se suele decir por ello que in claris interpretatio non fit: que cuando las cosas son claras no hay lugar a una actiivdad interpretativa. Esta máxima requiere alguna matización. Para establecer que el sentido literal es claro, se necesita ya una actividad interpretativa, sin olvidar que toda interpretación presupone de algún modo un conflicto de las partes sobre el alcance de las declaraciones. Por ello, el art. 1,281. 1° no debe entenderse como exclusión de la interpretación en los casos de claridad, sino como presunción en favor del sentido literal".
>
> (LUIS DIEZ-PICAZO, "Fundamentos del derecho civil patrimonial. Tomo I Introducción, Teoría del Contrato"; Editorial Civitas, Madrid-España, 1993; fs. 373-373).

Es evidente, por las consideraciones expuestas, que el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, se ajustó en su enjuiciamiento al canon interpretativo contenido en el artículo 1132 del Código Civil.

También estima el recurrente vulnerado por la sentencia recurrida el artículo 1134 del Código Civil, conclusión que no comparte la Sala, toda vez que en la labor interpretativa realizada comprendió las cosas que se habían pactado y no causas ajenas al programa de regulación de intereses, en este caso, de arrendamiento y, además, fue celoso en la interpretación de la totalidad del contrato, lo que la doctrina denomina "canon hermenéutico de la totalidad o interpretación sistemática del contrato", que se atribuye a Betti, y que en nuestro ordenamiento jurídico civil tiene su regulación en el artículo 1.136 del Código Civil, que, a modo de colofón, se reproduce:

> "Artículo 1136. Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas".

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 20 de agosto de 1996, dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL dentro del proceso ordinario interpuesto por JOSE MANUEL VARELA CLEMENT y EDUARDO VARELA CLEMENTE contra FRANCES MOYER y

ESCUELA INTERNACIONAL DE PANAMA, S. A.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARIBEL GISELA ACEVEDO DE PASCUAL RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE JUAN ALBERTO PASCUAL (M. P.). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Licenciada **MARIBEL G. ACEVEDO M.**, actuando en su propio nombre y representación, interpuso en tiempo oportuno recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Familia el 2 de abril de 1997, dentro del proceso de divorcio instaurado en su contra por el señor **JUAN ALBERTO PASCUAL.**

El recurso se encuentra pendiente de decidir en el fondo, a lo cual procede la Sala, previas las siguientes consideraciones.

El presente proceso se inició mediante la presentación de la demanda por parte del señor PASCUAL, ante el Juzgado Segundo Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, con el objeto de que, con fundamento en las causales de divorcio contenidas en los ordinales 4 y 7 del artículo 114 del Código Civil, se declarara disuelto el vínculo matrimonial que lo une a la señora ACEVEDO.

Una vez surtidos los trámites correspondientes a la primera instancia de esta clase de proceso, el juez dictó la sentencia N° 335 fechada 15 de septiembre de 1995, en la que decretó disuelto el matrimonio de los señores JUAN ALBERTO PASCUAL y MARIBEL ACEVEDO, con base en la causal consagrada en el numeral 4 del artículo 114 del Código Civil, esto es, el trato cruel psíquico.

La señora ACEVEDO apeló de esta decisión, que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Familia, en la sentencia impugnada mediante el presente recurso de casación, la cual fue dictada el 2 de abril de 1997.

El recurso de casación es en la forma y en el fondo, razón por la cual se analizará en primer lugar el de forma, en atención a lo dispuesto en el artículo 1153 del Código Judicial.

RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA

Se invoca la causal contenida en el ordinal 1° del artículo 1155 del Código Judicial, "haberse omitido trámite o diligencia considerado esencial".

Los motivos que le sirven de fundamento, son los siguientes:

> "PRIMER MOTIVO: Los actos procesales de fecha, audiencia de 28 de marzo de 1995 al suspenderse se fijó la nueva audiencia para el mismo día a las 2:00 p. m, tal cual consta a foja 266. La audiencia del 28 de marzo de 1995 se inició a las 3:00 p. m. y fuera de la hora judicial, foja 267 del expediente. El día 24 de abril de 1995 se inició la audiencia a las 9:00 a. m. foja 322 mientras que se había fijado a las 8:00 a. m.; por lo que la sentencia del Tribunal de Familia le da validez a actos realizados fuera de la hora y fecha fijada siendo evidente que los actos procesales y pruebas practicadas se produjeron en contravención con la Ley.

SEGUNDO MOTIVO: Además, este vicio procesal fue hecho valer en segunda instancia.

TERCER MOTIVO: El Tribunal Superior de Familia, no saneó el proceso en que se omitió el trámite de traslado del peritaje requerido por la parte demandante en su demanda, peritaje que consta, de foja 243 a 252, informe rendido por el Dr. Manuel Díaz y de foja 277 a 281 el informe el (sic) Dr. Carlos M. Malgrat.

Con la presentación de la demanda, foja 4 del expediente el demandante requirió que los peritos determinaran si eran ciertos o no los hechos que se narran en la demanda de divorcio, lo cual fue objetado a foja 18 del expediente al oponernos a la prueba pericial por implicar una función jurisdiccional inherente al Tribunal, igual objeción consta a foja 266 del expediente, la cual fue desestimada por el juez, a su vez, a foja 494 del expediente consta recurso de reconsideración y nulidad de lo actuado ante el Tribunal Superior de Familia, por razón de dicha situación.

CUARTO MOTIVO: El Tribunal Superior de Familia pese a la interposición del recurso de reconsideración y nulidad de lo actuado, no saneó, el proceso en el que se omitió el trámite de traslado del peritaje requerido por la parte demandante, peritaje que trata de establecer la condición de salud del demandante del juicio y omitió requerir las pruebas pedidas en la contestación de la demanda, en el (sic) cual se solicitó los exámenes médicos practicados al demandante por su cardiólogo en el año 1994, foja 18 del expediente.

QUINTO MOTIVO: Las anteriores infracciones devienen en un claro vicio a normas procesales vigentes en nuestro país que son de acatamiento forzozo". (Fs. 772 y 773).

Como consecuencia de estos cargos, la parte recurrente sostiene que han sido violados los artículos 497 y 954 del Código Judicial.

El primer cargo que hace la recurrente se refiere a la audiencia celebrada durante la primera instancia del proceso, específicamente los días 28 de marzo y 24 de abril de 1995. Al respecto, sostiene que la misma tuvo lugar luego de que hubiera transcurrido la hora señalada; es decir, que la sentencia fue dictada con base en actos procesales que se realizaron fuera de la hora judicial que se había establecido con anterioridad, aun cuando el artículo 497 del Código Judicial prescribe que los términos señalados para la realización de actos procesales son perentorios e improrrogables.

A foja 267 consta el acta de la audiencia que se inició a las tres de la tarde (3:00 p. m.) del 28 de marzo de 1995. Si bien es cierto que el juez de la causa al momento de suspender la audiencia en horas de la mañana, señaló que la misma "proseguiría a las dos de la tarde con el siguiente testigo", también es cierto que al iniciarse la sesión de la tarde, se encontraban presentes los apoderados judiciales de ambas partes, sin que el representante de la parte demandada (ahora recurrente en casación) hiciera objeción alguna en relación con la hora de inicio de la audiencia.

La misma situación se da en la audiencia que se llevó a cabo en horas de la mañana (9:00 a. m.) del 24 de abril de 1995, como consta a foja 322.

En relación con el acto de audiencia, el ordinal 8 del artículo 722 del Código Judicial establece como causal de nulidad, "... no señalar audiencia en los casos en que la Ley exija este trámite", situación que no se ha presentado en el caso que nos ocupa.

Por su parte, el artículo 747 del mismo Código prescribe que sólo se decretará la nulidad "... cuando sea absolutamente indispensable para evitar indefensión, afectación de derechos de terceros, o para restablecer el curso normal del proceso", supuestos que, evidentemente, no se han dado en el curso de

este juicio en el que, como ya se dijera anteriormente, la parte recurrente se encontraba presente al momento en que se celebró la audiencia, en los días que ahora se pretenden impugnar y también durante todos los demás, dentro de la cual contó con todas las oportunidades para hacer valer su derecho de defensa y contradicción.

Por lo anterior, considera la Sala que el cargo alegado no constituye la omisión de un trámite o diligencia considerado esencial en el proceso, ya que como se indicó anteriormente, el trámite o diligencia se surtió efectivamente.

El segundo cargo se refiere la supuesta omisión del juzgador de primera instancia de dar en traslado los informes rendidos por los peritos, Doctor Manuel Díaz y Doctor Carlos Malgrat, situación que no fue saneada por el Tribunal Superior de Familia, como le correspondía.

En relación con las declaraciones de estas personas, el juez de primera instancia consideró en su decisión, lo siguiente:

> "Estos doctores aducidos como pruebas por la parte actora, son considerados como testigos, junto a los que a continuación se presentan, y no como peritos, toda vez que declaran sobre hechos ya observados, ...". (F. 404).

Por su parte, el Tribunal Superior de Familia se refirió a este mismo punto en la sentencia impugnada en casación, afirmando que las pruebas practicadas por los Doctores Díaz y Malgrat tenían el carácter de testimonios técnicos y no de pruebas periciales. (F. 686).

Consecuentemente, no se ha violado el artículo 954 del Código Judicial como sostiene la parte recurrente, ya que dicha norma no es aplicable al caso, pues la misma se refiere a la prueba pericial y no a la prueba testimonial.

El tercer cargo que contiene el recurso de casación en la forma, consiste en la supuesta omisión por parte del Tribunal Superior de Familia de "requerir las pruebas pedidas en la contestación de la demanda, en el (sic) cual se solicitó los exámenes médicos practicados al demandante por su cardiólogo en el año 1994". (F. 773).

No le asiste razón a la recurrente en este punto, ya que el Tribunal Superior de Familia ordenó la práctica de la prueba a la que se refiere en el motivo anteriormente transcrito, mediante resolución dictada por esa corporación judicial el 20 de junio de 1996. Se transcribe la parte pertinente:

> "Por último se observa que el auto apelado no hace referencia alguna a la última solicitud luego del otro si, la misma es reconocida por el opositor (foja 57 del cuaderno), señalando que fue pedida en primera instancia, sin que se practicara, debido a su rechazo por el Juez por considerarla no esencial para la consecución de un resultado objetivo para las partes.
>
> La solicitud consiste en oficiar al Dr. ROGER GÁLVEZ a fin de que remita al Tribunal copia de los exámenes médicos del señor Juan Pascual, expedidos por el Baptist Hospital de Miami entre finales de marzo y principios de abril de 1994. La misma fue aducida, anunciada o presentada en el escrito de contestación de la demanda como se aprecia a foja 17, identificada con los literales B y C, sin embargo no existe pronunciamiento alguno al respecto. ...
>
> Queda claro que aunque esta solicitud no fuere reiterada en la primera instancia, debe haber un pronunciamiento sobre su admisión o no. Como quiera que no existe pronunciamiento ni mucho menos la práctica de la prueba sin culpa del proponente, debemos aceptar su proposición en esta instancia superior, en base a lo dispuesto por el literal b del artículo 1265 del Código Judicial. En ese punto el auto debe ser adicionado, porque no hubo pronunciamiento al respecto". (Fs. 514 y 515).

Consecuentemente, se desestima la casación en la forma, en virtud de que no se ha producido la causal invocada en esta oportunidad.

RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

La primera causal consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia impugnada.

En el motivo primero, la parte recurrente se refiere a las pruebas que considera fueron ignoradas por el Tribunal Superior de Familia al momento de dictar la sentencia impugnada, como consecuencia de lo cual dio por probada la existencia de irregularidades en el funcionamiento del corazón del señor PASCUAL, durante su convivencia conyugal con la señora ACEVEDO:

> "Primer Motivo: A fojas 22, 23 y 24 de su sentencia el Tribunal Superior de Familia da por establecido, equivocadamente, irregularidades en el funcionamiento del corazón del demandante prescindiendo en forma total de los documentos que se leen a foja 45 constancia médica del Cardiólogo del demandante, Dr. Roger Gálvez, en la que se hace constar que Juan Pascual evolucionó bien de su operación hasta el 12 de septiembre de 1994, la prueba a foja 203 y 204 del expediente del Diario La Prensa de fecha 14 de marzo de 1991, que señala su recuperación, la prueba a foja 545 del expediente consistente en documento, fechado 22 de febrero de 1996 de Suite Ambassador, la prueba a foja 80 donde constan las instrucciones para el cuidado de una enfermedad coronaria, la prueba a foja 216 del expediente en la cual el demandante establece que abandonó el domicilio conyugal, pruebas que demuestran la inexistencia de problema de salud durante la convivencia conyugal de los esposos.
>
> Por consiguiente, al estimar erróneamente como probado por el actor JUAN A. PASCUAL, las irregularidades que señala, ignorando las pruebas documentales a fojas 45, 80, 203 y 204, 216, 545 del expediente, las cuales demuestran que tales hechos no ocurrieron durante la convivencia conyugal, el Tribunal, incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba, influyendo tal error en lo sustancial del pleito". (F. 775).

La Sala se referirá a cada una de las pruebas mencionadas en el primer motivo, con el objeto de determinar si el Tribunal Superior de Familia incurrió en la causal que se le imputa.

1) Certificación expedida por el Doctor Roger Gálvez, en su condición de médico cardiólogo que atiende al señor PASCUAL de sus afecciones cardíacas. (F. 45).

En este documento se señala que el señor PASCUAL sufrió un infarto del corazón a principios del año 1989, que evolucionó sin complicaciones. Que posteriormente fue operado en abril de ese mismo año, mejorando de esta intervención quirúrgica hasta "el 12 de septiembre de 1994 cuando a raíz de un fuerte estado emocional, mostró una arritmia severa tipo taquicardia ventricular no sostenida, por lo que hubo necesidad de subir las dosis de medicamentos". Que se le ha recomendado evitar estados de tensión emocional que podrían originar episodios de arritmias de pronósticos más severos.

La Sala considera que este documento no desvirtúa los hechos que se dieron por probados en la sentencia atacada, es decir, que la señora ACEVEDO incurriera en las causales de trato cruel psíquico y abandono de sus deberes de esposa, ya que únicamente expresa las enfermedades cardíacas padecidas por el señor PASCUAL desde 1989 hasta la fecha en que se expidió dicha certificación (enero de 1995), al igual que la recomendación de que debe evitar estados de ansiedad emocional. De lo anterior es lógico concluir que la prueba comentada sí fue tomada en cuenta al momento de fallar.

2) Folleto que contiene instrucciones para el cuidado de las enfermedades de las arterias coronarias. Este documento no es relevante para probar el estado de salud del señor PASCUAL y ciertamente no guarda ninguna relación de su vida conyugal con la señora ACEVEDO.

3) Artículo de la Doctora Ana Vásquez de Palau, titulado "No hay mal ... ¡que por bien no venga!", publicado en el Diario La Prensa el jueves 14 de marzo de 1991. (F. 203) En este artículo la autora se refiere al caso del señor PASCUAL, quien luego de haber sufrido un infarto del corazón, mejoró sus hábitos alimenticios y dejó de fumar, obteniendo grandes beneficios para su salud.

Este documento tampoco aclara en nada la relación de pareja de los señores PASCUAL-ACEVEDO.

4) Artículo del Doctor Honorio Bernal Ríos, que apareció en el periódico El Panamá América el sábado 29 de mayo de 1993, bajo el título "El Corazón Enfermo y el Sexo". (F. 204).

La lectura de este documento no revela ningún elemento relevante para el presente proceso.

5) Copia de carta suscrita por el señor JUAN ALBERTO PASCUAL, dirigida a la señora ACEVEDO, con fecha 29 de junio de 1994. (F. 216).

En esta carta el señor PASCUAL le expresa a la señora ACEVEDO su deseo de tramitar su divorcio con base en la causal de mutuo consentimiento y le recomienda consultar un especialista en conducta infantil, para que ayude a su hijo con los problemas relacionados con su separación.

Si bien el contenido de esta carta fue reconocido por el señor PASCUAL en su declaración de parte, consultable a foja 362, el mismo se refiere a un momento posterior a la separación física del matrimonio PASCUAL-ACEVEDO, razón por la cual no aclara en nada el estado de salud física y emocional del señor PASCUAL, antes de que se diera esta separación.

6) Certificación de la Gerente de "Suites Ambassador", en la que hace constar que "El Sr. Juan Alberto Pascual estuvo hospedado en este aparthotel (sic) del 31 de Mayo al 16 de Septiembre de 1994". (F. 545).

Este documento tampoco es pertinente para determinar el estado de salud del señor PASCUAL, ya que sólo corrobora la fecha en que éste se fue del hogar conyugal, fecha sobre la cual no existe disputa.

Se procede a analizar ahora las pruebas que se atacan en el segundo motivo, que es del tenor siguiente:

> "Segundo Motivo: A foja 16 del expediente el Tribunal Superior de Familia da por sentado la inexistencia de vida conyugal, la no asistencia moral ni espiritual al esposo, prescindiendo en forma total de los documentos a foja 545 a 548, de Suite Amabassador en el cual se deja claramente establecido que el sr. Pascual Sosa estuvo hospedado fuera del domicilio conyugal en el Apartahotel (sic) Ambassador del día 31 de mayo al 16 de septiembre de 1994, la prueba a foja 75 en la cual se señala quien decoró el hogar de la familia, la prueba a foja 71, consistente en certificación en la cual se detallan fechas de consultas del menor con la fonoaudióloga, foja 81 a 106 sobre arrendamiento de vivienda, 72 recurrencia de enfermedades del menor, 110 a 114, 115, 164 a 168 en la cual consta que Maribel de Pascual trabajaba en la obra que construía Juan Pascual, Edificio Golf View, la prueba a foja 191 en la cual la demandada se encontraba haciendo compras de supermercado para la familia fecha en la que el demandado se hospedaba en un apartahotel (sic) Ambassador, la constancia del Colegio St. Mary del calendario escolar y de la graduación de Pre-Kinder del menor, cuando el demandado abandonaba el domicilio conyugal, las pruebas a fojas 131, 163, 169, 170, 173, 174, 200 que constan arreglos para el cumpleaños

> del actor del juicio, asistencia al bautizo de familiares del demandante, viajes al extranjero de 21 de marzo de 1994 por razón de chequeo médico del señor Pascual, viajes al extranjero y al interior, prueba a foja 175 sobre cena formal de los cónyuges el día 20 de abril de 1994, prueba a foja 212 del expediente en la que queda claramente establecido la fecha en la que Humberto Camargo dejó de laborar para la familia Pascual, pruebas estas que demuestran la asistencia moral y espiritual durante la convivencia conyugal.
>
> Por lo tanto, al estimar erróneamente como probado por el actor Juan A. Pascual los no acompañamiento (sic) ignorando las pruebas documentales antes descritas, los cuales demuestran que tales hechos no ocurrieron y motivos incluso la jurisprudencia nacional no considera como causal de divorcio, el Tribunal, incurrió en error de hecho sobre la existencia de la prueba influyendo tal error en lo sustancial del pleito". (Fs. 775-776).

La parte recurrente sostiene que el Tribunal Superior de Familia incurrió en error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, al dar por probado que la señora ACEVEDO no asistía moral ni espiritualmente a su esposo el señor PASCUAL ni mantenía relaciones íntimas con él, en virtud de que no tomó en consideración los documentos que aparecen en el segundo motivo, anteriormente transcrito.

El estudio de todas estas pruebas, pone de manifiesto lo siguiente:

1) Que el niño Alejandro, hijo de los señores PASCUAL-ACEVEDO, sufrió varias enfermedades comunes en los niños y que necesitó terapia en una clínica psico-fonoaudiológica que lo ayudara con problemas que presentaba en el desarrollo del lenguaje.

2) Que la señora ACEVEDO se encargaba de los cuidados del niño Alejandro y de sus actividades escolares, al igual que de algunos asuntos relacionados con el manejo de su hogar (compras de víveres, trabajadores domésticos).

3) Que la señora ACEVEDO trabajaba en el proyecto del edificio "Golf View", propiedad del señor PASCUAL.

4) Que los señores PASCUAL-ACEVEDO realizaron un viaje al exterior en marzo de 1994, para practicarle un reconocimiento médico al señor PASCUAL que revelara su estado de salud. Además, que viajaron en dos ocasiones distintas al interior del país para cumplir con compromisos familiares.

5) Que el señor PASCUAL se hospedó en el Hotel "Suites Ambassador" desde el 31 de mayo hasta el 16 de septiembre de 1994.

Estos hechos, producto del análisis de todas las pruebas aportadas por la parte demandante y acusadas de haber sido ignoradas por el Tribunal Superior, no constituyen elementos relevantes para la determinación del cumplimiento de los deberes conyugales, por parte de la señora ACEVEDO. Más bien resultan intentos de justificar su conducta, criterio que fue sostenido por la sentencia impugnada y que la Sala estima prudente reiterar, por considerar que se ajusta a derecho:

> "Ahora bien, la señora PASCUAL para refutar los hechos alegados por el demandante, en el sentido de que el hijo dormía en la habitación conyugal lo que impedía la realización de actos íntimos, ha probado que el niño Alejandro ha tenido una serie de enfermedades o malestares, sin embargo, se advierte que en ningún momento ha tenido esfuerzos tendientes a demostrar que sí cumplía con tales deberes conyugales, lo que nos lleva a la conclusión que a lo largo del proceso ha invertido en probar motivos o justificaciones al respecto, los cuales realmente no tienen peso.
>
> Lo cierto es que sus negativas a los hechos de la demanda han sido todas de carácter definido, lo que ha (sic) nuestro juicio ha

> producido la inversión de la carga de la prueba y ha relevado al demandante de probar que "las relaciones sexuales entre ellos no se daban". En otras palabras, si bien la señora Pascual negó el incumplimiento de los deberes lo hizo bajo el móvil de la justificación que su hijo estaba enfermo, y de que ella igualmente lo estaba o alegando compras de regalos hechos estos que ha probado, pero que en sí no constituyen motivos ni justificaciones para no cumplir con la entrega total hacia su esposo". (Fs. 701-702).

La Sala ha analizado los elementos de prueba a los que hace referencia la primera causal del recurso de casación en el fondo y concluye que la misma no se ha producido.

La segunda causal consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

La recurrente utiliza seis motivos para fundamentarla y dentro de cada uno de ellos se refiere a una serie de pruebas, que considera fueron erróneamente valoradas por el Tribunal Superior de Familia. Nos referiremos a cada uno de los motivos.

En el primer motivo se señala que fue mal valorada la prueba consistente en el examen psicológico practicado por la Licenciada Alicia Brennan de Vásquez a los señores JUAN PASCUAL y MARIBEL ACEVEDO, consultable de fojas 573 a 577, y la diligencia de entrega de dicho dictamen pericial, durante la cual la perito fue preguntada y examinada por los apoderados de ambas partes y por la Magistrada Sustanciadora del Tribunal Superior de Familia (fs. 579-586).

Argumenta que en dichas pruebas se concluye que el señor PASCUAL no tiene rasgos de maltrato psíquico; que la señora ACEVEDO tiene lazos afectivos hacia su esposo y muestra señales de inseguridad y marcada dependencia con él, lo cual es una característica que presenta una persona maltratada.

En relación con este punto, la sentencia recurrida estimó que de acuerdo con esta prueba, "la marcada dependencia hacia la figura del esposo y su inseguridad ... no son más que síntomas de una persona maltratadora que como bien, la misma parte apelante ha manifestado se pueden encontrar en la misma, en opinión de la Dra. Nilda Santamaría de Medina, es decir, la `... Inseguridad y dependencia marcada y la `racionalización o negación de su conducta (ver foja 611. Alegato de la parte demandada)". (F. 706).

El análisis de la prueba en cuestión pone de manifiesto que si bien es cierto que la perito manifestó que "En la evaluación sicológica realizada al señor Pascual no aparecen rasgos de maltrato psíquico", la Sala estima que esta opinión, como único elemento de convicción, no tiene la fuerza suficiente para desvirtuar los otros medios de prueba que tomó en consideración el Tribunal Superior de Familia para arribar a su decisión.

Ahora bien, es cierto, igualmente, que la prueba psicológica reveló que la señora ACEVEDO presentaba muestras de inseguridad, marcada dependencia hacia su esposo y lazos afectivos con él, pero no que la perito afirmara que éstos eran rasgos que presentaba una persona maltratada. Consecuentemente, estas afirmaciones tampoco pueden considerarse como prueba de que la señora ACEVEDO hubiere cumplido con sus deberes de esposa o que desvirtúen la convicción a la que arribó el Tribunal Superior de Familia, de la existencia de trato cruel psíquico, imputable a la parte recurrente.

El segundo motivo es del siguiente tenor:

> "Segundo Motivo: A foja 24 de su sentencia el Tribunal Superior de Familia da por establecido la calidad de testigo técnico de los doctores Díaz y Malgrat y les otorga plena validez para acreditar las supuestas ansiedades del actor, pese a que la noche anterior a una de las supuestas sintomatologías ansiosas el día 20 de abril de 1994 el autor (sic) del juicio se encontraba celebrando cena formal

> en el hogar, foja 175 del expediente, que las restante (sic) citas citadas por el Dr. Díaz en su informe coinciden con las citas del menor con la fonoaudióloga foja 71, del expediente, además que el testimonio técnico no está consagrado por la ley como prueba y que son prohibidos los medios probatorios contrarios a la moral y al orden público.
>
> Los testigos técnicos para el Tribunal, nunca atendieron ni conocieron a Maribel Acevedo, los mismos dan por sentado hechos que nunca vieron y se fundan en lo referido por Juan Pascual.
>
> Además que la sentencia a foja 16 citando al autor Belluscio sostiene que las enfermedades no son causal de separación, no obstante, en la valoración segmentada de la prueba que realizó el Tribunal en el presente proceso constituyen causal de divorcio". (F. 778).

La Sala considera que la valoración de esta prueba por parte del juzgador de segunda instancia, se ajusta a derecho. El Tribunal Superior consideró que las intervenciones de los doctores Díaz y Malgrat constituían, "testimonios técnicos", que son aceptables en nuestra legislación, ya que "si bien expresamente el Código no habla de este tipo de testimonio, implícitamente el artículo 930 del Código Judicial lo permite."

Igualmente, el Doctor Jorge Fábrega P. en su obra, "Medios de Prueba" (Varitec, S. A., San José, Costa Rica, Primera Edición, 1997, págs. 158-159), se refiere a esta clase de testimonios:

> "La tendencia moderna es admitir la declaración del testigo técnico. En el nuevo Código el Juez puede interrogar a estos testigos sobre percepciones y situaciones concomitantes o que sirven de antecedentes, y sus causas, siempre que se deriven de conocimiento directo, con base en el art. 928 que preceptúa: `Las preguntas podrán contener referencias de carácter técnico, si fuesen dirigidas a personas especializadas .
>
> Al respecto agrega el art. 931 del C. Judicial:
>
> `Artículo 931. Los testigos pueden ser interrogados respecto a opiniones o inferencias que se relacionen con sus percepciones personales o que sean de utilidad para esclarecer su testimonio.
>
> Y el Artículo 909:
>
> `No hará fe el dicho del testigo que no ha declarado de sus propias y directas percepciones, salvo los casos en que la ley admita declaración sobre el conocimiento formado por inferencia; pero en este caso se deben expresar los fundamentos de ésta.
>
> Convergente, el art. 928 dispone:
>
> `Cada parte tienen (sic) el derecho a objetar las preguntas o repreguntas de la contraria cuando lo estimare manifiestamente sugerentes, inconducentes o capciosas, antes de que sean contestadas por el testigo. El Juez decidirá sobre tales objeciones verbales en el acto mismo. Estas decisiones son irrecurribles; pero en la diligencia se dejará constancia de la pregunta, repregunta, objeciones y de la decisión.
>
> Las preguntas podrán contener referencias de carácter técnico, si fueren dirigidas a personas especializadas.
>
> La experiencia demuestra que la persona que ejerce una profesión u oficio es, en primer lugar, quien observa y recuerda, en general, con mayor precisión, hechos o incidentes relacionados con los mismos, ya que la atención se concentra en mayor grado en ellos. Así

> por ejemplo un médico por razón de su profesión, percibe las condiciones físicas de una persona, especialmente de un enfermo, y las deducciones que realice sobre su estado debe ser aprovechado adecuadamente por el Juez".

De lo anteriormente expuesto se colige que no cabe duda que los denominados testimonios técnicos, son admisibles en nuestra legislación; que ambos doctores atendieron al señor PASCUAL por un período considerable de tiempo, lo cual los hace idóneos para emitir sus conclusiones en atención a la relación médico-paciente existente entre ellos.

Por último, la Sala observa que estos testimonios fueron apreciados por el Tribunal Superior de Familia, en relación con el resto de los testimonios y otras pruebas aportadas al proceso, razón por la cual no se ha producido error de derecho en relación con ella.

El tercer motivo expresa el siguiente cargo:

> "Tercer Motivo: El Tribunal Superior de Familia en la página 30 y 31 de la sentencia le resta validez al reporte de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia y que consiste en el reporte migratorio de los Señores Maribel Viejo y Juan Pascual visible de fojas 525 a 543, no obstante, que en el mismo Juan Pascual y Maribel Viejo reportan el mismo número de teléfono y el mismo domicilio, a parte (sic) de que coinciden fecha y vuelos entre los mismos y que el Sr. Pascual en juicio negó que conviviese con otra mujer conforme consta en su declaración a foja 359 del expediente.
>
> En dicho reporte constan viajes de ambos a E. E. U. U., México, Colombia, dentro de dichos viajes se dio la irregularidad que señala el cardiólogo Gálvez en el día 12 de septiembre de 1994, tres meses posterior a la separación. Luego si el Tribunal hubiera analizado en su conjunto todas estas pruebas conforme a las reglas de la sana crítica conjuntamente con las pruebas de los doctores Díaz y Malgrath, hubiera tenido que concluir que existe la relación extra conyugal y la no existencia de maltrato ni del abandono, por lo tanto la sentencia al no evaluar en forma completa el caudal probatorio ni los reportes migratorios, incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba lo cual influyó en lo dispositivo de la resolución recurrida". (F. 778).

En este motivo la recurrente alega que el señor PASCUAL mantenía relaciones extra matrimoniales con la señora Maribel Viejo, situación que se desprende de los informes remitidos por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, en los que aparece el movimiento migratorio de éstos, durante los años 1994-1995. Sostiene que si estas pruebas hubiesen sido correctamente valoradas por el Tribunal Superior de Familia, "hubiera tenido que concluir que existe la relación extra conyugal y la no existencia de maltrato ni del abandono".

La Sala considera acertado el juicio de valor emitido por el Tribunal Superior de Familia en relación con este punto, ya que reconoció que si bien en el movimiento migratorio de los señores PASCUAL y Viejo coincidían algunos números de vuelos y fechas de entrada y de salida de nuestro país, ésto no era prueba fehaciente de que mantenían una relación íntima, o que de existir ésta, fuera anterior a la separación de los esposos PASCUAL-ACEVEDO y, tampoco, de que esta supuesta relación extra matrimonial fuese la causa de la conducta de la recurrente con su esposo.

Por tanto, se descarta también este cargo y se procede a analizar el cuarto motivo, en el que se plantea lo siguiente:

> "Cuarto Motivo: La sentencia sustenta el maltrato psíquico, foja 36 del expediente en el supuesto incumplimiento del débito conyugal que es, según Belluscio citado en la sentencia una de las cuestiones sexuales que clasifica como injuria, no obstante, el Tribunal de

> Familia no toma en consideración que la etiología de un problema de maltrato no son las cuestiones sexuales, tal como asevera la Dra. Nilda Santamaría de Medina, la cual es citada igualmente por la sentencia.
>
> Al estimar el material probatorio el Tribunal da por sentado luego sin prueba concluyente la inexistencia de vida conyugal y alude al hecho de no cumplir con la entrega del cuerpo, lo cual no es el punto que se debate en un caso propio de maltrato, acogiéndose el Tribunal a modalidades doctrinales que desvirtúan el verdadero sentido y alcance de la norma. En igual forma segmentó la declaración contradictoria del Sr. Pascual quien a foja 372 del expediente sostuvo que los medicamentos no afectan su actividad sexual "Si no todo lo contrario", no siendo ni en los problemas cardiovasculares ni en la maltrato, la actividad sexual, el punto concluyente para determinar o no la existencia de una causal como de la maltrato, argumento a los que alude la sentencia y que influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido". (F. 778).

En este motivo la recurrente se limita a atacar, de manera general, la operación de valoración de la prueba realizada por la decisión impugnada, planteando que la ausencia de relaciones sexuales entre los cónyuges no es concluyente en esta causal de divorcio y que la sentencia "segmentó la declaración contradictoria del Sr. Pascual", quien sostuvo que los medicamentos no afectaban su actividad sexual "Si no todo lo contrario".

No encuentra la Corte que este señalamiento del señor PASCUAL en su declaración de parte, sea relevante para la determinación de si hubo o no trato cruel psíquico por parte de la señora ACEVEDO hacia su esposo, el señor PASCUAL.

El quinto y sexto motivos se refieren a la valoración de los testimonios aportados por el señor PASCUAL y son del tenor siguiente:

> "Quinto Motivo: La sentencia en la página 37 aprecia deficientemente la declaración de la señora Ramos sobre el lavado de la ropa que la testigo señaló `ropa interior y no toda la ropa como hace ver la sentencia, lo cual cita como prueba de los malos tratos, foja 284 del expediente. Sobre el particular es elemental las razones de pulcritud en el cuidado de la ropa interior. Por lo tanto se incurrió en error de derecho en apreciación de la prueba que se reflejó en lo sustancial del pleito.
>
> Sexto Motivo: La sentencia en las páginas 25 a 29 entra al análisis de las pruebas testimoniales aportadas por el demandante pese a tener éstos, el carácter de testigos sospechosos y segmenta el contenido de dichas pruebas llegando a conclusiones erradas, ello es así por cuanto consta a foja 317 del expediente que el testigo Humberto Camargo no laboró los últimos seis meses, sin embargo, a foja 37 de la sentencia con base en dicha declaración señala que al Sr. Pascual le fueron proferidas injurias, así como la declaración del testigo González sostiene la sentencia en misma página 37 que los insultos que se daban eran oídos por terceras personas, en presencia del testigo González del cual no se colige tal hecho como se constata a foja 343 del expediente. El testigo Luis Váldez era al momento de la declaración como se constata a foja 331 del expediente empleado de la fábrica del Sr. Pascual igualmente la Sra. Elida de Pinzón, declaró a foja 325 del expediente que no le constaban los hechos si no por referencia siendo además secretaria personal del Sr. Juan A. Pascual en la fábrica de Productos Alimenticios Pascual. En cuanto al testimonio de la Sra. Ramos igualmente la sentencia segmentó el contenido de la declaración y adicionó aspectos no declarados como se constata a foja 284 del expediente en lo concerniente al lavado de la ropa, señalamiento al que alude la sentencia en la página 37.
>
> Al no analizar éstas (sic) declaraciones conforme a las reglas de la

sana crítica y segmentar las mismas el Tribunal Superior de Familia incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba lo cual influyó en lo sustancial del pleito". (F. 779).

Como primer punto, la recurrente acusa la prueba testimonial a la que hace referencia en los motivos transcritos, por considerar que proviene de testigos sospechosos.

La Sala observa que todos los testigos aportados por el señor PASCUAL eran personas que habían laborado o que todavía prestaban sus servicios al demandante, en su residencia o en la Fábrica de Productos Alimenticios Pascual, de su propiedad, por lo que en principio se les considera como testigos sospechosos de acuerdo con el ordinal 3 del artículo 896 del Código Judicial.

No obstante, como acertadamente manifestó el Tribunal Superior de Familia en la sentencia atacada, en los procesos de familia como el que nos ocupa, "la doctrina y la jurisprudencia son unánimes en manifestar que los trabajadores y empleados que se relacionan con la familia y los parientes de la misma son los más idóneos para conocer la realidad conyugal, pues, tienen mayor relación con los mismos". (F. 687). Además, aceptó "que si bien pueden tomarse como sospechosos por su calidad, han sido valorados teniendo en cuenta el razonamiento de sus declaraciones y produciendo la confianza en el juzgador por la cabalidad y la secuencia lógica de sus relatos." (F. 699) Consecuentemente, la Sala estima que la sentencia no incurrió en error de derecho al valorar la prueba testimonial aportada por la parte actora en el proceso.

Ahora bien, la recurrente acusa al Tribunal Superior de Familia de haber realizado una valoración fragmentada de los testimonios rendidos por los señores LUCIA RAMOS (fs. 282-300); HUMBERTO CAMARGO (fs. 267-276); BOLÍVAR GONZÁLEZ (fs. 337-345); ELIDA DE PINZÓN (fs. 319-327); y LUIS VALDÉS (fs. 328-336).

Efectivamente, la Sala observa que la sentencia recurrida se refirió a cada uno de estos testimonios, de los cuales se obtienen las siguientes conclusiones: 1) La señora ACEVEDO no acompañaba a su esposo durante las comidas en casa ni en sus compromisos sociales; 2) La señora ACEVEDO le profería injurias e insultos al señor PASCUAL frente a los trabajadores domésticos; 3) El niño dormía en la habitación de los señores PASCUAL-ACEVEDO.

La Corte estima que los supuestos errores que la recurrente le atribuye al Tribunal Superior de Familia en la apreciación de los testimonios de estas personas, no tienen fuerza suficiente para desvirtuar estas conclusiones.

Cabe señalar que el Tribunal Superior de Familia consideró que se habían acreditado, de manera plena y contundente, las causales de divorcio consagradas en el artículo 114 del Código Civil, luego de haber realizado la valoración de estos testigos en conjunto con las declaraciones de los otros testimonios aportados al proceso y el resto del material probatorio que consta en el expediente.

La Sala estima que en dicha valoración el juzgador de segunda instancia no incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, razón por la cual no existen méritos para casar la sentencia atacada.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Familia el 2 de abril de 1997, dentro del proceso de divorcio instaurado por el señor JUAN ALBERTO PASCUAL contra la señora MARIBEL ACEVEDO.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Encargado

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VIVECA MARISA HERRERA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ABELARDO ALFONSO JIMÉNEZ BOLAÑOS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado MARCO ANTONIO HERRERA MOW presentó recurso de casación en la forma y en el fondo, contra la sentencia de 24 de septiembre de 1997 dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, por medio de la cual REVOCA la sentencia N° 98 de 6 de septiembre de 1996, proferida por el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, dentro del proceso ordinario interpuesto por **ABELARDO ALFONSO JIMÉNEZ BOLAÑOS** contra **VIVECA MARISA HERRERA.**

El término para presentar los alegatos fue utilizado por ambas partes.

Agotados los trámites procesales inherentes al presente recurso, y encontrándose el mismo en estado de ser decidido, procede la Sala, en primer término, a resolver sobre la causal de forma alegada.

No obstante lo anterior, antes de adentrarse la Corte al análisis de los requerimientos del recurrente, considera necesario e imprescindible realizar un resumen sucinto de los antecedentes del caso.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

De la documentación procesal se percibe, que el señor ABELARDO ALFONSO JIMÉNEZ BOLAÑOS promovió ante el Juzgado Cuarto del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, un Proceso Ordinario por Incumplimiento de Contrato en contra de la señora VIVECA MARISA HERRERA, a fin de que se diera por terminado el Contrato de Compraventa celebrado entre las partes.

El JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, mediante sentencia N° 98 de 6 de septiembre de 1996, decide a favor de la demandada, VIVECA MARISA HERRERA, por considerar probada la excepción de nulidad de Contrato alegada por la misma.

La aludida decisión del JUZGADO CUARTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL fue apelada por la parte afectada. El Primer Tribunal Superior al resolver el recurso, revoca la Sentencia del a-quo, y DECLARA:

> "PRIMERO: Que ABELARDO ALFONSO JIMENEZ BOLAÑOS con cédula de identidad personal N° 8-62-948 (promitente vendedor) y VIVECA MARISA HERRERA con cédula de identidad personal N° 8-396-469 (promitente compradora), celebraron un contrato de promesa de compraventa que tenía como objeto la venta futura de la finca N° 20,333, inscrita al tomo 491, folio 48 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, de propiedad del promitente vendedor.
>
> SEGUNDO: Que debido al incumplimiento de la promitente compradora en el pago de las mensualidades pactadas en el contrato de promesa celebrado entre las partes queda RESUELTO por esta vía judicial y; por lo tanto, la vivienda debe ser restituida a su propietario en el estado en que le fue entregada a la promitente compradora, salvo el deterioro producido por el transcurso del tiempo; mientras que las sumas abonadas por la demandada al momento de suscribirse el contrato compensan el tiempo en que esta (sic) estuvo ocupando la propiedad.
>
> TERCERO: CONDENA a la parte demandada a pagar la suma de B/.11,000.00 (ONCE MIL BALBOAS) en concepto de daños y perjuicios, derivados de su morosidad en el pago mensual pactado en la cláusula cuarta de la promesa de contrato, calculados a partir del mes de

septiembre de 1993 hasta la presentación de la demanda.

CUARTO: DESESTIMA las excepciones de Dolo y Nulidad de Contrato alegadas por la parte demandada.

CONDENA a la parte demandada a pagar las costas de ambas instancias, según lo dispone el artículo 1060 del Código Judicial, las cuales se fijan en la suma de MIL NOVECIENTOS QUINCE BALBOAS CON 00/100 (B/.1,915.00) Regule el Secretario de primera instancia los gastos correspondientes".

Del fallo proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 24 de Septiembre de 1997, el Licenciado Marco Antonio Herrera Mow, apoderado judicial de la señora VIVECA MARISA HERRERA, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo.

POSICIÓN DE LA SALA

Después del necesario recuento procesal del caso, la Sala de Casación Civil entra a estudiar en primer lugar la causal de casación en la forma.

La causal de forma invocada es: "Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda, porque se resuelve sobre punto que no ha sido objeto de la controversia".

El recurrente fundamenta esta causal de forma en (3) tres motivos que pasamos a transcribir:

"PRIMERO: El Primer Tribunal Superior de Justicia declaró en su sentencia, sin que lo hubiese solicitado la demanda, que las partes celebraron un contrato de Promesa de Compraventa que tenía como objeto la venta futura de la finca N° 20,333, inscrita al Tomo 491, Folio 48 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, propiedad del demandante.

SEGUNDO: Al hacer esta declaración no pedida por el demandante, el AD QUEM resolvió un punto que no fue objeto de controversia, ya que la naturaleza del negocio jurídico no era el QUID del litigio y así se desprendió dle (sic) PETITUM de la demanda que contiene como causa PETENDI, las siguientes: Dar por terminado el contrato de compraventa; la expulsión de mi mandante del bien objeto del contrato o su lanzamiento y el pago de daños y perjuicios resultantes de la mora.

TERCERO: La sentencia atacada, sobre la base de una declaración no pedida, hace recaer otras consecuencias jurídicas de mayores magnitudes lesivas a los intereses de mi patrocinada".

Como disposiciones infringidas el recurrente señala los artículos 470 y 978 del Código Judicial.

Tal como se desprende de las alegaciones del casacionista, el recurso se encamina a atacar los vicios que supuestamente se dieron, en el fallo del Primer Tribunal Superior al determinar, sin que se hubiese solicitado, que las partes celebraron un contrato de promesa de compraventa, es decir, la naturaleza jurídica del contrato celebrado entre las partes.

Para resolver, la Sala confrontará la decisión con lo demandado por las partes, para poder determinar si efectivamente se produce o no la causal alegada.

La parte petitoria de la demanda se contrae a solicitar la resolución del contrato para luego poder solicitar el lanzamiento, recuperar la posesión de la casa y el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. En la contestación de la demanda, los demandados interponen excepción de dolo y nulidad del contrato.

Considera esta Sala que efectivamente en la parte resolutiva de la sentencia el Tribunal Superior falló sobre puntos ajenos a la controversia. Por lo tanto, la sentencia no está en consonancia con las pretensiones de la demanda ya que el demandante en ningún momento solicitó que el Tribunal reconociera sus derechos a través de un contrato de promesa de compraventa, sino que solicitaba la rescisión del contrato de compraventa.

Por todo lo expuesto la Sala considera que se infringieron los artículos 470 y 978 del Código Judicial, y procede, por lo tanto, casar la sentencia, y como consecuencia de ello, y actuando como tribunal de instancia, dictar la correspondiente sentencia de reemplazo. Por haberse aceptado la causal de forma invocada, no debe la Sala entrar a considerar la causal de fondo por así disponerlo los artículos 1153 y 1180 del Código Judicial.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

En primer lugar, consideramos necesario referirnos a la discusión surtida sobre la naturaleza jurídica del contrato firmado por las partes, motivo de este litigio. Existen diferencias entre los contratos de compraventa y promesa de compraventa, como así lo establece la doctrina en el sentido siguiente:

> "Para que haya compraventa necesariamente deben concurrir, además del consentimiento, cosa vendida y precio en dinero o signo que lo represente (art. 1215). Si alguno falta, el contrato o es nulo o degenera en otro, ya que se trata de elementos de su esencia. Por ello podría sostenerse que no tiene existencia legal como tal. Mas, dado que estos requisitos son también propios de la promesa de venta y de compra, según el art. 1221, es importante que al prestar el consentimiento las partes dejen claramente establecido si se trata de uno y otro contrato. Es decir, si el vendedor se obliga a vender (promesa) o, si por el contrario, da en venta, vende, (compraventa). Como vimos, la distinción tiene interés práctico, porque constituyen dos contratos distintos, sujetos a normas diferentes".
>
> (ARROYO CAMACHO, Dulio. CONTRATOS CIVILES. TOMO I Editorial Mizrachi & Pujol, S. A., Panamá, 1997, página 124).

En el contrato de compraventa efectuado por las partes el día 8 de enero de 1992, se dispone claramente en la primera causal que "EL VENDEDOR da en venta a LA COMPRADORA la finca N° 20333, inscrita en el Tomo 491, Folio 48, de la sección de propiedad de la Provincia de Panamá". Vemos claramente que se trata de un contrato de compraventa y no de un contrato de Promesa de Compraventa, en el cual las partes se obligan a vender y comprar.

Una vez aclarada la naturaleza jurídica del contrato suscrito por las partes, procedemos a analizar su existencia y validez.

Consideramos necesario reiterar la jurisprudencia de esta Corte Suprema en el sentido de determinar que el Contrato de Compraventa de bienes inmuebles es un contrato solemne y la falta de la solemnidad exigida por la ley para el perfeccionamiento de un contrato causa su inexistencia, lo cual en nuestro derecho es causal de nulidad absoluta.

> "Ahora bien, lo cierto es que (sic) jurisprudencia en algunos casos hace referencia a la "inexistencia", pues no cabe duda que la misma se da en aquellos casos en que el contrato no se ha perfeccionado, v.gr. porque la oferta no ha sido aceptada, o bien porque no se ha dado cumplimiento a la solemnidad exigida por la ley, etc. No obstante, como vimos, tales supuestos son considerados por nuestro C. Civil, como causales de nulidad absoluta (Art. 1141, ord. 1°)".
>
> (ARROYO CAMACHO, Dulio. Estudios Jurídicos. Tomo IV, Panamá, 1992, páginas 320 y 321).

También se refiere a la solemnidad de los contratos como una de las causales de inexistencia al expresar lo siguiente:

> "2. Cuando falta la solemnidad exigida por la ley para el perfeccionamiento del acto o contrato.
>
> En este caso el mero consentimiento no basta para que el contrato se perfeccione. La ley exige algo más: que dicho consentimiento se dé en la forma que ella determina. Tal ocurre, por ejemplo; a)con la promesa de venta de bienes inmuebles o de derechos hereditarios (Art. 1221); b) con la compraventa de inmuebles o de derechos hereditarios (Art. 1220); c) con el contrato de anticresis (Art. 1622 b), etc. En el primer caso la solemnidad es que el contrato conste por escrito; en el segundo, que conste por escritura pública; y, en el tercero, que conste por escritura pública y que la misma se inscriba en el Registro Público".
>
> (ARROYO CAMACHO, Dulio. Estudios Jurídicos. Tomo IV, Panamá, 1992, páginas 312 y 313).

Nuestro Código Civil consagra que cuando los contratos se refieren a inmuebles y derechos reales sobre inmuebles, deben constar en escritura pública, así lo establece el artículo 1220 del Código Civil al indicar:

> "... pero si el contrato se refiere a bienes inmuebles o derechos hereditarios, no se perfeccionará mientras no conste por escrito con las formalidades que este Código establece".

En efecto, las formalidades las consagra el artículo 1131 del Código Civil cuando establece:

> "Deberán constar por instrumento público: 1. los actos y contratos que tengan por objeto la creación, transmisión, modificación, o extinción de derechos reales sobre inmuebles".

Es decir que para que este contrato se perfeccione deberá constar por escrito y otorgarse mediante Escritura Pública. La falta de esta solemnidad ocasiona, entonces, la nulidad absoluta de este contrato, en virtud de lo consagrado por el artículo 1141 del Código Civil que establece lo siguiente:

> "Hay nulidad absoluta en los actos o contratos:
>
> 1. cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia;
>
> 2. cuando falta algún reguisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto o contrato y no a la calidad o estado de la persona que en ellos interviene".

Debemos tomar en cuenta que la nulidad de este contrato produce sus efectos en relación con lo establecido por el artículo 1154 del Código Civil que consagra que cuando se declara la nulidad de una obligación, los contratantes deberán restituirse recíprocamente las cosas que hubieren sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con los intereses. La doctrina española se ha referido a estos efectos de la siguiente manera:

> "Cuando alguna de las obligaciones a cuyo nacimiento tendía el contrato nulo ha empezado al menos a recibir ejecución, no es bastante para satisfacer los intereses de la partes la mera declaración de nulidad. Se ha producido una situación de hecho contraria a Derecho, para cuya remoción el Derecho apronta el oportuno remedio: la creación entre las partes de una relación obligacional dirigida a reponer las cosas en el estado que tenían con anterioridad. El restablecimiento del anterior status quo, o restauración de la situación primitiva, se opera concediendo a ambas partes -si ambas han cumplido- un crédito a la restitución de las prestaciones recibidas. Esto es consecuencia natural e ineludible de la declaración de nulidad, y no requiere elejercicio de una acción

independiente de la principal de nulidad (S. 26 junio de 1946)".

(ALBALADEJO, Manuel. Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Tomo XVII, Vo. 2. Editorial Revista de Derecho Privado, 1981, página 291).

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 24 de septiembre de 1997, y en su lugar RESUELVE:

1. DECLARAR NULO el Contrato de Compraventa suscrito por los Señores ABELARDO ALFONSO JIMÉNEZ BOLAÑOS y VIVECA MARISA HERRERA el día 8 de enero de 1992.

2. ORDENA a la Señora VIVECA MARISA HERRERA a restituir el inmueble a su propietario, el Señor ABELARDO ALFONSO JIMÉNEZ BOLAÑOS, en el estado en que le fue entregada, salvo el deterioro producido por el uso normal o por el transcurso del tiempo y a éste último a reembolsar las sumas que haya recibido a cuenta del precio, más los intereses de ley.

3. ORDENA QUE la Señora VIVECA MARISA HERRERA pague las sumas que corresponden a la ocupación del inmueble, previa su fijación por el procedimiento previsto por el artículo 983 del Código Judicial.

Las costas, conforme se hayan causado, en base a la buena fe de las partes en la conducta procesal.

Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VIOLA JEAN BRASSFIELD MORENO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LA NACIÓN (MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS). MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El letrado RODRIGO MIRANDA MORALES, en su condición de apoderado judicial de la señora **VIOLA JEAN BRASSFIELD MORENO** dentro del juicio ordinario que se le sigue a **LA NACIÓN**, ha acudido ante esta Sala de la Corte para impugnar la sentencia de 22 de abril de 1997, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se absolvió a la parte demandada en el proceso.

El recurso presentado, una vez admitido y cumplidos los trámites que la ley impone en estos casos, ha de ser, de inmediato, objeto de la consideración de la Sala para resolver si la impugnación posee méritos para invalidar la sentencia.

Fue invocada como causal una de fondo: la infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Dada la brevedad de los motivos en que la censura expone los cargos contra el fallo nos permitiremos su completa transcripción:

> "PRIMERO: La señora VIOLA JEAN BRASSFIELD sufrió graves lesiones y la pérdida total del valor del vehículo de su propiedad en accidente de tránsito ocurrido el día 20 de enero de 1984 al ser colisionada por un vehículo de propiedad del Ministerio de Obras Públicas, esto

> es, de la Nación, conducida por un conductor al servicio de ese Ministerio que viajaba en misión propia de sus labores.
>
> SEGUNDO: La sentencia recurrida si bien admite que el vehículo era de propiedad del Estado (Ministerio de Obras Públicas), que el conductor del mismo era un funcionario público que en esa circunstancia lo hacía en cumplimiento y de acuerdo con órdenes de sus superiores jerárquicos (fs.7,7 vuelta, 9-10,11 á(sic) 13, 20, 24-25, 38-39), dejó de aplicar las normas que hacen civilmente responsablemente al Estado y exigió el requisito no contemplado en ellas de que el conductor del vehículo responsable del accidente estuviera actuando como "Agente Especial". (Fs. 290).

En el apartado correspondiente a las normas de derecho denunciadas como infringidas el casacionista consigna los artículos 2, ordinal d), 104 y 105 del Decreto Ejecutivo N°.160 de 7 de junio de 1993 (Reglamento de Tránsito), y el artículo 1645 del Código Civil.

Las normas citadas que conciernen al Reglamento de Tránsito regulan aspectos atinentes a la identificación de los propietarios de los vehículos y a la responsabilidad que a ellos les atañe por los daños que se produzcan cuando los automóviles de su propiedad hayan quedado involucrados en un accidente de tránsito.

Respecto al artículo 1645 del Código Civil, ésta norma se cita en su versión después de la modificación sufrida a tenor del artículo 9 de la Ley 18 de 1992 y que, en la parte que interesa en este proceso, expresa lo siguiente:

> "ARTÍCULO 1645. La obligación que impone el Artículo 1644 es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
> ...
> El Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, dentro del ejercicio de sus funciones.
> ..."

Se hace constar que, por ser esta una causa donde la demandada es LA NACIÓN, ha debido intervenir, en defensa de sus intereses, el Ministerio Público quien, en efecto, ha ostentado esa representación a lo largo de todo el proceso.

Frente al recurso de casación interpuesto, el Procurador General de la Nación, dentro de sus facultades, ejerció el derecho de oposición reiterando en favor de su representada las opiniones y defensas jurídicas que buscan exonerarla de cualquier clase de responsabilidad ante la parte demandada.

Cuando se somete a examen la sentencia cuestionada y se le confronta con los cargos que le imputa la censura, es posible percibir que los expuestos en los motivos del recurso no se compadecen con los presupuestos que sirvieron de fundamento al fallo. Contrario a lo afirmado, en el sentido de que en la sentencia se admitió que el conductor (BOLÍVAR RIVERA VEGA) del vehículo envuelto en el accidente de tránsito en que se provocaron los daños a la parte actora, era un funcionario público en cumplimiento de órdenes impartidas por sus superiores jerárquicos, lo sostenido por los jueces de segunda instancia fue lo siguiente: "Ciertamente que se alega que el señor RIVERA VEGA laboraba en el Ministerio de Obras Públicas, [pero] esta situación no fue debidamente acreditada en autos ..." (foja 283).

O sea, que el Tribunal Superior, para eximir a LA NACIÓN de responsabilidad en este juicio, tuvo en consideración, precisamente, que no se hicieron llegar al expediente las pruebas de la condición de empleado público del conductor que produjo el accidente.

Pero no sólo le sirvió de sustento al juzgador la circunstancia que se deja señalada; la que bastaría para restarle virtualidad al cargo del casacionista en

su pretensión de invalidar la resolución atacada. La Sala observa, además, que para reforzar su decisión, el Tribunal dejó sentado que, aún cuando RIVERA VEGA hubiese sido un funcionario público, carecía de la condición de agente especial del Estado el día de los acontecimientos y, por tanto, no se le puede exigir a LA NACIÓN responsabilidad derivada de la conducta culposa del conductor accidentado.

También le sirvió de fundamento a la sentencia, contrario a lo que se alega en los motivos del recurso, que el día del accidente el señor BOLÍVAR RIVERA VEGA no estaba desempeñando una diligencia inherente a un cargo público, sino ejecutando una acción en beneficio de un particular, hecho que bastaba para privar su gestión del carácter oficial que pretende otorgarle la parte demandante.

Vemos, entonces, que los cargos que se le imputan al fallo no se ajustan a la realidad reflejada en el pronunciamiento, pero la Sala estima conveniente abundar en ciertos comentarios.

Lo primero que es oportuno destacar es que no ha sido caprichoso el señalamiento que se hace en relación a la ausencia de pruebas acerca de la condición de funcionario público del señor RIVERA VEGA, requisito indispensable para entrar a considerar siquiera en qué grado podría haberle cabido responsabilidad a LA NACIÓN como resultado de su conducta. Fue la ausencia de pruebas en la demostración de ese extremo lo primero que se adujo en la sentencia para negar la condena solicitada en la demanda.

Más adelante el juzgador de segunda instancia se detuvo en la ponderación de si al conductor del vehículo oficial envuelto en el accidente se le debía o no considerar un agente especial del Estado, a los efectos de establecer si, por ese motivo, podía haberse producido la responsabilidad de LA NACIÓN. Aquí conviene hacer un alto en la aclaración de un aspecto de singular importancia. Según la censura, la sentencia al puntualizar que BOLÍVAR RIVERA VEGA no era un agente especial del Estado dejó de aplicar e incurrió en la violación directa del artículo 1645 del Código Civil, como éste quedó modificado por la Ley 18 de 1992.

Por supuesto, el Tribunal Superior en el análisis que llevó a cabo acerca de la calidad de agente especial que, en cualquier evento, se le hubiese tenido que reconocer al susodicho para poder derivar de ese hecho la responsabilidad de LA NACIÓN, se basó en los términos del artículo 1645 en su redacción original, o sea, antes de su modificación. Esa disposición dedicada a extender la responsabilidad extracontractual consagrada en el artículo 1644 del Código Civil a los actos u omisiones de las personas por quienes se deba responder, en lo que nos interesa en este juicio, era del siguiente tenor:

> "Art. 1645. -La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo pro los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
> ...
> El Estado es responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo dispuesto en el artículo anterior".

En el recurso de casación se cuestiona la aplicación que de ella hiciera el juzgador, entre otras razones, porque la misma fue modificada y ya no está en vigencia.

No le asiste al recurrente la razón. De acuerdo con el principio constitucional consignado en el artículo 43 de la Carta Política las leyes no tienen efecto retroactivo, salvo las de orden público o de interés social cuando en ellas así quede expresado.

De manera que la decisión de aplicar la disposición como estaba vigente en la fecha en que ocurrió el accidente (20 de enero de 1984) es, desde todo punto de vista, lo acertado. En consecuencia, el yerro jurídico que se le atribuye al

fallo por la supuesta violación directa del artículo 1645 del Código Civil, conforme fue modificado por la Ley 18 de 1992, carece de fundamento.

Acerca de la noción de agente especial del Estado como origen de la responsabilidad que a LA NACIÓN pueda caberle por las actuaciones o las omisiones en que incurran los servidores públicos, tanto en la sentencia de primera como en la de segunda instancia se abunda en argumentos y razones que explican a cabalidad porqué, bajo ninguna circunstancia, al señor BOLÍVAR RIVERA VEGA en el momento del accidente podía serle reconocida esa calidad. En respaldo de la decisión adoptada, los juzgadores de instancia se preocuparon de citar la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia en diversas épocas, cada vez que se ha tenido que pronunciar sobre esta materia. Esos pronunciamientos han sido invariables al interpretar que, según se pauta en el artículo 1645 del Código Civil, antes de su modificación, el Estado sólo es responsable cuando obra por mediación de un agente especial, debiéndose entender por tal quien reciba un mandato o comisión concreto y determinado para que, en representación del ente estatal y obligándose como mandatario suyo, cumpla el encargo que se le confiere. El conductor BOLÍVAR RIVERA VEGA no puede entenderse comprendido en la anterior definición.

En atención a las consideraciones que se dejan expuestas, la Sala debe externar su opinión en todo coincidente con la del fallo que ha sido objeto del presente recurso, por lo cual desestima la impugnación formulada en contra de la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de fecha 22 de abril de 1997 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial dentro del proceso ordinario que VIOLA JEAN BRASSFIELD le sigue a LA NACIÓN (Ministerio de Obras Públicas).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSUÉ LEVY LEVY RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A DESARROLLO VIZCAYA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Darío Carrillo Gomila, apoderado especial del señor **JOSUÉ LEVY LEVY**, dentro del proceso ordinario que le sigue a **DESARROLLO VIZCAYA, S. A.**, ha interpuesto recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 3 de mayo de 1996.

Cumplidos los trámites correspondientes, debe la Sala decidir si el recurso de casación reúne los requisitos necesarios para su admisibilidad.

Se trata de resolución recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por su cuantía y se observa que el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno y por persona hábil.

En relación con el libelo del recurso, se observa que se trata de recurso de casación en la forma, en el que se invocan tres causales distintas, a saber: 1) Por haberse omitido cualquier otro requisito cuya omisión cause nulidad, la cual se encuentra consagrada en el ordinal 1 del artículo 1155 del Código Judicial; 2) Por carencia de competencia improrrogable en el tribunal

sentenciador, que corresponde al ordinal 4 de ese mismo artículo; y 3) Por haberse abstenido el Juez de conocer asunto de su competencia, establecida en el ordinal 6 de esa norma del Código Judicial.

No obstante, tanto los motivos que le sirven de fundamento a cada una de ellas, como las disposiciones legales que se consideran infringidas y el concepto de dichas infracciones, plantean una misma situación de hecho: que tanto el juzgador de primera instancia como el Tribunal Superior carecían de competencia para conocer del presente proceso, en vista de que debió acumularse al juicio de quiebra contra DESARROLLO VIZCAYA, S. A. e ISAAC DAVID MIZRACHI, que se tramita ante el Juzgado Tercero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

En primer lugar, la Sala debe señalar que se trata de una supuesta falta que tuvo lugar durante la primera instancia del proceso.

Al respecto, el artículo 1179 del Código Judicial establece un requisito adicional para la admisibilidad del recurso de casación en la forma, que consiste en la necesidad de haber reclamado la reparación de la falta que se alega en la instancia en que se haya cometido y también en la siguiente, si se cometió en la primera.

En el caso que nos ocupa, si bien el recurrente se refirió a la supuesta omisión por parte del juzgado de primera instancia en el alegato de oposición a la apelación, se limitó a ello, a meras alegaciones y no utilizó ante el Tribunal Superior los recursos o remedios legales para subsanar las supuestas anomalías como lo es la interposición del incidente respectivo por falta de competencia, como correspondía, contra la actuación del juzgado de primera instancia y de ese mismo tribunal, para tratar de subsanar el defecto procesal que alega. Consecuentemente, el recurso de casación es inadmisible, en atención a lo dispuesto en el citado artículo 1179 del Código Judicial.

En segundo lugar, es igualmente necesario indicar, como ya lo ha hecho esta corporación judicial en otras ocasiones, que el escrito de formalización del recurso de casación debe exponer un pensamiento unitario, ajeno a situaciones contradictorias como las que se incluyen en el presente caso, donde los mismos hechos sirven de fundamento a tres causales distintas, dos de las cuales son contradictorias; haciendo el planteamiento ininteligible y, por tanto, inadmisible en atención a lo dispuesto en el artículo 1167 del Código Judicial.

Ahora bien, el recurrente interpuso, además, escrito de oposición a la sustitución de poder presentada por el apoderado judicial de la sociedad DESARROLLO VIZCAYA, S. A., argumentando lo siguiente:

> "PRIMERO: DESARROLLO VIZCAYA, S. A. fue declarada en estado de quiebra mediante auto 478 del 8 de febrero de 1995, por el Juzgado Tercero del Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.
>
> SEGUNDO: Por efectos de la declaratoria de quiebra, DESARROLLO VIZCAYA, S. A. no tiene capacidad para conferir ni mantener poder a favor de FRANCISCO ESPINOZA CASTILLO desde el 8 de febrero de 1995.
>
> TERCERO: Por lo anterior, tampoco FRANCISCO ESPINOZA CASTILLO tiene posibilidad de substituir poder con el que legalmente no cuenta para representar a DESARROLLO VIZCAYA, S. A.
>
> CUARTO: La persona legitimada para representar a DESARROLLO VIZCAYA, S. A. desde el 8 de febrero de 1995 es OSCAR CEVILLE, Curador de la quiebra de DESARROLLO VIZCAYA, S. A." (F. 88).

Del texto transcrito se colige que el poder que el recurrente ataca es el que le otorgó el representante legal de la sociedad DESARROLLO VIZCAYA, S. A., al Licenciado Francisco Espinosa Castillo, presentado ante el Juzgado Sexto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, el 17 de agosto de 1994, consultable a foja 12 y reverso. Como argumento, afirma que dicha sociedad no tenía capacidad para otorgarle dicho poder al licenciado Espinosa Castillo y, como consecuencia, tampoco este profesional del derecho tenía capacidad para

realizar la sustitución de poder que consta a foja 75.

Los artículos 614 y siguientes del Código Judicial se refieren a la manera en que deben otorgarse los poderes especiales y, específicamente, el artículo 617 establece lo siguiente:

> "ARTÍCULO 617. El Juez del conocimiento, siempre que se le presente un poder, lo admitirá si está otorgado con los requisitos legales y ordenará su corrección si le faltaré alguno, sin invalidar lo actuado. Admitido el poder, lo mandará poner en conocimiento de la parte contraria, y si ésta no lo objeta dentro del término de dos días, no podrá después solicitar su corrección por falta de alguno de los requisitos de forma exigidos en los artículos anteriores".

En el caso que nos ocupa, la parte recurrente no objetó el poder otorgado al Licenciado Espinosa Castillo en 1994, razón por la cual no puede ahora oponerse a la sustitución por él realizada. Además, lo que alega el recurrente guarda relación con la capacidad de la parte contraria para otorgar poder; situación que debió ser debatida en el fondo del proceso.

Consecuentemente, se desestima la oposición presentada por la parte recurrente en casación, a la sustitución de poder de la contraparte.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en la forma interpuesto por el apoderado judicial del señor JOSUÉ LEVY LEVY; y RECHAZA DE PLANO la objeción presentada contra la sustitución de poder del representante judicial de DESARROLLO VIZCAYA, S. A.

Las costas de casación se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

GORDON DREXEL GRAHAM RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FINCA MARA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense SOLÍS, ENDARA, DELGADO Y GUEVARA, formalizó recurso de casación, en la forma y en el fondo, contra la sentencia de 27 de junio de 1997 dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA y, mediante la cual revocó la Sentencia N° 167 de 30 de septiembre de 1996, dictada por el JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, dentro del proceso ordinario declarativo propuesto por **GORDON DREXEL GRAHAM** contra **FINCA MARA, S. A.**

La Sala de lo Civil, en resolución de 21 de enero de 1998 (f. 478), declaró inadmisible la causal de forma y ordenó la corrección de la causal de fondo. El recurrente dió cumplimiento a lo ordenado, dentro del término de ley, por lo que se admitió la misma mediante resolución de 26 de febrero de 1998 (f. 491).

El recurso de casación es en el fondo y está fundamentada en la causal de "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido en lo dispositivo de la resolución recurrida".

La Sala estima pertinente citar los motivos en que se fundamentó la alegada causal, que son del tenor siguiente;

> PRIMERO: El Tribunal Superior, al decidir la causa en segunda instancia, declaró probada la excepción de extinción del usufructo y, al decidir así, incurrió en error de apreciación en la medida que le atribuyó el mérito, y apreció, para demostrar la muerte de la usufructuaria, al documento público consistente en el certificado de defunción que aparece aportado al proceso y obra a fojas 405 del expediente y el error consistió en que apreció ese documento a pesar de que este no fue incorporado al proceso en los términos y oportunidades que establece la ley.
>
> SEGUNDO: De igual forma, el Tribunal Superior, incurrió en error de apreciación en la valoración del documento público consistente en certificado de defunción de la señora FRANCES KATHI GRAHAM, tal como aparece aportado a fojas 405 del expediente y el error consistió en que, a pesar de que ese documento público hace fe de su fecha y la certificación que en el hizo el servidor que lo expidió, como es la muerte de la usufructuaria ocurrida el 24 de enero de 1994, la sentencia le atribuyó valor para demostrar que la extinción del usufructo extinguió la pretensión a pesar de que, conforme a lo certificado, el hecho de la muerte se produjo después que ocurrieron los hechos que sustentan el incumplimiento y en vigencia del alegado usufructo.
>
> TERCERO: Los errores de apreciación en que incurrió el Tribunal Superior, lo condujeron a violar la norma sustantiva que establece que el usufructo se extingue desde y por la muerte del usufructuario, infracción que dio lugar a que se declarar (sic) probada la excepción de extinción del usufructo y a reconocer que se había producido la extinción de la pretensión, en circunstancias en que ello no es así.
>
> CUARTO: La infracción en que incurrió el Tribunal Superior influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida en la medida que, al declarar probada la excepción de extinción del usufructo, se sostuvo en la sentencia que no era necesario pronunciarse sobre lo pedido en la demanda, desconociendo así la pretensión alegada por nuestro patrocinado de que se formulara la declaración de resolución del contrato de compraventa y usufructo, al punto que sin ese yerro la decisión hubiese sido otra, la formulación de la declaración pedida, previa la revocatoria de la sentencia apelada". (Fs. 484-485).

Se señalan como infringidos los artículos 781, 823 del Código Judicial y los artículos 496 y 1009 del Código Civil.

Antes de entrar a resolver en el fondo el negocio en estudio, la Sala se referirá a los antecedentes que originaron el proceso.

En efecto, se trata de un proceso ordinario declarativo promovido por GORDON DREXEL GRAHAM contra FINCA MARA, S. A. (antes FINCA FRANCIS, S. A.), por el cual se solicita "se declare la resolución del contrato de compraventa y usufructo, otorgado mediante Escritura Pública N° 1336 de 18 de febrero de 1991, extendida en la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, del cual dimanan para las partes los derechos reales de dominio y usufructo, recíproca e intrínsicamente unidos entre sí, pues, cada uno de estos derechos constituye requisito de la esencia del contrato, violentamente incumplido por la sociedad demandada".

Como fundamento fáctico, de los veintiocho (28) hechos en que basa la referida demanda, se colige que el señor GORDON DREXEL GRAHAM, por medio de apoderado, celebró contrato de compraventa y usufructo con la sociedad FINCA FRANCIS, S. A., representada por SVEIN VOGT, sobre las fincas de su propiedad, distinguidas así: N° 58468, tomo 1358, folio 150; N° 13694, tomo 376, folio 80; N° 27953, tomo 681, folio 8 y la N° 26736, tomo 648, folio 440 de la Sección del

Registro Público, Provincia de Panamá.

El objeto de la obligación del vendedor, contenido en la Escritura 1336, antes señalada, era la entrega de la nuda propiedad de las cuatro fincas y que la causa de la obligación lo era el precio y el usufructo gratuito y de por vida a favor de la madre del damandante, señora FRANCES KATHI GRAHAM, sobre los referidos inmuebles.

Por su parte, el objeto de la obligación del comprador, FINCA FRANCIS, S. A. (hoy FINCA MARA, S. A.) era el precio y el usufructo gratuito y de por vida a favor de FRANCES KATHI GRAHAM y la causa lo era la Nuda Propiedad sobre las cuatro fincas.

Sostiene el demandante que existe incumplimiento por parte del comprador al no poder ejercer la usufuctuaria el goce y disfrute de los inmuebles sujetos al usufructo, por tanto, da lugar a la resolución del contrato de compraventa y usufructo y, como consecuencia de ello, los inmuebles deberán revertir a su dueño, señor GORDON DREXEL GRAHAM, con pago de daños y abono a intereses por parte de la demandada.

Por su parte, la persona jurídica demandada, FINCA MARA, S. A., (antes FINCA FRANCIS, S. A.), dió contestación a la demanda y formulando escrito de oposición a la misma, ante el Juzgado Primero del Tercer Circuito Judicial de Panamá, con Sede en La Chorrera, donde quedó radicado el negocio (fs. 84-90).

Entre otras cosas, sostiene el opositor que en la Escritura Pública N° 1336 de 18 de febrero de 1991, extendida por la NOTARÍA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, se celebraron dos actos jurídicos, totalmente separados. El primero contenido en las cláusulas segunda y tercera, por las cuales convienen las partes (GORDON DREXEL GRAHAM y FINCA MARA, S. A.), en la venta real y efectiva, libre de gravámenes, con las restricciones que sobre ellas pesan, sobre las Fincas N° 56,468; 13,694; 27,953 y 26,736, de generales descritas anteriormente, En cuanto al segundo negocio jurídico manifesta el demandante, que el mismo está incluído en la cláusula cuarta, donde la compradora FINCA MARA, S. A. (antes FINCA FRANCIS, S. A.), constituye usufructo gratuito a favor de FRANCES KATHI GRAHAM sobre las fincas en cuestión, siendo aceptado dicho usufructo por la señora FRANCES KATHI GRAHAM. Que en este segundo negocio las partes son: FINCA MARA, S. A. (antes FINCA FRANCIS, S. A.) y FRANCES KATHI GRAHAM.

En el escrito de oposición, hecho quinto, sostiene que prueba de que en un solo documento se celebraron dos negocios distintos, lo constituye el hecho de que el Registro Público, atendiendo el "querer de la Ley", inscribió ambos actos contractuales con distintos asientos. El primero "Inscrito el documento en el Registro de la Propiedad, Sección Panamá, Tomo 1358, Folio 152 "venta", etc.; mientras que sobre el segundo se anotó: "inscrito el documento en el Registro de la Propiedad, Sección Panamá, Tomo 1358, Folio 149 "usufructo".

Consta en autos también el proceso sumario de interdicto posesorio sobre restitución de la posesión por despojo y perturbación de la posesión incoado por FRANCES KATHI GRAHAM contra FINCA FRANCIS, S. A., SVEIN VOGT y MARTA ATENCIO, siendo resuelto por el Juzgado Primero del Tercer Circuito Judicial de Panamá el 26 de mayo de 1993 (fs. 116-132), negando el interdicto de perturbación y despojo propuesto por la señora GRAHAM; ORDENA la restitución de la posesión de las fincas 54,468; 13,694; 27,953 y 26,736, sobre las cuales pesa usufructo a favor de FRANCES KATHI GRAHAM e INTIMA a los señores SVEIN VOGT y MARTA ATENCIO para que restituyan la posesión de las fincas antes indicadas, presentándose escrito de reconsideración contra dicha resolución (fs. 139-144). Posteriormente, la firma forense FUENTES Y ASOCIADOS, apoderados judiciales de la señora GRAHAM presentó escrito de desistimiento de la apelación anunciada (f. 151).

Encontrándose el proceso ordinario declarativo en la fase de alegatos de conclusión, el apoderado judicial de la parte demandada, presentó incidente de rescisión de usufructo (fs. 345-347), adjuntando el certificado de defunción de la señora FRANCES KATHI GRAHAM (f. 356), quien falleció el 24 de enero de 1994, basándose en que el usufructo constituído a favor de la referida señora, tenía vigencia hasta que la usufructuaria viviera, no siendo transmisible tal derecho

de conformidad con la cláusula cuarta de la escritura pública N° 1336, en donde se constituyó el mismo, siendo negado por el juzgador de primera instancia mediante Auto N° 542 de 29 de julio de 1994.

Concluída la fase procesal el JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ dictó la Sentencia N° 167 de 30 de septiembre de 1996 (fs. 366-389). por la cual NIEGA LA DECLARATORIA DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y USUFRUCTO, solicitada por el señor GORDON DREXEL GRAHAM contra FINCA MARA, S. A. (antes FINCA FRANCIS, S. A.), y ordena el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre los inmuebles ya mencionados, siendo apelada dicha resolución por los apoderados judiciales de la parte demandante.

Surtida la alzada, el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, concedió a las partes el término establecido en el artículo 1255 del Código Judicial para la interposición de las pruebas y contrapruebas. Dentro de término, la parte demandada adujo como prueba la Escritura Pública N° 4727 (f. 397-398), por la cual el señor GORDON DREXEL GRAHAM confiere poder a la señora FRANCES KATHI ZIMMER DE GRAHAM, siendo admitida en virtud que se trata de una prueba contemplada en el literal c del artículo 1265 del Código Judicial (f. 400-401).

En la etapa de contrapruebas, la parte demandada adjuntó el certificado de defunción de la señora FRANCES KATHI GRAHAM (f. 405), siendo admitida, mediante resolución visible a foja 407-408 del expediente.

La Sala estima conveniente resumir el contenido de los escritos de apelación y oposición a la misma, formuladas por las partes en el proceso.

APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

El recurrente advierte el desconocimiento del juzgador primario de la figura de la representación, al considerar que la señora FRANCES KATHI GRAHAM actuó a título personal para aceptar el usufructo. De igual forma expresó el apoderado judicial del demandante que éste, como propietario de los inmuebles, era la única persona que podía adquirir derechos, como lo fue en este caso, la garantía y seguridad que su madre y él seguirían disfrutanto de esas fincas hasta el último día de vida de ella. Como consecuencia de ello, el usufructo que se constituyó sobre los inmuebles estaba claramente establecido y no daba margen al desconocimiento de ese derecho, de conformidad con el artículo 1132 del Código Civil.

Por otra parte, el apelante considera que el contrato entre las partes cumplió con todas las exigencias legales, pero que la obligación de FINCA MARA, S. A. de cumplir con el usufructo era de carácter principal, debido a la condición establecida en el contrato de compraventa, y el incumplimiento de ello, fue ampliamente documentado y probado, por lo que fundó su pretensión de resolución del contrato de compraventa en el incumplimiento ya aludido.

APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

El apoderado judicial del demandado, en primer lugar, advierte al juzgador en el sentido de que el actor en vez de hacer referencia a la Sentencia N° 167 de 30 de septiembre de 1996, que es motivo de apelación, más bien se refiere a la sentencia de 26 de mayo de 1993, que guarda relación con el proceso sumario de interdicto posesorio interpuesto por FRANCES KATHI GRAHAM contra FINCA FRANCIS, S. A., SVEIN VOGT y MARTA ATENCIO, negocio éste que se encuentra archivado, por desistimiento del mismo que hiciera el actor. Además expresa que la señora FRANCES KHATI GRAHAM no es parte en el contrato de compraventa aunque sí en el usufructo, facultad ésta que le fue otorgada por el comprador, aclarando que la cláusula referente al usufructo es accesoria y es concedida en forma voluntaria y unilateral, lo que no da lugar a que se estime que el contrato de compraventa suscrito entre las partes estuviere condicionado. Pero, que de considerarse así, no puede extenderse a beneficiar la figura del vendedor, pues el mismo concluye con la muerte de la usufructuaria.

Finalmente expresa el opositor que el señor GORDON DREXEL GRAHAM no puede accionar reclamo alguno en cuanto al cumplimiento o no de la cláusula del

usufructo, el cual terminó con la muerte de la usufructuaria. Reitera que la relación del demandante es únicamente en lo pertinente a las cláusulas de la compraventa.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR

Como punto de partida, el tribunal superior advierte que la única y exclusiva razón por la cual el demandante, GORDON DREXEL GRAHAM, demanda la resolución del contrato de compraventa, lo es el incumplimiento por parte del comprador, FINCA MARA, S. A. (antes FINCA FRANCIS, S. A.) del usufructo instituído a favor de FRANCES KATHI GRAHAM (Q. E. P. D.) y que según consta a foja 343, la interposición de la excepción de extinción de usufructo por parte de la demandada no fue resuelta por el tribunal de primera instancia, y lo que ha sido reiterado tácitamente en el escrito de oposición a la sustentación de la apelación (fs. 427 y 431-432). Por ello, esa Superioridad. advierte que, "sin violentar el principio de la reformatio in pejus consagrado en el artículo 1133 del Código Judicial", procede a pronunciarse sobre la misma, en base al artículo 1134 de la misma excerta legal.

Así las cosas, reitera el tribunal superior que la excepción de extinción del usufructo propuesta por el apoderado judicial de FINCA MARA, S. A., se fundamenta en que el derecho de usufructo a favor de la usufructuaria se constituyó según la cláusula cuarta del contrato de compraventa, a título gratuito, en favor de la señora FRANCES KATHI GRAHAM, a objeto de que la misma ejerciera ese derecho sobre las cuatro fincas que fueron objeto del contrato de compraventa, "mientras viva o hasta que ella misma por decisión voluntaria renunciara a dicho usufructo" (f. 441).

Seguidamente se lee en la sentencia impugnada que la usufructuaria, señora FRANCES KATHI GRAHAM falleció el 24 de enero de 1994 a las 4:30 A. M. en San Francisco, Distrito de Panamá, según consta a foja 405.

Concluye el tribunal de segunda instancia que, con la muerte de la usufructuaria se extingue el derecho del uso y disfrute otorgado en la cláusula cuarta del contrato tantas veces mencionado, a favor de la causante, por lo que debe procederse a la revocatoria de la sentencia de primera instancia, en virtud de que la causa que motivó la resolución del contrato de compraventa fue el incumplimiento del usufructo establecido en dicho contrato, y con la muerte del usufructuario se produce la figura doctrinalmente conocida como la "sustracción de materia", la cual no fue técnicamente mencionado por la demandada, pero sí fue invocada a través de la excepción de extinción del usufructo.

Como consecuencia de lo anterior, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL resuelve:

> "PRIMERO DECLARA PROBADA LA EXCEPCION DE EXTINCION DE USUFRUCTO presentada por la sociedad FINCA MARA, S. A. (antes FINCA FRANCIS, S. A.).
>
> SEGUNDO: DECLARA que se ha producido el fenómeno jurídico conocido como LA SUSTRACCION DE MATERIA en la RESOLUCION DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Y USUFRUCTO solicitada por el señor GORDON DREXEL GRAHAM, y
>
> TERCERO: CONDENA al señor GORDON DREXEL GRAHAM al pago de la suma de TRES MIL DOSCIENTOS BALBOAS (B/.3,200.00) en concepto de costas de primera instancia. Asimismo, liquide la Secretaría de Instancia, los gastos de su cuidado.
>
> Las costas de segunda instancia quedan compensadas para ambas partes".

Es contra esta resolución que se ha interpuesto el recurso de casación, que la Sala debe decidir, previas las siguientes consideraciones.

POSICIÓN DE LA SALA

Como ha quedado expresado, el recurso es en el fondo, está fundamentado en una sola causal, infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de error de derecho en la apreciación de la prueba, y se apoya en cuatro motivos, los que se han reproducido por la Sala. Estima el recurrente que la sentencia recurrida ha violado los artículos 781 y 823 del Código Judicial y los artículos 496 y 1009 del Código Civil, éstas últimas como disposiciones sustanciales violadas como consecuencia del error probatorio.

En síntesis, dos son los cargos que se le endilgan a la sentencia, a saber, que tomó en cuenta el documento público consistente en certificado de defunción, que aparece aportado al proceso y es consultable a foja 405 del expediente, derivado de la circunstancia de que t al documento no fue aportado en los términos y oportunidades establecidas por el ordenamiento procesal, y además, que la fecha en que ocurrió la defunción, fue posterior a la fecha en que se incumplió, según el recurrente, el usufructo constituído.

El primer motivo no se compadece con el contenido del expediente. Así, se aprecia a foja 404 del expediente, la aportación que, a título de contraprueba, realizó la firma apoderada de la parte demandada, de 17 de diciembre de 1996, y recibida por el Tribunal Superior el día 18 de diciembre de 1996, adjuntando el certificado de defunción de la señora FRANCES KATHI ZIMMER DREXEL (foja 405), así como la resolución de 30 de diciembre de 1996, dictada en Sala Unitaria, en virtud de la cual se admitió la prueba mencionada, siendo así que la decisión jurisdiccional n o fue objeto de impugnación ante el resto de los Magistrados que integran la Sala, cuyo edicto fue fijado el día 2 de enero de 1997 y desfijado al día siguiente, quedando ejecutoriada la expresada resolución judicial. Se desestima, por lo tanto, el cargo contenido en el primer motivo.

El otro cargo consiste en que se valoró la prueba consistente en el certificado de defunción, aún a pesar de que daba fe pública de la fecha de la defunción, que fue posterior al incumplimiento denunciado por la parte demandante. Estima la Sala que la prueba fue debidamente valorada por el Tribunal Superior en la sentencia recurrida, extrayendo de tal valoración las consecuencias jurídicas que el hecho extintivo del usufructo produce. Así, la sentencia recurrida señaló:

> "Precisamente por ese hecho lamentable, es que debe procederse con la revocatoria de la resolución incursada, toda vez que, siendo el derecho del uso y disfrute, la causa que motivó la solicitud de resolución del contrato de compraventa por parte del señor GORDON DREXEL GRAHAM, a través del presente contradictorio, y estableciéndose tanto en el mismo contrato (cláusula cuarta) como la Ley (a. 496 C. Civil), la extinción del usufructo por la muerte del usufructuario, se produce en éste, lo que doctrinalmente se conoce como la sustracción de materia (a. 979 C. J.), la cual si bien es cierto no fue mencionada técnicamente por la sociedad demandada; no menos cierto es que sí fue invocada a través de la excepción que ahora se estudia (Cfr. A. 679 C. J.), por lo que procede -tal y como se expuso ut supra- la revocación de la resolución y reconocimiento de la Excepción de Extinción del Usufructo, absteniéndose del estudio de las demás (Excepción de carencia de Acción), conforme lo dispone el artículo 981 del Código en cita". (Fs. 441-442).

Es evidente que la discusión sobre la pertinencia como contraprueba del certificado de defunción de la usufructuaria, claramente es extemporánea dado que la demandante tuvo ocasión de contradecir esta contraprueba, y no lo hizo, lo que naturalmente inhibe al Tribunal Superior a pronunciarse x officio sobre su pertinencia o validez.

Si se observa con detenimiento la norma contenida en el artículo 496 del Código Civil, el usufructo se extingue por la muerte del usufructuario ministerio legis, y solamente pasan a sus herederos en caso de que el usufructo, tenga un plazo determinado o una condición resolutoria, porque así se hayan pactado en el instrumento que lo instituye, circunstancias que se encuentran ausentes en la hipótesis que ocupa a la Sala. Como en el presente caso no existe ni plazo de duración del usufructo, ni condición resolutoria del mismo, resulta de aplicación

la extinción del usufructo de manera general e incondicionada, por el hecho previsto por la ley para la extinción del derecho real de usufructo, con lo que la pretensión carece, en efecto, de objeto produciéndose, como ha afirmado la sentencia recurrida, lo que esa corporación de justicia denomina "sustracción de materia" para referirse a la pérdida del objeto del proceso, la pretensión.

Dispone, en efecto, el artículo 496 del Código Civil, primer artículo que regula los modos de extinción del usufructo, lo que la Sala se permite transcribir:

"Artículo 496. El usufructo se extingue:

...
5. Por la muerte del usufructuario; pero si ésta ocurriese antes de la expiración del plazo o del evento de la condición resolutoria, el usufructo se transmitirá a los herederos de aquél".

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de junio de 1997 dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA dentro del proceso ordinario declarativo propuesto por GORDON DREXEL GRAHAM contra FINCA MARA, S. A.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

WESTERN INSURANCE COMPANY INC. (WICO) Y ASEGURADORA ANCÓN, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A STERLING METRO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados GARRIDO & GARRIDO, apoderados especiales de **WESTERN INSURANCE COMPANY INC. (WICO)** y de **ASEGURADORA ANCÓN, S. A.**, recurre en casación contra la resolución del 19 de febrero de 1998, proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, dentro del proceso ordinario propuesto por WESTERN INSURANCE COMPANY INC. (WICO) Y ASEGURADORA ANCÓN, S. A. contra STERLING METRO, S. A. mediante la cual éste NO APRUEBA la sentencia N° 20 del 13 de febrero de 1997, dictada por el JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE COLÓN, RAMO CIVIL.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del mismo, término que sólo aprovechó el recurrente, tal como se lee a fojas 189-191.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Judicial, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 del mismo.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo, además el recurso procede por razón de la cuantía y la resolución que se impugna es objeto de recurso.

CAUSAL DE FORMA

El recurrente presenta una sola causal de casación en la forma: "Por Haber Omitido Algún Trámite o Diligencia Declarado Esencial por la Ley". La causal no está invocada correctamente según lo que establece el artículo 1155 del Código Judicial, que es del tenor siguiente: "Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley".

Los motivos que sirven de fundamento a la causal son diez. Luego de examinar los mismos, advierte la Sala que dichos motivos se refieren a apreciaciones subjetivas por parte del recurrente.

Los motivos no contienen cargos de injuridicidad contra la sentencia consultada que sean consistentes con la causal invocada, más bien se concretan en alegaciones que no tienen relación con la causal y algunos de ellos se limitan a exponer situaciones fácticas sin establecer la razón por la cual censura la sentencia recurrida. Con la claridad expositiva que lo caracteriza, el casacionista colombiano HUMBERTO MURCIA BALLÉN (q. e. p. d.), se ha pronunciado en términos que la Sala no puede sustraerse de exteriorizar, para ilustración del recurrente y de los sucesivos recurrentes que acuden a este medio de impugnación extraordinario.

Dice así el ilustre expositor, o, mejor, quienes de dedicaron a preparar se nueva edición (la 4ª) de este clásico en materia del recurso de casación civil:

> "Como la casación adopta una posición de combate a la sentencia así recurrida, el recurrente censura, por considerarlas contrarias a derecho, las conclusiones del fallo, dando las razones en que apoya su ataque o su objeción, y esto lo hace por conducto de los cargos. El cargo es, pues, en casación, la réplica, la objeción o la censura, o el conjunto de réplicas, objeciones, censuras o ataques que el recurrente hace al juicio del fallador de instancia, con miras a que la Corte Suprema le restaure el derecho presuntamente quebrantado por la sentencia que impugna.
>
> Resulta así que las causales de casación vienen a constituir el piso o la base sobre las cuales se deben edificar los cargos, los ataques, las objeciones o las censuras, términos estos que al fin y al cabo, son sinónimos, y que el recurrente le formula a la sentencia impugnada ..."
>
> (Humberto Murcia Ballén, "RECURSO DE CASACIÓN CIVIL", 4ª edición actualizada, pág. 273, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 1996).

De otra parte, el recurrente debió haber reclamado la reparación de la falta en la instancia procesal en que esta se haya cometido, lo que debió hacer en la segunda instancia y no lo hizo. Es claro, entonces, que procede aplicar en este caso, el artículo 1179 del Código Judicial, el cual autoriza a declarar el recurso de casación en cuanto a la forma inadmisible si se presentan las circunstancias que hemos dejado consignadas.

CAUSAL DE FONDO

El recurrente presenta una sola causal de casación en el fondo: Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en la apreciación de la prueba., que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida. Esta causal está prevista en el artículo 1154 del Código Judicial. La causal está bien invocada.

En cuanto a los motivos que sirven de fundamento a la causal, el recurrente indica 8 motivos que pasaremos a analizar. Considera esta Sala que los primeros cuatro motivos están formulados en forma adecuada. Sin embargo, el quinto motivo presenta alegaciones impropias de este momento procesal. El sexto motivo, se refiere a "los indicios que emanan de los documentos privados aportados al proceso", lo cual resulta impropio ya que debe indicarse particularmente qué pruebas estima el recurrente fueron mal valoradas por el tribunal ad-quem y por qué considera el recurrente que lo fueron y no referirse a los documentos

privados en general. En el octavo motivo, al indicar la prueba mal valorada, se refiere a indicios, los cuales también deben especificarse y expresar la forma como fueron mal valorados estos indicios y cómo dicho error ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

La citación de las normas de derecho infringidas, son congruentes con la causal invocada. No obstante, su explicación, de cómo se infringió la norma, es decir, el concepto, la Sala considera que el recurrente debió ser más específico y preciso ya que con sus alegaciones tiende a confundir al tribunal. El recurrente solamente debe explicar la forma en que esas normas de derecho fueron infringidas sin irse a recuentos procesales ni extensas alegaciones.

Esta Sala considera, que para que se entienda cumplido el requisito contenido en el numeral 3° del artículo 1160 del Estatuto Procesal, es necesario que se indique, en el recurso de casación, no solamente la disposición que estima el recurrente que ha sido infringida, sino ha de contener además, una explicación de la forma, manera o especie de cometerse la violación denunciada, es decir, un enjuiciamiento lógico jurídico que pueda llevar a conocimiento de la Sala, el alcance y la extensión de la violación normativa impugnada. No se cumple, naturalmente, mediante alegaciones retóricas o haciendo referencia a aspectos fácticos, sino, como se dijo, en una argumentación lógico-jurídica de la norma infringida.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE la causal de casación en la forma y ORDENA LA CORRECCIÓN de la causal de casación en el fondo del recurso de casación, interpuesto por las sociedades WESTERN INSURANCE COMPANY INC. (WICO) y ASEGURADORA ANCÓN, S. A. mediante apoderado judicial, contra la resolución del 19 de febrero de 1998, para lo cual se concede el término de cinco (5) días, tal como lo señala el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FREDERICK FÉLIX SZYMANSKI RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A MIREYA CRUZ ESCARTÍN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado LUIS ANTONIO CARRASCO MORENO, apoderado especial del señor FREDERICK FÉLIX SZYMANSKI, recurre en casación contra la resolución del 17 de noviembre de 1997, proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA, en relación con el proceso de divorcio promovido por **FREDERICK FÉLIX SZYMANSKI** contra **MIREYA CRUZ ESCARTÍN.**

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del mismo, término que aprovecharon ambas partes.

Posteriormente se le dio traslado al Procurador General de la Nación para que emitiera su concepto, dada la naturaleza del negocio, recibiendo la Sala la Vista N° 8 de 1° de mayo de 1998 (fojas 277-281).

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del

Código de Judicial, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 del mismo.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo, además el recurso procede por razón de que se trata de un proceso de divorcio y la resolución que se impugna es objeto de recurso.

En primer término debemos indicar que el recurso se encuentra mal dirigido. En reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, se ha dejado claro, que el recurso de casación debe dirigirse al Tribunal Superior, que es a quien se le presenta el recurso y, en este caso, al Tribunal Superior de Familia, y no al Magistrado Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como erróneamente lo hizo el recurrente en su escrito de casación.

El recurso de casación es en el fondo y está sustentado en cuatro causales. Se entra a analizar cada una de ellas en forma separada.

La primera causal alegada por el recurrente consiste en la "Infracción de norma sustantiva de derecho por violación directa, que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de la resolución recurrida". La causal está invocada correctamente y de acuerdo a lo exigido por nuestro Código Judicial.

Con respecto a los motivos que sirven de fundamento a esta causal, la Sala considera que en el primero de ellos no existe congruencia entre la causal y el motivo ya que se refiere a pruebas aportadas en el expediente y que no fueron valoradas. Con respecto a ello, el artículo 1154 del Código Judicial establece claramente que: "en la causal de violación directa y en la de interpretación errónea no puede invocarse errores de hecho o de derecho en cuanto a la prueba". En cuanto al segundo motivo, éste se basa en que el Tribunal ad-quem no cita las normas de derecho en las cuales fundamenta su decisión. Sin embargo, al analizar la explicación de la norma de derecho que el recurrente estima como infringida, se basa nuevamente en valoraciones probatorias, lo cual no es congruente con la causal invocada, como ya lo expresáramos anteriormente. Por las razones expuestas desestimamos esta causal.

La segunda causal invocada se trata de "Infracción de norma sustantiva de derecho por aplicación indebida, que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de la resolución recurrida". La causal está correctamente invocada.

Al observar los motivos, así como las normas que se estiman infringidas y la explicación de cómo lo han sido, la Sala estima que el recurrente se refiere a errores in procedendo, al referirse a que "la parte demandada y reconvencionista invocó la causal de trato cruel, el (sic) con el cual se hacía imposible la paz y sosiego doméstico. Pero el Tribunal ad-quem para fundamentar su decisión recurrió a la situación de embriaguez habitual, que constituye otra causal de divorcio distinta y que no fue invocada por la reconvencionista". Al indicar el recurrente que el juez falló sobre una causal de divorcio no invocada por la reconvencionista, se está refiriendo a la incongruencia del fallo que es una causal de casación en la forma: "Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda o con las excepciones del demandado, porque se resuelve sobre punto que no ha sido objeto de la controversia" y no así a las causales de fondo aquí alegadas. Resulta, por tanto, inadmisible esta causal.

Con relación a la tercera y cuarta causal, procederemos a analizar ambas causales a la vez ya que pudimos observar que el recurrente alega las dos causales probatorias, error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y error de derecho en cuanto a la apreciación de la misma y en ambas causales se refiere a una misma prueba que consiste en la diligencia de inspección ocular realizada al hogar de los señores SZYMANSKI-CRUZ. En reiterados fallos esta Superioridad se ha pronunciado en el sentido de que, tratándose de una misma prueba no se puede aducir la mala valoración de la misma y por otra parte alegar su desconocimiento por parte del juzgador.

> "Respecto a los conceptos de la causal de fondo que han sido invocados, es decir: "error de hecho sobre la existencia de la

> prueba" y "error de derecho sobre la apreciación de la prueba": la Sala considera pertinente exteriorizar el siguiente criterio.
>
> Como principio general la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que los conceptos probatorios de la causal de fondo no deben invocarse simultáneamente en un recurso de casación respecto de la misma prueba. La razón que fundamenta esta posición es de una base lógica: no se puede afirmar que una prueba ha sido desconocida o ha sido tomada en cuenta sin que exista; y a la vez sostener que esa misma prueba ha sido mal apreciada".
>
> (JOVANE, Jaime J. y RODRIGUEZ, José Martín. Jurisprudencia Civil al día. Publipan, S. A., 1993, Sentencia de 22 de julio de 1991, p. 74).

Podemos concluir que estas causales son excluyentes cuando se refieren a la misma prueba ya que una prueba no se puede alegar como no apreciada y a la vez como valorada por el Tribunal. Por lo cual, resulta inadmisible la tercera causal de casación en el fondo y el primer motivo de la última causal sobre error de derecho sobre la valoración de la prueba en cuanto a la prueba de la diligencia de inspección ocular. Pasamos, entonces, a analizar la parte no desestimada de la referida cuarta causal.

El recurrente señala, como última causal el "error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en la parte dispositiva del fallo". La causal no está invocada correctamente debido a que en reiteradas jurisprudencias esta Sala ha advertido que se trata de una sola causal de fondo "Infracción de normas sustantivas de derecho" que puede producirse en uno de los siguientes conceptos, violación directa, aplicación indebida, interpretación errónea, error de hecho sobre la existencia de la prueba y error de derecho sobre la apreciación de la prueba. Consideramos que esta causal debe corregirse de la siguiente manera: "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

En cuanto a los motivos que sirven de fundamento a esta causal, considera esta Sala que el recurrente debe indicar la forma en que esas pruebas que estima que fueron mal valoradas inciden en la parte resolutiva del fallo impugnado, como lo ha dicho la Corte Suprema en reiterados fallos:

> "Los errores del sentenciador en la apreciación de la prueba por sí solos no configuran causal de casación sino que son medios por el cual puede arribarse al motivo que consiste justamente en la infracción de la norma de derecho sustantiva. Los errores probatorios conforman una cadena con tres eslabones, a saber: a, el error y su demostración; b. la consiguiente infracción de la ley sustantiva; c. la incidencia del cargo sobre la parte dispositiva de la resolución recurrida".
>
> (FABREGA, Jorge P. y GUERRA DE VILLALAZ, Aura E. CASACION. Panamá, 1995, p. 139).

En cuanto a la citación de las normas de derecho infringidas con su debida explicación, considera esta Sala que el recurrente debe invocar, además de las normas de carácter probatorio señaladas, normas sustantivas de derecho que le sirvan de fundamento al derecho que reclama, como lo ha señalado la Corte en reiterados fallos:

> "La Corte ha señalado, reiteradamente, que cuando se invoca una causal probatoria, además de las normas legales sobre valoración de ésta, el recurrente debe invocar normas sustantivas que sirvan de fundamento al derecho que reclama o a la excepción que alega, ya que de no hacerlo así el recurso queda trunco, porque se impide a la Corte el examen de la infracción jurídica más importante para la decisión".
>
> (Sentencia del 4 de agosto de 1982, Magistrado Ponente: Olmedo Sanjur C.

Registro Judicial de agosto de 1982, pág. 6).

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE la primera, segunda y tercera causal, Y ORDENA LA CORRECCIÓN de la última causal del recurso de casación en el fondo, interpuesto por FREDERICK FÉLIX SZYMANSKI mediante apoderado judicial, contra la resolución del 17 de noviembre de 1997 dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE FAMILIA, para lo cual se concede el término de cinco (5) días, tal como lo señala el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

GERMÁN ENRIQUE REY URIBE RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE SIMULACIÓN PROMOVIDA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INTERPUESTO POR BANCO CAFETERO (PANAMÁ), S. A. CONTRA PANAMÁ PICTURE INC. (PANAPICTURE) Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado EMETERIO MILLER RAMÍREZ presentó recurso de casación en el fondo, contra la resolución del 14 de enero de 1997 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que CONFIRMA la sentencia N° 44 de 29 de mayo de 1995, proferida por el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, por medio de la cual NIEGA la excepción de simulación parcial de la Obligación presentada por GERMÁN ENRIQUE REY URIBE dentro del Proceso Ejecutivo promovido por **BANCO CAFETERO (PANAMÁ), S. A.** contra **PANAMÁ PICTURE INC. (PANAPICTURE), GERMÁN ENRIQUE REY URIBE Y OTROS.**

El término para presentar los alegatos fue utilizado solamente por el oponente en casación. Agotados los trámites procesales inherentes al presente recurso, y encontrándose el mismo en estado de ser decidido, procede la Sala a resolver sobre la causal de fondo alegada.

No obstante lo anterior, antes de adentrarse la Corte al análisis de los requerimientos del recurrente, considera necesario e imprescindible realizar un resumen sucinto de los antecedentes del caso.

ANTECEDENTES

De la documentación procesal se percibe, que el Señor GERMÁN ENRIQUE REY URIBE promovió ante el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá una EXCEPCIÓN DE SIMULACIÓN PARCIAL DE LA OBLIGACIÓN, dentro del Proceso Ejecutivo de Mayor Cuantía que interpuso en su contra el BANCO CAFETERO (PANAMÁ), S. A., por la suma de CIEN MIL BALBOAS (B/.100,000.00), en concepto de capital, más intereses vencidos, y los que venzan en el futuro, más costas y gastos del proceso.

El JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, mediante sentencia N° 44 de 29 de mayo de 1995, NIEGA la Excepción de Simulación Parcial de la Obligación.

Esta decisión fue apelada y el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, mediante resolución del 14 de enero de 1997 CONFIRMA la Sentencia proferida por el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

Para llegar a esta conclusión el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA expresa: "... el memorándum en comento no constituye prueba válida para acreditar, como lo alega el excepcionante, que se acordó como garantía o fianza tan sólo hasta el 35% (B/.35,000.00) de la obligación demandada. A lo que se ha de agregar, el hecho de que la sociedad bancaria demandante apoya su pretensión en los pagarés que constan a fojas 58-62 del expediente principal, avalados con la fianza solidaria del ejecutado, GERMÁN ENRIQUE REY URIBE (ver foja 64), documento éste cuya firma fue reconocida ante el Notario Público Cuarto de Panamá, por lo que al estar ajustado a derecho, procede confirmar la sentencia sometida a consideración por vía del presente recurso de apelación".

Del fallo proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el Licenciado EMETERIO MILLER RAMÍREZ, apoderado judicial del señor GERMÁN ENRIQUE REY URIBE, interpone recurso de casación en el fondo.

Después del necesario recuento procesal del caso, la Sala de Casación Civil entra a estudiar la causal de casación en el fondo.

POSICIÓN DE LA SALA

La causal de fondo invocada es: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida".

El recurrente fundamenta esta causal de fondo en (5) cinco motivos que pasamos a transcribir:

> "PRIMERO: La Resolución impugnada le dió un valor probatorio menor del que tiene, a la prueba documental que aparece visible a foja 1 a la 3 del cuaderno de la excepción de simulación, en violación de la ley.
>
> SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, la Resolución impugnada viola en forma clara, las normas que regulan la apreciación de la prueba indica en el motivo anterior, en perjuicio de nuestro representado.
>
> TERCERO: La Resolución impugnada le dió un valor probatorio mayor al reconocimiento de firma realizada por ABEL FERNANDEZ CARO, del que tiene (ver fojas 20, 21 y 22 del cuaderno de excepción) toda vez que le dió un valor de prueba testimonial, cuando no se trataba de una declaración, por lo tanto violó la ley.
>
> CUARTO: Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal viola las normas que regulan la apreciación de las pruebas señalada en el motivo anterior, en perjuicio de nuestro representado
>
> QUINTO: Las violaciones señalan (sic) en los motivos anteriores, condujo al Tribunal Superior de Justicia de Panamá, a confirmar la Sentencia No. 44 del 29 de mayo de 1995, la que indica de los errores de apreciación señalados influyeron sustancialmente en la parte dispositiva de la Sentencia recurrida, lo que a su vez condujo al Tribunal a violar las normas sustantivas".

Como disposiciones infringidas el recurrente señala los artículos 845, 823, 904 del Código Judicial y el artículo 195 del Código de Comercio.

Tal como se desprende de las alegaciones del casacionista, el recurso se encamina a atacar los vicios que supuestamente se dieron, en el fallo del Primer Tribunal Superior al valorar las pruebas.

Se colige de los motivos anteriormente transcritos que el casacionista considera que el Tribunal Superior incurrió en error de apreciación, al darle un valor probatorio menor al que tiene el Memorándum suscrito por el gerente de sucursal del Banco Cafetero (Panamá), S. A., que reposa a fojas 1 a 3.

Aduce, además, el recurrente, como prueba mal valorada, el reconocimiento de firma del Señor Abel Fernández Caro que reposa a fojas 20, 21 y 22, a la cual el Tribunal le dio valor de prueba testimonial cuando no se trataba de una declaración sino de un reconocimiento.

Entre las disposiciones legales infringidas, estima el recurrente que el Tribunal violó el artículo 845 del Código Judicial al no darle a esa prueba el carácter de documento privado auténtico, que lo hace público respecto a su contenido para los que lo suscriben. Con relación a este Memorándum, que reposa en fojas 1 a 3, estima como violado el artículo 823 del Código Judicial en cuanto a que los documentos públicos "deben ser tomados en cuenta en toda su integridad, con las modificaciones y aclaraciones, y el Juez las apreciará en concurrencia con las otras pruebas del expediente, y según las reglas de la sana crítica".

Como tercera infracción el recurrente estima como violado el artículo 904 del Código Judicial que se refiere a la valoración por parte del juez de las declaraciones según las reglas de la sana crítica. Estima que ha sido violada en el caso del reconocimiento del señor ABEL FERNANDEZ CAR0, visible a fojas 20 a 22 al darle el Tribunal el valor "de una prueba testimonial cuando no se trataba de una declaración sino de un reconocimiento".

Como última infracción se señala como violado el artículo 195 del Código de Comercio que "consagra el principio, de que las partes quedaron obligados de la manera y en los términos que aparecen que quisieron obligarse".

Con respecto a la prueba documental visible a fojas 1, 2 y 3 que consiste en un Memorando interno del banco suscrito por el Gerente General del Banco Cafetero y dirigido al Gerente de la Sucursal Panamá, con fecha del 13 de agosto de 1987, se percibe claramente que se trata de un medio de comunicación interno entre dos ejecutivos de un banco. Considera esta Sala que el Tribunal ad-quem hizo una correcta valoración de esta prueba según las reglas de la sana crítica y por lo tanto la Sala coincide con dicho Tribunal en el sentido que ese documento no logra acreditar la simulación alegada ya que no se trata de un contrato, sino de una declaración unilateral. Este memorándum se refiere a una comunicación interna entre dos gerentes del banco donde se describen préstamos y aperturas de crédito y las garantías que utilizará el banco para garantizar la falta de pago de su cliente. De la parte del memorando que se refiere a la forma de garantizar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de la apertura de crédito otorgada al cliente concluimos en que dicho documento no logra probar ninguna simulación ya que se deduce que dicha comunicación tiene el objetivo de indicar la forma en que el banco va a garantizar una apertura de crédito con una fianza personal, en el evento de que la empresa no cumpla con sus pagos.

Se trata de una comunicación privada y unilateral donde no hay intención de obligarse por parte del gerente que envía la comunicación.

Con relación a la diligencia de reconocimiento donde comparece el señor ABEL FERNANDEZ CARO al JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL, nos percatamos que se efectúa con el fin de que el señor Fernández reconociera el contenido del documento visible a fojas 1 a 3 (memorando) y además antes de cerrar la diligencia el abogado de la parte actora le hace unas preguntas al señor Fernández sobre el contenido de dicho documento (memorando), motivo por el cual declara: "Este Memorando no fue ejecutado en todas sus partes tal como se establece aquí. Específicamente no se han cumplido la amortización dentro de los término (sic) que aquí se establecen y de ningún otro termino (sic) diferente". Además declara: Definitivamente es un Memorando interno, es de uso del Banco y casi específicamente (sic) del Destinatario a los que inclusive se les tiene dispuesto que sea de su absoluto gobierno y que no salga del Banco por ninguna circunstancia". Consideramos entonces que se trata de una diligencia de reconocimiento del contenido del documento, donde al final de la diligencia el señor ABEL FERNANDEZ CARO hace unas declaraciones. Por todo lo expuesto, concordamos con la valoración que hace el Tribunal ad-quem de dicha prueba documental.

Es necesario reiterar que de la apreciación de dichas pruebas se puede observar que la fianza solidaria que el recurrente alega como simulada, suscrita

por el demandado, fue constituida y autenticada ante notario público con anterioridad a la fecha del Memorando que se discute puede probar dicha simulación, por lo tanto si dicho Memorando se hubiera ejecutado los contratantes habrían tenido que suscribir un nuevo contrato de fianza que reemplazara el ya suscrito por las partes.

Considera esta Sala que el Tribunal ad-quem valoró correctamente las pruebas que el recurrente estima como mal valoradas, de acuerdo a la sana crítica.

> "El sistema de valoración de la prueba denominada de la "sana crítica" constituye, según Couture, "una categoría intermedia entre la prueba legal (tarifa legal) y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, de regular la actividad intelectual del Juez frente a la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. El Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento".
>
> (FABREGA P., Jorge. Estudios Procesales. Tomo I. Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1989, página 129).

Para reiterar las valoraciones probatorias debemos indicar que, con el contrato de fianza suscrito por la entidad crediticia y el fiador, no se dan los supuestos de simulación. Para esclarecerlos transcribimos una conceptualización de la simulación del jurista FERRARA:

> "Simulación es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo".
>
> (FERRARA, Francisco. La Simulación de los Negocios Jurídicos. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1960, página 56).

Vemos que para que se de la simulación se requiere que se trate de un acuerdo de voluntades, es decir, que se trate de un contrato donde ambas partes acuerden lo que se está simulando, por lo tanto, el recurrente no podrá señalar como simulado el contrato de fianza. Para que exista la simulación ambas partes tendrían que haber contratado algo diferente a lo que en realidad querían contratar, para producir un negocio jurídico distinto a lo que en realidad tienen la intención de producir.

Indica FERRARA al referirse a los actos unilaterales:

> "Como la simulación requiere el concurso de varias partes contratantes, está excluida del campo de los actos unilaterales; y si el declarante tiene una voluntad opuesta a lo que declara, esto constituye reserva y no simulación".
>
> (FERRARA, Francisco. La Simulación de los Negocios Jurídicos. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1960, página 56).

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la

sentencia dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, el 14 de enero de 1997.

Las obligantes costas, a cargo del recurrente, se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EMMA EVIANA ATONAIDAN BOBADILLA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE ELVIA ESPINO DE SANAD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Por no estar conforme con la sentencia expedida el 20 de enero de 1997, por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL en el proceso de oposición que la señora **ELVIA ESPINO DE SANAD** le sigue a la señora **EMMA EVIANA ATONAIDAN BOBADILLA**, anunció y formalizó la demandada contra dicho fallo, recurso de casación en el fondo.

Admitido el recurso, mediante resolución emitida por la Sala el 20 de febrero 1998, se concedió a las partes el término de seis días para que, dentro del mismo, alegasen en cuanto al fondo del recurso, pero únicamente la parte recurrente aprovecho, oportunamente, el mismo, en escrito que corre de foja 227 a 231 del expediente. Evacuada la fase procesal anterior, debe la Corte pronunciarse en sentencia definitiva sobre el fondo del recurso.

El recurso se interpuso en el fondo y se invoca una sola causal, cual es "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba". Esta causal está consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

Los motivos que sustentan la causal son dos, los cuales se permite esta Sala de casación reproducir:

> "PRIMERO: La resolución fechada el día veinte 20 de enero de mil novecientos noventa y siete (1997), emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos, de fecha veintiocho (28) de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996), omitió las pruebas de informes, que constan en las fojas N° 164, 165 y 184 del proceso que nos ocupa, por lo que consideró que la porción de terreno solicitada en adjudicación por la SRA. EMMA E. ATONAIDAN B., era propiedad de un particular.
>
> SEGUNDA: Si la resolución proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, hubiera tomado en cuenta las pruebas de informe que se mencionan en el primer motivo, y que demuestran que las tierras solicitadas en adjudicación por la SRA. EMMA E. ATONAIDAN B., son municipales patrimoniales y no de propiedad privada, éste hubiese revocado la Sentencia de Primera Instancia".

Como normas probablemente infringidas se citan los artículos 769 del Código Judicial, el 331 del Código Civil y el 103 de la Ley N° 106 de 1973 del Régimen Municipal.

La sentencia contra la cual se recurre en casación, es la expedida en segunda instancia por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL el 20 de enero de 1997, en virtud del recurso de alzada que interpusiera la señora EMMA ATONAIDAN B., mediante apoderado legal, contra el fallo expedido el 28 de marzo de 1996 por el JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE LOS SANTOS.

La señora EMMA ATONAIDAN BOBADILLA, había solicitado al Municipio de Las Tablas que le adjudicara a título de plena propiedad por compra un lote de terreno con una superficie de 29.49 metros cuadrados, cuyas medidas y linderos son las que se especifican: partiendo del punto 3 al 4 mide 5.03 metros y un rumbo N° 65° 28 'W, colinda con ELVIA ESPINO SANAD; del punto 4 al 5 mide 6.29 metros y rumbo N 11'W, colinda con JOSÉ MARÍA ESPINO; del punto 5 al "E" mide 6.80 y un rumbo de S 56° 27'E, colinda con EMMA EVIANA ATONAIDAN BOBADILLA, del punto "E" al 3 de partida mide 4.74 metros y un rumbo S 13° 00'W, colinda con HERACLIO DE CEREGA.

A esa solicitud descrita en las líneas que preceden, se opuso la señora ELVIA MARÍA ESPINO DE SANAD, por considerarse con mejor título para adquirir en plena propiedad el inmueble descrito, ya que el mismo, manifiesta, le pertenecía a su madre, CATALINA GONZÁLEZ (q. e. p. d.), quien desde el 7 de enero de 1939, se lo había comprado al señor JUSTO VÁSQUEZ BERNAL (q. e. p. d.).

En razón de la oposición presentada a la solicitud de la señora EMMA ATONAIDAN, la misma fue encausada a la vía jurisdiccional, quedando radicada en el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos. El Juzgado Primero, luego de cumplir con todos los ritos procesales previos a la decisión de la causa, profirió el 28 de marzo de 1996 sentencia, en la que **ACCEDE** a la demanda de oposición presentada por la señora ELVIA MARÍA ESPINO DE SANAD, contra la solicitud de adjudicación formulada por la señora EMMA E. ATONAIDAN BOBADILLA, por no constituir el lote solicitado tierra municipal.

La decisión del juzgador de primera instancia fue apelada por la señora ATONAIDAN BOBADILLA, quien además solicitó la práctica de nueva prueba. Tal prueba consistió en el informe de la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro, Administración Regional de Los Santos, relacionado con el Plano N° 70-201-6652, aprobado el 20 de septiembre de 1993 a nombre de EMMA E. ATONAIDAN BOBADILLA, que reposa a foja 184.

El 29 de enero de 1998, profirió el Tribunal Superior la resolución en la que confirma la decisión de primera instancia, de ahí el recurso de casación que ahora se sustancia, con el que se pretende enderezar el vicio de ilegalidad en que, a juicio del casacionista, incurrió el tribunal de alzada en su sentencia.

En el único cargo de injuricidad que aparece formulado en los motivos del recurso, transcritos supra, le censura el recurrente al sentenciador de segunda instancia, el no haber tomado en cuenta, al fallar, las pruebas que obran en autos a fojas 164, 165 y 184.

Son dos las pruebas que aparecen recogida a tales fojas, siendo la primera de ellas, que aparece de foja 164 a 165, un informe de la Sección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro, Administración General de Los Santos. La segunda, ubicada a folio 184, también es otro informe de la Sección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro, Administración General de Los Santos, introducido al proceso como prueba en segunda instancia.

Alega la recurrente que los documentos públicos aludidos dan fe de que los 29.49 metros cuadrados que solicitó en compra al Municipio de Las Tablas, están comprendidos dentro de la Finca N° 1030, inscrita al tomo N° 184, Folio N° 44, Sección de Propiedad de la Provincia de Los Santos, la cual le pertenece en propiedad al Municipio tableño, lo que prueba que el inmueble solicitado es de propiedad municipal y no particular como establece el fallo impugnado mediante este recurso.

Para el Tribunal de alzada el lote de terreno en disputa no es propiedad municipal, sino particular, toda vez que el mismo le pertenece al señor JUSTO VÁSQUEZ BERNAL, según lo hace constar la certificación del Registro Público que

consta en autos a foja 28. Al respecto, se cita el siguiente extracto del fallo recurrido:

> "El juez de la causa, entre otras cosas dice lo siguiente:
>
> "Por ello, al constar un título de propiedad inscrito a favor de una persona distinta al Municipio del Distrito de Las Tablas, se hace improcedente la solicitud de adjudicación efectuada por EMMA E. ATONAIDAN BOBADILLA, no obstante, por las mismas razones, lo es también la adjudicación para la señora ELVIA MARIA ESPINO DE SANAD" (sic).
>
> Este Tribunal Superior, prohija lo expuesto por el Juzgador Primario, toda vez que existiendo un título, es improcedente recurrir a la autoridad administrativa a solicitar la repetición del mismo". (Foja 188).

La citada certificación del Registro Público, dispone que el señor JUSTO VÁSQUEZ BERNAL es el titular de la Finca 373, inscrita en el tomo 88, folio 44 de la sección de propiedad de la provincia de Los Santos, sin embargo, lo que alega la recurrente, con fundamento en lo señalado en el informe de Catastro, es que los 29.49 metros de terreno que solicita en adjudicación no equivalen a la Finca 373, ni forman parte de ella, sino que los mismos pertenecen a la Finca 1030, cuyo titular es el Municipio de Las Tablas. La certificación del Registro Público, al establecer los límites y linderos de la Finca 373, señala que la misma está compuesta de una casa y un anexo. Que el área del anexo de la Finca 373 mide 29 metros con 3,000 centímetros. Tanto el sentenciador de primera instancia como el de segunda, coinciden en señalar que el área de dicho anexo equivale al del lote de terreno que solicita la señora EMMA ATONAIDAN B. en adjudicación. A tal convicción llegan luego de analizar las pruebas que obran en el proceso, particularmente, el gráfico que aparece a foja 39 del expediente, en el cual se especifican las medidas del lote de terreno solicitado en venta, las que coinciden con las del anexo de la Finca 373. En tal sentido lo refiere la sentencia del juzgador de primera instancia, citado por el Tribunal Superior en su fallo:

> "La prueba documental meritada comprueba la existencia de un título de propiedad a favor de JUSTO VASQUEZ BERNAL (q. e. p. d.), o sus herederos, sobre el anexo que mide 4 metros 60 centímetros de frente por 5 metros 50 centímetros de fondo, que al sojuzgar por las pruebas obrantes en autos, específicamente, el gráfico legible a fojas 39, que incluye el anexo en cuestión señalando idénticas medidas de frente y fondo, se concluye que es el mismo que el solicitado por la señora EMMA E. ATONAIDAN BOBADILLA.
>
> Por ello, al contestar un título de propiedad inscrito a favor de una persona distinta al Municipio del Distrito de Las Tablas, se hace improcedente la solicitud de adjudicación efectuada por EMMA E. ATONAIDADN BOBADILLA, no obstante, por las mismas razones, lo es también la adjudicación para la señora ELVIA MARIA ESPINO DE SANAD" (sic). (F. 187).

Conocido es que en materia registral rige el principio de exactitud registral, en virtud del cual los asientos registrales se presumen veraces hasta tanto no se demuestre lo contrario, esto es, mientras no se declare judicialmente, la discordancia entre el Registro Público y la realidad. Sobre el alcance del principio de exactitud registral ha comentado el jurista español LUIS DIEZ-PICAZO:

> "En cuanto presunción, es de carácter iuris tantum. Lo cual quiere decir que se produce una inversión de la carga de la prueba y que permite la prueba en contrario. El titular registral queda protegido al exonerárseles de la necesidad de asumir la carga de la prueba. Tendrán que ser quienes impugnen la situación del titular registral, considerando inexacto el Registro, los que soporten la necesidad de probarlo.

> En principio, frente a la presunción son admisibles todos los medios de prueba. Sin embargo, no cabe olvidar que la exactitud del Registro se encuentra amparada por la norma del párrafo tercero del art. 1. Los asientos del Registro -dice este artículo- están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley. Ello quiere decir que para destruir la presunción de exactitud el impugnante no sólo soporta la carga de la prueba, sino también la carga del ejercicio de la correspondiente acción de rectificación, ante los tribunales de justicia, bajo cuya salvaguardia de los tribunales se encuentran".
>
> (Obra: Fundamento de Derecho Civil Patrimonial, T. 111, pág. 433.)

El registro panameño se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales ordinarios de justicia, lo que significa que una vez practicada una inscripción la única forma de dejarla sin efecto, sin que medie la voluntad de su titular, sería a través de las autoridades judiciales. En este sentido el artículo 1784 del Código Civil, dispone que "no se cancelará una inscripción sino en virtud de auto o sentencia ejecutoriada," ello entendido para el supuesto en que no medie consentimiento del titular de la inscripción.

En razón de lo expresado, se concluye que mientras no se declare judicialmente sin efecto el título inscrito, el mismo se presume válido para todos los efectos jurídicos, teniéndose, en consecuencia, como titular del bien o derecho, a la persona natural o jurídica a cuyo nombre aparece inscrito el mismo.

En el proceso que nos ocupa se ha presentado un título de propiedad sobre el bien inmueble en litigio, inscrito en el Registro Público a favor del señor JUSTO VASQUEZ BERNAL (q. e. p. d.). En virtud de la presunción de veracidad registral en referencia, debe tenerse al señor VASQUEZ BERNAL o sus herederos como propietarios del lote de terreno solicitado en venta por la señora EMMA ATONAIDAN BOBADILLA, de lo que deviene en improcedente la petición formulada en tal sentido por la antes aludida señora ATONAIDAN.

Considera la Corte que las pruebas que, según la recurrente no fueron consideradas por el Tribunal Superior al proferir su sentencia, consistentes ambas en informes de la Dirección Regional de Catastro en la cual básicamente se hacía constar que los 29.49 metros de terreno en discusión pertenecían a la Finca municipal 1030, carecen del valor probatorio que pretende atribuirle la recurrente toda vez que, en virtud de lo pautado en el artículo 33 de la Ley N° 63 de 31 de julio de 1973 que crea la Dirección General de Catastro, para que las actas que expida la Dirección de Catastro en uso de sus facultadas puedan alterar los linderos y medidas originales, conforme lo establecido en el artículo 35 de la misma norma, la solicitud de medición debe ser presentada y firmada por los colindantes, situación que no se da respecto a los informes catastrales aludidos. En este mismo sentido, el artículo 34 de la citada ley señala que debe haber conformidad en el contenido del acto de todos los participantes.

Ahora bien, a pesar de que las pruebas que se señalan como desconocidas no tienen el valor que le atribuye el recurrente, ello no era óbice para que el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial se abstuviera de externar algún razonamiento al respecto, en lugar de limitarse a reproducir textualmente la resolución de primera instancia para después prohijarla sin añadir ningún análisis sobre el valor de la prueba o sobre otros argumentos que apoyen la decisión jurisdiccional adoptada. Tal comportamiento, es contrario al deber legal, consagrado en el artículo 199, numeral 5 del Código Procesal, que tienen todos los jueces y Magistrados de motivar las sentencias y autos que, en el ejercicio de sus labores jurisdiccionales, expidan. De ahí que la Corte considere imperativo hacer un llamado de atención al Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, sobre la necesidad de motivar toda sentencia, lo que además, es un deber que le impone la ley a todo juzgador.

Concluye esta Sala Primera de la Corte, por todas las razones que se han dejado expuestas, que las violaciones a los artículos citados por la recurrente,

no se producen, por lo que debe la Corte, en todo caso, desestimar el vicio de ilegalidad formulado en el recurso de casación que se examina.

Por todo lo que expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 20 de enero de 1997, expedida por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, dentro del proceso de oposición que le sigue la señora ELVIA ESPINO DE SANAD a EMMA EVIANA ATONAIDAN BOBADILLA.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HILDA AURA BARAHONA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN A TÍTULO NACIONAL QUE LE SIGUE SAMUEL BARAHONA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante auto de 11 de enero de 1996, esta Sala declaró admisible la causal única en el fondo del recurso de casación interpuesto por el Licdo. Alvaro Muñoz Fuentes en nombre y representación la Sra. **HILDA AURA BARAHONA**, dentro del proceso ordinario de oposición a título nacional propuesto por el Sr. **SAMUEL BARAHONA SERRUD** en su contra.

El recurso se interpuso contra la sentencia civil de 21 de septiembre de 1995, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en cuya virtud, previa revocatoria de la sentencia N° 114 de 29 de julio de 1994, accedió a la oposición solicitada, y en consecuencia denegó la solicitud de adjudicación a título oneroso N° 4-19788 de 12 de julio de 1982, propuesta por la demandada ante la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario; y fijó las costas a cargo de la apelante en la suma de trescientos (B/.300.00) balboas.

Agotada la fase de admisibilidad del recurso, y concluído el término de alegatos, que fue aprovechado por el recurrente, procede entonces dictar la sentencia de mérito, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

Las constancias procesales revelan que SAMUEL BARAHONA, mediante representante legal, promovió juicio ordinario de oposición de título de propiedad de un lote de terreno contra HILDA AURA BARAHONA, que quedó radicado en el Juzgado Segundo de Circuito de Chiriquí, Ramo Civil.

El proceso de adjudicación del lote de 7 hectáreas, ubicado en Manaca Civil, Corregimiento del Barú, Provincia de Chiriquí, fue promovido el 12 de febrero de 1982 en la Reforma Agraria por la demandada HILDA AURA BARAHONA TAYLOR, quien es hermana del opositor.

Adujo este que sus padres -SAMUEL BARAHONA CAICEDO y Sra.- vivieron en el terreno en disputa -ubicado en Manaca Civil, Corregimiento de Barú, Provincia de Chiriquí- durante 20 años, y que él trabajaba esa tierra desde mucho antes que su hermana interpusiera el proceso de adjudicación ante la Reforma Agraria, en febrero de 1982.

Que ésta, quien reside en el Barrio Río Mar en Puerto Armuelles, presentó solicitud de adjudicación de tierras ante la Reforma Agraria, sin haber vivido

en el lugar y que, por lo tanto, no tenía posesión del terreno, derecho que a él le asiste.

Que ambos se comprometieron a compartir equitativamente la finca en cuestión, refrendado el compromiso mediante Resolución N° 91-82 de 21 de diciembre de 1982, de la Reforma Agraria.

Que su hermana desconoció lo acordado, utilizando "vías de hecho" para lograr la propiedad de la finca, entre 1985 y 1992, lo que alargó el proceso, presentando la oposición a la solicitud en trámite el 31 de agosto de 1992 en la Dirección de Reforma Agraria, y el 1° de diciembre del mismo año, en el Juzgado Segundo de Circuito de Chiriquí, Ramo Civil.

Que, pese a tener "mejor derecho" que su hermana, SAMUEL BARAHONA estaba dispuesto a compartir la posesión del terreno disputado, todo lo cual fue negado por su contraparte.

Luego de cumplir todas las etapas procesales, la Juez Segunda de Circuito, dictó la sentencia de 29 de julio de 1994, que negó la pretensión del demandante, imponiendo costas por la suma de doscientos cincuenta (B/.250.00) balboas; esa resolución fue apelada por el demandante-opositor, y resuelta mediante el fallo impugnado en casación.

El fallo producido por la apelación revocó la sentencia de primer grado, accediendo a la petición del opositor, y denegando la solicitud de adjudicación de título oneroso N° 4-19788 de 12 de julio de 1982 propuesta por HILDA BARAHONA ante la Dirección de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, considerando que con los elementos procesales contenidos en el expediente, se podía arribar a la conclusión acorde con la pretensión del demandante en oposición, al criterio del a-quo.

CONTENIDO DEL RECURSO

Se trata de un recurso de casación en el fondo, cuya causal única consiste en "infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuánto (sic) a la apreciación de la prueba, lo cual ha influído sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida. Esta causal está consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial".

El impugnante estableció cinco motivos para fundar dicha causal, que a continuación se transcriben:

> "PRIMERO: La sentencia recurridas considera erroneamente (sic) que se ha probado un mejor derecho de posesión en favor de SAMUEL BARAHONA a travéz (sic) de meros indicios, a pesar de que no existe plena prueba que acrediten un mejor derecho de posesión a favor del demandante, tal y como lo señala la sentencia de primera instancia.
>
> SEGUNDO: La sentencia recurrida en Casación le da mérito a un informe manuscrito de un funcionario de Reforma Agraria que aparece a fojas 14 y 15 del expediente, que no prueba en forma alguna un mejor derecho de posesión, en virtud a que el demandante no aportó las pruebas necesarias para acreditar su derecho, y porque el indicio citado se sustenta en otros supuestos indicios que no lo son y que se refieren a dos informes de visitas que aparecen a fojas 5 y 7 del expediente. Ello infringe los principios contenidos en las normas sobre valoración y apreciación de pruebas de indicios.
>
> TERCERO: La sentencia recurrida en Casación reconoce como válidos algunos indicios entre los cuales señala el informe de visita legible a fojas 5 del expediente, que hace constar que el lote de terreno en disputa lo poseían el padre, la madre y el propio SAMUEL BARAHONA, desde hace año y medio, lo cual contradice lo que la ley establece en materia de posesión, que no puede reconocerse en dos personas distintas, y que la posesión debe probarse con hechos positivos y el animus domini, que no constan en el expediente.

> CUARTO: La sentencia impugnada no apreció con arreglo a la sana crítica, los indicios, toda vez que de haberlo hecho hubiera confirmado la sentencia de primera instancia, por cuánto (sic) que sólo un indicio, el que aparece a fojas 14, figura en el expediente. Sin embargo un sólo indicio lo sustenta en otros supuestos indicios, que no lo son, tal es el caso de los informes de visita que militan a fojas 5 y 7 del expediente, porque no se aportaron otras pruebas que lo sustentaran. De manera que la apreciación de los supuestos indicios no se ajusta a las reglas de la sana crítica.
>
> QUINTO: Las anteriores infracciones incidieron sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida".

Advierte la Sala que los cargos de injuridicidad contenidos en los motivos expuestos, se sintetizan de la siguiente manera:

El primer motivo contiene un cargo de injuridicidad, consistente en la mala valoración de los indicios, que produjeron en el Juzgador de segundo grado la convicción de la existencia de plena prueba del mejor derecho del opositor a la adjudicación en base a "meros indicios", sin que exista plena prueba de la pretensión.

El cargo de injuridicidad contenido en el segundo motivo estriba en el valor exagerado que el Tribunal Superior le dio al informe manuscrito hecho por un funcionario de la Reforma Agraria -fs. 14 y 15-, que no prueba en absoluto la mejor posesión sobre la finca, porque no hay otras pruebas que confirmen su valor, y porque ese informe constituye un indicio basado en indicios inexistentes.

El tercer motivo contiene un cargo de injuridicidad que se puede sintetizar señalando la mala valoración del indicio contenido a foja 5 del expediente, en el que SAMUEL BARAHONA afirmó que el lote en disputa era poseído por sus padres y por él, contrariando la ley en materia de posesión, que señala que la misma solo puede ser ejercida por una persona, y que debe ser probada con hechos positivos y ánimo de dueño.

El cuarto motivo es una repetición del cargo de injuridicidad contenido en el segundo motivo, agregando que dicha valoración no se hizo conforme a la sana crítica.

El enunciado del quinto motivo no corresponde a un cargo de injuridicidad en realidad, sino a la formulación del efecto de los cargos anteriores, que constituyen la justificación de la causal.

En otro sentido, el impugnante expuso como disposiciones legales infringidas y explicación de cómo lo han sido, los artículos 970, 972 y 973 del Código Judicial, y los artículos 431, 606 y 415 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA

El cargo contenido en el primer motivo, de carácter general al no especificar los indicios mal valorados, puede ser analizado a través del establecido en el segundo motivo,más específico- que señaló que la sentencia sobrevaloró el informe contenido a fs. 14 y 15, emitido por el funcionario de la Reforma Agraria, que no prueba ningún "mejor derecho" de posesión, toda vez que el demandante no aportó pruebas que lo complementaran, y porque ese indicio se sustenta en indicios inexistentes, como lo son los informes de visitas realizadas por las partes en conflicto, contenidos a fs. 5 y 7 respectivamente.

Es determinante acotar que el fallo recurrido expuso -f. 97- que

> "En este sentido como bien lo afirma la juzgadora primaria, el informe que constituye parte del expediente levantado en Reforma Agraria y legible a fojas 14-15 del expediente conduce, **aún cuando de manera indiciaria**, a concluir que Samuel Barahona y no Hilda Barahona ejerce derechos de posesión sobre el lote en disputa".

(Negrilla de la Sala).

El fallo en análisis no le otorgó al informe valor de plena prueba, sino valor indiciario, criterio que comparte parcialmente esta Sala, y que sustentamos a continuación. Además, lo que hizo la sentencia fue señalar que SAMUEL BARAHONA ejercía, al momento de emitir ese fallo, el derecho de posesión sobre la finca; es decir, que no señaló que ejercía ese derecho desde hacía tiempo, sino durante el tiempo en que se produjeron los indicios debatidos.

Para ello, veamos los aspectos observados por el Inspector de la Reforma Agraria durante la visita al fundo, que son importantes para la decisión a tomar, por esta Corte de Casación, contenido en las fojas 14 y 15 del expediente.

Empieza el informe exponiendo los antecedentes del caso; que aproximadamente un año antes de levantarse dicho informe, el señor SAMUEL BARAHONA había presentado oposición al título contra la casacionista, sobre el lote de terreno de marras.

Continúa revelando el informe que se programó una inspección sobre el lugar y que se alcanzó un arreglo amistoso entre las partes en conflicto, el que a la postre fue incumplido por HILDA AURA BARAHONA.

Finalmente, afirmó el Inspector de la Reforma Agraria que visitó el terreno, y que el Sr. BARAHONA padre sigue bajo los cuidados de su hijo, y que la hermana de este no vive allí.

Dijo el supracitado que él era quien cultivaba el lote de marras; el Inspector atestiguó que BARAHONA era el único que se encargaba de los cuidados del lote en disputa, por lo que la afirmación del interesado fue confirmada en la visita, constituyendo también un indicio a su favor.

Alegó también el interesado, que su hermana residía en Armuelles y que nunca iba por allí; ello también fue observado por el Inspector, en el último párrafo. Ello constituye prueba de quién estaba ejerciendo la posesión al momento de la inspección.

En resumen, estas afirmaciones del opositor al recurso, y que fueron confirmadas por el Inspector -quien es un funcionario público autorizado para levantar ese informe- demuestran que en el momento de la inspección las condiciones por él captadas probaban en ese momento los argumentos del Sr. BARAHONA, lo cual establece un indicio concordante, de que las aserciones de éste eran ciertas; situación distinta a la de HILDA AURA DE BARAHONA, quien, según lo atestiguado en la inspección en comento, ni se encontraba cerca del terreno, ni lo frecuentaba.

Ello favorece la pretensión del primero.

En cuanto al arreglo amistoso alcanzado entre ambos, además de demostrar la voluntad de ambos de compartir el lote de marras, implícitamente sienta el reconocimiento de cada uno del derecho posesorio del otro -concediendo SAMUEL ese derecho a su hermana.

Además, el informe indica que en el Departamento Jurídico de la Reforma Agraria existe un escrito del acuerdo en comento.

El cargo de injuridicidad señala que la sentencia impugnada le dio mérito al informe expuesto, "que no prueba en forma alguna mejor derecho de posesión".

Es el criterio de la Sala que el documento analizado sí constituye un fuerte indicio tendiente a probar el "mejor derecho" de SAMUEL BARAHONA sobre su hermana, HILDA AURA BARAHONA, por todo lo ya expuesto.

También afirma el cargo de injuridicidad que el indicio contenido en el informe estudiado se funda en otros indicios que no lo son -fs. 5 y 7-.

Como ya se vio, esos "informes de visitas" contenidos a fojas 5 y 7, fueron

considerados por la sentencia de marras en su justa dimensión, ya que SAMUEL BARAHONA adujo en su visita que para esa fecha, sus padres tenían 20 años de vivir en ese terreno, y que hacía 1 1/2 años que él lo trabajaba.

Tomando como cierta esa aseveración -ya que pudo haber dicho que había trabajado el terreno por más tiempo-, lógico es suponer que si su padre se encuentra incapacitado mentalmente -hecho al que nos referimos más adelante-, no puede trabajar la tierra ni ejercer su posesión sobre el terreno; por lo tanto, lo que el opositor está ejerciendo es una posesión y no una mera tenencia, que en todo caso ejercería si su padre estuviese capacitado.

Aunado a lo anterior, el informe de visita de HILDA AURA reveló -dice la sentencia de segundo grado- que ella no afirmó ocupar o trabajar el terreno, sino que su padre vivió siempre solo en esa propiedad, lo que fortalece la situación del opositor al recurso que nos ocupa.

La Sala considera acertado ese señalamiento de la sentencia; por esa razón, los informes de visita en referencia sí constituyen indicios para considerar sobre la decisión tomada, pero en cuanto a la ausencia de HILDA AURA de ese lote, y a la existencia de siembra en el mismo.

En cuanto a las normas infringidas en el fallo recurrido, el actor sostiene que se infringió el artículo 970 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "ARTÍCULO 970. Los indicios tienen más o menos valor, según sea mayor o menor la relación que exista entre los hechos que los constituyen y los que se trata de establecer".

En este caso, el fallo recurrido hizo un análisis del indicio constituido por el informe, en el que además de establecer "de manera indiciaria" que SAMUEL, y no HILDA BARAHONA, era quien ejercía el derecho posesorio sobre ese terreno, resaltó que según el Informe, HILDA BARAHONA no residía en el lote sino en Armuelles, que llegaron a un pacto amistoso, y que SAMUEL era el único que cuidaba del terreno.

El fallo recurrido valoró los indicios en razón de la relación de los hechos que los constitituyen, y los que se trata de establecer.

Los hechos que constituyen el indicio son el Informe del Inspector de la Reforma Agraria, de que SAMUEL BARAHONA es quien ejerce la posesión al momento de él hacer la inspección; por otro lado, la aserción de HILDA en el Informe de Visita -f. 7- en el que dijo que su padre siempre vivió solo y que siempre trabajó la tierra él solo, revelan indirectamente que ella nunca vivió allí ni ejerció posesión sobre el terreno.

Los hechos plasmados en las dos pruebas en comento, están relacionados -a juicio de esta Sala- de tal manera que el valor indiciario que tienen es suficiente para suponer una posesión de SAMUEL BARAHONA, en base a la norma en estudio.

Por lo tanto, a juicio de esta Sala, no se ha violado el artículo 970 del Código Judicial, dado que no se advierte ilegalidad en la valoración de la documentación en estudio, en la sentencia recurrida.

Tocante al tema, es también lo normado por el artículo 972, que señala:

> "ARTÍCULO 972. El Juez apreciará los indicios teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia y las demás pruebas que obren en el proceso".

En el análisis de la norma anterior, expusimos consideraciones que son aplicables al ventilar la posible infracción del contenido de esta disposición.

Hay que resaltar el hecho de que el artículo parte de la premisa de la existencia de un indicio; ello no se pone en duda, y lo que se ventila es su apreciación, lo cual redundará en el reconocimiento de su fuerza probatoria. Esta

debe fundarse en la gravedad, concordancia y convergencia entre sí y con las otras pruebas que contenga el proceso.

El proceso en estudio es pobre en evidencias que puedan inducir al Juzgador a la plena convicción de a quién le pertenece el derecho de posesión sobre la tierra en disputa, ya que en este tipo de casos -basándonos en la lógica y la experiencia-, por el lugar donde viven las partes en conflicto y por su falta de conocimiento sobre la manera como pueden resolverse estos litigios, es muy común que las situaciones de posesión o de dominio se ejerzan de hecho o por acuerdo, lo que no permite la existencia de pruebas que induzcan a establecer de manera clara la pretensión que tratan de hacer valer por los medios que llegan a su conocimiento, como la Reforma Agraria en este caso.

Pero ello no significa que no exista mérito para otorgar o reconocer la posesión a alguna de las partes.

Sobre este marco de referencia, considera esta Sala que los pocos elementos probatorios allegados al expediente fueron utilizados por el ad-quem siguiendo los parámetros establecidos por la norma en cuestión, ya que el informe de Reforma Agraria recogió la situación del momento de la inspección, puesto que solo SAMUEL BARAHONA estaba allí, habitando el lugar y trabajando la tierra.

Dadas las probanzas del caso, ese informe se constituyó en un fuerte indicio en favor del opositor al recurso que aquí se ventila; ello, sin tomar en consideración el acuerdo entre las partes para compartir el terreno, y que se formalizó en la Resolución 91-82 de la Reforma Agraria, que constituye una prueba de la voluntad de las partes. No hay violación de la norma transcrita.

El cargo de injuridicidad contenido en el tercer motivo, se funda en que la sentencia criticada reconoció como indicio el informe de visita contenido a foja 5, que manifiesta que el lote en disputa lo poseían los padres de SAMUEL BARAHONA y él mismo desde hacía un año y medio, contrariando lo que la ley señala sobre posesión, en el sentido de que la posesión no puede ser reconocida en dos personas distintas, y que debe probarse con hechos positivos y el ánimo de dueño, lo cual no ocurrió en este caso.

Para sustentar esta aseveración, el recurrente esgrimió el artículo 431 del Código Civil, que a la letra dice:

> "ARTÍCULO 431. La posesión, como hecho, no puede reconocerse en dos personas distintas, fuera de los casos de indivisión. Si surgiere contienda sobre el hecho de la posesión, se considerará como mejor posesión la que se funde en título legítimo; a falta de éste o en presencia de títulos iguales, la posesión más antigua; siendo de igual fecha, la actual, y si ambas fueren dudosas, será puesta la cosa en depósito mientras se decide a quién pertenece".

En este sentido, hay que indicar que ya se estableció el valor del indicio señalado en los términos establecidos por el artículo 970; es decir, que el valor que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial le otorgó al Informe de Visita contenido a foja 5 del expediente no fue en sí mismo, de manera autónoma, sino de conformidad y en base al documento de la foja 14, del cual toma la fuerza probatoria que se le reconoció, por la relación existente entre ambos, según el artículo en mención.

Además, el ad-quem no atribuyó una doble posesión, como señala la casacionista, toda vez que quedó establecido que SAMUEL BARAHONA CERRUD venía ejerciendo la posesión del fundo en disputa desde hacía año y medio, dada la incapacidad de su padre, por lo tanto la posesión no era compartida, ya que el segundo no estaba en capacidad legal ni mental de ejercerla, incapacidad que quedó demostrada en el expediente al manifestarlo ambos en sus respectivos Informes de Visitas, a fojas 5 -SAMUEL- y 7 -HILDA- respectivamente, y en el Informe de Inspección de Reforma Agraria, a foja 14.

Ello significa que sólo SAMUEL BARAHONA HIJO venía ejerciendo la posesión del terreno, por lo menos por un año y medio.

Entonces, la posesión como hecho nunca fue reconocida en dos personas distintas, y por lo tanto, el artículo 431 del Código Civil no puede ser infringido, porque ni siquiera es aplicable al presente caso.

El cargo de injuridicidad contenido en el cuarto motivo, consistente en la no apreciación de los indicios por parte del Juzgador, en base a la sana crítica, por cuanto el único indicio existente -a su juicio- contenido a foja 14, es sostenido por los Informes de Visitas contenidos a fojas 5 y 7, respectivamente.

Como lo que se impugna en este motivo es la violación del principio de la sana crítica que debe observar el Juzgador al momento de valorar los indicios atacados, debe esta Corte de Casación hacer las siguientes consideraciones.

La jurisprudencia de la Sala determinó en el pasado -en fallo de 21 de diciembre de 1971-, lo siguiente:

> "En cuanto a los indicios o conjeturas, que dicho sea de paso el recurrente no precisa, por no haber formulado los cargos contra la sentencia en cada motivo, el reparo no procede en casación sino en determinados casos. La doctrina de la Sala es que en casación sólo es viable atacar la apreciación probatoria del fallador de segunda instancia sobre los indicios, en los siguientes casos excepcionales:
>
> a) Cuando se haya dado por probado un indicio, que no lo está.
>
> b) Cuando se haya pasado por alto uno cuya estimación impondría conclusiones distintas de las aducidas sobre el tema respectivo, o que con este resultado se haya obtenido por no probado un indicio a pesar de estarlo.
>
> c) Cuando se ha faltado notoriamente a la lógica por no haber entre los indicios y su conjunto, de un lado, y de otro, las deducciones del Tribunal, el vínculo de causalidad que obligatoriamente ha de atar a aquellas con éstas".

En base al extracto transcrito, en materia de indicios, en la sentencia del ad-quem sólo es atacable la apreciación de los indicios cuando dicha evaluación incurra en alguna de las situaciones establecidas en los tres literales concebidos por el fallo en comento, de forma que si no se asimilan a uno de ellos, esta Sala no puede variar el criterio utilizado por el ad-quem al revisar la supuesta violación de las reglas de interpretación.

El indicio atacado -principalmente- es el Informe de Inspección realizado por el Inspector Encargado de Reforma Agraria del Barú, con copia al Ingeniero Norberto Lezcano, Jefe del Area; por lo tanto, es necesario contemplarlo dentro del marco ya señalado, para colegir si es dable analizar la valoración que hizo del mismo el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

El primer supuesto a verificar para decidir si la Sala debe comprobar si el Tribunal de segundo grado incurrió en violación de las reglas de apreciación probatoria, es si se dio por probado un indicio que no lo está.

La doctrina de esta Sala también ha establecido que los indicios deben estar plenamente probados, mediante documentos, testimonios, inspecciones, etc. En este caso, la inspección fue realizada por el Inspector encargado de la Reforma Agraria, un funcionario facultado para emitir esas inspecciones, por lo que el contenido del mismo, otorgado en ejercicio de sus funciones, tiene que considerarse como un indicio probado, por lo que no se cumple la primera premisa establecida para ventilar la valoración juzgadora.

El segundo supuesto a analizar, es si se ha pasado por alto un indicio cuya estimación induciría a conclusiones distintas sobre el caso, o que con ese resultado se tenga por no probado un indicio que sí lo está.

Independientemente del Informe de Inspección que se encuentra a foja 14 y de los Informes de Visitas contenidos a fojas 5 y 7, no observa esta Sala ningún

elemento probatorio adicional que contribuya a variar la convicción sobre la posesión del terreno disputado por las partes en conflicto; por lo tanto, tampoco se verifica este segundo supuesto.

Finalmente, al contemplar el tercer caso para proceder a decidir la valoración judicial, referente a la falta de relación de causalidad entre los indicios en su conjunto y las deducciones de Tribunal -falta de lógica de la Juzgadora al valorarlos-, es el criterio de esta Corporación de Justicia que tampoco se cumple esta situación, ya que los elementos probatorios calificados como indicios -Informe de Inspección y los Informes de Visitas- convergen en una misma situación jurídica, que es la posesión de SAMUEL BARAHONA CERRUD.

Ello es así, toda vez que el Informe de Inspección recogió una situación de hecho, la cual era la presencia de este último en el terreno en disputa; la incapacidad de su padre SAMUEL BARAHONA CAICEDO, y la ausencia de HILDA AURA BARAHONA, en ese lugar; todo ello constituye indicio lógico capaz de inducir la posesión del terreno por parte de aquél.

Los Informes contenidos a fojas 5 y 7 del expediente, no constituyen indicios por sí solos, pero es interesante observar que en las afirmaciones recogidas en el Informe de Visita de HILDA AURA -f. 7-, ésta se limitó a señalar que su padre SAMUEL BARAHONA CAICEDO fue quien siempre trabajó el terreno; pero en la Solicitud de Adjudicación a Título Oneroso, que se encuentra en el reverso de la foja 1, señala que la peticionaria cultivó plátanos durante veinte años, cosa que ella misma desmintió en su aserción contenida a foja 5, ya mencionada.

En resumidas cuentas, no hay ningún indicio de que HILDA AURA BARAHONA tenga mejor derecho que SAMUEL BARAHONA CERRUD, y sus declaraciones son dudosas; por lo tanto, sí están conectados los indicios contenidos en el expediente con el razonamiento realizado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, y tampoco se cumple el supuesto en estudio, razón por la que esta Corporación de Justicia no encuentra fundamento para considerar que pudo haber violación del artículo 973 del Código Judicial.

La casacionista consideró que también se violó el artículo 606 del Código Civil, que a la letra dice:

> "Artículo 606. La posesión del suelo deberá probarse por hechos positivos, de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como el arrendamiento, el corte de madera, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión".

La actora afirma que la norma se infringió directamente por omisión, al considerar el Tribunal probado el mejor derecho del demandante sólo por "indicios que no son prueba necesaria" y que no se ajustan a los requisitos establecidos por la norma en estudio, ya que la posesión tiene que comprobarse con hechos positivos y la prueba de la retención de la cosa con ánimo de dueño, cosa no verificada en el expediente.

Contrario a lo afirmado, es el criterio de esta Sala que sí se prueba la posesión del suelo en base a esta norma.

Para ello, es necesario observar lo siguiente:

En la Solicitud de Adjudicación a Titulo Oneroso, presentada por HILDA AURA BARAHONA a la Dirección Nacional de Reforma Agraria -que consta a foja 1- se señaló que existían cultivos de plátanos durante 20 años, que eran cultivados por ella, cosa que no parece probable, ya que ella misma señaló en su Informe de Visita ya estudiado -f. 7- que su padre fue quien siempre cultivo el terreno; ello permite inducir, en primer lugar, que ella nunca ha trabajado ese terreno, lo cual significa que mintió en la Solicitud de Adjudicación en mención.

Por otro lado, consta -Informe de Visita a foja 5- que SAMUEL BARAHONA dijo que tenía año y medio aproximadamente de vivir en el lugar. Aunado a esto, el

Informe de Inspección de foja 14 recogió la situación observada en el lugar, indicando que

> "Fui nuevamente al terreno y pude comprobar que el padre sigue bajo los cuidados del hijo y que éste es el único que se encarga de los cuidados del lote.
>
> La señora Hilda Aura no vive ni trabaja en la tierra en Mención".

Estos hechos observados por el Inspector, están probados; por lo tanto, la convergencia de las circunstancias existentes, como la aceptación de ambos de la existencia de plantaciones; la ausencia en el lugar por parte de la demandada; así como el cuidado del lote por parte del opositor a la adjudicación, inducen a esta Sala de Casación al criterio de que la plantación de plátanos existente en el terreno, viene siendo cultivada desde hacía año y medio antes de la solicitud de adjudicación que hizo HILDA AURA BARAHONA, lo cual constituye una posesión efectiva del terreno, dada la incapacidad mental del padre de ambos, que ha sido reconocida por ambos hijos.

Por lo tanto, no hay infracción directa por omisión del artículo 606 del Código Civil, ya que da por sentado que SAMUEL BARAHONA CERRUD es quien cultiva el terreno, lo cual constituye un hecho positivo, a la luz de la norma en estudio; y en complemento, ese cultivo fue realizado sin el consentimiento de quien disputa la posesión, en este caso la recurrente.

Finalmente, la casacionista consideró infringido el artículo 415 del Código Civil, que reza así:

> "Artículo 415. Se llama posesión la retención de una cosa o el disfrute de un derecho con ánimo de dueño; y la tenencia la retención o el disfrute sin ese ánimo".

La infracción directa por omisión consiste -a juicio del Licdo. Muñoz- en el reconocimiento del derecho de posesión a SAMUEL BARAHONA, sin que él aportara las pruebas esenciales para acreditar su posesión sobre el terreno de marras; también dijo que la posesión está integrada por un conjunto de hechos, tales como el uso, el disfrute o transformación de la cosa y el ánimus dómini, que es la intención o disfrute de la cosa con ánimo de dueño, y que ello -se entiende- no se ha comprobado en el expediente.

No coincide este criterio con el de la Sala, ya que consideramos que, pese a que el expediente está carente de elementos probatorios, si se demuestra la posesión ya que el Informe de Inspección reveló que en ese momento, SAMUEL BARAHONA CERRUD tenía la posesión del terreno; éste manifestó que había vivido en el lugar aproximadamente un año y medio al tiempo de su visita a la Reforma Agraria; por su parte, HILDA AURA BARAHONA, pese a declarar que SAMUEL nunca había vivido allí, tampoco manifestó que ella había vivido en ese lugar, lo cual le inhibe la posibilidad de demostrar un mejor derecho que su hermano.

Además, ambos declararon la existencia de una siembra de plátanos, que obviamente HILDA AURA no trabajaba, y que SAMUEL sí lo hacía; éste es un hecho positivo de posesión, según lo normado por el ya analizado artículo 606 del Código Civil.

En conclusión, no le asiste la razón a la recurrente, y no le cabe otra alternativa a esta Sala que negar la pretensión.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia civil de 21 de septiembre de 1995, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Se condena en costas del recurso de casación, las que se fijan en setenta y cinco (B/.75.00) balboas.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RUBÉN ANTONIO NORIEGA BARRÍA, PABLO NORIEGA BARRÍA, BRISEIDA MAREO NORIEGA BARRÍA, YOLANDA NORIEGA BARRÍA Y ÁNGELA NORIEGA BARRÍA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUEN A DÍDIMO NORIEGA BARRÍA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución fechada 29 de abril de 1998, la Sala Civil decidió ordenar la corrección del recurso de casación en el fondo, propuesto por la Licenciada MAYRA GAVIRIA RUIZ en su condición de apoderada judicial de los señores **RUBÉN ANTONIO NORIEGA BARRÍA**, **YOLANDA MARÍA NORIEGA BARRÍA**, **BRISEIDA MARÍA NORIEGA BARRÍA**, **ÁNGELA NORIEGA BARRÍA**, **PABLO NORIEGA BARRÍA Y FERMÍN NORIEGA**, parte actora dentro del proceso ordinario interpuesto en contra del señor **DÍDIMO NORIEGA BARRÍA**.

Vencido el término para la corrección del recurso de casación y habiéndose efectuado en tiempo oportuno, la Sala procede al examen del nuevo escrito visible de fojas 373 a 396 del expediente, para decidir en forma definitiva sobre la admisibilidad.

Según se observa, los defectos señalados a la recurrente fueron debidamente subsanados, por lo que la Sala considera pertinente admitir el recurso corregido.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el FONDO presentado por la Licenciada MAYRA GAVIRIA RUIZ, en representación judicial de los señores RUBÉN ANTONIO NORIEGA BARRÍA, YOLANDA MARÍA NORIEGA BARRÍA, BRISEIDA MARÍA NORIEGA BARRÍA, ÁNGELA NORIEGA BARRÍA, PABLO NORIEGA BARRÍA y FERMÍN NORIEGA, contra la sentencia fechada 25 de febrero de 1997,dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

OSCAR ANTONIO NAVARRO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado MIGUEL BATISTA GUERRA, actuando en nombre y representación de **OSCAR NAVARRO ACEVEDO**, ha promovido recurso de casación, en el fondo, contra la sentencia de 25 de junio de 1997, proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, dentro del proceso ordinario que la recurrente le sigue a la empresa **ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A.**

La Sala de lo Civil por medio de resolución de 3 de febrero de 1998, ordenó

la corrección del recurso, lo cual fue atendido dentro del término establecido por ley, procediéndose a la admisión del mismo por haber cumplido con lo ordenado, mediante resolución de 10 de marzo de 1998. Concedido el término de seis días para que las partes aleguen en cuanto al fondo, se observa el escrito del recurrente de fojas 383 a 389, y de fojas 390 a 403 el escrito del opositor.

Procede la Sala a decidir el presente negocio, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES DEL CASO

El señor OSCAR NAVARRO ACEVEDO instauró proceso ordinario declarativo contra la persona jurídica ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A., siendo corregida la demanda ante el JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL (fs. 8-11). La pretensión del actor es la condena de la demandada al pago de la suma de CIENTO VEINTICINCO MIL BALBOAS (B/.125.000.00), en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más costas e intereses legales del proceso, además que se hagan las siguientes declaraciones:

> 1- Que Estructuras Nacionales, S. A., está obligada a pagar la suma de B/.145,000.00 (Ciento cuarenta y cinco mil balboas) en concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios, más costas, gastos e intereses legales del proceso.
>
> 2- Que Estructuras Nacionales, S. A. inició una edificación o construcción en el lote D-9 al lado de la finca #33742 inscrita al Tomo 824 Folio 158 Lote D-8, de Propiedad de Oscar A. Navarro A., de más de 40 pisos el cual se denomina Platinium Tower.
>
> 3- Que desde el inicio y durante la construcción de Platinium Tower, se han dado las siguientes irregularidadse:
>
> a) Se ha dejado caer sobre el techo, patio, terraza, tanto en la parte delantera como en la de atrás de la casa del señor Oscar A. Navarro A., todo tipo de material de construcción como lo son: piedra, bloques, herramientas y otros permanentemente.
>
> b) Que el simple hecho de que se deje caer sobre la casa, propiedad del Sr. Oscar A. Navarro A., material de construcción se pone en peligro la vida de él y de sus familiares que habitan en el Lote D-8 en Vía Italia, Punta Paitilla (esposa, hijos, nietos).
>
> 4- que como consecuencia de la construcción del Proyecto Platinium Tower el vehículo Marca Ford Taurus de propiedad de nuestro representado sufrió los siguientes daños:
>
> a) el parabrisas delantero se rompió al caerle una piedra.
>
> b) el sistema de frenos se llenó de polvo de cemento el cual tuvo que ser reparado.
>
> c) el vehículo Marca Honda de propiedad de la nieta del Sr. Oscar A. Navarro A. colisionó con un vehículo que laboraba en la construcción el Platinium Tower.
>
> d) todos los aires acondicionados de la casa del Sr. Oscar A. Navarro A., se han dañado por consecuencia directa de la construcción de Platinium Tower.
>
> 5. que el proyecto Platinium Tower está obligado a conceder o proporcionar a nuestro representado y familiares que habitan con él, una vivienda similar a la que actualmente tienen o habitan por el tiempo que resta de la construcción del proyecto Platinium Tower, ya que tanto mi representado como su esposa tienen más de sesenta años y es intolerable residir en dicha casa". (Fs. 8 y 9).

El demandante solicitó en el libelo al tribunal la inscripción de la demanda en el Registro Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 1212, ordinal 3 del Código Judicial, y adjuntó como prueba la certificación de la personería jurídica de la parte demandada. El Tribunal de la causa negó la petición mediante Auto N° 1677 de 31 de octubre de 1994 (f. 12), en base a que no se trata de un derecho real que recae sobre un bien inmueble.

Recibido el traslado de la demanda, la empresa ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. por medio de apoderado judicial, dio contestación a la misma, oponiéndose a las pretensiones del actor.

Concluida la fase procedimental y antes de dictar sentencia, el tribunal de primera instancia solicitó al Registro Público certificación sobre el propietario del inmueble distinguido con el N° 33.742, inscrita al folio 158, tomo 824 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá (f. 265).

La primera instancia del proceso finalizó con la Sentencia N° 69 de 13 de noviembre de 1996, dictada por el JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO CIVIL (fs. 269.292), por la cual CONDENA a ESTRUCTURAS NACIONALES a pagarle a OSCAR NAVARRO, la suma que resulte de la aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 983 del Código Judicial, "respecto al daño material y moral del demandante, secuela de la construcción del edificio Platinium Tower, sobre las Fincas N° 33392 y 33398, ubicadas en Vía Italia, y contiguas al inmueble de propiedad del accionante ...". En la referida sentencia se fijan las bases para la cuantificación respectiva. No conforme con esta decisión, el apoderado judicial de la parte demandada apeló contra la misma.

Una vez surtidos los trámites correspondientes a la segunda instancia, el Tribunal Superior, en primer lugar, hace referencia al Incidente de Cobro por Honorarios Profesionales propuesto por el Licenciado LEOVIGILDO CASTILLO JR. contra OSCAR ANTONIO NAVARRO, al haberle este último sustituído el poder, concluyéndose con la Sentencia N° 69, sobre la cual nos referimos con anterioridad.

Con relación al soporte fáctico de las declaraciones solicitadas por el demandante, el tribunal advierte que las mismos se vinculan a la construcción del "Proyecto Platinium Tower" que lleva a cabo la sociedad ESTRUCTURAS NACIONALES en la Urbanización Punta Paitilla, ya que con motivo de las excavaciones para sentar las bases del proyecto residencial, consistente en un fondo rocoso, la casa de propiedad del señor OSCAR ANTONIO NAVARRO, distinguida con el Lote D-8, ha sido afectada por las piedras que provienen de dicha construcción, ocasionándole al demandante y a su familia, tales como: daños al parabrisa delantero del vehículo marca Ford Taurus, año 1993; a la cerca de ciclín y bloques; el techo y las ventanas del inmueble del demandante se ven afectados con los desperdicios de materiales de construcción que son lanzados, impidiéndoles esta situación que puedan salir al patio o jardín. Además de ello, se expresa en la demanda que tanto el demandante como su familia, padecen de neurosis aguda como consecuencia del estilo de vida que llevan desde que se inició tal construcción.

En cuanto al escrito de oposición a la demanda original, el tribunal hace referencia al alegato de conclusión de la parte demandada en el cual se cuestionó la legimitidad del señor OSCAR NAVARRO, para demandar los daños y perjuicios perseguidos en el petitum, expresando que para tal fin se requería de parte del demandante acreditar su pretensión como lo establece el artículo 773 del Código Judicial y, que, a juicio del juzgador de primera instancia, fue cumplido en forma parcial. Se señala también en la sentencia que el juzgador de primera instancia al determinar que los elementos probatorios traídos al proceso por el demandante fueron deficientes, ya que, inclusive, el propio tribunal solicitó oficiosamente al Registro Público la certificación para acreditar la titularidad del propietario del inmueble afectado. Así como también se refiere la sentencia comentada que el caudal probatorio fue insuficiente para probar los daños materiales y morales reclamados por el demandante. Por consiguiente, concluyó el juzgador de primera instancia que se hacía necesario recurrir al procedimiento previsto en el artículo 983 del Código Judicial (condena en abstracto) para la cuantificación de los daños.

Al entrar a analizar, en primer lugar, la resolución judicial de fecha 27 de junio de 1996, mediante la cual el juzgador de la causa dispuso oficiar "al Registro Público a fin de que nos remita la certificación en que conste a nombre qué persona natural o jurídica figura inscrita el referido inmueble a propósito de esclarecer este punto dudoso de la materia en debate", censura el Tribunal Superior la "estructura formal en que fue diseñada la misma", por cuanto que no puede considerarse la misma como las previstas en el artículo 974 del Código Judicial, párrafo primero. al otorgarle a la resolución de 27 de junio de 1006, antes indicada, el carácter de un proveído de mero obedecimiento. Ahora bien, estima el Tribunal que, si bien el mismo no constituye una causal que traiga consigo la nulidad de tal resolución, lo que si llama la atención es la certificación visible a foja 267 del expediente, la cual no fue aportada al proceso por la parte oficiosa del tribunal, aclarando a renglón seguido que a raíz de la expedición del auto cuestionado, el juzgador giró el Oficio N° 1134 (f. 265), a la Dirección General del Registro Público a objeto de obtener la información a que ya hicimos referencia con anterioridad, pero, no consta en el proceso la contestación de parte de dicha institución, de lo que se deduce que la certificación aportada a fojas 267, cuyo encabezamiento de la misma fue hecha por el demandante y en la que no consta nota de presentación ante el Secretario del juzgador primario, se deduce que tal certificación fue aportada fuera de los términos probatorios.

Como consecuencia de lo anterior, considera al Tribunal Superior que le estaba vedado al juzgador de primera instancia considerar la información contenida en la cuestionada certificación, la información sobre el propietario del inmueble distinguido con el Lote D-8. Más aún, estima al juzgador de segunda instancia que al no haber demostrado el señor OSCAR NAVARRO su propiedad sobre el Lote D-8, se debe declarar "reemplazando así la actividad dejada de cumplir por el Juez del grado inferior, que el demandante carece de personería sustantiva o legitimación en la causa para reclamar indemnización proveniente de los daños materiales ..." (f. 328).

En cuanto a la condena en abstracto proferida por el juzgado de origen, sostiene el tribunal superior que no sólo erró el juzgador primario a condenar por los daños materiales sino también en cuanto a los daños morales, para lo cual también se requería la condición de propietario del señor OSCAR NAVARRO sobre el inmueble tantas veces mencionado, al no existir mérito legal para condenar a la empresa ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. a indemnizar los daños morales del demandante, debido a que el juzgador primario se basó únicamente en el dictamen pericial obrante a foja 144, resultando que dicho informe no determina el nexo de causalidad entre la construcción de la obra que realiza la sociedad demandada y la afectación psíquica del demandante, siendo ello un requisito indispensable para que prospere la responsabilidad civil extracontractual estipulda en el artículo 1644 del Código Civil, norma ésta que sirvió de asidero jurídico en la sentencia de primera instancia.

Concluye, pues, el Tribunal Superior dictando la sentencia de 25 de julio de 1997, mediante la cual resolvió: "PREVIA REVOCATORIA de la Sentencia N° 69 de fecha 13 de noviembre de 1996, dictada por el Juez Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, DECLARA PROBADA LA EXCEPCIÓN de falta de legitimación en la causa por parte del actor, respecto de los daños materiales y ABSUELVE a ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. de los cargos que en su contra se formulan en la demanda ordinaria declarativa propuesta por el señor OSCAR OSORIO NAVARRO".

Contra esta última decisión, el demandante ha interpuesto recurso de casación.

POSICIÓN DE LA SALA

El recurso promovido es en el fondo, y se fundamenta en la causal de infracción de las normas sustantivas de derecho por error en la valoración de la prueba. Se encuentra la causal sustentada en ocho motivos, de los cuales los primeros seis de refieren, de manera específica, a las pruebas supuestamente mal valoradas por la sentencia recurrida. Las pruebas en mención se refieren a prueba documental, consistente en una certificación del Registro Público (motivo 1°) a

inspecciones judiciales (Motivos 2° y 6°), a manifestaciones del perito MOISÉS CASTILLO (motivo 2°), a manifestaciones del propio apoderado (motivo 3°), y a testimonio del señor AGUSTÍN PARADA (motivo 5°), todos los cuales manifiestan, en algún grado, que la propiedad donde se produjeron los daños es del señor OSCAR NAVARRO.

Los motivos relevantes para este recurso, que son los seis primeros, exponen como cargos lo que se transcribe:

> "PRIMERO: El PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, no le reconoció valor de plena prueba el certificado del Registro Público que aparece a foja 267 de expediente, el cual prueba la propiedad del demandante sobre el lote D-8, y con ello su personería sustantiva para reclamar alegando que dicho documento público fue incorporado al proceso en forma extemporánea y sin la iniciativa del Juzgador, pero es que, como consta a foja 264 del expediente, el Juzgador de primera instancia, antes de emitir su fallo, dictó auto para mejor proveer solicitando al Registro Público, mediante oficio N° 134 de 27 de junio de 1996, la certificación sobre la propiedad de la finca 33,742, que constituye el lote D-8 del señor OSCAR NAVARRO, lo cual demusetra que dicha prueba fue legalmente incorporada al proceso. Por tanto, el Ad-Quem incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, lo cual influyó substancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida.
>
> SEGUNDO: El PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, al reformar la Resolución de primera instancia y absolver a la demandada, concluyó que no estaba probado oen el proceso el interés del señor OSCAR NAVARRO para demandar. Sin embargo, al llegar a esta conclusión incurrió en error de Derecho en la Apreciación de la Prueba, debido a que no le reconoció el valor de convicción que le reconoce la Ley, a la Inspección Judicial que aparece a foja 120 del expediente, el cual es un documento público, en donde personalmente el Juzgador de Primera Instancia dejó constancia que la prueba, se refiere a la propiedad de la parte actora. Tampoco le reconoció el valor que le reconoce la Ley, ni la apreció conforme a la Sana Crítica, el Informe Pericial rendido por el perito de la parte demandada MOISES CASTILLO D. que aparece a foja 138 del expediente en el cual dicho perito expresamente reconoce que realizó la Diligencia de Inspección Ocular en el lote D-8 ubicado en Vía Italia, Punta Paitilla, propiedad del señor OSCAR NAVARRO, lo cual demuestra el interés del demandante para accionar. Por lo tanto el Ad-Quem incurrió en error de Derecho en la apreciación de la prueba lo que influyó en lo substancial del proceso.
>
> TERCERO: Igualmente, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, no apreció conforme a la Sana Critica, el escrito de contra pruebas que aparece a foja 156 del expediente, en donde el mismo apoderado de la parte demandada expresamente reconoció en el proceso el domicilio del actor referente al lote D-8, al pedir que se oficiara a la Corregiduría de San Francisco de Panamá para que remita copia autenticada de la nota del 25 de febrero de 1995, suscrita por dicho Abogado en su condición de apoderado de ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A., relativa a la negativa del señor OSCAR NAVARRO a permitir el ingreso al aseador que se le asigno a su casa, la petición de que se oficie a la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá en igual sentido; tampoco le reconoció valor de Plena Prueba ni analizó conforme a la Sana Crítica los documentos que aparecen a foja 157 y 158 del expediente en donde el propio apoderado de la parte demandada identifica plenamente el inmueble del demandante, situación que reconoce el interés de éste para reclamar. Por lo tanto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba lo cual influyó en lo dispositivo de la Resolución recurrida.

CUARTO: El PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, no le reconoció el valor de convicción que le reconoce la Ley al escrito de prueba suscrito por el apoderado de la demandada y aportado al proceso por la propia demandada, el cual es auténtico, este escrito aparece a foja 160 del expediente, en este escrito al solicitar la práctica de una Inspección Ocular en calidad de contra prueba expresamente reconoce que el lugar en donde se ha de realizar la Inspección Ocular es el lote D-8 donde vive el señor OSCAR NAVARRO, con lo cual al admitir la contra parte que el lote D-8 es propiedad de mi representado se demuestra con ello el interés para demandar, por tanto al no valorar esta prueba documental, auténtica, suscrita y aportada al proceso por la propia demandada el Ad-Quem incurrió en error de Derecho en la Apreciación de la Prueba, lo que ha influido en la parte dispositiva de la resolución recurrida.

QUINTO: El PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, no le reconoció el valor que le reconoce la Ley al documento público que aparece a foja 172 del expediente, en donde consta que el testigo AGUSTÍN PARADA al rendir su declaración afirmó que le consta que la casa a la que se le ha causado perjuicio es identificada como D-8, de propiedad del señor OSCAR NAVARRO. Si el Ad-Quem hubiese valorado correctamente dicho documento y hubiera analizado conforme a la Sana Crítica, la declaración de este testigo, hubiera mantenido la Resolución de Primera Instancia. Por tanto, se incurrió en Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba, lo que incidió en la parte dispositiva de la Resolución recurrida, al absolver a la demandada.

SEXTO: El PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, no reconoció valor de convicción, ni apreció conforme a la Sana Crítica, la Diligencia de Inspección Judicial que aparece a foja 179 del expediente y que fue practicada por el Tribunal a solicitud de la demandada, en la residencia del señor OSCAR NAVARRO, propietario del inmueble, no obstante que dicho documento es público y que fue suscrito por todas las partes que actuaron en la prueba de Inspección Judicial. El Ad-Quem, incurrió en Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba lo que incidió en la parte dispositiva de la resolución recurrida ...". (Fs. 369 a 371).

El primer motivo de refiere a un documento público, representado por una certificación del Registro Público. El recurrente manifiesta que tal prueba fue introducida en debida forma al proceso y que la sentencia no la valoró adecuadamente. La Sala estima que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que dicha prueba, que fué aportada presumiblemente por el demandante, apareció en el expediente en momentos muy posteriores a los cuales se había vencido el término probatorio, ocasión procesal idónea para que las partes, garantizando la bilateralidad y contradicción, pudiesen proponer las pruebas, objetarlas, en su caso, y que el tribunal procediese a practicarlas, para su correspondiente valoración, con arreglo a los cánones de hermenéutica probatoria que señala el ordenamiento procesal. Tal circunstancia no se dio en la presente encuesta, sino, por el contrario, el tribunal, haciendo uso de la facultad de que le concede el ordenamiento de ordenar pruebas de oficio, pruebas que, en el presente proceso, consistieron precisamente en la certificación sobre la titularidad de la propiedad en la cual se encuentra construida la residencia objeto de los alegados daños imputables a la sociedad constructora.

El sistema procesal panameño está fundamentado en el principio dispositivo, en el sentido de que corresponde primordialmente a las partes proponer las pruebas que sean favorables a los derechos que sustentan sus respectivas pretensiones y afirmaciones, lo que constituye una auténtica carga procesal, en el sentido de operar en menoscabo de quien no cumple con la misma, quien soporta el riesgo de su omisión, sin que sea correcto entender que la materia probatoria corresponde a los particulares por consistir en un asunto propio que las atañe de manera directa, toda vez que esta concepción privativista del proceso se encuentra ampliamente superada como una institución de derecho público, que traduce el ejercicio de la función jurisdiccional, una de las funciones públicas medulares del Estado. Pero dicho principio dispositivo, en nuestro ordenamiento

jurídico, lo mismo que ha ocurrido en otros ordenamientos procesales, es compatible con la función del juzgador, en la solución de las controversias que se han puesto a su decisión, de intervenir en la fase probatoria, no solamente responsabilizandose de su práctica y de su adecuada valoración al momento de decidir, sino también recabando pruebas de oficio que esclarezcan puntos afirmados por las partes, principio éste que tiene su sustento, entre otros, en el artículo 782 del Código Judicial, con la finalidad de obtener el reconocimiento de los derechos sustanciales (artículo 212 de la Constitución Política y artículo 496 del Código Judicial). La prueba que solicitó el Juez de instancia, consistente en una constancia o certificación respecto a la titularidad de la finca en donde se encontraba la residencia del demandante, cuyos daños denuncia, no fué atendida por el Registro Público, por lo que debió el juzgador requerirle la prueba cuya práctica había ordenado, lo que no hizo y merece la censura de este tribunal, no obstante que, dentro del principio de economía procesal, hubiese que tomar en cuenta la prueba que consta en la foja 267 del expediente, la que, aún a pesar de no haber sido introducida al proceso por la autoridad requerida, sino por la parte demandante, debió el juzgador valorarla, sobre la base exclusiva de que se trataba de la misma prueba que el juzgador, de oficio, había requerido, como se puede apreciar del auto decretando dicha prueba de manera oficiosa, y también el requerimiento que le hiciese al Director del Registro Público (fojas 264 y 265). De allí a que, siguiendo la pauta interpretativa conforme a la Constitución que está contenida en el artículo 467 del Código Judicial, debió valorar la prueba aportada, una vez hubiese agotado las diligencias del caso para que el Registrador cumpliese con la orden judicial, a lo que le faculta el último párrafo del artículo 782 del Código Judicial, y no desecharla como hizo la sentencia recurrida para concluir que existía falta de legitimación activa.

La prueba en mención, decretada para acreditar quien era el propietario de la finca sobre la cual se encontraba la residencia del señor Oscar Navarro, que éste afirmaba ser de su propiedad, es particularmente esencial, toda vez que, a juicio de la Sala, constituye la prueba idónea para acreditar el derecho de propiedad que se alega, no siendo posible sustituirla con otras pruebas, como alega el recurrente en los motivos subsiguientes al primero, como ha tenido ocasión de señalar esta Sala (véase sentencia de 1° de septiembre de 1983 y 6 de noviembre de 1981, citadas por Dulio Arroyo, en su obra "5 años de jurisprudencia de las Salas Primera (De lo Civil) y Tercera (De lo contencioso-administrativo de la Corte Suprema de Justicia de (Panamá: 1981-1985" pág. 241 y 288). Esto es así, derivado, en primer lugar, del principio del título y del modo que regula el Derecho de Propiedad en nuestro país, en que el contrato se perfecciona con la inscripción del título de adquisición de bienes inmuebles en el Registro Público (véase artículo 1220 del Código Civil), y, además, en la función medular que cumple el Registro Público, señalados en el artículo 1753, numeral 1° y 1791 del Código Civil. De allí a que las referencias periciales o testimoniales referentes a la titularidad del derecho de propiedad de un bien inmueble, sin acompañar como prueba la certificación del Registro Público, no son idóneas para acreditar la propiedad inmobiliaria. Encuentra, por tal motivo, la Sala fundado el cargo contenido en el primer motivo, pero desde luego no por las razones que en dicho motivo se señalan.

Desestimada la falta de legitimación activa por parte del demandante, procede analizar las pretensiones indemnizatorias que se pretenden sean decretadas mediante este proceso. Se encuentran acreditados los daños realizados en la residencia del señor Oscar Navarro, por cuanto todos los informes periciales contenidos en inspecciones judiciales visibles a fojas 138, 181 y 201, y las fotografías que se anexan a los mismos acreditan que la sociedad constructora realizó daños a la propiedad de la parte demandante, si bien discrepan en cuanto al monto a que ascienden tales daños y, por ende, la suma indemnizatoria que debe ser cubierta por la parte demandada.

Desde otra perspectiva, aparece también señalado por parte del perito MARCOS RUIZ que la sociedad demandada cumplió parcialmente con las medidas de seguridad para evitar daños a la propiedad (foja 187), y del perito VICENTE TORRES (foja 202), lo que acredita el despliegue de diligencia para evitar el daño, si bien tales medidas no fueron suficientes para conjurar el riesgo del daño verificado, por lo que le cabe una cierta dosis de responsabilidad por su

conducta culposa, cuyo alcance puede y debe ser moderado por el tribunal.

Estima la Sala, desde otra perspectiva, que la parte demandante no logró acreditar el daño moral, al no probar la relación de causalidad entre el daño denunciado y la acción de la sociedad demandada, en lo que se refiere a los daños morales que haya sufrido el demandante, por lo que la existencia de tales daños debe ser desestimada.

En este orden de ideas, debe la Sala, actuando como tribunal de instancia, modificar la sentencia dictada por el JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL, de 13 de noviembre de 1996, en el sentido de limitar la responsabilidad de la demandada a los daños materiales consignados en las bases de la liquidación en abstracto, contenida en los literales a)-1 a a)-6 inclusive, de dicha sentencia.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de segunda instancia de fecha 25 de junio de 1997 proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA y, actuando como tribunal de instancia REFORMA la sentencia de 13 de noviembre de 1996, distinguida como N° 69, dictada por el JUZGADO SEXTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, en el sentido de CONDENAR a ESTRUCTURAS NACIONALES, S. A. a la indemnización por lo daños materiales en la edificación del Edificio Platinium Tower, sobre las fincas 33392 y 33398, ubicadas en Vía Italia, y contiguas a la propiedad del señor OSCAR A. NAVARRO A., en lote número D-8, finca número 3372, causados en la propiedad del demandante, OSCAR A. NAVARRO A., la que será determinada con arreglo al artículo 983 del Código Judicial, para lo que se tomarán, exclusivamente, las bases consignadas en los literales a)-1 a a)-6, inclusive de la sentencia que se reforma, y se desestima la indemnización por daño moral, así como las bases para su liquidación.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL PANAMÁ REAL INVESTMENT CORP. RECURRE EN CASACIÓN EN LA MEDIDA CONSERVATORIA O DE PROTECCIÓN EN GENERAL QUE LE SIGUE A INMOBILIARIA GARZA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado MAURICIO CORT Y GARCÍA, en su condición de apoderado sustituto de **EL PANAMÁ REAL INVESTMENT CORP.** dentro de la solicitud de Medida Conservatoria o de Protección en General, promovida en contra de **INMOBILIARIA GARZA**, ha interpuesto recurso de casación contra la Resolución de fecha 10 de octubre de 1997, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Fijada el negocio en lista para la presentación de alegatos, los apoderados de ambas partes, dentro de término correspondiente, hicieron uso de su oportunidad procesal, presentando cada uno su alegato correspondiente.

La Sala procede entonces, al examen del recurso de casación en atención a lo preceptuado en los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial, a efectos de determinar su admisibilidad.

En este sentido, se observa que la decisión impugnada consiste en una Resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de justicia mediante la cual se revoca y niega las medidas conservatorias de Protección solicitados por EL PANAMÁ REAL INVESTMENT CORP. y que habían sido decretados por el Juzgado Segundo

del Circuito de lo civil, mediante Auto N° 961 de 30 de abril de 1997.

Igualmente observa la Sala, en relación con los artículos 1148 y 1149 del Código Judicial, que en la resolución atacada no se dan las circunstancias ni las condiciones, que de acuerdo a los artículos antes referidos deben existir para que el recurso pueda legalmente ser interpuesto, ya que tratándose de medidas conservatorias o de protección en general, éstos por su propia naturaleza carecen de cuantía y además, no se trata de una resolución de levantamiento o exclusiones, en procedimientos cautelares, sino de una resolución que niega las medidas solicitadas.

En reciente fallo dictado por la Sala en una situación similar, al respecto se manifestó de la siguiente manera:

> "La Sala observa que la decisión impugnada con el recurso de casación es una resolución dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se confirmó decisión del Juez Séptimo del Circuito en el cual se negó una medida cautelar de conservación.
>
> La Corte estima que las medidas cautelares de protección y conservación no tienen, per se, cuantía ni interés patrimonial, éstas van enderezadas a evitar el periculum in mora contra las sentencias de fondo que se dicten en los procesos jurisdiccionales principales, procesos principales éstos en los cuales sí puede encontrarse afectado o comprometido un interés patrimonial que exceda de la aludida suma, no así la medida cautelar que persigue medidas provisionales para evitar que la decisión que culmina con el proceso, cuando este se surta, devenga ineficaz. No se ha dado. Por lo tanto, cumplimiento al requisito que, sobre summa gravaminis se exige en el recurso extraordinario de casación, la que, en todo caso, está predicada de la cuantía señalada en la demanda.
>
> Es evidente que en el presente asunto no cabe el recurso de casación, ya que no se trata de Auto que decide sobre oposiciones, levantamiento, o exclusiones, en procedimientos cautelares, únicos autos que admiten el recurso de casación, con fundamento en el artículo 1149 del Código judicial".
>
> (Foja 201 Registro Judicial, BALDOMIR KRIZAJ KREGAR Y EDITH CALVERA DE KRIZAJ).

Estima la Sala que la falta de cuantía en este tipo de medidas cautelares, deviene precisamente de la autonomía que la reviste como consecuencia del fin perseguido con ella a diferencia del fin perseguido con la sentencia de fondo que se dicte en el proceso, autonomía ésta que según GIUSEPPE CHIOVENDA, citado por J. ARTURO TORRES VERA, les resta el carácter de accesorios cuando explica que "el poder jurídico de obtener una de estas resoluciones es una forma autónoma de acción (acción aseguradora) y es mera acción que no puede considerarse como accesoria del derecho asegurado (cautelado), porque existe como poder actual cuando aún no se sabe si aquel derecho existe" (J. A. TORRES, Jurisdicción y Cautela, pág. 59).

Por las consideraciones anteriormente anotadas, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por EL PANAMÁ REAL INVESTMEN CORP.

Los costos a cargo del recurrente se fijan en la suma de CIEN BALBOAS (B/.100.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARÍN

Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RICARDO A. BLANCO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A REPUESTOS DRAGÓN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Primera de esta Corporación justicia ordenó al apoderado legal del señor **RICARDO BLANCO**, Licenciado JOSÉ ANTONIO ARAUZ CUEVAS, mediante resolución de 29 de abril de 1998, la corrección del recurso de casación en el fondo que había interpuesto contra la sentencia proferida por el PRIMER TRIBUNAL DE JUSTICIA, dentro del proceso de liquidación de condena en abstracto entablado por el recurrente contra **REPUESTOS, DRAGÓN S. A.**

Para corregir se le concedieron al recurrente los cinco días que dispone el artículo 1166 del Código Judicial, aprovechando oportunamente el mismo, en escrito visible de foja 341 a 345, por lo que debe la Corte pronunciarse en forma definitiva en torno a la admisibilidad del recurso presentado.

Específicamente se ordenó subsanar al recurrente errores en relación a los motivos y a las normas legales infringidas. En cuanto a los motivos, se aprecia que el casacionista acató lo indicado por la Corte en la resolución pertinente, al igual que en lo relativo a la citación de las normas consideradas infringidas.

En razón de que el recurso cumple con los requisitos exigidos en la ley, para su admisibilidad, debe la Sala de la Corte declararlo admisible.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación en el fondo propuesto por el licenciado JOSÉ A. ARAUZ contra la resolución de 29 de enero de 1998 del PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSÉ DEL CARMEN SÁNCHEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS DEL USAID PANAMÁ, R. L. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada MABEL TROYA DE STEPPUHN, presentó recurso de casación en el fondo, contra la sentencia del 18 de diciembre de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia N° 30 de 18 de abril de 1996, proferida por el JUZGADO SÉPTIMO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, dentro del Proceso Ordinario promovido por **JOSÉ DEL CARMEN SÁNCHEZ** contra **COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS DEL USAID PANAMÁ R/L.**

El término para presentar los alegatos fue utilizado solamente por el

oponente en casación. Agotados los trámites procesales inherentes al presente recurso, y encontrándose el mismo en estado de ser decidido, procede la Sala a resolver sobre la causal de fondo alegada.

No obstante lo anterior, antes de adentrarse la Corte al análisis de los requerimientos del recurrente, considera necesario e imprescindible realizar un resumen sucinto de los antecedentes del caso.

ANTECEDENTES

De la documentación procesal se percibe, que el presente Proceso Ordinario lo interpuso el señor JOSÉ DEL CARMEN SÁNCHEZ en virtud del Proceso Ejecutivo interpuesto en su contra por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS DEL USAID PANAMÁ, R. L.

El señor JOSÉ DEL CARMEN SÁNCHEZ promovió ante el JUZGADO SÉPTIMO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ un proceso ordinario contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EMPLEADOS DEL USAID PANAMÁ R/L. con el objeto de:

> "PRIMERA: Que se declare que es NULO EL CONTRATO mediante el cual JOSE DEL CARMEN SANCHEZ, se constituyó en Co-Deudor del préstamo otorgado a LIDIA PONCE DE LEZCANO, debido a que fue engañado en la elebración de dicho contrato.
>
> SEGUNDA: Que se declare que es NULO EL PAGARE #87-227 de 22 de diciembre de 1987, por la suma de TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES CON SESENTA Y OCHO CENTESIMOS (U.S.$33,952.68), por haberse otorgado mediante engaño, violación al reglamento de crédito de la Asociación demandada y Reglamento de Pequeña empresa.
>
> TERCERA: Que en virtud de que en la realización de dichos actos jurídicos medió engaño, así como vicios en el otorgamiento del crédito de la asociación demandada, el Juicio Ejecutivo interpuesto por dicha asociación contra LIDIA PONCE DE LEZCANO Y otros que se ventila en el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá ES NULO.
>
> CUARTA: Que el referido engaño ha causado graves daños y perjuicios a JOSE DEL CARMEN SANCHEZ que se estiman en la suma de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON TRECE CENTESIMOS (US$25, 559.13).
>
> QUINTA: Que la Asociación Cooperativa demandada denominada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EMPLEADOS DEL USAID PANAMA R/L, está obligada a pagar a JOSE DEL CARMEN SANCHEZ, al actor, la suma de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON TRECE CENTESIMOS (US$25,559.13), más sus intereses, costas y gastos del presente juicio ordinario. Así como el reembolso de las sumas a él retenidas hasta la fecha en que se declare nulo el contrato atacado".

El JUZGADO SÉPTIMO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, mediante Sentencia N° 30 de 18 de abril de 1996 NIEGA las pretensiones del demandante:

> "En mérito de lo expuesto, la suscrita JUEZ SEPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, RAMO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: NIEGA todas y cada una de las declaraciones solicitadas por el Señor JOSE DEL CARMEN SANCHEZ, en el proceso ordinario instaurado contra la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE EMPLEADOS DEL USAID/PANAMA, R. L.
>
> CONDENA al demandante al pago de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES BALBOAS CON 87/100 CENTÉSIMOS (B/.3833.87) en concepto de COSTAS

..."

Esta decisión fue apelada y el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, mediante resolución del 18 de diciembre de 1996 CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia N° 30 de 18 de abril de 1996 proferida por el JUZGADO SÉPTIMO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

Del fallo proferido por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, la Licenciada MABEL TROYA DE STEPPUHN, apoderada judicial del señor JOSÉ DEL CARMEN SANCHEZ, interpone recurso de casación en el fondo.

Después del necesario recuento procesal del caso, la Sala de Casación Civil entra a estudiar las causales de casación.

POSICIÓN DE LA SALA

La primera causal de fondo invocada es: "Infracción de las normas sustantivas de derecho, por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, lo cual influyó sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida".

El recurrente fundamenta esta causal de fondo en (5) cinco motivos que pasamos a transcribir:

> "PRIMERO: A la sentencia impugnada le hacemos el cargo de injuridicidad, ya que ignora le existencia de la prueba documental privada, que consiste en el Reglamento de Crédito (visible a fs. 103 a 130, fs. 132 a 135, fs. 403 a 430, fs. 432 a 435), que rigen a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados de USAID, sin confrontarla contra las deposiciones de los testigos (ver fs. 328-352), quienes reconocieron que dicho Reglamento era el que regía la Cooperativa al momento de otorgarse el préstamo que nos ocupa y que probaban las pretensiones del actor.
>
> SEGUNDO: A la sentencia impugnada le hacemos el cargo de injuridicidad, ya que hace abstracción total de las pruebas documentales privadas presentadas por el Señor Rubén Lezcano (visible a fs. 452, 453, 454, 455, 456, 457), entre las cuales se encontraba una solicitud de préstamo para "pequeña empresa" y que evidenciaba la existencia de este tipo de préstamos por parte de la Cooperativa, y que debió confrontar contra las deposiciones de los testigos que así lo corroboraban.
>
> TERCERO: A la sentencia impugnada hacemos el cargo de injuridicidad, ya que hace abstracción total sobre el vicio en el consentimiento del actor, surgido al suscribir el préstamo que nos ocupa, el cual quedó sin sustento por haberse ignorado las pruebas documentales y testimoniales que de ellas se desprenden.
>
> CUARTO: A la sentencia impugnada le hacemos el cargo de injuridicidad, ya que ignora el error suscitado al momento de firmar el actor como fiador el préstamo bajo una figura y luego ser ejecutado por la vía judicial, bajo figura distinta.
>
> QUINTO: A la sentencia impugnada le hacemos el cargo de injuridicidad, ya que al ignorar las pruebas documentales y testimoniales, el Tribunal Superior se inhibió de conocer el dolo grave en perjuicio del actor al momento de suscribir el contrato de préstamo, con las garantías y formalidades de un préstamos para pequeña empresa y posteriormente verse ejecutado por la vía civil bajo los procedimientos y formalidades de un préstamos personal".

Como disposiciones infringidas el recurrente señala los artículos 769, 843, 816, 849, 977 del Código Judicial y los artículos 1112, 1116, 1120, 1141 del Código Civil.

La causal que estamos estudiando es error de hecho en la existencia de la prueba, por lo tanto, considera esta Sala necesario expresar que, por esta causal entendemos, el desconocimiento de una prueba que consta en el expediente, es decir, una prueba que ha sido aducida y practicada en el proceso y ha sido ignorada por el juzgador al fallar. Cuando, por el contrario, la prueba que consta en el expediente ha sido apreciada resultará como no probada la causal de error de hecho sobre la existencia de la prueba. Sobre el tema ha expresado la Corte:

> "Es necesario insistir, tal cual lo ha hecho en varias ocasiones la Corte, que la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho en la existencia de la prueba, no tiene absolutamente nada que ver con la valoración que se le da a una prueba en el proceso. Hay error de hecho cuando una prueba que ha sido presentada no se valora, esto es, se ignora totalmente. Cosa distinta es cuando la prueba se estima, se aprecia, pero se le niega el valor que la ley le asigna, lo que produce una causal de error de derecho en la apreciación de la prueba (sic) infringe la ley sustantiva. Aparentemente ha existido confusión al considerar que por el hecho de que el Primer Tribunal Superior descarta el valor probatorio que esos documentos tienen según la actora, ello constituye un error de hecho; en este caso no hubo falta de apreciación de la prueba, el tribunal lo que hizo fue restarle valor probatorio a las pruebas presentadas por la parte recurrente. Estas pruebas no fueron ignoradas en la sentencia, por lo que mal puede hablar de error de hecho, tal como se ha alegado en la causal. (Jurisprudencia de Sedas, S. A. recurrente en casación en el proceso ordinario liquidación de condena en abstracto que le sigue a Noris C. Hassan Gómez)".
>
> (FABREGA P., Jorge y GUERRA DE VILLALAZ, Aura E. Casación. Panamá, 1995, p. 137).

Tal como se desprende de las alegaciones del casacionista, el recurso se encamina a atacar los vicios que supuestamente se dieron, en el fallo del PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR al no tomar en cuenta la existencia de algunas pruebas.

Se colige del primer motivo que el casacionista considera que el Tribunal Superior ignora la existencia del reglamento de crédito de la Cooperativa, además, que dicho reglamento debe confrontarlo con las deposiciones de los testigos (fs. 328-352); solicita que se reconozca que ese reglamento regía a la cooperativa al momento de otorgarse el préstamo.

Después de examinar el Reglamento de Crédito y la Sentencia del Tribunal Superior, consideramos que dichas pruebas sí fueron tomadas en cuenta por el Tribunal, e incluso confrontadas con las declaraciones de los testigos, pero como la existencia de dicho reglamento no incide en la parte resolutiva de la resolución recurrida, es decir, no acredita la existencia de dolo por parte de los directivos de la Cooperativa, dicha prueba no favorece su recurso. Con relación a la confrontación de dicho Reglamento con las declaraciones de los testigos, consideramos que si bien dichos testimonios acreditan la vigencia de dicho reglamento, dichas pruebas sí fueron valoradas y apreciadas por el Tribunal tal como se desprende de la parte de la sentencia que dice que "en relación a los testimonios de ... Gisela del Carmen Jaén Morales (Fs. 328-332); Rubén Lezcano Guerra (Fs. 347-352); Lidia Esther Ponce de Lezcano (Fs. 354-359) y Fabián Darío Cabrera Jiménez (Fs. 447-450); si bien es cierto, gran parte de ellos son conocedores de la materia cooperativista e incluso desempeñan sus funciones en dicha rama; no menos cierto es que sus deposiciones se enmarcan en indicar el procedimiento a seguir en el otorgamiento de un préstamo a título personal o de una empresa, en las respectivas cooperativas en que han prestado labores, sin abonar elemento alguno respecto a la existencia de dolo o engaño en el otorgamiento del préstamo en que el señor Sánchez, sirvió como co-deudor; o bien, que el mismo se haya hecho de manera irregular". (Véase fojas 593 y 594). Es decir, sus declaraciones se dirigen a explicar la manera en que las cooperativas realizan sus préstamos, pero en ningún momento a comprobar el engaño alegado por el demandante.

Con relación a las pruebas documentales privadas que constan en fojas 452-457, estima la Sala que también fueron apreciadas por el Tribunal al fallar; sin embargo, dichas pruebas en nada acreditan el dolo alegado por el recurrente. El Tribunal ad-quem, al dictar su Resolución considero lo siguiente: "Para resolver esta Superioridad desea expresar que si bien es cierto, en la encuesta que hoy nos ocupa, se encuentra gran cantidad de material probatorio, no menos cierto es que dichas pruebas, no le son del todo favorables al recurrente, por cuanto que no le ayudan a acreditar o servirle de sustento jurídico a sus pretensiones".

Por todo lo expuesto consideramos como no probada esta causal y pasaremos a estudiar la segunda causal invocada.

El recurrente invoca como segunda causal: "Infracción de las normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida".

Fundamenta esta causal de fondo en (6) seis motivos. Se colige de dichos motivos que el casacionista considera que el Tribunal Superior incurrió en error de apreciación, al desvirtuar el carácter de prueba testimonial a las deposiciones de sus testigos y contrario a ello el Tribunal los cataloga como "peritos".

Aduce, además, el recurrente, que la sentencia impugnada le resta fuerza testimonial y el valor probatorio que tienen las deposiciones de los testigos y la solicitud de préstamo (fs. 455-457).

Alega el recurrente que el Tribunal dejó de apreciar el verdadero valor probatorio de la diligencia exhibitoria extrajudicial (fs. 65 y 66, parte conclusiva), evidenciando que se trataba de un préstamo para pequeña empresa.

Considera, además, que al valorar erróneamente las pruebas mencionadas se inhibió de pronunciarse sobre el vicio de consentimiento al suscribir el préstamo, al firmar como fiador y sobre el dolo grave en perjuicio del actor al momento de suscribir el préstamo.

Como disposiciones infringidas el recurrente señala los artículos 770, 904 del Código Judicial y los artículos 1112, 1116, 1120, 1141 del Código Civil.

El error de derecho en la apreciación de la prueba ha sido objeto de atención por la doctrina y la jurisprudencia de la Sala. Así expresó:

> "En nuestro sistema, se produce cuando el elemento probatorio se examina, se toma en cuenta, se le analiza, pero no se le atribuye el valor, la eficacia probatoria, que conforme a la Ley le corresponde. Se desconoce una norma valorativa. El punto de referencia es el valor probatorio; valoración más no el contenido obligacional. Si el medio probatorio se examina ya no se puede hablar de error de derecho. El error de derecho se produce: 1. Cuando a un medio probatorio que se examina se le da un valor probatorio que la Ley no reconoce (v. gr.: a un solo testimonio se le da el carácter de plena prueba). 2. Cuando se le reconoce valor probatorio a un elemento que no reúne los requisitos legales, o cuando de le examina pero se le niega valor probatorio, porque se expresa que discrepan en cuestiones que resultan accidentales; 3. Cuando la Ley requiere un medio especial de prueba, -v. gr. estado civil-, y se le reconoce valor probatorio a un documento privado. 4. Cuando se le reconoce valor a una prueba que se ha practicado sin las formalidades legales. Por ejemplo: el fallo examina una copia fotostática, producida sin el lleno de los requisitos legales y expresa que, aunque carezca de autenticidad, tiene valor probatorio. 5. Desfiguración del medio probatorio, por suposición o cercenamiento. El argumento es que la prueba fue valorada indebidamente y que por ello es susceptibles (sic) de ser impugnada por error de derecho. El elemento que destaca es la valoración".

(FABREGA P., Jorge y GUERRA DE VILLALAZ, Aura E. Casación. Panamá, 1995, p. 137).

Después de un riguroso análisis de las pruebas aducidas por el recurrente, las disposiciones infringidas y su explicación, considera esta Sala que el Tribunal ad-quem valoró correctamente las pruebas que el recurrente estima como mal apreciadas. En este sentido, reiteramos lo expresado en la causal anterior con relación a las declaraciones de los testigos y las pruebas documentales (solicitud de préstamo), en cuanto a que ninguna de esas pruebas que se estiman mal valoradas tiende a comprobar el hecho alegado por el demandante, que es el engaño por parte de la Cooperativa al señor Sánchez al momento de suscribir el pagaré o al firmar como co-deudor del préstamo otorgado a la empresa SERGEL, S. A.

De las pruebas apreciadas no se puede llegar a acreditar la existencia de engaño o dolo, debido a que no se comprueba que de parte de la cooperativa, al otorgar la garantía como co-deudor o al firmar el pagaré, se hayan dado palabras o maquinaciones insidiosas que sin ellas el señor Sánchez no hubiera servido de co-deudor del préstamo de la señora PONCE.

Dichas pruebas se refieren a los trámites de los préstamos en las cooperativas, lo cual no puede acreditar dolo por parte de la cooperativa, ya que en este caso no se está discutiendo la irregularidad del préstamo otorgado, tampoco si se cumplieron todos los requisitos que establece el Reglamento de Crédito para otorgar préstamos, sino que lo que se discute es la existencia de un engaño al momento de firmar como co-deudor del préstamo otorgado por la Cooperativa a la empresa SERGEL, S. A. y al momento de firmar el pagaré.

Considera la doctrina que para que se pueda acreditar la existencia de dolo como vicio del consentimiento:

> "La relación de causalidad hay que probarla en cada caso concreto. Hay que demostrar que la decisión de contratar se ha producido como consecuencia del influjo de una determinada actuación dolosa del otro contratante".
>
> (ALBALADEJO, Manuel. Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales. Tomo XVII. Vol. 1-B. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1993. Pág. 368).

Con relación a la diligencia exhibitoria extrajudicial considera esta Sala que fue correctamente apreciada por el Tribunal ya que dicha diligencia se refiere exclusivamente a la aprobación y otorgamiento del préstamo y no se refiere al engaño alegado por el recurrente.

El Tribunal en su fallo indicó, con relación a la diligencia exhibitoria lo siguiente: "Por otro lado, considera esta Corporación Judicial que si bien es cierto la Acción Exhibitoria practicada por el Juzgado Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, como documento público que es, no fue impugnado en el término de traslado (art. 836 C. J.), no menos cierto es que el mismo se limita a detallar los documentos existentes en los archivos de la Cooperativa, indicando las personas que sirvieron de deudores y co-deudores al préstamo en mención, sin arrojar otros elementos de juicio que den luces o sustentos a sus alegaciones". (Véase foja 594).

Considera esta Sala que el Tribunal Superior realizó una correcta apreciación probatoria de conformidad con las reglas de la sana crítica, es decir, de acuerdo a las reglas de la lógica y de la experiencia de los magistrados del Tribunal Superior. Couture se refiere a las reglas de la sana crítica:

> "Este concepto configura una categoría intermedia entre la prueba legal (tarifa legal) y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba.

> Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del Juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas.
>
> El Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. La sana crítica es la unión de la lógica de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento".
>
> (COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Tercera Edición, ediciones Depalma, Buenos Aires, 1993, páginas 270 y 271).

Concluye esta superioridad que el cargo de error de derecho sobre la existencia de la prueba no está justificada y, por tanto, no ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, el 18 de diciembre de 1996.

Las obligantes costas, a cargo del recurrente, se fijan por la suma de TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONSUELO QUINTERO VÁSQUEZ DE ANGUIZOLA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO QUE LE SIGUE ARABELLA EMMA ANGUIZOLA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados AGUILERA FRANCESCHI, apoderados legales de CONSUELO VÁSQUEZ DE ANGUIZOLA, recurren en casación contra la resolución del 5 de febrero de 1998, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se confirma la Sentencia N° 47 de 3 de julio de 1997 dictada por el Juez Quinto del Circuito de Chiriquí, ramo civil, dentro del Proceso Ordinario propuesto por **CONSUELO VÁSQUEZ DE ANGUIZOLA** contra **ARABELLA EMMA DE ANGUIZOLA.**

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del mismo, término que sólo aprovechó la parte recurrente, tal como se lee a fojas 1107 y 1108.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Judicial, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 del mismo.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo, además el recurso procede por razón de la cuantía y la resolución que se impugna es objeto del recurso.

El recurrente presenta una sola causal de casación y es en la forma: "Por haberse omitido el trámite de formación del litisconsorcio necesario, considerado esencial en el proceso y cuya omisión causa la nulidad del proceso". La causal no está invocada correctamente. La jurisprudencia de la Corte ha expresado que se trata de tres supuestos distintos, como bien lo explica el Profesor Jorge Fábrega P, en su obra, CASACIÓN:

> "Esta causal tiene tres distintos supuestos:
>
> 1. Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la ley;
>
> 2. Por haberse omitido cualquier otro requisito cuya omisión cause nulidad;
>
> 3. Por haberse anulado, mediante la sentencia impugnada, un proceso sin que hubiesen concurrido los supuestos legales.
> Se trata de tres causales.
> Por ello, el recurso debe individualizar cuál de las distintas modalidades se invoca. De otro modo la Sala ordenaría la corrección".
>
> (FABREGA, JORGE y GUERRA DE VILLALAZ, AURA E. CASACIÓN. Panamá, 1995, página 176).

Aprecia esta Sala que la causal no está invocada en los términos literales en que aparece en el numeral 1 del artículo 1155, además, el recurrente confunde dos causales y le agrega palabras que no deben enunciarse en la causal de acuerdo a lo exigido por nuestro Código Judicial.

Con respecto a los motivos y a la citación de las normas de derecho con su debida explicación, la Sala aprecia que los mismos describen un cargo que hace referencia a la indebida integración del litisconsorcio necesario, pues debía hacerse parte del proceso a otra persona que resultaría afectada con la decisión.

Es evidente que la indebida integración del listisconsorcio necesario se traduce, en apreciación de la Sala, en una situación de falta de legitimación, en este caso, pasiva necesaria, lo que constituye una anomalía que se traduce, conforme a la doctrina de esta Sala, en una sentencia desestimatoria de las pretensiones de la demandante, como ha tenido ocasión de destacar esta Sala.

Esta Sala, bajo la ponencia del Magistrado Sustanciador, en sentencia de 10 de enero de 1997, al desatar el recurso de casación en el proceso promovido por RAFAEL REYES RICHA contra DEMETRIO DUTARY, LUIS PICARD AMÍ y FRANCISCO BRAVO analizó el tema de la legitimación en la causa, señalando que "la legitimación sustancial es, como acertadamente señala el eximio procesalista español JAIME GUASP, la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación, con el objeto del litigio y, en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean precisamente dichas personas las que figuren como partes en tal proceso o, lo que es lo mismo, la necesidad de que una cierta demanda sea propuesta por o sea propuesta frente a ciertas personas que son los legitimados para actuar como partes en un proceso determinado" (JAIME GUASP, Derecho Procesal Civil, Tomo I, pág. 185).

Haciendo referencia a nuestro ordenamiento procesal, el procesalista Adán Arnulfo Arjona, señala lo siguiente:

> "Ya hemos visto que cuando se habla de capacidad para ser parte se está aludiendo a los atributos mínimos que debe tener una persona para que sus actuaciones procesales sean válidas y eficaces (por ejemplo, mayoría de edad, goce de sus facultades mentales, libre de

disposición de sus derechos; en el caso de los incapaces, adecuada representación legal, etc.). La falta de capacidad procesal se traduce en nulidad de lo actuado.

Por el contrario, la legitimación en la causa es la condición que debe tener una persona según la ley sustantiva para lograr que el Juez se pronuncie respecto a las pretensiones formuladas en la demanda en relación con una concreta y particular relación jurídica. Desde el momento en que una persona se identifica con la hipótesis abstracta reconocida en la ley sustantiva (demuestra que es heredera, acreedora, cesionaria, etc.) Se puede indicar que tiene legitimación y, por tal razón, tiene derecho a que se dicte sentencia respecto a una concreta relación jurídica que afecta sus intereses. La falta de legitimación sustantiva es motivo de sentencia absolutoria".

(JORGE FABREGA PONCE, Estudios Procesales, Tomo I, Editora Jurídica Panameña, Panamá - 1989, pág. 251).

Señala el procesalista patrio, como tesis que comparte la Sala, que este efecto de la falta de legitimación en la causa, es decir, la desestimación de la pretensión, es una tesis que ha adoptado, no sin cierta confusión, esta Sala, y, por ejemplo, en la sentencia de 17 de septiembre de 1987, señaló que la consecuencia de la falta de legitimación es la absolución del demandado, indicando:

"La consecuencia de la falta de legitimación es la absolución. En tales hechos se afirma que entre el conductor V. R. y vehículo operado por él, los que causaron el daño, no existe ninguna relación con la CERVECERÍA DEL BARÚ, S. A. y es sabido que probar la legitimación pasiva en un proceso es requisito indispensable, entre otros, para obtener una sentencia de fondo favorable. Bajo ninguna circunstancia debe confundirse la legitimación procesal propiamente tal con la legitimación ad-causa-m que tiene relación más bien con el aspecto sustantivo de la persona contra quien se dirige la pretensión y a la que nos referimos en este caso.

(JORGE FABREGA PONCE, Estudios Procesales, Tomo I, Editora Jurídica Panameña, Panamá - 1989, pág. 259-260).

Con lo dicho, resulta evidente que el tema de la legitimación en la causa es tema del derecho sustancial, y, como consecuencia de ello, no constituye un impedimento para desatar el fondo del litigio (sentencia inhibitoria), sino, por el contrario, motivo para decidirlo en forma adversa al demandante (sentencia de fondo). Y esto es así, toda vez que la falta de legitimación sustancial, naturalmente no impide al juez desatar el litigio en el fondo, toda vez que si se reclama un derecho por quien no es su titular o frente a quien no debe responder, debe negarse la pretensión del demandante en sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada material. (Véase Hernando Morales Molina, "Curso de Derecho Procesal Civil", pág. 158, Editorial ABC, 1991)".

(Sentencia de 9 de marzo de 1998, CASO: Compañía Gilsa, S. A. recurre en casación en el proceso ordinario que él sigue a ULTRAMODERNA, S. A. y ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. (En español) o ASSA INSURANCE COMPANY, INC. (En inglés).

Es evidente, por lo tanto, que de resultar cierta la falta de legitimación necesaria, o su inadecuada integración en la relación jurídico-procesal, debe ser atacada mediante una causal de fondo y no de forma. Al no haberlo hecho así, resulta evidente la ininteligibilidad del recurso, y debe aplicarse la consecuencia jurídica de dicha circunstancia.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

declara INADMISIBLE el recurso de casación en la forma, interpuesto por CONSUELO QUINTERO VÁSQUEZ DE ANGUIZOLA mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARITA BARB DELGADO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MICHAEL BEIERTZ Y DIANA GIOVANA DÍAZ DE BEIERTZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Licenciada ANABELA HERMAN, apoderada judicial de la señora MARITA BARB DELGADO, recurre en casación contra la resolución del 20 de enero de 1998, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante la cual se confirma la sentencia # 16 de 31 de marzo de 1997 dictada por el Juzgado Sexto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario propuesto por **MARITA BARB** contra **CARL MICHAEL BEIERTZ y DIANA DÍAZ DE BEIERTZ**.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del mismo, término que sólo aprovechó la parte opositora, tal como se lee a fojas 335-338.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Judicial, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 del mismo.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo, además el recurso procede por razón de la cuantía y la resolución que se impugna es objeto del recurso.

El recurrente presenta una sola causal: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". La causal está invocada correctamente y de acuerdo a lo exigido por nuestro Código Judicial.

Con respecto a los motivos y a la citación de las normas de derecho con su debida explicación, la Sala considera que los mismos reúnen, de manera general, los requisitos establecidos por la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo, interpuesto por MARITA BARB DELGADO mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ENRIQUE GUEVARA BARBA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE A CLEMENTINA GOVEA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado OCTAVIO OCHOA GUILLÉN presentó recurso de casación en el fondo, contra la resolución del 24 de SEPTIEMBRE de 1997 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que CONFIRMA la sentencia N° 32 de 7 de mayo de 1997, proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, por medio de la cual NIEGA la demanda y condena a costas al demandante dentro del Proceso Ordinario de Oposición promovido por **ENRIQUE GUEVARA BARBA** contra **CLEMENTINA GOVEA BRAVO.**

El término para presentar los alegatos no fue utilizado por las partes en casación. Agotados los trámites procesales inherentes al presente recurso, y encontrándose el mismo en estado de ser decidido, procede la Sala a resolver sobre la causal de fondo alegada.

No obstante lo anterior, antes de adentrarse la Corte al análisis de los requerimientos del recurrente, considera necesario e imprescindible realizar un resumen sucinto de los antecedentes del caso.

ANTECEDENTES

De la documentación procesal se percibe que la señora CLEMENTINA GOVEA BRAVO presentó ante la Reforma Agraria una solicitud de adjudicación a título oneroso de un globo de terreno ubicado en La Candelaria, Corregimiento de El Pedregoso, Distrito de Pesé, Provincia de Herrera.

Posteriormente, el señor ENRIQUE GUEVARA anunció ante la Reforma Agraria de Herrera su oposición a la adjudicación de título a favor de la señora CLEMENTINA BRAVO, por lo cual se envió dicho expediente al Juzgado Primero del Circuito de Herrera para que se pronunciara sobre el Proceso de Oposición interpuesto por ENRIQUE GUEVARA contra CLEMENTINA GOVEA BRAVO.

El Juzgado Primero del Circuito de Herrera, mediante sentencia N° 32 D. A. de 7 de mayo de 1997, RESUELVE: DENEGAR LA DEMANDA E IMPONER COSTAS AL DEMANDANTE POR LA SUMA DE TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

Esta decisión fue apelada ante el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el cual, mediante resolución del 24 de septiembre de 1997 CONFIRMA la Sentencia proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera.

Del fallo proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el Licenciado OCTAVIO OCHOA GUILLÉN, apoderado judicial del señor ENRIQUE GUEVARA BARBA, interpone recurso de casación en el fondo.

Después del necesario recuento procesal del caso, la Sala de Casación Civil entra a estudiar la causal de casación en el fondo.

POSICIÓN DE LA SALA

La causal de fondo invocada es: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución".

El recurrente fundamenta esta causal de fondo en (3) tres motivos que pasamos a transcribir:

> "PRIMERO: La sentencia impugnada dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con fecha 24 de septiembre de 1997, no

apreció, ni valoró, según las reglas de la sana crítica los testimonios que aparecen a f. 48, 49, 54, 62, 64 y 65, los cuales no fueron valorados debidamente, que de haberlo hecho el Tribunal Superior se le hubiese concedido a mi mandante los derechos posesorios en litigio y el globo de terreno en disputa, quienes declararon que ENRIQUE GUEVARA es la única persona que ha trabajado, cultivado y limpiado el globo de terreno objeto de este proceso, por lo tanto esta prueba no fue apreciada conforme a la regla de la sana crítica.

SEGUNDO: La sentencia recurrida le dio mayor valor probatorio a la diligencia de inspección ocular visible a f. 68, la cual fue realizada por JOSE AGUSTIN BURGOS y es una prueba deficiente que no puede desvirtuar la fuerza de los testimonios anotados en el hecho anterior, es decir, le dio mayor valor probatorio al informe pericial que a los testimonios que aparecen a f. 48, 49, 54, 62, 64 y 65, incurriendo de tal modo en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba así como también error en la aplicación de las reglas de la sana crítica.

TERCERO: Los testimonios que aparecen a f. 48, 49, 54, 62, 64 y 65, coinciden en circunstancias de modo, tiempo y lugar, que ENRIQUE GUEVARA es la persona que siempre han (sic) trabajado el globo de terreno en litigio, mientras que CLEMENTINA GOVEA, jamás ha trabajado, ni cultivado esa tierra, por lo tanto el Tribunal Superior no apreció correctamente según la regla de la sana crítica la situación antes anotada, incurriendo en error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba dándole mayor eficacia probatoria a una inspección ocular, que a la pluralidad de testimonio".

Se colige de los motivos anteriormente transcritos que el casacionista considera que el Tribunal Superior al dictar su fallo, no apreció, ni valoró, según las reglas de la sana crítica, los testimonios que aparecen a fojas 48, 49, 54, 62, 64 y 65 donde declararon que ENRIQUE GUEVARA es la única persona que ha trabajado, cultivado y limpiado el terreno objeto de este proceso. Añade que el Tribunal le dio mayor valor probatorio a la diligencia de inspección ocular, visible a foja 68, que a los referidos testimonios, los cuales, estima el recurrente, coinciden en circunstancias de modo, tiempo y lugar en cuanto a que ENRIQUE GUEVARA es la persona que siempre ha trabajado el terreno en litigio, dándole mayor eficacia probatoria a una inspección ocular que a la pluralidad de los testimonios.

Como disposiciones infringidas, el recurrente señala los artículos 770, 904 del Código Judicial y los artículos 606 y 423 del Código Civil.

El recurrente estima como violado el artículo 770 del Código Judicial que se refiere a la apreciación de las pruebas por el juez según las reglas de la sana crítica. Estima que el Tribunal no valoró los testimonios de acuerdo a las reglas de la sana crítica ya que le dio mayor valor probatorio a la inspección ocular que a los aludidos testimonios los cuales son cinco y en sana crítica tienen mayor valor probatorio por su pluralidad.

Como segunda infracción el recurrente estima como violado el artículo 904 del Código Judicial que se refiere a que el juez deberá apreciar las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones según las reglas de la sana crítica. Estima que esta norma ha sido violada ya que no valoró de acuerdo con la sana crítica las circunstancias y motivos que corroboran los hechos de la demanda.

Como tercera infracción se señala el artículo 606 del Código Civil que establece que la posesión del suelo deberá probarse por hechos positivos, de los cuales sólo da derecho el dominio. Se indica como violado en el sentido de que no se apreciaron ni valoraron los referidos testimonios que señalan que el demandante es la persona que ha trabajado el terreno en litigio durante varios años, lo cual es suficiente para probar los derechos posesorios.

Por último, se estima como violado, el artículo 423 del Código Civil que señala que la posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa o derecho poseído. Indica que la violación de esta norma es directa ya que no tomó en consideración los testimonios con los cuales se puede demostrar la ocupación material de la tierra por parte del señor Guevara.

Tal como se desprende de las alegaciones del casacionista, el recurso se encamina a atacar los vicios que supuestamente se dieron, en el fallo del Primer Tribunal Superior, al efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso.

El error de derecho en la apreciación de la prueba ha sido objeto de atención por la doctrina y la jurisprudencia de la Sala. Así expresó:

> "En nuestro sistema, se produce cuando el elemento probatorio se examina, se toma en cuenta, se le analiza, pero no se le atribuye el valor, la eficacia probatoria, que conforme a la Ley le corresponde. Se desconoce una norma valorativa. El punto de referencia es el valor probatorio; valoración más no el contenido obligacional".
>
> (FABREGA P., Jorge y GUERRA DE VILLALAZ, Aura E. Casación. Panamá, 1995, p. 137).

Después de un riguroso análisis de las pruebas aducidas por el recurrente, las disposiciones infringidas y su explicación, considera esta Sala que el Tribunal ad-quem valoró correctamente las pruebas que el recurrente estima como mal apreciadas.

Del estudio de las pruebas testimoniales que se indican como mal valoradas se desprende que la poseedora de dicho globo de terreno es la señora Clementina Govea Bravo. En primer lugar, debemos mencionar, que los señores Enrique Guevara y Clementina Govea Bravo vivieron por varios años como marido y mujer en el terreno en litigio, posteriormente, el señor Guevara, se fue a vivir a otra casa en el área de la Candelaria y ahora se encuentran separados tal como se aprecia en la demanda de oposición: "La demandada, convivió con mi mandante con quien tuvo una hija y hacen (sic) más de dos años están separados ..." (véase foja 14). Como consecuencia de la separación, la señora Clementina Govea Bravo se quedó viviendo sola en dicho globo de terreno con lo cual se demuestra su exclusiva posesión por más de dos años. Lo mismo se desprende de las pruebas que el recurrente estima como mal valoradas al referirse a que ambos señores trabajaron la tierra mientras vivían juntos en ese terreno y que ahora la señora Clementina Govea Bravo vive sola en ese terreno.

De la declaración bajo juramento del señor Pablo Peña, quien es primo segundo del demandante, se aprecia: "Bueno, señora Juez, cuando yo llegué a La Candelaria siempre veía a los señores Enrique Govea y Clementina trabajando ese globo de terreno ..." (Véase foja 54).

De la declaración bajo juramento del señor Domingo Villarreal se desprende: "Si conozco el globo de terreno por la cual se me pregunta, señora Juez yo no certifico quien es el dueño de los derechos posesorios de ese globo de terreno yo siempre he visto a los señores Enrique Guevara y a Clementina Govea viviendo ahí.- Interpuso la tercera pregunta. CONTESTO: Bueno, señora Juez a mi no me consta que son veinte años lo que si se es que los dos han trabajado ese globo de terreno.- Interpuso la cuarta pregunta. -CONTESTO: Tampoco puedo certificar eso.- Interpuso la quinta pregunta. -CONTESTO: Bueno ahora mismo no se con quien están (sic) viviendo el señor Enrique Guevara si es con la mamá o esta en casa alquilada se que esta en La Candelaria, la señora Clementina Govea esta viviendo en la casa del conflicto, ellos vivieron juntos, ahora mismos (sic) están separados". (Véase foja 62).

Debemos añadir, sin embargo, que de las otras dos declaraciones testimoniales que constan en el expediente se observa una clara contradicción. Ambos testigos se refirieron a que la persona que trabajaba la tierra era el señor Guevara. El señor Diómedes Barría expresó: "A la persona que yo he visto trabajando ese globo de terreno es Enrique Guevara y de eso hace más o menos como de doce a trece años, lo que yo he visto sembrado ahí es palos de caoba". (Véase

foja 48). El señor Domingo Hernández, quien es primo hermano del demandante, señala: "Ese globo de terreno lo empezó a trabajar el señor Enrique Guevara y de eso hace más o menos como trece o catorce años, ese globo de terreno esta (sic) sembrado de madera como caoba y cedro". (Véase foja 49). Ambos testigos, uno de los cuales es primo hermano del demandante indicaron al señor Guevara como el único que trabajaba el terreno, sin embargo, estos dos testimonios se contradicen con las otras dos declaraciones que el recurrente también señala como mal valoradas y donde se refiere a que ambos trabajaban la tierra y uno de ellos, a la exclusiva y actual ocupación del terreno por parte de la señora Govea Bravo.

Lo mismo se desprende de la inspección ocular realizada para la adjudicación por la Reforma Agraria el día 9 de noviembre de 1996, donde consta que la señora Clementina Govea Bravo es quien actualmente ocupa dicho terreno.

La Sala se encuentra de acuerdo con lo expresado por el Tribunal Superior al valorar y confrontar las pruebas con las demás que constan en el expediente, en este sentido, expresó: "Como resultado de la confrontación de la prueba testimonial y pericial se concluye que tanto el actor como la demandada vivieron dentro del terreno en disputa y que actualmente el demandante no habita en ese lugar, por lo que la señora Clementina Govea, permanece en su posesión y si ello es así, el fallo no ofrece flanco censurable".

Considera esta Sala que el Tribunal ad quem valoró correctamente las pruebas de acuerdo a la sana crítica, con arreglo a la sana razón, y a la lógica y experiencia del juez.

En conclusión, no se ha probado que el señor Enrique Guevara Barba mantenga la posesión del terreno disputado, por el contrario, considera esta Sala, que se ha probado la exclusiva y actual posesión de la demandada sobre el globo de terreno motivo de la solicitud de título de tierras estatales, a través de la inspección ocular que se realizó sobre el terreno, así como los testimonios que constan en el expediente y a los cuales nos referimos anteriormente.

Como consecuencia de ello, no se han violado las disposiciones citadas por el recurrente, por tanto, no prospera la causal alegada.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el 24 de septiembre de 1997.

Las obligantes costas a cargo del recurrente se fijan por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PANAMEÑA DE CURTIDOS, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO TOTAL PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO INCOADO POR PANAMEÑA DE CURTIDOS CONTRA ALDO BERNARDINI, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado MAURICIO CORT Y GARCÍA, en representación de **PANAMEÑA DE CURTIDOS, S. A.**, ha interpuesto recurso de casación en el fondo para invalidar la Resolución dictada el 10 de febrero de 1998 por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, proferida dentro del proceso ejecutivo

que le sigue a **ALDO BERNARDINI, S. A.**

Cumplidas la reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a su admisibilidad, término que fue aprovechado por ambas, tal como se lee de fojas 141 a 146 del expediente.

La Sala procede al examen del recurso conforme lo normado en el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil y considera que cumple con los presupuestos procesales para su admisibilidad, a saber:

1. La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno;

3. El escrito de formalización del recurso satisface los requisitos del artículo 1160 ídem; y,

4. La causal invocada es de las determinadas por el artículo 1154 del citado Código Judicial.

Por tanto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación propuesto por PANAMEÑA DE CURTIDOS, S. A. contra la Resolución de 10 de febrero de 1998, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso ejecutivo que la recurrente le sigue a ALDO BERNARDINI, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INVERSIONES DECASAL, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A BLANCA DE CHASTAIN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense EISENMANN & DUTARY, en representación de **INVERSIONES DECASAL, S. A.**, interpuso recurso de casación en el fondo contra la Sentencia de 12 de febrero de 1998, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial dentro del juicio ordinario propuesto contra **BLANCA DE CHASTAIN.**

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad, término aprovechado por ambos sujetos procesales.

La Sala procede al examen del recurso en atención a lo normado en el artículo 1665 del Código Judicial.

En tal sentido, se ha podido verificar que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley; el recurso fue interpuesto dentro del término legal; el escrito de formalización cumple con los requisitos del artículo 1160 ibídem; y, la causal invocada es de las que determina el artículo 1154 del citado texto legal.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso

de casación propuesto por INVERSIONES DECASAL, S. A. contra la Sentencia de 12 de febrero de 1998, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ. A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CECILIA INOCENCIA FLORES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SALA DE BELLEZA "BABY O ", S. A. Y/0 ETILVIA B. DE MOLINA Y/O MARTA B. MOLINA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados SHIRLEY y ASOCIADOS, en representación de la señora **CECILIA INOCENCIA FLORES**, ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, el 4 de marzo de 1998, dentro del proceso ordinario cuya parte demandada es **SALA DE BELLEZA BABY'O y/o ETILVIA B. DE MOLINA y/o MARTA B. MOLINA.**

Verificado el reparto correspondiente, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, algo que no fue aprovechado por ninguno de los litigantes.

Esta Sala de la Corte ha examinado el recurso de casación visible de fojas 514 a 527 del expediente y ha podido constatar que las dos causales probatorias de fondo empleadas por el recurrente cumplen con los presupuestos que establecen los artículos 1165, 1166 y concordantes del Código Judicial, ya que:

1. La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno;

3. El escrito de formalización del recurso satisface los requisitos del artículo 1160 ídem; y,

4. Las causales invocadas están comprendidas en el artículo 1154 del citado Código Judicial.

Por todo lo anterior, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por CECILIA INOCENCIA FLORES contra la sentencia de 4 de marzo de 1998.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) JOSÉ A. TROYANO (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ISHAK BHIKU RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE JAIME PENEDO MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados RUBIO & RUBIO, apoderada especial del señor **ISHAK BHIKU** dentro del proceso ordinario interpuesto en contra del señor **JAIME PENEDO M.**, ha formalizado recurso de casación contra la sentencia dictada dentro de este proceso por el Primer Tribunal Superior de Justicia, fechada 8 de julio de 1996.

Encontrándose el recurso en etapa de admisibilidad, la Sala procede a decidir al respecto.

En tal sentido, se observa que la resolución cuya impugnación se pretende, es susceptible de casación, puesto que se trata de una Resolución de segunda instancia, dictada por el Tribunal Superior, en un proceso de conocimiento.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo.

El recurrente invoca dos causales de fondo, la primera "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de derecho, en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida".

La segunda causal invocada es "Infracción de normas sustantivas de derecho, por concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida".

La Sala observa que en ambas causales se cumple, en términos generales, con los requisitos que exige la ley en cuanto a la exposición de los motivos.

No obstante, en cuanto a las disposiciones legales infringidas y explicación de cómo lo han sido, la Sala observa que el recurrente alega como violados, en ambas causales, los artículos 978 y 38 del Código Civil, respectivamente, artículos estos que si bien están contenidos en el Código Civil, los mismos no constituyen normas sustantivas pues no engendran derechos u obligaciones cuya violación, por errores probatorios, haya influido en lo dispositivo de la resolución recurrida.

La Corte ha sido reiterativa en este aspecto sobre el recurso de casación, tal como nos lo comenta el profesor JORGE FÁBREGA, en su obra CASACIÓN, al manifestar:

> "e) La jurisprudencia ha resuelto que al invocarse esta causal es necesario citar como violadas además de la disposición enumerativa de los medios de prueba la de carácter sustantivo que resulta infringida como consecuencia del error probatorio, ya que la de esta última es la que determina la parte resolutiva del fallo y los agravios sufridos por el recurrente. Si no citan --ha dicho la Corte -- el recurrente queda en el umbral. (Pág. 138). ...
>
> f) En ambos casos debe invocarse la norma sustantiva infringida como consecuencia del error probatorio. Ello se debe a que la norma que regula el objeto litigioso es violado como resultado de la errónea operación probatoria. (Pág. 141). ...
>
> `La Corte Suprema de Justicia, en reiterados fallos ha manifestado que:
>
> `Tratándose de una causal probatoria, era necesario que se mencionaran las disposiciones civiles sustantivas que se violaron con motivo de la errada apreciación de la prueba. Y obviamente esto es imprescindible porque son las disposiciones sustantivas las que consagran los derechos y obligaciones.
>
> Las violaciones o preceptos legales referentes a la valoración de la prueba sólo constituye un medio o una causa de la valoración de las disposiciones legales sustantivas para llegar a la determinación de la ley sustantiva, y, por lo tanto, no basta para demostrar que se

ha cometido error en la apreciación de la prueba.

Sentencia de 22 de agosto de 1974. Registro Judicial, 1974, p. 437". (Pág. 142).

Por lo anterior, tal como lo dispone el artículo 1167 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 1160 del mismo Código, la Sala debe proceder a la declaratoria de inadmisibilidad del recurso por ininteligible, ya que como es obvio, la omisión anotada no nos permite conocer en qué consistió la infracción o violación de los derechos sustantivos que según el recurrente influyó en lo dispositivo del fallo de segunda instancia.

Por lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en el fondo propuesto por el señor ISHAK BHIKU, por medio de apoderado.

Las costas de casación se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

ENDARA & MARRE INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° AL/641/98 DEL 2 DE ABRIL DE 1998 DICTADA POR EL REGISTRO PÚBLICO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense ENDARA & MARRE, en representación del señor **EULALIO BORDONES ALVARADO**, ha promovido recurso de hecho contra la nota AL/641/98 de 2 de abril de 1998, dictada por la **DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO** y mediante la cual se niega el recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto contra la resolución s/n de 14 de febrero de 1998.

El contenido de la resolución atacada consiste en lo siguiente:

"REGISTRO PUBLICO: Panamá, catorce de febrero de mil novecientos noventa y ocho.

De conformidad con lo solicitado en el presente memorial, procédase a la inscripción provisional de la (sic) Escrituras Públicas No. 6571 de 12 de agosto de 1997 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá y No. 549 de 19 de enero de 1998 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá ingresadas a este Registro bajo los asientos 8883 del tomo 253 del Diario y 10985 del tomo 263 del Diario. CUMPLASE.

(Fdo)
MARIBLANCA STAFF WILSON
Directora General"

De igual forma, estima el recurrente que la referida resolución es recurrible, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 33 de 1984 y el artículo 94 del Código Judicial. La Sala estima conveniente reproducir el artículo 10 de la Ley 33 de 1984, invocada por el recurrente, a fin de hacer una evaluación objetiva de lo aquí planteado:

> "Artículo 10.- Los procedimientos administrativos en los Ministerios y entidades descentralizadas deberán ser uniformes y los recursos contra los actos administrativos deberán ser tramitados conforme lo previsto en la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946. La sustentación de los recursos, en cada instancia, no deberá exceder de cinco días hábiles. Salvo que exista alguna ley que establezca procedimientos administrativos especiales, se establecerán criterios por el Concejo de Gabinete para uniformidad de los procedimientos antes mencionados".

En la fundamentación fáctica de la solicitud, alega el recurrente que la Directora General del Registro Público, ordenó la inscripción provisional de la resolución de 14 de febrero a que nos referimos con anterioridad. a pesar de que se encontraban varios asientos pendientes de inscripción que habían ingresado a dicha institución con anterioridad.

En primer lugar, advierte la SALA al recurrente que la Ley 33 invocada en su escrito no es aplicable al Registro Público. Si bien se trata de un acto netamente administrativo, la Sala de lo Civil conocerá del acto materialmente jurisdiccional y así lo prevé el artículo 94 del Código Judicial en su numeral 2 que establece:

> "...
> 2. De las apelaciones contra las resoluciones del Director del Registro Públlico".

Lo anterior significa que los únicos recursos que pueden ser susceptibles del recurso de apelación, son los establecidos dentro del derecho registral, regulado por el Decreto 9 de 1920 que reglamenta el Registro Público y no así por la Ley 33 de 1984 que regula los actos admistrativos regidos por la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, como erróneamente ha planteado el recurrente.

En el mismo orden de ideas, tenemos el artículo 1795 del Código Civil que señala la facultad que tiene el registrador de calificar la legalidad de los títulos que se le presenten para su inscripción, los cuales serán negados si las faltas de que adolezcan los mismos, los invaliden absolutamente, y, en caso de que contengan tales títulos errores subsanables, proceder a la suspensión de los mismos. Significa, pues, las resoluciones dictadas por el Registrador no son todas apelables, sino estrictamente las señaladas en el citado artículo 1795,

Se colige de lo expuesto, y así lo ha mantenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que:

> "No todas las resoluciones del Registrador son apelables, porque el Registro Público se rige por disposiciones especiales y no le son aplicables las normas generales.
>
> Conforme a los Arts. 1909 y 1810 del Código Judicial sólo las resoluciones del Registrador General a que se refiere el Art. 1795 del Código Civil, o sean las que nieguen o suspendan la inscripción de títulos que se le presenten con este fin, pueden ser apeladas para ante la Corte Suprema de Justicia.
>
> También en los dos supuestos contemplados en los arts. 107 y 108 del Decreto N° 9 de 1920, reglamentario del Registro Público, puede la Corte conocer en segunda instancia las resoluciones del Registrador relacionadas con la rectificación de asientos del Registro.
>
> Cuando lo que se solicita es la cancelación de una inscripción, como ahora ocurre, el recurso de apelación no procede legalmente. De modo que ante la negativa del Registrador, los interesados en la cancelación tienen que acudir a los tribunales judiciales en la vía ordinaria a hacer valer sus pretendidos derechos". (Registro Judicial No. 9, de 1971, pp. 188 a 190). (Fs. 19-20).

En consecuencia, no puede ser recurrida mediante recurso de hecho las resoluciones dictadas por el REGISTRO PÚBLICO.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA EL RECURSO DE HECHO propuesto por la firma forense ENDARA & MARRE.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

MARITA BARB DELGADO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MICHAEL BEIERTZ Y DIANA GIOVANA DÍAZ DE BEIERTZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado GILBERTO BOSQUEZ DÍAZ, ha presentado ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que no sea oída la recurrente, **MARITA BARB DELGADO**, en el recurso de casación que contra la resolución del PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, promovió esta última, a través de su apoderada legal, hasta tanto no consigne las costas que le fueron impuestas en el Incidente de Rescisión de Secuestro propuesto por KORSEL INVESTMENT, S. A., dentro de la acción de secuestro que la recurrente promovió contra **CARL MICHAEL BEIERTZ y DIANA DE BEIERTZ.**

El escrito en el que formula el licenciado BOSQUEZ DÍAZ su iniciativa procesal figura a foja 320, y es del tenor siguiente:

> "Yo, Licdo. GILBERTO BOSQUEZ DIAZ, varón, panameño, mayor de edad,abogado en ejercicio ..., actuando en mi condición de Apoderado Judicial de los demandados, ambos de generales conocidas en el presente proceso, concurro ante ustedes con mi acostumbrado respeto con la finalidad de solicitarles no sea oída la réplica de la parte recurrente, hasta tanto no sea consignada las costas a la que fueron condenados dentro del Incidente de Levantamiento de Secuestro propuesto por la sociedad Korsel Investment, S. A. dentro del proceso que se enuncia al margen superior derecho de este escrito".

Dicha solicitud viene sustentada, en lo dispuesto en el artículo 1066 del Texto Procedimental, que para una mejor ilustración se reproduce:

> **"artículo 1066. La parte condenada en costas no será oída en el proceso una vez ejecutoriada la resolución que las imponga.** No obstante sus actos en el proceso no se anularán si la parte contraria ha gestionado en el proceso sin reclamar por el hecho de que se le haya oído. Si subsiste la morosidad, no será oída a partir del momento en que reclame la parte favorecida". (Resaltado de la Sala).

La presente solicitud se formula, basada en el hecho de que, habiendo presentado MARITA BARB DELGADO, mediante apoderada legal, acción de secuestro y posterior proceso ordinario contra los señores CARL MICHAEL BEIERTZ y DIANA DE BEIERTZ, la empresa KORSEL INVESTMENT, S. A., promovió un Incidente de Rescisión de Secuestro para que se levantara dicho secuestro respecto de una pintura al óleo del artista Alfredo Sinclair, cuya propiedad alegaba la empresa.

Del incidente se surtió primera y segunda instancia, así como recurso de casación, condenándose en cada una de esas instancias procesales a la parte vencida, MARITA BARB DELGADO, al pago de costas, según consta en las respectivas resoluciones que corren de fojas 321 a 334 (auto de 3 de julio de 1996, expedido por el JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL; el auto de 26 de septiembre de 1996, proferido por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; y la resolución emitida por la Sala Primera el 5 de marzo de 1998). Dichas resoluciones se encuentran ejecutoriadas, sin que al momento se hayan consignado las costas impuestas.

Es por ello que el licenciado BOSQUEZ DIAZ, basado en lo que dispone el artículo 1066 del Código Judicial, aprovechó el término de alegatos de admisibilidad del recurso de casación propuesto por MARITA BARB DELGADO contra la resolución dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR, dentro del proceso ordinario supra descrito, para presentar a esta Sala la solicitud bajo examen.

La Sala, luego de analizar los pormenores del caso que se han dejado expuestos concluye que no es posible acceder a la solicitud formulada, por las razones que se pasan a exteriorizar.

Es sabido que la fijación de costas a una de las partes en el proceso principal, otorga el derecho a la otra parte a solicitar que no se escuche al condenado en costas, hasta tanto no realice la consignación correspondiente. Dicha norma viene consignada en el artículo 1066 del Código Judicial. Norma similar a la contenida en el artículo mencionado, pero aplicable a los incidentes, se encuentra contenido en el artículo 1067, de donde se sigue que no cabe aplicar una regulación que se refiere a las consecuencias jurídicas de la fijación de costas en el proceso principal, a un incidente dentro de dicho proceso principal, por cuanto el incidente tiene sus propias reglas relacionadas con este punto, como muy claramente se desprende de la lectura del artículo 1067 del Código Judicial, que la Sala se permite reproducir:

> "Artículo 1067. En los incidentes regirá también lo dispuesto en los artículo 1055 y 1066 de este Código".

Como viene dicho, las costas a las que se refiere el licenciado BOSQUEZ DÍAZ, fueron impuestas en resoluciones dictadas a propósito del incidente indicado en líneas precedentes, de manera que no cabe aplicarle a los incidentes la regla señalada para un proceso principal, que se corresponde a una situación que no es el supuesto de hecho consignado en el precepto contenido en el artículo 1066, fundamento jurídico en que hace descansar su petición.

Por todo lo expuesto la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA LA PETICIÓN formulada por el licenciado GILBERTO BOSQUEZ DIAZ, dentro del recurso de casación interpuesto por MARITA BARB DELGADO contra la resolución del Primer Tribunal Superior de Justicia de 20 de enero de 1998.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HOTELERA EL PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE RICARDO A. LANDERO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso sumario instaurado por **RICARDO LANDERO** contra **HOTELERA EL**

PANAMÁ, S. A., los apoderados judiciales de ambas partes interpusieron recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 18 de febrero de 1997.

Encontrándose el negocio pendiente de resolver sobre su admisibilidad, el licenciado Ricardo Landero y la apoderada judicial de la demandada, presentaron personalmente escrito de transacción en la Secretaría de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos:

"Nosotros Rubio, Alvarez, Solis & Abrego, debidamente representada para este acto por el Licenciado Raúl Molina, actuando en nuestra condición de apoderados especiales en derecho de la sociedad anónima denominada Hotelera el Panamá, S. A., parte demandada dentro del presente proceso, por una parte, quien en adelante se denominará La demandada, y por la otra Ricardo A. Landero M., Abogado en ejercicio, varón panameño, mayor de edad, soltero, con cédula de identidad personal N° 4.103-2337, localizable en el Edificio Torre Banco Exterior, de la Avenida Balboa, piso N° 19, del Corregimiento de Bella Vista, de esta ciudad de Panamá, quien actúa en su propio nombre y representación, en su condición de demandante dentro del presente proceso, y quien se denominará en adelante La Parte Actora, concurrimos ante esta augusta Sala, con el objeto de presentar como en efecto lo hacemos Transacción Judicial, con el objeto de poner fin al proceso sumario que en la actualidad se encuentra radicado en la Sala Primera de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por razón de Recursos de Casación y que fuesen interpuestos por Las partes.

La presente transacción judicial la celebran las Partes con arreglo a lo siguiente:

Primero: Declara La Parte Actora que ha interpuesto proceso sumario en contra de La Demandada el cual ha quedado radicado en el Juzgado Sexto del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo de lo Civil, y que por razón de recursos interpuestos por **Las partes** se encuentra radicado en la Sala de lo Civil, de la Honorable Corte Suprema de Justicia.

Segundo: Declaran Las Partes que han acordado, en base al correspondiente poder otorgado por La demandada y La Parte Actora en su propio nombre y representación que han acordado poner fin al proceso mencionado en el hecho primero del presente documento, para lo cual han convenido en suscribir, como en efecto lo hacen y presentar en forma conjunta, formal acuerdo transaccional, cuyos términos se refieren a la culminación del proceso y al aspecto pecuniario que se determina con arreglo a lo siguiente:

Tercero: Declara La demandada que reconoce adeudar a La Parte Actora, y así lo acepta esta última, la suma de ciento ochenta y un mil Balboas con 00/100 (B/.181,000.00), la cual se compromete a pagar de la siguiente manera:

1. Un primer pago por la suma de B/.30,000.00 (treinta mil Balboas con 00/100), el cual declara La Parte Actora haber recibido mediante cheque de La Demandada a su entera satisfacción.

2. Diez y nueve (sic) (19) pagos mensuales a razón de B/.5.000.00 (cinco Mil Balboas con 00/100) cada uno, y un último pago por la suma de B/.1,000.00 (mil Balboas con 00/100) los cuales han de cubrir la suma de B/.96.000.00 (noventa y seis mil Balboas con 00/100), y que serán cubiertos los días cinco (5) de cada mes, a partir del día 5 de mayo de 1997, en las oficinas de La demandada.

3. La entrega de una propiedad ubicada en la Isla Contadora, consistente en una vivienda unifamiliar, cuyo valor lo fijan Las Partes en la suma de B/.45.000.00 (cuarenta y cinco mil Balboas con 00/100), la cual se compromete La parte Demandada a entregar

debidamente libre de gravámenes, con los correspondientes paz y salvos y Tasas Únicas para el caso de que la titular del inmueble sea una sociedad anónima.

4. La suma de B/.10.000.00 (diez mil Balboas con 00/100) que retendrá la Parte Demandada y que son destinados a cubrir los honorarios Profesionales que corresponden a la firma de Abogados Rubio, Alvarez, Solis & Abrego, con motivo de la atención al proceso que nos ocupa, que acepta La Parte Demandada le sean debitados y entregados a dicha Firma de Abogados, a más tardar el día 15 de mayo de 1997.

Cuarto: Declaran Las Partes que por razón de la atención del presente proceso, no han sufrido perjuicio alguno y que no tienen reclamación presente ni futura, ya sea de índole penal, civil, comercial o de cualesquiera otra naturaleza que formularse entre sí, a excepción del cumplimiento de la presente transacción, conforme lo acordado entre sí.

De igual forma declaran Las Partes que solicitan como en efecto lo hacemos se sirvan acoger la presente transacción y una vez aprobada y notificada la misma, se ordene el archivo del correspondiente expediente". (Fs. 186-187).

La transacción es un medio extraordinario de terminación del proceso, que se encuentra regulado en los Códigos Civil y Judicial. De acuerdo con el artículo 1068 del Código Judicial, las partes pueden celebrar una transacción en cualquier etapa del proceso, inclusive durante el trámite del recurso de casación. Como requisitos formales para su validez exige que se presente la solicitud acompañada del documento que contiene la transacción, ante el juez que conoce del negocio. Dicha presentación debe hacerse personalmente, a menos que las firmas de las partes hayan sido autenticadas ante un juez o notario.

El examen del documento que nos ocupa pone de manifiesto que se ha cumplido con los requisitos anteriormente señalados. Además, se observa que la parte actora en el proceso suscribió personalmente el escrito de transacción y que el apoderado judicial de la parte demandada posee facultad expresa para transigir, como se desprende del poder consultable a foja 48 del expediente.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, APRUEBA LA TRANSACCIÓN celebrada dentro del proceso sumario instaurado por el licenciado RICARDO LANDERO contra HOTELERA EL PANAMÁ, S. A.; DECLARA TERMINADO EL PROCESO y, en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AIDA CASTILLO VDA. DE SÁNCHEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A LA SUCESIÓN INTESTADA DE EUSTACIO CHICHACO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el recurso de casación propuesto por la firma forense TRUJILLO, VIAL Y MIRANDA, actuando en carácter de apoderados judiciales de la señora **AIDA CASTILLO VDA. DE SÁNCHEZ**, dentro del proceso sumario que le sigue a la Sucesión Intestada

de ASTAS CACES, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de 19 de febrero de 1998, CASÓ la sentencia de 28 de enero de 1997, proferida por el **PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA** y, "actuando como tribunal de instancia, ORDENA, con fundamento en el artículo 782 del Código Judicial, la práctica de una prueba de oficio para aclarar puntos oscuros, consistente en un informe del REGISTRO PUBLICO; relativo a la historia registral de la finca 10.549, inscrita al folio 234, del tomo 325 de la Sección de la Propiedad Provincia de Panamá, con indicación de las fechas de transferencia de dicha finca, vendedores y sus adquirentes y los datos relativos a los adquirentes que sean personas jurídicas, relativas a la conformación de sus órganos sociales" (f. 262).

Para tal efecto, la Secretaría de la Sala Civil, remitió el Oficio N° 063-98 de 10 de marzo de 1998 a la DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO, quien di contestación parcialmente a lo solicitado, por medio de Oficio N° DGC-2113-98, adjuntando la certificación que obra a foja 267 del expediente y la cual se refiere a las transferencias del referido inmueble.

El Magistrado Sustanciador solicitó, a través de la Sala, la ampliación del informe remitido por la Dirección General del Registro Público, por medio de Oficio N° 104-98 de 20 de abril de 1998 (f. 269), recibiéndose contestación de la referida institución el día 28 de abril del año en curso. Una vez concluida la información solicitada y considerando que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de la sentencia dictada por esta Corporación de Justicia, procede el pronunciamiento de la sentencia de reemplazo en el negocio que nos ocupa. de conformidad con el último inciso del párrafo segundo del artículo 1180 del Código Judicial.

SENTENCIA DE REEMPLAZO

La Sala analizará, en primer término, las declaraciones solicitadas por el apoderado judicial de la señora AIDA CASTILLO VDA. DE SÁNCHEZ, dentro del proceso sumario (Solicitud de Revocatoria de Auto de Adjudicación de Bien Inmueble) instaurado con la Sucesión Intestada de EUSTACIO CHICHACO, las cuales consisten en lo siguiente:

> "1. La nulidad del auto de adjudicación hecho a favor del señor EUSTACIO CHICHACO JAEN, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 8-93-1001, con domicilio en Ciudad Bolívar, No. 21, y en su lugar se dicte un auto de adjudicación de la finca No. 10.549 a mi favor, y se ordene al Director del Registro Público que anule la inscripción hecha a favor de Chichaco Jaén como propietario de dicha finca.
>
> 2. Como consecuencia de la declaración anterior, se declare la nulidad del traspaso de la propiedad y posterior inscripción hecha a favor de OMAR GABRIEL CASTRO, varón, panameño, mayuor de edad, con cédula de identidad personal N° 8-213-26627, con domicilio en calle Ricardo Arias, Edificio Arcadia, N° 1, por haber adquirido la misma por mala fé, así como todo gravamen hecho al bien inmueble, y en su lugar se inscriba como legítima dueña a mi persona".

De los fundamentos fácticos del libelo de demanda, se colige que el señor EUSTACIO CHICHACO murió el 3 de marzo de 1966, y ante el Juzgado Segundo de Circuito de Primer Circuito Judicial, se tramitó la sucesión intestada del causante. declarando dicho tribunal herederos a los señores EUSTACIO AURELIO CHICHACO JAÉN, EDDY MARCELA CHICHACO, GLADYS ESTHER CHICHACO, RAQUEL MATILDE CHICHACO, DOLORES VICTORIA HURTADO DE CHICHACO, MARÍA DOLORES CHICHACO DE THALASINOS, JUAN EDWIN CHICHACO y PEDRO CONSTANTINO CHICHACO.

Los herederos declarados vendieron sus derechos hereditarios sobre la Finca N° 10.549, inscrita al folio 234, tomo 325 de la Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Panamá a favor del señor EDUVIGIS SÁNCHEZ, mediante las Escrituras Públicas N° 868 13 de febrero de 1969; N° 907 de 14 de febrero de 1969 y N° 5064 de 11 de agosto de 1969, siendo aportadas dichas escrituras en el proceso de sucesión comentado. Posteriormente, el señor EDUVIGIS

SÁNCHEZ, traspasó los derechos hereditarios adquiridos de los herederos declarados de EUSTACIO CHICHACO, a su esposa, señora AIDA CASTILLO DE SÁNCHEZ, por medio de Escritura Pública N° 5316 de 29 de mayo de 1989, de la NOTARÍA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ. (F. 12).

En el hecho séptimo de la demanda, se aduce que el señor EUSTACIO CHICHACO JAÉN, pese haber vendido sus derechos hereditarios, promovió un proceso de sucesión intestada de su padre, señor EUSTACIO CHICHACO (Q. E. P. D.) ante el JUZGADO CUARTO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, y mediante Auto N° 2074 de 28 de diciembre de 1992, dicho tribunal lo declaró heredero universal del causante, adjudicándosele el inmueble antes mencionado y el cual constituía la masa herencial. El hecho siguiente, se refiere a que CHICHACO JAÉN promovió una acción de lanzamiento por intrusa contra la señora AIDA CASTILLO DE SÁNCHEZ, quien ocupaba el inmueble con su familia. Por último señala que el señor CHICHACO JAÉN traspasó el inmueble a favor del señor GABRIEL OMAR CASTRO HERNÁNDEZ, argumentando que este último lo adquirió de mala fe, y que, inclusive, ejerció acciones contra su representada, tales como, cortar el suministro de agua en el inmueble habitado por la señora DE SÁNCHEZ y su familia. Como consecuencia de lo anterior, estima el recurrente que se ha perturbado la posesión de la demandante, causándole daños materiales y morales.

En la contestación de la demanda, tanto el apoderado judicial del señor GABRIEL OMAR CASTRO HERNÁNDEZ, en carácter de propietario del inmueble objeto de litigio, así como el señor EUSTACIO CHICHACO JAEN, negaron las pretensiones del actor y formularon solicitud de previo y especial pronunciamiento sobre excepción de prescripción (fs. 44-46 y fs. 47-49, respectivamente).

Durante el período probatorio, el Tribunal de la instancia, dictó la providencia de 26 de septiembre de 1994, por la cual se oficia al JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO, RAMO CIVIL, y a costa de la parte actora, copias autenticadas del expediente contentivo de la Sucesión Intestada de EUSTACIO CHICHACO, recibiéndose tales constancias de parte del juzgado requerido, obrante de fojas 72 a 151 del expediente.

La Sala advierte que, efectivamente existe un proceso de sucesión intestada del difunto EUSTACIO CHICHACO, cuyo deceso ocurrió el 3 de marzo de 1966, y, de conformidad con la diligencia de inventario y avalúo practicada en el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO CIVIL, visible a foja 141-142 del expediente, la masa herencial dejada por el de cujus, lo constituye:

> "La Finca N° 10.549, inscrita en el folio 236, del tomo 325, Provincia de Panamá, del Registro Público, cuya ubicación se encuentra en la calle 68, del Corregimiento de San Francisco de la Caleta, en esta ciudad; consiste en un lote de terreno con un Area de ochocientos metros cuadrados (800 M2.); mejoras constentes en una casa de dos pisos, DE MADERA, con un área registrada de ciento tres metros cuadrados (103 M2); el valor catastral y comercial de la mencionada finca asciende a la suma de quince mil novecientos cuatro Balboas (B/.15,904)" (f. 141).

Concluida la fase procedimental, el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO CIVIL, dictó la Sentencia N° 31 de 24 de marzo de 1995, declarando nulo el proceso de sucesión intestada de EUSTACIO CHICHACO incoado en ese Despacho por su hijo, EUSTACIO CHICHACO JAÉN, así como también la nulidad del traspaso y posterior inscripción del inmueble distinguido con el N° 10.549, inscrita al folio 234, tomo 325, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá y se ordena la cancelación de inscripción existente sobre dicha finca. El juzgador de esa instancia se basó para tal pronunciamiento en el hecho de que el señor EUSTACIO CHICHACO JAEN ya no era beneficiario de la herencia de su padre (EUSTACIO CHICHACO), toda vez que había cedido sus derechos dentro del proceso de sucesión intestada instaurada ante el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL. Como consecuencia de ello, adolecía de falta de personería legítima para promover el segundo proceso, por lo que procedió declarar probada la excepción de falta de legitimación activa y, como su consecuencia, a declarar la nulidad del traspaso de la finca en referencia.

Al ser apelada la referida sentencia y surtida la alzada de rigor, el Tribunal Superior consideró procedente la declaratoria señalada por el actor, en el sentido de que el señor EUSTACIO CHICHACO JAÉN ya había cedido sus derechos patrimoniales, dentro del proceso de sucesión intestada que se tramitaba ante el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO CIVIL, antes de interponer el segundo proceso ante el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL, en el cual denunciara el mismo bien (inmueble) cuya cuota parte ya había cedido en el primer proceso aludido, decisión que la Sala comparte.

En referencia a la segunda declaración, la Sala, actuando como tribunal de instancia, se ve impedida debido a que no hay prueba idónea de que la finca N° 10.549 motivo de litigio se encuentre a nombre de OMAR GABRIEL CASTRO HERNÁNDEZ, pues, por el contrario, se observa a foja 173 del expediente una certificación expedida por el Registro Público, en donde se expresa que el referido inmueble aparece a nombre de la sociedad NORCAR, S. A. Una vez analizada la solicitud de previo y especial pronunciamiento de excepción de prescripción, advierte dicho tribunal que la misma tiene como fundamento el artículo 746 del Código Judicial, refiriéndose a las nulidades procesales contenidas en el artículo 722 de la misma excerta legal, y tal nulidad no puede ser resuelta mediante un proceso sumario. Además que la norma citada por la actora es el artículo 1563 de la citada legislación, la cual establece el procedimiento para la validez del reclamo que hagan los herederos del intestado, dentro del proceso. Concluye el tribunal revocando la sentencia N° 31 de 24 de marzo de 1995, declarando probada la excepción de ilegitimidad de personería sustantiva de la parte actora y, como su consecuencia, declara la nulidad del proceso e indicando, y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

En el presente negocio, la Sala solicitó al REGISTRO PÚBLICO una certificación relativa a la historia registral de la FINCA N° 10.549, inscrita al folio 234, tomo 325 de la Sección de la Propiedad, provincia de Panamá, en la que conste, además, las fechas de transferencia del referido inmueble, nombre de los vendedores y de los adquirentes y las generales de los adquirentes, ya sean personas naturales o jurídicas, relativas a la conformación de sus órganos sociales.

Se aprecia a foja 272 del expediente el detalle cronológio de las transferencias que ha tenido el inmueble en cuestión. Así las cosas, tenemos que, a partir de la inscripción N° 7 la finca 10.549 le fue vendida a EUSTACIO CHICHACO, con cédula de identidad personal N° 8-AV-93-696, el día 11 de agosto de 1960. En inscripción N° 8 de la comentada certificación, aparece que el referido inmueble le pertenece a EUSTACIO CHICHACO, con cédula de identidad personal N° 8-93-1001, por medio de sucesión intestada en la fue declarado heredero e inscrito el 28 de enero de 1993.

La inscripción N° 9, se refiere a la venta realizada por EUSTACIO CHICHACO a favor de CASTRO HERNÁNDEZ GABRIEL OMAR, el día 28 de abril de 1993. Por último, aprecia la Sala la inscripción N° 10 por la cual CASTRO HERNÁNDEZ GABRIEL OMAR la vende a la actual propietaria, "NORCAR, S. A.", el día 20 de febrero de 1995.

La documentación traída al proceso, y que fuera solicitada a la oficina respectiva (Registro Público) por esta Superioridad, con fundamento al artículo 782 del Código Judicial, permite analizar de qué manera el oponente al recurso de casación, señor GABRIEL OMAR CASTRO HERNÁNDEZ adquirió la finca N° 10.549.

De conformidad con la certificación comentada, en la fecha en que CASTRO HERNÁNDEZ obtuvo la propiedad del inmueble, el 28 de abril de 1993, es decir, tres (3) meses después de haberse inscrito como heredero de EUSTACIO CHICHACO a su hijo EUSTACIO CHICHACO JAEN, cuya inscripción (N° 8), aparece a partir del 28 de enero de 1993. Significa, pues, que al momento de realizar la venta del inmueble, el señor EUSTACIO CHICHACO JAÉN, tenía la propiedad de la finca 10.549, en virtud de la adjudicación que se le hiciera por medio de Auto N° 2074 de fecha 28 de diciembre de 1992, dictado por el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, al declarársele heredero en la Sucesión Intestada de EUSTACIO CHICHACO (Q. E. P, D.).

De igual forma ocurre con la transferencia por venta realizada por CASTRO

HERNÁNDEZ a favor de la sociedad NORCAR, S. A., realizada el 20 de febrero de 1995, quien es actualmente la propietaria.

Por otra parte, la existencia de la sociedad NORCAR, S. A. es comprobable a foja 271 del expediente, en la que consta que la referida sociedad fue registrada en la Ficha 297127, Rollo 44765, Imágen 2 desde el 18 de enero de 1995, certificando el Registro Público los nombres de los suscriptores de la misma, así como también sus directores y dignatarios y quien ostenta la representación legal de la sociedad.

Lo anterior no obsta para que esta Superioridad considere la nulidad del auto por medio del cual el señor EUSTACIO CHICHACO JAÉN fue declarado heredero de EUSTACIO CHICHACO (Q. E. P. D.) dentro del proceso de sucesión intestada que promovió como único heredero ante el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL.

Efectivamente, consta en autos la existencia de otro proceso de sucesión intestada promovido ante el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, que fuere aportado al proceso sumario instaurado por la señora AIDA CASTILLO DE SÁNCHEZ contra la Sucesión Intestada de EUSTACIO CHICHACO. La demandante en el proceso sumario tenía la calidad de cesionaria de los derechos herenciales sobre la FINCA N° 10.549, adquiridos por su esposo, señor EDUVIGIS SÁNCHEZ y que, posteriormente le fuera vendido los derechos hereditarios mediante escritura pública número 5,316 de 29 de mayo de 1989, obrante a foja 12 del expediente. Tales derechos hereditarios fueron adquiridos por venta que hicieran los herederos declarados dentro del proceso de sucesión intestada de EUSTACIO CHICHACO que se tramita en el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL, y que aparecen de la siguiente manera: DOLORES VICTORIA HURTADO DE CHICHACO y MARÍA DOLORES CHICHACO DE THALASSINOS, por medio de Escritura Público N° 5064 de 11 de agosto de 1969 (f. 14); EUSTACIO AURELIO CHICHACO, EDDY MARCELA CHICHACO, GLADYS ESTHER CHICHACO y RAQUEL MATILDE CHICHACO, mediante Escritura Pública N° 868 de 13 de febrero de 1969 (f. 15); JUAN EDWIN CHICHACO y PEDRO CONSTANTINO CHICHACO, por medio de Escritura Pública N° 907 de 14 de febrero de 1969 (f. 18).

No obstante lo anterior, el proceso sumario instaurado por la cesionaria contra la sucesión de EUSTACIO CHICHACO, guarda relación con el segundo proceso de sucesión instaurado ante el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO CIVIL, y el cual finalizó con el Auto N° 2074 de 28 de diciembre de 1992, en que se declarara único heredero a EUSTACIO CHICHACO JAEN, y a quien se le adjudicó el inmueble que constituía la masa herencial, es decir, la FINCA N° 10.549.

Por otra parte, los derechos herenciales que le fueron vendidos a la señora AIDA CASTILLO DE SÁNCHEZ, si bien corresponden a la misma masa herencial (FINCA N° 10.549), las escrituras respectivas fueron aportadas en el proceso de sucesión intestada de EUSTACIO CHICHACO que se ventila ante el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil, en la cual no solamente vendiera tales derechos el señor EUSTACIO CHICHACO JAÉN, sino también los otros siete (7) herederos declarados a pesar de lo cual, y con evidente intención dolosa y de mala fe le vendió la misma finca al señor OMAR GABRIEL CASTRO HERNÁNDEZ, cuando previamente había participado en su venta a la recurrente.

Evidentemente se le han ocasionado daños morales y materiales a la señora AIDA CASTILLO DE SÁNCHEZ, al ser despojada de la vivienda que ocupaba con su familia en la Calle 68 Este, Casa N° 16 del Corregimiento de San Francisco, Ciudad de Panamá, sobre la cual había adquirido, por compra, los derechos herenciales de los herederos declarados en el proceso de sucesión de EUSTACIO CHICHACO que se tramita ante el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, cuyas escrituras reposan en dicho tribunal, el cual le sería adjudicado una vez fuere finalizado el referido proceso.

La conducta dolosa y fraudulenta de EUSTACIO CHICHACO JAÉN se aprecia claramente en las situaciones dadas en los procesos y cuyo orden cronológico nos permitimos ilustrar:

Mediante Escritura N° 868 de 13 de febrero de 1969, EUSTACIO AURELIO CHICHACO y OTROS vendieron los derechos herenciales sobre la Finca N° 10.549 al

señor EDUVIGIS SÁNCHEZ. (F. 15). El 3 de marzo de 1966 falleció el señor EUSTACIO CHICHACO padre del demandado. (f. 4), El 18 de julio de 1996 (f. 80) el señor EUSTACIO AURELIO CHICHACO, quien es la misma persona, solicitó, junto con otros presuntos herederos la apertura de la sucesión del causante, aportando su certificación de nacimiento. (F. 78).

El 3 de febrero de 1992, el señor EUSTACIO CHICHACO JAÉN, solicitó la apertura de la sucesión intestada de EUSTACIO CHICHACO (q. e. p. d.) Ante el JUZGADO CUARTO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, Ramo Civil (fs. 19 vuelta), denunciando como único bien de la sucesión la Finca N° 10.549, a la cual se le asignó un valor de terreno de NUEVE MIL SEISCIENTOS BALBOAS (B/.9,600.00) y las mejoras por SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO BALBOAS (B/.6,304.00) arrojando un valor total de QUINCE MIL NOVECIENTOS CUATRO BALBOAS (B/.15,904.00). (f. 20). El día 28 de diciembre de 1992, mediante Auto N° 2074 dictado por el JUZGADO CUARTO DE CIRCUITO CIVIL, se le adjudicó a título de herencia al heredero declarado EUSTACIO CHICHACO JAEN la finca N° 10.549, inscrita al folio 234, tomo 325 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá. De conformidad con la certificación expedida por el REGISTRO PUBLICO, dicha adjudicación se inscribió el 28 de enero de 1993. (F. 267). El 10 de febrero de 1993, el señor CHICHACO JAÉN, promovió "demanda por intruso" contra AIDA SÁNCHEZ y OTROS, ante la Corregiduría de San Francisco de la Caleta, fundamentando la pretensión en el inmueble ubicado en Calle 68, Casa N° 16, San Francisco de la Caleta, vive la señora AIDA SÁNCHEZ "y varios otros ocupantes, sin recibo ni contrato de ninguna clase, que justifiquen la ocupación del mencionado inmueble". (f. 10). A fojas 22-26, consta la contestación de la demanda por parte de la señora AIDA CASTILLO VDA. DE SÁNCHEZ, en la cual manifestó, entre otras cosas, que reside en dicho inmueble desde hace más de treinta (30) años, que adquirió los derechos herenciales del referido inmueble y denunció como fuente de prueba al JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, Ramo Civil donde se tramita el proceso de sucesión intestada de EUSTACIO CHICHACO (q. e. p. d.) Observa la Sala a foja 272 que el inmueble 10.549 fue vendido por EUSTACIO CHICHACO a favor de GABRIEL OMAR CASTRO HERNÁNDEZ el 28 de abril de 1993. Consta a fojas 38-39 la demanda de desalojo por intruso interpuesto, en esta ocasión por GABRIEL OMAR CASTRO HERNÁNDEZ contra AIDA SÁNCHEZ y OTROS, ante la Corregiduría de San Francisco, de fecha 1° de junio de 1993.

En la contestación del proceso sumario instaurado por AIDA CASTILLO VDA. DE SÁNCHEZ contra la sucesión de EUSTACIO CHICHACO y en la cual se solicita revocatoria del auto de adjudicación tramitada ante el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL, el señor EUSTACIO CHICHACHO JAÉN niega las pretensiones de la actora (ver fojas 3-7), las cuales guardan relación con el proceso de sucesión que se está ventilando en el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL del mismo causante, así como de las escrituras por medio de la cual consta la venta de los derechos herenciales de los herederos declarados en dicho proceso. (Fs. 47-48).

En base a las consideraciones que anteceden, estima la Sala que la recurrente, al verse privada de un bien inmueble que adquirió con arreglo a la ley, y a la cual se le impusieron, además, por parte del vendedor, proceso policivo de desahucio por estimarla intrusa, lo que contraviene, de manera palmaria, con la conducta procesal desplegada anteriormente, y por lo tanto, incurre en una acción contradictoria con su conducta anterior (venire contra factum propium non valet) y acredita la mala fé desplegada por la parte vendedora.

Por consiguiente, estima la Sala que los daños materiales y morales solicitados por la demandante, deberán cuantificarse conforme lo establece el artículo 983 del Código Judicial, y así procede declarlo.

Consta en autos que, en la actualidad, la finca en disputa fue adquirida por la sociedad anónima NORCAR, S. A., que la adquirió de la persona que en el Registro Público aparecía como titular del derecho de propiedad sobre la misma, por lo que constituye un tercero en la transacción y se encuentra protegido por la fé pública registral. Con respecto a éstos, desde el punto de vista registral, cual es la situación que se da en este proceso, el artículo 1762 del Código Civil preceptúa:

Art. 1762.- la inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulados conforme a la ley. Sin embargo, los actos o contratos que se ejecuten u otorguen por persona que en el Registro aparezca con derecho para ello, una vez inscritos, no se invalidarán en cuanto a tercero, aunque después se anule el derecho del otorgante en virtud de título no inscrito o de causas implícitas de causas que aunque explícitas no consten en el Registro".

La doctrina jurisprudencial de esta Sala ha mantenido con respecto a la protección de la fé pública registral, en varias ocasiones. Así, en febrero de 1962 señaló:

"Como expresa el apelante, Lic. Manuel José Berrocal:
"Estos preceptos (Arts. 10 y 11 de la Ley 13 de 1913) son idénticos en el fondo a los que contienen los Arts. 1762 y 1763 del C. Civil panameño y demuestran que el tercero que compra una finca raíz a quien figura como dueño en el Registro no está obligado a restituirla en el caso de que se anule o resuelva el título del vendedor, salvo los casos expresamente exceptuados, entre los cuales no se halla el demandado ..."

"Nuestro Registro ampara eficazmente al tercero que compra a quien aparece como dueño en el mismo y no permite que se le prive del bien legítimamente adquirido" (Sentencia de 6 de octubre de 1920, Reg. Jud. N° 12, Vol. VXVIII, pág. 100, Col. 2a.)". (sic).

"Los anteriores conceptos contienen el pensamiento de la Corte en cuanto a la interpretación y alcance del Art. 1762 del C. Civil, considerado por los jurista (sic) panameños como la piedra angular de nuestro sistema de Registro Público ...". (Cita fallos de 12 de agosto de 1918 y 6 de junio de 1955).

Auto de 8 de febrero de 1962.
Repertorio Jurídico N° 2, febrero 1962, Segunda Instancia, pp. 42 y 43".

(DULIO ARROYO CAMACHO, "20 años de jurisprudencia de la Sala Primera (De lo Civil) de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 1961-1980"; Panamá, 1982, pp. 564, 565)

En otra ocasión, señaló:

"1213. FE PUBLICA REGISTRAL. Garantía y seguridad de los derechos de terceros.

"Nuestro ordenamiento jurídico Registral consagra el principio de la fe pública, contenida especialmente en el artículo 1762 del Código Civil. Es la fe pública registral el más trascendental efecto del Registro Público y puede afirmarse, constituye la finalidad básica de la Institución, por cuanto que al convertirse el asiento en una verdad incontrovertible, asegura de ese modo los derechos de terceros que contratan confiados en el Registro, teniendo como consecuencia la seguridad del tráfico de inmuebles. La Corte debe proteger en este caso un interés superior, al principio de la fe pública registral, que no puede desconocerse, por razón de que la Dirección General del Registro Público estime que una inscripción es ilegal porque ello acabaría con la seguridad del Registro. Además, es evidente que lo que se pretende ahora es hacer una nueva calificación de un título inscrito, lo que no procede sino mediante un procedimiento judicial".

Auto de 25 de octubre de 1976.
Juicio declarativo de pertenencia propuesto por MANUEL GREGORIO CEBALLOS POLO contra el INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO Y JOSE DANIEL ALVARADO C.

1214. FE PUBLICA REGISTRAL. Ampara al tercero que reúne las condiciones exigidas por la Ley.

"El Art. 1762 del C. Civil, considerado por los jurístas panameños como la piedra angular de nuestro sistema de Registro Público, establece el principio cardinal de que el tercero que compra a un poseedor inscrito, no puede ser perjudicado en su dominio, aunque más tarde se invalide el derecho del otorgante, pero para que ese amparo exista es preciso que el derecho del otorgante se anule en virtud del título no inscrito o de causas implícitas, o de causas explícitas que no consten en el Registro Público, porque si la invalidación procede en virtud de otro título inscrito o de causas que consten en el Registro Público, entonces el tercero no queda amparaado por ese precepto, desde luego que es de presumir que conocía el otro título inscrito por las causas que constaban en el Registro cuando contrató".

Sentencia de 8 de febrero de 1962.
Repertorio Jurídico N° 2, Año II, febrero 1962, Segunda Instancia, p. 43."

(DULIO ARROYO CAMACHO, "20 años de jurisprudencia de la Sala Primera (De lo Civil) de la Corte Suprema de Justicia de Panamá: 1961-1980"; Panamá, 1982, fs. 578-579)

Por otra parte, no existen elementos probatorios en el proceso que comprueben la mala fe o dolo, en las transferencias del inmueble, desde el momento en que el titular de la misma, señor EUSTACIO CHICHACO JAÉN la vendió al señor GABRIEL OMAR CASTRO JAÉN y este último la traspasara a la sociedad NORCAR, S. A., actual propietaria del referido inmueble, cuya carga le correspondía a la parte demandante.

Dicho principio medular del Derecho Inmobiliario Registral, ha sido analizado por el civilista LUIS DIEZ-PICAZO, en su conocida obra "Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial", refiriéndose al principio de la fé pública registral que ocupa a la Sala, "es la regla estricta de lo que puede llamarse la fé pública registral, conforme a la cual el tercero que lleva a cabo un negocio adquisitivo confiando y amparándose en el Registro Público, vé convertida para él la situación registral en una situación inatacable", estudiando los efectos del principio con respecto al enajenante a non domino señalando:

"22. La privación de derechos en virtud de la publicidad registral y sus consecuencias jurídicas ulteriores.

La consumación de una adquisición a non dominio a favor del terdero determina una privación de derechos del titular extrarregistral, que resulta, en virtud de la mecánica de la fe pública, perjudicado y empobrecido. La Ley Hipotecaria no determina cuáles son las consecuencias que de ello deben derivar, pero se deducen de los principios generales del sistema. Si el disponente non dominus, aunque titular registral, actuó con dolo o con mala fe, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que puede haber incurrido, deberá resarcir al verdadero titular extrarregistral el daño o perjuicio que le cause, puesto que se lo causa por culpa. Si el disponente non dominus, aunque registral, actuó sin culpa ni negligencia, no por eso el verus dominus se ve desprovisto de acción, puesto que la hipótesis es, dado el carácter oneroso del negocio, un supuesto de enriquecimiento sin causa, en que el disponente resulta enriquecido y el verus dominus empobrecido.

Puede decirse por ello que la consecuencia jurídica del art. 34 es privar al verus dominus de su título jurídico real, transformándolo o convirtiéndolo en un derecho de naturaleza personal, que se dirige contra el causante del daño o contra el enriquecido.

Hace una particular aplicación de esta idea el art. 37, in fine,

cuando dice que "en el caso de que la acción resolutoria, revocatoria o rescisoria no se pueda dirigir contra tercero, conforme a lo dispuesto en el párrafo 1° de este artículo, se podrán ejercitar entre las partes las acciones personales que correspondan"."

(LUIS DIEZ-PICAZO, "Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial III"; Editorial Civitas, Madrid-España, 1995; pág. 469).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA: previa revocatoria de la sentencia proferida por el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ:

1° Declarar probada la causal de nulidad denominada ilegitimidad de personería activa, presentada por la parte demandante y, en consecuencia, DECLARAR NULO el proceso de sucesión intestada de EUSTACIO CHICHACO, tramitado en el JUZGADO CUARTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL;

2° No accede a la anulación de la venta subsiguiente hecha por GABRIEL OMAR CASTRO HERNÁNDEZ a la sociedad NORCAR, S. A., por estar la sociedad adquirente amparada por la fé pública registral, sobre la finca número 10.549, inscrita al tomo 325, folio 234, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá.

3° SE CONDENA al señor EUSTACIO CHICHADO JAÉN, por equivalente, a pagar a la señora AIDA CASTILO viuda de SÁNCHEZ, los daños materiales y morales ocasionados en su calidad de cesionaria de los bienes hereditarios sobre la finca número 10.549, inscrita al tomo 325, folio 234, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, cuya liquidación se realizará conforme al procedimiento previsto por el artículo 983 del Código Judicial, indemnización que deberá sufragar en concepto de dolo el señor EUSTACIO CHICHACO JAÉN.

Se fijan las costas en ambas instancias en la suma de TRES MIL QUINIENTOS BALBOAS (B/.3,500.00).

Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

MAYO 1998

AUTO APELADO

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD SEGUIDO A BALDOMIR KRISAJ A FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE LAS SOCIEDADES KREPORT INVESTMENT INC. Y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Dentro del presente recurso de casación, interpuesto por el licdo. ELÍAS DOMÍNGUEZ, en su condición de apoderado legal de **CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A.** y de **KREPORT INVESTMENT INC.** contra el auto de 14 de marzo de 1997, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el licdo. DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA ha presentado el siguiente escrito:

> "HONORABLE MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
>
> Yo, DARIO EUGENIO CARRILLO GOMILA, varón, panameño, mayor de edad, casado, con cédula de identidad persona número 8-423-617, abogado en ejercicio, con oficinas ubicadas en calle 40 Este, casa 2-80, de la ciudad de Panamá, lugar donde recibo notificaciones personales; actuando en nombre y representación de BALDOMIR KRIZAJ, EDITH DE CRIZAJ Y FRANCISCO SOLIS todos de generales conocidas en autos comparezco personalmente ante usted a fin de anunciar que me encuentro notificado a la fecha y APELO de la admisión del Recurso de Casación, dentro del proceso enunciado a márgenes superiores.
>
> Fecha: la de su presentación".

Para resolver acerca de la manifestación de apelación que contiene el escrito anterior, se aprecia que ni dentro de las normas que regulan el recurso de casación penal en nuestro Código Judicial, contenidas en la Sección Ira. del Capítulo Iro., del Título 8vo. del Libro 3° del Código citado y tampoco en la enumeración establecida por el artículo 2430 de ese cuerpo legal se tiene establecido que procede el recurso de apelación contra la resolución que admite un recurso de casación en materia penal.

De otro modo, se tiene que el artículo 1168 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso penal en razón a lo establecido por los artículos 1971 y 2431 del Libro de Procedimiento penal, referente a la sustanciación del recurso de casación en materia civil, indica que "contra las resoluciones de la Corte sobre corrección o sobre admisibilidad no cabe recurso alguno, mandato que también parece aplicable al procedimiento penal tanto por lo que se acaba de manifestar como por lo dispuesto en el artículo 2445 del Código Judicial cuando categóricamente señala que "admitido el recurso la Corte dará traslado del proceso al Procurador General de la Nación por el término de cinco (5) días y una vez vencido dicho término señalará día y hora para la audiencia".

Cierto es que el artículo 110 del Libro Iro. Del Código Judicial preceptúa que "el sustanciador dictará por sí solo, bajo su responsabilidad, todos los autos y providencias para adelantar el asunto y contra ellos sólo tiene la parte que se considere perjudicada el recurso de apelación para ante el resto de los Magistrados, con la ponencia del que siga en orden alfabético al Sustanciador", pero esa norma debe entenderse que resulta aplicable cuando la resolución pronunciada por el ponente admite recurso de apelación, bien sea porque se encuentra dentro del artículo que enumera las resoluciones que son apelables o en razón de que otra disposición legal expresamente así lo establezca, que no es la situación presente, donde a más de que el recurso de apelación no se encuentra establecido contra resoluciones que admiten un recurso de casación en materia penal, se tiene que se anuncia cuando, desde el 13 de marzo último se admitió el recurso y a la fecha actual ya se corrió el traslado a la Procuraduría General de la Nación, se contestó y se fija fecha para la celebración de la audiencia

correspondiente.

Por lo expuesto, el suscrito Magistrado Sustanciador de la presente causa, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la concesión del recurso de apelación anunciado contra la resolución de 13 de marzo de 1998, que admite el recurso de casación interpuesto contra el auto de 14 de marzo de 1997, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en este proceso.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DISTINTA A LA DETENCIÓN PREVENTIVA, A FAVOR EMILIO ELIADES OLIVA LINARES, PROCESADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado José Ramiro Fonseca Palacios ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución del 19 de noviembre de 1997, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que niega solicitud de aplicación de la Ley N° 57 de 27 de diciembre de 1995, dentro del proceso seguido a **Emilio Eliades Oliva Linares**, sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de **Jorge Luis Delgado Villarreal.**

Plantea el recurrente que "ha quedado evidenciado en el negocio, que OLIVA LINARES se encontraba de facción el día de los lamentables hechos; que el mismo forma parte de la Fuerza Pública; que el ofendido también formaba parte de dicha institución, lo mismo que los otroras imputados BARSALLO y GÁLVEZ; y que en fin los hechos tienen íntima relación con el trabajo de mi poderdante" (f. 17). A juicio del defensor técnico, estas comprobaciones permiten "aplicar a favor del imputado, el contenido del artículo 2 de la Ley 57 de 27 de diciembre de 1995, Ley que se aplica en forma exclusiva a todas los integrantes de la Fuerza Pública" (f. 17).

De este libelo de apelación se le corrió traslado al Fiscal Segundo Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, quien manifestó que "ha quedado evidenciado que las unidades de la Fuerza Pública que se vieron involucradas en este hecho de sangre, no se encontraban de servicio, sino que compartían momentos de celebración, lo que es aceptado por el propio imputado, que impide la aplicación del contenido del artículo 2 de la mencionada Ley" (fs. 20-21).

A propósito del reclamo formulado, la Corte estima conveniente resaltar que la Ley N° 57 de 27 de diciembre de 1995, "Por la cual se dictan normas de carácter procesal, penal y penitenciario, aplicables a los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Técnica Judicial y se adoptan otras disposiciones", en su artículo 2° establece expresamente que:

> "Cuando por motivo del uso de la fuerza, exista mérito legal para la detención preventiva de algún miembro de la Fuerza Pública o de la Policía Técnica Judicial, por la presunta comisión de un delito ejecutado en actos del servicio o en cumplimiento del deber, no se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, mientras no se dicte una sentencia condenatoria y ésta sea comunicada a la autoridad nominadora por parte del tribunal competente.
>
> PARÁGRAFO. Durante la detención preventiva del sindicado, se le

asignarán funciones administrativas dentro de las instalaciones policiales".

Del anterior texto se puede deducir que cuando el imputado sea miembro de la Fuerza Pública o de la Policía Técnica Judicial, y exista mérito para aplicar la detención preventiva, no se decretará la suspensión provisional del cargo público desempeñado, y durante el lapso de duración de la medida cautelar personal, se le asignarán al sindicado funciones administrativas dentro de las instalaciones policiales, siempre y cuando la presunta conducta delictiva haya sido ejecutada en actos del servicio o en cumplimiento del deber.

La Sala considera que en el presente caso, el sumariado Emilio Eliades Oliva Linares no puede ser beneficiado con el precepto legal antes transcrito, toda vez que en autos se comprueba que al momento de suscitarse el hecho de sangre en donde perdiera la vida Jorge Luis Delgado Villarreal, Oliva Linares no desempeñaba actos propios del servicio ni cumplía con el deber legal de salvaguardar el orden social. Esta afirmación se evidencia del propio relato que ofrece Oliva Linares, quien manifestó que ese día "nos encontrábamos todos los compañeros de la Sub-Estación del Chorrillo, en una construcción a un costado de la misma, celebrando una fiesta de despedida para el Sub-Teniente Palacios, que se había acogido a su debida Jubilación ... culminada la fiesta ... PALACIOS, nos pidió que fuéramos a su residencia ubicada en Veracruz, para celebrar con sus amigos y familiares, nos fuimos ... todas las unidades que nos encontrábamos libres" (f. 35 del cuaderno penal).

En razón de lo expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto venido en grado de apelación.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA FISCALÍA CUARTA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA DEVOLVER EL REVOLVER MARCA SMITH AND WESSON, QUE PERTENECE A ELÍAS MANUEL RIVERA MEDINA, ABSUELTO DEL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO PERJUICIO DE DAVID BONILLA BELTRÁN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La **Fiscal Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial**, encargada, formalizó recurso de apelación contra auto calendado 12 de diciembre de 1997, mediante el cual el **Segundo Tribunal Superior de Justicia** ordena que el arma de fuego marca Smith and Wesson sea restituida a Elías Manuel Rivera Mendieta, absuelto por jurados de conciencia del delito de homicidio cometido en perjuicio de Beltrán David Ramsey Bonilla.

La representante del Ministerio Público expresa su desacuerdo afirmando que "Las pruebas acopiadas al expediente muestran al señor ELÍAS RIVERA como una persona altamente impulsiva y desprovista de arrepentimiento después de haber ocasionado un hecho de sangre ..." (fs. 12-13). Considera, además, que las constancias procesales "nos llevan a la conclusión de que ... RIVERA, debe prohibírsele de por vida el uso de arma de fuego, dado que para esta representación social, no es una persona apta para portar las mismas" (f. 13).

La Sala pasa a conocer de la alzada, exclusivamente sobre los puntos de la resolución a que se refiere el recurrente, en cumplimiento de lo preceptuado en

el artículo 2428 del Código Judicial.

Para favorecer la petición de la defensa técnica de Rivera, el tribunal de primera instancia dio por establecido que, aun cuando "esta colegiatura estimó que se daban los elementos" para encausar al imputado, "el Jurado de Conciencia ... le consideró inocente. Esa decisión del Jurado de Conciencia liberó a RIVERA de responsabilidad, quien fue evaluado psiquiátricamente ..." (f. 8).

A juicio de la Sala, la valoración hecha por el a-quo de las constancias de autos es correcta, y en consecuencia comparte la medida de devolver el arma de fuego, como lo solicita la defensa técnica, pues, según se desprende del artículo 2389 del Código Judicial, cuando el veredicto del jurado fuere absolutorio el Tribunal Superior que preside la audiencia con intervención de jurados solamente puede ordenar la inmediata libertad del imputado y proferir la resolución que declara terminado el juicio. Quiere decir, entonces, que luego de que el imputado haya sido declarado inocente, el Tribunal carece de soporte jurídico para imponerle alguna medida de naturaleza punitiva.

No obstante lo anterior, corresponderá a la autoridad administrativa competente conceder el permiso al ciudadano Rivera para poseer arma de fuego, puesto que la Ley N° 14 de 30 de octubre de 1990, que desarrolla el artículo 307 de la Constitución Nacional, en lo relativo a la posesión de tales armas, entre otras consideraciones, autoriza a negar el permiso en cuestión cuando los "antecedentes penales y policivos ... indiquen peligrosidad". De la mano con lo anterior se advierte también que la Ley N° 53 de 12 de diciembre de 1995 autoriza a la justicia administrativa y penal para sancionar a aquellas personas que posean armas de fuego sin estar legalmente autorizadas para ello.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto calendado auto calendado 12 de diciembre de 1997, mediante el cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia ordena que el arma de fuego marca Smith and Wesson sea restituida a Elías Manuel Rivera Mendieta.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ABRE CAUSA CRIMINAL CONTRA RICAUTE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO COMETIDO EN PERJUICIO DE FERNANDO FRANCO RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante resolución de 4 de diciembre de 1997, abrió causa criminal contra **Ricaurte González González**, Fiscal Tercero de Circuito de la provincia de Veraguas, por la comisión del delito de homicidio culposo cometido en perjuicio de **Sergio Fernando Franco Rodríguez**. Contra esa medida jurisdiccional el licenciado César Román Tello interpuso recurso de apelación, el cual fue sustentado en tiempo oportuno, por lo que corresponde a la Sala Segunda de la Corte Suprema pronunciarse sobre el medio de impugnación presentado.

Dos son las razones en las que fundamentalmente el recurrente hace descansar su disconformidad. En primer término, plantea que el hecho punible no

se encuentra acreditado, por cuanto que en autos existen elementos probatorios que revelan "dudas, contradicciones, errores y ... defectos" (f. 461). En tal sentido, afirma que los testigos actuarios fungieron como peritos en la diligencia de inspección ocular realizada en el lugar donde sucedieron los hechos (fs. 452); que en la diligencia de inspección ocular y avalúo de la bicicleta y el vehículo del imputado los testigos actuarios "jamás observaron el vehículo NISSAN SUNNY por dentro ni probaron sus condiciones mecánicas" (f. 453); que en autos no existe diligencia en la cual el funcionario de instrucción haya ordenado que se tomaran unas fotografías del lugar donde ocurrieron los hechos (fs. 453-454); que el informe policivo N° 7686 confeccionado por el agente de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional establece que las manchas de sangre se hallaban en el paño izquierdo de la carretera, mientras que los testigos del accidente sostienen que las manchas de sangre fueron halladas en el lado derecho de la vía (f. 454). Plantea igualmente que es deficiente la declaración de ratificación del informe de Tránsito que rindiera el agente Carlos Alberto De Gracia Herrera, ya que no repite los hechos (f. 454); que el protocolo de necropsia evidencia contradicciones, toda vez que advierte dos causas de muerte de la víctima, aunado a que señala que el cadáver fue admitido a las 9:00 a. m. del 21 de abril de 1996, pero señala las 3:30 p. m. de ese día como hora probable de la muerte. A su juicio, esas contradicciones revelan que la muerte de Franco ocurrió en otro lugar y por causas muy distintas (f. 455). Finalmente, el recurrente reclama que el auto de proceder debe ser revocado por cuanto se fundamenta en las declaraciones de Cristian y Luis Saavedra González, quienes "están faltando a la verdad", y sus testimonios deben ser calificados como sospechosos por ser amigos del fallecido (fs. 456-459).

En otra alegación, el recurrente manifiesta que la víctima fue quien causó el accidente de tránsito, al no conducir su bicicleta por la orilla del paño derecho de la carretera, cambiaba de carril sin tomar las precauciones y, sobre todo, porque manejaba con un "grado de alcoholemia de 187.33 mg/ml" (f. 451).

El escrito de apelación se corrió en traslado a la representante del Ministerio Público, licenciada Nedelka Díaz de Castillo, quien sostiene que el recurrente "critica prácticamente ... toda la etapa de instrucción sumarial e inclusive del Auto de Encausamiento ... no obstante ... hemos de concluir, al igual que lo hicimos en la Vista Fiscal N° 73 de 17 de noviembre de 1997, que aquí se encuentran plenamente satisfechos las dos exigencias del Artículo 2222 del Código Judicial, es decir, la existencia del indispensable presupuesto Hecho punible y la vinculación del IMPUTADO ... con el delito de HOMICIDIO CULPOSO que se contempla" (f. 466).

Para resolver la alzada, la Sala pasa a evaluar los argumentos del recurrente en relación con el caudal probatorio que consta en autos, siguiendo los parámetros que establece el artículo 2428 del Código Judicial.

Las constancias sumariales permiten determinar que en la tarde del 21 de abril de 1996, en el Corregimiento de Chupampa, Distrito de Santa María, provincia de Herrera, Ricaurte González González colisionó su vehículo con la bicicleta que conducía Sergio Fernando Franco, quien falleció como consecuencia del accidente. El informe médico legal revela que Franco falleció por "TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO SEVERO ... POLITRAUMATISMO EN HECHO DE TRÁNSITO" (f. 69).

En relación con el primer reclamo que formula el recurrente, resulta conveniente adelantar que con anterioridad esta Corporación, mediante resolución de 2 de junio de 1997 (f. 356), dejó claramente establecido que el reporte del accidente de tránsito confeccionado por el sargento de la Policía Nacional Carlos Alberto De Gracia Herrera, la diligencia de ratificación de ese informe, el protocolo de necropsia y las declaraciones rendidas por los hermanos Cristian y Luis Saavedra González, comprueban de manera "inequívoca" la existencia del hecho punible. En vista de que la Sala ha examinado minuciosamente las sumarias y no ha encontrado otros elementos probatorios que menoscaben la fuerza probatoria de los elementos de convicción que demuestran la existencia del hecho punible, se desestima la primera objeción formulada por el recurrente.

El segundo reclamo formulado por el letrado gira en torno a que el imputado

no actuó con culpa en el hecho investigado, por haber sido la víctima quien ocasionó el accidente de tránsito que le costó la vida.

Según la versión del imputado, cuando se aproximaba a la "curva" de la carretera a una velocidad de "ochenta kilómetros por hora", observó que dos personas conducían sus bicicletas "en el mismo paño de la vía en la dirección en que conducía, le toqué la bocina al vehículo ... vi a una distancia como de veinte (20) metros girando uno de los colitas (sic) hacia el paño contrario y el otro más a la orilla, teniendo que continuar la marcha por el medio de ellos, haciéndome un poco hacia la mano contraria sin que me apartara de la doble línea amarilla" (f. 363). Continúa manifestando que cuando se aproximó al tercer ciclista, es decir a Sergio Franco, "volví a tocar la bocina disminuyendo la velocidad"; ese ciclista, explica, "conducía su bicicleta por el medio del paño de la vía en la dirección que yo conducía obstruyendo el paso del vehículo, lo que me obligó a irme a la vía contraria, rebasando entendiéndose en este caso particular, que rebasar es salvar un obstáculo que representa una situación de peligro, en razón de que el ciclista antes citado hizo caso omiso a la advertencia que le hice por medio de la bocina del vehículo; intempestivamente el ciclista giró o sobre giró hacia el paño contrario colisionando mi vehículo en la parte del guardafango derecho ..." (fs. 362-363).

Por su parte, Cristian Antonio Saavedra González, uno de los ciclistas, informa que él y su hermano Luis viajaban detrás de Sergio Franco, y observó cuando el vehículo viajaba "a velocidad y arrolló a Sergio en el paño de la carretera izquierda" (f. 78). De igual manera, Luis Antonio Saavedra señala que Franco fue arrollado por un vehículo que "no creía en nadie" en "la vía izquierda" de la carretera" (f. 84).

El examen hecho del caudal probatorio permite demostrar que, aún cuando la víctima utilizaba el paño contrario de la carretera, el imputado resolvió sobrepasarlo en una curva a gran velocidad y, al hacerlo, su vehículo hizo contacto con la bicicleta de Franco, lo que fue suficiente para que Franco se impactara contra el pavimento, con el resultado de su muerte.

Si se considera que el imputado sobrepasó en una curva, maniobra que según la doctrina más calificada en accidentes de circulación "es una de las ... más peligrosas debido al aumento de velocidad que se le imprime al vehículo sobrepasante ..." (OLANO V. Carlos Alberto. Tratado Técnico Jurídico sobre accidentes de circulación. Segunda edición. Ediciones Librería del Profesional. 1986. Bogotá. págs. 596-598), se puede concluir que, hasta el momento, en las sumarias obran elementos de convicción que indican que el comportamiento del agente infringió el deber de cuidado consistente en la adopción de las precauciones necesarias para evitar la ocurrencia de la conducta típica que se le imputa.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 4 de diciembre de 1997 proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que abre causa criminal contra Ricaute González González, Fiscal Tercero de Circuito de la provincia de Veraguas, por la comisión del delito de homicidio culposo cometido en perjuicio de Fernando Franco Rodríguez.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ABRE CAUSA PENAL CONTRA VICENTE WORREL BLIS, SINDICADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE ELVIS ALBERTO BONILLA HERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Arturo Mctaggart Escartín, quien actúa como defensor técnico de **Vicente McGregor Worrell Bliss**, anunció y sustentó en tiempo oportuno recurso de apelación contra auto de 2 de septiembre de 1997, emitido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que abre causa criminal contra su representado, como presunto infractor del Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, o sea por el delito genérico de homicidio cometido en perjuicio de **Elvis Alberto Bonilla Hernández, (a) "Beto"**. Según se expresa en el libelo de la apelación, la disconformidad del defensor técnico con el fallo consiste básicamente en su apreciación de que Worrell no debe ser sometido a los rigores de un enjuiciamiento, por cuanto que los testigos Yaquelín Ramírez y Cristóbal César Morales Ruiz se retractaron de los cargos que formularan en su contra. Solicita se revoque el auto impugnado y que, en su lugar, se profiera un sobreseimiento provisional o la ampliación de las sumarias "y así poder llegar a evacuar ciertas pruebas a favor del prenombrado WORRELL BLISS" (fs. 257-262).

Para resolver la alzada, pasa la Sala a pronunciarse sólo sobre los aspectos a que se refiere el recurrente, conforme lo dispone el artículo 2428 del Código Judicial.

El cuaderno penal permite determinar que en la madrugada del 4 de noviembre de 1996, en la cantina "Harlem", ubicada en el barrio de San Miguel, corregimiento de Calidonia, provincia de Panamá, se produjo una riña entre Vicente Worrell Bliss y un miembro de la banda que se identifica con el nombre de "Toca y Muere". Luego del incidente, Worrell salió de la cantina, buscó un arma de fuego y disparó contra dos miembros de la banda que se encontraban en la vecindad: Elvis Alberto Bonilla Hernández, quien recibió tres impactos, y Cluidins Alfonso Morgan Newton, quien resultó lesionado en una de las piernas. El examen médico forense revela que la muerte de Bonilla fue ocasionada por herida perforante por proyectil de arma de fuego en el tórax (fs. 59-60). En cuanto a Morgan, el informe del Instituto de Medicinal Legal acredita que fue herido por proyectil de arma de fuego "en el tobillo izquierdo" (f. 145).

Como quiera que el imputado Worrell no compareció durante la instrucción sumarial para hacer valer sus derechos (f. 254), no se cuenta con su declaración indagatoria, por lo que corresponde examinar las otras constancias de autos, para la mejor inteligencia de los argumentos planteados por el recurrente. Se procede así a examinar las declaraciones que César Ruiz Morales y Yaquelín Ramírez rindieran inicialmente, con el objeto de determinar hasta qué punto coinciden y en qué puntos divergen con los otros elementos de convicción que aparecen en las sumarias.

Afirma Cristóbal César Ruiz Morales que cuando la víctima estaba en la esquina de la calle Higinio Durán, observó cuando "... el sujeto conocido como VICENTE BLISS ... con ... una pistola nueve milímetros ... empezó hacer disparos contra el joven BETO ... fueron como tres tiros a sus piernas y lo dejó correr unos cuantos metros y lo comenzó a corretear e hizo otros disparos que no recuerdo cuantos, pero hay (sic) fue que le dio ..." (f. 45). Continúa relatando que Worrell también "le disparó a otro PELAO de los toca y muere ..." (f. 45), y asume que esos hechos ocurrieron porque Worrell se había enfrentado a miembros de la "banda de los toca y muere" que se encontraban en la cantina "Harlem" (f. 46).

Por su parte, Yakelín Ramírez argumenta que "... escuché como ocho detonaciones en forma de ráfagas, segundos después escuché nuevamente disparos pero esta vez fueron dos detonaciones ... me levanté abrí la ventana y observé ... al sujeto conocido por el barrio como VICENTE BLISS el cual llevaba un arma en la mano de esas que usan los proveedores ..." (f. 25).

Cabe resaltar que en siguiente declaración, Cristóbal Ruiz manifestó que no fue testigo presencial de los hechos porque "estaba durmiendo en mi casa" (f. 105), mientras que Yakelín Ramírez también amplió su deposición y solicitó al

funcionario de instrucción que "quite la acusación" que inicialmente había formulado, porque su familia le sugirió que "no ... me meta en problema" (f. 165).

La Sala es del criterio de que la fuerza de los testimonios de Ruiz Morales y Yaquelín Ramírez no disminuyen sus supuestas retractaciones, por cuanto que la deposición de Valentino Stevens y la de Claudins Alfonso Morgan Newton corroboran que el imputado Worrell fue quien utilizó un arma de fuego y realizó varios disparos mortales a Bonilla. En tal sentido, afirma Valentino Stevens que después de que Vicente Worrell salió de la cantina "Harlem", "se encontró con el hoy occiso y como este lo conocía que era de nuestro grupo le dio a él sin saber el occiso de donde venía el problema" (f. 40). Por su parte Claudins Alfonso Morgan Newton relata que, mientras estaba en su apartamento, escuchó "varias detonaciones en forma de ráfaga ...", por lo que salió a la calle para conocer sobre lo ocurrido, y fue en ese momento cuando "me encontré con el sujeto de nombre VICENTE ... en su mano derecha traía una pistola ... al verme me manifestó AH TU ERES TOCA Y MUERE y me disparó" (f. 22).

En vista de que el relato suministrado por Cristóbal César Ruiz Morales y por Yaquelín Ramírez no han revelado dudas que los debiliten, sumado a los cargos que se desprenden de las deposiciones que brindan tanto Valentino Stevens como Claudins Alfonso Morgan Newton, la Sala considera que en autos existen graves indicios que comprometen la responsabilidad de Vicente Worrell Bliss con la comisión del delito de homicidio cometido en perjuicio de Elvis Alberto Bonilla Hernández.

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto de 2 de septiembre de 1997, dictado por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, venido en grado de apelación.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

SE ADMITE RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LUIS CARLOS VEGA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado MARKEL IVÁN MORA BONILLA, Fiscal Delegado Especializado en Delito Relacionados con Drogas de Herrera y Los Santos, interpuso recurso de casación en el fondo contra la Sentencia de trece (13) de enero de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que reforma la sentencia de 1° de octubre de 1997, dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos, mediante la cual declara responsable penalmente al señor **LUIS CARLOS VEGA** y lo condena a la pena de treinta (30) meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por delito contra la Salud Pública.

Al cumplirse el término en lista, ingresa el expediente al despacho, a fin de resolver la admisibilidad del recurso interpuesto.

Se observa, que la decisión concedida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, se ajusta a los presupuestos que establece el recurso de casación, toda vez que fue presentado dentro del término legal, por persona hábil y que la resolución recurrida admite este tipo de recurso, debido a que se trata

de un delito cuya pena excede de dos años de prisión.

Con respecto a los cuatro (4) requisitos formales establecidos en el artículo 2443 ordinal 3 del Código Judicial, como son: historia concisa del caso, la causal invocada, los motivos que la sustentan, las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción; se observa claramente que el LIC. MARKEL IVÁN MORA BONILLA cumple en su escrito con los requisitos establecidos en el artículo anteriormente citado.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada en SALA UNITARIA por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por el LIC. MARKEL IVÁN MORA BONILLA y DISPONE correr traslado del negocio al señor Procurador General de la Nación, por el término de cinco (5) días, para que emita concepto.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA TÉCNICA DE JOSÉ HUMBERTO SOLÍS CIGARRUISTA Y RICARDO ALEXIS SOLÍS, SINDICADOS POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Atendiendo los defectos formales que le fueron advertidos mediante providencia de 13 de abril de 1998 (fs. 434-435), el licenciado Julio Lu Osorio ha presentado libelo en el que corrige el recurso de casación interpuesto contra sentencia de 21 de agosto de 1997, emitida por el **Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial**, que revoca la proferida por el Juzgado Segundo de Circuito Penal de la provincia de Herrera, que absuelve a **José Huberto Solís Cigarruista** y **Ricardo Alexis Solís**, como responsables de delito relacionado con drogas.

Corresponde entonces decidir sobre la admisibilidad de esta iniciativa procesal, a lo que se procede.

Al examinar el libelo que corrige el recurso, se comprueba que ha sido interpuesto contra sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de un proceso por delito de drogas que tipifica el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal, cuya pena es superior a los dos años de prisión, por lo que la interposición del recurso cumple con lo que establece el artículo 2434 del Código Judicial.

En cuanto al examen de los requisitos que enumera el artículo 2443 del Código Judicial, se comprueba que la resolución es de las que admite el recurso, el cual fue presentado en tiempo oportuno. De igual forma, el libelo corregido advierte la presentación de la historia concisa del caso, se invoca una causal, la cual es sustentada con tres motivos y tres disposiciones legales que se dicen infringidas.

Toda vez que la presentación del recurso cumple con los requisitos previstos en los artículos 2434 y 2443 del Código Judicial, resulta inobjetable su admisión.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado por el licenciado Julio Lu osorio, defensor técnico de José Humberto Solís Cigarruista y de Ricardo Alexis Solís, contra la sentencia de 21 de agosto de 1997, emitida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que condena a los imputados a la pena de 50 meses de prisión, como responsables del delito que prevé el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal, y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la nación por el término de ley.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MANUEL CASTILLO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Aquilino Arosemena Ramos anunció y formalizó recurso de casación en el fondo contra sentencia de 25 de septiembre de 1997, proferida por el **Segundo Tribunal Superior de Justicia**. Esta decisión jurisdiccional reforma la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Décimo Quinto Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de condenar a **Manuel Castillo** a la pena de 5 años de prisión como responsable del delito de posesión de drogas con ánimo de venta o traspaso a cualquier título.

Corresponde a la Sala Penal pronunciarse en este momento procesal sobre la admisibilidad de la iniciativa propuesta. A tales efectos se procede a examinar las dos causales que invoca el recurrente.

En cuanto a la primera causal, se observa que el casacionista transcribe en su totalidad el contenido del numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial, sin precisar cuál de las causales previstas en esa disposición legal es la que se adecúa a la sentencia impugnada. La doctrina nacional sostiene que "Al analizar este numeral, se puede afirmar que dicho enunciado contempla dos causales: la primera se registra cuando el error de calificación influye en el tipo contentivo de la figura delictiva en cuestión y la segunda causal ocurre cuando tal calificación conlleva efectos sobre la extensión de la pena" (FÁBREGA P., Jorge y GUERRA DE VILLALAZ, Aura. Casación, Impresora Varitec, S. A., San José, Costa Rica, 1995, pág. 321).

Otro defecto de que adolece la primera causal consiste en que el defensor técnico omite citar las disposiciones legales que considera violadas y los respectivos conceptos de infracción.

La segunda causal aducida corresponde a "Cuando la sanción impuesta no corresponda a la calificación aceptada respecto del delito" (f. 155), la cual viene sustentada en tres motivos, en los que se sostiene básicamente que el procesado Manuel Castillo fue condenado "a la pena de cinco (5) años de prisión, presumiendo que ... se dedica a la venta ilícita de drogas, sin acreditar las circunstancias de que la misma tenía esa finalidad" (f. 155), y que el juzgador de segunda instancia no tomó en cuenta "que para sancionar debe existir plena prueba del delito de venta ilícita de drogas, lo cual no está acreditado en el expediente" (fs. 155-156). A juicio de la Corte esta argumentación no es atinente a la causal invocada, toda vez que con ella no se discute la calificación del hecho punible, el grado de participación que tuvo el agente en el mismo ni las circunstancias que modifican su responsabilidad; tan sólo se impugna la dosificación de la pena impuesta, es decir, el procedimiento utilizado por el juzgador al momento de imponer la sanción penal.

En lo que respecta a las disposiciones legales infringidas, el casacionista alega la infracción del artículo 769 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión (f. 156). No obstante, la Corte resalta que este precepto es simplemente enunciativo de las pruebas que son aceptadas en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que no guarda ninguna relación con la causal que el casacionista invoca.

El defensor técnico alega también la vulneración del artículo 770 del Código Judicial, en concepto de interpretación errónea (f. 157). Sin embargo, la Sala observa que tal afirmación resulta incongruente con el argumento central empleado por el casacionista para fundamentar la infracción que le atribuye a la sentencia impugnada. Así pues, si se sostiene que "el Tribunal ad-quem ... no utilizó las reglas de la sana crítica como base de apreciación del caudal probatorio" (f. 158), el concepto de infracción que debió invocar el recurrente era el de violación directa por omisión, que ocurre cuando se omite la aplicación de la norma al caso o se hace caso omiso de su contenido.

Otra norma alegada como conculcada es el artículo 260 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación, ya que "el mismo no fue aplicado, en la forma que debió hacerse" (f. 159). Según el recurrente, la conducta de su patrocinado debe subsumirse "dentro del primer párrafo del mencionado artículo, como mera posesión simple, tal como lo sentenció el juzgador a quo" (f. 159). Si esa es la intención del casacionista, el concepto de infracción que debió alegar era el de violación directa por comisión, que sobreviene cuando "habiéndose aplicado la disposición que regula la situación planteada en el proceso, se desconoce un derecho claramente reconocido en ella, es decir, que se aplica la norma en forma incompleta", y no el de indebida aplicación, que se origina cuando "el Tribunal, al seleccionar la norma aplicable al caso, comete el error de escoger la que no encaja o engloba la situación del hecho que se ventila" (Registro Judicial, enero de 1997, pág. 272).

Ante la comprobación de que las causales invocadas presentan defectos insubsanables, es del caso declarar la inadmisibilidad del recurso extraordinario propuesto.

En virtud de lo expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado Aquilino Arosemena Ramos contra la sentencia de 25 de septiembre de 1997, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ELÍAS MANUEL ZORRILLA, SINDICADO POR DELITO CONTRA LIBERTAD Y EL PUDOR SEXUAL EN PERJUICIO DE MIRIAM DEL CARMEN VALDÉS GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Miriam H. Jaén de Salinas, defensora de oficio de **Elías Manuel Zorrilla Ruiz**, formalizó recurso de casación en el fondo contra sentencia de 10 de diciembre de 1997 emitida por el **Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial**, mediante la cual se reforma sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de condenar a Zorrilla Ruiz a la pena de 4 años de prisión como responsable del delito de violación carnal cometido en perjuicio

de Miriam del Carmen Valdés Guerra.

El examen del libelo permite comprobar que el recurso ha sido presentado contra sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por un Tribunal Superior de Justicia, dentro de un proceso por delito que tiene señalada pena de prisión superior a dos años.

Se comprueba igualmente que el recurso ha sido presentado en tiempo oportuno; que el libelo contiene la historia concisa del caso y en él se invoca como causal única el "Error de derecho en la apreciación de la prueba" (f. 258). Finalmente, se observa que la causal se apoya en dos motivos debidamente numerados y que las disposiciones legales que se consideran infringidas han sido transcritas y se indica el concepto en que supuestamente han sido conculcadas.

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por la licenciada Miriam H. Jaén de Salinas, defensora de oficio de Elías Manuel Zorrilla Ruiz y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación por el término de cinco días.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR LA FISCALÍA PRIMERA ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL QUE ABSUELVE A ELIZABETH CÓRDOBA POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Rosendo Miranda Sánchez, **Fiscal Primero Especial en Delitos Relacionados con Drogas**, formalizó recurso de casación en el fondo contra sentencia de 7 de marzo de 1997, mediante la cual el **Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial** absuelve a Elizabeth Córdoba Vásquez del delito de posesión agravada de droga ilícita.

HISTORIA DEL CASO

De acuerdo con el recurrente, en la noche del 27 de abril de 1995 funcionarios de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas se aproximaron a la residencia de Elizabeth Córdoba Vásquez, ubicada en el sector de Santa Cruz, Multi N° 2, apartamento N° 2, corregimiento de Curundú, provincia de Panamá, con el propósito de efectuar un allanamiento. Cuando los funcionarios judiciales ingresaron a la residencia, detuvieron a la menor de edad Sabrina Bernal Vergara y a los adultos Silka Cecilia Thomás, Jesselis Cecibel Rivera Vanega, Lineth Hidalgo, así como también a Elizabeth Córdoba Vásquez, quien fue sorprendida cuando arrojaba droga conocida como "crack" en el inodoro. El Juzgado Décimo Segundo Penal del Primer Circuito Judicial declaró responsable a la imputada por la comisión del delito de posesión ilícita de droga con ánimo de venta y la condenó a la pena de 5 años de prisión. No obstante, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial absolvió a Córdoba Vásquez de los cargos formulados en su contra.

CAUSAL INVOCADA

El recurso de casación es en el fondo y se fundamenta en la causal que prevé el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, es decir error de derecho en la apreciación de prueba, la cual tiene lugar "cuando

el juez, al valorar la prueba, no entra a considerar los factores que rigen las reglas de la sana crítica, como son la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia común, sino que de forma caprichosa le da o le niega valor a la prueba, lo que conduce sin duda alguna a un razonamiento equivocado" (Sentencia de 16 de mayo de 1994 dictada por la Sala Penal de la Corte Suprema).

MOTIVOS

Son seis los motivos que sirven de fundamento a la causal invocada, los cuales se resumen a continuación:

1) Que el Tribunal Superior niega el valor probatorio a las declaraciones de "tres miembros de la Policía Nacional y un secretario de la Fiscalía de Drogas", que son contestes en manifestar que "... vieron cuando ELIZABETH CÓRDOBA, tiró la droga en el inodoro" (f. 686), porque esa percepción ocurrió cuando realizaban una irregular diligencia de allanamiento.

2) Que en autos consta la declaración del sargento César Loaiza y de Sebastián Puerta, quienes coinciden en afirmar que observaron cuando la imputada arrojaba la droga al inodoro.

3) Que la resolución impugnada da "plena validez" a las declaraciones de Lineth Hidalgo, Jesselis Rivera y Silka Thomas, quienes tienen interés en faltar a la verdad "por el vínculo de amistad que les une con la sindicada" (f. 688).

4) Que el fallo absuelve a la imputada porque considera que es verdad la denuncia presentada contra el cabo Howell, a quien se le acusa de cobrar quinientos dólares por la libertad de los que fueron aprehendidos en la diligencia de allanamiento.

5) Que la resolución atacada no le otorga valor a otra declaración que rindiera Sabrina Bernal, en la que sostiene que Córdoba era la propietaria del apartamiento y que era ella la quien se deshacía de la droga (f. 687).

6) Que el fallo atacado le otorga pleno valor probatorio a la declaración de la menor Sabrina Bernal, en la cual señala que es la propietaria del inmueble allanado; sin embargo, no atendió que la propia Bernal reconoce que "reside en Gonzalillo de Las Cumbres, sector N° 8 ... lo cual comprueba que esa menor narró la verdad en la ampliación del informativo" (f. 688).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Según el recurrente, resultan infringidos el artículo 904, 906 del Código Judicial y el 260 del Código Penal.

El artículo 904 del Código Judicial se cita como infringido en concepto de violación directa por omisión, ya que el ad-quem negó el valor probatorio a la ampliación de informativo rendido por Sabrina Bernal, en el que señala que la imputada era la propietaria de la droga (f. 688).

Se alega la infracción del artículo 906 del Código Judicial, en forma directa por omisión, por cuanto el fallo atacado otorga plena prueba a las declaraciones de Silka Thomas, Jessica Rivera y Lineth Hidalgo "sin considerar el vínculo de amistad que las une con la sindicada" (f. 689). También porque "descalifica" las declaraciones de la agente Xiomara Edwards, la del cabo Sebastián Puertas, y la del sargento César Loaiza, quienes "no tienen interés en faltar a la verdad, que concuerdan con sus declaraciones en circunstancias de tiempo, modo y lugar con el dicho de la menor Sabrina Bernal Vargas ... en el sentido de que fue la sindicada Córdoba la persona que arrojó la droga en el inodoro" (f. 690).

Finalmente, el recurrente advierte la infracción del párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal, por considerar que se tenía información de que se vendía drogas en el apartamento allanado, lo cual se comprueba con la cautelación de 25.01 gramos de crack, hecho indicativo de que "el material tenía como destino final, la venta" (f. 691).

OPINIÓN DEL PROCURADOR

El Procurador General de la Nación considera acreditados los vicios de injuridicidad expuestos en el primero y segundo motivos, toda vez que el Tribunal Superior no ha comprobado "las aludidas irregularidades" que supuestamente tuvieron lugar durante la diligencia de allanamiento. Por esa razón, considera que se debe otorgar el valor correspondiente a las declaraciones de los funcionarios que intervinieron en la diligencia de allanamiento, pues ellos observaron directamente que "la persona que fue sorprendida tirando la sustancia en el inodoro, era la señora Elizabeth Córdoba (f. 710-712).

De igual manera, el titular del Ministerio Público es del criterio de que se acredita el vicio de ilicitud que se endilga en el tercer motivo, ya que las declaraciones de Sabrina Bernal Vergara, Elizabeth Córdoba, Silka Cecilia Thomas, Jesselis Cecibel Rivera Vanega y de Lineth Hidalgo revelan contradicciones en cuanto a cómo se produjo el allanamiento, lo que "trae como resultado la falta de credibilidad de tales testimonios, por lo que no tienen ... la fuerza probatoria que le ha reconocido el ad-quem, como para desvirtuar lo declarado por los agentes de policía" (fs. 714-715).

También sostiene que en el quinto motivo le asiste la razón al casacionista, en vista de que la retractación de la menor Sabrina Bernal Vergara se compadece con "lo declarado desde un inicio por los agentes policiales" (f. 719).

Sobre el sexto y último motivos, observa que según el recurrente el Tribunal Superior omitió o ignoró un detalle importante para decidir la causal, argumento que a su juicio no se compadece con la causal que invocada, por lo que considera que no prospera la formulación de ese motivo (f. 720).

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, manifiesta que no puede entrar a debatir la infracción del artículo 904 del Código Judicial, ya que si el propio recurrente reconoce que la declaración de Sabrina Bernal Vergara no fue tomada "en cuenta por el juzgador para fundamentar su sentencia, ... mal se puede entrar a debatir como valorado en forma incorrecta ni mucho menos que tal valoración errada haya incidido en la parte resolutiva de la sentencia impugnada vía casación" (f. 723).

Sobre la alegada violación del artículo 906 del Código Judicial, afirma que "la misma se produce ... ante las contradicciones que se producen entre lo declarado por las jóvenes Thomas, Rivera y Lineth Hidalgo ... el juzgador debió tomar en cuenta el vínculo existente entre éstas y la imputada Elizabeth Córdoba lo que da pie a pensar en su interés a faltar a la verdad ..." (f. 724). Agrega que si el Tribunal Superior estaba convencido de que había que absolver a la imputada de la comisión del hecho, resulta "una contradicción cuando en su fallo ... termina decretando el comiso del dinero incautado en el allanamiento ..." (f. 726).

El opinante finaliza su alegación consignando el criterio de que el fallo atacado infringe el artículo 260 del Código Penal, de manera directa por omisión, "porque se dejó establecido el error de derecho en la apreciación de los medios probatorios aportados al proceso con los cuales se comprueba tanto el acto delictivo como la responsabilidad de Elizabeth Córdoba con el ilícito", por todo lo cual solicita a la Sala que se case el fallo recurrido (f. 726).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

A) Los motivos:

Como quiera que los motivos aducidos por el recurrente se encuentran íntimamente relacionados, es del caso analizarlos conjuntamente, ya que el argumento medular gira en torno al establecimiento de si el Tribunal Superior valoró apropiadamente las declaraciones de las personas que se encontraban dentro del apartamento allanado y que niegan que la droga sea de la sindicada Córdoba Vásquez, y la de los miembros de la Policía Nacional que participaron en el allanamiento y que afirman que la sindicada Elizabeth Córdoba Morales era la

propietaria de la droga incautada.

El examen de los testimonios rendidos por las cuatro personas que, junto con Córdoba Vásquez, fueron aprehendidas dentro del apartamento allanado revela que, según la menor Sabrina Bernal Vergara, cuando la Policía Nacional se presentó al apartamento "procedí a botar las piedras al baño" (f. 15). En el mismo sentido, Lineth Hidalgo afirma que Bernal Vergara es la propietaria de la droga, ya que la "vi correr a SABRINA hacia el baño ... " (f. 25). Silka Cecilia Thomas también señala que observó cuando Bernal Vergara "... corrió hacia el baño para botar su droga ..." (f. 22).

Ahora bien, la deponente Jesselis Cecibel Rivera Vanega explica que cuando los agentes del orden público ingresaron al inmueble "... SABRINA se quedó dentro del cuarto los policías revisaron todo el cuarto y luego nos llevaron a la cuartel de la policía y estando en el cuartel la joven SABRINA MANIFESTÓ que la droga era de ella" (f. 24). En cuanto a Elizabeth Córdoba Vásquez, al rendir declaración indagatoria manifestó que la Policía entró al apartamento y "luego cuando llegaron a la DIIP nos informaron que habían encontrado droga y luego SABRINA nos comunicó que esa droga era de ella" (f. 19).

La Sala advierte la existencia de significativas incongruencias y contradicciones en la versión que de los hechos ofrecen la sindicada y las otras personas aprehendidas dentro del apartamento allanado. Por una parte, y como viene visto, mientras que Lineth Hidalgo y Silka Cecilia Thomas afirman que Sabrina Bernal Vergara fue quien corrió hacia el inodoro, Jesselis Cecibel Rivera Vanega y la sindicada Córdoba Vásquez afirman que la Policía solamente revisó el apartamento y que fue en la estación de Policía cuando se enteraron de que se había encontrado droga en el apartamento allanado. Estas primeras deponentes confirman la versión de que Sabrina Bernal Vergara fue quien corrió hacia el baño.

En conclusión, si tomamos en consideración que Sabrina Bernal Vergara, Silka Cecilia Thomas, Jesselis Cecibel Rivera Vanega, y la sindicada Elizabeth Córdoba Vásquez se encontraban en el apartamento allanado, a primera vista resulta lógico pensar que, sin necesidad de concierto entre ellas, puedan coincidir en la forma de percepción. Sin embargo, contra la coincidencia que surge de esas deposiciones, que concurren a acreditar que Córdoba Vásquez no era la propietaria de la droga emerge la declaración de Sabrina Bricel Bernal Vergara, rendida en la jurisdicción especial de menores, en la que advierte que "la joven ELIZABETH CÓRDOBA me tenía obligada a que yo me echará la culpa de que dijera que la droga era mía, pero en realidad la droga era de su propiedad" (f. 474).

El contenido de esta retractación coincide con lo declarado por quienes practicaron la diligencia de allanamiento. Así Flavio Gaspar Sánchez, quien fungía como secretario de la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas, en el sentido de que cuando llegaron al apartamiento que se iba revisar observó cuando una "mujer la cual posteriormente identificamos como ELIZABETH CÓRDOBA ... corría hacia el baño, con un paquete en la mano y se introdujo al mismo ... Rápidamente ... una de las unidades del DIIP se introdujo al baño, logrando rescatar parte de la sustancia que esta joven intentó desaparecer ..." (f. 495).

Por su parte el agente de la Fuerza Pública Sebastián Puertas manifestó que cuando entró al apartamento observó cuando "una de las ocupantes se encontraba en el inodoro en actitud de estar echando algo al servicio. Por esto mi persona junto a la cabo EDWARDS procedimos a neutralizar a la misma y yo personalmente procedí a introducir la mano en el inodoro, extrayendo de la misma una sustancia pastosa o cremosa que presumimos fuese droga o piedra. La ciudadana que fue vista botando la sustancia por el baño, resultó ser la ciudadana ELIZABETH CÓRDOBA, por lo que se procedió a recoger todas las evidencias ..." (fs. 74; 483). Otro agente que participó en la diligencia de allanamiento, César Loaiza, manifiesta que "... la señora CÓRDOBA procedió en forma violenta a tirar algo al servicio, la misma siendo neutralizada por la agente XIOMARA EDWARDS a lo que tuvo el cabo PUERTAS que introducir la mano al inodoro y sacar parte de la sustancia que se presume sea DROGA" (f. 57). En igual sentido, Xiomara Edwards afirma que cuando entraron

al inmueble "el Sgto. LOAIZA y Cabo PUERTAS lograron visualizar a una de las ocupantes botando por el inodoro cierta cantidad de sustancia que se presume sea Droga. Dicha señora resultó ser ELIZABETH CÓRDOBA VÁSQUEZ ... a la cual tuve que neutralizar por su comportamiento agresivo ..." (f. 61).

A la luz de este examen de las probanzas de autos, considera la Sala que la sentencia impugnada no realizó una adecuada apreciación de tales evidencias, según las cuales sobre la imputada pesa una incriminación grave y directa que compromete la responsabilidad penal que el recurrente le atribuye.

B) Disposiciones legales infringidas.

Sobre el artículo 904 del Código Judicial. La Corte considera fundada la alegada infracción de esta norma, toda vez que el juzgador de segunda instancia no valoró de conformidad con las reglas de la sana crítica el informativo que Sabrina Bricel Bernal Vergara rindiera ante el Juzgado Primero Seccional de Menores, ya que ese elemento probatorio corrobora la versión de los agentes judiciales y policiales que participaron en la diligencia de allanamiento.

Como viene expuesto en el análisis de los motivos, en lo declarado por Sabrina Bernal Vergara, Silka Cecilia Thomas, y de Jesselis Cecibel Rivera Vanega se evidencian notables contradicciones comprobatorias de que la sentencia atacada ha infringido el principio de la sana crítica que prevé el artículo 906 del Código Judicial, al incurrir en una errada valoración de la fuerza probatoria de esos testimonios, arrojando ello que el fallo no sea cónsono con la realidad procesal.

Por otra parte, las declaraciones de Flavio Gaspar Sánchez, Sebastián Puertas y de Xiomara Edwards coinciden en afirmar que Elizabeth Córdoba Vargas fue quien arrojó una sustancia cremosa al inodoro, la que parcialmente recuperada, según el Laboratorio Técnico Especializado en drogas de la Policía Técnica Judicial, en "fragmentos de sustancia compacta color crema" POSITIVAS para la determinación de COCAÍNA (CRACK) en la cantidad de 25.01 Gramos" (fs. 12-39).

Resulta claro entonces que la sentencia impugnada de manera errónea arribó a una conclusión que no corresponde con la realidad de que dan cuenta las sumarias, como lo advierte el recurrente. La Sala entonces considera que la imputada realizó la conducta que prevé el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal, que tiene un intervalo penal de 5 a 10 años de prisión. Para la individualización de la pena aplicable deben ser considerados los factores que contempla el artículo 56 del Código Penal, por lo que se considera prudente fijar la pena en 5 años de prisión e inhabilitar a la imputada para el ejercicio de funciones públicas y cargos de elección popular por el término de dos años, luego de cumplida la pena principal y ordenar el comiso de veintisiete Balboas con ochenta centavos aprehendidos durante el allanamiento, suma que se pone a disposición de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con drogas (CONAPRED). Se computa como parte cumplida de la pena de prisión impuesta el tiempo cumplido de detención preventiva, que corre desde el día 27 de abril de 1995 hasta el 16 de abril de 1997, fecha en que se comunicó a la Directora del Centro Femenino de Rehabilitación que Córdoba Vásquez había sido absuelta por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en grado de apelación.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 7 de marzo de 1997, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y CONDENA a ELIZABETH CÓRDOBA VÁSQUEZ a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 2 años, como responsable del delito de posesión ilícita de drogas agravadas, que prevé el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO QUE SE LE SIGUE A FAUSTO CAICEDO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Cumplidos los trámites de sustanciación y verificada la audiencia correspondiente, pasa la Sala Penal a decidir sobre el recurso extraordinario de casación en el fondo presentado por la licenciada Aida Jurado Zamora, en representación de **Fausto Caicedo**, contra la sentencia de 23 de abril de 1997 emitida por el **Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial**, que reformó la decisión de primera instancia en el sentido de condenar a Caicedo a la pena de 8 años de prisión, como responsable del delito de tráfico ilícito de drogas en grado de tentativa.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

Según expone la casacionista, las sumarias contra Fausto Caicedo se iniciaron el 6 de mayo de 1994 como consecuencia de informe rendido por la Dirección General de Aduanas, que comunica la aprehensión de Caicedo junto con Manuel Antonio Arroyo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, momentos después que intentaron transportar una carga contentiva de la sustancia ilícita conocida como cocaína hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Como consecuencia de la investigación sumarial, el Juzgado Décimo Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante auto de 6 de julio de 1995, decretó la apertura de causa criminal contra Caicedo y otros, como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo V, Título VII, Libro II del Código Penal, es decir, por delito contra la salud pública relacionado con drogas.

Realizada la audiencia oral, el juzgador de primera instancia, mediante sentencia calendada 12 de septiembre de 1996, decidió absolver a Caicedo de los cargos que le fueron endilgados, decisión que fue apelada por la representante del Ministerio Público. En virtud del ejercicio de ese medio de impugnación, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante resolución de 23 de abril de 1997, condenó a Caicedo a la pena de 8 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas en grado de tentativa, fallo de segunda instancia contra el cual se recurre ahora en casación.

CAUSAL INVOCADA

En el libelo de casación se invocan dos causales de fondo, correspondientes a: "Cuando sancione un delito, no obstante existir alguna circunstancia eximente de responsabilidad" (f. 562) y "Cuando la sanción impuesta no corresponde a la calificación aceptada respecto del delito" (f. 565). Sin embargo, esta Sala Penal, mediante resolución judicial de 28 de noviembre de 1997, decidió admitir el recurso sólo con relación a la segunda causal aducida, a lo que habrá de limitarse el examen y decisión del recurso.

MOTIVOS

Son cuatro los motivos en que se fundamenta la causal admitida, de cuyas consideraciones se infiere lo siguiente:

En el primer motivo la casacionista plantea que el tribunal ad-quem "declaró culpable a FAUSTO CAICEDO del delito de Tentativa Acabada del Tráfico Ilícito de Drogas, imponiéndole la pena de ocho (8) años de prisión" (f. 565).

En el segundo motivo la recurrente sostiene que "El Delito de Tráfico Ilícito de Drogas, a la fecha de los hechos tenía fijada pena de 8 a 15 años de prisión" (f. 565).

En el tercer motivo se argumenta que la sentencia impugnada "dosificó la pena principal a partir del mínimo previsto, es decir 8 años de prisión. No obstante omitió disminuir la misma por razón de la tentativa" (f. 565).

En el cuarto motivo se indica que el tribunal de segunda instancia "no adecua la sanción impuesta a la calificación hecha del delito en atención a su fase ejecutiva, la cual no se consumó por causas independientes del agente" (f. 566).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

Según la recurrente, resultan infringidos los artículos 255 y 60 del Código Penal.

El artículo 255 se cita como infringido en concepto de violación directa por comisión, ya que "La sentencia califica la conducta de FAUSTO CAICEDO, en grado de tentativa", situación que a juicio de la casacionista "hace surgir el derecho para el reo de una dosificación inferior a la impuesta en la sentencia recurrida" (f. 566).

Se alega la infracción del artículo 60, de manera directa por omisión, toda vez que "el Tribunal ... omite disminuir lo que corresponde en razón de la tentativa la cual se reprime en un intervalo no menor de un tercio del mínimo ni mayor de dos tercios del máximo" (f. 567).

OPINIÓN DEL PROCURADOR

El Procurador General de la Nación, al referirse a los motivos expuestos en el libelo de casación, considera que en cuanto a los dos primeros "no contienen el obligante cargo de injuridicidad que ellos deben reunir" (f. 574). En lo concerniente al tercer y cuarto motivos, el representante del Ministerio Público sostiene que "el proceder del tribunal ad-quem, se ajusta a derecho", pues atendiendo lo preceptuado en el artículo 60 del Código Penal "la pena a imponer debía oscilar entre treinta y dos (32) meses y ciento veinte (120) meses, por lo que la pena de noventa y seis (96) meses de prisión (8 años), se encuentra dentro del intervalo penal establecido para el caso de la tentativa acabada por el delito de tráfico ilícito de drogas" (f. 577).

Al referirse a las disposiciones legales infringidas, el Procurador señala que "la impugnante se equivoca al indicar el concepto en que se infringió, según su parecer, el artículo 255", ya que la pena impuesta se encuentra dentro de los parámetros que establece dicha disposición penal (f. 578). En cuanto al artículo 60 del Código Penal, indica que no se ha infringido "por las consideraciones que expusimos al pronunciarnos sobre el tercer y cuarto motivo, por lo que nos abstenemos de entrar a analizar nuevamente este planteamiento de la casacionista" (f. 579). Concluye el Procurador recomendando que la sentencia atacada no debe ser casada (f. 580).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Por estar íntimamente relacionados, los motivos tercero y cuarto serán analizados conjuntamente. En cuanto a los motivos primero y segundo, estos no contienen hechos de los que se derive la injuridicidad de la sentencia atacada, por lo que no merecen análisis alguno.

La casacionista cuestiona básicamente que el tribunal ad-quem debió atender, al momento de proceder a dosificar la sanción penal que le correspondía a Caicedo, el contenido del artículo 60 del Código Penal, en virtud de la calificación hecha del tipo penal.

La Sala observa que el Segundo Tribunal del Primer Distrito Judicial consideró que Caicedo era cómplice primario "del delito de tentativa de tráfico

ilícito de drogas en la modalidad de intentar sacar del país 68,770 gramos de cocaína" (f. 506). Se deja expuesto en la sentencia impugnada que la norma penal infringida por el procesado "es el artículo 255 del Código Penal de conformidad con el texto original, antes de la reforma introducida por el artículo 2 de la Ley 13 de 1994 ... cuya sanción oscila de 8 a 15 años de prisión" (f. 506).

Ahora bien, esta Superioridad advierte que al momento de dosificar la sanción correspondiente, el tribunal ad-quem fijó la pena base (8 años de prisión) de conformidad con el artículo 255 del Código Penal, en lugar de adecuar el tipo penal de tráfico de drogas descrito en esa disposición legal al texto del artículo 60 del Código Penal, toda vez que, como se indica en la misma sentencia, el procesado es responsable, en calidad de cómplice primario, "del delito de tentativa de tráfico ilícito de drogas" (f. 506). Lo correcto era entonces referirse primero al intervalo penal para la conducta delictiva de tráfico de drogas en grado de tentativa, para luego fijar, dentro de ese parámetro, la sanción que le correspondía a Caicedo. Sin embargo, el procedimiento utilizado por el juzgador de segunda instancia permite inferir que la pena se aplicó en base al tipo penal de tráfico de drogas, como conducta delictiva consumada. Es así que en la sección que guarda relación con el fundamento de derecho de la sentencia condenatoria que se impugna (f. 509), ni siquiera se hace mención de las disposiciones legales que versan sobre la figura de la tentativa.

Las anteriores consideraciones ponen de manifiesto que, ciertamente, la sentencia atacada ha infringido los artículos 255 y 60 del Código Penal, el primero en forma directa por comisión y el segundo por omisión, toda vez que la imposición de la pena no se hizo de conformidad con los criterios y dosificación previstos para el tipo penal infringido por el procesado Fausto Caicedo (delito de tráfico de drogas en grado de tentativa).

Una vez examinados los cargos que le formula la casacionista a la sentencia atacada, se pasa a dosificar la pena correspondiente. Con tal propósito, se advierte que en el expediente quedó demostrado que el día 5 de mayo de 1994 Fausto Caicedo y Manuel Arroyo viajaban abordo de un camión de la compañía Servicio de Aduana y Acarreo Selhorn, el cual fue interceptado en el área de carga del viejo terminal del aeropuerto Internacional de Tocumen por inspectores de la sección de narcóticos de la Dirección General de Aduanas. Al ser requisado el vehículo, se logró detectar en su interior varios bultos contentivos de cocaína en la cantidad de 68,770 gramos, la que iba a ser enviada a los Estados Unidos.

Como se observa, el procesado consumó el iter de la conducta previa al transporte la droga hacia otro país; sin embargo, no se produjo el resultado deseado por la intervención de los funcionarios de Aduanas, quienes interceptaron el camión con la mercancía. A juicio de la Corte, este comportamiento guarda relación con la figura de la tentativa acabada, que "tiene lugar cuando se han realizado todos los actos ejecutivos, sin que se produzca la consumación del hecho punible; se refiere a la conducta que la doctrina identifica con el nombre de delito frustrado, hoy atípica en nuestra legislación penal pero que la jurisprudencia asimila a la tentativa de delito" (Registro Judicial, agosto de 1994, pág. 250).

Como viene dicho, la conducta del procesado Caicedo encuentra adecuación típica en el tipo penal de tráfico de drogas en grado de tentativa. Si tomamos en cuenta la pena que establece el artículo 255 del Código Penal (8 a 15 años de prisión) y lo adecuamos al contenido del artículo 60 de la misma excerta legal, el intervalo penal para este hecho punible resulta de 32 a 120 meses de prisión. A los efectos de la individualización de la pena aplicable deben ser atendidos los factores previstos en los artículos 56, 57, 58 y 264 del Código Penal. Con tal fundamento se considera prudente señalar como pena base la de 72 meses de prisión, resultando en esa misma cuantía la líquida a imponer ya que del proceso no se desprende la concurrencia de alguna circunstancia modificativa.

En razón de lo expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 23 de abril de 1997 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido de CONDENAR a Fausto Caicedo a la pena de 72

meses de prisión, como responsable del delito de tráfico de drogas en grado de tentativa, y la CONFIRMA en lo demás.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A DEMETRIO MUDARRA MENDOZA, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación Judicial, con motivo de la presentación de un recurso de casación, el expediente que contiene el proceso penal seguido a **DEMETRIO MUDARRA MENDOZA**, por delito contra la Salud Pública.

Una vez ingresado el expediente, se procedió de conformidad a lo dispuesto por el artículo 2443 del Código Judicial, fijando en lista el proceso con la finalidad de que las partes tuvieran conocimiento del ingreso del expediente al tribunal de casación.

Vencido el término de lista es necesario resolver sobre la admisibilidad del recurso de casación presentado en este caso y advierte la Sala que se ajusta a los requisitos externos referidos al principio de oportunidad, a la legitimación material y objetiva y su presentación por persona hábil.

En cuanto a los requisitos establecidos por el artículo 2443 del Código Judicial, la Corte advierte errores en la formalización del recurso, que impiden su admisión.

En primer lugar, señalamos que el escrito debió dirigirse al Magistrado Presidente de la Sala Penal, no a todos los Magistrados de la Sala, como hace el recurrente en este caso.

De otro modo, no se indica si el recurso es en la forma o en el fondo, más del análisis objetivo e integral del recurso se concluye que se trata de un recurso en el fondo. Sin embargo, se aprecia que a lo largo de todo el escrito se procede a realizar un alegato propio de un recurso de apelación de una instancia ordinaria.

Por otra parte, en reiteradas ocasiones esta Sala ha señalado que de la historia concisa deben surgir los vicios que fundamentan la causal o causales invocadas. Ello significa que la misma debe estar en armonía con la causal o causales invocadas al igual que con las disposiciones legales infringidas.

En el caso que nos ocupa, la historia concisa del caso, además de no estar en armonía con la causal invocada, no ha sido desarrollada conforme a los principios jurisprudenciales que gobiernan el Instituto de la Casación, pues de su lectura se evidencia que de ella no surge vicio de injuridicidad alguno. Además, es extensa y se incluyen párrafos ajenos al concepto de síntesis o historia del caso, con olvido de que la misma debe ser lacónica, objetiva, precisa y tener la virtud de indicar el vicio para que se infiera la injuridicidad de la sentencia y la o las causales que se invocan. El recurrente, en el caso presente narra situaciones y hechos que rodearon el proceso, transcribe párrafo de un libro, parte de un fallo de la Corte, cita normas legales y expresa opiniones de índole subjetiva, todo lo cual es ajeno a este aparte.

Por otro lado, a pesar de que la causal ha sido invocada correctamente, los motivos no están relacionados con la causal invocada, pues cuando se alega como fundamento del recurso la causal número 11 del artículo 2434 del Código Judicial -Haber cometido error de derecho al determinar la participación y correspondiente responsabilidad del indagado, en los hechos que la sentencia da por aprobados- no se cuestiona la responsabilidad penal del imputado, que se acepta, sino cuál fue la participación que se tuvo en el hecho, pues "si el juzgador comete error de derecho al determinar la participación y la correspondiente responsabilidad del imputado, se presentaría esta causal como el instrumento procesal idóneo para enmendar el error cometido tanto en la calidad o grado de participación del imputado como en la responsabilidad que establece la ley, ya que el proceso de individualización penal exige como una garantía procesal del imputado que se le adecúe o tase la pena de acuerdo a esa participación" (GUERRA DE VILLALAZ, Aura E., Casación Penal, Panamá, 1995, página 325).

En cuanto a las disposiciones legales infringidas se cita el artículo 905 del Código Judicial, manifestándose una opinión personal de orden subjetivo, como si se tratara de una alegato de instancia, todo lo cual es contrario a la técnica que exige esta sección y el señalamiento que se hace del concepto de la infracción tampoco es congruente con la causal invocada.

De otro modo, no se cita la norma sustantiva penal que se estima infringida como consecuencia de las normas adjetivas que se consideran violadas.

Es cierto que la casación es un recurso complejo cuya formalidad ha sido disminuida y flexibilizada por la jurisprudencia en los últimos tiempos, con el ánimo de evitar cualquier obstáculo formalista que atente contra el derecho de tutela de los asociados, pero no obstante sigue siendo un medio impugnativo extraordinario que requiere ser formalizado conforme a una técnica especial, que lo hace ser, precisamente, distinto a cualquier medio ordinario de impugnación.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el licenciado ALCIBIADES CAJAR MOLINA, en su condición de defensor del señor DEMETRIO MUDARRA MENDOZA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A FELIPE CAMARGO, NIVALDO MADRIÑÁN APONTE, LUIS ANTONIO CÓRDOBA MORALES, LUCINO MIRANDA MORENO, ARCENIO ODA ALAÍN, ALFONSO MADRID Y OTROS, POR DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL, EN PERJUICIO DE EDUARDO SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Luego de celebrada la correspondiente audiencia oral en la que los recurrentes sustentaron sus recursos de casación, debe la Sala pronunciarse sobre el fondo de los mismos, para resolver en forma definitiva el proceso seguido a los señores **FELIPE CAMARGO**, **ALAÍN ODA**, **RUBÉN BULGIN y OTROS** por la comisión de delito contra la libertad individual cometido en perjuicio de **EDUARDO SÁNCHEZ PEÑA.**

Las constancias procesales evidencian que EDUARDO SÁNCHEZ PEÑA denunció las torturas de que fue víctima mientras estaba privado de la libertad, en instalaciones adscritas a las antiguas Fuerzas de Defensa, por lo que se investigó a número plural de personas y luego del proceso correspondiente en

segunda instancia se declaró responsable del delito a los señores FELIPE CAMARGO, NIVALDO MADRIÑÁN, ALAÍN ODA, LUCINIO MIRANDA Y RUBÉN BULGIN, quienes fueron condenados por delito contra la Libertad Individual agravado por la comisión de torturas, castigo infamante, vejaciones u otras medidas arbitrarias que se prevén para el mismo y sancionados todos ellos con pena privativa de libertad de cinco años de prisión y la correspondiente inhabilitación que opera como pena accesoria.

Para resolver el fondo de los recursos admitidos por esta Sala el pasado 20 de febrero de 1997, debe estudiarse por separado cada recurso, siguiendo el orden utilizado en la resolución antes mencionada, por lo que es preciso analizar las causales invocadas, los motivos que fundamentan cada una de ellas, las disposiciones que se alegan fueron infringidas y el concepto en que se aduce lo han sido.

Antes del estudio de rigor, la Sala advierte que omite toda alusión al concepto del Procurador General de la Nación, ya que el mismo fue emitido el 21 de abril de 1997, cuando ya habían transcurrido los cinco días para el traslado de rigor, pues en la Secretaría de la Sala consta que dicho expediente ingresó al despacho del Procurador el día 24 de febrero de 1997 (fojas 2094 vuelta).

RECURSO A FAVOR DE FELIPE CAMARGO

La defensa de FELIPE CAMARGO sustentó su recurso en base a varias causales de fondo y una de forma, habiendo admitido la Sala el recurso de casación en la forma y el de fondo en lo que respecta a las causales segunda y tercera únicamente, por lo que el examen del recurso se limitará a los aspectos antes mencionados.

A juicio de la defensa de CAMARGO, la resolución del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial debe ser casada por razones de forma, ya que a su parecer el Tribunal carecía de competencia para conocer de esta causa, ya que contra su representado se promovieron numerosas causas y a pesar de haber pedido la correspondiente acumulación de los mismos, la misma no se ordenó.

Como base para la causal antes mencionada, el defensor sostuvo cuatro motivos que giran en torno al desconocimiento de la solicitud de acumulación, tanto en la primera como en la segunda instancia, lo que a su juicio justifica la nulidad de lo actuado y la reposición del proceso en la etapa que corresponda.

Para sustentar su causal, el recurrente adujo los artículos 2001, 2002, 2003, 2294 y 1974 del Código Judicial que tratan de la acumulación de procesos los primeros y de la nulidad genérica por incumplimiento del proceso debido la última.

A juicio de la Sala, la causal aducida no tiene fundamento alguno, pues como en ocasión anterior se señaló, con respecto al mismo imputado en otro proceso, los tribunales de primera y segunda instancia que han actuado en esta causa son los tribunales competentes para conocer de la misma y no se ha producido ninguna violación a las normas de acumulación o de nulidad al proceso debido, ya que sólo deben acumularse procesos cuando la misma no implique gran retardo a la administración de justicia. La Sala no puede dejar de reconocer que el contenido del artículo 2003 del Código Judicial autoriza al juzgador para utilizar su criterio para decidir la acumulación, lo que no puede servir de base para aducir la falta de competencia en cuestión.

El recurso de casación en la forma, por tanto, debe ser negado.

Respecto del recurso de casación en el fondo, se admitieron solamente dos causales de las aducidas por el defensor del señor CAMARGO. Las mismas giran en torno al error de derecho en la apreciación de la prueba (artículo 2434, numeral 5 del Código Judicial).

La causal de error de derecho en la apreciación de la prueba se estructura por el recurrente en base a cinco motivos, los que se dirigen a demostrar que el tribunal de segunda instancia se equivocó en la apreciación de los testimonios

de LESLIE LOAIZA, JUAN DE LEÓN, CARLOS PUYOL, ALEXANDER CUBILLA, DOMICIANO HERRERA Y CARLOTA FUENTES, pues a pesar de ser testigos de referencia se les dio pleno valor a dichas versiones testimoniales, motivos que implican serios cargos de injuridicidad que de ser comprobados justifican tener que acceder al recurso impetrado.

Cómo disposiciones legales infringidas, el recurrente adujo los artículos 896, 904, 908, 909, 967 y 2144 del Código Judicial y el Artículo 160 del Código Penal.

De acuerdo con el recurrente, la sentencia de segundo grado infringió el artículo 896 del Código Judicial, ya que al conceder valor a las declaraciones de SÁNCHEZ PEÑA y CARLOS WORREL desconoció el citado artículo según el cual son testigos sospechosos el denunciante, el amigo íntimo o el enemigo manifiesto que tienen interés en el resultado del proceso.

A la Sala no le cabe duda, en este caso, que SÁNCHEZ PEÑA tiene interés en el proceso, pues es el denunciante que sufrió algunas lesiones cuando fue detenido o a consecuencia de tal detención, situación que también se aplica a WORREL quien en su oportunidad presentó denuncia contra todos los procesados por los mismos cargos y que motivó una sentencia de este tribunal de casación en diciembre de 1996.

Es obvio, por tanto, que el tribunal de segunda instancia no tomó en cuenta el contenido del artículo en cuestión, por lo que se ha producido una violación del mismo por omisión.

También se alega como infringido el artículo 904 del Código Judicial, ya que se alega que las pruebas aportadas el proceso han sido valoradas en forma contraria a los principios de la sana crítica.

Es opinión de la Sala, que al recurrente le asiste razón, ya que las pruebas que se utilizan para condenar a CAMARGO han sido apreciadas desconociendo los principios de la sana crítica.

No es posible darle valor a los testimonios antes mencionados sin desconocer que las reglas de la lógica y la experiencia obligan al tribunal a sopesar detenidamente tales medios probatorios, sobre todo si el denunciado intervino en la investigación procesal contra el denunciante y éste fue condenado en dicha causa.

De acuerdo al recurrente, también se infringió el artículo 908 del mismo cuerpo legal citado, ya que se le dio valor al testimonio contradictorio del denunciante, pero no se indica que declaración del mismo implica tal contradicción respecto a otra, por lo que debe rechazarse la infracción al artículo en referencia.

Por otra parte, el defensor de CAMARGO también señala que se ha infringido el artículo 909 del Código Judicial, pues se tomó como válido el testimonio de personas que declaran de referencia, sin haber presenciado los hechos esenciales de declaración.

En su explicación sobre la infracción del artículo antes mencionado, el recurrente cita las declaraciones de LESLIE LOAIZA, CARLOS PUYOL, DOMICIANO HERRERA Y CARLOTA FUENTES y se aprecia por la Sala que las mismas no contienen cargo alguno contra CAMARGO ni contra nadie, pues dichas personas manifiestan no haber estado presente cuando se produjeron las lesiones que motivaron este proceso, por lo que debe considerarse infringido el artículo 909 como bien señala el recurrente.

También se alegó como infringido el artículo 2144 del Código Judicial, ya que a juicio del casacionista no se apreció el testimonio según las reglas de la sana crítica, cargo que está comprobado como quedó expuesto con anterioridad al ocuparnos del artículo 909 del mismo Código.

Finalmente, el recurrente también aduce como violado en artículo 160 del

Código Penal, norma material que consagra el delito contra la libertad individual que implica torturas y otros actos indebidos contra personas privadas de libertad.

Las consideraciones expuestas respecto de la apreciación de los testimonios antes mencionados dan base para arribar a la conclusión que el citado artículo del Código Penal fue violado por el juzgador de segunda instancia.

En este proceso, se condenó a CAMARGO por un delito que no está comprobado éste haya cometido, por lo que la infracción del artículo 160 de nuestra codificación penal está acreditada.

Debe casarse, por tanto, el fallo recurrido respecto del señor FELIPE CAMARGO en base a la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba, siendo innecesario examinar la segunda causal de fondo aducida por el casacionista.

RECURSO A FAVOR DE ALAÍN ODA

El recurso de casación en favor de ALAÍN ODA se interpone en el fondo teniendo como base una causal única, la de error de derecho en la apreciación de la prueba, se aducen los motivos que la sustentan, las disposiciones que se dicen infringidas y el concepto de dicha infracción (Artículo 2434, numeral 1 del Código Judicial).

Los motivos que el recurrente aduce son dos, a saber: por un lado, que su representado fue condenado con el sólo señalamiento directo del denunciante, quien sostuvo que ODA "le metió una patada en el estómago (sic)", lo que implica darle a dicha denuncia un valor probatorio que la ley no le concede; por otra parte, que la sentencia recurrida le atribuye un valor inexistente a la declaración del denunciante sin apreciar válidamente los testimonios de ALEXANDER CUBILLA y DOMICIANO HERRERA y la indagatoria del propio acusado ODA.

Como disposiciones infringidas, el recurrente aduce los artículos 904 y 896 del Código Judicial y los artículos 38 y 160 del Código Penal.

En opinión del defensor de ALAÍN ODA los artículos 904 y 896 del Código Judicial han sido infringidos por el Tribunal Superior al valorar erradamente los elementos probatorios antes mencionados en los motivos, ya que el tribunal de segunda instancia no valoró las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, ni tomó en cuenta las circunstancias y motivos que disminuyen la fuerza de dichas declaraciones.

La Sala comparte los señalamientos del defensor de ODA en el sentido que el Segundo Tribunal Superior no apreció las declaraciones de EDUARDO SÁNCHEZ PEÑA en debida forma, ya que se trata de un testigo que denunció malos tratos recibidos supuestamente de los denunciados, y tampoco hay en el proceso ningún otro testimonio válido que corrobore la versión del ofendido.

En efecto, aunque varios testigos declaran haber visto golpeado al denunciante SÁNCHEZ PEÑA en las instalaciones del antiguo DENI de Ancón, nadie dice haber visto a o a las personas que le infringieron tales maltratos.

Sólo CARLOS WORREL BEST (fs. 418-421) dice que vio a BULGIN, NEFTALÍ MUÑOZ y CAMARGO golpear a SÁNCHEZ, aunque en otra parte de esa misma declaración dijo que sabía que otros lo golpearon pero él (WORREL) no los había visto cuando maltrataban al señor SÁNCHEZ PEÑA.

Por otra parte, respecto del artículo 896 del mismo Código, la Sala concuerda con el recurrente en que el denunciante es un testigo sospechoso, al igual que lo es WORREL BEST, pues ambos interpusieron denuncias contra los procesados por los mismos delitos y como bien sostuvo la Sala al resolver el recurso de casación interpuesto en el proceso iniciado por WORREL (Sentencia de 24 de diciembre de 1996, Registro Judicial, Diciembre de 1996, pág. 196), la sola versión de un solo testigo no puede fundar una sentencia condenatoria y los supuestos indicios de presencia y oportunidad que se esbozan en la sentencia de

segunda instancia no son tales, ya que los agentes involucrados tenían bajo interrogatorio al ofendido, por supuesto delito contra la personalidad jurídica del Estado, lo que justifica su presencia en dichos interrogatorios, cargos que dieron lugar al pronunciamiento de una sentencia condenatoria dictada en su oportunidad contra SÁNCHEZ PEÑA.

En opinión del defensor también se infringieron los artículos 38 y 160 del Código Penal, ya que a su representado se le consideró como autor del delito contra la libertad antes mencionado, a pesar de que en su opinión ODA no ha cometido tal delito.

La Sala concuerda con el recurrente que no hay elemento probatorio válido que permita fundar la condena de ALAÍN ODA por el delito que motiva este proceso, ya que sólo existe en contra de este procesado la versión del ofendido que lo acusa de darle una patada en el estómago, lo que no puede considerarse como constitutivo del delito que nos ocupa, ya que los golpes que se le aprecian según el Médico Forense son de otra naturaleza y entidad lo que es incompatible con un golpe en el estómago.

En este proceso está comprobado que SÁNCHEZ PEÑA fue víctima de malos tratos, tortura, castigo infamante y otras vejaciones mientras estaba privado de su libertad en el antiguo DENI de Ancón, pero ello no justifica la condena de ALAÍN ODA que está probado no intervino en tales acciones y aunque es señalado por el denunciante por los actos delictivos como los que motivan este proceso, dichos cargos no están debidamente comprobados.

La Sala no puede dejar pasar que los cargos que formula el denunciante no han sido corroborados por ningún otro testigo, hecho que tampoco debe llamar la atención, pues el abuso de poder que se produjo en la crisis política que sufrió el país al final de la década pasadA permitió que estos excesos se produjeran impunemente, pues no es normal ni frecuente que un torturador deje que terceras personas presencien sus ataques físicos contra una determinada víctima ni se puede fundar la condena de ODA con pruebas indiciarias que carecen de validez para tal efecto, ya que la presencia del acusado en su lugar de trabajo, por razón de la investigación que se adelantaba por supuesto delito contra la personalidad jurídica del Estado no puede ser tenidA como indicio válido de presencia y oportunidad, ya que es injusto considerar como tal dicha actividad que se desarrolla por el agente de la policía de investigación al cumplir con los oficios de su empleo.

Debe, por tanto, accederse a la solicitud del recurrente y casarse respecto de ALAÍN ODA el fallo recurrido en esta ocasión.

RECURSO A FAVOR DE RUBÉN BULGIN

En favor de RUBÉN BULGIN se promovió un recurso de casación que tiene como fundamento una causal única, la que consiste en el error de derecho en la apreciación de la prueba.

Dicha causal se fundamenta en cuatro motivos, en la violación de los artículos 969, 973, 896, 905, 2136 y 909 del Código Judicial y en la violación del artículo 160 del Código Penal.

Los motivos expuestos por el recurrente plantean, en esencia, el error del tribunal de segunda instancia de dar por probado el delito objeto del proceso con el único señalamiento del ofendido con respecto a RUBÉN BULGIN, a pesar de las diversas declaraciones allegadas al expediente que según la defensa evidencian lo contrario.

Al explicar el casacionista las disposiciones infringidas y el concepto en que lo han sido, aduce en primer término el artículo 969 del Código Judicial, sobre indicios.

A juicio de la defensa de BULGIN el Tribunal Superior erró en la apreciación de la presencia de su representado en las instalaciones del antiguo DENI de Ancón, ya que tal situación no puede ser tenida como indicio de presencia

y oportunidad, pues del hecho de que su patrocinada trabajase en ese lugar no podía deducirse ningún indicio cierto de presencia y oportunidad, como se hace en el fallo recurrido.

La simple presencia en su lugar de trabajo no puede tenerse jamás como indicio de presencia y oportunidad en su contra para fundar la condena del mismo por hechos delictivos que pueden haber ocurrido en dicho lugar, lo que lleva a la Sala a compartir el criterio del recurrente a este respecto.

Parecido argumento expone el defensor al explicar la infracción del artículo 973 del Código Judicial, que dispone la obligación del juzgador de apreciar todos los indicios en conjunto, según las reglas de la sana crítica.

En opinión de la Sala, al recurrente le asiste razón ya que la simple presencia del servidor público en su lugar de trabajo no puede ser considerado como indicio de presencia y oportunidad en su contra, lo que evidencia que no se apreciaron tales indicios en conjunto según las reglas de la sana crítica que impone al juzgador la obligación de sopesar dichas circunstancias en su totalidad o conjunto según las reglas de la lógica y la experiencia.

A nadie que trabaje en un determinado lugar se le puede condenar en base a unos supuestos indicios de presencia y oportunidad por la simple razón de estar en su puesto de trabajo, ya que ello no es suficiente para dar valor a tal realidad.

En este caso, el Tribunal Superior ha pasado por alto que el indicio de presencia y oportunidad queda desvirtuado por la causa que justifica tal presencia en el antiguo DENI, situación que implica una inobservancia de los principios de la lógica y las reglas de la experiencia en la valoración efectuada por el juzgador de la segunda instancia.

Distinta fuera la situación del servidor público que no tiene relación de trabajo con el lugar donde se comete el ilícito y su presencia continuada en el mismo de base para la apreciación del indicio de presencia y oportunidad, a la hora y en lugar donde se cometió el ilícito.

El recurrente también adujo como infringido el artículo 896, numeral 12 de Código Judicial, que tiene como sospechoso para declarar a las personas que en opinión del Juez se encuentren en situación análoga a la existente en el proceso de forma que ello afecto su credibilidad o imparcialidad.

Ya la Sala en reiteradas ocasiones ha señalado que el denunciante es testigo sospechoso, pues tiene interés en la causa en la que declara, por lo que el Tribunal Superior violó en forma directa al artículo mencionado, como quedó expuesto anteriormente.

Por otra parte, a juicio del casacionista, también se infringió el artículo 905 del Código Judicial, que impide que la versión de un sólo testigo pueda por sí sola fundar la plena prueba del delito, pues como quedó expuesto en un apartado anterior, tal prueba por sí sola no es suficiente para fundar la responsabilidad de un proceso en nuestro sistema procesal penal vigente.

En lo que respecta a RUBÉN BULGIN la sola versión del ofendido no es suficiente para fundar la condena del mismo, por lo que será necesario basar dicha decisión en otros elementos probatorios.

Sobre el particular, si bien es cierto que CARLOS WORREL declaró que vio que BULGIN, MUÑOZ y CAMARGO eran los golpeadores de SÁNCHEZ PEÑA, no es menos cierto que su versión pierde credibilidad cuando dicho testigo también dijo en otra causa haber sido golpeado por BULGIN, lo que justificó otro proceso contra los acusados por las torturas, malos tratos y vejaciones que dijo WORREL haber sufrido de parte de ellos.

Vistas así las cosas, las únicas versiones contra BULGIN son las de SÁNCHEZ PEÑA y WORREL, ambos supuestos afectados por los golpes y maltratos que se dice le infligieron BULGIN y otros procesados.

Siendo esto un hecho incuestionable para la Sala, le asiste la razón al recurrente cuando afirma que se infringió el artículo 905 del Código Judicial en este proceso.

En su afán por comprobar la inocencia de su patrocinado, el recurrente aduce como violado también el artículo 2136 del Código Judicial, que impone al tribunal la obligación de apreciar los testimonios que favorezcan al procesado.

La Sala no comparte ese argumento del recurrente, ya que una cosa es apreciar un testimonio en favor del imputado y otra es aceptar como válido la versión de que el imputado no hizo lo que se le atribuye.

Si bien es cierto que BULGIN no participó en la captura de SÁNCHEZ PEÑA, no es menos cierto que intervino y asistió a alguna de las declaraciones del sujeto, pues el mismo defensor reconoció en su recurso que se representado llegó donde el ofendido una vez terminado uno de los interrogatorios a que el mismo fue sometido por agentes del antiguo DENI, tal como se aprecia a fs. 2014.

Finalmente el recurrente aduce como última norma procesal supuestamente infringida el artículo 909 del Código Judicial, en virtud del cual no se deben apreciar los testimonios que no resulten de propias y directas percepciones del testigo, lo que no ha sido observado por el Tribunal Superior en opinión del defensor.

A juicio de la Sala, el recurrente tiene razón a este respecto, toda vez que la versión de WORREL es en alguna parte de su disposición una declaración de referencia y en otra parte parece que la misma se funda en una observación directa, lo que supone importantes contradicciones que no fueron debidamente aclaradas, como merecían tales testimonios, ya que el mismo, en otras condiciones, pudo ser esencial en esta causa (fs. 419 y 1276-1277).

Por último, para concluir, el recurrente adujo como infringido el artículo 160 del Código Penal, ya que sirvió de base para que el Tribunal Superior condenase a su representado por un delito que no había cometido, con base en erradas valoraciones de los testimonios del ofendido y de Worrel, denunciante de BULGIN en otra causa que la Sala ya resolvió en forma definitiva.

A juicio de la Sala no está probado el delito que se le imputa a RUBÉN BULGIN, ya que los elementos probatorios que fundan la condena impugnada ante esta Corporación no justifican tal decisión, por lo que debe accederse a lo solicitado por el casacionista.

Las razones que anteceden son suficientes para que la Sala case la sentencia recurrida y exonere de responsabilidad a los procesados en esta causa, en la que está probada que EDUARDO SÁNCHEZ PEÑA fue detenido y maltratado en la instalaciones del antiguo DENI, pero no está demostrado con certeza indubitable la autoría o participación de los procesados en esta causa, lo que impone la absolución de los mismos.

La Sala no puede pasar por alto que en el fallo de segunda instancia no se indican claramente los elementos de juicio que justifican la decisión adoptada respecto de varios procesados, y que el juez de primera instancia no individualizó la conducta de cada imputado ni la adecuó a la pena que podía corresponderles en caso que fueran ciertas las aseveraciones contenidas en su decisión, lo que es injustificado, pues los juzgadores deben concretar lo más posible la conducta que le atribuyan a cada procesado para que éstos puedan defenderse en la segunda instancia de tales señalamientos y dosificación, que en esta ocasión fue inexistente.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la resolución recurrida y en su lugar ABSUELVE a los señores FELIPE CAMARGO, ALAÍN ARSENIO ODA y RUBÉN BULGIN de los cargos formulados en el auto de enjuiciamiento dictado en su contra originalmente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A EDUARDO ALVAREZ SOLÍS, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE GERTRUDIS HERNÁNDEZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON CATÓN. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Al tenor del informe secretarial que antecede, ha vencido el término de lista, al que se refiere el artículo 2443 del Código Judicial, que pone en conocimiento de las partes interesadas el ingreso de este proceso penal seguido a **EDUARDO ALVAREZ SOLÍS**, por delito contra el Patrimonio al la Sala Segunda de lo Penal.

Por lo que corresponde examinar el medio de impugnación extraordinario presentado, a fin de determinar si el mismo cumple con las exigencias de ley sobre los requisitos externos e internos del mismo.

En cuanto a los primeros, se advierte que el anuncio y formalización del recurso cumple con la temporaneidad establecida en el código de procedimiento penal, fue promovido por persona hábil y contra sentencia de segunda instancia dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial de Panamá, por delito susceptible de este recurso.

Con relación a los puntos que deben concurrir en el escrito mediante el cual se formaliza el recurso y que están contemplados en el segundo párrafo del artículo 2443 del Código Judicial, se observa que se cumplió adecuadamente con los mismos.

Por tanto cabe la admisibilidad del recurso presentado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA, representada, en Sala Unitaria, por la Magistrada Sustanciadora, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado y dispone correr traslado del negocio al señor Procurador General de la Nación, por el término de cinco (5) días, para que emita concepto.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JACINTO OJO O JACINTO GONZÁLEZ, MAXIMINO GONZÁLEZ Y FELIPE DE JESÚS OJO, SINDICADOS POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL EN PERJUICIO DE PAULA GONZÁLEZ VALDÉS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Los licenciados Moisés Espino Bravo, defensor de oficio de **Jacinto González o Jacinto Ojo**; Alcides Gabriel Zambrano González, abogado defensor de **Felipe De Jesús Ojo y René Carvajal**, defensor técnico de **Maximino González**, han interpuesto sendos recursos de casación en el fondo contra sentencia de 22 de octubre de 1997 proferida por el **Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial**. Esta medida jurisdiccional reforma la decisión de primera instancia emitida por el Juzgado Segundo del Circuito de Herrera, en el sentido de condenar a Felipe De Jesús Ojo a la pena de 50 meses de prisión, como responsable del delito de violación carnal cometido en detrimento de Paula González Valdés, y confirma la sanción penal de 50 meses de prisión impuesta a Jacinto González o Jacinto Ojo y Maximino González González, por la misma conducta delictiva.

En este momento procesal procede la Sala Penal a examinar cada uno de los recursos formalizados, con el objeto de resolver sobre el cumplimiento de las exigencias legales que nuestro ordenamiento jurídico exige para su admisión.

1. Recurso de casación interpuesto por la defensa de Jacinto González o Jacinto Ojo.

En cuanto al libelo de casación presentado por el licenciado Moisés Espino Bravo, se observa que el recurso se fundamenta en la causal correspondiente al "Error de derecho en la apreciación de la prueba" (f. 385), la cual viene apoyada en cinco motivos. Se advierte de inmediato que la argumentación que traen los motivos cuarto y quinto no guardan relación con la causal aducida. Así, vemos que en el cuarto motivo el recurrente sostiene que "El Tribunal Superior no tomó en consideración que, cuando PAULA le refirió la historia a Ubaldino Barría y a Luis Quintero, ya habían pasado más de un (1) mes desde que contestó las preguntas sugerentes de la Juez de Menores de Herrera" (fs. 387-388), en tanto que en el quinto manifiesta que "El Tribunal Superior ... no tomó en consideración las declaraciones de los otros hijos de mi representado" (f. 388). A juicio de la Corte, la forma como vienen redactados estos motivos pone de manifiesto que el casacionista, lejos de probar la causal que alega, lo que hace es razonar según los términos de otra causal, referente al error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, causal que sobreviene cuando "el Tribunal de segunda instancia ignora y por tanto no considera, ni le asigna valor alguno a los elementos probatorios materialmente incorporados al proceso como piezas de convicción" (FÁBREGA P., Jorge y GUERRA DE VILLALAZ, Aura. Casación; Impresora Varitec, S. A., San José, Costa Rica, 1995, pág. 318).

De otra parte, la Sala resalta que, para fundamentar adecuadamente la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba, es necesario que el casacionista haga mención de las normas procesales que establecen el valor o principio valorativo que rige para la pieza de convicción, que a su juicio han sido mal estimadas o apreciadas. Vemos que en los motivos primero y segundo el defensor técnico censura básicamente los testimonios de Paula González Valdés y Ubaldino Barría (fs. 385-386); sin embargo, al explicar el concepto de infracción de los artículos 906 y 907 del Código Judicial, el recurrente sólo se muestra disconforme con la valoración que se le dio al testimonio de Cristino González Valdés, señalando que "se contradice con lo dicho por sus hermanos Bernardo Ojo Valdés ... y Mercedes Ojo Váldez" (f. 389), y que "tenía un (1) años de vivir con Ubaldino Barría", por lo que "mal podía ver lo que estaba sucediendo" (f. 390). Como se aprecia, no existe una correspondencia entre los cargos de infracción contenidos en los motivos y la explicación que traen las disposiciones adjetivas que se consideran infringidas.

Por consiguiente, si el recurso adolece de falta de coherencia entre los motivos, las disposiciones legales que dicen conculcadas y la causal aducida, de nada sirve cumplir con cada uno de los requisitos previstos en el artículo 2443 del Código Judicial, cuando el medio de impugnación carece en sí mismo de sustento lógico-jurídico, lo que constituye un defecto de fondo que impide la admisión del recurso.

2. Recurso de casación interpuesto por la defensa de Felipe de Jesús Ojo.

En cuanto al libelo de casación presentado por el licenciado Alcides Gabriel Zambrano González, se observa que el requisito concerniente a la historia

concisa del caso se presenta de manera deficiente, pues lo que el casacionista hace aquí es referirse a la juridicidad del acto jurisdiccional impugnado en cuanto a la valoración del acervo probatorio de que dan cuenta las sumarias. En ese sentido, manifiesta que "no se tomaron en cuenta las contradicciones en que incurre la menor PAULA GONZÁLEZ VÁLDEZ ... ni las divergencias que surgen de su testimonio con el de su menor hermano Cristino González Váldez" (fs. 397-398), como "tampoco se tomó en consideración que Luis Quintero ... y Ubaldino Barría ... son testigos de referencia" (f. 398). Esta Corporación de Justicia ha sostenido reiteradamente que la historia concisa del caso es precisamente lo que "permite conocer de modo integral los hechos y fundamentos que originaron la resolución que se impugna con la casación, para que, junto con el resto de los requisitos que exige la ley, se pueda conocer el vicio de injuridicidad que se le imputa al fallo, de lo contrario el recurso se desnaturaliza en razón de que pierde su principal característica, cual es la de valerse por sí solo" (Registro Judicial, septiembre de 1994, pág. 125).

Otro defecto que se advierte en el escrito de formalización consiste en que el recurrente no indica, con su debida separación, la causal que sirve de fundamento a la pretensión. Por el contrario, se evidencia que ésta corresponde al error de derecho en la apreciación de la prueba, con la lectura de la sección que atañe la historia concisa del caso (f. 398). Esta Superioridad ha manifestado que "el escrito de casación debe seguir la secuencia prevista en el numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial, que se inicia con la presentación de la historia concisa del caso, continúa con la indicación de la causal o causales invocadas, para especificar luego los motivos, disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido" (Registro Judicial, agosto de 1994, pág. 261).

También es del caso advertir que el defensor técnico incurre en confusión al exponer los motivos, pues en el primero manifiesta que el juzgador de segunda instancia "concedió excesivo valor probatorio a la versión de la menor PAULA GONZÁLEZ VÁLDEZ" (f. 298), y luego sostiene que "no se tomó en cuenta que la testigo incurrió en contradicciones ... en su relato" (f. 399). Asimismo, en el tercer motivo el recurrente señala que no se tomó en cuenta la ampliación de la declaración rendida por la menor Paula González, que desmiente las versiones de Ubaldino Barría y Luis Quintero (f. 399). Como se nota, los razonamientos expuestos en estos motivos aluden a la causal de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, por lo que se concluye que el requisito de la especificación de los motivos no se encuentra debidamente satisfecho.

Como quiera que el libelo de casación presenta una historia concisa deficiente, que no cumple con la estructura formal que prevé el numeral 3 del artículo 2443 del Código Judicial, y que los motivos carecen de cargos concretos de injuridicidad puesto que guardan relación con otra causal de fondo, lo que corresponde en derecho es declarar la inadmisibilidad de este recurso.

3. Recurso de casación interpuesto por la defensa de Maximino González González.

En cuanto al recurso de casación propuesto por el licenciado René Carvajal, la Sala observa que en el libelo se incurre en defectos de forma atribuidos al recurso previamente analizado. Así vemos que no satisface adecuadamente la exigencia legal relativa a la historia concisa del caso, toda vez que el casacionista expone planteamientos que guardan relación con la apreciación del factor probatorio (fs. 413-414). De igual manera, se advierte que el defensor no menciona, en una sección aparte y de manera clara, la causal que sustenta su recurso (f. 414). No obstante, en vista de que la presente iniciativa procesal extraordinaria solamente adolece de estos dos defectos de forma, los que son susceptibles de corrección, a ello debe proceder el recurrente para que pueda la Sala pronunciarse definitivamente sobre la admisibilidad del recurso.

Por las consideraciones antes expuestas, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE los recursos de casación en el fondo presentados por los defensores técnicos de Jacinto González o Jacinto Ojo y Felipe De Jesús Ojo, y ORDENA que el licenciado René Carvajal, defensor de oficio de Maximino González González, realice las corrección advertida, para lo cual dispondrá de un término de cinco

(5) días.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO JORGE RODOLFO VERGARA ATENCIO, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de 8 días establecido en el artículo 2443 del Código Judicial, se pasa a decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el licenciado RENÉ CARVAJAL, en su condición de defensor de oficio de **JORGE RODOLFO VERGARA ATENCIO**, contra la resolución 11 de septiembre de 1997, proferida por el **Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial**.

El recurso ha sido propuesto por persona hábil, en tiempo oportuno y la resolución contra la que se promueve es de aquellas susceptibles de impugnación, pues se trata de delito contra la salud pública, cuya pena de prisión es superior a dos años.

Corresponde a la Sala pronunciarse en este momento procesal sobre la admisibilidad del recurso extraordinario. Para tales efectos, se procede a examinar cada una de las causales invocadas por el recurrente.

En el último párrafo de la historia concisa del caso, el recurrente menciona un artículo del Código Penal del que dice que resultó vulnerado "como consecuencia de los errores señalados", lo que no es procedente ya que existe dentro de la presentación formal de este recurso, una sección destinada a la exposición de normas y a la explicación del concepto de la infracción de esas normas, contradiciendo así la técnica del recurso, razón por la que considera esta Corporación que el recurrente debe corregir esta sección.

El recurrente invoca dos (2) causales.

PRIMERA CAUSAL: "Error de Derecho en la apreciación de las pruebas, lo cual ha influido definitivamente en lo dispositivo del fallo, lo que implica violación de la Ley Sustancial Penal", la que esta fundamentada en tres (3) motivos.

Finalmente, el recurrente omitió mencionar la norma sustantiva penal que resultó violada. Cuando se invocan causales probatorias se requiere que se citen las normas adjetivas de carácter procesal que resultaron infringidas y al final, debe citarse la o las normas sustantivas penales que consecuentemente resulten violadas.

SEGUNDA CAUSAL: En la segunda causal, es decir, la contemplada en el numeral 3 del artículo 2434 del Código Judicial, la cual reza de la siguiente manera: "Cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo o la extensión de la pena aplicable", y como se manifiesta en líneas anteriores, esta causal, en realidad contempla dos supuestos los cuales son excluyentes entre si y son: 1) Cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha influido en el tipo y, 2) Cuando se haya incurrido en error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha influido en la extensión de la pena. Si el recurrente quería referirse a uno de ellos lo debió especificar de esta manera, por lo que en esta primera causal invocó incorrectamente la denominación de la causal.

El recurrente en esta ocasión fundamenta la causal aduciendo tres (3) motivos. En el segundo motivo específicamente vuelve a cometer el mismo error señalado en líneas anteriores; el recurrente vuelve a señalar el artículo 260 del Código Penal lo cual resulta improcedente en esta sección porque para la invocación de normas y la explicación del concepto de infracción de la misma existe una sección autónoma para ello.

El artículo 2444 del Código Judicial permite la posibilidad de que se corrija el presente recurso de casación.

En consecuencia, el suscrito Magistrado Sustanciador, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ORDENA que el recurso de casación interpuesto por el licenciado RENÉ CARVAJAL, permanezca en Secretaría por el término de cinco (5) días a efecto de que corrija los errores puntualizados.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SE ADMITE RECURSO DE CASACIÓN EN EL PROCESO SEGUIDO A CÉSAR ANEL PÉREZ MAGALLÓN POR DELITO DE HURTO DE AUTOMÓVIL. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado BENJAMÍN ARIAS GORDÓN, Fiscal Noveno de Circuito del Primer Circuito Judicial, interpuso recurso de casación en el fondo contra la Sentencia de trece (13) de noviembre de 1997, proferida por el **Segundo Tribunal Superior de Justicia**, que reforma la sentencia de 12 de junio de 1997, dictada por el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, mediante la cual absuelve a **CÉSAR ANEL PÉREZ MAGALLÓN** por el delito de hurto de automóvil y lo confirma en lo demás.

Al cumplirse el término en lista, ingresa el expediente al despacho, a fin de resolver la admisibilidad del recurso interpuesto.

Se observa, que la decisión concedida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, se ajusta a los presupuestos que establece el recurso de casación, toda vez que fue presentado dentro del término legal, por persona hábil y que la resolución recurrida admite este tipo de recurso, debido a que se trata de un delito cuya pena excede de dos años de prisión.

Con respecto a los cuatro (4) requisitos formales establecidos en el artículo 2443 ordinal 3 del Código Judicial, como son: historia concisa del caso, la causal invocada, los motivos que la sustentan, las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción; se observa claramente que el LIC. BENJAMÍN ARIAS GORDÓN cumple en su escrito con los requisitos establecidos en el artículo anteriormente citado.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada en SALA UNITARIA por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por el LICENCIADO BENJAMÍN ARIAS GORDÓN y DISPONE correr traslado del negocio al señor Procurador General de la Nación, por el término de cinco (5) días, para que emita concepto.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A RODOLFO NELSON PÉREZ CASTILLERO Y WEN WEI YAU MAN WAY QIU, POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, EN PERJUICIO DE EULIHADES MUÑOZ DÍAZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado EFRAÍN ERIC ANGULO, interpuso recurso de casación en el fondo contra la Sentencia de treinta (30) de enero de 1998, proferida por el **Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial**, que confirma la sentencia de quince (15) de diciembre de 1997, dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos, mediante la cual se declara responsable penalmente al señor **RODOLFO NELSON PÉREZ CASTILLERO (a) "TATATA"** y lo condena a la pena de cuarenta (40) meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por delito contra el patrimonio.

Al cumplirse el término en lista, ingresa el expediente al despacho, a fin de resolver la admisibilidad del recurso interpuesto.

Se observa, que la decisión concedida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, se ajusta a los presupuestos que establece el recurso de casación, toda vez que fue presentado dentro del término legal, por persona hábil y que la resolución recurrida admite este tipo de recurso, debido a que se trata de un delito cuya pena excede de dos años de prisión.

Con respecto a los cuatro (4) requisitos formales establecidos en el artículo 2443 ordinal 3 del Código Judicial, como son: historia concisa del caso, la causal invocada, los motivos que la sustentan, las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción; se observa claramente que el LIC. EFRAÍN ERIC ANGULO cumple en su escrito con los requisitos establecidos en el artículo anteriormente citado.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada en SALA UNITARIA por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por el LIC. EFRAÍN ERIC ANGULO y DISPONE correr traslado del negocio al señor Procurador General de la Nación, por el término de cinco (5) días, para que emita concepto.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A YAHIA MARMOUD ABDEL HAMID AMAENI. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado ALCIDES GABRIEL ZAMBRANO GONZÁLEZ, Defensor de Oficio del Circuito Judicial de Los Santos, interpuso recurso de casación en el fondo contra

la Sentencia de dieciocho (18) de noviembre de 1997, proferida por el **Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial**, mediante la cual confirmó la Sentencia de ocho (8) de octubre de 1997, dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos, que declaró responsable penalmente a **YAHIA MARMOUD ABDEL HAMID ALMAENI** y lo sancionó a la pena de dieciséis (16) meses de prisión y setenta y cinco (75) días multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos por delito contra la Salud Pública.

Al cumplirse el término en lista, ingresa el expediente al despacho, a fin de resolver la admisibilidad del recurso interpuesto.

Se observa, que la decisión concedida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, se ajusta a los presupuestos que establece el recurso de casación, toda vez que fue presentado dentro del término legal, por persona hábil y que la resolución recurrida admite este tipo de recurso, debido a que se trata de un delito cuya pena excede de dos años de prisión.

Con respecto a los cuatro (4) requisitos formales establecidos en el artículo 2443 ordinal 3 del Código Judicial, como son: historia concisa del caso, la causal invocada, los motivos que la sustentan, las disposiciones legales infringidas y el concepto de la infracción; se observa claramente que el licenciado ALCIDES GABRIEL ZAMBRANO GONZÁLEZ cumple en su escrito con los requisitos establecidos en el artículo anteriormente citado.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada en SALA UNITARIA por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto por el LIC. ALCIDES GABRIEL ZAMBRANO GONZÁLEZ y DISPONE correr traslado del negocio al señor Procurador General de la Nación, por el término de cinco (5) días, para que emita concepto.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

EL MAGISTRADO HUMBERTO COLLADO SOLICITA SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ELIÉCER GARRIDO CORTEZ, JOSÉ ISABEL GARRIDO MORENO Y CARLOS ISAAC GARRIDO CORTEZ, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CINCO (5) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El **Magistrado Humberto A. Collado T.** solicita se le separe del conocimiento del recurso de casación presentado dentro del proceso seguido a Eliécer Garrido Cortez, José Isabel Garrido Moreno y Carlos Isaac Garrido Cortez, sindicados por la comisión de delito contra la salud pública relacionados con drogas.

El manifestante explica que "me encuentro impedido para el conocimiento del mismo en razón de que con el recurrente, el licenciado HUMBERTO A. COLLADO CASTILLO, me une parentesco en primer grado de consanguinidad, pues soy su padre" (f. 1009).

Como quiera que la manifestación de impedimento encuentra fundamento jurídico en lo que establecen los numerales 1 y 5 del artículo 749 del Código Judicial, es del caso acceder a su reconocimiento.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el magistrado Humberto A. Collado T., DISPONE separarlo del conocimiento del negocio y CONVOCA para que lo reemplace al magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIO CONTENTIVO DE LA DENUNCIA PENAL FORMULADA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, CONTRA LA LICENCIADA AIDELENA PEREIRA VELIZ, MAGISTRADA DEL TERCER TRIBUNAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la **Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA** formula manifestación de impedimento y solicita que se le separe del conocimiento de la denuncia presentada por la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, en su propio nombre y representación, contra la licenciada AIDELENA PEREIRA VELIZ, actual Magistrada del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por supuesto delito contra la libertad individual, en razón de que "La licenciada Omayra García de Berbey ha promovido acusación particular en mi contra ante la Asamblea Legislativa" (f. 345).

La Magistrada FRANCESCHI DE AGUILERA aduce como fundamento de su petición, el ordinal 11 del artículo 749 del Código Judicial.

En atención a que la situación descrita por la Honorable Magistrada, se encuentra dentro de la norma jurídica invocada, en concordancia con lo señalado por el artículo 2282 del Código citado, se considera fundada la solicitud de impedimento presentada y en consecuencia debe accederse a lo impetrado.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, la declara IMPEDIDA y la separa del conocimiento del presente negocio y DISPONE llamar al Magistrado de la Sala siguiente, conforme al orden alfabético de apellidos, para que la reemplace, según lo establecido por el artículo 78 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO HUMBERTO COLLADO, EN EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE YAHIA MARMOUD ABDEL HAMID ALMAENI. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El **Magistrado HUMBERTO A. COLLADO T.**, ha manifestado ante los demás Magistrados que conformamos la Sala Penal de esta Alta Corporación de Justicia, escrito mediante el cual solicita que se le declare impedido a fin de tomar todas las medidas legales para separarlo del conocimiento del recurso de casación, interpuesto a favor de YAHIA MARMOUD ABDEL HAMID ALMAENI, contra la sentencia de 18 de noviembre de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Expone el Magistrado COLLADO en su manifestación de impedimento, que le une parentesco de primer grado de consanguinidad con el licenciado HUMBERTO A. COLLADO CASTILLO, quien actuó en este proceso como Fiscal del Circuito de Los Santos en Audiencia Pública celebrada contra HAMID ALMAENI, solicitando su condena por el delito de posesión ilícita de drogas (f. 142-152). En tales circunstancias se fundamenta lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial que expresa lo siguiente:

> "Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
>
> ...
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo;".

Visto y considerado lo expresado por el Magistrado COLLADO, observamos que procede la declaratoria de impedimento, en concordancia con lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 749 y el artículo 2282 del Código Judicial que se refiere a los impedimentos de los magistrados y jueces.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo anteriormente expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado HUMBERTO A. COLLADO T., para conocer del recurso de casación interpuesto a favor de YAHIA MARMOUD ABDEL HAMID ALMAENI, contra la sentencia de 18 de noviembre de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, DISPONE separarlo del conocimiento del presente negocio y CONVOCA para que lo reemplace el Magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL MAGISTRADO HUMBERTO A. COLLADO T. SOLICITA SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR EL LICENCIADO JOSÉ RAMIRO FONSECA PALACIOS CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1996, PROFERIDA POR EL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El **Magistrado Humberto A. Collado T.** solicita se le separe del conocimiento de recurso de revisión presentado por el licenciado José Ramiro Fonseca Palacios contra la sentencia de 29 de noviembre de 1996, emitida por el Juzgado Segundo del Circuito de Herrera, mediante la cual se absuelve a Elías Humberto De León Villarreal de los cargos que le fueran formulados por la supuesta comisión del

delito de violación carnal cometido en perjuicio de Carmen Aleyda De Los Santos Esculta.

El manifestante explica que "actué como abogado defensor de ELÍAS HUMBERTO DE LEÓN VILLARREAL en esa causa, motivo que dio lugar a que La SALA me declarara impedido para conocer del recurso de casación que se presentó contra la Sentencia del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que confirmó el fallo pronunciado por el Juez Segundo Del Circuito de Herrera y cuya revisión ahora se ha solicitado" (f. 18).

Como quiera que el impedimento encuentra fundamento jurídico en lo que establece el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial, es del caso acceder a su reconocimiento.

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el magistrado Humberto A. Collado T., DISPONE separarlo del conocimiento del negocio y CONVOCA, para que lo reemplace, al magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA BINDO FRÍAS ARCIA POR EL DELITO GENÉRICO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE SIMÓN BOLÍVAR BARRERA BARBA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El **Honorable Magistrado Humberto A. Collado T.** ha presentado petición escrita a esta Sala, con la finalidad de que se le declare impedido para conocer de recurso de apelación promovido contra auto calendado 27 de enero de 1998, proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante el cual se abre causa criminal contra Bindo Frías Arcia por el delito genérico de homicidio cometido en perjuicio de Simón Bolívar Barrera Barba.

La solicitud viene fundamentada en el argumento de que "el licenciado HUMBERTO ANDRÉS COLLADO CASTILLO, a quien me une parentesco en primer grado de consanguinidad, pues soy su padre, en su condición de Fiscal Superior Encargado de la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, intervino en la presente causa, tal como puede apreciarse a fojas 1470 a 1474 de este expediente".

Como quiera que el impedimento encuentra fundamento jurídico en lo que establece el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial, es del caso acceder a su reconocimiento.

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el magistrado Humberto A. Collado T., DISPONE separarlo del conocimiento del negocio y CONVOCA, para que lo reemplace, al magistrado de la Sala siguiente a quien corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA

QUERELLA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL BUSH RÍOS, CONTRA CARLOS ICAZA, DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS, POR DELITO CONTRA EL HONOR. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, ingresaron a la Sala Penal de la Corte Suprema las sumarias instruidas con motivo de querella presentada por el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, en representación del legislador **Miguel Bush Ríos**, contra **Carlos Icaza**, Director General de Aduanas, por la presunta comisión de delito contra el honor.

Según afirma el apoderado legal del querellante, "A través de las noticias publicadas en el Diario La Prensa y El Panamá América de 5 de abril de 1997, y las afirmaciones hechas ante los medios de comunicación televisivos, el señor CARLOS ICAZA ... en forma directa atribuye falsamente la comisión de hechos y actos que ofenden la dignidad de nuestro representado" (f. 6).

En la vista remisoria de la encuesta, el representante del Ministerio Público solicita poner término al proceso con un sobreseimiento definitivo, de carácter objetivo e impersonal, por considerar que "De todo lo declarado por el señor CARLOS ICAZA, se deriva la conclusión de que se le endilga a éste un delito que realmente se encuentra lejos de ser la imputación de alegar delito en contra del señor MIGUEL BUSH RÍOS" (f. 201). Explica el Procurador que "la relación del Honorable Legislador Miguel Bush Ríos con el ilícito investigado, se debió ante todo, a los argumentos ofrecidos por el señor JOE NEHMAD al momento de ser aprehendido en el sentido que la mercancía contrabandeada pertenecía al Legislador Bush" (f. 202).

Se observa que para acreditar el hecho punible atribuido se incorporaron al cuaderno penal varias pruebas, entre las que sobresale un ejemplar del Diario La Prensa y otro del Diario Panamá América, ambos con fecha de 5 de abril de 1997, y una video grabación de dos canales televisivos.

En cuanto a las noticias publicadas en los periódicos, las supuestas frases "ofensivas e injuriosas" (f. 6) consisten básicamente en que el Director de Aduanas afirmó que el Legislador Bush Ríos está involucrado en un contrabando decomisado en la carretera Panamá-Colón, a la altura del río Chagres, el día 1° de abril de 1997. Ahora bien, la Corte advierte que en el expediente no existe certeza de que Carlos Icaza efectivamente le haya atribuido dicha infracción fiscal aduanera a Bush Ríos. Así, tenemos que la Editora Panamá América informa que la noticia publicada en ese diario "se obtuvo en Conferencia de Prensa que dio el señor Carlos Icaza, Director de Aduanas" (f. 115), pero, sin embargo, indica que "no tenemos en nuestros archivos copia de dicha conferencia" (f. 169). De igual manera, en lo concerniente a la información publicada en el diario La Prensa, se llamó a declarar a Gionela Jordan Valderrama, encargada de redactar la noticia, quien afirmó que "cuando un periodista realiza una noticia, no se pueden incluir comentarios personales dentro de una noticia ya que la noticia se hace en base a las afirmaciones o declaraciones de la fuente" (f. 166). No obstante, la periodista Jordan Valderrama, según informe secretarial visible a foja 176 del cuaderno penal, no hizo entrega del "casete que contiene la noticia solicitada ... ya que no lo encontraba". Aunado a esto, al ser cuestionada sobre el fundamento "para titular la noticia *Afirma Director de Aduanas: BUSH ESTA INVOLUCRADO EN CONTRABANDO*", contestó que "yo no titule (sic) la noticia" (f. 167).

La Sala considera que la alegada relación de Bush Ríos con la infracción fiscal aduanera de contrabando surge de los argumentos expuestos por Joe Nehmad quien, al ser aprehendido por los funcionarios aduaneros con la mercancía contrabandeada, les manifestó que "pertenecía al Legislador Bush y mostró un carnet de la Asamblea Legislativa en el cual se lee que la persona que lo porta trabaja directamente con el Legislador Bush, que él sólo era el encargado de llevarla a la Asamblea" (f. 149). Cabe destacar que Joe Nehmad, al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, corroboró que el "inspector de Aduana me detuvo, me pidió que abriera el baúl y vieron la mercancía yo ... le dije que era para el honorable Bush, como yo soy amigo personal de el le enseñe mi carnet" (f. 138).

Con relación a las entrevistas contenidas en las videocintas, la Sala estima que de ellas no surge ningún elemento probatorio que atribuya concretamente la autoría de conducta punible a Carlos Icaza, en perjuicio de Bush Ríos. De acuerdo a las transcripciones de las entrevistas hechas a Icaza, sus declaraciones sólo guardan relación con la actitud de Bush Ríos, en el sentido de que "nadie lo podía parar a él ... que nadie le podía revisar su carro" (f. 159) y que "no acata las órdenes de aduanas" (f. 160). En cuanto al comentario que hiciera Icaza en el sentido de que el legislador Bush Ríos habla "sobre mafia" y que "eso de mafia ... tendríamos que ver quién es el mafioso aquí", (f. 161), no implica la atribución concreta de la autoría de un hecho punible.

Por cuanto coincide con la recomendación que formula el Ministerio Público, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO e IMPERSONAL en esta causa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2210, numeral 2, del Código Judicial y ORDENA el archivo de estas sumarias.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A ANDRÉS ALMENDRAL, PROMOVIDA POR EL SEÑOR JOSUÉ LEVY LEVY. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación se recibe para su valoración legal, el expediente judicial contentivo de la acusación particular interpuesta por el licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila en representación del señor **Josué Levy Levy** y contra el licenciado **ANDRÉS ALMENDRAL**, Magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, por la supuesta comisión de delitos contra la Administración Pública, específicamente los delitos de Corrupción de servidores Públicos (arts.332 y 333 del C.P.) y Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos (art.336 del C.P.).

FUNDAMENTO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

El licenciado Carrillo Gomila basa la acusación particular presentada en veintiún puntos que se pueden resumir de la siguiente manera:

Afirma que el 29 de junio de 1994 Josué Levy Levy promovió denuncia y posterior acusación particular contra Moisés David Mizrachi e Ida Esperanza Domínguez Castillero por el delito de falsedad ideológica, en fianza judicial librada en favor del Juzgado Segundo del Circuito Civil, del Primer Circuito Judicial de Colón, área de Cristóbal, en secuestro decretado en su perjuicio

hasta la concurrencia de Tres Millones Doscientos Noventa Mil Doscientos Cincuenta Balboas (B/.3,290,250.00), y que faltando a la ética judicial, el funcionario acusado propició una resolución tendiente a favorecer ilícitamente al señor Mizrachi y a la señora Domínguez Castillero.

Cita las disposiciones contenidas en los numerales 6 y 11 del artículo 199 del Código Judicial referentes a los deberes de los Magistrados y Jueces en cuanto a informar sobre impedimentos y disponer diligencias conducentes para evitar nulidades procesales, al igual que el numeral 18 del artículo 440 del Código Judicial que trata sobre la prohibición de los funcionarios y empleados del Órgano Judicial de desempeñar cargos privados que obstaculicen o pueda obstaculizar el buen desempeño de sus funciones judiciales.

Por otra parte agrega que la acusación presentó de manera oportuna impedimentos que afectaban al Magistrado Andrés Almendral y que en tales condiciones bajo su ponencia propició que el tribunal declarara la ilegalidad de actuaciones judiciales cumplidas por la Fiscalía y se ordenara la declinación a la esfera municipal del negocio, por lo que su actuación fue contraria a sus deberes como funcionario judicial, coadyuvando en la impunidad de las conductas delictivas realizadas por el señor Mizrachi y la señora Domínguez Castillero.

Considera el licenciado Carrillo Gomila que el Magistrado Almendral confesó su impedimento y actuaciones irregulares en favorecimiento del señor Mizrachi y señora Domínguez Castillero, en recusación interpuesta por él (acusador Particular) en causa nuevamente puesta en su conocimiento para el favorecimiento del señor Mizrachi.

En este sentido explica que el 18 de enero de 1996 el acusado instó resolución incongruente cambió la tipicidad de Falsedad a Estafa excluyó la posibilidad de detención preventiva, ordenó aperturar causa criminal contra el Agente de Instrucción y estando afectado por impedimento, propició que el estrado judicial ordenara irregular declinación a la esfera municipal del expediente, mediante decisiones del 3 y 4 de junio de 1996, como primer paso para dejar en la impunidad la delincuencia realizada por el señor Mizrachi y señora Domínguez Castillero.

Por otra parte el apoderado de la acusación particular se refiere a las facultades discrecionales del juzgador en las causas puestas en su conocimiento con sujeción a las disposiciones legales indicando que el Magistrado Almendral provocó mediante su actuación la transgresión del texto legal vigente en favorecimiento directo del señor Mizrachi y la señora Domínguez Castillero, acto contrario a sus funciones como juzgador de la causa, e indujo a desviar el procedimiento sumarial establecido en la Ley y que era cumplido por el Agente Instructor del caso.

Afirma que el expediente sugiere que la Jueza Segunda del Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Colón fue compelida ilegítimamente a declinar la competencia del negocio, creándose el conflicto de competencia que dio prerrogativa al acusado para la comisión ilícita.

Señala que el Magistrado Almendral propició que el conflicto de competencia motivado entre la Jueza Segunda y el Tercero, ambos del Circuito Penal de Colón, fuera decidido a favor del Juzgado Segundo Municipal del Distrito de Colón, en transgresión de los artículos 2287 y concordantes del Código Judicial.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Vista N° 50 de 22 de abril de 1998, el licenciado José A. Sossa R., solicita a la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictar un auto de sobreseimiento definitivo de carácter impersonal de conformidad con el numeral 2210 del Código Judicial, al considerar que los hechos motivos de la investigación no han sido ejecutados.

Sostiene, luego de analizar las piezas incorporadas a la encuesta en calidad de prueba sumaria, que si bien las mismas se encuentran autenticadas no pueden ser consideradas como sostén de las intenciones punitivas del acusador,

puesto que ninguna descubre la comisión de los delitos que se dicen cometidos por el licenciado Almendral, toda vez que para comprobar la existencia de los ilícitos irrogados es imprescindible demostrar que el funcionario ordenó o cometió un hecho arbitrario en perjuicio de una persona determinada.

En consecuencia siendo las pruebas aportadas, partes substanciales de procesos, no puede admitirse dentro de la praxis judicial que por cada decisión que adopte el juzgador dentro de un proceso y que no sea del agrado de un profesional del derecho, éste pretenda sentarlo en el banquillo de los acusados, pretextando supuestos abusos de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, cuando deben serle conocido los recursos y mecanismos jurídicos que la ley pone en sus manos para procurar, enervar cualquier acto o sentencia que considere contrario a sus intereses.

Finalmente señala que el abuso de autoridad delictuoso no existe sino cuando se actúa o se procede de manera abierta y desembozada contra la ley expresa, al igual que el delito de corrupción. Y que no hay en el sumario documento ni testimonio que compruebe este delito. En el sentido que el funcionario acusado haya recibido o se le haya prometido dinero, algún beneficio o retribución por un acto de sus funciones para favorecer o perjudicar a una de las partes en los procesos en que tuvo participación (fs.313-319).

INFORME DEL FUNCIONARIO ACUSADO

El licenciado Andrés Almendral Cruz, Magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante certificación jurada da respuesta al cuestionario remitido por el Procurador General de la Nación en Oficio N° PGN-SS-268-98 del 30 de marzo de este año (f. 302).

En lo medular afirma no tener ningún tipo de relación con el señor Josué Levy Levy.

Indica además, que no le une ningún tipo de relación con el señor Moisés David Mizrachi y la señora Ida Esperanza Domínguez Castillero pero que su nombre lo relaciona con algunos proceso que atendió junto con otros magistrados. Y que por los medios de comunicación se ha divulgado la figura del señor Mizrachi como miembro de la comunidad hebrea en Panamá y asignado por el Gobierno de Panamá en una entidad.

Afirma haber tenido participación en los siguientes procesos en los cuales se mencionan al señor Moisés Mizrachi y la señora Domínguez Castillero.

Niega el funcionario acusado, que se haya ofrecido al señor Levy Levy y a su representante judicial ha servir de mediador en el conflicto de éste con el señor Moisés Mizrachi en atención a la amistad que supuestamente le unía con éste último.

Señala que en una única ocasión se presentó el señor Levy junto con un abogado a su servicio a su oficina, que les atendió con las puertas abiertas y bajo la percepción de todos los que comúnmente entran y salen de la misma. Que al manifestarles los visitantes sus intenciones de tratar sobre su controversia con el señor Mizrachi, de plano se rehusó a conversar sobre ese tema. Y de manera clara y docente les explicó la importancia de la Administración de Justicia, el principio fundamental de imparcialidad y la función de la abogacía.

Al finalizar -manifiesta el funcionario acusado- se despidió con su acostumbrada frase de estar siempre a sus órdenes para lo que a bien tuviesen de su parte e incluso tuvo la impresión que se fueron satisfechos por la atención que les prestó. Por lo que si ellos interpretaron en otra forma su atenta conducta, es una situación que escapa de su comprensión.

Informa que mediante resolución del 12 de febrero de este año, la Magistrada Elvia M. Batista Solís del Segundo Tribunal Superior lo separó del conocimiento del sumario seguido por denuncia del licenciado Mario Velázquez por el delito de falsedad, en virtud de la recusación interpuesta por el licenciado Darío Eugenio Carrillo el 20 de enero.

Finalmente señala que en función de los fines establecidos en el artículo 2471 del Código Judicial, la prueba presentada por el acusador particular no ha esclarecido los hechos punibles atribuidos a su persona. En ese sentido solicita respetuosamente se proceda al archivo del presente expediente (fs. 303-307).

ANÁLISIS DE LA SALA

Los delitos que se le atribuyen al Magistrado Andrés Almendral, atentan contra el bien jurídico Administración Pública de que trata el Título X del Libro Segundo del Código Penal, específicamente los capítulos III y IV que se refieren a los delitos de Corrupción de Servidores Públicos y los delitos de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos, respectivamente.

Respecto a los delitos de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos, éstos se rigen por las reglas de los procesos especiales y exigen por parte del acusador que acompañe la prueba sumaria de su relato (arts. 2468 y 2471 del Código Judicial), que como lo ha reiterado esta Sala, "consiste en presentar o aducir un medio lícito de prueba que tenga la eficacia de acreditar el hecho punible denunciado" (Diciembre 19 de 1997).

Sobre este aspecto se refirió la máxima representación del Ministerio Público, cuando señala que para demostrar que un funcionario ordenó o cometió un hecho arbitrario en perjuicio de una persona determinada es necesario comprobar la existencia de los ilícitos irrogados.

De hecho, el cuadro fáctico presentado no evidencia que los cargos que sobre Abuso de Autoridad y e Infracción de los Deberes de los Servidores Públicos se hayan ejecutado, dado que las pruebas aportadas en su mayoría son actuaciones jurisdiccionales y actuaciones interpuestas ante los tribunales de justicia por abogados litigantes, que no evidencian comisión delictiva, y algunas fueron impugnadas para su revisión en las instancias correspondientes. Veamos.

1. Copia autenticada de la resolución de 12 de febrero de 1998 fue signada por un magistrado del Segundo tribunal Superior de Justicia en donde se declara legal la recusación interpuesta por el licenciado Carrillo Gomila contra el Magistrado Andrés Almendral (fs. 12-16).

2. Copia autenticada del escrito de recusación presentado por el licenciado Carrillo Gomila contra el Magistrado Andrés Almendral (fs. 18-22).

3. Copia autenticada de las resoluciones del 3 y 4 de junio de 1996 (fs.23-34 y 35-41). Las mismas fueron signadas de manera conjunta con otros magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia.

4. Copia del auto inhibitorio librado por el Juzgado Tercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Colón, área de Cristóbal el 24 de octubre de 1996 (fs. 44-45). El mismo es consecuencia del mandato jurisdiccional de sus superiores manifestado en el auto de 4 de junio de 1996.

5. Copia autenticada de la resolución del 30 de octubre de 1995 en la cual la Juez Segunda de Circuito Penal de Colón, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales autorizó la practica de una diligencia de secuestro penal (fs. 46-48). En este punto señala el acusador "que ello sugiere que fue irregularmente compelida de seguir conociendo del negocio para provocar el conflicto de competencia que originó la actuación delictiva" (f. 10), lo cual es una afirmación temeraria y sin ningún fundamento.

6. Copia completa del expediente de Habeas Corpus (fs. 49-109), en el cual se tiene la resolución de 18 de enero de 1996 signada por el funcionario acusado y dos magistradas del Segundo Tribunal Superior de Justicia quienes declaran Ilegal la providencia del 4 de enero de 1996 y deja sin efecto la orden de detención preventiva de del señor Mizrachi Russo y la señora Domínguez Castillero (fs. 69-82).

Luego fue proferida resolución del 25 de enero de 1996 en la cual el

Magistrado Andrés Almendral en Sala Unitaria rechaza de plano las apelaciones interpuestas por el Fiscal Primero del Circuito Judicial de Colón y el licenciado Darío Carrillo Gomila contra la sentencia de 18 de enero que deja sin efecto la orden de detención se Mizrachi Russo y Domínguez Castillero (fs. 105-109).

El licenciado Carrillo Gomila formula advertencia de inconstitucionalidad (fs.116-118); la que fue rechazada de plano mediante resolución de 8 de febrero de 1996 por el funcionario acusado y dos magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia (fs. 122-124).

Consta resolución de 15 de abril de 1996 por la cual el Magistrado Andrés Almendral en Sala Unitaria ordena la compulsa de copias pertinentes ante la Fiscalía Superior de Turno del primer Distrito Judicial a fin de que proceda a incoar la investigación de rigor contra el licenciado Manuel A. Succari H., Fiscal Primero del Circuito de Colón, por supuesto delito contra la libertad individual de Moisés Mizrachi e Ida Domínguez Castillero (fs. 130-132).

7. Copia de la acusación particular por Falsedad promovida por Josué Levy Levy contra Moisés David Mizrachi e Ida Domínguez Castillero (fs. 136-141). La cual fue admitida (fs. 142-143).

8. Copia autenticada de la resolución de 6 de noviembre de 1995 por la cual el Juzgado Cuarto del Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá se inhibe de conocer sobre las sumarias incoadas contra Domínguez Castillero y Moisés Mizrachi en perjuicio de Cristina Hernández (fs. 144-146).

9. Copia autenticada del expediente en trámite en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia del recurso interpuesto por la Compañía Martínez y Asociados S. A. por falsedad en la inscripción por parte de Moisés Mizrachi del título de la finca dada en fianza hipotecaria (fs. 147-294).

Como se advierte, tales documentos aportados como pruebas no constituyen prueba sumaria porque no tienen eficacia jurídica para acreditar los hechos punibles de que trata el artículo 336 del Código Penal.

En lo que respecta al delito de Corrupción, señala el acusador que el Magistrado Almendral ha incurrido en los contemplados en los artículos 332 y 333 del Código penal, mismos que establecen lo siguiente:

> "Artículo 332: El servidor público que para retardar u omitir un acto debido, propio de sus funciones, o para ejecutar un acto contrario a sus deberes, reciba o se haga prometer dinero u otro beneficio para él o para un tercero, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y de 100 a 200 días-multa.
>
> Artículo 333: Si el autor del hecho punible descrito en el artículo anterior fuese Juez , Magistrado o Agente del Ministerio Público y el dinero, beneficio o promesa tuviere por objeto favorecer o perjudicar a una parte en el proceso, aunque sea de carácter administrativo, la sanción se agravará de una cuarta parte a la mitad".

En ambos tipos penales se advierte que el objeto material de la conducta lo constituye el dinero o promesa remuneratoria en dinero o cualquier otra utilidad.

Sin embargo, el acusador no ha presentado pruebas que demuestren que el licenciado Almendral haya aceptado dinero o promesa remuneratoria en dinero u otro beneficio para vender, por este estipendio, su función como Magistrado Ponente en los casos penales ya citados.

Por tanto, al no configurarse ninguna de las conductas delictivas que el licenciado Carrillo Gomila atribuye al Magistrado Andrés Almendral, convenios con la máxima representación del Ministerio Público, en el sentido de cerrar la encuesta de manera definitiva.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE en estas sumarias de manera objetiva e impersonal, con base en el numeral 1° del artículo 2210 del Código Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR ABRAHAM CARLOS MORÓN, SANCIONADO POR DELITO DE ROBO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Julián García Trejos ha presentado escrito de reconsideración contra la resolución calendada 27 de marzo de 1998 dictada por esta Sala, mediante la cual se resuelve no admitir el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia de 20 de noviembre de 1996, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condena a **Abraham Carlos Morón** a la pena de 80 meses de prisión, como responsable del delito de robo a mano armada cometido en perjuicio de Ricardo René Correa Molleda y Chian Min Yee de Chia.

Como fundamento de su solicitud, el recurrente expresa en primer término que "existe una evidente contradicción en la parte motiva de la resolución impugnada, ya que habiéndose aceptado que nuestro recurso se fundamenta ... en el Artículo 2466 del Código Judicial, con posterioridad se alude a la falta de cumplimiento de las formalidades exigidas en el artículo 2458 ... que corresponde a una causal distinta a la que invocamos" (f. 101).

Por otra parte, señala el defensor de oficio que "no es cierto que hayamos omitido demostrar `que la sentencia condenatoria impugnada se encuentre ejecutoriada , ya que de fojas 66 a 73 y 78 a 85, adjuntamos copias debidamente autenticadas de las sentencias expedidas tanto por el A-QUO como por el AD-QUEM" (f. 101). Manifiesta el recurrente que "a foja 86 adjuntamos copia debidamente autenticada de la providencia que pone en conocimiento el reingreso del expediente al A-QUO; además de que del intercambio epistolar que consta a fojas 14 y 15 del expediente se deduce que se trata de un expediente archivado" (f. 101).

Conocidos los argumentos que sirven de apoyo al recurso de reconsideración, le corresponde a la Sala decidir sobre su mérito.

En cuanto a la primera alegación, esta Superioridad advierte que las normas que regulan lo concerniente al recurso extraordinario de revisión no pueden ser interpretadas de manera aislada. El hecho de que el defensor de oficio sustente la iniciativa procesal en el artículo 2466 del Código Judicial, no lo exime de cumplir con las exigencias legales consagradas, básicamente, en el primer párrafo del artículo 2458 y en el artículo 2459 de la mencionada excerta legal, que se refieren a: 1) que la sentencia condenatoria impugnada se encuentre ejecutoriada, 2) que se indique la sentencia cuya revisión se demanda, el tribunal que la expidió, el delito que hubiere dado motivo a ella, la clase de sanción que se hubiere impuesto y los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoyare la solicitud, y 3) la presentación de las pruebas de los hechos fundamentales.

La Corte recuerda que el recurso de revisión es un mecanismo de impugnación de carácter extraordinario dirigido contra sentencias condenatorias ejecutoriadas, que tiene por objeto subsanar los errores cometidos en cualquiera de los supuestos que la ley expresamente contempla. La jurisprudencia nacional es uniforme al señalar que este medio procesal es de naturaleza eminentemente técnica, que debe ser presentado por un abogado y con el cumplimiento de formalidades legales precisas. De ahí se colige que, "si el libelo de revisión no cumple con los requisitos estipulados en los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial, se hace improcedente el medio impugnativo ... lo que en consecuencia indica que no es posible admitir el recurso de revisión contra la sentencia censurada" (Sentencia, Sala Segunda, 26 de enero de 1996).

Con relación al segundo reclamo, la Sala observa que ninguno de los documentos que presentó el defensor de oficio junto con el libelo de revisión tiene la eficacia de comprobar que la sentencia impugnada se encuentra ejecutoriada. Así vemos que la documentación visible de fojas 66 a 73 y 78 a 85 del cuaderno de revisión, consiste en copias autenticadas de las resoluciones expedidas por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá y del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso que se le siguió a Abraham Carlos Morón por el delito de robo cometido en perjuicio de Ricardo René Correa Molleda y Chian Min Lee de Chia. El documento que consta a fojas 86 se refiere al ingreso del cuaderno penal al tribunal de primera instancia, y el visible a foja 15 es una simple constancia de que, en el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, se encuentra el expediente que contiene las sumarias seguidas a Abraham Carlos Morón.

Por otra parte, el recurso fue inadmitido no sólo por la no acreditación de que la sentencia condenatoria se encontraba ejecutoriada, sino también porque el recurso de revisión carecía de sustento lógico y jurídico, ya que los argumentos que le sirven de fundamento no guardan relación con la causal invocada.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el recurso de reconsideración propuesto por el licenciado Julián García Trejos.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

RECURSO DE HECHO PROPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO ESPINOSA C., DENTRO DEL INCIDENTE DE CONTROVERSIA INTERPUESTO POR NICOLÁS HUMBERTO LOMBARDO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licenciado Francisco Espinosa Castillo, apoderado judicial de la Acusación Particular formalizada por **Pro-Comunications Materials Corp.** dentro del proceso penal seguido a Nicolás Humberto Nicholson Lombardo, recurrió de hecho contra la resolución de 28 de noviembre de 1997 mediante la cual del **Segundo Tribunal Superior** le niega a su representada el recurso extraordinario de casación anunciado y formalizado contra la resolución dictada por ese mismo tribunal el 28 de julio de ese año.

El Tribunal a quo, mediante esta resolución de 28 de julio de 1997, previa revocatoria del auto de 8 de abril de 1997 expedido por el Juez Sexto del Primero Circuito Judicial de Panamá, admitió el incidente de controversia presentado por la defensa técnica de Nicholson Lombardo, declaró nulo todo lo actuado y ordenó el archivo del expediente por defecto del requisito de procedibilidad de la querella exigida para los delitos de apropiación indebida.

Al formalizarse el recurso de casación contra este auto que pone fin al proceso, el Tribunal a quo no lo admitió porque al interpretar el artículo 2435 del Código Judicial excluyó que la resolución impugnada sea una de las previstas en esa disposición legal.

Admitido y tramitado el presente medio de impugnación, se recibió en tiempo oportuno el alegato del recurrente, quien afirma que al declararse la nulidad de toda la actuación y ordenarse el archivo del expediente se le ha puesto fin al proceso y que por la pena prevista para el delito de apropiación indebida, es decir de 6 meses a 3 años de prisión, es viable el recurso de casación anunciado y formalizado.

Añade que "en el expediente existen otros delitos denunciados: hurto, estafa y falsedad y contra la Administración Pública, que si bien la apropiación indebida pudiera tener una confusión con uno de ellos (hurto), no lo es con los otros (estafa, falsedad y contra la administración pública". (F.75).

Concluye manifestando que el primer inciso del artículo 2435 es de tipo "programático", y que las causales previstas en los numerales 3 y 6 del referido artículo hacen viable el recurso de casación.

Considera la Sala que el Segundo Tribunal Superior de Justicia al calificar la naturaleza del delito atribuido a Nicholson Lombardo, lo hizo correctamente al subsumirla dentro del tipo de la apropiación indebida que exige querella del ofendido como esencial condición de procedibilidad al tenor de lo preceptuado en el artículo 1979 del Código Judicial.

En consecuencia, al no haberse presentado ésta en los términos previstos en el artículo 2035 de la misma excerta legal, lo jurídico y procedente era declarar la nulidad de lo actuado y el archivo del expediente.

Es cierto que este tipo de resolución pone fin al proceso, como lo reconoce la propia resolución impugnada (f. 57), pero también lo es que no se trata de una esas resoluciones que al poner término al proceso permiten la impugnación extraordinaria de casación al tenor del artículo 2435 del Código Judicial.

Esta disposición, que no tiene nada de programática, sino que es preceptiva por regular un recurso tan técnico y formalista como el de casación, expresamente señala cuáles autos que al poner fin al proceso son susceptibles de casación en el fondo.

Son éstos el de sobreseimiento definitivo, los que deciden las excepciones de cosa juzgada, prescripción de la acción penal o de la pena o de aplicación de amnistía o de indulto.

No se menciona el que pone fin al proceso por declarar la nulidad de un proceso penal por defecto de la querella o de otra condición de procedibilidad.

No son atendibles por lo tanto los argumentos expuestos por el recurrente.

PARTE RESOLUTIVA

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de 28 de noviembre de 1997 dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso penal seguido a Nicolás Humberto Nicholson Lombardo en perjuicio de Pro-Comunications Materials Corp.

Notifíquese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE HENRY LUIS BALTAZAR CABALLERO, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, actuando en representación de Henry **Luis Baltazar Caballero**, ha presentado recurso de revisión contra la sentencia de 14 de octubre de 1997, proferida por el **Segundo Tribunal Superior de Justicia**, que confirmó la sentencia de primera instancia mediante la cual se condena a Baltazar Caballero a la pena de 6 años de prisión, como responsable del delito de posesión de drogas en forma agravada.

La Sala Penal procede a examinar el recurso extraordinario propuesto, a los efectos de decidir sobre su admisibilidad. Con tal propósito, se observa que el defensor técnico fundamenta el recurso en una sola causal, cual es la contenida en el numeral 3 del artículo 2458 del Código Judicial, que corresponde a: "Cuando alguno esté cumpliendo condena y se demuestre que es falso algún testimonio, peritaje, documento o prueba de cualquier otra clase y estos elementos probatorios fuesen de tal naturaleza que sin ellos no hubiere base suficiente para establecer el carácter del delito y fijar la extensión de la pena".

Ahora bien, la Sala advierte que los elementos de hecho que sirven de apoyo al recurso no son congruentes con la causal invocada. Así tenemos que el revisionista, en un primer argumento censura los testimonios rendidos por Nereida Jackson Quiroz, Elvis Tobio Rivera Jaén, Alberto Augusto Fernández y Roque Jacinto Mc Coney, quienes vinculan al condenado Baltazar Caballero con la sustancia ilícita incautada. En otra alegación, el recurrente manifiesta que "A BALTAZAR, nunca se le encontró en posesión de droga ... no se ha acreditado prueba alguna de la infracción del artículo 260 del Código Penal, de parte de mi representado; por consiguiente es infundada, la resolución que se impugna" (f. 10). A la luz de esta comprobación, se infiere que lo que se pretende con esta iniciativa procesal es un reexamen de las piezas de convicción obrantes en el expediente, cuando ya el acervo probatorio fue objeto de estimación por parte de los juzgadores en dos instancias. De ser admitida esta pretensión se estaría abriendo el camino a la valoración del negocio penal en una tercera instancia, lo que no corresponde al objeto de este recurso extraordinario.

De otra parte, ni los planteamientos del recurrente ni la documentación que se acompaña con el libelo de revisión son idóneos para acreditar la causal invocada. La jurisprudencia nacional tiene sentado que para que proceda la causal aducida resulta indispensable que "el recurrente haya acreditado plenamente los delitos de falsedad testimonial, documental, pericial o de que se trate y luego con la prueba de la falsedad cometida, fundamentar su pretensión" (Registro Judicial, marzo de 1995, págs. 215-216).

Finalmente, se comprueba que el recurrente incumple lo preceptuado en el inciso primero del artículo 2458 del Código Judicial, por cuanto no ha demostrado que la sentencia censurada se encuentre ejecutoriada.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por el licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, defensor técnico de Henry Luis Baltazar Caballero, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR NICOLÁS CAMARGO QUINTERO, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDUARDO WELLINGTON. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de la solicitud que, mediante manuscrito, formula **Nicolás Camargo Quintero**, para que se revise el proceso que se le siguió por el homicidio de Eduardo Wellington.

Como quiera que esta iniciativa procesal requiere ser formalizada por un profesional del derecho, el despacho sustanciador designó como defensor técnico del reo al licenciado Luis Carlos Arosemena, con la intención de que asumiera su representación en este caso "y lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso, si se registra causal legal que lo fundamente" (f. 6).

En cumplimiento de esta decisión, el defensor de oficio ha presentado escrito en el cual manifiesta que "del expediente estudiado, podemos colegir que, se cumplió con el debido proceso, no se obvió ninguna de las etapas procesales exigidas por ley y de esa manera, se le celebró la audiencia con jurado de conciencia declarándolo culpable" (f. 7). Agrega el abogado defensor que "en el proceso seguido a NICOLÁS, no encontré ninguna circunstancia que se encuadre en algunos de las ocho causales que expresa el artículo 2458 del Código Judicial" (f. 8).

Con vista en ese informe, la Sala no puede menos que desestimar la solicitud del inculpado, toda vez que la formalización de este medio extraordinario de impugnación está condicionada al cumplimiento de los requisitos que a tales efectos exigen los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial, lo que no ocurre en este caso.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA la solicitud de revisión que, en su propio nombre, formula Nicolás Camargo Quintero, y ORDENA el archivo del cuaderno.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR ABELINO MARCEL SANTOS BEJARANO, SANCIONADO POR EL DELITO DE ROBO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia escrito presentado

por **ABELINO MARCEL SANTOS BEJARANO**, condenado a la pena de sesenta (60) meses de prisión por la comisión de delito de robo, en donde solicita la revisión del proceso.

En cumplimiento de lo normado en el artículo 2050 del Código Judicial -que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio del Instituto de Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a dicha Superioridad, a fin de que éstos interpongan dichos recursos a favor de los reos que no tienen un abogado que los represente-, se remitió el presente recurso al Instituto de Defensoría de Oficio de la Provincia de Chiriquí, asignándose al Licenciado ARTURO PANIZA LARA para que formalizara el recurso.

Mediante escrito presentado en la Secretaria de la Sala Penal, que evidencia una exhaustiva investigación, el Licenciado PANIZA manifiesta lo siguiente:

> "Consideramos que el presente Recurso de Revisión interpuesto por Abelino Marcel Santos en virtud de sentencia condenatoria emitida en su contra por el delito de robo en perjuicio de LOURDES ANAYANSI DE LEON MEDINA, no encuentra asidero jurídico dentro de las causales contempladas en el artículo 2458 del Código Judicial, toda vez que no existe nuevos hechos que pudieran dar lugar a pretender una sentencia absolutoria, asi como tampoco se ha podido encontraralgún (sic) testimonio que sea falso o por lo menos no se pudo demostrar a lo largo del proceso".

Toda vez que el defensor de oficio asignado a ABELINO MARCEL SANTOS BEJARANO, al hacer el estudio respectivo del caso, advierte que no hay causal para interponerlo, estima esta Sala que no es posible acceder a la revisión del proceso que procuró impetrar el condenado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la solicitud formulada por ABELINO MARCEL SANTOS BEJARANO y, en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR MARLON MARTÍNEZ L., SANCIONADO POR DELITO DE ROBO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de solicitud formulada por **Marlon Martínez L.**, en su propio nombre, para que se revise el proceso mediante el cual se le condena a 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término, por la comisión de delito de robo.

En vista de que el presente recurso requiere de su formalización mediante abogado, el 16 de marzo del año en curso el despacho sustanciador designó a la licenciada Teresa Ibáñez para que asumiera la representación del solicitante y lo asistiera "en cuanto a la correcta formalización del recurso" (f. 6).

La defensora de oficio designada, luego de realizar un examen del proceso mediante el cual resultó condenado Marlon Martínez, en informe presentado al

despacho sustanciador indica que "no se registra causal legal alguna para formalizar el Recurso de Revisión sugerido por el señor MARLON MARTÍNEZ, de acuerdo con el Artículo 2458 del Código Judicial, ya que del mismo resalta su carácter de medio de impugnación extraordinario, aplicable únicamente cuando surja alguna de las causales expresamente señaladas en ese artículo" (f. 8).

Como quiera que en opinión de la defensora oficiosa no existe razón legal que permita acceder a la solicitud del peticionario, lo que procede es resolver de conformidad.

Por las consideraciones anteriores, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA la petición de revisión formulada por el condenado Marlon Martínez L., y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN EN FAVOR DE ROSA TULIA MARTÍNEZ DE PARRADO, CONDENADO POR DELITO RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La defensa técnica de **Rosa Tulia Martínez de Parrado** formalizó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 11 de septiembre de 1995, proferida por el **Juzgado Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá**, que condena a su patrocinada a la pena de 10 años de prisión, como instigadora del delito de posesión ilícita de drogas.

Por admitido el recurso, se decretó la práctica de pruebas por el término de 30 días (f. 12), luego de lo cual el negocio le fue corrido en traslado al Procurador General de la Nación y al recurrente, por el término de 15 días, para que presentaran sus alegatos por escrito (f. 23).

Concluido ese trámite, corresponde a la Sala de lo Penal proferir la sentencia de rigor sobre el fondo de la pretensión.

CAUSAL INVOCADA POR EL RECURRENTE

El recurso de revisión se apoya en la causal a que se refiere el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial, que a letra dice:

> "Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que por sí mismos o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa".

FUNDAMENTOS DE HECHO DEL RECURSO

Según da cuenta el recurrente, miembros de la Policía Técnica Judicial efectuaron una diligencia de allanamiento al apartamento de Rosa Tulia Martínez de Parrado, ubicado en el edificio Cancún, urbanización Obarrio, ya que tenían "informes" que indicaban que su ocupante se relacionaba con "un grupo guerrillero, narcoterrorista" (f. 2). Agrega que el tribunal de la causa condenó a su patrocinada como instigadora de delito relacionado con drogas, fundamentado en las declaraciones de Francisco Córdoba y Nilka Izaira Achong Torres, quienes son contestes en afirmar que Martínez se reunía con ellos para realizar

actividades ilícitas. Agrega que, luego de proferirse la sentencia condenatoria, Francisco Córdoba, en una declaración jurada receptada en la Notaría Tercera del Circuito de Cali, Colombia, manifiesta que "se arrepiente de las imputaciones que le hizo a nuestra representada ..." (f. 4).

ALEGATO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

El Procurador General de la Nación, mediante vista N° 22 de 9 de febrero de 1998, considera que la causal invocada por el recurrente carece de respaldo probatorio, pues "la prueba consistente en ratificar la declaración del señor FRANCISCO CÓRDOBA, notariada en ... Colombia ... no fue admitida por el Tribunal de la causa", mientras que "la prueba consistente en tomarle declaración jurada a la señora LINETH VANESSA DE BROWN, fue desistida por el propio revisionista" (f. 30).

La Procuraduría finaliza su alegato afirmando que "no debe accederse al recurso de revisión presentado contra la sentencia de 11 de septiembre de 1995, proferida por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá ..." (f. 31).

ALEGATO DEL REVISIONISTA

Al presentar su alegato, el revisionista manifiesta que la causal invocada se comprueba a través de la declaración extrajudicial rendida por Francisco Córdoba, pues la retractación ocurrió luego de proferirse la sentencia que condena a su patrocinada (f. 41). Considera que debe atenderse lo manifestado por Córdoba, ya que reconoce que "su motivación de faltar a la verdad ... fue el ofrecimiento que le hicieron los miembros de la Policía Técnica Judicial P. T. J., sección de narcóticos, de dispensarle un mejor trato durante su detención y la promesa de solicitar ante el Tribunal de la causa ... rebaja de pena ..." (f. 44).

El recurrente concluye su alegato solicitando que se decrete la revisión de la resolución impugnada, pues la declaración notarial de Francisco Córdoba es una pieza probatoria que ha "de conllevar necesariamente a la absolución de mi representada" (fs. 46-47).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Corte desestima la revisión de la sentencia atacada con base en la causal que establece el numeral 5 del artículo 2458 del Código Penal, por considerar que el revisionista no ha satisfecho la exigencia de la novedad de los hechos que aduce. En efecto, se observa que no se allegó al cuaderno penal la declaración de Linet Vanessa de Brown, toda vez que el propio recurrente desistió de la práctica de esa prueba testimonial (f. 17), mientras que mediante resolución de 6 de noviembre de 1997, esta Corporación "deniega ... se ratifique la declaración extrajudicial de Francisco Córdoba mediante exhorto o carta rogatoria, ya que si el letrado sostiene que Córdoba efectuó `falsas declaraciones dentro del proceso penal ... lo propio es comprobar, mediante sentencia condenatoria, que ha incurrido en la comisión del delito de falso testimonio" (f. 14).

Quiere decir entonces que en el recurso no se ha acreditado la eficacia de las dos pruebas originalmente aducidas, toda vez que una fue renunciada por el revisionista, mientras que la otra no puede ser ponderada como elemento probatorio por no reunir la formalidades que la ley exige para su valoración.

En conclusión, a juicio de la Corte los fundamentos de hecho y de derecho, así como los alegatos y pruebas presentados por el revisionista, no comprueban la existencia de nuevos hechos, de allí que no prospere la causal de revisión que se invoca.

En virtud de las anteriores consideraciones, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la revisión de la sentencia N° 87, calendada 11 de septiembre de 1995, proferida por el Juzgado Quinto Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que

condena a Rosa Tulia Martínez de Parrado como responsable del delito de posesión ilícita de drogas.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR GERARDO DOBARRO BELART, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA SALUD. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL

VISTOS:

El señor **GERARDO DOBARRO BELART**, mediante manuscrito remitido desde el centro penitenciario El Renacer, recibido en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 4 de marzo de 1998, solicitó que se revise la sentencia en su contra para que se reduzca su condena, tomando en cuenta su confesión, arrepentimiento y los señalamientos que hizo para cooperar con las investigaciones del tráfico de drogas desde Panamá a Europa.

Mediante la providencia fechada 16 de marzo de 1998, se corrió en traslado la presente solicitud de revisión a la licenciada MIRIAM J. DE SALINAS, Defensora de Oficio, para que represente al señor GERARDO DOBARRO BELART en el presente proceso y lo asista en la correcta formalización del recurso interpuesto, si hay causa legal que lo fundamente (f. 17).

El 1° de mayo de 1998 se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Penal escrito de desistimiento de la solicitud de revisión presentada y que fue suscrito por el señor GERARDO DOBARRO el 30 de abril de 1998 (f. 18).

La licenciada Jaén de Salinas, en cumplimiento de lo dispuesto por esta Superioridad, remitió su informe mediante Oficio de 5 de mayo de 1998 y en él consideró que la solicitud formulada por el señor DOBARRO BELART, no está contemplada en ninguno de los casos enumerados en el artículo 2458 del Código Judicial. Al respecto señaló lo siguiente:

> "Nos parece que en este expediente sucedió algo inusual, es que el abogado defensor resultó ser informante de la P.T.J., pero ni el Juez A-quo ni el Ad-quem, consideraron que esta situación insidió en que su confesión fuera oportuna y espontánea. Además de que este hecho no consagra causal de Recurso de Revisión.
>
> Es por todo lo anteriormente expuesto que consideramos que no tenemos causal para formalizar el presente Recurso". (F. 22).

Señaló la defensora de oficio que mediante sentencia de 29 de julio de 1997 DOBARRO BELART fue condenado a la pena de 108 meses de prisión e igual período de inhabilitación para ejercer funciones públicas por el delito relacionado con drogas, sentencia que fue apelada y confirmada por el Segundo Tribunal Superior el 23 de enero de 1998.

A pesar que la sentencia condenatoria está ejecutoriada, tal como lo exige para la admisión del recurso de revisión el artículo 2458 del Código Judicial, no es procedente en el presente caso, en virtud de lo señalado por la defensora de oficio, ya que no existe ninguna de las causales que el citado artículo exige para que sea revisada la sentencia impugnada.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la solicitud de revisión presentada por el señor GERARDO DOBARRO BELART.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR SILVIO MOSQUERA LEUDO, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El señor **SILVIO MOSQUERA LEUDO**, mediante manuscrito remitido desde el centro penal La Joya, recibido en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de marzo de 1998, solicitó que se revise la sentencia en su contra para que se reduzca la condena impuesta por el delito de homicidio contemplado en el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal a la pena mínima, porque el tribunal a-quo observó que no existen circunstancias comunes que agraven o atenúen la pena base.

Mediante la providencia fechada 30 de marzo de 1998, se corrió en traslado la presente solicitud de revisión al licenciado DANILO MONTENEGRO, Defensor de Oficio, para que represente al señor SILVIO MOSQUERA LEUDO en el presente proceso y lo asista en la correcta formalización del recurso interpuesto, si hay causa legal que lo fundamente (f. 9).

El licenciado Montenegro, en cumplimiento de lo dispuesto por esta Superioridad, remitió su informe mediante Oficio de 14 de abril de 1998 y en él consideró que la solicitud formulada por el señor SILVIO MOSQUERA LEUDO, no está contemplada en ninguno de los casos enumerados en el artículo 2458 del Código Judicial. Al respecto señaló lo siguiente:

> "Ahora bien, una atenta leída del manuscrito presentado me permite observar que el motivo que impulsa a SILVIO MOSQUERA LEUDO a solicitar la revisión de su caso consiste en que como delincuente primario, debió imponérsele la pena mínima establecida para el delito de Homicidio, citando para tal efecto un precedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia.
>
> No obstante la situación planteada no se enmarca en ninguna de las causales de revisión contempladas en el artículo 2458 del Código Judicial, por lo cual no hay sustento legal para formalizar recurso alguno por esta causa". (F. 11).

Además, el defensor de oficio señaló que esta es la tercera solicitud de MOSQUERA LEUDO para que se revise la sentencia que lo condena y que en las dos primeras ocasiones los defensores de oficio Ernesto Muñoz Gamboa y Luis Carlos Arosemena Ramos, mediante escritos de 21 de abril de 1997 y de 16 de enero de 1998 respectivamente, decidieron no formalizar el recurso de revisión por no existir causal legal que diera fundamento a las solicitudes (f. 12 a 19).

Tal como lo ha expresado el licenciado Montenegro no es procedente la solicitud de revisión de sentencia, porque la causal invocada por el solicitante en su manuscrito no es de aquellas que el artículo 2458 del Código Judicial contempla para la revisión de la sentencia impugnada.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la solicitud de revisión presentada por el señor SILVIO MOSQUERA LEUDO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JOSÉ DE LA CRUZ GARCÍA, SANCIONADO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El señor **JOSÉ DE LA CRUZ GARCÍA**, mediante escrito remitido desde la cárcel pública de Santiago, recibido en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 23 de abril de 1998, solicitó que se designe un defensor de oficio para que en su nombre formalice recurso de revisión de la sentencia de condena por el delito de homicidio, proferida por el **Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial**.

Mediante la providencia fechada 28 de abril de 1998, se corrió en traslado la presente solicitud de revisión a la licenciada MATILDE DE APOLAYO, Defensora de Oficio, para que represente al señor JOSÉ DE LA CRUZ GARCÍA en el presente proceso y lo asista en la correcta formalización del recurso interpuesto, si hay causa legal que lo fundamente (f. 3).

La licenciada Matilde de Apolayo, en cumplimiento de lo dispuesto por esta Superioridad, remitió su informe mediante Oficio de 12 de mayo de 1998 y en él consideró que la solicitud formulada por el señor JOSÉ DE LA CRUZ GARCÍA, no está contemplada en ninguno de los casos enumerados en el artículo 2458 del Código Judicial, conclusión a la que llegó luego del análisis que hizo de cada una de las causales señaladas, en vista que el solicitante sólo pidió un pronunciamiento sobre la condena que cumple. Al respecto la defensora de oficio, manifestó lo siguiente:

> "Pese a que el señor DE LA CRUZ GARCÍA sólo solicita 'que se pronuncien sobre su condena', situación que se hizo mediante el recurso de apelación interpuesto, en contra de la sentencia la cual fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, hemos considerado analizar todos y cada uno de los casos que señala el art. 2458 del Código Judicial y llegamos a la conclusión que por el momento no cabe el Recurso de Revisión solicitado". (F. 7).

A pesar que la sentencia condenatoria está ejecutoriada, tal como lo exige para la admisión del recurso de revisión el artículo 2458 del Código Judicial, no es procedente en el presente caso, en virtud de lo señalado por la defensora de oficio, ya que no existe ninguna de las causales que el citado artículo exige para que sea revisada la sentencia impugnada.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la solicitud de revisión presentada por el señor JOSÉ DE LA CRUZ GARCÍA.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR ÁNGEL MAZA SALAZAR, SANCIONADO POR DELITO DE HURTO. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El señor **ÁNGEL MAZA SALAZAR**, mediante escrito remitido desde el centro penitenciario de Nueva Esperanza, recibido en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 13 de octubre de 1997, solicitó el estudio de su expediente, porque tiene veintidós (22) meses detenido por la supuesta comisión del delito de hurto, sin que el Ministerio Público haya hecho la investigación pertinente que lo vincule a este delito.

Mediante la providencia fechada 20 de octubre de 1997, se corrió en traslado la presente solicitud de revisión al licenciado JULIO CÉSAR VÁSQUEZ, Defensor de Oficio, para que represente al señor ÁNGEL MAZA SALAZAR en el presente proceso y lo asista en la correcta formalización del recurso interpuesto, si hay causa legal que lo fundamente (f. 4).

El licenciado Vásquez, en cumplimiento de lo dispuesto por esta Superioridad, remitió su informe mediante Oficio de 22 de abril de 1998 y en él consideró que la solicitud formulada por el señor ÁNGEL MAZA SALAZAR, no cumple con lo preceptuado en el artículo 2458 del Código Judicial. Al respecto expresó lo siguiente:

> "... mediante certificación de la Corregiduría de Policía del Corregimiento de Cristóbal, se nos puso en conocimiento que el expediente incoado al prenombrado se encuentra pendiente de resolver.
>
> Este expediente fue enviado a la corregiduría desde el Juzgado Tercero ya que el mismo se inhibió de conocerlo.
>
> Nos permitimos señalar que no hay lugar al Recurso de Revisión solicitado por el señor Ángel Maza Salazar, ya que no se cumple con la exigencia normativa del artículo 2458 de nuestro Código Judicial que exige estar en presencia de una sentencia ejecutoriada para que éste tenga lugar". (Fs. 8 y 9).

A foja 10 del expediente reposa certificación de 20 de abril de 1998, de la señora Corregidora de Policía del Corregimiento de Cristóbal, en la que informa que el proceso en donde son partes ÁNGEL MAZA SALAZAR y LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, fue remitido por el Juzgado Tercero, Ramo Penal, y se encuentra en ese despacho pendiente de resolución.

En reiteradas ocasiones la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el recurso de revisión es de naturaleza extraordinaria y que sólo procede contra las sentencias ejecutoriadas, requisito indispensable a tenor de lo dispuesto en el artículo 2458 del Código Judicial, por lo cual esta Sala advierte que no es procedente la solicitud formulada en el presente caso por el señor ÁNGEL MAZA SALAZAR.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO

PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la solicitud de revisión presentada por el señor ÁNGEL MAZA SALAZAR.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR LUIS ALTAMIRANO DELGADO, SANCIONADO A PENA DE PRISIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El seis (6) de noviembre de 1997, se recibió en la Secretaria Penal de la Corte Suprema de Justicia, manuscrito remitido por el señor **LUIS ALTAMIRANO DELGADO** desde el Centro Penitenciario La Joya, mediante la cual solicita revisión de la sentencia de veintisiete (27) de junio de 1997, proferida por el **Segundo Tribunal Superior de Justicia**, y confirmada por esta Sala, quien lo condenó a doce (12) años de prisión por los delitos de Robo, Secuestro y Asociación Ilícita en detrimento de Víctor Liao Chung.

Para formalizar el recurso interpuesto, mediante providencia de catorce (14) de noviembre de 1997, se corre traslado al licenciado GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ, Defensor de Oficio, para que asista y represente al recurrente en la correcta formalización del recurso, si se registra causa legal que lo fundamente. (f. 4)

Formalizado el recurso de revisión, el LIC. FERNÁNDEZ mediante escrito, sustenta el recurso en base a lo siguiente:

En primer lugar manifiesta, que no se han considerado aspectos como la declaración indagatoria del señor LUIS ALTAMIRANO DELGADO, en el que confiesa los hechos delictivos, y el cual se encuentra ubicado dentro de las circunstancias atenuantes señaladas en el artículo 66 del Código Penal. (f. 6)

Aunado a lo anterior, señala el LIC. FERNÁNDEZ, que por medio de la declaración del señor ALTAMIRANO, se llamaron a juicio, y luego se encontraron culpables a los señores HERACLIO PERÉA MOSQUERA y LUIS ENRIQUE RIASCO (A) MORO, por los delitos de Secuestro, Asociación Ilícita para Delinquir y Robo. (f. 8)

Por los fundamentos anteriores, solicita sea ADMITIDA y REVISADA la sentencia de 27 de junio de 1997, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en base a lo preceptuado por el artículo 2458 numeral 5 del Código Judicial, que señala:

> "Habrá Recurso de Revisión contra las Sentencias Ejecutoriadas, cualesquiera que sean los Tribunales que los hubieren citado en los casos siguientes:
> ...
> 5) Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que por sí mismos o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la Absolución del Acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición Penal menos severa".

SITUACIÓN PROCESAL

Esta Sala puede observar claramente, que no se está en presencia de nuevos hechos, como señala el licenciado FERNÁNDEZ, sino que son hechos ya examinados

en una primera instancia y que posteriormente fueron examinados en segunda instancia en grado de apelación.

En este sentido, al ser apelada la sentencia de 27 de junio de 1997, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, fue confirmada por esta Sala el 30 de septiembre de 1997, de tal manera que las piezas procesales enunciadas por el letrado, ya fueron examinadas.

Cabe advertir, que las circunstancias atenuantes enumeradas en el artículo 66 del Código Penal, son consideradas por el juzgador al momento de fijar una pena base entre el mínimo y máximo señalado para cada delito (art. 56 numeral 6 del Código Penal).

Por tanto, lo expresado por el licenciado FERNÁNDEZ, no se ajusta a lo contemplado en el ordinal 5 del art. 2458 del Código Judicial, toda vez que no se han aportado pruebas que constaten nuevos hechos que den lugar a la causal invocada.

PARTE RESOLUTIVA

Por lo anteriormente expuesto, LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA la solicitud de revisión interpuesta por el licenciado GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ, en representación del señor LUIS ALTAMIRANO DELGADO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JOSÉ FÉLIX CASTILLO, SANCIONADO A PENA DE PRISIÓN. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El señor **JOSÉ FÉLIX CASTILLO**, mediante manuscrito remitido desde la Cárcel Pública de David, Chiriquí, recibido en la Secretaria Penal de esta Corporación de Justicia, el veintiuno (21) de noviembre de 1997. Lo interpuesto recurso de revisión contra la sentencia penal emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Chiriquí, quien lo condenó a 38 meses de prisión por los delitos de hurto y tentativa de hurto. En dicho manuscrito, el prenombrado CASTILLO, solicita que se le devuelva el dinero incautado al momento de su detención.

Mediante providencia de veinticuatro (24) de noviembre de 1997, se corre traslado al licenciado ARTURO PANIZA, Defensor de Oficio del Circuito de Chiriquí, para que represente al recurrente en este caso y lo asista en la correcta formalización del recurso interpuesto, si se registra causa legal que lo fundamente. (f. 6)

Al respecto, el LIC. PANIZA, rinde el siguiente informe:
"El señor JOSÉ FÉLIX CASTILLO, en su escrito de petición de este recurso, expresó que lo que desea es que se le devuelva el dinero que le fuera incautado al momento de su detención, toda vez que el mismo no fue objeto de comiso en la sentencia penal emitida por el Juez Cuarto de Circuito, además que el señor JOSÉ F. CASTILLO, comprobó con documentación (fotocopia de libreta de ahorro) que posee una cuenta de ahorros en la Caja de Ahorros, y que casualmente unos días antes de ser detenido, a través de un amigo cuya declaración consta en el expediente (Julio Cesar Patiño f.405-406),

le retiró la suma de ciento cincuenta balboas (B/.150.00) el día 5 de julio de 1996.

Sin embargo a fin de cumplir con la posible interposición del Recurso de Revisión, procedimos a realizar un estudio del negocio el cual está compuesto de cuatro expedientes que fueron debidamente acumulados y en tres de los mismos el señor Castillo fue condenado por el delito de tentativa de hurto, restando un solo expediente en el cual se le condenó por el delito de hurto y la pena final que se le impuso fue de 38 meses de prisión, de los cuales ha cumplido a la fecha 18 meses, quedando tan solo siete meses para que sea elegible para una libertad condicional.

Dentro de las causales que contempla el artículo 2458 del Código Judicial no existe ninguno que se adecue a la interposición del recurso en lo referente a los expedientes que le fueron acumulados al Señor José Félix Castillo, puesto que en tres de los procesos terminó condenado por el delito de tentativa de hurto en el cual incluso sus captores expresaron que lo habían detenido dentro del local que fue objeto del hurto. No hay nuevos elementos que hayan surgido, ni tampoco existen testimonios falsos que se hayan podido probar u otros elementos probatorios que hubiesen podido cambiar la situación del encartado, por ello cuando procedimos al análisis de los procesos tratamos de adecuarlo a alguna de las causales que contempla el artículo 2458 del Código Judicial, pero no fue posible.

Como ya lo hemos mencionado y así nos lo ha expresado el Señor JOSÉ FÉLIX CASTILLO, su deseo es que se le devuelva el dinero que le fue incautado, pero cuyo comiso no se decretó; hemos procedido hace algunas semanas a solicitar la devolución del mismo y estamos esperando que le sea entregado, pues se encuentra depositado en el Juzgado que conoció el Proceso". (F. 8 y 9).

Cabe advertir, que lo solicitado por el señor CASTILLO, es la "devolución del dinero que le fuere incautado al momento de su detención", debido a que el mismo no fue objeto de comiso en la sentencia penal dictada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Chiriquí, que lo condenó a 38 meses de prisión.

A pesar que nos encontramos ante una sentencia ejecutoriada, requisito que se exige para la admisión del recurso de revisión (Art.2458), la misma no procede, toda vez que como manifestó el LIC. ARTURO PANIZA, le fue imposible formalizar el recurso debido a que no se adecua a ninguna de las causales contempladas en el artículo supra mencionado.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de Ley, DESESTIMA la solicitud de revisión presentada por el señor JOSÉ FÉLIX CASTILLO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS OSCAR JARAMILLO RANGEL SOLICITA SE REVISE LA SENTENCIA QUE LO CONDENA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Segunda Penal de solicitud que formula **Luis Oscar Jaramillo Rangel**, en el sentido de que se revise el proceso que diera lugar a la sentencia N° 30 calendada 12 de abril de 1996, proferida por el **Juzgado Décimo Tercero del Primer Circuito Judicial**, que le impone la pena de 12 años de prisión por la comisión de delito de tráfico internacional de drogas.

Como quiera que esa iniciativa procesal requiere de su formalización por un abogado, el 30 de marzo de 1998 el despacho sustanciador designó a la licenciada Asunción de Montalvo para que, en su condición de defensora de oficio, asumiera la representación del condenado en este asunto "y lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso ... si se registra causal legal que lo fundamente" (f. 5). En cumplimiento de esa decisión, la defensora de oficio designada presentó escrito en el cual manifiesta que no procede la solicitud de revisión con fundamento en los numerales 3 y 5 de del artículo 2458 del Código Judicial.

En lo concerniente al numeral 3, expresa que "no existe ... sentencia condenatoria posterior que determine la falsedad de las pruebas aportadas al proceso", y en lo atinente al numeral 5, manifiesta que luego de la sentencia condenatoria, "no se ha presentado ningún hecho nuevo que pueda dar lugar" a la absolución o una condena menos rigurosa a Jaramillo (f. 10).

Con vista de esa manifestación, la Corte no puede menos que concluir que no es posible acceder a la solicitud del condenado, toda vez que la admisión y sustanciación de este recurso está condicionada al cumplimiento de los requisitos que a tales efectos exigen los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial.

Por lo anterior, la CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA la solicitud de revisión que, en su propio nombre formula Luis Oscar Jaramillo Rangel, y ORDENA el archivo del cuaderno.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) GRACIELA J. DIXON
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR CARMEN ALEYDA DE LOS SANTOS ESCULTA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A HUMBERTO ELÍAS DE LEÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal de recurso de revisión presentado por el licenciado José Ramiro Fonseca Palacios, actuando en representación de **Carmen Aleyda De Los Santos Esculta**, contra la sentencia de 29 de noviembre de 1996, proferida por el **Juzgado Segundo del Circuito de Herrera**, mediante la cual se absuelve a Elías Humberto De León Villarreal de los cargos formulados por la supuesta comisión del delito de violación carnal cometido en detrimento de De Los Santos Esculta.

Al examinar el libelo de revisión, con el propósito de decidir sobre su admisibilidad, la Corte advierte enseguida que la presente iniciativa carece totalmente de fundamento lógico-jurídico, pues la argumentación que sirve de apoyo al recurso no guarda ninguna relación con la causal invocada por el recurrente. Se observa que el licenciado Fonseca Palacios aduce la causal contenida en el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial, referente a "Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del

acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa". Por otra parte, como fundamento de hecho alega que "hemos obtenido nuevos elementos probatorios que combinados con los peritajes de fojas 11, 12, 254-267 del Dr. MENDIETA; los de fojas 205 y 206 de la Dra. BOUCHE DE ROMERO; el de fojas 248 del Dr. LUIS PAZ SOLANILLA y el de fojas 208-209 del Dr. HUMBERTO MAS CALZADILLA, demuestran que existen acreditados los elementos probatorios suficientes para que se ordene la Revisión de la sentencia impugnada de cara a que se emita un fallo contrario al que plasma el fallo atacado" (f. 3). Como se aprecia, este razonamiento no coincide con la finalidad de la causal en cita, pues ésta sólo procede en el evento de que surjan hechos nuevos luego de proferida una sentencia condenatoria, que permitan la aplicación de una sanción penal menos severa o la absolución del reo. De ninguna manera puede emplearse como fundamento para ordenar la revisión de una sentencia absolutoria, "a contrario sensu (Sentido Contrario)" (f. 2) como lo propone el recurrente, pues esta Sala Penal ha manifestado que el recurso de revisión "tiene por objeto subsanar los errores que hayan podido cometerse, en cualquiera de los supuestos que la ley expresamente indica" (Registro Judicial, mayo de 1996, pág. 286). Por consiguiente, carece de apoyo legal tanto aducir supuestos no contemplados expresamente en nuestro ordenamiento jurídico como alterar el contenido de una determinada causal para adecuarlo, forzadamente, a una situación procesal particular, como ocurre en el presente negocio penal.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por el licenciado José Ramiro Fonseca Palacios contra la sentencia de 29 de noviembre de 1996, proferida por el Juzgado Segundo del Circuito de Herrera.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) GRACIELA J. DIXON

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

PROCESO SEGUIDO A GERARDO DE LA ROSA POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE RICARDO ADOLFO WELCH. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para resolver la alzada, ingresó a esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, las sumarias instruidas a **GERARDO DE LA ROSA**, sindicado por delito de homicidio en perjuicio de **RICARDO ADOLFO WELCH ROOKS.**

Celebrada la audiencia en derecho, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante sentencia de 14 de octubre de 1997, absolvió a DE LA ROSA de los cargos que se le formulaban, por considerar que el indicio de presencia que existía contra el imputado no era suficiente para condenarlo, puesto que en el lugar del hecho habían más detenidos; el testimonio de CARLOS RIVAS MENESES era una declaración de referencia y además sospechosa, pues él también fue indagado por este delito; que no se había demostrado que la herida que presentaba el imputado en el brazo, causada con objeto cortante, hubiera sido producida en un enfrentamiento con el hoy occiso, ya que el Ministerio Público no consignó tal situación al indagar a DE LA ROSA. Finalmente, señala la sentencia que, a pesar de que el imputado tiene una personalidad psicopática y es imputable, no por ello es posible endilgarle un homicidio en donde no se ha demostrado con pruebas su autoría, por lo que en consideración a la garantía constitucional de la presunción de inocencia y al principio "in dubio pro reo" se concluye con la medida absolutoria.

Por su parte, el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial sustentó su apelación de fojas 445 a 447 del sumario, indicando que su disconformidad con la sentencia radica en que la Sentenciadora no ha justipreciado en debida forma las pruebas que militan en autos, toda vez que existen suficientes elementos de juicio para condenar a GERARDO DE LA ROSA TORRES por el homicidio investigado, pues existe la versión de CARLOS RIVAS MENESES, quien declaró que el imputado le dijo haber sostenido un enfrentamiento con el hoy occiso y él "le dió un tucaso"; que ellos andaban juntos sacando semillas de plátano y a eso de las 12 del día se percató que no habían trabajado porque las semillas estaban regadas y además observó una herida que presentaba DE LA ROSA en un brazo y el momento en que se dirigió a la playa para lavar su ropa ensangrentada. Sostiene el colaborador de la instancia que CARLOS RIVAS MENESES mantuvo su versión en la diligencia de careo y que tal versión se robustece con la del custodio CORNELIO ESPINOSA MUÑOZ, cuando indica que después de la muerte de WELCH, al preguntarle a DE LA ROSA por éste, lo notó sumamente nervioso y escuchó de la propia voz de GERARDO que "él había tenido un altercado con WELCH; que en el expediente constan informes psiquiátricos que demuestran que DE LA ROSA es un simulador que retrasó las investigaciones y que dichos peritos destacaron que de fugarse podría volver a incurrir en el delito de homicidio, agregando que a fojas 142 y 145 existen constancias de la herida que presentaba DE LA ROSA para la fecha del homicidio. Para concluir señala el agente del Ministerio Público que, de justipreciarse en forma global el caudal probatorio incorporado en esta encuesta de acuerdo a la sana crítica, "daría el razonamiento lógico en dirección inequívoca a la responsabilidad de GERARDO DE LA ROSA, por la muerte de RICARDO WELCH, a pesar de las condiciones desfavorables que rodearon el hecho criminal como ausencia de tesdtigos (sic) presenciales y el área apartada donde sucedió".

Conocidas las argumentaciones del Ministerio Público, pasa la Sala a referirse a esos cuestionamientos, en los términos previstos por el artículo 2428 del Código Judicial.

En ese orden y en cuanto al testimonio de CARLOS RIVAS MENESES, precisa puntualizar que este testigo, al igual que GERARDO DE LA ROSA, fue indagado en esta investigación, profiriéndose en su favor un sobreseimiento provisional al momento de la calificación del sumario (f. 237). De la lectura de sus distintas intervenciones en este proceso, se advierten contradicciones e incongruencias en sus afirmaciones que restan credibilidad a sus manifestaciones. Se trata de un testigo preferentemente de referencia, que no declara en lo fundamental por percepción propia sino por lo que expresa haberle contado el propio DE LA ROSA, que éste categóricamente lo ha negado en sus declaraciones. Este testigo CARLOS RIVAS MENESES, en su primera declaración (foja 15) indicó que el 6 de mayo de 1988, día del hecho, el Sargento SAAVEDRA "me había encargado a mí de sacar las semillas y a GERARDO DE LA ROSA de cargarlas, pues entonces yo me fuí a sacar la semilla, pero no me enteré que el Sargento CLIMACO SAAVEDRA también había mandado a RICARDO ADOLFO WELCH ROOKS" y afirma que no vio en ese momento a WELCH ROOKS y sin embargo, cuando a foja 141 se le pregunta, ante la negativa de DE LA ROSA de encontrarse recogiendo semillas con WELCH ese día, responde que "bueno yo no sé por qué él dice que no, si yo los dejé juntos cogiendo las semillas". También declara en su primera intervención (foja 15) que no vio a GERARDO DE LA ROSA sino hasta las 9:00 a. m., cuando le dijo que había tenido un problema con WELCH, mientras que a foja 138 sostiene que ese día "empezamos a las siete de la mañana, allí yo le indiqué a dos compañeros míos uno ñato o sea GERARDO DE LA ROSA y el nombre del otro se me olvidó ahora mismo no recuerdo, yo le dije que bajaran la semilla". En una declaración indica que vio a GERARDO a las nueve de la mañana y en otra sostiene que estuvo con él a las siete de la mañana.

También es de observar, en cuanto a lo declarado por CARLOS RIVAS, que en su segunda declaración, foja 138, declara que "le vi a DE LA ROSA una herida en el brazo", afirmación que no hizo en su primera comparecencia en este proceso, visible a foja 15, y que rindiera a menos de un mes de sucedido el hecho, mientras que la de foja 138 la hace a más de un año de ocurrida la muerte de WELCH. Es significativo que se omitiera esa circunstancia, cuando sabido es que las declaraciones que se ofrecen al momento o a los pocos días del hecho normalmente recogen con mayor precisión todo lo acontecido y observado, por cuanto permanecen frescos en la memoria del declarante los detalles del acontecimiento.

De otro modo, manifiesta este testigo que DE LA ROSA le manifestó que le había dado un "tucaso" a WELCH, hecho que no se encuentra respaldado con ninguna prueba en este expediente y, contrariamente a ello, del examen que se hace del Protocolo de Necropsia (fs. 25-33), practicado al occiso WELCH ROOKS, se aprecia que no existe ninguna anotación sobre golpe contundente alguno sufrido por la víctima, determinándose en las circunstancias médico legales que recibió varias heridas con objeto punzo-cortante.

Cierto es que, como lo certifica la Medicatura Forense de Veraguas a foja 145, GERARDO DE LA ROSA presenta una "herida cortante de forma evalada (sic) de 4 x 1.5 en cara externa del 1/3 proximal del brazo izquierdo", pero en ese mismo certificado se expresa que dicha herida "impresiona más de 12 meses" y aparte de la manifestación de RIVAS MENESES de esa herida, que la hace después de un año de ocurrido el hecho, no existe ningún otro elemento probatorio que permita llegar a la conclusión categórica de que esa herida fuera ocasionada a DE LA ROSA el día en que se produjo la muerte de WELCH. Por el contrario, ninguna otra de las personas que han declarado en este proceso, y sobre todo agentes policiales que ese día estaban a cargo de los detenidos y conversaron con DE LA ROSA después del hecho le vieron esa herida, como tampoco el Ministerio Público, que usualmente lo hace, dejó constancia al momento de recibirle indagatoria a DE LA ROSA (f. 13) que éste presentaba en su brazo izquierdo la herida de la que habla RIVAS MENESES.

De otro modo, del testimonio del Sargento CORNELIO ESPINOZA MUÑOZ, citado por la Fiscalía en la sustentación de su apelación, tampoco encontramos fundamento para revocar la sentencia cuestionada. En su declaración, no le hace cargo directo a DE LA ROSA, afirmando que ese día, en el campamento de Playa Blanca, aproximadamente había como veinte (20) detenidos a su cargo, que los dividió en tres grupos, que en uno de esos andaba "el ñato" (DE LA ROSA), RIVAS MENESES y el difunto RICARDO WELCH, que "no me dí cuenta de ningún incidente" y que posteriormente notó a DE LA ROSA nervioso y al insistirle sobre el paradero de WELCH, le contestó que ellos "habían tenido un pequeño altercado".

Cierto es que existen en este proceso certificaciones que establecen la personalidad antisocial del imputado, señalándolo como un sujeto peligroso, pero de esa evaluación científica que se hace de su persona no puede concluirse que fuera el autor de la muerte de RICARDO ADOLFO WELCH, si de otro modo no existen otras pruebas fehacientes que así lo permitan.

En todo caso, ante la eventualidad de pronunciar un fallo que conduzca a una injusticia irreparable, en casos como el presente, donde existe una duda razonable acerca de la persona que causó la muerte y a ésta se le juzga en derecho, normas y principios rectores del proceso penal, como lo son los de in dubio pro reo y el de presunción de inocencia, que se recogen en el fallo recurrido resultan suficientes para dar la aprobación al fallo apelado por el agente del Ministerio Público.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia de 14 de octubre de 1997, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante la cual se ABSUELVE a GERARDO DE LA ROSA de los cargos que se le formulaban por el homicidio de RICARDO ADOLFO WELCH.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A ALBERTO SITTÓN VEGA POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MILAGROS DEL CARMEN AYALA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para resolver la alzada ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema la sentencia de treinta y uno (31) de octubre de 1997, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial con sede en David, en el proceso que por el delito de homicidio cometido en perjuicio de **MILAGROS DEL CARMEN AYALA** se le sigue a **ALBERTO SITTÓN VEGA**, conforme a hecho ocurrido en horas de la mañana del día 16 de julio de 1993, en la residencia del imputado, ubicada en la Avenida Sexta Oeste, Ciudad de David, provincia de Chiriquí.

La audiencia oral se llevó a cabo el día 6 de mayo de 1997 y el jurado de conciencia lo encontró culpable del cargo que motivó su encausamiento. Al dictar sentencia, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial calificó el delito como de homicidio simple, a tenor de lo dispuesto en el artículo 131 del Código Penal, luego de concluir que ninguna de las circunstancias previstas en los numerales 2° y 3° del artículo 132, relativas a la premeditación y a la ejecución del delito por medios atroces, concurrían en el caso bajo examen; fijó la pena base, tomando en consideración los parámetros del artículo 56 del Código Penal, en diez (10) años de prisión, cifra a la que aumentó una quinta parte por la aplicación de la circunstancia agravante prevista en el numeral 1° del artículo 67 del Código Penal. En cuanto a las circunstancias atenuantes, el Tribunal las consideró inexistentes en el caso presente, quedando la pena líquida en doce (12) años de prisión.

Al notificarse de la resolución impugnada, el licenciado RODRIGO MIRANDA MORALES, defensor del sindicado, anunció recurso de apelación contra lo resuelto y en su escrito de sustentación expresó que contra su defendido no milita un solo testimonio de persona alguna que lo hubiere visto cometer el crimen y que la prueba que se usó en su contra fue de carácter indiciario, es decir, conjeturas y sospechas; que la hora en que murió la víctima se convirtió en un ovillo de acertijos y tesis carentes de sentido común; que no se tomó en consideración el hecho de que MILAGROS DEL CARMEN AYALA fue vista con vida por testigos inobjetables entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana del día del hecho; que el doctor SITTÓN VEGA pudo demostrar que salió hacia su trabajo aproximadamente a las 7:45 a. m., acudió a dos laboratorios cercanos a la Policlínica del Seguro Social, regresó a dicho centro a las 8:00 a. m. y que desde esa hora atendió a 26 pacientes sin apartarse un instante de su consultorio. Afirma el recurrente que ni el Tribunal ni el Ministerio Público se preocuparon por proteger los derechos procesales de su cliente ni la presunción de su inocencia, y que las noticias escandalosas e infundios publicados en los medios de comunicación influyeron al jurado por lo que el veredicto ya estaba predeterminado; que la familia de la víctima, en lugar de buscar la verdad, protagonizó escándalos públicos y desde el mismo día del hecho acusaban al doctor SITTÓN de haber cometido el homicidio; que la acusación particular, consciente de esto, se abstuvo de apelar la sentencia en la que no se le aplicó la pena máxima y que esa resolución fue dictada "a regañadientes", pues los magistrados del tribunal se han visto compelidos a acatar la decisión del jurado de conciencia. Finalmente, manifiesta su intención de recurrir en revisión del proceso seguido a su patrocinado, solicita que se morigere la pena señalada y se le imponga el mínimo de cinco (5) años que contempla el artículo 131 del Código Penal, como un medio de reparar la injusticia cometida, señalando que la ausencia del país del doctor ALBERTO SITTÓN no es una admisión tácita de culpabilidad como se ha querido hacer ver, sino una consecuencia de las infamantes condiciones de nuestro sistema carcelario.

Corrido el traslado del escrito de apelación al Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial (f. 1918) y al Acusador Particular (f. 1921), ninguno de los dos presentó objeciones a la apelación de la sentencia, de modo que les precluyó el término que se les había concedido para que formularan pronunciamientos al respecto.

Después de exponer los argumentos presentados por el apelante, la Sala pasa a decidir la alzada en los términos previstos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, que tendrá conocimiento del proceso sólo sobre los puntos de

la resolución a los que se refiere el recurrente.

Las piezas procesales dan cuenta de que el día de los hechos MILAGROS DEL CARMEN AYALA -quien se desempeñaba como empleada doméstica en la residencia del doctor ALBERTO SITTÓN VEGA- se levantó, como era su costumbre, a preparar el desayuno a los miembros de la familia. Después de ello, la señora ARGELIS REYES DE SITTÓN y sus hijos salieron aproximadamente a las 6:45 a. m. para sus respectivas escuelas, mientras que el doctor ALBERTO SITTÓN VEGA permaneció en su residencia, de acuerdo con sus propias declaraciones, hasta las 7:43 ó 7:45 a. m. hora en que se dirigió a la Policlínica del Seguro Social donde laboraba.

Aproximadamente a las 12:10 p. m., cuando la hija del sindicado MARICELA DEL CARMEN SITTÓN REYES regresó del colegio, encontró a MILAGROS tirada boca abajo en el cuarto ocupado por sus padres y en ese preciso momento regresaban también de sus trabajos el doctor SITTÓN VEGA y su esposa, quienes igualmente pudieron observar a la empleada doméstica que yacía en un charco de sangre en su habitación.

Las investigaciones y pesquisas realizadas a lo largo del proceso arrojaron una serie de indicios graves contra el doctor SITTÓN VEGA, contra quien, concluida la investigación sumarial, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial profirió auto encausatorio que, apelado ante esta Sala, fue confirmado por decisión mayoritaria el 31 de enero de 1996. Posteriormente, surtidos los trámites correspondientes, tuvo lugar la audiencia ante jurado de conciencia, el que, como ya se expresó, pronunció un veredicto de culpabilidad contra el imputado.

De la lectura que se hace del escrito de sustentación de la apelación, se aprecia que no se exponen puntos concretos contra el fallo pronunciado, limitándose fundamentalmente a formular manifestaciones acerca de lo que se estima como la gran injusticia que constituye el fallo de culpabilidad pronunciado por el jurado y exponer apreciaciones que fueron debatidas y conocidas en el acto de la audiencia, las que no son procedentes en esta sustentación, cuando ya existe un veredicto de condena proferido por el tribunal de jurados. Esa decisión es de carácter autónomo y definitivo, no sujeta ahora a censuras y, por tanto, los reparos y alegaciones que formula la defensa respecto a la autoría y a otras circunstancias del presente hecho resultan inadecuadas en esta etapa procesal, donde no es posible cuestionar el fallo de culpabilidad pronunciado sino exteriorizar la disconformidad específica que se tiene contra la sentencia que impone la sanción, como consecuencia de la decisión de condena emitida por el cuerpo de jurados de conciencia.

En lo medular del escrito de apelación se observa que el recurrente se limita a solicitar que se le imponga a su defendido la pena mínima de cinco (5) años señalada para este tipo de delito, pues considera que su culpabilidad no ha sido demostrada y se ha cometido una grave injusticia. Sin embargo, la Sala indica que el Tribunal a-quo, al dosificar la pena base, sancionó discrecionalmente con diez (10) años de prisión al imputado, tomando en cuenta los parámetros del artículo 56 del Código Penal y dicha decisión se encuentra dentro del intérvalo penal contemplado en la ley. La fijación del monto líquido de la pena impuesta se ajusta al marco de la norma infringida y se impuso conforme al análisis que se hiciera de las constancias procesales, que no dan motivo para discrepar de la discrecionalidad que se le atribuye al tribunal sancionador para estos efectos.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia de treinta y uno (31) de octubre de 1997, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial con sede en David, en el proceso seguido a ALBERTO SITTÓN VEGA, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de MILAGROS DEL CARMEN AYALA.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JOSÉ BELADINO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, JESÚS MARÍA ZULETA BEDOYA Y JORGE ELIÉCER BERNAL GUZMÁN, SINDICADOS POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MANUEL VÁSQUEZ LÓPEZ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para resolver la alzada ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema, las sumarias instruidas contra **BRANCO ANTONIO PAGAN**, **JOSÉ BELADINO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, JESÚS MARÍA ZULETA BEDOYA y JORGE ELIÉCER BERNAL GUZMÁN**, sindicados por el delito de homicidio en perjuicio de **MANUEL VÁSQUEZ LÓPEZ.**

La audiencia oral se llevó a cabo el día 25 de noviembre de 1996 y el jurado de conciencia declaró inocente al primero y culpables a los tres últimos. Como consecuencia de ese veredicto, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, por sentencia de 4 de febrero de 1997, fijó la pena tomando en cuenta el grado de participación en el delito y aplicando, para fijar la pena base, los aspectos contemplados en el artículo 56 del Código Penal. También consideró el tribunal sentenciador que se trataba de un homicidio agravado por las circunstancias contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 132 del Código Penal, señalando la pena base en quince (15) años para todos los imputados, la que aumentó en dos terceras partes por las agravantes comunes establecidas en los numerales 4 y 7 del artículo 67 del mismo código, quedando así la pena líquida a cumplir en 20 años de prisión, toda vez que nuestra legislación no admite penas superiores.

Como pena accesoria se les condenó a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez años, con posterioridad al cumplimiento de la pena principal impuesta.

Notificada la sentencia, los defensores anunciaron y sustentaron en debido tiempo sus apelaciones, donde dejan expuestas las razones de su disconformidad con la resolución recurrida.

En ese orden, la defensa de JESÚS MARÍA ZULETA BEDOYA, a cargo del licenciado RAMIRO FONSECA, fundamenta su discrepancia con el fallo pronunciado en varios puntos, siendo su principal cuestionamiento el hecho de no haberse aplicado a su representado la atenuante de la confesión. Indica el jurista que la interpretación que el tribunal le dá a los requisitos de espontaneidad y oportunidad de la confesión es absurda y que ZULETA BEDOYA cumplió con dichos requisitos en el sentido más literal de la norma y para demostrarlo cita doctrina de autores y jurisprudencia de esta Sala de 23 de junio de 1994. Agregó que al momento en que su representado rindió indagatoria nadie había confesado y las narraciones de los hechos apuntaban hacia otros imputados; que sin presión física o mental y sin la presencia de un abogado ZULETA BEDOYA decidió confesar el hecho con lujos de detalles y manifestó su arrepentimiento; que el reconocimiento de las atenuantes contempladas en el artículo 69 del Código Penal "son de imperioso reconocimiento y no quedan sujetas al arbitrio del juez". Por último indica que, como quiera que la confesión fue espontánea y oportuna y el arrepentimiento se ha manifestado desde el año 1987 precisa que la Sala Penal de la Corte Suprema le reconozca esas dos situaciones y que así mismo como el tribunal primario aumentó la pena en dos terceras partes -10 años- al considerar la existencia de circunstancias agravantes en su contra, de ese mismo modo solicita que la confesión y arrepentimiento sean tasados con un tercio cada uno, cinco años de rebaja por cada atenuante, lo que restado de los 15 años como pena base y los 20 años como pena líquida permiten inferir que una vez reformado el fallo censurado se ordene la inmediata libertad para su representado.

Por su parte, el abogado de JOSÉ BELADINO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, Licenciado

BOLÍVAR DÁVALOS MONCAYO, manifiesta su desacuerdo con la dosificación de la pena impuesta a su defendido, señalando que no debe incrementarse gravosamente la sanción con la calificación que fundamenta la sentencia con los efectos de los numerales 1 y 2 del artículo 132 del Código Penal y el uso de las agravantes de los numerales 4 y 7 del artículo 67 del mismo código, toda vez que en ese sentido la sentencia apelada peca de multiplicación, lo cual influye en la cuantía de la pena. También indica el apelante que es importante el criterio judicial objetivo cuyo prisma servirá para la dosificación de la sanción, frente a criterios subjetivos del jurado de conciencia, agregando que se debe tener muy en cuenta el artículo 56 del Código Penal para la rebaja de la pena.

La licenciada ANA BELFON, apoderada judicial de JORGE ELIÉCER BERNAL GUZMÁN, realiza una síntesis del resultado del proceso penal seguido a su defendido, que en la fase investigativa concluyó con un auto de sobreseimiento definitivo dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el día 6 de julio de 1988, resolución que apelada por una de las partes motivó que la Sala Segunda de la Corte reformara el fallo de sobreseimiento mediante auto de 20 de junio de 1989, en el sentido de sobreseer definitivamente a favor de ENRIQUE R. CORREA. No obstante, sostiene la jurista, el 5 de abril de 1991, el Ministerio Público sometió a consulta el sobreseimiento definitivo que se había dictado a favor de BERNAL GUZMÁN y la Sala Segunda revocó la medida liberatoria pronunciada anteriormente, llamando a su defendido a juicio. Considera la recurrente que si el sobreseimiento definitivo a favor de JORGE ELIÉCER BERNAL se encontraba ejecutoriado y la consulta ante la Corte no era jurídicamente admisible existió un doble juzgamiento prohibido por el artículo 1969 del Código Judicial que nulifica el proceso que se le ha continuado, en donde ha resultado sancionado a la pena de veinte años de prisión.

Al corrérsele traslado al agente del Ministerio Público, la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial, exteriorizó su oposición a los recursos propuestos, señalando, en cuanto a los planteamientos de la defensa de JESÚS MARÍA ZULETA BEDOYA que la confesión para ser reconocida como atenuante debe ser espontánea y oportuna; que por espontánea se entiende la confesión hecha de forma libre, abierta y llana, es decir, sin que medie promesa, constreñimiento o amenazas; que, tal como manifestó la Magistrada ponente, "si bien ZULETA aceptó la autoría material del hecho, su actitud posterior a la comisión del mismo, fue de huida y no fue, hasta que fue mencionado por sus cómplices, que decidió salir y enfrentar su responsabilidad". Respecto a la atenuante del arrepentimiento, también alegada por la defensa de ZULETA BEDOYA, indicó que tanto la doctrina como la jurisprudencia han convenido en señalar que se debe tratar de un arrepentimiento activo, es decir, que el inculpado debe desplegar una conducta tendiente a evitar, disminuir o intentar reducir las consecuencias del ilícito; que el arrepentimiento se expresa como una conducta afectiva, material y por tanto externa, susceptible de ser apreciada y que desde este punto de vista el arrepentimiento anímico, psicológico o emocional carece de valor legal.

En cuanto a los argumentos de la defensa de JOSÉ BELADINO VÁSQUEZ VÁSQUEZ que acusa de multiplicación a la sentencia impugnada, señaló la Fiscal que la dosificación de la pena impuesta tomó en cuenta que se trata de homicidio calificado, para el que fijó una pena de 15 años, más las agravantes que se refieren a cometer el hecho mediante precio, recompensa o promesa y a perpetrarlo con armas o con auxilio de otras personas que faciliten la ejecución o procuren la impunidad; circunstancias éstas que concurren en el caso de JOSÉ BELADINO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, toda vez que siendo su participación en el hecho en calidad de instigador, necesitó del concurso de otras personas para que cometieran el hecho y que además planeó el asesinato para obtener como recompensa un beneficio, cual era la fortuna de su padre, el hoy occiso.

Sobre lo alegado por la licenciada ANA BELFON, apoderada judicial de JORGE ELIÉCER BERNAL GUZMÁN, quien sostuvo que se ha dado el doble juzgamiento de su representado y que éste hecho ameritaba la nulidad del proceso, manifestó la colaboradora de la instancia que esta misma postura fue sostenida por la recurrente durante el acto de audiencia oral, sin que fuera tomada como cierta por los jurados de conciencia que declaró a BERNAL GUZMÁN culpable por el homicidio investigado y por tanto, esos razonamientos no constituyen materia de debate en esta etapa procesal, sino el de la pena impuesta al condenado, la que

considera ajustada a los parámetros establecidos en nuestro ordenamiento penal, considerando los factores contemplados en el artículo 56 del Código Penal.

Después de exponer los argumentos presentados por los apelantes, la Sala pasa a decidir la alzada en los términos previstos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, que tendrá conocimiento del proceso sólo sobre los puntos de la resolución a los que se refiere el recurrente.

En primer lugar, como lo revelan las constancias procesales, se tiene que el 13 de febrero de 1987, en horas de la noche, en el lugar conocido como Mechi, Distrito de Portobelo, Provincia de Colón, falleció violentamente el señor MANUEL VÁSQUEZ LÓPEZ, víctima de varios impactos de arma de fuego que le provocaron hemorragia aguda masiva intratoráxica e intraabdominal, estallidos múltiples del hígado y de los pulmones así como perforación de la arteria aorta.

Para el defensor de JESÚS MARÍA ZULETA BEDOYA, debe reconocerse a su favor las atenuantes referentes a la confesión y al arrepentimiento contempladas en los numerales 4° y 5° del artículo 66 del Código Penal. La Sala coincide con el criterio del tribunal a-quo y el de la Fiscalía cuando explican que para que la confesión pueda ser considerada como atenuante en favor de algún condenado, precisa que sea espontánea y oportuna. Sobre lo que debe entenderse por espontaneidad y oportunidad esta Corporación se ha pronunciado en innumerables ocasiones en el sentido de que la confesión es espontánea cuando el sindicado comparece por sus propios medios ante la autoridad competente para poner en conocimiento que ha infringido la ley penal y es oportuna cuando no se ha dado antes otros elementos probatorios que lo vinculen con el delito realizado. Ambas circunstancias deben encontrarse paralelamente en el acto de la confesión, lo cual no ocurre en el caso de ZULETA BEDOYA, ya que como ha indicado el Tribunal, éste se presentó ante la autoridad cuando ya en su contra militaban señalamientos de parte de ENRIQUE ANTONIO CORREA MUÑOZ y BRANCO ANTONIO PAGAN. No es cierto como alega la defensa de JESÚS MARÍA ZULETA BEDOYA a fojas 18-48 que cuando éste "rinde indagatoria nadie había confesado el crimen, las narraciones de los hechos apuntaban hacia otros imputados". Y no es cierta esa afirmación porque cuando BEDOYA rinde indagatoria, foja 125, ya BRANCO ANTONIO PAGAN, había declarado que un colombiano de apodo "NIMIA" que posteriormente se determinó que correspondía a la persona de JESÚS MARÍA ZULETA BEDOYA, había sido el autor material del hecho, proporcionando amplios detalles del suceso, los que pueden apreciarse en la declaración que rindió, visible a foja 45 y siguientes de este proceso.

De otro modo, tampoco es cierto que voluntariamente se entregara a la autoridad, pues cuando rinde declaración indagatoria ZULETA BEDOYA ya se encontraba detenido (f. 124) y en su declaración de foja 125 expresa que "me dijo un campesino que me andaban buscando y ayer salí del monte para entregarme y efectivamente me detuvieron en la carretera".

En esas condiciones, no es del caso reconocer la atenuante de la confesión en favor de este condenado, toda vez que no se reúnen las circunstancias que al efecto exige la ley. En cuanto a la atenuante del arrepentimiento, señala el numeral pertinente que éste es circunstancia atenuante común: "cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias". Lo anterior permite concluir con meridiana claridad que dicha circunstancia no concurre en el caso de ZULETA BEDOYA, toda vez que el arrepentimiento por él manifestado tiene una naturaleza psicológica o emocional que no trascendió de su fuero interno en actos materiales concretos dirigidos a disminuir o intentar disminuir las consecuencias del hecho delictivo por él cometido, de tal forma que las alegaciones de la defensa carecen de sustento fáctico dentro del caudal probatorio obrante en autos, que dan cuenta, pues él mismo así lo señala, que una vez cometido el hecho por su persona, lejos de procurar auxiliar a la víctima, salió velozmente hacia el carro que lo esperaba, se alejó del lugar y se trasladó hasta la ciudad de Panamá.

Con relación a las alegaciones del licenciado BOLÍVAR DÁVALOS, defensor de JOSÉ BELADINO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, tenemos que concluir que en la dosificación de la pena impuesta a éste, se tomó en cuenta la calificación que se hiciera del delito de homicidio como agravado dentro de los parámetros de los numerales 1 y 2 del artículo 132 del Código Penal, aumentándola en dos terceras partes por las

agravantes comunes de los numerales 4° y 7° del artículo 67 del mismo cuerpo de leyes, las cuales se ajustan a la realidad procesal existente en las sumarias. La concurrencia de ambas agravantes comunes en el caso de VÁSQUEZ VÁSQUEZ se encuentra evidenciada en el proceso mediante las diversas pruebas existentes, por lo que carecen de fundamento los argumentos de la defensa de VÁSQUEZ VÁSQUEZ sobre el particular y además, el tribunal examinó los aspectos del artículo 56 del Código Penal, partiendo de 15 años para fijar la pena base, tomando en cuenta precisamente la calidad de delincuente primario de VÁSQUEZ VÁSQUEZ.

En cuanto a lo expuesto por la licenciada ANA BELFON, al sustentar la apelación que interpusiera como apoderada de JORGE ELIÉCER BERNAL GUZMÁN, la Sala comparte con la Fiscalía que el argumento del doble juzgamiento y de la nulidad del proceso seguido a su mandante, no son materia propia de una apelación de sentencia pronunciada como consecuencia de un veredicto de culpabilidad emitido por un juzgado de conciencia. Ese punto, el del doble juzgamiento, fue objeto ya de conocimiento y decisión en este proceso. Consta en este expediente, de foja 1198 a 1212, todo lo relativo a la incidencia de nulidad que presentara la firma VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, como defensora en ese entonces de BERNAL GUZMÁN, para "que se declarara nulo todo lo actuado a partir de la dictación del auto de 6 de julio de 1991, mediante el cual el Tribunal ordena elevar en consulta el auto de sobreseimiento definitivo dictado en favor de nuestro defendido".

Acogida y tramitada esa incidencia, el Segundo Tribunal Superior, en fallo de 26 de abril de 1993 (fs. 1208 y ss.) negó el incidente propuesto, decisión contra la que no se interpuso ningún recurso impugnativo.

De otro modo, basta leer el Acta de la Audiencia Oral y concretamente las fojas 1810, 1811, 1814, 1815, 1816, 1817, 1819, 1820 y 1824 para apreciar que, ante el tribunal de jurados que le correspondió juzgar a JORGE ELIÉCER BERNAL GUZMÁN por el presente caso, la defensa de éste igualmente centró su alegato en lo que denominó "error técnico" que se cometió en perjuicio de su defendido, alegando que éste ya con anterioridad había sido sobreseido. El planteamiento esbozado no tuvo la acogida del cuerpo de jurados de conciencia al pronunciar su decisión.

Dado lo que se ha dejado expuesto, la Sala estima que la sentencia impugnada se ajusta a las circunstancias en que se cometió el ilícito y por tanto procede su confirmación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 4 de febrero de 1997, dentro del proceso seguido a JOSÉ BELADINO VÁSQUEZ VÁSQUEZ, JESÚS MARÍA ZULETA BEDOYA y JORGE ELIÉCER BERNAL GUZMÁN, sindicados por el delito de homicidio en perjuicio de MANUEL VÁSQUEZ LÓPEZ.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

NEGOCIO PENAL SEGUIDO A RUFINO CEDEÑO SANJUR Y ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, SINDICADOS POR LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y ROBO COMETIDO EN PERJUICIO DE GUILLERMO CABALLERO SALDAÑA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia de 22 de septiembre de 1997 (fs. 590 a 594), dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que impuso a **RUFINO CEDEÑO**

SANJUR, (a) "CHICHI" y a **ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, (a) "PUNTA"**, la pena de catorce (14) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo término de la pena principal, por haber sido encontrados culpables por el Jurado de Conciencia de la comisión de los delitos de homicidio y robo perpetrados en perjuicio de GUILLERMO CABALLERO SALDAÑA, conforme a hecho de sangre ocurrido el día 21 de septiembre de 1995, en la carretera que conduce de Finca Caoba 09 a Finca Higuerón El Mango, Distrito de Barú, Provincia de Chiriquí.

Tanto los Defensores de Oficio de los imputados como el agente colaborador del Ministerio Público anunciaron recurso de apelación al momento de ser notificados de la sentencia pronunciada.

El Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, Licenciado EDWIN ALVAREZ CAMAÑO, en su escrito de 27 de octubre de 1997 (fs. 597 a 605), solicita que previa revocatoria de la resolución impugnada se declare la existencia del concurso material de los delitos de robo y homicidio agravado y con base en dicho criterio se imponga la sanción correspondiente, conforme a las reglas previstas en el artículo 64 del Código Penal, pues "... los elementos normativos de carácter extrapenal contenido (sic) en el tipo previsto en el Artículo 132, numeral 5° de nuestra excerta punitiva, representados por los verbos 'preparar', 'facilitar' y 'consumar' un hecho punible; precedidos del elemento específico de carácter subjetivo, representada por la preposición 'para'; no pueden bajo ningún concepto considerarse hechos que agravan o estructuran el tipo agravado del delito de homicidio" (f. 599) y que "el delito fin (robo) no puede ser subsumido por el delito medio (homicidio) ..." (f. 599) para llegar a la conclusión de que en el presente caso existe un concurso material de delitos, donde el homicidio es agravado sólo por el móvil o fin que persigue y no se califica en el delito de homicidio calificado la lesión de dos bienes jurídicos tutelados sino la mayor reprochabilidad del autor, constituyendo el delito de robo otro hechos distinto al del homicidio agravado, citando en apoyo de su sustentación opiniones de tratadistas y fallo de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia de Colombia de 15 de octubre de 1973.

Por su parte, los defensores de ambos procesados presentan sus objeciones a los planteamientos del Ministerio Público, sosteniendo que la doctrina a este respecto se encuentra dividida, dándose la circunstancia de que algunos autores sostienen que el tipo penal contenido en el artículo 131 del Código Penal en relación con el ordinal 5° del artículo 132, caso que nos ocupa, constituye un delito complejo en donde se incluye como elemento del tipo penal una conducta que ya figura como otro hecho punible o como una circunstancia modificadora del delito, mientras que otros autores estiman que en casos como el que se ventila se da un verdadero concurso material o real de delitos.

Por otra parte y como defensora de ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, la licenciada Micaela Morales Miranda solicita que se reforme la sentencia apelada, pues el Tribunal al dosificar la pena, "tomó en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos del hecho punible, la extensión del daño causado y las condiciones personales de los sujetos activos y de la víctima, y no así la conducta anterior de nuestro cliente, en el sentido de que consta que no tiene antecedentes penales de ninguna naturaleza, por lo que se dejó (sic) considerar este extremo de su conducta." (f. 608).

Y el licenciado Roummel G. Salerno C., como Defensor de RUFINO CEDEÑO SANJUR, (a) "CHICHI" (fs. 610 a 611) demanda que se le reconozca a éste la circunstancia atenuante de la confesión, pues su representado "... a los inicios de la investigación señaló estar presente en el lugar de los hechos pero no haber accionado el arma" y fue su declaración confesión la que permitió la detención del co-imputado ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ.

Corresponde a la Sala, expuesto lo anterior, pronunciarse sobre la alzada interpuesta, lo que se hará en los términos previstos por el artículo 2428 del Código Judicial.

En primer lugar, se disiente de la objeción manifestada por el representante del Ministerio Público en cuanto al razonamiento planteado por el

tribunal a quo al momento de fijar la pena líquida. Ya la Sala, en reiterados fallos, ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre ese particular y precisamente en uno de ellos, de 7 de marzo de 1997, al conocer de apelación de sentencia proferida por el tribunal a quo que había aplicado el artículo 64 del Código Penal en un proceso de homicidio y robo, donde el actual agente del Ministerio Público sostenía igual postura que la de ahora -existencia de un verdadero concurso material de delitos- (homicidio y robo) y no una unidad delictiva agravada, se expresó en parte de esa decisión de la siguiente manera:

> "En lo que respecta a la aplicación del concurso material de delito de que trata el artículo 64 del Código Penal, el tribunal a-quo cae en un error.
>
> Primeramente, el homicidio agravado contemplado en el artículo 132 ordinal 5° es un tipo penal complejo al incluir entre sus elementos necesarios la preparación, facilitación o consumación de otro hecho, que también está tipificado.
>
> Secuencialmente, este otro hecho punible queda subsumido como una circunstancia de esta forma de homicidio agravado. Situación que desvirtúa el concurso de delitos.
>
> Es decir, que no es factible aplicar el delito de homicidio y el de robo a la vez, porque el legislador al tipificar el homicidio agravado por razón de la comisión de delitos conexos -art. 132 ord. 5°-subsume ese otro delito para que no se sancione dos veces el mismo hecho.
>
> De manera clara el legislador brinda solución al problema, al disponer que ante varias disposiciones que sancionan un mismo hecho punible, la disposición especial debe prevalecer sobre la general, con lo cual adopta el principio de especialidad que rige al concurso aparente de tipos penales (art. 4 del Código Penal)".

Y en fallo de 18 de marzo de 1997 sostuvo:

> "Una revisión detenida del sentido y alcance del artículo 132 que tipifica las formas agravadas de homicidio nos demuestra que el legislador al individualizar cada supuesto los mantiene bajo el denominador común de la penalidad fijada en su enunciado. Ello significa que si la conducta que se examina se subsume en uno de los ocho numerales que contiene la norma, el intervalo penal es de 12 a 20 años de prisión.
>
> En el caso del artículo 132 numeral 5 tenemos una conexidad ideológica en la que el o los sujetos cometen el homicidio como medio o instrumento que viabiliza el hecho punible perseguido o representado y es esa forma dolosa y perversa de actuar la que matiza al homicidio de la gravedad que se le asigna. El homicidio es agravado porque se ha cometido para obtener un beneficio patrimonial a través del robo de un bien con valor económico. Se trata, pues, de un delito grave, pero de uno solo".

Cierto es, como cita el agente del Ministerio Público, que varios autores en casos como el que se tiene presente sostienen que existe un concurso real o material que debe ser penado también con la aplicación del artículo 64 de nuestro Código Punitivo pero no faltan otros autores, como LUIS CARLOS PÉREZ, RAMÓN ACEVEDO BLANCO y JESÚS BERNAL PINZÓN -citado por Humberto Barrera Domínguez, en su obra Delitos contra la vida y la integridad personal, pág. 48-, quien indica que "en el caso de esta agravante la Ley ha creado una figura compleja del delito, mediante la cual puso como simple circunstancia de agravación un hecho (delito fin) que, si se considera independiente del homicidio previo, constituye delito. La razón es obvia, porque la Ley expresamente habla de cometer otro delito, de suerte que siempre será un delito cuya comisión, preparación o facilitación agrava el de homicidio; y tan cierto es, que tan solamente lo agrava, que si el delito fin no existe en la mente del homicida, el hecho sigue

siendo homicidio simple."

En el presente caso, entre el homicidio de GUILLERMO CABALLERO SALDAÑA y el robo de su bicicleta existe una relación de conexidad, donde se realizó el primero "para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible", quedando el delito de robo excluido de ser perseguido como delito autónomo y sujeto los condenados a la pena correspondiente por el homicidio agravado, conforme a la modalidad prevista en el numeral 5° del artículo 132 del Código Penal, norma que por ser específica para la situación que se ventila, debe ser la aplicada, tal como lo hizo el Tribunal primario.

Sobre los puntos de discrepancia de la defensa de ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ con el fallo que se revisa, se indica que, en cuanto a la circunstancia de delincuente primario de su representado como conducta anterior del agente, la Corte ha manifestado en reiteradas ocasiones que estos factores se toman en cuenta para la individualización de la pena en abstracto, partiendo de los intervalos fijados por la individualización legal, conforme el artículo 56 del Código Penal y en tal virtud, debe respetarse la discrecionalidad del juzgador al fijar la pena base dentro del intervalo penal contentivo de la punibilidad aplicable al delito. En este caso particular, con relación a la aplicación de los ordinales 2° y 3° del artículo 56 del Código Penal alegados, observa la Sala que aunque no se mencionan expresamente los diversos ordinales de dicho artículo en la sentencia apelada, sí se menciona la aplicación de dicho artículo al momento de la fijación de la pena base y el hecho de que se haya partido de una pena seis (6) años menor del máximo de la establecida para el delito imputado, hace presumir que se tomaron en cuenta tanto las circunstancias favorables como las desfavorables establecidas en el artículo citado.

En cuanto a la confesión alegada por el defensor de RUFINO CEDEÑO SANJUR C., quien manifiesta que dicha atenuante común debe ser aplicada a su representado, pues aceptó su participación en el hecho y señaló a ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ como el autor principal del homicidio, de lo que posteriormente se retractó, se estima que no fue espontánea, toda vez que RUFINO CEDEÑO SANJUR no se presentó voluntariamente ante las autoridades (fs. 94, 98 y 104) sino que fue detenido con el otro imputado JIMÉNEZ JIMÉNEZ cuando se encontraban en poder de las dos bicicletas que se habían robado el día de los hechos, una de propiedad del hoy occiso y la otra del otro perjudicado ISRAEL AMILGIA MIRANDA AVILÉS, quien los reconoció en rueda de detenidos y además, su confesión fue de participación únicamente en el robo, que evidentemente hizo con la intención de evadir su responsabilidad en cuanto al delito de homicidio. Tampoco se considera que la admisión de responsabilidad por el procesado resultó oportuna, entendiéndose como una contribución indispensable para el esclarecimiento y precisión de la ocurrencia de los hechos, toda vez que al momento en que rindió su declaración jurada ya se contaba en el proceso con evidencias en su contra, tomando en consideración el hecho de que al ser partícipe del robo a mano armada éste prevé la posibilidad de que se cometa el homicidio y la agravación específica de dicho delito es aplicable a los partícipes, es decir a "... quienes lo hubieren aceptado como una consecuencia probable de la acción emprendida." (Artículo 42 del Código Penal), lo que permite legalmente que la pena aplicable al autor principal también pueda ser impuesta al cómplice primario.

De lo que se deja dicho, se concluye que no existen méritos para proceder a la reforma de la sentencia apelada, al cumplir ésta con los requerimientos necesarios para adecuarla al caso sub-judice.

En mérito de expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 22 de septiembre de 1997, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que impuso a RUFINO CEDEÑO SANJUR, (a) "CHICHI" y a ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ, (a) "PUNTA", la pena de catorce (14) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo término de la pena principal, por la comisión del delito de homicidio agravado en perjuicio de GUILLERMO CABALLERO SALDAÑA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A JOSÉ ANTONIO JULIO MORALES POR EL HOMICIDIO DE SU HIJO, JOSÉ ANTONIO JULIO MOLINA. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTE (20) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Luego que un Jurado de Conciencia en audiencia oral y pública celebrada el 23 de mayo de 1996 declaró culpable a **JOSÉ ANTONIO JULIO MORALES** por el homicidio de su hijo de siete meses de nacido **José Antonio Julio Molina**, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia de 24 de septiembre de 1997, le impuso la pena de TRECE (13) AÑOS y CUATRO MESES DE PRISIÓN y la sanción accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de ocho (8) años contados a la ejecutoria del fallo (fs. 984-994).

Esa decisión jurisdiccional fue apelada al momento de notificarse tanto por el procesado como por su defensor, el licenciado Danilo Montenegro, del Instituto de Defensoría de Oficio, quien dentro del término oportuno presentó el escrito de sustentación respectivo.

Concedido el recurso en el efecto que determina la ley, corresponde examinar los puntos objetos de disensión.

DISCONFORMIDAD DE LOS APELANTES

El licenciado Danilo Montenegro solicita a esta Superioridad se reforme la sentencia impugnada, en el sentido de establecer una pena base menos grave de la señalada y a la vez que la disminución por cada una de las dos atenuantes reconocidas en el fallo, sea mayor de una sexta parte de la pena base.

Sostiene como basamento a su petición que el solo hecho de que en la sentencia se reconoce que su defendido no tuvo la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, y haber demostrado arrepentimiento con actos posteriores al hecho intentando disminuir sus consecuencias, constituyen motivos suficientes para no imponer como base la pena máxima prevista en el Código Penal. Solicita se establezca una pena base menos grave dado que deben tomarse en cuenta los parámetros establecidos en el artículo 56 del Código Penal, sobre la conducta del agente, anterior, simultánea o posterior al hecho punible.

Considera además que, aún cuando el artículo 69 del Código Penal concede discrecionalidad al juzgador para establecer la disminución en razón de circunstancias atenuantes, entre una sexta a una tercera parte, solicita que por cada una de las atenuantes reconocidas se conceda la disminución en una cantidad superior a la señalada en la sentencia. Teniendo en cuenta que existió arrepentimiento y no hubo intención de causar la muerte a su hijo, además de la ausencia de antecedentes penales y del hecho de ser un trabajador responsable, conducta que señala el apelante, ha mantenido su representado en el centro carcelario donde se encuentra, por lo que estima justo que se le favorezca con una disminución mayor de un sexto por cada circunstancia atenuante (fs. 996-997).

Por su parte, en su manuscrito el procesado José A. Julio Morales, luego de explicar cómo sucedieron los hechos que causaron la muerte de su hijo y afirmar que es inocente de esa muerte, solicita se le reconozca una atenuante más de 1/6 ya que nunca tuvo la intención de hacerle daño a su propio hijo (fs. 998-999).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El licenciado Dimas E. Guevara G., Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, considera que la dosificación de la pena llevada a cabo por el Tribunal Superior es prudente y conforme, con base a la acción emprendida por Julio Morales.

Expresa que debe mantenerse la dosificación impuesta al procesado y confirmarse en todas sus partes la sentencia, no solo por lo que ha revelado el proceso sino porque el homicidio fue ocasionado en la persona de su menor hijo José Antonio Julio Molina (fs. 1003-1005).

FUNDAMENTACIÓN FACTICA

Se refiere el presente proceso penal a la muerte violenta de José Antonio Julio Molina, de siete (7) meses de nacido, ocurrida aproximadamente a las 7:00 a. m. el día 8 de octubre de 1991 en el Hospital del Niño a consecuencia de trauma craneoencefálico.

Por estar vinculado a esa muerte fue llevado al plenario su padre José Antonio Julio Morales, quien fue declarado culpable por un Jurado de Conciencia en audiencia oral y pública iniciada el 23 de mayo de 1996.

FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA

Corresponde a esta Sala el análisis sólo de los puntos objetados por los impugnantes, tal como lo ordena el artículo 2428 del Código Judicial.

Se advierte que no es motivo de inconformidad el juicio de tipicidad llevado a cabo por el Tribunal A Quo, quien calificó el ilícito como homicidio agravado por razón del parentesco y que la disensión por parte del letrado se centra en la pena base impuesta y en su interés en que la disminución de cada una de las atenuantes reconocidas sea mayor a la señalada en la sentencia.

Veamos el proceso de dosificación llevado a cabo por el Tribunal de Primera Instancia.

Luego de subsumir el actuar ilícito del imputado José Antonio Julio Morales en el artículo 132 numeral 1 del Código Penal, que señala pena de 12 a 20 años de prisión al que cause la muerte a un pariente cercano con conocimiento del parentesco, tomó en consideración los siete factores contenidos en el artículo 56 del Código Penal y con base a ello impuso la pena base de veinte (20) años de prisión.

Tal como se señaló en la sentencia recurrida, el artículo 56 del Código Penal permite al juzgador imponer la pena entre el mínimo y el máximo contenido en la norma vulnerada. Sin embargo, no se establece una discrecionalidad absoluta, sino que debe ceñirse a los criterios que ella misma contempla.

Esta Sala ha manifestado que por la interpretación de esta norma la pena base impuesta no es modificable cuando no se observan visos de ilegalidad manifiesta y que por tanto, en aras de la independencia judicial, se debe respetar la discrecionalidad del juzgador primario (Sentencia de 18 de julio 1996).

Sin embargo, es preciso comentar, que el Tribunal A-Quo, al individualizar la pena se sitúa en la máxima -20 años de prisión-, lo que es un contrasentido cuando reconoce como circunstancia modificativa atenuante que el procesado no "tuvo la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo" (numeral 2 del art. 66 del Código Penal).

Por otra parte, no solamente debe el juzgador mencionar los factores contemplados en el artículo 56 del Código Penal, sino explicar con cuál o cuáles de ellos va a sustentar la pena base, de conformidad con la realidad del proceso, para que su fallo sea proporcional a la conducta del penado. De lo contrario, daría la impresión que lo hace de una forma antojadiza, lo que la ley penal no le permite.

Ahora bien, contrario al criterio del Tribunal de Primera Instancia en cuanto al reconocimiento de las dos circunstancias atenuantes modificativas de la responsabilidad criminal -artículo 66 del C.P., numerales 2 y 4-, advierte esta Superioridad que tales elementos modificadores de la responsabilidad penal no encuentran asidero jurídico en la conducta desplegada por el sujeto activo del delito.

Por un lado, en ningún momento el procesado se ha declarado culpable del acto reprochable cometido, entonces, mal se puede afirmar que no tuvo la intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo.

En cuanto a la circunstancia atenuante común del arrepentimiento, el numeral 4 del artículo 66 señala que tiene lugar "cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias".

Teniendo ese norte, el fallo indica que tal circunstancia atenuante se dio cuando el procesado decidió llevar a su hijo a recibir atención médica (f. 993).

En su declaración indagatoria José Antonio Julio Morales -quien en ningún momento se declara culpable-, narra que su hijo se cayó de la cuna a las 7:30 a. m., que luego el niño se quedó dormido y él se fue a jugar fútbol y al regresar a las 3:30 p. m. el niño estaba dormido; que su esposa le comento que el niño se despertó al rato que él partió y se la había pasado llorando y no quería comer.

No obstante, la señora Mayra Edith Molina De Julio, afirma que su esposo -el procesado-, acostumbraba a pegarle al niño, y que tendría cinco meses cuando le pegó por primera vez "en la carita con la mano abierta" y que al ella reclamarle contestó que él sabía el por qué lo hacía. Incluso agrega, que sabe que le pegó varias veces aunque no fue en presencia de ella, porque al ella alzar al niño, éste se quejaba como que algo le dolía (f. 530).

Aunado a lo anterior -obsérvese bien-, que el procesado se acostó a dormir y es como a las 6:00 p. m. cuando su esposa lo despertó indicándole que el niño estaba enfermo, y es de esa manera que ambos deciden llevarlo como a las 7:00 p. m. al Hospital del Niño, donde quedó internado en urgencia donde fue atendido a las once de la noche. Es cuando regresan al día siguiente que fueron informados del fallecimiento de su hijo (fs.469-475).

Como se observa, en la conducta del procesado no se da el elemento inmediatez implícito en el numeral 4 del artículo 66 del Código Penal. Distinto sería que de manera inmediata - posterior a la ejecución del hecho punible,- el señor José Antonio Julio Morales hubiese llevado a su hijo a recibir atención médica.

Sin embargo, el principio excluyente de la reformatio in pejus nos impide agravar la situación de quien recurre, por tanto, la sentencia apelada merece la confirmación de esta Sala.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN E. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A RICARDO ARTURO GONZÁLEZ, EDGAR ASUNCIÓN ATENCIO GUTIÉRREZ Y NEREYDA YANETH ARAUZ CASASOLA,

SINDICADOS POR DELITO DE HOMICIDIO Y ROBO EN PERJUICIO DE JOSÉ TORRES NEWBALD. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Para resolver la alzada ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema, la sentencia de 30 de diciembre de 1997, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial con sede en David, en el proceso que por el delito de homicidio en perjuicio de **JOSÉ TORRES NEWBALD** se le sigue a **EDGAR ASUNCIÓN ATENCIO GUTIÉRREZ, RICARDO ARTURO GONZÁLEZ y NEREYDA YANETH ARAUZ CASASOLA**, conforme a hecho ocurrido en horas de la noche del viernes 17 de septiembre de 1993 en el Hotel Río ubicado en Changuinola, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro.

La audiencia oral se llevó a cabo el día 3 de julio de 1997 y el jurado de conciencia encontró culpables a los tres encausados de los cargos que se les imputaban.

Al dictar sentencia, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial calificó el delito como de homicidio agravado, a tenor de lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 132 del Código Penal, que se refiere al homicidio cometido "para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible aun cuando éste último no se realice", toda vez que las constancias procesales revelan que el hoy occiso fue también víctima de robo de parte de sus atacantes y que la comisión de ése último delito motivó el homicidio.

Al dosificar la pena a imponer a cada uno de los imputados, el Tribunal a-quo señaló para EDGAR ASUNCIÓN ATENCIO GUTIÉRREZ una pena base de quince (15) años de prisión, al considerarlo el autor material del homicidio de TORRES NEWBALD y tomando en cuenta los parámetros del artículo 56 del Código Penal en lo que se refiere a las circunstancias en que fue ejecutado el hecho y la calidad de los motivos determinantes del homicidio, la pena fue aumentada en una sexta parte al considerar el Tribunal que se configuraba la agravante consagrada en el numeral 7° del artículo 67 del Código Penal, quedando la pena líquida a cumplir en diecisiete (17) años y seis (6) meses de prisión, toda vez que no se reconoció la concurrencia de circunstancia atenuante alguna.

No obstante lo anterior y tomando en cuenta que ATENCIO GUTIÉRREZ fue condenado por ese mismo Tribunal el 30 de diciembre de 1996 por el homicidio de AGUSTÍN NEFTALIS BEVANS GALLARDO se ordenó la unificación de penas, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 2003 del Código Judicial en concordancia con el artículo 64 del Código Penal, referente al concurso material de delitos, quedando la pena a cumplir por las dos causas en diecinueve (19) años y diez (10) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término.

Por otro lado, al fijar la sanción a imponer a RICARDO ARTURO GONZÁLEZ, el tribunal estimó que su participación en el hecho se enmarca dentro de la conducta del cómplice primario, descrito en el artículo 39 del Código Penal, que se refiere a aquellas personas que toman parte en la realización del hecho punible o que le presten al autor o autores un auxilio sin el cual el hecho no hubiera podido realizarse, por lo que señaló la pena base en catorce (14) años de prisión, a los que aumentó una sexta parte (28 meses) por la circunstancia agravante considerada también para el autor material contemplada en el numeral 7° del artículo 67 del Código Penal, en concordancia con el artículo 43 del mismo cuerpo de leyes. De este modo la pena líquida a cumplir por GONZÁLEZ quedó establecida en dieciséis (16) años y cuatro (4) meses de prisión y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período.

Por último y en cuanto a la también sindicada NEREYDA YANETH ARAUZ CASASOLA, el tribunal de conocimiento calificó jurídicamente su conducta como la de una cómplice primaria y estimó que sus "evidentes actos de instigación quedan

subsumidos por su posterior participación activa durante la fase ejecutiva del delito", señalando la pena base en catorce (14) años de prisión, la que aumentó también en una sexta parte por la agravante del numeral 7° del artículo 67 del Código Penal, quedando la pena líquida a cumplir en dieciséis (16) años y cuatro (4) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término.

Al notificarse de la resolución impugnada, todos los procesados y sus respectivos defensores anunciaron recurso de apelación contra la misma. Así, la licenciada JACQUELINE MARIE PROBST, Defensora de Oficio de RICARDO ARTURO GONZÁLEZ (fs. 1804-1807), el licenciado FEDERICO ISMAEL PONCE, Defensor de Oficio de EDGAR ASUNCIÓN ATENCIO GUTIÉRREZ (fs. 1813-1814) y el licenciado FLORENCIO CASTILLO ESPINOSA, abogado de NEREYDA YANETH ARAUZ CASASOLA (fs. 1815-1816) sustentaron por escrito en tiempo oportuno sus alegaciones.

Corrido en traslado al agente del Ministerio Público los escritos presentados por la defensa de los imputados, se dejó precluir el término otorgado, sin que se presentaran las objeciones que se estimaban pertinentes.

En primer término, observa la Sala que a folio 1822 reposa Oficio de la Dirección de la cárcel de David, dirigido al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Superior, donde le informa del óbito de EDGAR ASUNCIÓN ATENCIO GUTIÉRREZ y RICARDO ARTURO GONZÁLEZ, el hecho ocurrido durante una reyerta en la Cárcel Pública de David el 27 de febrero de 1998. Esas dos defunciones se encuentran acreditadas con los certificados correspondientes que aparecen a fojas 1830 y 1831, expedidos por la Dirección General del Registro Civil.

Al ocurrir la muerte de estos dos procesados, se advierte que se ha extinguido la acción penal seguida en su contra, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 90 del Código Penal, razón por la cual la Sala procederá a examinar únicamente la apelación interpuesta por la defensa de NEREYDA YANETH ARAUZ CASASOLA.

De la lectura del escrito presentado por el licenciado FLORENCIO CASTILLO ESPINOSA, defensor de ARAUZ CASASOLA, se aprecia que su disconformidad con el fallo recurrido reside fundamentalmente en la calificación que el tribunal hace de la participación de su defendida en el ilícito como cómplice primaria, pues sostiene que si bien ella actuó como instigadora y cómplice primaria en el delito de robo no puede por ello considerarse que actuó dolosamente en el homicidio, ya que no dió su consentimiento para la ejecución del mismo ni tuvo voluntad para colaborar en la realización de ese delito y fue sorprendida con la acción de los otros imputados. Solicita que se le sancione como cómplice secundaria.

Las constancias procesales nos indican que aproximadamente a las diez de la noche (10:00 p. m.) del 17 de septiembre de 1993, resultó muerto el señor JOSÉ TORRES NEWBALD, propietario del Hotel Río, ubicado en Changuinola, víctima de varias puñaladas que le propinara EDGAR ASUNCIÓN ATENCIO GUTIÉRREZ (A. TOMATITO) con la ayuda de RICARDO ARTURO GONZÁLEZ (A. COCOLISO), cuando opuso resistencia al robo sugerido y planeado por NEREYDA YANETH ARAUZ CASASOLA.

En cuanto a la participación de ésta última sindicada en los delitos investigados, se aprecia en el contenido de su indagatoria, donde confiesa su participación, que le preguntó a TOMASITO si alguna vez había robado; diciéndole "que ella necesitaba un dinero", que "conocía un señor que tenía mucho dinero y que le fueramos (sic) a robar" ; que acordaron encontrarse en la tienda de los chinos; que TOMASITO fue a buscar a un tal WILLIAMS para que fuera con ellos; que al regresar "traía un puñal metido en su respectiva vaina, la misma creo que era color chocolate y me dijo que WILLIAMS no podía ir; que fueron a la casa de COCOLISO y éste preguntó si yo iría, TOMATITO dijo que si ya que yo sabía como era el lugar y que yo conocía el lugar"; que los tres se fueron en un taxi; "al pasar frente al hotel le dije a TOMATITO allí es la cosa, estaba lloviendo, ahí estabamos (sic) de cómo ibamos (sic) a entrar al hotel para luego llegar al cuarto del señor TOMÁS, TOMATITO y yo fuimos por la parte frontal del hotel y COCOLISO se fue por la calle que da a la parte trasera del hotel" "al llegar a la puerta de meta donde esta (sic) el timbre yo lo toque (sic) varias veces hasta que salió el seño TORRES abrió un poco la puerta y dijo el precio del cuarto, no

recuerdo la suma, Tomate le preguntó que si había que pagar adelantado, el señor dijo que sí, entonces tomate le dijo que nos dejara entrar y Torres abrió la puerta un poco más y entramos, el señor Torres se metio (sic) a una especie de semi-bar a realizar el registro, por lo que tomate me dijo anda, anda, me dijo en varias ocaciones (sic), yo me fui caminando y cuando ina llegando a la puerta trasera del Hotel, ví que tomate estaba forcejeando con el señor Torres y le tenía puesto el puñal en el cuello y lo llevaba caminando hacia donde estaba yo, como la puerta estaba ajustada la jalé (sic) la puerta y entro (sic) Cocoliso y corrió a ayudar a Tomate para llevarlo al pasillo que esta (sic) donde queda el cuarto del señor Torres, yo me quedé parada afuera de la puerta en el primer escalón pero, con la puerta abierta, yo estaba mirando para la casa que esta (sic) al lado donde vive una hija del señor Torres, desde ahí yo no veía nada pero, escuchaba que estaban luchando, en eso yo me asomé `para ver lo que pasaba y ví que el señor estaba en el suelo o sea en el piso estaba manchado de sangre por la parte frontal de la camisa, a la altura del tórax hacia abajo, Cocoliso lo tenía agarrado para que no se parara, tomatito lo tenía agarrado con una mano y en la otra tenía el puñal todo manchado de sangre.

De lo que se deja transcrito se evidencia claramente que ARAUZ CASASOLA tenía pleno conocimiento de que en el delito que se iba a cometer (robo) se haría uso de un arma blanca, por lo que existía la consecuencia probable de la muerte de alguno de los participantes en el hecho, motivo que nos llega a considerar que las alegaciones formuladas por su defensor - de que ella no dió su consentimiento para la ejecución del homicidio, siendo sorprendida por la acción de los otros dos imputados y que su participación fue únicamente la de cómplice primario en el delito de robo - pierden sustento ante el contenido del artículo 42 del Código Penal que es enfático al establecer:

> "Artículo 42. Los partícipes serán responsables desde el momento en que se inició la realización del hecho punible, según lo establecido en el artículo 18. **Si el hecho fuere más grave del que quisieron realizar, responderán por aquél quienes lo hunieren aceptado como una consecuencia probable de la acción emprendida.**" (la negrita es nuestra).

Ya esta Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto a la participación de ARAUZ CASASOLA en los ilícitos bajo examen, cuando al confirmar el auto de enjuiciamiento proferido por el Tribunal Superior, el pasado 29 de mayo de 1996, señalamos:

> "En cuanto a lo alegado por el apelante, en el sentido de que su defendida no participó en el delito de homicidio sino en el de robo, debemos señalar que el hecho de no haber sido autor material del crimen no la exime de culpa. Ella conocía al hoy occiso y sabiendo que tenía dinero planeó el robo, habló con los otros imputados y se pusieron de acuerdo, incluso sabía que uno de ellos portaba un puñal.
>
> La intención de robar va aparejada con la conciencia de que podía suceder que alguien resultara herido o muerto por causa de la acción violenta que se iba a llevar a cabo ...
>
> Resulta evidente que tanto la recurrente como los otros dos imputados aceptaban la muerte de la víctima o de uno de ellos como una consecuencia probable de intentar un robo a mano armada. Por tanto, el riesgo naciente del delito va encaminado a compartir responsabilidades en su totalidad en los autores y partícipes del hecho".

Por otro lado, la participación de NEREYDA YANETH ARAUZ CASASOLA en el ilícito se enmarca adecuadamente en la definición de cómplice primario consignada en el artículo 39 del Código Penal, pues ella prestó un "auxilio sin el cual el hecho no hubiera podido cometerse", consistente en la sugerencia y planeación del robo, el haber tocado varias veces el timbre del hotel hasta llegar que el infortunado TORRES respondiera al llamado y en abrirle la puerta trasera del local a RICARDO ARTURO GONZÁLEZ para que ayudara a EDGAR ASUNCIÓN ATENCIO

GUTIÉRREZ a someter al hoy occiso; a diferencia de lo consignado en el artículo 40 del mismo Código que señala como cómplices secundarios aquellos que "auxilien de cualquier otro modo al autor o autores en la realización del hecho punible aún mediante promesa de ayuda posterior a su consumación".

Siendo esta la realidad procesal, la Sala estima que no existen méritos para proceder a una reforma de la sentencia apelada en el sentido que demanda la defensa de NEREYDA YANETH ARAUZ CASASOLA, pues ésta cumple con los requerimientos necesarios para que sea adecuada al caso sub judice.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de diciembre de 1997, mediante la cual se CONDENA a NEREYDA YANETH ARAUZ CASASOLA, a una pena de dieciséis (16) años y cuatro (4) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, por la comisión del delito de homicidio agravado en perjuicio de JOSÉ TORRES NEWBALD; y

SEGUNDO: DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL respecto a RICARDO ARTURO GONZÁLEZ (Q. E. P. D.) y EDGAR ASUNCIÓN ATENCIO GUTIÉRREZ (Q. E. P. D).

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO SEGUIDO A MIGUEL ÁNGEL GÓNDOLA GALVÁN, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO A RUFINA PÉREZ, PACIFICO GONZÁLEZ Y HERIBERTO GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia en sentencia de 14 de octubre de 1997, CONDENÓ a **MIGUEL ÁNGEL GÓNDOLA GALVÁN** a la pena principal de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN, a las accesorias de Inhabilitación para el Ejercicio de Funciones Públicas por igual período de duración, un vez cumplida aquella y al Comiso del arma utilizada en la ejecución del hecho punible, por haber sido declarado culpable de los homicidios de **Rufina Pérez de González**, **Heriberto González Pérez y Pacífico González Pérez**, por un jurado de conciencia en audiencia oral y pública celebrada el 4 de julio de 1997.

Esa decisión jurisdiccional fue apelada al momento de notificarse por el procesado y por su abogado defensor, el licenciado Danilo Montenegro, miembro del Instituto de Defensoría de Oficio.

FUNDAMENTO DE LOS APELANTES

Manifiesta el procesado Góndola Galván su desacuerdo con el veredicto de culpabilidad, para lo cual se refiere a varias declaraciones allegadas al proceso como falsas y que la duda debe favorecerle (fs. 2,184-2,194).

Sostiene el licenciado Montenegro que, de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico penal, la jurisprudencia patria y la doctrina, no se puede aplicar la agravante de medios de ejecución atroz y por otro la agravante de ensañamiento o sevicia, porque se trata de una sola causa de agravación del delito de homicidio. Y que el ensañamiento como agravante ordinaria común es aplicable únicamente cuando no esté prevista como agravante específica o como elemento constitutivo, por disponerlo así taxativamente el artículo 67 del Código

Penal.

Por tales razones, solicita se reforme la sentencia apelada, en el sentido de dejar sin efecto el aumento de una tercera parte de la pena base por razón de la agravante de ensañamiento y en consecuencia la pena quedaría en 15 años de prisión (fs. 2,198-2,202).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Al dar respuesta al traslado, la licenciado Geomara Guerra de Jones, Fiscal Segunda Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, opina que se debe confirmar la resolución apelada, por cuanto no comparte el criterio del apelante, en cuanto a que ensañamiento y medio de ejecución atroz son sinónimos. Explica así, que el primero es causarle a la víctima el mayor daño y dolor posible para quitarle la vida aumentando el sufrimiento innecesario a sus víctimas. En tanto que el medio de ejecución atroz es sinónimo de barbarie y crueldad en exceso, para causar la muerte, salvaje, inhumano, desagradable y horrible (fs. 2,206-2,209).

HECHOS

Se refiere el presente proceso penal a la muerte violenta de la señora Rufina Pérez de González y sus hijos menores de edad, Heriberto González Pérez y Pacífico González Pérez, de 3 y 7 años de edad respectivamente, consecuencia de múltiples heridas producidas con arma blanca; cuyos cuerpos fueron encontrados en la casa donde habitaban, ubicada en el Corregimiento de Cativá, barriada Villa Guadalupe, Sector A, el 26 de noviembre de 1993. El Dr. Carlos De Bernard, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal indicó que los decesos ocurrieron entre 35 a 48 antes de los hallazgos.

FUNDAMENTO DE LA SALA

Con respecto a la disensión del procesado Góndola Galván, en el sentido que no es culpable del delito por el cual fue condenado; se advierte que el veredicto de culpabilidad fue emitido por un jurado de conciencia, lo que es irrecurrible por medio de este recurso ordinario

Para pronunciarnos en cuanto a lo expresado por la defensa técnica, es necesario analizar el juicio de tipicidad llevado acabo en el fallo apelado.

El Tribunal A-quo calificó el actuar del procesado Góndola Galván de homicidio agravado (art. 132 del Código Penal) por razón de la relación de parentesco (numeral 1) y por medio de ejecución atroces (numeral 3 segunda parte).

La Sala advierte que -en cuanto a la primera agravante-, no existe una relación jurídica creada por la Ley Civil entre el procesado con las víctimas y ni siquiera, como lo apuntala la defensa técnica, se está ante una unión de hecho (art. 54 Constitución Nacional).

Esto último se desprende de la propia declaración del esposo y padre de las víctimas, señor Pacifico González, quien señala sostuvo una relación estable por diez años con la señora Rufina Pérez Castillo y que hacía dos años que se separaron (fs. 69-73).

Nuestro Código de la Familia no brinda una definición de cónyuges, pero se refiere a los mismos como aquellos que están casados en matrimonio (Libro I Título I).

Por tanto, a pesar que el concubinato es una relación real que acontece en nuestra sociedad, al no incluir el tipo penal aludido, no puede el juzgador tipificar tal acción, lo que compete a la Asamblea Legislativa. Importante es señalar, que tal aspecto ha sido considerado en el actual Anteproyecto de Código Penal.

Sin embargo, siendo que también se calificó la acción típica antijurídica

y culpable del procesado Góndola Galván como homicidio agravado por medios de ejecución atroces, no sufre el fallo modificación alguna al suprimirse el homicidio por razón del parentesco, dado que ambos tienen pena que oscila entre 12 a 20 años de prisión.

Por otra parte, cuando se da el homicidio por medios de ejecución atroces, no existe razón jurídico penal ni doctrinal que sustente la aplicación de la circunstancia agravante ordinaria común del ensañamiento (art.67 numeral 3 del Código Penal); la cual debe ser aplicada cuando no esté prevista como elemento constitutivo o como agravante específica de un determinado hecho punible. Lo contrario iría en perjuicio del procesado.

Al respecto esta Sala ha manifestado lo siguiente:

> "en lo referente al homicidio los términos ensañamiento y medios de ejecución atroces poseen idéntica connotación, por cuanto ambos implican la causación de sufrimiento o males innecesarios a la víctima con el designio de producirle la muerte. Ello es indicativo de que la circunstancia agravante común de "ensañamiento" prevista en el numeral 3° del art. 67 del Código penal, con excepción del homicidio que la contempla bajo la denominación de "medios de ejecución atroces", se aplicará a todos los delitos donde corresponda". (Sentencia de 14 de abril de 1993).

Siendo así, a pesar que la conducta desplegada por el procesado Góndola Galván es sumamente reprochable, esta Superioridad debe ajustarse a las normas sustantivas establecidas, correspondiendo reformar el fallo impugnado en el sentido de eliminar el aumento que alteró la pena base **-una tercera parte-** por la circunstancia agravante común del ensañamiento.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia apelada en el sentido de imponer a MIGUEL GÓNDOLA GALVÁN, de generales conocidas en autos, la pena de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN e inhabilitación para ejercer cargos públicos por igual tiempo. Y Confirma en lo demás.
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 132 numeral 3 segunda parte.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE ANTONIO JESÚS HOQUEE, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Corresponde decidir a esta Sala Penal el recurso de apelación presentado por el licenciado Dimas E. Guevara, **Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá**, contra auto emitido el 12 de marzo de 1998, mediante el cual el **Segundo Tribunal Superior de Justicia** se inhibe de conocer de la solicitud de fianza de excarcelación de **Antonio Jesús Hoquee**, sindicado por delito contra la vida y la integridad personal cometido en perjuicio de **Victorio Váldez Rodríguez**.

Para fundamentar su apelación, el recurrente sostiene básicamente que "en el expediente hay ciertas constancias que nos muestran un grado de dolo en el actuar del procesado ANTONIO JESÚS HOQUEE" (f. 167). Tales constancias, según el representante del Ministerio Público, son las declaraciones de Armando Benigno Castillero Bellido y Carlos Ulises Sánchez Rodríguez y los reconocimientos fotográficos "que vinculan al señor ANTONIO JESÚS HOQUEE, con el hecho de sangre que nos ocupa" (f. 168).

Cabe destacar que el tribunal de la causa llegó a la conclusión de que "estamos frente a una acción de tipo culposa" (f. 166), tras considerar que "de los distintos relatos incorporados en autos, no se percibe el elemento dolo en la acción que culmina con la muerte del infortunado VICTORIO VALDÉS, ya que no se entreve relación alguna entre estas dos personas, y son variadas las declaraciones que afirman que el occiso iba caminando cuando a lejana distancia el sindicado HOQUEE efectuaba disparos" (f. 165).

La investigación trata sobre la muerte de Victorio Váldez Rodríguez, ocurrida en horas de la mañana del 24 de enero de 1998 en el sector de calle C, avenida Ancón, corregimiento de Santa Ana, provincia de Panamá, como consecuencia de un disparo con arma de fuego que le impactó en la cabeza.

La censura del representante del Ministerio Público gira en torno a que el comportamiento del imputado Hoquee, tipificado como homicidio culposo, sea calificado como doloso. Para atender esta pretensión, resulta importante tener presente lo dispuesto en el artículo 32 del Código Penal, según el cual "Obra con culpa quien realiza el hecho legalmente descrito por inobservancia del deber de cuidado que le incumbe de acuerdo con las circunstancias y sus condiciones personales y, en caso de representárselo como posible, actúa confiado en poder evitarlo".

Al rendir declaración indagatoria, el imputado negó su participación en el hecho punible y explicó que "yo salí el día viernes veintitrés (23) de enero del presente año, metiéndome en el Bar El Príncipe, ubicado en la calle 17 Santa Ana, allí estuve libando licor ... hasta las ocho de la mañana ... porque tenía que esperar hasta que saliera la joven IRIS GAR ... me quedé dormido en la mesa y cuando ella salió, llamó al señor PEDRO del taxi y con ayuda de unas mujeres ... me subieron al taxi, porque estaba en completo estado de ebriedad, al llegar a calle C, Renta Quince ... IRIS abrió la puerta y me ayudó a bajar ... yo subí y lo único que recuerdo es que ... me dijeron que estaban allanando toda la renta ... se decía que había una balacera ... entre los muchachos del edificio con otra gente" (f. 125).

No obstante lo expuesto, la Corte observa que los argumentos del imputado Hoquee son desvirtuados con otros testimonios que obran en el cuaderno penal. Así, según el deponente Ariel José Tuñón Loaiza, Hoquee "bajó del taxi y sin mediar palabras con ninguno de los que estábamos en el grupo, sacó un arma nueve milímetros e hizo tres (3) a cuatro (4) detonaciones al aire ... le manifestamos que ... para que hacia eso, el nos respondió que no le dijéramos nada ... luego de eso subió para el edificio desde arriba comenzó a disparar, no se en que dirección, en el pasillo del último piso, el primer disparo para arriba y después cambió de dirección" (f. 38).

De igual manera, Armando Benigno Castillero Bellido sostuvo que "me encontraba ... en la esquina de la Multi Familiar de la Renta Quince luego ... se presento el sujeto de alias HOQUE con una ARMA DE FUEGO entre sus manos disparando hacia el lugar en donde nos encontrábamos parados ... luego siguió disparando cuando subía hacia la multi LUEGO SE ASOMÓ AL BALGON (sic) EN EL PISO Y SIGUIÓ DISPARANDO luego el señor VICTORIANO VÁLDEZ RODRÍGUEZ, cayó ultimado por uno de los disparos que efectuaba este sujeto HOQUE" (fs. 42-43). El deponente Carlos Ulises Sánchez Rodríguez también manifestó que "llegó el señor HOKEE, abordo de un taxi, se bajó del taxi, y sin motivo cargó su arma y disparó al aire, el realizó dos (2) detonaciones, de allí se metió a la renta y se fue para arriba y estando arriba se escucharon varias detonaciones" (f. 50).

En las sumarias constan otros elementos probatorios de relevante importancia que comprometen la responsabilidad penal de Hoquee. Tal es el caso

del testimonio que brinda Adelino Valdés, quien iba en compañía del ahora finado al momento de suscitarse el hecho de sangre y afirma que los disparos que le cegaron la vida al occiso provenían del sector de la Renta 15. Este deponente explica que "escuchamos tres (3) detonaciones, seguimos caminando, cuando escuchamos nuevamente tres (3) detonaciones, fue entonces que mi primo calló al suelo, ya que uno de estos últimos disparos le llegó a dar en la cabeza" (f. 19), que "en la parte de abajo de la Multi Familiar de la Renta Quince se encontraban parados y tomando ... los disparos provenían de la parte en donde esos señores se encontraban tomando ligor (sic)" (f. 26). Este relato lo corrobora Enel Hernández Frías, quien señaló que "escuché dos detonaciones como que provenían de la renta luego se escucharon tres detonaciones seguidas, al rato veo a un señor en la calle cerca de la tienda de mi propiedad tirado boca abajo" (f. 12).

Asimismo, aparece en el cuaderno penal la deposición de Daniel Valle Rodríguez, inspector de la Policía Técnica Judicial y quien participó en la aprehensión del imputado; indicó este testigo que "después que fue trasladado a la División de Captura por el grupo de Reacción, él aceptó haber cometido el delito, señalando que él había sido y que se sentía arrepentido y que lo había hecho porque estaba borracho" (f. 143). Esta versión es confirmada por Samuel Ricardo Navarrete Navas, también inspector de la Policía Técnica Judicial, quien sostuvo que el imputado "Señaló que él había realizado el hecho y que el mismo lo había hecho bajo los efectos del alcohol ... señaló que había asesinado al sujeto, pero que estaba borracho" (f. 146).

Las anteriores piezas testimoniales, valoradas conjuntamente, permiten colegir que en el presente negocio penal no es posible sostener que el hecho de sangre donde perdiera la vida Victorio Váldez Rodríguez fue producido por el incumplimiento del deber objetivo de cuidado que le incumbía al sumariado Hoquee. A juicio de esta Corporación de Justicia, el proceder de Hoquee se desvincula de la forma culposa de la acción punible, al quedar demostrado que voluntariamente sacó a relucir su arma de fuego y efectuó varios disparos en distintas direcciones. Esta comprobación pone de relieve que, desde el momento en que sacó su arma de fuego y efectuó deliberadamente los disparos en una zona residencial transitada habitualmente por un número plural de personas, el investigado Hoquee debió representarse la posibilidad de que su actuación acarearía el resultado de la muerte de una o más de los transeúntes, como efectivamente aconteció. En tales circunstancias, la Corte concluye que del comportamiento ilícito atribuido se desprende, por lo menos, el concepto de dolo eventual, que configura "el conocimiento de la posibilidad del resultado y la aceptación, por el agente, de la responsabilidad eventual dimanante de la realización del hecho ... no se quiere el resultado pero se acepta, ya que el individuo asume conscientemente el riesgo de infringir el tipo penal" (Registro Judicial, enero de 1994, pág. 206).

Las anteriores consideraciones permiten encuadrar la conducta del sindicado en el tipo penal de homicidio doloso, hecho punible que se encuentra excluido del beneficio de excarcelación bajo fianza, en razón de que la pena mínima es superior de cinco años de prisión.

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el auto de 12 de marzo de 1998, proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, en su lugar, DECLARA que Antonio Jesús Hoquee se encuentra excluido del beneficio de la excarcelación bajo fianza.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FIANZA DE EXCARCELACIÓN SOLICITADA A FAVOR DE MELVIN ANTONIO SHIRLEY CUTHBERT SINDICADO POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE JORGE SEYMORE HAMILTON MENCHACA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T.

PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresa procedente del Segundo Tribunal Superior del Justicia, el cuadernillo de fianza que contiene el auto de fecha de 27 de enero de 1998, mediante el cual se DENIEGA la petición de libertad caucionada solicitada en beneficio del señor **MELVIN ANTONIO SHIRLEY CUTHBERT**, en razón de la vinculación que se le atribuye con el delito de homicidio cometido en perjuicio del señor **JORGE SAYMORE HAMILTON MENCHACA**.

Solicita el licenciado Concepción que sea revisada en su totalidad la resolución apelada por inobjetiva, injusta y arbitraria; y que se resuelva primero la libertad bajo el concepto de fianza excarcelatoria o en su defecto la libertad provisional por falta de méritos legales.

Sostiene así, que no hay pruebas en el expediente en el sentido de que SHIRLEY CUTHBERT haya tenido alguna motivación para cegarle la vida al señor HAMILTON MENCHACA y que ni siquiera fueron objeto de análisis las declaraciones que como abogado defensor aportó.

Luego de determinar que el hecho punible está debidamente comprobado, consideró el Tribunal de Primera Instancia que si bien el imputado SHIRLEY CUTHBERT niega haber participado en el ilícito investigado, pesan en su contra graves indicios que lo vinculan con el homicidio doloso cometido en detrimento del señor HAMILTON MENCHACA, quien se encontraba en el sector de calle 8 y avenida Meléndez, pues según testigos su muerte está vinculada con un intercambio de disparos entre unos sujetos apodados Los Mellos y el señor ROY WRIGHT (A) "pepe".

Se indica en la resolución impugnada que las investigaciones adelantadas demuestran que SHIRLEY CUTHBERT es conocido como Mello y que familiares de Pepe lo señalan como la persona que horas antes del hecho sostuviera una discusión con este último y le disparara con arma de fuego. Agrega el Tribunal de primera instancia que incluso el señor SHIRLEY resultó herido en dicha balacera asegurando que caminaba por el lugar.

Finalmente concluye que pareciera se está ante un homicidio doloso con "error en la persona", por tanto este delito no permite disfrutar de la libertad caucionada porque está incluido en las prohibiciones excarcelarias contempladas en el artículo 2181 numeral 1 del Código Judicial, modificado por el artículo 1 de la Ley 15 de 1993. (Fs. 4-6).

Un estudio de las presentes diligencias revela que en la noche del 27 de diciembre de 1997 se produjo en la ciudad de Colón, en la calle 8va. Y avenida Meléndez, un cruce de disparos, presuntamente entre los señores MELVIN ANTONIO SHIRLEY CUTHBERT (A. MELLO) y ROY AUGUSTO WRIGHT (A. PEPE). Esa misma noche y en el mismo lugar resultó muerto el señor JORGE SAYMORE HAMILTON MENCHACA, quien de acuerdo con lo consignado en la diligencia de levantamiento de cadáver, presentaba heridas de bala a la altura del homoplato izquierdo y en el brazo derecho.

De los distintos testimonios recogidos hasta el presente en esta investigación, ninguna declaración vincula a MELVIN ANTONIO SHIRLEY CUTHBERT como causante de la muerte de JORGE SAYMORE HAMILTON MENCHACA y por el contrario, la única persona presente en el lugar de los hechos, ROXANA MARÍA WRIGHT, a fojas 80, informó que al momento de los disparos salió corriendo "y no sé si alguno salió herido", refiriéndose a las personas que estaban disparando, sin manifestar en toda su exposición conocimiento por percepción propia de que un tercero hubiera resultado mortalmente herido como consecuencia de la balacera acontecida.

En esas condiciones, hasta estos momentos el caudal probatorio recogido no permite conocer quién fue el autor del disparo o disparos que terminara con la vida de HAMILTON MENCHACA y la probable vinculación de MELVIN ANTONIO SHIRLEY

CUTHBERT no se encuentra establecida en esta incipiente investigación, razón por la cual no se comparte el criterio central de lo expuesto por el Tribunal A-quo para negar el beneficio de fianza excarcelación solicitada.

Por otra parte, del testimonio de la ya expresada ROXANA MARÍA WRIGTH se advierten cargos concretos que le hace a MELVIN ANTONIO SHIRLEY CUTHBERT que permiten estimar provisionalmente que, de otro modo, estamos en presencia de un homicidio tentado en perjuicio de ROY A. WRIGTH, pues categóricamente la testigo señala haber visto cuando MELVIN ANTONIO SHIRLEY CUTHBERT "apuntó con un arma a donde estaba mi hermano y como yo me encontraba parada delante de él, yo salí corriendo y nada más escuché los disparos", expresando además, que conocía bien a MELLO, que lo vio bien y que era el MELLO que tiene el "flat tap", "ese fue el que tenía el arma en la mano apuntando a mi hermano y yo lo que hice fue corre (sic) ya que yo me encontraba delante de mi hermano y él me estaba apuntando a mí y cuando yo corrí empezaron los disparos".

Ante lo que se deja expuesto, procede la revocatoria de la resolución apelada y la concesión del beneficio de fianza solicitado, conforme al criterio que se expone en el contenido de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el auto de 27 de enero de 1998, dictado por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y FIJA en DOS MIL BALBOAS (B/.2,000.00) el monto de la fianza de excarcelación que debe consignar el solicitante MELVIN ANTONIO SHIRLEY CUTHBERT para gozar de libertad provisional.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA GRACIELA J. DIXON C.

Comparto la parte resolutiva de la resolución presentada por el resto de la Sala, no así la parte motiva, por cuanto que se anota que el caudal probatorio recogido no permite conocer la posible autoría de la persona que hizo el disparo o los disparos que segaron la vida de Jorge Saymore Hamilton Menchaca, ni la probable vinculación del señor Melvin Antonio Shirley Cuthbert.

En ese sentido reitero -como lo hice en el proyecto que no fue acogido por el resto de la Sala-, tal como se señala en el fundamento del auto motivo de apelación, que existen pruebas que relatan la existencia de una balacera entre uno de los Mellos y un sujeto apodado Pepe y que de ello provino la muerte violenta del señor Hamilton Menchaca, quien no participaba en la misma.

Se tienen así, los informes recopilados por la Policía Técnica Judicial que hacen referencia al intercambio de disparos entre los Mellos y Pepe (fs. 18; 49-50 y 54); aunado al hecho de que el propio imputado Melvin Antonio Shirley Cuthbert resultó herido en la pierna izquierda aproximadamente a la hora de la muerte investigada, claro que excepciona que iba caminando por el lugar de los hechos (fs. 57-58).

Luego entonces, si las pruebas allegadas hasta el momento comprueban la existencia de una balacera entre Melvin Antonio Shirley Cutberth (a) Mello y Roy Augusto Wright Colthrist (a) Pepe, sobre ambos existen graves indicios en cuanto a la vinculación con la muerte de Jorge Saymore Hamilton Menchaca, la cual hasta el momento pareciera un homicidio culposo, desprendiéndose ello de las pruebas ya indicadas que convergen en que el señor Hamilton Menchaca no participaba en el enfrentamiento armado.

Tal situación nos permite disentir con el contraproyecto, porque en este se dice: "ninguna declaración vincula a MELVIN ANTONIO SHIRLEY CUTHBERT como

causante de la muerte de JORGE SAYMORE HAMILTON MENCHACA"; y agrega que la única persona presente en el lugar de los hechos es Roxana María Wright quien informó que al momento de los disparos salió corriendo y no sabe si alguno salió herido.

Contrario a lo afirmado en el contraproyecto, cuando la señora Roxana Wright Colthrist dijo que no sabe si alguno salió herido fue contestando exactamente la pregunta que se le formulara. La misma fue la siguiente:

> **"Pregunta**: Diga la declarante, cómo fue que su hermano no fue alcanzado por los disparos y si sabe si alguno de los que estaban disparando resultó herido? CONTESTO: Señor Inspector, yo no sé, porque yo salí corriendo y lo dejé ahí, y no sé si alguno salió herido" (f. 80).

Obsérvese bien, que la pregunta fue si alguno de los que estaban disparando resultó herido.

Se dice también, que en toda su exposición la señora Roxana María Wright no manifestó tener conocimiento por percepción propia de que un tercero hubiera resultado mortalmente herido como consecuencia de la balacera acontecida. Esto no se ajusta a la realidad. Veamos.

En su declaración la señora Rosana María Wright Colthrist (fs. 77-81), hermana del sujeto apodado Pepe, al ser cuestionada si sabía el motivo por el que se encontraba en ese despacho de la Policía Técnica Judicial contestó:

> "Señor Inspector, si, por el caso de homicidio sucedido por la calle ocho (8) Central y Meléndez en la noche del día veintisiete (27) de diciembre del año pasado. PREGUNTA: Diga la declarante, si el día veintisiete (27) de diciembre de 1997, al momento que se dieron los disparos que mataron al señor que en vida se llamó JORGE SEYMORE HAMILTON MENCHACA (a) ORITO, si usted estuvo presente? CONTESTO: Señor Inspector, si estuve presente" (fs. 77-78).

Incluso luego dijo que cuando el señor Hamilton Menchaca estuvo "tirado en el piso" ella no fue a verlo, pero cuando le explicaron que era el hijo de la maestra Norma se acordó de quien se trataba.

Luego entonces concluyo, que existe vinculación de Shirley Cuthbert en cuanto a la muerte violenta del señor Hamilton Menchaca. Pero para los efectos de entrar a resolver de solicitud de fianza se tiene que realizar una calificación provisoria del delito -de ahí la importancia procesal de la tipicidad- necesaria para determinar si el delito permite gozar de este beneficio y a quien corresponde su competencia.

La investigación hasta el momento no involucra al hoy occiso con la balacera efectuada la noche de su muerte, lo que da la impresión que se está ante un homicidio culposo.

FECHA UT SUPRA.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA A FAVOR DE RUBÉN WALTERS POLO SINDICADO POR TENTATIVA DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia ingresa a la Sala

Penal de la Corte, en grado de apelación, solicitud de fianza de excarcelación interpuesta por el licenciado LUIS FELIPE VAUGHAN en favor de su representado, señor **RUBÉN WALTERS POLO**, quien se encuentra sindicado del delito de homicidio en grado de tentativa cometido en perjuicio de **CLAUDIO WALTERS QUIROZ.**

El Tribunal A-quo, mediante auto fechado 3 de abril de 1998 concedió el derecho de excarcelación pretendido y fijó el monto de la fianza en cien balboas (B/.100.00), al señalar que "si bien es cierto que el sumariado RUBÉN WALTER ejecutó acciones violentas, éstas no tuvieron un desenlace funesto para ninguno de los que fueron víctima de agresividad, pues tampoco ninguno resultó con lesión probada en el sumario ...".

Al notificarse del referido auto, el día 23 de abril de 1998, la Fiscal Tercera Superior anunció apelación del mismo y, dado el trámite a seguir en estos casos, se desconocen los motivos de su disconformidad con lo resuelto, que bien pueden ser que se estime que no procede la concesión del beneficio de excarcelación otorgado o que se considere que la cuantía señalada no resulta apropiada.

Las constancias procesales, que se acompañaron con el cuadernillo de fianza, indican que el señor CLAUDIO WALTERS QUIROZ presentó denuncia ante la Personería Municipal del Distrito de Donoso contra su hijo, RUBÉN WALTER POLO (A) GÜICHO, a quien acusó de tentativa de homicidio, conforme a hecho que se dio el día 6 de abril de 1997 aproximadamente a las diez de la mañana (10:00 a. m.) cuando, usando un arpón, intentó dispararle, propósito que no logró consumar gracias a la intervención del otro hijo del denunciante VICTORIANO WALTERS. Igualmente relató WALTERS que el día 15 de marzo de 1997 RUBÉN WALTERS POLO se presentó a su casa en forma violenta con un machete en mano y lanzó varios golpes a su madre, la señora GILMA POLO CEREZO, que afortunadamente falló procediendo CLAUDIO WALTERS a desarmarlo con un trozo de madera 2 x 4.

En las sumarias, constan las declaraciones de GILMA POLO CEREZO (fs. 8-14;60-62), SIMÓN POLO CEREZO (fs. 43-44), VICTORIANO WALTERS POLO (fs. 45-48), YAMILETH CÓRDOBA WALTERS POLO (fs. 49-50), VICTORIANO WALTERS SANTANA (fs. 51-55), MARIELA ANGELA WALTER QUIROZ (fs. 56-59) y PABLA SOLÍS OLIVEROS (fs. 121-122), testigos presenciales de los hechos denunciados, coincidentes con la declaración de CLAUDIO WALTERS respecto al comportamiento agresivo y violento de RUBÉN WALTERS POLO.

Como ya se dejó expresado, a RUBÉN WALTER POLO se le instruyen unas sumarias como presunto responsable del delito de homicidio tentado. Ya el Tribunal de la causa, en decisión de 22 de abril último, con posterioridad a la resolución de 3 de abril de 1998 que concedió fianza de excarcelación a su favor, dictó resolución donde sobreseyó provisionalmente a RUBÉN WALTER POLO, decisión que fue apelada por la Fiscal Tercera Superior y cuyo recurso oportunamente habrá de conocer la Sala.

Consta en la copia de las sumarias que se tienen a la vista, que RUBÉN WALTER POLO, al menos desde el día 7 de abril de 1997 (fojas 31 del cuaderno principal) se encuentra detenido preventivamente por esta causa como también se aprecia que no es hasta el día 23 de abril de 1997 (fojas 65) que la Personería Municipal del distrito de Donoso pronuncia la diligencia donde dispone "mantener la detención preventiva del señor RUBÉN WALTER POLO" al considerar que se encuentran satisfechos los requerimientos de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y el "hecho punible investigado se encuentra descrito en el Título Ir., Capítulo I° Del libro II del Código Penal, la cuan tiene pena mínima superior a dos años de prisión".

En realidad, no es exacta la afirmación que se hace en cuanto al hecho punible que se investiga en la presente causa, por cuanto no se está en presencia de un homicidio previsto en el Capítulo, Título y Libro del Código Penal citado sino ante el hecho punible conocido como tentativa de homicidio, en cuyo caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 60 del Código Penal, dicho ilícito "será reprimido con pena no menor de un tercio del mínimo ni mayor de los dos tercios del máximo de lo establecido para el correspondiente hecho punible".

En ese orden de ideas, si para el delito de homicidio la pena mínima se encuentra señalada en cinco años de prisión, la correspondiente al delito de homicidio tentado será de un año y ocho meses, monto punitivo inferior al previsto en el artículo 2148 del Código Judicial, razón por la cual no puede fundamentarse en esta norma la medida cautelar que se decretó en contra de RUBÉN WALTER POLO.

Por esas circunstancias, si al conocer de la apelación que se ha interpuesto contra la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Superior que concede fianza de excarcelación a WALTER POLO, se observa que el hecho que se le imputa no da lugar a la detención preventiva en razón de la penalidad mínima con la que se sanciona dicho ilícito, tal como lo autoriza el artículo 2178 del Código Judicial, lo procedente es revocar de oficio el auto que decretó la detención preventiva de RUBÉN WALTER POLO y en su lugar disponer su libertad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley REVOCA la resolución de 23 de abril de 1997, dictada por el Señor Personero Municipal del Distrito de Donoso y ORDENA la libertad inmediata de RUBÉN WALTER POLO, de no existir otra causa pendiente por la cual debe permanecer detenido.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DENUNCIA PRESENTADA POR MILTON VARGAS JURADO CONTRA NODIER JARAMILLO Y RICARDO NAVARRO JURADO, MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia la denuncia presentada por **Milton Vargas Jurado** contra **Nodier Jaramillo y Ricardo Navarro Jurado**, Magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia, por la supuesta comisión de delito contra la administración pública, contra la comunidad internacional y "por irregularidad en el procedimiento, extralimitación de funciones (Artículo 18 de la Constitución), faltas a la ética judicial (Artículo 440 del Código Judicial) y también por ignorancia supina de la ley" (f. 1).

Explica el denunciante que "los magistrados NODIER JARAMILLO Y RICARDO NAVARRO JURADO, han abusado de su cargo, puesto que la orden emitida al juez Strah que continúe el trámite de esta demanda en reconvención para la cual no tiene jurisdicción ni competencia, es un hecho arbitrario que permite un perjuicio en mi contra" (f. 5), y que contraviene "el cumplimiento de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Ley 15 de 28 de octubre de 1997 y la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EL DERECHO DE AUTOR EN OBRAS LITERARIAS, CIENTÍFICAS Y ARTÍSTICAS, Ley 5 de 9 de noviembre de 1982, delito tipificado en el artículo 313 del Código Penal" (f. 7).

En la vista remisoria del negocio, el Procurador General de la Nación expresa que "En el caso que nos ocupa no se puede alegar una presunta obstaculización del cumplimiento de un compromiso internacional en el acto de producir una resolución que tiene como fin dilucidar un conflicto presentado ante la autoridad que emite la misma" (f. 45). De igual manera, el representante del Ministerio Público sostiene que "no concurren en la actuación de los funcionarios

denunciados los presupuestos establecidos por el artículo 336, habida consideración de que ... actuaron en concordancia con las funciones que les establece el Código Judicial" (f. 46). Por consiguiente, solicita se dicte "en la presente sumaria un sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal de acuerdo a lo establecido en el artículo 2210, numeral 2, del Código Judicial" (f. 47).

Un análisis de la iniciativa procesal propuesta y de los elementos probatorios aportados con el libelo, permite comprobar que el denunciante Vargas Jurado acude a la esfera penal para censurar la actuación de los magistrados del Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro de un proceso en el que se tramita una demanda de reconvención que persigue la nulidad de los registros de las composiciones musicales que son de su autoría. Se observa que los argumentos que fundamentan tal denuncia, lejos de demostrar la comisión de un hecho punible o que los funcionarios denunciados hayan incurrido en alguna responsabilidad penal, lo que revelan es la disconformidad del denunciante con la decisión jurisdiccional adoptada por los magistrados del Tribunal Superior. Ya en diversas ocasiones esta Corporación de Justicia ha sostenido que quien se considere afectado o en desacuerdo con la interpretación de un tribunal, puede censurar tal decisión utilizando los mecanismos de impugnación que, a tales efectos, nuestro ordenamiento jurídico organiza, de donde resulta que en este caso se ha utilizado una vía inidónea para alcanzar la pretensión procesal.

Por lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE, DE MANERA OBJETIVA E IMPERSONAL, en esta causa, con base en lo que establece el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO T. (fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS INSTRUIDAS CONTRA LUIS RAFAEL DE JANON SÁNCHEZ, LUCIANO CONTRERAS VARGAS E IVÁN AUGUSTO HARRIS YURGAQUI POR SUPUESTO DELITO CONTRA EL HONOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN PERJUICIO DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, las sumarias instruidas contra **LUIS RAFAEL DE JANON**, **LUCIANO CONTRERAS e IVÁN AUGUSTO HARRIS YURGAQUI** por supuesto delito contra el honor en perjuicio de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, conocimiento que se da en razón del cargo que ostenta en la actualidad el señor **LUIS RAFAEL DE JANON** -Sub-Director General de los Casinos Nacionales.

Las presentes sumarias tuvieron como origen nota suscrita por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dirigida a la Procuraduría General de la Nación en la cual se solicitaba la investigación de la posible comisión de un delito contra el honor en las publicaciones aparecidas en el diario La Estrella de Panamá de los días 16, 17 y 18 de enero de 1993, que guardan relación con un accidente de tránsito ocurrido el 1° de enero de 1992 entre el Magistrado ARTURO HOYOS y el señor LUCIANO CONTRERAS.

Al emitir la Vista N° 92 de 19 de noviembre de 1997, el Procurador General de la Nación solicita que se dicte auto de enjuiciamiento contra el señor LUIS RAFAEL DE JANON por los delitos de calumnia e injuria en perjuicio de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia CARLOS LUCAS LÓPEZ, ARTURO HOYOS,

RODRIGO MOLINA, JUAN TEJADA MORA, RAÚL TRUJILLO, FABIÁN ECHEVERS, JOSÉ MANUEL FAÚNDES, MIRTZA DE AGUILERA y AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ y además que se decline la competencia respecto a los otros imputados.

Sostiene el Procurador que en la columna denominada "Ave Fénix", publicada en el Diario La Estrella de Panamá, suscrita por el periodista LUIS RAFAEL DE JANON "se emiten expresiones calumniosas e injuriosas en contra del Magistrado CARLOS LUCAS LÓPEZ" cuando al referirse a los Magistrados de la Corte Suprema señala:

> "Son gente carcomida por vicios naturales ... vicios naturales que disfrazan bajo sus túnicas albinas ... como si los defectos pudieran evitarse con los maquillajes de la farsa. El doctor Carlos Lucas López ... por ejemplo ... es un hombre involucrado en penosos asuntos que comprometen gravemente su estatura moral. Es un hombre señalado ... justa o injustamente ... por los familiares de un hombre cuya muerte gravita sobre la justicia de Panamá. Es un Magistrado maculado por acciones extramaritales que se le achacan públicamente ... continuamente, sin que haya podido neutralizar y rebatir semejantes acusaciones".

Advierte el Procurador que el texto citado "contiene expresiones que vulneran el patrimonio moral de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y, en particular del entonces Magistrado Carlos Lucas López, configurándose así la conducta típica contenida en el artículo 173 del Código Penal".

Al avocarse al estudio de las piezas aportadas para determinar mediante un análisis jurídico si el señor LUIS RAFAEL DE JANON incurrió o no en un delito contra el honor con lo plasmado en las publicaciones de la columna "Ave Fénix", advierte la Sala que a través del Decreto Ejecutivo N° 476 de 7 de septiembre de 1995, publicado en la Gaceta Oficial N° 22,865 de 8 de septiembre de 1995, el Encargado de la Presidencia de la República en ese entonces, licenciado Tomás Gabriel Altamirano Duque, en uso de sus facultades constitucionales, decretó un Indulto a favor de una serie de personas entre las cuales se encuentra el sindicado en la presente causa LUIS RAFAEL DE JANON. El Decreto en comento establece que se otorga el indulto conforme al artículo 179 numeral 12 de la Constitución Política a favor de los mencionados ciudadanos que:

> "... resulten investigados, sindicados, procesados o condenados conforme a supuestas conductas transgresoras de la Ley, por la Comisión de **Delitos contra el Honor**, contra la Libertad, contra la Personalidad Jurídica del Estado, contra el Patrimonio o contra la Administración Pública; ya sea que los proceso se encuentren en su fase sumaria, plenaria o con sentencia condenatoria; con auto de enjuiciamiento; o **sin dictarse el auto de enjuiciamiento**, sin que se hubiese verificado Audiencia; o bien que se encuentren o no en grado de Apelación, Casación o en cualquier otro trámite procesal". (Lo resaltado es nuestro).

Como quiera que el imputado en el proceso subjúdice ha sido beneficiado con un indulto ejecutivo que, de acuerdo con el artículo 91 del Código Penal, extingue la acción penal y la pena, así procede declararlo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL en el proceso seguido a LUIS RAFAEL DE JANON, por la supuesta comisión de los delitos de calumnia e injuria en perjuicio de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia CARLOS LUCAS LÓPEZ, ARTURO HOYOS, RODRIGO MOLINA, JUAN TEJADA MORA, RAÚL TRUJILLO, FABIÁN ECHEVERS, JOSÉ MANUEL FAÚNDES, MIRTZA DE AGUILERA y AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ, y DECLINA COMPETENCIA a la esfera circuital respecto a los otros dos imputados.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) JOSÉ A. TROYANO

(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL INCIDENTE DE NULIDAD EN EL PROCESO SEGUIDO A BALDOMIR KRIZAJ A FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ POR DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE LAS SOCIEDADES KREPORT INVESTMENTS INC. Y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, en representación de BALDOMIR KRISAJ y FRANCISCO SOLÍS ha presentado escrito, mediante el cual solicita que se le expidan copias autenticadas de la resolución que admite el recurso de casación interpuesto por el licenciado Elías Domínguez, en representación de **CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A. y de KREPORT INVESTMENT INC.**, dentro del proceso iniciado en virtud de denuncia promovida por **ROLANDO E. GONZÁLEZ**, contra **BALDOMIR KRISAJ y FRANCISCO SOLÍS.**

Estando acreditado en el proceso que el licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila aparece como apoderado de BALDOMIR KRISAJ y FRANCISCO SOLÍS, procede que se le extiendan las copias solicitadas por su persona.

En mérito de lo expuesto, el suscrito Ponente, en Sala Unitaria, ORDENA que las copias descritas en líneas anteriores, sean compulsadas por la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por gestión directa y a costas del solicitante.

Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS A KATHIA LORENA GARCÍA VARELA Y EDUARDO BENITEZ ISTURAIN DIRECTORA Y SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR POR SUPUESTOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SEGÚN DENUNCIA INTERPUESTA POR MILTON VARGAS JURADO. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresa a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el expediente contentivo de las sumarias seguidas a **KATHIA LORENA GARCÍA VARELA y EDUARDO BENITEZ ISTURAIN**, ex-Directora y Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, respectivamente, por supuestos delitos Contra la Administración Pública de acuerdo a denuncia presentada por **MILTON VARGAS JURADO** el seis (6) de noviembre de 1997. Los delitos acusados se cometieron, de acuerdo con el denunciante, cuando el día 27 de octubre de 1997, la Dirección Nacional de Derecho de Autor mediante Resolución de esa fecha, anuló los registros de una serie de obras musicales inscritas a nombre de VARGAS JURADO, resolviendo así una demanda presentada por el apoderado judicial de la empresa PUBLITRÉS, S. A.

También se encuentra pendiente de resolver la admisibilidad de la acusación particular presentada por MILTON VARGAS JURADO ante la Secretaría de esta Sala el pasado 3 de abril, igualmente contra KATHIA LORENA GARCÍA VARELA y EDUARDO BENITEZ ISTURAIN por la supuesta comisión de delitos Contra la Administración Pública cometidos mediante la expedición de la resolución de 27 de octubre de

1997, ya mencionada.

Advierte el suscrito que, ambos cuadernos se encuentran en estado de decidir y que tratándose de procesos instruidos contra las mismas personas por una misma clase de delitos, es posible ordenar la acumulación de los mismos para que sean resueltos a través de una misma resolución.

Por tanto, es del caso dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 2291, 709, 710 y 711 del Código Judicial, por lo que se devuelve el presente negocio a Secretaría de la Sala Penal para que se realice la acumulación respectiva de los expedientes, a efecto de que los procesos acumulados se sustancien conjuntamente, para la posterior ponencia del suscrito.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO A FAVOR DE HENRY LUIS BALTAZAR CABALLERO, SANCIONADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Esta Sala Penal, mediante resolución judicial calendada 6 de mayo de 1998, decidió no admitir el recurso de revisión presentado por el licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, en representación de **Henry Luis Baltazar Caballero**, contra la sentencia de 14 de octubre de 1997, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que confirmó la sentencia de primera instancia mediante la cual se condena a Baltazar Caballero a la pena de 6 años de prisión, como reo del delito de posesión agravada de drogas.

En el acto de notificación de la meritada decisión jurisdiccional, el licenciado Ríos Molinar anunció recurso de apelación. Sin embargo la Secretaría de la Sala, mediante informe de 20 de mayo de 1998, comunica que ha "precluido el término sin la sustentación del mismo" (f. 61 vuelta).

Este despacho sustanciador debe resaltar que la mencionada resolución judicial no es susceptible de ser impugnada mediante un recurso de apelación, ya que se trata de una decisión suscrita por la totalidad de los magistrados que componen la Sala Penal de esta Corporación de Justicia. No obstante, por recibido en secretaría el anuncio del recurso de apelación, en este momento lo relevante es que el abogado defensor no sustentó el recurso anunciado, a lo que sigue que en derecho lo procedente es declararlo desierto.

Por lo antes expuesto, el suscrito magistrado sustanciador DECLARA DESIERTO el recurso anunciado por el licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, por falta de sustentación, y ORDENA el archivo del negocio.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIO CONTENTIVO DE LA DENUNCIA PENAL FORMULADA POR LA LICENCIADA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, CONTRA LA LICENCIADA AIDELENA PEREIRA VELIZ, MAGISTRADA DEL TERCER TRIBUNAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el sumario contentivo de la denuncia presentada por la licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY**, en su propio nombre y representación, contra la licenciada **AIDELENA PEREIRA VELIZ**, actual Magistrada del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por supuesto delito contra la libertad individual.

Mediante resolución de 14 de julio de 1997 (fs. 295-296), el Segundo Tribunal Superior de Justicia se inhibió del conocimiento de la presente denuncia y, en consecuencia, remitió la investigación a la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal.

Observa esta Superioridad que, en proceso similar a este, esta Superioridad, al conocer del recurso de apelación interpuesto contra resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia donde admitía la acusación particular promovida por la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, en su propio nombre y representación contra la licenciada AIDELENA PEREIRA VELIZ, Juez Cuarta de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, por supuesto delito contra la libertad individual, mediante auto de 4 de junio de 1997 revocó el pronunciamiento del inferior, luego de las siguientes consideraciones:

"...
Cierto es que para determinar la admisibilidad de una acusación particular ha de atenerse a los requisitos consignados en el artículo 2013 del Código Judicial, subrogado por la ley 3 de 22 de enero de 1991 y en ese sentido el libelo acusatorio bajo estudio cumple con los requisitos de forma exigidos por dicha disposición.

Sin embargo, es un hecho público y notorio que la acusada en el presente negocio, Licda. AIDELENA PEREIRA VELIZ actualmente se encuentra desempeñando el cargo de Juez Cuarto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, por lo que, por poseer la calidad de servidor público debe aplicarse lo dispuesto en el Capítulo II, Título IX del Libro Tercero del Código Judicial sobre Procesos Contra Servidores Públicos, aclarándose que si bien es cierto que la conducta endilgada a la funcionaria acusada se encuentra tipificada en el Título II, Capítulo III del Libro II del Código Penal -delitos contra la libertad individual, artículo 156- el abuso de autoridad es un elemento constitutivo del mismo.

En razón de ello, a juicio de la Sala, en este caso es de aplicación el contenido del artículo 2471 del Código Judicial, donde se establece que toda persona que promueva acusación o denuncia contra algún servidor público por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, deberá acompañar la prueba sumaria de su relato, entendiéndose como tal cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuído, los cuales deben ser idóneos, es decir, que por si solos acrediten el hecho punible que se le imputa a la acusada.

Por tanto y contrario a lo resuelto por el Segundo Tribunal Superior en la decisión apelada, la Sala es del criterio que se debe proceder a resolver sobre la admisibilidad de la presente acusación particular con base a la prueba sumaria presentada por la parte acusadora, al encontrarnos ante una acusación contra un servidor público en donde corresponde a la parte acusadora aportar tal prueba.

En ese orden de ideas, no se comparte la opinión externada por el Ministerio Público (fojas 72) en cuanto a que '... dada la existencia de un sumario previo a la acusación, resultaba procedente la admisión de la acusación particular sin perjuicio de que una vez

se valoren las pruebas, el Tribunal desestime, archive o sobresea la causa objeto de la misma' y ya con anterioridad, en fallo de 19 de mayo de 1992, dictado por esta Sala se dijo:

'La omisión de presentación de prueba preconstituida en el acto de formalización de acusación o denuncia contra servidores públicos, por abuso en el ejercicio de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, reviste una importancia capital, al grado de conllevar al inmediato archivo del negocio, y en el evento de que por error se hubiere procedido a instruir las sumarias, lo actuado por el agente de instrucción no tiene el efecto de subsanar el vicio señalado.'.

La parte acusadora, en su escrito de formalización de la acusación, denuncia como pruebas las presentadas con el libelo de la denuncia "criminal interpuesta por OMAYRA GARCIA DE BERBEY contra AIDELENA PEREIRA que cursa en la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá".

Con vista en las piezas que conforman el expediente levantado con motivo de la denuncia a la que se refiere la parte acusadora, se observa que la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial dictó el auto cabeza del proceso de 4 de agosto de 1995 (fojas 168 del expediente principal) mediante el cual avocó el conocimiento de la denuncia criminal interpuesta por OMAYRA GARCIA DE BERBEY contra la Juez AIDELENA PEREIRA por la suspuesta comisión de delito contra la libertad individual y ello lo hizo sin haber entrado previamente a valorar si los elementos de pruebas aportados por la denunciante eran suficientemente idóneos y eficaces para acreditar el hecho punible denunciado.

Para la Sala, independientemente de la existencia de un sumario, constituye un requisito de procedibilidad para la admisión de una acusación particular de este tipo, la verificación de que los elementos de pruebas allegados sean suficientes para acreditar la existencia del hecho punible imputado.

De lo que expone la Licda. OMAYRA GARCIA DE BERBEY en su escrito de acusación, el día 12 de octubre de 1993, la Licda. AIDELENA PEREIRA VELIZ Juez Cuarta del Circuito del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, con abuso del cargo que desempeñaba la privó de su libertad al ordenar y ejecutar su arresto, con base en fotocopia de la nota No. 887 de 8 de julio de 1993, dirigida al Director de la Policía Nacional, Licdo. OSWALDO FERNANDEZ, siendo que dentro del ámbito funcional de los Jueces no se encuentra ejecutar personalmente el arresto de ninguna persona.

Sin embargo, de los elementos de prueba aportados por la denunciante se concluye que la Licda. AIDELENA PEREIRA, al ocurrir los hechos en la Corregiduría de Bella Vista, no realizó conducta alguna contraria a la ley, toda vez que se limitó a ordenar a la autoridad de Policía del área que diera cumplimiento a una orden de arresto existente contra la Licda. OMAYRA GARCIA DE BERBEY.

Por tanto, a falta de prueba sumaria eficaz que demuestre que el acto atribuído a la acusada constituye delito, lo procedente es revocar el auto apelado en donde se admitió la acusación particular interpuesta en el presente caso".

Por tanto, tal como lo indicó la Sala en la resolución antes mencionada, en el sumario contentivo de la denuncia bajo estudio, la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial dictó el auto cabeza del proceso de 4 de agosto de 1995 (fojas 168 del expediente principal) y avocó el conocimiento de la presente denuncia criminal, sin haber entrado previamente a valorar si los elementos de prueba aportados por la denunciante eran suficientemente idóneos y eficaces para acreditar el hecho punible denunciado, como requisito de procedibilidad, por tratarse el presente negocio de una denuncia contra un

servidor público -siendo que actualmente la licenciada AIDELENA PEREIRA, ocupa el cargo de Magistrada del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial-, por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales, en cuyo caso es aplicable el artículo 2471 del Código Judicial, y tal como se desprende del fallo de 19 de mayo de 1992, dictado por esta Sala, pese a que se hayan instruido las sumarias sin haberse valorado previamente si las pruebas aportadas por la denunciante eran idóneas y eficaces para acreditar el hecho punible denunciado, "lo actuado por el agente de instrucción no tiene el efecto de subsanar el vicio señalado.".

Y como se desprende del fallo de 4 de junio de 1997 citado:

> "... de los elementos de prueba aportados por la denunciante se concluye que la Licda. AIDELENA PEREIRA, al ocurrir los hechos en la Corregiduría de Bella Vista, no realizó conducta alguna contraria a la ley, toda vez que se limitó a ordenar a la autoridad de Policía del área que diera cumplimiento a una orden de arresto existente contra la Licda. OMAYRA GARCIA DE BERBEY".

La Sala advierte que además de la resolución antes citada, existe otro reciente pronunciamiento de 28 de noviembre de 1997, en el cual declaró la cosa juzgada en la acusación particular presentada por la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, en su propio nombre y representación, contra la licenciada AIDELENA PEREIRA VELIZ, actual Magistrada del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por supuesto delito contra la libertad individual, y siendo que en ambos casos se decidió sobre la prueba sumaria como requisito de procedibilidad para la admisión de dichas acusaciones contra la servidora pública acusada, concluimos que en este caso el pronunciamiento ya antes exteriorizado resulta válido para la presente denuncia y en ese orden de ideas reiteramos que se ha configurado en este caso el fenómeno jurídico conocido como cosa juzgada, toda vez que existe identidad legal de las partes, de la pretensión y del hecho que se señala como punible o sea la causa de pedir.

Y como se señala en el fallo de 28 de noviembre de 1997 mencionado:

> "... Fuera de que ya la Sala se pronunció al respecto, sería una contradicción que ahora lo haga en forma diferente, dando posibilidad a un doble juzgamiento en desconocimiento de elementales principios consagrados por la legislación penal. Por otra parte, la nueva calidad de la acusada (Magistrada) no varía ni cambia la situación de lo ya fallado, ni es un motivo válido que de lugar a replantear el ejercicio de esta acción de acusación particular, en vista de que los hechos expuestos son los mismos acerca de los que ya esta Sala Penal de la Corte se pronunció, en los términos que arriba se dejaron transcritos textualmente".

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que se ha producido la COSA JUZGADA y ORDENA el ARCHIVO del sumario contentivo de la denuncia presentada por la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, en su propio nombre y representación, contra la licenciada AIDELENA PEREIRA VELIZ, actual Magistrada del Tercer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por supuesto delito contra la libertad individual.

Notifíquese, Cúmplase y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) GRACIELA J. DIXON (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A BALDOMIR KRIZAJ Y A EDITH CALVERA DE KRIZAJ. MAGISTRADA PONENTE: GRACIELA J. DIXON C. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

De conformidad con lo ordenado mediante resolución de 27 de abril de 1998 (fs. 23-25), corresponde decidir el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Darío Carrillo Gomila contra la resolución de 3 de diciembre de 1997, mediante la cual en Sala Unitaria el Magistrado Humberto Collado admitió el recurso de Casación interpuesto por Elías Domínguez en representación de Kreport Investments Inc., dentro del Incidente de Nulidad a favor de **Baldomir Krizaj y Edith de Krizaj** (fs. 153-154).

SITUACIÓN PROCESAL

En efecto, la defensa técnica de Krisaj Kregar y Calvera de Krisaj presentó escrito anunciando recurso de apelación (f. 178 ant.) contra la resolución de 3 de diciembre de 1978 que admite el recurso de casación interpuesto por el licenciado Elías Domínguez (fs. 153-154).

El Título VII Capítulo II que se refiere al recurso de apelación de manera taxativa en su artículo 2429 determina qué resoluciones pueden ser impugnadas por medio de este recurso. Y ninguna señala que proceda la apelación contra la resolución que admita un recurso de casación en materia penal. Incluso en su numeral 7° señala que se da la apelación contra aquellas resoluciones que la ley expresamente establezca.

El recurso de casación, por ser un medio impugnativo extraordinario, contiene las normas procesales referentes a su admisibilidad y sustanciación (arts. 2438-2457). Tales normas no establecen de manera expresa que proceda el recurso de apelación contra la resolución que admite un recurso de casación en materia penal.

Ahora bien, ello es entendible por ser la casación un recurso formalísimo que consta de dos momentos de admisibilidad.

El primero llevado a cabo por el Tribunal Superior, quien debe examinar si el recurso fue presentado dentro del término legal, si se trata de persona hábil y si la resolución recurrida admite este tipo de recurso.

El segundo momento corresponde al Tribunal de Casación, quien debe revisar si es correcta la revisión concedida por el Tribunal Superior y verificar si el recurso cumple con los cuatro requisitos formales trazados por la ley, contemplados en el numeral 3° del artículo 2443 del Código Judicial. Incluso se permite al interesado enmendar los defectos de forma que hacen inadmisible el recurso, concediéndole un término de cinco días para ello.

Las normas respectivas no aluden a la posibilidad de recurrir el auto que admite el recurso de casación, así, se dispone que una vez admitido el mismo se debe correr traslado del proceso al Procurador General de la República (art. 2445 del Código Judicial).

Sobre esta materia el Código Judicial en su articulado ordena lo siguientes:

> "Artículo 1971: En las materias que no tengan regulación expresa en este Libro o en leyes procesales complementarias se aplicarán las disposiciones del Libro II de este Código, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza del proceso penal.
>
> Artículo 2431: Las disposiciones del Libro II de este Código relativo a la apelación y a la consulta, se aplicarán en lo que no sea incompatible con la naturaleza del proceso penal".

Teniendo como base lo anterior, nos remitimos al artículo 1168 del Libro II de ese mismo código, que se refiere a la sustanciación del recurso de casación en materia civil, el cual determina que "Contra las resoluciones de la Corte

sobre corrección o sobre admisibilidad no cabe recurso alguno".

Y si bien la resolución de 27 de abril de 1998, que resolvió el recurso de hecho admitiendo el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de 3 de diciembre de 1997, que a su vez admitió el recurso de casación, un mejor análisis de las normas adjetivas nos lleva a la conclusión de que la resolución que admite un recurso de casación no puede ser apelada ante el resto de la Sala, por las razones de índole procesal explicadas.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la apelación contra el auto de 3 de diciembre de 1997.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) GRACIELA J. DIXON C.
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MAYO 1998

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA CORPORACIÓN DE ASESORES JURÍDICOS, EN REPRESENTACIÓN DE ÁLVARO FABIÁN MIRANDA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 32 DE 6 DE JUNIO DE 1997, EMITIDA POR EL FISCAL TERCERO DEL CIRCUITO DE COLÓN (ÁREA DE CRISTÓBAL), ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma CORPORACIÓN DE ASESORES JURÍDICOS, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, en representación de **ÁLVARO FABIÁN MIRANDA**, para que se declare nulo, por ilegal, el **Resuelto N° 32 de 6 de junio de 1997** dictado por el **Fiscal Tercero del Circuito de Colón** (área de Cristóbal), acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En efecto, a foja 64-65 del expediente bajo estudio se aprecia el escrito de desistimiento presentado por el recurrente ante este Tribunal.

Al respecto se observa a foja 32 del presente negocio, que el señor ÁLVARO FABIÁN MIRANDA le otorgó poder a la Corporación de Asesores Jurídicos, en especial al Licenciado LEONEL AMET OLMOS TORRES, quién quedó facultado expresamente para desistir de la presente demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción; y dado que la normativa del artículo 66 de la Ley 135 de 1943 establece que "en cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso Contencioso Administrativo", y el artículo 1073 del Código Judicial recoge el mismo principio, es perfectamente viable el desistimiento presentado por los apoderados del recurrente.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por la firma CORPORACIÓN DE ASESORES JURÍDICOS, en representación de ÁLVARO FABIÁN MIRANDA. y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA EDILSA FLORES DE DE LA ROSA EN REPRESENTACIÓN DE NICACIA GARDIN BRACHO, FELICIANO BENEDI GARDIN Y CANDELARIA TUD GARDIN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 09-96 DE 5 DE FEBRERO DE 1996, EXPEDIDA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licencia Edilsa Flores de De La Rosa ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en representación de **NICACIA GARDIN BRACHO, FELICIANO BENEDI GARDIN y CANDELARIA TUD GARDIN**, para que se declare nulo, por ilegal, la **Resolución N° 09-96 de 5 de febrero de 1996**, expedida por **Gerente General del Banco Hipotecario Nacional**, la negativa tácita por el silencio administrativo y para que se hagan otras declaraciones.

El libelo antes descrito se encuentra en el despacho del Magistrado Sustanciador para ser examinado en lo concerniente a los requisitos de admisibilidad que preceptúa la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946.

Al respecto se observa el artículo 42-b de la Ley 135 de 1943 estatuye que la Acción de Plena Jurisdicción prescribe al cabo de dos meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda.

Aunado a lo expresado, el artículo 34 de la Ley 135 de 1943 señala de uno u otro recurso o de ambos (reconsideración y apelación) puede hacerse uso dentro de los 5 días útiles a partir de la notificación personal o dentro de los 5 días de fijación del edicto.

En el caso que nos ocupa, el recurrente fue notificado de la resolución impugnada mediante edicto fijado del 23 al 30 de mayo de 1996 (durante 5 días hábiles). Por lo tanto, a prima facie, los dos meses a los cuales hace alusión el artículo 42-b antes citado comenzaban a correr desde el 31 de mayo del mismo año, es decir, el término para recurrir ante este Tribunal Colegiado concluía el 31 de julio de 1996.

No obstante, si el actor decidiera recurrir en reconsideración ante el Gerente General del Banco Hipotecario, era indispensable que el peticionista se ciñera e interpusiera el aludido recurso dentro de los 5 días que como período preclusivo establece el tenor del artículo 34 de la Ley 135 de 1943 para tales efectos; o lo que es igual decir, del 23 al 30 de mayo de 1996. De lo contrario, el recurso de reconsideración sería presentado extemporáneamente tal como efectivamente se verificó en el negocio bajo estudio, debido a que el actor promovió el recurso en referencia el 16 de diciembre de 1997 (un año y seis meses de retraso) como se pone de relieve a foja 10 del expediente de la causa.

Es evidente que el término para acceder ante la Jurisdicción de lo Contencioso ha transcurrido en exceso y en consecuencia, le ha prescrito al actor la posibilidad de enervar el acto administrativo impugnado mediante la demanda sometida a nuestra consideración.

En conclusión, el actor inobservó las normas de prescripción tanto para la presentación de los recursos de reconsideración y apelación como para el agotamiento de la vía gubernativa.

Resulta indudable que el petente trató de enmendar erróneamente el equívoco procesal en el cual incurrió al permitir que le prescribiera la acción reparadora de derechos, intentando pasar por alto los defectos señalados con anterioridad, al presentar el recurso de reconsideración con un año y seis meses de retraso, e invocando con posterioridad, el silencio administrativo negativo como móvil procedimental para impugnar el acto acusado de ilegal; situación ésta que no le permite al Sustanciador admitir la presente demanda.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado que suscribe en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción formalizada por la licenciada Edilsa Flores de De La Rosa en representación de NICACIA GARDIN BRACHO, FELICIANO BENEDI GARDIN y CANDELARIA TUD GARDIN.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PEREIRA Y PEREIRA EN REPRESENTACIÓN DE DORIS ENEIDA ROMERO O. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DRP N° 298-95 DE 26 DE JULIO DE 1995,

EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Pereira y Pereira en representación de **DORIS ENEIDA ROMERO O.** ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución DRP N° 298-95 de 26 de julio de 1995**, expedida por la **Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República**, así como también la **Resolución DRP N° 09-96 de 22 de octubre de 1996**, que constituye el acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Lo que se Demanda

A través de la presente acción, el demandante pretende que se declare la ilegalidad de la referida Resolución DRP N° 298-95 de 26 de julio de 1995, por la cual la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República resolvió negar la solicitud de levantamiento de medida cautelar, dictada sobre las cuentas a plazo fijo cifradas, N° 01-64-0001-1 y N° 01-664-0002-2 depositadas en la Caja de Ahorros, a nombre de la señora DORIS ENEIDA ROMERO OROCÚ, por cuanto las mismas son propiedad presumible del Estado Panameño. Que producto de las anteriores declaraciones, se ordene el levantamiento de las medida cautelar decretada sobre las cuentas cifradas a plazo fijo, cuyo titular legal es la Doctora DORIS ENEIDA ROMERO OROCÚ.

Los Hechos u Omisiones de la Acción

Las referidas pretensiones las fundamenta el recurrente, resumidamente por esta Superioridad, en los siguientes hechos:

1. Que el día trece (13) de julio de 1989 la doctora DORIS ENEIDA ROMERO OROCÚ, personalmente concurrió a la Caja de Ahorros y, con su firma legal, abrió las cuentas cifradas a plazo fijo números 1640001-4 y 1640002-2, de las que es titular.

2. Que la demandante ROMERO OROCÚ, ha declarado tanto ante la Fiscalía Séptima de Circuito, como ante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, que el dinero depositado a plazo fijo en las cuentas cifradas números 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2, que abrió con su firma legal, lo recibió del Sr. JEAN BEAUCHAMP; estas declaraciones constan en el expediente B-10 de la DRP que contiene el proceso de responsabilidad patrimonial seguido a las Srtas. LORENA DEL CARMEN NORIEGA y THAIS NEFERTITIS NORIEGA, que origina la resolución impugnada.

3. Que contrariamente a la sospecha o presunción esgrimida por la Contraloría General de la República para tomar la decisión de congelar las cuentas cifradas en referencia, en el expediente B-10 de la DRP que contiene la investigación del caso, no se ha probado plenamente que los fondos depositados en esas cuentas provienen del Erario Público, a pesar de que las investigaciones ordenadas por el señor Contralor duraron 36 meses.

4. Que el 20 de abril de 1995, la Doctora DORIS ENEIDA ROMERO OROCÚ a través de sus apoderados judiciales, presentó ante la Dirección de Responsabilidad Patrimonial solicitud de levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre las referidas cuentas 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2, constituídas por ella en la Caja de Ahorros.

5. Que sin esperar la ampliación del Informe de Antecedentes que anteriormente había ordenado el Magistrado Sustanciador, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial profirió la Resolución DRP N° 298-95 de 26 de julio de 1995, por la que se resolvió negar la precitada medida cautelar.

6. Que existen documentos probatorios que reposan en el expediente seguido por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a la Doctora ROMERO OROCÚ, entre los que figuran los documentos contentivos de las contestaciones de las señoritas LORENA DEL CARMEN NORIEGA SIEIRO y THAIS N. NORIEGA SIEIRO negando tener los vínculos o la relación que les atribuye la Dirección de Responsabilidad Patrimonial con respecto a los dineros depositados en las cuentas cifradas de la Caja de Ahorros que han sido congeladas. Ambas manifiestan desconocer la existencia de esos plazos fijos cifrados que motivan el procedimiento de responsabilidad patrimonial seguido en contra de ellas.

Informe de Conducta

Por medio del Oficio N° 325-DRP-C-50 de 1° de abril de 1996, que corre a fs. 76-85, la entidad demandada procedió a explicar la decisión adoptada a través de la Resolución N° 298-95 de 26 de julio de 1995, en los términos que se transcriben de seguido:

> "Mediante la Resolución impugnada, dictada por esta Corporación, al igual que el acto confirmatorio, se niega la solicitud de levantamiento de medida cautelar, propuesta por la firma forense Escobar, Bethancourt, Pereira & Taboada, en su calidad de apoderados especiales de la doctora Doris Eneida Romero Orocú, dictada sobre los dineros depositados a plazo fijo en las cuentas cifradas número 1640001-4 y 1640002-2 de la Caja de Ahorros, con fundamento en pruebas y serios indicios que indican que la demandante, doctora Orocú, no es más que una persona natural interpuesta, con el objeto de ocultar los verdaderos propietarios de esos fondos, las señoritas Lorena del Carmen Noriega Sieiro y Thays Nefertitis Noriega Sieiro.
>
> A fin de poder demostrar la vinculación de Lorena Del Carmen Noriega Sieiro y Thays Nefertitis Noriega Sieiro, con los plazos fijos antes citados, la Resolución DRP N° 298-95 de 26 de julio de 1995, hace un análisis detallado de todas las cuentas relacionadas con los mismos, desde su origen. Este examen determinó que los fondos depositados en las cuentas cifradas, objeto de la presente demanda, son el resultado de múltiples transferencias, realizadas a partir del 19 de octubre de 1988, fecha en la cual fueron canceladas las cuentas de ahorros 08-01-13912 y 08-01-6178, abiertas por las referidas hermanas Noriega Sieiro, en la Caja de Ahorros sucursal de San Francisco.
>
> Consideramos prudente destacar que tanto Lorena Del Carmen Noriega Sieiro y Thays Nefertitis Noriega Sieiro, propietarias de las cuentas de ahorros aludidas ut supra, autorizaron en ese entonces a la señora Nilsa Doris Aparicio Orocú, (ver fojas 121 y 122 del expediente), para cancelar las cuentas de ahorros mencionadas y transferirlas a dos cuentas de ahorros nuevas a su nombre. Posteriormente, se efectuaron otras trnasferencias de los fondos a otras cuentas abiertas por la señora Nilsa Doris Aparicio Orocú, hasta el 31 de julio de 1989, se dio la apertura de los contratos de los plazos fijos 01640001-4 y 01640002-2, a nombre de la demandante doctora Doris Eneida Romero Orocú. ...
>
> Examinadas las pruebas que reposan en el expediente, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, llegó a la conclusión de que todas las pruebas coinciden plenamente en señalar que los dineros depositados en los depósitos a plazo fijo cifrados, son propiedad de Lorena Del Carmen Noriega Sieiro y Thais Nefertitis Noriega Sieiro, y con base en ello fue desestimada la solicitud de levantamiento de medida cautelar, presentada por la doctora Doris Eneida Romero Orocú, como propietaria de los fondos depositados en las mismas ..."

De las Disposiciones Acusadas y el Concepto de la Violación

Según el recurrente la decisión administrativa cuya ilegalidad se demanda, viola los artículos 4° y 17 (inciso primero) del Decreto de Gabinete N° 36 de 10

de febrero de 1990, y el artículo 967 del Código Judicial.

En cuanto al concepto de la violación del artículo 4° del Decreto de Gabinete N° 36 de 1990, el demandante señala que el mismo ha sido infringido en forma directa, por omisión. A tales efectos señala:

> "... Como se puede observar de la lectura de la norma transcrita, la facultad reconocida a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial para tomar medidas cautelares o precautorias en contra del patrimonio de un particular está sujeta a que haya motivos fundados para temer que, de no tomarse, resultarán ilusorias las pretensiones de resarcimiento del Estado; igualmente la norma condiciona el ejercicio de la acción cautelar a la existencia de `indicios de los cuales se deduzca que tales bienes provienen directa o indirectamente del Erario Público y que de éste han sido ilegalmente sustraídos.
>
> Sobre la primera situación, es incuestionable que a través de todo el proceso de responsabilidad patrimonial que nos ocupa NO se encuentran motivos (que, obviamente deben ser fundados), que ameriten o respalden la acción cautelar tomada por los Magistrados de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial sobre las cuentas bancarias cifradas No. 164-0001-4 y 1640002-2 de la Caja de Ahorros que aparece a nombre de la Dra. DORIS ENEIDA ROMERO OROCU; por el contrario, reposan en el expediente respectivo de la misma Auditoría General de la Contraloría General, como el memorándum de 21 de noviembre de 1994 y la Resolución No. 05-95 de 24 de enero de 1995, expedida por el propio Magistrado Sustanciador, donde se afirma que la lesión patrimonial al Erario Público `no está claramente establecida en este caso y que `no se llega a esclarecer plenamente la procedencia de la mayor parte de los fondos y mucho menos si pertenecen al Erario Público .
>
> En cuanto a la segunda condición jurídica contenida en la norma confrontada, tenemos que tampoco existen `indicios , que permitan al juzgador llegar a la inequívoca conclusión de que los depósitos a términos de las cuentas cifradas que aparecen a nombre de nuestra representada, objeto de la medida cautelar repudiada, "proviene directa o indirectamente de bienes o valores indebidamente sustraídos del Patrimonio del Estado ..."

Sobre la transgresión del artículo 967 del Código Judicial, la parte actora sostiene que dicha norma ha sido infringida en forma directa, por omisión; que la misma define y contiene los elementos del indicio que para el caso que nos ocupa, deberán aplicarse ante la presunción que hace la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

Según el recurrente, no existe en el expediente ningún hecho cierto y debidamente probado que haga presumir que los dineros depositados en las cuentas cifradas en referencia, provienen ilícitamente del Erario Público, o que pertenezcan a personas que directa o indirectamente han lesionado el patrimonio del Estado. Que por tanto, no hay constancia de ninguna evidencia probada que pueda dar lugar a la existencia de las conclusiones injurídicas a las que arribó la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.

Finalmente, en lo que a la violación del inciso primero del artículo 17 del citado Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990 respecta, el recurrente sostiene que el mismo ha sido infringido en forma directa, por omisión.

Lo anterior lo fundamenta la parte actora en el hecho de que a pesar de que la citada disposición en su recto sentido señala que la Dirección de Responsabilidad Patrimonial si considera que no existen méritos ni pruebas para declarar la responsabilidad de alguna persona, dictará la correspondiente absolución y levantará las medidas correspondientes; dicha entidad no ha dictado la resolución motivada ordenando el levantamiento de la medida cautelar adoptada.

Criterio de la Procuraduría de la Administración

La Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 481 de 31 de octubre de 1996, luego de un minucioso análisis, solicitó a este Tribunal que sean denegadas las declaraciones impetradas por la parte actora, dado que de las constancias procesales aportadas se colige que los dineros que se originaron a nombre de Lorena del Carmen Noriega Sieiro y Thays Nefertitis Noriega Sieiro evolucionaron hasta culminar con sendas cuentas cifradas, a plazo fijo, a nombre de Doris Eneida Orocú, según se ha descrito. Siendo ello así, está más que fundamentada la actuación de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial al tomar medidas precautorias para evitar que se hagan ilusorias las pretensiones del Estado de recuperar los fondos públicos.

Decisión de la Sala

Expuestos los fundamentos de las partes en el presente proceso, la Sala pasa a decidir la controversia legal planteada.

Como viene expuesto, las pretensiones del recurrente se centran en el hecho de que a través de todo el proceso de responsabilidad patrimonial seguido por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República sobre las cuentas bancarias cifradas N° 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2 de la Caja de Ahorros que aparecen a nombre de DORIS ENEIDA ROMERO OROCÚ no existen elementos probatorios, ni siquiera indicios que permitan esclarecer plenamente la procedencia de la mayor parte de los fondos, y mucho menos, si pertenecen al Erario Público.

A foja 1, Tomo I del expediente administrativo consta copia de la Resolución N° 224 de 24 de mayo de 1991, por medio de la cual el Contralor General de la República en ejercicio de la atribución establecida en el artículo 11, numeral 5 de la Ley N° 32 de 1984, resuelve ordenar la cautelación de los fondos depositados en las cuentas a Plazo Fijo Cifrado N° 01-64-0001-4 y N° 01-64-0002-2 de la Caja de Ahorros a nombre de DORIS ENEIDA ROMERO OROCÚ. La razón de dicha actuación administrativa guarda relación con irregularidades en la procedencia y manejos de dineros en cheques por B/.4,990.15 y altas sumas de dinero en efectivo por más de B/.1,108,731.27 depositados en la Caja de Ahorros; por cuanto las mismas presumiblemente, son provenientes de fondos de propiedad del Estado panameño.

En la resolución citada también se ordena a la Dirección General de Auditoría de la Contraloría la realización de un examen o investigación de auditoría sobre el origen de los fondos de las cuentas N° 08-01-139912 a nombre de Thays Nefertitis Noriega Sieiro y N° 08-01-6178 a nombre de Lorena del Carmen Noriega Sieiro y todas las transferencias y transacciones referentes a los mismos, las cuales según las pruebas documentales y testimoniales cronológicamente aportadas, fueron evolucionando hasta identificarse como las Nos. 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2.

De esta manera, la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República procedió a remitir a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, el Informe de Antecedentes N° 06-30-94-DAG-DEAE en relación al manejo irregular de dos cuentas a Plazo Fijo Cifradas a nombre de Thays Nefertitis Noriega Sieiro y Lorena del Carmen Noriega Sieiro. Por medio de la resolución DRP N° 05-95 de 24 de enero de 1995, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial resolvió devolver dicho informe de antecedentes a la referida dirección, a fin de que se procediera a su ampliación para esclarecer plenamente la procedencia de la mayor parte de los fondos de dichas cuentas; y de brindar a los posibles sujetos de responsabilidad Thays Nefertitis Noriega Sieiro, Lorena Del Carmen Noriega Sieiro, Nilsa Doris Aparicio Orocú, Doris Eneida Romero Orocú y Jaime Simmons la oportunidad de aportar los documentos o cualquier elemento de juicio respecto al manejo y origen de las dos cuentas a plazo fijo cifrados existentes en la Caja de Ahorros a nombre de Doris Eneida Romero Orocú (fs. 23-24).

En virtud de lo anterior, Mediante Memorándum Núm. 1317-95-DAG-DEAE de 24 de octubre de 1995, (fs. 35-40 del expediente contencioso), el Director de Auditoría General de la Contraloría General de la República remitió a la

Dirección de Responsabilidad Patrimonial la información cuya reproducción consideramos oportuno transcribir:

> "1. Mediante Nota Núm. 2,913-DAG-DEAE del 1° de agosto de 1995, le comunica a la Doctora Doris Eneida Romero Orocú, sobre la investigación que se realiza y se le brinda la oportunidad de proporcionar los documentos o elementos de juicio que estime conveniente para aclarar lo relacionado con su participación.
>
> 2. En respuesta a la nota señalada en el punto 1° la Doctora Doris Eneida Romero Orocú, remit la nota S/N de 16 de agosto de 1995, en donde señala que aproximadamente el 9 de julio de 1989, llegó a su casa, el señor Jean Beauchamp y éste le solicitó, por la amistad que les une, que si podía abrir a su nombre una cuenta en la Caja de Ahorros, que debido a la situación política imperante en ese momento, el señor Beauchamp no quería aparecer como titular de la cuenta. El señor Beauchamp le informó que el capital que se iba a depositar le pertenecía a él y a sus socios de la República Dominicana y que iba a a ser invertido en la Zona Libre de Colón; donde él, ya tenía negocios. Fue atendida por el Gerente General, Lcdo. Jaime Simons, quien mandó a una empleada a comprar los cheques de gerencia para iniciar la apertura de las cuentas, ella firma con su firma legal los contratos y se le informó que el señor Beauchamp debería firmar los mismos documentos. Se le llamó para informarle durante los dos o tres primeros depósitos, posteriormente, se desligó totalmente de las cuentas.
>
> 3. A pesar de muchos esfuerzos no se ha podido localizar ni entregar la nota de la señora Nilsa Doris Aparicio, la cual se confeccionó con el Núm. 2,915-95-DAG-DEAE del 21° de agosto de 1995.
>
> 4. Mediante Nota Núm. 2,914-95-DAG-DEAE de 1° de agosto de 1995, se le comunica al señor Jaime Simons, sobre la investigación y se le brinda la oportunidad de proporcionar los documentos o elementos de juicio que estime conveniente para aclarar lo relacionado con su participación. Esta nota fue entregada al Lcdo. Simons en el Despacho del Licenciado José Atencio, Jefe del Departamento de Auditorías Especiales, pero el mismo se negó a recibirla, señalando que consultaría con su abogado, a la fecha no hemos recibido respuesta.
>
> Con relación a la comunicación de las hermanas Noriega, se confeccionaron las notas números 2,912 y 2,980-95-DAG-DEAE, ambas del 1° de agosto de 1995, mediante las cuales se le brinda la oportunidad de proporcionar los documentos o elementos de juicio que estimen conveniente, de manera que puedan aclarar todo lo relacionado con su participación. En respuesta a estas notas las hermanas Noriega señalaron lo siguente:
>
> 5.1. La joven Thays N. Noriega Sieiro, comunica que desconoce la existencia de las cuentas a plazo fijo cifrado a que se refiere la investigación, toda vez que no se ha firmado ningún documento, ni ha realizado depósito alguno en esa Institución de ahorros.
>
> 5.2. La joven Lorena del C. Noriega Sieiro, con cédula de identidad Núm. 4-149-133, mediante nota s/n de 22 de septiembre de 1995, comunica que no tiene que aportar ningún tipo de documentos o elementos de juicio, toda vez que, no ha firmado documento ni son de su conocimiento la existencia de plazos fijos cifrados, que la vinculen o que haya realizado en la Caja de Ahorros durante la fecha que la nota manifiesta ..."

Por otro lado, en el expediente judicial referente al caso que nos ocupa, se observan entre otros elementos probatorios, los testimonios de los posibles sujetos de responsabilidad patrimonial Jaime Simmons, Doris Eneida Romero Orocú, Francisco Augusto Zatner y Omaira de Ku referentes a la procedencia de los fondos

de las citadas cuentas bancarias.

En este orden de ideas, traemos a colación el testimonio del señor Francisco Augusto Zatner, quien era el Gerente de la Sucursal de San Francisco en octubre de 1988. Dicho testigo sostiene que en la Caja de Ahorros existían dos cuentas a nombre de Lorena Noriega y Thays Noriega. Que un día le llamó por teléfono la señora Estrella Yu, para decirle que a la sucursal de San Francisco se iba a presentar la señora Nilsa Aparicio para instruirlo sobre las cuentas pertenecientes a las dos jóvenes Noriega. Que, después de la llamada la señora Nilsa Aparicio fue a la Sucursal y le dijo que las cuentas a nombre de Lorena Noriega y Thays Noriega se cancelaran y se pusieran a su nombre; siendo dichas cuentas canceladas y unificadas en una sola a nombre de la señora Nilsa Aparicio, a través de sendas autorizaciones escritas y firmadas por las hermanas Noriega. (F. 107-109).

También tenemos la declaración del señor Jaime Simmons Bragin, quien era el Gerente General de la Caja de Ahorros en el año de 1989, fecha en que se dio la apertura por primera vez, de cuentas a plazo fijo cifradas en la Sucursal de Vía España. El mismo manifiesta que efectivamente las jóvenes Lorena Noriega y Thays Noriega tenían cuentas en la Sucursal de San Francisco y que fueron pasadas a la Sucursal de Vía España. Además, señala que quien firmó las dos cuentas a plazo fijo cifrado fue la joven Lorena Noriega, resultando ser la dueña de dichos fondos. A estos efectos, dicho testigo indica que en el contrato de depósitos a plazo fijo cifrado quienes son los tenedores o dueños de los fondos no es el nombre de la clase de la cuenta ni de la firma legal, sino la firma convencional, que es la única que puede firmar cartas, dar instrucciones, comunicaciones. Por ende el señor Simmons manifiesta que en el caso en particular, en los certificados de las cuentas cifradas N° 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2 la autorizada y única dueña de los fondos es la señorita Lorena Noriega, porque ésta fue quien signó con su firma convencional, no así la señora Doris Eneida Orocú. (Fs. 593-595).

Por otro lado, tenemos la declaración de la señora Omaira Bernal de Ku, quien era la asistente del Gerente General en el año de 1989, año en que se dio la apertura de los plazos fijos Nos. 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2. La misma con relación a los citados plazos fijos manifestó que era cierto que ella había asistido al señor Simons en la apertura de una cuenta a plazo fijo cifrado que correspondía a la sucursal de Vía España. Además, que Lorena del Carmen Noriega Sieiro fue la persona que firmó con su firma convencional y en su presencia los dos plazos fijos en calidad de propietaria y, de igual manera, confirmó las declaraciones del señor Simmons. (Fs. 595-596).

Finalmente, vemos el testimonio de la demandante la señora Doris Eneida Romero Orocú, quien según consta en el legajo probatorio, aparece firmando como "firma legal" en los contratos a plazo fijo cifrados identificados como Nos. 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2. A la misma se le llamó a declarar ante la Fiscalía Séptima de Circuito; en sus declaraciones sostiene que conoce a las jóvenes Lorena y Thays Noriega, que las vio varias veces en la casa de su prima Nilza Aparicio Orocú. En cuanto a las cuentas cifradas en referencia, en las constancias procesales se deja constancia que la señora ROMERO OROCÚ, indicó lo que se transcribe a continuación:

> "Referente a las cuentas cifradas 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2, señala que se abrieron a su nombre en julio de 1989 por medio de una llamada telefónica que recibió de parte del señor Jean Beauchamp, esposo de Sandra Noriega, fue a su casa y le propuso que si podía abrir una cuenta en la Caja de Ahorros a nombre de la declarante, pareciéndole extraño, pero le manifestó que a sugerencia de Sandra Noriega le pedía el favor por considerarla de confianza y por explicarle que no le iba a ocasionar problema alguno, aceptó.
>
> Sigue indicando que al día siguiente el secretario de Jean Buchamp, un dominicano, le llevó a su casa los documentos para firmar e indicándole el secretario que al lado de la firma de ella, había otra, en renglón convencional y que era la de Jean Buchamp y unos socios dominicanos, entre ellos José María Bustos".

Así las cosas, esta Superioridad considera que contrario a lo que señala la parte demandante, y dada la existencia de elementos probatorios e indiciarios que demuestran la vinculación de las jóvenes THAYS y LORENA NORIEGA SIEIRO con las cuentas a plazo fijo cifradas con la numeración 01-64-0001-4 y 01-64-0002-2, la adopción de la medida cautelar no conlleva vicio de ilegalidad alguno. Además, la recurrente no ha demostrado la procedencia de los fondos depositados en dichas cuentas bancarias, que es lo que se está tratando de investigar en el proceso seguido por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial contra la familia NORIEGA SIEIRO, a fin de determinar si los mismos constituyen fondos provenientes del Erario Público.

Por las motivaciones expuestas, podemos concluir que hasta tanto no culmine la investigación por parte de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre cuentas identificadas con la numeración 1-64-001-4 y 01-64-002-2 a nombre de Doris Eneida Romero Orocú, resulta prematuro.

Por tanto, la Sala estima que más que infringir los artículos 4° y 17 del Decreto N° 36 de 1990, así como el artículo 967 del Código Judicial, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial actuó precisamente, en apego de las mismas. De la lectura de estas disposiciones se desprende de forma clara la facultad que tiene dicha institución para tomar en cualquier tiempo y cuando a su juicio hubiere motivos para temer que se hagan ilusorias las pretensiones del Estado, todas las medidas precautorias que estime convenientes, sobre todo o parte del sujeto llamado a responder patrimonialmente (ya se trate de personas que a cualquier título hayan tenido acceso a fondos o bienes públicos, se hubiesen aprovechado indebidamente de los mismos, en su beneficio o en beneficio de un tercero), así como también sobre aquellos bienes que aunque no figuren como parte del patrimonio del sujeto, respecto de ellos existan indicios de los cuales se deduzca que tales bienes provienen directa o indirectamente de bienes o valores indirectamente del patrimonio del Estado.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución DRP N° 298-95 de 26 de julio de 1995, expedida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, así como también la Resolución DRP N° 09-96 de 22 de octubre de 1996, que constituye el acto confirmatorio.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria
=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BERNAL & ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO A. ESPINOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA DE 26 DE JUNIO DE 1997, EXPEDIDA POR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 20 de noviembre de 1997, mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense Bernal y Asociados, actuando en nombre y representación de **Octavio A. Espinoza**, para que se declare nula, por ilegal, la **Nota de 26 de junio de 1997**, expedida por el **Jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas**, y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda porque la misma reunía los requisitos mínimos para ser admitida.

La Procuradora de la Administración sustenta su apelación señalando que el acto administrativo atacado es un acto de mero trámite, toda vez que a través del mismo se le indica al señor Espinoza que está siendo separado del cargo, lo que no le pone término a la relación laboral de éste con el Ministerio de Obras Públicas. Manifiesta que lo anterior se comprueba con el informe de conducta rendido por el Ministro de Obras Públicas, quien señala que mediante Decreto de Personal N° 49 de 6 de agosto de 1997, el Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas decretaron la destitución del señor Octavio A. Espinoza, del puesto que ocupaba en el Ministerio de Obras Públicas.

Por su parte, la firma Bernal y Asociados en su escrito de oposición al recurso de apelación expresa que la Nota de 26 de junio de 1997 no hacía alusión a ningún Decreto Ejecutivo u otra disposición por medio de la cual se ordena la separación o destitución del ingeniero Octavio A. Espinosa. También señala que el ingeniero Espinosa interpuso en tiempo oportuno, recurso de reconsideración ante el Ministro de Obras Públicas el día 30 de junio de 1997 y que nunca le fue contestado el mismo.

A juicio del resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, le asiste la razón a la Procuradora de la administración, ya que como la Nota de 26 de junio de 1997, por medio de la cual se le notifica al ingeniero Octavio Espinoza que fue separado del cargo de ingeniero civil III (supervisor) que ejercía en la Dirección Ejecutiva de Estudio y Diseño (Dirección Nacional de Administración de Contrato) del Ministerio de Obras Públicas, no le pone fin a la relación laboral entre éste y el Ministerio de Obras Públicas, no es un acto definitivo, sino el Decreto Ejecutivo de Personal N°49 de 6 de agosto de 1997, por el cual se decreta la destitución de Octavio Espinosa del cargo que ocupaba. Por lo tanto, la demanda incumple lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 que señala lo siguiente:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivas no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41, o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación".

En virtud de lo anterior, lo procedente es revocar la resolución impugnada.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la resolución de 20 de noviembre de 1997, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense Bernal y Asociados, actuando en nombre y representación de Octavio A. Espinoza, para que se declare nula, por ilegal, la Nota de 26 de junio de 1997, expedida por el Jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAMÓN QUINTO ZAMBRANO, EN REPRESENTACIÓN DE VILMA DE CEBALLOS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 40-98 DE 12 DE MARZO DE 1998,

DICTADA POR EL MINISTRO DE VIVIENDA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ramón Quinto Zambrano, actuando en nombre y representación de la señora **VILMA DE CEBALLOS**, interpuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° 40-98 de 12 de marzo de 1998**, dictada por el **Ministro de Vivienda**, por medio de la cual se confirmó en todas su partes la **Resolución N° 12-97 A. I. de 17 de diciembre de 1997**, proferida por la **Dirección General de Arrendamientos**, a través de la cual se declaró legal el alza de canon de arrendamiento del apartamento N° 2 del inmueble 7-35 ubicado en la calle segunda del Corregimiento de San Felipe, alza que fue autorizada a su vez, por la Resolución N° 89-DGA de la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

El artículo 29 de la Ley 33 de 1946 preceptúa que no será indispensable dirigir la demanda contra los actos simplemente confirmatorios, que hayan agotado la vía gubernativa, pero que dichos actos quedarán sin valor alguno si se anula el acto originario impugnado. De conformidad con esta norma la presente demanda, debió promoverse contra el acto originario, o sea la Resolución N° 89-DGA de la Dirección General de Arrendamientos, y como no se hizo así, no debe dársele curso a la presente demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

En casos similares esta Corporación de Justicia se ha pronunciado en este sentido. Como ejemplo podemos citar el auto dictado el veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), en la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma Dudley & Asociados, en representación del Banco Agro-Industrial y Comercial de Panamá (BANAICO, S. A.), para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 12-96 de 18 de abril de 1996, dictada por la Comisión Bancaria Nacional del Ministerio de Planificación y Política Económica. (Registro Judicial, mayo de 1996, pág. 394).

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Ramón Quinto Zambrano, en representación de la señora VILMA DE CEBALLOS, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 40-98 de 12 de marzo de 1998, emitida por el Ministro de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ENDARA & MARRE EN REPRESENTACIÓN DE EULALIO BORDONES, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN S/N DE 14 DE FEBRERO DE 1998, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Endara & Marre en representación de **EULALIO BORDONES**, ha interpuesto recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción, para que

se declare nula por ilegal la **Resolución S/N de 14 de febrero de 1998**, expedida por la **Directora General del Registro Público** y para que se hagan otras declaraciones.

Antes de admitir la demanda y por razones de economía procesal, la Magistrada Sustanciadora estima necesario examinar si la misma cumple con los requisitos legales para ser admitida.

El acto impugnado lo constituye una resolución, dictada por la Directora General del Registro Público, mediante la cual ordena la inscripción provisional de los documentos, cuyo ingreso al Registro fue anotado en los asientos 8883 del tomo 258 del Diario y 10985 del Tomo 263 del Diario. El actor promovió recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra el mencionado acto y mediante Resolución N° AL/64/98 de 2 de abril de 1998 la Directora General del Registro Público declaró inadmisible el recurso interpuesto alegando que contra la inscripción provisional de un documento no cabe recurso alguno. Al recurrente le quedó abierta entonces la vía procesal del recurso de hecho ante la autoridad competente.

El Director General del Registro Público tiene la facultad de calificar la legalidad de los títulos que se le presenten para su inscripción y en consecuencia puede negarla o suspenderla (artículo 1795 del Código Civil). De acuerdo con el numeral 2° del artículo 94 del Código Judicial, la Sala Primera de lo Civil conoce de las apelaciones contra las resoluciones que dicta el Director General del Registro Público, por tanto, el acto impugnado es un acto jurisdiccional y por ello y por mandato expreso de la ley la Sala no tiene competencia para conocer de su legalidad o ilegalidad y no debe darle curso a la presente demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Endara & Marre, en nombre y representación de EULALIO BORDONES, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución S/N de 14 de febrero de 1998, expedida por la Directora General del Registro Público, y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JUAN F. CORRO, EN REPRESENTACIÓN DE ROGELIO AUGUSTO CORRO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° DHR-555 DE 31 DE JUNIO DE 1997, EXPEDIDA POR LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha interpuesto recurso de apelación contra el auto de 19 de enero de 1998 que admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Juan F. Corro, actuando en nombre y representación de **ROGELIO AUGUSTO CORRO**, para que se declare nula, por ilegal, la **Nota N° DRH-555 de 31 de junio de 1997**, expedida por la **Jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario**, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda por considerar que la misma

cumplía los requisitos mínimos para ser admitida.

La Procuradora de la Administración sustenta su apelación señalando que en la demanda no se agotó la vía gubernativa. Manifiesta que ello es así, pues la parte actora presentó contra la Nota N° DRH-555 de 31 de junio de 1997, expedida por la Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, recurso de reconsideración con apelación en subsidio, el cual fue resuelto mediante la Nota N° DRH-571 de 6 de agosto de 1997 por la Jefa de Recursos Humanos del M.I.D.A., confirmando en todas sus partes la Nota N° 555 de 31 de julio de 1997. No obstante, señala que la parte actora no sustentó el recurso de apelación ante el superior jerárquico, es decir, ante el Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Por su parte, el licenciado Juan Fernando Corro Correa en su escrito de oposición al recurso de apelación señala que la resolución administrativa impugnada no expresó los recursos que procedían contra las misma. Igualmente manifiesta que la resolución N° DRH-571 de 6 de agosto de 1997 que confirma el acto administrativo impugnado, no otorga el recurso de apelación interpuesto en subsidio contra el mismo, a fin de que sea resuelto por el superior jerárquico, así como tampoco fue remitido al mismo.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera coinciden con la Procuradora de la Administración en que la admisión de la demanda debe revocarse, pero no por los criterios expuestos por la misma. Ello es así, puesto que la Nota N° 555 de 31 de julio de 1997, por medio de la cual se le comunica a Rogelio A. Corro que fue destituído mediante el Decreto Ejecutivo N° 50 de 15 de julio de 1997, no constituye el acto principal a impugnar, sino el Decreto Ejecutivo N° 50 de 15 de julio de 1997. Por lo tanto, la demanda incumple lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 cuyo contenido es el siguiente:

> "Artículo 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivas no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41, o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas ultimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación".

En virtud de lo anterior, lo procedente es revocar la resolución impugnada.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la resolución de 19 de enero de 1998, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Juan F. Corro, actuando en nombre y representación de ROGELIO AUGUSTO CORRO, para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° DRH-555 de 31 de junio de 1997, expedida por la Jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LCDA. ALMA L. CORTÉS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ABDIEL CORTÉS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL N° 1784-96 DE 18 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO

MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Alma L. Cortés, en representación de **LUIS ABDIEL CORTÉS**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la **Acción de Personal N° 1784-96 de 18 de octubre de 1996**, dictada por el **Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales** y para que se hagan otras declaraciones.

Lo que se Demanda

La parte actora solicita a esta Superioridad declare la nulidad, por ilegal, de la prenunciada Acción de Personal N° 1784-96 de 18 de octubre de 1996, dictada por el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales mediante la cual se le destituyó del cargo de Ingeniero Agrónomo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

Que, como consecuencia de la declaración anterior, se ordene el reintegro a su cargo del señor LUIS CORTÉS, y que se le reconozcan los salarios caídos con efectos retroactivos desde la fecha en que fue separado de su cargo hasta la fecha en que se haga efectivo su reintegro. Que de igual manera, se ordene el pago de su escalafón como Ingeniero Agrónomo, de acuerdo a lo que dispone la Ley 11 de 1982 y el Decreto N° 71 de 1984, en la categoría III, grado IV, por lo cual le corresponde un salario de B/.700.00.

Los Hechos u Omisiones de la Presente Acción según el Actor

Las precitadas pretensiones las fundamenta el recurrente en los siguientes hechos:

1. Que el señor LUIS ABDIEL CORTÉS fue nombrado mediante la Acción de Personal N° 001200 el día 2 de agosto de 1993 en el Instituto de Alcantarillados Nacionales (en adelante IDAAN), en la Dirección de Ingeniería, departamento de Estudio y Diseño, con el título de Ingeniero Agrónomo.

2. Que mediante la Acción de Personal N° 01784 del 14 de octubre de 1996, suscrita por la Directora Ejecutiva del IDAAN se procedió a la destitución del señor CORTÉS, sin ni siquiera señalársele o indicársele un acto concreto, particular individual que fundamente dicha acción, como lo señala el Reglamento Interno del IDAAN.

3. Que al momento en que se dictó dicho acto, la Directora Ejecutiva del IDAAN omitió el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley N° 22 de 30 de enero de 1961 "por la cual se dictan disposiciones relativas a la prestación de servicios profesionales en Ciencias Agrícolas", que reconoce la estabilidad de los profesiones idóneos al servicio del estado; así como también omitió e incumplió la debida aplicación del procedimiento que establece el Reglamento Interno del IDAAN, que en su artículo 4, acápite a, reconoce la estabilidad de los funcionarios del IDAAN, y lo señalado en su artículo 41, acápite d, parágrafo 1 y 2.

4. Que el señor CORTÉS desde la fecha en que fue nombrado hasta la fecha de su destitución, ha ejercido su cargo público con sobrada solvencia moral, capacidad y responsabilidad, sin que jamás se le haya seguido causa o proceso disciplinario por incumplimiento de sus deberes, así como tampoco demostró incompetencia física, moral o técnica en el ejercicio de sus funciones como funcionario del Estado al servicio del IDAAN.

5. Que contra la resolución acusada, se interpusieron los recursos legales establecidos, los cuales le fueron resueltos desfavorablemente.

Informe de Conducta

De la acción en comento se le dio traslado a la entidad emisora del acto recurrido. Mediante informe de conducta que reposa a fs. 72-76, la funcionaria responsable de la actuación administrativa procedió a explicar su conducta en los siguientes términos:

Que el Ingeniero LUIS CORTÉS efectivamente fue destituido del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales mediante la Acción de Personal N° 1784-96 de fecha 18 de octubre de 1996, y contra la misma interpuso los recursos de Reconsideración y Apelación, y la Junta Directiva de la Institución resolvió mediante Resolución N° 23-97 confirmar en todas sus partes la Acción de Personal N° 1784-96 de 18 de octubre de 1996.

En segundo lugar, señala la entidad demandada que, el Ingeniero LUIS CORTÉS a pesar de estar nombrado como Ingeniero Agrónomo nunca ejerció las funciones propias de la profesión, por lo que no está protegido por la Ley especial que rige sobre la materia.

De las Disposiciones Acusadas y el Concepto de la Violación

La parte actora aduce como primera norma infringida el artículo 10 de la Ley que el acto cuya ilegalidad se demanda, es violatorio del artículo 10 de la Ley N° 22 de 30 de enero de 1961 "por la cual se dictan disposiciones relativas a la prestación de servicios profesionales en Ciencias Agrícolas", que dispone que los profesionales idóneos al servicio del Estado podrán ser destituidos por razones de incompetencia física, moral o técnica. Esta norma dispone también que es el Consejo Técnico Nacional de Agricultura quien hará las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los cargos, siendo dicho Consejo quien decidirá y solicitará lo conducente al Órgano Ejecutivo si se hubiere cometido infracción a dicha ley.

A juicio del recurrente, esta norma resulta infringida en el sentido de que la Directora Ejecutiva del IDAAN al momento de dictar el acto acusado omitió la aplicación de lo que la misma dispone, ya que al momento de destituirle del cargo no se fundamentó en las causales que establece esta disposición de la Ley 22 de 30 de enero de 1961.

También se aduce la transgresión de los artículos 4, acápite a), del Reglamento Interno del IDAAN; 41, literal d; 42; y del 45.

El texto de tales disposiciones en primer término alude a la estabilidad en el ejercicio del cargo de la cual gozan todos los funcionarios del Instituto, cuando así este contemplada en las disposiciones legales vigentes, salvo causa justa de remoción según lo que la Ley y el propio Reglamento disponen.

Igualmente, las precitadas normas reglamentarias se refieren a la aplicación de las medidas disciplinarias que corresponden a las faltas o violaciones de las reglas de la Institución. Además, señalan que la reincidencia de la falta cometida, una vez se duplique el período aplicable, dará lugar a la cesantía del cargo.

Según el demandante, la infracción a estas disposiciones se da en virtud de que la Directora Ejecutiva del IDAAN al momento en que dictó la Acción de Personal acusada de ilegal, omitió el cumplimiento de tales normas que reglamentan el ejercicio de su atribuciones establecidas en la Ley N° 98 de 29 de diciembre de 1961.

Lo anterior obecede, a juicio de la parte actora, al hecho de que en la Acción de Personal impugnada es notoria la ausencia de la figura de reincidencia de alguna falta cometida por el señor CORTÉS que ameritara la ejecución y emisión de dicha sanción administrativa (destitución). Aunado a que, en la aludida Acción de Personal es notoria la ausencia de la evaluación de la hoja de servicio de éste, la cual debió ser considerada para destituirle.

Criterio de la Procuradora de la Administración

La Procuradora de la Administración actuando en defensa del acto acusado,

en escrito legible a páginas 77-84 del expediente contencioso, solicitó que sean negadas las declaraciones impetradas por la parte actora, teniendo como base que las decisiones contenidas en el acto acusado de ilegal se encuentran ajustadas a derecho.

Las pretensiones de la defensora de los intereses de la administración se centran en el hecho de que la posición que ocupaba el señor CORTÉS dentro del organigrama del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, no forma parte de ningún tipo de carrera administrativa que le garantizara estabilidad en su posición, ya que el demandante no lo obtuvo por conducto de un concurso de méritos, por lo que el mismo es de libre nombramiento y remoción, más aún cuando el actor no ha demostrado lo contrario.

Finalmente, en cuanto a los pronunciamientos hechos por el apoderado legal del demandante, con relación a que su representado está amparado por la Ley 11 de 1982, la Procuradora manifiesta que, a pesar de que el señor **CORTEZ** es un Ingeniero Agrónomo, el mismo ejercía funciones que son total y completamente diferentes a la profesión que posee. De este modo, al haber desempeñado funciones ajenas a su especialidad, mal puede alegar que goza de los beneficios que consagra la citada ley.

Decisión de la Sala

Expuestos los argumentos de las partes involucradas en este proceso, la Sala procede a resolver el presente negocio.

Dado que las normas que se acusan infringidas se encuentran estrechamente vinculadas, procedemos a analizarlas conjuntamente.

A foja 18 del expediente administrativo consta que el señor LUIS ABDIEL CORTÉS fue nombrado mediante la Acción de Personal N° 01200 de 2 de agosto de 1993 en el Instituto de Alcantarillados Nacionales (IDAAN), en la Dirección de Ingeniería, en el Departamento de Estudio y Diseño, con el título de Ingeniero Agrónomo, Código 4080. Sin embargo, el mismo no ha demostrado que fue designado en dicha posición por concurso de méritos, por lo que el cargo que desempeñaba al momento en que le fuera aplicada la sanción administrativa (destitución), era de libre nombramiento y remoción, atendiendo a la facultad discrecional de la entidad nominadora.

Este Tribunal, en reiterados pronunciamientos, ha señalado que en la esfera de las destituciones de los servidores públicos, el acto que decida la remoción de quienes ocupen un cargo no amparado por ley especial, carrera administrativa que regule el ingreso por concurso de oposición o sistema de méritos, o que consagre la estabilidad relativa, es simplemente de libre nombramiento y remoción, producto del ejercicio de la facultad discrecional de la entidad nominadora. Al respecto confróntese: (Sentencias de 19 de junio de 1995, EDILIA DAMARIS FRANCO HERRERA -vs- MINISTERIO DE SALUD; de 20 de noviembre de 1995, MARÍA DEL CARMEN DE DÍAZ -vs-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, de 7 de diciembre de 1995, FÉLIX EDUARDO SITTON URETA -vs- DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL; Sentencia de 26 de agosto de 1996, EFRAÍN STAFF SÁNCHEZ -vs-DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO; Sentencia de 8 de enero de 1997, VANESA DE MEDINA -vs- DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA; Sentencia de 24 de abril de 1997, CARLOS A. AVILÉS T. -vs- MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Sentencia de 20 de agosto de 1997, WILLIAMS ADAMS SERRANO -vs- ALCALDÍA DE PANAMÁ).

En cuanto a las alegaciones de la parte actora en el sentido de que el señor **CORTÉS** por ser Ingeniero Agrónomo, gozaba de estabilidad en el cargo que ocupaba como funcionario público del IDAAN, en atención al artículo 10 de la Ley 22 de 1961, estimamos procedente indicarle al recurrente el criterio a seguir por esta Sala en Sentencias de 7 de marzo de 1995, DELIA MARÍA JIMÉNEZ -vs-INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ (IDIAP); de 23 de abril de 1996, RAFAEL LÓPEZ VARGAS -vs- INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO; de 26 de agosto de 1996, EFRAÍN STAFF SÁNCHEZ-vs-INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO; de 3 de diciembre de 1996, ALEXIS IGLESIAS -vs- INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ (IDIAP), en relación a lo preceptuado en dicha normativa.

En primer término, este Tribunal ha señalado que, lo dispuesto en el citado artículo no debe entenderse como limitante para que se proceda con el despido de un funcionario, caso específico de los ingenieros agrónomos que laboran en las entidades estatales, puesto que los mismos son ante todo un funcionario público que, como tal, debe estar supeditado a las disposiciones constitucionales que rigen para ellos en general.

En este orden de ideas, tenemos que el artículo 295, segundo párrafo, de la Constitución Nacional señala que "Los servidores públicos se regirán por el sistema de méritos, y la estabilidad en sus cargos estará condicionada a su competencia, lealtad, y moralidad en el servicio." Por su parte, el artículo 297, segundo párrafo de la misma excerta legal establece que "los nombramientos que recaigan en el personal de carrera se harán con base en el sistema de méritos".

En segundo lugar, la Sala también ha señalado que los ingenieros agrónomos que no acrediten haber ingresado al cargo por concurso de méritos, se rigen por el principio general de que es potestad discrecional de la entidad demandada el libre nombramiento y remoción de los funcionarios no amparados en cuanto a su estabilidad, por una ley especial, de carrera administrativa que regule el ingreso por concurso de oposición o sistema de méritos, o que consagre la estabilidad relativa.

Una ley de carrera administrativa sería la ley básica, preferente, y especial en materia de estabilidad en la función pública, tal como se deduce del artículo 300 de la Constitución Nacional, norma que instituye las carreras en los servicios conforme al principio de sistema de méritos.

Finalmente, en cuanto a la estabilidad que consagra el Reglamento Interno del IDAAN, la Sala considera procedente indicarle al recurrente que las carreras en los servicios públicos sólo pueden establecerse mediante ley conforme a los principio de sistema de méritos, y no por disposiciones reglamentarias con jerarquía inferior a la ley. (Artículo 300 de la Constitución Nacional).

Por lo expuesto, no prosperan los cargos de violación endilgados contra el acto acusado, y así procede declararlo.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL, la Acción de Personal N° 1784-96 de 18 de octubre de 1996, dictada por el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO ELÍAS PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE JAIME RUIZ MADRID, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 15 DE OCTUBRE DE 1992, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN; LA SENTENCIA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Julio Elías Pérez, en representación de **JAIME RUIZ MADRID** ha

promovido recurso de apelación contra el Auto dictado por el Magistrado Sustanciador de esta causa, el 3 de diciembre de 1997, mediante el cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta para que se declare nula por ilegal, la Nota de 15 de octubre de 1992, expedida por el Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación; la Sentencia de 22 de septiembre de 1997, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá; y para que se hagan otras declaraciones.

En dicho auto, el Magistrado Sustanciador consideró lo siguiente:

> "Se observa que el libelo presenta un error fundamental, que impide ha (sic) esta Superioridad conocer del mismo.
>
> Este hecho consiste en que el recurrente equivocó la vía en el presente caso; ya que salta a la vista que el acto acusado de ilegal es un acto jurisdiccional y no administrativo. Esto se evidencia de las constancias procesales del expediente pues el recurrente al ser destituido mediante nota de 15 de octubre de 1992, utilizó los recursos procedentes ante la vía jurisdiccional, obteniendo la Sentencia PJ-UNO de 6 de mayo de 1996, expedida por la Junta de Conciliación y Decisión, en la cual se declara injustificado el despido del señor Ruiz. Luego la sentencia de 22 de septiembre de 1997 emitida por el Tribunal Superior de Trabajo declara legal el despido del señor Jaime Ruiz Madrid". (Fs. 54-55).

El demandante fundamenta su alegato en que ha sido víctima de un despido injustificado, lo cual constituye un acto administrativo ejecutado por un servidor público; que la competencia privativa no excluye la jurisdicción administrativa sobre los actos de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones; que el acto administrativo impugnado (despido) se realizó sin cumplir las normas procedimentales del debido proceso y por extralimitación del funcionario en ejercicio de sus funciones y, que la Ley contencioso administrativa exige el agotamiento de la vía gubernativa, por tanto, la apelación ante la vía jurisdiccional cumple igual función que la vía gubernativa y, la presente demanda debe admitirse.

Evacuados los trámites de la Ley, el resto de los Magistrados que integran la Sala procede a resolver la alzada interpuesta, previa las siguientes consideraciones.

Del examen de autos se desprende que el señor JAIME RUIZ fue despedido el 15 de octubre de 1992, mediante carta de despido debidamente notificada ese mismo día. Como consecuencia de este acto, acudió ante la Junta de Conciliación y Decisión y obtuvo la Sentencia de 6 de mayo de 1996, la cual fue modificada, posteriormente, por el Tribunal Superior de Trabajo mediante la Sentencia de 22 de septiembre de 1997.

El acto impugnado en la presente demanda contencioso administrativa, tiene como fundamento jurídico la Ley 8 de 25 de febrero de 1975 que regula las relaciones de trabajo entre el IRHE y las personas que prestan servicios en dicha institución estatal.

De conformidad con el artículo 2 del Código de Trabajo los empleados públicos se rigen por las normas de la Carrera Administrativa, salvo en los casos en que se determine para ellos la aplicación de preceptos de las leyes laborales, como en el caso en estudio, en que por ministerio de la ley los conflictos laborales del IRHE pueden resolverse en la jurisdicción laboral.

En el expediente examinado, las resoluciones acusadas son decisiones jurisdiccionales, y por tanto, no son impugnables por la vía contencioso administrativa.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución dictada el 3 de diciembre de 1997

por el Magistrado Sustanciador, que no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Julio Elías Pérez, en representación de JAIME RUIZ MADRID, para que se declare nulas por ilegales, la Nota de 15 de octubre de 1992, expedida por el Director General del Instituto del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, y la Sentencia de 22 de septiembre de 1997 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS E. CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE EUSTACIO VALDÉS RUBIO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LA DECANA DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD PARA EL PERÍODO 1997-2000, DEL 17 DE JUNIO DE 1997, SUSCRITO POR EL JURADO DE ELECCIÓN DE DECANA DE DICHA FACULTAD. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos E. Carrillo, actuando en nombre y representación de **EUSTACIO VALDÉS RUBIO**, interpuso demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el **Acta de Proclamación de la Decana de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad para el período 1997-2000 de 17 de junio de 1997**, suscrito por el **Jurado de Elección de Decano de dicha Facultad**.

En el libelo de la demanda, el demandante solicitó la suspensión provisional de los efectos del Acta de Proclamación de la Mgtr. Aracelis de los Ríos de Isaza-Lay, como Decana de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá, para el período 1997-2000. Y la Sala, mediante auto de 19 de septiembre de 1997, suspendió provisionalmente los efectos del Acta de Proclamación de la Mgtr. Aracelis de los Ríos de Isaza-Lay, como Decana de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad para el período 1997-2000, de 17 de junio de 1997, con fundamento en la Resolución N° 1 de 14 de junio de 1997, enviada por la autoridad demandada y que consta de fojas 135 a 147, mediante la cual se resolvió la impugnación presentada por el profesor EUSTACIO VALDÉS RUBIO y de la que se desprende lo siguiente:

> "De la Resolución en mención se desprende que, en efecto, en dicha Elección de Decano hicieron uso del sufragio profesores que no cumplían con los requisitos, como los pertenecientes a la Extensión de Bocas del Toro, ya que según el artículo 42 de la Ley 11 de 1981, no debían votar en la Elección de Decano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, toda vez que dependen del Centro Regional Universitario o de la Administración Central Universitaria. Igualmente el Jurado de Elección aprobó que administrativos votaran como estudiantes, lo cual no permite el Reglamento General para Elección de Decano, Vice-Decano de las Facultades, Director y Sub-Director de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de Panamá (art. 5). También señala el Jurado de Elección, que la lista de votantes les fue remitida por la Secretaría General el día 10 de junio de 1997 a las 5:00 p. m., es decir el día anterior a la Elección, siendo verificada por ellos hasta altas horas de la noche, e instruyendo a los jurados, profesores y administrativos que pudieron asistir, el día 11 de

> junio en horas de la mañana, hecho que infringe el artículo 30 del Reglamento General para elección de Decano y Vice-Decano de Facultad que ordena que dicha lista de votantes debe remitirse al Jurado de Elecciones tres (3) días hábiles antes de la elección.
>
> A juicio de la Sala procede decretar la medida cautelar pedida porque son evidentes las violaciones al ordenamiento jurídico por el acto impugnado, y si ello es así, al demandante le asiste el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho. Además, la ejecución del acto impugnado podría causar perjuicios patrimoniales a la Universidad de Panamá y particularmente a la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, a consecuencia de desembolsos en concepto de sueldos de la Decana electa y trastornos administrativos, si eventualmente la Sala, luego de acopiados todos los medios probatorios del caso, declarase nula la Proclamación de Decana para el período 1997-2000, hecha el 17 de junio de 1997". (Fs. 154-156).

El 23 de septiembre de 1997, la firma forense Villalaz y Asociados actuando en nombre y representación de Aracelys de los Ríos de Isaza-Lay, quien fue proclamada Decana de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad mediante el acto impugnado fechado el 17 de junio de 1997, presentó escrito a esta Sala solicitando se le tuviera como parte interesada en los términos del artículo 30 de la Ley N° 33 de 1946, y que se levantara la suspensión provisional con fundamento en las siguientes consideraciones:

> "Quinto: La autorización para que votaran profesores de la Extensión de Bocas del Toro no provino del Jurado de Elecciones de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, sino que tanto las listas como la autorización las dio la Secretaria General de la Universidad de Panamá, mediante nota que entregó a dicho Jurado, facultado por el artículo 42 de la Ley No. 11 de 1981.
>
> Sexto: Que de acuerdo al listado de votantes de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, los administrativos que votaron como estudiantes el 11 de junio de 1997, eran estudiantes de dicha Facultad y no eran administrativos en la misma, sino que prestaban dichos servicios en otras dependencias de la Universidad de Panamá, estando matriculados en esa Facultad como tales.
>
> Séptimo: Que la lista de votantes de esa facultad les fue remitida al Jurado por la Secretaria General de la Universidad de Panamá el día 10 de junio de 1997 y de acuerdo al artículo 30 del Reglamento General para elección de Decano y Vice Decano de Facultad, a quien se le ordena enviar dicho listado es a la Secretaria General ..., por lo cual es esa instancia de la Universidad la que debe explicar qué factores o razones de fuerza mayor explican que lo remitieran un día antes de la elección." (fs. 162)

Alega además, que el acto impugnado es de carácter general (fs. 161) y no podía ser atacado mediante una demanda de plena jurisdicción, sino mediante una demanda de nulidad, y que el acto impugnado que debió demandarse fue el de las elecciones en vez del Acta de Proclamación, porque la validez del segundo acto depende de la validez del primero. (Fs. 163).

La petición especial de levantamiento de la suspensión provisional del acto impugnado, fue reiterada a través del escrito fechado el 26 de septiembre de 1997, en el cual se alega que el artículo 42 de la Ley 11 de 1981 autorizaba a la Secretaria General de la Universidad de Panamá a entregarle las listas de votación para Decano y Vice Decano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, a la Extensión de Bocas del Toro, porque las extensiones dependen de los Centros Regionales y de la Administración Central de la Universidad de Panamá; que la Extensión de Bocas del Toro ofrece carreras dependientes de la Administración Central y de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, por lo que no había objeción para que votaran, al igual que se hizo en las elecciones de Decano de la Facultad de Educación y Humanidades; que los

administrativos que votaron como estudiantes el 11 de junio de 1997 no eran más de 15 como para afectar el resultado de la votación, y prestaban sus servicios en otras dependencias de la Universidad donde no podían votar para decano, así que su relación con la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad era como estudiante; que las listas de votantes fueron remitidas al Jurado por la Secretaria General de la Universidad de Panamá el 3 de junio de 1997, y que luego de los ajustes y correcciones se entregaron las listas definitivas el 10 de junio, un día antes de las elecciones; que la falta de no haber entregado las listas 3 días antes de las elecciones, no vicia el proceso eleccionario porque el Reglamento no consagra esta falta como causal de nulidad; que al tomar posesión de su cargo de Decana la profesora Isaza-Lay encontró irregularidades administrativas en la Escuela de Administración de Empresas, donde era Director el demandante, que ha llevado a una investigación patrimonial y penal, y se teme que se aproveche la suspensión ordenada para desaparecer pruebas de la institución; y que entre las irregularidades detectadas están la creación de una serie de carreras y cambio de planes de estudios al margen de la ley, hecho que ha causado perjuicio a más de 2,500 estudiantes y casi 100 profesores que fueron contratados sin cumplir con la Ley y el Estatuto Universitario. (Fs. 172-175).

Una vez admitida la demanda mediante auto de 29 de septiembre de 1997 (fs. 176), se le envió copia de la demanda al Rector de la Universidad de Panamá para que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946 y se corrió traslado de la demanda a la Procuraduría de la Administración y a la firma forense Villalaz y Asociados. Consta en autos que fueron allegados al proceso el informe de conducta remitido por el Rector de la Universidad de Panamá de 2 de octubre de 1997 (fs. 178-180), la contestación de la demanda presentada por la firma Villalaz y Asociados en representación de Aracelys de los Ríos de Isaza-Lay (fs. 181-184) y el recurso de apelación de 27 de noviembre de 1997, interpuesto por la Procuraduría de la Administración contra el auto que admite la demanda contenciosa que nos ocupa (fs. 185-188).

El recurso de apelación presentado por la Procuraduría de la Administración fue resuelto el 24 de marzo de 1998, confirmando la resolución de 29 de septiembre de 1997 que admitió la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos E. Carrillo, en nombre y representación de EUSTACIO VALDÉS RUBIO, para que se declare nulo, por ilegal, el Acta de Proclamación de la Decana de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad para el período 1997-2000 de 17 de junio de 1997 (fs. 199-201).

El expediente fue traído al despacho de la Magistrada Sustanciadora para resolver la petición de levantamiento de la suspensión, el 24 de abril de 1998, y a ello proceden los Magistrados que integran la Sala.

El apoderado de la parte actora solicitó mediante escrito presentado el 29 de abril de 1998, que se rechace de plano la petición de levantamiento, con fundamento en que contra la resolución que suspende el acto impugnado no cabe recurso alguno (fs. 205-206). Sin embargo, observa la Sala que no se trata de un recurso porque no se está recurriendo contra la medida, sino de una nueva y especial petición para que se levante la suspensión y con la cual se aportan pruebas para probar los hechos en que se fundamenta la petición.

Las pruebas aportadas por la firma Villalaz y Asociados en representación de la profesora Isaza-Lay, reposan de fojas 166 a 170 del expediente contencioso, pero a juicio de la Sala no desvirtúan las presentadas por el demandante ni las remitidas por la autoridad demandada, por lo que lo pedido debe negarse.

Tal como lo expresó esta Corporación de Justicia mediante el auto de suspensión de 19 de septiembre de 1997, la pretensión del demandante tiene la apariencia de buen derecho o fomus boni iuris por lo que se suspendió, a petición suya, los efectos del acto impugnado.

Como se observa que la autoridad demandada no ha rendido informe de conducta debe también ordenarse que se le notifique la providencia de fojas 176.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley, NIEGA LA PETICIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos del Acta de Proclamación de la Decana de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad para el período 1997-2000 de 17 de junio de 1997, suscrito por el Jurado de Elección de Decano de dicha Facultad; y ORDENA que se notifique a la Presidenta del Jurado de Elección de Decano de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad la providencia de fojas 176 y que rinda el correspondiente informe de conducta en el término de cinco (5) días.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SOFÍA J. COHEN EN REPRESENTACIÓN DE JAIME FÁBREGA QUELQUEJEU, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° AR-OR-04-317 DE 14 DE ABRIL DE 1997, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS, ZONA ORIENTAL DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, Y LA RESOLUCIÓN N° 704-04 23 DE 14 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Sofía J. Cohen, actuando en nombre y representación de **JAIME FÁBREGA QUELQUEJEU**, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declaren nulas, por ilegales, las **Resoluciones N° AR-OR-04-317 de 14 de abril de 1997**, dictada por el **Administrador Regional de Aduanas**, **Zona Oriental**, **de la Provincia de Panamá** y la **Resolución N° 704-04-23 de 14 de enero de 1998**, dictada por el **Director General de Aduanas**.

En el libelo de la demanda, la parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 704-04-23 de 14 de enero de 1996, con fundamento en que el cumplimiento de esta orden, le ocasionaría un grave perjuicio económico. Señaló el recurrente además, que la medida de suspensión pedida es cónsona con el espíritu de la Ley N° 41 de 1 de julio de 1996, la cual dispone que no será necesario el pago de los impuestos debidos para recurrir en la vía contencioso administrativa. (fs. 27).

Mediante la Resolución N° 704-04-23 de 14 de enero de 1996, se declaró lo siguiente: que las mercancías amparadas en la declaración liquidación N° 017704 del 24 de marzo de 1997, es un Helicóptero Incompleto y que debe ser clasificado en la partida arancelaria 8802.11.00 con gravamen arancelario de 27.5% A. V.; y que el valor de la mercancía enunciada en la declaración liquidación N° 017704 de 24 de marzo de 1997, que es de B/.10,221.00, tal como lo expresa la factura N° 473760 de 15 de marzo de 1997 no es correcto, por lo que debe confeccionarse una declaración liquidación adicional en base a un valor F. O. B. de B/.23,999.40 y en base a este valor deben calcularse los impuestos de importación (fs. 8).

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición si, a su juicio, existe a favor del actor la apariencia de un buen derecho o fumus bonus iuris; y la medida cautelar pedida es necesaria para evitar un perjuicio notoriamente grave.

No obstante, el artículo 74 numeral 1 de esta misma Ley, dispone que no habrá lugar a la suspensión provisional del acto administrativo impugnado, en las acciones sobre monto, atribución o pago de impuestos, contribuciones o tasas, y

este es el caso que nos ocupa, en que se pide la suspensión del acto mediante el cual se señala que el valor sobre el que deberá liquidarse el impuesto es mayor que el declarado por el contribuyente; por tanto, este acto no puede ser suspendido.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 704-04-23 dictada el 14 de enero de 1998, por el Director General de Aduanas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. ROLANDO VILLALAZ EN REPRESENTACIÓN DE LUIS CARLOS CÓRDOBA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 05974 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA MINISTRA DE SALUD, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rolando Villalaz, en representación de **LUIS CARLOS CÓRDOBA**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la **Resolución N° 05974 de 7 de noviembre de 1996**, dictada por la **Ministra de Salud**, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Lo que se Demanda

El apoderado legal de la parte demandante solicita a esta Superioridad que se declare la ilegalidad de la precitada Resolución N° 05974 de 7 de noviembre de 1996, mediante la cual el Ministerio de Salud resolvió congelar el pago del tercer, cuarto y quinto sobresueldo del 2% bienal del 1° de octubre de 1999 al 20 de julio del año 2,005 al Doctor LUIS CARLOS CÓRDOBA, como Médico Especialista al servicio del Ministerio de Salud. Que consecuentemente, se le pague al galeno CÓRDOBA su tercer, cuarto y quinto sobresueldo en las fechas que le corresponden legítimamente y se anule cualquier obligación de resarcir ninguna suma de dinero al Tesoro Nacional.

Los Hechos u Omisiones de la Acción según el Actor

Los hechos en que el recurrente funda sus pretensiones son los siguientes:

1. Que el Dr. CÓRDOBA inició labores en el Ministerio de Salud desde el 18 de octubre de 1977, mediante Decreto Ministerial N° 183 de ese mismo año, contando con más de 19 años de laborar en esa institución del Estado de manera ininterrumpida.

2. Que mediante Decreto N° 109 de 5 de mayo de 1986, al Doctor CÓRDOBA se le nombró como Médico General II con un sueldo de B/.1.504.00 mensual.

3. Que mediante Decreto N° 360 de 17 de septiembre de 1991, el Ministerio de Salud atendiendo a los 14 años de laborar ininterrumpidamente por parte del Doctor CÓRDOBA lo asignó al cargo de Médico Especialista I, con un sueldo mensual de B/.1.800.00 y un sobresueldo del 6% bienal, a partir del mes de octubre de ese mismo año.

4. Que mediante Resolución N° 05974 de 7 de noviembre de 1996, el Ministerio de Salud pretende derogar el Decreto Ejecutivo 360 de 1991, desconociendo así derechos que le han sido otorgados al Doctor CÓRDOBA.

5. Que al congelar el pago de los bienales del Doctor CÓRDOBA se desconoce tanto la antigüedad como los derechos que el mismo ha adquirido como producto de ésta, al igual que se pretende hacer ver como que éste hubiera recibido sumas de dinero de manera indebida.

De la acción encausada se le dio traslado al ente demandado, a fin de que procediera a rendir un informe explicativo de su actuación en relación con la demanda en estudio.

Informe de Conducta de la Entidad Demandada

Mediante informe explicativo de conducta legible a fs. 18-19 del expediente contencioso, la institución demandada indicó a esta Superioridad lo que transcribimos a continuación:

> "PRIMERO: Que mediante Decreto Ejecutivo N° 360 de 17 de spetiembre de 1991 se asignó con el cargo de Médico Especialista I al Dr. LUIS C. CORDOBA.
>
> SEGUNDO: Que el DR. LUIS C. CORDOBA debió ser reclasificado como Médico Especialista de III Categoría, el Iro. de octubre de 1987, ya que obtuvo la autorización del Consejo Técnico de Salud para ejercer libremente la Especialidad en Medicina Física y Rehabilitación el 15 de septiembre de 1986, y a la vez inició labores o funciones como Médico Especialista a partir del 1° de octubre de 1987.
>
> TERCERO: Que para ser Médico Especialista de 3era. Categoría se requiere haber aprobado el Programa de Adiestramiento para Médicos Residentes, así como poseer el reconocimiento que concede el Consejo Técnico, tal como el mencionado galeno cumplió.
>
> CUARTO: Que al Dr. LUIS C. CORDOBA se le otorgaron indebidamente dos (2) sobresueldos en concepto de 6% bienal, tomando en cuenta la fecha de inicio de labores com Médico General y no como Médico Especialista, ya que a partir del 1° de octubre de 1987 ejercía las funciones como tal.
>
> QUINTO: Que de acuerdo al análisis del Departamento de Recursos Humanos y basado en las opiniones previa de la Procuraduría de la Administración (Adjunto) al Dr. LUIS C. CORDOBA realmente le correspondía el primer pago de sobresueldo de 6% bienal, a partir del 1° de octubre de 1995, como Médico Especialista y no el 1° de julio de 1990.
>
> Basado en lo anterior y demás antecedentes relativo al galeno, este despacho procedió a emitir la Resolución N° 05974 de 7 de noviembre de 1996, y basado en el mencionado Acto Administrativo por la opinión vertida de la Procuraduría de la Administración, meidnate Oficio N° C-22 de 20 de febrero de 1995".

De las Disposiciones Acusadas y el Concepto de la Infracción

La parte actora aduce infringido el artículo 3 del Código Civil que dispone que las leyes no tendrán efecto retroactivo en perjuicio de derechos adquiridos.

Al referirse al concepto de la violación, el demandante señala que el mismo ha sido infringido en forma directa, porque a pesar de que el Doctor CÓRDOBA tiene más de 19 años de laborar en el Ministerio de Salud, lo cual le ha permitido ir cambiando de categoría, de manera inexplicable y sin ningún sustento legal, se pretende mediante una resolución cuyo valor legal es jerárquicamente inferior a los Decretos Ministeriales y Ejecutivo, descender al galeno CÓRDOBA de categoría, congelándole el pago de los bienales que éste se había ganado como

parte de los derechos que fue adquiriendo por sus años de servicio y por los ascensos de categoría que la misma institución le concedió. (F. 11).

También se aduce infringido el artículo 11 de la Ley 31 de 2 de septiembre de 1977, que establece que "el tiempo de licencia con sueldo completo no se computará para los efectos de vacaciones. Sin embargo, aquellos servidores públicos amparados con leyes especiales que garantizan un sistema de escalafón y de sobresueldo gozarán de esos beneficios".

El recurrente manifiesta que este artículo ha sido violado en forma directa, ya que al Doctor CÓRDOBA se le otorgó licencia con sueldo mediante Acción de Personal 2302 del 5 de febrero de 1983, lo cual indica que ese tiempo debe computarse junto con el resto de los años que éste ha servido al Ministerio para efectos de su sobresueldo. (F. 12).

De igual forma, se estiman infringidos los artículos 9 y 12 del Decreto de Gabinete 16 de 1969, que en el orden citado disponen:

> "Artículo 9: ...
> Para ser Médico General de 2da. categoría se requiere haber sido Médico General de 3era. categoría durante tres (3) años. Para ser Médico General de 1era. categoría se requiere haber sido Médico General de 2da. categoría durante cuatro (4) años.
>
> A los Médicos Generales de 1era. categoría se les pagará en la misma forma y escala asignada a los Médicos especialistas".
>
> "Artículo 12: Los médicos especialistas, generales, residentes e internos y los odontólogos al servicio del Ministerio de Salud, devengarán un sueldo básico, sobresueldos y cualquier otra forma de pago o gratificación por rango, trabajo adicional o años de servicio, no menores a los que reciban los médicos y odontólogos correspondientes de la Caja de Seguro Social ..."

Al referirse al concepto de la infracción del artículo 9 del Decreto de Gabinete 16 de 1969, la parte actora indica que esta norma ha sido infringida en el concepto de violación directa, porque en 1986 el Doctor CÓRDOBA había sido nombrado como Médico General II con sueldo de B/.1.500.00. Luego, en 1991 mediante el Decreto 360 se le nombró como Médico Especialista I con un sueldo de B/.1.800.00; mientras que mediante la resolución impugnada se pretende desconocer dichas asignaciones, rebajando su sueldo a B/.1.200.00, que es lo que gana un Médico Especialista III, es decir, que se da una escala salarial inferior a la que el galeno CÓRDOBA recibió en 1986. (F. 13).

En lo que concierne a la transgresión del artículo 12 del Decreto de Gabinete 16 de 1969 el recurrente manifiesta que el mismo resulta infringido directamente, por omisión, al desconocerse el derecho del doctor CÓRDOBA en cuanto a sus años de servicio y los cambios de categoría que ha venido recibiendo.

Mediante la resolución atacada agrega el precitado, y sin haber sido derogados los Decretos que le concedieron derechos al médico CÓRDOBA, se pretende rebajarle su sueldo y cambiarle hacia una categoría inferior a la que ya se encontraba al momento de expedir la misma. (F. 13).

Otra norma que se aduce infringida es el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 360 de 17 de septiembre de 1991, por el cual se le concede al doctor CÓRDOBA, entre otros médicos, el pago del sobresueldo del 6% bienal a partir del 16 de octubre de 1991.

La disconformidad del recurrente consiste en que la resolución impugnada ha infringido esta norma en razón de que bajo el principio de legalidad, no puede una Resolución desconocer el contenido de un Decreto Ejecutivo que asigna un cargo y otorga un salario en atención a los Acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y la Comisión Negociadora en 1978, que establecen un aumento del 6% bienal sobre los salarios de los Médicos generales y especialistas de primera

categoría al servicio del Estado.

Aunado a que dicha disposición no ha sido derogada, por tanto no se pueden congelar los bienales a que tiene derecho el Doctor CÓRDOBA, ya que su antigüedad en el Ministerio y los Decretos expedidos, establecen que sus derechos como profesional de la salud han sido otorgados conforme a lo preceptuado por la ley. (F. 14).

Criterio de la Procuraduría de la Administración

La Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 549 de 12 de diciembre de 1996, solicitó a este Tribunal proceda a negar las declaraciones pedidas por el recurrente por considerar que las decisiones contenidas en el acto acusado de ilegal, se ajustan a derecho.

Primeramente, la Procuradora de la Administración fundamenta lo expuesto en el hecho de que el sobresueldo será suspendido momentáneamente, hasta que el médico se adecue a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico patrio, para que no se afecten fondos públicos, y que, por tanto, no se le está eliminando su derecho a devengar sobresueldo.

Que en segundo lugar, el artículo 11 de la Ley 31 de 1977 no resulta infringido por la resolución impugnada, en razón de que la licencia con sueldo que se le concedió al Dr. CÓRDOBA para efectuar sus estudios de especialización, no fue el motivo para congelarle el pago del sobresueldo. Sobre este punto la representante de los intereses de la Administración señala:

> "Recordemos que la Administración argumenta que al Dr. Córdoba se le computó el período que laboró como Médico General, para pagarle el sobresueldo en referencia, y que por ese motivo, se le pagó una suma de dinero en concepto de sobresueldo, en forma adelantada afectándose los fondos de la institución, los que tienen el carácter de fondos públicos.
>
> De allí la imperiosa necesidad de congelar los fondos, para que los pagos se compensaran, en el plazo establecido en la Resolución No. 05974 de 7 de noviembre de 1996; es decir desde el 20 de julio de 1999, hasta el 20 de julio del año 2005".

Sobre la infracción del artículo 9 del Decreto de Gabinete N° 16 de 22 de enero de 1969, la precitada funcionaria sostiene que contrario a lo manifestado por el demandante, el mismo no ha sido violado, porque la norma es clara al exigir que los Médicos Generales de primera categoría deben pasar previamente por la segunda y tercera categoría, respectivamente. Esto conlleva el ejercicio de la profesión en la posición de Médico General de tercera categoría, por el plazo de tres años; luego de segunda categoría, por un período de cuatro años, para acceder, finalmente, a la de primera categoría.

A juicio de la Procuradora, el demandante ha interpretado la norma en forma invertida, porque según él a los Médicos Especialistas se les paga igual salario que a los Médicos Generales, sin embargo, no es eso lo que dispone el artículo bajo análisis, ya que la norma indica que a los Médicos Generales se les pagará de la misma forma y escala que la asignada a los Médicos Especialistas, y no a la inversa, por lo que sus apreciaciones carecen de sustento jurídico.

La anterior interpretación, manifiesta la Procuradora, es igual para el artículo 12 del Decreto de Gabinete N° 16 de 1969 que se refiere a que los Médicos Especialistas, Médicos Generales, Residentes o Internos; así como los Odontólogos al servicio del Ministerio de Salud, devengarán un salario básico, sobresueldos y cualquier otra forma de pago o gratificación por rango, trabajo adicional o años de servicio, no menores a los que reciban los Médicos y Odontólogos correspondientes a la Caja de Seguro Social.

Finalmente, en cuanto a la violación del artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 360 de 1991, la Procuradora se opone a la disconformidad del recurrente, en virtud de que al doctor CÓRDOBA no se le ha eliminado su derecho al cobro del

sobresueldo del 6% bienal. El Ministerio de Salud únicamente procedió a congelarlo temporalmente, con la finalidad de compensar los pagos adelantados hasta que se equipare con la suma que en realidad le corresponde devengar.

Consideraciones de la Sala

Expuestos los argumentos de las partes involucradas en el proceso en estudio, la Sala procede a resolver la controversia.

De las constancias procesales aportadas al expediente gubernativo se desprenden los hechos siguientes:

De conformidad con el Análisis de Cambio de Categoría y 6% bienal del galeno LUIS C. CÓRDOBA tenemos que éste fue nombrado en el Ministerio de Salud mediante el Decreto N° 183 de 1977 como Médico General, e inició labores el 18 de octubre de 1977. (F. 2 del expediente gubernativo).

También consta que al Doctor CÓRDOBA le fue otorgada licencia con sueldo por estudio a partir del 1° de marzo de 1983 al 28 de febrero de 1986.

Posteriormente, a dicho galeno se le otorgó Idoneidad como Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación en fecha 15 de septiembre de 1986.

De igual manera, podemos apreciar que el precitado doctor CÓRDOBA inició labores como Médico Especialista I, con sueldo de B/.1800.00 a partir del 1° de octubre de 1987.

Esta última situación, a juicio de la Ministra de Salud, fue la que motivó la decisión cuya ilegalidad se acusa, puesto que el Doctor CÓRDOBA debió ser reclasificado como Médico Especialista de III Categoría el 1° de octubre de 1987, ya que venía ejerciendo como Médico General.

Por tal motivo, y en virtud de que al galeno CÓRDOBA se le otorgaron dos (2) sobresueldos del 6% bienal durante el período comprendido entre el 1° de julio de 1990 al 30 de septiembre de 1997, tomando en cuenta su inicio de labores como Médico General, y no como Especialista, se adoptó la decisión de congelar el pago del tercer, cuarto y quinto sobresueldo del 6% bienal a partir del 1° de octubre de 1999 al 20 de julio del 2,005. Esto se dio con el fin de resarcir la suma de B/.14.796.00 que el mismo había devengado anticipadamente en el período comprendido entre el 1° de julio de 1990 al 30 de septiembre de 1997.

De conformidad con los requisitos legales exigidos para las reclasificaciones y/o cambios de categorías de los Médicos Especialistas, recogidos tanto en el Decreto de Gabinete N° 16 de 22 de enero de 1969, "que reglamenta la carrera de Médicos Internos, Residentes, Especialistas y Odontólogos", como en el Acuerdo de Huelga del año 1978, existen tres categorías para los Médicos Especialistas. Para pasar de una categoría a otra se requiere entre otras exigencias legales, cumplir previamente un período de tiempo de prestación del servicio en cada una de ellas.

De esta manera, un Médico es Especialista de tercera categoría cuando ha acatado satisfactoriamente los requisitos exigidos en la Resolución N° 1 de 3 de abril de 1989, y ha cumplido y aprobado el Programa de Adiestramiento para Médicos Residentes, además de poseer el reconocimiento que concede el Consejo Técnico de Salud. La aprobación del Programa de Adiestramiento para Médicos Residentes se obtiene una vez se alcanza el nivel de Médico Residente de primera categoría.

En tanto que, un Médico es Especialista de Segunda Categoría luego de haber cumplido satisfactoriamente con el cargo de Médico Especialista de Tercera Categoría durante tres años. De igual manera, tenemos que para ser Médico Especialista de primera categoría se requiere haber ejercido tres años en la posición de médico especialista de segunda categoría.

Como viene expuesto, y contrario a las pretensiones del demandante para ser

Médico Especialista de primera categoría es indispensable haber ejercido la posición de Médico Especialista de segunda categoría, lo cual no ha sido comprobado por el recurrente.

Ha quedado demostrado que el congelamiento del pago del tercer, cuarto y quinto sobresueldo del 6% bienal al doctor CÓRDOBA a partir del 1° de octubre de 1999 al 20 de julio del año 2,005, se dio en razón a que el mismo inició labores como Médico Especialista I, con sueldo de B/.1800.00 desde el 1 de octubre de 1987, sin haber pasado por las primera y segunda categorías, cobrando anticipadamente, la suma de B/.14,796.00 en concepto de dos sobresueldos de 6% bienal del 1° de julio de 1990 al 30 de septiembre de 1997.

Por consiguiente, esta Superioridad estima que es perfectamente viable que el Ministerio de Salud procediese a emitir la resolución impugnada a los efectos de recuperar los emolumentos pagados en exceso al recurrente en concepto de dos (2) sobresueldos de 6% bienal, puesto que como hemos visto los mismos no le correspondían legalmente.

Aunado al hecho de que la adopción de tal medida, aparte del Decreto de Gabinete N° 16 de 22 de enero de 1969, y del Acuerdo de Huelga de 14 de agosto de 1978; también encuentra su asidero jurídico en la Ley N° 92 de 27 de noviembre de 1974, "Por la cual se adoptan medidas de protección al sueldo del empleado público", que en su artículo sexto faculta a las entidades públicas a recuperar las sumas pagadas en exceso, cuyo texto consideramos oportuno transcribir:

> "ARTICULO SEXTO: Las disposiciones de esta Ley no afectan los descuentos por inasistencia o suspensiones del trabajo, en virtud de sanción disciplinaria legalmente impuesta al empleado o funcionario público o **recuperación de sumas pagadas en exceso**." (Lo resaltado es de la Sala.)

Por las consideraciones expuestas no prosperan los cargos de ilegalidad aducidos por el recurrente.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 05974 de 7 de noviembre de 1996 dictada por la Ministra de Salud, por la cual decidió establecer cuenta por cobrar en contra del Doctor LUIS CARLOS CÓRDOBA por la suma de B/.14.796.00 que el mismo había devengado anticipadamente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LCDA. MAGDA O. CEBALLOS, EN REPRESENTACIÓN DE BALBINO MACÍAS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1,099 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Magda O. Ceballos, en representación de **BALBINO MACÍAS**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° 1,099 de 10 de septiembre de 1997**, dictada por el **Ministro de Educación**, y para que se hagan otras declaraciones.

Lo que se Demanda

El apoderado judicial de la parte actora solicita que se declare nula, por ilegal, la precitada Resolución N° 1,099 de 10 de septiembre de 1997 por la cual el Ministerio de Educación resolvió negar la solicitud formulada por el profesor BALBINO MACÍAS en torno al pago de salarios caídos relacionados con la Resolución N° 69 de 7 de julio 1995.

Que en consecuencia, se ordene al Ministro de Educación el pago de los salarios caídos dejados de percibir por el profesor MACÍAS desde enero de 1990 hasta diciembre de 1995, sobre la base de B/.400.00 mensuales.

Los Hechos u Omisiones de la Presente Acción

La representante judicial del demandante fundamenta sus pretensiones en los términos siguientes:

1. Que el señor MACÍAS fue nombrado profesor I-3 de Contabilidad, en el Colegio Richard Newman, el 11 de junio de 1974, donde gozaba de estabilidad.

2. Que sin que mediara causa justificada, el profesor MACÍAS fue destituido en enero de 1990 so pretexto de que había incurrido en abandono del cargo, mediante la Resolución N° 1 de 1990 y el Decreto N° 34 de 26 de marzo de 1991. Que contra dicha resolución, se presentó escrito de revisión solicitando la revocatoria de la orden impartida en su perjuicio.

3. Que el 7 de julio de 1995, mediante la Resolución N° 69 de 1995, acto acusado, el Ministro de Educación resolvió solicitar al Órgano Ejecutivo que dejara sin efecto el decreto por cual se destituyó al profesor MACÍAS y lo restituyó como educador I-3 de Contabilidad en el Colegio Richard Newman.

4. Que a pesar de que la destitución hecha al profesor MACÍAS careció de fundamento, el Ministro de Educación no ordenó el pago de salarios caídos correspondientes al período mediante el cual estuvo sin laborar, por lo que dicho educador solicitó se modificara la Resolución N° 69, con el fin de que se le pagaran los salarios caídos, lo que le fue negado mediante la Resolución N° 1099 de 10 de septiembre de 1997.

Informe de Conducta

El Ministro de Educación, por medio de la Nota DM/104-713 de 27 de noviembre de 1997, legible a fs. 15-16 del expediente contencioso, señaló que dicha instancia administrativa negó la solicitud de pago de salarios caídos sobre la base de que el profesor MACÍAS no presentó recurso de reconsideración contra la Resolución N° 69 de 7 de julio de 1995, por lo que no agotó la vía gubernativa, y mal puede entonces reclamar a casi dos años de ejecutoriada la decisión en cuestión, para que la misma sea modificada.

De las Disposiciones Acusadas y el Concepto de la Infracción

El recurrente aduce que la resolución acusada es violatoria del artículo 142 de la Ley 47 de 1946, modificada por la Ley 9 de 1994, que consagra el derecho que tiene un empleado del Ramo de Educación cuando considere que ha sido separado de su cargo sin causa justificativa o sin que se hayan cumplido los requisitos que consagra la Ley, a recurrir a los Tribunales. También dispone que dichos empleados continuarán devengando su sueldo hasta tanto se dicte el fallo definitivo, siempre que éste le favorezca.

A juicio del recurrente, la norma citada ha sido violada en forma directa por omisión, ya que la misma da derecho a los empleados del ramo de educación, separados injustamente de su cargo, a continuar devengando su sueldo hasta tanto el tribunal falle a su favor y sea restituido en su puesto.

Balbino Macías Vásquez, agrega el demandante, es un empleado del ramo de educación que adquirió estabilidad desde hace más de una década y fue despedido sin justa causa, tal como puede acreditarse con las resoluciones dictadas por el

Ministerio de Educación. A pesar de fue restituido en su puesto añade que la resolución de dicho ente, ignorando lo preceptuado en el artículo 142 de la Ley 47 de 1946, desconoció el derecho que le da la misma a cobrar los salarios caídos, desde enero de 1990 cuando fue destituido hasta diciembre de 1996.

Opinión de la Procuradora de la Administración

La Procuradora de la Administración, mediante Vista Fiscal que reposa a páginas 17-22 del expediente principal, se opuso a la pretensión del profesor MACÍAS principalmente, porque estima que al revisar el cuadernillo judicial se detecta que no existe ningún documento que confirme que el recurrente hubiese presentado cada tres meses algún escrito que señalara el derecho que tenía a reingresar al cargo, conforme lo estipulado en el artículo 142 de la Ley Orgánica de Educación.

Además, dice la Procuradora que "el profesor MACÍAS cuando acudió ante el Ministerio de Educación para que revisaran su Petición de reintegro, por despido injustificado, no expuso en su solicitud que tenía derecho al pago de salarios caídos; toda vez que al revisar el contenido de la Resoluciones N° 69 dictada el día 7 de julio de 1995, que lo restituía al cargo de Educador I-3, contabilidad, y la Resolución N° 1099 fechada 10 de septiembre de 1997, que contestaba su Solicitud de pago de salarios dejados de percibir vemos que dichos escritos no señalan que hizo su petición de pagos de salarios caídos, con su Solicitud de revisión de restitución al cargo que ocupaba en el Ministerio de Educación".

Decisión de la Sala

Expuestos los argumentos de las partes involucradas en el presente proceso, los Magistrados que integran la Sala Tercera proceden a resolver lo pertinente.

Como se puede apreciar, las pretensiones de la apoderada judicial del recurrente se centran en el hecho de que su representado -el profesor MACÍAS- tiene derecho a que el Ministerio de Educación le pague los salarios caídos dejados de percibir desde enero de 1990 (fecha en la que fue destituido), hasta diciembre de 1995 (fecha en la que fue restituido), sobre la base de B/.400.00 mensuales.

De las constancias procesales aportadas al proceso se observa que el educador MACÍAS fue destituido del cargo que desempeñaba en el Ministerio de Educación, por medio del Decreto N° 34 de 26 de marzo de 1991. (Cfr. f. 35).

El día 15 de septiembre de 1994, el profesor MACÍAS interpuso recurso de reconsideración ante el entonces Ministro de Educación, en el cual le solicitaba la reconsideración del caso. (Foja 9).

El Ministerio de Educación por medio de la Resolución N° 69 de 7 de julio de 1995, dejó sin efecto el Decreto N° 34 de 1991, y, a su vez, restituyó al profesor MACÍAS a su cargo como Educador I-3, Contabilidad. (Fs. 4-5).

Luego, mediante escrito presentado ante el departamento de Correspondencia y Archivo del Ministerio de Educación, el cual fue recibido el 17 de julio de 1997, transcurridos más de dos (2) años de su restitución, el profesor BALBINO MACÍAS presentó formal reclamo de sus salarios caídos, por cuanto la resolución N° 69 de 7 de julio de 1995, fue emitida de manera incompleta respecto a dicha pretensión. (F. 3).

Por medio de la Resolución 1099 de 10 de septiembre de 1997, el Ministro de Educación decidió negar la solicitud formulada por el profesor BALBINO MACÍAS. (Fs. 1-2).

A juicio de este Tribunal, la pretensión de la parte actora resulta extemporánea. La Sala estima que si el recurrente se consideraba afectado con el no pago de los salarios caídos, al momento en que se expidió la Resolución N° 69 de 7 de julio de 1995, por la cual se ordenó su restitución, debió entonces promover los medios de impugnación procedentes en la vía gubernativa, a fin de que el funcionario administrativo o su superior jerárquico pudiera aclarar, o

modificar su decisión, de conformidad con lo que dispone el artículo 33 de la Ley 135 de 1943.

El hecho de pretender obtener un pronunciamiento positivo o negativo por parte de la administración -transcurridos más de dos (2) años de expedido el acto que ordenó la restitución del profesor MACÍAS- resulta a todas luces improcedente, por cuanto infringe lo dispuesto en el artículo 42-b de la Ley 135 de 1943, que establece un término de prescripción de dos (2) meses para la interposición de las acciones contencioso- administrativas de plena jurisdicción ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En Resolución de 19 de agosto de 1993, en un caso similar en que se solicitaba a la Sala declarara nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo de la Directora del Instituto Bolívar, del pago de salarios caídos, vacaciones y décimo tercer mes dejados de pagar al educador OMAR G. LIGUAS GORDON, como consecuencia de la suspensión preventiva decretada por dicha funcionaria en Providencia de 23 de noviembre de 1990, se señaló lo siguiente:

> "... Del estudio de los hechos de la demanda se desprende que el demandante fue suspendido preventivamente del cargo de Contador en el Instituto Bolívar, mediante Resolución de 23 de noviembre de 1990 dictada por la Directora de ese centro de enseñanza.
>
> Mediante libelo presentado el 27 de abril de 1993, el demandante solicitó a la Directora del Instituto Bolívar su reintegro al cargo de Contador, el pago de sus salarios caídos desde la fecha de la suspensión preventiva hasta la fecha en que se hiciera efectivo su reintegro, y el pago de vacaciones vencidas y décimo tercer mes a que tiene derecho.
>
> En atención a esta solicitud, la Directora del Instituto Bolívar, mediante Providencia No. 2 de 14 de mayo de 1993, reintegró al demandante a su cargo en ese plantel, y dejó sin efecto la Providencia de 23 de noviembre de 1990. No obstante, no se pronunció expresamente sobre la solicitud de pago de los salarios caídos, vacaciones y décimo tercer mes, contenida en el libelo presentado el 27 de abril de 1993.
>
> Con vista en lo anterior, la parte actora ha solicitado que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita de la administración.
>
> Sin embargo, a juicio de la Magistrada Sustanciadora, en el presente caso, el hecho de que la Directora no se pronunciara expresamente sobre la solicitud de pago de los salarios caídos, vacaciones y décimo tercer mes, no constituye la negativa tácita por silencio administrativo a que se refiere el ordinal 3 del artículo 22 de la Ley 33 de 1946, ya que la Directora del Instituto Bolívar resolvió la solicitud contenida en el libelo presentada el 27 de abril de 1993, es decir hubo pronunciamiento de la Administración. Si el solicitante se sintió afectado con la resolución emitida debió entonces promover los medios de impugnación procedentes en la vía gubernativa, con el objeto de que el funcionario administrativo o su superior jerárquico adicionara o aclarara la resolución dictada.
>
> Como no hay silencio administrativo y no se ha acreditado el agotamiento de la vía gubernativa contra la Providencia No. 2 de 14 de mayo de 1993 que concede el reintegro solicitado, no puede dársele curso a la presente demanda, conforme lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946 ...".

En vista de que el recurrente omitió hacer uso de lo medios de impugnación dentro del término legal establecido en el artículo 21 de la Ley 33 de 1946, el vencimiento de ese término dio lugar a que el acto administrativo quedase ejecutoriado o en firme, tal como lo establece el artículo 1243 del Código Fiscal que señala lo siguiente:

> "Artículo 1243. Toda resolución u otro acto administrativo contra el cual no haya lugar a interponer recurso alguno administrativo o no se haya utilizado ninguno de los procedentes, quedará ejecutoriado". (El resaltado es de la Sala).

El objetivo de agotar la vía gubernativa consiste en que el administrado debe utilizar todos los medios de impugnación a su alcance y sólo cuando utilizados todos estos medios, no obtiene la satisfacción de su pretensión, puede iniciar su actuación ante la Sala Tercera de la Corte. Así es en el Derecho Contencioso Administrativo y el demandante no utilizó hasta el final todos los medios de impugnación en la vía gubernativa.

Este Tribunal considera que al no haberse agotado la vía gubernativa, en virtud de la exigencia contemplada en los artículos 25 y 22 de la Ley 33 de 1946, no debe darse viabilidad a la demanda en estudio.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN NO VIABLE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la Licenciada Magda O. Ceballos, en representación de BALBINO MACÍAS, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 1,099 de 10 de septiembre de 1997, dictada por el Ministro de Educación, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL AIZPURÚA EN REPRESENTACIÓN DE CHIRIQUÍ LAND COMPANY, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-74 DE 13 DE ENERO DE 1997, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Manuel Aizpurúa ha presentado demanda contenciosos administrativa de plena jurisdicción en representación de **CHIRIQUí LAND COMPANY**, para que se declare nulo, por ilegal, la **Resolución N° 213-74 de 13 de enero de 1997**, dictada por el **Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, del Ministerio de Hacienda y Tesoro** los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA ACCIÓN

El apoderado judicial de la parte actora Licenciado Manuel Aizpurúa, señala que la presente demanda tiene sus orígenes en el examen que el Departamento de Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos, practicó a los libros y documentos de contabilidad de la Chiriquí Land Company; una vez terminado el examen se expide la Resolución N° 213-74 de 13 de enero de 1997, en donde se condena a Chiriqui Land Company al pago de B/.195,843.55 en concepto de los impuestos por licencia comercial dejados de pagar por dicha corporación en los años de 1982 a 1993.

Contra la mencionada resolución el apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio, confirmándose en todas sus partes la Resolución N° 213-74 de 13 de enero de 1997.

Por los anteriores consideraciones el recurrente solicita ha esta superioridad la declaratoria de nulidad, por ilegal, de la Resolución N° 213-74, así como los actos confirmatorios contenidos en la Resolución N° 213-2029 y la Resolución N° 205-033; como consecuencia de esta declaración se declara que dicha sociedad Chiriqui Land Company no tiene la obligación de pagarla suma de B/.195,843.55 en concepto de impuesto por licencia comercial dejados de pagar en los años de 1982 a 1993.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

Por su parte la entidad demanda al solicitársele su informe explicativo de conducta, señaló lo siguiente:

> "Mediante Resolución N° 213-74 de 13 de enero de 1997 la Administración Regional de Ingresos resolvió exigir al contribuyente CHIRIQUI LAND COMPANY con Registro Unico de Contribuyente 39-466-5345, el pago de Impuesto de Licencia Comercial de los años 1982 a 1993.
>
> Mediante Resolución N° 213-2029 de 7 de mayo de 1997, la Administración Regional de Ingresos resolvió mantener, en todas sus partes, la resolución N° 213-74 de 13 de enero de 1997 ... sustentó su decisión en la auditoría realizada a la empresa Chiriqui Land Company donde se determinó que el contribuyente había pagado incorrectamente el impuesto sobre patentes o licencias Comerciales para los años de 1982 a 1993.
>
> Por otra parte, el contribuyente alegó que el impuesto sobre patentes o licencias comerciales sólo puede aplicarse en razón del valor de los activos de la CHIRIQUI LAND COMPANY, destinados a actividades que para ser realizados requieren de una licencia Comercial, perdiendo de vista que la propia ley 5 de 7 de enero de 1976, por la cual la Nación contrató con la United Brands y otras empresas afiliadas, establece la obligación de pagar el impuesto sobre patentes o licencias, de aplicación general (ver cláusula décima octava)
>
> ... el Decreto de Gabinete 90 de 25 de marzo de 1971 que analiza especialmente el artículo 1; llegamos a la conclusión que si una empresa no se dedica exclusivamente a la agricultura, si necesita licencia o Registro, redacción que mantiene el Decreto Ejecutivo 35 de 24 de mayo de 1996 que reglamenta la ley 25 de 26 de agosto de 1994 ...
>
> El artículo 1005 del Código fiscal preceptúa claramente que toda persona jurídica pagará el impuesto sobre la Licencia Comercial por el capital, a diferencia de las personas que lo pagan solamente sobre el capital invertido en los establecimientos que tengan. Esa norma esta vigente y no ha variado en años.
>
> Sin embargo, fue irrelevante e inconducente en el presente caso dilucidar si la actividad agrícola estaba excluida o no de la base impositiva para el cálculo del impuesto que nos ocupa, en virtud de que pudimos observar que de un capital sujeto a gravamen que oscila de 53 a 110 millones de balboas, únicamente se está gravado el máximo de 2 millones señalados en la ley, quedando una diferencia de 51 a 108 millones que puede contener holgadamente la actividad agrícola que invoca el apelante, máxime tomando en consideración que de las cuentas por pagar no se ha desglosado lo adeudado a Casa Matriz, que no es deducible".

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Se observa que la Procuradora de la Administración al expresar su opinión sobre la presente controversia, no defiende el acto administrativo acusado de ilegal, sino que esta de acuerdo con los argumentos vertidos por la parte actora,

así señaló:

> "Este despacho concuerda con lo expuesto por la parte actora, porque la norma es diáfana al indicar --en su literal (a-- que no necesitan licencia las personas jurídicas que se dedican a la agricultura ... por lo que si se produce la infracción alegada.
>
> La parte actora indica que la norma se ha infringido en concepto de indebida aplicación porque ese es un impuesto que pretende gravar actividades comerciales y explotaciones industriales, en ningún momento ha pretendido grabará actividades agrícolas ...
>
> Prohijamos el criterio esgrimido por la demandante, porque es cierto que el titulo X, del libro IV del Código Fiscal, se denomina "Del Impuesto sobre patentes Comerciales e Industriales"; sin que en el mismo se incluyan las actividades agrícolas, como el cultivo del guineo o banano como se conoce en otras latitudes.
>
> Siendo ello así no existe sustento jurídico para cobrarle a la demandante el impuesto de Licencias Comerciales. Este despacho observa que es obvio que la administración ha incurrido en un error, al pensar que puede aplicarse el impuesto de licencia Comerciales a la actividad agrícola que adelanta la Chiriqui Land Company, habida cuenta que son objeto de exoneración por indicarlo así el contrato.
>
> Es así como el impuesto de licencias comerciales no debe aplicarse,por razón de las exoneraciones contenidas en la cláusula invocada; de allí que el mismo no es viable y no es factible su aplicación, por lo que no es de obligatoria acatamiento por disponerlo así el Código Fiscal y la cláusula vigésima del contrato Ley suscrito entre la empresa demandante y el Estado, por lo que se infringe la cláusula bajo análisis".

En cuanto a los planteamientos vertidos por la Procuradora de la Administración, considera esta superioridad que no es función de dicha servidora, el defender los intereses del recurrente. La jurisprudencia y la ley señalan constantemente que la Procuradora de la Administración, dentro de las demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción, actúa en defensa del acto acusado. El artículo 348 del Código Judicial corrobora tal planteamiento cuando señala en el último párrafo del numeral 2 que la Procuradora de la Administración dentro de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción actuará en interés de la Ley, cuando en un proceso dos entidades autónomas o dos municipios o en general dos entidades estatales tengan intereses contrapuestos, situación que no es el presente caso.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Encontrándose el proceso en este estado los Magistradosque integran la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia.

La Dirección General de Ingresos de la Provincia de Panamá, con base a las facultades que le otorga la ley (artículo 719 del Código Fiscal y el artículo 12 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970), realizó un examen a los libros de contabilidad del contribuyente Chiriqui Land Company. El mencionado examen permitió determinar que la sociedad Chiriqui Land Company, para los años de 1982 a 1993, pagó incorrectamente el impuesto de Licencia Comercial, pues la empresa "no consideró como capital sujeto a gravamen el activo neto del cierre de los períodos fiscales". Razón por la cual se expide la Resolución N° 213-74 de 13 de enero de 1997, donde se condena a la Chiriqui Land Company al pago de B/.195,843.55 en concepto de impuesto por Licencia Comercial.

La Resoluciones N° 213-2029 de 7 de mayo de 1997 y la Resolución N° 205-033 de 9 de julio de 1997, confirman la obligación, por parte de Chiriqui Land Company, al pago de B/.195,843.55 en concepto de impuesto de Licencia comercial incorrectamente pagado. Una vez agotada la vía gubernativa el apoderado judicial de la parte actora presenta demanda contencioso administrativa de plena

jurisdicción con la finalidad que se declare nulo, por ilegal, la Resolución N° 213-74 de 13 de enero de 1997 y los actos confirmatorios contenidos en la Resolución N° 205-033 de 7 de mayo de 1997 y la Resolución N° 205-033 de 9 de julio de 1997, y como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos mencionados se declare que la Chiriqui Land Company, no está obligada al pago de las sumas contenida en la Resolución N° 213-74 de 13 de enero de 1997.

Con base a lo anteriormente expuesto el recurrente considera que el acto acusado de ilegal viola el artículo 1 del Decreto de Gabinete N° 90 de 1971, vigente para los años de 1982-1993, el ordinal 9 de la cláusula décimo octava del Contrato N° 3 entre la Nación y la Chiriqui Land Company, y los artículos 1004, 1005, 1008, 1009 del Código Fiscal.

Según el recurrente el artículo 1 del Decreto de Gabinete 90 de 1971, ha sido infringido por errónea interpretación así señala dicho artículo:

> "ARTICULO 1. Para ejercer el comercio o explotar cualquier Industria, se requiere la Licencia correspondiente, según la actividad a que se dedicará el solicitante, la cual será concedida por el Órgano Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Comercio e Industrias.
>
> El Director del Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias expedirá el Documento en que conste la Licencia concedida por el Órgano Ejecutivo.
>
> No necesitarán licencia las Personas Naturales o Jurídicas que se dediquen exclusivamente:
>
> a) a la agricultura, ganadería (cría, ceba o esquilmo de ganado), a la apicultura o avicultura;
>
> b) a la elaboración y venta de productos de artesanía nacional, siempre y cuando no se utilice el trabajo asalariado de terceros".

En cuanto al concepto de la violación señala el actor que la Administración Regional de Ingresos interpreta equivocadamente el mismo, pues a su juicio, dicho artículo hay que interpretarlo dentro de la hipótesis general de la norma que crea la obligación de obtener licencias par las actividades comerciales o la explotación de otras industrias pero no con respecto a las actividades agrícolas.

Considera esta superioridad,que el Decreto de Gabinete 70 de 1971, vigente para los años de 1982 a 1993, expresa claramente, que actividades necesitan la expedición de Licencia Comercial, señalando además que actividades no requieren de la misma. A lo que debemos interpretar que dicho impuesto se pagará sobre actividades que no sean producto de la agricultura, ganadería, avicultura, apicultura. Iguales planteamientos sostiene la ley que deroga el Decreto de Gabinete 70 de 1971, nos estamos refiriendo a la ley 25 de 28 de agosto de 1994, y el Decreto Ejecutivo 35 de 24 de mayo de 1996, que reglamenta la ley 25, señala en su artículo 2, que no requerirán licencia las personas naturales o jurídicas que se dediquen exclusivamente a las actividades del agro, tales como la agricultura, ganadería avicultura, acuicultura o agroforestería. Observa este Tribunal que la ley es clara cuando señala, que actividades comerciales no necesitan licencia comercial, entre estas se menciona a la agricultura. Es un hecho notorio que la Chiriqui Land Company, dedica la mayor parte de su actividad comercial a la siembra del banano, para su exportación, somos del criterio que el mencionado artículo 1 del Decreto de Gabinete 70 ha sido infringido pues se pretende gravar un impuesto sobre una actividad que específicamente esta excluida del pago de licencia comercial.

Igualmente expresa el demandante que se ha infringido por indebida aplicación, los artículos 1004 y 1005 del Código Fiscal. En cuanto al artículo 1004 el recurrente argumento: "... este es un impuesto que pretende gravar actividades comerciales y de exportaciones industrial; en ningún momento ha pretendido gravar actividades agrícolas, pecuarias apícolas o avícolas ..." "... Las licencias de Chiriqui Land Company se refieren a actividades comerciales

accesorias y, lógicamentedebe pagar este impuesto por los activos dedicados a estas actividades y no por los dedicados a la agricultura". Por otro lado en cuanto a la infracción del artículo 1005 considera el recurrente que el mismo, describe un procedimiento de cálculo que no puede exceder lo establecido en el artículo 1004 es decir "... a razón de un por ciento (1%) del capital de la empresa con un mínimo de diez balboas (B/.10.00) y un máximo de veinte mil balboas(B/.20,000.00)". Por consiguiente dicha disposiciones no se autoriza en ninguna de sus partes aplicar y calcular dicho impuesto sobre actividades distintas a las comerciales o industriales. Dichos artículos son del tenor siguiente:

> "ARTICULO 1004: A partir de 1985 el impuesto anual que han de causar las licencias a que se refiere el Decreto de Gabinete N° 90 del 25 de marzo de 1971 será el 1% del capital de la empresa, con un mínimo de B/.10.00 y un máximo de B/.20.000.00. Los contribuyentes que en los meses anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, hayan pagado el impuesto pagarán la diferencia correspondiente, sin recargo ni intereses, a más tardar el 30 de junio de 1985".
>
> "ARTÍCULO 1005: La persona natural que se dedique al comercio o a la industria pagará este impuesto por el capital de cada uno de los establecimientos que tenga, aún cuando se trate de sucursales de cualquiera de los establecimientos amparados por la Patente, y la persona jurídica lo pagará por el capital".

En lo que respecta a los argumentos expresados por el apoderado judicial de la parte actora, la Sala Tercera estima que se ha producido la violación que alega el recurrente. Esto lo señalamos en virtud de que el problema principal sobre el cual gira la presente acción es determinar si la sociedad Chiriqui Land Company, tiene la obligación de pagar el impuesto de licencia comercial sobre la totalidad de sus actividades o solamente sobre aquellas actividades para las cuales se requiere licencia comercial. Podemos observar que los artículos considerados como violados, lo que expresan es la cantidad mínima y máxima que el contribuyente debe pagar en razón de la licencia comercial o industrial y la forma como se paga dependiendo de si se trata de persona natural o jurídica y de la cantidad de sucursales que se tenga la empresa. Debemos dejar claro es que lo expresado en el Título X artículos 1004 al 1009 del Código Fiscal, se refieran únicamente al impuesto sobre patentes comerciales e industriales. Por lo que esta superioridad considera que se han aplicado indebidamente los artículos 1004 y 1005 pues como ya hemos expresado estos artículos explican la forma como se grava el impuesto sobre licencia comercial.

Por otro lado también se argumenta como infringido el ordinal 9 del contrato N° 3 entre la Nación y la Chiriqui Land Company aprobado mediante Ley N° 5 de 7 de enero de 1976, pues según el demandante se ha interpretado dicha cláusula erróneamente, así observa el recurrente que la Dirección General de Ingresos al analizar dicha norma "considera que establece la obligación de pagar el impuesto sobre patentes o licencias de aplicación general, queriendo con esta interpretación, justificar que el mismo pueda ser aplicado a actividades distintas a las gravadas con dicho impuesto ..." la interpretación es equivocada pues la exoneración allí contenida se refiere al impuesto sobre patentes o licencias de aplicacióngeneral, lo que indica que se trata de un impuesto tal como está regulado en la Ley no siendo extensible a actividades que no están gravadas con el mismo". Dicha cláusula es del tenor siguiente:

> "Cláusula decimoctava: La expresa estará exonerada de los impuestos y demás gravámenes que se señalan a continuación:
>
> ...
> 9. Cualquier tipo de gravamen sobre el capital, salvo el impuesto sobre patentes o licencias de aplicación general".

En cuanto a lo señalado por el actor, esta Superioridad tiene a bien señalar que la cláusula décimo octava del Contrato N° 3 contenido en la Ley 5 de enero de 1976, celebrado entre al Nación y la Chiriqui Land Company, establece ciertos derechos o privilegios consistente en la exoneración de algunos

impuestos. Puede observarse que en el numeral noveno, de la cláusula décimo octava, contiene una excepción, a estos privilegios, cuando señala que "salvo el impuesto sobre patentes o licencias de uso general", a lo que este Tribunal debe interpretar que Chiriqui Land Company esta liberado del pago de ciertos impuestos establecidos dentro de la cláusula décimo octava "salvo" el de patente o licencias, por lo que dicho impuesto debe ser pagado por la Chiriqui Land Company, siempre y cuando se realice dentro de los parámetros que establece la ley que regula la materia de Licencias o Patentes, nos estamos refiriendo al Decreto de Gabinete 70 de 1971, vigente para la época en que se dieron los hechos, la ley 25 de 26 de agosto de 1994, el Decreto de Ejecutivo 35 de 24 de mayo de 1996, y los artículo señalados en el Título X del Código Fiscal. Por lo expuesto coincidimos con los planteamientos del recurrente cuando señala que la Dirección de Ingresos ha dado una interpretación errónea a dicho artículo pues este solamente señala la obligación de pagar la licencia, la forma como esta se paga depende de lo señalado en la ley.

Por último el recurrente ha señalado como infringido los artículos 1008 y 1009 del Código Fiscal argumentando que ambos se han infringido por indebida aplicación. Así señaló el recurrente que la "... disposición señala claramente y en forma cónsona con el artículo 1004 del Código Fiscal que se refiere a establecimiento comerciales e industriales y no a otro tipo de actividades, por razón de que este impuesto no se aplica a actividades distintas a las señaladas". En lo que respecta al artículo 1009 el demandante señaló: "La disposición citada como violada contiene, en realidad, una indicación de que para efecto de este impuesto se considera capital, el activo neto al cierre del respectivo período fiscal, aclarando lógicamente que el activo neto es la diferencia entre activos y pasivos ... Siendo ésta una disposición de definiciones y procedimientos, la misma no puede tener un alcance que salga de los limites del artículo 1004 del Código fiscal o, dicho en otras palabras no puede aplicarse a capital o activos distintos a los destinados a actividades comercial." Estos artículo establecen lo siguiente:

> "Artículo 1008: La persona que adquiera un establecimiento comercial o industrial y obtenga la nueva patente del Ministerio del ramo podrá operar durante los meses que falten transcurrir del año en curso sin necesidad de pagar nuevo impuesto, si el tradente del establecimiento ya lo hubiese hecho efectivo.
>
> Si el tradente no hubiese pagado el impuesto, éste correrá a cargo del adquirente en su totalidad.
>
> Parrágrafo. El Ministerio de Hacienda y tesoro y la Dirección General de Ingresos respectivamente expedirán los certificados de honorabilidad y de paz y salvo a que se refiere la Ley 35 de 9 de diciembre de 1953, que modificó los artículos 12, 22, 24 y 26 de la ley 24 de 1941 reglamentaria del ejercicio del comercio, de la explotación de las industrias y prácticas de las profesiones y que se refieren alas solicitudes de patentes y su renovación, a la adquisición de un negocio de explotación, y a su cancelación.
>
> Articulo 1009: Para los efectos de este impuesto se considerará capital el activo neto al cierre del respectivo período fiscal.
>
> Se entiende por activo neto la diferencia que existe entre el activo total y el pasivo total, entendiéndose que no se incluirá en el pasivo total para propósitos de este impuesto las sumas".

Como puede observarse el primero de los artículos que se consideran infringidos señala la forma como se paga y adquiere una patente o licencia comercial; el segundo es un artículo de conceptos y definiciones sobre lo que es capital, activo neto y la forma como el contribuyente presenta su declaración jurada de impuesto. Ciertamente estos artículos no guardan relación con el fondo de la controversia, por lo que podemos señalar que dichos artículos se aplicaron indebidamente.

Sin embargo, es correcto enfatizar, que los artículos contenidos en el

Código Fiscal Titulo X "Del Impuesto sobre patentes comerciales e Industriales", son aplicables específicamente a aquellas personas naturales o jurídicas que desean ejercer el comercio o explotar alguna industria, para lo cual necesitan la expedición de patentes o licencias comerciales. Estas licencias se expiden siguiendo los parámetros establecidos en la Ley 25 de 26 de agosto de 1994 y el Decreto Ejecutivo 35 de 24 de mayo de 1996, en los cuales se establece claramente que actividades requieren licencia comercial, para mayor ilustración citamos el artículos pertinente:

> "ARTICULO 2: Para realizar actividades comerciales o industriales se requerirá licencia o registro, salvo los casos que expresamente establezca la ley. No requerirán licencia o registro las personas naturales o jurídicas que no se dediquen de manera ordinaria y habitualmente a ejercer el comercio y en especial aquellos que se dediquen exclusivamente a:
>
> 1. Actividades del agro, tales como la agricultura, ganadería, apicultura, avicultura, acuicultura o agroforestería". (Decreto Ejecutivo 35. Nota: el artículo 2 del la Ley 25 de 1994 se expresa en iguales términos).

En base a lo anteriormente expuesto esta Corporación de Justicia es del criterio que la sociedad Chiriquí Land Company, no esta obligada a pagar el impuesto por licencia comercial sobre la totalidad de las actividades que esta sociedad realiza. Esto lo señalamos en virtud de que el Decreto de Gabinete 70 de 1971, vigente en los años de 1983 a 1993 establecen textualmente cuales son las actividades que no requieren licencia comercial. Y como ya hemos señalado iguales planteamientos hace la Ley 25 de 26 de agosto de 1994, y el Decreto Ejecutivo 35 de 24 de mayo de 1996.

En este mismo sentido podemos señalar que el Contrato Ley N° 2 celebrado entre la Nación y la Chiriqui Land Company, establecen las actividades a las cuales se dedica dicha sociedad, señalándose en la cláusula tercera del mismo "además de la producción, empaque, transporte,explotación del banano y sus derivados, ... incluyendo entre otras actividades agrícolas, de ganadería, de lechería, recreativas, comerciales y de servicio". De lo que puede observarse que la Chiriqui Land Company dedica básicamente su producción al cultivo del banano, si bien es cierto esta sociedad realiza otras actividades tales como oleoductos, irrigación, drenajes, acueductos alcantarillados, ferrocarriles, vías de comunicación, teléfonos y telégrafo (cláusula quinta del Contrato N° 2). Este Tribunal considera que la sociedad Chiriquí Land Company debe pagar el impuesto por licencia comercial requerido para el ejercicio del comercio y la industria, tal como lo señala la ley. Sin embargo, estimamos que sobre aquellas actividades a las cuales la ley expresamente establece que no necesita licencia comercial no debe gravársele dicho impuesto.

En mérito de lo expuesto los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA:

1. Que es nulo, por ilegal el Resuelto N° 213-74 de 13 de enero de 1997, así como los actos confirmatorios; y

2. Como consecuencia de esta declaración la sociedad CHIRIQUÍ LAND COMPANY no está obligada al pago de la sumas contenidas en la resolución dictada por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. EDWIN ALBERTO MEDINA, EN REPRESENTACIÓN DE FRANCISCO BAZÁN ORTIZ PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADA POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Edwin Alberto Medina, en representación de **FRANCISCO BAZÁN ORTIZ**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° 1 de 12 de noviembre de 1996**, dictada por el **Jefe del Departamento de Planillas, del Ministerio de Educación**, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Lo que se Demanda

La parte demandante solicita a esta Superioridad declare la nulidad, por ilegal, de la prenunciada resolución N° 1 de 12 de noviembre de 1996, dictada por el Jefe del Departamento de Planillas, del Ministerio de Educación, mediante la cual se resolvió sancionar al señor BAZÁN ORTIZ por infractor de los literales c) y e) del artículo quinto del Decreto 618 de 8 de abril de 1952, y, que, a su vez, dispuso solicitar al Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación, la destitución del cargo que ocupaba como funcionario del Departamento de Planillas.

Consecuentemente, el recurrente solicita que se ordene su reintegro a su puesto, antes de la separación de su cargo, y que se le reconozcan los salarios caídos con efectos retroactivos desde el momento en que fue separado de su cargo.

Informe de Conducta

La entidad demandada mediante informe explicativo de conducta que corre a fs. 18-22 del expediente contencioso, se refirió a su actuación administrativa argumentando que la misma tiene su origen en el hecho de que el 11 de octubre de 1996 se detectó que el señor BAZÁN ORTIZ quien fungía como funcionario del Departamento de Planillas, había alterado tanto su número de cédula, como el del señor GILBERTO CORTEZ en documentos relativos a las órdenes de descuentos directos a favor de casas comerciales que se efectúan a través de las claves correspondientes de la Contraloría General.

Que al ordenarse la apertura de la investigación correspondiente, el señor BAZÁN aceptó haber efectuado las alteraciones en los citados documentos que correspondían a compromisos adquiridos con empresas particulares. Que el día 17 de octubre de 1996 se le formuló Pliego de Cargos por infracción de los literales c) y e) del artículo quinto del Decreto 618 de 1952, y que mediante Resolución N° 1 de 12 de noviembre de 1996 se resolvió solicitar al Ministerio de Educación la destitución del referido funcionario. Que la decisión solicitada se concretó a través del Decreto Ejecutivo N° 112 de 7 de julio de 1997 expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación.

Continúa expresando la entidad demandada que el demandante yerra cuando subjetivamente afirma que la acción ilícita consistente en la alteración de documentos oficiales llevada a cabo por el señor FRANCISCO BAZÁN se debe calificar como suministro de informes adulterados. Que el literal g) del artículo segundo del Decreto 618 de 9 de abril de 1952 hace referencia a la situación que se plantea cuando el funcionario a quien se requieren datos o informes consigna en sus respuestas información falsa o adulterada.

De las Disposiciones Acusadas y el Concepto de la Infracción

La parte actora estima que el acto cuya ilegalidad se demanda, es violatorio del literal g) del artículo segundo del Decreto N° 618 de 1952 que

establece que cuando se incurre en el suministro de informes falsos o adulterados, dicha conducta lleva aparejada la sanción de reprensión verbal.

A criterio del demandante, los funcionarios del Ministerio de Educación no aplicaron esta disposición puesto que el señor BAZÁN ORTIZ adulteró o alteró un número de su cédula y suministró el informe respectivo, con el objeto de evitar los descuentos que le hacía la Contraloría General de la República, y así poder tramitar un préstamo en una de las instituciones de crédito. Por ende, la sanción que le correspondía era una sanción verbal, por ser la primera vez que incurría en esa falta.

De igual manera, el recurrente considera violados los literales c) y e) del artículo segundo del Decreto N° 618 de 1952 que disponen que son causales de destitución para todos los miembros del Ramo de Educación, tanto la conducta comprobada que riña con la moralidad que debe observar un educador; como la violación comprobada de la ley Orgánica de Educación.

Según el demandante, la infracción a estas disposiciones se da en virtud de que las mismas son aplicables única y específicamente al funcionario que es educador y, no así, al funcionario administrativo. Siendo que el señor BAZÁN ORTIZ era funcionario administrativo, al mismo no se le podía aplicar dichas sanciones, puesto que en cuanto a las funciones, obligaciones, deberes y derechos, no son las mismas para los educadores y administrativos, ya que cada uno de ellos se desempeña en un rol diferente.

Criterio de la Procuradora de la Administración

Mediante Vista Fiscal N° 473 de 16 de octubre de 1997, legible a folios 23-35 del expediente principal, la Procuradora de la Administración solicitó que sean negadas las declaraciones impetradas por la parte actora, ya que no le asiste la razón en las mismas.

La Procuradora basa su pretensión fundamentalmente en el hecho de que aparte de que el señor BAZÁN incurrió en conducta incorrecta en el ejercicio de sus funciones, al alterar uno de los números de su cédula de identidad personal, con la finalidad que no le aparecieran los descuentos que le hacía la Contraloría General de la República, el cargo que el mismo venía desempeñando era un cargo de confianza adscrito directamente al Despacho de la máxima autoridad de ese Ministerio.

Por consiguiente, la defensora de los intereses de la Administración opina que la posición que ocupaba el demandante era netamente discrecional, pues las constancias procesales aportadas al caso bajo estudio y en el expediente administrativo, no reflejan que el señor Francisco Bazán participó en un concurso de méritos para optar al cargo, por lo que su puesto era de libre nombramiento y remoción.

Decisión de la Sala

Expuestos los argumentos de las partes involucradas en este proceso, la Sala procede a resolver el presente negocio.

Se pone de manifiesto el hecho de que al momento en que al señor FRANCISCO BAZÁN ORTIZ se le sancionó por infractor de los literales c y e del artículo quinto del Decreto 618 de 8 de abril de 1952, con la destitución del cargo que ocupaba,l a cual se hizo efectiva a través del Decreto Ejecutivo 112 de 7 de julio de 1997, no se encontraba amparado dentro de los parámetros de estabilidad consagrados en la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, modificada por la Ley 9 de 1994.

En copiosa jurisprudencia, esta Sala ha sido enfática en señalar que si bien en el Ministerio de Educación rige el principio de estabilidad laboral tanto para educadores como administrativos, de conformidad con los artículos 127 y ss. de la Ley 47 de 1946, esta estabilidad debe entenderse siempre y cuando se demuestre que dichos funcionarios hayan ingresado a dicho Ministerio por concurso de méritos, según se desprende de la normativa jurídica que regula el ingreso del

personal docente al Ministerio de Educación, normativa que también es de aplicación al personal administrativo. De lo contrario, los cargos que se ostenten son de libre nombramiento y remoción.

En el expediente administrativo consta que el señor BAZÁN ORTIZ fue nombrado como Oficinista de Planillas en el Departamento de Contabilidad del Ministerio de Educación mediante Decreto Ejecutivo N° 191 de 2 de julio de 1991. El mismo no ha demostrado que fue designado en dicha posición por concurso de méritos, por lo tanto, el cargo que desempeñaba al momento en que le fuera aplicada la sanción administrativa (destitución), era de libre nombramiento y remoción, atendiendo a la facultad discrecional de la entidad nominadora.

En cuanto a las alegaciones del recurrente en el sentido de que la conducta en que incurrió no ameritaba la sanción de destitución, sino que la sanción a aplicársele lo era la reprensión verbal, es de lugar precisar que por estar el mismo sujeto al principio de libre nombramiento y remoción, lo dispuesto en el Decreto N° 618 de 9 de abril de 1952, únicamente es aplicable al personal docente y administrativo del Ministerio de Educación que goza de estabilidad, es decir, que haya ingresado por concurso de méritos.

Este Tribunal, en reiterados pronunciamientos, ha señalado que en la esfera de las destituciones de los servidores públicos, el acto que decida la remoción de quienes ocupen un cargo no amparado por ley especial, carrera administrativa que regule el ingreso por concurso de oposición o sistema de méritos, o que consagre la estabilidad relativa, es simplemente de libre nombramiento y remoción, producto del ejercicio de la facultad discrecional de la entidad nominadora. Al respecto confróntese: (Sentencias de 19 de junio de 1995; EDILIA DAMARIS FRANCO HERRERA -vs- MINISTERIO DE SALUD, de 20 de noviembre de 1995; MARÍA DEL CARMEN DE DÍAZ -vs-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, de 7 de diciembre de 1995; FÉLIX EDUARDO SITTON URETA -vs- DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, Sentencia de 26 de agosto de 1996; EFRAÍN STAFF SÁNCHEZ-vs- DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO, Sentencia de 8 de enero de 1997; VANESA DE MEDINA -vs- DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA; Sentencia de 24 de abril de 1997, CARLOS A. AVILÉS T. -vs- MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Sentencia de 20 de agosto de 1997; WILLIAMS ADAMS SERRANO -vs-ALCALDÍA DE PANAMÁ).

Por lo expuesto, no prosperan los cargos de violación endilgados contra el acto acusado, y así procede declararlo.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 1 de 12 de noviembre de 1996, dictada por el Jefe del Departamento de Planillas, del Ministerio de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BERNAL & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO ENRIQUE NÚÑEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1997, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Bernal & Asociados, en nombre y representación de **OCTAVIO ENRIQUE NÚÑEZ**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal la **Nota de 31 de diciembre de 1997**, emitida por el **Director General de la Policía Técnica Judicial**, y para que se hagan otras declaraciones.

Junto al libelo de demanda, se evidencia dos solicitudes previas: la primera tiene por objetivo de que el Magistrado Sustanciador peticione al Ministerio Público, copia de documentos que a su vez fueron solicitadas a la Policía Técnica Judicial, y que se han negado a la fecha (21 de abril de 1998); y la segunda, es que se suspenda provisionalmente los efectos del acto administrativo acusado de ilegal (ver fojas 14 y 15 del expediente).

Sin embargo, antes de resolver sendas peticiones, el suscrito procede a examinar la demanda para verificar que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley, para que pueda ser admitida.

Observa el Ponente, que el libelo no se apega a las formalidades previstas en los artículos 43, 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, reformada por la Ley 33 de 1946.

Efectivamente, en primer lugar la parte actora no determina el representante del Director General de la Policía Técnica Judicial, quien emitió el acto impugnado. El artículo 43, numeral 1 dice:

> "Artículo 43. Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo contendrá:
>
> 1. La designación de las partes y de sus representantes;".

Esta Sala en innumerables ocasiones ha señalado que el Procurador de la Administración, es quien se erige como el representante judicial de la autoridad administrativa que profiere el acto controvertido, pues debe defender el acto por ministerio de la ley. El demandante omite la designación del funcionario del Ministerio Público, elemento importante, entre otros, para admitir la demanda.

Otro defecto que presenta la acción del demandante, concretizada en esta demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, es que no la acompaña con la copia autenticada del acto acusado de ilegal, es decir la Nota de 31 de diciembre de 1997 (presumimos que es la Resolución N° 81).

Los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943 dicen:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos".
>
> "Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda".

Si bien es cierto, como se indicó en párrafos anteriores, el actor peticiona al Sustanciador de esta demanda Contencioso Administrativa, que a su vez, éste pida al Ministerio Público documentos que le fueron negados por la Policía Técnica Judicial, esos documentos no han sido identificados en la solicitud, además de que no consta que el interesado haya llevado a cabo diligencias tendientes a conseguir el acto acusado de ilegal debidamente autenticado, con la constancia de su notificación.

A foja 4 del expediente, descansa una Nota de 6 de enero de 1998, la cual está dirigida al Director General de la Policía Técnica Judicial, y firmada por OCTAVIO NÚÑEZ, cuyo texto es el siguiente:

"Señor Director:
Mediante la presente, solicítole muy Respetuosamente, (sic) copia de la Resolución donde me nombran como miembro (sic) activo de Nuestra (sic) Institución.

La misma atiende a estoy gestionando (sic) para lograr la restitución al cargo que se me fue separado mediante resuelto N° 81 del año que antecede".

Como puede observarse, se desprende de la Nota, que lo que pretendía el recurrente era que se le facilitara la Resolución que lo nombraba miembro activo de la Policía Técnica Judicial. Esto confirma el hecho de que la parte demandante en ningún momento gestionó la autenticación de la Nota de despido de 31 de diciembre de 1997, o la obtención del original.

No está demás indicar, que el demandante no ha presentado prueba de que está amparado por la Ley de Carrera Administrativa, o que ingresó por concurso de mérito, y que su posición no es de libre nombramiento y remoción.

Por todo lo antes expuesto, y cumpliendo con el principio de economía procesal, no es procedente acceder a las solicitudes previas requeridas por el actor.

En consecuencia, quien suscribe, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, propuesta por la firma Bernal & Asociados en representación de OCTAVIO NÚÑEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA V. DE AYALA EN REPRESENTACIÓN DE ALCIBIADES NELSON SOLÍS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO ALCALDICIO N° 874 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADO POR LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Ana V. de Ayala, en representación de **ALCIBIADES NELSON SOLÍS**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el **Decreto Alcaldicio N° 874 de 29 de noviembre de 1996**, dictado por la **Alcaldesa del Distrito de Panamá**, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Lo que se Demanda

La parte actora solicita a esta Superioridad declare la nulidad, por ilegal, del prenunciado Decreto Alcaldicio N° 874 de 29 de noviembre de 1996, por el cual se le declaró insubsistente del cargo de Abogado I en la Dirección de Legal y Justicia del Municipio de Panamá.

Que, como consecuencia de la declaración anterior, se ordene su reintegro a su posición, y que se le reconozcan los salarios caídos dejados de percibir desde el momento en que se hizo efectiva su destitución hasta aquel en que se le reintegre a su cargo.

Los Hechos u Omisiones de la Presente Acción según el Actor

Las precitadas pretensiones las fundamenta el recurrente en los siguientes hechos:

1. Que el señor ALCIBIADES NELSON SOLÍS comenzó a trabajar en la Alcaldía de Panamá, como coordinador de gimnasios, en la Dirección de Recreación y Deporte a partir del 1° de octubre de 1990.

2. Que luego, el ex-funcionario SOLÍS fue designado como Abogado I de la Dirección de Legal y Justicia.

3. Que el día 2 de diciembre de 1996, por medio del Decreto Alcaldicio N° 874 de 29 de noviembre de 1996, se dieron por terminadas sus relaciones laborales con la Alcaldía de Panamá.

4. Que contra dicho acto administrativo se interpuso oportunamente, recurso de reconsideración el cual le fue resuelto desfavorablemente.

Informe de Conducta

De la acción en comento se le dio traslado a la entidad emisora del acto recurrido. Mediante la Nota N° 1642-S. J. que reposa a fs. 26-27, la funcionaria responsable de la actuación administrativa procedió a explicar su conducta indicando medularmente que, el Decreto N° 874 de 29 de noviembre de 1996, por el que se declaró insubsistente el nombramiento del señor ALCIBIADES SOLÍS, tuvo como asidero legal el ordinal 4 del artículo 45 de la Ley 106 de 1973, que faculta al Alcalde para nombrar y remover a los funcionarios municipales cuya designación no corresponda a otra autoridad.

De las Disposiciones Acusadas y el Concepto de la Violación

Según el recurrente el acto demandando infringe los artículos 197, 124, 126, 127 y 128 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, por la cual se crea la Carrera Administrativa. Estas disposiciones en su conjunto, básicamente se refieren a la derogación de todas aquellas normas que le sean contrarias, -a las causales de retiro del servidor público de la administración pública,- el procedimiento a seguir para proceder a la reducciones de fuerza del Estado (decretarse la destitución de los servidores públicos), con el consecuente orden de prelación de los mismos al momento de ser afectados con la adopción de tal medida.

La violación al artículo 197 de la Ley 9 de 1994, según el recurrente se da en el concepto de violación directa por omisión, ya que se le aplicó la causal de terminación de la relación de trabajo contenida en el artículo 98, literal d, del Reglamento Interno de la Alcaldía de Panamá, referente a la cesantía, la cual a la fecha de su destitución estaba derogada, por ser contraria a dicha ley.

La infracción al artículo 124 de la Ley 9 de 1994, a juicio del demandante, se da en el concepto de aplicación indebida, porque la reducción de fuerza que vendría a ser el equivalente de la cesantía (posición insubsistente), contenido en el Reglamento Interno de la Alcaldía de Panamá, fue la causal que se debió haber invocado y no la cesantía, por cuanto esta causal no existe en la Ley 9 de 1994, vigente.

En cuanto a la violación de los artículos 126 y 127 de la citada Ley 9 de 1994, dice la parte actora que se da en el concepto del quebrantamiento de las formalidades legales, ya que al momento de decretarse la destitución del mismo, no se cumplió con ninguno de los procedimientos establecidos en éstos.

Finalmente, en lo atinente a la transgresión del artículo 128 de la Ley 9 de 1994, también se estima violado en el concepto del quebrantamiento de las formalidades legales, dado que al realizarse su destitución, en ningún momento se tomó en cuenta el orden de prelación al cual hace referencia esta excerta legal, la cual trata de hacerle justicia a aquellos funcionarios que tengan que abandonar la administración pública por motivos de orden económico.

Este orden de prelación, agrega el recurrente que, en primer lugar toma en cuenta el concepto de antigüedad, por cuanto en la actualidad no hay funcionarios de Carrera Administrativa. Que al momento de su destitución el mismo se encontraba laborando en el Departamento de Tránsito de la Dirección de Legal y Justicia, como asistente y el resto de los asistentes que allí laboran tienen menos tiempo que él, de laborar en la Institución.

Criterio de la Procuradora de la Administración

La Procuradora de la Administración actuando en defensa del acto acusado, en escrito legible a páginas 28-35 del expediente contencioso, solicitó que sean negadas las declaraciones impetradas por la parte actora, en virtud de que las normas de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, que la parte actora invoca como violadas, no son de aplicación a la Alcaldía de Panamá, donde el ingreso a la Carrera Administrativa aún no se ha dado. Por consiguiente, estima la defensora de los intereses de la Administración que, en la actualidad no existe estabilidad en los cargos públicos, y por tanto, el señor SOLÍS era un funcionario de libre nombramiento y remoción.

Decisión de la Sala

Expuestos los argumentos de las partes involucradas en este proceso, la Sala procede a resolver el presente negocio.

La Sala observa que las pretensiones del recurrente tienen su asidero jurídico en disposiciones de la Ley 9 de 20 de junio de 1994 "Por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa".

Sobre el particular es necesario tener presente que, si bien es cierto, la Carrera Administrativa ha sido instituida en nuestro ordenamiento positivo mediante Ley 9 de 20 de junio de 1994, no se debe perder de vista el hecho de que el mismo conjunto de normas administrativas en su Título XI (contentiva de las disposiciones transitorias), establece claramente una sucesión paulatina y cronológica de situaciones, aspectos y requisitos que deben previamente cumplirse para efectos de que rija plenamente el texto aprobado relativo a dichas disposiciones.

Lo anterior significa que la Carrera Administrativa se encuentra en su fase de organización, para posteriormente ser implementada eficazmente, dentro de su ámbito de aplicación estatal.

De acuerdo con lo expuesto, y con base a lo estipulado en el artículo 198 de la Ley 9 de 1994, la incorporación de las instituciones estatales a la Carrera Administrativa es de carácter progresiva, mediante acuerdo del Consejo de Gabinete y conforme al cronograma contenido en dicho artículo. Además, del texto del artículo 198 en comento, se colige que a la fecha en que se dio la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del señor SOLÍS (29 de noviembre de 1996, f. 1 del expediente), y aún en la fecha en que se emite la presente sentencia, a la Alcaldía de Panamá no le rige el sistema de Carrera Administrativa contemplado en la Ley 9 de 1994.

Por las consideraciones vertidas, y, dado que el recurrente no ha demostrado que fue designado en dicha posición por concurso de méritos, el cargo que desempeñaba al momento en que le fuera aplicada la sanción administrativa (declaratoria de insubsistencia), era de libre nombramiento y remoción, atendiendo a la facultad discrecional de la entidad.

Este Tribunal, en reiterados pronunciamientos, ha señalado que en la esfera de las destituciones de los servidores públicos, el acto que decida la remoción de quienes ocupen un cargo no amparado por ley especial, carrera administrativa que regule el ingreso por concurso de oposición o sistema de méritos; es simplemente de libre nombramiento y remoción, producto del ejercicio de la facultad discrecional de la entidad nominadora. Al respecto confróntese:

(Sentencias de 19 de junio de 1995, EDILIA DAMARIS FRANCO HERRERA -vs- MINISTERIO DE SALUD; de 20 de noviembre de 1995, MARÍA DEL CARMEN DE DÍAZ -vs-

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, de 7 de diciembre de 1995, FÉLIX EDUARDO SITTON URETA -vs- DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL; Sentencia de 26 de agosto de 1996, EFRAÍN STAFF SÁNCHEZ -vs- DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO; Sentencia de 8 de enero de 1997, VANESA DE MEDINA -vs- DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA; Sentencia de 24 de abril de 1997, CARLOS A. AVILÉS T. -vs- MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Sentencia de 20 de agosto de 1997, WILLIAMS ADAMS SERRANO -vs- ALCALDÍA DE PANAMÁ.)

Por lo tanto, no proceden los cargos de ilegalidad impetrados sobre los artículos 197, 124, 126, 127 y 128 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa, por no ser aplicables.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL, el Decreto Alcaldicio N° 874 de 29 de noviembre de 1996, dictado por la Alcaldesa del Distrito de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE CONSORCIO DE JURISTAS, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SERGIO ARIEL RUIZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO DE PERSONAL N° 536 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La señora Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 64 fechada el 19 de febrero de 1998 (fs. 46-49), promovió y sustentó recurso de apelación contra la resolución dictada el 9 de enero de 1998 (fs. 21), por el Magistrado Sustanciador, mediante la cual se admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma forense Consorcio de Juristas, en nombre y representación del señor **SERGIO ARIEL RUIZ ALEMÁN**, para que se declare nulo, por ilegal, el **Resuelto de Personal N° 536 de 20 de noviembre de 1996**, dictado por el **Director General de Aeronáutica Civil** (fs. 11-13).

En opinión de la representante del Ministerio Público, esta demanda no debe admitirse porque:

1. No se acompañó copia autenticada del acto impugnado, Resuelto de Personal N° 536 fechado el 20 de noviembre de 1996, emitido por el Director General de Aeronáutica Civil, con la debida constancia de su notificación, publicación o ejecución, tal como lo exige el artículo 44 de la Ley N° 135 de 1943 (fs. 46); y

2. Porque la apoderada judicial de la parte demandante, tampoco acreditó que hizo todo lo posible para conseguir el acto acusado debidamente autenticado (fs. 47).

El recurso de apelación fue concedido el 26 de febrero de 1998 (fs. 50), y una vez vencido el término de tres (3) días sin que el opositor presentara sus objeciones, el resto de los Magistrados que conforman la Sala proceden a resolver la presente alzada.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley N° 135 de 1943, toda demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción debe acompañarse con copia autenticada del acto acusado en el cual debe aparecer la respectiva constancia de su notificación.

Sin embargo, en el presente caso, la parte actora no presentó copia autenticada del acto originario, sino que presentó copia autenticada de la Resolución N° 091-JD de 12 de agosto de 1997 (fs. 6-10), dictada por la Junta Directiva de Aeronáutica Civil, confirmatoria de la Resolución 071-AJ-DG de 16 de enero de 1997, dictada por el Director General de Aeronáutica Civil, confirmatoria, a su vez, del Resuelto N° 536 de 20 de noviembre de 1996, impugnado en esta demanda.

La omisión del actor es de vital importancia, porque la copia del acto originario impugnado debe estar autenticada, para que tenga valor probatorio, de acuerdo con el artículo 820 del Código Judicial.

Cabe observar además, que el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia y el petente prueba que gestionó la obtención de dicha copia. La jurisprudencia de la Sala ha expresado reiteradamente que para que el Magistrado haga uso de esta facultad el demandante debe pedirle que solicite dicha copia y demostrar que hizo las gestiones tendentes para obtenerla y que le fue negada.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, REVOCAN la resolución de fecha 9 de enero de 1998, y NO ADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma forense Consorcio de Juristas, actuando en nombre y representación del señor SERGIO ARIEL RUIZ ALEMÁN, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto de Personal N° 536 de 20 de noviembre de 1996, dictado por el Director General de Aeronáutica Civil.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ J. RIVERA EN REPRESENTACIÓN DE LA CHIRIQUÍ LAND COMPANY PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-953 DE 4 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS (PROV. DE PANAMÁ), LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ JAVIER RIVERA, en nombre y representación de **CHIRIQUÍ LAND COMPANY**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la **Resolución N° 213-953 de 4 de marzo de 1997**, dictada por la **Administración Regional de Ingresos (Provincia de Panamá)**, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

La parte demandante sustenta su pretensión aduciendo que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, como resultado del examen de

libros y documentos de contabilidad de la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, resolvió mediante Resolución N° 213-953 de 4 de marzo de 1997, exigir a dicha empresa el pago de B/.1,009,614.76 en concepto de impuestos de timbre, para los períodos correspondientes a los años 1992 a 1996. Que el razonamiento expresado por la Administración Regional de Ingresos, para expedir la Resolución en comento, se encuentra en los considerandos de la Resolución N° 213-953, en la cual se refleja que lo objetado por dicha Administración Regional, es la facturación por venta de bananos para los períodos fiscales 1992 a 1996. Que el artículo 967 del Código Fiscal, grava la expedición de una factura, o documento que haga las veces, en el cual conste una venta o traspaso, por lo que corresponde a la Administración Tributaria, establecer como presupuesto legal de esta Resolución, a qué facturas por venta del banano se refiere.

Continúa expresando la parte actora, que en la presente controversia se habla de omisión de pago de impuestos de timbres sobre la facturación por venta de banano, para los años 1992 a 1996, pero que no se ha traído al expediente las facturas de venta que constituyen el hecho generador del impuesto aludido, tal como lo consagra el artículo 967 del Código Fiscal.

También indica el interesado, que la Administración Regional de Ingresos reitera la hipótesis de incidencia del impuesto o hecho generador del tributo que a simple vista no se acredita en este caso. Que la hipótesis prevista en el artículo 967 ibídem no se encuentra tipificada en el expediente bajo estudio, que por ende, dentro del principio de la estricta legalidad que acoge nuestro ordenamiento constitucional, es a todas luces improcedente la pretensión del Administrador Regional de Ingresos de exigir el pago de este tributo a su representado.

Finalmente, que los datos obtenidos por la Administración Regional de Ingresos se basaron en los registros contables del contribuyente, elemento éste que no es idóneo para tipificar el hecho generador del impuesto de timbres establecido en el mencionado artículo 967, que a texto expreso se refiere a la factura de venta de bienes o servicios al crédito o al contado llevados a cabo dentro de una operación que surte sus efectos en el territorio Nacional. Que la Resolución N° 213-953 de 4 de marzo de 1997, dictada por el Administrador Regional de Ingresos (Provincia de Panamá), viola los artículos 585, 967, ordinal 27 del artículo 973, 431, 969, todos del Código Fiscal; ordinal 2 de la cláusula Décima Octava, cláusula Vigésima, cláusula Trigésima Segunda, todas del Contrato N° 3, aprobado mediante Ley N° 5 de 7 de enero de 1976; y artículo 976 del Código Civil.

Luego de admitida la demanda, el Magistrado Sustanciador procedió a solicitarle al Administrador Regional de Ingresos (Provincia de Panamá) rindiera informe de conducta en relación a la demanda incoada.

INFORME DE CONDUCTA

Mediante Nota N° 213-L-1654 de 16 de octubre de 1997, el Administrador Regional de Ingresos, Provincia de Panamá, rindió informe de conducta señalando que la auditoría realizada a la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY, demostró que la misma omitió el pago del Impuesto de Timbres sobre la documentación que amparaba la venta de banano para los años comprendidos 1992 a 1996. Que en la tramitación de la exportación de banano, la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY utilizaba para documentar esas operaciones comerciales un documento que denominaba liquidación de entrega de banano, en el que se hacía constar la cantidad de banano entregado, el precio o importe de venta, el nombre del comprador, etc. Que el referido documento constituía por su naturaleza una factura de venta, ya que el mismo contenía todos los elementos de una compra-venta que debió satisfacer el impuesto de timbres de acuerdo a lo señalado en el artículo 769 del Código Fiscal, en virtud de que surtió efectos jurídicos contractuales.

Prosigue el funcionario, que la factura comercial es un requisito aduanero insoslayable y fue contabilizado como venta en los libros del contribuyente, al tenor del inciso b) del artículo 967 del Código Fiscal. Que es aquí en donde se fundamenta el hecho de haber determinado el impuesto de timbre a pagar sobre la totalidad de las ventas registradas en los libros contables de la compañía.

Adicionalmente, que no existe señalamiento válido de ninguna disposición legal por parte del recurrente que fundamente que la Compañía está excenta del pago del Impuesto de Timbre, en los documentos que amparan sus ventas, ya que del artículo 967 ibídem, se infiere que la obligación jurídica de sastifacer el Impuesto de Timbre nace con la expedición del documento en el que consta un acto, contrato u obligación por suma mayor de B/.10.00, situación que se presenta en el caso de CHIRIQUÍ LAND COMPANY. Que en este sentido, esta empresa expidió documentos en los que hace constar sus ventas, haciendo los mismos las veces de facturas, cuya existencia está debidamente acreditada.

Que es necesario dejar claro que el Impuesto de Timbre recae exclusivamente sobre el documento en que la CHIRIQUÍ LAND COMPANY hace constar las ventas, independientemente del destino que se le de a la mercancía. Que si bien es cierto el artículo 585 del Código Fiscal establece que las exportaciones no causan impuesto alguno, salvo la plata, el oro, azúcar crudo, banano, etc, no significa que se excluyen los otros impuestos que se generan como parte de la actividad comercial del contribuyente, pues una cosa es gravar la expedición hacia el exterior de las mercancías mencionadas, con un impuesto a la exportación y la otra obligación que persiste de parte del contribuyente, llámase exportador, licencia, impuesto sobre la renta, timbres, o cualquier otro tributo que afecte el giro normal de la empresa.

Finalmente, que la Resolución N° 213-953 de 4 de marzo de 1997 viola directamente el inciso 2 de la cláusula Décima Octava del artículo 3 de la Ley 5 de 1976; que sin embargo la cláusula Vigésima Segunda del mismo artículo establece que la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY estará sujeta a los demás impuestos, gravámenes o tasas y otras contribuciones nacionales, que no sean de la naturaleza de aquellos enumerados en dicho Contrato, siempre y cuando se trate de gravámenes de aplicación general, el cual es el caso del Impuesto de Timbre.

De la demanda propuesta se le corrió traslado al Procurador de la Administración (Suplente), quien por medio de la Vista N° 481 de 29 de octubre de 1997, contestó el libelo.

CRITERIO DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

Efectivamente, el Procurador de la Administración (Suplente) al contestar la demanda, no se opuso a la pretensión de la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY, puesto que considera esencialmente que se ha verificado la doble tributación, ya que si se analiza el artículo 585 del Código Fiscal, se llega a la indubitable conclusión, que el legislador deseó establecer excepciones a la exoneración en el pago del impuesto a las exportaciones, al enumerar los productos que sí están sujetos a impuesto. Que aunado a lo anterior, es menester indicar que independientemente del Impuesto de Exportación que pueda causar el guineo o banano, no es factible la aplicación del Impuesto de Timbre. Que esto obedece a que el artículo 946 ibídem, es claro al indicar que el Impuesto de Timbre se hará efectivo por medio de papel sellado, de estampillas y boletos-timbres, los cuales se adherirán a los respectivos documentos.

También indica el Procurador, que la norma dice que toda persona natural o jurídica que esté obligada a cubrir el Impuesto de Timbre mediante estampillas, deberá adherirlas al momento de su expedición, al original o copia del documento que reposará en sus archivos, salvo que utilice el sistema de pago por declaración. Que la disposición hace referencia a documentos, y la Administración lo traduce como facturas, tal como lo indica la demandante, razón por la cual el Impuesto de Timbre es inaplicable a la documentación que contiene la transacción comercial a la que se dedica la empresa Chiriquí Land Company, porque la empresa no está obligada a la emisión de facturas.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

La primera norma que estima conculcada la parte demandante, es el artículo 585 del Código Fiscal, cuya parte pertinente dice lo siguiente:

"Artículo 585. La exportación no causará impuesto alguno, salvo de los siguientes productos:

1° ...
2° El guineo o banano, que estará sujeto al Impuesto de Exportación de sesenta centésimo de Balboa (B/.0.60) o su equivalente en $U. S., que será aplicado según la escala de descuento" ...

La infracción es sustentada aduciéndose que la norma ha sido violada de manera directa por comisión, ya que se pretende desconocer que la actividad de exportación, que lleva a cabo la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, no causará impuesto alguno. Que se pretende gravar al contribuyente por las exportacionesde banano retroactivamente para los períodos fiscales de los años 1992 a 1996, con el Impuesto de Timbre, a pesar de que la norma dispone expresamente que la actividad de exportación no está sujeta a tributo alguno, salvo el contemplado en el propio artículo 585 del Código Fiscal.

De acuerdo a la explicación vertida, estimamos que no le asiste la razón al recurrente, puesto que de la norma en comento no se desprende la interpretación que se hace en torno a la aplicación o no del Impuesto de Timbre. El hecho de que las exportaciones estén exentas de pagar impuesto, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 585 Ibídem, salvo la exportación de guineo o banano, esto no significa que el mandato aludido se refiera a que esa exoneración tributaria incluya otros impuestos inherentes a gestiones comerciales distintas a la exportación. Al contrario, el hecho imponible gravable es distinto, por lo que en el pago del Impuesto de Exportación, no se entiende que en el mismo está incluido el Impuesto de Timbre que habla el artículo 967 del mismo Cuerpo Legal.

El hecho imponible, es el objeto material del tributo, es decir lo que se grava, y en este sentido manifiestan PÉREZ DE AYALA y GONZÁLEZ, "es la situación de hecho o elemento de la realidad social tomado en consideración por la norma para configurar cada tributo" (PÉREZ DE AYALA, José Luis y GONZÁLEZ, Eusebio. Curso de Derecho Tributario Tomo I. 6ª Edición. Editorial De Derecho Financiero/Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid, 1991. Pág. 212).

La definición anterior, confirma lo manifestado en los párrafos que anteceden, de que el Impuesto de Timbre no está relacionado con el Impuesto de Exportación, dado que se trata de objetos gravables distintos, esto es, que el hecho generador del impuesto consiste, en este caso en la factura.

El Contrato N° 3 aprobado por la Ley N° 5 de 1976, el cual concede autorizaciones al Órgano Ejecutivo para que celebre a nombre de la Nación contratos con CHIRIQUÍ LAND COMPANY, entre otras empresas, prevé claramente en la cláusula Décima Octava, de cuáles impuestos está exonerada la empresa precitada a pagar, y en ninguno de sus puntos habla del Impuesto de Timbre. La exoneración de un impuesto debe estar contemplado claramente en la Ley y si la propia Ley es ambigua al respecto, esta situación no está sujeta a interpretaciones convenientes por parte de los contribuyentes. Por ello no prospera el cargo impetrado.

Otra disposición que se considera violentada es el artículo 967 del Código Fiscal, que dice:

"Artículo 967. Llevarán estampillas por valor de diez centésimos de balboa (B/.0.10)

1. Los giros a plazos librados en la República y pagaderos en la misma por cada cien balboas B/.-100.00) o fracción de ciento;

2. Todo documento en que conste un acto, contrato u obligación por suma mayor de diez balboas B/.-10.00), que no tenga impuesto especial en este Capítulo y verse sobre asunto o negocio sujeto a la jurisdicción de la República, por cada cien balboas (B/.100.00) o fracción de ciento del valor expresado en el documento.

El timbre denominado "Soldado de la Independencia" a que se refieren

> los Parágrafos 1°, 2°, y 3° del artículo anterior, debe usarse, de conformidad con los mismos, en los actos, documentos y objetos que allí se especifican, y en adición a las otras estampillas y boletos-timbres establecidos en los Capítulos III y IV de este Título.
>
> Parágrafo: Conforme a lo aquí establecido, llevarán estampillas cualesquiera de los siguientes documentos que sean por suma mayor de diez balboas (B/.-10.00) y que versen sobre asuntos o negocios sujetos a la jurisdicción fiscal de la República, a menos que se expidan en virtud de una operación que no produzca renta de fuente panameña, según define el Artículo 694 de este Código:
>
> a) ...
> b) Toda factura de venta de bienes o servicios al contado o al crédito, al por mayor o por menor. La factura de venta al por mayor, al contado o al crédito, llevará también el timbre de Jubilados y Pensionados, a que se refiere el parágrafo 1° del artículo 966 de este Código" ...

La transgresión esgrimida se fundamenta en el hecho de que el Ministerio de Hacienda y Tesoro, violó por errónea interpretación el Artículo 967 del Código Fiscal, que grava la expedición de una factura, y que como ha quedado demostrado en la vía gubernativa, y en el presente negocio, la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY, para los años 1992 a 1996, no expidió factura alguna para las exportaciones de su producto, pues no esta jurídicamente obligada a ello, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, con sus respectivas notificaciones.

Contrario a lo vertido por el recurrente, el Administrador Regional de Ingreso, Provincia de Panamá, señaló en su informe de conducta, que la CHIRIQUÍ LAND COMPANY plasma las ventas para el exterior en un documento, haciendo las veces de factura y cuya existencia está debidamente comprobada, pues la exportación de la fruta sería imposible sin la expedición de estos documentos. En este orden de ideas la propia parte actora acepta la posición de que no se trata de una factura en todo el sentido de la palabra, y que de acuerdo al artículo 967 del Código Fiscal, lo que se grava es el documento en comento y no otro (ver foja 44). Sin embargo, la empresa demandante no ha llevado a cabo esfuerzos para demostrar que efectivamente no se trata de una factura o que el "el documento" no llena los requisitos para considerarlo como tal, pues sólo se circunscribe a refutar las aseveraciones del Administrador Regional sin aportar prueba al respecto. Gustavo PENAGOS, dice en relación a la carga de la prueba "en las actuaciones administrativas se debe observar los principios de la carga de la prueba, la cual corresponde a los acusadores" (PENAGOS, Gustavo. Vía Gubernativa. Segunda Edición. Ediciones Ciencia y Derecho. Bogotá, Colombia, 1995. Pág. 14). En este proceso la parte acusadora es CHIRIQUÍ LAND COMPANY.

Por otro lado, en lo referente a si es una factura o no, y que lo consta en ella es la operación de venta al exterior, esta Sala en Sentencia de 12 de febrero de 1981, señaló lo siguiente, en relación a la intrascendencia de la denominación "factura" para la determinación del Impuesto de Timbre. Veamos que dijo esta Superioridad:

> "Por consiguiente, no es de trascendencia jurídica la denominación que se utiliza en el documento o factura que se expida y en donde conste tal servicio, ya que lo que genera el impuesto es la función que cumpla, ésto es, que sirva como cobro de los servicios prestados y basándose en ello se contabilice en los libros de la empresa".
>
> Por todo esto no se acepta el cargo impetrado.

Otra disposición , que según la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, ha sido transgredida por la Resolución 213-953 de 4 de marzo de 1997 y actos confirmatorios es el ordinal 27 del artículo 973 del Código Fiscal, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 973. No causarán impuesto:

...
27° Todo lo exceptuado por leyes especiales".

Que el numeral 27 del Artículo 973 del Código Fiscal, ha sido violado en forma directa por omisión, ya que la Administración Regional de Ingresos, ha dejado aplicar la norma supra citada, la cual dice claramente que no causará Impuesto de Timbre lo exceptuado en las leyes especiales, y que en el presente caso la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, a pesar de estar exonerado de pagar cualquier tributo en cualesquiera de las etapas de las actividades bananeras, tal como lo preveen la Cláusula Décimo Octava del Contrato Ley. Que por otra parte, conforme a la Cláusula Vigésima del referido Contrato, sólo tiene que pagar Impuesto de Exportación, sobre las exportaciones de banano.

No coincidimos con el argumento esgrimido por la empresa demandante, pues ya hemos señalado anteriormente que CHIRIQUÍ LAND COMPANY, exportadora de banano, no sólo está obligada por ley a pagar el Impuesto de Exportación que prevé el artículo 585 del Código Fiscal, sino también el Impuesto de Timbre. No es cierto lo manifestado por el interesado, de que el numeral 27 del artículo 973 del Código Fiscal bajo estudio, limita el pago de Impuesto de Timbre de manera "taxativa", tal como lo quiere hacer ver. La única limitación que consagra la norma, es que las leyes especiales pueden exceptuar el pago de impuesto, y este no es el caso de la CHIRIQUÍ LAND COMPANY.

En lo que respecta a las Cláusulas Décimo Octava y Vigésima del Contrato N° 3, aprobado mediante Ley N° 5 de 7 de enero de 1976, que de igual manera se señalan como vulnerados, es importante puntualizar que estas estipulaciones, no hacen alusión al no pago de Impuestos de Timbre por parte de la CHIRIQUÍ LAND COMPANY. La Cláusula Décimo Octava, específicamente el numeral 2 (fue resaltado por el propio demandante), señala que la Empresa está exonerada de cualquier tipo de gravamen sobre actividades bananeras en cualquiera de sus fases, a excepción de lo que estipula el Contrato, a lo que le indicamos al recurrente, que las fases de la actividad bananera van desde que se siembra hasta la salida del banano del país, pero estas actividades no tienen nada que ver con el Impuesto de Timbre que habla el artículo 967 del Código Fiscal. Este Impuesto de Timbre no está dirigido a ninguna de las actividades antes mencionadas, sino a la documentación que plasma descripción del producto, precio etc., el cual podría consistir también en una factura. Además, es palpable el hecho de que la Cláusula comentada, en el numeral 2 ni siquiera incluye la exportación como fase de la actividad bananera, pues como ya hemos visto, la misma ha sido gravada de acuerdo al artículo 585 ibídem y la Cláusula Vigésima del Contrato en referencia. Como ya comentamos en líneas anteriores, la propia cláusula Décima Octava es clara al establecer de qué impuesto está exonerada pagar CHIRIQUÍ LAND COMPANY.

En relación a la cláusula Vigésima, ella sólo reitera que la exportación del banano estará sujeta a un impuesto. Por todo lo expresado no prospera la acusación impetrada, lo que se hace extensivo a los señalamientos de violación contra las cláusulas Décimo Octava, numeral 2 y Vigésima del Contrato N° 3, aprobado por la Ley N° 5 de 7 de enero de 1976.

El numeral 2 del artículo 431 del Código Fiscal, según CHIRIQUÍ LAND COMPANY, igualmente ha sido violado por la Resolución N° 213-953 de 4 de marzo de 1997 y actos confirmatorios. Esta excerta legal dice:

"Artículo 431. Las operaciones comerciales sujetas al régimen aduanero se clasifican, para los efectos fiscales, de la siguiente manera:

1 ...
2. Exportación, que consiste en expedir legalmente productos de la República con destino a países extranjeros".

Manifiesta el demandante que la sociedad CHIRIQUÍ LAND COMPANY desarrolla la actividad de producción de bananos exclusivamente para destinar la totalidad de su producción a la exportación. Que esta norma ha sido violada directamente por omisión, ya que las operaciones sujetas al Régimen Aduanero, tienen una regulación especial, distinta a las que regulan ventas de mercaderías dentro del

mercado nacional. Que la Administración Tributaria, dejó de aplicar el numeral 2 del Artículo 431 del Código Fiscal, el cual califica la actividad de la parte actora, y que es exclusivamente la exportación de banano, como una actividad sujeta al régimen aduanero.

A nuestro parecer, la disposición arriba descrita, no ha sido quebrantada por las Resoluciones proferidas por la Administración Regional de Ingresos, pues no se está discutiendo en este proceso si la actividad ejercida por la CHIRIQUÍ LAND COMPANY es de exportación o no, y si es parte del régimen aduanero, lo que se debate es una supuesta doble imposición de tributo. Por tanto no prospera el cargo endilgado.

El Parágrafo del Artículo 969 del Código Fiscal, también es señalado como transgredido, y esta disposición es del tenor siguiente:

> "Artículo 969. Llevarán estampillas por valor de cincuenta centésimos de balboas (B/.0.50), cada juego de ejemplares de los conocimientos de embarques, de las facturas consulares y de las declaraciones relativas a mercancías, cuando estos documentos se otorguen en la República para puertos y aeropuertos extranjeros.
> ...
> Parágrafo 1° Llevará estampilla de un balboa (B/.-1.00) cada ejemplar de declaración-liquidación de aduana de valor superior a diez balboas (B/.10.00) la cual deberá ser adherida al ejemplar correspondiente por la persona que lo presente y es aparte cualquier otra estampilla que deba llevar el mismo documento con sujeción a otras disposiciones legales".

La disconformidad es sustentada en el hecho de que las operaciones comerciales de exportación sujetas al Régimen Aduanero, señala la obligación de timbrar con estampillas por valor de un balboa (B/.1.00) cada ejemplar de la Declaración Liquidación de Aduanas correspondiente, obligación ésta con la cual CHIRIQUÍ LAND COMPANY ha cumplido desde el inicio de sus operaciones. Que la violación es por omisión, toda vez que la empresa demandante ha cumplido fielmente con su obligación de timbrar sus respectivas declaraciones-liquidaciones de exportación de banano, de acuerdo a lo previsto por el precitado artículo 969. Que se pretende volver a gravar el monto de tales exportaciones, las cuales como ha quedado demostrado, ya se ha satisfecho el impuesto de timbre contenido en el artículo 969. Que con al gravar a la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, con el impuesto de timbre establecido en el artículo 967, sería gravar dos veces el monto de las exportaciones, convirtiéndose en una doble tributación, lo cual está expresamente prohibido por nuestra legislación fiscal.

Frente a lo manifestado por el recurrente, no compartimos su criterio, pues el propio parágrafo del artículo 969 señala que los timbres aduaneros son aparte de cualquier otra estampilla que deba llevar el documento de acuerdo a la legislación nacional, lo que contradice la posición del demandante, de que sólo procede la imposición de Timbre Aduneros de un balboa (B/.1.00), lo que nos conduce a no aceptar el cargo de violación.

Para concluir, la parte actora indica que el artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de 1976, subrogado por el artículo 1 de la Ley 45 de 31 de octubre de 1980, y modificado por el artículo 36 de la Ley 31 de 1991; la cláusula Trigésima Segunda del Contrato N° 3, aprobado por la Ley N° 5 de 1976; y el artículo 976 del Código Civil, han sido vulneradas por los actos expedidos por el Administrador Regional de Ingresos, Provincia de Panamá, frente a lo que este Tribunal Contencioso Administrativo quiere especificar, que las normas aludidas no le son aplicable al caso controvertido, pues las intenciones del recurrente eran que se dilucidara a lo largo de este proceso, el hecho de que la CHIRIQUÍ LAND COMPANY no estaba obligada a pagar el Impuesto de Timbre, pretensión que ha sido desvirtuada y aclarada.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 213-953 de 4 de marzo de 1997, dictada por la Administración Regional de Ingresos Provincia

de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. LUIS DE LEÓN ARIAS, EN REPRESENTACIÓN DE MÚSICA Y VIDEO, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 805 DE 14 DE AGOSTO DE 1997, DICTADA POR LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Luis De León Arias, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, en representación de **MÚSICA Y VIDEO, S. A.**, para que se declare nulo, por ilegal, la **Resolución N° 805 de 14 de agosto de 1997** dictado por la **Junta de Control de Juegos del Ministerio de Hacienda y Tesoro**, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En efecto, a foja 85 del expediente bajo estudio se aprecia el escrito de desistimiento presentado por el recurrente ante este Tribunal, en los siguientes términos:

> "Desistimiento que formalizamos, para que se ponga fin al proceso, en vista de que mi representada ha encontrado por otra vía, la solución al presente conflicto que motivó la impugnación de los actos administrativos enunciados en la marginal derecha de este escrito".

Al respecto se observa a foja 22 del presente negocio, MÚSICA Y VIDEO, S. A. le otorgó poder al Dr. Luis De León Arias, quién quedó facultado expresamente para desistir de la presente demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción; y dado que la normativa del artículo 66 de la Ley 135 de 1943 establece que "en cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso Contencioso Administrativo", y el artículo 1073 del Código Judicial recoge el mismo principio, es perfectamente viable el desistimiento presentado por el apoderado del recurrente.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el Dr. Luis De León Arias, en representación de MÚSICA Y VIDEO, S. A. y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA LICENCIADA ELISA GNAZZO MALÁN, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO LOGIL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 34 V. F. DE

19 DE JUNIO DE 1996, EMITIDA POR EL TESORERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Elisa Gnazzo Malán, actuando en nombre y representación de **COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO LOGIL, S. A.**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare la nulidad de la **Resolución N° 34 V. F. de 19 de junio de 1996**, emitida por el **Tesorero Municipal del Distrito de Panamá**, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Argumenta la demandante que mediante el acto impugnado fue calificada como defraudadora del fisco municipal, por haber iniciado operaciones comerciales y no haberlo comunicado a la Tesorería Municipal, por consiguiente fue gravada por impuestos no pagados por un total de B/.15,900.00, sobre el cual se calcularon recargos por un total de B/.7,890.00. Además, se le impuso una multa de 25% sobre lo adeudado en concepto de impuesto y recargos; y fue gravada, a partir de junio de 1996, con un impuesto mensual de B/.300.00, con la renta N° 1125-9901, que corresponde al rubro de "Otras actividades lucrativas".

La representante legal de la parte actora interpuso recurso de reconsideración contra la resolución en comento, el cual fue resuelto mediante Resolución N° 810 V. F. de 16 de agosto de 1996 (fs. 2 a 6).

La demandante considera que el acto impugnado infringió los artículos 85, 96 y 83 numeral 1, de la Ley 106 de 1973.

El artículo 85 de la Ley 106 de 1973 impone las sanciones aplicables a los defraudadores al fisco municipal, que de acuerdo con el artículo 84 ídem, no cumplen con la obligación de comunicar al Tesoro Municipal la fecha de inicio de cualquier negocio o actividad gravable. Según el texto de esta norma existe defraudación al fisco municipal cuando se omite comunicar al Tesorero Municipal el inicio de la actividad comercial. En este caso, la demandante alega que la Compañía de Mantenimiento Logil, S. A. comunicó oportunamente el inicio de sus operaciones comerciales. Prueba de ello es que está registrada como contribuyente municipal bajo el número 02-1986-0661 y ya está gravada con el impuesto de rótulo.

El artículo 96 de la Ley 106 de 1973 estipula que las obligaciones resultantes de los impuestos municipales prescriben a los cinco años de haberse causado. Según el criterio expuesto por la demandante, se ha infringido esta norma, pues los impuestos causados desde enero de 1990 hasta junio de 1991, incluidos en el acto impugnado, están prescritos.

Por último, invoca la violación del numeral 1 del artículo 83 del mismo cuerpo legal, que contempla un recargo de 20% una vez vencido el plazo para el pago del impuesto respectivo, además de un recargo de 1% por cada mes de mora, porque considera que la Tesorería Municipal sólo puede exigir los recargos e intereses sobre los impuestos adeudados a partir del 19 de junio de 1996, fecha de la Resolución N° 34 V. F. Conforme a sus argumentos, es a partir de esa fecha que el Tesorero Municipal cumplió con su obligación aforarla. Por otro lado, asegura que el cálculo hecho en base a lo establecido en esta excerta legal es erróneo.

Admitida la demanda se requirió un informe de conducta al Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, quien lo rindió mediante Nota N° 761-TM-96 de 27 de noviembre de 1996 (fs. 46 y 47). La señora Procuradora de la Administración recibió traslado de la demanda y mediante su Vista Fiscal N° 20 de 14 de enero de 1997 (fs. 48 a 59), consideró que las pretensiones del demandante carecen de sustento jurídico.

Cumplidos los trámites legales, la Sala procede a resolver la presente controversia, previas las siguientes consideraciones.

En primer lugar, con relación al cargo de violación del artículo 85 de la Ley 106 de 1973, la Sala ya ha interpretado que la inscripción de un negocio no es sinónimo de inicio de operaciones, por tanto, no le asiste la razón a la demandante cuando afirma que comunicó oportunamente al Tesorero Municipal el inicio de sus actividades comerciales, y para probarlo aporta la certificación, visible a foja 9, que acredita la inscripción de la COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO LOGIL, S. A. en el Municipio de Panamá desde el 27 de febrero de 1986.

La razón por la cual los negocios se registraban en el Municipio, antes de iniciar operaciones, era con el fin de obtener el paz y salvo municipal necesario para presentarlo al solicitar la licencia comercial o industrial que les permitiría ejercer actividades comerciales o industriales durante la vigencia del artículo 739 del Código Fiscal, antes de que fuera reformado por la Ley 56 de 1995.

En resolución dictada por la Sala el 20 de agosto de 1997, bajo la ponencia del Magistrado Edgardo Molino Mola, en las excepciones de cobro indebido de la obligación y de cálculo indebido de recargos, interpuestas dentro del proceso por cobro coactivo seguido por el Municipio de Panamá a Machetazo Mayorista, S. A., fue enfática al definir este punto, en los siguientes términos:

> "La lógica-jurídica en que se funda la norma transcrita resulta innegable. Sólo la persona natural o jurídica que inicia actividades lucrativas está en condiciones de declarar tal hecho. De lo contrario, esta circunstancia sólo puede llegar al conocimiento del fisco municipal por auditoría que se realice, o por denuncia de algún tercero que ejercite acción popular, conforme al artículo 83, numeral 3 de la Ley 106 de 1973".

De las piezas procesales allegadas al expediente, se desprende que la empresa Compañía de Mantenimiento Logil, S. A., si bien es cierto estaba inscrita como contribuyente municipal bajo el número 286-661 (fs. 9), desde el 27 de febrero de 1986, y fue gravada desde entonces sólo con el impuesto de rótulo, no consta en autos que haya comunicado al Municipio de Panamá el inicio de sus actividades comerciales.

Por las razones expuestas, la Sala considera que carecen de sustento los argumentos esgrimidos por la actora, al señalar que no pagó impuesto por actividades lucrativas, porque el Tesorero Municipal incumplió con su obligación de aforarla o clasificarla con el impuesto correspondiente. No podía el funcionario aforarla, si la empresa no le había comunicado el inicio de operaciones.

En relación al cargo endilgado sobre la multa de 25% que contempla esta norma, para los casos de defraudación fiscal, le asiste la razón a la demandante, cuando afirma que dicha multa debe aplicarse con base en el impuesto adeudado, sin los recargos e intereses. Esta Sala ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones sobre este punto:

> "Una interpretación sistemática de la norma en comento evidencia que la misma ha establecido las diferentes sanciones a las que se hace merecedor el contribuyente que omita el cumplimiento de lo previsto en el artículo 84 de la Ley 106, en lo atinente a notificar al Municipio el inicio de la actividad lucrativa. Así, el contribuyente queda obligado para con el Municipio a pagar el impuesto causado, los recargos correspondientes, un 25% del impuesto defraudado, y además deberá abonar el impuesto correspondiente al primer período.
> ...
> La sanción por defraudación, cuya característica esencial es el calificativo de actividad dolosa, pretende penalizar los abusos cometidos en perjuicio del Fisco. Los recargos, que son una modalidad distinta y normalmente atenuada de penalidad, no conllevan una actitud dolosa de lesionar al Fisco, y sólo se pretende con

> ellos agravar el monto del impuesto a pagar por razón del retraso en el pago (moratoria). Por ende, en el sistema sancionador tributario, el recargo tiene por fin penalizar la moratoria en el pago, mientras que el 25% por fraude a la ley tributaria municipal es ejemplarizante (finalidad de represión y prevención) por haberse incurrido en la conducta dolosa por defraudación.
>
> El interpretar la norma aludida en el sentido que lo viene realizando el Municipio de Panamá, conforme a lo manifestado por la propia entidad, le estaría atribuyendo un efecto multiplicador a la sanción, puesto que se estarían acumulando diversas penalidades, o por expresarse más claramente, se estaría propiciando la aplicación de penalidad sobre penalidad, pese a que se trata de dos tipos de infracción tributaria diferentes, una por mora, y la otra por defraudación".
>
> (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia dictada bajo la ponencia del Magistrado Edgardo Molino Mola, el 20 de agosto de 1997, en las excepciones de cobro indebido de la obligación y de cálculo indebido de recargos, interpuestas dentro del proceso por cobro coactivo seguido por el Municipio de Panamá a Machetazo Mayorista, S. A.).

Sobre la infracción del artículo 96 de la Ley 106 de 1973, por el cual la apoderada judicial de la Compañía de Mantenimiento Logil, S. A. considera prescritos los impuestos causados desde enero de 1990 hasta junio de 1991, gravados en la Resolución N° 34 VF de 19 de junio de 1996, esta Sala concuerda con el criterio expuesto por la demandante.

Por tanto, no están prescritos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 96 de la Ley 106 de 1973, los impuestos municipales causados los cinco años anteriores al 19 de junio de 1996, fecha en que se interrumpió la prescripción.

Por último, la demandante estima infringido el numeral 1 del artículo 83 de la Ley 106 de 1973.

En párrafos anteriores quedó aclarado que corresponde a quien inicia una actividad gravable notificarlo a la Tesorería Municipal y que no es lo mismo la inscripción de un negocio, que la notificación del inicio de operaciones del mismo. Son dos situaciones totalmente distintas, y mientras no se notifique el inicio de operaciones, no está el Tesorero Municipal en capacidad de determinar qué impuestos y a partir de cuándo el contribuyente debe empezar a pagarlos.

Igualmente alega la apoderada judicial de la actora que fueron calculados erróneamente los recargos.

Es oportuno reiterar el criterio establecido por este Tribunal en la Resolución de 18 de septiembre de 1997, en las excepciones de cobro indebido de la obligación, de cálculo indebido de recargos y de prescripción, promovidas dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo seguido por el MUNICIPIO DE PANAMÁ a CARNES LA MEJOR, S. A. En esa oportunidad, en relación a la interpretación del artículo 83, numeral 1 de la Ley 106 de 1973, la Sala manifestó lo siguiente:

> "La primera de estas normas establece las sanciones para los casos de mora en los impuestos municipales que deban pagarse mensualmente. Claramente están asignadas dos sanciones en caso de incumplimiento, un 20% por plazo vencido para el pago de la obligación, es decir el mes, y un 1% adicional por cada mes de mora.
>
> Pese a que la disposición por su redacción se puede prestar a confusión, más que nada porque pareciera muy exagerada la sanción aplicable, es innegable que su contenido se refiere a impuestos municipales de carácter mensual, por lo cual al instituir que será aplicable la sanción "Una vez vencido el plazo", pues no puede

tratarse más que del plazo estipulado para el pago del impuesto correspondiente, que es de un mes, más un recargo adicional de un 1%, que es acumulativo.

Por tanto, el cálculo realizado por el Municipio de Panamá en base a la interpretación de la supracitada disposición es acertado. El contenido de la norma establece un recargo de 20% por cada mes de mora y uno acumulativo de 1%".

(Registro Judicial de septiembre de 1997, págs. 398 a 403).

De lo expuesto se infiere que no ha infringido el acto impugnado el numeral 1 del artículo 83 de la Ley 106 de 1973.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA PARCIALMENTE ILEGAL la Resolución N° 34 V. F. de 19 de junio de 1996, modificada por la Resolución N° 810 V. F. de 16 de agosto de 1996, en lo concerniente a la aplicación del 25% de sanción por defraudación, que deberá calcularse sobre la base del impuesto dejado de pagar por la empresa COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO LOGIL, S. A., sin incluir los recargos y DECLARA PRESCRITOS los impuestos causados en el período comprendido entre enero de 1990 y junio de 1991.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TOMÁS PÉREZ ROMERO, EN REPRESENTACIÓN DE ANÍBAL CHERY OCALAGAN, RICARDO GRIMALDO Y MARTÍN CAICEDO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3 DE 27 DE ENERO DE 1998, DICTADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Tomás Pérez, actuando en nombre y representación de los señores **ANÍBAL CHERY OCALAGAN**, **RICARDO GRIMALDO Y MARTÍN CAICEDO**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° 3 de 27 de enero de 1998**, dictada por el **Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito**.

En el libelo de su demanda, la parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, sin embargo, por razones de economía procesal, se estima necesario, antes de resolver dicha solicitud, examinar si la demanda cumple con los requisitos legales para ser admitida.

Tal como consta a foja 138 del expediente, el demandante señala que el acto impugnado es la Resolución N° 3 de 27 de enero de 1998, dictada por el Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito (fs. 1-2), mediante la cual se anularon las Resoluciones N° 25 de 6 de septiembre de 1994, N° 29 de 6 de septiembre de 1994 y N° 2 del 16 de enero de 1996, a través de las cuales el Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito nombró respectivamente a los señores ANÍBAL CHERY OCALAGAN, MARTÍN CAICEDO MARTÍNEZ Y RICARDO GRIMALDO GARIBALDO.

A juicio de la Sala, la demanda presentada no cumple con los requisitos señalados en el artículo 43a de la Ley 135 de 1943, cuyo tenor literal, es el siguiente:

> "Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda ..."

En el caso en estudio, sólo se pide la nulidad de la Resolución N° 3 de 27 de enero de 1998, mediante la cual se anularon las resoluciones de nombramiento de los señores demandantes, pero no así el restablecimiento del derecho lesionado. Las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción están encaminadas a obtener la reparación de los derechos subjetivos violados, tal como lo establece el artículo 42b de la Ley 135 de 1943, reformado por el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

Cabe observar además, que se trata de tres demandantes diferentes, que pretenden la declaratoria de ilegalidad de la Resolución que anuló los actos administrativos mediante los cuales se les nombró en distintos cargos por el Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito, quienes de pretender una reclamación, deben individualizar sus acciones.

Por las razones expuestas, no debe dársele curso a la presente demanda.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de lo Contencioso-Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, presentada por el licenciado Tomás Pérez, actuando en nombre y representación de los señores ANÍBAL CHERY OCALAGAN, RICARDO GRIMALDO Y MARTÍN CAICEDO, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 3 de 27 de enero de 1998, dictada por el Consejo Municipal del Distrito de San Miguelito.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL BUFETE GARIBALDI Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE PUBLITRÉS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 94 DICTADO EL 18 DE FEBRERO DE 1998 POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El bufete Garibaldi y Asociados, actuando en nombre y representación de **PUBLITRÉS, S. A.** ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el **Resuelto N° 94 dictado el 18 de febrero de 1998** por el **Ministro de Educación.**

En el libelo de la demanda la parte actora solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, a fin de evitar un perjuicio notoriamente grave e irreparable a la demandante, por las siguientes razones: 1. Que en las pruebas que se acompañan, en el fundamento legal del acto impugnado y en la nota de la Procuraduría de la Administración se observa la ilegalidad del Resuelto N° 94 de 18 de febrero de 1998, ya que la Dirección General de Derecho de Autor sí tiene competencia para conocer y aplicar la sanción de cancelación de la inscripción; 2. Porque el señor Milton Vargas interpuso demanda penal y civil contra Publitrés, S. A., en la que ha solicitado se le condene a pagarle la suma de dos millones novecientos mil balboas (2,900,000.00) por supuestos

daños y perjuicios, más costas e intereses, por lo que la demandante corre el peligro de que se le secuestren todos sus bienes y dinero, y luego se decrete embargo en su contra; y de fallarse a su favor este proceso, la sentencia sería ilusoria y tardía porque la empresa estaría en quiebra y paralizada. (Fs. 50).

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición si, a su juicio, existe a favor del actor la apariencia de un buen derecho o fumus bonus iuris; y la medida cautelar pedida es necesaria para evitar un perjuicio notoriamente grave.

Mediante el Resuelto N° 94 de 18 de febrero de 1998, dictado por el señor Ministro de Educación e impugnado en este proceso, se resolvió revocar, por falta de competencia, la Resolución de 27 de octubre de 1997, mediante la cual la Dirección Nacional de Derecho de Autor canceló las inscripciones hechas en las partidas 014, 015, 016, 017 y 018, Tomo 002, Libro 7, de 12 de junio de 1995 y partida 001, Tomo 001, Libro 11 de 21 de diciembre de 1995, a favor de Milton Vargas (fs. 5).

La decisión del señor Ministro de Educación tuvo su fundamento en el artículo 141 numeral 3 de la Ley N° 29 de 1° de febrero de 1996 (promulgada en la Gaceta Oficial N° 22,966 del 3 de febrero de 1996), la cual entró a regir el 3 de mayo de 1996 (Artículo 246 ibidem) y cuyo tenor literal es el siguiente:

> "**Artículo 141**. Competencia. Se crean tres (3) juzgados de circuito del ramo civil, en el Primer Distrito Judicial de Panamá, que se denominarán los Juzgados Octavo, Noveno y Décimo, del Primer Circuito Judicial de Panamá, y un juzgado de circuito, en Colón ... Estos juzgados conocerán exclusiva y privativamente de las causas siguientes:
>
> ...
> 3. Las **controversias** relacionadas con la propiedad intelectual, que incluye, entre otras, las relativas a **derechos de autor** y derechos conexos, marcas de productos o de servicios y patentes; ...". (Resalta la Sala).

La Sala, luego de realizar un examen preliminar de los cargos de ilegalidad, considera que no existen violaciones ostensibles del ordenamiento jurídico que ameriten la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, y por ello no es posible acceder a la solicitud del demandante.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos del Resuelto N° 94 de 18 de febrero de 1998, dictado por el señor Ministro de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EUGENIO CARRILLO GOMILA GOMILA EN REPRESENTACIÓN DE CELLULAR VISIÓN, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL RESUELTO N° 553 DE 13 DE DICIEMBRE DE 1996 EXPEDIDO POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Dario Eugenio Carrillo Gomila ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 29 de septiembre de 1997 que admite al **Ente Regulador de los Servicios Públicos** como tercero impugnante dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por CELLULAR VISIÓN, para que se declare nulo por ilegal, el **Resuelto N° 553 de 13 de diciembre de 1996,** dictado por el **Ministerio de Gobierno y Justicia**.

La Magistrada Sustanciadora admitió la intervención de tercero por considerar que la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

El apelante fundamenta el recurso interpuesto al señalar que la según la ley es función privativa de la Procuraduría de la Administración intervenir como apoderada de la Administración en los procesos contencioso administrativos, por lo que el Ente Regulador no tiene facultad legal para intervenir como tal en los procesos que conoce privativamente la Sala Contencioso Administrativa de la Corte Suprema.

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera no coinciden con los criterios expuestos por el apelante, toda vez que el artículo 43B de la Ley 135 de 1943 instituye la figura del tercero incidental o coadyuvante dentro del proceso contencioso administrativo en este caso de plena jurisdicción, estableciendo que puede intervenir como tercero o parte interesada cualquier persona, ya sea de carácter público o privado, que acredite o demuestre un interés directo en el resultado del proceso incoado.

El Ente Regulador de los Servicios Pública es una institución pública, creada por la Ley No. 26 de 29 de enero de 1996, y sólo está facultado para actuar de conformidad con lo establecido en la Constitución vigente y las leyes de la República. En este sentido, el artículo 3 de la mencionada ley dispone que el Ente "ejercerá el poder de regular y controlar la prestación de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, **telecomunicaciones** y electricidad ..." (lo resaltado es nuestro), disposición que en concordancia con el artículo 19 le atribuye la facultad de "realizar los actos necesarios para que se cumplan las funciones y los objetivos de esta Ley y de las leyes sectoriales ...". En este orden de ideas, es importante señalar que la Ley N° 31 de 8 de febrero de 1996 por medio se regulan las telecomunicaciones en la República le confiere al Ente Regulador en su artículo 11 la elaboración del Plan Nacional de atribución de las frecuencias. De estas normas se desprende la capacidad legal de dicha institución para intervenir como parte interesada dentro de un proceso a fin de garantizar tanto los objetivos dispuestos en las leyes de la República relacionados con telecomunicaciones, como para proteger los derechos de los titulares de las concesiones otorgadas para el uso de determinadas frecuencias.

Se deduce de lo anteriormente expuesto que el Ente Regulador ha acreditado no sólo la facultad legal sino también un interés legítimo para intervenir como tercero dentro del mencionado proceso contencioso administrativo, razón por la cual lo procedente es, pues, confirmar la resolución apelada.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución de 29 de septiembre de 1997 que ADMITE como parte interesada al Entre Regulado de los servicios dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por el Lcdo. Carlos Eugenio Carrillo.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL

LICENCIADO MIGUEL QUIRÓS, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA MARBABO, S. A. Y TRANSPORTE Y EQUIPO BARRERA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 886-97 D.G. DE 8 DE MARZO DE 1997, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Miguel Quirós, actuando en nombre y representación de la **EMPRESA MARBABO, S. A. y TRANSPORTE Y EQUIPO BARRERA, S. A.**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, la **Resolución N° 886-97 D.G. de 8 de marzo de 1997**, dictada por la **Directora General de la Caja de Seguro Social**, y para que se hagan otras declaraciones.

En la parte final de su libelo, el licenciado Quirós solicita la suspensión provisional de los efectos del acto acusado; no obstante, por razones de economía procesal la Sala procede a examinar la demanda con la finalidad de determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos para ser admitida.

Al examinar la demanda, quien suscribe observa que la misma no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, debido a que la copia del acto acusado, no se encuentra debidamente autenticada, ni tampoco hay constancia en la misma de que se formuló la petición a la cual se refiere el artículo 46 de la mencionada Ley. La Sala ha señalado en distintas ocasiones que la autenticación del acto impugnado es un requisito de importancia exigido por la ley. Todo acto impugnado requiere su autenticación en vías de verificar la notificación o ejecución del mismo, y por ende, el agotamiento de la vía gubernativa y que la demanda ha sido interpuesta dentro del término legal.

Como la parte actora omitió los requisitos mencionados, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Miguel Quirós, actuando en nombre y representación de la EMPRESA MARBABO, S. A. y TRANSPORTE Y EQUIPO BARRERA, S. A., para que se declare nulo, por ilegal, la resolución N° 886-97 D.G. de 8 de marzo de 1997, dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO CARRASCO, EN REPRESENTACIÓN DE ORLANDO AVILA BRAVO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN LA REUNIÓN N° 35-97 DE 20 DE AGOSTO DE 1997, Y CONTENIDA EN LA NOTA N° 1057/97 SGP DE 26 DE AGOSTO DE 1997. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La señora Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 113 fechada el 18 de marzo de 1998 (fs. 113-116), promovió y sustentó recurso de apelación contra la resolución dictada el 7 de enero de 1998 (fs. 102), por el Magistrado Sustanciador, mediante la cual se admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado José Antonio Carrasco, en representación del señor **ORLANDO AVILA BRAVO**, para que se declare nula, por ilegal, la decisión adoptada por el **Consejo Académico de la Universidad de Panamá**, en la reunión N° 35-97 de 20 de agosto de 1997, contenida en la **Nota N° 1057/97 SGP de 26 de agosto de 1997** (fs. 57).

En opinión de la representante del Ministerio Público, esta demanda no debe admitirse porque: "... el apoderado judicial de la parte actora no aportó copia autenticada del Acta de la Reunión N° 35-97 de 20 de agosto de 1997 del Consejo Académico, mediante la cual este organismo superior universitario decidió otorgarle al Profesor Avila 145.75 puntos para el Concurso de Cátedra en el área "La Empresa en su Gestión Comercial" (fs. 114), y únicamente aportó el original de la Nota N° 1059/97- SGP de 26 de agosto de 1997 mediante la cual se le comunicó al Profesor Orlando Avila esta decisión, incumpliendo los artículos 44 y 45 de la Ley N° 135 de 1943 (fs. 114).

Señala la apelante además, que en esta demanda se pide la nulidad de un acto preparatorio y no del acto definitivo de adjudicación de la Cátedra que fue sometida a concurso, como lo exige el artículo 25 de la Ley N° 33 de 1946. Y cita la señora Procuradora el auto de 28 de octubre de 1994, en el que se señala lo siguiente:

> "A juicio de la Sala la calificación de un concurso para adjudicar una cátedra, es un acto instrumental cuya finalidad es el nombramiento de la persona seleccionada para ocupar la posición, por lo que, forzosamente debe impugnarse el acto definitivo que es el nombramiento de la persona ganadora del concurso. Este solo hecho hace inadmisible la demanda de conformidad con el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 ... . (Registro Judicial de octubre de 1994, pág. 330)".

El recurrente, se opuso al recurso de apelación de la señora Procuradora de la Administración, en los siguientes términos:

1. En cuanto a que no se aportó copia autenticada del Acta de la Reunión del Consejo Académico, señala que ésta no le fue notificada completa al Profesor Avila, sino que se le comunicó un extracto a través de la Nota N° 1059/97 de 26 de agosto de 1997, suscrita por el Secretario Académico, junto con la hoja de evaluación respectiva; y lo que se impugna en este proceso son los criterios de evaluación contrarios a decisiones propias del Consejo Académico; y

2. Que la Nota N° 1059/97 advierte sobre los términos y recursos de que dispone el afectado y fue producto del agotamiento de la vía gubernativa, tal como se lee del acto confirmatorio del Consejo Académico de 12 de noviembre de 1997 (fs. 60-63), por lo que no es un acto preparatorio. (fs. 121-122).

A continuación el resto de los Magistrados que conforman la Sala, proceden a resolver la presente alzada (fs. 125).

El acto impugnado en esta demanda, es la Reunión N° 35-97 de 20 de agosto de 1997, la cual le fue comunicada al recurrente mediante la Nota N° 1059/97 SGP de 26 de agosto de 1997. El demandante presentó con su demanda, el original de la Nota N° 1059/97/SGP de 26 de julio de 1995, emitida por la Secretaría General de la Universidad de Panamá, mediante la cual se le notificó la no adjudicación del concurso al profesor ORLANDO AVILA BRAVO.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley N° 135 de 1943, toda demanda contencioso-administrativa debe acompañarse con copia autenticada del acto acusado, en el cual debe aparecer la respectiva constancia de su notificación. Sin embargo, el recurrente sólo aportó el original de la comunicación que le hizo el Consejo Académico, pero no así del acto impugnado en su demanda, cual es la Reunión del Consejo Académico N° 35-97 de 20 de agosto de 1997. Además de no

cumplir con este requisito, tampoco solicitó al Magistrado Ponente, que antes de admitir la demanda pidiera al funcionario demandado copia del acto acusado, previa comprobación de que dicha copia le había sido negada (Cfr. artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943).

Cabe observar además, que tal como lo advierte la señora Procuradora de la Administración, el acto que se señala como impugnado en esta demanda, no es un acto definitivo sino un acto preparatorio que no causa estado alguno ni decide el fondo del asunto, por lo que se ha violado el artículo 42 de la Ley N° 135 de 1943 (fs. 115).

La Sala ha manifestado en reiterados fallos de 28 de febrero de 1994 (Registro Judicial, febrero 1994, pág. 228) y 29 de abril de 1994 (Registro Judicial, abril 1994, pág. 221), que en las demandas sobre Adjudicación de Concursos, el recurrente debe necesariamente impugnar el acto administrativo por el cual se adjudica el concurso (acto preparatorio), y el acto administrativo que contiene el nombramiento (acto definitivo), el cual seguirá surtiendo efectos hasta tanto la Sala lo anule, por ilegal, si esto procede.

Por tanto, a juicio de la Sala esta demanda no cumple los requisitos del artículo 25 de la Ley 33 de 1946, y no debe admitirse, toda vez que se pretende la declaratoria de ilegalidad de un Acta que no tiene el carácter de acto definitivo.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, REVOCAN la resolución de fecha 7 de enero de 1998, y NO ADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado José Antonio Carrasco, en representación del señor ORLANDO AVILA BRAVO, para que se declare nula, por ilegal, la decisión adoptada por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, en la reunión N° 35-97 de 20 de agosto de 1997, contenida en la nota N° 1057/97 SGP de 26 de agosto de 1997 (fs. 57).

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ BLANDÓN, EN REPRESENTACIÓN DE CADENA RADIAL CONTINENTE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4233 DE 3 DE DICIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL TESORERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Blandón Figueroa, actuando en nombre y representación de **CADENA RADIAL CONTINENTE, S. A.**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° 4233 de 3 de diciembre de 1997**, dictada por el **Tesorero Municipal del Distrito de Panamá**, mediante la cual se clasificó la actividad de la empresa CADENA RADIAL CONTINENTE, S. A. y se fijó el impuesto correspondiente a pagar, a partir del 1 de octubre de 1996 (fs. 1).

Al examinar la presente demanda para determinar si cumple con los requisitos para ser admitida se observa que adolece de varios defectos.

En primer lugar, el apoderado de la parte actora incumplió los requisitos que exigen los artículos 44 y 46 de la Ley N° 135 de 1943, toda vez que, no

presentó copia autenticada del acto impugnado; y si bien solicitó, en su demanda, que se requiera a la autoridad demandada dicha copia autenticada (fs. 12), no se puede acceder a esta solicitud, porque como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Sala, en estos casos el demandante debe probar que hizo las gestiones tendentes a obtener la copia respectiva y que la misma le fue negada.

Y en segundo lugar, a juicio de la Sala, no probó el agotamiento de la vía gubernativa. De acuerdo con los artículos 88 y 89 de la Ley N° 106 de 1973, modificada por la Ley N° 52 de 1984, los aforos o calificaciones hechos por la Tesorería Municipal pueden impugnarse ante la Junta Calificadora Municipal quien conocerá de las solicitudes de revisión que ante ella eleven los contribuyentes del Distrito.

Sin embargo, en la demanda que nos ocupa no consta que la Resolución N° 4233 de 3 de diciembre de 1997, mediante la cual se aforó la empresa CADENA RADIAL CONTINENTE, S. A., fue impugnada ante la Junta Calificadora, porque si bien, el apoderado de la parte actora afirma que el recurso de reconsideración con apelación en subsidio que consta de fojas 2 a 4 es un original, la Sala observa que estos documentos son copia simple. Además, la certificación pedida al Tesorero Municipal, del agotamiento de la vía gubernativa (fs. 5), no guarda relación con el acto impugnado en esta demanda, sino que se refiere al recurso de reconsideración de 15 de enero de 1998 contra otra Resolución, la N° 4239 de 4 de diciembre de 1997, por la cual se estableció el impuesto municipal de Radio KW Continente.

El artículo 42 de la Ley 135 de 1943 expresamente señala que se entiende agotada la vía gubernativa cuando se han resuelto los recursos de reconsideración y apelación a que se refieren los artículos 33, 38, 39 y 41 de dicha Ley.

Como en el presente caso la parte actora no ha demostrado el agotamiento de los recursos disponibles en la vía gubernativa y no ha presentado copia autenticada del acto impugnado, no debe admitirse la presente demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, de conformidad con el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado José Blandón Figueroa, en representación de CADENA RADIAL CONTINENTE, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 4233 de 3 de diciembre de 1997, dictada por el Tesorero Municipal del Distrito de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MANUEL BENNETT, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTANTINO TAQUIS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 7673-95 D. G. DE 29 DE MARZO DE 1995, EXPEDIDA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Manuel Bennett, actuando en representación de **CONSTANTINO TAQUIS**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la **Resolución N° 7673-95 D.G., de 29 de marzo de 1995**, expedida por la **Directora General de la Caja de Seguro**

Social y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se solicita la nulidad de la Resolución N° 7673-95 D.G. de 29 de marzo de 1995, expedida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, que resolvió no acceder a la solicitud de reembolso de gastos médicos ocurridos en el exterior, presentada por el asegurado CONSTANTINO TAQUIS, en vista de que no cumplió con los trámites y procedimientos contemplados en el Reglamento de Prestaciones Médicas de la misma institución.

También se hace en la demanda una solicitud previa en los siguientes términos:

Solicito al Magistrado Sustanciador, en virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley N° 135 de 1943, requiera de la Caja de Seguro Social, contestación a nuestra solicitud de certificación, si a partir del 27 de octubre de 1997, fecha en que presentamos nuestra solicitud de resarcimiento de los gastos médicos incurridos por nuestro poderdante en el extranjero, si ha emitido algún pronunciamiento sobre la referida petición. Esto se requiere a fin de probar la existencia del Silencio Administrativo.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda con el objeto de determinar si la misma reúne los requisitos necesarios para su admisión.

Observa, quien suscribe, que con una sola demanda el demandante solicita la nulidad de dos actos administrativos distintos, el primer acto administrativo constituido por la resolución N° 7673-95 D.G de 29 de marzo de 1995, expedida por la Directora General de la Caja de Seguro Social, (resolución que fue objeto de posterior recurso de reconsideración que fue denegado el 16 de mayo de 1996), y por otro lado, está un segundo acto administrativo, que lo constituye la negativa de la Dirección Nacional de los Servicios y Prestaciones Médicas de la Caja del Seguro Social , en dar respuesta a la solicitud formal de revisión del caso realizada por el demandante el 27 de octubre de 1997, con el objeto de lograr el resarcimiento de los gastos médicos incurridos por este en el extranjero.

La Sala Tercera ha sido reiterativa en el sentido de que no pueden ser demandados distintos actos administrativos mediante una sola demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción. Solamente esta Corporación tiene la potestad de decidir, de existir un elemento en común, si procede la acumulación de dos o más demandas, por lo que la parte actora debió presentar demandas distintas impugnando cada uno de los actos demandados por separado.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala tercera de la Corte Suprema, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de plena jurisdicción interpuesta por el Licenciado Manuel Bennett, en representación de CONSTANTINO TAQUIS.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TOMÁS VEGA CADENA EN REPRESENTACIÓN DE REFORESTADORA MADRID, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DN-030-96 DE 3 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Tomás Vega Cadena, en representación de **REFORESTADORA MADRID, S. A.**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción,

contra la **Dirección de Reforma Agraria**.

En la demanda se solicita que se declare nula por ilegal la Resolución N° DN-030-96 de 3 de mayo de 1996, proferida por la Dirección Nacional de Reforma Agraria y la Resolución N° ALP-008-R.A., de 16 de enero de 1998, emitida por el Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Conjuntamente con las pretensiones de la demanda, el apoderado judicial de la parte actora solicita a los Magistrados de la Sala Tercera que ordene la Suspensión Provisional de los efectos del acto impugnado en los siguientes términos:

Pido se sirva comunicar al Registro Público sobre la presentación de esta demanda, con el propósito que se evite el traspaso de la finca N° 4035, microfilmada al rollo 23493, documento 1, sección Reforma Agraria, Provincia de Coclé, conforme al ord. 3° del artículo 1212 del Código Judicial.

Los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) pasan a examinar el argumento planteado por la parte actora para decidir conforme a derecho si procede o no dicha solicitud de suspensión provisional.

De acuerdo al artículo 73 de la Ley 135 de 1943, el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave. Pero para acceder a ello es imprescindible, según jurisprudencia constante y reiterada, que ese perjuicio que se causa con la ejecución del acto aparezca demostrado en alguna forma en el expediente con las pruebas que aporta el recurrente.

La parte actora señala en la demanda que se le han ocasionado perjuicios, pues no se le ha permitido la utilización oportuna de la tierra solicitada en compra, después de haber incurrido ella en una serie de gastos hasta por un monto aproximado de $75,000.00, por honorarios, estudios topográficos, mano de obra, plantones, etc., pero no aporta con la demanda las pruebas fehacientes del perjuicio y los daños económicos a que alude.

En este caso, el demandante no ha podido probar el perjuicio notoriamente grave y de imposible reparación que pueden causar los actos administrativos por él impugnados, ya que al no existir pruebas, no hay suficientes elementos de juicio para acceder a su solicitud.

En virtud de lo anterior, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso - Administrativo) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la Solicitud Provisional de comunicar al Registro Público sobre la presentación de ésta demanda, con el propósito de que se evite el traspaso de la finca N° 4.035, microfilmada al rollo 23493, documento 1, Sección Reforma Agraria, Provincia de Coclé.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA DÍAZ & ZAPPI, EN REPRESENTACIÓN DE RAMÓN E. HOWE, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGALES LAS RESOLUCIONES N° 96-01-04-01-1-R DE 5 DE FEBRERO DE 1996 Y LA N° 96-01-04-06-185-6 DE 20 DE MAYO DE 1996 DICTADAS POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Díaz & Zappi ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en representación de **RAMÓN E. HOWE** para que se declaren nulos, por ilegales, las **Resoluciones N° 96-01-04-01-1-R de 5 de febrero de 1996** y la **N° 96-01-04-06-185-6 de 20 de mayo de 1996**, dictadas por el **Rector de la Universidad de Panamá**, y para que se hagan otras declaraciones.

LO QUE SE DEMANDA

La parte actora solicita a esta Superioridad se declare la nulidad de las Resoluciones N° 96-01-04-01-1-R de 5 de febrero de 1996 y la N° 96-01-04-06-185-6 de 20 de mayo de 1996 dictadas por el Rector de la Universidad de Panamá; y como consecuencia de esta declaratoria de nulidad se restituya al profesor Ramón Howe a la categoría de Profesor Titular de Tiempo Completo, además de rembolsarle los emolumentos dejados de percibir.

DISPOSICIONES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS

En concepto del demandante la Resolución N° 96-01-04-01-1-R de 5 de febrero de 1996 y la Resolución N° 96-01-04-06-185-6 de 20 de mayo de 1996, violan los artículos 44 y 48 de la ley 11 de 1981, y los artículos 109 y 115 del estatuto universitario, que son del tenor siguiente:

> "ARTICULO 44: Los profesores e investigadores nombrados mediante concurso formal u oposición estarán sujetos a un escalafón que regirá los ascensos de categoría y los incrementos en los sueldos, y no podrán ser removidos sino mediante la instrucción de un expediente con las garantías procesales necesarias y por las causas previstas en el estatuto universitario.

En cuanto al concepto de la infracción el actor señala que la norma transcrita se infringió por omisión, pues no medió instrucción de expediente alguno, no se le respetaron sus garantías procesales, además de existir un desconocimiento en la estabilidad e inamovilidad plenamente garantizada por la ley 11 de 1981, con lo cual se causó un perjuicio económico moral y profesional a su cliente.

También se considera infringido por violación directa por omisión el artículo 48 ordinal 4 de la Ley 11 de 1981, a lo que el actor argumenta que se desconoció la estabilidad del profesor Ramón Howe, por parte de las autoridades universitarias, causándole enormes perjuicios. Dicho artículo es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 48: Son derechos de los profesores y de los investigadores universitarios, además de los que les confieran el Estatuto y los reglamentos, los siguientes:
>
> ...
> 4. Estabilidad en su cargo, en tanto cumpla los requisitos y condiciones que la ley, el estatuto y los reglamentos señalen para el mismo.

Por último también se consideran violados los artículo 109 y 115 del Estatuto Universitario que señalan:

> "ARTICULO 109: ... Cuando se conceda la condición de Profesor de Tiempo Completo a un Profesor Regular, esta tendrá vigencia permanente, en tanto el profesor cumpla adecuadamente con las obligaciones establecidas en el Artículo 110.
>
> ARTICULO 115: En complemento de los derechos fundamentales que la ley Orgánica de la Universidad señala al profesor universitario, el presente Estatuto le reconoce los siguientes:
>
> a)...

b) Disfrutar de la estabilidad consagrada para las correspondientes categorías académicas, de adecuada remuneración de acuerdo a su responsibilidad y dedicación y de apropiadas de bienestar y seguridad sociales".

El apoderado judicial de la parte actora considera que ambos artículos han sido violado en forma directa por omisión, ya que el profesor Howe en ningún momento dejó de cumplir con las obligaciones como profesor de tiempo completo, por lo cual no existe causa alguna para que se desconozca su estabilidad como profesor titular 15%, tiempo completo.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

El Rector de la Universidad de Panamá al rendir el informe explicativo de conducta en relación con la presente demanda señaló:

"Observo que la Resolución N° 96-01-04-01-1-R de 5 de febrero de 1996, es una acción de nombramiento por el cual se designa al demandante Ramón E. Howe W. en la Facultad de Ciencias Natrurales y Exactas en la Categoría de Profesor Titular Tiempo Parcial 15% y que la Resolución N° 96-01-04-06-185-6 de 20 de mayo de 1996, se refiere a la misma persona en iguales términos, pero anula la Resolución Nª 96-01-04-06-96-6 de 9 de abril de 1996, con el propósito de corregir el salario mensual del profesor. Esta resolución que se expidieron con el propósito de mantener el vínculo del Profesor Howe con la Universidad de Panamá, después de su renuncia a su condición de profesor Titular Tiempo Completo en Categoría de Titular, categoría a la que accedió mediante la Resolución N° 95-01-04-06-33V de 25 de julio de 1995.

En efecto, el profesor Howe, quién ostentaba la categoría mencionada en la última resolución citada en el párrafo anterior, presentó carta fechada el 4 de diciembre de 1995 en que anunciaba los trámites de su jubilación del personal docente efectuaba en la Caja de Seguro Social y anuncia que cesaría en sus funciones, carta que fue sometida a Consultoría Jurídica de la Universidad de Panamá, que hizo algunas observaciones formales al contenido de la misma, razón por la que el interesado presentó otra carga (sic) fechada el 4 de enero de 1996 en la que informó sobre su "cese de funciones en la Universidad de Panamá a partir del último día del año lectivo de 1995". También informó su deseo de continuar laborando en la Universidad de Panamá dentro del marco de las leyes vigentes".

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 395 señaló que no le asiste la razón al profesor Ramón Howe, por lo que solicita a este Tribunal sea denegada su pretensión por las siguientes razones:

"El profesor Ramón Howe, durante los años que sirvió a la Primera casa de estudios, gozó de estabilidad en el ejercicio de su función docente, lo que le permitió acceder a la jubilación especial; motivo por el cual, consideramos que argüir que las autoridades universitarias infringen los artículos supracitados, no se compadece con lo que acontece en el caso bajo estudio, ya que el profesor Ramón E. Howe W. terminó su relación laboral con la Universidad de Panamá mediante las Cartas que reposan a fojas 29-30 del cuadernillo judicial".

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a resolver la presente controversia.

Según el recurrente el profesor Ramón Howe, fue nombradomediante Resolución N° 94-01-04-06-642-6 de 11 de enero de 1995, como profesor titular 15% tiempo

completo, para la cátedra de matemáticas, en la Facultad de Ciencias Naturales Exactas.

Consta en el expediente que el día 4 de diciembre de 1995, el profesor Ramón Howe, anuncia a la Universidad de Panamá, mediante carta visible a foja 29, su deseo de acogerse a la jubilación y continuar laborando dentro del marco de las leyes vigentes de la Universidad de Panamá. El 4 de enero de 1996 (f. 30) el prenombrado profesor, reitera su carta anterior, señalando que la Caja de Seguro Social mediante Resolución N° 1822 reconoce su jubilación, por lo cual anuncia su cese de funciones para el último día del año lectivo de 1995.

En base a lo anterior, la Universidad de Panamá realiza los ajustes necesarios para seguir contando con los servicios del profesor Ramón Howe, luego de su renuncia. Así, mediante Resolución, N° 96-01-04-01-1-R de 5 de febrero de 1996, se nombra al prenombrado profesor titular 15% tiempo parcial, resolución ésta que junto con la N° 96-01-04-06-185-6 de 20 de mayo de 1996, fue demandada ante la Sala Tercera por considerar, el demandante, que se han violado los derechos como profesor de tiempo completo, además de su estabilidad en su cargo. Así señala como infringidos los artículos 44 y 48 de la Ley 11 de 1981 y los artículo 109 y 115 del Estatuto Universitario. De dichos artículos haremos una análisis en conjunto pues ya la Sala se ha pronunciado al respecto.

Esta Corporación de Justicia considera que no se han perpetrado las violaciones a las que hace referencias el recurrente, pues se observa, que no se ha violado su derecho a la estabilidad, ni los derecho que consagren el Estatuto Universitario, situación que pasamos a explicar, primeramente como bien consta en el expediente, el recurrente renunció a su puesto como profesor de tiempo completo, porque se acogía a la jubilación, esta es una forma de dar por terminada la relación de trabajo. Creemos importante en este momento citar fragmentos de la sentencia de 20 de noviembre de 1995, que en este sentido señaló:

> "Creemos conveniente hacer dos señalamientos importantes en cuanto a la solicitud del profesor MOLINA. En primer lugar, lo manifestado por el Rector de la Universidad de Panamá no carece de fundamento jurídico, ya que el profesor MOLINA renunció de la categoría de Profesor Titular de Tiempo Completo que tenía en la Universidad de Panamá porque se acogía a la jubilación. La renuncia es una forma de dar por terminada una relación de trabajo, que en este caso, tenía el precitado profesor con nuestra Primera Casa de Estudios. Por ello mal puede alegar el demandante que se ha atentado contra su estabilidad docente.
>
> En segundo término, y no menos importante, es que se tiene derecho a la estabilidad, mientras el docente, en este caso, ocupe el cargo correspondiente, y así lo estipule la ley. Si hay renuncia, cesa las relaciones laborales que existían al momento, por lo que la estabilidad sólo está reservada para las personas que se mantienen laborando y tengan derecho a ella".

Reiteramos entonces, que la condición de Profesor de Tiempo Completo que tenía el profesor Ramón Howe, fue suspendida en virtud de la renuncia que presentó el precitado. Por tanto las razones que motivaron a la Universidad de Panamá a variar el status del profesor Howe descansaron en que el mismo se acogía a la jubilación, por lo que se le aplicó lo previsto en el Acuerdo 2-95 de 11 de enero de 1995, así independientemente de las consideraciones que hace el recurrente en cuanto a que dicho acuerdo no tiene validez jurídica, hasta el momento este documento se presume legal, pues dicho acto administrativo no ha sido declarado ilegal, ni se ha demandado su ilegalidad ante las autoridades competente.

Cabe destacar que la Caja de Seguro Social para acceder a la solicitud de jubilación requiere como requisito sine-qua-non que el asegurado demuestre el cese de labores, de lo contrario esa entidad no inicia los trámites correspondientes que deben culminar con la pensión de vejez a favor del petente.

Los hechos que rodean el presente caso, son un poco diferentes a los que se dieron con ocasión de la Sentencia de 11 de octubre de 1991, pues en aquel entonces los profesores implicados en el caso, sin haber renunciado y sin haber solicitado la jubilación, les fueron cambiadas las condiciones de trabajo, situación que no ocurre en el presente caso donde sí hay renuncia.

En conclusión somos del criterio que mientras el profesor Howe trabajó en la Universidad de Panamá como profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas le fueron respetados los derechos contemplados en la ley 11 de 1981 y en el Estatuto Universitario, por lo que la Universidad de Panamá, procedió según las normas que para estos casos había implementado.

Por las anteriores consideraciones los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARAN QUE NO ES ILEGAL las Resoluciones N° 96-01-04-01-1-R de 5 de febrero de 1996 y la N° 96-01-04-06-185-6 de 20 de mayo de 1996 dictadas por el Rector de la Universidad de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MIRANDA Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE JORGE HORACIO LAURENCENA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LAS RESOLUCIONES N° 213-054, 213-055 Y 213-056 DE 17 DE ENERO DE 1994 DICTADAS POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS, PROVINCIA DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Miranda y Asociados, actuando en nombre y representación de **JORGE HORACIO LAURENCENA**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declaren nulas, por ilegales, las **Resoluciones N° 213-054, 213-055 y 213-056 todas de 17 de enero de 1994**, dictadas por el **Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá**.

Mediante la Resolución N° 213-054 de 17 de enero de 1994, el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, resolvió expedir liquidación adicional del impuesto sobre la renta a nombre del contribuyente JORGE HORACIO LAURENCENA, para los años 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990, por las sumas de B/.5,761.63, B/.5,938.89, B/.4,795.33, B/.4,569.65, B/.6,449.36 y B/.7,464.15, respectivamente (fs. 1-15).

Por medio de la Resolución N° 213-055 de 17 de enero de 1994, el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, resolvió determinar de oficio la renta neta gravable del señor JORGE HORACIO LAURENCENA para el período fiscal 1991 y gravarla conforme a la tarifa correspondiente en el artículo 699 del Código Fiscal (fs. 16-19), determinando un impuesto sobre la renta a pagar de B/.9,706.70 y seguro educativo por B/.700.44 más un recargo total de B/.882.43.

Y a través de la Resolución N° 213-056 de 17 de enero de 1994, se impuso al contribuyente JORGE HORACIO LAURENCENA, una multa de B/.10.00, por no haber cumplido con la obligación de presentar a la Dirección General de Ingresos las declaraciones de renta, según lo establecido en las disposiciones legales vigentes (fs. 20).

El demandante presentó recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra las resoluciones N° 213-054 y 213-055 de 17 de enero de 1994 (fs. 8-10 del exp. adm.) y como prueba de descargo solicitó que se practicara una auditoría, designando como perito al contador Félix Argote (fs. 11-16). Este recurso fue resuelto mediante la Resolución N° 213-5082 de 16 de octubre de 1995, manteniendo las Resoluciones N° 213-055 y 213-056 de 17 de enero de 1994, con fundamento en que, el propio perito de la parte actora, aceptó que el contribuyente generó ingresos que no declaró, y que los gastos en que dice incurrió no pudieron ser demostrados a satisfacción de la Administración de Ingresos, tal como lo exige el acápite f) del parágrafo 2 del artículo 697 del Código Fiscal; y además le fue concedido al contribuyente el recurso de apelación oportunamente promovido (fs. 22-25 del exp. adm.).

El apoderado de la parte actora sustentó, dentro del término legal, dos recursos de apelación, uno contra la Resolución N° 213-055 dictada el 17 de enero de 1994, mediante la cual se expidió el gravamen de oficio contra el señor JORGE HORACIO LAURENCENA para el año de 1991 (fs. 26 del exp. adm.); y otro recurso de apelación contra la Resolución N° 213-054 de 17 de enero de 1994, mediante la cual se expidió liquidación adicional contra el señor JORGE HORACIO LAURENCENA respecto de las declaraciones de los años 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990, según se lee de fojas 27 a 29 del expediente administrativo. Ambos recursos fueron resueltos mediante la Resolución N° 205-095 de 25 de julio de 1996, por la Comisión de Apelaciones de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, quien confirmó las Resoluciones N° 213-055 y N° 213-056 de 17 de enero de 1994 (fs. 40 a 43 del exp. adm.).

Observa la Sala, que tanto la parte resolutiva de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, como la parte resolutiva de la resolución que resolvió el recurso de apelación, contienen un error numérico, ya que se refieren a las resoluciones 213-055 y 213-056 y no a la Resolución 213-054, cuyo contenido examinaron para fallar. Es decir que, aunque los números de las resoluciones fueron confundidos, la autoridad demandada entendió claramente cuáles resoluciones fueron impugnadas y confirmadas. (Cfr. fs. 8, 26 y 27).

En cuanto a la Resolución N° 213-056 también de 17 de enero de 1994, mediante la cual se le impuso multa de B/.10.00 al contribuyente JORGE H. LAURENCENA, impugnada también en esta demanda, la Sala observa que no fue recurrida por el demandante en la vía gubernativa (cfr. fs. 8, 26, 27 y 40), por lo que no se agotó respecto a esa vía como lo exige el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, y por tanto, no es viable que la Sala se pronuncie sobre su legalidad.

La parte actora considera que se han violado los artículos 737, 709 numeral 5, 710 acápite c) del Parágrafo 1, 708 literal q) párrafo cuarto, 697 primer párrafo y parágrafo 1 literales c) y ch) y 748 todos del Código Fiscal, cuyos textos transcribimos a continuación:

Código Fiscal.

"Artículo 697. -Se entiende por gastos o erogaciones deducibles, los gastos o erogaciones ocasionados en la producción de la renta y en la conservación de su fuente; en consecuencia, no serán deducibles, entre otros, aquellos gastos, costos o pérdidas generados o provocados en negocios, industrias, profesiones, actividades o inversiones cuya renta sea de fuente extranjera o exenta. El Organo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, establecerá las normas reglamentarias para la aplicación de los principios contenidos en este artículo.

Parágrafo Uno: Serán también deducibles los gastos o erogaciones siguientes:

...
c) Las sumas pagadas por las personas naturales en concepto de intereses por préstamos hipotecarios que se hayan destinado o se destinarán exclusivamente a la adquisición, construcción o mejoras de vivienda para uso propio, siempre que la vivienda esté ubicada en

la República de Panamá. Esta deducción podrá practicarse hasta un máximo de quince mil balboas (B/.15.000.00) al año. También son deducibles los intereses pagados en concepto de préstamos que se dediquen para la educación.

(Texto del literal c) del artículo 697 conforme fue subrogado por el artículo 5 de la Ley 6 de 14 de marzo de 1983 G. O. No. 19.783 de 4 de abril de 1983).

(Derogado el literal c) del Parágrafo Uno del artículo 697 por el artículo 39 de la Ley No. 31 de 30 de diciembre de 1991. G. O. No. 21.943 de 31 de diciembre de 1991).

ch) El treinta por ciento (30%) de las sumas invertidas en las actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales, sin que en este caso la deducción pueda ser superior al cuarenta por ciento (40%) de la renta gravable antes de hacer uso del derecho que le confiere este literal, y en cuanto las sumas invertidas provengan de fuentes distintas a las actividades enumeradas en el mismo.

Para los efectos de este artículo no se considerarán sumas invertidas en el sector agropecuario, aquellas inversiones que consistan en la adquisición de bonos.

El beneficio de deducibilidad especial por inversiones en las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y agroindustriales expirará el 31 de diciembre del año 2002.

(Texto del literal ch) conforme fue modificado por el artículo 3 de la Ley No. 28 de 20 de junio de 1995. Gaceta Oficial No. 22.810 de 22 de junio de 1995.)".

"Artículo 708. -No causarán el impuesto:

...
q) Las sumas donadas a instituciones estatales y/o privadas de investigación y extensión agropecuaria que no tengan fines lucrativos, para el desarrollo de sus programas y que tiendan a mejorar los sistemas de transferencia de tecnología.
r) ...
s) La renta de los productores agropecuarios que tengan ingresos brutos menores de Cien Mil Balboas (B/.100.000.00).
...

Artículo 709. -Una vez computada la renta gravable sobre la cual se ha de pagar el Impuesto sobre la Renta, las personas naturales tendrán derecho a las siguientes deducciones anuales:

...
5. Las sumas pagadas en concepto de intereses por préstamos hipotecarios que se hayan destinado o se destinen exclusivamente a la adquisición, construcción, edificación o mejoras de la vivienda principal de uso propio del contribuyente, siempre que la misma esté ubicada en la República de Panamá. Esta deducción podrá practicarse hasta por una suma máxima anual de Quince Mil Balboas (B/.15.000.00)

Si la vivienda perteneciere proindiviso a varios contribuyentes, el monto de los intereses podrá prorratearse entre ellos hasta el máximo aquí fijado.
...

Artículo 710. -Toda persona natural o jurídica que deba cubrir el impuesto por su cuenta o de otras personas, presentará a más tardar el 31 de marzo de cada año, ante la Dirección General de Ingresos o ante las oficinas que esta señale, una declaración jurada de las rentas que haya obtenido durante el año gravable anterior, así como

de los dividendos o participaciones que haya distribuido entre sus accionistas o socios y de los intereses pagados a sus acreedores.
...

Parágrafo 1° Todo contribuyente está obligado a presentar declaración de sus rentas, excepto en los siguientes casos:
...
c) Las personas naturales que se dediquen a la actividad agropecuaria y que tengan ingresos brutos anuales menores de cien mil balboas (B/.100.000.00).
...".

"Artículo 737. -El derecho del Fisco a cobrar el impuesto a que este Título se refiere prescribe a los siete (7) años, contados a partir del último día del año en que el impuesto debió ser pagado. La obligación de pagar lo retenido según el artículo 731 prescribe a los quince (15) años, contados a partir de la fecha en que debió hacerse la retención".

"Artículo 748. -Para la determinación de oficio de la renta de los contribuyentes, la Administración General de Rentas Internas tomará como base principal las declaraciones de otros contribuyentes que se hallen en situaciones análogas al que ha dado lugar a dicha determinación de oficio".

En cuanto al concepto de la infracción de cinco de las normas citadas, los artículos 697, 709, 710, 737 y 748 del Código Fiscal, el demandante indicó lo siguiente: que al ser gravado de oficio por el período fiscal de 1991 (fs. 93), se desconoció su derecho de deducir los intereses pagados por préstamo hipotecario y su derecho de deducir el 30% de las sumas invertidas en la actividad agrícola, pecuaria, acuícola o agroindustrial; que la Resolución N° 213-055 ignoró la certificación de intereses que adjuntó el contribuyente en su declaración tardía para el año de 1991, la cual reposa en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro; que el artículo 709 del Código Fiscal en concordancia con el artículo 29 del Decreto 60 de 28 de junio de 1965, reconoce el derecho de los contribuyentes a deducir los gastos incurridos en la producción y conservación de la fuente, pero que la Administración no quiso incluir ninguno estos gastos deducibles, cuyos comprobantes le fueron presentados; que el artículo 710 consagra el derecho de no declarar las sumas provenientes de la inversión agropecuaria, por lo que, siendo un derecho, el contribuyente podía renunciar a éste, y deducir tanto los gastos como las pérdidas de esta inversión; que la Resolución N° 213-054 de 17 de enero de 1994, no puede exigir el cobro de los impuestos de los años 1985 y 1986 porque su derecho a cobrarlo prescribió, conforme el artículo 737 del Código Fiscal; y que al expedirse la Resolución N° 213-055 de 17 de enero de 1994, el Administrador debió incluir los gastos estimados que normalmente se dan en estas actividades, tal como se infiere del Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965. (Fs. 40-42).

Y en cuanto a la última norma que el demandante estima violada, artículo 708 del Código Fiscal, la Sala observa que la transcripción que aparece en la página 4 de la demanda (fs. 41vta.) no corresponde al texto del párrafo cuarto literal q) del artículo 708 del Código Fiscal y el correcto es el que hemos citado en esta sentencia. Al expresar el concepto de la violación de esta disposición, el demandante indicó que en los archivos de la Dirección General de Ingresos reposan las pruebas de los gastos de la inversión agropecuaria, gastos cuya deducibilidad fue negada sin fundamento alguno.

A todos los cargos expuestos se opuso la señora Procuradora de la Administración, expresando que no se ha producido la prescripción del artículo 737 del Código Fiscal, en cuanto a los años 1985 y 1986, porque las declaraciones de renta para los períodos fiscales de 1985 a 1990, fueron presentadas el 19 de julio de 1991 y el acto impugnado es del 17 de enero de 1994, fecha a la cual no han transcurrido los siete años a los que se refiere la norma, por lo que la prescripción quedó interrumpida con las precitadas declaraciones de renta presentadas en el año de 1991.

Agrega la señora Procuradora, que en autos no reposan pruebas que acrediten la propiedad del busito colegial o del automóvil del contribuyente, por lo que los gastos relacionados con estos vehículos no pueden ser aceptados como deducibles; y que el artículo 708 del Código Fiscal, consagra como renta exenta los ingresos brutos generados de la actividad agropecuaria que sean menores de cien mil balboas (B/.100.000.00), situación del señor LAURENCENA, razón por la cual los gastos provenientes de su actividad agropecuaria no son deducibles de esta renta, y menos aún de otras rentas gravadas con el impuesto.

A continuación, los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo proceden a resolver la presente controversia.

Alega el apoderado de la parte actora en cuanto a la Resolución N° 213-054 lo siguiente: que ha prescrito el derecho del Fisco de cobrar el impuesto de los años 1985 y 1986; que el Administrador Regional de Ingresos desconoció el derecho del contribuyente de deducir los gastos provenientes de su actividad profesional (fs. 37vta.); que el señor Administrador no reconoció el derecho del contribuyente de deducir los gastos habidos en la inversión agropecuaria (fs. 38); que le negaron la deducción del 30% de las sumas invertidas en la actividad agropecuaria contraviniendo la norma legal que así lo permite, y sólo se objetó la actividad porque no superaba los B/.100,000.00 de ingresos (fs. 38).

En cuanto a la Resolución N° 213-055 de 17 de enero de 1994, señaló el demandante, que no le permitieron deducir ningún gasto hecho para la generación y conservación de la fuente y la producción de la renta, como los gastos del mantenimiento del transporte colegial (honorarios del conductor, combustible, lubricantes, partes y piezas, depreciación, reparación y mantenimiento, gastos legales, de patente y otros); que no le permitieron deducir los gastos provenientes de los servicios profesionales, como los de oficina, teléfono, luz, salarios del personal de apoyo y profesional, papelería, útiles de oficina y misceláneos; y que tampoco se incluyó en la Resolución N° 213-055 la deducción de los intereses pagados en préstamos hipotecarios (fs. 39).

En cuanto a la prescripción alegada por el demandante, respecto de los años fiscales 1985 y 1986, cabe observar que la parte actora no ha probado este hecho. En el proceso contencioso que nos ocupa, la autoridad demandada afirma en su informe de conducta que "a foja 4 del expediente la Administración Regional de Ingresos determinó que las declaraciones de rentas para los períodos 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990, fueron presentadas el 19 de julio de 1991 (fs. 50)," hecho que interrumpe la prescripción, toda vez que entre los años fiscales no declarados 1985 y 1986 en que se causó el impuesto y debieron presentarse las correspondientes declaraciones, y el año 1991 en que se presentaron estas declaraciones, no han transcurrido los siete años a los que se refiere el artículo 737 del Código Fiscal, que preceptúa que, "El derecho del Fisco a cobrar el impuesto a que este Título se refiere prescribe a los siete (7) años, contados a partir del último día del año en que el impuesto debió ser pagado".

Las declaraciones de los años fiscales 1985 y 1986 debieron presentarse en cada caso, al año siguiente, y en esa misma fecha la Dirección General de Ingresos proceder a hacer la liquidación del impuesto, y éste debió ser pagado en ese momento, con fundamento en el artículo 710 del Código Fiscal. En consecuencia, el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 1985 y 1986 debió ser pagado, respectivamente, al momento de presentar la declaración jurada de renta en el año de 1986 y 1987. Por tanto, al 19 de julio de 1991 no han transcurrido siete (7) años desde que el impuesto de los períodos fiscales 1985 y 1986 debió ser pagado.

En relación con la liquidación adicional expedida mediante la Resolución N° 213-054, respecto de los años fiscales 1985 a 1990, a juicio de la Sala, la autoridad demandada cumplió con lo preceptuado en la ley, como veremos a continuación:

1. Una vez presentadas las declaraciones de rentas de los años 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990, el 19 de julio de 1991, la Administración siguió el procedimiento consagrado en el artículo 718 del Código Fiscal, el cual dispone que la Dirección General de Ingresos, con vista en las declaraciones e informes

del contribuyente, liquidará el impuesto sobre la renta gravable que éste haya declarado y hará los cobros del mismo dentro de los períodos correspondientes, salvo el ajuste a que se refiere el artículo 710;

2. Con fundamento en el artículo 719 del Código Fiscal, una vez hecha la liquidación del impuesto, los funcionarios encargados de su aplicación examinan minuciosamente las declaraciones e informes del contribuyente con la facultad de investigar lo pertinente, a fin de establecer la verdadera cuantía de la renta gravable;

3. Y el artículo 720 del Código Fiscal dispone que, si de las investigaciones resulta que el monto del impuesto a cargo del contribuyente es mayor que el de la liquidación de que trata el artículo 718, y sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, la administración expedirá una resolución que contendrá la liquidación adicional por la parte del impuesto que no se haya liquidado. Esta misma norma señala que:

> "La **resolución de que trata el párrafo anterior y que contendrá la liquidación adicional** correspondiente deberá expedirse dentro de los tres **(3) años siguientes a la fecha de la presentación de la declaración** y será notificada al interesado personalmente y si ello no fuere posible mediante el correspondiente edicto, sin perjuicio de las investigaciones a que haya lugar en caso de fraude.
>
> Serán nulas las resoluciones que se expidan después de los tres (3) años siguientes a la fecha de la presentación, y en consecuencia, el contribuyente no estará obligado a pagar el monto de la liquidación adicional contenida en dicha resolución.
> ...". (Resalta la Sala).

De la norma transcrita se infiere que, del 19 de julio de 1991, fecha en que fueron presentadas las declaraciones de rentas de los años 1985 a 1990, al 17 de enero de 1994, fecha en que fue expedida la liquidación adicional contenida en la Resolución N° 213-054, impugnada en esta demanda, aún no habían transcurrido los tres años que otorga la ley para expedir la liquidación adicional de estas declaraciones de rentas.

Adicionalmente, el artículo 165 del Decreto Ejecutivo N° 170 de 27 de octubre de 1993, "Por el cual se reglamentan las disposiciones del Impuesto sobre la Renta contenidas en el Código Fiscal y se deroga el Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965", que rigió hasta el 31 de diciembre de 1993 (cfr. Art. 197 del D. E. N° 170 de 1993), dispone que no podrá cobrarse el impuesto de la resolución que contiene la liquidación adicional, sino cuando la misma esté ejecutoriada. La Resolución N° 213-054 de 17 de enero de 1994, quedó ejecutoriada el 5 de septiembre de 1996, cuando la parte demandante se dio por notificada de la Resolución N° 205-095 de 25 de julio de 1996, mediante la cual se resolvió la apelación del demandante, fecha desde la cual tampoco han transcurrido los siete años que otorga la ley para cobrar el impuesto respectivo. (Fs. 43 del exp. adm.).

Por todo lo expresado, la Sala considera que no se ha violado el artículo 737 del Código Fiscal.

En cuanto a los ingresos y gastos de la actividad agropecuaria del señor JORGE HORACIO LAURENCENA, la Sala considera que el artículo 708 literal s) del Código Fiscal, tal como estaba vigente a la fecha de expedición del acto impugnado, es aplicable al demandante, por tener en esta actividad ingresos brutos menores de los B/.100.000.00 (cfr. fs. 87 a 89). El texto de la norma era el siguiente:

> "Artículo 708. -No causarán el impuesto:
>
> ...
> s) La renta de los productores agropecuarios que tengan ingresos brutos menores de Cien Mil Balobas (B/.100.000.00). (Adicionado por el artículo 18 de la Ley No. 2 de 20 de marzo de 1986)".

Esta disposición fue modificada por el artículo 8 de la Ley N° 28 de 20 de junio de 1995 (G. O. N° 22.810 de 22 de junio de 1995), consagrando el mismo principio, de que se considera exenta: "s) La renta de las personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad agropecuaria que tengan ingresos brutos anuales menores de los cien mil balboas (B/.100.000.00).

El contribuyente JORGE HORACIO LAURENCENA, declaró ingresos brutos anuales por su actividad agropecuaria, cuyos montos no excedían los B/.100.000.00 (cfr. fs. 3), por lo que se trata de una renta que no tiene que ser declarada con fundamento en el artículo 710 parágrafo 1 literal c) del Código Fiscal, que no causa impuesto conforme el artículo 708 literal s) ibidem, y de gastos que, precisamente por haberse causado en la producción de una renta exenta del pago del impuesto, no son deducibles según lo dispone el artículo 697 párrafo primero del Código Fiscal el cual consagra que, "... no serán deducibles, entre otros, aquellos gastos, costos o pérdidas generados o provocados en negocios, industrias, profesiones, actividades o inversiones cuya renta sea de fuente extranjera o exenta".

En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala considera que no se han violado por aplicación indebida, los artículos 697 parágrafo 1 literal ch), 708 y 710 parágrafo 1 literal c) del Código Fiscal.

En cuanto a los otros gastos que alega el demandante como deducibles, consta en el expediente contencioso (fs. 32) certificación de la Caja de Ahorros de los intereses pagados por el señor JORGE HORACIO LAURENCENA por el préstamo hipotecario N° 06-1094-0000870 durante el año 1991 y que asciende a la suma de B/.2,751.52. Sin embargo, los intereses hipotecarios que el artículo 709 numeral 5 del Código Fiscal, considera deducibles, una vez computada la renta gravable, son aquellos destinados "exclusivamente a la adquisición, construcción, edificación o mejoras de la vivienda principal de uso propio del contribuyente", hecho no probado por el demandante, por lo que no procede su deducibilidad.

En cuanto al cargo de violación del literal c) del Parágrafo Uno del artículo 697 del Código Fiscal, que el demandante estima violado, cabe advertir que el mismo fue derogado por el artículo 39 de la Ley N° 31 de 30 de diciembre de 1991, "Por la cual se establece la Reforma Tributaria de 1991", que comenzó a regir el 31 de diciembre de 1991, y es aplicable a la renta gravable que se extiende del 1 de enero al 31 de diciembre de 1991, según se expresó en la Sentencia de 25 de septiembre de 1992, del Pleno de esta Corporación de Justicia y en Sentencia de 27 de junio de 1996 al resolver Demanda Contenciosa de Plena Jurisdicción. Por tanto, como esta norma no estaba vigente cuando se dictó el acto impugnado, se desestima este cargo de violación.

Por último, el demandante estima infringido el artículo 748 del Código Fiscal, el cual dispone que para la determinación de oficio de la renta de los contribuyentes, la Administración debe tomar como base principal las declaraciones de otros contribuyentes que se hallen en situaciones análogas.

La Sala observa, que la Resolución N° 213-055 impugnada en esta demanda (fs. 17 y 18), incluye los ingresos no declarados por el demandante en el año fiscal 1991 y las deducciones básicas que consagra la ley, pero no los gastos ocasionados en la producción de cada renta. En cuanto éstos, el demandante alega gastos deducibles por servicios de alquiler de transporte y por actividad profesional. Veamos las pruebas presentadas en cada uno de estos renglones.

En el peritaje que consta a foja 89 del expediente, se presentan como gastos por servicio de alquiler de transporte durante el año 1991 los siguientes: honorarios B/.4,060, depreciación -B/.1,650.00 reparación y mantenimiento - B/.2,253.92 y combustible y lubricantes: B/.764.05; sin embargo, la Administración no aceptó ninguno de estos gastos.

Observa la Sala que, al expedir las liquidaciones adicionales para los años fiscales de 1985 a 1990, si se aceptaron como deducibles los gastos de depreciación, reparaciones, combustible y lubricantes del transporte de alquiler bus mitsubishi y del auto nissan patrol usado en el desempeño de la actividad profesional del demandante y la Administración reconoció y aceptó respectivamente

el 100% y el 50% del resultado de estos renglones (fs. 6-7 y 10).

Así lo expresó la autoridad demandada en la Resolución N° 213-054 de 17 de enero de 1994, en la explicación de ajustes (fs. 6): "DEPRECIACIÓN: Para los años 1986 a 1990 el contribuyente deduce por este concepto las sumas que se detallan a continuación: ... Del análisis de Depreciación, se determinó diferencia en el renglón del vehículo Nissan Patrol y de la computadora, debido a que ambos activos se utilizan tanto para el ejercicio de la profesión, como para el uso personal del contribuyente; razón por la que sólo se reconoce el 50% de los importes resultantes" (fs. 7). Por tanto, los gastos de depreciación fueron aceptados por la administración en un 100% para el bus mitsubichi y en un 50% para el auto nissan usado en el ejercicio profesional, situación análoga a la de la Resolución N° 213-055, y que debe servir de base para esta determinación de oficio, como lo establece el artículo 748 del Código Fiscal.

Por tanto, se ha violado el artículo 748 del Código Fiscal, al no reconocer los gastos deducibles en concepto de depreciación del bus mitsubichi y del automóvil nissan.

En cuanto a los gastos de combustible, lubricantes y reparación, el perito Felipe Argote, a foja 14 del expediente administrativo, señaló que "el contribuyente JORGE LAURENCENCA conserva en sus archivos toda la documentación que respalda este y otros gastos, en forma separada, ordenada y clasificada". Sin embargo, en la demanda contenciosa que nos ocupa, el señor JORGE HORACIO LAURENCENA tampoco ha presentado las pruebas que le fueran exigidas por la Administración, para poder reconocer los gastos alegados en el peritaje, por lo que a juicio de la Sala, los mismos no han sido acreditados.

En cuanto a los gastos provenientes de la actividad profesional del contribuyente, en el peritaje presentado por la contadora Laura Vargas (fs. 83 a 89), se señalan los siguientes gastos: de alquiler de oficina -B/.240.00, depreciación- B/.725.00, servicios profesionales-B/.988.65, reparación y mantenimiento B/.918.67, combustible y lubricantes-B/.31.21, gastos de oficina-B/.485.12 y otros gastos-B/.2,384.80, que a juicio de la Administración tampoco han sido demostrados a satisfacción, como lo exige el acápite f) del parágrafo dos del Artículo 697 del Código Fiscal, el cual consagra que no se considera gasto o erogación ocasionada en la producción de la renta o en la conservación de la fuente, aquel "gasto, que aunque deducible, no pueda ser comprobado safisfactoriamente cuando la prueba sea exigida por la Dirección General de Ingresos."

En cuanto a estos gastos, las Administración señaló en su Resolución N° 213-5082 de 16 de octubre de 1995, mediante la cual resolvió el recurso de apelación, lo siguiente:

> "En cuanto a los gastos, el perito ha tomado el lugar de esta Administración, al pretender que de por si y ante si, se **acepten gastos los cuales no adjunta ningún documento al respecto**, para sustentar los mismos.
>
> A manera de ejemplo, "el perito acepta", como gasto deducible el 50% de la electricidad, cuando no es deducible este rubro para las personas naturales, pues se presume que se trata de la electricidad, de la vivienda del contribuyente.
>
> En cuanto a los gastos de reparación y mantenimiento, lo mismo que los gastos provenientes de la actividad comercial (alquiler de transporte-bus colegial) y los gastos del vehículo NISSAN PATROL, no se han acreditado los mismos a satisfacción de esta Administración Regional de Ingresos.
>
> **No existe ninguna prueba (documentos) sólo el informe pericial**, que acrediten la propiedad del busito colegial o del automóvil del contribuyente, por lo que no pueden ser aceptados". (Fs. 23). (Resalta la Sala).

Tal como lo señaló la autoridad demandada, en el expediente proveniente de la Administración Regional de Ingresos, únicamente consta respecto de los gastos alegados como de la actividad profesional, el peritaje del contador Felipe Argote con los renglones de luz, teléfono, agua (fs. 14-15). Y en el expediente contencioso se incurre en la misma falta, y únicamente el peritaje de la licenciada Laura Vargas alega los gastos de alquiler de oficina, servicios profesionales, reparación y mantenimiento, combustibles y lubricantes, gastos de oficina y otros gastos, pero no presenta las documentos probatorios necesarios para que los mismos sean acreditados. Por todo lo expuesto, la Sala considera que no se ha probado que estos gastos sean deducibles de la renta gravable del año 1991.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NULA, POR ILEGAL, la Resolución N° 213-055 de 17 de enero de 1994, por cuanto debe reconocerse como gasto deducible para el año fiscal 1991, la depreciación por actividad profesional de B/.725.00 y por el servicio de alquiler de transporte de B/.1,650.00 (fs. 89) y ORDENA que liquide el impuesto a pagar incluyendo este gasto; DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 213-054, dictada por el Administrador Regional de Ingresos; y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PEREIRA & PEREIRA, EN REPRESENTACIÓN DE PROPACO, S. A., PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE LA NOTA N° 060/95-AL DE 13 DE DICIEMBRE DE 1995, SUSCRITO POR EL VICEMINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Pereira & Pereira, en representación de **PROPACO, S. A.**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la **Nota N° 060/95-AL de 13 de diciembre de 1995**, emitida por el **Viceministro de Planificación y Política Económica** (fs. 6 y 7).

La demandante también pide que, como consecuencia de la ilegalidad del acto, se declare que PROPACO, S. A. "debe ser reintegrado en el pleno ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones emergentes del Contrato N° 1-1-14-93, y ordenarse el pago de la indemnización, de conformidad con el contrato, desde el día de la sustitución hasta que se cumpla la orden de la Corte, a razón de Mil cincuenta balboas (B/.1,050.00) diarios".

En los hechos de la demanda, el apoderado judicial de la empresa explica que PROPACO, S. A. celebró con el Estado el Contrato N° 1-1-14-93, mediante el cual se comprometía a proveer servicios completos de ingeniería para la inspección y supervisión de la construcción del Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito. Se pactó en dicho contrato que el período de duración sería de 730 días. De extenderse la duración de la obra, PROPACO, S. A. suministraría sus servicios por 90 días, más sin costo adicional y de proseguir la construcción de la obra pasado este período, PROPACO, S. A. recibiría B/.1,050.00 diarios por los servicios de inspección.

Afirma la parte actora que pese a lo estipulado en el Contrato N° 1-1-14-93, el 13 de diciembre de 1995, mediante Nota N° 060/95-AL, el Viceministro de

Planificación y Política Económica y Director del "Proyecto de Dinamización de la Inversión de los Ministerios de Salud y Educación" decidió resolver administrativamente el contrato, pasados los 90 días de inspección gratuita de la obra, arguyendo circunstancias no pactadas en el contrato, y la imposibilidad de asumir los costos adicionales que acarrearía continuar con los servicios de inspección por parte de PROPACO, S. A., sustituyendo al contratista por el funcionarios de la Dirección Nacional de Infraestructura de Salud del Ministerio de Salud.

Agrega el apoderado judicial del actor, que como consecuencia de la nota en mención, el 10 de enero de 1996 en presencia de notario público, el personal de PROPACO, S. A. fue desalojado de las oficinas instaladas en el área de construcción del Hospital (fs. 15 a 24).

La parte actora manifiesta que la revocación o rescisión unilateral del contrato por parte de la Administración, omitiendo el procedimiento correspondiente, no está contemplado en el contrato.

Admitida la presente demanda se requirió un informe de conducta al Viceministro de Planificación y Política Económica y Director del "Proyecto de Dinamización de la Inversión de los Ministerios de Salud y Educación", quien lo rindió mediante Nota N° 017/96-AL fechada el 20 de mayo de 1996 (fs. 55 a 61).

La señora Procuradora de la Administración recibió traslado de la demanda y en su Vista Fiscal N° 465 de 17 de octubre de 1996 (fs. 76 a 87), solicitó a esta Sala desestimar las pretensiones del demandante.

Mediante auto fechado el 9 de junio de 1997 se acogieron las pruebas presentadas y aducidas por la parte actora y se señaló un término de veinte días para su práctica (fs. 95 a 98). Una vez practicadas las pruebas aducidas (fs. 117 a 141 y 148 a 155) y presentados los alegatos (fs. 156 a 169), el expediente está listo para resolver.

El demandante considera que el acto impugnado viola los artículos 64, 68 y 68 A del Código Fiscal y 976 y 1109 del Código Civil.

Según el apoderado judicial del demandante, el acto impugnado viola el artículo 64 del Código Fiscal, porque ni en ese cuerpo de leyes, ni en las normas del derecho privado que regulan la materia, le está atribuido el derecho a la entidad contratante de rescindir unilateralmente un contrato en la forma en que se hizo.

La parte actora considera infringido el artículo 68 del Código Fiscal, porque el acto impugnado se fundamenta en causales no pactadas, ni reconocidas por ley, como causas de resolución de los contratos de este tipo.

Como consecuencia de la anterior infracción, también se violó el artículo 68 A del Código Fiscal, que establece el procedimiento a seguir para rescindir administrativamente un contrato y en este caso se omitió tal procedimiento.

Alega la demandante que el Contrato N° 1-1-14-93 es un contrato bilateral, y que al rescindirlo unilateralmente una de las partes, antes de vencer su término de duración, también se violó el artículo 976 del Código Civil.

Por último, considera infringido el artículo 1109 del Código Civil, porque la obligación del contratista de inspeccionar la obra hasta su culminación no sólo está pactada en el contrato, sino que se desprende de la naturaleza misma del contrato y es conforme a la buena fe contractual.

El término de duración del Contrato N° 1-1-14-93, suscrito el 3 de septiembre de 1993, entre el Director del Proyecto de Dinamización de la Inversión de los Ministerios de Salud y Educación y el Presidente de la empresa PROPACO, S. A., era de setecientos treinta (730) días calendarios, período programado para la terminación de la obra. Según dicho contrato, de extenderse la construcción del Hospital San Miguel Arcángel, el contratista inspeccionaría la obra por 90 días más, sin costo adicional para el Ministerio de Salud.

Transcurrido este término, y de continuar la construcción de la obra, PROPACO, S. A. debía recibir por sus servicios de inspección la suma de mil cincuenta balboas (B/.1,050.00) por cada día adicional (fs. 2 a 4).

A fojas 6 y 7 se lee copia autenticada de la nota impugnada, a través de la cual el Ministerio de Planificación y Política Económica le comunica al Presidente de PROPACO, S. A. "que se ha vencido el día 10 de septiembre de 1995, el término de duración del presente contrato que era de setecientos treinta días (730) calendarios, más los noventa (90) días sin costo adicional que contempla el Contrato, los cuales se cumplieron el pasado 9 de diciembre".

La citada nota en su parte medular manifiesta las razones por las cuales no puede prorrogar la vigencia del contrato, en los siguientes términos:

> "Como quiera que el Ministerio de Salud ha declarado resuelto el Contrato celebrado para la Construcción del Hospital con la empresa PACAND, S. A., (Adjuntamos copia) por los lamentables hechos por todos conocidos; la demora que este impredecible acontecimiento ocasionará en la construcción del Hospital ha traído como consecuencia que el Ministerio de Salud nos comunique que le resulta imposible extender la vigencia del Contrato de Inspección, por los elevados costos que la prórroga del contrato acarrearía al Ministerio de Salud, por lo cual dicha institución de salud asumirá la inspección de la obra".

Como indicáramos, el actor alega la violación del artículo 64 del Código Fiscal. Dicha norma preceptúa que los contratos administrativos, como el celebrado entre la parte actora y el Estado, se sujetarán a las disposiciones del Título I del Libro Primero del Código Fiscal, o en su defecto, a las normas del derecho común, siempre que no quede afectado el interés público.

En el artículo 68 del Código Fiscal, cuya violación también invoca la parte actora, se señalan las estipulaciones que deben contener los contratos administrativos que celebre el Estado y se preceptúa que en todo contrato administrativo, además de las causales de resolución convenidas, debe figurar las que allí se enumeran, todas relacionadas con el incumplimiento del contratista y su incapacidad para cumplirlo.

En el artículo 68-A del mismo cuerpo legal se desarrolla el procedimiento a seguir para resolver administrativamente un contrato, cuando exista una causal de las convenidas en el contrato o de las enumeradas en el artículo 68 antes citado.

Por su parte, el artículo 976 del Código Civil preceptúa que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse al tenor de los mismos.

El artículo 1109 del Código Civil dispone que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan a lo pactado y sus consecuencias conforme a la buena fe, el uso y la ley, con excepción de los contratos que deben constar por instrumento público.

A juicio de la Sala, el acto impugnado no infringe los artículo 64, 68 y 68-A del Código Fiscal, porque el término del contrato celebrado entre las partes se cumplió. El Ministerio de Planificación y Política Económica le comunicó al contratista mediante el acto impugnado, la imposibilidad de prorrogar la vigencia del contrato, porque el Ministerio de Salud no podía asumir los elevados costos de la larga prórroga provocada por motivos relacionados con los constructores y ajenos a la voluntad del Estado.

Los contratos administrativos tienen como finalidad la satisfacción de un interés público, definido por el jurista Héctor Jorge Escola como "el resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa mayoría y que encuentra su origen en el querer axiológico de esos individuos, apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual,

eventual o potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer en él su propio querer y su propia valoración prevaleciendo sobre los intereses individuales que se le opongan o lo afecten, a los que desplaza o sustituye, sin aniquilarlos." (Héctor Jorge Escola, "El Interés Público como Fundamento del Derecho Administrativo", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989, págs. 249 y 250).

El contrato administrativo celebrado entre el Estado y la parte actora tiene evidentemente como finalidad un interés público.

Ante la imposibilidad del Estado de sufragar los gastos que le causaría la inspección de la obra por un tercero, el Ministerio de Salud se vio obligado a asumir la inspección de la obra.

El interés público en este caso debe prevalecer sobre el interés particular. El encarecimiento de la obra por lo prolongado de su ejecución, hizo imposible de costear la inspección durante el período que se prolongaría la obra y ésta debía ser terminada. El interés de la mayoría de los habitantes del Distrito San Miguelito que necesitan recibir servicios médicos debió prevalecer sobre el interés del contratista de que el contrato de inspección le fuera prorrogado.

Por otro lado, aún cuando se estimara que el Estado estaba obligado a prorrogar el contrato, porque no había causal para resolverlo, ni se siguió el procedimiento legal para resolverlo, la Sala no puede restablecer al demandante en su derecho. En primer lugar, porque no puede condenar al Estado a pagar al demandante honorarios por servicios que no fueron efectivamente prestados, ya que esta condena lesionaría el patrimonio del Estado. En segundo lugar, tampoco puede condenar al Estado a pagar al contratista una indemnización por resolución del contrato, porque en la cláusula séptima de dicho contrato, el contratista convino en que "cualquiera que sean las causales de resolución administrativa de este contrato, no dará derecho a EL CONTRATISTA a exigir indemnización alguna a El Estado".

Igualmente, debe la Sala desestimar los cargos endilgados al acto impugnado de violar los artículos 976 y 1109 del Código Civil, porque las normas de derecho común sólo son aplicables a los contratos administrativos celebrados por el Estado en defecto de los preceptos del Código Fiscal, siempre que no quede afectado el interés público, como en el caso en estudio.

Por las razones anotadas, este Tribunal colegiado considera que no se han producido ninguna de las infracciones legales que formulan los demandantes.

En mérito a lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Nota N° 060/95-AL de 13 de diciembre de 1995, emitida por el Viceministro de Planificación y Política Económica y NIEGA las demás declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO

Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TILE Y ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE NICOLÁS JUAN LIAKOPULOS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-6220 DE 11 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Tile y Rosas, actuando en nombre y representación de **NICOLÁS JUAN LIAKOPULOS**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° 213-6220 de 11 de diciembre de 1995**, dictada por la **Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá**.

La parte actora solicita además, que se declare que el Doctor NICOLÁS JUAN LIAKOPULOS, tiene derecho a ser exonerado de pagar las sumas exigidas por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá (fs. 17).

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 59 fechada el 6 de febrero de 1997, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 35-51). Además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley N° 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 28-34).

Mediante auto de 9 de septiembre de 1997, se admitieron las pruebas presentadas por el actor y por la Procuraduría de la Administración y se señaló un término de 20 días para su práctica (fs. 55-57). Una vez practicada la inspección judicial a los libros de comercio, archivos y demás documentos contables del señor NICOLÁS JUAN LIAKOPULOS, prueba aducida por ambas partes en el proceso contencioso que nos ocupa (fs. 72-127), la parte actora presentó oportunamente su alegato de conclusión (fs. 132 a 141) y el proceso está para resolver (fs. 142).

Por medio del acto impugnado, la Administración Regional de Ingresos, resolvió lo siguiente:

1. Sobreseer en forma definitiva al doctor NICOLÁS JUAN LIAKOPULOS, con cédula de identidad personal N° 169-865, por no existir méritos para que se le formulen cargos por defraudación fiscal, al haber omitido ingresos gravables en sus declaraciones de renta de los años 1992, 1993 y 1994; y,

2. Exigir al contribuyente NICOLÁS JUAN LIAKOPULOS el pago del impuesto sobre la renta y seguro educativo causado para los años 1992, 1993 y 1994, según el informe de auditoría de 2 de noviembre de 1995 (fs. 67-73 del exp. adm.), más los recargos e intereses que se causen hasta la fecha de su pago. (Fs. 1-3).

Según consta de fojas 1 a 3 del expediente administrativo, la Administración Regional de Ingresos decidió auditar las declaraciones de renta del doctor NICOLÁS JUAN LIAKOPULOS, correspondientes a los años 1992, 1993 y 1994, por deficiencias comprobadas que aumentaban su renta gravable. Como resultado de la investigación esta institución determinó un impuesto sobre la renta a pagar por B/.44,224.51 y un impuesto de seguro educativo por B/. 3,857.71, cuyo monto resulta de los ingresos por profesión no declarados, que ascienden a un monto de B/.2,190.00, B/.56,147.73 y B/.19,137.85 por los años 1992, 1993 y 1994 respectivamente; y por los gastos objetados correspondientes a los renglones de transporte, comisiones y servicios profesionales, gastos de oficina, luz y teléfono, depreciación, otros gastos e interés hipotecario (fs. 68).

Los ingresos por profesión no declarados se determinaron según los recibos y el cruce de listados y certificaciones de las compañías aseguradoras (fs. 4-7 y 69 del exp. adm.), pruebas que constan de fojas 30 a 31 y 34 a 66 del expediente administrativo. Cabe advertir que estas pruebas sólo incluyen los ingresos certificados por la Pan American Life Insurance, quien detalló los ingresos recibidos directamente por el doctor LIAKOPULOS más los reembolsos a terceros por cuentas a él pagadas. Como el doctor LIAKOPULOS no tenía los registros contables que la ley le exige, y no entregó la facturación de los pacientes no asegurados, no se pudieron cuantificar los ingresos provenientes éstos (fs. 68 y 69).

El doctor LIAKOPULOS alega por su parte, en cuanto a los ingresos no

declarados, que no recibió estos ingresos porque no recibía cheques de la compañía aseguradora Palic Mutualista desde el año 1992 (fs. 24 del exp. adm); y que según el listado de ingresos del contribuyente en las certificaciones expedidas por la Palic le fueron computados ingresos que no le pertenecían (fs. 129).

No obstante, observa la Sala que si bien consta a foja 30 del expediente administrativo la certificación C-95-358 de 12 de septiembre de 1995, emitida por la Gerente de Administración de la Pan American Life, en la que se informa que durante el año 1992 se emitieron cheques a nombre del doctor NICOLÁS JUAN LIAKOPULOS por la suma de B/.370.00 solamente, y que durante los años 1993 y 1994 no se emitieron cheques a su nombre; la razón por la cual no se emitieron pagos directos al doctor LIAKOPULOS por la Pan American Life a partir del 1 de noviembre de 1992, se explica por la carta del 30 de octubre de 1992 (fs. 95), en la que se le comunica que se le descontinuarán estos pagos. No obstante, cada paciente pagaba directamente al doctor a partir de esa fecha, presentando posteriormente a la compañía aseguradora sus facturas por los cobros del servicio médico, a fin de que le fueran reembolsados los mismos.

A juicio de la Sala, la parte actora no ha desvirtuado los cargos que se le imputan en cuanto a los ingresos no declarados durante los años 1992, 1993 y 1994, y carecen de fundamento sus alegaciones.

Cabe recordar, que los actos administrativos se presumen legales hasta que no se pruebe su ilegalidad, es decir, gozan de legitimidad mientras no sean declarados nulos, y corresponde al demandante probar los hechos que alega.

En cuanto al renglón de gastos objetados al contribuyente, los cuales fueron agregados a la renta neta gravable por el monto de B/.2,574.95, B/.4,022.02 y B/.39,971.40 correspondiente a los años 1992, 1993 y 1994 respectivamente, la Administración Regional de Ingresos considera que los gastos de transporte no pueden incluirse porque el automóvil es propiedad de su esposa; porque de las comisiones y servicios profesionales objetados, así como de los gastos de oficina, luz y teléfono, otros gastos e intereses hipotecarios no se presentaron los comprobantes y documentos probatorios de los mismos. (Cfr. fs. 69-72 del exp. adm.)

El apoderado de la parte actora afirmó en el escrito sustentario de la apelación en la vía gubernativa que "En la práctica de la Inspección Ocular, su representado suministró en su momento a los peritos copias de los documentos necesarios para sustentar su Informe Pericial" (fs. 132 del exp. adm), y que reposan en poder de la funcionaria pública que fungió como perito del Fisco. Sin embargo, en este mismo escrito reconoce el hecho de que no presentó documento alguno, ya que acusa a la Administración Regional de pretender que la totalidad de los voluminosos archivos y documentos del contribuyente fuesen incorporados al meritado informe pericial, cuando esta exigencia no constituye requisito establecido en la Ley (fs. 130 vta. y 131 del exp. adm.).

Adicionalmente, en el informe final de auditoría del contribuyente LIAKOPULOS se confeccionó el Acta de Proceso N° 72842, dejando constancia de que el contribuyente no tenía documento que sustentara sus ingresos y el Acta de Fiscalización N° 00657 en la que se anotó que no tenía los libros de contabilidad exigidos por la ley, incumpliendo lo establecido en el artículo 36 de la Ley N° 31 de 1991 (G. O. N° 21,943 de 31 de diciembre de 1991).

En cuanto a las disposiciones que la parte actora estima violadas, artículos 719 y 720 del Código Fiscal; y los artículos 967 y 945 del Código Judicial, a continuación transcribimos el texto de estas normas:

Código Fiscal.

"Artículo 719. -Después de hecha la liquidación del impuesto los funcionarios encargados de su aplicación examinarán minuciosamente las declaraciones e informes del contribuyente.

Si por razón de los exámenes se considera que las declaraciones no

son claras, ciertas o exactas o que se han rendido contraviniendo disposiciones del presente Título, se practicarán todas aquellas investigaciones o diligencias que se consideren necesarias y útiles para establecer la verdadera cuantía de la renta gravable.

(Texto del artículo 719 conforme quedó subrogado por el artículo 7° de la Ley No. 9 de 23 de diciembre de 1964. G. O. No. 15.275 de 28 de diciembre de 1964)

Artículo 720. -Siempre que por razón de las investigaciones o diligencias de que trate el artículo anterior el monto del impuesto a cargo del contribuyente sea mayor del que resulte de la liquidación de que trata el artículo 718, y sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, se expedirá una resolución que contendrá la liquidación adicional por la parte del impuesto que no se haya liquidado. La resolución mencionada contendrá el detalle de los hechos investigados, las sumas sobre las cuales debe liquidarse el impuesto, el monto de la liquidación adicional y los anexos, fundamentos legales y demás detalles que estime convenientes el funcionario investigador.
..."

Código Judicial.

"945. ...
De lo ocurrido en la inspección se extenderá una diligencia que firmarán los que concurrieren, la que formará una prueba más o menos completa, según la naturaleza de su contenido y la clase de afirmaciones que hagan los peritos o testigos que han intervenido en la diligencia, apreciándose de acuerdo con las reglas de la sana crítica".

"967. La fuerza del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en consideración los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso".

A juicio de la Sala no prosperan los cargos de violación de las normas transcritas, ya que corresponde a la parte demandante probar los hechos que alega a su favor para desvirtuar los argumentos legales y pruebas practicadas por la administración. Los artículos 719 y 720 del Código Fiscal facultan a los funcionarios de la Dirección General de Ingresos para examinar las declaraciones e informes del contribuyente, y señalan las formalidades que deben cumplirse para expedirse la liquidación adicional del impuesto, requisitos que, a juicio de la Sala, consta en autos fueron cumplidos por la autoridad demandada.

En cuanto a los artículos 945 y 967 del Código Judicial, que se refieren a la fuerza probatoria de los dictámenes periciales y cómo deben ser apreciadas estas pruebas, la Sala considera que tampoco fueron infringidos, porque el valor de un dictamen pericial depende de su relación con el material de hecho en que se fundamente y el demandante no aportó los comprobantes de los gastos objetados, que fueron incluidos en los informes periciales, y que precisamente fueron objetados por no haberse probado el gasto. Estos comprobantes son necesarios para probar que fueron gastos en que efectivamente incurrió el contribuyente y que dichos gastos fueron hechos para la conservación de la fuente de ingreso del doctor LIAKOPULOS y para la generación de la renta como médico cirujano privado.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 213-6220 de 11 de diciembre de 1995, expedida por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá; y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BERNAL & ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO ENRIQUE NÚÑEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1997, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Bernal & Asociados, en nombre y representación de **OCTAVIO ENRIQUE NÚÑEZ**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción CORREGIDA, para que se declare nulo por ilegal la **Nota de 31 de diciembre de 1997**, emitida por el **Director General de la Policía Técnica Judicial**, y para que se hagan otras declaraciones.

Junto al libelo de demanda, se evidencia dos solicitudes previas: la primera tiene por objetivo de que el Magistrado Sustanciador peticione al Ministerio Público, copia de documentos que a su vez fueron solicitadas a la Policía Técnica Judicial, y que se han negado a la fecha (21 de abril de 1998); y la segunda, es que se suspenda provisionalmente los efectos del acto administrativo acusado de ilegal (ver fojas 33 y 34 del expediente).

Sin embargo, antes de resolver sendas peticiones, el suscrito procede a examinar la demanda para verificar que la misma cumple con los requisitos establecidos en la ley, para que pueda ser admitida.

Observa el Ponente, que el libelo no se apega a las formalidades previstas en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, reformada por la Ley 33 de 1946.

Los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943 dicen:

> "Artículo 44. A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos".
>
> "Artículo 46. Cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre publicación, se expresará así en la demanda, con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el sustanciador antes de admitir la demanda".

Efectivamente, luego de revisada la demanda, este Tribunal advierte, que el actor incurre en los mismos errores por los cuales no le fue admitida la demanda, la primera vez. Esto es que no la acompaña con la copia autenticada del acto acusado de ilegal, es decir la Nota de 31 de diciembre de 1997 (presumimos que es la Resolución N° 81).

Si bien es cierto, como se indicó en párrafos anteriores, el actor peticiona al Sustanciador de esta demanda Contencioso Administrativa, que a su vez, éste pida al Ministerio Público documentos que le fueron negados por la Policía Técnica Judicial, esos documentos no han sido identificados en la solicitud, además de que no consta que el interesado haya llevado a cabo diligencias tendientes a conseguir el acto acusado de ilegal debidamente autenticado, con la constancia de su notificación. Confirma esta última omisión, el hecho de que a foja 23 del expediente reposa una solicitud elevada por el señor OCTAVIO ENRIQUE NÚÑEZ al Director de la Policía Técnica Judicial, en la que

le peticiona certifique que la Resolución que lo separa del cargo es fiel copia de su original, y tiene como fecha de presentación en la Entidad Pública, 19 de mayo de los corrientes, y la corrección de la demanda tiene la misma fecha (ver foja 34), lo que evidencia una vez más el escaso esfuerzo llevado a cabo por la parte interesada en conseguir el acto acusado de ilegal debidamente autenticado, con la constancia de su notificación. Ni siquiera transcurrió el tiempo prudencial para darle la oportunidad al Funcionario Público que contestara la solicitud incoada. Además de que se colige de la actuación del recurrente, que ha aportado un documento con fecha posterior a la Resolución de 13 de mayo de 1998, la cual no admitió la demanda por los mismos errores aquí descritos, para hacer ver que trató de obtener la autenticación del acto acusado.

Al no constatarse la fecha en que fue notificada la destitución del señor OCTAVIO ENRIQUE NÚÑEZ, le es imposible a esta Superioridad determinar si la acción contenciosa presentada, está dentro del término establecido por la Ley Contencioso Administrativa, para que pueda imprimírsele el trámite respectivo. El artículo 42-b de la Ley 135 de 1943, reformada por la Ley 33 de 1946, preceptúa:

> "ARTICULO 42-b.la acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses, a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda". (Subrayado es del Tribunal).

No está demás indicar, que el demandante no ha presentado prueba de que está amparado por la Ley de Carrera Administrativa, o que ingresó por concurso de mérito, y que su posición no es de libre nombramiento y remoción.

Por todo lo antes expuesto, y cumpliendo con el principio de economía procesal, no es procedente acceder a las solicitudes previas requeridas por el actor.

En consecuencia, quien suscribe, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda CORREGIDA Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, propuesta por la firma Bernal & Asociados en representación de OCTAVIO NÚÑEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. CECILIA PORRAS EN REPRESENTACIÓN DE BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD. (SUCURSAL DE PANAMÁ), PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 213-1874 DE 2 DE JUNIO DE 1995, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS, (PROVINCIA DE PANAMÁ) LOS ACTOS CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Cecilia Porras, en nombre y representación de **BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD. (SUCURSAL DE PANAMÁ)**, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la **Resolución N° 213-1874 de 2 de junio de 1995**, dictada por el **Administrador Regional de Ingresos, (Provincia de Panamá)**, los actos

confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Expresa la parte demandante básicamente, que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, expidió liquidación adicional a nombre del contribuyente BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD. SUCURSAL DE PANAMÁ, por supuesta deficiencias en su declaración de Impuesto sobre la Renta para el año fiscal que finalizó en 1992. Que el ajuste realizado con motivo de dichas deficiencias, aumentan la renta gravable del contribuyente por la suma de doscientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa y siete con cuarenta y dos centésimos (B/.268,897,42), detallados de la siguiente manera:

-Asistencia Técnica (Gastos de Casa Matriz)	B/.217,246.50
-Impuestos	5,497.29
-Servicios prestados por profesionales y empresas	7,768.60
-Otros Gastos (Mudanza)	1,036.34
-Otros Gastos (Pérdida en Venta de Activo)	30,897.42
-Total	268,897.42

Continúa expresando el recurrente, que contra la Resolución antes descritas se interpusieron los recursos de reconsideración y apelación, los cuales dieron como resultado los actos confirmatorios Resolución N° 13-3019 de 10 de junio de 1996, y Resolución N° 205-084 de 17 de julio de 1996, respectivamente.

Finalmente, que la Resolución N° 213-1874 de 2 de junio de 1995, viola las siguientes disposiciones: párrafos primero y segundo del artículo 6, artículos 29 y 31 todos del Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965; y artículo 39 del Decreto N° 170 de 1993.

Luego de admitida la demanda, el Magistrado Sustanciador procedió a solicitarle al Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, que rindiera informe de conducta en relación a la demanda incoada.

INFORME DE CONDUCTA

Mediante Nota N° 213-L-964 de 3 de octubre de 1996, el Administrador Regional de Ingresos informó a este Tribunal Colegiado, que se actuó conforme la Ley, en virtud de que en primer lugar, las disposiciones legales invocadas por el apelante en su defensa, es decir los artículos 29 y 31 del Decreto 60 de 1965, establecen claramente que los gastos serán deducibles si se comprueba debidamente que fueron efectivamente incurridos o realizados, y que están destinados a producir renta gravable o a conservar capitales productores de tal renta. Que en segundo término, el excedente del gasto no fue utilizado para producir renta o conservar su fuente. Que la comparación con otras aseguradoras constituyó la forma de determinar con justicia tributaria el porcentaje del gasto que razonablemente sí había incidido en la producción de la renta y la conservación de su fuente.

Por último, dice el Administrador Regional de Ingresos, que la parte actora se ha preocupado más por redargüir lo formal, lo secundario, y que el fondo de la deficiencia consiste en lo excesivo del gasto. Que contrariamente a ello debió demostrar de manera fehaciente que en su caso si era necesaria la totalidad de ese gasto, con relación a su Casa Matriz, para producir renta o conservar la fuente, pero que no lo hizo así, y que por ende la deficiencia debe mantenerse.

De igual manera se le corrió traslado del libelo a la Procuradora de la Administración, para que contestara dentro del término de cinco días a partir de la notificación.

CONTESTACIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista N° 510 de 21 de noviembre de 1996, la Procuradora de la Administración contestó la demanda propuesta por BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD. SUCURSAL DE PANAMÁ, y se opuso a la pretensión aduciendo que los cargos de ilegalidad merecen ser desestimados, ya que la actuación de la Administración

Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, actuó acorde con las disposiciones del Decreto N° 60 de 1965, aplicable al negocio bajo examen.

Que el rubro, contra el cual recurre la parte demandante, denominado Asistencia Técnica (cargos de la Casa Matriz), se dio luego que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá analizara el contrato, que indicaba cuales eran los cargos de Casa Matriz, y la documentación que sustentaba el gasto, lo cual no consideró la empresa recurrente al deducir en su declaración de renta para el año 1992, la suma de B/.275,000.00. Que la Administración Regional de Ingresos, luego de las investigaciones realizadas por los Auditores, conceptuó que el gasto pagado a Casa Matriz era excesivo, por lo que procedió a hacer el reajuste respectivo, ya que había incidido en la producción de la renta y en la conservación de su fuente, en lo referente al Impuesto sobre la Renta. Que para determinar la verdadera cuantía del gasto del contribuyente, utilizó como marco de referencia los resultados de tres empresas de seguros independientes, que se dedican a actividades similares, las cuales incurren tal y como manifestamos en gastos de Casa Matriz.

Que en lo referente al artículo 39 del Decreto N° 170 de 27 de octubre de 1993, el cual se invoca como violado, el mismo no es aplicable al caso bajo estudio, por lo que no fue analizado, pues según la Procuradora, este Decreto entró a regir a partir del 1° de enero de 1994, en tanto que la Liquidación Adicional impugnada sólo comprende el año 1992.

Finalmente, que en relación a la supuesta violación de los artículos 29 y 31 del Decreto N° 60 de 1965, considera que las afirmaciones de la parte demandante carece de asidero jurídico, ya que entre otras razones expuestas, son esas disposiciones la que sirvieron de fundamento jurídico a la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, para expedir la Liquidación Adicional.

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran la Sala Tercera, proceden a resolver la presente controversia.

DECISIÓN DE LA SALA

La primera norma que se estima conculcada es el artículo 6, párrafos primero y segundo del Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965, cuyo tenor literal es el siguiente:

> "Artículo 6: Las sucursales y filiales establecidas en la República de Panamá, de empresas extranjeras llevarán, para los propósitos del impuesto, su contabilidad separada de la casa matriz y de otras sucursales o filiales en el extranjero. El impuesto se liquidará con base a esa contabilidad separada, a cuyo efecto la Dirección General de Ingresos efectuará todas las investigaciones necesarias a fin de que en la determinación de la renta gravable de los establecimientos del país se computen las utilidades reales de fuente panameña.
>
> Cuando, por no haber llevado su contabilidad separada, no se pudiera establecer con exactitud los resultados de las actividades desarrolladas en el país, la Dirección General de Ingresos podrá utilizar como elementos de juicio principal en la determinación de la verdadera cuantía de la renta de fuente panameña los resultados obtenidos por empresas independientes que se dediquen a una actividad idéntica o similar".

La parte actora estima que se han violado los párrafos antes transcritos ya que del análisis de la norma infringida y del fundamento del alcance en concepto De Asistencia Técnica presentado por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, la disposición hace referencia de manera exclusiva a la debida separación que debe existir entre la contabilidad que lleve una sucursal, de la contabilidad de su casa matriz. Que en este sentido, se pudo comprobar que BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD. SUCURSAL DE PANAMÁ y BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD., llevan su contabilidad de manera separada, tal como la Administración Regional de Ingresos pudo constatar, y así lo manifestó en la

Resolución N° 213-3019 de 10 de junio de 1996.

También señala la parte afectada, que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá ha tratado de justificar la medida de determinar la deficiencia en conceptode Asistencia Técnica, basándose en resultados obtenidos por empresas independientes que se dedican a una actividad similar, sin considerar que este procedimiento solamente se aplica en los casos en que las sucursales y filiales establecidas en Panamá de empresas extranjeras no lleven contabilidad separada, situación que no se da en el presente caso, ya que las empresas citadas llevan sus contabilidades completamente separadas. Que la opción de referirse a los resultados de empresas idénticas o similares se utiliza como procedimiento para determinar la renta de fuente panameña y no cuando se requiere fijar la cuantía o monto permisible para la deducibilidad de un gasto.

En este caso, la parte afectada estima que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá estableció la renta gravable de BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD. SUCURSAL DE PANAMÁ, tomando como punto de referencia la renta gravable de tres establecimientos de seguro independientes, que se dedican a actividades similares, cuando la contabilidad de la empresa demandante se lleva de manera separada de la contabilidad de la Casa Matriz. Debemos destacar el hecho de que los actos administrativos se presumen legales, hasta tanto no se pruebe lo contrario. Y en este sentido le decimos que tanto en el expediente administrativo, como en el expediente contencioso, no obra prueba alguna que demuestre que efectivamente, BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD. SUCURSAL DE PANAMÁ llevaba su contabilidad separada de la Casa Matriz, la BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD., que obligara al Administrador Regional de Ingresos a determinar la renta gravable de forma distinta a la que llevó a cabo. Es por esto que mal podría alegar la parte actora, que la contabilidad se llevaba de manera separada, y que el alcance adicional efectuado de renta gravable está al margen de la Ley.

Los tratadistas José Luis PÉREZ DE AYALA y Eusebio GONZÁLEZ, indican que "de este modo, la presunción de legalidad del obrar administrativo se resuelve ante cada acto administrativo tributario concreto en una cuestión de pura técnica jurídica, consistente en determinar qué actos son legítimamente válidos y cuáles no. De suerte, que siendo en el ámbito del Derecho Público la regla general la anulabilidad de los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico (art. 48 de la L. P. A.), parece coherente atribuir a la Administración el beneficio de una presunción que responde al normal desenvolvimiento de sus actuaciones, al tiempo que no desampara al administrado, toda vez que la Administración tendrá que probar el hecho base de la presunción y el contribuyente podrá destruir el hecho promovido mediante la aportación de la oportuna prueba en contrario" (PÉREZ DE AYALA, José Luis y GONZÁLEZ, Eusebio, Curso de Derecho Tributario, Tomo II, 6° Edición.

Editorial de Derecho Financiero, Madrid, España, 1991. Pág. 149) (Subrayado es de la Sala). Aunado a esta tesis, podemos agregar lo que manifiesta Gustavo PENAGOS, que dice que "en las actuaciones administrativas se debe observar los principios de la carga de la prueba, la cual corresponde a los acusadores" (PENAGOS, Gustavo. Vía Gubernativa. Segunda Edición. Ediciones Ciencia y Derecho. Bogotá, Colombia 1995. Pág. 14) (Subrayado es de la Sala).

Reiteramos, que la empresa demandante no ha llevado a cabo esfuerzos para demostrar que se trata de contabilidades separadas, para desvirtuar la decisión del Administrador Regional, pues sólo se circunscribe a refutar las aseveraciones del funcionario aportar las pruebas pertinentes. Por lo anterior no prospera el cargo incoado.

Otra disposición que se estima infringida es el artículo 39 del Decreto N° 170 de 1993, cuyo contenido legal es el siguiente:

> "Artículo 39. Honorarios por servicios profesionales y Técnicos. Se considerarán gastos deducibles los honorarios por servicios profesionales y técnicos que cumplan con las condiciones siguientes:

a. Que el servicio profesional o técnico haya sido efectivamente prestado, no bastando para su comprobación el pago del mismo ni la existencia del contrato;

b. En el caso de honorarios profesionales, que el servicio haya sido prestado por profesionales idóneos; y

c. En el caso de servicios técnicos, que el servicio haya sido prestado por personal calificado.

En todos los casos, deberá existir una relación entre el beneficio recibido por el contribuyente y el valor de los honorarios por servicios profesionales o técnicos efectivamente prestados".

Al sustentarse la disconformidad, el actor indica que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, utiliza como argumento adicional para sostener su alcance en concepto de Asistencia Técnica, que no se da una relación cónsona con los ingresos obtenidos, ni con el servicio prestado por Casa Matriz, y argumenta que el gasto es excesivamente oneroso. Que aparentemente, la Administración fundamenta su posición en el artículo 39 del Decreto N° 170 de 1993, ya que este criterio no estaba recogido en el Decreto N° 60 de 1965, Reglamento de Impuesto sobre la Renta, vigente para el año 1992, año del alcance fiscal. Que cabe mencionar, que este criterio de deducibilidad de un gasto entró en vigencia con posterioridad a l período fiscal bajo análisis (1 de enero de 1994), por lo que no se puede aplicar retroactivamente.

Frente a lo esgrimido por la empresa BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD. SUCURSAL DE PANAMÁ, mediante su procurador judicial, debemos resaltar, que se colige de las Resoluciones impugnadas por el recurrente, como del informe de conducta, que el Administrador Regional de Ingresos en ningún momento utilizó como fundamento de Derecho el Decreto N° 170 de 1993, sino el Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965, para determinar el Alcance en concepto de Asistencia Técnica, lo que hace inaplicable el precepto legal aludido. Esto nos conduce a no se aceptar el cargo impetrado.

Por último la demandante indica que han violentado los artículo 29 y 31 del Decreto N° 60 de 1965, que dicen:

"Artículo 29. (Principios Generales).

Además de los mencionados en el Parágrafo uno del Artículo 697 del Código Fiscal, los gastos o erogaciones cuya deducción de la renta bruta se autoriza son aquellos gastos de conservación o de producción de renta de fuente panameña, efectivamente pagados o incurridos en el año fiscal".

"Artículo 31. (Gastos realizados en el extranjero).

Los gastos realizados o incurridos fuera de la República de Panamá serán deducibles si se comprueba debidamente que fueron efectivamente incurridos o realizados y que están destinados a producir renta gravable o a conservar capitales productores de tal renta".

La transgresión descansa en el argumento, de que no es tema de análisis que el gasto de asistencia técnica sea deducible o no, ya que el alcance realizado por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá se fundamenta en que ese gasto es excesivamente oneroso y no en la deducibilidad, y que esto es así porque en ningún momento dicha Administración concluye que el gasto, por su naturaleza e incidencia en las operaciones de BRITISH AMERICAN INSURANCE CO. LTD. SUCURSAL DE PANAMÁ no es deducible.

Lo argüido por la parte actora para fundamentar la impugnación contra la Resolución N° 213-1874 de 2 de junio de 1995, dictada por el Administrador Regional de Ingresos, (Provincia de Panamá), no es claro, es decir la redacción es bastante confusa, y este Tribunal no comprende cual es la razón jurídica para

señalar que las normas arriba transcrita han sido vulneradas por el mencionado funcionario. Además le hacemos un llamado de atención a la demandante, en el sentido de que las supuestas infracciones debieron sustentarse de manera individual y no como lo ha hecho en este caso, pues la Ley 135 de 1943, reformada por la Ley 33 de 1946 prevé claramente, que el demandante o acusador señalará las normas que se estiman conculcadas y el concepto en que lo han sido. Por estas consideraciones, no prospera el cargo impetrado.

En vista de todo lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 213-1874 de 2 de junio de 1995, dictada por el Administrador Regional de Ingresos, (Provincia de Panamá), los actos confirmatorios.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO TOMÁS VEGA CADENA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD REFORESTADORA MADRID, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° DN-031-96, DEL 3 DE MAYO DE 1996, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Tomás Vega Cadena, en representación de la sociedad **REFORESTADORA MADRID, S. A.**, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° DN-031-96 del 3 de mayo de 1996**, expedida por el **Director Nacional de Reforma Agraria**, y para que se hagan otras declaraciones.

En su libelo, el licenciado Vega Cadena solicitó también la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, sin embargo, por razones de economía procesal, el Magistrado Sustanciador pasa a examinar la demanda para comprobar si cumple con los requisitos legales para ser admitida.

En tal sentido, se aprecia que el apoderado judicial del actor designó incorrectamente a la parte demandada, ya que mencionó como tal al señor Ministro de Desarrollo Agropecuario, a pesar de que el acto original impugnado fue expedido por el Director Nacional de Reforma Agraria. A este respecto, la jurisprudencia de la Sala Tercera ha sostenido que la designación correcta de las partes en las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción no sólo es necesaria para cumplir con el requisito exigido por el artículo 28 de la Ley N° 33 de 1946, sino también porque el informe de conducta al que se refiere el artículo 33 de la misma Ley, sólo puede requerirlo el Magistrado Sustanciador al funcionario o entidad demandada (Cfr. Resoluciones del 5 de mayo y 8 de julio de 1997, Registros Judiciales de mayo y julio de 1997, págs. 320-321 y 334-335, respectivamente).

Se advierte también que el licenciado Vega Cadena señala que la representación del funcionario demandado "corresponde a la señora Procuradora general (sic) de la Administración", designación que es incorrecta, pues, de acuerdo con el artículo 348 del Código Judicial, quien debe intervenir en este proceso en representación del demandado es la señora "Procuradora de la Administración".

Por los anteriores motivos y, con fundamento en el artículo 50 de la Ley N° 135 de 1943, el Magistrado Sustanciador estima que la presente demanda no debe admitirse,

De consiguiente, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Tomás Vega Cadena, en representación de la sociedad REFORESTADORA MADRID, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° DN-031-96 del 3 de mayo de 1996, expedida por el Director Nacional de Reforma Agraria, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR HUMBERTO RICORD, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS MERLANO, DIANA CEDEÑO, OSCAR REMÓN, JAVIER BERROA, JORGE MORÁN, ARTURO ORTEGA Y JUAN TEJADA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS, AL NO CONTESTAR SUS SOLICITUDES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Humberto Ricord, actuando en nombre y representación de los señores **LUIS CARLOS MERLANO RODRÍGUEZ**, **DIANA CEDEÑO**, **OSCAR REMÓN BARLETA**, **JAVIER BERROA DE ICAZA**, **JORGE MORÁN**, **ARTURO ORTEGA Y JUAN BAUTISTA TEJADA**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo de la Junta de Control de Juegos, al no reconocerles el derecho de vacaciones, décimo tercer mes e indemnizaciones por la privatización del **Hipódromo Presidente Remón.**

Al examinar la presente demanda para determinar si cumple con los requisitos para ser admitida se observa que incumple lo preceptuado en el artículo 43 A de la Ley N° 135 de 1943. Veamos.

El apoderado judicial de los demandantes pide la nulidad de siete actos administrativos distintos, toda vez que fueron siete las solicitudes presentadas ante el Director de la Junta de Control de Juegos del Ministerio de Hacienda y Tesoro (fs. 1-21), las cuales, según afirma el recurrente, fueron negadas tácitamente por la administración, y han sido demandadas en la jurisdicción contencioso administrativa de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En reiterados fallos la Sala ha expresado que no pueden ser demandados distintos actos administrativos mediante una sola demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. En el presente caso, los actos administrativos acusados, es decir, las siete negativas tácitas por silencio administrativo, dan lugar a la interposición de siete demandas contenciosas distintas, y en caso de existir elementos en común, es competencia de esta Superioridad proceder a la acumulación.

Por tanto, de conformidad con el artículo 50 de la Ley N° 135 de 1943, la demanda contenciosa que nos ocupa no debe admitirse.

De consiguiente, el suscrito Magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción presentada por el licenciado Humberto Ricord, actuando en nombre y

representación de los señores LUIS CARLOS MERLANO RODRÍGUEZ, DIANA CEDEÑO, OSCAR REMÓN BARLETA, JAVIER BERROA DE ICAZA, JORGE MORÁN, ARTURO ORTEGA Y JUAN BAUTISTA TEJADA, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo de la Junta de Control de Juegos.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE BRODY, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 214-04-0058 DE 14 DE FEBRERO DE 1996, EXPEDIDA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Icaza, González-Ruíz y Alemán, actuando en nombre y representación de **BRODY, S. A.**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° 214-04-0058 de 14 de febrero de 1996**, expedida por la **Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Colón.**

La parte actora solicita, además, que se declare que BRODY, S. A. no está obligada a pagar al Tesoro Nacional las obligaciones tributarias dimanantes de la sanción impuesta, por razón de la supuesta defraudación fiscal en la que incurrió (fs. 18).

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 464 de 17 de octubre de 1996, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 47-56). Además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 30-39).

Mediante auto de 27 de mayo de 1997, se admitieron las pruebas presentadas por el actor y por la Procuraduría de la Administración y se señaló un término de 20 días para su práctica (fs. 60). Una vez practicadas las pruebas (fs. 75-123) y evacuado en rebeldía el término de alegatos, el expediente está listo para resolver (fs. 126).

Por medio del acto impugnado se sancionó a la sociedad BRODY, S. A. con multa de B/.281,101.10 (doscientos ochenta y un mil ciento un balboas con diez centésimos) por haber incurrido en Defraudación Fiscal, con fundamento en el ordinal primero del artículo 752 del Código Fiscal, cuyo tenor literal es el siguiente:

Código Fiscal.

"Artículo 752. -Incurre en defraudación fiscal el contribuyente que se halle en alguno de los casos siguientes, previa comprobación de los mismos:

1° El que simule un acto jurídico o pérdidas que impliquen omisión parcial o total del pago de los impuestos.

(Texto del numeral 1° del artículo 752 conforme fue modificado por el artículo 19 de la Ley No. 31 de 30 de diciembre de 1991. Gaceta

Oficial No. 21.943 de 31 de diciembre de 1991).
...
La defraudación fiscal de que trata este artículo se sancionará con multa no menor de cinco veces ni mayor de diez veces la suma defraudada, o arresto de un mes a un año, excepto cuando tenga señalada una sanción especial en los artículos siguientes de este Capítulo.
..."

El demandante considera que la norma citada, artículo 752 ordinal primero del Código Fiscal, ha sido violada por aplicación indebida, por las siguientes razones (fs. 23):

1. Porque no puede acusarse a BRODY, S. A. de simular pérdidas, ya que en la declaración jurada de rentas del período fiscal 1992, no se consignó que hubo pérdidas en las operaciones, sino, que se declaró que no hubo operaciones "cuando en realidad operó" (fs. 23); y

2. Porque para que se configure la conducta defraudadora, es necesario que la simulación implique omisión parcial o total del pago de los impuestos; así, mientras no se obtenga renta gravable de cualquier fuente dentro del territorio de la República, no se causa el impuesto sobre la renta. Y las operaciones de BRODY, S. A. del período fiscal de 1992, no produjeron ganancias, por lo que no se generó impuesto sobre la renta alguno.

En el expediente administrativo se observa que, la autoridad demandada, con fundamento en los artículos 710 y 755 del Código Fiscal, comisionó a un grupo de tres auditores el 24 de mayo de 1995, para practicar una auditoría integral a la sociedad anónima BRODY, correspondiente a los años fiscales 1992, 1993 y 1994 (fs. 1). Según consta en el informe de 23 de junio de 1995 (fs. 3-6), la investigación de la situación financiera de BRODY, S. A. fue ordenada debido a la información surgida de la auditoría hecha a otra sociedad denominada Chadia Internacional, S. A. y a que BRODY, S. A. presentó Declaraciones Juradas de Rentas de los años 1992, 1993 y 1994 (fs. 19-21 del exp. adm.) sin operaciones.

Al examinar la gestión económica de BRODY, S. A., se constató que la documentación de dicha empresa (facturas de ventas, salidas, traspasos, facturas de compras y documentos de entrada) revela la existencia de transacciones para el año 1992. Como respecto de los años 1993 y 1994, BRODY, S. A. informó que la actividad comercial había sido traspasada a Chadia Internacional, S. A. Para investigar más detalladamente el inventario final del año 1991 se solicitaron a BRODY, S. A. los documentos que probaran el traspaso de la empresa, a Chadia Internacional, S. A. sin que esta presentara prueba alguna, ni registro de actas o escritura de venta, ni factura de traspaso de mercancía que sustentara la transferencia alegada (fs. 3-6).

El resultado de la auditoría presentada el 13 de julio de 1995 (fs. 35-37), determinó que para el año 1993, BRODY, S. A. no tenía que pagar impuesto alguno porque las transacciones no dieron un resultado positivo y tampoco existían registros de transacciones contables realizadas en este período, y que el primer informe enviado a la Administración, en el cual se cuantificó un impuesto a pagar por BRODY, S. A. para el año 1992, por la suma de B/.40,157.30 debía prevalecer (fs. 36).

En el expediente contencioso, la parte actora acepta que operó durante el período fiscal 1992 (fs. 23), pero alega que las operaciones de BRODY, S. A., no configuran la causal de defraudación fiscal invocada por la autoridad demandada, porque: 1. La sociedad BRODY, S. A. no simuló tener pérdidas; y 2. Porque del período fiscal 1992 no se obtuvo una renta gravable ni ganancias que causaran el impuesto.

En cuanto al sentido y significado de la palabra simular, el Diccionario de la Real Academia Española, la define como el acto de "Representar una cosa, fingiendo o imitando lo que no es". (Vigésima Primera Edición, Editorial Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1992, pág. 1335) Y leemos a foja 23 de la demanda, que la sociedad BRODY, S. A. acepta que sí operó durante el período fiscal 1992, pero

que no declaró estas operaciones por un error de interpretación de la legislación fiscal, porque consideró que las ventas correspondían a Sonex Traders y que el dinero recibido de esta empresa, era un mero reembolso de gastos que no generaba renta gravable alguna (fs. 20), y que los contadores se confundieron determinando que era una operación exterior, y que las operaciones exteriores no tienen que pagar impuestos localmente (fs. 40).

Sin embargo, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, tal como lo dispone el artículo 1 del Código Civil, y la declaración de renta de la empresa BRODY, S. A. del período fiscal 1992, reportada sin operaciones (ver fs. 19 del exp. adm.), no se ajusta a la realidad del movimiento comercial de esta empresa durante ese año, hecho que constituye, a juicio de la Sala, una simulación. El artículo 752 párrafo primero se refiere a la simulación de un acto jurídico "o" a la simulación de pérdidas, por lo que la conjunción disyuntiva "o" admite ambas situaciones. En nuestro caso, no nos referimos a la simulación de pérdidas, sino que el acto jurídico simulado lo constituye la declaración jurada de rentas de la sociedad demandante para el período fiscal 1992.

A juicio de la Sala, constituye una simulación el hecho que BRODY, S. A. no registrara en su declaración jurada de rentas, el movimiento comercial de compras y ventas y el pago de comisiones por la casa matriz Sonex Traders Ltd, que aunque fueron hechas en su condición de agente y filial de esta empresa, estaba obligada por ley a llevar los registros de contabilidad, tal como lo exige el artículo 702 literal b) del Código Fiscal y a presentar declaración de estas operaciones comerciales aunque fueran operaciones exteriores, conforme el artículo 701 literal d) idem.

En cuanto al segundo de los argumentos, de que no se obtuvo renta gravable que causara impuesto respecto de las operaciones del año fiscal 1992, la Sala procede al estudio de las normas aplicables y las pruebas aportadas.

El Código Fiscal regula en sus artículos 701 literal d) y 702 literales b) y c), como deben tributar las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón, cuál es la renta gravable y el impuesto a pagar por estas empresas.

Estas normas distinguen dos clases de operaciones que realizan las personas naturales o jurídicas que tengan establecidas o que establezcan en el futuro negocios en la Zona Libre de Colón o en cualquier otra Zona Libre. Estas son las operaciones interiores y las operaciones exteriores de las empresas de las Zonas Libres. Esta distinción es de suma importancia para determinar la obligación tributaria de la sociedad BRODY, S. A. como empresa que realizó operaciones en la Zona Libre de Colón, toda vez que el impuesto a pagar es diferente en cada una de estas operaciones y la parte actora alega que sus contadores se confundieron determinando que era una operación exterior, y que las operaciones exteriores no tienen que pagar impuestos localmente (fs. 40).

Las disposiciones vigentes a la fecha en que se causó el impuesto del período fiscal 1992, son del tenor siguiente:

Código Fiscal.

"Artículo 701. -Para los efectos del cómputo del impuesto sobre la renta en los casos que a continuación se enumeran, se seguirán las siguientes reglas:
...
d) En los casos de personas naturales o jurídicas que tengan establecidos o que establezcan en el futuro establecimientos en la Zona Libre de Colón o en cualquier otra Zona Libre que exista o sea creada, **se pagará la totalidad del impuesto de acuerdo** a las tarifas establecidas en el artículo 699 o 700 de este Código, según sea el caso, sobre la renta gravable obtenida de **operaciones interiores**, entendiéndose por dichas operaciones las transferencias realizadas a adquirientes ubicados dentro del territorio nacional, inclusive las efectuadas a barcos o aviones que usen las facilidades de puertos o aeropuertos nacionales.
...

Por la renta gravable obtenida en **operaciones exteriores**, las personas establecidas en las zonas libres **pagarán el Impuesto sobre la Renta conforme** a la siguiente tarifa progresiva combinada.

Si la renta gravable es: El impuesto será ...

(Texto del literal d) del artículo 701 conforme fue subrogado por el artículo 24 de la Ley No. 36 de 27 de septiembre de 1979. Gaceta Oficial No. 18.925 de 10 de octubre de 1979.

Vease el artículo 1° de la Ley No. 24 de 29 de abril de 1975. G. O. No. 17.831 de 2 de mayo de 1975.
Vease el art. 5° de la Ley 9 de 1964. G. O. No. 15.275 de 28 de dic. de 1964".

"Artículo 702.- Se establecen los siguientes créditos y rebajas al monto del Impuesto sobre la Renta:

...
b) Las personas naturales o jurídicas que perciban dividendos o participaciones de las personas mencionadas en el acápite d) del artículo anterior no estarán obligadas **a pagar el impuesto por dichos dividendos** o participaciones provenientes de rentas obtenidas en **operaciones exteriores**.

Se entienden por **operaciones exteriores**, para los efectos de este artículo y del anterior las que se realicen con mercadería extranjera o nacional que salga de dichas áreas de comercio internacional libre destinadas al exterior.

Tales personas deberán llevar por separado **en su contabilidad las operaciones exteriores e interiores; y los gastos** de administración de carácter general, con respecto a los cuales no sea fácil hacer tal separación, **se prorreatarán entre las operaciones exteriores y las interiores en proporción directa al monto de los ingresos brutos declarados para cada una** de dichas clases de operaciones.

(Texto del artículo 702 conforme fue subrogado por el artículo 2° de la Ley No. 24 de 29 de abril de 1975. G. O. No. 17.831 de 2 de mayo de 1975).

Vease artículos 1° al 4° de la Ley 87 de 1961; artículo 1° de la Ley No. 92 de 28 de diciembre de 1961 y artículo 5° de la Ley No. 9 de 23 de diciembre de 1964.

Vease artículos 2° y 3° de la Ley 24 de 1975". (Resalta la Sala).

Nos preguntamos entonces, cuál es la naturaleza de las operaciones hechas por BRODY, S. A. y cuál es el impuesto causado y cuál es el impuesto causado.

En la declaración indagatoria rendida por el representante legal de la empresa demandante, éste señaló que BRODY, S. A., se dedicaba a vender la mercancía, visitar los clientes y hacer pedidos para Sonex como representante de la empresa Sonex Limited, y como filial de la misma; que por instrucciones de la empresa Sonex en Hong Kong, para no mezclar la cuenta de los clientes que devolvían mercancía, se les ordenó que todas las operaciones se realizaran a través de la empresa Chadia Internacional, S. A. y por error en el manejo interno se omitió involuntariamente cumplir con el procedimiento de traspaso que exige la ley, y esto se debió en parte a que ambas empresas pertenecen al mismo consorcio de Sonex, las dos operan en el mismo local y la mercancía nunca se movió del local; que actualmente BRODY, S. A. solamente es vendedor y que Chadia Internacional, S. A. es la única que factura mercancía en la Zona Libre y sólo lo hace sobre mercancías que han sido rechazadas y canceladas a Sonex; que el dinero de las ventas locales se paga a BRODY, S. A., pero los fondos son transferidos a Sonex en Hong Kong, y ésta a su vez remite a BRODY el pago de los

gastos de operación; y que la ganancia de estas operaciones es de Sonex, razón por la que los contadores se confundieron determinando que era una operación exterior, y que las operaciones exteriores no tienen que pagar impuestos localmente (fs. 39-40).

Contrario a lo afirmado por el recurrente, las disposiciones transcritas disponen que tanto las operaciones interiores como las exteriores causan impuesto y deben ser declaradas por las empresas que operan dentro de la Zona Libre de Colón, por tanto, yerra el actor al afirmar que las operaciones exteriores no tienen que pagar el impuesto sobre la renta.

En cuanto a los informes periciales presentados por los peritos de la parte actora (fs. 75-88) y por los peritos de la Administración (fs. 89-119), la Sala observa que el dictamen rendido por los peritos de la parte actora adolece de defectos que le restan fuerza probatoria, toda vez que no se ajusta a las disposiciones del Código Fiscal. Este dictamen contiene imprecisiones y fallas técnicas al computar el impuesto causado, porque, por ejemplo, incluye entre los gastos del período fiscal 1992, el denominado inventario inicial de B/.3,077,951.46 (fs. 75), que no es más que el valor de la mercancía que había en depósito al finalizar el año 1991. Sin embargo, este monto no puede incluirse como un gasto en la declaración porque no es un gasto del período fiscal 1992, sino un gasto anterior a ese período fiscal, que ya fue declarado en el año en que se hizo, por lo que no puede redeclararse año tras año.

Adicionalmente, observa la Sala que este peritaje no incluye los ingresos recibidos mensualmente por BRODY, S. A., en su cuenta bancaria Bank National de París, Sucursal Zona Libre de Colón, producto de los pagos hechos por Sonex Traders Limited en concepto de comisiones por servicios y manejos de su mercancía, los cuales ascienden a la suma de B/.180,000.00 (fs. 117), como tampoco incluye los gastos de la empresa por prestaciones laborales y planillas pagadas a la Caja de Seguro Social, ambos rubros contemplados por los peritos designados por la Administración. Cabe advertir, que las comisiones no pueden considerarse como renta de fuente extranjera, como lo alega el demandante a foja 101 del expediente administrativo, porque el artículo 694 parágrafo 2 del Código Fiscal expresamente dispone cual es la renta de fuente extranjera y estas comisiones no están incluidas en ninguno de sus literales.

En cuanto al peritaje presentado por los peritos de la Administración, la Sala considera que se ajusta a la ley, y con fundamento en este peritaje podemos afirmar:

1. Que en los libros de la empresa BRODY, S. A., el Mayor, el Diario y el de Actas, no se encontraron registros de operaciones para el período 1992, pero la documentación presentada por BRODY, S. A. prueba que efectivamente sí hubo operaciones comerciales para ese período.

2. Que el valor de las facturas de ventas, formularios de salidas y traspasos de mercancías ascienden a un monto de B/.6,973,144.68.

3. Que mensualmente se le acredita a BRODY, S. A. en su cuenta bancaria Bank National de París, por la casa matriz en Hong Kong, pagos en concepto de comisiones, por servicios y manejos de su mercancía en Zona Libre de Colón, y que en el año 1992 esos pagos por comisiones sumaron B/.180,000.00.

4. Que de las facturas de compra, formularios de entradas y traspasos se apreció que BRODY, S. A. no sólo le compra mercancía a su casa matriz Sonex, sino también a otros proveedores, y en 1992 esas compras sumaron B/.6,472,046.06.

5. Que muchas de las facturas de compra tienen membretes de Sonex Traders Limited cuyos destinatarios son diferentes empresas ubicadas en la Zona Libre de Colón, en la cual aparece como Agente la Empresa BRODY, S. A., pero también muchas facturas vienen directamente de Sonex a BRODY, S. A., lo que permite concluir que BRODY, S. A. recibe mercancías de su casa matriz que luego vende.

6. Que para el análisis del renglón de gastos deducibles, BRODY, S. A. suministró planillas pre-elaboradas de la Caja de Seguro Social y gastos en prestaciones

laborales, por el monto de B/.27,931.47.

7. Que del total de los ingresos (ventas o salidas) más las comisiones (transferencias bancarias), menos los costos (entradas) y los gastos deducibles, la renta gravable de BRODY, S. A. es B/.653, 167.15 y el impuesto causado B/.52,194.20.

8. Que de la documentación de las ventas, compras y traspasos de BRODY, S. A. se puede concluir que vende con un margen de utilidad, porque sus facturas de compra tienen un costo y al ser facturadas para vender tienen otro costo mayor y con el informe se adjuntan fotocopias de documentos que así lo demuestran (fs. 100-116); pero de la misma forma también se vende mercancía al mismo costo y por debajo del costo (fs. 122-123).

Según consta en la hoja de trabajo de los peritos de la Administración (fs. 89), al calcular el impuesto causado del período fiscal 1992, las operaciones de la empresa BRODY, S. A. fueron calificadas como operaciones exteriores y a la renta gravable de la empresa por el monto de B/.653,167.15, se le aplicó la tarifa progresiva combinada del artículo 701 literal d) del Código Fiscal antes de la modificación por la Ley N° 28 de 1995, norma vigente a la fecha en que se causó el impuesto.

Cabe observar, que otro alegato de defensa de la parte actora expresa que BRODY, S. A. era un agente de movimiento de mercancía a nivel internacional y que las operaciones de traspaso gravables en el año de 1992, no generaron ingresos gravables, con fundamento en la Ley N° 28 de 20 de junio de 1995, de Universalización de Incentivos (fs. 62 del exp. adm.), ley que no le es aplicable porque su vigencia es posterior al momento en que se causó el impuesto del año fiscal 1992.

La Ley N° 28 de 20 de junio de 1995 (G.O. N° 22.810 de 22 de junio de 1995), en su artículo 5 modificó el artículo 701 literal d) del Código Fiscal. Según esta disposición, se entiende por operaciones exteriores u operaciones de exportación de las personas establecidas en las zonas libres, las transacciones de venta que se realicen con mercancía nacional o extranjera que salga de dichas zonas libres destinadas o con destino a clientes ubicados fuera del territorio de Panamá; los traspasos entre personas naturales o jurídicas ubicadas dentro de esas zonas libres y las rentas provenientes de comisiones sobre operaciones exteriores efectuadas en las zonas libres. También incorporó esta norma, la definición de los agentes de movimiento de mercancía como "aquellas personas que se dediquen a proporcionar servicios de movimiento de mercancía a nivel nacional y/o internacional, tales como manejo de transporte, almacenaje, servicios relacionados a la distribución física de mercancía con transportistas, ya sea en su propio nombre o de los dueños de la mercancía o sus representantes autorizados." A fin de considerarlos como agentes de movimiento de mercancías, éstos no podrán adquirir el título de propiedad, ni dedicarse a la compra y venta de las mercancías que manejan por cuenta de terceros. Cabe observar, que estos agentes también se encuentran obligados a liquidar sus impuestos con base en una tarifa única, por lo que no están exonerados totalmente del pago del impuesto sobre la renta, como lo afirma el demandante.

De conformidad con el detalle que presentó el Informe de Auditoría hecho por la Dirección General de Ingresos, la suma defraudada por BRODY, S. A. se calculó en B/.40,157.30, como el valor del impuesto sobre la renta dejado de pagar en 1992, y se le sancionó con una multa de siete (7) veces la suma defraudada, equivalente a B/.281,101.10. Por tanto, observa la Sala, que la suma del impuesto causado tomada como base por el acto impugnado es incluso menor al monto que arrojó el peritaje que consta a foja 119 por un valor de B/.52,194.20.

Por todo lo expuesto la Sala considera que no se ha violado el artículo 752 ordinal primero del Código Fiscal.

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola también los artículos 762 del Código Fiscal y 197 del Decreto Ejecutivo N° 170 de 27 de octubre de 1993, cuyo texto transcribimos a continuación:

"Artículo 762. -Cuando el multado no pague total o parcialmente la multa dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la ejecutoria de la resolución respectiva, sufrirá en subsidio la pena de arresto a razón de un (1) día de dicha pena por cada dos balboas (B/2.00) de multa que no pague; pero en ningún caso podrá exceder el término de diez (10) años.

La conversión en arresto en los casos contemplados en este artículo, la declarará en única instancia la Dirección General de Ingresos. ...".

Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993.

"Artículo 197. -Vigencia.
El presente decreto entrará a regir a partir del primero (1) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994)".

Considera el demandante, que el artículo 762 del Código Fiscal, se ha violado por indebida aplicación, porque al no existir la obligación de pagar tributo alguno, por la ausencia de ganancias de la sociedad BRODY, S. A. durante el período fiscal 1992, no se le puede acusar de defraudadora del Tesoro Nacional.

Conforme lo hemos expresado en líneas precedentes, sí consta en autos la conducta defraudadora de BRODY, S. A., toda vez que recibió ganancias de sus operaciones del año fiscal 1992, razón por la cual le es aplicable esta disposición y la misma no se ha violado.

Finalmente, en cuanto al último cargo de violación, la Sala observa que el demandante considera violado el artículo 197 del Decreto Ejecutivo N° 170 de 1993, porque dicho Decreto fue invocado como fundamento de derecho del acto impugnado (fs. 25). Sin embargo, no señala específicamente, cuáles disposiciones de este decreto le fueron aplicadas sin estar vigentes. Además, de que la conducta de defraudación fiscal sancionada mediante el acto impugnado, está regulada en el Código Fiscal y estaba reglamentada también en el Decreto N° 60 de 28 de junio de 1965, que fue derogado por el Decreto N° 170 de 17 de octubre de 1993. Por tanto, la Sala considera que no prospera el cargo de violación del artículo 197 del Decreto Ejecutivo N° 170 de 1993.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 214-04-0058 de 14 de febrero de 1996, expedida por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Colón; y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR EN REPRESENTACIÓN DE HILDA GIRAUD, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 14-D.G.T. 53-98 DE 17 DE FEBRERO DE 1998, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Eduardo Ríos Molinar, actuando en representación de **HILDA GIRAUD**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, con el objeto de que se declare nula por ilegal, la **Resolución N° 14-D.G.T. 53-98 de 17 de febrero de 1998**, dictada por la **Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral**, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si se cumplen con todos los requisitos necesarios para que aquella pueda ser admitida.

El auto impugnado lo constituye la Resolución 14-D.G.T. 53-98 de 17 de febrero de 1998, dictada por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en la que se resolvió absolver a los demandados: Valeria Jiménez de Lara, Dagoberto Lara Villar, Oficosa, S. A., Lara y Asociados, S. A., Recuperaciones y Cobranzas, S. A., V.D. Solutions, S. A., y Nova, S. A., de la demanda interpuesta por Hilda Giraud, donde reclamaba el pago de los derechos y prestaciones laborales por incumplimiento del Artículo 215 del Código de Trabajo. Esta decisión fue confirmada en apelación, mediante la Resolución N° D.M.19-98 de 7 de abril de 1998, dictada por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

El Artículo 98 del Código Judicial establece claramente que la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de los decretos, órdenes, resoluciones, o cualesquiera actos, sean generales o individuales, en materia administrativa, que se acusen de ilegalidad. Esta Sala ha sido constante en mantener el criterio de que las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, mediante las cuales se resuelvan conflictos laborales regulados por la legislación laboral y a los cuales se le aplican procedimientos especiales, son actos materialmente jurisdiccionales y no actos administrativos. Consideramos, que la Resolución 2 N° 14-D.G.T. 53-98 de 17 de febrero de 1998, confirmada por la Resolución ° D.M. 19-98 de 7 de abril de 1998, constituye un acto meramente jurisdiccional, mismo que no puede ser impugnado ante esta jurisdicción contencioso administrativa.

El suscrito Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso presentada por el Licenciado Eduardo Ríos Molinar, en representación de HILDA GIRAUD.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RUBIO, ALVAREZ, SOLÍS & ÁBREGO EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSIONES MAC MAC, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 19-96 DE 26 DE FEBRERO DE 1996 DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PANAMEÑO DE TURISMO, EL ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Rubio, Alvarez, Solís & Ábrego, en representación de **DIVERSIONES MAC MAC, S. A.** ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° 19-96 de 26 de febrero de 1996**, dictada por la **Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo**, el acto confirmatorio, y para que se hagan otras declaraciones.

Lo que se Demanda

El recurrente solicita a esta Superioridad que se declare la ilegalidad de la mencionada Resolución N° 19-96 de 26 de febrero de 1996, dictada por la Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo, por la cual se resolvió rechazar la inscripción de dicha empresa en el Registro Nacional de Turismo, debido a que el "Proyecto Diversiones MOY" presentado por la empresa DIVERSIONES MAC MAC, S. A. ni la actividad de centro de entretenimiento familiar a través de máquinas o simuladores electrónicos de juegos para la diversión, a la que se dedica la empresa, se ajustaba al concepto de parque temático que señala la Ley N° 8 de 1994, su reglamento y modificaciones.

Aunado a lo anterior, el recurrente solicita que se ordene al Instituto Panameño de Turismo (en adelante IPAT), la inscripción de la sociedad DIVERSIONES MAC MAC, S. A. en el Registro Nacional de Turismo. Además, que se ordene al IPAT cumplir con las etapas complementarias posteriores al registro, tal cual lo ordenan la Ley 8 de 1994 y el Decreto Ejecutivo N° 73 de 1995.

Los Hechos u Omisiones de la Acción según el Actor

Las citadas pretensiones las fundamenta el demandante en los siguientes hechos:

1. Que DIVERSIONES MAC MAC, S. A. solicitó ante el IPAT su inscripción en el Registro Nacional de Turismo para desarrollar la actividad de Parque Temático con fundamento en la Ley N° 8 de 1994, reglamentada por los Decretos Ejecutivos N° 73 de 1995, y el N° 197A de 1995.

2. Que mediante Resolución N° 19-96 de 26 de febrero de 1996, la Junta Directiva del IPAT rechazó la inscripción de la Empresa DIVERSIONES MAC MAC, S. A. en el Registro Nacional de Turismo.

3. Que contra la Resolución N° 19-96 se interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio, ante la Junta Directiva del IPAT, la cual fue confirmada mediante Resolución N° 43-96 de 22 de mayo de 1996.

Informe de Conducta

Por medio de la Nota 112-225-97 de 30 de junio de 1997, que reposa a páginas 57-60 del expediente contencioso, el Presidente de la Junta Directiva del IPAT informó a esta Superioridad de la actuación administrativa adoptada cuya ilegalidad se acusa, argumentando básicamente lo siguiente:

> "La Ley No. 8 de 1994 le otorga a la Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo la facultad privativa de aprobar la inscripción de una empresa en el Registro Nacional de Turismo, acción cuyo efecto produce el que la misma pueda gozar de los beneficios fiscales que establece dicha Ley. Si bien la Junta Directiva recibe los informes técnicos, económicos, turísticos y legales por parte de los funcionarios del Instituto Panameño de Turismo, esta máxima autoridad del IPAT tiene la libertad legal, otorgada por la misma Ley No. 8 de 1994 y por el Decreto Ley No. 22 de 1960 orgánico de la Institución de tomar las decisiones que considere apropiadas para la buena marcha del turismo en el país. La decisión tomada en torno a la empresa DIVERSIONES MAC MAC, S. A., no fue apresurada, tampoco faltó en ella los análisis correspondientes, al contrario, la preocupación de los Señores Directores por la actividad y la buena aplicación de la Ley No. 8 de 1994, los llevó a solicitar a un miembro del sector público y otro del sector privado para que visitaran el local comercial y posteriormente se les informara sobre la actividad real que el mismo desarrolla. En este sentido, la Junta Directiva determinó que no es preciso que el Estado, a través de los incentivos fiscales que establece la Ley No. 8 de 1994, participara en la promoción de una actividad comercial que no es significativa para la grata estadía del turista en el país".

De las Disposiciones Acusadas y el Concepto de la Violación

A juicio de la sociedad DIVERSIONES MAC MAC, S. A. la resolución impugnada es violatoria del artículo 29, primer párrafo de la Ley N° 8 de 1994, así como del artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 73 de 8 de abril de 1995.

El artículo 29 preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 29. Recibido el formulario de inscripción con toda la información y documentación requeridas, el Instituto Panameño de Turismo deberá proceder, en un término no mayor de sesenta (60) días calendario, a la consideración de los aspectos técnicos, económicos, legales y turísticos del proyecto presentado; y, de ser así, inscribir a la empresa en el Registro Nacional de Turismo y expedir una certificación, en que conste la fecha de inscripción de la empresa en el registro nacional de Turismo y, por lo tanto, goza de los beneficios establecidos en esta Ley".

Como concepto de la violación de la citada disposición legal, el recurrente sostiene que el IPAT, a través de su Junta Directiva, infringió dicha norma en forma directa por omisión, ya que obviamente no consideró los aspectos técnicos, legales y turísticos del proyecto, por medio de las respectivas evaluaciones, en las que consta que el proyecto cumple con todos los requisitos generales mínimos que exige la Ley como un Parque Temático y presenta un atractivo turístico según lo establecido tanto en el Artículo 51, acápite I del Decreto N° 73 de 8 de abril de 1995, así como el Artículo 52, acápite I del mismo Decreto.

En tanto, el artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 73 de 8 de abril de 1995, señala que:

> "ARTICULO 14. Analizadas las pruebas aportadas y realizadas aquellas otras investigaciones necesarias para decidir, el Instituto Panameño de Turismo expedirá una resolución en donde reconocerá la empresa, su clasificación y/o categoría turística; ordenará su inscripción en el Registro Nacional de Turismo, la orden de inscripción de marginales en las inscripciones del Registro Público y expedirá las certificaciones y documentos de identificación de beneficios fiscales a que diera lugar la clasificación".

Como concepto de la violación de la precitada norma reglamentaria, la parte actora señala que el IPAT infringió la misma en forma directa, por omisión, ya que no analizó las pruebas aportadas por la propia Institución, donde constaba que la empresa cumple con todos los requisitos generales mínimos de la Ley en especial, el Artículo 51, acápite I del Decreto N° 73 de 8 de abril de 1995, así como el artículo 52, acápite I del mismo Decreto. Que, consecuentemente, el rechazo de la inscripción y la correspondiente confirmación, deviene en ilegal, ya que si los hubieran analizado, las conclusiones serían de que la empresa ha cumplido con las normas antes dichas, y por lo tanto, se cumple con los requisitos para optar por el registro impetrado.

Criterio de la Procuradora de la Administración

Mediante la Vista Fiscal que corre a fs. 61-68 del expediente principal, la Procuradora de la Administración solicitó a esta Sala negar la pretensión del recurrente, dado que las mismas carecen de fundamento jurídico, argumentando que los aspectos turísticos, técnicos, económicos y legales no fueron coincidentes en la evaluación del Proyecto de la demandante, razón por la cual, la Junta Directiva del IPAT no aprobó su inscripción en el Registro Nacional de Turismo, aunado al hecho que la Junta Directiva consideró que la actividad realizada por la empresa no podía clasificarse como oferta turística, puesto que no estimulaba la permanencia del turista en el país, ni fomentaba el turismo interno.

Decisión de la Sala

Vistos los argumentos de las partes involucradas en este proceso, la Sala pasa a decidir la controversia.

Como viene expuesto, el presente negocio guarda relación con la Resolución N° 19-96 expedida por la Junta Directiva del IPAT, por cual se rechazó la inscripción de la empresa DIVERSIONES MAC MAC, S. A. en el Registro Nacional de Turismo, debido a que el proyecto DIVERSIONES MOY, ni la actividad de centro de entretenimiento familiar a través de máquinas o simuladores electrónicos de juegos para la diversión, a la que se dedica la empresa, se ajusta al concepto de "Parque Temático" que señala la Ley N° 8 de 1994, su reglamento y modificaciones.

De conformidad con el artículo 52 del Decreto Ejecutivo N° 73 de 8 de abril de 1995, que reglamenta la Ley 8 de 14 de junio de 1994 "por la cual se promueven las actividades turísticas en la República de Panamá los Parques Temáticos: "Son áreas recreativas cuyas instalaciones están diseñadas y construidas para exaltar uno o varios temas específicos, ya sean históricos, sociales, culturales, tecnológicos, científicos o naturales que a juicio del Instituto Panameño de Turismo contribuya al desarrollo de un atractivo, centro o zona turística. Generalmente en sus instalaciones y funcionamiento se utilizan efectos visuales, acústicos, físicos y mecánicos, ofreciendo una experiencia atractiva al visitante, a través de los espacios y el tiempo, lo que produce el efecto de trasladarse de la realidad a la fantasía".

El artículo 1 de la Ley 8 de 1994, señala como uno de los objetivos de la misma, el otorgar incentivos y beneficios a las personas que se dediquen a actividades turísticas. De conformidad con el artículo 5 de la Ley ibídem, las personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades turísticas, y que obtengan la inscripción en el Registro Nacional de Turismo, podrán acogerse a los incentivos y beneficios de la presente Ley.

El artículo 6 de la aludida Ley 8 de 1994, señala que se entiende por actividades de promoción y desarrollo turístico, "aquellas que contribuyan efectivamente al incremento de visitantes extranjeros a nuestro país y a la diversificación de la oferta turística, al igual que las inversiones en actividades que incentiven tal incremento de visitantes".

El artículo 7 de la Ley 8 de 1994 ibídem, establece que "El derecho a recibir los beneficios que establece esta Ley se reconoce con la inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Turismo y la emisión de una certificación del Instituto Panameño de Turismo, que especificará los derechos y obligaciones del beneficiado".

Tanto el artículo 26, en concordancia con el 27, ambos, de la Ley 8 de 1994, disponen cuáles son los requisitos para solicitar la inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Tales disposiciones son complementadas por el artículo 52 que establece los requisitos mínimos para la clasificación o categorías de los locales destinados a las actividades turísticas, y, en el caso de los "Parques Temáticos", el acápite I dispone que los requisitos generales mínimos son los que a continuación se transcriben, para mayor ilustración:

"ARTICULO 52.

...
I. PARQUES TEMÁTICOS

Deben reunir los siguientes requisitos generales mínimos:

1. Presentar al Instituto Panameño de Turismo los estudios técnicos y de operación que justifiquen el o los temas que desarrollarán.

2. Disponer de una entrada para el público, con información y mapa descriptivo de las instalaciones, boletería y administración.

3. Disponer de áreas de estacionamiento.

4. Contar con diversidad de instalaciones desarrolladas de conformidad con el tema escogido.

5. Brindar el servicio de alimentos y bebidas.

6. Disponer de servicios sanitarios para el público separados para damas y caballeros.

7. Funcionar todo el año o por temporadas.

8. Cumplir con las leyes, reglamentos, medidas de control y fiscalización del Instituto Panameño de Turismo.

9. Contar con servicios médicos de primeros auxilios".

El recurrente alega haber dado cabal cumplimiento a tales requerimientos legales y reglamentarios, y, por tanto, la Junta Directiva del IPAT, debió proceder a la inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Turismo.

Sin embargo, esta Superioridad estima que la facultad de ordenar la inscripción de una empresa en el Registro Nacional de Turismo con los consiguientes incentivos fiscales, no está limitada a los precitados requisitos mínimos legales y reglamentarios, ni tampoco está sujeta a las evaluaciones turísticas, técnica, financiera y legal, estas últimas más bien constituyen criterios que ayudan a la Junta Directiva a proceder o no, a ordenar la referida inscripción.

La inscripción en el Registro Nacional de Turismo también está sujeta a lo que establece el Artículo 51, literal I del Decreto Ejecutivo N° 73 de 1995, transcrito en líneas anteriores, que señala los requisitos establecidos para la actividad a realizar, en el caso que nos ocupa "PARQUE TEMÁTICO", que a juicio del Instituto Panameño de Turismo contribuya al desarrollo de un atractivo centro o zona turística.

La razón por la cual la Junta Directiva del IPAT rechazó la inscripción en el Registro Nacional de Turismo del "Proyecto Diversiones MOY", presentado por la empresa DIVERSIONES MAC MAC, S. A. obedeció a que el mismo no se ajusta a los fines de la Ley de incentivos turísticos, y que no es una actividad de promoción y desarrollo turístico, que contribuye efectivamente al incremento de visitantes extranjeros a nuestro país así como el fomento del turismo interno.

Para llegar a esa conclusión la Junta Directiva del IPAT señala que la empresa DIVERSIONES MAC MAC, S. A. es un Centro de Entretenimiento Familiar, que opera a través de máquinas de diversión o entretenimiento, que utiliza un sistema (DIVERTIMOY) de administración y mercadotecnia computarizado conformado por un sofware y un hardware desarrollado por MEXEL que sustituye el uso de monedas y fichas para activar las máquinas de entretenimiento, por la utilización de la tarjeta debituaria de banda magnética MOYMONEY, tal como se desprende de las constancias que reposan a fs. 59-60 del expediente gubernativo. De igual manera, tomó en consideración y, a solicitud de la propia institución, la visita al sitio donde funciona el local comercial, que realizaran la Licenciada Orcila de Constable, representante del Ministerio de Planificación y Política Económica y el señor Roberto Domínguez, representante de la Asociación Panameña de Hoteles, quienes determinaron que el negocio se dedica a lo que se conoce como juegos de maquinitas, dirigidos en forma principal al mercado de los adolescentes. (F. 59).

Además, la Junta Directiva también tomó en cuenta las estadísticas del Instituto Panameño de Turismo en las que consta que para el año 1996, ingresaron al país por el Aeropuerto de Tocumen un total de 328,725 personas, de los cuales 6,262 eran jóvenes de 10 a 14 años y 8,376 eran jóvenes de 15 a 19 años, lo que significa que el mercado turístico panameño no tiene su base fundamental en la atracción de adolescentes. (F. 59).

Ante tales circunstancias, amén de que, contrario a las aseveraciones vertidas por la empresa recurrente, este Tribunal observa que no existe uniformidad en cuanto a los criterios turístico, técnico, financiero y legal, en torno a que el "Proyecto DIVERSIONES MOY", desarrolla una actividad turística, y de que la propia Ley 8 de 1994 le otorga al Instituto Panameño de Turismo, la facultad legal de decidir cuándo una actividad se enmarca dentro de los

parámetros legales establecidos para definirla como turística, con los consiguientes incentivos fiscales establecidos en la propia Ley 8 de 1994, la Sala concluye que la decisión adoptada por la Junta Directiva del IPAT, no conlleva vicios de ilegalidad.

Por consiguiente, no prosperan los cargos de ilegalidad contra los artículo 29, primer párrafo, de la Ley N° 8 de 1994, así como del artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 73 de 8 de abril de 1995.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 19-96 de 26 de febrero de 1996, dictada por la Junta Directiva del Instituto Panameño de Turismo.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA PEZZOTI & PEZZOTTI, EN REPRESENTACIÓN DE ARMANDO F. PELLA PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 15,114-97 J. D. DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1997, DICTADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense, Pezzotti & Pezzotti, en representación de **ARMANDO F. PELLA**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la **Resolución N° 15,114-97 J. D. de 4 de septiembre de 1997**, dictada por la **Junta Directiva de la Caja de Seguro Social**, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Lo que se Demanda

La parte demandante solicita a esta Superioridad declare la nulidad, por ilegal, de la mencionada Resolución N° 15,114-97 J. D. de 4 de septiembre de 1997, mediante la cual se resolvió negar la solicitud de reembolso de gastos médicos en concepto de hospitalización y de atención médica recibida en el Hospital St. Lukes, Jacksonville, Florida, Estados Unidos, y en concepto de control en los Estados Unidos de América, y en la Clínica Mae Lewis en David, Chiriquí.

Como consecuencia de la declaración anterior, se declare que el recurrente tiene derecho al reembolso de la totalidad de dichos gastos que ascienden a la suma de B/.100,177.39.

Los Hechos u Omisiones de la Acción según el Actor

Las pretensiones anteriores, las fundamenta el recurrente en los siguientes hechos:

1. Que en el mes de julio de 1997, su apoderado especial gestionó ante la Dirección General de la Caja de Seguro Social, el reintegro o reembolso de los Gastos Médicos en que incurrió en los Estados Unidos de Norte América y en Panamá, como consecuencia de una operación a Corazón Abierto que se le practicó en el Hospital St. Lukes Jacksonville, Florida, Estados Unidos; tratamiento éste que era de urgencia notoria efectúarselo, en razón de que presentaba cuadro

representativo de oclusión de cinco arterias coronarias; operación que se efectuó el 31 de julio de 1996, en la referida Institución Hospitalaria de los Estados Unidos.

2. Que la urgencia notoria del tratamiento a que fue sometido el asegurado PELLA ZAYAS era indispensable para preservar la vida y procurar la salud del mismo, tal cual lo refieren documentaciones que fueron debidamente autenticadas y presentadas en la petición de reembolso de gastos médicos.

3. Que independientemente de las anteriores consideraciones, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social a través de su Resolución N° 15,114-97-J-D de 4 de septiembre de 1997, expresó que negaba la solicitud de reembolso de gastos médicos formulada por el asegurado PELLA ZAYAS, en virtud de que, según tal corporación, el mismo debió recurrir primero a los servicios que brinda la Caja de Seguro Social dentro del país, fundamentando dicha argumentación en el artículo 61 del Reglamento de Prestaciones Médicas, ignorando por completo la urgencia notoria de la operación, tratamiento y medicamentos que se le realizó y le proporcionaron en los Estados Unidos, por cuanto que todo ello, había que realizarlo en el momento y lugar en que se hizo, dado que de no hacerlo, el señor PELLA ZAYAS hubiese fallecido.

4. Que la Junta Directiva con tal negación, ignora por completo y no tiene en cuenta que la propia Reglamentación de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social, en uno de sus artículos dispone que en los casos como el ocurrido al asegurado PELLA ZAYAS la Caja de Seguro Social hará el reembolso, en razón de la fuerza mayor a que se vio sometido el paciente, que justifica la operación, tratamiento y medicamentos, que se efectuó y que se brindaron, en procura de la vida y salud del mismo.

Informe de Conducta

La entidad demandada mediante informe explicativo de conducta que corre a fs. 18-21 del expediente contencioso, explicó su actuación administrativa argumentando que, la razón por la cual la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social decidió negar tal requerimiento se dio porque consideró por un lado, "que el interesado (asegurado) personalmente o por interpuesta persona (familiar o médico tratante), debió presentar oportunamente, esto es, previo a la recepción o dispensación de la atención médica o el traslado, según el caso, la solicitud ante las autoridades de la Caja de Seguro Social con el objeto de que se evaluara y autorizara el caso, respectivamente, desde el punto de vista médico y del límite o capacidad para el gasto que se estima destinar para la atención del asegurado" y, por otra parte, "la Junta Directiva consideró, conforme a la evaluación médica en el exterior, que la misma pudo brindársele al asegurado en las instalaciones de la Caja de Seguro Social".

Conforme a la interpretación de las normas reglamentarias contenidas en el Reglamento de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social, agrega la entidad demandada que, la Junta Directiva estimó que el asegurado Armando Pella Zayas, pretermitió los procedimientos para tener acceso al reembolso de gastos médicos incurridos en el exterior de la República de Panamá y su decisión constituyó un acto personal y unilateral, al margen de las autoridades de la Caja de Seguro Social.

De las Disposiciones Acusadas y el Concepto de la Infracción

La parte actora estima que el acto cuya ilegalidad se demanda, es violatorio de los artículos 5, 18, y Anexo Primero, 61 y 64, todos, del Reglamento de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social.

El artículo 5 del Reglamento citado dispone que "Las prestaciones médicas se darán solamente dentro de los límites del territorio nacional, con las excepciones expresamente establecidas en este Reglamento".

La violación a tal disposición la sustenta el recurrente argumentando que, la entidad demandada no tiene en cuenta que la situación conformada en tono a la persona del asegurado PELLA ZAYAS en relación a que al tratamiento médico

especializado que recibió en los Estados Unidos de América, se encuentra dentro de las excepciones que prevee el propio Reglamento de Prestaciones Médicas.

El artículo 18 por su parte, señala que "En caso de urgencia y cuando se compruebe que el asegurado no puede obtener las órdenes de la Caja de Seguro Social, o cuando se hospitalice en un lugar donde la Caja no tenga arreglo alguno con esos hospitales, se autorizará el reembolso hasta la concurrencia de las tarifas aprobadas por la Junta Directiva".

Esta norma señala el demandante, se conculca en concepto de violación directa, por omisión, por cuanto es evidente y notoria la urgencia con que el asegurado tuvo la necesidad de los servicios médicos que fueron prestados en las Instituciones Hospitalarias de los Estados Unidos de América, lo que se encuentra acreditado con la vasta documentación existente en la petición.

El anexo 1 del artículo 18, del reglamento de Prestaciones Médicas expresa que, "Se harán reembolsos en caso de hospitalización y cirugía cuando se comprueba que al hospitalizarse el asegurado no tuvo oportunidad, por razones de fuerza mayor, de obtener la autorización de la Caja de Seguro Social. Estos reembolsos se harán solamente en casos muy justificados ...". La parte actora señala que esta norma se conculca en concepto de violación directa, por omisión, por cuanto que es evidente, que el asegurado no tuvo oportunidad por razones de fuerza mayor de obtener la autorización de la Caja de Seguro Social para ser atendido en los Estados Unidos de América, dado que el síntoma de angina inestable que padeció el lunes 29 de julio de 1996, fue repentino e inesperado, de donde hay que concluir su imposibilidad para obtener la autorización requerida, para que le prestaran los servicios médicos que necesitaba para conservar su vida y procurar su salud.

El texto del artículo 61 dispone que "Cuando las instituciones de salud pública, o las privadas a que recurre la Caja dentro del país, no pudiesen brindar los servicios requeridos, la Caja los proporcionará fuera de la República, recurriendo siempre en primer término a las instituciones oficialmente vinculadas con ella".

Según el recurrente, el acto impugnado viola el artículo citado en forma directa, por comisión, dado que no tomó en cuenta las circunstancias, condiciones y situaciones a las que se vio avocado el asegurado, al recibir la Hospitalización y el Tratamiento Médico Especializado en los Estado Unidos de América. Que es indudable que la resolución impugnada contiene una aplicación indebida de la Reglamentación en cita, por cuanto que las circunstancias contempladas en la norma, no podían implementarse por la ubicación física del recurrente, en el momento en que requirió las prestaciones médicas mencionadas.

Finalmente, el artículo 64 del reglamento de Prestaciones Médicas que también se aduce conculcado, dispone que " Para gozar del beneficio de tratamiento en el exterior, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Prestaciones Médicas, el interesado, un familiar, en caso de incapacidad del primero o el médico tratante, deberá presentar una solicitud por escrito dirigida al Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas."

A juicio de la parte actora, la norma resulta infringida en el concepto de violación directa por comisión, porque evidentemente la norma establece una formalidad para recibir el tratamiento médico en el Exterior ignora tal circunstancia, es decir, que la Caja de Seguro Social presta el beneficio del tratamiento médico en el Exterior, de donde hay que colegir que lo reclamado por el asegurado PELLA ZAYAS es consecuente con la legalidad, dado el caso excepcional al que se vio avocado, en donde hubo que hacer erogaciones considerables en pos de conservar su vida y procurar su salud.

Criterio de la Procuradora de la Administración

Mediante escrito legible a folios 23-29 del expediente principal, la Procuradora de la Administración solicitó que sean negadas las declaraciones impetradas por la parte actora, pues carecen de fundamento legal.

La Procuradora basa su pretensión en el hecho de que el Reglamento de Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social, dispone que cuando se requiera de servicios médicos fuera del país el interesado, un familiar o el médico tratante deberá presentar una solicitud por escrito dirigida al Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas, y evidentemente, este requisito legal se inobservó en el presente caso.

Añade la defensora de los intereses de la Administración que, cumplir con la autorización escrita, es un requisito sine qua non, para el tratamiento médico en una institución hospitalaria en el exterior del país, tal cual lo disponen el artículo 61 del Reglamento de Prestaciones Médicas que exige la solicitud escrita al Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas, o el artículo 75 ibídem, que hace mención de la solicitud escrita al Director General de la Caja de Seguro Social en los casos de extrema gravedad y traslados urgentes.

Decisión de la Sala

Expuestos los argumentos de las partes involucradas en este proceso, la Sala procede a resolver el presente negocio.

Como viene expuesto, el caso en examen guarda relación con la pretensión del asegurado ARMANDO PELLA ZAYAS de que se le reembolsen los gastos médicos en concepto de hospitalización y tratamiento médico especializado recibido en el Hospital de St. Lukes, Jacksonville, Florida, Estados Unidos de América, que ascienden a la suma de B/.70,592.91. De igual manera, que se le reembolsen los gastos médicos incurridos en concepto de cita médica de control en los Estados Unidos de América, y por atención médica recibida en la Clínica Mae Lewis en David, Chiriquí, por la suma de B/.17,547.63.

De la evaluación socio-económica emitida por la Trabajadora Social de la Caja de Seguro Social sobre la solicitud de reembolso por gastos médicos en hospital privado, en el Exterior y Panamá, que reposa en el expediente gubernativo a fojas 31-33, tenemos lo siguiente:

El señor ARMANDO PELLA ZAYAS encontrándose en Estados Unidos, por razones personales (para asistir a los funerales de su madre), en el mes de julio de 1996, padeció de "Angina Inestable", siendo trasladado al Hospital Baptist Beaches Medical Center de Florida y luego, transferido al Hospital St. Lukes, Jacksonville Florida, U. S. A., donde fue intervenido quirúrgicamente a "CORAZÓN ABIERTO", el día 31 de julio de 1996, practicándosele cinco puentes Aorot Coronarios. En dicho hospital se le realizan también dos intervenciones para debridamiento y limpieza de la herida del pecho, por presentar "MEDIASTENITIS DE OSTEOMELITIS DEL EXTERNON".

Posteriormente, el asegurado PELLA ZAYAS regresó a Panamá el 8 de septiembre del mismo año (1996), y al día siguiente 9 de septiembre, se presentó al Hospital Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social para curación de la herida. Sin embargo, el mismo no fue atendido en el momento esperado, por lo que se presentó en una clínica privada, donde el Dr. Félix A. Pittí de Cirugía Cardiovascular y Toráxica lo atendió, hospitalizándolo por (2) días.

Luego, regresó a la Provincia de Chiriquí, con recomendación de asepsia total, cuarto de aislamiento para evitar infecciones, y como no encontró disponible y con las condiciones indicadas, acudió al centro médico Mae Lewis donde permaneció hospitalizado dos meses en cuarto de aislamiento, siendo atendido por los Doctores Samuel Cattán, Cirujano Cardiovascular y el Dr. César De Gracia, Infectólogo.

Las razones por las que la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, niega la solicitud de reembolso de los gastos médicos del asegurado ARMANDO PELLA ZAYAS, se fundamentan en los artículos 61 y 64 del Reglamento de Prestaciones Médicas que en el orden en mención, reconocen los servicios médicos fuera de la República, limitándolo a que, con arreglo a lo dispuesto en éste, el interesado, un familiar en caso de incapacidad del primero, o el médico tratante, deberá presentar una solicitud por escrito dirigida al Director Nacional de Servicios Prestaciones Médicas. Aunado al hecho de que, en casos de extrema gravedad, el

Director General, por recomendación del Director Médico podrá autorizar el traslado del asegurado al exterior, informando de estos casos a la Junta Directiva.

Al analizar de manera exhaustiva, las constancias probatorias aportadas al proceso en examen, la Sala observa que en efecto, el asegurado no cumplió con las formalidades establecidas en los artículos 64 en concordancia con el artículo 75 del Reglamento de la Comisión de Prestaciones Médicas, procedimiento que rige para todos los asegurados, y que, es de obligatorio cumplimiento para todos los asegurados.

El artículo 64, del reglamento de Prestaciones Médicas señalan claramente que para gozar del beneficio de tratamiento en el exterior, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Prestaciones Médicas, el interesado, un familiar, en caso de incapacidad del primero o el médico tratante, deberá presentar una solicitud por escrito dirigida al Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas. Y, en casos de extrema gravedad, el artículo 75 del reglamento ibídem, dispone que el Director General, por recomendación del Director Médico, podrá autorizar el traslado del asegurado al exterior, informando de estos casos a la Junta Directiva.

En virtud de que el demandante no ha demostrado que para incurrir en los gastos médicos en concepto de hospitalización y de atención médica recibida en el Hospital St. Lukes, Jacksonville, Florida, Estados Unidos, y en concepto de control en los Estados Unidos de América, y en la Clínica Mae Lewis en David, Chiriquí, haber cumplido con las formalidades legales señaladas para los casos urgentes, la Sala considera que no tiene derecho a solicitar el reembolso de tales gastos. (Artículo 64 y subsiguientes del enunciado reglamento).

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 15,114-97 J. D. de 4 de septiembre de 1997, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SUCRE, ARIAS, CASTRO Y REYES, EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO EXTERIOR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Sucre, Arias, Castro y Reyes en nombre y representación de **BANCO EXTERIOR, S. A.** ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la **Resolución de 12 de noviembre de 1996**, dictada por la **Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá**, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Encontrándose este proceso en estado de fallar, considera este Tribunal que para tener más elementos de juicio para decidir la presente controversia, debe dictarse este Auto Para Mejor Proveer de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley 135 de 1943 que dice:

> "Es potestativo del Tribunal Contencioso-administrativo dictar auto para mejor proveer, con el fin de aclarar los puntos dudosos u obscuros de la contienda. Para hacer practicar las correspondientes pruebas, se dispondrá de un término que no podrá pasar en ningún caso de treinta días, más la distancias".

Dado lo anterior esta Sala está interesada que el Administrador Regional de Ingresos haga llegar a este Tribunal Contencioso Administrativo el o los expedientes contentivos del Proceso Penal Fiscal, y/o de las investigaciones en relación al pago o no del Impuesto sobre la Renta, llevados a cabo contra TOPAZ INTERNACIONAL, S. A., y OMAYRA GARCÍA DE BERBEY.

En virtud de lo expuesto, los Magistrados de la Sala Tercera administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOLICITA al ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ que haga llegar a este Tribunal Colegiado, en el término de cinco días a partir del conocimiento de esta Resolución, la documentación descrita en párrafos anteriores, relacionada con las investigaciones en relación al pago o no del Impuesto sobre la Renta, llevada a cabo contra TOPAZ INTERNACIONAL, S. A., y OMAYRA GARCÍA DE BERBEY.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) ANAIS BOY DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS GALINDO, ARIAS & LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE PROMOCIONES MÉDICAS, S. A. (PROMED, S. A.), PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1949-97-D. G., DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1997, DICTADA POR LA DIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, AL IGUAL QUE LA RESOLUCIÓN CONFIRMATORIA Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Galindo, Arias & López, en representación de **PROMOCIONES MÉDICAS, S. A. (PROMED, S. A.)**, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contenciosa-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° 1949-97-D. G. del 5 de noviembre de 1997** y el acto confirmatorio, dictados por la **Directora General de la Caja de Seguro Social**.

Por medio de los actos impugnados, la precitada funcionaria rechazó todas la propuestas presentadas en la Licitación Pública N° 51-96, del 21 de agosto de 1996 (entre ellas las de PROMED, S. A.) y ordenó a la Unidad Ejecutiva y a la Dirección Nacional de Compras y Abastos, que procedieran a revisar y corregir el respectivo pliego de cargos en lo relativo al sistema de evaluación de las propuestas, a fin de convocar un nuevo acto público.

En el mismo libelo, la apoderada judicial de la actora pidió la suspensión provisional de los efectos de las resoluciones impugnadas. En lo medular, esta pretensión se fundamenta en las siguientes alegaciones:

1. Si no se accede a la petición de suspensión provisional se haría efectivo el rechazo de todas las propuestas y la convocatoria de un nuevo acto público, con la consiguiente adjudicación del mismo a un competidor, con lo cual se le ocasionaría a PROMED, S. A. un daño grave e irreparable, en caso de que ésta obtenga posteriormente una sentencia favorable.

2. PROMED, S. A. invirtió mucho dinero tiempo, trabajo y esfuerzo en la

preparación de la propuesta y en la obtención de las fianzas necesarias para participar en la Licitación Pública N° 51-96, además de que trajo, a sus costas, técnicos, equipos y reactivos para realizar las correspondientes pruebas y obtener el criterio técnico requerido en el pliego de cargos, todo lo cual sería tirado por la borda si el reconocimiento de sus derechos resulta tardío.

3. Con su participación en el mencionado acto público, PROMED, S. A. ha mostrado sus precios, lo que sería aprovechado por sus competidores para fijar los suyos de no accederse a la solicitud de suspensión provisional y llevarse a cabo una nueva licitación pública. Sería muy difícil que PROMED, S. A., logre que sus proveedores le mantengan los precios, debido al aumento que éstos sufren con el transcurso del tiempo.

4. La demora en la celebrar un nuevo acto público también le ocasionaría perjuicios a la entidad licitante, debido al desabastecimiento de los materiales y equipos indispensable para el funcionamiento de los diferentes hospitales. Del mismo modo, los usuarios de los hospitales que se beneficiarían con los bienes licitados se verían impedidos de usar los servicios hospitalarios que dependen de esos equipos y materiales.

Por último, la apoderada judicial del actor cita en apoyo de su pretensión jurisprudencia relativa a la suspensión provisional del acto impugnado (fs. 47-31).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala Tercera puede suspender provisionalmente los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

En el presente caso, la medida cautelar solicitada no procede, en primer lugar, porque del examen preliminar de los cargos de ilegalidad que se hacen en la demanda contra diversas disposiciones de la Ley N° 56 de 1995 no se advierten, prima facie, violaciones ostensibles o manifiestas al ordenamiento jurídico, lo cual, según jurisprudencia de esta Sala, constituye uno de los requisitos indispensables para que pueda resolverse favorablemente la petición de suspensión provisional.

En segundo lugar, porque en el expediente no existe prueba de los perjuicios que la actora alega que sufrirá, si no se suspenden los efectos del acto impugnado.

Por las razones anotadas, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 1949-97-D. G. del 5 de noviembre de 1997 y el acto confirmatorio, dictados por la Directora General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FELIPE RANGEL EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL NUMERAL 4 DE LA LEY 40 DE 26 DE JUNIO DE 1996, Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN LAS NOTAS 68-97 DE 15 DE ENERO DE 1997, N° DN DE 1581-96 DE 28 DE OCTUBRE DE 1996 Y FCF Y C 1138-96 DE 8 DE JULIO DE 1996 DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, PRIMERO

(1°) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado **Felipe Rangel** ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad, en su propio nombre y representación, para que se declare nulo, por ilegal el **numeral 4 de la Ley 40 de 26 de junio de 1996**, y los actos administrativos contenidos en las **Notas 68-97 de 15 de enero de 1997, N° DN de 1581-96 de 28 de octubre 1996 y FCFyC 1138-96 de 8 de julio de 1996** de la **Caja de Seguro Social**.

El Magistrado sustanciador procede a la revisión del libelo a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos mínimos para la admisión.

Primeramente se observa, que se han omitido algunos de los requisitos que establece el artículo 43 de la ley 135 de 1943, el cual señala que toda demanda que se presente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo contendrá:

> "Artículo 43: Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contendrá:
>
> 1. La designación de las partes y su representantes
>
> 2. Lo que se demanda
> 3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción,
>
> 4. La expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación".

Con base a la norma transcrita, podemos señalar que el recurrente no expresó el renglón relativo a la identificación de las partes en el proceso, ni menciona el papel de la Procuradora de la Administración como funcionaria que interviene dentro de estos procesos en defensa del orden legal, expresiones estas que resultan de imperativa inclusión dentro del negocio sub-júdice, tal como esta Superioridad ha indicado en reiteradas oportunidades. Igualmente podemos señalar que la demanda fue dirigida en forma general a los Magistrados de la Corte Suprema, cuando la Corte ha determinado inveteradamente que debe dirigirse al Magistrado Presidente de esta Sala, tal como lo señala el artículo 102 del Código Judicial.

Llama la atención el error estructural en que el actor ha incurrido al demandar por esta vía la nulidad del artículo 1 numeral 4 de la Ley 40 de 26 de junio de 1996, respecto al cual-dice- "acuso de ilegalidad". Este sólo error es suficiente para inadmitir la demanda, por razones elementales, ya que no es viable demandar la nulidad de una Ley ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Además, se advierte que se demanda también la nulidad de la Nota 68-97 de 15 de enero de 1997, la Nota DNdeI 1581-96 de 28 de octubre de 1996 y la nota FCFyC 1138-96 de 8 de julio de 1996, dictadas por la Caja de Seguro Social, las que no configuran con claridad la naturaleza de un acto administrativo susceptible de ser impugnado por esta vía.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE la presente demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Felipe Rangel, en su propio nombre y representación.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO PEDRO PEREIRA, EN REPRESENTACIÓN DE QUIMIFAR, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA NOTA N° 302-01-24 DE 23 DE ENERO DE 1998, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROVEEDURÍA Y GASTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Pedro Pereira, actuando en nombre y representación de **QUIMIFAR, S. A.**, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de nulidad contra la **Nota N° 302-01-24 de 23 de enero de 1998**, emitida por la **Dirección General de Proveduría y Gastos del Ministerio de Hacienda y Tesoro**.

El licenciado Pereira presenta en la parte final de su libelo, solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado; sin embrago, por razones de economía procesal la Sala procede a examinar la demanda con el objeto de determinar si la misma cumple con los requisitos procesales mínimos para ser admitida.

El acto impugnado lo constituye la Nota N° 302-01-24 de 23 de enero de 1998, por medio de la cual se ordena el cese de la continuación de la Licitación Pública N° 48-96.

Al examinar la demanda, quien suscribe, considera que la misma no debe ser admitida, pues el apoderado judicial de comete un grave error en confundir la demanda contencioso administrativa de nulidad con la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. Ello es así por cuanto el objeto de la demanda contencioso administrativa de nulidad es el de impugnar la legalidad de acto de carácter general, protegiendo dicha legalidad desde un punto de vista objetivo, en vías de preservar el orden jurídico abstracto. En el caso que nos ocupa lo correcto es la interposición de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción cuyo fin es la protección de intereses de carácter particular o subjetivo, pues como la parte actora participó en el acto de Licitación Pública N° 48-96, tiene un interés particular en esta decisión.

Conforme a la jurisprudencia constante y reiterada de la Sala en esta materia, no procede acceder a la solicitud de la parte demandante, como así lo ha expresado en fallos anteriores el Pleno de esta Corporación, entre los cuales citamos parte de la siguiente sentencia que establece las diferencias.

> "19. LOS RECURSOS DE NULIDAD Y DE PLENA JURISDICCIÓN. SUS DIFERENCIAS CARACTERÍSTICAS.
>
> "El recurso de nulidad puede proponerse únicamente contra actos de la administración, tales como Decretos, Resoluciones, Acuerdos y Resoluciones que contemplen situaciones generales. El contencioso de plena jurisdicción puede proponerse contra actos administrativos que afecten o vulneren derechos subjetivos. La "acción popular" puede ejercerla cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera; la de plena jurisdicción pueden proponerla las personas afectadas por el acto. La primera puede ejercitarse en cualquier tiempo; la segunda, sólo dentro de los dos meses siguientes a la publicación, notificación o ejecución del acto. En la demanda de anulación sólo cabe pedir la declaratoria de ilegalidad del acto acusado; en la de plena jurisdicción cabe con la declaratoria de ilegalidad pedir, a la vez, las prestaciones a que se aspira. La sentencia que le pone fin al recurso de nulidad, se limita a declarar la ilegalidad o legalidad del acto acusado; la sentencia que decide el recurso de plena jurisdicción, llamado también acción privada, declara nulo el acto acusado con la finalidad de

> restablecer el derecho vulnerado. De todo ello se sigue que el recurso en que se pidió no sólo la ilegalidad del acto, sino también la indemnización o reparación de los daños que el acto ha ocasionado o pueda ocasionar, configura el recurso de plena jurisdicción; "la acción popular", en cambio, está limitada a obtener la declaratoria de ilegalidad del acto, con lo cual se restablece el orden jurídico.
>
> (V. Sentencia de 6 de septiembre de 1961. "Repertorio Jurídico". Año 1961. N° 9. Abril - Diciembre. Página 621)".
>
> (MORGAN, Eduardo - Los Recursos Contencioso Administrativos de Nulidad y de Plena Jurisdicción en el Derecho Panameño. Talleres Gráficos. Centro de Impresión Educativa. Panamá. 1982. p. 290).

En consecuencia,el Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema , administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de nulidad, presentada por el Lcdo. Pedro Pereira, en representación de QUIMIFAR, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA LUQUE, CORONELL Y LAM, EN REPRESENTACIÓN DE UTRACOLPA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO MINISTERIAL N° 397 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1993 Y EL N° 153 DE 31 DE MAYO DE 1994. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Luque, Coronell y Lam, en nombre y representación de **UTRACOLPA, S. A.**, ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulos, por ilegales, los **Resueltos Ministeriales N° 397 de 25 de noviembre de 1993** y **N° 153 de 31 de mayo de 1994** que lo modifica, emitidos por el **Ministro de Gobierno y Justicia**, para reglamentar la Ley N° 14 de 26 de mayo de 1993, mediante la cual se regula el Transporte Terrestre Público de Pasajeros y se dicta otras disposiciones.

Admitida la demanda se corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración quién emitió su Vista Fiscal N° 313 de 14 de julio de 1997, solicitando que se declare ilegal el acto acusado por razones formales y no de fondo como lo arguye el demandante, en virtud que el Ministerio de Gobierno y Justicia no es competente para dictarlo, sino la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, y además, porque un resuelto no es el documento idóneo para reglamentar leyes (fs. 39 a 45). También se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, quién lo hizo en su Nota N° 1091 D. L. de 10 de junio de 1997 (fs. 37 y 38).

Se abrió el negocio a pruebas y se acogieron las documentales presentadas por la parte actora (f. 46).

Evacuados los trámites de Ley, la Sala procede a resolver la presente controversia, previas las siguientes consideraciones.

Por medio del impugnado Resuelto N° 397 de 1993, el Ministerio de Gobierno y Justicia reglamenta el artículo 18 de la Ley N° 14 de 1993, estableciendo los trámites, procedimientos y requisitos para la concesión de líneas, rutas y

piqueras para el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. El artículo quinto de este Resuelto fue modificado el 31 de mayo de 1994, por el Resuelto N° 153.

La firma forense actora señala que los seis artículos del Resuelto N° 397 de 1993 violan el artículo 18 de la Ley N° 14 de 1993, porque esta norma garantiza a los transportistas organizados como personas jurídicas, que al momento de su vigencia presten el servicio de transporte terrestre público, que lo hagan en forma definitiva; y le da un término de seis meses a los prestatarios individuales del servicio de transporte terrestre público de pasajeros, para que se organicen como personas jurídicas.

Expresa la actora que el artículo primero del resuelto impugnado viola el artículo 18 de la Ley 14 de 1993 porque reglamenta las solicitudes de concesión cuando sólo podía reglamentar el Registro de esas concesiones (fs. 30 y 31). Según el demandante, el artículo segundo del Resuelto N° 397 de 1993 infringe, por aplicación indebida, lo dispuesto en el citado artículo 18, porque aquél establece una serie de requisitos para solicitar la concesión que ya había sido reconocida por la Ley 14 de 1993. Como la concesión había sido reconocida por la Ley, el Ministerio de Gobierno y Justicia sólo podía reglamentar el modo de registrar las concesiones, recabando la información necesaria para ello, sin condicionar o limitar los derechos adquiridos por ley al cumplimiento de una serie de requisitos reglamentarios previos. Iguales reparos hizo a los artículos tercero y cuarto del Resuelto N° 397 de 1993 (f. 32). El artículo quinto del Resuelto N° 397 de 1993, modificado por el artículo único del Resuelto N° 153 de 1994, viola también directamente el artículo 18 de la Ley 14 de 1993, a juicio del demandante, porque concede una prórroga que es ilegal y que además beneficia a quienes no la necesitan, ya que los transportistas organizados como personas jurídicas al momento de la vigencia de la Ley 14 de 1993, ya tenían reconocido el derecho de concesión el 27 de mayo de 1993.

Por último, la actora expresó que el artículo 18 de la Ley 14 de 1993, fue violado directamente por el artículo sexto del resuelto impugnado, porque señala una sanción no prevista en la Ley que consiste en el sometimiento de la ruta o piquera a licitación pública, de no presentarse la documentación exigida dentro del término ilegalmente señalado en el mismo resuelto.

El artículo 18 de la Ley 14 de 1993 preceptúa:

> "Los transportistas que actualmente presten el servicio de transporte terrestre público de pasajeros en sus distintas modalidades en una línea, ruta o piquera determinada, seguirán prestando el servicio en forma definitiva, reconociéndosele el derecho de concesión a las personas jurídicas bajo cuya organización se encuentren los mismos. Los prestatarios del servicio de transporte terrestre público de pasajeros que no están organizados como personas jurídicas deberán organizarse como tales dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley".

Según este artículo el derecho de concesión para prestar el servicio de transporte terrestre público se reconoce a los transportistas que prestaban el servicio cuando la Ley entró en vigencia y estaban organizados como personas jurídicas, y a los transportistas que también prestaban el servicio cuando entró en vigencia la Ley, pero que no estaban organizados como personas jurídicas, a quienes les dió un plazo de seis meses a partir de la promulgación de la Ley para agruparse en sociedades. Además este derecho de concesión puede adquirirse por nuevos transportistas que quieran prestar el servicio de transporte terrestre público. Estos últimos deben cumplir con los requisitos establecidos por la Ley y sus reglamentos (artículo 27 de la Ley 14 de 1993).

El artículo 19 de la Ley N° 14 de 1993, señala que corresponde al Ente Regulador (Ministerio de Gobierno y Justicia por intermedio de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre DNTTT, artículo 6 de la Ley N° 14 de 1993), preparar el contrato de concesión definitiva, para lo que deberá primero hacer un estudio técnico estadístico de las necesidades del servicio de transporte terrestre público que contendrá específicamente la clasificación y

determinación de las líneas, rutas o piqueras que deben conservarse, reordenarse o crearse; la cantidad de unidades necesarias y sus especificaciones técnicas; los itinerarios, frecuencias de salida y facilidades de las terminales, paradas y piqueras; y los mecanismos y procedimientos que permitan el aumento o disminución de las unidades para la prestación del servicio en la línea o ruta adjudicada.

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 14 de 1993 establece que: "en adición a lo establecido en el artículo anterior" los contratos de concesión deberán contener: "las medidas de seguridad, los accesorios y aditivos necesarios para la protección del medio ambiente, comodidad, aseo, capacidad, calidad y condiciones mecánicas de las unidades a utilizar en el servicio; y los equipos e instalaciones o servicios conexos de auxilio y mantenimiento a ser utilizados para la prestación del servicio en la forma más económica y eficiente para el usuario".

La Ley reconoce el derecho de concesión, pero condiciona el ejercicio, goce y disfrute de ese derecho a la celebración con el Ente Regulador, de un contrato de concesión que es el documento legal de reconocimiento del derecho de prestar el servicio de transporte terrestre público; y además, ha impuesto el cumplimiento de una serie de requisitos que deben acreditarse previamente y estar contenidos en el contrato.

Es por esto que los documentos y la comprobación de ciertos requisitos señalados en los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 7 de los artículos segundo y tercero del Resuelto impugnado sólo detallan lo exigido por la Ley 14 de 1993, no para conceder el derecho que ya había sido otorgado por ella misma, sino para hacer constar dicho derecho en un documento idóneo identificado como contrato de concesión de línea, ruta o piquera, que debe contener los requisitos exigidos en los artículos 19 y 20 de la Ley 14 de 1993, porque dicha información es vital para la organización y sistematización de la información existente que debe hacer el Ente Regulador con el fin de implementar un servicio de transporte acorde con las necesidades de los usuarios.

Los segundos numerales de los artículos primero y segundo del Resuelto N° 397 de 25 de noviembre de 1993, exigen la manifestación expresa del consentimiento de un mínimo porcentual, de los miembros afiliados a la persona jurídica que solicita el reconocimiento del derecho de concesión mediante el contrato respectivo, para una piquera de transporte selectivo y para una ruta, limitando en este último caso, a un máximo de dos personas jurídicas solicitantes de la concesión en la misma ruta. El artículo cuarto del acto impugnado, establece otros porcentajes mínimos de concesionarios de certificados de operación selectivo para avalar o pertenecer a la persona jurídica solicitante de la concesión de piquera en una zona de trabajo.

Los artículos quinto (modificado por el artículo único del Resuelto N° 153 de 31 de mayo de 1994) y sexto del Resuelto N° 397 de 1993, el Ministerio de Gobierno y Justicia establecen un plazo dentro del cual deben los obligados entregar la documentación requerida, fijado para el 31 de mayo de 1994 y extendido hasta el 31 de agosto de 1994, y una sanción por incumplimiento de dicho plazo que corresponde al sometimiento de la ruta o piquera a los trámites de licitación pública, en los términos de los artículos 26 y 27 de la Ley N° 14 del 26 de mayo de 1993.

Los artículos 26 y 27 de la Ley 14 de 1993, establecen taxativamente los casos en que se dará el procedimiento de licitación pública de la concesión de línea, ruta o piquera y no establece que la morosidad en la presentación de los requisitos exigidos sea uno de ellos.

Estos plazos, sanciones y porcentajes mínimos de miembros de las personas jurídicas solicitantes no han sido establecidos por la Ley de Transporte, ni por el Decreto Ejecutivo reglamentario de la misma, los cuales no limitan la capacidad de la persona jurídica, quien tiene personería y representación independiente de las personas naturales que la integran, para solicitar la formalización del contrato de concesión. Igualmente, el plazo perentorio designado para la entrega de documentos no fue establecido por el Decreto

Reglamentario, y aunque los demás documentos exigidos no son contrarios a la Ley y Reglamento, es inoperante solicitarlos sin plazo legalmente establecido por acto administrativo idóneo para ello. Este plazo deberá ser impuesto por un reglamento legalmente expedido, que no es el caso del Resuelto N° 397 de 1993, por las razones que pasamos a explicar.

Tal como lo establece el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Política y el ordinal 11 del artículo 629 en concordancia con el ordinal 1° del artículo 638, ambos del Código Administrativo, la reglamentación de las leyes corresponde privativamente al Presidente de la República y al Ministro del Ramo respectivo, a través de los decretos ejecutivos o decretos reglamentarios de ejecución, por eso no puede el Ministerio de Gobierno y Justicia mediante un Resuelto reglamentar una Ley y menos aún rebasarla estableciendo plazos, requisitos y sanciones no contempladas en la Ley ni en su Reglamento, tal como ha sucedido en el presente caso.

En el orden de preferencia de las normas dictadas en asuntos nacionales primero está la ley, después el reglamento o decreto reglamentario y por último las órdenes superiores o resueltos.

El resuelto es un grado legítimo de ordenamiento inferior al de las leyes y decretos reglamentarios que tiene fundamento constitucional.

> "Artículo 181. ...
> Las órdenes y disposiciones que un Ministro de Estado expida por instrucciones del Presidente de la República son obligatorias y sólo podrán ser invalidadas por éste por ser contrarias a la Constitución o la Ley, sin perjuicio de los recursos a que haya lugar".

El doctor César A. Quintero, describe los resueltos ministeriales como órdenes y disposiciones de mera tramitación que expide y ejecuta un Ministro en nombre del Presidente de la República, sin que éste las firme.

Al respecto señala el Doctor Quintero:

> "Todo lo transcrito indica que se trata de los llamados resueltos ministeriales y de otros actos similares.
>
> ... El resuelto es una especie jurídica que surgió de hecho en nuestra práctica administrativa hace más de medio siglo. A través de ella se han venido decidiendo, desde entonces, asuntos administrativos de carácter poco trascendente: concesión de vacaciones regulares a un empleado; designación del empleado que ha de sustituir temporalmente a otro que está en uso de vacaciones o licencia; traslados de empleados de un lugar a otro (maestros, por ejemplo); licencias por gravidez a las mujeres; licencias por enfermedad, etc.
>
> Originalmente, tales disposiciones administrativas llevaban las firmas del Presidente y del Ministro del ramo. Pero, en la segunda década de este siglo, comenzaron a ser firmadas (en la Secretaría de Instrucción Pública) por el Secretario (hoy Ministro) y por el Subsecretario (hoy Viceministro) del ramo.
>
> Esta práctica racional se introdujo de hecho y extraconstitucionalmente, ya que, como advierte el doctor Solís ..., la Constitución de 1904 no permitía a los Secretarios de estado dictar disposiciones -aún cuando fueran sobre materias de rutina- sin la firma del Presidente.
>
> De ahí que, en nuestro concepto, el segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución de 1941 (correspondiente al mismo párrafo del artículo 145 de la actual) vino a constitucionalizar la práctica de los resueltos ministeriales y de otras especies afines". (César, QUINTERO. El Organo Ejecutivo. Folleto de Derecho Constitucional No. 1 del Tomo II, Panamá, abril de 1970, pág. 24).

Por tanto, a juicio de la Sala, el artículo 18 de la Ley 14 de 1993 debe ser reglamentado mediante un Decreto Ejecutivo y no mediante un Resuelto como el N° 397 de 1993 que ha sido impugnado.

Si bien la Ley 14 de 1993, en su artículo 18 reconoce "el derecho de concesión a las personas jurídicas bajo cuya organización" presten el servicio los transportistas que laboraban como tales, cuando entró en vigencia dicha Ley, ésta también exige que el servicio se preste cumpliendo una serie de requisitos de los cuales estos transportistas no están eximidos, y que ameritan una reglamentación por un Decreto Ejecutivo.

Finalmente, la Sala estima que no le asiste la razón a la Procuraduría de la Administración cuando afirma que el Ministerio de Gobierno y Justicia no tiene facultad para dictar el resuelto impugnado, ni para reglamentar la Ley 14 de 1993, y que compete al Ente Regulador (Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre) reglamentar la Ley. La Sala hace esta afirmación porque el artículo 6 de la Ley N° 14 de 1993 establece que para los efectos de esta Ley, el Ente Regulador será el Ministerio de Gobierno y Justicia, por intermedio de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (DNTTT), y según el artículo 19 de la Ley N° 14 de 1993, es al Ente Regulador al que corresponde preparar los contratos de concesión definitiva.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE SON ILEGALES, los Resueltos N° 397 de 25 de noviembre de 1993, y N° 153 de 31 de mayo de 1994, dictados por el Ministerio de Gobierno y Justicia, para el reglamentar el artículo 18 de la Ley 14 de 1993.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMIDIO MANZANE, EN REPRESENTACIÓN DE MARIO AUGUSTO MEDINA, EFRAÍN DE LEÓN, ENELDA ROSALES Y EZEQUIEL RIVERA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL EL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO EJECUTIVO N° 56 DE 2 DE ABRIL DE 1997, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Emidio Manzané, actuando en nombre y representación de los señores **MARIO AUGUSTO MEDINA**, **EFRAÍN DE LEÓN**, **ENELDA ROSALES Y EZEQUIEL RIVERA**, ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo, por ilegal, el **artículo cuatro (4) del Decreto Ejecutivo N° 56 de 2 de abril de 1997**, dictado por el **Presidente de la República** por conducto del **Ministro de Educación**.

Mediante el acto impugnado, Decreto Ejecutivo N° 56 de 2 de abril de 1997 (Gaceta Oficial N° 23,258 de 3 de abril de 1997), se modificó el Decreto 681 de 20 de junio de 1952, por medio del cual se reglamentaron los artículos 153 y 154 de la Ley N° 47 de 1946, Orgánica de Educación. El artículo cuatro (4) del Decreto Ejecutivo N° 56 preceptúa lo siguiente:

> ARTICULO 4: "El Artículo Sexto del Decreto 681 de 20 de junio de 1952 quedará así:
>
> Artículo Sexto: Toda ausencia injustificada será objeto de

descuento. El descuento lo tramitará el Director Regional de Educación, con base en el informe de asistencia que remitirá el Director del centro educativo respectivo. Para tal efecto, mediante nota, hará la comunicación a la Dirección General de Educación, quien a su vez procederá a dar cumplimiento al descuento por conducto de la Dirección Nacional de Personal y el Departamento de Planillas del Ministerio de Educación.

El descuento de la ausencia injustificada se tramitará en el transcurso del mes en que se produjo o dentro de los cinco días siguientes".

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 254 fechada el 11 de junio de 1997, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones de los demandantes (fs. 69-79). Además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe explicativo de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley N° 33 de 1946 (fs. 60-68).

Mediante auto fechado el 15 de octubre de 1997, se admitieron las pruebas presentadas por la parte actora y no habiendo pruebas que practicar se procedió a notificar la mencionada resolución (fs. 80). Una vez transcurrido el término de alegatos, sin que éstos fueran presentados, el negocio se encuentra en estado de resolver (fs. 82).

Los demandantes consideran que el acto administrativo impugnado viola los artículos 131, 132, 133 y 139 de la Ley N° 47 de 1946, Orgánica de Educación, los cuales consagran: el procedimiento a seguir tratándose de quejas contra los miembros del personal docente o administrativo del Ramo de Educación, cuando de la investigación se desprende que hay indicios de culpabilidad; el término por el cual se debe dar traslado del pliego de cargos al funcionario investigado para el ejercicio de su defensa; cuándo se debe aplicar una sanción, las formalidades que deben cumplirse, cómo debe notificarse y los recursos que proceden; y finalmente cómo puede el sancionado gestionar su defensa y el tiempo del cual dispone.

Al expresar el concepto en que el artículo impugnado infringe estas normas, el demandante indicó que la sanción de descuento, por ausencia injustificada, autorizada en la norma impugnada, no cumple con la exigencia de la elaboración del pliego de cargos, con la notificación correspondiente al sancionado, con la formalidad de que el descuento se haga mediante una Resolución motivada y no mediante una simple nota, modificación que trae como consecuencia que el sancionado con el descuento, no tenga a su alcance las garantías que le otorga la Ley Orgánica de Educación para su legítima defensa, porque tiene conocimiento de la sanción sólo en el momento que se hace efectivo el descuento salarial (fs. 45).

Finalmente, el recurrente también considera violado el artículo 30 de la Ley 135 de 1943, con fundamento en que al eliminar el acto impugnado la obligatoriedad de emitir la sanción de descuento mediante una Resolución, ya no existe la obligación de notificarla personalmente, por lo que el derecho de defensa del sancionado se ve afectado.

En cuanto a los cargos de violación expresados, la señora Procuradora de la Administración señaló que, a pesar de que el artículo impugnado no consagra un procedimiento para ejecutar el descuento, este hecho no excluye la posibilidad de que se aplique el procedimiento disciplinario contenido en la Ley Orgánica de Educación en sus artículos 131 y siguientes, por lo que el sancionado no está en estado de indefensión; que las autoridades del Ramo de Educación encargadas de imponer las sanciones disciplinarias, están en la potestad de adoptar las medidas que estimen convenientes con el objeto de hacer cumplir el calendario escolar sin interrupciones injustificadas; y que el Director Regional de Educación, como funcionario competente para imponer la medida disciplinaria, está en la obligación de emitir una Resolución que pueda ser objeto de los recursos de ley.

A continuación los Magistrados que integran la Sala proceden a resolver el

presente caso.

El punto medular de esta controversia se centra en la legalidad o ilegalidad del artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 56 de 2 de abril de 1997, (el cual modificó el artículo sexto del Decreto N° 681 de 20 de junio de 1952), que reglamenta los descuentos del salario por ausencia injustificada omitiendo el procedimiento disciplinario consagrado en la Ley Orgánica de Educación.

Cabe advertir que, de las pruebas aportadas por la parte actora, el recorte de periódico del diario El Siglo de 15 de marzo de 1997 y la Resolución N° 1 de 25 de marzo de 1997 (fs. 36 y 37), mediante la cual se ordenó el descuento correspondiente por ausencia injustificada del 14 de marzo de 1997, son documentos de fecha anterior al acto impugnado, por lo que el Decreto Ejecutivo N° 56 de 2 de abril de 1997, publicado en la Gaceta Oficial N° 23,258 de 3 de abril de 1997, no estaba vigente cuando esos hechos se dieron y son inconducentes en este caso. Además, la presente es una demanda de nulidad en la que no se pretende el restablecimiento de derecho alguno, sino que se confronten las normas que se invocan con el acto impugnado para determinar su legalidad o ilegalidad.

El artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 56 de 2 de abril de 1997, mediante el cual se modificó el artículo sexto del Decreto 681 de 20 de junio de 1952, reglamenta los artículos 153 y 154 de la Ley Orgánica de Educación, Ley N° 47 de 1946, modificada por la Ley N° 34 de 1995. Estas normas regulan lo atinente a ausencias justificadas por enfermedad, por duelo, por casos urgentes comprobados y las licencias correspondientes. Veamos:

> "Artículo 153. Los miembros del Personal Docente que se separen del servicio por enfermedad, duelo u otros casos urgentes comprobados, tendrán derecho en el año, a licencia hasta de quince (15) días con derecho a sueldo.
>
> Cuando se trate de enfermedad personal debidamente comprobada, el miembro del Personal Docente tiene derecho a sueldo completo hasta por treinta (30) días consecutivos, descontando de aquí los días de licencia que haya tomado con anterioridad.
>
> En ningún caso se concederá licencia por enfermedad con derecho a sueldo por más de treinta días en el año; pero el Organo Ejecutivo podrá conceder licencias por enfermedad sin derecho a sueldo, hasta por tres meses.
>
> El Organo Ejecutivo reglamentará el uso de estas licencias y el procedimiento para concederlas.
>
> Artículo 154. Cuando la enfermedad del miembro del personal docente o administrativo del Ramo tenga una duración mayor de treinta (30) días consecutivos, durante el año escolar, el miembro del personal docente o administrativo se acogerá a las disposiciones del Seguro Social".

Con fundamento en la potestad reglamentaria que confiere al Organo Ejecutivo el artículo 153 de la Ley Orgánica, se dictó el Decreto N° 681 de 20 de junio de 1952, el cual en diecinueve normas regula las ausencias y licencias del personal docente y administrativo del Ramo de Educación. El artículo sexto del Decreto N° 681 en su texto original, preceptuaba antes de su modificación por el acto impugnado lo siguiente:

> "Artículo Sexto: Toda ausencia injustificada será objeto de descuento, que se ordenará mediante resolución que expedirá el Director del Plantel o la Inspección Provincial de Educación. Para ello se aplicarán por analogía trámites establecidos en los artículos cuarto y quinto de este Decreto.
>
> El interesado dispondrá de un término de ocho (8) días contados a partir de la fecha de su notificación, para los efectos de apelación".

Es a causa de la modificación del texto del artículo sexto citado, por el artículo 4 del acto impugnado, que el demandante arguye que se ha dejado al funcionario del Ramo de Educación en la indefensión.

La disposición original del Decreto N° 681 de 1952, tal como la leemos, regulaba cómo hacer el descuento por ausencia injustificada, el término para impugnar y el recurso procedente, y fue subrogada por la norma impugnada en esta demanda, la cual únicamente dispone que la ausencia injustificada será objeto de descuento, cómo se tramitará, y quién y cuándo procede a darle cumplimiento al descuento.

El Decreto N° 56 de 1997, dispone en su artículo 1, que modifica el artículo tercero del Decreto N° 681 de 1952, qué se debe entender por ausencia injustificada, al consagrar en el parágrafo de esta norma, que "Los comprobantes para justificar las ausencias, deben ser presentados por el interesado al jefe inmediato, el mismo día en que reanude sus labores." y que, "En caso contrario, tales ausencias se considerarán injustificadas." Por tanto, se le da al servidor público que se ausenta de sus labores, la oportunidad de presentar la justificación de su inasistencia, una vez retorna a su puesto de labores, y es en el evento de que el funcionario no justifique su ausencia, que la misma se considera injustificada y debe el Director Regional de Educación tramitar el descuento, hacer las comunicaciones correspondientes y darle cumplimiento a la medida.

La autoridad demandada considera por su parte, que este descuento por ausencia injustificada, no es una sanción administrativa por falta disciplinaria de conformidad con la Ley, sino la necesaria consecuencia de haber incumplido con la prestación del servicio que genera el derecho a percibir el salario (fs. 62), e invoca el artículo 138 de la Ley N° 9 de 20 de junio de 1994, por la cual se establece la Carrera Administrativa (fs. 67).

Señala la administración además, que el artículo impugnado no está relacionado en modo alguno con las disposiciones de investigación por falta disciplinaria, por lo que mal puede afirmarse que el artículo 4 del Decreto N° 56 eliminó un trámite que nunca existió; que el Decreto 618 de 9 de abril de 1952, mediante el cual se consagran las faltas disciplinarias y sus correspondientes sanciones, no contempla la ausencia injustificada como falta disciplinaria ni el descuento salarial como una sanción; que la notificación del descuento, así como el recurso de apelación tenían su origen en el texto original del artículo sexto del Decreto N° 681 y no en la Ley Orgánica de Educación, como erróneamente sostiene el demandante; que el servidor público es escuchado antes de hacerle el descuento, porque puede presentar la correspondiente justificación tan pronto reanuda sus labores (fs. 65); y que resulta contradictorio que el demandante no invoque como violadas las disposiciones que reglamenta el Decreto impugnado, sino las normas que consagran el procedimiento disciplinario en la Ley Orgánica de Educación.

Considera la Sala, que tal como lo afirma la autoridad demandada, el descuento a que se refiere el artículo 4 del Decreto N° 56 de 1997, no es una sanción por falta disciplinaria que debe cumplir con el procedimiento consagrado en la Ley Orgánica de Educación, sino la consecuencia de no haber cumplido con el deber de asistir a sus labores sin justificar dicha ausencia, circunstancia que acarrea la pérdida del salario correspondiente a la jornada no laborada. Si bien estas normas contemplan las ausencias por casos urgentes, la ausencia injustificada tampoco puede considerarse como un caso urgente, porque éste es aquel que no se puede posponer hasta los días de asueto y también tiene una justificación.

La ausencia injustificada puede revestir el carácter de falta disciplinaria, tal como se observa en el Decreto N° 618 de 9 de abril de 1952, artículo segundo literal c), pero este caso no es el presupuesto que regula el artículo impugnado. Nuestro ordenamiento jurídico prevé como consecuencia directa de la falta de prestación del servicio, la pérdida del derecho a recibir la remuneración. El cumplimiento del deber principal de los funcionarios del Ramo de Educación, docentes y administrativos, cual es laborar su jornada completa, es lo que les da derecho a recibir la correlativa remuneración por el servicio

prestado.

Por tanto, la Sala considera que la norma impugnada no viola los artículos 131, 132, 133 y 139 de la Ley N° 47 de 1946, modificados por la Ley N° 34 de 1995.

Adicionalmente, la Sala observa que el Decreto N° 56 de 2 de abril de 1997, es un instrumento jurídico de igual jerarquía que el Decreto modificado, N° 681 de 1952. Ambos decretos ejecutivos reglamentan los artículos 153 y 154 de la Ley Orgánica de Educación, y a juicio de la Sala, de su estudio no se desprende violación alguna de las disposiciones reglamentadas, así como tampoco estas normas han sido invocadas por los demandantes como violadas.

Los límites de la potestad reglamentaria los ha indicado esta Corporación de Justicia en diversas ocasiones afirmando que: "... esta potestad de reglamentar las leyes por parte del Órgano Ejecutivo, `debe ejercerse sin apartarse del texto ni del espíritu de la Ley que reglamenta y es lo que se conoce con el nombre de potestad reglamentaria ... Los límites para este tipo de reglamentación consisten en la imposibilidad de alterar el texto ni el espíritu de la Ley que reglamentan (Cfr. Sent. del 20 de octubre de 1995, Ibidem, pág. 152). En otro de sus fallos, la Corte expresó que en el ejercicio de esta potestad de reglamentar las leyes, el Ejecutivo no puede reformar, adicionar, contradecir ni alterar en ninguna forma su texto ni apartarse de su espíritu (Cfr. Sentencias del 4 de febrero de 1992 y 30 de junio de 1995)." (Sentencia de 27 de junio de 1997, Registro Judicial, junio 1997, pág. 159-160).

Como la modificación del Reglamento fue hecha a través de un Decreto de igual jerarquía del que fue subrogado, dicha reglamentación, así como su modificación, no rebasa los límites de la potestad reglamentaria.

En cuanto al cargo de violación del artículo 30 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala considera que el mismo no es aplicable al caso, porque se refiere a cómo debe hacerse la notificación de aquellos actos administrativos de carácter particular y la disposición invocada es de carácter general, por lo que sólo debe publicarse en la Gaceta Oficial.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el artículo 4 del Decreto Ejecutivo N° 56 de 2 de abril de 1997, dictado por el Presidente de la República por conducto del Ministro de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OLMEDO ARROCHA, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° P. ADM. 002-97 DE 4 DE JUNIO DE 1997, EXPEDIDA POR LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado **Olmedo Arrocha**, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, en su propio nombre y representación, para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° P. Adm. 002-97 de 4 de junio de 1997**, expedida por la **Gobernadora de la Provincia de Panamá**.

Lo que se demanda

El Licenciado Olmedo Arrocha ha solicitado a esta Superioridad se declare la nulidad de la Resolución N° 002-97 P. Adm., expedida por la Gobernadora de la Provincia de Panamá, mediante la cual se revoca el Decreto 512 de 6 de junio de 1996 proferido por la Alcaldía Municipal, en donde se declara insubsistente el cargo que el señor Néstor Góndola Díaz ejercía en dicha institución.

Disposiciones Legales que se estiman infringidas

Con base a lo anteriormente expuesto el recurrente estima como infringidos los artículos 44 y 51 de la Ley 106 de 1973, el artículo 9, numeral 22 de la Ley 19 de 1992, el artículo 1726 del Código Administrativo y el artículo 40 de la ley 33 de 1946, que son del tenor siguiente:

> "Artículo 44: Los Alcaldes tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, los Decretos y órdenes del Ejecutivo y las Resoluciones de los Tribunales de Justicia ordinaria y administrativa. Los Alcaldes son jefes de policía en sus respectivos Distritos. Los Alcaldes cuando actúen como agentes del Gobierno, en desempeño de actividades ajenas a la autonomía municipal, quedarán subordinados en tales casos, al Gobernador de la Provincia y a los organismos superiores de la jerarquía administrativa".

En cuanto al concepto de la violación el recurrente señaló que "debe aplicarse el criterio de que los gobernadores serán superiores a los alcaldes solamente cuando lo últimos actúen en el desempeño de actividades ajenas a la autonomía municipal" por lo que concluye el actor que la correcta aplicación del artículo 44 de la ley 106, es que los gobernadores serán los superiores de los Alcaldes cuando estos últimos ejerzan algunas de las funciones contenidas en el artículo 46 de la ley 106; norma en la que no se incluye la función de nombrar y remover a los funcionarios municipales. Por lo que al revocar la Gobernadora de la Provincia de Panamá el Decreto N° 512 de 6 de junio de 1996, lo hizo contraviniendo directamente el artículo 44 de la ley 106, pues desatendió y desconoció el contenido de la norma citada, así por tratarse de una actividad relacionada con la función municipal o con la función administrativa del alcalde, el gobernador no tenía ni tiene facultad para conocer en apelación.

El segundo artículo que se considera infringido es el artículo 51 de la ley 106 de 1973:

> "Artículo 51: Las Resoluciones y demás actos de los Alcaldes, cuando se relacionan con la gestión administrativa municipal, son impugnables ante los tribunales competentes. Contra las multas y sanciones disciplinarias que impongan los Alcaldes, cuando actúan como Jefe de Policía del Distrito, cabrá el recurso ante el Gobernador de la Provincia".

Considera el actor que la norma antes citada ha sido infringida en concepto de violación directa por omisión, pues se dejo de aplicar el contenido de dicha norma, pues "queda muy claro que los gobernadores tienen facultad para conocer mediante recurso de apelación, acerca de los actos que los alcaldes emitan cuando actúan como Jefes de Policía del Distrito, en cambio cuando emitan actos a propósito de su gestión administrativa éstos son impugnables ante los tribunales competentes.

Otra norma que se estima infringida es el artículo 9 numeral 22 de la Ley 19 de 1992:

> "Artículo 9: El Artículo 4 de la Ley N° 2 de 2 de junio de 1987 queda así: ...
>
> 22. Conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones, multas y sanciones disciplinarias de policía, que impongan los alcaldes como

funcionarios de primera instancia;".

Señala el demandante que la norma transcrita no se aplicó en su verdadero sentido y alcance, por lo que se ha violado en concepto de violación directa por omisión, pues como bien se observa los gobernadores no tienen facultad para conocer en segunda instancia de los actos emitidos por los alcaldes en su condición de Jefes de la Administración Alcaldicia.

La siguiente norma que se estima conculcada es el artículo 1726 del código administrativo:

> "Artículo 1726: Las decisiones de los Jefes de Policía son apelables ante el inmediato superior, quien decidirá el recurso por lo que resulte de autos".

EL recurrente observa que se ha infringido la norma por indebida aplicación, pues la misma se aplica a una situación no prevista en el supuesto de hecho que ella misma contiene, y como ya ha señalado el actor se refiere a actuaciones del Alcalde como jefe de Policía, y no como Jefe de la Administración Municipal.

Por último se estima infringido el artículo 40 de la ley 33 de 1946:

> "Artículo 40: En los asuntos municipales se aplicará el procedimiento de este capítulo, salvo cuando los recursos establezcan reglas especiales para negocios determinados".

Considera la parte actora que se ha dado una violación de esta norma en concepto de violación directa por omisión toda vez que la Gobernadora de la Provincia de panamá desatendió lo establecido en la misma al sustanciar un recurso de apelación cuya materia no era de su competencia.

Informe de Conducta de la Entidad Demandada

A foja 59 del expediente consta el informe explicativo de conducta expedido por la Gobernación de la Provincia de Panamá, quién procedió a señalar lo siguiente:

> "Conocemos los argumentos esgrimidos por el recurrente en cuanto a las disposiciones legales violadas y el concepto de la violación; argumentos estos que ya han sido utilizados en acciones similares; y al respecto debemos señalar que nuestra actuación, como Tribunal de Apelaciones en los procesos administrativos por Destitución de los Alcaldes, se basa estrictamente en las Leyes 135 de 1943 y 33 de 1946 sobre la jurisdicción Contencioso Administrativa. En ese sentido resulta obligante transcribir el contenido del artículo 41 de la citada Ley que preceptúa:
>
> ARTICULO 41: `Ante el Gobernador se surtirán las apelaciones contra las decisiones definitivas de los empleados, funcionarios o personas administrativas del orden provincial o de los Alcaldes Municipales y ante el Alcalde las correspondientes a los del orden municipal'.
>
> De la lectura del artículo transcrito enerva claramente la competencia de este Despacho Provincial para conocer en grado de apelación, las decisiones adoptadas por los Alcaldes en materia administrativa, competencia que se ha venido ejecutando durante tiempos inmemorables pues las propias Alcaldías, inclusive, la Alcaldía de Panamá, acoge el Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio y remite el expediente a esta esfera para la calificación de la alzada".

Concepto de la Procuradora de la Administración

La representante del Ministerio Público al contestar la demanda de nulidad encausada, solicita a los Magistrados de la Sala Tercera, que declaren la nulidad

de la Resolución N° P Adm. 002-97 de 4 de junio de 1997, expedida por la Gobernación de Panamá.

En concepto de la Procuradora la presente controversia radica en determinar si la Gobernadora de la Provincia tienen la competencia para conocer de las apelaciones en contra de las actuaciones administrativas de los Alcaldes de Distrito, en este sentido señaló:

> "Prima facie este Despacho se percata del hecho que en el presente caso, básicamente existen dos normas legales que de manera diferente regulan la misma situación jurídica.
>
> Por un lado está el artículo 51 de la ley 106 de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984, Orgánica del Régimen Municipal, que señala que las Resoluciones y demás actos de los alcaldes,cuando se relacionan con la gestión administrativa municipal, son impugnables ante los tribunales competentes; y por el otro, el artículo 41, de la ley 135 de 1943, modificada por la ley 33 de 1946, de la jurisdicción contencioso administrativa, que establece que, por vía gubernativa, ante el gobernador se surtirán la apelaciones contra las decisiones definitivas de los Alcaldes Municipales.
>
> En el criterio de este Despacho, la Resolución P. Adm-002-97, de 4 de junio de 1997, en efecto viola los artículos 46 y 51 de la Ley 106 de 1973, los artículos 39-a y 40 de la ley 135 de 1943 y demás normas concordantes de nuestro ordenamiento legal, pues la Gobernadora de la Provincia carece de la competencia necesaria para conocer de las apelaciones en contra de las actuaciones de los Alcaldes de Distrito, cuando estas se refieren al ejercicio de su función administrativa y en actividades propias de la autonomía municipal".

Decisión de esta Superioridad

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrado que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, entran a resolver la contienda encausada mediante la presente acción de nulidad.

La presente demanda tiene su origen cuando el Licenciado Olmedo Arrocha, decide demandar la nulidad de la Resolución N° P Adm 002-97 que expidió la Gobernación de la Provincia de Panamá, mediante la cual se decide revoca el Decreto N° 51 de 19 de enero de 1996, emitido por la Alcaldía del Distrito de Panamá, en donde se declaró insubsistente el cargo que ocupaba el señor Néstor Góndola en la mencionada institución. En este sentido el licenciado Arrocha considera que con base a la ley 19 de 1992 (que establece las atribuciones o facultades de los gobernadores), la Gobernación de la Provincia de Panamá, sólo tiene competencia para conocer de en segunda instancia de las apelaciones contra las decisiones, multas o sanciones disciplinarias de policía que impongan los alcaldes, por lo que nada se señala en cuanto a las actuación de los alcaldes como jefe de la administración alcaldicia.

Como bien observa este Tribunal el problema de fondo radica en el hecho de verificar si la Gobernación de la Provincia de Panamá, tiene o no competencia para conocer las actuaciones administrativas de la Alcaldía de Panamá.

En este sentido podemos señalar que existen diversas normas que explican las funciones de los Alcaldes y Gobernadores, de esta manera podemos señalar la Ley 52 de 12 de diciembre de 1984 que reforma la ley 106 de 8 de octubre de 1973 expresa en el artículo 28 lo siguiente:

> "Artículo 28: el artículo 51 de la ley 106 de 8 de octubre quedará así:
>
> Artículo 51: Las Resoluciones y los demás actos de los Alcaldes, cuando se relacionen con la gestión adminitrativa municipal son impugnables ante los Tribunales competentes.

> Contra las multas y sanciones disciplinarias que impugna los Alcaldes, cuando actúan como jefe de policía del Distrito, cabrá el recurso de apelación ante el Gobernador de la Provincia".

Por su parte la Ley 19 de 3 de agosto de 1992, señala en su artículo 9 numeral 22 lo siguiente:

> "ARTICULO 9: El artículo 4 de la Ley N° 2 de 2 de junio de 1987 queda así:
>
> Artículo 4: Los Gobernadores tendrán las siguientes atribuciones:
>
> 1 ...
> 22. Conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones, multas y sanciones disciplinarias de policía, que impongan los alcaldes como funcionarios de primera instancia; ...".

Ambos artículos coinciden en destacar que los gobernadores conocen de las apelaciones de los alcaldes cuando estos actúen dentro de sus funciones como Jefe de Policía. Por lo que considera esta superioridad que la Resolución N° P. Adm. 002-97 expedida por la Gobernación de la Provincia de Panamá viola las normas antes transcritas, pues al desconocer el contenido de las mismas resuelve una apelación para la cual la gobernación no tenía competencia.

Por su parte la Gobernación de la Provincia de Panamá al rendir el informe explicativo de conducta, manifiesta en su escrito visible a foja 59, que su actuación dentro del presente caso tiene su fundamento jurídico en el artículo 41 de la ley 135 de 1943, que destaca que ante el gobernador se surtirán las apelaciones contra decisiones definitivas de los alcaldes municipales.

En este orden de ideas cabe recalcar que el artículo 39-a y 40 de la ley 135 de 1943, expresan las reglas a seguir cuando existan normas que regulen de forma similar un mismo tema. Estos artículos señalan:

> "Artículos 39-a: Las reglas del presente capítulo no se aplicarán cuando las leyes o los decretos establezcan un procedimiento especial para el trámite de los negocios en cualquier dependencia de la administración. En este último caso, regirá el procedimiento especial.
>
> Artículo 40: En los asuntos municipales se aplicará el procedimiento de este capítulo, salvo cuando los recursos establezcan reglas especiales para negocios determinados".

Como explicamos al principio de este análisis el fondo del asunto esta en determinar si la gobernadora tiene o no la competencia para conocer de las apelaciones de los alcaldes, a lo que esta superioridad concluye que los alcaldes realizan dos tipos de actuaciones como jefes de policía y como jefes de la administración municipal, y solo cuando actúa como jefe de policía la gobernadora es competente para conocer de las apelaciones. En cuanto a las normas en conflicto es decir la Ley 106 de 1973, ley 19 de 1992 y lo que dispone la Ley 135 de 1943, se evidencia que son claras las normas de interpretación que la propia ley contencioso señala en este sentido, así al existir leyes que regulan específicamente el tema de las apelaciones ante los gobernadores deben aplicarse dichas disposiciones.

Ahora bien en lo referente a los artículos que se estiman infringidos podemos señalar que se producen las violaciones alegadas por el recurrente en cuanto a los artículos 44 y 51 de la Ley 106 de 1973, artículo 9 numeral 22 de la Ley 19 de 1992 y el artículo 1726 del Código Administrativo. Como bien observa este Tribunal, los artículos antes mencionados tienen un común denominador, ya que todos coinciden en señalar que los gobernadores tendrán competencia para conocer de las apelaciones de los Alcaldes, siempre y cuando estos actúen dentro de sus funciones como jefe de policía, a lo que la Sala concluye que le asiste el derecho al Lic. Olmedo Arrocha, cuando solicita la declaratoria de nulidad de

la Resolución N° P. Adm. 002-97 de 4 de junio de 1997, pues en efecto la mencionada resolución lesiona el ordenamiento legal objetivo, ya que se viola la autonomía municipal, en el momento en que la gobernación deja de aplicar u omite las normas que señalanclaramente en que casos dicha funcionaria queda facultada para conocer de las apelaciones de lo alcaldes.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES ILEGAL la Resolución N° P. Adm. 002-97 de 4 de junio de 1997, expedida por la Gobernación de la Provincia de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL A. BERNAL, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO PARA LA ELECCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **MIGUEL A. BERNAL**, actuando en su propio nombre y representación, ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo, por ilegal, el **artículo 4 del Reglamento para la elección de Rector (a) de la Universidad de Panamá 1997**, aprobado por el **Gran Jurado el 23 de abril de 1997** (fs. 7), por violar el artículo 3 de la Ley N° 6 de 24 de mayo de 1991 y el artículo 103 del Estatuto de la Universidad de Panamá.

El acto impugnado, artículo 4 del Reglamento para la Elección del Rector (a) de la Universidad de Panamá, señala quienes tienen la categoría de profesor regular, profesor especial, profesor asistente, estudiante regular y empleado administrativo permanente, con derecho a votar en las elecciones de Rector 1997, son aquellos que reunían los requisitos para cada una de estas categorías el 24 de marzo de 1997.

La parte actora considera que la disposición acusada de ilegal, viola por omisión el artículo 3 de la Ley N° 6 de 1991, toda vez que desconoce que los votantes que pueden participar en el escogimiento del Rector 1997 son los que tengan las categorías respectivas y desempeñen dichos cargos, "**a la fecha de la convocatoria formulada por el Consejo General de la Universidad**"; violación que da participación en la elección a otros votantes, docentes y administrativos, recién nombrados por la Rectoría de la Universidad de Panamá, así como a estudiantes matriculados después de la fecha tope constituida por la Convocatoria a elecciones del Consejo General Universitario.

Mediante auto dictado el 19 de mayo de 1997 (fs. 19-22), la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, suspendió los efectos de las frases "a la fecha del 24 de marzo de 1997" y "al 24 de marzo de 1997", contenidas en el artículo 4 del Reglamento para la Elección de Rector (a) de la Universidad de Panamá 1997, porque violaban ostensiblemente el artículo 3 de la Ley N° 6 de 1991, y era necesario evitar vicios que propiciaran la nulidad de la elección del Rector de la Universidad de Panamá 1997.

Por tanto, en cuanto a este primer cargo de violación, la Sala considera que le asiste razón a la parte actora, porque el artículo 3 de la Ley N° 6 de 24 de mayo de 1991, dispone que el Rector será elegido por todos los que a la fecha

de la convocatoria formulada por el Consejo General Universitario, cual es el 19 de diciembre de 1996 (fs. 33), sean profesores regulares y especiales, asistentes de profesores, estudiantes regulares de la Universidad y empleados administrativos de la Universidad nombrados con carácter permanente, y el artículo 4 del Reglamento de Elección, impugnado en este proceso, dispone que son votantes idóneos quienes detenten estas categorías al 24 de marzo de 1997, fecha posterior a la convocatoria y establecida por el Reglamento como límite para adquirir la categoría de profesor regular, especial, asistente, estudiante regular y administrativo permanente, necesaria para participar como votante en las elecciones de Rector de la Universidad en 1997.

Así lo expresó esta Sala, en un caso análogo al que nos ocupa, en Sentencia de 27 de noviembre de 1992, al resolver la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Dr. Miguel Antonio Bernal contra algunos artículos del Reglamento para la Elección de Rector de la Universidad de Panamá, expedido por el Gran Jurado de Elecciones el 14 de junio de 1991, para la elección de Rector 1991, afirmando lo siguiente:

> "La Sala considera que el artículo 4 del Reglamento de Elecciones viola de manera clara el artículo 3 de la Ley No. 6 de 1991 al establecer una fecha distinta a la fecha de convocatoria estipulada por el Consejo General Universitario como fecha límite para adquirir la categoría de las personas que pueden votar como profesores, estudiantes o administrativos. Las frases "a la fecha del 14 de junio de 1991" y "al 14 de junio de 1991" establecidas en el artículo 4 antes mencionado se aparta totalmente de lo establecido en el artículo 3 de la Ley 6 de 1991 por el cual dichas frases son, a todas luces, ilegales. Prospera, pues, este cargo". (Registro Judicial de junio de 1991, p. 116).

Por tanto, prospera el cargo que se hace al artículo 4 del Reglamento para la Elección de Rector (a) 1997, de violar el artículo 3 de la Ley N° 6 de 24 de mayo de 1991.

La parte actora considera que el acto administrativo también viola el artículo 103 del Estatuto Universitario, sin embargo, la Sala estima innecesario el análisis de este segundo y último cargo, porque se ha comprobado la ilegalidad del acto impugnado.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo contencioso administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NULO, POR ILEGAL, el artículo 4 del Reglamento para la Elección del Rector (a) 1997, aprobado por el Gran Jurado el 23 de abril de 1997.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL ANTONIO BERNAL, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS BATRES Y OMAR LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 1 DE 9 DE MAYO DE 1997, DICTADO POR JURADO DE ELECCIÓN PARA DECANO Y VICE-DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Antonio Bernal ha presentado demanda contencioso

administrativa de nulidad, en representación de **LUIS BATRES Y OMAR LÓPEZ**, para que se declare la nulidad del **Resuelto N° 1 de 9 de mayo de 1997**, dictado el **Jurado de Elección para Decano y Vicedecano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá.**

LO QUE SE DEMANDA

El licenciado Bernal solicita la declaratoria de nulidad de lo siguiente:

"PRIMERA: Que es nulo por ilegal el RESUELTO N° 1 dictado el día nueve (9) de mayo de 1997, por el Jurado de Elección para Decano y ViceDecano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, presidido por el Dr. Noriel Chang, porque viola los artículos 3, 4 y 6 (Transitorio) de la Ley 6 de 24 de mayo de 1991.

SEGUNDA: Que son nulas por ilegales las actuaciones del Jurado de Elección para Decano y Vice Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, presidido por el Dr. Noriel Chang que llevan a la celebración de las elecciones en la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá para el 11 de junio de 1997, porque no ha sido dictado un Reglamentopara la elección de Decano y Vice Decano de la Facultad de Odontología de 1997 y se está actuando sobre la base de un Reglamento de Elección que no tiene vigencia a la fecha y además es ilegal, porque viola los artículos 3, 4 y 6 de la ley 6 de 24 de mayo de 1991".

ARGUMENTOS DEL PROPONENTE DE LA ACCIÓN

En resumen, el Dr. Miguel Antonio Bernal señala en la sección III "Hechos y Omisiones Fundamentales" del libelo de demanda que las modificaciones a la Ley 11 de 8 de junio de 1981, Orgánica de la Universidad de Panamá, dictadas por la Asamblea Legislativa mediante Ley 6 de 24 de mayo de 1991, y "diversos autos y fallos de la Corte Suprema de Justicia han afectado, fundamentalmente y a partir de entonces, el régimen electoral aplicable a la elección de las autoridades de la Universidad de Panamá, incluyendo la elección directa y secreta del Rector, Decanos y Vice Decanos, Directores y Subdirectores de Centros Regionales ..., sin respetar el marco de referencia electoral preceptuado por la Ley 6 de 24 mayo de 1991, y fallos de la Honorable Corte Suprema de Justicia ..."

Reitera el Dr. Bernal en su libelo que "el Jurado de Elecciones ... en abierta infracción de la ley ... no ha respetado diversos fallos de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, que expresa claramente que los procedimientos para las elecciones de Decanos y Vicedecanos; Directores y Subdirectores de Centros Regionales Universitarios de la Universidad de Panamá no deben anidar disconformidad entre la norma reglamentaria y la Ley, pues ella ocasiona una grave lesión a la integridad del ordenamiento jurídico establecido, entre otros por la Ley 6 de 24 de mayo de 1991".

El Dr. Bernal concluye en la exposición de los "Hechos y Omisiones" de la acción, que "el Jurado de Elecciones ... no tiene base jurídica para las decisiones que ha venido tomando las cuales afectan de manera directa el ordenamiento legal".

INFORME EXPLICATIVO DE LA ENTIDAD DEMANDADA

La entidad demandada mediante informe explicativo de conducta argumentó lo siguiente:

> "Observo que la demanda tiene por objeto que se declare 'nulo por ilegal el Resuelto Nª 1, dictado el día nueve (9) de mayo por el Jurado de Elección para Decano y Vice Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá' y, además, las actuaciones de dicho jurado, porque el mismo no dictó un Reglamento para Elección de Decano y Vice Decano, aduciendo violación a los artículos 3, 4, y 6 de la Ley 6 de 24 de mayo de 1991, ya que el reglamento que se aplica, esto es, el Reglamento General para la Elección de Decano y Vice-Decanos de las Facultades, Directores y Subdirectores de los Centros Regionales Universitarios de la

Universidad de Panamá, "no tiene vigencia", o sea que no se pueden efectuar elecciones de las autoridades por ausencia de reglamentación, lo de ser cierto produciría un vacío legal y material inimaginable en la Universidad de Panamá, cuyas autoridades a nivel de Decanos y Vice-Decanos y Sub-Directores de Centros Regionales estarían con sus períodos vencidos frente a la imposibilidad de elegir sus sustitutos ... Resuelto N° 1 ... el resuelto decide sobre los aspirantes a candidaturas: dos (2) a Decano y dos (2) a vice Decano, resultando negada la del Dr. Luis Batres por incumplimiento del artículo 3 del Reglamento General de Elecciones de Decano y Vice-Decano ...

El demandante no discute la validez de la apreciación de la norma antes transcrita, ni la razón que se invocó para denegar su candidatura y admitiendo implícitamente, que estaba descalificado para participar como candidato sino que esgrime la tesis de que el jurado que presido es quien debió dictar su reglamento y que el Reglamento General no tiene vigencia y fue dictado por el órgano de gobierno al que no le corresponde por ley esta función, señalando que se han violado los artículos 3, 4 y 6 de la ley 6 de 1991, que reformó la ley 11 de 1981, Orgánica de la Universidad de Panamá. Me permito atraer la atención de esa Superioridad sobre el hecho de los artículos 3 y 4 de la ley 6 de 1991 se refieren a la elección de Rector, y que el artículo 6 de la misma se refiere de manera referencial a las elecciones de Decano y Vice Decano, Directores de Centro Regionales. ...

Y, como queda dicho, para la Elección de Decanos y Vice-Decanos, Directores, y Subdirectores de Centro Regionales, sólo se dijo que deben ser elegidos "en votación directa y secreta con el mismo procedimiento y con la misma ponderación utilizada para la elección del Rector, "sin indicar quien establecería el reglamento para las mencionadas elecciones y es por ello que el Consejo General Universitario, que conforme al artículo 11, numeral 7, de la ley 11 de 1981, tiene atribución para dictar "los reglamentos generales de la Universidad", es que expidió el Reglamento para la Elección de Decano, Vice-Decano de las facultades, Directores y Subdirectores de los Centros regionales Universitario de la Universidad de Panamá, reglamento que por haber sido expedido por órgano de gobierno de la Universidad de Panamá, competente para hacerlo, goza de presunción de legalidad, y sólo puede ser enervada mediante derogación por el órgano que lo expidió o declaratoria de ilegalidad por autoridad competente, y mientras tal no ocurra, esta vigente y es de forzoso acatamiento en la materia que rige, el que por otra parte no tiene fecha de vencimiento. Queda claro entonces que el Jurado para Elecciones de Decano y Vice-Decano tiene atribuciones para dictar el reglamento de elecciones para elegir las autoridades mencionadas".

INFORME DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Por otro lado, la Procuradora de la Administración se opuso a las pretensiones del actor, expresando el siguiente criterio:

"... no existe un elemento vinculante con el resuelto impugnado, salvo la medida adoptada de no aceptar la candidatura del Profesor Dr. Luis Batres, por no haberse separado del cargo de conformidad con el Reglamento General de Elecciones de la Universidad, tomada por el Jurado de Elecciones de la Facultad, pero los cuales no guardan relación directa con la negativa a candidatizar al Dr. Batres.

El Resuelto impugnado esta decidiendo sobre la medida a tomar respecto a uno de los candidatos, quien de conformidad con el Reglamento Interno del Jurado de Elecciones para escoger Decano y Vice-Decano, debió haberse separado de su cargo por lo menos, un mes antes de la fecha de elección. Este Reglamento fue proferido

conforme al artículo 11, numeral 7 de la Ley 11 de 1981, que atribuye al Consejo General Universitario facultad para proferir los "reglamentos generales de la Universidad".

Es necesario recalcar que quien incurre en un error de interpretación es el demandante, ya que el Reglamento General para la Elección de decano y Vice Decano, estaba vigente y sirvió de base para proferir la Resolución N° 7-96 y como base también del Resuelto N° 1 de 9 de mayo de 1997, por el cual el Jurado de Elecciones presidido por el Dr. Noriel Chang enfatiza en que no se ha presentado la solicitud de separación del cargo incumpliendo con el artículo 3 del Reglamento de Elección de Decano y Vice-decano.

Cabe recalcarle al demandante, que esta impugnado un Resuelto como supuestamente violatorio de la norma jurídica (es decir de la Ley 6 de 1991), que se basa en un reglamento general de Elecciones cuya vigencia expiró, pero sólo lo manifiesta; más, no demuestra que el mismo realmente no es aplicable, ni que el mismo sea ilegal, pues no ha sido demandado ante la Honorable Corte Suprema como nulo, por ilegal, por lo que en base al principio de legalidad, se presume legal".

DECISIÓN DE ESTE TRIBUNAL

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a resolver el fondo de la controversia.

Un estudio sucinto del negocio que nos ocupa revela que a través de la presente acción de nulidad el demandante ha solicitado la declaración de nulidad por ilegal, del Resuelto N° 1 de 9 de mayo de 1997 dictado por el Jurado de Elecciones para Decanos y Vice-Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, a través del mencionado resuelto, dicho jurado, resuelve la solicitud de postulaciones para candidatos a Decano y Vice decano de la Facultad de Odontología, estableciéndose que uno de los candidatos, el doctor Luis Batres, no cumple con el requisito de separarse del cargo en el tiempo prudencial que señala la ley, violando de esta manera el artículo 3 del Reglamento de Elecciones de Decano y Vice Decano de la Facultad de Odontología.

Sostiene el Dr. Bernal que al no contar el Jurado de Elección de la Facultad de Odontología, con un reglamento propio de elecciones, la Sala debe declarar la nulidad de las actuaciones de dicho Jurado. En este mismo orden de ideas señala que el Resuelto N° 1 de 9 de mayo de 1991, ha infringido los artículos 3, 4, y 6 de la Ley 6 de 24 de mayo de 1997, reformatoria de la Ley 11 de 8 de junio de 1981, Orgánica de la Universidad de Panamá.

Un examen detenido de "lo que se demanda" revela que son más de dos los actos cuya nulidad se demanda, a saber:

1). Resuelto N° 1, dictado el 9 de mayo de 1997,"porque viola los artículos 3, 4 y 6 (transitorio) de la Ley 6 de 24 de mayo de 1991;

2). "... todas las actuaciones del Jurado de Elecciones ... que llevan a la celebración de las elecciones en la Facultad de Odontología ..."

3). "Un reglamento de elección que no tiene vigencia a la fecha y además es ilegal, porque viola los artículos 3, 4 y 6 de la ley 6 de 24 de mayo de 1991".

Mediante Resuelto N°1 el Jurado de Elección "procede a la postulación oficial ..." del Decano y Vice Decano de la Facultad de Odontología para el período 1997-2000; y declara que "El Dr. Luis Batres en incumplimiento del artículo 3 del Reglamento General de Elecciones Decano y Vice Decano no puede ser candidato al cargo para el cual se postuló". El Resuelto N°1 fundamenta su decisión en el hecho de que el Dr. Batres "cumple Funciones Administrativas de Coordinación de Clínica y no ha presentado su solicitud de separación de cargo incumpliendo el artículo 3 del Reglamento de Elección de Decano y Vice-Decano".

Conviene transcribir el texto completo del artículo 3 del Reglamento General, en el que el Resuelto N° 1, pretende fundar la negativa a la postulación oficial del Dr. Luis Batres:

> "ARTICULO 3: Cuando los candidatos a Decano y Vicedecano, Director o SubDirector se encuentren ejerciendo un cargo directivo en dicha instancia académica, deberán separarse del mismo, por lo menos, un mes antes de la fecha de la elección, haciendo uso de una licencia para tal fin. Durante este período el funcionario podrá reincorporase a sus labores docentes de investigación y extensión.
>
> Parágrafo: Para estos efectos se consideran como cargos directivos los siguientes:
>
> Decanos y Vicedecanos
>
> Directores y Sub Directores de Centros Regionales
>
> Directores y Sub Directores de los Centros de Investigación
>
> Directores y Sub Directores de Admisión y Capacitación
>
> Directores y Sub Directores de Departamentos Académicos
>
> Directores y Sub Directores de Escuelas
>
> Directores y Sub Directores de otras Direcciones de Facultades y Centros Regionales
>
> Secretarios Administrativos de Facultades y Centros Regionales
>
> Secretarios Generales de Facultades y Centros Regionales".

Es de resaltar que a tenor del Resuelto N° 1, el Dr. Luis Batres "cumple funciones administrativas de Coordinación de Clínica", y que no ha sido materia de controversia entre las partes si tal cargo debía o no entenderse comprendido entre las incompatibilidades establecidas por el artículo 3 del Reglamento General. De allí que la Sala no entre a dilucidar esa cuestión y la dé por establecida.

Además, el recurrente señala que la violación al Resuelto N° 1 es directa pues el Jurado de elecciones de Decano y Vice Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, fundamenta su actuación en un Reglamento General de Elección de Decano y Vice Decano que no tiene vigencia a la fecha, pues este fue dictado para las elecciones de autoridades universitarias de 1994.

Con base a lo anteriormente expuesto considera el demandante que se viola el artículo 3, 4 y 6 de la ley 6 de 24 de mayo de 1991. Que son del tenor siguiente:

> "Artículo 3: El Artículo 25 de la ley 11, de 8 de junio de 1981 quedará así: El rector es el representante legal de la Universidad de Panamá y será elegido por votación directa, secreta y ponderada por todos los que a la fecha de la convocatoria formulada por el Consejo General Universitario, sean profesores regulares y especiales, asistentes de profesores, estudiantes regulares de la Universidad y empleados administrativos que sean servidores públicos de la Universidad nombrados con carácter permanente. El período normal del Rector se iniciará el primer día del segundo semestre del año lectivo correspondiente. La elección para el período normal se efectuará dos (2) meses antes de que termine el respectivo semestre.
>
> En la votación para rector el voto será ponderado de la siguiente manera: el voto de los profesores regulares valdrá un cincuenta porciento (50%), el de los profesores especiales, un quince por (15%), el de los asistentes de profesores un cinco por ciento (5%);

el de los estudiantes regulares un veinticinco por ciento (25%) y el de los empleados administrativos un cinco por ciento (5%).

Artículo 4: La votación que se refieren los artículos anteriores se realizará en las Facultades, Centros Regionales e Institutos de Investigación de la Universidad de Panamá, y los totales generales que resulten, una vez escrutados los votos serán ponderados de acuerdo a lo establecido en esta ley. Para tales efectos cada facultad, Centro Regional e Instituto de la Universidad de Panamá, constituirá un jurado de elecciones integrado por los diversos estamentos contemplados en la ley.

Cada jurado estará constituido por dos profesores regulares, un profesor especial, un estudiante y un empleado administrativo.

El cómputo y la ponderación final serán realizados por un gran jurado, integrado por un miembro de los jurados de cada Facultad, centro Regional e Instituto de Investigación de la Universidad.

Son funciones de este Gran Jurado,la preparación, reglamentación, dirección y culminación del proceso para la elección del Rector de la universidad de Panamá.

Artículo 6: (transitorio) ...
Todos los Decanos y Vice Decanos, igual que los Directores y Subdirectores de Centros Regionales serán elegidos antes del inicio del segundo semestre del año académico 1991-1992, en votación directa y secreta con el mismo procedimiento y con la misma ponderación utilizada para la elección de Rector establecido en la presente Ley".

Con respecto al concepto de la violación de los artículos antes mencionados el demandante ha señalado que la actuación del Jurado para elecciones de decano y Vice Decano de la Facultad de Odontología, contraviene notoriamente los mencionados artículos pues lesiona la integridad del ordenamiento jurídico y puede viciar, la elección para el cargo de Decano y Vice Decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá. Así en la medida en que el Jurado de Elecciones, reconozca el "Reglamento General para la Elección de Decano y Vice Decano de las Facultades, Directores y Subdirectores de los Centros Regionales Universitarios" aprobado por el Consejo General Universitario el 29 de junio de 1994, para la elecciones de ese año, se aparta, de aplicar algo que no esta vigente de lo dispuesto en el artículo 3 y 6 de la ley 6 de 14 de mayo de 1991.

En cuanto a las violaciones expresadas por el recurrente esta Superioridad es del criterio que no se ha perpetrado dichas infracciones. Esto lo señalamos en virtud de que el "Reglamento General de Elecciones de Decano y Vice Decano de las Facultades, Directores y Subdirectores de los Centros Regionales Universitarios de la Universidad de Panamá", contrario de lo que manifiesta el Licenciado Bernal, se encuentra vigente, ya que su ilegalidad no ha sido demandada ante las autoridades competentes. Si bien es cierto, en la presenta demanda, el actor señala que dicho reglamento es ilegal, se observa que no se específica en que consiste dicha ilegalidad, y no se demanda como acto principal el Reglamento General de Elecciones. Por lo que en base al principio de legalidad, debe entenderse que dicho reglamento esta vigente.

Como bien se observa, Consejo General Universitario queda facultado a través del artículo 11 numeral 7 de la ley 11 de 1981 Orgánica de la Universidad de Panamá, para proferir "reglamentos generales de la universidad". En base a esta atribución que otorga la ley, el Consejo Universitario aprobó el 29 de junio de 1994 el Reglamento para la Elección de Decanos y Vice Decanos, que actualmente sigue vigente por las razones ya expresadas.

Este Reglamento sirvió de base para que el Consejo expidiera la Resolución N° 7-96 de 19 de diciembre de 1996, en donde se convoca a la comunidad universitaria al proceso electoral de elección a rector de la Universidad de Panamá, a partir de 24 de marzo de 1997, (ver f. 31).

Por otro lado es preciso indicar, que en cuanto a las infracciones de los artículos 3, 4 y 6 de la ley 6 de 1991, se observa claramente de la lectura de los mismos, que estos se refieren a la elección del rector, a la categoría de votantes, la forma de ponderación de los votos, conformación del jurado y el proceso de elección, visto desde este punto de vista considera la Sala que no existe ningún vínculo entre la pretensión del actor consistente en la solicitud de la declaratoria de nulidad, por ilegal, de la resolución que niega la candidatura del Dr. Batres, y los artículos que señalan como infringido, pues estos tratan como ya expresamosde la elección del rector.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 1 de 9 de mayo de 1997, dictada por el Jurado de Elección para Decano y Vice-Decano de la Facultad de Odontología, interpuesta por el licenciado Miguel Antonio Bernal en representación de Luis Batres y Omar López, dentro de la demanda contencioso administrativa de nulidad.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA GUERRA Y GUERRA EN REPRESENTACIÓN DE UTRACOLPA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LAS RESOLUCIONES N° 31 Y N° 31-1 AMBAS DICTADAS EL 20 DE ABRIL DE 1995, POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Guerra y Guerra, actuando en nombre y representación de **UTRACOLPA, S. A.**, ha interpuesto recurso contencioso administrativo de nulidad, para que se declare nulas, por ilegales, las **Resoluciones N° 31 y 31-1**, proferidas el 20 de abril de 1995, por el **Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia**.

La presente demanda está en la etapa procesal de resolver en el fondo y antes de emitir un pronunciamiento, la Sala estima necesario dictar auto para mejor proveer, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, a fin de allegar al negocio copia autenticada del expediente que contiene la actuación administrativa surtida ante la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia, en la que se dictó las resoluciones impugnadas. Además es necesario para resolver la presente controversia conocer el listado o registro oficial del total de los prestatarios del servicio colectivo de transporte público terrestre de pasajeros de la ruta Panamá-Colón y viceversa.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE que por Secretaría se solicite a la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia que envíe, en el término de cinco (5) días a esta Superioridad, copia debidamente autenticada de los siguientes documentos:

1. Del expediente contentivo de toda la actuación administrativa surtida ante la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre con motivo de las solicitudes de concesión de la Ruta Panamá Colón y Viceversa, en las modalidades de servicio regular y expreso, hechas por la sociedad anónima Expreso Panamá

Colón, Centro América, S. A. y de las comunicaciones escritas dirigidas a la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre por siete (7) titulares de certificados de operación que fueron erróneamente incorporados a la organización de transportistas Expreso Panamá Colón, Centro América, S. A., y;

2. Del listado o registro oficial del total de los prestatarios del servicio colectivo de transporte público terrestre de pasajeros de la ruta Panamá-Colón y viceversa.
Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. CARMELO GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL PUNTO N° 4 DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO EN SU SESIÓN 02-97 CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 1997, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Carmelo González, en representación de **JUAN GONZÁLEZ R.**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el **punto N° 4 del Acuerdo N° 02-97 del 3 de abril de 1997**, del **Consejo General Universitario, de la Universidad Tecnológica de Panamá**, por medio del cual se organiza y reglamenta la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Lo que se Demanda

A través de la presente acción se demanda la declaratoria de ilegalidad del punto 4 del Acuerdo N° 02-97 de 3 de abril de 1997, del Consejo General Universitario, de la Universidad Tecnológica de Panamá, "sobre la Organización y Reglamentación de la Facultad de Ciencias y Tecnología". Esta disposición legal es del tenor siguiente:

"4. Composición Académica

Forman parte de la Facultad de Ciencias y Tecnología los docentes que imparten asignaturas propias de los Departamentos de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Humanísticas en la Sede y en los Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá".

De igual forma, el recurrente pretende que se declare que en la elección de Decano y Vice-Decanos de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá, solamente pueden votar los profesores que integraban las nueve Coordinaciones Académicas adscritas a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica de Panamá, al momento en que el Consejo General Universitario ordenó la convocatoria a elecciones de dichas autoridades. Que, además, se ordene al Jurado de Elecciones de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá el uso del Listado de Votantes correspondiente al Segundo Semestre Académico de 1996, en las elecciones a celebrarse en la Universidad Tecnológica de Panamá.

Los Hechos u Omisiones de la acción según el Actor

El recurrente argumentó como hechos u omisiones fundamentales del recurso incoado lo siguiente:

1. La Asamblea Legislativa dictó la Ley 57 de 26 de Julio de 1996, mediante la cual crea la Facultad de Ciencias y Tecnología, estableciendo además, normas sobre la elección de sus primeras autoridades.

2. El Consejo General Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, mediante acuerdos de su sesión 08-96 de 5 de septiembre de 1996, convocó a elecciones de representante ante los Órganos de Gobierno en la Facultad de Ciencias y Tecnología y a elecciones de Autoridades de la misma Facultad, para implementar la ley 57 de 1996.

3. El Jurado de Elecciones de la Facultad de Ciencias y Tecnología constituyó su Junta Directiva el día 19 de septiembre de 1996 y las elecciones de Decano y Vicedecanos se realizarán el día 25 de junio de 1997.

4. El Vicerrector Académico, mediante Memorando VRA-M-0065-97 de 21 de febrero de 1997, al comunicar a los Decanos, Coordinador General y Directores de Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá, el nombre de los Coordinadores de las áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica, implícitamente incorporó a la Facultad de Ciencias y Tecnología, Áreas distintas de las nueve Áreas Académicas que se señalan en el parágrafo transitorio del artículo 10 y del artículo 16 de la ley 57 de 1996.

5. El Consejo Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá mediante acuerdos aprobados en su Sesión 02-97, de tres de abril de 1997, al aprobar la estructura organizativa de la Facultad de Ciencias y Tecnología, punto 4 "Composición Académica" incorporó a la Facultad de Ciencias y Tecnología, docentes distintos de los que contienen el parágrafo transitorio del artículo 10 y el artículo 16 de la Ley 57 de 1996.

6. Como consecuencia de los hechos anteriores, el listado de votantes para las elecciones de autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnología a celebrarse el día miércoles 25 de junio de 1997, no corresponde a las que constituían la población inicial de la Facultad de Ciencias y Tecnología al momento de celebrarse la Convocatoria por el Consejo General Universitario del 5 de septiembre de 1996, ni a la señalada por los artículos 10 y 16 de la Ley 57 de 1996.

De la acción encausada se le corrió traslado a la entidad administrativa, a fin de que procediera a rendir informe de conducta en relación con la demanda encausada.

Informe Explicativo de Conducta

El Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, en su calidad de representante legal de dicho Centro de Estudios Superiores, en Nota que corre a fs. 31-37 del expediente principal, procedió a dar respuesta a esta Sala en relación con su actuación dentro del presente proceso contencioso, señalando fundamentalmente, lo siguiente:

Que la Facultad de Ciencias y Tecnología, creada por medio de la Ley N° 57 de 26 de julio de 1996, estuvo conformada inicialmente por los docentes que integraban las áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica. Posteriormente, el Consejo General Universitario, en su sesión N° 08-96 del 5 de septiembre de 1996, facultó a la Junta de Elecciones Docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá, para organizar el Comité de Elecciones de las áreas adscritas de la nueva Facultad de Ciencias y Tecnología, Comité que a su vez convocó a elecciones de 2 representantes docentes ante el Consejo General Universitario y 2 representantes docentes ante el Consejo Académico. Que, igualmente, el Consejo General Universitario en la misma sesión facultó al Vicerrector Académico para que convocara a la escogencia del Jurado de Elecciones para las áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica que pasaron a la Facultad de Ciencias y Tecnología; situación que efectivamente se produjo.

Por lo anterior, añade dicha entidad, fue necesario aprobar en el Consejo Académico y el Consejo General Universitario, la estructura organizativa de esta nueva unidad académica, según las facultades otorgadas por la Ley 17 de 1984,

reformada por la Ley N° 57 de 1996, (artículo 16). Así, el Consejo General Universitario en su sesión N° 02-97 de 3 de abril de 1997, aprobó la estructura organizativa de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

En virtud de lo expuesto, sostiene el precitado funcionario que resulta obvio que la composición docente y administrativa no necesariamente iba a ser igual a la existente al momento de aprobarse la Ley N° 57 de 26 de julio de 1996, ya que la misma ley en su artículo 16 señaló que la Facultad de Ciencias y Tecnología estaría conformada inicialmente por los docentes que en ese momento integraban las áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica. Sin embargo, añade que ésta no es una unidad aislada del resto de la Universidad, por lo que los órganos de gobierno, fundamentados en la autonomía constitucional de la Universidad y su Ley orgánica y reformas aprobaron la estructura organizativa, no sólo docente sino también administrativa que es lo normal en toda facultad de la Universidad Tecnológica de Panamá.

También indica el demandado que, las áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica y que pasaron a la Facultad de Ciencias y Tecnología siguen siendo las mismas: Derecho, Psicología, Matemáticas, Español, Inglés, Geografía-Historia y Sociología, Pedagogía, Química y Física. Que el Consejo General Universitario, al aprobar la composición docente, ha adoptado los mismos criterios utilizados para todas las Facultades de la Universidad Tecnológica de Panamá. Que es así como los docentes, dependiendo de su especialidad, se adscriben a una Facultad determinada, y, que, como no existía una Facultad de Ciencias y Tecnología los docentes de especialidades relacionadas con las Ciencias Exactas, Naturales y Humanísticas en los Centros Regionales fueron adscritos a las Facultades existentes por similitud o por dictar cursos en carreras de una facultad determinada, por lo que en la sede, se decidió adscribirlos a la Vicerrectoría Académica.

Por consiguiente, señala la entidad universitaria que al crearse la Facultad de Ciencias y Tecnología todos los docentes de la Universidad Tecnológica de Panamá, indistintamente de que dicten clases en la Sede o en los Centros Regionales, pertenecen a esta unidad académica que representa su área natural de especialización, y, que igualmente toda unidad académica debe tener una composición administrativa y así lo aprobó el Consejo General Universitario.

De las Disposiciones Acusadas y el Concepto de la Infracción

A juicio del demandante, la disposición acusada infringe el artículo 10 (parágrafo transitorio), y el artículo 16 de la Ley 57 de 26 de julio de 1996 "Por la cual se reforman artículos de la Ley 17 de 1984 y se dictan otras disposiciones". Tales normas son del tenor siguiente:

"Artículo 10.

...
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El jurado de elecciones para las áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica, estará conformado por un profesor de cada una de las nueve coordinaciones existentes, escogido por los docentes de estas coordinaciones, hasta tanto se conforme la Junta de Facultad".

"Artículo 16. Créase la Facultad de Ciencias y Tecnología, conformada inicialmente por los docentes que actualmente integran las áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica, y representada en el Consejo Académico y el Consejo General Universitario, por dos profesores en cada uno de dichos órganos, elegidos entre ellos".

Según el recurrente, la violación al artículo 10 en su Parágrafo Transitorio de la Ley 57 de 1996, "Por la cual se reforman artículos de la Ley 17 de 1984 y se dictan otras disposiciones", se da en razón de que el punto cuatro del acuerdo de la Sesión 02-97 del Consejo General Universitario, incorpora a la Estructura Organizativa de la Facultad de Ciencias y Tecnología, y, en consecuencia, como votantes en el listado para las elecciones de autoridades en dicha Facultad, a docentes y administrativos que no integraban las

nueve coordinaciones existentes en el momento que se dictó la Ley 57 de 1996, ni en el momento en que el Consejo General Universitario ordenó la celebración de elección de las autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

En cuanto al concepto de la violación del artículo 16 de la Ley 57 de 1996, el solicitante manifiesta primeramente, que "Es notorio que la intención del legislador fue garantizar la participación de los docentes que integraban las nueve coordinaciones académicas existentes y correspondientes a la misma cantidad de áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica. Que, en ese sentido es "que debe interpretarse la Ley 57 de 1996 puesto que el Parágrafo Transitorio del artículo 10 y el artículo 16 de la Ley 57 de 1996, no son normas aisladas y contradictorias, sino que están incorporadas en un mismo cuerpo o texto legal, y cuya aplicación sistemática posibilita la creación de la Facultad de Ciencias y Tecnología, cuyas autoridades deben surgir inicialmente de los profesores que integran las nueve coordinaciones existentes que corresponden a la misma cantidad de áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica".

Criterio de la Procuradora de la Administración

La Procuradora de la Administración, mediante la Vista Fiscal N° 346 de 5 de agosto de 1997, se opuso a las pretensiones de la parte actora, dado que al hacer un análisis jurídico de la situación planteada, resultado de confrontar la norma que se dice infractora frente a las normas que se dicen vulneradas, la Ley N° 57 de 1996, fue desarrollada por el Acuerdo N° 02-97 expedido por el Consejo General Universitario, de la Universidad Tecnológica de Panamá, en lo atinente a la Organización y Reglamentación de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Aunado a que el punto cuatro no puede interpretarse aisladamente, sino como parte integrante de la Organización y Reglamentación de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Decisión de la Sala

Vistos las argumentaciones de las partes involucradas en este proceso, la Sala pasa a resolver la controversia en examen.

Como viene expuesto, la disconformidad del recurrente se centra en el punto cuatro (4) del Acuerdo de 3 de abril de 1997, aprobado por el Consejo Universitario de la Universidad Tecnológica de Panamá, en su Sesión 02-97, que trata sobre la Organización y Reglamentación de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

El punto 4 del referido acuerdo, se relaciona con la Composición Docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología. La parte actora señala que dicha normativa incorpora docentes distintos de los que contiene el parágrafo transitorio del artículo 10 y el artículo 16 de la Ley 57 de 1996. Por ende, estima que en virtud de esta situación, el listado de votantes para las elecciones de autoridades de la Facultad de Ciencias y Tecnología celebradas el día miércoles 25 de junio de 1997, no corresponde a las que constituían la población inicial de la Facultad de Ciencias y Tecnología al momento de celebrarse la Convocatoria por el Consejo General Universitario del 5 de septiembre de 1996, ni a la señalada por los artículos 10 y 16 de la Ley 57 de 1996.

En el referido artículo 16 de la Ley 57 de 26 de julio de 1996, y vigente desde el 30 de julio de ese año en que fue publicada en la Gaceta Oficial N° 23,090, se creó la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá, y, a su vez se dispuso que la misma inicialmente estaría conformada por los docentes que actualmente, es decir, que al momento de su emisión, integraban las áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica, y representada en el Consejo Académico y en el Consejo General Universitario por dos profesores en cada uno de dichos órganos, elegidos entre ellos.

Al 30 de julio de 1996, las áreas adscritas inicialmente a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica, de conformidad con lo expresado por la entidad demandada, a foja 34 del expediente contencioso, lo eran: -Derecho, -Psicología, -Matemáticas, -Español, -Inglés, -Geografía-Historia y -Sociología, -Pedagogía, -Química y -Física.

Según el punto cuatro del Acuerdo N° 02-97, forman parte de la Facultad de Ciencias y Tecnología, los docentes que son los que imparten asignaturas propias de los Departamentos de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y Humanísticas en la Sede y en los Centros Regionales de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Ahora bien, la precitada disposición debe analizarse en forma integral con la demás normativa del referido Acuerdo N° 02-97. En este sentido, tenemos que el punto dos que trata sobre la Composición Académica de dicha Facultad dispone lo siguiente:

> "La Facultad se compondrá, de dos Departamentos, los cuales serán sus unidades de organización académica básica. Los mismos cubrirán, cada uno las grandes áreas del conocimiento humano, denominándose de igual manera:
>
> 2.1. Departamento de Ciencias Exactas y Naturales
>
> 2.2. Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas".

La disposición antes citada, también dispone que "Una vez constituida la primera Junta de Facultad y ratificadas las posiciones así requeridas por Ley, la Facultad se compondrá por los siguientes Departamentos:

> "2.1. Departamento de Ciencias Exactas
>
> 2.2. Departamento de Ciencias Naturales
>
> 2.3. Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas".

Al adentrarnos al análisis del punto seis que se refiere a la Descripción de cada Departamento, observamos que en el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales se incluye a las disciplinas de las Matemáticas, Ciencias Biológicas, Física, Química, entre otras. En tanto que, en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas se incluye a las especialidades sociales y humanísticas clásicas como la Psicología (sin incluir las de la especialidad de la Facultad de Ingeniería Industrial), las Ciencias de la Educación, Filosofía e Historia, Sociología, Antropología, Derecho, Demografía, Ciencias de la Comunidad Social y similares así como las disciplinas artísticas y los Idiomas.

De esta manera, este Tribunal llega a la conclusión de que la disposición acusada (punto cuatro del Acuerdo del Consejo General Universitario de 3 de abril de 1997), no infringe al artículo 16 de la Ley 57 de 1996. El mismo más bien está desarrollando y complementando lo dispuesto en el referido artículo 16, precisamente, con fundamento en el texto de dicha norma, que textualmente señala que dicha Facultad en su etapa inicial, estaría constituida por los docentes que -en ese momento- integraban las áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica. Ello significa que al darse la emisión del Acuerdo N° 02-97 del 3 de abril de 1997, sobre la estructura organizativa de la Facultad de Ciencias y Tecnología, la conformación docente inicial podía variar.

En cuanto al Parágrafo Transitorio del artículo 10 de la Ley 57 de 1996, la Sala estima que esta norma no resulta infringida por el mencionado punto cuatro. Dicho parágrafo hace referencia a la constitución de un Jurado de Elecciones para las áreas adscritas a la Vicerrectoría Académica, a los efectos del escrutinio de los votos en las elecciones de las autoridades universitarias, mientras que, el punto cuatro del Acuerdo bajo análisis, como hemos visto, se refiere a la Organización Docente de la Facultad de Ciencias y Tecnología.

Sobre las pretensiones del demandante en que esta Sala procediera a establecer que, para poder votar válidamente en la elección de Decano y Vicedecano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, el día 25 de junio de 1997, solamente podían votar los profesores que integraban las nueve Coordinaciones Académicas adscritas a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica de Panamá, al momento en que el Consejo General Universitario ordenó la celebración de elecciones, esta Sala estima pertinente reiterar lo señalado en

Auto de 24 de junio de 1997, en el sentido de que dicha petición no guarda relación alguna con el acto demandado, y que en todo caso, el recurrente debió demandar el Reglamento de Elecciones que sería el que de tener algún vicio de ilegalidad, el que podría afectar el desarrollo de los comicios. Veamos:

> "Cabe aclarar, que el recurrente relaciona el aludido punto 4 referente a la Composición Docente del Acuerdo en mención, cuya ilegalidad demanda, con la celebración de las elecciones de la Facultad de Ciencias y Tecnología que según alega están progamadas para el 25 de junio de 1997, así comotambién solicita que esta Sala proceda a establecer que para poder votar válidamente en la elección de Decano y Vicedecano de la Facultad de Ciencias y Tecnología, el próximo 25 de junio de 1997, solamente pueden votar los profesores que integraban las nueve Coordinaciones Académicas adscritas a la Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica de Panamá, al momento en que el Consejo General Universitario ordenó la celebración de elecciones.
>
> Sobre el particular, es de lugar indicar que dicha petición no guarda relación alguna con el acto demandado. En todo caso, el recurrente debió demandar el Reglamento de Elecciones que sería el que de tener algún vicio de ilegalidad, el que podría afectar el desarrollo de los comicios. Es por ello que la Corte no puede, de ningún modo, relacionar como pretende la parte actora, la disposición acusada, con otro acto administrativo no impugnado en esta acción de Nulidad, por carecer de la relación necesaria". (Lo resaltado es de la Sala).

Por las anteriores consideraciones, no se producen las violaciones señaladas, y así procedemos a declararlo.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL el punto 4 del Acuerdo N° 02-97 de 3 de abril de 1997, del Consejo General Universitario, de la Universidad Tecnológica de Panamá, "sobre la Organización y Reglamentación de la Facultad de Ciencias y Tecnología".

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. DIONISIO SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO MUNICIPAL N° 159 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Olmedo Arrocha, actuando en nombre y representación de la **ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ**, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema demanda contencioso administrativa de nulidad con el fin de que se declare nulo, por ilegal, el artículo tercero del **Acuerdo Municipal N° 159 de 26 de septiembre de 1995**, dictado por el **Consejo Municipal del Distrito de Panamá**.

El objeto de la demanda en estudio lo constituye la declaratoria de ilegalidad del Artículo Tercero del Acuerdo Municipal N° 159 de 26 de septiembre

de 1995, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá, "Por medio del cual se modifica el cargo que en concepto de boletas de estacionómetro que cobra en la actualidad el Municipio de Panamá". Esta disposición legal expresa lo siguiente:

> "ARTÍCULO TERCERO: Los fondos provenientes del incremento en este concepto, se repartirán de la siguiente manera:
>
> 50% Para el Municipio de Panamá
> 50% A repartir equitativamente entre las 19 Juntas Comunales del Distrito".

Cabe señalar que esta Sala, mediante resolución de 31 de enero de 1997, suspendió provisionalmente los efectos del Artículo Tercero del Acuerdo Municipal N° 159 de 26 de septiembre de 1995, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

I. La pretensión y su fundamento:

Según la parte actora, el artículo Tercero del Acuerdo Municipal N° 159 de 26 de septiembre de 1995, dictado por el Consejo Municipal del Municipio de Panamá, violó el artículo 147 de la Ley 51 de 11 de diciembre de 1995, el artículo 112 de la Ley N° 106 de 1973 y el numeral 3 del artículo 16 de la Ley 105 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley N° 53 de 12 de diciembre de 1984.

La primera disposición que se considera infringida es el artículo 147 de la Ley 51 de 11 de diciembre de 1995, cuyo contenido es del tenor siguiente:

> "Artículo 147: UNIDAD DE CAJA: Todos los ingresos del Gobierno Nacional deberán consignarse en el Presupuesto y se depositarán en la cuenta del Tesoro Nacional en el Banco Nacional de Panamá, contra la cual se expedirá toda orden de pago para cubrir los compromisos causados por las autorizaciones de gastos originadas en sus distintas dependencias.
>
> Las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públicas e Intermediarios Financieros se regirán por el mismo principio de unidad de caja., de conformidad con la autonomía administrativa y financiera dispuesta en su respectiva Ley.
>
> En caso de los ingresos creados por leyes especiales con destinos específicos, su recaudación y depósito se hará de acuerdo con la presente Norma".

Al exponer el concepto de la infracción, la actora manifiesta que esta norma se violó directamente porque lo que pretende el artículo tercero del Acuerdo Municipal que se demanda de ilegal, es que un ingreso corriente, como lo es el cargo que en conceptos de boletas de estacionómetro cobra el Municipio de Panamá, se destine a un gasto específico, que a su vez sea dividido en un 50% para el Municipio y 50% para las Juntas Comunales de manera que se verifica una transferencia de partida permanente, lo que traería una especie de crédito adicional permanente, contrapuestas a los principios y normas generales de presupuesto, toda vez que sólo es posible votar por créditos adicionales, cuando se aumenta el monto del Presupuesto.

El artículo 112 de la Ley 106 de 1973, reformado por la Ley 52 de 1984, que la parte actora cita como violado, establece lo siguiente:

> "Artículo 112. Los Municipios asignarán el porcentaje de sus ingresos reales que estimen convenientes para inversiones destinadas a la educación pública, educación física, salud pública e instituciones de bomberos y para las Juntas Comunales en sus respectivas jurisdicciones. Tales asignaciones atenderán a las necesidades municipales y a la planificación estatal de estos servicios públicos y sociales.

> Las Juntas Comunales presentarán al Municipio sus prioridades de proyectos. Para estos efectos antes de aprobar su presupuesto, los Municipios consultarán con el Ministerio de Planificación y Política Económica".

La actora considera que esta norma fue violada por el acto acusado, pues los Concejales, mediante acuerdo, dispondrán el cincuenta por ciento (50%) de todos y cada uno de los impuestos, tasas, derechos y demás rentas municipales, cada vez que las Juntas Comunales requieran o reclamen un aumento a sus ingresos, lo que, a su juicio, es sumamente peligroso e incluso atentatorio contra la autonomía municipal.

Otra disposición que se estima violada por la parte actora es el numeral 3 del artículo 16 de la Ley 105 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley 53 de 12 de diciembre de 1984:

> "Artículo 16: Las fuentes de ingresos de las Juntas Comunales serán las siguientes:
>
> ...
> 3. Las partidas presupuestarias que le asigne el Gobierno Central, el Consejo Provincial y el Municipio respectivo.
> ..."

En opinión del recurrente, esta norma ha sido quebrantada, ya que el legislador señala como fuentes de ingresos comunales las partidas presupuestarias que le asigne tanto el Gobierno Central, Provincial y Municipal y que por tanto, no puede ser como lo dispone el artículo impugnado que el fondo de las boletas de estacionómetro ingresen directamente a las Juntas Comunales.

II. El informe de conducta expedido por el Ministro de Educación.

Visible de fojas 44 a 46 del expediente, reposa el informe de conducta rendido por el Presidente del Consejo Municipal del Municipio de Panamá el que señala que con respecto a la supuesta violación del artículo 147 de la Ley N° 51 de 11 de diciembre de 1995, el Municipio de Panamá aplica el principio de unidad de caja consagrado en esta norma, ya que el dinero que proviene de las boletas de estacionómetro, ingresa íntegramente al presupuesto. Agrega que el acuerdo impugnado, sólo asigna a las Juntas Comunales el cincuenta por ciento (50%) del aumento decretado. En cuanto a la violación del artículo 112 de la Ley 106 de 1973, manifiesta que la misma es inexistente porque el importe del cincuenta por ciento (50%) del aumento de las boletas de estacionómetro, se incorporará a través de la partida 718, consignada en el presupuesto y que es ley municipal. También señala que el aporte otorgado por ley, por parte del Municipio de Panamá a las Juntas Comunales, es controlado por la Contraloría General de la República, mediante auditorías. En lo que respecta a la infracción del numeral 3 del artículo 16 de la Ley 105 de octubre de 1973, indica que es falso que el cincuenta por ciento (50%) del aumento de las boletas de estacionómetros ingrese directamente a las Juntas Comunales y que, por lo contrario, el dinero en concepto de multas de estacionómetros, es asignado a las Juntas comunales, mediante la partida 718, denominada aporte a Juntas Comunales.

III. La Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

La Procuradora de la Administración, mediante la Vista N° 101 de 18 de marzo de 1997, señala que comparte el criterio jurídico vertido por la actora, razón por la cual solicita que se acceda a la declaratoria de ilegalidad del artículo Tercero del Acuerdo Municipal N° 159 de 26 de septiembre de 1995. A su juicio, el acto impugnado infringe disposiciones legales de superior jerarquía como lo son el artículo 147 de la Ley N° 51 de 11 de diciembre de 1995, el artículo 112 de la Ley 106 de 19732, modificada por la Ley N° 53 de 12 de diciembre de 1984 y el numeral 3 del artículo 16 de la Le 105 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley N° 53 de 12 de diciembre de 1984.

IV. Decisión de la Sala:

Una vez efectuado el examen de rigor, la Sala concluye que le asiste la razón al recurrente por las razones que a continuación se exponen.

La Sala observa que, en efecto, el artículo tercero del Acuerdo Municipal N° 159 de 26 de septiembre de 1995, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá, infringe el artículo 147 de la Ley N° 51 de 11 de diciembre de 1995 que dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal de 1996 que señala que todos los ingresos de las instituciones descentralizadas se regirán por el principio de unidad de caja, de conformidad con la autonomía administrativa y financiera dispuesta en su respectiva Ley. Ello es así porque dicho acto señala que el fondo proveniente de las boletas de estacionómetros que fue asignado en un cincuenta por ciento (50%) para el Municipio y el cincuenta porciento (50%) que se repartirán entre las 19 Juntas Comunales, se encuentra en contra del principio de unidad de caja establecido tanto en la Ley de Presupuesto como en el Código Fiscal.

Por otra parte, el acto impugnado infringe el artículo 112 de la Ley 106 de 1973, reformado por la Ley 52 de 1984, que establece claramente con respecto a los gastos municipales, en lo correspondiente a las asignaciones a las Juntas Comunales, que estas aportaciones deben tener como base la atención de las necesidades municipales y a la planificación estatal de los servicios públicos y sociales, los cuales serán presentados al Municipio mediante sus prioridades de proyectos, por lo que las Juntas Comunales no pueden disponer de la distribución de los fondos de las boletas de estacionómetros que son ingresos municipales mediante un acuerdo municipal.

Finalmente, el artículo impugnado infringe el numeral 3 del artículo 16 la Ley 105 de 8 de octubre de 1973, modificado por la Ley N° 53 de 12 de diciembre de 1984 que señala claramente que serán fuentes de ingresos de las Juntas Comunales las partidas presupuestarias que le asigne el Gobierno Central, el Consejo Provincial y el Municipio respectivo, por lo que se colige que el Consejo Municipal no está facultado para determinar el destino que tendrán los fondos provenientes de las boletas de estacionómetros.

Una vez analizado el acto acusado se observa que éste parece contradecir de forma manifiesta lo previsto en la Ley al oponerse a normas de superior jerarquía, como lo son el artículo 147 de la Ley N° 51 de 11 de diciembre de 1995, el artículo 112 de la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley N° 53 de 12 de diciembre de 1984, y el artículo 16 de la Ley 105 de 8 de octubre de 1973, modificada por la Ley N° 53 de 12 de diciembre de 1984.

En consecuencia, la Sala Tercera (contencioso administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NULO POR ILEGAL el artículo tercero del Acuerdo N° 159 de 26 de septiembre de 1995, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

Notifíquese, Cúmplase y Publíquese En la Gaceta Oficial,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RENÁN CANDANEDO, EN REPRESENTACIÓN DE ARNOLDO AQUILES READ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 15,699-98-J. D. DE 15 DE FEBRERO DE 1998, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Renán Candanedo, actuando en nombre y representación de **ARNOLD AQUILES REID**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la **Resolución N° 15,699-98-J. D. de 15 de febrero de 1998**, expedida por la **Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.**

Consta en autos que el demandante presentó solicitud a la Caja de Seguro Social fechada el 13 de noviembre de 1996; que dicha solicitud fue negada mediante la Resolución N° 1412-97-D. G. de 15 de julio de 1997 (fs. 12-13), dictada por la Directora General de la Caja de Seguro Social, decisión que fue mantenida por la Resolución N° 1727-97 de 12 de septiembre de 1997, y confirmada por el acto impugnado en esta demanda, es decir, la Resolución N° 15,699-98-J. D. de 15 de febrero de 1998, de la Junta Directiva de esta institución. (Fs. 1-3).

Al examinar la presente demanda para determinar si cumple con los requisitos para ser admitida, se observa que adolece de varios defectos.

En primer lugar, el apoderado de la parte actora no aportó la copia autenticada del acto impugnado en su demanda, cual es la Resolución confirmatoria N° 15,699-J. D. de 15 de febrero de 1998 (fs. 4vta.), incumpliendo lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley N° 135 de 1943. Si bien, el artículo 46 ibidem, dispone que el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, copia del acto impugnado en aquellos casos en que le es imposible obtenerla, el demandante no hizo uso de esta facultad.

En segundo lugar, como consecuencia de no haber aportado con su demanda, la copia autenticada del acto impugnado y prueba válida de la constancia de su notificación, tampoco podemos considerar probado, el agotamiento de la vía gubernativa exigido por el artículo 25 de la Ley N° 33 de 1946; y si la demanda fue interpuesta dentro del término fijado en el artículo 27 idem.

Finalmente, en tercer lugar cabe advertir, que la parte actora impugnó en esta demanda el acto confirmatorio, es decir, la Resolución N° 15,699-98-J. D. de 15 de febrero de 1998, mediante la cual se resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución N° 1412-97-D. G. de 15 de julio de 1997, que negó por improcedente, la solicitud presentada por el señor ARNOLD AQUILES REID, cuando el acto que se debe demandar ante la jurisdicción contenciosa es el acto originario definitivo, tal como lo exige el artículo 25 de la Ley 33 de 1946.

Como la demanda presentada no cumple con los requisitos previstos en la Ley, no debe dársele curso a la misma, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, representada por la Magistrado que suscribe, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa interpuesta por el licenciado Renán Candanedo, actuando en nombre y representación de ARNOLD AQUILES REID, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 15,699-98-J. D. de 15 de febrero de 1998, expedida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DIDACIO IBARRA SÁNCHEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, EL REGLAMENTO N° 4-97 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1997, DICTADO POR EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO Y EL ACUERDO N° 6-98 DE 20 DE FEBRERO DE 1998, DICTADO POR EL CONSEJO ACADÉMICO EXTRAORDINARIO, AMBOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **DIDACIO IBARRA SÁNCHEZ**, en su propio nombre y representación, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el **punto N° XI** del **"Reglamento para la Selección de Nuevos Profesores Eventuales y Asistentes"** aprobado por el **Consejo General Universitario N° 4-97 de 29 de diciembre de 1997**, y el **Acuerdo 6-98 de 20 de febrero de 1998**, expedido por el **Consejo Académico Extraordinario**, **ambos de la Universidad Autónoma de Chiriquí**.

La Sala se percata de que consta en el expediente, (fs. 9-13), una solicitud de Suspensión Provisional de los efectos del acto impugnado, que debe ser atendida inmediatamente.

El artículo XI del Reglamento para la Selección de Nuevos Profesores Eventuales y Asistentes, de 29 de diciembre de 1997, es del tenor siguiente:

> "XI. Para ingresar a la Universidad Autónoma de Chiriquí como docente eventual o asistente se requiere poseer un índice académico mínimo de 1.50 en su título base. Cuando el aspirante posea título de maestría o doctorado, éstos reemplazarán el título base, siempre y cuando el índice obtenido sea superior al 1.80 o su equivalente".

El Acuerdo 6-98 de 20 de febrero de 1998, que modifica el artículo XI del Acuerdo de 29 de diciembre de 1997, por su parte, dispone:

> "Mantener como requisito el índice académico de 1.50.
>
> Adicionar al artículo VI:
>
> `No obstante, los profesores que tengan tres años (3) de servicios cumplidos en la universidad, no serán sometidos a este proceso de selección por banco de datos ".

Las razones por las que el recurrente solicita se suspendan provisionalmente, los efectos de las precitadas disposiciones reglamentarias, es que se está produciendo una lesión al ordenamiento jurídico positivo, ya que han sido dictados en contravención con los artículos 105, ordinal b) del Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá y el artículo 6 de la Ley 26 de 30 de agosto de 1994.

En cuanto a la violación del artículo 105, ordinal b del Estatuto Universitario, el recurrente señala lo siguiente:

> "Se producen lesiones graves en la medida que el artículo XI del citado Reglamento establece que para ingresar a la Universidad como docente eventual o asistente, se requiere poseer un índice académico mínimo de 1.50 en su título base. Sin embargo, el Estatuto Universitario, máximo ordenamiento jurídico de la Universidad, en su artículo 105 ordinal b, en ningún momento requiere de un índice de 1.50. Lo que si requiere dicha norma legal es que el docente se enmarque dentro de cualquiera de los cuatro parámetros que a continuación citaremos, para pertenecer al cuerpo docente de esa casa de estudios superiores. Cualquiera de los requisitos pedidos para ser Profesor de la Universidad de Panamá o de la Universidad Autónoma de Chirquí, son los siguientes: a) con alto índice académico. b) con ejecutorias. c) con experiencia docente y ch) con experiencia profesional. Nótese que en ninguno de los requisitos se fija un índice establecido, ya que cualquiera que posea un requisito de estos, puede ser docente universitario".

Según el demandante, de lo anterior emerge claramente, que el Consejo General Universitario no puede con un Reglamento establecer un requisito que no está previsto en los Estatutos Universitarios, ya que siendo una norma de menor jerarquía, contraviene con los mismos, violando de esta manera el ordenamiento positivo vigente, por el contrario si existe un profesional que aunque no tenga un alto índice académico, pero tiene ejecutorias, tiene experiencia docente o experiencia profesional, puede bien ser profesor de cualquiera de estas dos universidades.

En lo que al artículo 6 de la Ley 26 de 30 de agosto de 1994, la parte actora señala que el artículo XI del Reglamento, también es violatorio de esta norma, ya que si la Universidad Autónoma de Chiriquí, no tiene sus propios estatutos y se está rigiendo según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 26 de 1994, por las Leyes, estatutos y Reglamentos de la Universidad de Panamá, quien a su vez si reglamentó el ingreso de docentes a la Universidad que no posean índice de 1.50 pero en otros términos que no trastocaban los derechos adquiridos, mal puede entonces el Consejo General Universitario de la Universidad chiricana, reformar los estatutos de la Universidad de Panamá, ya que estos estatutos no le pertenecen y si ella se rige por ellos, la iniciativa de una reforma tal como se hizo tenía que emerger de la Universidad propietaria de lo Estatutos.

Sobre el Acuerdo N° 6-98 de 20 de febrero de 1998, expedido por el Consejo Académico Extraordinario, modificatorio del Reglamento 4-97 de 29 de diciembre de 1997, el demandante sostiene que:

> "Es evidente que el acuerdo en comento viola claros derechos adquiridos de educadores, que ingresaron a la Universidad sin exigírseles índice alguno; y no se puede alegremente a estas alturas pedir un requisito que no existía para los educadores de la Universidad de Panamá. En el evento de que esta modalidad del 1.50 hubiese existido, era al momento de su ingreso o aspiración a ser educador de la Universidad Autónoma de Chiriquí, cuando se le debió exigir que tenía que poseer un índice en su título base de 1.50. Si esto no se hizo y la persona inició sus labores de educador, no puede un Reglamento o acuerdo ser retroactivo y perjudicar a educadores que no alcancen los tres años de servicio ... Siendo esto así y haciendo eco de lo normado en el artículo 6 de la ley 26 de 30 de agosto de 1994, que establece que la Universidad Autónoma de Chiriquí, se tiene que regir por los estatutos de la universidad de Panamá, hasta tanto tenga los suyos, entonces no puede crear acuerdos o reglamentos sin la autorización de nuestra primera casa de estudios, para lesionar derechos adquiridos de profesores con menos de tres años de servicio".

Encontrándose la petición en este estado, la Sala en Pleno, pasa a decidir sobre la misma.

A simple vista, esta Superioridad considera que las disposiciones reglamentarias acusadas de ilegal, no parecieran lesivas del ordenamiento jurídico. Esta aseveración se da en virtud de que el artículo 105, literal b) del Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá, que regula los requisitos para ser profesores eventuales en dicho Centro de Enseñanza Superior, fue modificado por el Consejo General Universitario en Reunión N° 2-96, celebrada el día 25 de abril de 1996.

La modificación a que hacemos referencia, consiste precisamente, en que se estableció el índice académico de 1.50 requerido para ingresar a la docencia, con la excepción de que a los profesores que ya ingresaron a la docencia en la Universidad no se les exigirá este requisito para efectos de los concursos formales o de su permanencia en el Banco de Datos. Veamos el contenido de ésta:

"CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO
ACUERDOS

REUNIÓN N° 2-96, CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 1996

1. ...
2. ...
3. Se RATIFICÓ el siguiente acuerdo del Consejo Académico N° 16-96:

Todo aspirante a ingresar a la docencia que no posea título superior al de licenciado o su equivalente, debe haberse graduado con un índice mínimo de 1.5 o su equivalente, en la carrera correspondiente.

Parágrafo: A los profesores que ya ingresaron a la docencia en la Universidad no se les exigirá este requisito para efectos de los concursos formales o de su permanencia en el Banco de Datos".

Vistas las modificaciones de que fue objeto la citada disposición estatutaria (artículo 105, literal b), esta Sala estima pues, que ni el punto N° XI del "Reglamento para la Selección de Nuevos Profesores Eventuales y Asistentes" aprobado por el Consejo General Universitario N° 4-97 de 29 de diciembre de 1997, ni el Acuerdo 6-98 de 20 de febrero de 1998, expedido por el Consejo Académico Extraordinario, ambos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, parecieran lesivos del artículo 105 (literal b) del Estatuto Universitario de la Universidad de Panamá.

Así las cosas, tampoco podrían lesionar el artículo 6 de la Ley N° 26 de 30 de agosto de 1994 "Por la cual se crea la Universidad Autónoma de Chiriquí", que dispone: "Hasta que se apruebe el estatuto orgánico de la Universidad Autónoma de Chiriquí, ésta se regirá por la Ley N° 11 de 8 de junio de 1981, Orgánica de la Universidad de Panamá, y la Ley N° 6 de 24 de mayo de 1991, así como por el estatuto y los reglamentos de la Universidad de Panamá".

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que las disposiciones reglamentarias impugnadas, en principio, no constituyen un acto manifiestamente violatorio al ordenamiento jurídico (fumus bonis iuris). Por consiguiente, no es procedente acceder a la suspensión provisional de las mismas.

Cabe indicar que las apreciaciones vertidas por este Tribunal, al momento de examinar la solicitud de suspensión de los efectos del acto impugnado, no son definitivas hasta tanto, no se pronuncie en sentencia de fondo.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ACCEDE a la solicitud de suspensión del punto N° XI del "Reglamento para la Selección de Nuevos Profesores Eventuales y Asistentes" aprobado por el Consejo General Universitario N° 4-97 de 29 de diciembre de 1997, y el Acuerdo 6-98 de 20 de febrero de 1998, expedido por el Consejo Académico Extraordinario, ambos de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BENEDICTO DE LEÓN FUENTES, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ Y OTROS GRANOS BÁSICOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO Y EL SEÑOR ALBERTO DE LEÓN, EL CUAL CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 6672, DEL 25 DE JULIO DE 1994, DE LA NOTARÍA CUARTA DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista N° 493 del 12 de noviembre de 1997, la señora Procuradora de la Administración promovió ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia recurso de apelación contra la Resolución del 14 de agosto de 1997, a través de la cual, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda contenciosa-administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Benedicto De León Fuentes, en representación de la **ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ Y OTROS GRANOS BÁSICOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ**, para que se declare nulo, por ilegal, el **Contrato de Compraventa** celebrado entre la **Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano** y el señor **Alberto De León**, contenido en la Escritura Pública N° 6672, del 25 de julio de 1994.

En opinión de la recurrente, la aludida demanda no debió admitirse, ya que en autos no existe prueba de que la Escritura Pública N° 6672, del 25 de julio de 1994, protocolizada ante el Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, se inscribió en el Registro Público, razón por la cual el referido contrato no puede ostentar la calidad de acto acusado como ilegal en el presente proceso, incumpliéndose así el artículo 44 de la Ley N° 135 de 1943.

El apoderado judicial de la demandante se opuso al recurso de apelación, mediante el escrito visible de foja 64 a 66, en el cual manifestó que no le asiste razón a la señora representante del Ministerio Público, porque siendo éste un proceso contencioso-administrativo de nulidad, es factible acreditar en la respectiva etapa probatoria la inscripción del contrato demandado.

Con el propósito de obtener mayores elementos de juicio para resolver la presente alzada, este Despacho dictó el Auto del 5 de enero de 1998 mediante el cual requirió a la Dirección General del Registro Público que informara si el contrato impugnado está o no inscrito en esa entidad pública. En respuesta a la solicitud hecha por la Sala, la señora Priscilla de Gómez, Certificadora del Registro Público, remitió una certificación fechada 19 de enero del mismo año, en la cual se hace constar lo siguiente:

1. Que la sociedad "Zacata Agroganadera Chepana, S. A. es la Propietaria de la Finca 1455, inscrita al Tomo 28, Folio 40 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, actualizada al Rollo 15823, Documento 1.

2. Que sobre la mencionada Finca no consta inscrita la Escritura N° 6672 del 25 de julio de 1994.

3. Que sobre la citada Finca consta inscrita Nota mediante la cual Zacata Agroganadera Chepana, S. A., a través de la Escritura 2414 del 2 de marzo de 1994 de la Notaria Undécima del Circuito de Panamá, adquirió compromiso de segregar y vender a Alberto De León Flores 202 Hectáreas más 3,261 metros más 70 decímetros, por la suma de B/.75,906.62 y que este valor debe desglosarse del precio de venta pagado por dicha sociedad a la Corporación de Desarrollo Integral del Bayano.

Como puede extraerse del contenido de la precitada certificación, el Contrato de Compraventa contenido en la Escritura Pública N° 6672 del 25 de julio de 1994 de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá no está inscrito en el Registro Público. Ello significa, que la precitada demanda se dirigió contra un acto que no ha surtido sus efectos, pues, de acuerdo con los artículos 1220 y 1761 del Código Civil, los contratos de compraventa sobre bienes inmuebles sólo se perfeccionan cuando se ha practicado la respectiva inscripción en el Registro Público.

En tales circunstancias, el resto de los Magistrados que integran la Sala estiman que la presente demanda no puede admitirse por haberse incoado contra un acto carente de eficacia. Según se desprende del contenido del artículo 42A de la Ley N° 135 de 1943, la acción contencioso-administrativa de nulidad puede interponerse en cualquier tiempo, pero, en todo caso, después de que el acto administrativo contra el cual se dirige haya cumplido con los requisitos necesarios para entrar en vigor. La razón de ser de tal exigencia legal estriba, como es obvio, en el hecho de que la Sala no podría decretar la nulidad de un

acto administrativo que no ha surtido efectos o que no ha tenido eficacia.

Como corolario de lo anterior y tal como sostiene la señora Procuradora de la Administración, el actor tampoco observó lo dispuesto en el artículo 44 de la misma Ley, que exige que la demanda se acompañe con copia del acto impugnado, "con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, según los casos".

Por lo anterior, el resto de los Magistrados que integran la Sala consideran que le asiste razón a la señora Procuradora de la Administración, razón por la cual debe revocarse la providencia impugnada e inadmitirse la aludida demanda.

Por los motivos expuestos, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCAN la Resolución del 14 de agosto de 1997 y, en consecuencia, NO ADMITEN la Demanda contenciosa-administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Benedicto De León, en representación de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARROZ Y OTROS GRANOS BÁSICOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, para que se declare nulo, por ilegal, el Contrato de Compraventa celebrado entre la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano y el señor Alberto de León.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OLMEDO ARROCHA, EN REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDESA MUNICIPAL DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACUERDO N° 50 DE 6 DE MAYO DE 1997, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VISTOS:

El Lcdo. Olmedo Arrocha, actuando en representación de la Alcaldesa Municipal del Distrito de Panamá, ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, con el objeto que se declare nulo por ilegal, el Acuerdo N° 50 de 6 de mayo de 1997, expedido por el Consejo Municipal de Panamá.

I. La pretensión y su fundamento.

En la demanda interpuesta, el Lcdo. Olmedo Arrocha solicita a la Sala Tercera que se declare nulo por ilegal, el Acuerdo N° 50 de 6 de mayo de 1997, proferido por el Consejo Municipal de Panamá que dice:

ACUERDO N° 50
De 6 de mayo de 1997

> "Por el cual se reestructura la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, creando la Subdirección de Planificación y Fiscalización Urbana y la Subdirección de Obras y se traspasa a la estructura de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales el Departamento Técnico Legal de Obras, adscrito actualmente a la Dirección de Legal y Justicia, y se le asignan funciones".

El Lcdo. Olmedo Arrocha, fundamenta su pretensión en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Que el Consejo Municipal, expidió el Acuerdo N° 50 de 6 de mayo de 1997, "Por el cual se reestructura la Dirección de Obras y

Construcciones Municipales, creando la Subdirección de obras y se traspasa a la estructura de la Dirección de Obras y Construcciones, el Departamento de Técnico Legal de Obras adscrito actualmente a la Dirección de Legal y Justicia y se le asignan funciones.

SEGUNDO: Que mediante la Nota N° 828 de 15 de mayo de 1997, la Alcaldesa Municipal del Distrito de Panamá, objetó el Acuerdo N° 50 de 6 de mayo de 1997.

TERCERO: Que a pesar de las objeciones debidamente fundamentadas por la Alcaldesa, el Consejo Municipal de Panamá, aprobó por insistencia el Acuerdo N° 50 de 6 de mayo de 1997.

CUARTO: Que la Alcaldesa del Distrito de Panamá, devolvió vetado el Acuerdo N° 50 de 6 de mayo de 1997, adoptado por insistencia por el Consejo Municipal.

QUINTO: Que a falta de sanción alcaldicia del Acuerdo N° 50 de 6 de mayo de 1997, la Presidencia del Consejo, con asistencia del Secretario del Concejo, lo sancionó.

SEXTO: Que publicado y transcurrido el término legal, el Acuerdo N° 50 de 6 de mayo de 1997, entró en vigencia.

SÉPTIMO: Que el Acuerdo N° 50 de 6 de mayo de 1997, aprobado por insistencia, es de naturaleza presupuestaria y por lo tanto ha procedido a modificar el Presupuesto Municipal vigente contenido en el Acuerdo 216 del 20 de diciembre de 1995. Toda vez que rige de manera íntegra y completa por ministerio de la Ley al no ser aprobado por el Concejo el proyecto presentado por la Alcaldesa.

OCTAVO. que mediante el Auto de 18 de junio de 1997 la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo señala en cuanto a la vigencia del Presupuesto Municipal de 1996 lo siguiente: ... Como aquel presupuesto continúa rigiendo de pleno derecho, por ministerio de la Ley, hasta que se apruebe un nuevo presupuesto, es obvio que al referido ente municipal le está vedado introducirle cualquier tipo de alteraciones o modificaciones, tal como sostiene el demandante.

NOVENO: Que el Acuerdo 50 de 6 de mayo de 1997, genera incertidumbre jurídica en cuanto la aplicación de las normas contenidas en el Acuerdo N° 116 de 1996, sobre normas de construcción".

Sostiene el apoderado judicial de la parte demandante, que el acuerdo impugnado ha infringido los artículos 17 numeral 2, 45 numeral 1 y 124 de la Ley 106 de 1973. modificada por la Ley 52 de 1984, cuyos textos son los siguientes:

"Artículo 17: Los Consejos Municipales, tendrán competencia exclusiva para el cumplimiento de las siguientes funciones:

...
2. Estudiar, evaluar y aprobar el Presupuesto de Rentas y Gastos Municipales, que comprenderán el programa de funcionamiento y de inversiones municipales, que para cada ejercicio fiscal elabore el Alcalde con la colaboración del Ministerio de Planificación y Política Económica. El programa de inversiones municipales será consultado con las Juntas Comunales respectivas".

"Artículo 45: Los Alcaldes tendrán las siguientes atribuciones:

1. Presentar al Consejo Municipal proyectos de Acuerdos, especialmente el Presupuesto de Rentas y Gastos que contendrá el programa de funcionamiento y el de inversiones públicas municipales".

"Artículo 124: Corresponde al Alcalde presentar al Concejo el

> Proyecto de rentas y gastos, que elaborará a base de los datos e informes que le dé el Tesorero y el Auditor Municipal, donde haya".

Entre los argumentos expuestos por el Lcdo. Olmedo Arrocha para sustentar las violaciones que aduce a las disposiciones legales antes citadas, figura que el Concejo Municipal no puede mediante un acuerdo, reglamentar de manera contraria lo que está señalado en la ley, pues le otorga al Director de Obras y Construcciones la facultad de preparar el Presupuesto de Inversiones y Funcionamiento Municipal de esa Dirección, cuando la Ley 106 de 1973 otorga la competencia exclusiva a la Alcaldesa del Distrito para presentar ese presupuesto, donde están contemplados los gastos para inversión y funcionamiento de la municipalidad y que elabora en base a los datos e informes suministrados por el Tesorero y Auditor Municipal, el que estudiará, evaluará y aprobará el Consejo Municipal.

Igualmente sostiene que en el artículo segundo, literal "f" del Acuerdo N° 50 se faculta al Director de Obras y Construcciones a nombrar y destituir al personal subalterno de la Dirección de Obras y Construcciones, facultad que es exclusiva del Alcalde según lo contempla el artículo 45, numeral 4 de la Ley 106 de 1973. Con relación a ello hace alusión a un fallo expedido por esta Corporación de justicia el 1 de febrero de 1996, donde se hace un análisis sobre la separación de los poderes en la organización municipal y expresa que la separación de poderes significa que el poder de la administración está compartido entre el cuerpo deliberante, que es el Consejo Municipal y el ejecutivo representado por el Alcalde Municipal.

En cuanto a la violación que se aduce al artículo 123 de la Ley 106 de 1973, opina el apoderado judicial de la parte actora que es manifiesta, dado que dicha norma es clara cuando expresa la vigencia del ejercicio financiero entre el 1° de enero al 31 de diciembre, período durante el cual se ejecuta el presupuesto sin alteraciones ni modificaciones una vez haya sido aprobado, salvo los créditos ordinarios y extraordinarios de los que trata el artículo 126 de la Ley 106 de 1973, que a su juicio, son créditos que deben ser solicitados por el Alcalde. En el artículo décimo primero del Acuerdo N° 50 expresamente señala que "la Dirección de Planificación y Presupuesto del Municipio de Panamá deberá incluir en el anteproyecto de Presupuesto Municipal para el año de 1997 las partidas presupuestarias necesarias para la efectiva ejecución del presente acuerdo; en relación a ello aclara que las funciones presupuestarias asignadas al Director de Obras y Construcciones son para ejecutarlas respecto del futuro presupuesto de 1998 y al Director de Planificación y Presupuesto se le señala que debe ejecutarlas respecto al Presupuesto de 1997.

El apoderado judicial de la Alcaldesa del Distrito de Panamá también señala como infringidos los artículos 770, 863 y 873 del Código Administrativo cuyos textos son los siguientes:

> "ARTÍCULO 770: Los destinos públicos se proveen por la autoridad que en cada caso designen las leyes, acuerdos o reglamentos. En caso de silencio o duda,, regirán las reglas siguientes: si el destino fuere del orden nacional, lo proveerá el Presidente de la República y si el orden municipal, el Alcalde del Distrito".

> "ARTÍCULO 863: El Jefe Superior de Policía de un lugar, es el funcionario superior del orden político, que residen en él. Por lo tanto, el jefe de policía de un Distrito Municipal es el Alcalde".

> "ARTÍCULO 873: Los Jefes de Policía, como autoridades administrativas pueden imponer las penas correccionales que se determinen en este Libro, por contravención a los preceptos y reglas que en él establecen, y las que en los sucesivo se señalen en leyes, decreto y acuerdo sobre Policía".

En su opinión, se viola el artículo 770 del Código Administrativo, dado que faculta al Director de Obras y Construcciones nombrar y destituir a todo el personal subalterno de dicha Dirección cuando en el artículo 770 se establece que los destinos públicos se proveen por la autoridad que en cada caso designen las

leyes o reglamentos, y en el caso de los nombramientos de los funcionarios públicos municipales la Ley señala que corresponde realizarlo al Alcalde. En cuanto a los artículos 863 y 873 del Código Administrativo, estima que igualmente han sido violados puesto que estas normas señalan que son autoridades de Policía el Presidente, el Gobernador, el Alcalde y el Corregidor, por lo tanto, son las que en materia de Policía Administrativa están facultadas para sancionar a los infractores de la ley y que al traspasar el Departamento Técnico Legal de Obras a la Dirección de Legal hacia Obras y Construcciones con el nombre de Secretaría Técnica Legal, le da una facultad al Director de Obras de instruir y al mismo tiempo de decidir sobre las infracciones a la normas de construcción contenidas en el Código Administrativo en el Título III, Capítulo I del Código Administrativo y del Acuerdo N°116 del 9 de julio de 1996, por el cual se dictan disposiciones sobre construcción, adiciones de estructuras, mejoras, demoliciones y movimientos de tierra en el Distrito de Panamá.

Finalmente, el Lcdo. Olmedo Arrocha señala como infringidas las normas generales de administración presupuestaria de la Ley 65 de 24 de diciembre de 1996, por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 1997, publicada en la G.O. N°23,191 de 26 de diciembre de 1996, específicamente los artículos 149 y 151 donde se hace alusión a la ejecución del presupuesto y que si en éste no consta la partida de gastos ni ningún tributo como parte del los ingresos, no podrá realizarse ningún pago ni exigirse ningún tributo. En la Ley 65 de 1996, se establecen pues, los principios cuyo ámbito de aplicación para el manejo del Presupuesto de las Instituciones del Gobierno Central, es también para los municipios. A criterio del Lcdo. Arrocha, se viola el principio contenido en el artículo 149 de la Ley presupuestaria, porque el Acuerdo N° 50 se le concede la facultad del Director de Obras y Construcciones, preparar el presupuesto de la Dirección a su cargo, sin tomar en cuenta las decisiones operativas, administrativas y financieras del Municipio que deben ser contemplados en el Presupuesto Municipal. A lo anterior añade, que no se puede realizar egreso o pago si en el Presupuesto Municipal no consta la partida para satisfacer ese gasto, por lo que al crear los cargos del Subdirector de Planificación y Fiscalización Urbana y el Subdirector de Obras y Construcciones Municipales, no se tomó en consideración que dentro del Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Panamá, vigente, esa erogación no se puede realizar porque simplemente no existe.

II. El Informe de Conducta expedido por la Presidenta del Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

Mediante resolución de trece de agosto de 1997, se admite la demanda de nulidad presentada y se hizo traslado de la misma al Presidente del Concejo Municipal del Distrito de Panamá y a la Procuradora de la Administración.

Mediante Nota N° CMPP/130/97 de 26 de agosto de 1997, la Presidenta del Consejo Municipal expidió el informe explicativo de conducta donde se rebaten los argumentos esgrimidos por la parte demandante. En dicho informe la Presidenta del Consejo Municipal del Distrito de Panamá, que la parte demandante no llega a enmarcar, vislumbrar e interpretar correctamente las disposiciones alegadas como infringidas, puesto que el Acuerdo acusado, no reviste carácter alguno ni naturaleza presupuestaria, pues los presupuestos se conforman de los ingresos y egresos que se estiman para el año proyectado y, en este caso, se trata de una estructura administrativa, que técnicamente hablando jamás puede considerarse como presupuesto. A ello añade, que los cambios a la estructura de los distintos estamentos del Municipio de Panamá, entiéndase Consejo Municipal, Administración Alcaldicia, Tesorería y Juntas Comunales, aunque éstas subsisten independientes de la estructura alcaldicia, se da en fechas distintas durante el año y no siempre coinciden con la presentación del presupuesto, y los proponentes de las mencionadas modificaciones varía desde los Alcaldes, Honorables Representantes actuando como Concejales y el Tesorero Municipal, ello sin soslayar que es una facultad expresa de los Consejos poder crear y suprimir cargos municipales y determinar entre otras cosas sus funciones, tal como se enuncia en el Artículo 17 numeral 6 de la Ley 106 de 1973 reformada por la Ley 52 de 1984.

Dentro de ese orden de ideas, la Presidenta del Concejo Municipal afirma que el Director de Obras y Construcciones puede preparar el presupuesto de

funcionamiento e inversiones de su dirección al mismo nivel que el de la Alcaldesa y ello se basa en que cada años todas las direcciones de la Alcaldía, incluyendo al Despacho Alcaldicio, el Concejo, la Tesorería, y las Juntas Comunales preparan sus proyectos de inversiones y funcionamiento, proyecto este que es presentado en las vistas presupuestarias donde es discutido y al final ese conjunto de elementos pasan a integrar el proyecto de presupuesto municipal que es preparado, según la Constitución y la Ley 106 de 1973, por la Alcaldesa, y lo que se hace con este acuerdo sólo es reforzar lo anterior, pues hasta ahora cada año la Dirección de Obras y Construcciones Municipales presenta su proyecto a la vistas presupuestarias y no al Consejo directamente como quiere hacer ver la demandante, por lo que a su juicio, la atribución dada al Director de Obras dentro de las funciones establecidas por el acuerdo única y exclusivamente es un asunto reiterativo.

En cuanto a la supuesta violación al Artículo 45 de la Ley 106, opina que la misma disposición manifiesta como atribución de los Alcaldes nombrar y remover a los corregidores y demás funcionarios municipales "cuya designación no corresponda a otra autoridad"; en relación a ello manifiesta a qué autoridad se refiere, pues si únicamente hace referencia a aquellas que la ley le da el título de autoridad de policía, se estaría hablando entonces del Presidente, Gobernadores, Alcaldes y Corregidores, y por lógica consecuente se excluiría a los Representantes de Corregimiento, Concejales, Tesorero entre otros, mas si el espectro de comprensión del término autoridad abarca a éstos y aquellos, habría que preguntarse por qué razón excluir al Director de Obras y Construcciones por el sólo hecho de que dicha facultad se le concede mediante acuerdo.

Con respecto a la violación que se señala al artículo 123 de la Ley 106, considera que no puede efectuar mayores planteamiento, puesto que en libelo contentivo de la demanda, hace falta una página o varias de los argumentos del demandante, hecho este que igualmente advierte la Sala, razón por la que solicita no se tome en cuenta la supuesta violación.

Igualmente plantea la Presidenta del Concejo Municipal del Distrito de Panamá, que el propio Código Administrativo estatuye el hecho de que mediante acuerdo municipal se puede designar a la autoridad, que no es exclusivamente la de policía, que habrá de proveer los destinos públicos de que se trate. En ese sentido afirma, que se desconoce que los Concejos por disposición legal, están facultados para crear y suprimir cargos municipales, tal como el de Director de Obras y Construcciones Municipales, y asignarle las funciones que considera oportunas para el mejor desempeño de su labor y nos remite a la lectura del artículo 17 numeral 6 de la Ley 106. La Presidenta del Concejo Municipal del Distrito de Panamá, con relación a lo anterior, hace alusión a reciente fallo de 21 de marzo de 1997, donde se deniega solicitud de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 127 de 13 de agosto de 1996, dentro del Proceso de Nulidad presentado por la Alcaldesa del Distrito de Panamá, y se dejó sentado que el artículo 17 ordinal 6 dispone que es competencia exclusiva de los Concejos Municipales la función de "crear o suprimir cargos municipales y determinar sus funciones, períodos, asignaciones y viáticos, de conformidad con lo que disponga la Constitución y las leyes vigentes." Finalmente sostiene, en ese orden de ideas, que es falsa e insostenible la argumentación relativa al hecho de que al traspasar el Departamento Técnico Legal de Obras a la Dirección de Obras y Construcciones se violenta normas como el artículo 873 del Código Administrativo, y el Capítulo I del mismo código, y el Acuerdo 116 de 9 de julio de 1996 sobre normas de construcción, dado que en primer lugar el Departamento Técnico Legal de Obras, que ahora se denomina Secretaría Técnica Legal, físicamente siempre ha estado en la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, y en segundo lugar las funciones de dicha secretaría únicamente sirven como una especie de funcionario instructor, tal cual ocurre con el Órgano Judicial y el Ministerio Público, quienes desempeñarán su labor de manera técnica ya que Obras y Construcciones es el ente técnico que sobre la materia de construcción y demás puede opinar con conocimiento de causa, pues a las finales es la Alcaldesa la que firmará las resoluciones que se dicten, cumpliéndose así con los preceptos del Código Administrativo y demás normas sobre policía, lo que evitará que la Alcaldesa se convierta en juez y parte.

III. La Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

Mediante la Vista Fiscal N° 449 de 9 de octubre de 1997, la Procuradora de la Administración emite concepto y coincide con los planteamiento esbozados por la parte demandante sólo en cuanto a que se declare nulo, por ilegal, el literal f, del Artículo Segundo y el Artículo Décimo Primero del Acuerdo N°50 de 6 de mayo de 1997, expedido por el Concejo Municipal del Distrito de Panamá, por ser violatorios del numeral 1° del artículo 45 y el artículo 123 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973; la Procuradora de la Administración no concuerda con el resto de las violaciones alegadas.

IV. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites que por ley corresponden la Sala pasa a resolver la presente controversia con las siguientes consideraciones.

Observa la Sala que el Concejo Municipal del Distrito de Panamá expidió el Acuerdo N° 50 de 6 de mayo de 1997, " Por el cual se reestructura la Dirección de obras y Construcciones Municipales, creando la Subdirección de Planificación y Fiscalización Urbana y la Subdirección de Obras y se traspasa a la estructura de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales el Departamento Técnico Legal de Obras y Construcciones Municipales el Departamento Técnico Legal de Obras, adscrito actualmente a la Dirección de Legal y Justicia, y se le asignan funciones", con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17 numeral 6, y el artículo 62 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973. Esas normas señalan expresamente que los Consejos Municipales tendrán competencia exclusiva para el cumplimiento de funciones como la de crear o suprimir cargos municipales y determinar sus funciones, períodos, asignaciones y viáticos, y también se faculta a los Municipios crear mediante Acuerdo Municipal, entre otros cargos, el de Agrimensor, o Inspector de Obras Municipales, Juez Ejecutor y cualquier otro cargo cuyas funciones serán determinadas por el Concejo, respectivamente.

Se procede, pues, a analizar los cargos de ilegalidad que se imputan al acto acusado, no sin antes señalar que mediante resolución de 7 de agosto de 1997, esta Sala decidió suspender provisionalmente los efectos del Acuerdo Municipal N° 50 de 6 de mayo de 1997, emitido por el Consejo Municipal, puesto que se consideró en aquella oportunidad, que el referido acto administrativo contradice en forma manifiesta lo previsto en la ley al oponerse a una norma jurídica de superior jerarquía (Ley 106 de 1973) acarreando un perjuicio notoriamente grave al ordenamiento jurídico.

Observa la Sala, que entre las disposiciones alegadas como infringidas, figuran el artículo 17 numeral 2, el artículo 45 numeral 1, y el artículo 124 de la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984, que en su conjunto hacen alusión a las etapas de formulación, elaboración y aprobación del presupuesto municipal, donde interviene el Alcalde como Jefe de la Administración Municipal, quien confecciona el presupuesto municipal en asocio con el Ministerio de Planificación y Política Económica, el cual es presentado ante el Concejo Municipal que es el ente encargado de estudiar, evaluar y aprobar el Presupuesto de Rentas y Gastos Municipales. De ello se desprende entonces, que el Concejo al otorgarle al Director de Obras y Construcciones Municipales la atribución de preparar el presupuesto de funcionamiento e inversiones de esa dirección, no es con el fin de ir más allá de la norma legal, puesto que si se observa en sentido estricto el artículo 2° literal c) del Acuerdo N°50, se infiere que alude a la preparación del presupuesto de esa dirección, mas no a su presentación al Concejo Municipal que es una facultad privativa del Alcalde. Hay que tener presente, que en el proceso de elaboración del presupuesto municipal, por su naturaleza netamente administrativa, es claro que se requiera de la participación de todas y cada una de las direcciones o departamentos que conforman dicha entidad, toda vez que resulta ser el mecanismo más eficaz para la obtención de información y suplir de esta forma las necesidades más apremiantes de cada uno de ellos. Obtenida toda la información y una vez analizada la situación, se procede entonces, tal como lo ordena la norma, a la elaboración en sí del instrumento denominado "Presupuesto Municipal", donde se contabilizan los recursos y gastos anuales el cual será sometido a la consideración del Consejo Municipal por parte del Alcalde con la colaboración del Ministerio de Planificación y Política Económica. Se desestiman, pues, estos cargos.

La parte actora también aduce como violado el numeral 4 del artículo 45 de la Ley 106 de 1973, dado que en su opinión, la facultad concedida al Director de Obras y Construcciones de nombrar y destituir al personal subalterno de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, es una facultad exclusiva del Alcalde. En cuanto a ello, no coincide la Sala con lo planteado por el apoderado judicial de la Alcaldesa del Distrito de Panamá, puesto que el artículo 45 de la Ley 106 consagra como atribución de los Alcaldes, nombrar y remover a los Corregidores y demás funcionarios municipales "cuya designación no corresponda a otra autoridad". A juicio de la Sala, evidentemente esta norma hace alusión a las autoridades municipales que la misma ley señala en Título I°, sobre la Administración Municipal, llámese estos el Consejo Municipal, los Alcaldes, Los Tesoreros Municipales, y el Servicio de Auditoría adscrito a la Contraloría General de la República. Es claro, pues, que al ser creado el cargo por el Concejo en razón de la facultad que le confiere el artículo 17 numeral 3, es natural que le asigne funciones y entre éstas la de "nombrar y destituir el personal subalterno de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales", aun cuando dicho cargo haya sido creado mediante acuerdo. En relación a ello, vale destacar que entre las atribuciones del Consejo Municipal figura la de escoger y destituir a los Tesoreros Municipales, los cuales a su vez, poseen dentro de sus facultades, "la de nombrar y destituir el personal subalterno de la Tesorería (Ver artículo 57 numeral 15). Nada obsta entonces, que el Director de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales tenga entre su funciones la de "nombrar y destituir", precisamente cuando se trata de personal adscrito a esa dirección pues son cargos creados por el Consejo Municipal, tal como lo dispone la norma. Se desestima este cargo.

En cuanto a la violación que se alega al artículo 123 de la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984, donde se señala el ejercicio financiero desde el 1° de enero al 31 de diciembre de cada año calendario e igualmente se señala la vigencia del período anterior en el evento que así lo estime el Consejo Municipal, a juicio de la parte actora es directa, pues existe una incongruencia jurídica al asignarle funciones presupuestarias al Director de Obras y Construcciones para ejecutarlas respecto del futuro presupuesto de 1998 y al Director de Planificación y Presupuesto se le señala que debe ejecutarlas respecto al Presupuesto de 1997, pero también porque se incurre en una modificación al presupuesto vigente contenido en el Acuerdo N° 216 de 20 de diciembre de 1995. En cuanto a este cargo, la Sala coincide con lo planteado por la Procuradora de la Administración en que la violación es evidente, dado que mediante el Acuerdo Municipal N° 50 de 6 de mayo de 1997, se introducen una serie de modificaciones a la estructura administrativa de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales que debían ser incluidas en el anteproyecto del presupuesto para el año 1997. No obstante, este anteproyecto no fue aprobado, razón por la que al momento de la expedición del Acuerdo N° 50, estaba aún vigente de pleno derecho el presupuesto de rentas y gastos para el año 1996. Queda claro entonces, que hasta tanto no sea aprobado el nuevo presupuesto, no podrá esa corporación municipal introducirle modificaciones o alteraciones; criterio similar sostuvo esta Sala en sentencia de 18 de junio de 1997.

También se señalan como violados los artículos 770, 863 y 873 del Código Administrativo ya citados, lo que en opinión de la parte actora se produce cuando se faculta al Director de Obras y Construcciones para nombrar y destituir a todo el personal subalterno de esa dirección siendo esta una facultad privativa del Alcalde, aparte de que se faculta al Director de Obras para instruir y al mismo tiempo decidir sobre las infracciones a las normas de construcción contenidas en el Código Administrativo, Título III, Capítulo I. En cuanto a esas violaciones alegadas, la Sala comparte los argumentos esbozados por la Procuradora de la Administración dado que en efecto, los planteamientos de la parte actora están dirigidos a cuestionar las atribuciones que posee la Secretaría Técnica Legal de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales y en el acuerdo municipal que se acusa no se incluyen dichas atribuciones, pues, como esta Secretaría asume las funciones del Departamento Técnico Legal de Obras, antes adscrito a la Dirección Legal, éstas están previstas en otras disposiciones; en esta oportunidad sólo se demanda la nulidad del acuerdo N°50 de 6 de mayo de 1997, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá y en su artículo noveno sólo se enuncia el traspaso del Departamento Técnico Legal de Obras a la estructura de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales y se le cambia el nombre a Secretaría

Técnica Legal. Se desestiman estos cargos.

Finalmente, con respecto a los artículos 149 y 151 de las normas generales de administración presupuestaria de la Ley 65 de 24 de diciembre de 1996, opina el apoderado judicial de la parte demandante, que han sido violentadas ya que el Director de Obras y Construcciones no debe preparar el presupuesto de la dirección a su cargo "sin tomar en cuenta las decisiones operativas administrativas y financieras del Municipio y que en la creación de los cargos de Subdirector de Planificación y Fiscalización Urbana y Subdirector de Obras y Construcciones Municipales, "no se tomó en consideración que dentro del presupuesto de rentas y gastos del Municipio de Panamá vigente, no se puede realizar erogación, pues, no existe". La violación alegada al artículo 149 de la Ley 65 de 24 de diciembre de 1996, por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 1997, a juicio de la Sala no se ha producido, ya que reiteramos que para la elaboración del presupuesto, previo a su confección y presentación por parte del Alcalde ante el Concejo Municipal, se requiere de la convergencia de información que indique las necesidades de cada dirección o departamento. En cuanto al artículo 151 de la misma ley, por estar relacionado con el concepto de la violación al artículo 123 de la Ley 106 de 1973, cuya violación fue probada, la Sala se abstiene de efectuar mayores consideraciones.

Por todo lo antes anotado, la Sala es del criterio que solo procede declarar la ilegalidad del artículo décimo primero del Acuerdo N° 50 donde expresamente se señala que "la Dirección de Planificación y Presupuesto Municipal deberá incluir en el anteproyecto de Presupuesto Municipal para el año 1997 las partidas presupuestarias necesarias para la efectiva ejecución del presente Acuerdo."

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES NULO POR ILEGAL el artículo décimo primero del Acuerdo N° 50 de 6 de mayo de 1997, por el cual se reestructura la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, creando la Subdirección de Planificación y Fiscalización Urbana y la Subdirección de Obras y traspasa a la estructura de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales el Departamento Técnico Legal de Obras, adscrito actualmente a la Dirección de Legal y Justicia, y se le asignan funciones y NO ACCEDE a las otras declaraciones pedidas en la demanda.

Notifíquese, Cúmplase y Publíquese En la Gaceta Oficial.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO OLMEDO ARROCHA EN REPRESENTACIÓN DE LA ALCALDESA DEL DISTRITO DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 11 DE 3 DE FEBRERO DE 1998, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Olmedo Arrocha, actuando en nombre y representación de la señora **MAYIN CORREA**, Alcaldesa del Distrito de Panamá, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad, para que se declare nulo, por ilegal, el **Acuerdo Municipal N° 11 de 3 de febrero de 1998**.

En la parte final de su libelo, el licenciado Arrocha pidió a los

Magistrados que integran la Sala, que antes de decidir sobre el fondo de la demanda de ilegalidad, suspendan los efectos del Acuerdo Municipal N° 11 de 3 de febrero de 1998, con fundamento en las siguientes consideraciones:

> "... la ejecución del presupuesto (inversión) es el resultado de una serie de pasos, que concluyen con una obra para el disfrute de la comunidad. En este sentido, se consigna en el presupuesto, una partida que respalde cada gasto, luego se realizan los actos públicos y la contratación, del cual da fe la Contraloria General de la República, quien examina la cuenta con el propósito de verificar la partida. No puede, entonces el Consejo Municipal suspender las inversiones sobre la base de pagar a proveedores y contratista cuyas cuentas han pasado el control previo que ejerce la Contraloria.
> ...
> La medida cautelar que solicitamos a los Honorables Magistrados que accedan declarar la SUSPENSION PROVISIONAL la formulamos porque existe en nuestro beneficio la apariencia de buen derecho, es decir, el Acuerdo No. 11 de 3 de febrero de 1998, pugna como ostensiblemente ilegal, en violación de los artículos 45 numeral 3, 108 y 123 de la Ley 106 de 1973 ...
>
> Es importante reiterar, que actualmente se encuentran suspendidos por decisión de la Corte los acuerdos No. 12 de 28 de enero de 1997 y No. 66 de 24 de junio del mismo año, toda vez que al no ser aprobado, el proyecto de presupuesto presentado por la Alcaldesa, rige por ministerio de la ley el de la vigencia anterior, hasta que sea aprobado el que corresponde.
>
> En este sentido, los Honorables Consejales, han desatendido, lo ordenado por la Corte en los Autos de 18 de junio y de 11 de septiembre al expedir el Acuerdo 11 de 1998 de naturaleza presupuestaria.
>
> El monto del presupuesto de inversiones vigente del Municipio de Panamá, que se paraliza o suspende en virtud del Acuerdo No. 11 de 3 de febrero de 1998, asciende a la suma de cinco millones trescientos siete mil balboas (B/.5,307,000.00), por lo que se demuestra que existe un perjuicio notoriamente grave. (FUMUS BONI IURIS)" (Fs. 51-52).

A través del acto impugnado, el Concejo Municipal del distrito capitalino suspendió temporalmente el Programa de Inversiones Municipales nuevas del actual Presupuesto de Rentas y Gastos, por causa del desbalance producto de la diferencia de las cifras del Presupuesto de 1996 y el proyecto de Presupuesto 1998, hasta tanto se corrija dicha anomalía, y con esta medida poder hacerle frente al pago de los proveedores cuyas cuentas estén hasta el día 31 de diciembre de 1997 (fs. 1).

De acuerdo con la parte final del artículo 15 de la Ley N° 106 de 1973, la Sala Tercera puede suspender los "Acuerdos, resoluciones y demás actos de los Consejos Municipales y los decretos de los Alcaldes ... previo los procedimientos que la ley establezca".

Conforme al artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala Tercera puede suspender provisionalmente los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave. En las acciones contencioso-administrativas de nulidad, ese perjuicio está constituido por la violación ostensible o palmaria del ordenamiento jurídico.

De acuerdo con el artículo 123 de la Ley N° 106 del 8 de octubre 1973, que el demandante considera violado, el presupuesto municipal rige desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de cada año calendario, salvo que la mayoría del Consejo Municipal, motivadamente, establezca otro período de vigencia. La parte final de la misma norma dispone que, "Si por alguna causa justificada no se hubiese aprobado un nuevo presupuesto, seguirá rigiendo el presupuesto anterior, hasta que sea aprobado el que corresponda".

Como puede apreciarse, la norma parcialmente transcrita autoriza la prórroga del presupuesto municipal del año anterior en el evento de que el Concejo Municipal, por alguna causa justificada, no haya aprobado el presupuesto del siguiente período fiscal. En el caso que nos ocupa, consta a foja 20 del expediente contencioso, que el Presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Panamá para la vigencia viscal 1998 no fue aprobado por la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal de Panamá, el 30 de diciembre de 1997, y tal como lo dispone el artículo 123 de la Ley N° 106 de 1973, mientras no se haya aprobado un nuevo presupuesto, sigue rigiendo el presupuesto anterior, que en este caso es el Presupuesto de Rentas y Gastos para el período fiscal 1996, aprobado mediante el Acuerdo Municipal N° 216 de 20 de diciembre de 1995 (fs. 3-15), y cuyos gastos de inversión ascienden a un monto de B/.5,307.000.00.

Como este presupuesto continúa rigiendo de pleno derecho, por ministerio de la Ley, hasta que se apruebe un nuevo presupuesto, es obvio que al referido ente municipal le está vedado introducirle cualquier tipo de alteraciones o modificaciones. Suspender el Programa de Inversiones Municipales del Presupuesto, es tanto como incumplir sus normas que están vigentes en virtud del artículo 123 citado.

Además, tal como lo señaló el demandante, esta Superioridad suspendió los efectos de los Acuerdos Municipales N° 12 de 28 de enero de 1997 y N° 66 de 24 de junio del mismo año, casos análogos al de este proceso. En el primer Acuerdo, el Concejo Municipal del Distrito de Panamá, después de rechazar el proyecto de Presupuesto presentado por la señora Alcaldesa para la vigencia fiscal de 1997, derogó los artículos 21 y 37 del Acuerdo Municipal N° 216 del 20 de diciembre de 1995, mediante el cual se aprobó el Presupuesto Municipal de 1996 y que fue prorrogado para el período fiscal de 1997, sin tener facultad legal para modificar dicho presupuesto.

Como, a primera vista, el acto impugnado parece infringir el citado artículo 123 de la Ley N° 106 de 1973, la Sala concluye que existe a favor de la demandante la apariencia de buen derecho (fumus bonis juris), razón por la cual debe acceder a la medida cautelar solicitada.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDE PROVISIONALMENTE los efectos del Acuerdo Municipal N° 11 de 3 de febrero de 1998, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO CONTENCIOSO DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTO POR LA FIRMA MONCADA ABOGADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS HUMBERTO QUINTERO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO ADMINISTRATIVO DEL DÍA 3 DE FEBRERO DE 1997, Y LA RESOLUCIÓN DE 27 DE AGOSTO DE 1997, AMBAS EXPEDIDAS POR EL VICE-MINISTRO DE VIVIENDA Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ACCIÓN PARA AREAS REVERTIDAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 20 de noviembre de 1997 mediante la cual se admitió la demanda contencioso administrativa de protección a los derechos humanos

interpuesta por la firma forense Moncada y Abogados, actuando en nombre y representación de **LUIS HUMBERTO QUINTERO**, para que se declare nulo, por ilegal, el acto administrativo del día 3 de febrero de 1997 y la resolución de 27 de agosto de 1997, ambas expedidas por el **Vice-Ministro de Vivienda y Presidente de la Comisión de Acción para Areas Revertidas** y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda, ya que consideró que la misma reunía los requisitos procesales mínimos para su admisión.

La Procuradora de la Administración fundamenta su apelación señalando que el apoderado judicial del recurrente no observó lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley Contencioso Administrativa, pues la autoridad administrativa que decretó el lanzamiento por intruso contra el señor Luis Humberto Quintero, fue la Corregidora Municipal del Distrito de Arraiján y no el Vice-Ministro de Vivienda. Además, manifiesta que el demandante solicita una indemnización por el daño moral y material por la suma de B/.40,000.00, pretensión que es improcedente en un proceso contencioso administrativo de protección a los derechos humanos, cuya finalidad es el restablecimiento del derecho humano violado y que en caso de existir alguna indemnización, debe ser reconocida de acuerdo con lo que establece el numeral 9 del artículo 98 del Código Judicial.

Por su parte, la firma Moncada Abogados en su escrito de oposición al recurso de apelación manifiesta que la corregidora no firmó los actos administrativos impugnados. Con respecto al punto del resarcimiento económico señala que este punto debe ser analizado en la fase del proceso correspondiente.

Una vez efectuado un estudio del expediente, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema consideran que no le asiste la razón a la Procuradora de la Administración en el presente caso, puesto que se designó correctamente a la parte demandada. Esto es así, ya que los actos administrativos que se impugnan, es decir, el acto administrativo del 3 de febrero y la Resolución de 27 de agosto de 1997, fueron expedidos por el Vice-Ministro de Vivienda que a su vez es el Presidente de la Comisión de Acción para Areas Revertidas.

Por otro lado, como la parte actora ha solicitado la nulidad del acto administrativo que ha lesionado derechos humanos justiciables, es perfectamente viable la solicitud de indemnización del daño moral como material, por la suma de cuarenta mil balboas (B/.40,000.00).

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución de 20 de noviembre de 1997 que ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Moncada Abogados, en representación de LUIS HUMBERTO QUINTERO, para que se declare nula, por ilegal, el acto administrativo del día 3 de febrero de 1997 y la Resolución de 27 de agosto de 1997, ambas expedidas por el Vice-Ministro de Vivienda, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL A. BERNAL, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACTO DE ELECCIÓN DEL MAGISTRADO ARTURO HOYOS, COMO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DE 1997, POR EL PLENO DE

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ A. TROYANO. PANAMÁ, TRECE (13) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998). (IMPEDIMENTO)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El Magistrado **EDGARDO MOLINO MOLA** ha presentado solicitud para que se le declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento de la Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad presentada por el Licenciado **MIGUEL ANTONIO BERNAL** en su propio nombre y representación, para que se declare nula, por ilegal, la elección del Magistrado **ARTURO HOYOS** como Presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevada a cabo el 2 de octubre de 1997 por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El Magistrado MOLINO MOLA fundamenta su petición de impedimento en los siguientes términos:

> "En la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por el licenciado Miguel A. Bernal, en su propio nombre y representación, para que se declare nulo por ilegal, el acto de elección del Magistrado Arturo Hoyos, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, celebrado el 2 de octubre de 1997, por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, debo solicitar que se me separe del conocimiento del caso.
>
> Esta solicitud encuentra fundamento en el artículo 78 numeral 2° de la ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946, que prevé como causal de impedimento para conocer del negocio contencioso-administrativo: 'el haber dictado el acto o providencia de cuya revisión se trate, o haber contribuido a dictarlo ...'
>
> En mi calidad de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, participé en el acto de elección del Presidente de esta Máxima Corporación Judicial, celebrado el día 2 de octubre de 1997, en que resultó elegido el Magistrado Arturo Hoyos, razón por la cual solicito a los señores Magistrados que se me declare separado del conocimiento de este asunto".

El numeral 2° del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, establece como causal de impedimento "Haber dictado el acto o providencia de cuya revisión se trate, o haber contribuido a dictarlo, o haber ejecutado o contribuido a ejecutar el hecho u operación administrativa sobre que versa la actuación".

Se advierte con claridad meridiana que la petición formulada por el Magistrado MOLINO MOLA se justifica en la norma legal citada.

En mérito de lo anterior, los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL el impedimento declarado por el Magistrado EDGARDO MOLINO MOLA, lo separa del conocimiento de este negocio, y en base a lo normado por el artículo 78 del Código Judicial, designa al Magistrado ELIGIO SALAS, de la Sala Primera, para que integre la Sala Tercera en reemplazo del Magistrado impedido.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ A. TROYANO
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL E. COLLINS, EN REPRESENTACIÓN DE MARIO R. MARCUCCI, PARA QUE

SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL AVISO DE CONVOCATORIA N° 090 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1995, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL ÓRGANO JUDICIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 28-96 DE 16 DE ABRIL DE 1996, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL, DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Magistrado **Arturo Hoyos** ha presentado solicitud para que se le declare impedido, y en consecuencia, se le separe del conocimiento de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado **Rafael Collins**, en representación de **MARIO MARCUCCI**, para que se declare nula, por ilegal, el Aviso de Convocatoria N° 090 de 21 de noviembre de 1995, de la Dirección de Recursos Humanos del Órgano Judicial, y la Resolución N° 28-96 de 16 de abril de 1996, dictada por la Comisión de Personal, del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

Dicha manifestación de impedimento es del tenor siguiente:

> "Solicito muy respetuosamente, a los Honorables Magistrados que declaren que es legal el impedimento que invoco para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Rafael Collins, en representación de Mario R. Marcucci, para que se declare nulo por ilegal el Aviso de Convocatoria N° 090 de 21 de noviembre de 1995, proferido por la Dirección de Recursos Humanos del Organo Judicial, la Resolución No. 28-96 de 16 de abril de 1996 emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Penal y la Resolución de 27 de noviembre de 1997, que confirma la Resolución No. 28-96 proferida por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.
>
> Como es del conocimiento de los Magistrados, desde enero de 1992, soy Magistrado de la Sala Cuarta de Negocios Generales, y como tal, proferí la Resolución de 27 de noviembre de 1997, razón por la cual me considero impedido para conocer del presente negocio.
>
> Fundamento, mi impedimento en el numeral 2 del artículo 78 de la Ley 33 de 1946 en concordancia con el numeral 12 del artículo 749 del Código Judicial".

A juicio de quienes suscriben, la situación planteada efectivamente, encuentra asidero jurídico dentro de los supuestos legales contemplados en los artículos 78 (ordinal 2), y 749 (ordinal 12), de la Ley 135 de 1943, y del Código Judicial respectivamente, toda vez que tal como lo manifestara el Magistrado HOYOS, participó en la emisión del acto administrativo cuya ilegalidad se demanda.

El texto de las precitadas disposiciones legales, en el orden establecido, es el siguiente:

> "ARTICULO 78. Son causas de impedimento y recusación en los miembros del Tribunal de lo Contencioso administrativo las siguientes:
>
> 1. ...
> 2. Haber dictado el acto o providencia de cuya revisión se trate, o haber contribuido a dictarlo, o haber ejecutado o contribuido a ejecutar el hecho u operación administrativa sobre que versa la actuación;" ...
>
> "ARTICULO 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
>
> 1. ...

2. ...
12. Haber intervenido el Juez o Magistrado en la formación del acto o del negocio objeto del proceso;"

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL, el impedimento manifestado por el Magistrado ARTURO HOYOS, y, de conformidad con el artículo 78, numeral 2, de la Ley 135 DE 1943 y artículo 749, numeral 12, del Código Judicial, DISPONEN designar al Magistrado de la Sala Civil JOSÉ A. TROYANO, para que conozca del presente negocio.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

TERCERÍA COADYUVANTE INTERPUESTA POR LA LICENCIADA CYNTHIA REBECCA PINEL, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A PANAMERICAN CONSULTANTS, S. A., RICARDO ZUBIETA REYES Y PATRICIA PAZ MEDINA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Cynthia Rebecca Pinel, actuando en nombre y representación de la **Caja de Seguro Social**, ha interpuesto tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el **Banco Nacional de Panamá** a **PANAMERICAN CONSULTANTS, S. A., RICARDO ZUBIETA REYES y PATRICIA PAZ MEDINA**, para que con el producto del remate de los bienes perseguidos en dicha ejecución, se pague a su representada la suma de B/.1,006.20, que el ejecutado RICARDO ZUBIETA REYES, le adeuda a la Caja de Seguro Social en concepto de cuotas obrero patronales y otros descuentos de ley, más gastos, costas e intereses legales hasta la fecha del pago de la obligación.

La tercerista alega que RICARDO ZUBIETA REYES está inscrito en la Caja de Seguro Social bajo el número patronal 87-000-0951 y se obligó a pagar las cuotas obrero patronales correspondientes. Sin embargo, ha incumplido con la obligación contraída y como prueba de ello, la tercerista aporta certificación de deuda a cargo de la ejecutada, expedida por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social, por B/.1,006.20, correspondiente a 15 meses morosos, desde agosto de 1984 hasta octubre de 1985 y copia auténtica de la ficha de inscripción patronal de RICARDO ZUBIETA REYES (fs. 2 a 4).

Admitida la tercería, se corrió en traslado al Juez Ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, a la señora Procuradora de la Administración y a los ejecutados por el término de ley, y se ordenó suspender el pago.

El apoderado judicial de la Jueza Ejecutora del Banco Nacional de Panamá, mediante escrito fechado 12 de septiembre de 1997, negó la mayoría de los hechos invocados en la presente tercería y solicitó a esta Sala rechazar la pretensiones de la tercerista (fs. 41 a 43), alegando que la finca 132637 está gravada con primera hipoteca y anticresis en favor del mismo Banco Nacional de Panamá, por la suma de B/.49,554.43, en garantía del préstamo agropecuario otorgado a Inmobiliaria Mavisa, S. A., cuyo garante hipotecario es el señor Ricardo Enrique Zubieta Reyes, propietario de la finca.

Por medio del Auto N° 225 de 19 de marzo de 1997, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá declaró de plazo vencido esta obligación, libró mandamiento de pago contra Inmobiliaria Mavisa, S. A., Ricardo Zubieta, Raúl Zubieta y Rafael Zubieta por B/.50,496.46 y decretó embargo sobre las fincas hipotecadas (fs. 36 a 39).

El apoderado judicial del Banco manifiesta que el crédito que posee el Banco Nacional, en razón de la obligación contraída por Inmobiliaria Mavisa es preferente, y que, además, el remate de la finca no cubre ni siquiera el saldo adeudado en ambas obligaciones, es decir, el préstamo de Inmobiliaria Mavisa, S. A. y el de Panamerican Consultants, S. A.; por tanto, aún cuando la tercería coadyuvante interpuesta por la Caja de Seguro Social prospere, no hay producto para cancelar su crédito.

La señora Procuradora de la Administración consideró probada la presente tercería porque es oportuna y cumple con todos los requisitos legales (fs. 44 y 45).

Según la constancias procesales, mediante el Auto N° 544-A de 24 de junio de 1994, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá libró mandamiento de pago ejecutivo contra Panamerican Consultants, S. A., Ricardo E. Zubieta Reyes y Patricia Paz Medina, hasta la concurrencia de B/.38,266.70, en concepto de capital, intereses vencidos, gastos de cobranza más los intereses que se causen hasta el completo pago de la obligación (fs. 15 y 16).

En esa misma fecha, mediante el Auto N° 544, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá decretó secuestro sobre cualesquiera sumas de dinero, joyas, bonos, cajillas de seguridad, etc., que mantengan los demandados en los bancos de la localidad y sus sucursales; sobre cualesquiera vehículos, automóviles o equipo rodante que aparezcan inscritos a nombre de los demandados en las tesorerías municipales; y sobre el 15% del excedente del salario mínimo que devenguen los demandados como empleados públicos o privados, hasta la concurrencia de la suma mencionada en el párrafo anterior (fs. 13 y 14).

Con posterioridad, mediante el Auto N° 574, fechado el 30 de junio de 1994, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá decretó secuestro sobre la finca 132637, inscrita al rollo 14089, documento 1, de la Sección de la Propiedad del Registro Público, Provincia de Panamá, propiedad del ejecutado Ricardo Enrique Zubieta (fs. 17 y 18).

A través del Auto N° 817 de 27 de septiembre de 1994 (fs. 19 y 20), corregido por el Auto N° 239 de 20 de marzo de 1997 (fs. 22 y 23), se elevó a la categoría de embargo los secuestros decretados mediante los Autos 544 de 24 de junio de 1994 y 574 de 30 de junio de 1994.

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados que integran la Sala Tercera proceden a resolver lo pertinente.

La tercería examinada, se apoya en una certificación de deuda expedida por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social, documento que obra a foja 2 del expediente.

Conforme el numeral 2 del artículo 1803 del Código Judicial, en concordancia con el numeral 14 del artículo 1639 ídem, la certificación de deuda expedida por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social presta mérito ejecutivo con respecto a las cuotas obrero patronales adeudadas antes de que el Banco Nacional de Panamá dictara el auto ejecutivo de 24 de junio de 1994. Esto es así, porque según lo dispone el numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial, la tercería coadyuvante debe apoyarse en algún documento que preste mérito ejecutivo de fecha cierta anterior al auto ejecutivo y en el caso en estudio estamos frente a un documento público que hace fe de la certificación de la existencia de la deuda y de su fecha, de conformidad con el artículo 823 del Código Judicial.

Los documentos privados tienen fecha cierta en los casos señalados en el artículo 848 del Código Judicial. Los documentos públicos como el presentado por

la tercerista (artículo 821, numeral 2 del Código Judicial) prestan mérito ejecutivo por disponerlo así el artículo 1803, numeral 2 del Código Judicial y hacen fe de la certificación hecha en el mismo por el servidor público que lo expidió (artículo 823 del Código Judicial).

Por otro lado, observa la Sala que la finca 132,637 está gravada a favor del Banco Nacional de Panamá, con primera hipoteca y anticresis, en razón de la obligación contraída por Inmobiliaria Mavisa.

El Juez Ejecutor del Banco a través del Auto N° 225 de 19 de marzo de 1997 (fs. 36 a 39), declaró el vencimiento anticipado de la obligación, en consideración a que el mismo Banco, dentro del proceso ejecutivo seguido a Panamerican Consultants, S. A., Ricardo Zubieta y Patricia Paz Medina, por Auto N° 574 de 30 de junio de 1994 decretó secuestro sobre la finca antes citada.

En esa oportunidad, ante recurso de apelación presentado por Ricardo Zubieta contra el Auto N° 225, esta Sala en resolución fechada el 23 de septiembre de 1997 señaló lo siguiente:

> "Sin embargo, como el secuestro que pesa sobre la finca No.132.637, que es una de las fincas hipotecadas para garantizar la presente obligación, fue decretado por el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá en el proceso que dicha institución le sigue a Panamerican Consultants y otros (foja 51 del expediente que contiene el proceso ejecutivo), el Banco no podía hacer uso del derecho que le concede la transcrita cláusula vigésima de la Escritura Pública No. 10676 de 12 de noviembre de 1993, de declarar anticipadamente el vencimiento de la obligación y proceder a su cobro por la vía ejecutiva, porque mediante esta cláusula lo que se pretende es proteger al acreedor hipotecario de terceros acreedores y no protegerlo de si mismo como acreedor".

En el presente caso, sí existe un tercero persiguiendo el bien dado en garantía, que es la Caja de Seguro Social, por tanto, como el Banco Nacional de Panamá goza de un crédito con garantía hipotecaria, por el préstamo otorgado a Inmobiliaria Mavisa, S. A., debe ser citado para hacer valer su derecho de acreedor, según lo dispuesto en los artículos 1693 y 1694 del Código Judicial:

> "ARTÍCULO 1693: Cuando se embargue un bien inmueble el ejecutante presentará, dos (2) días después de decretado el embargo, un certificado del Registro Público, en el que conste si la finca está libre, o si está gravada con hipoteca o anticresis.
>
> ARTÍCULO 1694: Si la finca estuviere gravada, el Juez dispondrá que se cite a los acreedores hipotecarios o anticréticos para que, dentro del término que les señale, puedan hacer valer sus derechos.
>
> Si no se encontrare a los acreedores para la citación personal, se procederá mediante emplazamiento conforme a las reglas generales y se entenderán las diligencias con el defensor que se nombre.
>
> Si los acreedores citados no comparecieren en el término señalado, del producto del remate se deducirá la parte que les corresponda y se depositará en el Banco Nacional a su nombre".

La certificación de deuda expedida por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social presta mérito ejecutivo y corresponde al período comprendido entre agosto de 1984 y octubre de 1985, o sea que es anterior al auto ejecutivo de 24 de junio de 1994, dictado por el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, por tanto, esta Sala debe declarar probada la presente tercería coadyuvante propuesta por la Caja de Seguro Social y ordenar que con el producto de la venta del bien inmueble objeto del remate, se le pague el crédito reconocido a su favor, con la preferencia que se determine en el auto de prelación correspondiente, conforme lo ordena el artículo 1770 del Código Judicial. En este auto deberá tomarse en consideración la preferencia de que gozan los créditos hipotecarios sobre los créditos de la Caja de Seguro Social,

de conformidad con el artículo 1661 del Código Civil modificado por la Ley 52 de 7 de diciembre de 1962, tal como lo ha interpretado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia de 18 de julio de 1984, Registro Judicial de julio de 1984, pág. 37 a 44); y el artículo 1072 del Código Fiscal, modificado por el artículo 24 de la Ley 31 de 1991, publicada en la Gaceta Oficial N° 21.943 de 31 de diciembre de 1991, que a la letra dice:

> "Artículo 1072.- Salvo lo dispuesto en el inciso 1) del Artículo 1660 y en los incisos 1) y 2) del Artículo 1661 del Código Civil, los créditos a favor del Tesoro Nacional gozarán de preferencia sobre cualesquiera otros, excepto:
>
> 1) Los garantizados con derechos reales sobre determinados bienes;
>
> 2) El importe de los salarios, prestaciones e indemnizaciones adeudadas a los trabajadores, debidamente reconocidas por las autoridades laborales competentes.
>
> 3) El importe de las sumas que se adeuden a la Caja de Seguro Social en concepto de las cuotas.
>
> Los créditos a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 de este artículo gozarán de preferencia entre sí en ese orden".

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA la tercería coadyuvante propuesta por la licenciada Cynthia Rebecca Pinel, en representación de la Caja de Seguro Social, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a PANAMERICAN CONSULTANTS, S. A., RICARDO ZUBIETA REYES y PATRICIA PAZ MEDINA, y ORDENA que con el crédito reconocido a su favor se le pague con la preferencia que la ley determina.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAMÓN DEL RÍO MONG, EN SU PROPIO NOMBRE, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ LE SIGUE A PEDRO BRIN MARTÍNEZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ramón Del Río Mong, actuando en su propio nombre, ha interpuesto tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el **Banco Nacional de Panamá** a **Pedro Brin Martínez (Q. E. P. D.)** y **Cecilia Lamela de Martínez**, para que se haga efectivo el auto que libra mandamiento de pago a su favor por la suma de DOCE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE BALBOAS CON CINCUENTA CENTÉSIMOS (B/.12,917.50).

El tercerista aporta como prueba copia del auto fechado el 29 de septiembre de 1987, emitido por el Juez Primero Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso ejecutivo propuesto por Ramón Del Río Mong contra Pedro Brin Martínez, (Q. E. P. D.) mediante el cual se libra mandamiento de pago a favor del ejecutante por la suma de B/.12,917.50 (fs. 5); y copia autenticada de la liquidación fechada el 29 de julio de 1997, expedida dentro del mismo proceso, por la suma de B/.17,942.50 (fs. 14).

Admitida la presente tercería se corrió en traslado a Pedro Brin Martínez (Q. E. P. D.) y Cecilia Lamela de Martínez, al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá y a la señora Procuradora de la Administración (fs. 22).

El Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, por vía de apoderado judicial, contestó la tercería negando el derecho invocado y solicitó a esta Sala que niegue las pretensiones de la tercerista. Señaló que "el auto ejecutivo dictado en el proceso a que accede la Tercería es de 18 de junio de 1984, la fecha cierta del documento que presta mérito ejecutivo al tercerista es el 10 de septiembre de 1986, fecha en que las partes que lo suscribieron acudieron (sic) a la Notaría Segunda del Circuito a reconocer sus firmas. Por otro lado, el Auto de Mandamiento Ejecutivo de pago dictado por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil es de 29 de septiembre de 1987, (foja 6) y se tiene por notificado el día 29 de febrero de 1988, (foja 12); el Tercerista promovió su demanda el 31 de agosto de 1987 (foja 3). Como puede observarse, ni el documento que presta mérito al tercerista ni la fecha en que promovió la demanda en contra del señor Pedro Brin Martínez (Q. E. P. D.), son de fecha anterior al auto ejecutivo dictado por el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá". (Fs. 27 a 29).

La señora Procuradora de la Administración, en su Vista Fiscal N° 501 de 12 de noviembre de 1997, expresó que no procede la presente tercería, ya que no cumple con uno de los requisitos exigidos por el artículo 1794 del Código Judicial, cual es que la tercería debe apoyarse en un documento que preste mérito ejecutivo y de fecha cierta anterior al auto ejecutivo, por lo cual concuerda con el criterio vertido por el Juez Ejecutor del Banco, cuando señala que el auto que libra mandamiento de pago a favor del tercerista, emitido por el Juez Primero Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá es de fecha posterior al auto ejecutivo dictado por el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá (fs. 30 a 34).

De acuerdo con las constancias procesales, mediante auto fechado el 18 de junio de 1984, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de PEDRO BRIN MARTÍNEZ (Q. E. P. D.) Y CECILIA LAMELA DE BRIN, decretó embargo sobre los bienes hipotecados y dados en prenda, hasta la concurrencia de la suma de CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO BALBOAS CON 99/100 (B/.106,848.99), y ordenó su venta en pública subasta (fs. 24 a 26).

Sirvió como título ejecutivo la Escritura Pública N° 6,005 de 16 de julio de 1982, otorgada por la Notaría Quinta de Circuito de Panamá, por la cual el Banco Nacional de Panamá declara cancelados los gravámenes constituidos a su favor por PEDRO BRIN MARTÍNEZ (Q. E. P. D.) Y CECILIA LAMELA DE BRIN y el señor Pedro Brin Martínez (Q. E. P. D.) celebra un contrato de préstamo garantizado con primera hipoteca y anticresis sobre varias fincas de propiedad de Cecilia Lamela de Brin, quien se constituye en garante hipotecaria y prendaria de dicho préstamo (fs. 7 a 22 del proceso ejecutivo por jurisdicción coactiva).

Según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1766 del Código Judicial, las tercerías en los procesos ejecutivos hipotecarios sólo son admisibles, entre otros supuestos, cuando el tercerista posea algún "crédito que reúna las condiciones del artículo 1639".

En este caso el auto que libra mandamiento de pago expedido por el Juez Primero Civil del Primer Circuito Judicial prestaría mérito ejecutivo con respecto a la sumas adeudadas al tercerista si fuese de fecha anterior al auto ejecutivo dictado por el Banco Nacional de Panamá, de conformidad con el numeral 3 del precitado artículo 1639. Esto es así, porque según lo dispone el numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial, la tercería coadyuvante debe apoyarse en algún documento que preste mérito ejecutivo de fecha cierta anterior al auto ejecutivo. Pero tratándose de las sentencias a que se refieren los ordinales 1 y 2 del artículo 1639, las tercerías serán admisibles con fecha posterior, siempre que el proceso, en que dicha sentencia se hubiere dictado se haya promovido con anterioridad al auto ejecutivo.

En el caso en estudio el auto que libra mandamiento de pago expedido por

el Juez Primero Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en virtud del proceso ejecutivo de mayor cuantía interpuesto el 31 de agosto de 1987, que hace fe de la existencia de la deuda que el señor Pedro Brin Martínez (Q. E. P. D.) mantiene con el señor Ramón Del Río Mong, está fechado 29 de septiembre de 1987, por lo cual, no cumple con la condición de que el crédito reclamado sea de fecha cierta anterior al auto ejecutivo expedido por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, que está fechado 18 de junio de 1984 (fs. 24 a 26).

Ni siquiera el pagaré a plazo con fianza, documento en el que se apoya la obligación reclamada por el señor Ramón Del Río Mong es de fecha anterior al auto ejecutivo dictado por el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, según se lee a fojas 4 y reverso, éste fue suscrito el 10 de septiembre de 1984.

En vista de que el señor Ramón Del Río Mong reclama el pago de un crédito de fecha posterior a la emisión del auto ejecutivo expedido por el Banco ejecutante, la presente tercería no se ha probado y así debe declararlo esta Sala.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO PROBADA la tercería coadyuvante propuesta por el licenciado Ramón Del Río Mong, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a Pedro Brin Martínez (Q. E. P. D.) y Cecilia Lamela de Martínez.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN Y DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAFAEL MORALES, EN REPRESENTACIÓN DE ROBINSON REYES, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, LE SIGUE A ROBINSON REYES, JUANA DE REYES Y ALEJANDRO REYES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado Rafael Morales, actuando en nombre y representación de **ROBINSON REYES**, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema excepción de prescripción y de inexistencia de la obligación, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que el **INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS (I.F.A.R.H.U.)**, le sigue a ROBINSON REYES, JUANA DE REYES Y ALEJANDRO REYES.

Mediante resolución de ocho de julio de 1996, se admite la excepción de prescripción y de inexistencia de la obligación interpuesta y se hizo traslado de la misma al Juez Ejecutor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y a la Procuradora de la Administración.

I. Argumentos del excepcionante:

El licenciado Morales fundamenta su solicitud señalando que el señor Reyes realizó estudios técnicos en industria animal y lechera en el Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" en Bogotá, Colombia. Agrega que el IFARHU le informó al señor Reyes que al estudiante con el índice académico más alto de los 25 panameños que tomaban el curso, se le condonaría la totalidad del préstamo. Manifiesta que se le informó que era el estudiante con el índice académico más alto y se designó a una funcionaria del IFARHU para retirar directamente los

créditos y comunicarle al IFARHU el paz y salvo de los estudiantes, por lo que no tenía acceso a sus créditos y a su historial académico, siendo esta funcionaria la que le informaba de sus créditos. Indica que cuando se graduó se presentó al IFARHU para solicitar la condonación de su préstamo, pero no se encontraron los registros o créditos para corroborar dicha solicitud. Señala que los créditos de Robinson Reyes y su certificado de terminación de estudios, fueron remitidos al IFARHU después del 8 de julio de 1983 y que por esto le era imposible verificar que había tenido la más alta promoción que le otorgaba la condonación de su deuda y además, que desde 1982 a 1993 estuvo ausente del país realizando estudios de odontología, por lo que solicita que se declare no exigible la obligación y, adicionalmente, prescrita por haber transcurrido más de 15 años desde su exigibilidad.

II. Postura del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

El apoderado especial del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos se opone a las pretensiones del recurrente y solicita a los Magistrados de la Sala Tercera que declaren no probada la excepción de prescripción de la obligación e inexistencia de la misma presentada por el recurrente, ya que el artículo 3 del Reglamento de Condonación del IFARHU señala los requisitos que se deben cumplir para obtener este beneficio, estableciendo en el numeral 2 que la presentación del memorial con la solicitud de condonación no puede exceder del plazo de 2 años contados a partir de la graduación del prestatario, sino se considerará extemporánea. Indica que la fecha de graduación del señor Reyes tiene fecha de 1° de junio de 1983 y que hasta la fecha no se ha presentado escrito alguno. Por otro lado, señala que Robinson Reyes efectuó pagos esporádicos a su obligación con el IFARHU hasta octubre de 1984, los cuales hacen constancia de la fecha en que comienza a computarse el plazo para que surta efecto la prescripción extintiva en favor del deudor principal y sus codeudores, por lo que en el mes de octubre de 1984 se realizan las gestiones de cobro por la vía administrativa, hasta que el 12 de junio de 1996, la parte deudora se notificó personalmente del auto por medio del cual de libra mandamiento de pago a favor del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recurso Humanos (I.F.R.H.U).

III. La Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

La Procuradora de la Administración contestó la excepción de prescripción propuesta por el licenciado Morales mediante la Vista N° 347 de 6 de agosto de 1996, en la que solicita a la Sala que se declare no probada la excepción de prescripción y de inexistencia de la obligación interpuesta. A juicio de la Procuradora de la Administración, el compromiso de pago existente entre el demandante y el I.F.R.H.U. no ha prescrito, pues no han transcurrido quince (15) años sin que mediara cobro, contados a partir del momento en que se hizo exigible la deuda, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley 1 de 11 de enero de 1965, reformada mediante la Ley 45 de 1978.

Manifiesta que el I.F.A.R.H.U. está en el derecho de hacer efectiva las obligaciones morosas y vencidas contraídas por el excepcionante, toda vez que los pagos que realizó el señor Reyes hasta octubre de 1984 interrumpió la prescripción. Esto es así, puesto que como el último abono fue en octubre de 1984 y el auto ejecutivo N° 349 de 30 de junio de 1996, no han transcurrido quince años para que opere la prescripción de la acción. Por otro lado, indica que no se encuentra en el expediente ejecutivo documento alguno que acredite que el Consejo Nacional del I.F.A.R.H.U condonó la totalidad o parte del préstamo otorgado al señor Robinson Reyes por sus buenas calificaciones.

IV. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámites que a ley corresponden, procede la Sala a resolver la presente controversia.

Los antecedentes del caso demuestran, sin lugar a dudas, que no le asiste la razón al excepcionante en esta oportunidad, no obstante vale efectuar algunas consideraciones.

El presente caso se inicia cuando el señor Robinson Reyes celebra el contrato de préstamo N° 13489 de 8 de marzo de 1976 con el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, por medio del cual se compromete a realizar estudios de Técnico Administrador en industria animal en el Servicio Nacional de Aprendizaje (S.E.N.A) La Sabana, Bogotá, Colombia y, a su vez, el I.F.A.R.H.U. se compromete a pagar la suma de cuarenta mil ciento treinta y dos balboas (B/.4,132.00), por el término de dos (2) años, constituyéndose como codeudores solidarios Juana de Reyes y Alejandro Reyes.

Consta de fojas 6 a 8 del expediente ejecutivo el contrato de préstamos N° 09660AP de 8 de noviembre de 1977 que reemplazaba al anterior y en el que se le concedió al señor Reyes una suma adicional de quinientos balboas (B/.500.00) a la suma otorgada anteriormente, por lo que el compromiso ascendió a cuatro mil seiscientos treinta y dos balboas (B/.4,632.00) a razón de dos años, contados a partir de la culminación de sus estudios técnicos.

Visible a fojas 9 y 10 del expediente ejecutivo se observa un pagaré y una letra de cambio sin números y sin fechas, firmados por el deudor principal, garantizando el pago de la obligación contraída el 8 de noviembre de 1977, por la suma de cuatro mil seiscientos treinta dos balboas (B/.4,632.00).

Igualmente se observa que el Departamento de Finanzas del Instituto para la formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos efectuó un control de los pagos (fs. 12 y 13 del expediente ejecutivo) que hacía el señor Robinson Reyes a su préstamo y que refleja que hacía abonos esporádicos, desde el mes de julio de 1980 hasta octubre de 1984, siendo éste el último abono.

Mediante el Auto N° 349 de 30 de junio de 1995 se libró mandamiento de pago ejecutivo en contra de Robinson Romeo Reyes Morales, Juana Morales de Reyes y Alejandro Reyes Lizondo hasta la concurrencia de ocho mil trescientos quince balboas con cinco centésimos (B/.8,315.05) en concepto de capital, intereses vencidos, seguro de vida, sin perjuicio de los nuevos intereses y gastos que se produzcan hasta la fecha de su cancelación total. Del auto que libra mandamiento de pago se notificó el señor ROBINSON REYES el 12 de junio de 1996. (fs. 67 y 68). Por medio del Auto N° 350 de 30 de junio de 1995 se decreta formal secuestro sobre todos los bienes muebles, inmuebles, dinero, créditos, cuentas por cobrar, valores, registros contables, prendas, joyas, bonos, dinero en efectivo y cualesquiera suma de dinero que tenga o deba recibir de terceras personas hasta la concurrencia provisional de ocho mil trescientos quince balboas con cinco centésimos (B/.8,315.05). Se observa que mediante el Auto N° 751 de 20 de noviembre de 1995 se decreta secuestro sobre el 15% del excedente del salario mínimo de Robinson Romeo Reyes Morales hasta la concurrencia provisional de ocho mil cuatrocientos cinco balboas con setenta y nueve centésimos (B/.8,405.79), más los intereses, seguros de vida y gastos que se produzcan hasta la cancelación total de la deuda.

Una vez efectuado el estudio del expediente concluye la Sala que, efectivamente, la excepción de prescripción interpuesta por el recurrente no ha sido probada, ya que el último abono que efectuó Robinson Reyes en reconocimiento de la deuda contraída con el I.F.A.R.H.U., fue en octubre de 1984, interrumpiendo la prescripción de 15 años que empezó a correr a partir de la fecha en que fue exigible el préstamo que se le otorgó el 8 de marzo de 1976, mediante el contrato de préstamo 13489. Desde esta fecha del último abono hasta el 12 de junio de 1996, fecha en que le fue notificado el auto que libró el mandamiento de pago, no han transcurridos los 15 años que establece el artículo 29 de la Ley No. 1 de 11 de enero de 1965, reformada mediante la ley No. 45 de 1978, como término para la prescripción de la acción, por lo que no procede declararla.

Por otra parte, la Sala observa que no consta documento alguno en el expediente ejecutivo que acredite que al señor Robinson Reyes se le condonó la totalidad o parte del préstamo que le fue otorgado, así como tampoco consta el memorial que debió presentar el señor Reyes ante el Consejo Nacional del I.F.A.R.H.U., solicitando la condonación del préstamo, tal como lo establece el numeral 2 del artículo 3 del Reglamento de Condonación que empezó a regir a partir de 1981.

En vista de lo anteriormente expuesto, la Sala llega a la conclusión de que no se ha producido la prescripción de la obligación ni la inexistencia de la misma alegadas por el licenciado Morales, por lo que procede declarar no probada la excepción.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso- Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADA la excepción de prescripción y de inexistencia de la obligación interpuesta por el licenciado Rafael Morales, en representación de ROBINSON REYES dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, le sigue a ROBINSON REYES, JUANA DE REYES Y ALEJANDRO REYES.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. ANA LORENA BRENES, EN REPRESENTACIÓN DE ANDRÉS MUÑOZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ LE SIGUE. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Ana Lorena Brenes, actuando en nombre y representación de **ANDRÉS MUÑOZ**, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el **Municipio de Panamá** le sigue.

Se trata de un proceso ejecutivo por cobro coactivo en el cual el Municipio de Panamá, persigue cobrar a Andrés Muñoz, la suma de VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS BALBOAS CON CUARENTA Y CINCO CENTÉSIMOS (B/.20,772.45) en concepto de impuestos y de recargos, razón por la que se libró mandamiento de pago ejecutivo el 11 de abril de 1996, para el cual se utilizó como recaudo ejecutivo el estado de cuenta correspondiente desde el mes de noviembre de 1987 hasta el mes de febrero de 1996, el cual es visible de foja 1 a 3 del expediente contentivo del proceso ejecutivo. El señor Andrés Muñoz fue notificado del auto de mandamiento de pago, mediante diligencia de notificación el 9 de mayo de 1996.

Mediante resolución de cuatro (4) de junio de 1996, se admite la excepción de prescripción y se hizo traslado de la misma al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá.

I. Argumentos del excepcionante:

La licenciada Brenes fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

> "PRIMERO: Según el estado de cuenta que acompañamos dentro del proceso por Cobro Coactivo, objeto de esta excepción de prescripción desde el 30 de noviembre de 1987 al 30 de abril de 1996, donde la tesorería municipal del Distrito de Panamá curso (sic) en impuesto municipales recargos e intereses la suma de VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS BALBOAS CON TREINTA CENTAVOS (B/.21,216.30), dentro de las rentas números 11250601 y 11253002.
>
> SEGUNDO: El artículo 96 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, declara prescritas las obligaciones que emanan de los impuestos municipales a los 5 años de haberse cursado. En el caso que nos ocupa, el juez ejecutor del Municipio de Panamá, no le queda acción

legal para promover el cobro de los tributos, recargos e intereses que no haya gestionado oportunamente dentro del término que consagra el artículo 96 de la Ley antes mencionada.

TERCERO: En todo este transcurso del tiempo, el Juzgado Ejecutor del Municipio del distrito de Panamá no hizo gestiones de cobro de dichos impuestos morosos, como tampoco mi representado hizo arreglo alguno con dicha municipalidad con respecto a los mismos.

Tal y como lo prevee (sic) el artículo 738 del Código Fiscal (norma supletoria en materia de impuestos municipales).

Por lo tanto, a mi mandante le asiste el derecho que se le declare prescritos estos impuestos municipales recargos e intereses que hemos mencionados, toda vez que el Juez Ejecutor del Municipio de Panamá le ha prescrito todo derecho para gestionar su cobro coactivo por el simple transcurso del tiempo.

SOLICITUD:
Honorables Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, por todo lo anteriormente expuesto, actuando en mi condición de apoderado judicial del señor ANDRÉS MUÑOZ, por este medio y con nuestro acostumbrado respeto comparecemos ante ustedes a fin de solicitarle se sirvan declarar probada la excepción de PRESCRIPCIÓN INCOADA dentro del Proceso por Cobro Coactivo que promueve el señor Juez Ejecutor del Municipio de Panamá. En consecuencia sírvase declarar prescrita la obligación de mi representado de pagar los impuestos municipales, recargos e intereses cursados a partir del 30 de noviembre de 1987, hasta el 30 de abril de 1996, dentro de las rentas Números 11250601 y 11253002, según el estado de cuenta de fecha 10 de mayo de 1996, con contribuyente número 01 1975 1575, expedido por el Municipio del Distrito de Panamá y de conformidad a lo que dispone el artículo 96 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973". (Fs. 9-11).

Cabe señalar que la licenciada Ana Lorena Brenes desistió del poder que le fuera otorgado en el presente proceso, por lo que el señor Andrés Muñoz le otorgó poder especial a la licenciada Jenny C. Pinilla R., quien fue admitida como apoderada para actuar en el presente proceso.

La licenciada Pinilla alega lo siguiente:

"El Juez Ejecutor del Municipio del Distrito de Panamá en ejercicio de la facultad de cobro coactivo que le confiere la ley, y mediante auto de 11 de abril de 1996 procedió a librar mandamiento de pago contra ANDRÉS MUÑOZ por la suma de VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS BALBOAS CON TREINTA CENTÉSIMOS (B/.21.216.30) en concepto de impuestos Municipales morosos, recargos e intereses, causados desde el 30 de noviembre de 1987 al 30 de abril de 1996, según el estado de cuentas de fecha 10 de mayo de 1996, con el número de contribuyente 01 1975 1575, expedido por el Municipio del Distrito capital

Del mandamiento de pago en mención, se notificó al señor ANDRÉS MUÑOZ el día 9 de mayo de 1996. En virtud de esta medida interpusimos Excepción de Prescripción fundamentados en el beneficio que mi Poderdante tiene en el artículo 96 de la ley número 106 de 8 de octubre de 19773, en el artículo 1668 (sic) Código Civil. Además, el Negocio o establecimiento Comercial Bodega Milagrosa, cuyo gravamen origina este proceso, inició sus operaciones en mayo de 1975 y dejó de operar desde 1977 a la fecha, es decir, que ha estado cerrado este negocio por casi veinte años; en todo este transcurso de tiempo el Juzgado Ejecutor del Municipio de Distrito de Panamá no hizo gestiones de cobro de dichos supuestos impuestos morosos, como tampoco mi representado hizo arreglo alguno con dicha Municipalidad

con respecto a los mismos.

Así mismo (sic) podemos observar que dicho estado de cuentas de fecha 10 de mayo de 1996 que mencionamos aquí, corre desde el 30 de noviembre de 1987, donde se ve claramente que los años de 1977 a 1987, fueron prescritos por dicha municipalidad, porque no consta que mi representado haya pagado los mismos.

ALEGAMOS RELACIONADO A LA CONTESTACIÓN DEL MUNICIPIO

Honorables Magistrados, el Juez Ejecutor del Municipio del Distrito de Panamá, al contestar la excepción de prescripción que nos viene ocupando, el hecho primero lo acepta; el hecho segundo también lo acepta en cuanto al artículo 96 de la Ley 106 de 1973, esto nos indica que esta Municipalidad está consciente que a nuestro representado le asiste el derecho de que se le prescriban estos impuestos morosos, recargos e intereses y cuando dice que al Juez Ejecutor la ley lo faculta para instaurar procesos por cobros coactivos, pero en este caso, la pregunta es, porqué no lo realizó por casi veinte años, porqué no ordenó el cierre de dicho negocio por morosidad, porqué no interpuso otra acción contra nuestro representado. Esto nos da claras luces que esta Corporación sabía que el Negocio Bodega Milagrosa no existía físicamente.

Vemos que el hecho tercero también lo acepta, lo cual confirmamos una vez más que el Juez Ejecutor no hizo gestiones de cobro de dichos supuestos impuestos morosos durante el período de casi 20 años. Además indica que sí le corresponde la prescripción de los meses morosos de marzo de 1991 hacia atrás, entonces, esta contradicción, a lo que claramente nos indica el artículo 96 de la ley 106 de 8 de octubre de 1973, que nos dice que cada 5 años de haberse causado las obligaciones resultantes de los impuestos municipales estos prescriben". (Fs.27-29).

II. Postura del Juez Ejecutor del Municipio de Panamá.

La apoderada especial del Juez Ejecutor del Municipio de Panamá solicita a los magistrados de la Sala Tercera que no acceda en su totalidad a lo solicitado por la parte excepcionante sino que sólo en lo respectivo a los impuestos municipales que van desde marzo de 1991 hacia atrás. Indica que lo anterior es así, pues es cierto que el Juez Ejecutor no hizo gestiones de cobro de los impuestos morosos ni el contribuyente realizó arreglo de pago, pero que al dictarse el auto de mandamiento de pago se interrumpió la prescripción, es decir, que sólo están prescritos los impuestos correspondientes al mes de marzo de 1991 hacia atrás.

III. La Vista Fiscal de la Procuradora de la Administración.

La Procuradora de la Administración contestó la excepción de prescripción propuesta por la apoderada del excepcionante mediante la Vista N° 279 de 26 de junio de 1996, en la que solicita a la Sala que se declare parcialmente probada la excepción de prescripción interpuesta. A juicio de la Procuradora de la Administración, como el auto que libra mandamiento de pago se emitió el 11 de abril de 1996, el Municipio sólo puede reclamar al contribuyente los impuestos municipales y recargos causados desde el 11 de abril de 1991 hasta el presente, tal como lo prevé el artículo 96 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973. Además, señala que los impuestos que corresponden a los años 1987, 1988, 1989, 1990 y hasta el 10 de abril de 1991, se encuentran prescritos, puesto que han transcurrido más de cinco años desde que se causó el impuesto hasta la fecha en que se expidió el auto de mandamiento de pago. Finalmente, manifiesta que el monto real o saldo que debe cancelar el señor Muñoz, debe ser determinado por las autoridades competentes del Municipio, teniendo como base los registros o archivos los registros o archivos que custodian y que contienen la información necesaria para levantar el estado de cuenta del contribuyente, de conformidad con los impuestos adeudados e intereses y recargos que correspondan.

IV. Decisión de la Sala.

Evacuados los trámite que a ley corresponden la Sala procede a resolver la presente controversia.

Una vez efectuado el estudio del expediente, la Sala coincide con el criterio de la Procuradora de la Administración, toda vez que la presente excepción de prescripción, ha sido parcialmente probada de acuerdo a lo que previsto en el artículo 96 de la Ley 106 de 1973, "Sobre Régimen Municipal", que establece un término de prescripción de las obligaciones resultantes de los impuestos municipales de cinco años contados desde la fecha en que se han causado.

De las constancias procesales allegadas al proceso se infiere que desde noviembre de 1987 hasta la fecha en que el excepcionante se notifica del auto que libra mandamiento de pago, el 11 de abril de 1996, ha transcurrido más del término previsto en la disposición en referencia. En razón de ello, lo procedente es declarar prescritos los impuestos municipales correspondientes al término que excede a los años requeridos para el cobro de los mismos, es decir, desde noviembre de 1987 hasta abril de 1991.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PROBADA, la excepción de prescripción sólo en cuanto a los impuestos municipales comprendidos entre los meses de noviembre de 1987 hasta abril de 1991.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA PAN CARIBE, S. A. Y ÁLVARO CABAL, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LES SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José Luis Herrera, actuando en nombre y representación de **CONSTRUCTORA PAN CARIBE, S. A y ÁLVARO CABAL,** ha promovido incidente de nulidad dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que les sigue el **Banco Nacional de Panamá**, para que se declare la nulidad de lo actuado en el proceso a partir de la foja 90 y siguientes.

Funda su pretensión en que el aviso de remate confeccionado por el Banco, para anunciar la venta en pública subasta el día 25 de mayo de 1998 de la finca 31,537, inscrita al rollo 12,842, documento 7 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Chiriquí, propiedad del señor Álvaro Cabal, contiene una serie de errores y le faltan algunos requisitos exigidos por ley.

Observa la Sala que en la cláusula vigésima primera del contrato de préstamo con garantía de hipoteca sobre bienes muebles, obligación objeto de este proceso ejecutivo por cobro coactivo, contenida en la Escritura Pública N° 79 de 5 de enero de 1968 (fs. 8 a 14 del expediente ejecutivo), los ejecutados renunciaron a los trámites de juicio ejecutivo y al domicilio, por lo que, conforme lo estipula el artículo 1768 del Código Judicial, en los procesos ejecutivos hipotecarios con renuncia de trámites no procede la interposición de incidentes, ni excepciones excepto las de pago y prescripción, y así lo ha

expresado la Sala reiteradamente en múltiples resoluciones.

De conformidad con el artículo 1772 del Código Judicial, los derechos que tengan los ejecutados o el tercero propietario con título inscrito contra el acreedor por causa de la venta sin trámite de proceso ejecutivo, los harán valer mediante proceso sumario.

Además, los errores en el aviso de remate que invoca el incidentista, ya han sido subsanados, tal como se aprecia a foja 103 del expediente que contiene el proceso ejecutivo por cobro coactivo, el auto fechado 11 de mayo de 1998, emitido por el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, mediante el cual ordena la corrección de la resolución de 7 de abril de 1998 (fs. 89), por la cual se fijó el 25 de mayo de 1998 para llevar a cabo el remate en mención, y fija la nueva fecha de remate de la finca embargada el 23 de julio de 1998, en consecuencia, ordena también la confección de los avisos de remate correspondientes.

Por las razones expuestas, la Sala considera que el incidente de nulidad interpuesto el licenciado José Luis Herrera debe rechazarse de plano, sin más trámite, con fundamento en el artículo 697 del Código Judicial.

Por consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de nulidad interpuesto por el licenciado José Luis Herrera, en representación de CONSTRUCTORA PAN CARIBE, S. A y ÁLVARO CABAL, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que les sigue el Banco Nacional de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA EN REPRESENTACIÓN DE CAMILO OLMEDO, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE FEBRERO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JORGE DENIS -VS- CAMILO OLMEDO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, ONCE (11) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de **Camilo Olmedo**, interpuso recurso de casación laboral contra la Sentencia de 27 de febrero de 1998, dictada por el **Tribunal Superior de Trabajo** para resolver la solicitud de levantamiento del secuestro decretado en el proceso laboral incoado por JORGE DENIS contra INSTITUTO DE MARINA MERCANTE OCUPACIONAL DE PANAMÁ OESTE, S. A. y/o INSTITUTO DE MARINA MERCANTE OCUPACIONAL DE PANAMÁ, S. A. y/o CAMILO OLMEDO.

En el referido proceso la Junta de Conciliación y Decisión N° 7 dictó el Auto PJ-7 de 24 de abril de 1996, en el que rescindió el depósito judicial practicado en la acción de secuestro decretada mediante Auto PJ-7 de 27 de febrero de 1997, porque sobre los bienes secuestrados pesa embargo, inventario, avalúo, depósito y administración decretada por el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Auto N° 1483 de 26 de julio de 1996, dentro del proceso ejecutivo promovido por Ana Mercedes Moreno contra el Instituto de Marina Mercante Ocupacional de Panamá, S. A. y el

Instituto de Marina Mercante Ocupacional de Panamá Oeste, S. A. (fs. 64 a 66 del expediente del proceso laboral).

El citado Auto N° PJ-7 de 24 de abril de 1996 fue apelado por el representante del trabajador y el Tribunal Superior de Trabajo, al resolver el recurso lo revocó y ordenó que se mantuviera el secuestro decretado.

Antes de resolver el presente recurso de casación laboral, la Sala observa que el mismo tiene errores que lo hacen inadmisible, por las razones que a continuación se explican.

En primer lugar, según el artículo 925 del Código de Trabajo, son susceptibles del recurso de casación laboral las sentencias o autos dictados por el Tribunal Superior de Trabajo que ponen fin al proceso o imposibilitan su continuación, y en el caso subjúdice el auto dictado por el Tribunal Superior de Trabajo el 27 de febrero de 1998, no pone fin al proceso, sino que resuelve una cuestión incidental de levantamiento de secuestro dentro de un proceso seguido ante una Junta de Conciliación y Decisión. Esta Sala también ha expresado que no son admisibles los recursos de casación laboral, cuando la resolución del Tribunal Superior que se pretende casar, fue expedida para resolver recurso de apelación interpuesto contra decisiones de las Juntas de Conciliación y Decisión.

Cabe resaltar que el casacionista se limita a citar como violadas normas procedimentales y no cita ni explica qué norma laboral que consagre derechos subjetivos fue violada por la resolución recurrida, dictada el 27 de febrero de 1998, tal como lo exige el numeral 3 del artículo 926 del Código de Trabajo, según el cual el recurso de casación laboral deberá contener la cita de las disposiciones infringidas, con expresión del concepto en que lo han sido.

Como la resolución recurrida en casación no es de aquellas contra las cuales la ley permite promover este recurso, debe rechazarse de plano como lo preceptúa el artículo 928 del Código Laboral.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera-Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el Recurso de Casación Laboral interpuesto por el licenciado Carlos Ayala, en representación de CAMILO OLMEDO, contra la Resolución dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Primer Distrito Judicial el 27 de febrero de 1998, dentro del proceso laboral promovido por JORGE DENIS contra INSTITUTO DE MARINA MERCANTE OCUPACIONAL DE PANAMÁ OESTE, S. A. y/o INSTITUTO DE MARINA MERCANTE OCUPACIONAL DE PANAMÁ, S. A. y/o CAMILO OLMEDO.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JULIO ANTONIO CANDANEDO EN REPRESENTACIÓN DE PANADERÍA HERMANOS ORTEGA, CONTRA LA SENTENCIA DE 10 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ARCENIO ORTEGA RÍOS -VS- PANADERÍA HERMANOS ORTEGA Y MANUEL DIMAS ORTEGA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Julio Antonio Candanedo, actuando en nombre y representación de **PANADERÍA HERMANOS ORTEGA**, ha interpuesto recurso de casación laboral contra la sentencia dictada el 10 de marzo de 1998, por el Tribunal Superior de Trabajo

del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral incoado por **ARCENIO ORTEGA RÍOS** contra PANADERÍA HERMANOS ORTEGA y MANUEL DIMAS ORTEGA.

La sentencia de segunda instancia confirmó la Sentencia N° 8 de 5 de septiembre de 1997, dictada por el Juzgado Tercero Seccional de Trabajo, de la Tercera Sección, mediante la cual se condenó a la Panadería Hermanos Ortega a pagar a Arcenio Ortega Ríos la suma de seis mil trescientos treinta balboas con treintisiete centavos (B/.6,330.37).

Señala la casacionista que la sentencia de segunda instancia viola los artículos 732, 752 y 755 del Código Laboral.

Los artículos 732, 752 y 755 contienen normas jurídicas de carácter procesal relativas a la sana crítica y documentos públicos. La Sala ha dicho en reiteradas ocasiones que el recurso de casación laboral es un medio de impugnación extraordinario para corregir errores "in iudicando", y no errores "in procedeno", por lo cual dichas normas procedimentales sólo pueden invocarse en relación con normas sustantivas que consagren derechos a favor del recurrente.

En el presente caso el apoderado judicial de la casacionista no invoca como vulnerada por la Sentencia de 10 de marzo de 1998, ninguna norma sustantiva que consagre derechos a favor de su representado.

El defecto del presente recurso de casación laboral antes señalado imposibilita a esta Sala para conocer del mismo y por tanto, no debe ser admitido según lo establece el artículo 928 del Código de Trabajo.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley RECHAZA DE PLANO el recurso de casación laboral promovido por el licenciado Julio Antonio Candanedo en nombre y representación de PANADERÍA HERMANOS ORTEGA contra la Sentencia de 10 de marzo de 1998, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral instaurado por ARCENIO ORTEGA RÍOS contra PANADERÍA HERMANOS ORTEGA.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO SANTANA GONZÁLEZ ATENCIO EN REPRESENTACIÓN DE SANTA LIBRADA, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 3 DE ABRIL DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DENTRO DEL PROCESO LABORAL: IRMA YADIRA RÍOS -VS- SANTA LIBRADA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Santana González Atencio en nombre y representación de SANTA LIBRADA, S. A., ha interpuesto recurso de casación laboral contra la Sentencia de 3 de abril de 1998, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial dentro del Proceso Laboral: **IRMA YADIRA RÍOS -vs- SANTA LIBRADA, S. A.**

La Sala advierte de inmediato, que el recurso presentado carece de requisitos indispensable que no permiten su admisión. Efectivamente, el recurrente no ha cumplido con lo ordenado por el artículo 925 del Código de Trabajo que dice:

> "Artículo 925. El recurso de casación puede interponerse contra las sentencias y los autos que pongan fin al proceso o imposibiliten su continuación, dictados por los Tribunales Superiores de Trabajo en cualquiera de los siguientes casos:
>
> 1. Cuando hubieren sido pronunciados en conflictos individuales o colectivos con una cuantía mayor de mil balboas;
>
> 2. Cuando se relacionen con la violación del fuero sindical, gravidez, riesgo profesional o declaratoria de imputabilidad de la huelga, con independencia de la cuantía;
>
> 3. Cuando se decrete la disolución de una organización social".

Efectivamente, el recurso bajo estudio, trata de una reclamación de pago de viáticos y habitación, pero la parte trabajadora no cuantificó los mismos. Al no exitir cuantía, mal podría este Tribunal admitir el recurso, en virtud de que como lo señala el numeral primero arriba reproducido, sólo procede el recurso contra las Resoluciones que pongan fin al proceso y cuya cuantía asciende a B/.1000.00.

En lo que respecta a los otros numerales del artículo 925 Ibídem, la reclamación impetrada por la empresa SANTA LIBRADA, S. A., no se encuadra en ninguno de ellos.

Obsérvese que el casacionista al describir la clase de proceso dice:

> "Se trata de un Proceso Común de Trabajo donde se pide que se declare la existencia de un derecho a favor de la trabajadora IRMA YADIRA RIOS".

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera, Laboral, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el Recurso de Casación Laboral propuesto por el licenciado Santana González Atencio en nombre y representación de SANTA LIBRADA, S. A., dentro del Proceso Laboral: IRMA YADIRA RÍOS -vs- SANTA LIBRADA, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS BONILLA G., EN REPRESENTACIÓN DE AGUSTÍN GARCÍA, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE MARZO DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: AGUSTÍN GARCÍA -VS- RIDEL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Carlos Bonilla, en nombre y representación de AGUSTÍN GARCÍA, ha presentado recurso de Casación Laboral en contra de la Sentencia de 27 de marzo de 1998, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso Laboral: **AGUSTÍN GARCÍA -vs- RIDEL, S. A.**

La Sala advierte de inmediato, que el recurso presentado carece de requisitos indispensable que no permiten su admisión. Efectivamente, el recurrente no ha cumplido con lo ordenado por el artículo 927, párrafo primero

del Código de Trabajo, cuyo tenor literal reproducimos a continuación:

> "El recurso de casación debe interponerse directamente ante la Corte de Casación Laboral dentro de los cinco días siguientes al en que fue notificada la resolución del Tribunal Superior de Trabajo ..."

Evidentemente el casacionista interpuso el presente recurso fuera del término establecido en la norma precitada, toda vez que el Tribunal Superior de Trabajo desfijó el Edicto N° 316 el día quince (15) de abril de los corrientes, en el cual se notificaba a las partes la decisión proferida por dicha Corporación Judicial (cfr. foja 166 del expediente contentivo del Proceso Laboral), lo que implica que el recurrente tenía un plazo fatal hasta el día veintidós (22) de abril del año que decurre para incoar el recurso de Casación Laboral ante esta Superioridad.

Sin embargo, a foja 5 del expediente contentivo del recurso de Casación Laboral, puede observarse que el interesado presentó dicho medio de impugnación ante este Tribunal Colegiado, el día veintitrés (23) de abril de 1998, por lo que a todas luces, éste resulta extemporáneo.

Debe por tanto, en consideración a lo anterior, negarse curso legal al recurso interpuesto por el licenciado Bonilla.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera (CASACIÓN LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Recurso de Casación Laboral interpuesto por el licenciado Carlos Bonilla, en nombre y representación de AGUSTÍN GARCÍA, dentro del Proceso Laboral AGUSTÍN GARCÍA -vs- RIDEL, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA EN REPRESENTACIÓN DE PATRICK M. DE VANDEUL, CONTRA LA SENTENCIA DE 20 DE ABRIL DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: PATRICK M. DE VANDEUL -VS- BANCO CONFEDERADO DE AMÉRICA LATINA, S. A. (COLABANCO). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado José De Jesús Góndola, en nombre y representación de PATRICK DE VANDEUL ha interpuesto recurso de Casación Laboral contra el Auto de 20 de abril de 1998, dictado por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral: **PATRICK M. DE VANDEUL -vs- BANCO CONFEDERADO DE AMÉRICA LATINA, S. A., (COLABANCO).**

En este estado del proceso, la Sala procede a examinar el recurso para determinar si el mismo cumple con los requisitos mínimos que permitan su admisión.

La Sala debe señalar que el recurso no puede ser admitido, por varias razones: en primer lugar la resolución del Tribunal Superior de Trabajo que se pretende casar, fue expedida en razón de un recurso de apelación interpuesto contra un Auto de Ejecución de Sentencia dictado por el Juez Segundo de Trabajo de la Primera Sección.

Ya nuestra Sala se ha manifestado en el tema mediante sentencia de 9 de diciembre de 1981 en el caso Sitraprodec -vs- Piedras Picadas:

> "En el presente caso se observa que se trata de un acto dictado por el Tribunal dentro de un proceso de ejecución de sentencia, etapa procesal en las que el artículo 898 del Código de Trabajo, sólo autoriza el recurso de apelación en contra de las resoluciones que en ella se dicten, excluyendo por ello el recurso de casación.
>
> Siendo lo anterior así, la resolución recurrida no es susceptible del recurso de casación propuesto".

También en sentencia de 27 de junio de 1977 en el proceso Bonilla -vs- Emkay, S. A., y 29 de noviembre 1991 Ramiro Olmos Santamaría y otros -vs- Panamá Air Marine Safety and Supply Inc. (PAMAR).

Por último, este proceso de trabajo fue iniciado en las Juntas de Conciliación y Decisión N° 3, el cual, de acuerdo al artículo 8 de la Ley 1 de 1986, sólo admitiría recurso de apelación.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados de la Sala Tercera (CASACIÓN LABORAL), de la Corte Suprema, administrando justicia, en nombre de la República por autoridad de la ley, NO ADMITE el Recurso de Casación interpuesto por el licenciado José De Jesús Góndola dentro del proceso PATRICK M. DE VANDEUL -vs- BANCO CONFEDERADO DE AMÉRICA LATINA, S. A. (COLABANCO).

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR LA FIRMA TRUJILLO, VIDAL Y MIRANDA, EN REPRESENTACIÓN DE CERVECERÍA CHIRICANA, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 23 DE DICIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CERVECERÍA CHIRICANA, S. A. -VS- CERVECERÍA CHIRICANA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Trujillo, Vidal y Miranda, en nombre y representación de CERVECERÍA CHIRICANA, S. A., ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial el 23 de diciembre de 1997, dentro del proceso laboral incoado por el **SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CERVECERÍA CHIRICANA, S. A. contra CERVECERÍA CHIRICANA, S. A.**

En la Sentencia de 23 de diciembre de 1997, el Tribunal Superior de Trabajo revocó la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Trabajo de la Tercera Sección el 2 de diciembre de 1996, dentro del proceso laboral arriba enunciado, y condenó a la Cervecería Chiricana, S. A. al pago del incremento salarial que resulta de la prórroga de la Convención Colectiva suscrita con el Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Chiricana, S. A. hasta el 11 de octubre de 1994, según lo resuelto por la Dirección Regional de Trabajo de Chiriquí el 8 de febrero de 1994, confirmada por la Resolución N° D. M. 36/94 de 29 de abril de 1994 dictada por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

Por su parte, la sentencia de primera instancia absolvió a la Cervecería Chiricana, S. A. de las pretensiones incoadas en su contra por el Sindicato de

Trabajadores de la Cervecería Chiricana, S. A. Estas pretensiones incluían el pago de B/.74,211.43 en concepto de incremento salarial dejado de pagar en los años 1993, 1994 y 1995 en adelante y sus ajustes en vacaciones, décimo tercer mes, horas extras laboradas para los mismos años, así como también el incremento de los salarios como lo ordenó la Resolución N° 34 de 8 de febrero de 1994, y el pago de los intereses, recargos, costas y gastos del juicio.

La apoderada de la empresa consideró que la sentencia recurrida violó, en forma directa, por comisión, el artículo 1° de la Ley N° 13 de 1990, y el artículo 1° de la Ley 53 de 1975. Estas normas consagran literalmente lo siguiente:

> "Artículo 1° (Ley 13 de 1990). Todas las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes quedan prorrogadas por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de la respectiva expiración en el caso de que venzan en 1991 y 1992 o desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. Quedan asímismo prorrogadas por un (1) año las Convenciones Colectivas de Trabajo que venzan en 1993.
>
> Los aumentos salariales pactados se aplicarán en base al promedio anual de los mismos, en cada año de la prórroga. Se reconocen asímismo los acuerdos temporales pactados por las partes, dentro de las Convenciones Colectivas.
>
> No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las partes podrán acordar la celebración por vía directa de una nueva contratación colectiva".
>
> "Artículo 1° (Ley 53 de 1975). El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social tendrá competencia privativa para conocer y decidir los siguientes asuntos:
>
> 1. Demandas por incumplimiento del artículo 215 del Código de Trabajo;
>
> 2. Demandas para determinar el salario mínimo legal o convencional aplicable, con o sin el reclamo de la diferencia adeudada, si la hubiere, independientemente de la cuantía;
>
> 3. Demandas relativas a la interpretación en derecho o a la validez de las cláusulas pactadas en una Convención Colectiva u otro pacto o acuerdo de naturaleza colectiva;
>
> 4. Demandas sobre la aplicación del artículo 240 del Código de Trabajo, para determinar si existe alteración unilateral de la zona o ruta asignada al trabajador y en los casos de autorización para el rediseño de zonas o rutas o inclusión en las mismas de nuevos trabajadores por razones económicas, cuando no existiere acuerdo entre las partes.
>
> 5. Las impugnaciones a que se refiere el artículo 394 del Código de Trabajo, a prevención con los tribunales de trabajo".

La juez de primera instancia, al resolver la solicitud de la demandante, señaló que entre las pruebas aportadas por la demandada se lee a fojas 295 y 296 informe del perito grafotécnico del examen que hizo a la Resolución N° 34 de 8 de febrero de 1994, específicamente al artículo 3°, en donde observó un cambio, mediante borrón con líquido corrector, en la fecha "11 de octubre de 1992", y pudo determinar que en el año 1992, se sobrepuso un número dos (2), en el lugar donde se había escrito en primera instancia el número cero (0).

Luego del análisis anterior, la juez a quo fundamentó su decisión de la siguiente forma:

> "En conclusión tenemos que su reclamación la basa el demandante en la Resolución N° 34 de 8 de febrero de 1994, emitida por la

> Dirección Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí, la cual ha sido desvirtuada conforme a dictámen pericial como se ha acreditado anteriormente; y en que los trabajadores de la empresa estaban amparados en el Convenio Colectivo suscrito por la Organización Sindical con la Cervecería Chiricana, S. A., el 7 de marzo de 1985 quedando vencido el mismo día 1° de enero de 1989. La prórroga de la Convención Colectiva por dos (2) años, en virtud de la Ley 13 de 11 de octubre de 1990, y a partir del 16 de octubre, vencieron el 15 de octubre de 1992". (Fs. 550 a 551 del Tomo III del expediente del proceso laboral).

El Tribunal Superior de Trabajo, al resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante consideró que sí procedía la condena a la Cervecería Chiricana, S. A. y sustentó esta decisión así:

> "Por otro lado el representante legal de la empresa tuvo tiempo de advertir ante el Ministro de Trabajo el error que dice se dió en la parte resolutiva de la Resolución de 8 de febrero de 1994 sobre la fecha en que comienza a contarse la prórroga de la Convención Colectiva, pero no lo hizo oportunamente siendo confirmada la resolución totalmente.
>
> Se trata de una resolución ejecutoriada dictada por autoridad competente que debe surtir sus efectos jurídicos mientras no haya sido anulada por una resolución de otra autoridad competente en un proceso de nulidad por tanto debe ordenarse que se cumpla la resolución.
>
> Consideramos que si se reconoce en dicha resolución una prórroga de dos años contados desde el 11 de octubre de 1992, dicha prórroga vencerá al cabo de dos años calendarios, que sería el 11 de octubre de 1994. Por tanto el pago del ajuste salarial que por virtud de dicha prórroga se invoca sólo abarca hasta el 11 de octubre de 1994, lo mismo que el aumento resultante de promediar los salarios pactados en 1985 para determinar el incremento promedio durante los años de prórroga, ya que se enfatiza que el incremento es durante los años de prórroga. Por tanto no debe concederse el incremento más allá del límite fijado en la resolución que es hasta el 11 de octubre de 1994.
>
> Por lo que corresponde revocar la sentencia y conceder las pretensiones reclamadas hasta el límite señalado en la resolución N° 34 de 8 de febrero de 1994, que sería hasta el 11 de octubre de 1994". (Fs. 576 a 577 del Tomo III del expediente del proceso laboral).

Al explicar la violación del artículo 1° de la Ley N° 13 de 1990, la casacionista señala que el 10 de abril de 1991 el Sindicato y la Empresa acordaron ante el Ministerio de Trabajo que no estaba obligada a aumentar salarios en 1989, que en 1990 entregaría una bonificación de B/.200.00 a cada trabajador, a partir del 1° de enero de 1991 aumentaría B/.0.135 por hora, y en 1992 aumentaría B/.0.65 por hora; y para 1993 se dejó el tema de los incrementos salariales hasta tanto se negociara una nueva Convención Colectiva.

Indicó que el Tribunal Superior aplicó el artículo 1 de la Ley 13 de 1990 desconociendo su contenido, ya que dió más valor a la Resolución dictada por la Dirección Provincial a pesar que contraría esta norma, aún cuando quedó demostrada la alteración fraudulenta de la Resolución, que la propia dirección calificó como error mecanográfico, según la cual es aplicable la prórroga de dos años a la Convención Colectiva que regía al entrar en vigencia la Ley 13 de 18 de octubre de 1990, comenzando a contarse dicha prórroga desde el 11 de octubre de 1992, lo que desconoce lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 13 de 1990, porque la prórroga se inicia a partir de su vigencia, tal como expresamente lo señala.

A juicio de la recurrente la sentencia de segunda instancia violó el

artículo 1° de la Ley 53 de 1975, porque la competencia para conocer de la pretensión del demandante es de los Tribunales ordinarios y la interpretación en derecho o validez de las cláusulas corresponde al Ministerio de Trabajo, por ello considera el apoderado de la empresa que cualquier exceso en esta facultad debe ser desatendido por los Tribunales competentes, y como la ley dispone que la prórroga de la Convención será por dos años a partir de su vigencia, el Tribunal Superior de Trabajo debió desestimar la parte de la Resolución N° 34 de 1994 que es contraria a la ley, en virtud que a los funcionarios del Ministerio de Trabajo no les corresponde decidir desde cuándo se prórroga la Convención, ya que en este caso la prórroga se da por ministerio de la ley y no es necesaria la interpretación en derecho de ninguna cláusula.

En escrito presentado ante la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el 21 de enero de 1998, el apoderado judicial del Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Chiricana, S. A., se opuso a las pretensiones de la casacionista fundamentandose en el siguiente razonamiento:

> "... la Convención Colectiva suscrita entre la CERVECERIA CHIRICANA, S. A., y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CERVECERIA CHIRICANA, S. A., el día 7 de marzo de 1985, tuvo la virtud de indicar que dicha convención colectiva, (sic) retroactivamente, entrada en vigencia por cuatro (4) años contados a partir del 1 de enero de 1985, venciendo su término, en consecuencia, el 31 de diciembre de 1988.
>
> La misma continuó rigiendo hasta que las partes, previa negociación, celebraron el acuerdo, con carácter colectivo y registrado en la Dirección Regional de Trabajo el 10 de abril de 1991, en el cual hacen retroactiva la vigencia de la Convención Colectiva a partir del 1 de enero de 1989; y, se dice que para ese año no hay aumento; que para el cuarto año de vigencia de la Convención Colectiva el cual corresponde al año 1992, que vence el 31 de diciembre de 1992, se dan (sic) aumento de seis centésimos y medio (B/.0.65).
>
> El acuerdo extendido desde el 1 de enero de 1989 al 31 de diciembre de 1992 la Convención Colectiva de 1985, previa modificación y acuerdo negociado de los aumentos salariales a aplicar durante esos cuatro años.
>
> La ley 13 de 1990, no podría aplicarse a una Convención Colectiva que venció el 31 de diciembre de 1989. Posteriormente en el período 1 de enero de 1989 a 31 de diciembre de 1992, no puede ser aplicada jurídicamente dicha ley por cuanto que las partes celebraron un acuerdo colectivo de extensión de la convención colectiva, con efecto retroactivo, de cuatro (4) años, previa negociación de los incrementos salariales por dicho período.
>
> En consecuencia, al vencerse la convención colectiva el 31 de diciembre de 1992, le es aplicable la prórroga establecida en la Ley 13 de 1990, para las convenciones colectivas que venzan en 1992". (Fs. 11 y 12).

Tal como se desprende del escrito de casación presentado por la apoderada judicial de la empresa Cervecería Chiricana, S. A., el argumento principal del presente recurso consiste en que la sentencia impugnada fundamenta su decisión en la Resolución N° 34 de 8 de febrero de 1994, dictada por Director Regional de Trabajo de la Provincia de Chiriquí y confirmada por el señor Ministro de Trabajo y Bienestar Social mediante la Resolución N° D. M. 36/94 de 29 de abril de 1994, que a juicio de la casacionista está alterada en el año desde el cual debe comenzar a contarse la prórroga de dos años de la Convención Colectiva.

En la referida Resolución de 8 de febrero de 1994, el Director Regional Trabajo de la Provincia de Chiriquí resolvió lo siguiente:

> "ARTICULO PRIMERO.
> Que la Cláusula primera del Capítulo XXXVII, de la Convención Colectiva de la Cervecería Chiricana, S. A., no tiene eficacia en

nuestra legislación, pues escoge el sistema de prórroga automática o de denuncia de la Convención Colectiva que contradice la excepción planteada por el Artículo 411 del Código de Trabajo.

ARTICULO SEGUNDO.
Que la Cláusula primera del Capítulo (sic) XXXVII, de la Convención Colectiva de la Cervecería Chiricana, S. A., relativa a aumentos de salario, no es aplicable ni exigible en fecha posterior al período de vigencia regular de la Convención.

ARTICULO TERCERO.
Que la Convención Colectiva de la Cervecería Chiricana, S. A., que continuaba rigiendo a la fecha de entrada en Vigencia de la Ley 13 del 18 de octubre de 1990, le son aplicables tanto la prórroga de dos años, contados desde el 11 de octubre de 1992, así como el aumento resultante de promediar los salarios pactados en 1985, para determinar el incremento promedio durante los años de prórroga". (Fs. 18 del Tomo I del expediente del proceso laboral).

El 7 de julio de 1994, el señor Ministro de Trabajo y Bienestar Social resolvió una solicitud de la Cervecería Chiricana, S. A. para que aclarara el artículo tercero de la parte resolutiva de la Resolución N° 34 de 8 de febrero de 1994, específicamente en cuanto a la fecha de inicio de la prórroga de la Convención Colectiva. Al resolver lo pedido, rechazó por extemporánea la solicitud de aclaración de sentencia, pero dejó constancia que la resolución sí tenía un error mecanográfico en cuanto al año de la fecha de inicio de la prórroga que fue transcrita como "11 de octubre de 1992", cuando la fecha correcta es "11 de octubre de 1990". (fs. 92 y 93 del Tomo III del expediente del proceso laboral).

El 10 de abril de 1991, la Empresa y el Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Chiricana, S. A. firmaron acuerdo, presentado ante la Dirección Regional de Trabajo, con motivo del vencimiento de la Convención Colectiva de 1985 y en vista que no se había celebrado una nueva.

Tomando en consideración la cláusula 27 de la Convención Colectiva vencida, que regula las aumentos de salarios, las partes establecieron en el referido acuerdo que la empresa no tenía obligación de pagar aumentos en el año de 1989, y acordaron aumentos para 1990, 1991, 1992, y para el año de 1993 dejaron este tema para ser negociado en una nueva Convención Colectiva.

La Ley 13 de 11 de octubre de 1990, establece la obligatoriedad de prorrogar las Convenciones Colectivas que vencieran en 1991 y 1992 o desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley. El artículo 6 de la referida ley señala que empezará a regir a partir de su promulgación, el 16 de octubre de 1990, por tanto las Convenciones Colectivas que vencieran antes de 1991 o 1992, se prorrogarían por mandato legal desde el 16 de octubre de 1990, por el término de dos años, hasta el 15 de octubre de 1992.

La Convención Colectiva celebrada entre la Cervecería Chiricana, S. A. y el Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Chiricana, S. A. el 7 de marzo de 1985, tuvo vigencia desde el 1 de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1989, y aunque su cláusula XXXVII establece un sistema de prórroga automática en caso que las partes no denunciaran su terminación, esta cláusula, como bien se ha explicado a lo largo del proceso por las autoridades administrativas y judiciales, es prohibida por nuestra legislación laboral.

El artículo 411 del Código de Trabajo, señala que una vez vencido el plazo establecido en la convención colectiva, esta regirá hasta tanto se celebre una nueva. Esto es sin perjuicio que en cualquier momento se negocie otra convención; por tanto no hay que esperar el vencimiento nuevamente del plazo originalmente pactado si las partes desean celebrar una nueva convención colectiva.

Mientras se aplica la convención colectiva vencida, según lo ordena el artículo 411 del Código de Trabajo, las cláusulas pactadas para cumplirse en una fecha específica y determinada, no pueden seguirse aplicando, ya que el tiempo

en el cual debieron ejecutarse pasó.

El análisis anterior nos lleva a concluir que la Convención Colectiva vigente desde el 1° de enero de 1985 venció el 31 de diciembre de 1989; a partir del 1° de enero de 1990 siguió aplicandose en virtud de lo establecido en el artículo 411 del Código de Trabajo y desde que entró en vigencia la Ley 13 de 1990, el 16 de octubre de 1990, se prorrogó por dos años hasta el 15 de octubre de 1992, y a partir del 16 de octubre de 1990 debían computarse los aumentos salariales de los trabajadores tal y como lo ordena la propia ley al indicar que se aplicarán en base al promedio anual de los mismos en cada año de la prórroga.

El propio artículo 1 de la Ley 13 de 1990 sigue diciendo que serán reconocidos los acuerdos temporales pactados por las partes, dentro de las Convenciones Colectivas.

El acuerdo celebrado por las partes el 10 de abril de 1991, retroactivo al año de 1989, puede ser aplicado mientras no sea contrario a lo ordenado por la Ley 13 de 1994, o en tanto contemple aumentos mejores que los ordenados por dicha ley.

De todo lo anterior se colige que la Convención Colectiva comenzó a regir el 1° de enero de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1989, se prolongó su aplicación en base al artículo 411 del Código de Trabajo hasta la entrada en vigencia de la Ley 13 de 1990, el 16 de octubre de 1990 y su prórroga fue por dos años hasta el 15 de octubre de 1992, luego de lo cual siguió aplicándose la convención colectiva vencida en 1989 en espera de la celebración de una nueva Convención Colectiva.

La Sala de lo Laboral coincide con el criterio de la juez de primera instancia y el expresado en el salvamento de voto de la Sentencia de 23 de diciembre de 1997, en el sentido que es evidente que la fecha "11 de octubre de 1992", es errada y tal como lo reconoció el propio Ministerio de Trabajo y Bienestar Social debía decir que la prórroga de la convención colectiva era a partir de octubre de 1990, mes en el que fue promulgada la Ley 13 de 1990. Este error fue reconocido por la propia administración, y aunque no lo hubiese sido, es evidente que no podía considerarse la prórroga a partir de octubre de 1992, ya que la Ley 13 de 1990 es clara en cuanto a su aplicación en el tiempo, y una interpretación contraria pugnaría con la ley.

En consecuencia, la Resolución de 23 de diciembre de 1997, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, violó el artículo 1° de la Ley N° 13 de 11 de octubre de 1990, por lo que no será necesario analizar el resto de los cargos de violación.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la Sentencia dictada el 23 de diciembre de 1997 por el Tribunal Superior de Trabajo del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso laboral incoado por el Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Chiricana, S. A. contra la sociedad Cervecería Chiricana, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GABRIEL LAWSON, EN REPRESENTACIÓN DE CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE ABRIL DE 1998, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MARIO ADOLFO VLIEG -VS- CENTRO MEDIO DEL CARIBE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Gabriel Lawson, en nombre y representación de CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A. ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 27 de abril de 1998, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral:**MARIO ADOLFO VLIEG -vs- CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A.**

ANTECEDENTES DEL RECURSO

Este recurso tiene su génesis en una demanda propuesta en el Juzgado Primero de Trabajo de la Segunda Sección (Colón) por Mario Vlieg contra CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A. y Corporación Financiera Nacional, en reclamo de prestaciones laborales, tales como salarios dejados de pagar, décimo tercer mes y vacaciones, costas, gastos e intereses, suma que ascendía a B/.206,500.00.

Al resolver la juzgadora de Primera Instancia, mediante Sentencia N° 4 de 1 de abril de 1997, decidió que el CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A. debía cancelar al señor Vlieg la suma de B/.14,000.00 en concepto de vacaciones vencidas, y desestimó, las otras pretensiones, además de que declaró no probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada. En cuanto a Corporación Financiera Nacional, la Juez estimó que la misma no podía ser considerada como demandada dentro del proceso laboral, en virtud de que se trataba de una Entidad Pública, la cual se regía por el Código Administrativo.

La decisión de la Juez A-quo fue apelada por la empresa, ante el Tribunal Superior de Trabajo.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO

El Tribunal Superior de Trabajo al revisar la actuación llevada a cabo en el Juzgado Primero de Trabajo de la Segunda Sección (Colón), decidió confirmar la Resolución de Primera Instancia, mediante Sentencia de 27 de abril de 1998.

El argumento esgrimido por dicho Tribunal Superior para confirmar el fallo, descansa en los siguientes puntos:

1. Que en juicio Ejecutivo Hipotecario contra CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., instaurado por Corporación Financiera Nacional (COFINA), fue nombrado como depositario el doctor Mario Vlieg, quien de igual venía ejerciendo desde un principio el cargo de Director Médico y después de Director Administrativo en dicho Centro;

2. Que el Juez a-quo tiene razón al estimar que las disposiciones laborales contempladas en el Código de Trabajo no le son aplicables a la Corporación Financiera Nacional, ya que se trata de una entidad estatal;

3. Que el Juez de Primera Instancia, en base a las reglas de la Sana Crítica y teniendo en cuenta la inmediación, evaluó las pruebas debidamente: de las declaraciones de testigos, como de las pruebas documentales que fueron aportadas al proceso, se deduce que el demandante, si bien prestó servicios para la demandada CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, lo hizo en su oportunidad cuando se desempeñó como Director Médico y Director Administrativo, y por lo cual recibió los salarios correspondientes, en una relación sujeta a la subordinación jurídica, conforme al artículo 62 del Código de Trabajo;

4. Que la empresa no demostró dentro del proceso, el pago de vacaciones, ni de décimo tercer mes al trabajador; y

5. Que el recurrente no presentó escrito de sustentación de la apelación, por lo que el Tribunal Superior desconoce las razones o los motivos que tuvo la empresa al proponer la alzada.

La empresa CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., propuso recurso de casación ante esta Superioridad, por medio del cual considera que se ha violado el

artículo 54 numeral 1, del Código de Trabajo.

Del recurso de casación se le corrió traslado a la parte trabajadora de acuerdo al artículo 927 ibídem, quien dejó precluir el término para contestar.

Encontrándose el recurso en este estado los Magistrados que integran la Sala Tercera proceden a resolver lo pertinente.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN

El casacionista considera que se ha violado el artículo 54, numeral 1 del Código de Trabajo, el cual es del tenor siguiente:

> "Artículo 54. La duración y la remuneración de las vacaciones se regirá por las siguientes normas:
>
> 1. Treinta días por cada once meses continuos de trabajo, a razón de un día por cada once días al servicio de su empleador". ...

La infracción es sustentada señalando, que el Tribunal Colegiado Laboral aplicó indebidamente el numeral 1 del artículo 54 del Código de Trabajo, dado que consta en el expediente que el demandante desde el 23 de julio de 1986 no ejerce el cargo de Director Médico y Director Administrativo en la empresa, sino el de depositario o administrador judicial y a pesar de ello se le reconoce judicialmente derecho a vacaciones.

Frente al argumento esgrimido por el recurrente debemosdestacar el hecho de que, como bien lo manifestó el TribunalSuperior de Trabajo, la empresa en ningún momento sustentó su disconformidad con la decisión de primera instancia, lo que obligó a los Magistrados de esa Superioridad revisar toda la actuación llevada a cabo por el Tribunal Seccional. En este orden de ideas, CENTRO MÉDICO DEL CARIBE, S. A., no alegó dentro del proceso la circunstancia de que el Mario Vlieg, ejercía el cargo de Depositario Judicial (designado por el Juzgado Primero del Circuito de Colón, Ramo Civil, en un Juicio Hipotecario propuesto por Corporación Financiera Nacional (COFINA), contra dicho Centro Médico), como defensa para que se desconocieran las prestaciones laborales que reclamaba el precitado trabajador. A pesar de esto último, el Tribunal Superior no pasó por alto la situación en que se encontraba el doctor Vlieg (existen pruebas documentales en el expediente a foja ver foja 216 y ss.), pues se pronunció sobre ello al manifestar que la empresa empleadora en ningún momento había demostrado el pago de las vacaciones reclamadas, además de que las disposiciones laborales del Código de Trabajo, no le eran aplicables a Corporación Financiera Nacional (COFINA).

Cabe agregar también, que no es en esta etapa extraordinaria de revisión, que la parte empleadora utilizará argumentos nuevos para impugnar la decisión de segunda instancia, pues estaría incluyendo hechos distintos no debatidos en el proceso desde sus inicios, y en estos casos este Máximo Tribunal Laboral, no puede examinar situaciones no discutidas en su oportunidad. Por ello consideramos que no se acepta la violación alegada.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala Tercera (CASACIÓN LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO CASA la Sentencia de 27 de abril de 1998 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

PROCESO SUMARIO PROPUESTO POR ALVARO MUÑOZ FUENTES EN CONTRA DE RODRIGO AROSEMENA DE ROUX, DECLINADO A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 16 DE FEBRERO DE 1998, DICTADO POR LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Oficio N° 1724/374-94/SUM de 21 de abril de 1998, el Juez Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, remitió para su conocimiento a la Sala Tercera el expediente contentivo del proceso sumario promovido por **ALVARO MUÑOZ FUENTES** contra **RODRIGO AROSEMENA DE ROUX.** En la acción promovida el demandante solicitó que el Tribunal de la causa condenara al señor Arosemena De Roux al pago de B/.5,000.00, en concepto de honorarios profesionales dejados de pagar, más intereses, costas y gastos de la acción, como consecuencia de un contrato celebrado entre el licenciado Alvaro Muñoz Fuentes y el demandado.

El Juzgado Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en Sentencia N° 23 de 7 de marzo de 1996 desestimó la pretensión del demandante. El fallo fue apelado, por lo que llegó al conocimiento del Primer Tribunal Superior de Justicia, que mediante resolución fechada 31 de julio de 1996, confirmó la sentencia del tribunal a quo.

El demandante interpuso formal recurso de casación contra la sentencia confirmatoria dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

En sentencia fechada el 16 de febrero de 1998, al resolver el recurso de casación interpuesto, la Sala Primera, de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia de 31 de julio de 1996, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia y revocó la Sentencia N° 23 de 7 de marzo de 1996, dictada por el Juez Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

Entre las consideraciones hechas en la resolución, el tribunal de casación aclaró que la relación contractual entre Rodrigo Arosemena De Roux, en su condición de Director General de Aduanas y Alvaro Muñoz Fuentes, profesional del derecho, constituye un acto administrativo, por tanto, se inhibió igualmente del conocimiento del caso, declinó su competencia y declaró, además, la nulidad de lo actuado.

Como la presente demanda fue promovida ante la jurisdicción civil, no reúne los requisitos que debe contener toda demanda que se presente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que son:

1. La designación de las partes y de sus representantes;

2. Lo que se demanda;

3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción;

4. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación.

Por tanto, no debe dársele curso a la demanda y debe ordenarse su corrección. Si la demanda es corregida, esta Sala unitaria deberá pronunciarse sobre su admisibilidad (artículo 49 de la Ley 135 de 1943 y artículo 31 de la Ley 33 de 1946).

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada Sustanciadora, APREHENDE el conocimiento del proceso promovido por Alvaro Muñoz Fuentes contra Rodrigo Arosemena De Roux, y ORDENA su corrección dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de la presente resolución al

demandante.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ELIODORO F. HERNÁNDEZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 765 DE 27 DE OCTUBRE DE 1993, DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 55 de 18 de febrero de 1998, ha promovido y sustentado recurso de apelación contra el Auto de 9 de diciembre de 1997, que admitió la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado **Eliodoro F. Hernández** en su propio nombre y representación, para que se declare nulo, por ilegal, el decreto de Personal N° 765 de 27 de octubre de 1993, dictado por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Educación.

La Procuradora de la Administración sustenta su recurso en los siguientes términos:

> "En efecto, en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, establece que toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contendrá la expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la infracción. Reiterada Jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que el giro "expresión de las disposiciones que se estiman violadas", contenido en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, se entiende en el sentido de que es deber del demandante transcribir literalmente la disposición supuestamente infringida.
>
> A foja 4 y siguientes del libelo de la demanda, foja 13 y siguientes del expediente judicial, se constata que bajo el aparte "IV DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACION" del libelo de la demanda, la parte actora menciona las normas presuntamente infringidas y explica los conceptos de violación a las mismas, pero no las transcribe literalmente
> ...
> Decreto de Personal N° 765 de 27 de octubre de 1993, a través del cual se declara sin efecto el Decreto de Personal N° 138 de 20 de abril de 1992 en lo referente al nombramiento de Bruno Orion Miguelena como Subdirector Provincial de Educación de Herrera y se nombra al mencionado docente como Educador Ñ-2, cátedra de Ciencias Naturales, en el Colegio Secundario de Monagrillo.
>
> Como se puede comprobar a foja 3 y 6, el señor Miguelena De León fue posteriormente nombrado como Educador R-2, Subdirector del Colegio Secundario, mediante Decreto de Personal N° 699, de 30 de noviembre de 1994 y se le encargó, a través del resuelto N° 968 firmado por el Ministerio de Educación, de la Dirección del Colegio José Daniel Crespo.
>
> Se aprecia entonces que el Decreto N° 765 de 27 de octubre de 1993 ha sido dejado sin efecto y sustituido por el decreto de personal N°

699 de 30 de noviembre de 1997, en consecuencia el acto administrativo impugnado no tiene existencia actual dentro del mundo jurídico, esta extinguido, por lo que carece de objeto la demanda por el recurrente".

Por su parte el demandante se opuso a los señalamientos esgrimidos por la señora Procuradora de la Administración expresando que si se cumplió con todos los requisitos que establece el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, así señala que en lo referente a la expresión de las disposiciones que se estiman infringidas si se cumple a cabalidad dicho requisito "toda vez, que hacemos la explicación del concepto de las violaciones a las mismas, aspecto este que si es de suma importancia, porque le permite al Tribunal examinar el fondo de la violación que se invoca". Por otro lado sigue argumentando el recurrente que en "virtud del principio procesal que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y en el presente caso somos del criterio que al declarase la nulidad del Decreto de marras los actos preparatorios celebrados adolecen de nulidad".

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera Contencioso Administrativa, entran a resolver la presente controversia.

Mediante Auto de 9 de diciembre de 1997, el Magistrado Sustanciador del caso, decide admitir la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el licenciado Eliodoro Hernández, en su propio nombre y representación, en la misma se solicita se declare la nulidad del Decreto de Personal N° 765 de 27 de octubre de 1993,a través del cual se nombra al profesor Bruno Orion Miguelena como Educador Ñ-2, de Ciencias Naturales en el Colegio Secundario de Monagrillo. La Procuradora de la Administración apela del Auto que admite la demanda por considerar que la misma no cumple con los requisitos señalados en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943.

Como bien observan, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, le asiste la razón a la señora Procuradora de la Administración, pues ha sido jurisprudencia reiterada de la Sala Tercera el señalar que la demanda contencioso administrativa de nulidad debe contener, entre otros requisitos, "la expresión de la disposiciones que se estiman violadas". Si bien es cierto, la forma como esta norma ha sido redactada pareciera dar a entender que sólo con la simple mención de la norma se cumple a cabalidad con dicho requisito, sin embargo la jurisprudencia ha sido reiterativa en considerar que debe transcribirse literalmente la norma. Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia que cita el recurrente con respecto a este punto consideramos que la misma se refiere a los casos en que se transcribe un artículo que tiene literales o numerales, en los cuales no es necesario la transcripción literal de todos, sino de aquellos que sean pertinente al caso; y como podemos observar, esta no es la situación del presente negocio.

Por último consideramos pertinente señalar que el decreto de Personal N° 765 de 27 de octubre de 1993, el Decreto de Personal N° 699 de 30 de noviembre de 1994 y el Resuelto N° 968 de 19 de agosto de 1997, son actos independientes uno del otro, en los cuales se resuelve nombrar al profesor Miguelena en diversas posiciones dentro del área educativa. Por lo cual compartimos el criterio de la Procuradora de la Administración, cuando expresa que el decreto de Personal N° 765 de 27 de octubre de 1993, actualmente no surte efectos jurídicos, pues el profesor Miguelena esta nombrado mediante resuelto 968 de 19 de agosto de 1997, como director encargado del Colegio José Daniel Crespo, por lo que se encuentra extingido el objeto de la demanda, ya que no se esta solicitando la declaratoria de nulidad del Resuelto N° 968 de 19 de agosto de 1997.

Por las anteriores consideraciones el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, previa revocatoria del Auto de 9 de diciembre de 1997, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad interpuesta por el licenciado Eliodoro Hernández, en su propio nombre y representación.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE DESACATO INTERPUESTO POR EL DOCTOR MIGUEL ANTONIO BERNAL, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA EL PROFESOR DENIS JAVIER CHÁVEZ, PRESIDENTE DEL GRAN JURADO DE ELECCIÓN DE RECTOR (A) DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, POR INCUMPLIMIENTO DEL AUTO DE 19 DE MAYO DE 1997, DICTADO POR LOS MAGISTRADOS DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor **MIGUEL A. BERNAL**, actuando en su propio nombre y representación, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, incidente de desacato, contra el Profesor **Denis Javier Chávez**, Presidente del Gran Jurado de Elección de Rector (a) de la Universidad de Panamá 1997, por incumplimiento del auto fechado el 19 de mayo de 1997, dictado por los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Argumenta el incidentista que se incurrió en desacato porque la lista de electores, para la Elección de Rector (a) 1997, estaba basada en el artículo 4, suspendido mediante el citado auto de 19 de mayo de 1997.

A petición del demandante, mediante auto fechado el 19 de mayo de 1997 (fs. 19-22), la Sala suspendió provisionalmente los efectos de las frases "a la fecha del 24 de marzo de 1997" y "al 24 de marzo de 1997", contenidas en el artículo 4 del Reglamento para la Elección de Rector (a) de la Universidad de Panamá, cuyo texto transcribimos a continuación:

> Reglamento para la Elección del Rector (a). "Artículo 4. Para efectos de la elección de Rector se adoptan las siguientes categorías de votantes:
>
> Profesores Regulares: Son aquellos que a la fecha del 24 de marzo de 1997 tengan la permanencia en sus posiciones mediante concurso convocado para tales efectos.
>
> Profesores Especiales: Son los que ejercen la docencia y/o investigación en posiciones no permanentes al 24 de marzo de 1997.
>
> Profesores Asistentes: Son los profesionales que laboran como tales en los respectivos Organismos Académicos y de Investigación al 24 de marzo de 1997.
>
> Estudiantes Regulares: Son aquellos que se acojan al Artículo 270, literal a), del Estatuto Universitario (modificado por el Consejo General Universitario en reunión No. 4-94 del 7 de junio de 1994).
>
> Empleados Administrativos: Son los servidores públicos de la Universidad de Panamá celebrados con carácter permanente al 24 de marzo de 1997".

El fundamento de la suspensión provisional lo fue el artículo 3 de la Ley N° 6 de 24 de mayo de 1991, el cual dispone que el Rector de la Universidad de Panamá será elegido por todos los que a la fecha de la convocatoria aprobada por el Consejo General Universitario, sean profesores regulares y especiales, asistentes de profesores, estudiantes regulares de la Universidad y empleados administrativos nombrados con carácter permanente. Como la Convocatoria fue aprobada por el Consejo General Universitario N° 7-96, el 19 de diciembre de 1996

(fs. 32-33) esa es la fecha y no el 24 de marzo de 1997 (fs. 9 vta.), como se preceptúa en el acto impugnado, en que los profesores, estudiantes y empleados administrativos debían haber adquirido su condición de tales. Cabe observar, que el auto comentado, dictado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, no suspendió la elección del Rector de la Universidad de Panamá que debía celebrarse el 23 de mayo de 1997.

Del incidente de desacato se corrió traslado a la autoridad acusada, quien negó los hechos, y señaló que los profesores regulares, especiales y asistentes contratados por primera vez para el primer Semestre del Año Académico 1997, se anexaron en una lista aparte al listado general de cada Facultad y Centro Regional, de manera que éstos no podían votar; y en el caso de los administrativos que habían obtenido su permanencia después del 19 de diciembre de 1996, también se anexó un listado proporcionado por la Dirección de Personal, con la indicación de que no podían hacer uso del sufragio. Señaló además el Presidente del Gran Jurado, que tan pronto se tuvo conocimiento del auto de 19 de mayo de 1997, se procedió a solicitar a la Dirección de Personal y a la Dirección de Informática de la Universidad de Panamá, la corrección de todos los listados, de modo que cada centro de votación recibió las listas electorales actualizadas (fs. 6-7).

La autoridad demandada aportó entre sus pruebas las siguientes:

1. La nota GJ-10-97 de 22 de mayo de 1997, dirigida al profesor Denis Chávez, mediante la cual la jefa de Desarrollo de Sistemas de la Dirección de Informática, dejó constancia de la entrega de los Listados de Estudiantes para las elecciones de Rector 1997, corregido de acuerdo con lo estipulado en el Auto de 19 de mayo de 1997, donde se establece la selección de estudiantes con matrícula al Segundo Semestre de 1996 y fecha de pago al 19 de diciembre de 1996 (fs. 8); y

2. La nota DP-325-97 de 21 de mayo de 1997, mediante la cual la Directora de Personal de la Universidad de Panamá, remitió los listados de los profesores que ascendieron a la categoría de regular antes o al 19 de diciembre de 1996 y de los administrativos que tomaron posesión como permanentes antes o al 19 de diciembre de 1996. (Fs. 9).

La señora Procuradora de la Administración opinó en su Vista N° 312 de 11 de julio de 1997 (fs. 10-13), que el incidentista no demostró la situación de desacato, porque no aportó las listas de los votantes que participaron en la elección del Rector, ni las que existían previa la emisión del Auto de Suspensión Provisional, a fin de comprobar el incumplimiento de la orden impartida.

La Sala observa que efectivamente no se aportó la lista de electores que existió previa la emisión del auto de suspensión provisional, pero si fueron allegados al proceso los listados originales de las elecciones del Rector de la Universidad de Panamá 1997, prueba aducida por el demandante en el incidente de desacato y en el expediente contencioso que nos ocupa, y admitida en ambos procesos mediante autos con fecha de 20 de agosto de 1997 (fs. 14 y 53 respectivamente), tal como consta a foja 59 del expediente contencioso, en la Nota N° DSG-910-97 de 18 de noviembre de 1997.

Las listas de electores remitidas por la Universidad de Panamá son las originales de la votación, separadas en distintos sobres según la Facultad o Centro, y cada sobre contiene listas separadas de profesores regulares, profesores especiales, profesores asistentes, personal administrativo y estudiantes. En estos listados se registró la cédula, el apellido, el nombre, la firma y según se trate de estudiante o empleado, el recibo de matrícula o el número de planilla, pero no indican en que fecha adquirieron los votantes el estatus que los autorizaba para votar, por tanto, no se ha comprobado que, tal como lo afirma el incidentista, las listas de electores no fueron elaboradas o corregidas con la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia, en auto de 19 de mayo de 1997 (fs. 19-22).

Por tanto, el desacato no ha sido probado y así debe declararse.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO, el incidente de desacato promovido por el Dr. MIGUEL ANTONIO BERNAL, en su propio nombre y representación, contra el Profesor Denis Javier Chávez, Presidente del Gran Jurado de Elección del Rector de la Universidad de Panamá, por incumplimiento del auto de 19 de mayo de 1997.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN EN REPRESENTACIÓN DE SOCIEDAD COCLÉ AGRÍCOLA, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 001-95 DE 12 DE ENERO DE 1995 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de los Magistrados de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma Morgan y Morgan, para que se declare nulo, por ilegal, la Resolución N° 001-95 de 12 de enero de 1995, dictada por la Dirección General del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

La firma Morgan y Morgan, actuando en representación de la **SOCIEDAD COCLÉ AGRÍCOLA**, ha presentado y sustentado recurso de apelación contra el Auto que admite las pruebas, fechado 9 de marzo de 1998, el recurrente solicita a esta superioridad que se reforme dicho auto en la parte referente a los peritos y testigos actuarios, así expresó el demandante:

> "Adicionalmente observa que en la Resolución impugnada se designa como peritos a dos personas a las que no dimos esa categoría o identificación como son los señores Quijada y Rivera. Lo correcto habría sido que el Tribunal hubiese designado a los dos ingenieros expresamente mencionados en calidad de peritos, con exclusión de los testigos actuarios, si los consideraba excesivos. Pero lo que no es aceptable es que dos personas laicas en la materia científica propia del peritaje hayan sido precisamente las que se aceptaron como peritos.

Por su parte la Procuradora de la Administración a través de la Vista Fiscal N° 157 se opone a la petición formulada por el demandante en los siguientes términos:

> "Nuestra objeción radica en el hecho de que la sociedad demandante procedió a nombrar a cuatro personas para que intervinieran en una misma diligencia de Inspección Judicial; dos en calidad de peritos y dos en calidad de testigos, cuando el artículo 944 del Código Judicial es taxativo al disponer que el "Juez nombrará dos testigos con quienes debe asociarse en la diligencia, si no hubiere necesidad de peritos", lo que nos indica que los testigos únicamente intervienen, si no actúan los peritos.
>
> Respalda nuestro criterio, lo normado en el artículo 956 del Código

Judicial que dice: "Cada parte puede designar hasta dos peritos".

Por lo anteriormente expuesto este Tribunal considera que efectivamente se cometió un error al momento de designar los peritos, por lo que le asiste la razón al demandante, pues como bien se observa del escrito de pruebas visible a foja 177, el recurrente señaló claramente que "designaba como peritos a los ingenieros Carlos Doyen y Truman Cárdenas y como testigos actuarios, para identificación de lugares ... a los señores Gertrudis Quijada y Ovidio Rivera". Por lo que el resto de los Magistrados considera que debe reformarse el Auto de 9 de marzo de 1997, en lo pertinente a la correcta designación de los peritos, Carlos Doyen y Truman Cárdenas.

No obstante, el recurrente ha solicitado la designación de los señores Gertrudis Quijada y Ovidio Rivera como testigos actuarios, en este sentido debemos expresar que el Código Judicial es claro cuando señala en el artículo 956 que "cada parte puede designar hasta dos peritos", por su parte el artículo 944 del C.J. expresa que es el juez quién nombrará dos testigos, cuando así lo requiera la diligencia, sin embargo, si el caso necesitase conocimientos especiales se nombrará a los peritos. Como bien observó la Procuradora de la Administración los testigos intervendrán cuando no actúen los peritos. En el caso que nos ocupa el actor solicita una inspección judicial a la que el Tribunal accede teniendo presente que sólo puede nombrarse hasta dos peritos y no cuatro como pretendía el recurrente.

En mérito de lo expuesto el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el auto de 9 de marzo de 1997, que admite las pruebas, en lo pertinente a la designación de los peritos, quedando de la siguiente manera:

"VIII. INSPECCIÓN JUDICIAL ...

Se designan como peritos de la parte actora, a los ingenieros Carlos Doyen y Truman Cárdenas; y como Perito de Hacienda Sta. Mónica a JOHNNY CUEVAS (C. I. P. N° 4-26-866 e idoneidad N° 91-006-036) y como testigo actuario al señor Carlos Arias".

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE REPARACIÓN DIRECTA, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY & DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE PACIFIC LARVAL CENTRE INC., PARA QUE SE CONDENE AL ESTADO PANAMEÑO AL PAGO DE B/.7,000.00, EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, POR LA ACCIÓN INCURRIDA POR EL INSPECTOR PABLO ALVARADO DEL DEPARTAMENTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, AL IMPEDIR LA SALIDA DE UN EMBARQUE DE 42 CAJAS DE NAUPLIOS O LARVAS DE CAMARONES VIVOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración ha interpuesto recurso de apelación contra la resolución de 23 de enero de 1997 que admite la demanda contencioso administrativa de reparación directa interpuesta por la firma Shirley & Díaz, en representación de **PACIFIC LARVAL CENTRE INC.**, para que se condene al **Estado Panameño** al pago de B/.7,000.00, en concepto de daños y perjuicios, por la acción incurrida por el Inspector Pablo Alvarado del Departamento de Cuarentena Agropecuaria del Aeropuerto Internacional de Tocumen, al impedir la salida de un

embarque de 42 cajas de nauplios o larvas de camarones vivos, y para que se hagan otras declaraciones.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda por considerar que la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

La Procuradora de la Administración fundamenta el recurso de apelación señalando que la parte actora debió dirigir su acción por medio de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, ya que la Sala Tercera puede anular el acto e igualmente restablecer el derecho particular violado por el acto administrativo declarado de ilegal, retrotrayendo las cosas a su estado anterior o bien, decretando las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Por su parte, la firma Shirley & Díaz en su escrito de oposición al recurso de apelación señala lo siguiente:

> "1° El artículo 203 de la Constitución Nacional que no señala el nombre de algún recurso en particular -no está limitado únicamente a los recursos de plena jurisdicción, sino todo lo contrario, permite también "restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas ... "todo lo cual significa que la reparación directa la respalda la norma fundamental, contrario a lo que sostiene la señora Procuradora de la Administración. Es más cuando la norma, Constitucional o Legal, menciona a "La jurisdicción contencioso administrativa" "respecto de los actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten o expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios ..." no se está refiriendo únicamente al recurso de plena jurisdicción sino a los diversos actos que afectan a las personas y que pueden ser atacados por medio de las acciones que contempla la ley.
>
> 2° Tanto la Ley 135 de 1943, como la Ley 33 de 1946, como el artículo 98 del Código Judicial y demás permite la reclamación Directa para reclamar indemnización por razón de la responsabilidad subsidiaria del Estado, o cuando sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos; igualmente cuando se habla de hechos, operaciones u omisiones administrativas se está facultando al particular lesionado con esas actuaciones u omisiones a reclamar reparación por la vía directa.
>
> 3° La doctrina extranjera, y particularmente la doctrina colombiana, que es soporte de la legislación y doctrina panameña, se ha pronunciado sobre el particular a favor de la reclamación directa, en estos términos:
>
> a) Miguel González Rodríguez, en su "Derecho Contencioso Administrativo", IV Edición, Actualizada Reformada y Aumentada, Ediculco, 1980, a página 205 señala:
>
> "En algunos casos, el particular ha sido lesionado en su derecho por un hecho o una operación administrativa, como por ejemplo, cuando se impide la circulación de un periódico, se ordena el cierre de un establecimiento comercial, se causan perjuicios por trabajos públicos y, entonces, la ley permite el ejercicio de la acción de indemnización de perjuicios sin necesidad de solicitar la nulidad de un acto administrativo, pues es claro que o no lo hay o en ocasiones es difícil localizarlo, como en los casos de trabajos públicos; basta, entonces, solicitar de la Administración la indemnización correspondiente". ...
>
> "Mediante la acción sabiamente consagrada en este artículo 68, viable únicamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa y en ningún caso en la vía gubernativa, como lo ha

sostenido reiteradamente el Consejo de Estado, puede el particular lesionado por un hecho u operación administrativa obtener una sentencia en la que se declare la responsabilidad de la Administración y se le condene al pago del valor de los perjuicios causados (lucro cesante, daño emergente, etc.) ...

Como se puede observar, a diferencia del recurso de plena jurisdicción francés el cual va dirigido siempre contra un acto administrativo," "salvo en materia de obras públicas", debiendo el agraviado por un hecho de la administración provocar la decisión gubernativa previa, para luego accionar, el legislador colombiano consideró que la única que podía decidir sobre las indemnizaciones por razón de hechos de la administración pública era la jurisdicción contencioso-administrativa, pues, sin duda, será en un juicio en donde podrá controvertirse plenamente la responsabilidad extracontractual de la Administración, allegarse todos los medios probatorios indispensables para fijar la naturaleza y cuantía de la indemnización por los perjuicios que se le hayan causado al administrado y obtenerse la condena respectiva" ...

Es lógico que si se trata de hechos, operaciones o vías de hecho de la administración demandada, que originan responsabilidad extra-contractual o del incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de aquella, no existirán actos administrativos que acompañar a la demanda" (pág. 337) ...

"Jurisprudencia:

a) En estas controversias no es procedente hablar, o exigir, el agotamiento de la vía gubernativa, es decir, elevar a la Administración Pública que causó el daño o que realizó la ocupación temporal de propiedad inmueble, como consecuencia de un trabajo público, una petición o reclamación de reconocimiento de la indemnización los jueces de lo contencioso-administrativo, que son los competentes, comprobado el daño y la relación de causalidad con el trabajo público, para fijar las indemnizaciones a que haya lugar. Además de deducirse este aserto de las disposiciones del C.C.A., debe observarse que a la Administración Pública le quedaría un poco difícil entrar a fijar los montos de las indemnizaciones en cada caso en particular" (pág 581)

b) Altamira Gigena, Julio I. "Responsabilidad del Estado", Buenos Aires, 1973, págs. 65 a 72, citado por Gustado Humberto Rodríguez, "Contratos Administrativos", ediciones de Cultura Latinoamericana (Ediculco Ltda.) Bogotá, D.E., 1978, pág. 163, señala:

"Responsabilidad directa del Estado. Llegamos finalmente a la última etapa de la evolución del concepto de responsabilidad del Estado. En este período se llega a reconocer la responsabilidad de la Administración por razón del simple funcionamiento del servicio, sin que el demandante tenga necesidad de probar la culpa de los agentes. Cuando un hecho se produce sin que pueda ser atribuido a negligencia o imprudencia por parte de la víctima, ni por parte del agente, ya que el servicio había funcionado bien, pero igualmente se produjo el accidente, se trata de un verdadero caso fortuito y no de falta de servicio, y el Estado tiene que indemnizar el daño ocasionado a la víctima".

"Actualmente, y gracias al avance de las teorías sobre esta materia, se afirma la responsabilidad directa y total de la administración, sin necesidad de conocer previamente si el daño se produjo por culpa del agente o de la Administración".

c) Carlos Betancur Jaramillo, en su obra "Derecho Procesal Administrativo", Reimpresión, Biblioteca Jurídica Dike, 1981, página 86, nos dice:

"Es apenas obvio que en las acciones de reparación directa, en las cuales se pretende una indemnización de perjuicios causados por hechos, omisiones en operaciones materiales de la Administración, la petición se reduzca a demandar las indemnizaciones y prestaciones correspondientes (declaratoria de responsabilidad y la cuantiación (sic) de los perjuicios) tal como lo indica el artículo 68 del C.C.A.

Esta última norma adolece de cierta imprecisión al hablar de que no será necesario ejercitar la acción de nulidad en estos casos. Es lógico que no puede pedirse tal declaratoria de nulidad puesto que los actos materiales o los hechos no son susceptibles de semejante declaración".

d) Francisco Sierra Jaramillo, en "Derecho Contencioso Administrativo", segunda edición, Editorial TEMIS Librería, Bogotá-Colombia, 1980, página 81 y siguiente señala:

"Pero los administrativistas, partiendo de la teoría de la falla del servicio -elaborada en Francia-, llegaron a la conclusión de que la responsabilidad del Estado por sus hechos, operaciones u omisiones es una responsabilidad extracontractual directa. Si el Estado es responsable de los servicios públicos, debe responder directamente por las fallas que se ocasionen en la administración, y que causen perjuicios a los asociados. De acuerdo con la teoría de la responsabilidad extracontractual directa. Si el Estado es responsable de los servicios públicos, debe responder directamente por las fallas que se ocasionen en la administración, y que causen perjuicios a los asociados. De acuerdo con la teoría de la responsabilidad directa, el particular está obligado a demostrar tres presupuestos para hacerse acreedor a la indemnización que pretenda, a saber:

a) El hecho que ocasionó la falla del servicio;

b) el perjuicio; y

c) una relación de causalidad directa entre por objeto prevenir, como su nombre lo indica, males a la comunidad. Un ejemplo de hecho administrativo sería el cierre de un establecimiento público por considerar que en él se atenta contra la moralidad y las buenas costumbres; otro sería el decomiso de una publicación por considerarla lesiva del orden público o de la moralidad.

Las operaciones administrativas son infinitas y se refieren a las obras materiales que la administración debe cumplir en la prestación de los servicios públicos.

El restablecimiento del derecho para el demandante se hace en forma de condenación pecuniaria, puesto que la conducta de la administración está consumada y los hechos resultan irreversibles, una vez producidos sus efectos. Este contencioso se tramita por el procedimiento ordinario del C.C.A., al contrario de lo que ocurre en la indemnización por trabajos públicos, que aún siendo un contencioso de reparación directa, tiene sus características propias, entre ellas su procedimiento especial, y una caducidad menor, debido a que esta es una institución que se trasladó masivamente del derecho francés al derecho colombiano.

El contencioso de reparación directa es un contencioso originario. Esto quiere decir que la jurisdicción contencioso-administrativa, a ruego del interesado entra a calificar directamente la conducta de la administración, sin darle oportunidad a esta de volver sobre sus pasos. Y esto tiene razón de ser, porque el Estado en la mayoría de los casos ha creado situaciones irreversibles".

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera no coinciden con los criterios expuestos por la señora Procuradora de la Administración, toda vez que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Nacional y el artículo 98 del Código Judicial tiene entre sus atribuciones la decisión de los procesos que se generen por la responsabilidad extracontractual del Estado, por actos y hechos administrativos ilegales.

Observan el resto de los Magistrados que la parte actora solicita que el Estado indemnice a la empresa PACIFIC LARVAL CENTRE INC., en razón de su responsabilidad extra-contractual subsidiaria por los daños y perjuicios originados de las infracciones jurídicas incurridas, en el ejercicio de sus funciones, por un Inspector del Departamento de Cuarentena Agropecuaria del Aeropuerto Internacional de Tocumen, al negar la autorización de salida de un embarque de nauptilios o camarones vivos.

Es importante señalar que en el presente caso nos encontramos con el supuesto contenido en el numeral 9 del artículo 98 del Código Judicial. En relación con lo anterior, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia de 19 de enero de 1995 mediante la cual se declaró inconstitucional la palabra subsidiaria contenida en el inciso final de dicha excerta legal. Luego, la Sala Tercera conoce de las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado, y de las restantes entidades públicas que originen infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado. De lo anteriormente expuesto se colige claramente que los administrados pueden demandar directamente al Estado por los daños y perjuicios que causen los funcionarios a quienes propiamente corresponda la gestión practicada, dentro del ejercicio de sus funciones.

En este sentido, estiman el resto de los Magistrados que si bien es cierto es viable jurídicamente en nuestro ordenamiento la interposición de una solicitud de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad directa del Estado, no es menos cierto que el recurrente debe cumplir con ciertos requisitos formales para que dichas acciones puedan ser consideradas por la Sala Tercera. De esta forma, y de conformidad con la sentencia 19 de enero de 1995 se debe señalar expresamente el acto o hecho administrativo irregular o ilegal, que en este proceso sería la conducta dañosa del funcionario; la relación de causalidad entre dicho acto o hecho irregular o ilegal y el daño causado; y el monto de la indemnización reclamada. En vista, de que en el proceso en cuestión se observa que el demandante cumple con los requisitos de forma antes apuntados, lo que lo procedente es, pues, confirmar la resolución recurrida.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución de 23 de enero de 1997 que ADMITE la demanda contencioso de reparación directa interpuesta por la firma Shirley & Díaz, actuando en nombre y representación de PACIFIC LARVAL CENTRE INC.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO IVÁN TEJEIRA EN REPRESENTACIÓN DE TARGIDIO A. BERNAL PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° DN-005-95 DE 31 DE ENERO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Iván Tejeira, actuando en representación de **TARGIDO A. BERNAL**, ha presentado y sustentado recurso de apelación contra el **Auto de 2 de marzo de 1998**, que NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en donde se solicita se declare nulo, por ilegal, la Resolución N° DN-005-95 de 31 de enero de 1995, expedida por el Director Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Los argumentos esgrimidos por el apoderado judicial de la parte actora son los siguientes:

> "Resulta evidentemente cierto, que el honorable Magistrado Sutanciador en este proceso, inadvirtió, no se percató, que en el caso sub-judice la parte demandante ha sustentado la tesis, en base a las constancias procesales, que la Resolución N° ALP-015-RA-96 de 6 de noviembre de 1996, mediante la cual la Dirección Nacional de reforma Agraria confirma la resolución N° DN-005-95 del 31 de enero de 1995, ha sido notificada en forma ilegal; que la notificación realizada mediante el edicto, que en la resolución apelada se expresa que fue desfijado el 22 de enero de 1997, no puede surtir efectos legales, porque esa notificación no fue llevada a efecto de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico.
>
> La validez de la notificación de la referida Resolución ALP-015-RA-96 de 6 de noviembre de 1996, que ha devenido en ilegal, es un punto controvertido en la acción que sólo puede ser resuelto en el fallo que conozca de fondo el asunto y no la forma como lo ha hecho el Honorable Magistrado Sustanciador, sin aparente conocimiento adecuado de causa y sin argumentación de ninguna clase, que se está en esta demanda en presencia del fenómeno jurídico conocido como prescripción de la acción, cuando en realidad la Resolución la Resolución que sirve de fundamento a la supuesta prescripción no puede entenderse como ejecutoriada, pues no fue notificada legalmente, al tenor de los preceptos legales que regulan la materia, como lo son los artículos 29, 31, 32 de la ley 135 de 1943 modificada por la ley 33 de 1946; 995 y 1008 del código Judicial, entre otros".

Encontrándose el proceso en este estado el resto de los Magistrados entran a conocer el presente recurso de apelación.

Como bien observa esta superioridad, el licenciado Tejeira ha presentado recurso de apelación contra el auto de 2 de marzo de 1998, mediante el cual el Magistrado Sustanciador decidió no admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción por considerar que la misma esta prescrita.

De las constancias procesales del expediente se evidencia claramente, que la demanda fue presentada cuando ya habían transcurrido el término que señala el artículo 42-b de la ley 135 de 1943, para la presentación de la demanda contenciosa, es decir, los dos meses siguientes a partir de la publicación notificación o ejecución del acto. Esto lo señalamos en virtud de que de foja 77 a la 104 se observan todas las diligencias que realizó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través del jefe de departamento de reforma agraria y de la asesoría legal, para logra obtener la notificación del señor TargidoBernal, de las resoluciones N° D. N 024-96 y la resolución ALP-015-RA-96 de 6 de noviembre de 1996, que confirma la Resolución DN-005-95 de 31 de enero de 1995, salta a la vista que dichos esfuerzos fueron infructuosos. Lo que motivó a dicha entidad a realizar la notificación mediante edicto.

Por lo anteriormente expuesto confirmamos lo expresado por el Magistrado sustanciador, pues es claro que el recurrente tenía desde el 22 de enero de 1997, fecha en que fue desfijado el edicto, hasta el 22 de marzo de 1997, para

presentar su demanda de plena jurisdicción. Sin embargo, el recurrente presenta su demanda en octubre cuando ya había transcurrido en exceso el término que señala la ley.

En mérito de lo expuesto el resto de los Magistrados que integra la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA el Auto de 2 de marzo de 1998, el cual NO ADMITIÓ la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesto por el licenciado Iván Tejeira en representación de TARGIDIO BERNAL.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

MAYO 1998

CARTA ROGATORIA

CARTA ROGATORIA SIN NÚMERO FECHADA 22 DE OCTUBRE DE 1997, PROCEDENTE DE LA FISCALÍA 73 SECCIONAL DE LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE SANTA FE DE BOGOTÁ, LIBRADA EN EL PROCESO 2857798 CONTRA MILTON BAEZ Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce de la carta rogatoria fechada 22 de octubre de 1997, librada por la **Fiscalía 73 Seccional de la Unidad de Delitos Financieros de Santa Fe de Bogotá**, República de Colombia, dentro del proceso 285798 adelantado contra **Milton Baez**, **Juan José Baez y Carlos Silva** por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, alteración, modificación de calidad y cantidad, peso o medida y usurpación de marcas y patentes.

Al respecto se observa que el Estado requiriente solicita la inspección judicial o su equivalente ante el Banco Nacional de Panamá, sucursal Colón, sobre la cuenta N° 0299608030 para efectos de determinar su movimiento durante el año de 1997, fotocopias autenticadas de dichos estractos, así como "establecer lo relacionado con consignaciones realizadas de Colombia para esa cuenta, con especificación de las cuantías fechas, giradores y cualquier otras información relevante de esa cuenta".

En este punto es importante destacar que esta Sala de la Corte es el ente idóneo para "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo", conforme lo establece el artículo 101 numeral 3 del Código judicial.

Al respecto se observa que el negocio en cuestión cumple parcialmente con el requisito indispensable de legalización de los documentos proporcionados, (solamente la solicitud de colaboración judicial ha sido legalizada mediante apostilla), dado que parte de la documentación aportada es presentada en copia simple en contradicción con lo establecido en el artículo 864 del Código Judicial. Debe expresarse que la citada disposición es aplicable al presente exhorto, dado que la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, (ratificada tanto por la República de Panamá como por la República de Colombia) no ha sido extendida a materias penales, tal como se desprende de la lectura de los artículos II y XV de la antes mencionada Convención, por lo que la asistencia internacional deberá fundamentarse en el derecho panameño y en los principios de reciprocidad y buena fe.

A estos efectos se pone inmediatamente de relieve que no es dable acceder a la petición efectuada por las autoridades colombianas referentes a la cuenta N° 0299608030 en atención a que, en principio, el artículo 85 del Decreto Ley N° 9 de 26 de febrero de 1998, que regula y reforma el régimen bancario panameño y crea la superintendencia de los bancos, no le permite a los bancos revelar información de sus cuentahabientes, salvo cuando medie solicitud formal de autoridad competente de conformidad con la Ley. Dicha autoridad competente a su vez verificará si concurren previamente una serie de elementos que avalen la práctica de una diligencia exhibitoria, cual es el mecanismo legal designado por el artículo 89 del Código de Comercio panameño, para llevar a cabo esta clase específica de diligencia judicial, que lleva ínsito el examen de los libros del comerciante titular de tales libros. Por lo que en consecuencia es indispensable:

1. La determinación concreta de los asientos en los libros que deban investigarse. De ello se desprende que no puede solicitarse la apertura completa del movimiento bancario de una cuenta durante todo un año, aun cuando se identifique y suministre el número de dicha cuenta.

2. Debe ilustrarse de igual manera a esta Sala de la Corte en lo atinente al

proceso que se lleva a cabo en la Fiscalía 73 Seccional de la unidad de Delitos Financieros de Santa Fe de Bogotá, Colombia; presupuesto éste necesario, es virtud de que se debe contar con los elementos de juicio mínimo en lo concerniente al interés o responsabilidad en el asunto o cuestión que se ventila en la República de Colombia, por parte de quienes tienen la titularidad de dicha cuentas bancaria, tal como lo establece el artículo 89 del Código de Comercio. Dicha información, sin embargo, no se deduce indubitablemente del pequeño extracto que al respecto efectúa la Fiscalía Colombiana.

Por otro lado, no se aportaron las piezas procesales indispensables que demuestren el fundamento de la presente carta rogatoria, dado lo delicado de la prueba solicitada. En consecuencia, no procede acceder a la petición efectuada.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO VIABLE la carta rogatoria fechada 22 de octubre de 1997, librada por la Fiscalía 73 Seccional de la Unidad de Delitos Financieros de Santa Fe de Bogotá, República de Colombia, dentro del proceso 285798 adelantado contra Milton Baez, Juan José Baez y Carlos Silva por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, alteración, modificación de calidad y cantidad, peso o medida y usurpación de marcas y patentes.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO CONTRA LOS SEÑORES GELMUT GOTWALD, HAGEN RAIMUND SCHARZE HANS-PETER SCHILLINGS Y JURGEN MICHAEL HACKSTEIN POR ESTAFA Y DEMÁS DELITOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, mediante Nota N° A. J. N° 327, solicitud de Asistencia Judicial Internacional en asuntos jurídico penales librada por **Landgericht, Tribunal Regional de Dusseldorf, Gran Sala de lo Penal N° X, República Federal de Alemania,** dentro del proceso penal contra los industriales **Helmut Gottwald, Hagen Raimund Schwarze, Jurgen Michael Hackstein y el abogado Hans-Peter Schillings** por estafa y demás delitos".

El numeral 3, del Artículo 101 del Código Judicial, dispone que es competencia de la Sala Cuarta recibir exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros, determinar su cumplimiento en el territorio nacional ponderando si trasgrede o no el orden público y, en el evento de que no lo vulnere, determinar el funcionario o tribunal que debe realizar la diligencia solicitada.

En este orden de ideas, es preciso determinar si existe entre la República de Panamá y Alemania tratado o convención suscrita relativa a exhortos o cartas rogatorias en materia penal.

La Sala observa que en lo atinente a esta materia, no existe instrumento internacional alguno suscrito entre ambas naciones. En este punto, es importante destacar que sobre exhortos o cartas rogatorias Panamá ha ratificado una Convención multilateral regional a nivel interamericano con varios Estados, no obstante, ésta se encuentra limitada exclusivamente a actuaciones y procesos en

materia civil o comercial.

Ante esta situación, resulta palmario que las solicitudes internacionales basadas en materia jurídico penal quedan sujetas al principio de reciprocidad y de auxilio internacional que se quiera brindar al Estado Exhortante, utilizando como fuente supletoria el Código Judicial panameño y nuestro ordenamiento jurídico penal aplicable a la materia.

Además, como manifestamos en párrafos anteriores, resulta fundamental partir de la base de que dicha solicitud no es transgresora del orden público patrio, pues, de darse ésta, el Estado Requerido podrá rehusar el cumplimiento del exhorto o carta rogatoria por ser manifiestamente contrario a su orden público.

El objeto de la presente solicitud consiste en lo siguiente:

> "Les ruego notifiquen ustedes el auto de embargo del 23 de noviembre de 1997 al Banco Trasatlántico S. A., Avenida Icaza con Calle Ricardo Arias, Panamá, caja postal 7655, zona 5, República de Panamá, certificando de oficio cuándo, a manos de quién y cómo se habrá efectuado la notificación".

Esta Corporación profirió sentencia calendada 12 de agosto del año 1997, al conocer de unas comisiones rogatorias de solicitud de asistencia jurídico penal libradas por el Primer Fiscal Dirigente, Postfach 101122, 40002 Dusseldorf de la República Federal de Alemania, dentro del mismo proceso que en esta oportunidad es objeto de análisis, no obstante, en esa ocasión se encontraba el proceso en la etapa de instrucción sumarial y parte de las diligencias solicitadas fueron declaradas viables.

En ese sentido, en la sentencia precitada, la Sala decidió acceder parcialmente a su diligenciamiento, sin que mediara convención o tratado respectivo, en virtud de que no eran contrarias al orden público y en consideración a los principios de reciprocidad y de cooperación judicial que debe prevalecer en la comunidad internacional.

Ante este escenario jurídico, observamos que en el caso in examine el Estado Exhortante solicita que se practique "un embargo sobre el saldo positivo en la cuenta número 55-I-0005 en el Banco Transatlántico S. A., Ave. Icaza con Calle Ricardo Arias, Panamá, Caja Postal 7688, Zona 5, República de Panamá" (cfr. foja 96).

Al estudiar esta petición, resulta palmario, que estamos frente a un auto emitido en el extranjero, el cual decreta un embargo sobre una cuenta existente en una institución bancaria protegida por la leyes panameñas. Esta situación transgrede, abiertamente, nuestro ordenamiento interno, toda vez que el Código Judicial dispone que "ninguna sentencia dictada en país extranjero podrá ser ejecutada en Panamá" si no reúne los requisitos impuestos en su artículo 1409. Además, debe cumplir con ciertas formalidades establecidas por el artículo 864 y concordantes del precitado código, de tal forma que quedan excluidos del ámbito de aplicación los actos de ejecución coactivos, pues, los actos de fuerza ejecutiva se someten al régimen de las normas de control del exequátur, concluyendo que el exhorto o carta rogatoria no es la vía idónea para solicitar estos actos.

Además de lo antes indicado, es imprescindible cumplir con los requerimientos y formalidades exigidos por la ley bancaria panameña recientemente reformada.

En este orden de ideas, de igual forma la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias supracitada, es clara cuando determina que no será aplicada a ningún exhorto o carta rogatoria que implique ejecución coactiva.

Como corolario de lo antes expresado, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento de la solicitud de

Asistencia Judicial Internacional en asuntos jurídico penales librada por Landgericht, Tribunal Regional de Dusseldorf, Gran Sala de lo Penal N° X, República Federal de Alemania, dentro del proceso penal contra los industriales Helmut Gottwald, Hagen Raimund Schwarze, Jurgen Michael Hackstein y el abogado Hans-Peter Schillings por estafa y demás delitos".

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ASISTENCIA JUDICIAL LIBRADA POR LA EMBAJADA DE ESTOCOLMO SUECIA PROCEDENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LITUANIA DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES QUE SE EFECTÚAN EN LA CAUSA PENAL N° 20-1-278-96. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho la solicitud de asistencia judicial internacional procedente de la **Fiscalía General de la República de Lituania** dentro de las investigaciones preliminares que se efectúan en la causa penal N° 20-1-278-96.

Es pertinente acotar que a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

El objetivo de la presente solicitud es lograr que en la República de Panamá se efectúen las siguientes investigaciones, en torno a la sociedad panameña **MIKELGATE CORP.**:

I. Interrogatorio del presidente Sr. Pablo Javier Espino, la secretaria Sra. Adelina Mercedes Chavarría de Estribí y la tesorera Sra. Aida May Biggs de la Empresa "Mikelgate Corp." Edificio Swiss Bank, Piso 16, Panamá, Rep. de Panamá, conforme al cuestionario a foja 7 del cuadernillo.

II. Incautación de los documentos existentes en la empresa, a fin de confirmar la declaración de los testigos.

III. Se tomen muestras de la firma del señor Pablo Javier Espino, pues se supone que alguien pudo haber falsificado las mismas en la firma de diversos contratos.

IV. Se requieren muestras experimentales del sello de la empresa "Mikelgate Corp."

Dado que la República de Panamá y la República de Lituania no han suscrito convención o tratado referente a recepción de pruebas en el extranjero en materia penal, la viabilidad de dicho auxilio dependerá de la buena fe que debe imperar entre ambas naciones, siempre que no exista violación a nuestro derecho interno. A este respecto se observa que las autoridades lituanas han ofrecido reciprocidad para casos análogos.

La documentación procedente de la Fiscalía General de Lituania ha incluido para conocimiento de este Tribunal información sobre: 1) el nombre y dirección de los testigos;

2) Una relación de hechos sobre los antecedentes del caso, así como la descripción del procedimiento especial para la práctica de las mismas, siempre que ello no conculque nuestro derecho interno.

El expediente ha sido presentado en su versión original y a continuación la traducción correspondiente al idioma español, sin embargo, no se aprecia que los documentos presentados se encuentren legalizados de conformidad con el artículo 864 del Código Judicial cuyo texto citamos parcialmente:

> "864: Salvo lo dispuesto en convenios internacionales los documentos extendidos en país extranjero serán estimados como prueba, según los casos, si se presentaren autenticados por el funcionario diplomático o consular de Panamá con funciones en el lugar de donde proceda el documento y a falta de ellos, por el representante de una nación amiga ..." o en su defecto, por el Sello de la Apostilla (Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961) que suprime la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros".

Resulta entonces importante destacar que al no ser el Gobierno de Lituania signatario de la Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas rogatorias, o la de Recepción de Pruebas en el Extranjero, las cuales flexibilizan considerablemente los requisitos de legalización cuando los documentos se envían por la vía diplomática, evidentemente estas convenciones resultan inaplicables al caso en particular, razón por la cual, es necesario que los documentos remitidos cumplan con el mínimo de requisitos para su tramitación, entre ellos, la legalización de los documentos.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la solicitud de asistencia judicial librada por el Fiscalía General de Lituania, dentro de las investigaciones preliminares que se efectúan en la causa penal N° 20-1-278-96.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL LIBRADA POR LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL DE FLORENCIA, DENTRO DEL JUICIO SUMARIO QUE SE ADELANTA POR EL DELITO DE CALUMNIA Y ABUSO DE OFICIO EN CONTRA DE NANO ARMANDO, NANO THIERRY, GENGARELLI PAOLO, Y PACI DANIELE. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Asistencia Judicial Internacional librada por la **Fiscalía del Tribunal de Florencia**, **Italia**, dentro del juicio sumario que se adelanta por el delito de calumnia y abuso de oficio contra **Nano Armando**, **Nano Thierry**, **Gengarelli Paolo y Paci Daniele**.

La solicitud de las autoridades italianas tiene la finalidad de que se examinen los libros de la sociedad I.M.I.S.A. Intermining International, S. A., con domicilio en Tower Plaza, Calle 50, apartado 8799, Panamá 5, incluyendo la documentación custodiada en las oficinas públicas, para efectos de que se determine si, Gengarelli Paolo, Paci Daniele, Mancinelli Giorgio, Papagni Doménico, Papagni Giancinto y Sandiform, sociedad de nombre colectivo, poseen acciones de la citada sociedad I.M.I.S.A. y, en consecuencia, verificar el número

de acciones en poder de cada sujeto y la fecha en la cual las adquirieron, modalidad de compra y forma de pago. Igualmente determinar si los compradores o el comprador de las acciones reside en la República de Panamá y proporcionar las copias de toda la documentación concerniente a la compra y la tenencia de dichos títulos, así como del encargo para la compra y pago y de las resoluciones judiciales que hayan sido ejecutadas. Finalmente, averiguar en qué fecha la sociedad Intermining Mutual Fund, S. A. (IMFA) se convirtió en INTERMINING INTERNATIONAL, S. A. (IMSA), y verificar la fecha en que se emitieron los certificados accionarios en substitución de los documentos provisionales de compra IMFA.

Al respecto es pertinente destacar que esta Corporación de Justicia es competente para "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que puede cumplirlo", de acuerdo a lo estatuido en el artículo 101 numeral 3 del Código Judicial. Por consiguiente procede examinar la viabilidad del exhorto bajo análisis.

En este sentido es preciso señalar que Panamá y la República de Italia no han celebrado convenio, tratado o protocolo que rijan y/o establezcan los requisitos y disposiciones indispensables para evaluar las solicitudes en materia penal efectuadas a través de la vía del exhorto, por lo que dicho examen se verificará tomando como parámetro los principio de reciprocidad y buena fe que deben primar entre los países de la comunidad internacional, respetándose, no obstante, el ordenamiento interno Panameño, como fuente de derecho supletorio, dado el vacío existente en lo concerniente a normas de carácter internacional, como mencionáramos anteriormente.

Al respecto se observa que el negocio en cuestión cumple con los requisitos indispensables de legalización (mediante acotación de apostilla) y presentación de los documentos en idioma castellano, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 864 del Código Judicial. Debe expresarse que la citada disposición es aplicable igualmente al expediente bajo estudio, dada la carencia de un instrumento internacional aprobado por ambos países que regule el tópico de las legalizaciones, tal como mencionáramos en párrafos superiores.

Bajo esta óptica es importante señalar que la calumnia y el abuso de oficio (abuso de autoridad en la República de Panamá) está igualmente tipificados como delitos en el Código Penal Panameño en los artículos 172-175 y 336, respectivamente.

Por lo que, en consecuencia, se evidencia la concurrencia del principio de la doble punibilidad, necesario para poder realizar algún tipo de investigación en la República de Panamá, tomando en consideración que el funcionario designado debe tener facultades legales para efectuarlas, de manera que no incurra en extralimitación de funciones.

En este sentido es importante resaltar que, para efectos de acceder al examen de los libros y documentación de la sociedad I.M.I.S.A. Intermining International S. A., tal como lo solicitan las autoridades italianas, es indispensable que concurran, previamente una serie de elementos que avalen la práctica de una diligencia exhibitoria, cual es el mecanismo legal designado por el artículo 89 del Código de Comercio panameño para llevar a cabo esta clase específica de diligencia judicial. Sin embargo, no es viable obtener fotocopias de dichos libros u otro tipo de actas del comerciante, puesto que el mismo artículo del Código de Comercio no permite que se obligue al comerciante a suministrar tales documentos. Por lo que, en consecuencia, es indispensable para efectos de realizar el examen solicitado:

1. La determinación concreta de los asientos en los libros que deban examinarse.

2. Debe ilustrarse de igual manera a esta Sala de la Corte en lo atinente al proceso que se lleva a cabo en la Fiscalía del Tribunal de Florencia; presupuesto éste necesario, en virtud del mencionado artículo 89 del Código de Comercio, que requiere el conocimiento de los elementos de juicio mínimos en lo concerniente al interés o responsabilidad en el asunto o cuestión que se ventila en la

República de Italia, por parte de la sociedad titular de los documentos cuya investigación se solicita, y si es posible inclusive que pueda vincularla con las personas naturales mencionadas por las autoridades italianas. En este orden de ideas y al examinar el negocio que nos ocupa, observa la Corte que las autoridades italianas no efectúan un relato suscinto de los motivos que las impulsan a realizar la petición de auxilio que se somete a nuestra consideración, adjuntando las piezas procesales e información indispensables para estimar viable su diligenciamiento; máxime cuando para precisar, y obtener la información relativa a los tenedores de las acciones es necesario remitirse a los libros de actas de la sociedad, ya que dicha información no se encuentra registrada en la institución registral panameña.

No obstante, es permisible acceder a que el Registro Público en referencia informe acerca de la fecha en la cual la "sociedad INTERMINING MUTUAL FUND, S. A. (IMFA) se convirtió en INTERMINING INTERNATIONAL, S. A. (IMSA), así como a verificar a partir de qué fecha se emitieron los relativos certificados accionarios IMSA en substitución de los documentos provisionales de compra IMFA".

Es importante tener presente si la transmisión de las actas judiciales a las cuales se alude en el presente exhorto, se trata de resoluciones judiciales que deban obtenerse de los archivos del comerciante, sería necesario que se identifique con claridad y de manera concreta su fecha para efectos de que, mediante diligencia exhibitoria, puedan ser objeto de examen; No obstante, si es necesario que éstas se obtengan de un juzgado, sería preciso que se proporcione la información indubitable para localizarlas en el o los Tribunales en los cuales puedan encontrarse, siempre y cuando sean resoluciones que decidan de manera definitiva un negocio y por tanto se encuentren en archivos, ya que de lo contrario, solamente a las partes de un proceso se les puede entregar copias de los procesos que se encuentren en trámite, por lo que además se debe comprobar en este último caso la calidad de parte (cfr. art. 183 numeral 4, en concordancia con el artículo 478, ambos del Código Judicial). Esta categoría de parte es reconocida a favor del imputado, del ministerio Público como titular de la acción pública que investiga un delito determinado y al acusador particular, tal como lo exigen los artículos 1978 literales a y b, 2006, 2008, 2010 y 2011 del mismo cuerpo legal.

En cuanto a la prueba testimonial solicitada es indispensable contar con la preguntas que deban formularse, así como la dirección del actual tenedor de las acciones (posterior a la suscripción original) con quien deba practicarse tal diligencia, y los hechos que impulsan dicho interrogatorio; por lo que no es viable acceder a dicha prueba.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN PARCIALMENTE VIABLE la Asistencia Judicial Internacional librada por la Fiscalía del Tribunal de Florencia, Italia, dentro del juicio sumario que se adelanta por el delito de calumnia y abuso de oficio contra Nano Armando, Nano Thierry, Gengarelli Paolo y Paci Daniele, en el sentido de que se SOLICITA al Registro Público certifique acerca de la fecha en la cual la sociedad INTERMINING MUTUAL FUND, S. A. (I.M.F.A.) se convirtió en INTERMINING INTERNATIONAL, S. A. (I.M.S.A.), así como verificar a partir de qué fecha se emitieron los certificados accionarios I.M.S.A en substitución de los documentos provisionales de compra I.M.F.A.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

LUZ STELLA RODRÍGUEZ SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN

JUDICIAL DE DIVORCIO EMITIDA POR LA CORTE SUPERIOR DEL ESTADO DE ARIZONA EN EL JUICIO DE LUZ STELLA RODRÍGUEZ CONTRA MISIL JOHN WHELIHAN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado ESTEBAN GARCÍA M., actuando en representación de la señora LUZ STELLA RODRÍGUEZ, formuló solicitud ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema para que reconozca y declare ejecutable en la República de Panamá la sentencia de 21 de julio de 1980, identificada con el N° 39253, expedida por la Corte Superior del Estado de Arizona, dentro de y por el Condado de Cochise, Estados Unidos de América, mediante la cual declara disuelto el vínculo matrimonial de **Misil J. Whelihan** y **Luz Estela Whelihan**, además, confiere la custodia de la niña menor JENNIFER WHELIHAN de un año y medio a la madre y el derecho de visitas razonables al padre.

El peticionario apoya su solicitud manifestando que el matrimonio entre Misil John Whelihan y Luz Stella Rodríguez se celebró en Panamá el 10 de mayo de 1975, y que el mismo fue disuelto por la Corte Superior del Estado de Arizona dentro de y por el Condado de Cochise.

En adición a lo antes expresado, el recurrente adjuntó como material probatorio, el Certificado de Matrimonio, expedido por la Dirección General del Registro Civil, y la sentencia extranjera autenticada y traducida al idioma español por intérprete público autorizado (cfr. de foja 3 a 7).

Una vez admitida la solicitud presentada, se corrió traslado al señor Procurador de la Nación, para que externara concepto, quien respondió a través de la Vista N°9 de 16 de abril de 1998, concluyendo que debe accederse a la solicitud formulada en el presente caso, pues, cumple con todos las formalidades exigidas por nuestra legislación.

Corresponde a esta Corporación examinar si la sentencia objeto de esta solicitud cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 1409 del Código Judicial para que se declare su ejecutabilidad en el territorio nacional.

De las pruebas incorporadas al expediente se observa que el matrimonio fue efectuado el 10 de mayo de 1975 en la Ciudad de Panamá, y su disolución se llevó a cabo ante un tribunal extranjero competente conforme a las normas del Derecho Internacional, sin vulnerar lo establecido en la legislación nacional.

Por otro lado, se observa que la sentencia extranjera es resultado del ejercicio de una pretensión personal de efectos lícitos en nuestro país, está debidamente traducida, autenticada y no violenta los principios del Derecho Internacional Privado reconocidos por nuestro derecho, llenando a cabalidad los requerimientos del Artículo 864 del Código Judicial.

En lo atinente a la rebeldía, se desprende de la sentencia supra citada, que la peticionaria estuvo presente durante el proceso, toda vez que le fue conferida la custodia de su menor hija y a su vez ésta es quien solicita que se reconozca dicha sentencia en nuestro país, por tal razón, consideramos que no fue vulnerado el principio procesal de contradicción o bilateralidad, el cual reagrupa una serie de reglas de conductas procesales que se refunden al principio de oportunidad del demandado para comparecer, al principio de cognición sobre la acción incoada en su contra.

En este orden de ideas, la sentencia extranjera bajo estudio, además, confiere la custodia de la niña JENNIFER WHELIHAN de un año y medio, a su madre LUZ STELLA RODRÍGUEZ, y al padre MICHAEL J. WHELIHAN el derecho a visitas razonables, así como también establece en doscientos treinta y tres balboas (B/.233.00) mensuales, la suma de dinero que el padre debe darle a la menor durante su minoridad en calidad de alimentos.

Dentro de este contexto, el Código de Familia dispone lo siguiente:

> ARTÍCULO 6: La ley regula todo lo relativo a los derechos y deberes de familia, al estado civil, la condición y capacidad legal de las personas; y obliga a los panameños, aunque residan en el extranjero. En caso de que la ley nacional de un extranjero no sea aplicable, se tendrá, en su defecto, la ley que señale el Estado al cual pertenece. Se entiende por ley nacional, la ley del estatuto personal de las partes, el cual se determina por la nacionalidad del individuo o de las partes.
>
> Las formas y solemnidades de los actos se determinan por la ley del país en que se otorguen; a menos que, tratándose de actos que hayan de cumplirse o surtir efecto en Panamá, los otorgantes prefieran sujetarse a la ley panameña.
>
> ARTÍCULO 7: No se aplicará la ley extranjera cuando sea contraria al orden público panameño, o cuando la aplicación o invocación del derecho extranjero haya sido constituido en fraude a la ley que debió regular el acto o la relación jurídica.
>
> Los tribunales no ejecutarán resoluciones judiciales o administrativas que declaren algún derecho, sin que se confirme que las resoluciones proferidas en país extranjero hayan sido emitidas por autoridad competente, conforme a la ley interna extranjera aplicable y que no haya sido dictada en ausencia".

En ese sentido, nuestro ordenamiento en materia de familia, recoge algunos puntos que contempla el Código Judicial supra citado tal como es el de que la sentencia extranjera no debe vulnerar el orden público, ni el principio del contradictorio, analizados en párrafos precedentes.

Nuestro ordenamiento regula lo relativo a alimentos, en los Artículos 377, 378 y concordantes del Código de Familia.

En lo atinente a la guarda, crianza y del régimen de comunicación y visita, se refieren los Artículos 326, 327 y concordantes del código precitado.

Por todo lo antes expuesto, considera la Sala que la solicitud de ejecución de sentencia es viable conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial.

Como corolario de lo antes expresado, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de 21 de julio de 1980, identificada con el N° 39253, expedida por la Corte Superior del Estado de Arizona, dentro de y por el Condado de Cochise, Estados Unidos de América, mediante la cual declara disuelto el vínculo matrimonial de Michael J. Whelihan y Luz Estela Whelihan, además, confiere la custodia de la niña menor JENNIFER WHELIHAN de un año y medio a la madre y el derecho de visitas razonables al padre.

Notifíquese y Cúmplase,

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERRY LEE SCOTT, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997 EN LA CORTE DEL CIRCUITO DEL CONDADO DE COFFE, ALABAMA ENTERPRISE DIVISIÓN, QUE DECLARE DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA a NELLY PATRICIA ACOSTA AGUILAR. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y

OCHO (1998)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia conoce de la solicitud de reconocimiento y ejecución de la Sentencia Extranjera de 24 de septiembre de 1997 dictada por la Corte del Circuito del Condado de Coffee, Alabama Enterprise División, de los Estados Unidos de América, dentro del caso N° DR-97-176, mediante la cual se decreta la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre **Terry Lee Scott** y **Nelly Patricia Acosta Aguilar** ante el Juzgado Primero Municipal del Distrito de Panamá, República de Panamá, el 22 de abril de 1997. Por lo que en consecuencia se solicita a este Alto Tribunal acceder a la inscripción de la marginal de divorcio correspondiente en el Registro Civil panameño.

A este respecto debe recordarse que mediante resolución de 23 de abril de 1998, el Magistrado sustanciador estimó necesario exigir la autenticación de la sentencia de divorcio de 24 de septiembre de 1997, expedida por la Corte de Circuito del Condado de Coffe, Alabama Enterprise División, de los Estados Unidos de América, (legible a fojas 5-6) la cual originalmente se había suministrado a este Tribunal como copia simple. Para tal diligencia se concedió al interesado un término extraordinario de 45 días, dado que, el documento en referencia correctamente legalizado, es indispensable para acceder a la solicitud del petente, conforme lo señala el artículo 1409 de Código Judicial.

En este orden de ideas se observa que la sentencia de divorcio en mención, ha sido aportada en esta oportunidad debidamente autenticada por el Vicecónsul de la República de Panamá en Miami, Florida, Estados Unidos de América, en cumplimiento del precitado artículo 1409 numeral 4 del Código Judicial, por lo que en consecuencia, procede acceder a la solicitud formulada por el señor Terry Lee Scott.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN EJECUTABLE la sentencia extranjera de 24 de septiembre de 1997 dictada por la Corte del Circuito del Condado de Coffee, Alabama Enterprise División, de los Estados Unidos de América, dictada dentro del caso N° DR-97-176, mediante la cual se decreta la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre Terry Lee Scott y Nelly Patricia Acosta Aguilar ante el Juzgado Primero Municipal del Distrito de Panamá, República de Panamá, el 22 de abril de 1997. Así mismo se ORDENA al Registro Civil efectuar las anotaciones correspondientes al caso conforme se establece en la Sentencia que se ejecuta.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IDALIA C. GUTIÉRREZ O IDALIA DEL CARMEN ACOSTA ORTEGA SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE DE DISTRITO DEL 11TH CIRCUITO JUDICIAL DEL CONDADO DE DADE, ESTADO DE FLORIDA EL DÍA 18 DE JUNIO DE 1990. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado DAVID COHEN VALDES, actuando en representación de la señora

IDALIA DEL C. DE GUTIÉRREZ , formuló solicitud ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema para que reconozca y declare ejecutable en la República de Panamá la sentencia de 18 de junio de 1990, identificada con el N° 90-23417 FC 01, expedida por el Tribunal de Circuito del 11MO Circuito Judicial en y por el Condado Dade, Florida, Estados Unidos de América, mediante la cual declara disuelto el vínculo matrimonial de **IDALIA C. GUTIÉRREZ** y **LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ.**

El peticionario fundamenta su solicitud manifestando que Luis Alberto Gutiérrez e Idalia C. Gutiérrez contrajeron matrimonio civil el día 9 de enero de 1984 en los Estados Unidos de América, el cual se encuentra inscrito en la sección de matrimonios en el extranjero de la Dirección de Registro Civil y posteriormente, fue disuelto por el Tribunal de Circuito del 11MO Circuito Judicial en y por el Condado Dade, Florida, E.U.A.

En adición a lo antes expresado, el recurrente adjuntó como material probatorio, el Certificado de inscripción de Matrimonio celebrado en el extranjero (cfr. foja 4), expedido por la Dirección General del Registro Civil, y la sentencia extranjera autenticada y traducida al idioma español por intérprete público autorizado (cfr. de foja 6).

Una vez admitida la solicitud presentada, se corrió traslado al señor Procurador de la Nación, para que externara concepto, quien respondió a través de la Vista N°10 de 1 de mayo de 1998, concluyendo que lo impetrado cumple con los requisitos exigidos por nuestra normativa y que debe accederse a dicha petición.

Corresponde a este Tribunal examinar si la sentencia objeto de la presente solicitud cumple con lo estatuído en el Artículo 1409 del Código Judicial para que se declare su ejecución en el territorio nacional.

De las pruebas incorporadas al expediente se observa que el matrimonio fue efectuado el 9 de enero de 1984 en los Estados Unidos de América, y su disolución se llevó a cabo, de igual forma, ante un tribunal de los Estados Unidos de América, conforme a las normas del Derecho Internacional, sin vulnerar lo establecido en la legislación nacional.

Por otro lado, se infiere que la sentencia extranjera es resultado del ejercicio de una pretensión personal de efectos lícitos en nuestro país, está debidamente traducida, autenticada y no violenta los principios del Derecho Internacional Privado reconocidos por nuestro derecho, llenando a cabalidad los requerimientos del Artículo 864 del Código Judicial.

En lo atinente a la rebeldía, consideramos que no fue vulnerado el principio del contradictorio, toda vez que ambas partes fueron notificadas en debida forma.

Por todo lo antes expuesto, considera la Sala que la solicitud de ejecución de sentencia extranjera es viable, conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial.

Como corolario de lo antes expresado, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de 18 de junio de 1990, identificada con el N° 90-23417 FC 01, expedida por el Tribunal de Circuito del 11MO Circuito Judicial en y por el Condado Dade, Florida, Estados Unidos de América, mediante la cual declara disuelto el vínculo matrimonial de IDALIA C. GUTIÉRREZ y LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ y AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS

EXHORTO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA JUAN CARLOS CARPIO AGUILAR POR EL SUPUESTO DELITO DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE HEROÍNA EN PERJUICIO DE LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Subdirectora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, mediante Nota N° A.J. N° 447, calendada 2 de abril de 1998, exhorto librado por el **Juzgado de Instrucción de Alajuela**, **República de Costa Rica**, relativo a la causa penal número 5180-6-97 seguida contra **JUAN CARLOS CARPIO AGUILAR** Y OTROS por el delito de TRÁFICO INTERNACIONAL DE HEROÍNA en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA.

La petición formulada por el Estado Requiriente versa sobre lo siguiente:

> "... se ha resuelto remitirle el presente EXHORTO dirigido hacia LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE PANAMÁ, PANAMÁ, FISCALÍA DE DROGAS, FISCAL SEGUNDO, Licdo. Patricio Elías Candanedo M. a fin de que se sirva informar:
>
> a. Fecha de la detención de los colombianos JOHN JAIRO MOTA ENAO y ABELARDO MOTA ENAO, en la ciudad de Panamá, Panamá.
>
> b. Motivo de la detención.
>
> c. Si se le decomisó algún tipo de droga y qué tipo de droga, así como la cantidad.
>
> d. Situación jurídica de los detenidos y si ya se realizó un juicio en su contra, de ser negativo esto último, cuándo se estaría realizando".

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y Comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Seguidamente procede el Tribunal a verificar la existencia de convenios internacionales de asistencia jurídico penal, en materia de delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena el 20 de diciembre de 1988, ratificada por Panamá (Ley 20 de 7 de diciembre de 1993) y Costa Rica de igual forma, constituye el instrumento internacional bajo el cual analizaremos el presente suplicatorio.

De conformidad con el artículo 864 del Código Judicial, se requiere que los documentos procedentes del extranjero cumplan con el requisito de la autenticación. Esta puede darse vía consular o diplomática o a través del mecanismo de la apostilla.

La documentación aportada fue autenticada vía consular, de tal forma que se entiende que fue expedida de conformidad con la ley local del lugar donde fueron extendidos. No obstante, no se aprecian escritos o un resumen de los hechos que sirvan de fundamento a la diligencia solicitada, tal como lo preceptúa el artículo 7, numeral 10, incisos c y f de la Convención invocada, constituyendo

este, un requisito indispensable para su cumplimiento.

Los señalamientos que preceden conducen a esta Superioridad a considerar que no es posible acceder a lo impetrado en la presente oportunidad, toda vez que no se aportó información adicional acerca de los hechos motivos de la presente investigación.

Es pertinente señalar al Estado exhortante, que una vez subsanada la omisión, la Sala se encuentra en la disposición de prestar la colaboración internacional requerida.

Como corolario de lo antes expresado, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto librado por el Juzgado de Instrucción de Alajuela, República de Costa Rica, relativo a la causa penal número 5180-6-97 seguida contra JUAN CARLOS CARPIO AGUILAR Y OTROS por el delito de TRÁFICO INTERNACIONAL DE HEROÍNA en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL FISCAL DELEGADO CON SEDE EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, COLOMBIA DONDE SOLICITAN CERTIFICACIÓN RESPECTO SI EN DICHO TERRITORIO, SE JUZGA O HA JUZGADO POR EL DELITO DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, A INTEGRANTES DEL CARTEL DE LA COSTA ATLÁNTICA COLOMBIANA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CATORCE (14) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Consulado General de Colombia en Panamá, ha remitido a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, mediante Nota N° CO. N° 217, calendada 29 de marzo de 1998, exhorto librado por la **Fiscal Regional Delegada ante Jueces Regionales de la Dirección Regional de Fiscalías de Barranquilla, de la Fiscalía General de la Nación**, República de Colombia, relativo al proceso de Radicación Nro. 7797, dentro de la investigación que se origina en información Secreta ORDEN DE OPERACIONES N° 0400-OPERACIÓN REMORA II emanado del COMANDO ESPECIAL CONJUNTO BLOQUE DE BÚSQUEDA FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, calendada octubre 11 de 1996, en Santafé de Bogotá, D.C.

La colaboración solicitada en el suplicatorio bajo análisis versa en lo siguiente:

> "... Comisión para que se requiera de la correspondiente Autoridad Judicial en ese país certificación respecto si en dicho territorio, se juzga o ha juzgado por delito de TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES, a integrantes del Cartel de la Costa Atlántica Colombiana con dependencia jerárquica de ALBERTO ORLANDEZ GAMBOA (a) EL CARACOL, cabecilla del citado Cartel, así como de las sub-organizaciones: FAMILIA CONEO RÍOS - CONTRERAS, CTCIM (r)- JOSÉ DAVID AMORTEGUI FORERO y la organización Cartel de San Andrés liderada en la Costa por NICOLÁS SERNA NAVARRO; concretamente contra las personas que a continuación se relacionan: ... En el evento de que curse o haya cursado proceso contra los prementados, el señor Cónsul exhortará a la respectiva autoridad judicial para que se sirva trasladar la prueba pertinente o copia de fallos o sentencias en caso de haberse producido" (cfr. foja 4 y 5).

En adición a lo antes transcrito, la autoridad exhortante suministra además, una lista con no menos de noventa (90) nombres de personas que son objeto de investigación por parte de las autoridades colombianas, a fojas 4 y 5.

Se infiere del artículo 101 numeral 3, del Código Judicial, que es competencia de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, "recibir los exhortos y Comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

En primer lugar, resulta pertinente establecer si las Repúblicas de Panamá y Colombia han suscrito algún instrumento internacional bilateral o multilateral, sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, o sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero en materia penal.

Sobre este punto, observa la Sala, que ambas naciones son suscriptoras de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (Ley N° 13 de 23 de octubre de 1975), en materia civil o comercial y no en materia jurídico penal, no obstante, al no existir un compromiso en el ámbito internacional que respalde el presente suplicatorio, será necesario analizarlo según los principios de reciprocidad y de auxilio judicial internacional que deben imperar en la comunidad internacional.

Descartando así la invocación de un convenio o tratado correspondiente a la materia, esta Superioridad somete la solicitud bajo estudio, en primera instancia, a la lex fori, específicamente, a las normas del Código Judicial como fuente supletoria.

En este orden de ideas, el Artículo 864 del Código Judicial establece:

> "ARTÍCULO 864: Salvo lo dispuesto en convenios internacionales los documentos extendidos en país extranjero serán estimados como prueba, según los casos, si se presentaren autenticados por el funcionario diplomático o consular de Panamá con funciones en el lugar de donde proceda el documento y a falta de ellos, por el representante diplomático o consular de una nación amiga. En este último caso, se acompañará un certificado del Ministerio de Relaciones Exteriores en que conste que en el lugar de donde procede el documento no hay funcionario consular o diplomático de Panamá.
>
> Se presume, por el hecho de estar autenticados así, que los documentos están expedidos conforme a la ley local de su origen, sin perjuicio de que la parte interesada compruebe lo contrario. ..."

La documentación aportada, dentro de esta solicitud, no cumple con los requisitos impuestos en la norma antes transcrita, toda vez que no constan las autenticaciones consulares respectivas o, en su defecto, la incorporación de la apostilla, o en su manera más simple, ni siquiera está refrendada por el sello de la autoridad emisora, lo cual indique que fueron expedidos conforme la ley local del lugar donde fueron extendidos.

Antes de arribar a la decisión, este Tribunal desea expresar que en casos que guardan gran similitud con la presente petición, se ha determinado que el hecho de que no medie un instrumento internacional que respalde la solicitud, no constituye un obstáculo para acceder a prestar el auxilio internacional en materia penal, y muy específicamente, en lo referente al tráfico internacional de drogas prohibidas, en donde la tradición jurisprudencial ha sido la de colaborar con el Estado Requiriente, atendiendo a los principios de reciprocidad y auxilio judicial internacional, no obstante, es imprescindible llenar a cabalidad los requerimientos fundamentales como es el caso de las autenticaciones.

Como corolario de lo antes expresado, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional, del exhorto librado por la Fiscal Regional Delegada ante Jueces

Regionales de la Dirección Regional de Fiscalías de Barranquilla, de la Fiscalía General de la Nación, República de Colombia, relativo al proceso de Radicación N° 7797, dentro de la investigación que se origina en información Secreta ORDEN DE OPERACIONES N° 0400-OPERACIÓN REMORA II emanado del COMANDO ESPECIAL CONJUNTO BLOQUE DE BÚSQUEDA FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, calendada octubre 11 de 1996, en Santafé de Bogotá, D.C., República de Colombia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General
=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO REFERENTE A LA CAUSA PENAL 95-001021-392-PE CONTRA HEINER CARVAJAL GONZÁLEZ Y OTRO EN EL SUPUESTO DELITO DE DAÑO A LA FE PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FABREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, exhorto librado por el **Juzgado Cuarto de Instrucción de Liberia, Guanacaste, Costa Rica** dentro de la causa penal 95-001021-392-PE contra **Heiner Carvajal González** y otros por el supuesto delito de daño a la fe pública.

La petición formulada por el Estado requiriente consiste en la citación a cuatro (4) personas detalladas a foja 1 del expediente, a fin que declaren sobre el robo de vehículos cuyas denuncias fueron presentadas en la Agencia de San Francisco de la Policía Técnica Judicial, en la República de Panamá.

En efecto se observa que la documentación aportada se encuentra debidamente autenticada por la Cónsul General de Panamá en Costa Rica, asimismo cuenta con la certificación de la firma del Cónsul realizada por el Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cabe destacar que tanto el Estado de Costa Rica como la República de Panamá han ratificado la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero la cual sólo es aplicable a casos en materia civil y comercial. En esta oportunidad, la solicitud in examine recae sobre materia penal, por lo cual el Estado requerido se abroga el derecho de rechazar o declarar la viabilidad de la solicitud.

Ante estas circunstancias es pertinente acotar en primer lugar, que en atención a lo preceptuado en el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial, es competencia de esta Sala de la Corte "Recibir los exhortos y Comisiones Rogatorias librados por Tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario que debe cumplirlo".

Debe precisarse que el requerimiento efectuado por el juzgado costarricense, no ha sido acompañado por los escritos y resoluciones que lo motiven, así como tampoco de un informe resumido del proceso y de los hechos materia del mismo, lo cual resulta imperativo para la obtención de la prueba, situación que infringe lo preceptuado en el artículo IV de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero.

En adición, es solicitada la citación de testigos a efectos de que declaren sobre el robo de determinados vehículos detallados dentro del cuadernillo, sin embargo, no se acompaña el listado de preguntas, lo cual hace imposible la realización de la diligencia.

En mérito de lo expuesto, la SALA CUARTA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el exhorto librado por el Juzgado de Instrucción de Liberia, Costa Rica dentro del Proceso Penal N° 95-001021-392-PE seguido contra Heiner Carvajal González y otros por el supuesto delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Fe Pública y ORDENA la devolución del presente negocio a la cancillería panameña para su posterior devolución a las autoridades costarricenses.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

FÉLIX MANUEL ROSARIO BRUJAN, INTERPONE DENUNCIA CONTRA EL LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA, POR FALTA A LA ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ingresó a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno que contiene la denuncia por Falta a la Ética y Responsabilidad del Abogado, interpuesta por **FÉLIX MANUEL ROSARIO BRUJAN** contra el licenciado **JACINTO CEREZO GÓNDOLA**.

El Tribunal de Honor, en virtud de lo preceptuado por el Artículo 26 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, solicitó mediante Vista de 23 de junio de 1997 (cfr. foja 23 a 26), la citación a juicio del licenciado JACINTO CEREZO GÓNDOLA por considerar que ha infringido los acápites "CH", "E", "K" y "M" del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del abogado.

Afirma el denunciante en su escrito calendado 31 de enero de 1996, dirigido al Tribunal de Honor, y corroborado en la misma fecha en el formulario de denuncias del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados (cfr. fojas 1 y 2), que contrató los servicios de un supuesto abogado de nombre Elmer Alejandro Córdoba, no obstante, que al enterarse de su falsa identidad como profesional del derecho, conversó la situación con el licenciado Cerezo Góndola, quien al parecer conocía a esta persona, y aceptó el hecho de que no era abogado, y decidieron de común acuerdo que este último asumiría su representación para proseguir los trámites de obtención de visa de inmigrante y permiso de trabajo. Además, manifiesta el denunciante que le entregó al señor Elmer Alejandro Córdoba un televisor Crown, un VHS Sankey y la suma de cuatrocientos diez balboas (B/.410.00), tal como se desprende de su escrito y de los recibos que obran a fojas 7 y 8, en concepto de abono a honorarios.

En adición a lo antes expresado, el señor Félix Manuel Rosario agrega que el señor Elmer A. Córdoba le entregó al licenciado Cerezo Góndola el dinero y los documentos que él le había entregado para la ejecución del trabajo.

Dentro de este contexto, el denunciante reitera que el licenciado Jacinto Cerezo Góndola no realizó trámite alguno a su favor ante las instancias necesarias, y que además ciertos documentos se fueron venciendo, los cuales tienen un alto costo para su obtención, tal es el caso de la prueba de SIDA.

Como material probatorio, además de los recibos precitados en párrafos anteriores, el denunciante aportó copia de dos recibos que obran a foja 6, uno por la suma de ciento cuarenta y cinco balboas (B/.145.00) y el otro por cuarenta balboas (B/.40.00), en ambos aparece el licenciado Jacinto Cerezo Góndola como la persona que recibe este dinero del señor Félix Manuel Rosario en concepto de abono a honorarios por la tramitación de visa de inmigrante y permiso de trabajo con fecha de 6 de diciembre de 1995.

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados en su Vista, resalta el hecho de que "el denunciado en efecto, retuvo el dinero y los documentos de su cliente relacionado con el objeto de marras, ni rindió a su cliente las cuentas de su gestión al igual que permitió que sus servicios profesionales fueran no solo explotados sino también controlados y utilizado el nombre del denunciado por persona natural sea éste denominado ELMER FIGUEROA O ELMER ALEJANDRO CÓRDOBA, personas quienes indiscutiblemente están indirectamente ejerciendo una profesión no idónea, lo cual amerita elevar el expediente a la Fiscalía de Turno, para iniciar la investigación por ejercicio ilegal de la profesión de abogado, a tal efecto".

Dentro de este orden de ideas, el TRIBUNAL DE HONOR arribó a la conclusión de que el LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA infringió los acápites "CH", "E", "k" y "M" del artículo 34 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, por tanto, resuelve solicitar a este Tribunal la CITACIÓN A JUICIO DEL DENUNCIADO.

Mediante providencia de 26 de agosto de 1996, se ordenó darle traslado del expediente al denunciado conforme al artículo 28 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, con el fin de que el licenciado Jacinto Cerezo Góndola presentara los escritos de excepciones o de oposición correspondientes a la petición de llamamiento a juicio solicitada por el Tribunal de Honor.

El licenciado Jacinto Cerezo Góndola presentó en tiempo oportuno, el escrito de oposición a la petición de llamamiento a juicio solicitada por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, el cual, en su parte medular, lo fundamenta en los siguientes puntos:

> "El 6 de diciembre de 1995, el señor Rosario, recomendado por el señor Elmer Figueroa, compareció a nuestras oficinas profesionales para que se le gestionara y obtuviera visa de inmigrante, dada su calidad de casado con panameña y el permiso de trabajo.
>
> Una vez obtenido el abono de honorarios, previa absolución de la consulta; el señor Rosario firmó los poderes correspondientes; se le atendió las veces que llegó a nuestro Despacho; se le orientó y obtuvo el formulario de antecedentes personales, que se retiraba en el Departamento de Migración y Naturalización, su historial penal y policivo, los certificados de matrimonio y nacimiento del nacional panameño. Todas estas actuaciones y gastos por el abono recibido, donde los honorarios serían pagados cómoda y parcialmente fueron gestionados íntegramente.
>
> ... Es así, entonces, que el incumplimiento por parte del señor Rosario en hacernos llegar el cheque a favor del Tesoro Nacional y su declaración de renta, con su correspondiente recibo de pago, más concretamente, la imposibilidad de entregarme este último documento suscitó el problema entre nosotros, tal como dije en informe anterior.
>
> La relación jurídica existente entre el señor Elmer Figueroa con el señor Félix Manuel Rosario, antes que se apersonaran a nuestra oficina, al ser ignorada por nosotros, escapa, lógicamente a nuestra dirección o dominio".

Teniendo como marco de referencia los hechos anteriores, la Sala pasa al análisis del contenido de la denuncia en los siguientes términos:

Al analizar la actuación del licenciado JACINTO CEREZO GÓNDOLA frente a lo preceptuado en los artículos 10 y 11 del Código de Ética y Responsabilidad del Abogado, evidencia, en primer término, que el licenciado Cerezo Góndola no determinó un contrato de servicios profesionales el cual definiera los derechos y las obligaciones propias dimanantes de su defensa, para lo cual fue contratado, y de igual forma, los derechos y obligaciones pertinentes al señor Félix Manuel Rosario, persona que contrató los servicios profesionales del licenciado Cerezo Góndola. Esta condición, de contratación verbal, que se ha mantenido como una constante en casi todos los procesos que ha conocido la Sala, y que hemos denominado la génesis del problema, conlleva a confrontamientos que perjudica el servicio profesional que debe prestar todo profesional del derecho, quien está compelido a evitar controversias con sus representados por el pago de honorarios, hasta donde ello sea compatible con su dignidad y con su derecho a recibir una compensación razonable por sus servicios, no obstante, podrá recurrir a la demanda judicial contra su poderdante para hacer efectivo su crédito, cuando ello fuere necesario (cfr. art. 11 del Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado).

Resulta un hecho cierto que el licenciado Cerezo Góndola recibió el día 6 de diciembre de 1995, ciento ochenta y cinco balboas (B/.185.00), según se desprende de la fotocopia de dos recibos que obran a foja 6, en concepto de abono a los honorarios profesionales por la tramitación de visa de inmigrante y permiso de trabajo, no obstante, el señor Félix Manuel Rosario aduce que el señor Elmer Córdoba le hizo el traspaso al denunciado del dinero y de los documentos respectivos que guardan relación con su caso. Sobre este particular, el licenciado Cerezo Góndola no hace referencia en su escrito a esta situación.

No obstante, el licenciado Cerezo Góndola establece que el problema con el señor Félix Manuel Rosario surge a partir de que su poderdante incumplió al no hacerle entrega de un cheque a favor del Tesoro Nacional y su declaración de renta, con el correspondiente recibo de pago, requisitos indispensables, según el denunciado, sin los cuales no se podía proseguir con la tramitación para la obtención de la visa de inmigrante ante la Dirección de Migración.

Estos hechos no han sido comprobados, toda vez que el señor Félix Manuel Rosario hace mención en su denuncia de que el licenciado Cerezo Góndola mantiene en su poder documentos suyos, no obstante no proporciona un detalle de los mismos.

Dentro de este orden de ideas, a requerimiento del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, la Dirección Nacional de Migración y Naturalización respondió mediante nota calendada 19 de abril de 1996, (cfr. foja 22) en la cual expresa que "el licenciado Jacinto Cerezo Góndola no ha presentado a la fecha ninguna solicitud de visa a favor del ciudadano dominicano FÉLIX MANUEL ROSARIO BRUJAN".

Ante este escenario de hechos, se mantienen situaciones oscuras; por un lado, el denunciante solicita que se le devuelva su dinero y sus documentos, por otra parte, se infiere del escrito de oposición presentado por el denunciado que sólo recibió un abono a sus honorarios, más no especifica la cantidad, lo cual ha conllevado a que no se dilucide la verdad de los hechos denunciados.

Dentro de este contexto, la Sala observa que no se suscribió un contrato de servicios profesionales entre las partes, como expresamos anteriormente, agudizándose ante la ausencia de un informe sobre la gestión realizada por el licenciado Cerezo Góndola, y además el hecho de haber retenido dineros y documentos suministrados por el denunciante.

Al margen de lo manifestado anteriormente, esta Superioridad observa con preocupación que el denunciante afirma que el licenciado Cerezo Góndola tenía conocimiento de las actuaciones del señor Elmer Figueroa o Elmer Córdoba quien se hacía pasar por un profesional del derecho, no obstante, el denunciado esgrime que ignora la relación jurídica existente entre el denunciante y el señor Elmer Figueroa o Elmer Córdoba, antes de que se apersonaran a su oficina.

Contrastando con lo declarado por el licenciado Cerezo Góndola, llama la atención a la Sala el hecho de que obran a fojas 19 y 20 fotocopias de recibos aportados por el denunciado, evidenciando una supuesta devolución de dinero efectuada por el señor Elmer Figueroa Córdoba al denunciante, situación que no ha sido corroborada por éste.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Sala advierte que las actuaciones del licenciado Jacinto Cerezo Góndola no parecen conformarse con lo establecido en el Código de Ética y Responsabilidad del Abogado; por lo que esta Superioridad encuentra suficientes elementos de juicio que ameritan el llamamiento a juicio de dicho profesional.

Como corolario de lo antes expresado, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA EL LLAMAMIENTO A JUICIO, del LICENCIADO JACINTO CEREZO GÓNDOLA, panameño, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal N° 8-129-148 con localización posible en Calle 34 y Ave. Cuba, oficina N° 104, edificio 34/20, teléfono 225-5352, con fundamento en la Ley 9 de 18 de abril de 1984, reformada por la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la denuncia interpuesta

por el señor FÉLIX MANUEL ROSARIO, dominicano, con pasaporte N° 1413651, con domicilio en La Chorrera, Santos Jorge N° 38, por faltas a la ética y la responsabilidad profesional del abogado y, establece, que en fecha posterior se fijará el día y hora de la celebración del debate oral, en cuyo acto se practicarán las pruebas que presenten las partes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 201

En la ciudad de Panamá, a los veintiséis (26) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), se reunieron en Sala de Acuerdo los Magistrados que integran la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, con la asistencia de la Secretaría General, Encargada.

Abierto el acto, el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor ARTURO HOYOS, hizo uso de la palabra a fin de manifestar que el motivo de la reunión era considerar la estructuración del Area Administrativa del Órgano Judicial, en miras a introducir las modificaciones correspondientes para colocarla al tono de las exigencias administrativas actuales y cónsona a las necesidades del Servicio Público de la Administración de Justicia.

Sometida entonces, la propuesta presentada por el licenciado Antonio Orozco, en su calidad de Secretario Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, ésta recibió el voto unánime de los señores Magistrados de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia se acordó la aprobación de la modificación del Reglamento de Estructuración Administrativa del Órgano Judicial, cuyo contenido es el siguiente:

REGLAMENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS
DEL ÓRGANO JUDICIAL

ARTÍCULO 1. El artículo 15, quedará así:

Artículo 15. Para el mejor desarrollo de sus funciones la Secretaría Administrativa cuenta con las siguientes unidades administrativas:

a. Subsecretaría Administrativa.

b. Dirección de Contabilidad y Finanzas.

c. Dirección de Abastecimiento y Almacén.

d. Dirección de Servicios Generales.

e. Dirección de Prensa y Relaciones Públicas.

f. Dirección de Recursos Humanos.

g. Dirección de Planificación y Presupuesto.

h. Dirección de Asesoría Legal.

i. Departamento de Coordinación General de Centros y Programas de Atención de Menores, y

j. Departamento de Seguridad.

Artículo 2. Se adiciona el artículo 30-A, al Acuerdo N°9 de 12 de agosto de 1992, cuyo tenor es el siguiente:

DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL

Artículo 30-A. Los servicios de asesoría legal y relatoría se asignan a una unidad administrativa dirigida por una persona con estudios en Derecho y Ciencias Políticas y que cuente con la idoneidad correspondiente para ejercer la abogacía en la República de Panamá y demás requisitos que establece el artículo 152 del Código Judicial para desempeñar el cargo de Juez de Circuito.

Artículo 3. Se adiciona el artículo 30-B, al Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 30-B. Son funciones de la Dirección de Asesoría Legal:

30-B.1. Proporcionar asesoramiento jurídico a los funcionarios ejecutivos del área administrativa del Órgano Judicial, respecto a los asuntos que manejan y conocen.

30-B.2. Realizar, dirigir y coordinar la confección y revisión de toda la documentación que genere obligaciones legales para la institución.

30-B.3. Mantener control y custodia de los documentos jurídicos básicos, que en el ámbito administrativo maneje la institución.

30-B.4. Representar a la institución en los distintos actos jurídicos de carácter administrativo.

30-B.5. Atender los recursos administrativos de los cuales sean objeto las acciones y decisiones propias de los entes administrativos de la institución.

30-B.6. Cuidar de que los fallos del Pleno y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, sean oportunamente publicados en el Registro Judicial.

30-B.7. Coordinar con la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Órgano Judicial, la elaboración del Registro Judicial.

30-B.8. Supervisar el desarrollo de la publicación del Registro Judicial en todas sus fases hasta su edición final.

30-B.9. Recopilar la información que emana de los despachos de los Magistrados del Pleno y de las Salas de la Corte Suprema de Justicia (sentencias y autos del mes correspondiente), para la elaboración del Registro Judicial.

30-B.10. Llevar un registro cronológico de los archivos de los Registros Judiciales que han sido editados.

30-B.11. Cualquier otra función propia de esta dirección administrativa que se le asigne a petición de la autoridad superior.

ARTÍCULO 3.- Se adiciona el artículo 30-C., al Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992, cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 30-C. Esta Dirección Administrativa contará con los Departamento de Asesoría y de Relatoría.

ARTÍCULO 4.- Este Acuerdo comenzará a regir a partir de su promulgación en el Registro Judicial y la Gaceta Oficial.

Y no habiendo más nada que tratar, se dio por terminado el acto.

(fdo.) ARTURO HOYOS
Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
Presidente de la Sala Primera de lo Civil.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
Presidente de la Sala Segunda de lo Penal.

(fdo.) YANIXSA Y. YUEN C.
Secretaria General Encargada

/DdeC

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=